Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Duero

Revisión de cuarto ciclo (2028-2033)

ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES

INFORME SOBRE LAS PROPUESTAS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA AL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES

Agosto de 2026

Confederación Hidrográfica del Duero O.A.

GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, O.A.

DATOS DE CONTROL DEL DOCUMENTO

Título del proyecto:	Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero (2028-2033)
Grupo de trabajo:	Planificación
Título del documento:	Informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias al Esquema provisional de Temas Importantes
Descripción:	Documento que recoge las respuestas a las observaciones formuladas durante la consulta pública del Esquema provisional de temas importantes
Fecha de inicio (año/mes/día):	2026/06/01
Autor:	OPH de la CHD
Contribuciones:	Comisaría de Aguas CHD Dirección Técnica CHD Secretaría general CHD HEYMO

REGISTRO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Fecha cambio (año/mes/día)	Autor de los cambios	Secciones afectadas / Observaciones
2026/08/18	AGS	Epígrafe 2 y epígrafe 3

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Fecha de aprobación (año/mes/día)	2026/08/21
Responsable de aprobación	Ángel J. González Santos

Índice

INFORME SOBRE LAS PROPUESTAS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES

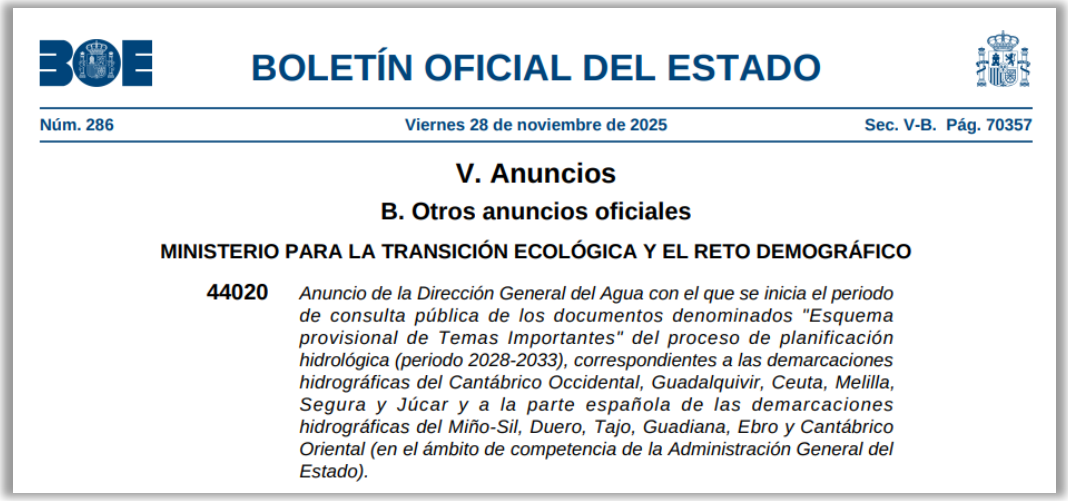
1. INTRODUCCIÓN 1
2. ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA FAVORECER LA CONSULTA 2
3. VISIÓN SINTÉTICA DEL CONJUNTO DE PROPUESTAS, OBSERVAIONES Y SUGERENCIAS 4
3.1. Listado de POS por orden alfabético del organismo 11
4. RESPUESTA A LOS ESCRITOS DE PROPUESTAS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 16
4.1. Escrito de observaciones Nº 001 17
4.2. Escrito de observaciones Nº 002 19
4.3. Escrito de observaciones Nº 003 20
4.4. Escrito de observaciones Nº 004 25
4.5. Escrito de observaciones Nº 005 26
4.6. Escrito de observaciones Nº 006 30
4.7. Escrito de observaciones Nº 007 34
4.8. Escrito de observaciones Nº 008 43
4.9. Escrito de observaciones Nº 009 49
4.10. Escrito de observaciones Nº 010 y similares 56
4.11. Escrito de observaciones Nº 012 60
4.12. Escrito de observaciones Nº 013 65
4.13. Escrito de observaciones Nº 014 68
4.14. Escrito de observaciones Nº 015 74
4.15. Escrito de observaciones Nº 016 76
4.16. Escrito de observaciones Nº 017 y similares 88
4.17. Escrito de observaciones Nº 018 y similares 94
4.18. Escrito de observaciones Nº 023 97
4.19. Escrito de observaciones Nº 024 102
4.20. Escrito de observaciones Nº 025 103
4.21. Escrito de observaciones Nº 026 115
4.22. Escrito de observaciones Nº 028 y similares 120
4.23. Escrito de observaciones Nº 030 130
4.24. Escrito de observaciones Nº 031 137
4.25. Escrito de observaciones Nº 032 138
4.26. Escrito de observaciones Nº 033 141
4.27. Escrito de observaciones Nº 034 147
4.28. Escrito de observaciones Nº 035 152
4.29. Escrito de observaciones Nº 036 155
4.30. Escrito de observaciones Nº 037 y similares 171
4.31. Escrito de observaciones Nº 038 175

4.32. Escrito de observaciones Nº 039 179
4.33. Escrito de observaciones Nº 041 185
4.34. Escrito de observaciones Nº 042 216
4.35. Escrito de observaciones Nº 043 221
4.36. Escrito de observaciones Nº 044 y similares 239
4.37. Escrito de observaciones Nº 047 243
4.38. Escrito de observaciones Nº 048 270
4.39. Escrito de observaciones Nº 049 271
4.40. Escrito de observaciones Nº 050 273
4.41. Escrito de observaciones Nº 051 279
4.42. Escrito de observaciones Nº 052 281
4.43. Escrito de observaciones Nº 053 283
4.44. Escrito de observaciones Nº 054 291
4.45. Escrito de observaciones Nº 055 295
4.46. Escrito de observaciones Nº 056 334
4.47. Escrito de observaciones Nº 057 377
4.48. Escrito de observaciones Nº 058 380
4.49. Escrito de observaciones Nº 059 424
4.50. Escrito de observaciones Nº 061 467
4.51. Escrito de observaciones Nº 062 473
4.52. Escrito de observaciones Nº 063 y similares 492
4.53. Escrito de observaciones Nº 064 506
4.54. Escrito de observaciones Nº 065 y similares 509
4.55. Escrito de observaciones Nº 066 512
4.56. Escrito de observaciones Nº 067 519
4.57. Escrito de observaciones Nº 069 527
4.58. Escrito de observaciones Nº 070 y similares 528
4.59. Escrito de observaciones Nº 072 572
4.60. Escrito de observaciones Nº 074 574
4.61. Escrito de observaciones Nº 075 575
4.62. Escrito de observaciones Nº 076 579
4.63. Escrito de observaciones Nº 077 580
4.64. Escrito de observaciones Nº 081 y similares 623
4.65. Escrito de observaciones Nº 089 664
4.66. Escrito de observaciones Nº 090 670
4.67. Escrito de observaciones Nº 091 y similares 673
4.68. Escrito de observaciones Nº 095 679
4.69. Escrito de observaciones Nº 097 681
4.70. Escrito de observaciones Nº 098 734
4.71. Escrito de observaciones Nº 099 736
4.72. Escrito de observaciones Nº 100 739
4.73. Escrito de observaciones Nº 101 783
4.74. Escrito de observaciones Nº 102 788
4.75. Escrito de observaciones Nº 103 793
4.76. Escrito de observaciones Nº 104 798

4.77. Escrito de observaciones Nº 105 803
4.78. Escrito de observaciones Nº 106 808
4.79. Escrito de observaciones Nº 107 813
4.80. Escrito de observaciones Nº 108 818
4.81. Escrito de observaciones Nº 109 823
4.82. Escrito de observaciones Nº 110 828
4.83. Escrito de observaciones Nº 111 833
4.84. Escrito de observaciones Nº 112 838
4.85. Escrito de observaciones Nº 113 843
4.86. Escrito de observaciones Nº 114 848
4.87. Escrito de observaciones Nº 115 853
4.88. Escrito de observaciones Nº 116 858
4.89. Escrito de observaciones Nº 117 863
4.90. Escrito de observaciones Nº 119 868

1. INTRODUCCIÓN

El 28 de noviembre de 2025 se publicó en el BOE (nº 286) el Anuncio de la Dirección General del Agua con el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos denominados "Esquema provisional de Temas Importantes" del proceso de planificación hidrológica (periodo 2028-2033), correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, **Duero**, Tajo, Guadiana, Ebro y Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 286 Viernes 28 de noviembre de 2025 Sec. V-B. Pág. 70357

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

44020 *Anuncio de la Dirección General del Agua con el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos denominados "Esquema provisional de Temas Importantes" del proceso de planificación hidrológica (periodo 2028-2033), correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro y Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado).*

Figura 1. Anuncio en el BOE del inicio de la consulta pública del Esquema provisional de Temas Importantes

Este anuncio por el que se inició el periodo de consulta pública señaló para la misma un plazo de seis meses, desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 28 de mayo de 2026. En este periodo se han recibido un total de 118 documentos.

El Esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación es un documento intermedio en el proceso de planificación hidrológica para el período 2028-2033, que pretende exponer claramente la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles que dificultan el logro de los objetivos de la planificación hidrológica, así como las posibles alternativas de actuación dirigidas a resolverlos de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las autoridades competentes, para que tras su debate queden establecidas las directrices de acuerdo a las que se preparará la propuesta de Plan Hidrológico. El documento se elabora en dos etapas. En la primera se prepara el denominado Esquema Provisional, en adelante EpTI, al objeto de que sea discutido y se someta a consulta pública durante un periodo no inferior a seis meses; en la segunda fase, incorporando las mejoras y conclusiones obtenidas durante la discusión del Esquema Provisional, se elabora el documento final de Esquema de Temas Importantes, que deberá ser sometido al informe del Consejo del Agua de la Demarcación. En el presente documento se describen las acciones llevadas a cabo para impulsar y favorecer la consulta, se relacionan las propuestas y sugerencias recibidas y se propone una contestación a las mismas, siguiendo lo especificado en el artículo 74 del Reglamento de Planificación Hidrológica que indica: las aportaciones de la consulta pública se integrarán en informes que formarán parte del proceso de planificación y que se recogerán en un anexo del plan.

2. ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA FAVORECER LA CONSULTA

El proceso de consulta pública del Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI), previo al nuevo Plan Hidrológico 2028-2033, ha concluido el 28 de mayo de 2026 con un alto grado de participación, más de 340 personas inscritas en las tres jornadas abiertas celebradas, y 156 invitados a las sesiones de participación activa.

Con el fin de que la consulta pública fuera lo más efectiva posible se realizaron una serie de acciones para favorecer y dar a conocer los documentos puestos a consulta, entre los que se encuentran:

- Publicación en el BOE.
- Jornada de presentación del EpTI, celebrada en Valladolid, el 17 de febrero de 2026.
- Jornada de participación activa en La Granja – Segovia, 8 de abril de 2026 (Taller 1)
- Jornada de participación activa en Zamora, 9 de abril de 2026 (Taller 2).
- Jornada de participación activa, online, 22 de abril de 2026 (Taller 3).
- Jornada transfronteriza de presentación hispano-lusa del EpTI/QSiGA celebrada en Miranda do Douro, el 11 de mayo de 2026.
- Jornada de participación activa en León, 14 de mayo de 2026 (Taller 4).
- Jornada de participación activa en Tordesillas, 19 de mayo de 2026 (Taller 5).
- Jornada de cierre del EpTI, celebrada en Valladolid, el 28 de mayo de 2026.
- Notas de prensa en la página Web de la Confederación.
- Inclusión de enlace a los documentos en la página Web de la Confederación y en la del Ministerio de la Transición Ecológica.

Las cinco jornadas de participación activa han dado lugar a cinco talleres en donde se han tratado los siguientes temas importante:



En este documento se desarrolla un resumen del conjunto de propuestas, observaciones y sugerencias (en adelante POS) presentadas al Esquema provisional de Temas Importantes del cuarto ciclo de planificación de la Demarcación Hidrográfica del Duero (parte española) durante el periodo de consulta pública al que fueron sometidos dichos documentos.

Inicialmente se presenta un resumen del conjunto de escritos recibidos por organización y sector de actividad, incluyendo información estadística sobre los sectores de actividad que han presentado escritos.

A continuación, se incluye como el conjunto de todos los escritos recibidos, las cuestiones planteadas en cada una de ellas, así como la respuesta del Organismo de cuenca a los diferentes aspectos presentados.

Se agradecen las alegaciones formuladas, que manifiestan el interés en el proceso de participación pública dentro del proceso de planificación, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Marco del Agua y su transposición a nuestra Normativa.

3. VISIÓN SINTÉTICA DEL CONJUNTO DE PROPUESTAS, OBSERVAIONES Y SUGERENCIAS

Se han presentado dentro de plazo un total de 118 escritos de observaciones, sugerencias y propuestas. La siguiente tabla enumera todas las comunicaciones recibidas, por orden de fecha de registro, con la identificación del organismo, organización o interesado y sector desde el que proviene. Así mismo, cuando más de una POS presentada y registrada de forma independiente tienen el mismo contenido se indica la respuesta de la POS de referencia.

Nº POS	Organización	Sector	Respuesta POS referencia
N001	Ayuntamiento de Carrizo (León)	Administraciones Públicas	N001
N002	Ministerio de Defensa - Secretaría de Estado de Defensa -Dirección General de Infraestructura - Subdirección General de Patrimonio.	Administraciones Públicas	N002
N003	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Secretaría de Estado de Medio Ambiente - Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación - Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación.	Administraciones Públicas	N003
N004	Ministerio de Sanidad - Secretaría de Estado de Sanidad - Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud - Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.	Administraciones Públicas	N004
N005	Particular	Universidades, Colegios Profesionales e Institutos Tecnológicos	N005
N006	Junta de Extremadura - Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural - Dirección General de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia - Servicio de Caza, Pesca y Acuicultura.	Administraciones Públicas	N006
N007	Asociación Hacendera	ONG	N007
N008	Asociación de Propietarios Huertas Bajas de Palencia (AHUBAPA)	Otros usuarios	N008
N009	Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR)	Otros usuarios	N009
N010	Iberdrola Generación, S.A.U.	Sector energético	N010 y similares
N011	Iberdrola Generación, S.A.U.	Sector energético	N010 y similares
N012	Asociación Consejo de Cuenca del Río Torío	ONG	N012
N013	Regeneraqua Initia, S.L.	Otros usuarios	N013
N014	Comunidad de Regantes de los Payuelos	CCRR y sector agrario	N014
N015	PISZOLLA, S.L.U.	Sector náutico y pesquero	N015
N016	Real Federación Española de Piragüismo	Sector náutico y pesquero	N016
N017	Federación Autonómica de Piragüismo de La Rioja	Sector náutico y pesquero	N017 y similares
N018	Ayuntamiento de Tajahuerce	Administraciones Públicas	N018 y similares
N019	Ayuntamiento de Pozalmuro	Administraciones Públicas	N018 y similares
N020	Ayuntamiento de Villar del Campo	Administraciones Públicas	N018 y similares
N021	Ayuntamiento de Hinojosa del Campo	Administraciones Públicas	N018 y similares
N022	Ayuntamiento de Pinilla del Campo	Administraciones Públicas	N018 y similares
N023	Comunidad de Regantes del Canal de Villagonzalo	CCRR y sector agrario	N023

Nº POS	Organización	Sector	Respuesta POS referencia
N024	Ayuntamiento de Tajahuerce	Administraciones Públicas	N024
N025	El Club de Aguas Subterráneas (CAS)	Universidades, Colegios profesionales e Institutos Tecnológicos	N025
N026	Ayuntamiento de Benavente	Administraciones Públicas	N026
N027	Federación Autonómica de Piragüismo de Castilla-La Mancha	Sector náutico y pesquero	N017 y similares
N028	Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas	CCRR y sector agrario	N028 y similares
N029	Comunidad de Regantes del Canal de Pollos	CCRR y sector agrario	N028 y similares
N030	Fundación Nueva Cultura del Agua	ONG	N030
N031	Comunidad de Regantes del Canal de Macías Picavea	CCRR y sector agrario	N031
N032	Comunidad de Regantes del Canal del Duero	CCRR y sector agrario	N032
N033	WWF España	ONG	N033
N034	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura - Subdirección General de Acuicultura, Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales	Administraciones Públicas	N034
N035	Comisaría de Aguas - Confederación hidrográfica del Duero	Administraciones Públicas	N035
N036	Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL)	CCRR y sector agrario	N036
N037	Comunidad de Regantes de los canales de Inés y Eza	CCRR y sector agrario	N037 y similares
N038	NATURGY GENERACION, S.L.U.	Sector energético	N038
N039	Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León)	Organizaciones Empresariales	N039
N040	Comunidad de Regantes del Canal del Campillo del Buitrago (Soria)	CCRR y sector agrario	N037 y similares
N041	Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.	Administraciones Públicas	N041
N042	Particular	Particular	N042
N043	Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la Rama Agrícola de Castilla-Duero (COITACD)	Universidades, Colegios profesionales e Institutos Tecnológicos	N043
N044	Endesa Generación, S.A.	Sector energético	N044 y similares
N045	Comunidad de Regantes del Canal de Geria-Simancas-Villamarciel	CCRR y sector agrario	N028 y similares
N046	Enel Green Power España S.L.	Sector energético	N044 y similares
N047	ASAJA Castilla y León	CCRR y sector agrario	N047
N048	Riegos Iberia REGABER	CCRR y sector agrario	N048
N049	Sindicato Central del Embalse de Villameca	CCRR y sector agrario	N049
N050	Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos. Castilla y León	Universidades, Colegios profesionales e Institutos Tecnológicos	N050
N051	Cooperativa Camping Club Valladolid	Turístico	N051
N052	Asociación de Regadíos Históricos y Tradicionales de España – ARHTE	CCRR y sector agrario	N052
N053	Comunidad de Usuarios Concesionarios Directos del Canal del Duero	Otros usuarios	N053
N054	Green Capital Development 194, SLU	Sector energético	N054
N055	Comunidad de Regantes del Canal de Almazán	CCRR y sector agrario	N055
N056	Comunidad de Regantes del Canal de Pollos	CCRR y sector agrario	N056
N057	Comunidad de Regantes Presa de La Vega de Abajo	CCRR y sector agrario	N057

Nº POS	Organización	Sector	Respuesta POS referencia
N058	Comunidad de Regantes Sector IV Trasvase Cea-Carrión (CCRR Tierra de Campos)	CCRR y sector agrario	N058
N059	Comunidad de Regantes del Canal de Riaza	CCRR y sector agrario	N059
N060	Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP)	Administraciones Públicas	N060
N061	Agência Portuguesa do Ambiente (APA)	Administraciones Públicas	N061
N062	Asociación de Frutos Secos Española (AFSE)	CCRR y sector agrario	N062
N063	Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Centro (COITAC)	Universidades, Colegios profesionales e Institutos Tecnológicos	N063 y similares
N064	Ayuntamiento de El Espinar	Administraciones Públicas	N064
N065	Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma	Administraciones Públicas	N065 y similares
N066	Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (PRIMIGEA)	Otros usuarios	N066
N067	Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE)	CCRR y sector agrario	N067
N068	Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia	Administraciones Públicas	N065 y similares
N069	Aguas de Burgos	Empresas prestadoras servicios urbanos del agua	N069
N070	Comunidad de Regantes del Canal de Aranda	CCRR y sector agrario	N070 y similares
N071	Ayuntamiento de La Lastrilla	Administraciones Públicas	N065 y similares
N072	Junta Central de Usuarios del Carrión	CCRR y sector agrario	N072
N073	Diputación Provincial de Segovia	Administraciones Públicas	N065 y similares
N074	Comunidad de Regantes Cabecera del Río Riaza	CCRR y sector agrario	N074
N075	Ayuntamiento de Segovia	Administraciones Públicas	N075
N076	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha - Consejería de Desarrollo Sostenible	Administraciones Públicas	N076
N077	Comunidad de Regantes Nuestra Señora La Virgen de los Remedios de Arandillo (Peñaranda de Duero)	CCRR y sector agrario	N077
N078	Comunidad de Regantes del Canal de Aranda	CCRR y sector agrario	N070 y similares
N079	Comunidad de Regantes del Canal de Olmillos	CCRR y sector agrario	N037 y similares
N080	Ayuntamiento de Valdegeña	Administraciones Públicas	N018 y similares
N081	Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N082	Comunidad de Regantes del Canal de Zuzones	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N083	Comunidad de Regantes de Coruña del Conde	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N084	Comunidad de Regantes de Quintana del Pidio	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N085	Comunidad de Regantes del Canal de la Vid	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N086	Comunidad de Regantes de Guma	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N087	Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (FERDUERO)	CCRR y sector agrario	N081 y similares

Nº POS	Organización	Sector	Respuesta POS referencia
N088	Ayuntamiento de Aldealpozo	Administraciones Públicas	N018 y similares
N089	Junta de Castilla y León - Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio - Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio - Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental	Administraciones Públicas	N089
N090	Ministerio de Sanidad - Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral - Área de Calidad Sanitaria de las Aguas y Riesgos Ambientales	Administraciones Públicas	N090
N091	Comunidad de Regantes de Castrillo del Val, San Medel y Cardeñajimeno	CCRR y sector agrario	N091 y similares
N092	Comunidad de Regantes de la Ribera de Arlanzón a Ibeas de Juarros	CCRR y sector agrario	N091 y similares
N093	Comunidad de Regantes de Cueva de Juarros a San Millán de Juarros	CCRR y sector agrario	N091 y similares
N094	Comunidad de Regantes de Cueva de Juarros a San Millán de Juarros	CCRR y sector agrario	N091 y similares
N095	Ayuntamiento de Melgar de Arriba	Administraciones Públicas	N095
N096	Comunidad de Regantes de los Canales del Arlanzón	CCRR y sector agrario	N091 y similares
N097	Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)	ONG	N097
N098	Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (AICAPE)	Universidades, Colegios profesionales e Institutos Tecnológicos	N098
N099	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Secretaría de Estado de Energía - Dirección General de Política Energética y Minas	Administraciones Públicas	N099
N100	Comunidad de Regantes de Carrión, Saldaña y Villamoronta	CCRR y sector agrario	N100
N101	Organización de Usuarios y Consumidores de Agua - AGUAIURIS	ONG	N101
N102	Particular	Particular	N102
N103	Particular	Particular	N103
N104	Asociación para la Defensa de la Agricultura de la Axarquía (ADAX)	CCRR y sector agrario	N104
N105	Particular	Particular	N105
N106	Particular	Particular	N106
N107	Particular	Particular	N107
N108	Cega Energías, S.L.	Sector energético	N108
N109	Particular	Particular	N109
N110	Associació de Llauradors Independents de Vila-real (ALIV)	CCRR y sector agrario	N110
N111	Comunidad de Regantes Fuen Lozana y Tosquilla	CCRR y sector agrario	N111
N112	Comunidad De Regantes de Villel	CCRR y sector agrario	N112
N113	Comunidad de Regantes de Villastar	CCRR y sector agrario	N113
N114	Comunidad de Regantes de Teruel	CCRR y sector agrario	N114
N115	Comunidad de Regantes de Fuen Lozana y Tosquilla	CCRR y sector agrario	N115
N116	Sector Primario y Consumidores Independientes Españoles	CCRR y sector agrario	N116
N117	Particular	Particular	N117
N118	Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Centro (COITAC)	Universidades, Colegios profesionales e Institutos Tecnológicos	N063 y similares

Tabla 1. Listado de POS registradas, por orden de fecha de registro

Tal y como se muestra en la tabla y figura siguientes los sectores más representativos han sido el sector agrario con 48 escritos, el 40,7% del total, y las Administraciones Públicas con 30 escritos, que suponen el 25,4% del total.

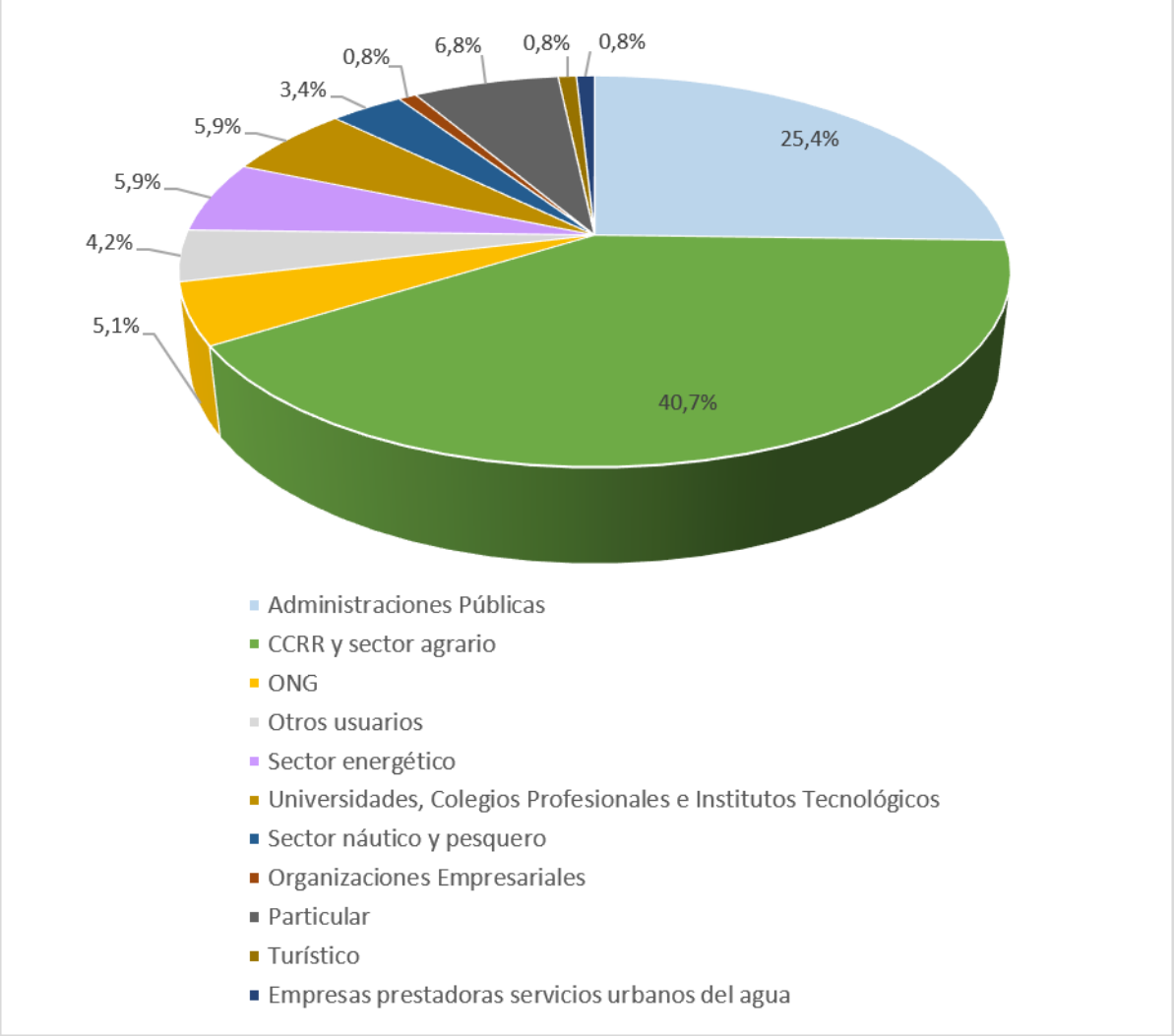


Figura 2. Reparto por sectores de los escritos presentados

Sector	Nº escritos	%
Comunidades de regantes y sector agrario	48	40,7%
Administraciones Públicas	30	25,4%
Particular	8	6,8%
Sector energético	7	5,9%
Universidades, Colegios Profesionales e Institutos Tecnológicos	7	5,9%
Organizaciones en defensa de la naturaleza	6	5,1%
Otros usuarios	5	4,2%
Sector náutico y pesquero	4	3,4%
Organizaciones Empresariales	1	0,8%
Turístico	1	0,8%
Empresas prestadoras servicios urbanos del agua	1	0,8%
Total	**118**	**100%**

Tabla 2. Relación de escritos recibidos por sector

En relación a la distribución sobre los aspectos sugeridos en las POS recibidas, cabe resaltar que la mayor cantidad de observaciones recibidas no se refieren a ninguna parte en concreto de la documentación contenida en el EpTI, sino que se trata de generalidades, incluso haciendo referencia a temática o documentos no sometidos a consulta pública en esta fase del proceso de planificación (36%): unas veces se rechaza la totalidad del ETI o la planificación hidrológica española en general, otras veces con cuestiones normativas de mayor rango, y otras veces a cuestiones relevantes vinculadas al agua pero con difícil encaje en un ETI.

Se han presentado propuestas y observaciones a todos los temas importantes del EpTI, destacando especialmente los temas importantes de relevancia y sostenibilidad del regadío y contaminación difusa, con un 13% y 11% de las cuestiones aportadas, respectivamente; les siguen los temas de coordinación interadministrativa y optimización de la oferta de recurso, con un 10% y 9% de las cuestiones aportadas, respectivamente; a los temas importantes de las alteraciones hidromorfológicas, el uso sostenible de las aguas subterráneas y los nuevos usos de agua para industrias renovables se han aportado alrededor de un 5% de las sugerencias a cada una; finalmente han sido los temas importantes de abastecimiento y depuración urbanos y riesgo de inundación los que menor número de aportaciones han recibido, un 1% cada una.

		Nº cuestiones	%
GENERAL		542	36%
FICHA DU-01	Contaminación difusa	165	11%
FICHA DU-02	Uso sostenible de las aguas subterráneas	74	5%
FICHA DU-03	Contaminación urbana e industrial	13	1%
FICHA DU-04	Alteraciones hidromorfológicas y restauración fluvial	98	6%
FICHA DU-05	Gestión del riesgo de inundación	53	3%
FICHA DU-06	Relevancia del regadío y sostenibilidad	190	13%
FICHA DU-07	Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras	142	9%
FICHA DU-08	Uso urbano y nuevos requerimientos de la Directiva de aguas potables	16	1%
FICHA DU-09	Coordinación interadministrativa en la implementación del programa de medidas y fijación de objetivos específicos en zonas protegidas	154	10%
FICHA DU-10	Nuevos usos del agua vinculados a las industrias renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos	69	5%

Tabla 3. Nº de cuestiones que alegan a los temas tratados en el EpTI

Una vez analizadas las POS, y antes de su aprobación final por el Consejo del Agua de la Demarcación, el resultado de la aceptación o no de las cuestiones planteadas es el siguiente.

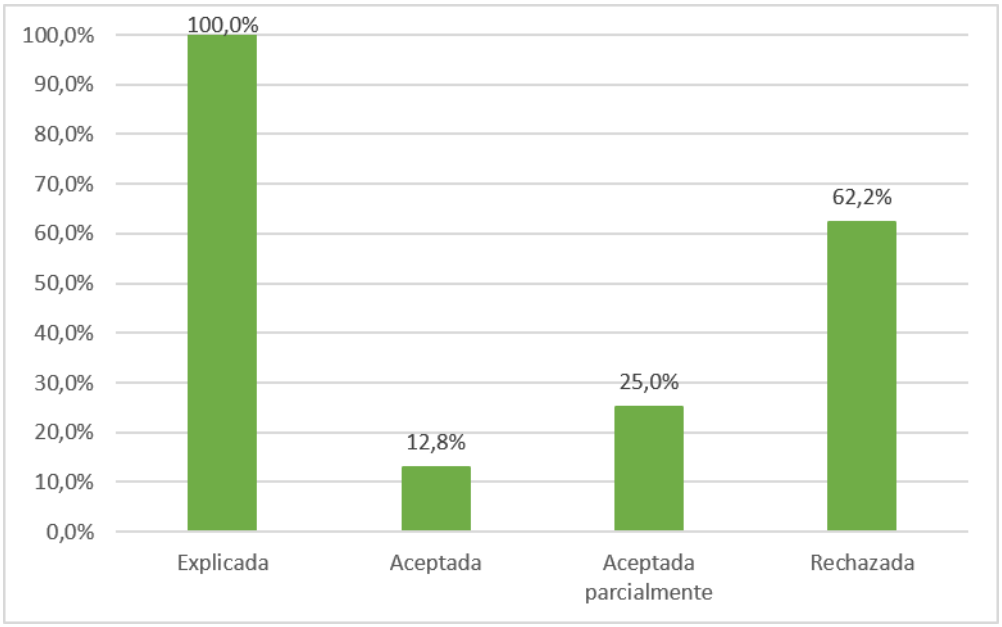


Figura 3. Estadísticas de aceptación de las cuestiones planteadas

Como queda reflejado en la figura anterior, al 100% de las observaciones recibidas se da explicación técnica pertinente del porqué del procedimiento seguido para la obtención de los resultados plasmados. También se ha explicado, para aquellos casos en los que la cuestión planteada excede el ámbito competencial del EpTI, las causas por las que no es posible aceptar lo solicitado.

Para obtener una visión general del proceso de consulta pública, pueden dividirse las observaciones en tres aspectos: diagnosis (si el problema está bien identificado), prognosis (cómo evolucionará el problema si no se actúa) y resolución (eficacia de las alternativas y decisiones propuestas para corregir los problemas).

En general hay un notable grado de acuerdo con el diagnóstico de los temas importantes; en algún tema como la contaminación difusa, se da una cierta polarización entre los diversos escritos: para algunos el diagnóstico del problema es exagerado, señalando que el problema no es del calibre que se expresa en la Ficha; para otros la diagnosis es demasiado complaciente, sosteniendo que el problema es mucho más grave que lo que indica la Ficha al basarse solo en la red de calidad oficial. Parece que el estudio del origen de la contaminación difusa mediante técnicas isotópicas no ha servido para despejar las dudas que algunos agentes siguen manteniendo sobre las fuentes de la contaminación.

También en la prognosis hay cierto acuerdo en casi todos los temas importantes. La contaminación difusa, de nuevo, la explotación de las aguas subterráneas, la gestión del riesgo de inundación y algunos aspectos sobre cómo abordar la modernización de regadíos o la oferta de recursos son los que menos acuerdo concitan entre lo que expresa el documento y las distintas precepciones de los diversos escritos. De nuevo hay una notable divergencia de enfoque: para unos hay una irreversibilidad de los efectos económicos, ambientales y sociales que generan estos tres problemas; para otros el horizonte futuro que dibuja el ETI puede abocar a la actividad económica al colapso.

Con respecto a las soluciones, los temas para los que hay menos acuerdo en las propuestas del EpTI son la contaminación difusa, la explotación sostenible de las aguas subterráneas, la contaminación

urbana e industrial y la sostenibilidad del regadío en un horizonte de cambio climático y con escasa regulación de caudales. Las medidas sobre contaminación difusa se consideran adecuadas en general; no obstante los alegantes del sector agrario las ven como limitaciones a su actividad económica que la puede hacer inviable; y por su parte, sectores del ámbito de la conservación de la naturaleza las consideran medidas insuficientes para corregir el problema que es mucho más grave de lo que el EpTI indica, pidiendo una mayor implicación de las administraciones, cada una en su competencia. Este último sector también considera que la reducción de extracciones en las masas subterráneas que propone el EpTI debería ser más intensa, mientras que el sector agrario las consideran demasiado estrictas al considerar que el diagnóstico es demasiado negativo. Las medidas para reducir el riesgo de inundación son para unos agentes insuficientes debiendo ser más proactivos en medidas de restauración fluvial; para otros es necesario medidas para mejorar la coordinación entre administraciones; para otros en fin es necesario aumentar las infraestructuras que laminen avenidas y reduzcan el riesgo y mantener los cauces en buenas condiciones hidrológicas.

Finalmente, desde distintos ámbitos se exige aumentar la capacidad de regulación de la cuenca e impulsar la modernización de los regadíos para mejorar la garantía y asegurar la viabilidad de las explotaciones, bajo la idea de las externalidades positivas que tiene el regadío en el medio rural de la demarcación hidrográfica. Según estas alegaciones los ahorros de agua derivados de procesos de modernización deberían contribuir a intensificar los cultivos para poder asumir los costes de las modernizaciones y no a reducir las presiones por extracción como el ETI propone.

Hay acuerdo de todos los sectores en que la cooperación interadministrativa debe mejorar en algunas líneas como son una mayor transparencia, mayor compromiso de las autoridades competentes con sus propias medidas, y un mayor nivel de rendición de cuentas.

Del mismo modo que en esta fase, se anima a mantener el espíritu de colaboración en la siguiente fase de consulta y participación activa que es la del borrador de Plan Hidrológico del cuarto ciclo de planificación 2028-2033.

3.1. Listado de POS por orden alfabético del organismo

La siguiente tabla enumera todas las comunicaciones recibidas, por orden alfabético del organismo, organización o interesado, para una fácil identificación.

Nº POS	Organización	Sector	Respuesta POS referencia
N061	Agência Portuguesa do Ambiente (APA)	Administraciones Públicas	N061
N069	Aguas de Burgos	Empresas prestadoras servicios urbanos del agua	N069
N047	ASAJA Castilla y León	CCRR y sector agrario	N047
N012	Asociación Consejo de Cuenca del Río Torío	ONG	N012
N087	Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (FERDUERO)	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N062	Asociación de Frutos Secos Española (AFSE)	CCRR y sector agrario	N062
N098	Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (AICAPE)	Universidades, Colegios profesionales e Institutos Tecnológicos	N098

Nº POS	Organización	Sector	Respuesta POS referencia
N008	Asociación de Propietarios Huertas Bajas de Palencia (AHUBAPA)	Otros usuarios	N008
N052	Asociación de Regadíos Históricos y Tradicionales de España – ARHTE	CCRR y sector agrario	N052
N009	Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR)	Otros usuarios	N009
N007	Asociación Hacendera	ONG	N007
N104	Asociación para la Defensa de la Agricultura de la Axarquía (ADAX)	CCRR y sector agrario	N104
N110	Associació de Llauradors Independents de Vila-real (ALIV)	CCRR y sector agrario	N110
N088	Ayuntamiento de Aldealpozo	Administraciones Públicas	N018 y similares
N026	Ayuntamiento de Benavente	Administraciones Públicas	N026
N001	Ayuntamiento de Carrizo (León)	Administraciones Públicas	N001
N064	Ayuntamiento de El Espinar	Administraciones Públicas	N064
N021	Ayuntamiento de Hinojosa del Campo	Administraciones Públicas	N018 y similares
N071	Ayuntamiento de La Lastrilla	Administraciones Públicas	N065 y similares
N095	Ayuntamiento de Melgar de Arriba	Administraciones Públicas	N095
N065	Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma	Administraciones Públicas	N065 y similares
N022	Ayuntamiento de Pinilla del Campo	Administraciones Públicas	N018 y similares
N019	Ayuntamiento de Pozalmuro	Administraciones Públicas	N018 y similares
N068	Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia	Administraciones Públicas	N065 y similares
N075	Ayuntamiento de Segovia	Administraciones Públicas	N075
N018	Ayuntamiento de Tajahuerce	Administraciones Públicas	N018 y similares
N024	Ayuntamiento de Tajahuerce	Administraciones Públicas	N024
N080	Ayuntamiento de Valdegeña	Administraciones Públicas	N018 y similares
N020	Ayuntamiento de Villar del Campo	Administraciones Públicas	N018 y similares
N108	Cega Energías, S.L.	Sector energético	N108
N050	Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos. Castilla y León	Universidades, Colegios profesionales e Institutos Tecnológicos	N050
N063	Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Centro (COITAC)	Universidades, Colegios profesionales e Institutos Tecnológicos	N063 y similares
N118	Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Centro (COITAC)	Universidades, Colegios profesionales e Institutos Tecnológicos	N063 y similares
N043	Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la Rama Agrícola de Castilla-Duero (COITACD)	Universidades, Colegios profesionales e Institutos Tecnológicos	N043
N035	Comisaría de Aguas - Confederación hidrográfica del Duero	Administraciones Públicas	N035
N074	Comunidad de Regantes Cabecera del Río Riaza	CCRR y sector agrario	N074
N100	Comunidad de Regantes de Carrión, Saldaña y Villamoronta	CCRR y sector agrario	N100
N091	Comunidad de Regantes de Castrillo del Val, San Medel y Cardeñajimeno	CCRR y sector agrario	N091 y similares

Nº POS	Organización	Sector	Respuesta POS referencia
N083	Comunidad de Regantes de Coruña del Conde	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N093	Comunidad de Regantes de Cueva de Juarros a San Millán de Juarros	CCRR y sector agrario	N091 y similares
N094	Comunidad de Regantes de Cueva de Juarros a San Millán de Juarros	CCRR y sector agrario	N091 y similares
N115	Comunidad de Regantes de Fuen Lozana y Tosquilla	CCRR y sector agrario	N115
N086	Comunidad de Regantes de Guma	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N092	Comunidad de Regantes de la Ribera de Arlanzón a Ibeas de Juarros	CCRR y sector agrario	N091 y similares
N037	Comunidad de Regantes de los canales de Inés y Eza	CCRR y sector agrario	N037 y similares
N096	Comunidad de Regantes de los Canales del Arlanzón	CCRR y sector agrario	N091 y similares
N014	Comunidad de Regantes de los Payuelos	CCRR y sector agrario	N014
N084	Comunidad de Regantes de Quintana del Pidio	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N114	Comunidad de Regantes de Teruel	CCRR y sector agrario	N114
N113	Comunidad de Regantes de Villastar	CCRR y sector agrario	N113
N112	Comunidad De Regantes de Villel	CCRR y sector agrario	N112
N055	Comunidad de Regantes del Canal de Almazán	CCRR y sector agrario	N055
N070	Comunidad de Regantes del Canal de Aranda	CCRR y sector agrario	N070 y similares
N078	Comunidad de Regantes del Canal de Aranda	CCRR y sector agrario	N070 y similares
N045	Comunidad de Regantes del Canal de Geria-Simancas-Villamarciel	CCRR y sector agrario	N028 y similares
N085	Comunidad de Regantes del Canal de la Vid	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N031	Comunidad de Regantes del Canal de Macías Picavea	CCRR y sector agrario	N031
N079	Comunidad de Regantes del Canal de Olmillos	CCRR y sector agrario	N037 y similares
N029	Comunidad de Regantes del Canal de Pollos	CCRR y sector agrario	N028 y similares
N056	Comunidad de Regantes del Canal de Pollos	CCRR y sector agrario	N056
N059	Comunidad de Regantes del Canal de Riaza	CCRR y sector agrario	N059
N028	Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas	CCRR y sector agrario	N028 y similares
N023	Comunidad de Regantes del Canal de Villagonzalo	CCRR y sector agrario	N023
N082	Comunidad de Regantes del Canal de Zuzones	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N040	Comunidad de Regantes del Canal del Campillo del Buitrago (Soria)	CCRR y sector agrario	N037 y similares
N032	Comunidad de Regantes del Canal del Duero	CCRR y sector agrario	N032
N111	Comunidad de Regantes Fuen Lozana y Tosquilla	CCRR y sector agrario	N111
N077	Comunidad de Regantes Nuestra Señora La Virgen de los Remedios de Arandillo (Peñaranda de Duero)	CCRR y sector agrario	N077
N057	Comunidad de Regantes Presa de La Vega de Abajo	CCRR y sector agrario	N057
N058	Comunidad de Regantes Sector IV Trasvase Cea-Carrión (CCRR Tierra de Campos)	CCRR y sector agrario	N058
N053	Comunidad de Usuarios Concesionarios Directos del Canal del Duero	Otros usuarios	N053
N039	Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León)	Organizaciones Empresariales	N039
N066	Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (PRIMIGEA)	Otros usuarios	N066
N051	Cooperativa Camping Club Valladolid	Turístico	N051

Nº POS	Organización	Sector	Respuesta POS referencia
N073	Diputación Provincial de Segovia	Administraciones Públicas	N065 y similares
N025	El Club de Aguas Subterráneas (CAS)	Universidades, Colegios profesionales e Institutos Tecnológicos	N025
N044	Endesa Generación, S.A.	Sector energético	N044 y similares
N046	Enel Green Power España S.L.	Sector energético	N044 y similares
N027	Federación Autonómica de Piragüismo de Castilla-La Mancha	Sector náutico y pesquero	N017 y similares
N017	Federación Autonómica de Piragüismo de La Rioja	Sector náutico y pesquero	N017 y similares
N067	Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE)	CCRR y sector agrario	N067
N060	Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP)	Administraciones Públicas	N060
N030	Fundación Nueva Cultura del Agua	ONG	N030
N054	Green Capital Development 194, SLU	Sector energético	N054
N010	Iberdrola Generación, S.A.U.	Sector energético	N010 y similares
N011	Iberdrola Generación, S.A.U.	Sector energético	N010 y similares
N041	Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.	Administraciones Públicas	N041
N072	Junta Central de Usuarios del Carrión	CCRR y sector agrario	N072
N089	Junta de Castilla y León - Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio - Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio - Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental	Administraciones Públicas	N089
N076	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha - Consejería de Desarrollo Sostenible	Administraciones Públicas	N076
N006	Junta de Extremadura - Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural - Dirección General de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia - Servicio de Caza, Pesca y Acuicultura.	Administraciones Públicas	N006
N034	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura - Subdirección General de Acuicultura, Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales	Administraciones Públicas	N034
N002	Ministerio de Defensa - Secretaría de Estado de Defensa -Dirección General de Infraestructura - Subdirección General de Patrimonio.	Administraciones Públicas	N002
N004	Ministerio de Sanidad - Secretaría de Estado de Sanidad - Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud - Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.	Administraciones Públicas	N004
N090	Ministerio de Sanidad - Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral - Área de Calidad Sanitaria de las Aguas y Riesgos Ambientales	Administraciones Públicas	N090
N099	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Secretaría de Estado de Energía - Dirección General de Política Energética y Minas	Administraciones Públicas	N099
N003	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Secretaría de Estado de Medio Ambiente - Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación - Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación.	Administraciones Públicas	N003
N038	NATURGY GENERACION, S.L.U.	Sector energético	N038
N101	Organización de Usuarios y Consumidores de Agua - AGUAIURIS	ONG	N101
N103	Particular (Alfredo Moreno Gómez)	Particular	N103
N102	Particular (Alfredo Moreno Rey)	Particular	N102

Nº POS	Organización	Sector	Respuesta POS referencia
N109	Particular (Antonio Madueño Arandea)	Particular	N109
N005	Particular (D. Saúl Blanco Lanza)	Universidades, Colegios Profesionales e Institutos Tecnológicos	N005
N042	Particular (David Domingo Martínez)	Particular	N042
N117	Particular (José Francisco Guerrero Cebolla)	Particular	N117
N107	Particular (Juan Salvador Vivo Obrer)	Particular	N107
N106	Particular (Manuel Cerezo Osorio)	Particular	N106
N105	Particular (Marina Martínez García del Moral)	Particular	N105
N015	PISZOLLA, S.L.U.	Sector náutico y pesquero	N015
N016	Real Federación Española de Piragüismo	Sector náutico y pesquero	N016
N013	Regeneraqua Initia, S.L.	Otros usuarios	N013
N048	Riegos Iberia REGABER	CCRR y sector agrario	N048
N116	Sector Primario y Consumidores Independientes Españoles	CCRR y sector agrario	N116
N081	Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna	CCRR y sector agrario	N081 y similares
N049	Sindicato Central del Embalse de Villameca	CCRR y sector agrario	N049
N097	Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)	ONG	N097
N036	Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL)	CCRR y sector agrario	N036
N033	WWF España	ONG	N033

Tabla 4. Listado de POS registradas, por orden alfabético del organismo, organización o interesado

4. RESPUESTA A LOS ESCRITOS DE PROPUESTAS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

En este epígrafe se analizan las propuestas, observaciones y sugerencias presentadas, se propone la respuesta a cada una de las observaciones presentadas, y se indica qué aspectos pueden incorporarse o modificarse en la redacción final del Esquema de Temas Importantes del cuarto ciclo de planificación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero 2028-2033. Se ordenan según su fecha de entrada en la Confederación Hidrográfica del Duero.

4.1. Escrito de observaciones Nº 001

Presentado por: D. Alfonso Álvarez García.

En nombre del Ayuntamiento de Carrizo.

Alegación 1.

Se propone eliminar la alternativa de construcción de una balsa lateral en La Milla del Río del ETI del Plan Hidrológico del Duero 2028-2033 por carecer de viabilidad social y económica demostrada y por su fuerte impacto sobre nuestro municipio.

Respuesta:

En la alegación se hace una afirmación que no viene justificada en el propio escrito. Se dice que la balsa lateral de la Milla del Río "*carece de viabilidad social y económica demostrada*" algo que no se justifica. A falta de esta justificación podemos señalar que este argumento ya ha sido esgrimido por la representación procesal del ayuntamiento alegante en el recurso nº 485/2023 contra el Plan Hidrológico del Duero para oponerse a la regulación adicional del río Órbigo, recurso que ha sido desestimado por Sentencia 1292/2025 de la sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta del Tribunal Supremo.

La viabilidad social y económica de una medida del plan hidrológico no depende de las expectativas de un municipio que, por otra parte, no ha acreditado el interés legítimo para oponerse a determinadas medidas del plan hidrológico, ya que ni va a costear las infraestructuras ni ha acreditado que resulten afectados alguno o algunos de sus bienes o derechos; más bien la viabilidad social y económica depende de las expectativas de los usuarios que van a sufragar esas medidas, en aplicación del principio de recuperación de costes. Y en la instrucción del recurso citado ha quedado de manifiesto que los usuarios de esas medidas, como de la que se propone en el EpTI y sobre la que se alega en esta fase, sí pueden asumir social y económicamente las infraestructuras.

Más allá de esta digresión, no debe olvidarse que el sistema de explotación Órbigo necesita medidas para mejorar la garantía de suministro de todos los usos, aunque, dada la prioridad de los abastecimientos, que están garantizados plenamente, es especialmente relevante para los usos agrarios e industriales. Y esto no porque hayan crecido las demandas del Sistema original sino porque se ha incorporado al Sistema una superficie de regadío que contaban para su suministro con la fallida regulación del río Omaña. Por lo tanto, desde aquel ya histórico momento se identifica un déficit estructural en el Sistema que es necesario corregir con las propuestas del Plan Hidrológico vigente, con las que se citan en el EpTI o con otras que puedan identificarse en fase de plan hidrológico.

Alegación 2.

Que se prioricen alternativas de gestión y optimización de recursos hídricos que no supongan afecciones territoriales injustificadas ni riesgos para las poblaciones locales.

Respuesta:

Sin duda, así se plantea el EpTI: en la Ficha nº 06 se dice textualmente en las decisiones que pueden adoptarse para configurar el nuevo Plan Hidrológico: "*Mantener e incluso incrementar el esfuerzo inversor en la modernización de regadíos de la demarcación, acometiéndose las medidas previstas en el plan hidrológico vigente, en especial aquellas que afectan a los sistemas de explotación más ajustados* [como es el Sistema Órbigo]*, así como las nuevas modernizaciones identificadas por la JCyL durante el periodo de consulta pública de los documentos iniciales del cuarto ciclo*". Por tanto, en la corrección del déficit identificado en el Sistema Órbigo ya se cuenta con las medidas de gestión y optimización de la demanda; de hecho son las únicas medidas que se han implementado hasta la fecha dado el retraso de las medidas de regulación previstas en el Plan Hidrológico; y si no estas medidas de gestión de la demanda no avanzan más rápido no es por falta de voluntad de los usuarios sino por las limitaciones y falta de diligencia de los procedimientos de evaluación ambiental.

4.2. Escrito de observaciones Nº 002

Presentado por: D. Fernando Benito Del Val Esteban.

En nombre de la Subdirección General de Patrimonio de la D.G. de Infraestructura del Ministerio de Defensa.

En relación con la comunicación de la Confederación Hidrográfica del Duero O.A. sobre la tramitación de la revisión del PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO para el ciclo 2028-2033, se informa que no existen reparos para que se continúe con la tramitación del expediente.

Respuesta:

Se agradece el esfuerzo por analizar el documento.

4.3. Escrito de observaciones Nº 003

Presentado por: Dª. Elsa Enríquez Alcalde.

En nombre de la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación de la D.G. de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Alegación 1.

Se considera clave que los planes hidrológicos de cuenca contemplen expresamente la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación (ENLD) como uno de sus marcos de referencia. Debe considerarse la gestión forestal (intervenciones en cabeceras, laderas erosionadas o zonas incendiadas, mediante técnicas de restauración hidrológico-forestal y de gestión forestal sostenible) como herramienta fundamental para la regulación de los aportes hídricos de calidad aguas abajo, considerando los efectos de una mayor evapotranspiración potencial en casos de densificación de las masas, en un escenario de aumento de temperaturas y mayor frecuencia de sequías.

Respuesta:

La integración de la lucha contra la desertificación es coherente con los objetivos de la planificación (art. 40 TRLA) y con el enfoque integrado suelo-agua-vegetación. La ENLD y su Plan de Implementación 2025-2027 (Orden TED/776/2025, de 8 de julio) constituyen el marco estatal de referencia. En el ámbito de la demarcación, este marco ya se incorpora expresamente en el Estudio de adaptación a los riesgos del cambio climático (EACC), documento de apoyo a la planificación del cuarto ciclo, cuya sección 5.8 recoge la ENLD como estrategia habilitadora de la adaptación y detalla sus sinergias con las medidas del plan (retención natural del agua, control de la erosión, gestión forestal de cabeceras, restauración de riberas y manejo agrario conservacionista). La solicitud se entiende, pues, atendida a nivel de plan y de EACC.

En la medida en que la mencionada ENLD contribuya a los objetivos de la planificación hidrológica se considerará tanto en las medidas como en la Normativa del futuro plan hidrológico. Recordamos que los objetivos de la planificación hidrológica, de acuerdo con el artículo 40 del TRLA, son conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial; lo que se hará incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. En la lucha contra la desertificación además de las competencias en materia de agua hay competencias concomitantes como son las de política forestal, política agraria, política de ordenación del territorio, política energética, … que recaen sobre otras administraciones distintas a la hidráulica.

Se agradece la sugerencia y se incluye en las fichas nº 4 y nº 5 una referencia a la ENLD.

Alegación 2.

El incremento de los laboreos, el uso intensivo de fertilizantes y fitosanitarios, y la expansión de superficies de cultivo en zonas vulnerables, afectan directamente a la estructura, fertilidad y capacidad de retención hídrica del suelo. Se propone considerar la degradación de tierras y la desertificación en

el Esquema provisional de temas importantes (gestión de inundaciones), así como una mayor atención en los programas de medidas a las actuaciones de restauración hidrológico-forestal (RHF) y a la ordenación agrohidrológica del territorio (entendida como la planificación integrada del uso de la vegetación, el suelo y del agua en función de su aptitud, vulnerabilidad y valor estratégico).

Respuesta:

La RHF y las ordenaciones agrohidrológicas tienen pleno encaje en la planificación y disponen de tipología de medida propia en la base de datos de planificación (PH-web): 02.03.01 «Restauración hidrológico-forestal» (reducción de contaminación difusa por selvicultura), 12.01.06 «Incremento de recursos disponibles mediante repoblación forestal» y 14.01.01 «Medidas en la cuenca: restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas, incluyendo medidas de retención natural del agua». Pueden, por tanto, atender objetivos ambientales (contaminación difusa), de incremento de recursos (infiltración, reducción de aportes sólidos a embalses) y de reducción del riesgo de inundación (laminación de puntas). Su selección responde al esquema DPSIR y a la identificación de presiones significativas (arts. 4 y 11 y Anexo VI de la Directiva 2000/60/CE; IPH, Orden ARM/2656/2008). En el EACC se materializan en FE1 y FE2. La incorporación concreta de actuaciones corresponde al programa de medidas (art. 42 TRLA).

La ENLD actúa como una estrategia habilitadora de la adaptación al cambio climático y a los fenómenos extremos, reforzando la resiliencia territorial y la base biofísica sobre la que descansan muchas medidas del plan hidrológico (gestión de la demanda, restauración, soluciones basadas en la naturaleza (SbN), control de riesgos). Pero al ser una estrategia transversal afecta a diversos tipos de planificaciones sectoriales, como se ha indicado en la respuesta a la alegación primera. Las acciones que se plantean en esta alegación caerían sobre el ámbito de la política agraria, si bien con aspectos cruzados con la planificación hidrológica como puede ser la reducción de los excedentes de fitosanitarios y fertilizantes para reducir la contaminación difusa, que se abordan en la Ficha nº 1. De hecho, en la citada Ficha se indica, en la alternativa 1: *Para reducir la entrada de nutrientes a las masas de agua superficiales, se plantea la creación de bandas de protección de las masas de agua de 10 m, para el caso de los cauces con consideración de masas de agua con impacto comprobado, y de 5 m, para el caso de las masas con impacto probable, fuera de la zona de dominio público y ocupadas por vegetación autóctona, que funcione como sumidero de nutrientes. Se estima que la reducción de entrada de nutrientes a la masa está entre el 25% y el 75%, dependiendo de la anchura de la banda, que puede llegar hasta los 20 m. En el PHD vigente se ha estimado que la banda de 10 m podría reducir en un 75% los excedentes que recibe la masa de agua en su intercuenca y en un 50% para la banda de 5 m*. El establecimiento de estas bandas de vegetación atiende tanto al problema de contaminación difusa como a los otros efectos que se citan en la alegación

Se acepta parcialmente la observación y se incluyen referencias al problema de la desertificación en las Fichas nº4, tal y como se ha señalado en alegación primera, la nº5 , en las decisiones que pueden tomarse, y la nº 10, en presiones e impactos que deben ser tratados.

Alegación 3.

La construcción o remodelación de diques forestales en cabecera de cauces, especialmente en el dominio de ramblas y barrancos secos, debe evaluarse de forma singular a la hora de su autorización en DPH, así como de su posible inclusión en planes de restauración fluvial, teniendo en cuenta los

efectos limitados sobre la continuidad ecológica y a su importante función en la reducción del riesgo. Para ello resulta fundamental la coordinación interadministrativa entre los organismos de cuenca y las administraciones forestales y agrarias de la AGE y de las comunidades autónomas.

Respuesta:

La cuestión excede el ámbito del EpTI y de los contenidos del plan hidrológico. El régimen de autorización de obras en el DPH se rige por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986); su tratamiento singular, en su caso, correspondería a la eventual revisión de dicho Reglamento, competencia de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico (SGDPH). Sin perjuicio de ello, las actuaciones sobre continuidad fluvial deben ser coherentes con los objetivos ambientales de la DMA (art. 4) y con las estrategias de restauración fluvial.

Por otra parte, los episodios de inundación en la demarcación hidrográfica del Duero tienen una peligrosidad más bien debida a acumulaciones importantes de caudales en la parte media y baja que a fenómenos explosivos como los que se identifican en la zona oriental costera de España, si bien pueden presentarse de manera puntual. No obstante, se acepta la sugerencia y se incluye las referencias ya citadas en las Fichas nº 4 y 5 relativa a la coordinación administrativa.

Alegación 4.

Se subraya la necesidad de coordinación interadministrativa (organismos de cuenca ↔ administraciones forestales y agrarias de la AGE y CCAA) y se propone incorporar a la planificación: (i) los trabajos del PNAP de RHF, control de la erosión y defensa contra la desertificación (en revisión); (ii) las recomendaciones de la DGBBD para la restauración de zonas incendiadas alineadas con el Plan Nacional de Restauración -Reglamento (UE) 2024/1991-, remitidas como adjunto; y (iii) las herramientas de la PAC (eco-regímenes e intervenciones agroambientales).

Respuesta:

La CHD y otros organismos de cuenca vienen actuando de emergencia en zonas afectadas por los incendios desde 2022, con los graves incendios de la Sierra de la Paramera en Ávila (22.000 ha quemadas) y en la Sierra de la Culebra en Zamora (60.000 ha quemadas); posteriormente ha actuado en los gravísimos incendios de 2025 de Orense, Sanabria, Sierra de la Cabrera, Picos de Europa y Zamora (más de 300.000 ha quemadas). Las actuaciones de los organismos de cuenca son sinérgicas con las actuaciones de otras administraciones, centrándose en el DPH y en la protección de las zonas de captación de agua para consumo humano. Ante catástrofes tan extensas la capacidad de actuación, siempre limitada, se centra en los aspectos más relevantes. Todas las recomendaciones que aporta la *Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación* se tienen en cuenta en las actuaciones, siempre coordinadas con las que realizan las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, si bien las actuaciones de emergencia deben centrarse en lo más importante a corto plazo. Se destaca la existencia de un grupo de trabajo específico en el Comité Forestal Español, con participación de la Dirección General del Agua, los organismos de cuenca y las CCAA, orientado a impulsar esta cooperación.

Compartiendo el fondo de la observación no podemos compartir la viabilidad de la sugerencia relativa a los instrumentos de la PAC. Los fondos de la PAC se distribuyen mediante criterios que establecen el MAPA y las Comunidades Autónomas. Las prioridades de ambos departamentos en el ámbito de sus

competencias no siempre están alineadas con las de la política del agua. Es conocido que en el Plan Hidrológico del Duero vigente se planteó precisamente apoyarse en las herramientas de la PAC para establecer medidas dirigidas a la mejora del estado de conservación de hábitats y especies de Red natura o a reducir la contaminación difusa en las aguas; sin embargo, la administración competente rechazó esas medidas y también utilizar las herramientas PAC para alcanzar los objetivos ambientales, ya que sus prioridades eran otras.

Alegación 5.

Se propone que la lucha contra la desertificación se considere como un factor más en la asignación de recursos, evitando impactos colaterales sobre la propia cuenca (conservación de suelos, calidad de las aguas y riesgos de inundación).

Respuesta:

No terminamos de comprender el sentido de la alegación: la observación se interpreta en el sentido de que el estado de degradación del territorio y su incidencia sobre la disponibilidad y la calidad del recurso (infiltración, recarga, aportes sólidos) deben tenerse en cuenta en la caracterización de los recursos y en la asignación y reserva de recursos. Dicha asignación se realiza en el plan hidrológico (art. 42 TRLA y concordantes del RPH), atendiendo a la disponibilidad real del recurso, que ya incorpora los escenarios de cambio climático evaluados en el EACC (balances, proyecciones de aportaciones e infiltración) y, en demandas de regadío, los resultados del proyecto ECLIMAR (EACC apartado 5.9). La consideración de la lucha contra la desertificación como factor de coherencia intersectorial es compatible con este marco. Sin embargo, la asignación y reserva de recursos y la evaluación de disponibilidad corresponden al plan hidrológico, que ya integra los escenarios de cambio climático (EACC), no en el EpTI.

Alegación 6.

Las demarcaciones constituyen un marco estratégico para la prevención y mitigación de la desertificación y la restauración de áreas degradadas; debe considerarse la gestión forestal como herramienta fundamental para la regulación de los aportes hídricos de calidad aguas abajo (control de escorrentía, reducción de sedimentos y contaminantes difusos, recarga), atendiendo a la mayor evapotranspiración en casos de densificación de las masas.

Respuesta:

Se comparte, en lo esencial, el papel de la gestión forestal y de las masas forestales en la regulación hídrica, el control de la erosión y la reducción de aportes sólidos y difusos. Este enfoque está recogido en el EACC mediante las medidas FE1 (SbN para la retención natural del agua y el control de la erosión) y FE2 (gestión forestal sensible al agua y al riesgo de incendios), que abordan expresamente los impactos de sedimentación (ECS8), erosión de suelos (AG9) e incendios (ECS13). Conviene matizar, en línea con el propio EACC (FE2), que «más bosque» no equivale necesariamente a «más agua»: la densificación puede reducir la aportación y la recarga por mayor evapotranspiración, por lo que las actuaciones deben decidirse con diagnóstico hidrológico caso a caso. Su concreción corresponde al programa de medidas del plan, en la medida en que las administraciones competentes como la alegante planteen este tipo de medidas con plazos e inversiones concretas.

Alegación 7.

La RHF debe integrarse además en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) y en los análisis coste-beneficio de las medidas de prevención y protección, dada su efectividad para reducir la peligrosidad de avenidas torrenciales.

Respuesta:

Se comparte el enfoque que por otra parte se viene aplicando en los PGRI. Las medidas de retención natural del agua (subtipo 14.01.01) forman parte del catálogo de medidas de los PGRI (Directiva 2007/60/CE; RD 903/2010), con efectividad reconocida en la laminación de avenidas. Su valoración coste-beneficio se realiza en la elaboración y revisión de los PGRI y del programa de medidas, coordinados con la planificación hidrológica. En el EACC, la medida FE1 contempla expresamente su integración en PGRI, planes hidrológicos y PAC.

4.4. Escrito de observaciones Nº 004

Presentado por: D. Santiago González Muñoz.

En nombre de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de la D.G. de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad.

Alegación 1.

En este Plan se contempla la salud humana de manera explícita como uno de los ejes transversales sobre los que se diseñan los temas importantes a desarrollar, todos ellos considerados en un contexto marcado por el cambio climático. En este sentido, destaca la preparación frente a fenómenos adversos, como la sequía o las inundaciones, siendo el objetivo principal la aplicación de un enfoque de prevención y de atenuación de los posibles impactos sobre la población. Asimismo, se introduce la salud humana como factor determinante para la toma de decisiones relacionadas con los usos urbanos e industriales del agua, reforzando el carácter preventivo frente a los posibles riesgos derivados de la contaminación de las aguas de consumo y su posible afección a la salud humana.

Por todo lo expuesto, se recomienda el cumplimiento de la legislación relativa a la salud humana y a la protección ambiental, para asegurar el éxito del Plan.

Respuesta:

Aunque el escrito lleva membrete del Ministerio de Sanidad la firma lleva referencia de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Ante la aparente incongruencia, por el contenido del escrito, clasificamos la alegación con origen en el Ministerio de Sanidad.

Se agradece el análisis del EpTI y las observaciones aportadas. La Ficha nº 8 aborda directamente como tema importante el suministro de agua para la salud humana, en el nuevo marco que delimita el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero. El sistema de gestión empleado en la legislación europea en relación con los usos del agua y en concreto con el de abastecimiento ha descansado tradicionalmente en el control analítico de la calidad del agua. Sin embargo, la tendencia actual en toda la legislación de aguas es transformar ese mero control analítico a un sistema de gestión de riesgos.

Alcanzar los objetivos deseados en materia de agua para suministro humano, con el nuevo carácter de "derecho" que se le ha atribuido por el citado Real Decreto, requiere del trabajo coordinado de todos los niveles de la administración, que tienen sus competencias definidas con precisión: los ayuntamientos, ya sea con gestión directa o indirecta del servicio de abastecimiento y los operadores titulares de la concesión en su caso; la autoridad sanitaria de las comunidades autónomas; la administración hidráulica autonómica en demarcaciones hidrográficas intracomunitarias; la administración general del estado, especialmente a través del Ministerio de Sanidad, las confederaciones hidrográficas y los ministerios de Derechos Sociales, Educación y Defensa.

4.5. Escrito de observaciones Nº 005

Presentado por: D. Saúl Blanco Lanza.

En nombre propio.

Alegación 1.

No existen evidencias científicas que sostengan las afirmaciones del EpTI sobre las consecuencias del cambio climático: descenso de aportaciones nivales, menor precipitación y un incremento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos hidrológicos extremos, sequías e inundaciones, y alteración de patrones de precipitación. Por el contrario, diversos estudios sugieren una mayor probabilidad de grandes nevadas en las zonas montañosas; las precipitaciones globales, se prevé que fluctuarán significativamente sin un patrón sistemático. El norte y noroeste de España siguen siendo más húmedos debido a la persistente influencia del Atlántico, lo que indica la resiliencia climática al calentamiento global. En cuanto a la frecuencia de sequías, inundaciones y fenómenos extremos, el propio IPCC reconoce una "baja confianza en el signo de tendencia en la magnitud y/o frecuencia de las inundaciones a escala global", y una "baja confianza en una tendencia observada a escala global en la sequía o sequedad (falta de lluvia) desde mediados del siglo XX" (IPCC, 2014). Se sugiere eliminar ese contenido de las Fichas nº 2 y 8.

Respuesta:

En efecto hay un debate abierto sobre las consecuencias del cambio climático; si bien el efecto sobre las temperaturas medias sí concita cierto acuerdo, más complejo es lograrlo sobre el efecto que tiene el cambio climático sobre las precipitaciones y más aún sobre las aportaciones donde entran nuevos parámetros relacionados con el cambio de patrones de temperatura, pero cuya incidencia local y temporal está poco delimitada. De hecho, en el Plan vigente se pone de manifiesto que, para el análisis del efecto del cambio climático sobre la escorrentía, el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (CEH) calculó los porcentajes de cambio en las variables hidrológicas del periodo de control 1961-2000 para 3 periodos de impacto de 30 años: 2010-2040, 2040-2070 y 2070-2100, estimados según 12 proyecciones climáticas según 6 modelos, tanto para el escenario de emisiones RCP4.5 como para el RCP8.5. (cfr el informe completo del CEH en https://ceh.cedex.es/web/Evimpacambclim2017.htm). La elección de las proyecciones fue consensuada por AEMET, la Oficina Española del Cambio Climático y el CEDEX según análisis previos. Los resultados se calcularon para cada celda de 1 km^2 de España y para cada uno de los 12 meses del año, mientras que la variable "aportación hídrica" se obtuvo en cada celda de 0,5 km de lado. Como se explica en el propio informe, los diversos modelos utilizados ofrecen unas horquillas de datos muy amplias y sesgos muy diversos: los hay que ofrecen reducciones de escorrentía medias anuales de más del 40% y otros que ofrecen incrementos de aportaciones de más del 20%. Lo que sí se observa es que la mayoría (cinco modelos de seis) ofrecen reducciones de distinta intensidad.

Hemos de tener en cuenta que estos estudios se plantean en un ámbito de trabajo, el de la planificación hidrológica, que es distinto del ámbito académico donde, efectivamente, hay una discusión abierta sobre el cambio climático y sus efectos. Para la planificación hidrológica, que sirve a la gestión ordinaria del agua, lo más relevante es la tendencia de los valores de escorrentía ya que las decisiones que se tomen hoy (por ejemplo, otorgar una concesión por un período de 25, 30, 75 años o

fijar un régimen de caudales ecológico) deben ser consistentes en el futuro (que se pueda garantizar el suministro durante se plazo a esa concesión, o que el caudal ecológico fijado no suponga una carga adicional en el futuro para los usos al ser aquel prioritario). Por ello juega un papel relevante el principio de cautela con el fin de no presionar al recurso de manera que en el futuro se presenten problemas ambientales, sociales o económicos que no puedan resolverse.

Para el presente ciclo de planificación la Dirección General del Agua ha redactado el *Estudio de adaptación a los riesgos del cambio climático* (EACC) que exige el art. 4 bis del Reglamento de la Planificación Hidrológica por mandato de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, disponible en la web (https://www.chduero.es/web/guest/esquema-de-temas-importantes). En él se profundiza en los diversos escenarios de cambio climático y se hace un análisis de riesgos, impactos y medidas de adaptación en la demarcación hidrográfica del Duero. Además de los trabajos del CEH, que se actualizarán para el nuevo ciclo de planificación hidrológica, este EACC es el más relevante que se ha elaborado en España en materia de cambio climático y agua. En este trabajo se analizan los riesgos del cambio climático a nivel regional sobre los regímenes térmico y pluviométrico (epígrafe 3.2), hidrológico (epígrafe 3.1), y fenómenos extremos (epígrafe 3.3), y nivel local o de demarcación hidrográfica (epígrafes 3.6 a 3.27). Por tanto, se acepta la alegación y se sustituye el texto genérico de las páginas 35 y 168 por un resumen sintético de los resultados que ofrece el Estudio de adaptación para las variables más significativas relacionadas con cada tema importante.

Alegación 2.

No existen evidencias científicas que sostengan las afirmaciones del EpTI sobre las consecuencias del cambio climático: aumento en las próximas décadas del riesgo por inundaciones, incremento de las precipitaciones torrenciales y de los fenómenos convectivos extremos, como las DANAs o las gotas frías. Más bien es una cuestión disputada a nivel científico. Diversos autores que se citan demuestran disminuciones en los volúmenes de inundación con el aumento de la temperatura, y los registros observados presentan más bien una disminución en los máximos de inundación anuales. La frecuencia de inundación ha disminuido a nivel mundial en los últimos 50 años y la probabilidad de un evento de inundación de 100 años es ahora tan rara que solo ha estado ocurriendo una vez cada 358 años en promedio desde 1970. Se sugiere eliminar ese contenido del informe de las Fichas nº 5 y 9.

Respuesta:

En efecto, en el Estudio de adaptación a los riesgos del cambio climático se indica que la evidencia científica disponible indica que, en la región mediterránea, no hay una tendencia observada clara en los extremos de precipitación diaria. Mientras un enfoque estadístico de regionalización aplicado a Coupled Model Intercomparison Project Phase 6[1] apunta a una ligera disminución de los máximos diarios y pluridiarios, el ajuste de sesgos con el método ISIMIPv3 sobre EURO-CORDEX[2] sugiere justamente lo contrario, un ascenso de esos extremos. Estas contradicciones se dan, en realidad, en meses concretos (como febrero y noviembre); sin embargo, tienen una influencia importante en la

[1] Este proyecto es el gran experimento internacional de comparación de modelos climáticos globales. Reúne simulaciones de decenas de modelos de todo el mundo y proporciona la base de proyecciones usada, por ejemplo, en el IPCC AR6

[2] EURO-CORDEX es la rama europea de la iniciativa CORDEX del World Climate Research Programme. Produce proyecciones climáticas regionales para Europa mediante modelos regionales de clima,
normalmente a resoluciones de 50 km y 12,5 km, pensadas para estudios de impactos y adaptación.

media anual resultante. A esto hay que sumar la gran complejidad que entraña trasladar la señal climática global y continental a escalas tan finas y a fenómenos tan localizados: cada método de regionalización captura de manera distinta los sesgos originales y reinterpreta la no estacionariedad de las tormentas intensas. Por otra parte, la respuesta de los episodios convectivos mediterráneos –y en particular de las DANAs– es muy sensible tanto a la resolución como a la representación de la convección en los modelos, que no capturan bien estos procesos, amplificando las divergencias. Esa falta de consenso entre metodologías es, en sí misma, un indicador de la elevada incertidumbre asociada a los extremos de precipitación. Finalmente, la ausencia de señal robusta está corroborada por el IPCC AR6 y su Atlas Interactivo (https://interactive-atlas.ipcc.ch/).

Como contraste, la evidencia observacional muestra un aumento claro de la frecuencia y la intensidad de episodios convectivos y precipitaciones torrenciales (≥ 200 mm/día), así como cambios en su distribución interanual en un contexto de Mediterráneo más cálido (observaciones de alta resolución y estudios recopilados en el Informe CLIVAR-SPAIN). Una manera de gestionar esta diversidad de información es recurrir a “storylines” o narrativas de futuro: subconjuntos de modelos y evidencias que describen escenarios físicamente plausibles –por ejemplo, otoños con menos días de lluvia, pero mayor probabilidad de episodios torrenciales– para diseñar medidas de prevención y adaptación robustas frente a varios futuros posibles, haciendo explícitas las incertidumbres. En este sentido, el grupo de Escenarios del PNACC evaluará las nuevas generaciones CORDEX y DestinE, con mayores resoluciones y esquemas de convección mejorados, para acotar incertidumbres y disponer de proyecciones más útiles para la toma de decisiones a escala regional y local.

Por otra parte, la literatura científica reciente basada en observaciones muestra una tendencia positiva significativa en los extremos de precipitación sub-diaria en España y en otras zonas del Mediterráneo. Estas intensificaciones responden aproximadamente al coeficiente termodinámico de Clausius–Clapeyron (CC), según el cual la capacidad del aire para retener humedad aumenta con la temperatura, generando incrementos en las precipitaciones extremas sub-diarias de alrededor del 7 % por cada °C de calentamiento. Además, los primeros resultados procedentes de Convection-Permitting Regional Climate Models, con resoluciones espaciales del orden de 1–3 km que permiten resolver la convección explícitamente, sin parametrizarla, confirman esta diferenciación a futuro: los extremos diarios permanecen relativamente estables, mientras que los extremos sub-diarios se intensifican de forma acorde al factor de corrección empírico de Clausius-Clapeyron (CC). En este contexto, una alternativa metodológica complementaria y prometedora consiste en aplicar técnicas de desagregación temporal estadística a proyecciones diarias previamente regionalizadas, con aplicación posterior del factor CC, derivado mediante regresión cuantílica, permitiendo reconstruir proyecciones sub-diarias coherentes con la física del calentamiento y con las señales observadas, concordante con los estudios más recientes sobre proyección de curvas intensidad-duración-frecuencia (IDF) en el Mediterráneo.

A la espera de que fructifiquen estas iniciativas, el EACC muestra, con carácter informativo y comparativo, las proyecciones disponibles: tasas de cambio en cuantil media del estudio Impacto del cambio climático en las precipitaciones máximas en España (CEDEX, 2021b) para escenario intermedio y de altas emisiones (secciones 3.21, 3.22) y de la lluvia máxima acumulada en la red fluvial (sección 3.23), así como las precipitaciones máximas en 24 horas de AdapteCCa (secciones 3.24 y 3.25). Sin embargo, no se utilizan estas proyecciones como base directa para cuantificar cambios en los extremos para la evaluación del riesgo futuro.

En atención a la alegación y a lo que señala el EACC, se matiza el contenido de la Ficha nº 5 y la nº 9.

Alegación 3.

Aunque el EpTI señala que son esperables episodios de avenidas y sequías más frecuentes e intensos, numerosos autores ponen en duda esas conclusiones. En su conjunto, estos trabajos apuntan a una variabilidad espacial y temporal significativa, una incertidumbre alta en modelos climáticos regionales, y a una sobreatribución de causas climáticas frente a factores antrópicos locales. Sugerimos eliminar ese contenido de la Ficha 07.

Respuesta:

Se acepta la alegación por lo señalado en la respuesta a la alegación anterior y se matiza el contenido de la Ficha nº 7.

Alegación 4.

La tabla 65 se ha elaborado "bajo un escenario de cambio climático RCP 8.5". Se ha demostrado (Ritchie & Dowlatabadi, 2017) que este escenario es obsoleto y no debería seguir usándose en estudios científicos. Sugerimos eliminar ese contenido de la Ficha 10.

Respuesta:

El Estudio de adaptación a los riesgos del cambio climático señala que *la elección del escenario de emisiones "más probable" debe apoyarse en la evidencia internacional y en el marco estratégico nacional. El IPCC AR6 muestra que, bajo las políticas actuales y los compromisos de mitigación comunicados, el calentamiento global a finales de siglo se sitúa en torno a 2,3–2,7 ºC, es decir, claramente por encima del objetivo de 1,5 ºC y próximo a un escenario de emisiones intermedio. Este escenario es compatible con las trayectorias de SSP2-4.5, y lejos tanto de los escenarios de muy bajas emisiones (SSP1-1.9/2.6) como del escenario de muy altas emisiones SSP5-8.5. Los análisis de la brecha de emisiones publicados en torno a la COP30 coinciden en situar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional actualizadas en una senda de 2,3–2,5 ºC si se cumplen íntegramente, lo que refuerza la coherencia de tomar un escenario intermedio como referencia central para la planificación, sin que ello implique atribuir probabilidad formal a un único SSP.* Así pues, ese escenario es el que se utilizará en la redacción del Plan Hidrológico de cuarto ciclo.

No obstante, en la Ficha nº 10 se hace referencia al Plan vigente (2022-2027) en el que los análisis del momento aconsejaron utilizar ese escenario. No obstante, se sustituye la Tabla 65 por una centrada en el escenario SSP2-4.5 tal y como recomienda el Estudio de adaptación al cambio climático.

4.6. Escrito de observaciones Nº 006

Presentado por: D. José Antonio Cidoncha Sánchez.

En nombre de la D.G. de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia de la Junta de Extremadura.

Alegación 1.

Se proponen una serie de criterios técnicos (18) para abordar la renovación y el rediseño de infraestructuras hidráulicas, para que puedan recibir inversiones públicas en tanto contribuyan a la mejora de la calidad de las aguas y la recuperación de los ríos. Se refiere a infraestructuras y equipamientos diseñados en tiempos con otras prioridades y distinta conciencia sobre sus efectos a la larga, ahora evidenciados, asumibles y reemplazables por nuevos esquemas y diseños.

Respuesta:

A esta alegación se acompaña un Anexo en el que se incluyen 18 consideraciones técnicas generales, ninguna específica de la demarcación hidrográfica del Duero, como son la gestión de sedimentos en embalses, el almacenamiento de caudales en cabeceras fuera del DPH, la gestión de embalses encadenados, los dispositivos de entrega de caudales en los ríos después de los usos, los dispositivos de pasos para peces en infraestructuras hidroeléctricas, la translocación de especies entre tramos de ríos compartimentados, las tomas de agua en ríos, los obstáculos en ríos, las zonas de baño, los encauzamientos de ríos y las graveras en las cercanía de los cauces. Se indica en la alegación que implementar estas soluciones podría

Respecto a los criterios técnicos señalar que muchos de ellos se vienen aplicando en los procedimientos de autorización de obras y actuaciones en cauces de manera ordinaria en la cuenca; otros deben tenerse en cuenta en las actuaciones de restauración fluvial que se plantean en los proyectos que atienden a las medidas de la planificación hidrológica pero cuyo detalle ésta no aborda. Todos ellos suponen condiciones que pueden imponerse a las actuaciones en cauce en las que la comunidad autónoma puede participar a través de los informes sectoriales o en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Por lo que se considera que son cuestiones que, más que alegaciones a un Esquema de temas importantes, podrían ser objeto de una Guía técnica que la administración alegante elaborara y que trasladara a los organismos de cuenca que participan en su territorio con el fin de unificar criterios ambientales a tener en cuenta en las autorizaciones.

En relación con la racionalización y optimización del uso del agua internalizando costes, señalar que todo el EpTI se ha redactado, al igual que los de los anteriores ciclos, bajo las premisas que se citan por el alegante y que están en el fundamento de la DMA. De hecho, el artículo 40 del TRLA establece que son objetivos de la planificación hidrológica conseguir el buen estado de las aguas, proteger el dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, y satisfacer las demandas de agua; lo que se hará incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. Esos objetivos se han trasladado al Reglamento de la Planificación Hidrológica a cuyo texto se ciñe el Plan Hidrológico y el EpTI. Así, en las fichas nº1, 2, 4, 6, 7, 8 y 10 se abordan los aspectos citados por el alegantes en temas relevantes como son el uso de aguas superficiales y subterráneas, su calidad, la racionalización de las demandas, la protección de las aguas.

Alegación 2.

Se propone la mejora de la gestión de los sedimentos artificialmente embalsados (en cola de embalses). Los sedimentos contribuyen a la pérdida de capacidad o almacenamiento de agua, y a la acumulación de materia orgánica y otros finos que conforman los cienos y elevan la eutrofia de las aguas, causantes de incrementos en los costes de potabilización y de mortandades piscícolas por reducciones temporales del oxígeno disuelto, por lo que se propone una gestión aguas abajo de las presas, para las gravas, y secado natural para los cienos.

Respuesta:

A esta alegación se acompaña un Anexo en el que se incluyen 19 consideraciones técnicas generales Compartimos la cuestión planteada desde el punto de vista técnico, pero entendemos que los criterios que se aportan corresponden más bien a una guía técnica de trabajo y de gestión de embalses que a un documento de planificación como el que nos ocupa. No hay constancia de que en la cuenca del Duero haya embalses en territorio de Extremadura o cuya gestión pueda afectar a ríos o masas de agua que circulen por esa comunidad autónoma.

El caudal sólido (así consideramos en el Organismo de cuenca a los aportes de sedimentos retenidos en los embales) está regulado de manera general en el artículo 76 del RDPH y, específicamente y de forma complementaria, en el artículo 26 de la actual normativa del Plan Hidrológico del Duero (aprobado por Real Decreto 35/2023, de 24 de enero). En ese artículo se indica:

1. El transporte natural de material sedimentario sólido, mediante suspensión, saltación o rodamiento, se reconoce como parte integrante del caudal natural de los ríos, esencial para su evolución y desarrollo morfológico.

2. En las operaciones que se lleven a cabo de sueltas extraordinarias desde embalse programadas se estudiará la viabilidad de realizar aportes aguas abajo de la presa de los sedimentos correspondientes en cantidad y naturaleza a los que transportaría dicho caudal en condiciones naturales. Si aguas abajo de la presa existe otro embalse cuya curva de remanso llega a la presa desde la que se va a hacer la operación o está próxima a la misma, no existiendo un tramo de cauce que pueda verse alterado, no se considera necesaria dicha actuación.

Más allá de algunas pruebas realizadas en la cuenca, este aspecto requiere un análisis de mayor entidad dadas las consecuencias que puede tener para la fauna piscícola, para la vegetación de ribera, para las condiciones hidromorfológicas de los cauces y para el riesgo de inundación aguas debajo de las presas. La CHD está realizando un estudio sobre la viabilidad de implantar estos caudales sólidos en la gestión de 48 infraestructuras presentes en la cuenca, prácticamente todas grandes presas. Los resultados obtenidos hasta ahora señalan que los criterios técnicos de gestión de sedimentos generales deben evaluarse caso a caso para cada infraestructura y en todo caso requieren análisis previos o actuaciones previas dependiendo de cada caso de: recuperación del "territorio fluvial, conservación o restauración de zonas vegetales ribereñas, incluyendo la reconversión de las plantaciones de chopos a soto, estudio de incisión delimitando la incisión actual, ejecución de batimetrías de embalses, estudio de calidad de los sedimentos del embalse, …

Por lo tanto, las aportaciones de caudal sólido, con los criterios del escrito de alegaciones deben ser validados, caso a caso, pues a nuestro juicio no sirven recetas comunes en todos los casos.

Alegación 3.

Se propone priorizar el almacenamiento de caudales en cabeceras y balsas, fuera de los cursos de agua para atender a necesidades del territorio y evitando los daños sobre las masas de agua. Los ríos, charcas ganaderas y pequeños embalses en las cabeceras de cuenca hidrográfica conservan comunidades piscícolas autóctonas en mejor estado y además presentan un mayor potencial y facilidad de recuperación. Priorizar la recuperación de estos tramos mediante la permeabilización de pequeñas barreras, la mejora de refugio en pequeñas charcas ganaderas, el agotamiento planificado de charcas y pequeños embalses para control de invasoras y los reforzamientos poblacionales contribuyen a consolidar reservorios de fauna piscícola autóctona y focos de dispersión de estas especies hacia el resto de la cuenca.

Respuesta:

La planificación hidrológica centra las medidas para el logro de los objetivos ambientales en los tramos fluviales caracterizados como masa de agua, dado que los recursos económicos y humanos son limitados y las exigencias normativas son obligatorias especialmente en masas de agua. La mayoría de las cabeceras de los ríos en la cuenca del Duero no tienen la categoría de masa de agua. Por ello, siendo muy oportuna su alegación, no siempre podrá llevarse a cabo por esa priorización de actuaciones. En la demarcación hidrográfica del Duero únicamente la masa de agua Río de las Mayas (30400632) discurre parcialmente por la comunidad autónoma de Extremadura. Esta masa de agua se encuentra en buen estado, por lo que no se han planteado medidas específicas en el plan hidrológico vigente, más allá de evitar el deterioro. Presenta tres obstáculos transversales que proceden de infraestructuras viarias, uno de la carretera CC-114 (de titularidad de la Diputación de Cáceres) y dos de caminos vecinales de los términos municipales de Descargamaría y Robledillo de Gata; todas ellas son obstáculos franqueables.

Alegación 4

En el EpTI no se contemplan actividades con cierta relevancia social y económica como la Pesca, que para el caso de Extremadura alcanza 100.000 licencias anuales, o la Acuicultura, con 30.000 charcas en terreno privado con habitabilidad piscícola. Aun cuando la superficie de la cuenca dentro de Extremadura pudiera considerarse testimonial, estas actividades son relevantes para el conjunto de la cuenca.

Respuesta:

Se agradece la observación realizada. No obstante, entendemos que se trata de una alegación redactada de forma genérica, para varias demarcaciones, y la incidencia que pueda tener la relevancia de la Pesca y Acuicultura de Extremadura en la demarcación hidrográfica del Duero, cuya superficie dentro de la cuenca es testimonial, es mínima. Por otra parte, esta alegación encaja mejor en la fase de Documentos iniciales donde debe hacerse una caracterización económica del agua o en la fase de plan hidrológico donde también se aborda este aspecto. La misma alegación se presentó a la fase de Documentos iniciales y allí se aceptó, incluyendo una referencia a la actividad de pesca y acuicultura, describiendo el sector acuícola de la demarcación, basado en la estadística anual del MAPA, y la caracterización de la pesca continental recreativa, basado en el estudio “La Pesca Recreativa

Continental en España. Marco Jurídico y Caracterización" elaborado por el Observatorio Español de Acuicultura y la Fundación Biodiversidad del MITECO, del año 2020.

4.7. Escrito de observaciones Nº 007

Presentado por: Dª. María Casado Sáenz y Dª Begoña Izquierdo Negredo.

En nombre de la Asociación Hacendera (Soria).

Alegación 1.

Se propone que se realice un análisis serio de la situación de las instalaciones de cría intensiva porcina en la Provincia de Soria y se incluya como un apartado dentro de lo que es la contaminación difusa por nitratos. Que se considere el efecto sinérgico de cerca de 200 instalaciones con más de 600.000 cerdos. Teniendo en cuenta que estas granjas se ubican en zonas llanas y de valle, se concentran a lo largo de los principales ríos y sus aluviales.

Respuesta:

El análisis de presiones e impactos que forma parte de los documentos iniciales del presente ciclo de planificación hidrológica incluye todas las actividades que pueden suponer deterioro del estado de las masas de agua. La explotación intensiva de ganado porcino, como tal, no es considerada una presión; lo será si para esa explotación requiere el uso de agua del DPH, que se considerará como una presión por extracción, o si los residuos producidos son aplicados como valorización de suelos agrícolas, lo que se considerará una presión de contaminación difusa. Este análisis se ha llevado a cabo a partir de la información que aportan las administraciones competentes: comunidades autónomas que emiten la autorización ambiental integrada de estas explotaciones o evalúa ambientalmente las mismas, y MAPA que elabora cada dos años un balance de nitratos de origen agrícola y ganadero. El análisis se encuentra plasmado en el epígrafe *4.2.1.1 Presiones sobre las masas de agua superficial* y *4.2.1.2 Presiones sobre las masas de agua subterránea* del documento Programa, Calendario, Estudio General sobre la Demarcación y Fórmulas de Consulta, para el ciclo de planificación 2028-2033. En el epígrafe 4.2.1.1 se indica la metodología de este análisis (páginas 113 a 119). En ese análisis, realizado por cuenca vertiente, figura toda la demarcación hidrográfica, incluida Soria, distinguiendo la presión sobre las masas de agua superficial y subterránea, discriminada en contaminación difusa de origen ganadero y de origen agrario. Además, ese análisis se encuentra disponible en la base documental Mírame-IDEDuero de la Confederación (https://mirame.chduero.es/chduero/viewer?showLayers=634-472-93-28-515-514&zoom=9&x=-298505.1235174884&y=5103042.499407818)

Todo es mejorable, sin duda, pero se ha utilizado la mejor información disponible para su elaboración. Igualmente se puede obtener de la misma base documental citada la información que dispone el Organismo de cuenca de las explotaciones ganaderas que disponen de título concesional de agua para la actividad.

En la provincia de Soria hay declaradas tres zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias (Almazán, Ágreda y Fuentecantos); hay una zona donde el excedente de fósforo de origen ganadero está entre 3 y 5 kg/ha y año (entorno de Berlanga de Duero), y una zona con excedente de fósforo entre 5 y 7 kg/ha y año (zona cercana a Langa de Duero y San Esteban de Gormaz), estando el resto de la provincia con excedente inferior a 0,5 kg/ha y año. Estos datos sugieren que los problemas de contaminación difusa que identifica la alegante, sin menospreciar a la carga

ganadera, quizá pueden deberse a otros vectores distintos como puede ser la agricultura de secano, que según el análisis de presiones identificado supone un mayor excedente de contaminación difusa en la provincia de Soria.

A la vista de esta información y análisis citados, no parece que la situación de las granjas porcinas en Soria, en el ámbito de la demarcación hidrográfica, justifique un apartado específico en el tema importante de contaminación difusa del ETI ni tampoco un tratamiento específico en el apartado de presiones e impactos. Las presiones e impactos se actualizarán en el borrador de Plan Hidrológico que está en preparación, lo que supondrá una nueva revisión de las actividades que generan diversos problemas.

Con respecto a la consideración del efecto sinérgico de las instalaciones, la Confederación Hidrográfica del Duero no tiene competencias para inspeccionar las instalaciones ni verificar cómo se lleva a cabo la actividad. Solo podría, en este caso, incrementar estudios y vigilancia en el entorno de estas instalaciones, así como en los terrenos donde se apliquen los purines, para determinar cómo evoluciona el estado de las aguas, y con los resultados obtenidos proponer medidas correctoras al órgano competente para adoptarlas, que es la Junta de Castilla y León.

Alegación 2.

Que se amplíe las redes de control y obligue a implementar redes de control del estado químico no sólo cerca de estas instalaciones contaminantes, sino en sus zonas de vertido, lo que actualmente no se realiza.

Respuesta:

La propuesta de la alegante es razonable ya que a mayor densidad de puntos de monitorización mejor información. La red oficial de seguimiento de calidad de las aguas de la Confederación Hidrográfica está en continua expansión y actualización. Sin embargo, como la alegante conoce, los puntos de muestreo no pueden ser tan extensa como se desearía para tener un óptimo conocimiento ya que los recursos para construir esa red son limitados, y lo que es más importante los recursos humanos y económicos para el seguimiento (toma de muestras, analíticas, mantenimiento en buen estado de los puntos de control, …) también. Por ello la red de calidad debe ser lo suficientemente extensa, pero a la vez lo adecuadamente manejable, para que pueda servir al fin de todo ello que es evitar o corregir la posible contaminación.

Por ello el diseño de la red debe hacerse considerando el análisis de presiones e impactos de manera que la red sea más densa donde hay mayor presión identificada. De cualquier modo, se traslada la propuesta al departamento de Calidad de las Aguas para su valoración en los sucesivos Pliegos de ampliación de la red y se hace una cita específica en el ETI señalando esta necesidad.

Alegación 3.

Se sugiere que quizás la opción más razonable es limitar con normas, a incluir como opciones dentro de la ficha DU01 del ETI, como debería ser, la limitación de la construcción de nuevas instalaciones de cría intensiva porcina en el DPH, en este caso los acuíferos y Masas de Agua.

Respuesta:

La instalación de granjas porcinas es una actividad que está sujeta a autorización por parte del órgano de la administración autonómica competente; además estos proyectos están sujetos a autorización ambiental integrada. Los organismos de cuenca no autorizan estas actividades, si bien participan en la instrucción de la autorización ambiental integrada aportando informes que son preceptivos, pero no vinculantes y ejercen potestad administrativa para otorgar la concesión administrativa de uso del agua. El Plan Hidrológico vigente ya incluye disposiciones limitantes para determinadas actividades que pueden suponer presiones adicionales sobre masas de agua o zonas con escasa capacidad de acogida: por ejemplo, en la aplicación de los artículos 20, 28 o 35 de la Normativa, entre otros, algo que ya se pone de manifiesto en la Ficha DU-01 (epígrafe 5.1). Estas limitaciones han sido muy criticadas por los sectores afectados y queda por comprobar el efecto de las mismas sobre las masas de agua, con respecto a las zonas donde estas limitaciones no son tales.

Alegación 4.

Que se limiten las concesiones de agua en el caso de las instalaciones que supongan una amenaza actual o futura a la calidad de nuestras aguas, aplicando el principio legal de "prevención". Lo que se hace en la actualidad, mediante este proceso es tomar agua de excelente calidad de un acuífero y revertirla al medio convertida en un fluido contaminante, aunque se le llame fertilizante, cuyo destino es contaminar los acuíferos sobre los que se vierte.

Respuesta:

En la instrucción de los expedientes de nuevas concesiones y de modificación de las existentes ya se vienen aplicando criterios limitantes a las actividades pueden suponer un deterioro de las masas de agua, unas como condicionantes y otras como directamente denegantes. En la Ficha DU-01 se indica que la alternativa elegida mantiene estos criterios que actualmente se viene aplicando si bien cambiará las zonas donde se aplican en función de los resultados de la actualización del análisis de presiones e impactos. De cualquier modo, se recuerda que en las granjas intensivas de porcino no es la actividad que autoriza la Confederación (concesión de extracción de agua, en ocasiones también sujeta a evaluación ambiental) la que genera la contaminación sino la gestión de los residuos mediante su valorización como fertilizante, actividad que autoriza la administración autonómica, lógicamente con el informe de los organismos afectados, entre otros el de cuenca. Podría suceder que explotaciones porcinas intensivas llevaran a cabo una gestión de residuos que no supongan su aplicación al suelo con lo que el riesgo de contaminación es nulo, algo que no podría justificar la negativa a dar una concesión de aguas como pretende aplicar la alegante de manera general.

La Confederación Hidrográfica del Duero tiene competencias en materia de vertidos, pero en este caso, la aplicación del residuo ganadero sobre terrenos se califica como práctica agronómica. Por lo tanto, este organismo solo puede diagnosticar y sugerir actuaciones, pero quien tiene las competencias para la autorización y vigilancia de esta práctica agronómica, así como para la delimitación y declaración de las Zonas Vulnerables es la Junta de Castilla y León.

Alegación 5.

La construcción de nuevas plantas de biogás no son una solución para deshacerse del problema del Nitrógeno, dado que en estas plantas el N no se reduce prácticamente nada. Hay otras técnicas que son más caras como son las técnicas de nitrificación parcial y oxidación del amonio y de nitrificación y

desnitrificación biológica. Para eliminar el nitrógeno que se produce en la provincia de Soria con estos procedimientos mencionados sería necesario encarecer el precio de la carne significativamente para el productor. La opción que resultaría económicamente aceptable sería el retirar sólo el 50% del N que hemos calculado que genera la industria porcina en la provincia y exportar o dispersar el sobrante en forma de purín. Esta solución conseguiría únicamente trasladar el problema a otra cuenca. Dispersar ese 50% en parcelas vertedero supone de nuevo poner en riesgo las aguas superficiales y de forma particular a los acuíferos. Parece pues que la mejor solución es limitar su producción, evitando la construcción de nuevas granjas y mejorando el control de las existentes.

Respuesta:

La aportación de las plantas de biogás de digestión de purines a la gestión de residuos de las granjas porcinas intensivas es poder disponer de un subproducto más homogéneo, de mayor contenido nutritivo, más manejable y transportable y concentrado en pocos puntos de suministro, lo que permite una mejor trazabilidad y sustituir a la aplicación de los nutrientes inorgánico del mercado. Estas ventajas se consideran interesantes por comparación con la situación actual en la que no hay ninguna de estas ventajas. Por eso la Ficha ha recogido esta iniciativa y se ha planteado como alternativa a analizar en la Ficha por lo que puede aportar para resolver el problema.

Además, el digestato que generan estas plantas, debidamente tratado y aplicado, supone una práctica de fertilización que genera menos lixiviados y una mayor eficiencia de cara a que el cultivo aproveche de una forma más eficaz las sustancias nitrogenadas que necesita para su correcto desarrollo.

Alegación 6.

Que se estudie y proteja el complejo lagunar del INTERFLUVIO DE LOS RÍOS ARAVIANA Y MANUBLES como un ecosistema único asociado al "poljé de Noviercas" y a una única masa de agua subterránea (Araviana en el Duero y Borobia Aranda de Moncayo en el Ebro) que se extiende por el interfluvio de las dos cuencas.

Respuesta:

El 15 de abril de 2026 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 92, referencia BOE-A-2026-8355) la Resolución de 30 de marzo de 2026, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2026, por el que se establece el catálogo de acuíferos compartidos entre demarcaciones hidrográficas. En esta resolución figura como acuífero compartido entre las cuencas del Duero y del Ebro AC-03 – Araviana-Aranda de Moncayo, al que hace referencia la alegante.

Esto obliga a que la gestión y la toma de decisiones que afecten a estas masas y, en consecuencia, al acuífero compartido, se debe realizar de forma coordinada entre ambas Confederaciones. Algo que, en la práctica, ya se estaba realizando. Por ejemplo, las redes de control del estado cuantitativo y químico, se diseñan conjuntamente. En la nueva Normativa, atendiendo a la delimitación de los acuíferos compartidos por el citado Acuerdo del Consejo de Ministros, se incluirá una referencia a la gestión conjunta por ambas confederaciones.

Según el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, en función de la evolución de los

resultados analíticos obtenidos en las redes de control químico de esta zona, se podrá proponer como aguas afectadas de acuerdo con el artículo 3 de dicho Real Decreto. Como consecuencia, la administración autonómica deberá determinar si delimita una Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos en el espacio integrado por el "poljé de Noviercas".

Alegación 7.

Que se proteja el singular río Araviana, sus sumideros y entorno cárstico. Que se proteja la fauna en coordinación con la Junta de Castilla y León, estableciendo límites a los proyectos abusivos con el medio ambiente en la zona.

Respuesta:

La masa de agua río Araviana (30400325) en la actualidad no tiene vinculada ninguna zona protegida de hábitats, especies, ni espacios de Red Natura 2000, ni reservas hidrológicas. Únicamente su cabecera y arroyos tributarios Barranco Pedregoso, Barranco El Royo, Río Trasmoncayo, Río del Molinal, Barranco de la Fuente del Buitre, Arroyo del Reajo, Río Viejo y otros arroyos sin nombre, discurren dentro de la ZEC Sierra de Moncayo. Todos estos cauces vinculados con el ZEC ya disponen de la protección que les ofrece esta figura, pese a no ser considerados masas de agua. El Plan Básico de ordenación y conservación del ZEC Sierra de Moncayo señala como directrices de gestión el mantenimiento de la integridad de los tramos de cabecera de los ríos Isuela y Araviana, así como del resto de arroyos y barrancos incluidos en el Espacio, promoviendo la conservación de las escasas representaciones de bosques riparios y controlando la presión ganadera sobre la vegetación de ribera, especialmente las comunidades de megaforbios, así como las comunidades faunísticas vinculadas a los cursos fluviales del ZEC; también propone que se procure mejorar las condiciones de calidad de los ríos y arroyos y controlar las actuaciones que limiten el flujo y conectividad longitudinal o transversal, potenciando el papel de los ríos y las riberas como corredor ecológico; igualmente se plantea valorar la posibilidad de ampliar los límites del ZEC para acoger las representaciones de bosques riparios presentes en los cercanos ríos Queiles y Val, ambos de la demarcación hidrográfica del Ebro. Igualmente establece medidas para la conservación y mejora de los hábitats y especies presentes, incluidos aquellos vinculados al agua. Por tanto, a juicio de este Organismo, existen ya los elementos de protección suficientes para las zonas protegidas del entorno del río Araviana; la posible ampliación de las zonas protegidas que sugiere la alegación debe ser valorada por el órgano ambiental competente, en cuyo caso la planificación hidrológica recogerá los criterios de protección y conservación que puedan establecerse. A la vista de la información disponible y de las figuras de protección existentes, no se considera que el entorno del río Araviana deba protegerse con nuevos elementos jurídicos como propone la alegante vinculados a la geomorfología hidrológica.

Alegación 8.

Que se designe una masa de agua compartida con la Cuenca del Ebro y se estudie su hidrogeología adecuadamente.

Respuesta:

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2026 (publicada por Resolución de 30 de marzo de 2026, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente), se establece el catálogo de acuíferos compartidos entre demarcaciones hidrográficas. Entre las demarcaciones del Ebro y del Duero se establece el acuífero compartido denominado Araviana-Aranda de Moncayo (AC-03) que incluye las masas de agua Araviana (Duero) y Borobia-Aranda de Moncayo (Ebro). El objetivo del Catálogo es servir de referencia para afrontar o prevenir problemas reales de gestión hídrica o de planificación hidrológica. También servirá de referencia técnica para la futura actualización del Plan Hidrológico Nacional. Lógicamente los planes hidrológicos de las cuencas de Ebro y Duero de cuarto ciclo se adaptarán a las previsiones que sobre acuíferos compartidos queden establecidas en el Plan Hidrológico Nacional. Para su elaboración, se ha tomado como referencia la información recogida en los planes hidrológicos de cuenca vigentes y los análisis realizados al respecto por la Dirección General del Agua, con el apoyo técnico del Instituto Geológico y Minero de España que ha realizado un análisis específico de todas las masas de agua subterránea que configuran este catálogo, por lo que el estudio que plantea la alegante se ha realizado con la profundidad posible para hacer esa delimitación. Además de la consulta realizada a las confederaciones hidrográficas, la propuesta de catálogo ha sido informada favorablemente por el Consejo Nacional del Agua, donde participan junto a representantes de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y administraciones locales, agentes relacionados con el agua.

Alegación 9.

Que se analice la interconexión aguas superficiales y subterráneas en el acuífero y se cuantifiquen con precisión sus recursos renovables. Que se considere que los recursos de la masa del Araviana son recursos de una gran calidad, reserva de agua para el futuro y nada despreciables en cifras.

Respuesta:

En 2016 la Subdirección General de Planificación Hidrológica del MITECO encargó al IGME la "Encomienda de Gestión para desarrollar diversos trabajos relacionados con el inventario de recursos hídricos subterráneos y con la caracterización de acuíferos con continuidad hidrogeológica entre demarcaciones hidrográficas." En la Encomienda se ejecutaron varias actividades como son:

- Actividad 2: Definición y caracterización de masas de agua subterránea compartidas entre Demarcaciones Hidrográficas.
- Actividad 4: Identificación y caracterización de la relación río-acuífero, descargas por manantiales, zonas húmedas y ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas.
- Actividad 9: Protección de las aguas subterráneas para consumo humano según la Directiva Marco del Agua. "

En dichos trabajos se identifica la relación río acuíferos en la cuenca del Duero. En la zona del río Araviana determina que la conexión entre río y acuífero es de tipo conexión difusa indirecta con sumideros en cauces influentes o perdedores.

Como consecuencia de la consulta pública del PHD vigente, diversos actores presentaron estudios de interés sobre los recursos de la masa de agua subterránea Araviana. En particular, por su relevancia, se encuentra el estudio del Dr. E. Custodio y Dr. F. Villaroya publicado en el año 2021 titulado "Estudio hidrogeológico del sistema acuífero asociado a la masa de agua subterránea Araviana 4034, Soria" y el estudio del IGME para los trabajos del catálogo de acuíferos compartidos: "Encomienda de Gestión para desarrollar diversos trabajos relacionados con el inventario de recursos hídricos subterráneos y con la caracterización de acuíferos con continuidad hidrogeológica entre demarcaciones hidrográficas." Las que afectan a al caso concreto del Duero-Ebro: masas Araviana-Borobia (actualmente Araviana-Aranda de Moncayo), La Bureba-Las Loras y Moncayo-Vozmediano.

El propio PHD realiza un estudio sobre los recursos renovables del acuífero, los valores de recarga, transferencia entre masas de agua, descargas a ríos, … A juicio de esta CHD el nivel de detalle de los estudios citados es suficiente para una gestión integral y el cumplimiento de los objetivos de la planificación. Los recursos humanos y económicos son limitados y no es posible hacer estudios como el que plantea la alegante en toda la cuenca, sino que debe hacerse en función de las prioridades que marcan el estado, los OMA, las necesidades sociales, las demandas, …

Alegación 10.

Que se establezcan zonas de salvaguarda y protección de las aguas subterráneas de la Masa Subterránea de Araviana. Es un recurso estratégico, en un escenario de cambio climático y disminución de los recursos disponibles, como se indica en el ETI, de hasta un 8,5%.

Respuesta:

En el PHD vigente se incluye en el Anejo 3 de la Memoria (Zonas Protegidas), el inventario de zonas protegidas, entre las que se encuentran las zonas protegidas de captación de aguas subterráneas para abastecimiento. La inclusión en este inventario establece unas limitaciones a las actividades que se desarrollan en dichas zonas protegidas. No obstante, en la elaboración del próximo Plan (2028-2033) está en proceso la revisión del inventario de captaciones y la definición de las zonas protegidas asociadas.

La red de seguimiento del estado cuantitativo y químico de las aguas subterráneas cuenta con puntos de control en esta masa de agua, que se utilizan para la evaluación del estado de la masa.

Según los resultados que aporta el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, hay algunos municipios con captaciones de abastecimiento en la masa Subterránea de Araviana cuya calificación es "Agua no apta para el consumo". Si se determina que los incumplimientos que determinan esta calificación se derivan de la calidad del agua en origen, se llevará a cabo una evaluación y gestión del riesgo de las zonas de captación de tipo detallado, según se establece en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, en su Capítulo IV. Esta evaluación de riesgos debe llevarse a cabo antes de enero de 2027, con lo que solapará con la fase de consulta pública del borrador del futuro Plan Hidrológico.

Alegación 11.

Que se considere el problema de los nitratos como un tema importante en los abastecimientos humanos en la provincia de Soria.

Respuesta:

La contaminación difusa es considerado un tema importante en la cuenca por el efecto de la presión sobre el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas y, en particular por el efecto sobre las captaciones de agua para consumo humano. Y esto no solo en Soria sino también en el resto de provincias. La Ficha nº 1 sobre este tema lo señala con claridad al recordar que en el análisis de presiones e impactos de los Documentos Iniciales del cuarto ciclo de planificación se ha estimado que un tercio de las masas de agua superficial presentan impactos comprobados o probables por exceso de nutrientes y un 18% de las masas de agua superficial presentan impactos comprobados por presencia de pesticidas (CHEM). Por su parte un 36% de las masas de agua subterránea presentan impactos por nutrientes y 5% presentan impactos comprobados por presencia de pesticidas. También se señala que la contaminación difusa puede llegar a comprometer el uso de agua para abastecimiento y poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos medioambientales. En el ámbito de los trabajos que la DGA está llevando a cabo para elaborar la guía de evaluación de riesgos que establece el artículo 51.2 del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, se está evaluando, además de las redes oficiales de calidad de agua otras fuentes de información para poder establecer un adecuado nivel de riesgo, exposición y vulnerabilidad de las captaciones de agua potable a las diversas presiones identificadas. La citada guía debe permitir que el análisis de riesgo esté disponible en las fechas que establece el artículo 51.3. Todo ello se aborda en el tema importante nº 8, específico del abastecimiento humano de agua. La norma sobre criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, con forma de Real Decreto, en nuestra opinión da mayor relevancia a esta propuesta de tema importante vinculada a Soria que la que puede derivarse de su inclusión en el EpTI.

Alegación 12.

Que se adopten medidas específicas en relación con los nitratos de origen agrario y en particular los procedentes de la dispersión de purines. Que se adecúen las redes de medida a los problemas reales.

Respuesta:

La alternativa seleccionada en la Ficha nº 1 de temas importantes es la alternativa 1 más la alternativa 2 que incluyen las medidas normativas que actualmente se vienen aplicando en relación con esta actividad y que se plasman en el artículo 35 de la Normativa del Plan Hidrológico (limitaciones a nuevas actividades que supongan potencial incremento de contaminación en zonas vulnerables, limitaciones de cantidades máximas de contaminantes a aplicar al suelo para actividades susceptibles de contaminación) o el artículo 20 (bandas de protección de cauces, distancias mínimas a zonas de captación de agua para consumo humano), entre otras. Lógicamente estas limitaciones se aplican en los procedimientos de los que esta Confederación es el órgano sustantivo, que básicamente se limitan a concesiones y autorizaciones en cauce y zona de policía. Pero hay otras administraciones distintas al Organismo de cuenca que ostentan competencias sustantivas en la aplicación al suelo de nitratos

procedentes de fuentes agrícolas y ganaderas, en su seguimiento y en la elaboración de normas para su correcta aplicación. Este hecho se pone de manifiesto en el epígrafe 5.2 de la Ficha nº 1 en la que se señalan diversas posibilidades de actuación que lógicamente quedan a juicio de cada autoridad competente si de verdad consideran que el tema es realmente importante. En función de la respuesta de todas las administraciones implicadas se elaborará el Programa de medidas para abordar este tema importante.

Alegación 13.

Que la Confederación se involucre en la toma de las medidas necesarias para solventar estos problemas. Que no se limite a hacer informes negativos cuando se proyecta una nueva instalación contaminante, dando luego el visto bueno a la concesión de agua para la realización de dicha actividad, como pasa con el tema de las macrogranjas que pueblan la provincia de Soria, que denieguen concesiones, basándose en el potencial contaminante de la actividad y en el principio legal de precaución.

Respuesta:

No queda claro qué entiende la alegante por "macrogranja" que es un término coloquial que se utiliza de forma negativa y que sin embargo nadie es capaz de definir con exactitud. Es propio de las nuevas formas de comunicación, utilizar conceptos equívocos para inducir a la opinión pública en el sentido de denostar o elogiar una actividad.

Más allá de la terminología, disentimos completamente del diagnóstico de la alegante en relación con el trabajo de la Confederación. La observación que hace la alegante manifiesta un desconocimiento relevante del marco competencial de las administraciones públicas, de los conceptos de instrucción, informe vinculante e informe preceptivo de un expediente, y de los procedimientos que confluyen en las diversas autorizaciones que pueden recaer en una "macrogranja". Por otra parte, las concesiones de agua, que sí son competencia del Organismo de cuenca, se otorgan por ésta con respecto a la normativa vigente, entre la que no es menos relevante la del Plan Hidrológico. Por todo ello se rechaza la alegación.

4.8. Escrito de observaciones Nº 008

Presentado por: D. Manuel Joaquín López Ruiz.

En nombre de la Asociación de Propietarios Huertas Bajas de Palencia (AHUBAPA).

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), como Administración Hidráulica responsable, sometió a consulta pública por un plazo de 3 meses (1 de agosto de 2025 al 1 de noviembre de 2025) el contenido de la documentación de la "Revisión y actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI 3er ciclo) en la Demarcación Hidrográfica del Duero", de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y conforme a lo previsto en los artículos 10.2 y 21.2 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

En el BOE nº183 de 31 de julio de 2025 se publicó el "Anuncio de la Dirección General del Agua con el que se inicia el proceso de consulta e información pública de la revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla y Segura y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro". Tanto el Anuncio de información pública como el contenido de la documentación fueron publicadas en la web de la CHD (http://www.chduero.es). Se puede acceder a dicha información mediante el siguiente enlace.

Concluido el proceso de consulta pública, con fecha 17 de marzo de 2026, el MAPRI 3er ciclo de la DHD fue sometido a informe por parte del Comité de Autoridades Competentes con resultado favorable por unanimidad. A fecha de redacción del presente informe, el MAPRI se encuentra en fase de aprobación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Con base en lo anterior, la CHD recibió una documentación con fecha 9 de diciembre de 2025, presentada por la Asociación de Propietarios Huertas Bajas de Palencia (AHUBAPA), con alegaciones relativas a la delimitación del riesgo de inundación del Sector 13-R. Las alegaciones emitidas, que repercuten sobre el MAPRI de la DHD, fueron las siguientes:

2. Que se estudie la revisión de la actual delimitación oficial de zonas inundables, conforme a lo establecido en los artículos 14 ter y 14 quárter del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), con el objeto de garantizar una delimitación más precisa y ajustada a la realidad hidrológica del sector S13R de Palencia;

3. El reconocimiento formal del Estudio Hidrológico de GEPRECON (AHUBAPA) como documento técnico válido para redefinir el riesgo de inundación en el sector S13R. Este estudio demostró que, utilizando los mismos datos iniciales de la CHD y metodología autorizada, es posible reducir drásticamente la inundabilidad del sector sin recurrir a medidas que constriñan el cauce mediante diques o taludes en las márgenes del río (como el Paseo de la Julia).

Analizadas las alegaciones, la CHD desestimó las peticiones de AHUBAPA. En resumen, se efectuaron las siguientes respuestas:

2. Sobre la revisión de zonas inundables: Desestimada. La CHD ya ha actualizado el estudio y sus resultados confirman que las zonas de riesgo y de inundación se mantienen sin cambios significativos respecto a ciclos anteriores;

3. Sobre el estudio alternativo aportado por AHUBAPA: Desestimado. La normativa exige que la cartografía oficial muestre la situación física actual del cauce. El estudio de la asociación no es válido porque calcula el riesgo basándose en un escenario hipotético, asumiendo obras que actualmente no existen.

La CHD recibe una nueva documentación presentada por AHUBAPA en marzo de 2026, como alegación al EpTI, en la que de nuevo muestran disconformidad ante la respuesta recibida a su escrito anterior.

En este caso las alegaciones emitidas se resumen a continuación:

Alegación 1.

Que se admitan y valoren los informes técnicos de GEPRECON (Anexo III), que acreditan mediante datos objetivos y registros recientes del sistema SAIH un riesgo de inundación muy inferior al contemplado en la planificación vigente. Esta petición se sustenta denunciando un "agravio comparativo con las actuaciones autorizadas y ejecutadas en la avenida de Argentina (barrio Arturo Eyries, Valladolid)", argumentando que allí la propia Confederación sí autorizó soluciones estructurales de protección

Respuesta:

En relación con la admisión de los informes de GEPRECON, atendiendo a la solicitud reiterada de asumir las conclusiones del estudio independiente para redefinir el riesgo del sector, ésta debe ser nuevamente denegada. El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) establece que los mapas proyecten la morfología, las infraestructuras y las condiciones hidrodinámicas que el territorio ostenta en el momento presente, en consonancia con las indicaciones de la Guía metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y el Real Decreto 903/2010. El informe aportado por la Asociación sustenta su modelización en un enfoque predictivo; esto es, analiza la dinámica del flujo asumiendo que ya se habrían materializado sobre el terreno diversas intervenciones de mejora estructural. Por consiguiente, resulta metodológicamente inviable alterar la delimitación de riesgo vigente basando los cálculos en una alteración topográfica que, carece de existencia física.

En relación con la disconformidad por presunto agravio comparativo respecto a las actuaciones y defensas estructurales autorizadas en Valladolid, cabe aclarar que el objeto del presente trámite es estricta y exclusivamente la revisión y actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI). En tanto la alegación está solicitando redefinir el riesgo en el sector objeto de estudio. De nuevo se vuelve a recordar que el MAPRI es un instrumento puramente cartográfico que se limita a delimitar el riesgo en función de la topografía y las condiciones hidráulicas vigentes. Por lo tanto, el debate sobre si se autorizan desarrollos urbanísticos o se construyen soluciones estructurales de defensa en otras ubicaciones pertenece al ámbito de la gestión urbanística y de la ejecución del Programa de Medidas, lo cual excede por completo el propósito de este procedimiento.

En consecuencia, no tiene correspondencia ni lugar en este trámite de modificación cartográfica entrar a valorar el tema del presunto trato desigual expuesto.

Alegación 2.

Que se incorpore a la delimitación del riesgo hidráulico del sector S13R la mejor evidencia técnica disponible, tal y como exigen la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación, que obligan a revisar y actualizar periódicamente los instrumentos de planificación: en el tramo urbano del cuérnago del río Carrión, dicha delimitación no ha contemplado factores determinantes que condicionan favorablemente el comportamiento hidrológico del sistema como son la operatividad del sistema SAIH, la seguridad de presas conforme a la normativa vigente —inexistente en 1962—, y la eliminación de azudes obsoletos, cuyo efecto conjunto contribuiría a una reducción significativa del caudal circulante por el cuérnago a su paso por el sector. La alegación considera que la delimitación actual no ha tenido en cuenta factores actuales favorables como "la operatividad del sistema SAIH, la seguridad de presas conforme a la normativa vigente" y "la eliminación de azudes obsoletos".

Respuesta:

La normativa vigente establece que el SAIH es una herramienta indispensable para el control de caudales, la predicción y la generación de "avisos hidrológicos" orientados a la Protección Civil y a la gestión de emergencias poblacionales. Sin embargo, la operatividad informática o sensórica del SAIH no altera la topografía del terreno ni incrementa la capacidad física de desagüe del cauce. Por tanto, aunque el SAIH gestione y avise mejor de una avenida, la extensión geométrica de la inundación para un caudal dado (que es lo que se plasma en el MAPRI) seguirá siendo la misma dictada por la morfología del territorio.

En relación con la eliminación de azudes obsoletos se reitera el criterio ya expresado (ver contestación anterior). Según esto, no es posible alterar la cartografía vigente simulando la supresión de los azudes de Mantas David y La Julia. Mientras estos obstáculos transversales sigan existiendo físicamente en el cauce, deben estar integrados en el modelo hidráulico que define la Zona de Flujo Preferente y las Zonas Inundables actuales.

Alegación 3.

Que se emita contestación expresa e individualizada a la totalidad de las alegaciones presentadas con fecha 10 de junio de 2025 (Anexo IV).

Respuesta:

Respecto a las alegaciones 1 (Existencia de inconsistencias técnicas en los mapas del SNCZI), 2 (Ausencia de evaluación técnica de medidas alternativas) y 4 (Admitir la singularidad histórica de la inundación de 1962), es imprescindible aclarar el marco de la contestación anterior: la Administración respondió exhaustivamente a las solicitudes formales que la propia Asociación recogió explícitamente en el apartado final de su escrito de alegaciones de diciembre de 2025. El tema específico de la existencia de inconsistencias técnicas en los mapas oficiales de riesgo no aparecía formulado en ninguna de dichas solicitudes formales.

No obstante, con el ánimo de ofrecer la máxima transparencia técnica, se aprovecha el presente trámite para dar cumplida respuesta a esta cuestión como complemento de la respuesta que emitió la CHD en relación con la solicitud 2 de diciembre de 2025.

AHUBAPA argumenta que existe una "debilidad grave" al afirmar que el modelo ha sido actualizado sin demostrar su corrección mediante calibración o análisis de sensibilidad, concluyendo que "actualizar un modelo no equivale a demostrar su corrección". Frente a esta acusación de falta de rigor, cabe señalar que los trabajos de revisión del 3er ciclo del MAPRI se apoyan en la aplicación estricta de la "Guía metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables". Para la modelización se empleó topografía LiDAR de alta resolución y los modelos hidráulicos se sometieron a exhaustivos procesos de ajuste, tomando como base las evidencias geomorfológicas disponibles para lograr el mejor encaje general.

La Asociación esgrime como prueba de la supuesta inconsistencia que el cauce soportó con total seguridad caudales recientes durante enero y febrero de 2026 (con puntas entre 130 y 145 m^3/s), sin llegar a inundarse. Esta premisa parte de un error conceptual: confundir una crecida ordinaria con un evento extremo. La cartografía de peligrosidad del SNCZI simula escenarios estadísticos de eventos extraordinarios, como son las avenidas de media y baja probabilidad (100 y 500 años de periodo de retorno). El hecho de que el río Carrión no se haya desbordado ante una crecida reciente de bajo periodo de retorno no demuestra ninguna inconsistencia en los mapas; simplemente confirma que el cauce tiene capacidad para caudales ordinarios, pero no invalida en absoluto la vulnerabilidad del sector frente a las grandes avenidas modelizadas. Por último, AHUBAPA sugiere que se demuestre la corrección del modelo oficial contrastándolo con su informe independiente (GEPRECON). La Administración debe reiterar que no es posible realizar una validación cruzada entre dos modelos que parten de premisas geométricas opuestas. El SNCZI exige que las simulaciones hidráulicas para delimitar el riesgo se realicen sobre la base del terreno en condiciones actuales (MDT actual), manteniendo infraestructuras como azudes y puentes tal y como existen hoy.

Por el contrario, el estudio de GEPRECON modeliza las avenidas de 100 y 500 años asumiendo directamente la ejecución de medidas correctoras, concretamente la eliminación de los azudes de La Julia y Mantas David, y la ampliación del puente. No existe inconsistencia técnica en la cartografía oficial; lo que existe es una incompatibilidad metodológica en el estudio externo al evaluar una topografía alterada que físicamente no existe en el territorio.

Respecto a la alegación 3 (Negación del derecho a la participación técnica efectiva, al no haberse permitido la defensa del estudio presentado ni debatido sus resultados, lo cual contradice los principios de transparencia y cooperación activa del artículo 35 del texto refundido de la Ley de Aguas TRLA, citado en la memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Duero Revisión de cuarto ciclo (2028-2033).

En su escrito de marzo, la Asociación califica la resolución previa de la CHD como "defensiva, incompleta y formalista", denunciando que se rechazó su estudio sin aportar un contrainforme técnico, que la Administración confunde cartografía con planificación y que se ha negado una participación técnica efectiva al no convocar mesas de debate. Frente a estas apreciaciones, se exponen las siguientes aclaraciones:

La desestimación del informe de GEPRECON no se fundamenta en un rechazo caprichoso o en la falta de capacidad para debatir sus parámetros, sino en un impedimento de carácter técnico. No resulta procedente ni metodológicamente útil elaborar un contrainforme para evaluar la exactitud hidráulica de un modelo cuyo postulado principal (evaluar el cauce con obras futuras) contraviene la naturaleza misma de la cartografía oficial.

Sobre la diferencia entre cartografía y planificación futura: AHUBAPA sostiene que los planes no deben limitarse a "fotografiar el presente", sino evaluar alternativas y mejoras. Es crucial distinguir los instrumentos: el trámite actual corresponde específicamente a la revisión de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI). El MAPRI es, por definición, una herramienta de diagnóstico estricto que debe obligatoriamente plasmar la realidad física actual para delimitar el riesgo existente. La proposición y evaluación de escenarios futuros y medidas mitigadoras corresponde a otra fase de la planificación, no a la elaboración de la base cartográfica.

Respecto a la reclamación de que la presentación de alegaciones no equivale a un verdadero debate técnico, se debe recordar que la Administración ha garantizado la participación ajustándose escrupulosamente a los procedimientos y plazos dictados por la Ley 27/2006 y el Real Decreto 903/2010.

La normativa vigente establece el trámite de consulta e información pública como el cauce legal para integrar aportaciones ciudadanas, sin exigir la constitución de foros o mesas técnicas individualizadas para la validación de los mapas a escala de cuenca.

Alegación 4.

Que se aplique al sector S13R el mismo criterio técnico empleado en su informe favorable sobre el PERI 5 —reconocido como suficiente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León—, tanto más cuanto que la propia Administración ha venido autorizando edificaciones residenciales durante los últimos cincuenta años en la cabecera del propio sector, con una exposición hidráulica notablemente superior a la de los ámbitos ahora restringidos, lo que confirma que el riesgo hidráulico es técnicamente gestionable (no prohibitivo), por lo que se solicita autorización para el desarrollo residencial ordenado del sector S13R en condiciones análogas al PERI 5.

Respuesta:

Con respecto a esta sugerencia, se informa que con fecha 17 de noviembre de 2017, este Organismo

de cuenca emitió informe sobre la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de

Palencia, relativa a la ficha del PERI 5. Las conclusiones expuestas en el informe (expediente MNU-21755-17-PA) con respecto a los aspectos hidrológicos e hidráulicos, fueron que, en base a los estudios del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, el ámbito de estudio PERI 5 se encuentra fuera de la Zona de Flujo Preferente del rio Carrión, pero en su totalidad dentro de la zona inundable.

En consecuencia, y según la normativa vigente, cualquier actuación dentro de estos terrenos debería cumplir con las limitaciones a los usos del suelo establecido en el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Por el contrario, el sector 13-R Huertas Bajas de Palencia, según puede comprobarse en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (http://sig.mapama.es/snczi/), se encuentra parcialmente afectado por la Zona de Flujo Preferente del río Carrión y totalmente dentro de la zona inundable.

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, y a diferencia del PERI 5, el sector 13-R se encuentra

también afectado por la zona de flujo preferente y le es de aplicación los términos previstos en el artículo 9 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico: *"En los suelos que se encuentren en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo rural del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, no se permitirá la instalación de nuevas: (…)*

b) Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación

en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso que incrementen la vulnerabilidad *de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas, (…)"*

Alegación 5.

Que se evalúen las medidas alternativas propuestas para reducir muy significativamente el caudal circulante por el cuérnago del río Carrión a su paso por el sector (no menos de un 25%) que son: la supresión de los azudes obsoletos —mantas David y La Julia—, que contribuiría directamente a la recuperación de ecosistemas fluviales y al cumplimiento de los objetivos europeos en materia de aguas; la gestión de la vegetación y retirada de árboles caídos en el cauce del río, cuya acumulación incrementa artificialmente la resistencia al flujo.

Respuesta:

En el Estudio Hidráulico elaborado por encargo de AHUBAPA se proponen únicamente las siguientes medidas correctoras:

- Eliminación de los azudes de la antigua fábrica de mantas David Rodríguez ( ), y de La Julia.
- Ampliación de la capacidad hidráulica del Puente de Sandoval.
- Medidas correctoras de protección de márgenes.

La normativa exige que la cartografía oficial muestre la situación física actual del cauce. El estudio de la Asociación no es válido porque evalúa el riesgo basándose en un escenario hipotético, asumiendo obras que actualmente no existen.

Respecto a las medidas correctoras propuestas, este Organismo considera que tanto la ampliación de la capacidad hidráulica del Puente de Sandoval como la eliminación de los dos azudes no suponen modificaciones sustanciales de las láminas de aguas en eventos extremos de avenida como los estudiados (100 y 500 años de periodo de retorno), por lo que, en sí mismas, no evitan la inundabilidad del sector.

Por otro lado, se informa que cualquier tipo medida estructural debe perseguir el objetivo de reducir el riesgo disminuyendo la exposición de la zona y la vulnerabilidad para una probabilidad de no excedencia. En este caso, la ejecución de la medida estructural tendría como finalidad el cambio del uso del suelo (rústico a urbano) para su ocupación por viviendas y actividades económicas con el consecuente incremento de la población, bienes y servicios expuestos, lo que contraviene el objetivo del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones que es la reducción de las consecuencias adversas de las inundaciones, evitando la ubicación de actividades vulnerables en zonas donde existen evidencias de resultar inundadas.

4.9. Escrito de observaciones Nº 009

Presentado por: Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR).

En nombre propio.

Alegación 1.

Respecto a la Ficha número 1 (contaminación difusa) se solicita que se aplique a los demás sectores el mismo baremo que se nos aplica a la acuicultura (límites de amonio en las aguas de salida del proceso muy bajos), máxime cuando la carga que se imputa a la acuicultura proviene en buena medida de la aportada por otros concesionarios. Y no solo concesionarios en sentido estricto, pues es conocida la proliferación de captaciones irregulares y clandestinas en nuestras redes fluviales.

Respuesta:

El alegante hace una observación que no podemos compartir, *es conocida la proliferación de captaciones irregulares y clandestinas en nuestras redes fluviales,* en especial cuando no aporta información alguna. Los usos irregulares del agua en las redes fluviales conocidas son objeto de las correspondientes aperturas de expedientes de infracción en cuya instrucción se respetan los requisitos de notificación y defensa al supuesto infractor, finalizando la instrucción en la correspondiente resolución. Por tanto, toda captación de agua sin aval conocida tiene su correspondiente expediente de infracción. Invitamos al alegante que ponga en conocimiento de este organismo todo uso irregular del agua que conozca.

La contaminación de los usos de acuicultura se trata como contaminación puntual en el análisis de presiones, de hecho, deben disponer de autorización de vertido de cada instalación, siendo tratadas de manera similar al resto de vertidos de carácter puntual como a otros usos industriales o urbanos. El concepto de presión por contaminación difusa es aquella contaminación de fuente no conocida específicamente, pero cuya acumulación supone un problema para las masas de agua, superficial o subterránea, tal y como se indica en el epígrafe 2 de la Ficha DU-01. Por ello es imposible aplicar un baremo similar a dos fuentes de contaminación al tratarse de conceptos distintos. La contaminación difusa, de todos los usos, se aborda ya en la planificación hidrológica vigente de manera específica, en especial en las zonas donde las presiones derivadas de ella son significativas, por ejemplo, en la aplicación de los artículos 20, 28 o 35 de la Normativa, entre otros, algo que ya se pone de manifiesto en la Ficha DU-01 (epígrafe 5.1)

Alegación 2.

Respecto al tema importante DU-02 (explotación sostenible de las aguas subterráneas) se indica que es imperativo insistir en el control de la contaminación difusa de una forma efectiva, no sólo con propuestas y estudios, sino con medidas reales como las que se aplican a otros usuarios distintos a los de la agricultura y la ganadería

Respuesta:

La Ficha DU-02 se centra en la explotación sostenible de las aguas subterráneas que tiene vinculación con la calidad pero que se trata de un tema importante distinto. Puede haber una cierta relación entre la fuerte explotación de las aguas subterráneas y el empeoramiento de la calidad del agua subterránea, algo que se indica en la propia ficha. Por otra parte, como se indicaba en la respuesta a la alegación anterior, en el presente ciclo de planificación se han desarrollado estudios específicos para identificar el origen de la contaminación, algo que no es irrelevante (como parece deducirse de la alegación presentada) si se quiere acotar el *driver* del problema y establecer medidas centradas en esas fuerzas motrices; además se ha aplicado diversa normativa para tratar de reducir el problema. El Plan Hidrológico vigente pretendía ir más allá proponiendo medidas compensatorias para quienes voluntariamente quisieran reducir los excedentes de sustancias contaminantes en el marco del sistema de pagos directos de la PAC, algo que no se consolidó como medidas al no haber sido asumidas por las administraciones competentes en la materia.

Alegación 3.

Respecto al tema importante DU-03 (contaminación urbana e industrial) señalan que la calidad de las aguas de los ríos son muy importantes para su actividad económica que trabaja con organismos vivos muy sensibles a la calidad del agua. Por ello insisten en que se adopten cuanto antes las medidas propuestas de aplicar medidas de depuración en vertidos de más de 2000 he en zonas no sensibles y de más de 250 he en zonas sensibles según la Directiva 91/271/CEE. Por todo ello se propone que se adopte la alternativa 3, una opción que podría resultar utópica en la práctica. En cualquier caso, medidas robustas de control de emisiones difusas beneficia no solo al sector piscicultor sino al conjunto ecosistémico del cauce natural, como todo aquello que mejore la calidad de las aguas de captación.

Respuesta:

Como se indica en la propia Ficha, la alternativa 3 es la que se propone para su implantación, en coherencia con la alegación. No obstante debe señalarse que supone un gran esfuerzo en inversión de todos los agentes implicados, fundamentalmente administraciones locales, para conseguir el tratamiento secundario de vertidos de aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes equivalentes, la reducción de la contaminación por desbordamientos de las aguas de tormenta y la escorrentía urbana, los tratamientos terciarios y cuaternarios para la reducción del vertido de microcontaminantes, además de la finalización de todas las medidas de depuración del plan hidrológico del tercer ciclo, ligadas a la Directiva 91/271. La valoración económica de estas medidas que se hace en la Ficha alcanza más de 650 millones de euros y un coste anual de operación y mantenimiento superior a 32 millones de euros. Aunque esta alternativa es la de cumplimiento de la nueva Directiva debe ponerse de manifiesto que alcanzar esos objetivos en los plazos previstos supone un cambio de paradigma en las inversiones de depuración de la que no es ajeno la revisión de modo en que se recuperan los costes, con mayor carga impositiva para los usuarios que, para el uso urbano somos todos los ciudadanos.

Alegación 4.

En el tema importante DU-04 se valora positivamente la exigencia de mejorar la gestión de caudales de desembalse, en condiciones de cantidad y calidad adecuadas (oxigenación, temperatura, etc.) que

no pongan en riesgo los objetivos ambientales de la masa de agua, y con ello los usos situados inmediatamente aguas abajo de la presa que los libera. Para apuntar cómo aborda el sector alegante la problemática de la compartimentación de los cauces por obstáculos transversales, se indica que los azudes de Piszolla en el río Tormes no tienen escalas funcionales; las instalaciones de Eurotrucha en Castrillo del Condado cuentan con una escala funcional recién remodelada y las de Fuentidueña no tienen azud al tomar de un manantial.

Respuesta:

Se agradece la información aportada relativa a instalaciones de algunos de los miembros de la Asociación alegante.

La información disponible en el Organismo de cuenca indica que el azud 1008770, vinculado a la piscifactoría de Fuentidueña, sobre el Arroyo del Prado, es parcialmente franqueable pese a que dispone de escala de peces de estanques sucesivos, por lo que hay divergencia con la información aportada en la alegación; el azud 1007953 de la piscifactoría de Castrillo del Condado, sobre el río Porma, es franqueable coincidiendo con la alegación; el azud 1005225 de la piscifactoría de Piszolla, sobre el río Tormes, es parcialmente franqueable pese a disponer de escala de peces de estanques sucesivos. Aunque hay más piscifactorías en la cuenca, quizá no integradas en la Asociación alegante, convendría que se revisaran estos datos para poder reportar las correcciones en aquellos que no estén conformes o se encuentren anticuados. La información de cada una de estas infraestructuras se puede consultar en la web del Organismo de cuenca en los siguientes URL:

Código azud	Información disponible (URL)
1008770	https://mirame.chduero.es/chduero/public/infrastructures/dam/search/general/1008770
1007953	https://mirame.chduero.es/chduero/public/infrastructures/dam/search/general/1007953
1005225	https://mirame.chduero.es/chduero/public/infrastructures/dam/search/general/1005225

Alegación 5.

Sobre el tema importante de sostenibilidad del regadío, hace algunas observaciones sobre el uso del regadío en la cuenca: construir nuevos regadíos en escenarios de disminución del recurso puede afectar significativamente a las instalaciones de acuicultura con mayor antigüedad (por la prevalencia de uso de la agricultura); además pone en riesgo el cumplimiento de caudales ecológicos; el regadío es el uso menos controlado. A partir de ellas señala que parece obligado rechazar la concesión de nuevas zonas regables, uso consuntivo y fuertemente emisor, por tanto, al menos mientras las infraestructuras existentes no sean modernizadas y resulten mínimamente eficientes para poder acoger mayores presiones de demanda sobre la cuenca.

Respuesta:

Compartimos las observaciones relativas a la puesta en marcha de nuevas zonas de regadío en escenarios de disminución de recursos ya que, como se dice en la alegación, las nuevas demandas pueden afectar significativamente a las instalaciones de acuicultura con mayor antigüedad e incluso a los usos actuales del mismo orden de prioridad. De cualquier modo, la promoción de nuevas zonas regables debe ser evaluada teniendo en cuenta las restricciones previas (como es el caso del cumplimiento de caudales ecológicos) y la afección a los usos actuales, de manera que los nuevos usos

no perjudiquen en términos de garantía a los existentes, aunque estos se encuentren en un orden de prelación inferior ya que se trata de usos consolidados. Esta evaluación se hace en términos de asegurar la garantía de los usos actuales que disponen de aval administrativo.

De cualquier modo, en la Ficha DU-06 se plantean varias alternativas, seleccionando aquellas que aseguran la no afección a usos actuales y respetando las declaraciones existentes de zonas regables a promover. Así en el epígrafe 1 se indica que las ampliaciones de regadío previstas en los diversos planes sectoriales y a considerar en este tema importante suponen 20.000 ha en horizonte 2033 y 8.000 más en horizonte 2039, y se centran en las zonas de MI Río Porma 2ª Fase (sector XII Valderas-Gordoncillo), Payuelos (sectores VII, XIII y XIV) y la Armuña (Fase II, sectores A a E, que queda aún muy lejos de completar la superficie inicialmente planificada de 40.000 ha).

No podemos compartir la observación de que *el regadío es el uso menos controlado*, al menos a tenor de los datos que maneja esta Confederación, ya que es el uso que mayor número de sistemas de control de volúmenes dispone, es el uso con mayor volumen demandado y, por tanto, con mayor volumen controlado, teniendo en cuenta que prácticamente la mitad del volumen demandado total en la cuenca por el regadío es suministrado por la propia Confederación a las zonas regables del Estado.

Alegación 6.

Hace algunas observaciones al tema importante de Ordenación y control del Dominio Público Hidráulico: delimitación de las zonas inundables con afección a las instalaciones de acuicultura, limitaciones a los cultivos forestales, asignación de volúmenes de agua subterránea

Respuesta:

No existe ningún tema importante que se denomine Ordenación y control del Dominio Público Hidráulico en el presente EpTI por lo que no acertamos a entender a qué tema importante se hacen observaciones.

Alegación 7.

Se hacen una serie de observaciones sobre los elementos que conllevan la inequidad que sufre el sector acuicultor continental: prioridad sobre el de los usos agrarios e hidroeléctricos, a su juicio, causantes de las principales presiones sobre las masas de agua. Además, siendo la acuicultura un uso agropecuario debería incluirse en el uso agrario, siendo además un uso no consuntivo de agua. Se ponen algunos ejemplos de cuencas donde esta actividad tiene un orden de prelación superior a la que tiene en el Duero. Existe margen más que suficiente para auspiciar el desarrollo sostenible del sector y, entre otras, propone la autorización de nuevas granjas piscícolas en la parte superior de los canales/tuberías de las centrales hidroeléctricas, ya que éstas no tienen requerimientos de calidad y sus caudales son muy superiores. Al tratarse de usos no consuntivos, serían completamente compatibles.

Respuesta:

La relevancia de la acuicultura para las actividades socioeconómicas en el ámbito de la demarcación hidrográfica es notablemente inferior a la que supone la agricultura de regadío, tanto en términos de valor actual bruto, como actividad económica que genera en actividades conexas, como en empleo y

fijación de la población al medio rural. Ello justifica la mayor relevancia en el orden de prelación de una actividad sobre otra. Por otra parte, no hay una prohibición específica de instalación de nuevas explotaciones acuícolas en general, más allá de las limitaciones que se identifiquen en la instrucción de cada expediente. Tampoco hay limitación genérica a la instalación de piscifactorías en canales de centrales hidroeléctricas, siempre que respeten los derechos existentes; pero una cosa es que no haya impedimento, con el respeto a los derechos de terceros, y otra que se deba promover desde la Administración hidráulica esas soluciones. Por otra parte, dado el carácter de las piscifactorías, no alcanzamos a ver la incompatibilidad que pone de relieve la alegación entre ambos usos, el regadío y la acuicultura. Un vistazo general a la demarcación hidrográfica nos permite observar que, por lo general, las explotaciones acuícolas existentes se encuentran aguas arriba de las grandes zonas de consumo de regadío, lo que nos lleva a concluir que esa crítica de que el regadío de la cuenca perjudica a las piscifactorías por la contaminación difusa y la extracción de caudales, se aleja de la realidad al menos de la realidad general.

No obstante, en fase de redacción del Plan Hidrológico se valorará el cambio de ubicación en el orden de prelación de la acuicultura en función de los parámetros citados.

Alegación 8.

Respecto a la coordinación interadministrativa, las directrices a nivel europeo, nacional e incluso autonómico son las de promover la participación y favorecer las actividades productivas e inversiones, pero a la hora de la verdad, los organismos intermedios de gestión (CCHH, ayuntamientos, gobiernos provinciales…), encargados de autorizar estas actividades, no comparten dicho criterio y la tramitación de los expedientes es compleja y larga, consiguiendo el efecto contrario al deseado. Ante estas dificultades que van en contra del principio de gobernanza, muchas empresas desisten de realizar inversiones, a menos que sean estrictamente necesarias. La Asociación se pone a disposición de los organismos de cuenca para formar parte de la 'participación activa' en la gestión del agua, y así que aparezca otra voz distinta a los grandes consumidores (urbanos, industriales y agrarios) y a las hidroeléctricas.

Todo ello para reelaborar la mentalidad de estos gestores se podrán hacer efectivos valores de altísimo interés socioeconómico como la priorización del principio participativo, el pacto verde, o la promoción de las inversiones en el ámbito rural, con su efecto benéfico sobre la cohesión social e interterritorial.

Respuesta:

Se agradece la disposición a participar activamente en el diseño del Plan Hidrológico y, en la medida de las posibilidades, se contará con el sector para ello. Además, en la última renovación del Consejo del Agua de la demarcación, asociados de la Asociación alegante tienen voz y voto en algunas juntas de explotación y en el Consejo del Agua de la demarcación, en proporción a su peso en las juntas de explotación.

Alegación 9.

Respecto al tema importante de la gestión del riesgo de inundación, señalan que todas las instalaciones de acuicultura de la Asociación están afectadas parcial o totalmente por la Zona de Flujo Preferente, con las limitaciones que eso supone en cuanto a usos. Teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, las instalaciones de acuicultura se ubican en zonas rurales, alejadas de núcleos de población,

industrias… se solicita una mayor permisividad en los casos demostrables de que aun estando en zonas inundables, la ejecución de los proyectos u obras necesarios para la producción no supone un aumento del riesgo de inundación a terceros. Y justifica esta propuesta en algunos elementos que, a su juicio, avalan esta mayor flexibilidad en las autorizaciones en estas zonas. Además, recalca que la mayoría de los problemas proceden de la falta de limpieza de los cauces.

Respuesta:

La normativa que vincula a los usos permitidos y prohibidos en cauce, zona de policía, en zona de flujo preferente y zona inundable viene muy detallada en los artículos 9 a 9 quáter, y 14 a 14 quáter del RDPH, no pudiendo la planificación hidrológica contravenir esa norma. Los citados artículos contemplan determinadas excepciones, que son limitadas y siempre bajo una sólida justificación, que pueden servir para atender la preocupación y sugerencia que plantea la alegación.

Independientemente de que el concepto "limpieza de los cauces" no es unívoco y puede llevar a mal entendidos, el organismo de cuenca incluye en sus actuaciones ordinarias actuaciones anuales de mejora de las condiciones hidrológicas de los cauces lo que, siendo una importante partida presupuestaria, no alcanza a los más de 80.000 km de cauces que hay en la cuenca. Pero también los particulares que se sientan perjudicados por el estado de los cauces pueden solicitar actuaciones similares que pueden ser autorizadas bajo determinadas condiciones, lo que permite ampliar el ámbito de mejora con esta colaboración público-privada.

Alegación 10.

Se aporta una relación de 5 instalaciones piscícolas de dos personas jurídicas señalando los problemas con que se encuentran para el desarrollo de su actividad.

Respuesta:

Aunque en la alegación se indica que los problemas con los que se encuentran las cinco instalaciones para su actividad están relacionados con la planificación hidrológica, la realidad es que todas ellas están más bien vinculadas a la gestión, tanto la derivada de los condicionados de los títulos concesionales como otros relacionados con la gestión ordinaria de las infraestructuras.

Los problemas citados por la piscifactoría ubicada en Fuentidueña (Segovia) tienen que ver con problemas de disponibilidad de agua en verano, que el alegante achaca al aumento de población y, en consecuencia, la caída de las aportaciones del manantial que suministra o los sistemas de control de la contaminación de la instalación. Achaca el titular este problema a que no tiene conexión con el río Duratón. Este problema no puede abordarlo el EpTI cuyo objetivo es distinto, ya que es el título concesional o la autorización de vertido de la piscifactoría quienes establecen las condiciones para realizar la explotación y el vertido.

Los problemas citados por la piscifactoría Leoneses (León) tienen que ver con cuestiones concesionales vinculadas al titular de la misma y las dificultades de segregación de usos para por la modificación concesional y el acuerdo interno del titular, lo que puede conllevar cambios en las infraestructuras que hacen posible los dos usos. Es decir, a priori no se ve ninguna vinculación con la planificación hidrológica, pues este problema nada tiene que ver con el orden de prioridad de usos que se establece

en la demarcación hidrográfica, ni con asignaciones y reservas, ni con cuestiones que sí corresponde abordar al EpTI.

Los problemas citados por las piscifactorías ubicadas en Alba de Tormes, Encinas de Arriba y Sieteiglesias de Tormes (Salamanca) tienen que ver con la gestión del embalse de Santa Teresa, en especial en los meses en que finaliza la campaña de riegos, y en cuestiones relacionadas con la autorización de vertido. El plan de llenado y vaciado de los embalses se establece por la Comisión de Desembalse a partir de las decisiones que se toman en las Juntas de Explotación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 45 del Reglamento de la Administración Pública del Agua. Las Juntas de explotación (en la del Tormes está representado el titular de esta piscifactoría) tienen por finalidad coordinar la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel conjunto de ríos cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones. Deben por tanto proponer planes de explotación teniendo en cuenta los usos prioritarios de las infraestructuras y, como dice el artículo 39 del RAPA, *respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones*. En el caso de que se considere que este último punto no se atiende debidamente, es la Presidencia del Organismo quien puede atender la reclamación en el ámbito de las decisiones de la Comisión de Desembalse. Igualmente, las cuestiones relativas a la autorización de vertido deben sustanciarse también en el ámbito de la gestión. Pero estos problemas apuntados no son cuestiones que deba abordar en el EpTI.

4.10. Escrito de observaciones Nº 010 y similares

Se muestra a continuación los agentes que han presentado escritos de POS con el mismo contenido, en fechas distintas y con número de registro distinto, por lo que son respondidas de forma conjunta para todos ellos.

Nº POS	Presentado por:	En nombre:
N010	D. Ramón Delpuy García	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U.
N011	D. Ramón Delpuy García	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U.

Alegación 1.

Existen diversos proyectos de centrales hidroeléctricas reversibles de promoción privada que constituyen iniciativas esenciales para avanzar en la transición energética. Por ello, consideramos que no resulta adecuado plantear en el nuevo Plan Hidrológico una limitación que restrinja las centrales de almacenamiento hidroeléctrico únicamente a las identificadas en el PNAHE, excluyendo con ello la posibilidad de desarrollo de otros proyectos.

Respuesta:

Tanto el PNIEC (que contempla disponer de una capacidad total de almacenamiento de unos 20 GW en el año 2030 y de unos 30 GW de almacenamiento en 2050) como el PNAHE (que identifica en toda España un total de 37 centrales hidroeléctricas reversibles viables sobre embalses de titularidad estatal) son documentos poco concretos y adolecen, a nuestro juicio, de una regionalización de sus objetivos para cada tecnología. La falta de esa discretización genera confusión y dudas a las planificaciones conexas. No deja de ser llamativo que en el PNAHE sólo se aborden los proyectos en los embalses de titularidad estatal cuando podía haber aspirado a una delimitación mayor, también para embalses de concesionario o nuevos proyectos. Esta indefinición de objetivos específicos de los planes estratégicos de energía nos lleva a ser cautelosos en la promoción de estas tecnologías en la planificación hidrológica, dadas las dificultades que ya se encuentran en materia de evaluación de impacto y afección a otros usos de los nuevos proyectos que se pretendan instalar. En todo caso entendemos que, para cubrir esta laguna, debería ser la administración energética quien, , manifieste para cada uno de los proyectos que se presente en infraestructuras no estatales o nuevas infraestructuras, con carácter previo al inicio de la tramitación concesional, si es relevante para el logro de los objetivos de la transición energética, y en ese sentido se matiza el contenido de la alternativa 2.

Alegación 2.

Respecto a las plantas fotovoltaicas flotante, en el caso de embalses con uso hidroeléctrico de titularidad no estatal, procede destacar la importancia del informe del titular de la concesión, dado que la instalación de estas infraestructuras en el mismo puede suponer un riesgo para la seguridad de la presa y sus elementos, así como para Protección Civil aguas abajo de la presa. Por ello se propone que el informe del concesionario sea vinculante para la administración otorgante de la autorización de estas plantas, de manera que si fuera desfavorable, se deniegue la solicitud. Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, en caso de otorgarse la concesión, ésta debe recoger en su condicionado que la

instalación fotovoltaica quedará supeditada a los usos prexistentes del embalse, no pudiendo interferir en su régimen de explotación.

Respuesta:

Sorprende esta alegación en contraste con la anterior ya que el fomento de las plantas fotovoltaicas flotantes busca también el logro de los objetivos de la transición energética, más allá de los riesgos objetivos que identifica el alegante. La autorización de este tipo de instalaciones supone la instrucción de un expediente específico en el que, para el caso de que se propongan en embalses de titularidad concesional, es preceptivo, pero no vinculante, el informe del titular de la infraestructura. Es en ese informe y a la vista del proyecto presentado donde se deben sustanciar las cautelas necesarias o la justificación del dictamen desfavorable, en su caso. Estando de acuerdo con el alegante sobre los riesgos que estas estructuras pueden tener para la explotación de los embalses en determinadas situaciones y en la relevancia del informe de su titular, no podemos dar un carácter vinculante a los informes del titular de la infraestructura que deben aportarse en la instrucción del expediente de autorización.

Alegación 3.

Respecto al Convenio de Albufeira se reitera lo manifestado a lo largo del proceso de revisión de los sucesivos planes especiales de sequía: que debe evitarse que el uso de criterios diferentes en España y Portugal para caracterizar las sequías en el ámbito de la aplicación del Convenio de Albufeira y en el Plan Especial de Sequías en la cuenca del Duero, dé lugar a situaciones en las que, faltando agua en el territorio español, persista la obligación de suministrar unos volúmenes mínimos a Portugal.

Respuesta:

Como se indicó en la respuesta a la alegante en la tramitación del Plan Especial de Sequía, fueron los acontecimientos vividos en la cuenca del Duero en 2022, no conocidos antes al menos en territorio portugués, los que dieron relevancia al problema que plantea el escrito de observaciones. España y Portugal, en la Cumbre hispano lusa celebrada en Viana de Castelo en noviembre de 2022 (en plena crisis por sequía) realizaron una declaración conjunta en la que tres puntos se refieren a la sequía y escasez de las cuencas compartidas:

30. En lo que se ha considerado el año hidrológico más seco de las últimas décadas, Portugal y España (…), ambos países trabajarán conjuntamente para armonizar los indicadores de sequía y escasez que usan ambos estados y, en particular, los que caracterizan las situaciones de excepción recogidas en el Convenio de Albufeira.

32. Ambos Estados acuerdan trabajar, conjunta y coordinadamente, en el estudio de las sequías y de los problemas de escasez en el contexto de las alteraciones climáticas, buscando liderar estos temas en el ámbito de la Unión Europea.

Este objetivo también aparece en la Declaración Conjunta de la Cumbre hispano-portuguesa de Faro, de 23 de octubre de 2024. Así en su punto 15 se indica:

15. Siendo conscientes de la urgencia de reforzar la respuesta mundial ante la emergencia climática a través de medidas de mitigación y adaptación ambiciosas, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, ambos países han decidido seguir reforzando los mecanismos de diálogo bilateral para impulsar estrategias conjuntas para luchar contra la desertificación, a través de un plan de acción hispano-portugués, y la armonización de los sistemas indicadores de sequía y escasez en ambos Estados, con el objetivo de alcanzar la neutralidad en las degradación de las tierras de aquí a 2030. Se

comprometen a seguir colaborando en la gestión integrada del agua y a definir una estrategia conjunta para proteger las áreas rurales de fenómenos como la sequía y la aparición de nuevas afecciones y plagas, en el plano bilateral a través del Memorando de entendimiento para la cooperación en el sector agrícola y el desarrollo rural, y en el ámbito multilateral mediante iniciativas como la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía, de la que ambos países forman parte.

Y, aunque el contexto del momento era justo el contrario al de 2022 con graves inundaciones, en la cumbre celebrada en La Rábida el 6 de marzo de 2026 se reitera el compromiso de ambos países de *impulsar conjuntamente la elaboración de planes hidrológicos en las cuencas compartidas, coordinar los sistemas de evaluación y respuesta ante situaciones de sequía y escasez, colaborar frente a episodios de inundaciones y reforzar la protección del estado y la calidad de las aguas* (punto 54 de la declaración conjunta).

En España la DGA lleva tiempo trabajando, en colaboración con las cuatro demarcaciones hidrográficas compartidas con Portugal, en el análisis de coherencia de indicadores de sequía e indicadores de excepción del Convenio. De cualquier modo, en tanto esos trabajos concluyan y, finalmente, sus resultados puedan llevarse a la revisión del Convenio por ambos países, las condiciones de contorno son las vigentes.

En la redacción del PES se ha analizado la coherencia de los indicadores de sequía y los de excepción, sabiendo que son escasamente comparables tanto en tipología de parámetros usados (caudales circulantes y pluviómetros frente a solo pluviómetros) como espacialmente (trece UTS frente a un indicador de excepción para toda la cuenca). Pero en tanto el Convenio no sea revisado, debemos trabajar con ambos escenarios en los ámbitos que cada uno se aplica. La experiencia acumulada es que, salvo la situación generada en el año hidrológico 2021/2022, la respuesta de ambos indicadores a la situación de sequía no ha sido divergente. No debe olvidarse que los problemas de 2022 de cumplimiento del Convenio tienen parte de su origen en la situación de sequía de la parte española de la cuenca agravada con la explotación atípica de los recursos hídricos en algunos embalses de uso hidroeléctrico de la cuenca en verano de 2021.

4.11. Escrito de observaciones Nº 012

Presentado por: Jesús Castro Sánchez.

En nombre de la Asociación Consejo Cuenca del río Torío.

Alegación 1.

Se propone añadir algunas medidas a las que ya figuran en el tema importante DU-01 sobre contaminación difusa de tipo estructural, preventivo y de evaluación:

a) Medidas estructurales: promoción de la ganadería extensiva sostenible mediante apoyo específico y asesoramiento técnico; fomento de la integración agroganadera para favorecer el cierre de ciclos de nutrientes; impulso de prácticas de agricultura regenerativa orientadas a la mejora de la salud del suelo.

b) Medidas preventivas: implantación de planes de gestión de pastoreo que ajusten la carga ganadera a la capacidad productiva del terreno; aumentar las zonas de exclusión o limitación del acceso del ganado en riberas, humedales y captaciones de abastecimiento; promover el uso de cubiertas vegetales y rotaciones de cultivos en las zonas vulnerables declaradas.

c) Medidas de seguimiento y evaluación: desarrollar indicadores específicos para evaluar la eficacia de las prácticas agroganaderas sostenibles en la reducción de presiones difusa e integrar estos indicadores en los programas de control y seguimiento del estado de las masas de agua.

Respuesta:

La propuesta que hace el alegante para reducir la contaminación difusa es correcta y las sugerencias de incorporar medidas estructurales y preventivas en aquellos puntos de la cuenca donde las presiones por contaminación difusa proceden de la explotación ganadera pueden ser adecuadas. Dicho esto, también debe decirse que las medidas estructurales que se plantean como son la promoción de la ganadería extensiva sostenible mediante apoyo específico y asesoramiento técnico, el fomento de la integración agroganadera o el impulso de prácticas de agricultura regenerativa orientadas a la mejora de la salud del suelo, caen en el ámbito competencial de otras administraciones distintas a la del agua. Las políticas de fomento de uno u otro tipo de explotaciones ganaderas deben realizarse por los organismos competentes contando con los instrumentos adecuados que podrían ser los derivados de la política agraria comunitaria o la de los fondos para el desarrollo rural o agroalimentario. Sin duda ese enfoque de la política ganadera puede tener impacto positivo en el ámbito de los objetivos de la DMA pero quizá puede tener también otro tipo de impacto en el sistema agroalimentario, algo que el órgano competente debe ponderar y valorar.

Del mismo modo, algunas de las medidas preventivas que se proponen, como por ejemplo el ajuste de carga ganadera, en parte ya se vienen aplicando, por ejemplo por el órgano ambiental de la comunidad autónoma de Castilla y León para valorar las autorizaciones a nuevas explotaciones intensivas; otras, como la de prohibir la valorización de residuos contaminantes en zonas de captación de agua para consumo humano, por parte del organismo de cuenca en sus concesiones y autorizaciones de uso del DPH.

No podemos compartir las medidas de evaluación que se proponen por lo señalado más arriba respecto al ámbito competencial. En este ámbito los organismos de cuenca deben establecer y monitorizar los programas de seguimiento de las masas de agua y de sus zonas protegidas pero no puede atender al seguimiento de medidas de otras administraciones, aunque estas redunden en beneficios para el DPH.

Por todo ello, en atención a la alegación se incluyen estas medidas en la Ficha DU-01, si bien su aplicación quedarán a criterio de la administración competente si así lo consideran.

Alegación 2.

En relación con el tema importante DU-04 se propone incluir un apartado específico en el que se analice, se reconozca y se haga una consideración funcional de los sistemas tradicionales e históricos de regadío existentes en la cuenca del río Torío, atendiendo a su contribución a los elementos de calidad hidromorfológicos que sustentan el estado ecológico de las masas de agua. Para ello se sugiere que se incorpore a la Ficha los siguientes criterios técnicos:

1. Desarrollar inventarios y caracterizaciones funcionales de los sistemas tradicionales de riego asociados al río Torío.

2. Evaluar su contribución a los elementos de calidad hidromorfológicos que sustentan el estado ecológico.

3. Diferenciar su impacto respecto al generado por infraestructuras hidráulicas modernas de mayor grado de artificialización.

4. Integrar estos sistemas como potenciales herramientas de restauración basada en procesos, reconociendo su papel en la recuperación de la conectividad lateral, la regulación hidrológica natural y la mejora de la resiliencia frente al cambio climático.

5. Garantizar que las actuaciones de restauración fluvial incorporen criterios de compatibilización con el mantenimiento de infraestructuras tradicionales que contribuyan funcionalmente a los procesos hidromorfológicos del sistema.

Respuesta:

No podemos compartir el enfoque del alegante en relación el reconocimiento y funcionalidad de los riegos tradicionales de la cuenca del río Torío en relación con los elementos de calidad hidromorfológicos que sustentan el estado ecológico de las masas de agua.

El río Torío se divide en 4 masas de agua superficial natural, desde su cabecera hasta su desembocadura en río Bernesga: Masa Río Torío 1, que va desde cabecera hasta su confluencia con río de Canseco, y río de Canseco y arroyo de Palomera; masa Río Torío 2, desde el final de río Torío 1 hasta la confluencia con el arroyo de Getino y río Valverdín; masa Río Torío 3 a su paso por las Hoces de Vegacervera, y arroyos Coladilla y de Correcillas; finalmente, masa Río Torío 4, que va desde arroyo de Correcillas hasta el final, incluyendo los arroyos de la Mediana, Viceo, Valle de Fenar y Molinos.

Las presiones hidromorfológicas en las masas de agua Río Torío 2, 3 y 4 son abundantes y significativas y derivan de los diversos usos del agua, así como de la protección de poblaciones. Así, el Río Torío 2

presenta impactos de hábitats alterados debido a excesiva compartimentación de la masa de agua: tiene inventariadas 8 barreras transversales, en su mayoría no franqueables, vinculadas a regadíos tradicionales. Algo similar sucede en el Río Torío 3, en este caso con 10 barreras transversales, de las que cuatro son no franqueables, y de ellas una vinculada a regadíos tradicionales; además dispone de 8 obstáculos longitudinales (motas o malecones), en este caso cuyo objetivo es la protección de poblaciones frente a avenidas. Y lo mismo podríamos decir de la masa de agua Río Torío 4, con 33 barreras transversales, de las que 11 son infranqueables y de ellas 5 corresponden a barreras vinculadas al regadío; además hay 12 muros o motas que protegen a poblaciones y zonas urbanizadas.

Por lo tanto, los problemas hidromorfológicos del río Torío son desiguales y en sus masas de agua más bajas son más relevantes que en la cabecera, siendo el uso para el regadío con la carga de presas tradicionales que conlleva, aunque no solo él, uno de los factores que más afecta a estos problemas. Con este dibujo de las presiones hidromorfológicas en el río Torío, se puede concluir que las infraestructuras vinculadas a los distintos usos del agua en el río suponen una contribución negativa a los elementos de calidad hidromorfológica de las masas de agua afectadas.

No hay duda de que los sistemas tradicionales tiene ventajas para el medio en el que se desarrollan ya que han sido los siglos de existencia los que los han adaptado a las condiciones del medio. Sin embargo, el paradigma de buen estado que introduce la DMA conlleva que la permanencia de estos sistemas tradicionales deba adaptarse a los nuevos requerimientos, como puede ser las exigencias de calidad hidromorfológica, que requiere la permeabilización de los obstáculos transversales al cauce y ampliar el espacio fluvial, muchas veces constreñido para proteger actividades socioeconómicas.

No obstante, se incluye una referencia en la Ficha DU-06 a la situación singular de los regadíos tradicionales.

Alegación 3.

En relación con las Fichas DU-06 y DU-07, el alegante propone incorporar al Plan Hidrológico líneas específicas orientadas a la modernización tecnológica de los regadíos tradicionales mediante medidas de monitorización y digitalización de los parámetros que entren en juego en el riego: caudales derivados, humedad en suelo y perfil radicular, mejora de eficiencia en el riego por gravedad, técnicas de teledetección, aplicaciones para fertilización correcta. Todo ello fomentado por líneas de ayuda específicas para la modernización del regadío tradicional y programas de formación y asesoramiento técnico a comunidades de regantes.

Respuesta:

La modernización del regadío que se ha llevado en España en los últimos 25 años ha ido evolucionando desde los primeros proyectos al inicio del siglo hasta los actuales. En la actualidad la modernización del regadío incluye las mejoras de la monitorización de agua, suelo, planta y energía que se pone de relieve en la alegación. Con estas mejoras, no presentes en los proyectos de inicio, no solo se mejora la calidad de vida de los agricultores, sino que permiten un riego muy eficiente en términos de productividad agraria, de uso del agua, de reducción de sustancias contaminantes y de gestión energética. Todo ello se fomenta por las administraciones agrarias competentes que intervienen en la aprobación de estos proyectos y en su financiación, y son alentados por líneas específicas de ayudas

como las derivadas del PERTE de la digitalización del regadío, promovido por MITECO, que permiten abordar todas estas mejoras.

Por otra parte, ya en el Plan Hidrológico vigente (artículo 28 de la Normativa) hay requisitos adicionales para los proyectos de modernización financiados con fondos públicos en términos de reducción de las presiones hidromorfológicas y de contaminación difusa que los proyectos deben considerar.

Alegación 4.

Se propone que, en aplicación de la Resolución de 4 de septiembre de 2025 de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes por la que se incoa expediente para la declaración de «Los sistemas históricos y tradicionales de regadío» como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural (actualmente en tramitación), se garantice la compatibilidad entre las medidas de modernización, transformación o reestructuración de regadíos y la salvaguarda de los sistemas históricos y tradicionales de regadío. Para ello se sugieren una serie de criterios a tener en cuenta, curiosamente, no en los proyectos de modernización, sino en el Programa de medidas del Plan Hidrológico.

Respuesta:

La Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes citada únicamente incoa un expediente de declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural, pero hasta la fecha no nos consta que se haya sustanciado esa declaración en un acto administrativo firme. De hecho, en la fase de consulta pública desde el Organismo de cuenca se presentaron observaciones a la citada declaración en lo que entendíamos que podría colisionar con las competencias en materia hidrológica.

Por otra parte, los regadíos tradicionales que disponen de título concesional habilitante pueden hacer uso del agua en los términos y condiciones que establece su título. Y esto al margen de que tengan una catalogación cultural o no. Lo que no es posible es que la declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural para alguna de estas actividades tradicionales suponga un deterioro de las masas de agua afectadas, algo que la propia DMA no considera posible. Para estos casos la excepción al logro de los objetivos ambientales sólo podría venir considerando los criterios de exención que se regulan en los artículos 4(6) de la DMA, para el deterioro temporal, y 4(7), para la modificación de las características físicas de las masas de agua. La justificación de la excepción de este último artículo requiere que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de la masa de agua; que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos ambientales se vean compensados por los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible; y que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor.

Alegación 5.

Respecto al tema importante de coordinación interadministrativa se solicita la inclusión en el próximo Plan Hidrológico de una medida específica para el fomento y constitución de la Junta Central de Usuarios de la cuenca del Torio, (modelo exportable a cualquier cuenca similar), con el fin de que

trabaje con el Organismo de cuenca en alinear las políticas locales con los objetivos de la planificación hidrológica, asegurando el cumplimiento de las directivas europeas a través de una gestión participativa y coordinada.

Respuesta:

Las Juntas centrales de Usuarios se regulan en el artículo 81.3 del TRLA. Según este artículo los usuarios individuales y las comunidades de usuarios, podrán formar por convenio una junta central de usuarios con la finalidad de proteger sus derechos e intereses frente a terceros y ordenar y vigilar el uso coordinado de sus propios aprovechamientos. También señala este artículo que el Organismo de cuenca podrá imponer, cuando el interés general lo exija, la constitución de los distintos tipos de comunidades y juntas centrales de usuarios. Por tanto, consideramos que nada obsta para que la alegante o cualquier otro usuario del Torío pueda iniciar los trámites para constituir esta Junta central. El organismo de cuenca tiene un departamento que puede orientar y asesorar en los pasos a dar para esta constitución. De hecho, es frecuente que esta labor de tutela se ejerza habitualmente cuando hay colectivos de usuarios que desean e impulsan estas juntas centrales. En caso de que la alegante considere que debe ser la administración quien imponga esta figura, deberá justificar ante la Confederación los motivos por los que piensa que el interés general exige esta imposición. También se indica que impulsar una Junta central de Usuarios sin disponer de la correspondiente Junta de explotación, a la que se refiere el artículo 39 del RAPA, conllevaría que la eficacia de la figura asociativa no fuese todo lo eficaz que se espera. Por tanto, para casos como el del Torío, quizá en primer lugar habría que impulsar la constitución de su Junta de Explotación cuyo fin es coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel conjunto de ríos, río, tramo de río cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Una vez constituida la junta de explotación (delimitado su ámbito y designados sus miembros) podría abordarse la creación de una junta central de usuarios. Y esto porque la propia dinámica de constituir una Junta de Explotación del Torío (elaboración de censos, presentación de candidaturas y elecciones de los representantes por usos) ofrecería una información valiosa sobre la viabilidad de una junta central de usuarios en especial por la posible implicación de los usuarios en ella.

A la vista de lo anterior, se incluye en las Ficha DU-06 y DU-09 una referencia al impulso de juntas de explotación en ríos no regulados como el Torío donde haya una demanda específica para ello como medida adicional a las de gestión de la demanda en estas zonas.

4.12. Escrito de observaciones Nº 013

Presentado por: Regeneraqua Initia, S.L.

En nombre propio.

Alegación 1.

Respecto a la Ficha nº 2, se propone incluir la regeneración de aguas residuales como medida prioritaria de sustitución en las zonas de regadío que dependen de masas de agua subterránea en mal estado (especialmente en los acuíferos de Los Arenales Tierra de Pinares y Los Arenales Tierras de Medina y La Moraña). El agua regenerada ofrece una fuente estable y alternativa que permite reducir la presión sobre los acuíferos sobreexplotados sin comprometer la viabilidad económica del sector agrario.

Respuesta:

La utilización de aguas residuales depuradas para la sustitución de bombeos tiene en la cuenca del Duero elementos representativos específicos como es el caso de la cubeta de Pedrajas-Alcazarén con aguas depuradas de Pedrajas de San Esteban. Por otra parte, en la demarcación hidrográfica del Duero se da la particularidad de la existencia de pequeñas recargas en volumen, pero numerosas en cantidad, a partir de las aguas residuales de pequeños municipios situados en la zona de los páramos centrales y en el centro sur de la cuenca ubicados en los terrenos de Arenales. La procedencia del agua de abastecimiento es en todos los casos de aguas superficiales o de manantiales, cuyos usuarios son mancomunidades con plantas potabilizadoras: Mancomunidad de La Churrería, con toma de aguas del manantial del Salidero en Fuentidueña; la de Municipios del Eresma, con la toma de Villeguillo; la Mancomunidad del Adaja, con la toma de Arévalo; en el Duero las tomas de San Miguel del Pino y Valbuena de Duero; en el Canal del Duero, con la toma de Tudela de Duero; etc. El número de municipios vinculados a estas mancomunidades suponen más de 120, de los que más del 75% de ellos, una vez depuradas sus aguas residuales, el efluente se vierte en algunos casos a terreno, y en la mayoría a corrientes superficiales efímeras o asociadas a aluviales arenosos, lo que supone una recarga inducida a partir de aguas superficiales. Se han presentado, a nivel de idea, algunas iniciativas para explorar la posibilidad de utilizar aguas regeneradas en el regadío, si bien ninguna de ellas como sustitución de bombeos subterráneos existentes, es decir, planteadas para aumentar la superficie de regadío. Finalmente, no han llegado a buen puerto quizá por la falta de cultura en usar este tipo de aguas y, fundamentalmente debido al coste. Esta realidad ha llevado a que el EpTI no plantee este tipo de actuaciones de manera directa si bien no se opone a ellas. El propio Plan Hidrológico vigente tiene una reserva de 6 hm^3 en la cuenca dirigidos a usos con aguas regeneradas de los que hasta la fecha no se ha hecho usos de ninguno, lo que corrobora el escaso interés que hay en la actualidad por este tipo de aguas. No obstante, en atención a la sugerencia se incluye en epígrafe 5.2 de la Ficha DU-02 una alusión positiva al fomento del uso de estas aguas como fuente para sustituir bombeos

Alegación 2.

Respecto a la Ficha nº 10, se propone favorecer y atender las demandas de agua en la producción de Hidrógeno Verde con agua regenerada, no limitando que su uso se potencie únicamente en el sentido de que este recurso pueda usarse como fuente de refrigeración, y reforzar la parte normativa para que la concesión de recursos para centros de datos, plantas de hidrógeno verde u otras instalaciones de

almacenamiento de energía química, esté condicionada a la utilización de agua regenerada, siempre que técnicamente sea viable y se respeten los objetivos ambientales.

Respuesta:

Nos parece que la propuesta de la alegante es muy exigente y que no está justificada en todos los casos. La generación de hidrógeno verde carece de una planificación rigurosa, más allá de que establece unos objetivos de país que se plasman en el PNIEC y que, más que ayudar al desarrollo de esta tecnología, fomentan la especulación. Teniendo en cuenta que esta tecnología usa como materia prima el agua y nuestro país es muy heterogéneo en este aspecto, una planificación energética tan difusa no ayuda a que los inversores acoten el ámbito de actuación de sus proyectos. Por ello hasta la fecha las iniciativas presentadas para estas instalaciones de energía son erráticas y muy variadas: las hay que plantean el uso de aguas regeneradas como materia prima, otras que plantean fuentes de agua subterránea o superficial convencionales, incluso algunas con aguas pluviales recogidas artificialmente. La ubicación de los proyectos obedece más a criterios de situación respecto a corredores energéticos o de transporte (expectativas de grandes hidroductos, grandes vías de comunicación por carretera, etc.) que a criterios de disponibilidad del agua. Por ello cada caso debe analizarse por separado precisamente por la heterogeneidad de la cuenca. Limitar las fuentes de suministro para estas tecnologías a aguas regeneradas puede ser adecuado para los intereses de quien produce agua regenerada pero quizá contrario al productor de hidrógeno, en especial cuando se plantea en zonas donde hay disponibilidad de agua convencional. Por eso la Ficha propone establecer reservas de agua convencional para estos nuevos usos consuntivos, solo en el caso de que haya disponibilidad de recurso y no se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, quedando el resto de zonas (sin reservas) abiertos a que pueda analizarse caso a caso la viabilidad de cada instalación usando aguas regeneradas. Pensamos que este planteamiento no cierra a priori determinadas fuentes de suministro convencionales y deja abierta la posibilidad del uso de aguas regeneradas.

Alegación 3.

Sobre la Ficha nº 9 se sugiere incluir una previsión normativa que facilite que terceros (promotores privados) puedan solicitar Autorizaciones de Producción y Suministro de agua regenerada, mediante acuerdos con los concesionarios actuales para desarrollar las infraestructuras de reutilización necesarias. Esto permitiría movilizar inversión privada para modernizar el sistema de depuración donde el sector público no pueda llegar, acelerando el cumplimiento de los objetivos ambientales del Plan.

Respuesta:

La regulación del uso de agua regenerada en la actualidad se encuentra en el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua. La Normativa del Plan Hidrológico no puede regular aspectos que ya lo están en el citado Real Decreto. Por otra parte, nada hay en la norma vigente que prohíba esa colaboración de terceros en el ciclo de regeneración.

Más allá de ello, no vemos con tanta claridad como el alegante, al menos en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Duero, esa capacidad de movilización de inversión privada para la modernización del sistema de depuración. A nuestro juicio el inversor en producir agua regenerada que la plantee como actividad económica para su venta a nuevos usuarios, debe asumir costes de

inversión y mantenimiento para regenerar el agua depurada, costes que podrá repercutir en sus futuros usuarios; sin embargo no vemos con claridad que ese operador de la regeneración pueda asumir costes de la depuración cuando ello va a suponer una repercusión mayor del coste del agua en sus usuarios, siendo esos costes en depuración competencia del operador de la depuración.

Alegación 4.

En cuanto al tema importante número 6 se propone que en los proyectos de modernización de regadíos se integren infraestructuras que permitan el uso de agua regenerada mezclada o directa, en el sentido de que la modernización no debe ser solo relativa a la eficiencia técnica (goteo), sino también diversificación de fuentes de suministro para aumentar la garantía ante sequías.

Respuesta:

Actualmente no hay una demanda de agua regenerada en el sector del regadío, más allá de los casos señalados en la alegación primera. Las modernizaciones se plantean sobre regadíos que disponen de concesión de agua precisamente como modo de poder hacer frente a la escasez que se presenta en determinados años de manera más eficaz que los regadíos no modernizados.

Por otra parte, no hay ninguna limitación a plantear las modernizaciones como señala la alegante, sino que más bien es una decisión de los propios promotores de las modernizaciones (comunidades de regantes) y sus equipos técnicos. Establecer la obligación de que las modernizaciones de regadío sólo puedan realizarse con aguas regeneradas, supone una carga excesiva, a nuestro juicio, cuya legalidad nos genera dudas.

4.13. Escrito de observaciones Nº 014

Presentado por: Jorge Álvarez Gago.

En nombre de la Comunidad de Regantes de los Payuelos.

Alegación 1.

Respecto a las Fichas DU-06 y DU-07, se hace una relación de los regadíos que dependen del Sistema Esla-Porma como son los regadíos en ejecución de la zona regable de Payuelos (42.820 ha) y Valderas (1.000 ha), y de los existentes en Margen Izquierda del Porma (12.900 ha), Páramo Bajo (24.000 ha), Arriola (4,050 ha), Esla (11.200) y los riegos tradicionales del Cea y el Valderaduey (5.000 ha) y de las demandas que se atienden en el sistema Carrión a través del trasvase (12.000 ha). Proponen que en el EpTI se explique que con los regadíos finalizados en el sistema Porma-Esla, las restricciones de caudales ecológicos y la reducción de aportaciones por el cambio climático no hay más agua disponible del Esla para ser transferida por el trasvase Cea-Carrión.

Respuesta:

Según la información disponible, la superficie de los regadíos en ejecución en la zona regable de **Payuelos** es de **38.898,43 ha**, distribuida por sectores, identificados como unidades elementales de demanda agraria, de la siguiente forma:

Código	Nombre	Superficie regable [ha]
2101240	Payuelos (Sector I) - Comunidad de Regantes de Quintanilla de Rueda	14,0
2101185	Payuelos (Sector II)	707,26
2105927	Payuelos (Sector II) - Comunidad de regantes de Villahibiera	310,0
2101186	Payuelos (Sector III)	776,11
2101187	Payuelos (Sector IV)	4.065,4
2101192	Payuelos (Sector IX)	992,39
2101188	Payuelos (Sector V)	729,84
2101189	Payuelos (Sector VI)	215,87
2101190	Payuelos (Sector VII)	2.514,6
2101191	Payuelos (Sector VIII)	928,47
2101193	Payuelos (Sector X)	1.879,81
2101194	Payuelos (Sector XI)	932,08
2101195	Payuelos (Sector XII)	638,67
2101196	Payuelos (Sector XIII)	1.914,22
2101197	Payuelos (Sector XIV)	1.335,46
2101202	Payuelos (Sector XIX)	2.552,24
2101198	Payuelos (Sector XV)	1.685,93
2101199	Payuelos (Sector XVI)	1.836,44
2101200	Payuelos (Sector XVII)	2.453,75
2101201	Payuelos (Sector XVIII)	1.809,0
2101203	Payuelos (Sector XX)	1.645,35
2101204	Payuelos (Sector XXI)	2.068,55
2101205	Payuelos (Sector XXII)	3.144,83
2101206	Payuelos (Sector XXIII)	1.768,54
2101207	Payuelos (Sector XXIV)	1.979,62

Código	Nombre	Superficie regable [ha]
TOTAL		**38.898,43**

Los datos de esta superficie proceden de los planes coordinados de obras aprobados por Orden PRE/101/2005, de 21 de enero, y Orden AAA/774/2015, de 22 de abril, respectivamente, de la zona regable de Riaño (primera fase) y de los Acuerdos de concentración parcelaria llevada a cabo en cada Sector por la comunidad autónoma de Castilla y León.

La superficie de los regadíos en ejecución en la zona regable de **Valderas-Gordoncillo** es de **1.000 ha**, identificados en una unidad elemental de demanda agraria:

Código	Nombre	Superficie regable [ha]
2100466	Sector XII (Valderas-Gordoncillo)	1.000,00

La superficie de los regadíos existentes en la Margen Izquierda del Porma es de **12.370 ha**, distribuida por sectores, identificados como unidades elementales de demanda agraria, de la siguiente forma:

Código	Nombre	Superficie regable [ha]
2100152	Canal de la margen izquierda (MI) del Porma primera fase (Sectores II, III y IV)	9.847,0
2100625	Canal de la márgen izquierda (MI) del Porma primera fase (Sector I)	2.523,0
TOTAL		**12.370,00**

La superficie de los regadíos existentes en el **Páramo Bajo** es de **24.082 ha**, distribuida por sectores, identificados como unidades elementales de demanda agraria, de la siguiente forma:

Código	Nombre	Superficie regable [ha]
2100598	Páramo bajo (sector I)	3.994,75
2106487	Páramo bajo (sector II)	3.349,66
2106488	Páramo bajo (sector III)	3.235,44
2106489	Páramo bajo (sector IV)	3.915,29
2106490	Páramo bajo (sector V)	3.831,65
2106491	Páramo bajo (sector VI)	2.750,05
2106492	Páramo bajo (sector VII)	3.005,81
TOTAL		**24.082,65**

La superficie de los regadíos existentes en la zona regable de **Arriola** es de **4.650 ha**, identificados en una unidad elemental de demanda agraria:

Código	Nombre	Superficie regable [ha]
2100154	Canal de Arriola	4.650,00
TOTAL		**4.650,00**

La superficie de los **regadíos tradicionales del Cea y el Valderaduey** es de **5.448 ha**, identificados en varias unidades de demanda agraria:

Código	Nombre	Superficie regable [ha]
2000011	RP RÍO CEA BAJO	2.131,00
2000033	RP RÍO CEA MEDIO	516,00
2000040	RP RÍO CEA ALTO	1.492,00
2000047	RP RÍO VALDERADUEY	433,00
2000108	RP TRAMO BAJO RÍO VALDERADUEY	876,00
TOTAL		**5.448,00**

Por lo tanto, hay divergencias entre la información oficial y la que se plasma en la alegación. Por ello ofrecemos a la alegante que presente justificación adecuada de las superficies que indica En caso de que la alegación

Las garantías en las unidades de demanda mencionadas, según se publica en el Plan Hidrológico vigente, determinan que se considera satisfecha la demanda agraria en todos los escenarios (considerando que se mantiene el trasvase Cea-Carrión).

Si bien se observa que el déficit medio anual aumenta en el escenario 2034-2039 debido, entre otros aspectos, a las elevadas dotaciones de Payuelos que se establecen en sus respectivos Planes Coordinado de Obras:

- 7.031 m^3/ha/año (Orden AAA/774/2015, de 22 de abril, por la que se aprueba el Plan Coordinado de obras de los sectores VI al XXIV -Áreas Centro y Cea- subzona de Payuelos, zona regable del embalse de Riaño, primera fase (León, Valladolid).
- 6.603 m^3/ha/año Orden PRE/101/2005, de 21 de enero, por la que se aprueba el Plan Coordinado de Obras de los sectores II, III, IV-1, IV-2, IV-3 y V -área Esla-de la subzona de Payuelos, de la zona regable del embalse de Riaño. Primera fase (León).

Alegación 2.

Proponen que cesen en el nuevo plan hidrológico las aportaciones de agua de Riaño al trasvase Cea Carrión que se han venido efectuado provisionalmente desde hace 25 años.

Respuesta:

En el Plan hidrológico vigente se indican las siguientes consideraciones en relación con el trasvase Cea-Carrión, que se mantienen en el EpTI:

Horizonte 2027:

- La circulación de caudal se ciñe al periodo comprendido de mayo a septiembre; en abril el SE Carrión se abastece con sus propios recursos.
- Se cede agua al Cea desde el Canal Alto de Payuelos y desde el Canal Bajo de Payuelos
- Al arco Canal Cea-Carrión_e se le aplica una regla de operación que restringe el paso de caudal en función del volumen mensual almacenado en Camporredondo y Compuerto mientras que al Canal Cea-Carrión_d se le asigna una regla en función del volumen almacenado en Riaño
- El volumen máximo anual en el arco Canal Cea-Carrión_e se limita a 50 hm^3

- Se calibran diversos volúmenes mensuales máximos: 25 hm^3 en mayo, 37 hm^3 en junio, 31 hm^3 en julio, 16 hm^3 en agosto y 10 hm^3 en septiembre
- En el SE Carrión se habrán aplicado medidas de modernización de regadíos que habrán reducido el consumo de agua en algunas UDA

Horizontes 2033 y 2039:

- La circulación de caudal se ciñe al periodo comprendido de mayo a septiembre; en abril el SE Carrión se abastece con sus propios recursos
- Se cede agua al Cea desde el Canal Alto de Payuelos y desde el Canal Bajo de Payuelos
- Al arco Canal Cea-Carrión_e se le aplica una regla de operación que restringe el paso de caudal en función del volumen mensual almacenado en Camporredondo y Compuerto mientras que al Canal Cea-Carrión_d se le asigna una regla en función del volumen almacenado en Riaño
- En este horizonte la situación en Riaño es limitante porque se habrán desarrollado todas las medidas de regadío previstas
- El volumen máximo anual en el arco Canal Cea-Carrión_e se limita a 35 hm^3
- Se calibran diversos volúmenes mensuales máximos: 12 hm^3 en mayo, 18 hm^3 en junio, 15 hm^3 en julio, 10 hm^3 en agosto y 10 hm^3 en septiembre
- En el SE Carrión seguirán vigentes las medidas de modernización de regadíos del horizonte 2027 que habrán reducido el consumo de agua en algunas UDA

Ese es el marco en el que se enfocaba el Plan vigente y en el que seguirá actuando el Organismo de cuenca, que tiene como objetivo la racionalización del uso del agua, de todas las reservas de agua de la cuenca, para atender a todas las demandas de la cuenca bajo criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales. Y esos criterios se mantienen para el próximo ciclo de planificación, por tanto, en el Plan no se va a incluir, como propone el escrito de sugerencias, que se cese el trasvase al sistema de explotación Carrión. No obstante, la realidad de volúmenes trasvasados en la serie de años considerados en H-2039 previsiblemente será muy inferior a los que en la actualidad se están ofreciendo, fundamentalmente porque para eso se promueve el refuerzo de las reservas en el sistema Carrión con las presas de las Cuezas y la modernización de todos los regadíos del sistema Carrión.

Alegación 3.

Que no se consoliden 12.000 ha de regadío del Sistema Carrión a costa del trasvase desde el Sistema Esla, como manifestó el Jefe de Área de Explotación en la Junta de Explotación del Esla el pasado 25 de marzo de 2026, dado que eso supondría el colapso del Sistema Esla al no poder garantizar una dotación mínima de 5.000 m^3/ha año.

Respuesta:

El análisis de garantías y demandas que se ha hecho en el EpTI de las alternativas de la Ficha DU-06 y Ficha DU-07 ha tenido en cuenta el esquema de funcionamiento que el Plan Hidrológico vigente fija respecto al paso de recursos del Esla al Carrión y que ya se explicó en la alegación del mismo alegante al Plan Hidrológico (alegación N1124) en 2022. En el Plan Hidrológico vigente en ningún lugar se plantea la citada consolidación a la que se refiere la alegación.

Toda la actividad del Organismo de cuenca debe estar sujeta a las disposiciones normativas vigentes como son el TRLA y sus Reglamentos correspondientes y a la Normativa del propio Plan Hidrológico del Duero. Como se ha señalado en la respuesta a las alegaciones anteriores, el Plan Hidrológico vigente plantea la superación de los problemas de garantía identificados en el Sistema Carrión mediante medidas de mejoras en la gestión de la demanda (modernización de regadíos existentes) y refuerzo de regulación, precisamente para atender tanto a las futuras demandas previstas en el Sistema Esla (desarrollo completo de Payuelos) como a las existentes en el Carrión. Será el avance de las medidas de modernización de los regadíos de los sistemas Esla, Porma y Carrión, y el aumento de la oferta planteado en el sistema Carrión las que irán marcando el ritmo hacia la solución estable de ambos sistemas. Entre tanto el organismo de cuenca irá armonizando la gestión ordinaria de recursos e infraestructuras bajo el esquema actualmente vigente estabilizando, en la medida de lo posible las garantías de todos los regadíos, singularmente los ubicados en la cuenca cedente.

De cualquier modo, se hace ver que las dotaciones previstas en el los planes coordinados de obras de la subzona Payuelos, tanto en el de las áreas Centro y Cea (aprobado por Orden AAA/774/2015, de 22 de abril), como en el del Área Esla (aprobado por Orden PRE/101/2005, de 21 de enero) son muy superiores a las que se indican en la alegación, pues se habla de 7.031 y 6.603 m^3/ha y año, respectivamente, lo que penaliza de manera importante a las garantías de los riegos del Esla y del Carrión, de manera subsidiaria.

Alegación 4.

Que se priorice la modernización de los regadíos del Sistema Carrión y la construcción de la regulación adicional en las Cuezas para suplir los aportes con aguas del Esla.

Respuesta:

En este sentido, debe señalarse que la Confederación Hidrográfica del Duero comparte la conveniencia y oportunidad de las actuaciones propuestas, en tanto que la modernización de regadíos en el Sistema Carrión contribuye de forma directa a la mejora de la eficiencia en el uso del recurso, a la reducción de pérdidas y, en consecuencia, a una mejor adaptación de las demandas a la disponibilidad real de agua. De igual modo, la puesta en servicio de una regulación adicional en el ámbito de las Cuezas se considera una medida estructural que puede incrementar la capacidad de gestión del sistema y reforzar su resiliencia, disminuyendo la dependencia de aportaciones externas. Ambas actuaciones se encuentran, por tanto, alineadas con los objetivos de la planificación hidrológica vigente y forman parte de la estrategia de mejora del equilibrio entre recursos y demandas en la demarcación.

Según se recoge en el Programa de medidas del Plan Hidrológico vigente, cuya situación más actualizada se puede consultar en Mírame-IDEDuero, la modernización de regadíos en la Zona Regable

Bajo Carrión (medidas 6401026-JCYL y 6405984-MAPA) se encuentra en ejecución, con previsión de finalizarse en 2027.

La regulación adicional en las Cuezas (medidas 6403243 y 6403244) se encuentra en fase de anteproyecto en evaluación ambiental.

4.14. Escrito de observaciones Nº 015

Presentado por: Alfonso Carlos Barrau Vázquez.

En nombre de PISZOLLA, S.L.U.

Alegación 1.

En la prelación de usos del dominio público hidráulico establecido en el artículo 60 del Texto refundido de la Ley de Aguas, la acuicultura continental se encuentra en sexto lugar, solo por encima de los usos recreativos y la navegación. Sin embargo, la actividad piscícola es la más vulnerable por trabajar con biomasa extremadamente dependiente y sensible a la disponibilidad y condiciones del recurso agua.

Respuesta:

El orden de prelación que establece el artículo 60 del TRLA es subsidiario del que establezca la Normativa del propio Plan Hidrológico de demarcación. En la Normativa del Plan Hidrológico vigente la acuicultura está en el mismo orden de prelación que el establecido por el artículo 60 del TRLA. Tradicionalmente no se han encontrado motivos para modificarlo debido, fundamentalmente, al peso económico y social de la actividad en comparación con otras, a su carácter no consuntivo, y a que las piscifactorías en la cuenca se ubican aguas arriba de los grandes puntos de consumo, de vertido y retorno, lo que permite un razonable uso del agua para una actividad tan sensible a su calidad y cantidad. Por otra parte, al ser uso no consuntivo subirla de grado de prelación podría generar conflictos mayores, por ejemplo, en relación con la aplicación de los artículos 67 y siguientes del TRLA. No obstante, en fase de redacción del Plan Hidrológico se valorará el cambio de ubicación en el orden de prelación de la acuicultura en función de los parámetros citados.

Alegación 2.

Debido a la vulnerabilidad de la actividad piscícola y a evitar siniestros en sus instalaciones, que en la Planificación Hidrológica se incluyesen las siguientes previsiones con respecto a este sector:

- *Aseguramiento del caudal mínimo de mantenimiento desde los embalses de regulación.*
- *Evitación de alteraciones súbitas del régimen hidrológico de los ríos.*
- *Comunicación directa por parte del Organismo de cuenca, con la mayor antelación posible, de las alteraciones de los caudales disponibles.*
- *Adopción de protocolos especiales para la seguridad de las granjas piscícolas, en circunstancias de sequía y avenidas extraordinarias.*

Respuesta:

Todas las cuestiones que se plantean en la alegación son aspectos vinculados a la gestión del agua más que a la planificación hidrológica. El Plan Hidrológico establece los caudales mínimos de desembalse que deben cumplirse y que figuran, entre otros lugares del Plan Hidrológico, en el Apéndice 5.1 de su Normativa. Anualmente se da cuenta del grado de cumplimiento de los caudales ecológicos en las Comisiones de Desembalse y en el informe de seguimiento anual del Plan Hidrológico. La apertura de los órganos de desagüe de los embalses debe atender a las necesidades de los diversos usos, así como a los caudales ecológicos establecidos. Para ello la Confederación, dependiendo de los sistemas de

explotación, solicita a los usuarios que identifiquen los caudales que demandan semanalmente con el fin de valorar los volúmenes y caudales a liberar desde las infraestructuras. Por tanto, es una parte de la gestión de las reservas con carácter anual para atender a todos los usos. Es lógico que pueda haber oscilaciones en el nivel del río cuando se producen los desembalses; más allá de que sea conveniente reducir en lo posible estos cambios, si bien son inevitables, las tomas de agua de los aprovechamientos piscícolas deberían disponer de los elementos de protección de estas instalaciones frente a los cambios bruscos de nivel que por otra parte pueden darse también en épocas de avenidas, algo que debería estar recogido en la concesión de las propias piscifactorías. Finalmente, la gestión de las sequías se hace a nivel de cuenca a través de la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca que es el órgano que establece las limitaciones o criterios para afrontar estos fenómenos; por lo que las peticiones que se hacen por la alegante, más que incluirse en los protocolos especiales deben ponerse de manifiesto ante ese órgano con el fin de poder valorar las acciones dirigidas a proteger una actividad tan sensible.

4.15. Escrito de observaciones Nº 016

Presentado por: Javier Hernanz Agüería.

En nombre de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP).

Alegación 1.

Se demanda que el Plan Hidrológico identifique expresamente en el diagnóstico y en la gobernanza el uso deportivo federado acuático y náutico como uso común especial cualificado, reglado, trazable y no consuntivo del DPH, con consideración específica en programas de medidas, protocolos y condiciones tipo. Desagregación metodológica del epígrafe «otros usos» en los cuadros estadísticos del EpTI (singularmente en la ficha relativa a optimización de la oferta y otros usos).

Respuesta:

El TRLA en su artículo 50 señala que se consideran usos comunes del agua superficial mientras discurren por sus cauces naturales beber, bañarse, otros usos domésticos o abrevar el ganado. Estos usos deben llevarse a cabo de forma que no se produzca una alteración de la calidad y caudal de las aguas. La actividad que representa la alegante se encuadraría en los usos comunes especiales (navegación, flotación, establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos y otros que permitan la utilización de recursos a terceros) que regula el artículo 51 del TRLA, pero no como uso autónomo. La clasificación de los usos se establece en el marco del establecimiento del orden de preferencia por el TRLA (art.60) y, con mayor detalle, en el RDPH (art. 49bis), por lo que no procede crear en el EpTI una categoría planificadora nueva ajena a dicha taxonomía. Para todos ellos es preceptivo la declaración responsable. Por tanto, la normativa de aguas vigente no identifica la categoría de uso que la alegación atribuye al uso deportivo federado acuático y náutico. Tampoco lo ha hecho el Plan Hidrológico del Duero ya que a los efectos de la gestión del DPH, competencia de los organismos de cuenca, no es relevante la tipología o singularidad que solicita la alegante. Además, al tratarse de un uso no consuntivo, no computa como volumen en los cuadros de demanda, cuya lógica es volumétrica; la desagregación en indicadores federativos no forma parte de esa metodología. Sin perjuicio de ello, nada impide que las federaciones aporten a la planificación información desagregada (mapa de uso, licencias, eventos, tramos) como insumo complementario si así lo desean. Por otra parte, no se considera que deba ocupar un epígrafe independiente en la Ficha DU-10 que tiene un enfoque diverso al que propone la alegante y en la actualidad no representa un tema importante en la demarcación hidrográfica.

Alegación 2.

Se propone que el Plan Hidrológico establezca, al amparo del art. 51.2 del RDPH, un conjunto de condiciones tipo para el ejercicio del uso deportivo federado acuático y náutico en el DPH de la demarcación, con los siguientes objetivos:

(i) reducir la discrecionalidad caso por caso;

(ii) homogeneizar criterios de compatibilidad con otros usos comunes especiales (en particular con la pesca fluvial recreativa);

(iii) fijar parámetros técnicos adaptados a la embarcación deportiva sin motor y al calendario federativo oficial;

(iv) dar seguridad jurídica a clubes y deportistas.

Respuesta:

En el Plan Hidrológico vigente (aprobado por Real Decreto 35/2023, de 24 de enero) se establecen este conjunto de condiciones para la navegación en general. Así el artículo 31 de la Normativa del Plan Hidrológico señala:

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 del RDPH, la práctica de la navegación en la parte española de la Demarcación hidrográfica del Duero está sujeta a declaración responsable y a las condiciones, cupos y requisitos que se indican en los epígrafes siguientes.

2. Para el gobierno de las embarcaciones será preciso estar en posesión del correspondiente título expedido por el Organismo competente, en aquellos casos en que sea preceptivo de acuerdo con el tipo de embarcación.

3. De manera general no se permite la navegación nocturna, salvo excepciones que valorará el Organismo de cuenca y que, en todo caso, requerirá autorización específica.

4. La navegación con motos náuticas solo se permite en aquellos embalses en los que esté expresamente autorizada.

5. La potencia real máxima permitida será 240 CV, limitándose asimismo la velocidad a 16 nudos. Se permitirán potencias superiores en casos justificados, como son el esquí acuático, la vigilancia, el salvamento y estudios técnicos o militares.

6. Autorización Especial para la Navegación:

a) En caso de actividades de navegación en las que se proyecte un uso exclusivo o que dificulte la coexistencia con otros usos será necesaria la tramitación de una Autorización Especial para la Navegación.

b) En todo caso se emitirá una Autorización Especial para la Navegación para descensos, pruebas deportivas y eventos puntuales en ríos cuyo período de desarrollo sea inferior o igual a 3 días naturales; actividades militares, de vigilancia, de salvamento y para estudios científicos; transporte de pasajeros.

Por tanto, la actividad deportiva está recogida en las autorizaciones especiales de navegación, si se trata de competiciones, o la declaración responsable si se trata de actividades individuales de entrenamiento.

En la actualidad la Confederación está llevando a cabo un trabajo para identificar criterios de compatibilidad de la navegación con otros usos y de esta forma, dar seguridad jurídica y claridad en las solicitudes. Si este trabajo finalizase antes de la publicación del Plan Hidrológico se incorporará al mismo; en caso contrario deberá aprobarse por Resolución de Presidencia del Organismo de cuenca y darle la suficiente publicidad.

Alegación 3.

Se solicita que el Plan Hidrológico reconozca a la RFEP y de las federaciones autonómicas integradas con interés territorial en la demarcación, como parte interesada cualificada en el ciclo de planificación

2028-2033, con fundamento en la utilidad pública legal ex lege de las federaciones deportivas españolas y de las federaciones autonómicas integradas en aquellas conforme al art. 43.7 de la Ley 39/2022, con los efectos del art. 42 y con ejercicio de funciones públicas administrativas bajo la tutela del CSD conforme al art. 50 de la misma Ley; en la afectación material directa por su objeto; y en los cauces de participación del art. 14 DMA, arts. 74, 75 y 79 RD 907/2007 y arts. 3.2 y 7.2 de la Ley 27/2006. Se solicita su inclusión expresa en los listados internos de partes interesadas que la Confederación gestione a efectos del presente procedimiento, con notificación individual de los actos y resoluciones del ciclo de planificación que afecten al ámbito material de las presentes alegaciones, conforme al art. 53 de la Ley 39/2015.

Respuesta:

El artículo 38.7 de la Normativa del Plan Hidrológico del Duero vigente señala quién es considerado interesado en el proceso de planificación hidrológica:

a) La condición de interesado en el proceso de planificación hidrológica se adquiere automáticamente por ser miembro de la Junta de Gobierno, del Comité de Autoridades Competentes o del Consejo del Agua de la Demarcación hidrográfica del Duero.

b) Igualmente, adquieren la condición de interesado quienes sean identificados con tal condición por la autoridad ambiental en el Documento de Alcance del proceso de evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico.

En este sentido el órgano ambiental ha seleccionado a la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO, con sede social en la calle Antracita 7 3º (28045 -MADRID) como interesado en el proceso por lo que se le ha remitido el Documento de inicio ambiental para que aporte las sugerencias que considere oportunas en el Documento de Alcance.

Finalmente se recuerda que la Real Federación Española de Piragüismo ha sido invitada a las actividades de participación organizadas en las fases de Documentos iniciales y EpTI del presente ciclo de planificación hidrológica, a través del correo electrónico que disponía esta Confederación (jsanchez@rfep.es); lo mismo cabe decir de la Federación de Piragüismo de Castilla y León a la que se ha invitado a través del correo info@fedpcyl.com . No obstante, se toma nota del interés de la Real Federación por participar en la elaboración del Plan Hidrológico para que pueda tener conocimiento de las reuniones de participación que se organicen en esa fase, lo que se comunicará en la nueva dirección electrónica que nos remite.

Alegación 4.

Se solicita la desagregación del epígrafe agregado «otros usos» o equivalente (singularmente en la ficha relativa a optimización de la oferta y otros usos) para permitir la trazabilidad estadística del uso recreativo federado, e incorporar al menos los siguientes indicadores: licencias federativas en vigor, clubes federados activos, eventos oficiales celebrados, tramos y masas de agua de uso reglado, carácter no consuntivo de la actividad.

Respuesta:

En la normativa vigente no existe el uso “recreativo federado”, sino el uso común “navegación”, no conociendo esta Confederación ninguna norma que ampare la pretensión de la alegante. Como se ha

indicado en la respuesta a la alegación segunda, la Normativa del Plan vigente establece algunos criterios específicos para las autorizaciones especiales de navegación, como podría ser la de competiciones deportivas federadas, y se está trabajando en la elaboración de criterios para la armonización de usos comunes sobre tramos de ríos y embalses. No se considera que se una tarea del Organismo de cuenca realizar una *trazabilidad estadística del uso recreativo federado*, ya que hay otras instancias que pueden realizar esos trabajos: el Organismo de cuenca dispone de los datos de autorizaciones de navegación en general, sin poder discriminar si es uso federado o no. Ese dato global es el que se utilizará para establecer los criterios de armonización de las autorizaciones de navegación.

Alegación 5.

Se propone que el Plan Hidrológico complemente la categoría «masas de agua de uso recreativo» en la ficha relativa a zonas protegidas con un subapartado específico de «masas de agua con uso deportivo federado reconocido», y que en Red Natura 2000, Reservas de la Biosfera y demás figuras de protección se articulen protocolos de compatibilización proporcionada (no exclusión indiferenciada) del uso deportivo federado, con incorporación de la RFEP y de las federaciones autonómicas como actor colaborador en bioseguridad y aviso temprano sobre especies exóticas invasoras y alteraciones hidromorfológicas.

Respuesta:

El EpTI del Duero no incluye ninguna ficha relativa a zonas protegidas y la mencionada categoría «*masas de agua de uso recreativo*» no figura en el Reglamento de la Planificación Hidrológica ni en la Instrucción de Planificación Hidrológica; tampoco figura el concepto «*masas de agua con uso deportivo federado reconocido*». Por lo tanto, no se incluirá esta denominación en el EpTI.

Por lo que respecta a la autorización de navegación en zonas protegidas, se recuerda que la autorización de navegación debe supeditarse a los requisitos de las zonas protegidas, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esos requisitos o condicionantes se sustancian en el informe que debe emitir, con carácter previo a la autorización de navegación, el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. Por tanto, no cabe el protocolo de compatibilización al que se refiere la alegante, sino que debe analizarse caso a caso cada autorización y cada espacio protegido.

Alegación 6.

Se solicita la incorporación efectiva del sector federado del piragüismo en la persona jurídica de la RFEP o la federación autonómica correspondiente en: Consejo del Agua de la Demarcación (vocalía de asociaciones y organizaciones en defensa de intereses económicos y sociales relacionados con el agua); Junta de Gobierno de la Confederación, conforme a la propuesta literal del LVGA (p. 20); Asamblea de Usuarios, Juntas de Explotación y Comisiones de Desembalse, conforme a la propuesta del LVGA (p. 35); y grupos de trabajo técnicos cuyos temas afecten a la actividad federada. Subsidiariamente, y para el supuesto de que la estructura reglamentaria vigente no permitiera la incorporación inmediata en alguno de los órganos citados, se propone su articulación mediante grupos técnicos, mesas de trabajo o mecanismos equivalentes de participación estable compatibles con dicha estructura organizativa.

Respuesta:

La representación de los agentes del agua en el Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica del Duero está regulada por el Real Decreto 1364/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero. En el artículo 5.f) se indica cuál es la representación de las asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales, económicos y sociales relacionadas con el agua: asociaciones agrarias, dos vocales; asociaciones ecologistas, dos vocales; asociaciones empresariales, un vocal y organizaciones sindicales, un vocal. La designación de estos vocales se hace por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para tres años, a propuesta de las asociaciones y organizaciones con mayor implantación o más representativas en la demarcación hidrográfica. En ninguno de los grupos se citan específicamente las federaciones deportivas, salvo que alguno de los grupos identificados decida proponerlas como vocales, por lo que únicamente la modificación del Real Decreto daría cobertura a la presencia de federaciones deportivas en el Consejo del Agua.

La representación de los agentes del agua en la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca se regula en el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. En su artículo 29 se indica que los usuarios dispondrán al menos de un tercio de los vocales, siendo la representación de los distintos tipos de uso proporcionada a los respectivos intereses implicados, habiendo en todo caso, al menos, un Vocal representante por cada uno de los usos de abastecimiento de agua, regadíos y aprovechamientos energéticos. La designación de los usuarios se hace por la Asamblea de usuarios, de conformidad con el artículo 30 del mismo Real Decreto. Lo mismo sucede con los vocales de la Comisión de Desembalse. En tanto no se modifique este Reglamento no será posible atender a la alegación.

La representación de los agentes del agua en la Asamblea de Usuarios se regula igualmente en el citado Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. En su artículo 35 se indica que está integrada por todos aquellos usuarios que forman parte de las Juntas de Explotación.

La representación de cada uso en las Juntas de Explotación se regula en los artículos 41 y siguientes del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, y se eligen mediante votación entre los diversos usos a partir de los Elencos oficiales que recogen a todos los usuarios de cada ámbito territorial. En estos Elencos no figuran las autorizaciones de navegación al no ser considerados usuarios.

Alegación 7.

Se solicita, con fundamento en el art. 49 quinquies RDPH y en la ficha relativa a caudales ecológicos del EpTI, que el futuro Plan Hidrológico reconozca expresamente a la RFEP y a las federaciones autonómicas integradas como agente implicado en los procesos de revisión, concertación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales ecológicos en las masas de agua donde se desarrolla actividad reglada en la demarcación.

Respuesta:

El EpTI de la demarcación hidrográfica del Duero no incluye ficha del tema importante “caudales ecológicos”. Tampoco identificamos la relación del contenido del artículo 49 quinquies con la

sugerencia de que se considere a la alegante y sus asociados agente implicado en el proceso de revisión, concertación y seguimiento adaptativo del régimen de caudales. La revisión de caudales se llevará a cabo en fase de plan hidrológico a la vista del seguimiento realizado durante el plazo de vigencia del actual Plan Hidrológico, de acuerdo con lo que disponen los artículos 42.1.b.c' TRLA; arts. 49 ter y 49 quinquies RDPH. Del seguimiento de caudales ecológicos se da cuenta en todos los informes anuales que publica el Organismo de cuenca en aplicación de los artículos 87 y siguientes del RPH y que puede encontrar en la web de la Confederación (https://www.chduero.es/web/guest/plan-hidrologico-2022).

La participación de los agentes afectados se canaliza a través de los procesos generales de participación y concertación de caudales, sin que proceda un reconocimiento singular de un sector concreto en el EpTI. No obstante, dado el interés en participar en el proceso de concertación de caudales ecológicos, tomamos nota para invitar a la alegante a las sesiones que se organicen durante la fase de elaboración del Plan Hidrológico.

Alegación 8.

Se propone que el Plan Hidrológico recoja expresamente el deber de la Confederación Hidrográfica de (i) coordinar las restricciones de navegación, cotas de embalse y temporadas de pesca con el calendario oficial federativo mediante mecanismo de aviso temprano bidireccional; (ii) convocar a la RFEP y a las federaciones autonómicas integradas en los procesos de elaboración y revisión de planes y programas sectoriales de la demarcación que afecten a la navegación deportiva federada; y (iii) anticipar la incorporación del deporte federado como categoría propia en dichos procesos, al amparo del art. 51.2 RDPH.

Respuesta:

De las tareas citadas en la alegación no corresponde a los organismos de cuenca *coordinar las temporadas de pesca con el calendario oficial federativo*. La regulación de la pesca cae en la esfera de competencias de otras administraciones distintas a la hidráulica y el calendario federativo también.

Las restricciones a la navegación, como se ha indicado en la respuesta a la alegación segunda, ya figuran en la Normativa vigente que afecta a la demarcación hidrográfica, que será ampliada mediante estudios específicos que se pondrán en marcha. Las cotas de embalses en cada momento del año están delimitadas por las normas de explotación de cada presa, por su plan de seguridad, por las disposiciones que aprueba cada la Comisión de Desembalses (tal y como señala el artículo 45 del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio) y por los usos previstos para cada embalse, sin menoscabo de las obligaciones derivadas del artículo 55.2 del TRLA. En la medida de lo posible se trata de armonizar la explotación de los embalses con otros usos comunes como puede ser la pesca o la navegación, pero sin olvidar que son los usos prioritarios los que deben ser atendidos.

Se toma nota de la reclamación para participar en la elaboración de los planes hidrológicos de la alegante que tiene cabida en los procesos de participación activa que se desarrollen en fase de redacción del Plan Hidrológico. No obstante, se reitera lo indicado en la respuesta a la alegación cuarta que la alegante y alguna de sus federaciones regionales han sido invitados a determinados actos organizados en la fase de EpTI

Alegación 9.

Se propone que el Plan Hidrológico articule protocolos objetivos y proporcionados de compatibilización entre el deporte federado acuático y náutico y los demás usos concurrentes (pesca fluvial, aprovechamiento hidroeléctrico, abastecimiento, protección ambiental, baño), sustituyendo eventuales reglas unilaterales de prioridad por mecanismos recíprocos y motivados de compatibilización.

Respuesta:

Como se ha indicado la Normativa del Plan Hidrológico vigente en su artículo 31 incluye criterios para el otorgamiento de autorizaciones de navegación. Las que la alegante denomina "reglas unilaterales" son reglas que derivan de las normas vigentes como son el Reglamento de la Administración Pública del Agua o el TRLA, a las que se ajusta la acción. En todas ellas se trata de armonizar la gestión del agua con todos los usos de la misma, pero con el respeto previsto en las normas a las diversas actividades que son corresponsables con el mantenimiento y la amortización de las infraestructuras del agua.

Alegación 10.

Se solicita a la Confederación Hidrográfica del Duero aclaración formal sobre la convocatoria efectiva, en los trabajos del EpTI, de las autoridades autonómicas competentes en materia de Deporte y Ocio (art. 148.1.19 CE) de los territorios afectados por la demarcación, y, en todo caso, su convocatoria efectiva en los sucesivos trámites del ciclo de planificación. Fundamento: art. 3 Ley 40/2015 (lealtad institucional, cooperación, coordinación); arts. 25 bis y 26 TRLA; art. 41 CDFUE.

Respuesta:

En el ámbito de la demarcación hidrográfica del Duero hay ocho comunidades autónomas que son: Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Todas ellas tienen representación en el Consejo del Agua de la demarcación y en el Comité de Autoridades Competentes. Los representantes de cada comunidad autónoma en estos órganos colegiados los determina cada uno de los gobiernos autonómicos, tal y como se indica en las normas que regulan ambos. Ninguno de los gobiernos de las comunidades autónomas citadas ha designado representantes de las consejerías competentes en materia de cultura, deporte y ocio. Puede consultar la representación de cada comunidad autónoma en las actas de las reuniones de ambos órganos colegiados (https://www.chduero.es/web/guest/organizacion). Por tanto, esta Confederación entiende que las autoridades competentes no consideran el ámbito al que se refiere la alegante tan relevante como otros para que participen en los órganos donde se dirige, prepara e informa el proceso de planificación hidrológica. El Consejo del Agua trabaja en pleno y en comisiones; en una de estas comisiones, la comisión de Planificación Hidrológica y participación Ciudadana se abordó específicamente la preparación del EpTI; puede consultar los asistentes y los asuntos debatidos en el borrador de Acta (https://www.chduero.es/actas-de-organos-colegiados).

Alegación 11.

Se alega que la ficha relativa a coordinación entre administraciones y los documentos subsiguientes del ciclo de planificación incorporen expresamente la competencia propia del municipio en promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre (art. 25.2.l LRBRL), al estar

materialmente afectada por la planificación hidrológica. Por ello se solicita el reconocimiento expreso de los ayuntamientos ribereños con actividad federada reglada como administraciones locales concernidas, con cauces de interlocución con la Confederación en materia de infraestructuras deportivas ligadas al DPH (rampas de botadura, pantalanes, hangares, zonas de embarque/desembarque, instalaciones de tecnificación).

Respuesta:

Las administraciones locales ya están integradas en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión, coordinación, planificación y consulta. Tanto el Consejo del Agua de la demarcación, como el Comité de Autoridades Competentes, Junta de Gobierno, Comisión de Desembalse o las Juntas de Explotación hay representación de los municipios, tanto los ribereños como otros no ribereños. Participan defendiendo sus intereses que no siempre son los mismos que plantea la alegante ya que cuestiones como abastecimiento, depuración, estado de los cauces en sus municipios, etc. Son consideradas más relevantes ya que afectan a la totalidad de los vecinos y no solo a algunos de ellos que pueden practicar los deportes náuticos federados. No obstante, sí hay representantes de los municipios que reclaman esas mejoras que demanda la alegante en estos órganos como ha ocurrido por ejemplo con las localidades ribereñas de grandes embalses o de cauces importantes. Por tanto, se considera suficiente la representación actual de los municipios en los órganos colegiados para poner de manifiesto las preocupaciones de la alegante.

Alegación 12.

Se solicita que el Programa de Medidas del futuro Plan Hidrológico valore, en su caso y previa evaluación técnico-ambiental específica, la viabilidad de la tipología de canales federativos de slalom como solución híbrida ambiental-deportiva, con cobertura normativa en los arts. 18 y 126 bis del RDPH y con apoyo técnico en el manual del MITECO «Escalas y pasos de peces» (OAPN, 2022). Su eventual consideración tendría carácter complementario y condicionado a la plena compatibilidad con los objetivos ambientales y presupuestarios del Plan.

Respuesta:

El Programa de medidas se construye con las aportaciones de todas las administraciones con competencias relacionadas con el agua. En ese sentido invitamos a la alegante a que solicite a los departamentos administrativos competentes en materia de cultura, deporte y ocio, que propongan esas medidas que sugiere en la fase de redacción del Plan Hidrológico, concretando plazos, importes, agente responsable de ejecutar la medida y ubicaciones. De esta forma puede analizarse su viabilidad y, si fuera positiva, incluirlas como medidas en el Plan Hidrológico vinculada a un agente específico.

Alegación 13.

Se pide a la Confederación Hidrográfica del Duero que motive expresamente la coherencia de sus decisiones planificadoras con la segunda línea de misión institucional del Ministerio del que depende (el Reto Demográfico) y con las conclusiones del Informe temático del LVGA sobre la relevancia económica de los usos recreativos en el medio rural despoblado.

Respuesta:

Según la propia alegante el Libro Verde del Agua (LVGA 2020) señala *que la ordenación restrictiva e indiferenciada de la navegación en embalses interiores y en tramos regulados, sin incorporación del deporte federado como categoría de uso económico y social capaz de fijar población, agrava materialmente la despoblación en territorios rurales y dificulta objetivamente la creación de nuevos clubes federados, en contradicción con la segunda línea de misión institucional del propio Ministerio del que depende esta Confederación: el Reto Demográfico.*

No acertamos a entender cuál es la reclamación de la alegante en relación con la propuesta del LVGA 2020 y las supuesta "ordenación restrictiva e indiferenciada" de la navegación en embalses y ríos regulados. La Confederación restringe la navegación en determinados embalses y tramos regulados cuando entiende que ésta puede suponer un perjuicio para el medio ambiente o para otros usos. Restringir la navegación cuando su incidencia en la propagación de especies exóticas es relevante, o cuando se puede afectar a tomas de abastecimiento o cuando entra en colisión con otros usos comunes como la pesca, no nos parece que sea atentar contra el reto demográfico sino proteger el medio hídrico, algo que también es relevante para el reto demográfico.

Por otra parte, se llama la atención sobre el hecho de que el documento LVGA 2020 es un documento marco programático, sin fuerza de ley, y que para que sea operativo y ejecutivo debe ser trasladado a normativa vinculante. El departamento ministerial que impulsó el LVGA 2020 señala que esta iniciativa *ha buscado abrir espacios de debate y generar propuestas de mejora en colaboración con los actores institucionales y las partes interesadas. El objetivo ha sido avanzar en la construcción colaborativa de un modelo de gobernanza del agua que nos permita hacer frente a los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la gestión del agua. Se trata, al fin y al cabo, de lograr la mejora ambiental que permita asegurar la disponibilidad de agua, en cantidad y calidad, para las personas y para las actividades económicas que dependen de ella.* Pero lejos de esos nobles objetivos, han pasado seis años y no todas las ideas y propuestas identificadas en el LVGA 2020 han sido llevadas a la gestión ordinaria del agua, muchas veces por cuestiones de prioridad, otras por incompatibilidad de las propuestas con el marco normativo vigente. Y una de ellas es la que se reclama en esta alegación (y en otras de sentido opuesto) sobre el efecto de la planificación hidrológica sobre el reto demográfico, algo que nadie sabe en qué consiste como se ve por la divergencia de enfoques del tema y las posibles soluciones.

Alegación 14.

Se pide a la Confederación Hidrográfica del Duero motive expresamente las razones por las que la política planificadora de esta demarcación difiere, en su caso, del criterio aplicado por otras Confederaciones Hidrográficas del Estado respecto del uso deportivo federado, en aras del principio de coherencia del conjunto de la Administración del Estado (art. 3 de la Ley 40/2015), habida cuenta de que el presente escrito se presenta de forma coordinada y materialmente homogénea en las demarcaciones intercomunitarias de competencia estatal.

Respuesta:

Este Organismo de cuenca desconoce la regulación de otras cuencas del deporte federado vinculado a la navegación que, por otra parte, no aclara la alegante. En materia de autorizaciones de navegación

los criterios que sigue la CHD está avalados por las normas de rango superior como son las disposiciones del RDPH y del TRLA.

Por otra parte, el alegado *principio de coherencia el conjunto de la Administración del Estado* que según la alegante se basa en el art. 3 de la Ley 40/2015, no se cita en la citada Ley, sino que en el artículo 3 se habla de que las Administraciones públicas debe actuar con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, la Ley y el Derecho. En este sentido cabe recordar que los organismos de cuenca tienen territorios, problemas y gestiones distintos, justamente porque la realidad ambiental, económica y social es distinta en cada cuenca. Lógicamente todas deben someterse a la Ley y el Derecho general que normalmente deja un ámbito de discrecionalidad para que los principios generales se adapten a las peculiaridades de cada cuenca.

Alegación 15.

Se propone la inclusión de una cláusula con la siguiente redacción literal o equivalente: «La Demarcación Hidrográfica reconocerá el deporte federado acuático y náutico no motorizado como uso común especial cualificado y no consuntivo del dominio público hidráulico, promoviendo mecanismos de compatibilización ambiental, participación institucional y coordinación administrativa en aquellas masas de agua donde exista actividad federada reglada por las federaciones deportivas con utilidad pública legal y funciones públicas delegadas.».

Respuesta:

No se acepta la alegación por lo señalado en respuestas anteriores, al no considerar que el deporte federado acuático deba tener una singularidad especial respecto a otros usos comunes.

Alegación 16.

Se solicita que el futuro Plan Hidrológico recoja, en su Programa de Medidas o en el correspondiente apartado normativo, una orientación de armonización del régimen económico aplicable al uso deportivo federado del DPH, generalizando los precedentes reglamentarios ya existentes en el propio sistema estatal de Confederaciones. En particular, se invocan como precedentes reglamentarios consolidados, vinculantes para sus respectivos ámbitos territoriales y orientativos para la armonización pretendida: (i) la Resolución de 3 de julio de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la que se revisan los cánones de utilización de los bienes del dominio público hidráulico (BOE-A-2017-8145), que establece la exención del canon de utilización del DPH para la primera embarcación de cada deportista que acredite estar dado de alta en la oportuna federación oficial en el momento de realizar la solicitud de autorización o declaración responsable;

(ii) la práctica acreditada en las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico de tramitación gratuita de la declaración responsable de navegación y flotación; y

(iii) la Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 2 de septiembre de 2011 (BOE-B2011-31211), que articula la presentación de declaración responsable por clubes deportivos inscritos en el Registro de Asociaciones deportivas del Consejo Superior de Deportes o en el Registro autonómico correspondiente y federados, con régimen económico diferenciado significativamente más favorable para el ejercicio federado del uso.

De esta forma se evitaría que clubes y deportistas federados soporten cargas económicas o administrativas desproporcionadas en relación con un uso común especial reglado, trazable y no consuntivo.

Respuesta:

El régimen de utilización del DPH -autorizaciones, declaración responsable, condiciones tipo, cánones- está regulado por el TRLA (RDL 1/2001) y el RDPH (RD 849/1986), y no es objeto de la planificación hidrológica, cuyo contenido (arts. 40-42 TRLA; art. 79 RPH) son los objetivos, el diagnóstico del EpTI y el programa de medidas, no el régimen de uso individual del dominio. La habilitación del art. 51.2 RDPH para fijar «condiciones, cupos y requisitos» de los usos comunes especiales la ejerce el organismo de cuenca mediante sus propios instrumentos (autorizaciones o instrucciones), no a través del EpTI o del plan. El uso federado no contribuye a los costes de las obras hidráulicas (canon de regulación y tarifa de utilización del agua, art. 114 TRLA), sin perjuicio de que abone el canon de utilización de los bienes del DPH (art. 112 TRLA). Los precedentes citados (Miño-Sil, Júcar) son resoluciones singulares de esos organismos en el ejercicio de su competencia, no contenido de planificación, y su eventual generalización corresponde al régimen de autorizaciones de cada organismo.

Como se ha indicado anteriormente, actualmente la Comisaría de Aguas de esta Confederación está realizando un estudio de la cuenca del Duero a efectos de navegación. Entre los aspectos contemplados en el estudio, se incluye la revisión del canon de utilización del dominio público hidráulico para el ejercicio de la navegación, considerando, entre otras cuestiones, el enfoque adoptado por las distintas Confederaciones Hidrográficas, con el fin de que la propuesta de actualización favorezca, en la medida de lo posible, la coherencia y homogeneidad en su aplicación.

Alegación 17.

Se solicita que el futuro Plan Hidrológico recoja la conveniencia de articular un mecanismo de reconocimiento recíproco entre organismos de cuenca de la declaración responsable y de la matrícula de embarcación deportiva federada, cuando dicha embarcación se desplace entre demarcaciones para participar en pruebas oficiales del calendario federativo estatal o autonómico. La ausencia de armonización entre Confederaciones, con vinculación de la matrícula a una zona o cuenca específica y régimen económico independiente en cada demarcación, dificulta el ejercicio ordinario de las funciones públicas administrativas atribuidas al sistema federativo del piragüismo en materia de calificación y organización de competiciones oficiales (art. 50 de la Ley 39/2022). Esta alegación se formula sin perjuicio del régimen específico de bioseguridad (mejillón cebra, otras especies exóticas invasoras y, en general, riesgo de transferencia interbasinaria de patógenos o especies), que debe seguir aplicándose mediante protocolo coordinado entre organismos de cuenca, con aviso temprano bidireccional y con la colaboración técnica del sistema federativo a través de la oferta operativa formulada en el bloque VI del presente escrito.

Respuesta:

El art. 51 del TRLA, determina que el ejercicio de la navegación y flotación, como uso común especial del DPH, requerirá previa declaración responsable. De acuerdo con el art. 51 del RDPH, los Organismo de Cuenca, deben establecer, atendiendo a las características y circunstancias de cada cuenca

hidrográfica, las condiciones, cupos y demás requisitos que deben observarse en el ejercicio del citado uso y conforme a los cuales se valorará la compatibilidad de la actividad con la protección del DPH.
En consecuencia, la compatibilidad del ejercicio de la navegación con una determinada embarcación con la protección del DPH, deberá ser analizado en cada caso, atendiendo a las características y circunstancias propias de cada cuenca hidrográfica.

Por otra parte, el art. 58 del RDPH, establece que toda embarcación que navegue por las aguas continentales de una cuenca hidrográfica, con la excepción de las previstas en el art. 56, deberá ir provista de matrícula normalizada. Se eximirán de los requisitos de matriculación a las embarcaciones respecto de las que presente declaración responsable para navegar exclusivamente con motivo de descensos de ríos, pruebas deportivas y otras ocasiones similares de carácter esporádico. En lo que respecta al canon, de conformidad con el art. 63.2 del Reglamento, las declaraciones de navegación por cuencas continentales quedan sometidas al canon por utilización del DPH a se refiere el art. 112 del TRLA.

Alegación 18.

Que la Confederación Hidrográfica del Duero promueva, en coordinación con la Dirección General del Agua y con los restantes organismos de cuenca, un mecanismo de reconocimiento recíproco interconfederal de la declaración responsable y de la matrícula para embarcaciones de uso deportivo federado que se desplacen entre demarcaciones para participar en pruebas oficiales del calendario federativo estatal o autonómico, sin perjuicio del régimen específico de bioseguridad coordinado entre organismos de cuenca y con colaboración técnica del sistema federativo del piragüismo.

Respuesta:

De acuerdo con el art. 51 del RDPH, los Organismos de cuenca, deben establecer, atendiendo a las características y circunstancias de cada cuenca hidrográfica, las condiciones, cupos y demás requisitos que deben observarse en el ejercicio del citado uso y conforme a los cuales se valorará la compatibilidad de la actividad con la protección del DPH. En consecuencia, la compatibilidad del ejercicio de la navegación con la protección del DPH, deberá ser analizado en cada caso, atendiendo a las características y circunstancias propias de cada cuenca hidrográfica.

No obstante, la Dirección General del Agua coordina un Grupo de Trabajo con representantes de los diferentes Organismos de Cuenca, cuyo objetivo es armonizar criterios y consensuar aspectos clave del ejercicio de la navegación.

4.16. Escrito de observaciones Nº 017 y similares

Se muestra a continuación los agentes que han presentado escritos de POS con el mismo contenido y que son respondidas de forma conjunta para todos ellos.

Nº POS	Presentado por:	En nombre:
N017	D. Patricio Martínez Pantoja Sánchez	Federación Autonómica de Piragüismo de La Rioja
N027	D. José Ángel Sánchez Ortiz	Federación Autonómica de Piragüismo de Castilla-La Mancha

Alegación 1.

Se solicita que el EpTI incorpore expresamente al piragüismo federado, y por extensión a las actividades acuáticas y náuticas federadas, como categoría planificadora propia, diferenciada del agregado genérico de "usos recreativos" o "otros usos". El reconocimiento debe operar tanto en el plano cuantitativo (desagregación estadística específica) como en el plano cualitativo (caracterización del sector como actor con condición jurídica cualificada y funciones públicas delegadas).

Respuesta:

El TRLA en su artículo 50 señala que se consideran usos comunes del agua superficial mientras discurren por sus cauces naturales beber, bañarse, otros usos domésticos o abrevar el ganado. Estos usos deben llevarse a cabo de forma que no se produzca una alteración de la calidad y caudal de las aguas. La actividad que representa la alegante se encuadraría en los usos comunes especiales (navegación, flotación, establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos y otros que permitan la utilización de recursos a terceros) que regula el artículo 51 del TRLA. Para todos ellos es preceptivo la declaración responsable. Por tanto, la normativa de aguas vigente no identifica la categoría de uso que la alegación atribuye al uso *piragüismo federado* acuático y náutico. Tampoco lo ha hecho el Plan Hidrológico del Duero ya que a los efectos de la gestión del DPH, competencia de los organismos de cuenca, no es relevante la tipología o singularidad que solicita la alegante. Por otra parte, no se considera que deba ocupar un epígrafe independiente en la Ficha DU-10 que tiene un enfoque diverso al que propone la alegante y en la actualidad no representa un tema importante en la demarcación hidrográfica.

Alegación 2.

Se solicita que la regulación de las zonas protegidas y de los protocolos de bioseguridad frente a especies exóticas invasoras, en cuanto afecten al piragüismo federado, se articule conforme al estándar reforzado de participación. Deberán articularse protocolos diferenciados para la actividad federada que reconozcan la capacidad técnica de las federaciones para implementar medidas de bioseguridad efectivas (limpieza de embarcaciones, formación de deportistas, trazabilidad de desplazamientos) y eviten prohibiciones generalizadas que no distingan entre el uso federado y otros usos.

Respuesta:

En el EpTI del Duero no se aborda el concepto de "protocolos de bioseguridad frente a especies exóticas invasoras", o el "estándar reforzado de participación" o los "protocolos diferenciados para la actividad federada", que en realidad no se sabe a qué se refiere. El régimen de navegación está regulado a través de la autorización o declaración responsable, donde se establecen los requisitos específicos en materia de bioseguridad, para cualquier tipo de navegación, sea federada o de competición o no.

Por lo que respecta a la autorización de navegación en zonas protegidas, se recuerda que la autorización de navegación debe supeditarse a los requisitos de las zonas protegidas, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esos requisitos o condicionantes se sustancian en el informe que debe emitir, con carácter previo a la autorización de navegación, el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. Por tanto, no cabe un protocolo de compatibilización que obvie los requisitos de las zonas protegidas o sea genérico para cualquier zona protegida, sino que debe analizarse caso a caso cada autorización y en cada espacio protegido.

Alegación 3.

Se solicita que el EpTI incorpore, en el marco del Tema Importante correspondiente a la coordinación entre Administraciones Públicas, la articulación de mecanismos estables de interlocución técnica con la RFEP y con las federaciones autonómicas. Esta articulación debe alcanzar a la Administración General del Estado (Dirección General del Agua, organismos de cuenca), a las administraciones autonómicas con competencias concurrentes y al CSD

Respuesta:

Ni el EpTI ni el Plan Hidrológico deben abordar cuáles son los mecanismos de interlocución técnica entre usuarios y administración, que por otra parte ya existen. El Consejo del Agua, la Junta de Gobierno, la Comisión de Desembalse, las Juntas de Explotación y el Comité de Autoridades competentes son los órganos que establece la normativa vigente para garantizar la gestión, la coordinación y la colaboración en la planificación hidrológica por parte de los usuarios.

La representación de los agentes del agua en el Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica del Duero está regulada por el Real Decreto 1364/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero. En el artículo 5.f) se indica cuál es la representación de las asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales, económicos y sociales relacionadas con el agua: asociaciones agrarias, dos vocales; asociaciones ecologistas, dos vocales; asociaciones empresariales, un vocal y organizaciones sindicales, un vocal. La designación de estos vocales se hace por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para tres años, a propuesta de las asociaciones y organizaciones con mayor implantación o más representativas en la demarcación hidrográfica. En ninguno de los grupos se citan específicamente las federaciones deportivas, salvo que alguno de los grupos identificados decida proponerlas como vocales, por lo que únicamente la modificación del Real Decreto daría cobertura a la presencia de federaciones deportivas en el Consejo del Agua.

La representación de los agentes del agua en la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca se regula en el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. En su artículo 29 se indica que los usuarios dispondrán al menos de un tercio de los vocales, siendo la representación de los distintos tipos de uso proporcionada a los respectivos intereses implicados, habiendo en todo caso, al menos, un Vocal representante por cada uno de los usos de abastecimiento de agua, regadíos y aprovechamientos energéticos. La designación de los usuarios se hace por la Asamblea de usuarios, de conformidad con el artículo 30 del mismo Real Decreto. Lo mismo sucede con los vocales de la Comisión de Desembalse. En tanto no se modifique este Reglamento no será posible atender a la alegación.

La representación de los agentes del agua en la Asamblea de Usuarios se regula igualmente en el citado Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. En su artículo 35 se indica que está integrada por todos aquellos usuarios que forman parte de las Juntas de Explotación.

La representación de cada uso en las Juntas de Explotación se regula en los artículos 41 y siguientes del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, y se eligen mediante votación entre los diversos usos a partir de los Elencos oficiales que recogen a todos los usuarios de cada ámbito territorial. En estos Elencos no figuran las autorizaciones de navegación al no ser considerados usuarios.

Además de estos conductos, cada vez que se revisa un plan hidrológico se promueve una fuerte participación pública, algo que está preceptuado por la normativa vigente. Todo aquel actor que está interesado en participar puede hacerlo a través de estos canales. De hecho, la Real Federación Española de Piragüismo ha sido invitada a las actividades de participación organizadas en las fases de Documentos iniciales y EpTI del presente ciclo de planificación hidrológica; lo mismo cabe decir de la Federación de Piragüismo de Castilla y León. La alegante, hasta ahora no invitada al no disponer de su contacto, puede ser invitada a partir de esta alegación.

Finalmente, la Confederación está abierta a mantener reuniones específicas sobre los temas que afectan a los diversos agentes con el fin de intercambiar puntos de vista, valorar los problemas que encuentra cada uno y analizar las soluciones que pueden arbitrarse con respeto a la normativa vigente.

Alegación 4.

Se solicita la corrección metodológica de la cuantificación de los usos recreativos y deportivos mediante: a) desagregación específica del uso deportivo federado en los cuadros estadísticos; b) caracterización cualitativa del sector federado, con identificación de las federaciones autonómicas activas en la demarcación, número aproximado de licencias federativas, calendarios de eventos y zonas habituales de práctica; c) reconocimiento expreso de la condición no consuntiva de la actividad federada

Respuesta:

En el EpTI de la demarcación hidrográfica del Duero no hay ninguna referencia a la cuantificación de los usos recreativos y deportivos porque no se ha considerado un tema importante, por lo que no entendemos a qué se refiere la alegación. En la normativa de aguas vigente no existe el uso “recreativo federado”, sino el uso común “navegación”, no conociendo esta Confederación ninguna norma que ampare la pretensión de la alegante. Como se ha indicado en la respuesta a la alegación primera, la

Normativa del Plan vigente establece algunos criterios específicos para las autorizaciones especiales de navegación, como podría ser la de competiciones deportivas federadas, y se está trabajando en la elaboración de criterios para la armonización de usos comunes sobre tramos de ríos y embalses. No se considera que se una tarea del Organismo de cuenca realizar una *trazabilidad estadística del uso recreativo federado*, ya que hay otras instancias que pueden realizar esos trabajos: el Organismo de cuenca dispone de los datos de autorizaciones de navegación en general, sin poder discriminar si es uso federado o no. Ese dato global es el que se utilizará para establecer los criterios de armonización de las autorizaciones de navegación.

Alegación 5.

Se solicita que la ordenación y el control del dominio público hidráulico, en cuanto afecten al piragüismo federado, se ajusten a los principios de proporcionalidad, ponderación expresa y evitación de cargas innecesarias. En particular, las cargas económicas anudadas a trámites recurrentes (declaraciones responsables, autorizaciones de eventos, cánones) deben ser objeto de revisión específica respecto del sector federado, en atención a su condición de utilidad pública legal y a la naturaleza no lucrativa de la actividad.

Respuesta:

El equilibrio entre cargas administrativas, garantías del uso del agua y respeto al resto de usuarios es bueno buscarlo, pero no siempre es posible dada la variedad de usuarios, masas de agua y usos. Este equilibrio es el que buscan los procedimientos administrativos vigentes para la autorización de las actividades que se desarrollan en el DPH. Las cargas económicas no tienen un fin recaudatorio, sino meramente compensar la gestión administrativa y mejorar la protección del DPH. Sin duda hay campo de mejora en esta materia: la administración puede ser más ágil en la tramitación de las autorizaciones, al igual que los usuarios pueden ser más diligentes en sus solicitudes, tanto en plazo como en cuanto a calidad de la documentación aportada. Sin embargo, una vía intermedia que aligere cargas en detrimento de la seguridad para el DPH o el medio ambiente no puede ser admitida por los organismos de cuenca.

No obstante, se toma nota de la alegación para mejorar los mecanismos internos que afectan a la navegación, singularmente, la deportiva.

Alegación 6.

Se solicita que la categoría de impactos sobre el deporte federado en aguas continentales sea expresamente incorporada al catálogo de impactos relevantes del Estudio de Adaptación al Cambio Climático y considerada en la priorización de medidas de adaptación, con participación de la RFEP y de la federación autonómica en los mecanismos de gobernanza adaptativa que se diseñen.

Respuesta:

El marco conceptual de la evaluación de riesgos climáticos que utiliza el Estudio de Adaptación al Cambio Climático (EACC) es el correspondiente al Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5, 2014), que formaliza la definición de riesgo como una función de la probabilidad de ocurrencia de un peligro y de las consecuencias derivadas de la exposición y vulnerabilidad de los sistemas afectados, introduciendo un marco conceptual que integra estos tres componentes. Este marco se incorpora en

el Plan nacional de Adaptación al cambio Climático como base para la planificación y ejecución de las acciones de adaptación al cambio climático en España. El Sexto Informe de Evaluación del IPCC (AR6, 2022) refina y amplía el modelo incorporando riesgos compuestos, en cascada y sistémicos, y la influencia de las respuestas de adaptación.

La catalogación de impactos y riesgos parte del mandato del RPH y de la Ley 7/2021, para la identificación de los principales impactos del cambio climático tanto sobre el estado de las masas de agua y los ecosistemas asociados como sobre las actividades socioeconómicas dependientes del agua. En particular, el TRLA (art. 60) y el RDPH (art. 49 bis) orientan la clasificación de las actividades económicas afectadas, mientras que el RPH hace hincapié en las afecciones al estado de las masas de agua y en los impactos derivados de la retención de sedimentos en embalses.

Tal y como se ha señalado en la sección 4.3, el EACC adopta un criterio operativo que trabaja con una única lista de "situaciones de impacto/riesgo", en la que los impactos potenciales (en el sentido de la Guía de la Oficina Española de Cambio Climático, OECC, y del IPCC) se tratan como categorías de riesgo a evaluar, sin perder de vista la distinción conceptual entre riesgo e impacto. El catálogo se ha apoyado en las siguientes referencias:

• Las listas de impactos de la Guía OECC 2025 que distingue entre impactos sobre el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas y sobre las actividades socioeconómicas (abastecimiento, regadío, energía, usos recreativos, acuicultura).

• Las cadenas de impacto y listas sectoriales desarrolladas en la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España (ERICC-2025), en particular, los riesgos clave de los sectores Agua, que permiten incorporar efectos sistémicos y en cascada.

• Otras fuentes nacionales e internacionales.

Como consecuencia, el EACC elabora la lista de impactos siguiente:

Código	Descripción
SW: Impactos en aguas superficiales	
SW1	Aumento de la intermitencia de ríos y arroyos
SW2	Aumento de la concentración de contaminantes por menor dilución
SW3	Alteraciones de parámetros fisicoquímicos (pH, salinidad)
SW4	Incremento de turbidez y sólidos en suspensión
SW5	Eutrofización de masas de agua lénticas
SW6	Contaminación difusa provocada por inundaciones
SW7	Empeoramiento del estado de las masas de agua superficiales (DMA)
GW. Impactos en aguas subterráneas	
GW2	Merma de calidad química de las aguas subterráneas
GW3	Empeoramiento del estado de las masas de agua subterráneas (DMA)
ECS. Impactos territoriales y ecosistémicos	
ECS1	Elevación de la temperatura del agua en ríos, lagos y embalses
ECS2	Deterioro de la funcionalidad de los hábitats acuáticos
ECS3	Alteración de las comunidades biológicas (fauna y flora)
ECS4	Afección a especies emblemáticas y endémicas
ECS5	Degradación de ecosistemas ribereños y terrestres asociados
ECS6	Expansión de especies exóticas invasoras
ECS7	Proliferación de patógenos y contaminantes emergentes
ECS8	Incremento de la sedimentación en embalses y cauces
ECS9	Daños sistémicos (sociales, económicos, ambientales) por sequía prolongada
ECS10	Daños sistémicos por avenidas fluviales e inundaciones pluviales
ECS13	Incremento de la incidencia de incendios forestales asociados al clima
AU. Impactos en abastecimiento y saneamiento urbano	
AU1	Reducción de la garantía de suministro al abastecimiento
AU2	Incremento de la demanda de agua potable

Código	Descripción
AU3	Deterioro de la calidad del agua bruta para potabilización
AU4	Estrés en las redes de saneamiento y drenaje urbano
AU5	Daños en los servicios del ciclo urbano del agua por inundaciones
AU6	Problemas de salud pública asociados al agua
AG. Impactos en el sector agrario	
AG1	Mayor estrés hídrico en cultivos de secano
AG2	Reducción de la garantía de suministro del regadío
AG3	Incremento de la demanda de riego
AG4	Cambios en la idoneidad de cultivos y en los calendarios agrícolas
AG5	Proliferación de plagas, malas hierbas y enfermedades
AG6	Impactos en la producción ganadera intensiva
AG7	Impactos en la producción ganadera extensiva
AG8	Daños agrícolas por eventos hidrometeorológicos extremos distintos de la sequía
AG9	Pérdida de fertilidad o erosión de suelos
EI. Impactos en los sectores energético e industrial	
EI1	Disminución de la producción hidroeléctrica
EI2	Limitaciones en la refrigeración de centrales térmicas e industriales
EI3	Daños en infraestructuras energéticas por eventos extremos
EI4	Afectación de la producción industrial por escasez de agua
EI5	Impacto en la bioenergía y nuevos sistemas energéticos
RE. Impactos en los usos recreativos y turismo vinculados al agua	
RE1	Deterioro de la calidad de aguas de baño y recreo
RE2	Reducción de caudales y niveles en ríos y embalses
RE3	Pérdida de atractivos naturales vinculados al agua (cascadas, lagunas...)
RE4	Alteraciones en la temporada turística por clima extremo
AC. Impactos en la acuicultura y la pesca continental	
AC1	Descenso del rendimiento de la acuicultura por condiciones adversas
AC3	Cambios en las poblaciones de peces continentales
AC4	Nuevas enfermedades y parásitos en sistemas de cría

Como se observa, entre los impactos en los usos recreativos se incluye la reducción de caudales y niveles en ríos y embalses que podrían afectar a usos comunes como el baño, la navegación, la flotación, o la pesca. Pero no aparece como impacto “el deporte federado en aguas continentales” puesto que no es un impacto sino un uso vinculado al impacto RE2. Por se considera que los riesgos para la navegación ya se encuentran incluidos en el EACC a través de los impactos RE2.

No obstante, cualquier aportación de detalle que pueda aportar la alegante (no una simple referencia genérica) en relación con su solicitud puede ser valorada y en su caso incorporada al EACC.

4.17. Escrito de observaciones Nº 018 y similares

Se muestra a continuación los agentes que han presentado escritos de POS con el mismo contenido y que son respondidas de forma conjunta para todos ellos.

Nº POS	Presentado por:	En nombre:
N018	D. Rubén Delso Morales	Ayuntamiento de Tajahuerce.
N019	D. José Esteban Pinilla Lucas	Ayuntamiento de Pozalmuro
N020	D. David Vera Asensio	Ayuntamiento de Villar del Campo
N021	D. Raúl Lozano Corchón	Ayuntamiento de Hinojosa del Campo
N022	D. Luis Alfonso Millán Villares	Ayuntamiento de Pinilla del Campo
N080	D. José Miguel Fernández Salvador	Ayuntamiento de Valdegeña
N088	Dª. María Luisa Morales Carramiñana	Ayuntamiento de Aldeapozo

Alegación 1.

Considerar en el nuevo Plan Hidrológico, la posibilidad de realizar actuaciones especiales en determinados cauces para mejorar la capacidad de evacuación y evitar los daños por desbordamientos, siempre que haya motivos justificados, sustanciados en:

- *Se trate de un río con un cauce que presente particularidades "especiales"*
- *No existan otras posibilidades técnicas o económicas para mitigar o solucionar los problemas*
- *No existan daños colaterales a terceros de importancia*
- *No se perjudique a alguna especie en peligro de extinción*
- *La alteración del medio, aun pudiendo perjudicar a determinadas especies, mejore a otras también interesantes.*

En otro orden de cosas, la generación de bandas de protección de cauces, con vegetación de ribera, que se nombra en el EpTI choca con el agravante de que la titularidad de los terrenos colindantes con el canal fluvial propiamente dicho, es privada, con lo que no parece viable disponer de la superficie necesaria para tal fin, salvo que se articulen otros mecanismos.

Contemplar en el Plan Hidrológico 2028-2033 la posibilidad de realizar actuaciones de mantenimiento del cauce del río Rituerto desde su nacimiento en Valdegeña (ETRS89 UTM 30N 568297, 4627576) hasta Jaray (unos 12 km de longitud y una pendiente media de 0.6 m/km), más allá del condicionado que estipula el artículo 30 del vigente Plan Hidrológico 2022-2027, sin perjuicio de que sea necesaria la respectiva autorización previa las justificaciones necesarias.

Respuesta:

Sin duda la mejora de las condiciones hidrológicas de cauces es una tarea de gran peso en la cuenca a la que el Organismo de cuenca dedica anualmente varios millones de euros, posiblemente escasos para las necesidades crecientes, a labores de mantenimiento de cauces, como el que se solicita para el Rituerto. De hecho, el Programa de medidas del plan hidrológico vigente incluye un paquete de medidas de este tipo. Pero evidentemente no puede llegar a atender eficazmente a los más de 80.000 kilómetros de ríos y arroyos de la cuenca y actúa con criterios de conveniencia y racionalidad económica.

El tramo del río Rituerto al que se refiere la alegación se corresponde con la masa de agua 30400326 Río Rituerto 1. En el Plan Hidrológico vigente asociado a esta masa de agua hay las siguientes medidas:

Medida 6404209 (*Medida de restauración. Mejora de la conectividad lateral de la masa 30400326-Río Rituerto 1*) con un importe planificado de 2.257.515 €, cuyo estado actual es no comenzada.

Medida 6401953 (*Mejora del entorno. Río Rituerto. RECUPERACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y AMBIENTAL DEL COMPLEJO LAGUNAR CAMPO DE GÓMARA*) con un importe planificado de 1.795.610 €, cuyo estado actual es no comenzada

Medida 6404748 (*Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces de la provincia de Soria*), con un importe planificado de 2.550.000 € cuyo estado actual es en ejecución.

Tanto en el Plan vigente de 2023 como en el anterior de 2016, se incluyó un procedimiento más ágil para acometer determinadas labores de mejora de las condiciones de desagüe de los cauces. Así en el artículo 30 que cita el alegante se establece el sistema de declaración responsable para las denominadas actuaciones menores de conservación de cauces y zonas de policía. El mismo artículo hace un elenco de las que pueden considerarse actuaciones menores:

I. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera.

II. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce.

III. Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del dominio público hidráulico.

IV. Retirada de sedimentos y vegetación existente en el lecho del cauce, situados 50 metros aguas arriba y aguas abajo de las obras de fábrica y puentes con el fin de conservar su capacidad de drenaje.

V. Pequeñas actuaciones de mantenimiento de puentes e infraestructuras situadas sobre el cauce, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas no haya ocupación del dominio público hidráulico ni quede afectada su capacidad de desagüe.

VI. Mantenimiento de las secciones de estaciones de aforo.

VII. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos.

VIII. Cortas de arbolado bajo líneas eléctricas.

Para todas estas actuaciones la declaración responsable habilita el poder actuar por los particulares sin esperar a ninguna Resolución de la CHD, lo que agiliza notablemente la actuación.

Desconocemos a qué se refiere el alegante con “actuaciones especiales” por lo que poco podemos aportar en relación con los criterios que se sugieren que, a priori son razonable. No obstante, debe tenerse en cuenta que esos criterios son de difícil valoración cuando se ha de atender a miles de peticiones en un territorio tan amplio y distinto como es la demarcación hidrográfica: ¿cómo se valora el daño a terceros?, ¿cuáles son las especies objetivo a proteger, las vinculadas al agua, las autóctonas

o las exóticas? El propio artículo 30 señala que estas actuaciones deberán respetar los fines e integridad del dominio público hidráulico (calidad y cantidad de las aguas, la morfología y la dinámica fluvial). Las condiciones y demás requisitos que acompañan a estas declaraciones responsables han sido establecidas por el organismo de cuenca y han tenido en cuenta ese objetivo final de no perjudicar al DPH. No obstante, en la fase de redacción del Plan Hidrológico se valorará la propuesta de criterios adicionales que hace la alegante por si alguno pudiera incorporarse a la Normativa.

Las bandas de protección que se proponen en la Ficha DU-04 efectivamente afectan a propiedades particulares. Desde el ciclo de planificación anterior se planteó estas bandas como una especie de servicio ecosistémico a las masas de agua para las que se proponía una compensación económica por el servicio ofrecido. La arquitectura verde de la PAC vigente en aquel momento ofrecía una vía razonable para poder compensar el servicio a la colectividad. La Administración competente en ese caso no vio conveniente usar fondos de la PAC para estos menesteres con lo que se perdió una oportunidad de colaborar con el buen estado de las aguas. Por otra parte, esas bandas se ubican en la zona de policía de cauces, que es una zona que ocupa terrenos privados ubicados a 100 metros del cauce, donde se condicionará el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen, tal y como establece el artículo 6 del RDPH. Y según el artículo 9 del RDPH esas actividades deben ser objeto de autorización cuando la misma pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en general, del dominio público hidráulico. Y no cabe duda de que muchas actividades realizadas en la zona de policía, de propiedad privada, tienen efecto sobre las aguas. Esta problemática toma especial relevancia cuando en el cauce haya zonas protegidas de hábitats y especies, o zonas de captación de agua para consumo humano. Es decir, pese a que el Organismo de cuenca podría obligar a constituir esas bandas de protección, en la planificación anterior buscó la vía voluntaria mediante la compensación por el servicio, algo que fue desechado, por lo que no contravendría la normativa que ejecutara su potestad imponiendo estas bandas donde fueran necesarias.

4.18. Escrito de observaciones Nº 023

Presentado por: José Javier Curto González.

En nombre de la Comunidad de Regantes del Canal de Villagonzalo.

Alegación 1.

Se solicita que, de manera previa a la aprobación definitiva del Plan Hidrológico, se proceda a una revisión y actualización completa de los registros cartográficos y alfanuméricos de la CHD para adaptarlos a la realidad comprobada por esta Comunidad. La administración no puede validar un plan que determine el futuro del agua basándose en hectáreas teóricas erróneas que distorsionan las ratios reales de consumo de agua por hectárea (m^3/ha) y las escorrentías).

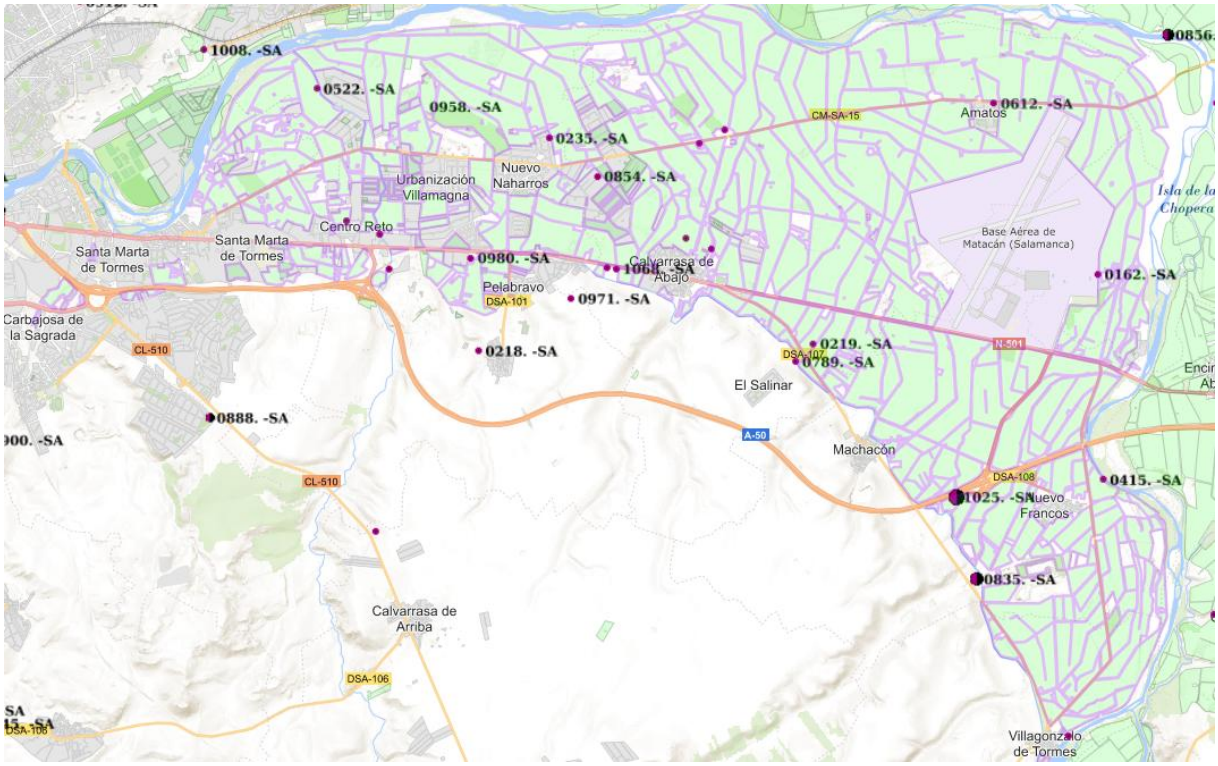
Respuesta:

No se cita en la alegación presentada a qué registros cartográficos y alfanuméricos de la CHD se refiere la alegación. Por el contexto del escrito parece que se refieren a las hectáreas regables de la Comunidad de Regantes y al censo de vertidos y extracciones que figuran en los Documentos iniciales. Sin embargo, en esta fase no se somete a consulta pública los Documentos iniciales sino el EpTI. Los Documentos iniciales se sometieron a consulta pública entre el 21 de diciembre de 2024 y el 20 de junio de 2025, tal y como se estableció en el Anuncio publicado por la Dirección General del Agua en el BOE de 20 de diciembre de 2024, quedando consolidados en noviembre de 2025.

Por lo que se refiere a la superficie, se indica que la zona regable del Canal de Villagonzalo se declara de alto interés nacional con el Decreto del 3 de octubre de 1952. Con base en esta declaración el Ministerio de Medio Ambiente otorgó con fecha 10 de marzo de 2004 a la Comunidad de regantes del Canal de Villagonzalo una concesión de 39,52 hm^3/año de agua para el riego de 5.269 ha con un máximo caudal de 7 m^3/s, valores que son los que figuran en el Plan Hidrológico vigente y con el que se ha redactado el EpTI.

La cartografía de la zona regable declarada por el citado Decreto y amparada por la citada concesión se puede encontrar en la base documental Mírame-IDEDuero en el URL https://mirame.chduero.es/chduero/viewer/agrarianDemandsSup?featureId=2000196&showLayers=1&baseLayer=0&zoom=13&x=-614509.7275987188&y=5003958.06019717 En tanto no se indiquen los puntos concretos de divergencia de esta cartografía con la que maneja la Comunidad de regantes se mantendrá en el EpTI y en el borrador de plan hidrológico del cuarto ciclo de planificación.

El Censo de vertidos está en constante actualización debido a las altas y bajas de los mismos, de manera que la última actualización de vertidos puede identificarse 15 vertidos ubicados sobre la poligonal de la zona regable (una visión panorámica se muestra en la imagen adjunta).



Igualmente, si la alegante considera que hay errores o inconsistencias puede señalarlas para que puedan revisarse por este Organismo de cuenca.

Alegación 2.

Se solicita constar formalmente que el regadío y la actividad agrícola de la Comunidad de Regantes del Canal de Villagonzalo no generan cargas de DBO5 (parámetro exclusivo de aguas residuales mal depuradas) (PHD4_DDII_... p. 5). Por tanto, cualquier medida de limitación o penalización ambiental sobre el uso del agua de riego carece de nexo causal con la presión real detectada, debiendo redirigirse las exigencias ambientales hacia los municipios responsables de dichos vertidos urbanos.

Respuesta:

En ningún epígrafe del EpTI se indica que la Comunidad de Regantes del Canal de Villagonzalo genere cargas de DBO_5 que, efectivamente, corresponde a otras actividades. Nuevamente entendemos que el escrito de alegaciones se refiere a los Documentos iniciales cuyo plazo de consulta pública ya finalizó, correspondiendo la actual consulta pública a la fase de EpTI.

Alegación 3.

Con base en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), se exige el blindaje absoluto de estas asignaciones para el ciclo 2028- 2033 (104,5 hm3 anuales para el uso de Riego, bajo el Código de Servicio SCV 128). Al estar el derecho de riego indisolublemente ligado a una infraestructura multipropósito que garantiza el uso prioritario de agua de boca (abastecimiento civil con 16,7 hm3), el organismo de cuenca no puede aplicar reducciones a la dotación de la masa sin comprometer la seguridad del suministro urbano, obligando a mantener la asignación concesional histórica intacta (PHD4_DDII_... p. 3).

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación primera la asignación de agua para la Comunidad de regantes del Canal de Villagonzalo es de 39,52 hm^3/año, en coherencia con la concesión de agua vigente. Por tanto, desconocemos de dónde sale el valor manejado por la alegante de 104,5 hm^3/año. De nuevo se recuerda que da la impresión de que la alegación se hace sobre información de los Documentos iniciales que en este momento ya están consolidados después de la fase de consulta pública.

El artículo 60 del TRLA aborda el orden de preferencia de usos que regirá en las concesiones. El propio artículo señala que toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica. Pero no acertamos a comprender cuál es la relación entre lo que dispone este artículo y el volumen concesional otorgado a la alegante.

Alegación 4.

En virtud del principio de seguridad jurídica y del cese de la arbitrariedad de las administraciones públicas, se solicita la anulación de cualquier medida punitiva o de restricción de caudales propuesta para esta zona regable. La administración no puede restringir derechos consolidados basándose en un impacto meramente "probable" o hipotético, menos aun cuando el propio cauce del Tormes 14 carece de degradación o impacto acreditado en este inventario (PHD4_DDII_... p. 5).

Respuesta:

Se desconoce en qué parte del EpTI se hace una referencia a medidas punitivas o "de restricción de caudales" a la alegante o si la alegación se refiere a los Documentos iniciales ya consolidados y que no son objeto de consulta pública. La Ficha DU-06 aborda la sostenibilidad del regadío bajo la premisa de garantizar el uso actual con los niveles de suministro mínimos que fija la Instrucción de Planificación Hidrológica. En el EpTI se indica que "*la relevancia del regadío en la demarcación hidrográfica requiere que sea sostenible social, ambiental y económicamente. En general las demandas agrarias contempladas en el plan hidrológico están atendidas con suficiente grado de garantía, si bien hay algunas excepciones*", excepciones que en ningún caso están en el sistema de explotación Tormes, aguas abajo del embalse de Santa Teresa, donde se ubica la comunidad de regantes alegante. Por otra parte, entre los objetivos que se plantean en el EpTI para este tema importante se encuentran "*Garantizar el suministro a los regadíos existentes en un escenario de reducción de aportaciones por efectos del cambio climático".* Y respecto a las decisiones que pueden adoptarse, en el epígrafe 7 se indica que debe valorarse la decisión de *Cerrar definitivamente el mapa de posibles nuevos desarrollos de regadíos, limitándose a aquellos con viabilidad económica, social y ambiental, con suficiente garantía de suministro y recogidos en la planificación sectorial de las Autoridades Competentes, para que en el cuarto ciclo de planificación las medidas se centren en garantizar el suministro de las demandas preexistentes*. Por tanto, el EpTI no sólo no plantea restringir derechos consolidados, sino que justamente pretende garantizarlos en la medida de lo posible. Esto no es obstáculo a que puntualmente, como se hace en la actualidad, determinados usos deban verse limitados en momentos puntuales debido a situaciones de sequía o escasez, en la aplicación de lo que dispone el artículo 55.2 del TRLA.

Alegación 5.

Se alega la falta de rigor del Plan al basar la criminalización del regadío en modelos teóricos estadísticos (PHD4_DDII_... p. 5). Los datos confiesan que el nitrógeno que llega al sistema fluvial procede del mal estado de las depuradoras de los municipios, que liberan el 90% de sus nutrientes directamente al agua (PHD4_DDII_... pp. 8-9). Se solicita que la CHD sustituya sus estimaciones de laboratorio por muestreos reales y deje de derivar la responsabilidad de la carga de nitrógeno hacia el sector agrícola.

Respuesta:

Se desconoce a qué parte del EpTI se hace la alegación o, si por el contrario, la alegación es a los Documentos iniciales que en la actualidad no están en consulta pública.

En la Ficha DU-01 sobre contaminación difusa se habla de datos analíticos sobre el origen y procedencia del nitrógeno que aparece en las redes de muestreo oficiales. Así se indica que *El origen de los problemas de contaminación por nutrientes es diverso, el uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en la agricultura (regadío y secano), la gestión de las deyecciones ganaderas y los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales, así como el compostaje de lodos de depuradora para su uso posterior como abono.*

En las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias el MITECO finalizó en marzo de 2025 trabajos de Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar su origen. Se han analizado los datos de concentración proporcionados por las estaciones de la Red de nitratos en el cuatrienio (2016-2019), así como una descripción de las principales presiones, tanto agronómicas como urbanas, que existen. La caracterización de las presiones agronómicas y urbanas permiten identificar las fuentes potenciales de contaminantes en el agua.

Los resultados del estudio isotópico en la demarcación del Duero para aguas superficiales, con 79 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, muestran cómo el origen es agrario en el 61% de las muestras, 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario e indeterminado en el 14%. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería.

Los resultados del estudio isotópico en la demarcación del Duero para aguas subterráneas, con 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, muestran un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería.

Es decir, los datos de los análisis de laboratorio en este trabajo indican que el origen del nitrógeno que se encuentra en las redes oficiales de muestreo es, en su mayoría, de origen agrario. Esto no es *criminalizar al regadío basado en modelos teóricos estadísticos al sector* sino disponer de datos para poder corregir los problemas que esa presencia de nitrógeno en el agua conlleva para otros usos y para el medio ambiente.

Alegación 6.

Se solicita formalmente que los objetivos de calidad ambiental de las masas de agua afectadas se supediten de forma exclusiva y condicionada al cumplimiento, finalización y puesta en marcha de la EDAR de Alba de Tormes por parte de la CHD y SOMACYL (PHD4_DDII_... p. 4). Resulta jurídicamente indefendible sancionar, inspeccionar o limitar el uso del agua a los regantes del Canal de Villagonzalo mientras la propia autoridad de cuenca tolera el vertido continuado de aguas urbanas sin depurar nitrógeno en el eje del Río Tormes (PHD4_DDII_... p. 4).

Respuesta:

Se desconoce a qué parte del EpTI se hace la alegación o si la alegación es a los Documentos iniciales que en la actualidad no están en consulta pública. El vertido de la EDAR de Alba de Tormes se identifica como 0157. -SA, cuya carga contaminante estimada es de 8.000 hab-eq, su autorización de vertido es para un volumen máximo de 568.348 m^3/año, con una carga contaminante anual de 1.224 kg DBO_5/año, 2.031 kg N/año y 1.279 kg P/año, siendo su grado de tratamiento adecuado. Por tanto, no podemos compartir la observación de la alegante contra esta EDAR que según los datos que se manejan en la CHD supone una presión potencialmente significativa en materia de contaminantes, pero en la actualidad cumple con los parámetros de vertido fijados en su autorización.

Alegación 7.

Exigimos la rectificación inmediata de la ficha de riesgo del Embalse de Villagonzalo, rebajando su calificación a "Riesgo Medio" o "En Estudio" (PHD4_DDII_... pp. 5, 12). Una administración pública no puede declarar una situación de "Riesgo Alto" utilizando como premisa una probabilidad no contrastada, rompiendo la proporcionalidad exigible en todo documento de planificación que sirva de base para dictar futuras normas limitativas de derechos consolidados.

Respuesta:

La alegación se hace a los Documentos iniciales que en la actualidad no están en consulta pública por lo que no se puede atender la observación que no corresponde a este momento procedimental.

4.19. Escrito de observaciones Nº 024

Presentado por: Rubén Delso Morales.

En nombre del Ayuntamiento de Tajahuerce.

Alegación 1.

Introducir en la UDA 2000152 BOMBEO ARAVIANA una superficie a transformar en regadío de 300 ha. en el término municipal de Tajahuerce (Soria) a partir del recurso subterráneo 400034.

Respuesta:

La inclusión de nuevas demandas a partir de recursos de agua subterráneos o superficiales corresponde a la fase de elaboración del Plan Hidrológico. Esta inclusión debe venir avalada por una medida que propondrá en su caso la administración competente, en este caso entendemos que la Consejería de Agricultura, ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León. Incluir una medida en el Plan Hidrológico supone el compromiso de hacer frente a las inversiones que tal medida supone.

Con carácter previo debe evaluarse si la medida es coherente con los objetivos de la planificación hidrológica que son alcanzar o mantener el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas y evitar el deterioro. En el caso de las aguas subterráneas supone que la medida no perjudique el mantenimiento de los niveles piezométricos, no suponga extracciones superiores a los recursos renovables y no contribuya al deterioro del estado químico de la masa de agua. Revisada la situación de la masa de agua Araviana y teniendo en cuenta los criterios que se utilizan en el Plan Hidrológico vigente señalados en el artículo 34 de su Normativa, un nuevo regadío de 300 ha en Tajahuerce con aguas subterráneas supondría incumplir los criterios del citado artículo. De cualquier modo, este análisis, a partir de la Normativa vigente, deberá valorarse en la redacción del nuevo Plan Hidrológico.

4.20. Escrito de observaciones Nº 025

Presentado por: Juan Antonio López Geta.

En nombre del Club del Agua Subterránea (CAS)

Alegación 1.

Respecto a la Ficha DU-01 se indica que existen ciertas dudas científicas que las MASb identificadas como en mal estado, responde adecuadamente a esa catalogación, debido a la información disponible generalmente pocos puntos de control, y pocos representativos de las características del acuífero. Por ello se hacen diversas propuestas dirigidas a revisar esa catalogación y continuar con la construcción de nuevos puntos de control, con los que tener una buena representación espacial y en profundidad).

Respuesta:

Mejorar el conocimiento hidrogeológico de las masas de agua y su estado químico, es algo que no se ha dejado de hacer, gracias a la mayor disposición de datos y puntos de control: hay 557 piezómetros (125 automatizados) y está previsto construir otros 100 más; la red de calidad tiene 450 puntos de control estando prevista su ampliación con varios manantiales. A medida que van surgiendo problemas para su solución hay que hacer estudios específicos y campañas de actuación a nivel de cuenca, tal y como ocurrió cuando se detectó la presencia de arsénico en algunos abastecimientos, situación que obligo a realizar varias campañas de muestreo y analíticas en todas las masas de aguas subterráneas, y posteriores estudios para determinar su origen y posible evolución. Todo esto contribuye a ir mejorando día a día en el conocimiento de las masas de agua. Por supuesto que nos gustaría aumentar el conocimiento, pero la disponibilidad de medios económicos y humanos es limitada y más en una cuenca tan extensa. Las cuestiones que pueden abordarse en el ámbito académico teórico muchas veces chocan con las necesidades inmediatas y las exigencias que la Normativa pide a los organismos de cuenca. A nivel general pensamos que el conocimiento que se tiene de las aguas subterráneas es relativamente bueno, si bien como todo en la vida es mejorable.

Alegación 2.

Respecto a la Ficha DU-01 se hacen algunas propuestas:

- *Debe repasarse del catálogo del estado químico de las MASb y analizar el Mal estado las que presenten aguas de mediana o alta salinidad de origen natural y sin intervención antrópica.*
- *Para el control de la contaminación en las masas declaradas en Mal estado químico, la CHD debe dotarse de una red de puntos de muestreo más completa en número y representatividad y específicamente diseñada para este fin. En este sentido, debería auditarse la red de control de aguas subterráneas y evaluar si los sondeos que la integran pueden ser suficientes y vías de percolación y difusión del contaminante hasta el acuífero, lo que desvirtuaría los resultados analíticos de sus aguas y su representatividad.*
- *Se debe estudiar el potencial cambio en la calidad de acuíferos y masas de agua subterránea si se produjera un cambio climático, fundamentalmente en lo que se refiere al arrastre de nutrientes como el nitrato y fosforo tras periodos de sequía seguidos de lluvias torrenciales.*
- *Establecer programas que permitan optimizar el uso de fertilizantes, la optimización de agroquímicos y el manejo de purines para la agricultura, así como, la validación de prácticas*

avanzadas de riego y fertilización, priorizando su aplicación en las zonas vulnerables definidas y por definir. Además, se deberán establecer objetivos medibles para las masas subterráneas, en cuanto a límites de fertilización recomendables para cultivos.

- *Debe corregirse la delimitación actual de zonas vulnerables a la contaminación agraria, que como mínimo debe incluir a las MASb identificadas como contaminadas, aspecto que debe llevar a cabo la Comunidad Autónoma donde se incluya la masa de agua subterránea.*
- *La lenta dinámica de la percolación subterránea y los volúmenes de contaminantes que pueden estar transitando por la zona no saturada justifican que al definir las medidas correctoras de masas afectadas por contaminación difusa deben considerarse y justificar plazos de transición hacia el Buen estado y, cuando superen el periodo de aplicación del Cuarto ciclo de planificación (2033), se considere declarar exenciones. En esta situación se podrían encontrar muchas de las masas afectadas por nitratos, cuya reducción significativa aún eliminando su aplicación en superficie, sólo se logrará a medio-largo plazo.*
- *Reconocimiento de la existencia de afloramientos geológicos metalogénicos y de un pasivo ambiental en los sedimentos históricos depositados, como origen natural de presión difusa de contaminación.*

Respuesta:

En cuanto a la propuesta de mejora del conocimiento hidrogeológico de las masas de agua y su estado químico, podemos decir que ahondar en el conocimiento de cualquier tema y más en una disciplina que es subterránea siempre despierta interés. No obstante, se echa en falta en las observaciones una mayor concreción sobre los aspectos concretos a abordar; esto es necesario en un marco donde la disponibilidad de medios económicos y humanos es limitada y más en una cuenca tan extensa. Las cuestiones que pueden abordarse en el ámbito académico teórico muchas veces chocan con las necesidades inmediatas y las exigencias que la Normativa pide a los organismos de cuenca. Los trabajos que identifica la alegación son más propios de instituciones científicas que de confederaciones hidrográficas cuya principal tarea es la de gestión de los recursos.

A partir de los años setenta del pasado siglo es cuando comienzan a realizarse los primeros estudios de las aguas subterráneas a nivel de cuenca, centrándose fundamentalmente en los acuíferos del terciario detrítico del centro de la cuenca, siendo el P.I.A.S pilotado por el I.G.M.E. el de más entidad. Posteriormente se han realizado numerosos estudios tanto genéricos como específicos; seguramente no habrá ningún organismo de la administración dedicado al tema o con competencias en el agua, desde ayuntamientos, diputaciones, administración general y autonómica, universidades y otros centros de investigación, que no se hayan implicado en algún tipo de estudio hidrogeológico. Es a partir del comienzo del presente siglo cuando esta producción decae, y los estudios análisis o informes que se han abordado se han basado fundamentalmente en los anteriores, siendo en algunos casos trabajos de recopilación y ordenación de información de diversas fuentes. Por tanto, pensamos que el conocimiento no es escaso, siendo lógicamente mejorable.

Para abordar un plan de estas características, el primer paso sería el recopilar todos los trabajos hechos anteriormente, analizarlos y generar una buena base de datos, identificar las carencias y fijar las prioridades, para marcar unas líneas de actuación debidamente planificadas y valoradas, contando para ello con las personas y entidades de mayor relevancia en la materia. Estos trabajos cuentan con el impulso de la DGA que está muy interesada en disponer de un repositorio a escala estatal con esta información. En este momento, como es conocido, está en marcha el Plan de Acción de Aguas Subterráneas (PAAS) en el que se contemplan trabajos y estudios complementarios, a los mencionados

anteriormente y que, a juicio de la DGA, es el mayor esfuerzo que la Administración del Estado ha hecho en mejora del conocimiento de las aguas subterráneas en los últimos años.
En cuanto a las redes de control, puntualizar que en la actualidad la red de control piezométrico en la demarcación está integrada por 557 estaciones de medida, algunas de las cuales se están automatizando, estando ya automatizadas unas 125. Está en marcha, un proyecto de construcción de otros 100 puntos de control adicionales. La frecuencia de medida en los últimos años es de una medida cada dos meses, esto supone unas seis medidas anuales.
Por otra parte, la Red de control del estado químico de las Aguas Subterráneas de la Cuenca del Duero, según lo establecido en la Directiva Marco de Aguas (DMA) tiene por objeto proporcionar una apreciación fiable del estado cualitativo de todas las masas de agua o grupos de masas de agua subterráneas y de las zonas protegidas. Para ello cuenta con 448 puntos para la toma de muestras, que se ampliarán en un futuro con la incorporación de varios manantiales a la red de control de vigilancia.
Para el control del estado químico, se han implantado los programas de seguimiento que requiere la actual normativa: control de vigilancia, cuyo objetivo es evaluar el impacto y las tendencias prolongadas como consecuencia de modificaciones de las condiciones naturales y de la actividad antropogénica; control operativo, cuyo objetivo es determinar el estado químico de las masas de agua en riesgo, así como la tendencia prolongada al aumento en la concentración de cualquier contaminante inducida por la actividad humana, en los períodos comprendidos entre los programas de control de vigilancia; control de zonas protegidas, con el objeto de realizar el seguimiento de aguas utilizadas para la captación de agua potable y zonas vulnerables a nutrientes (nitratos).
En el escrito de observaciones se propone la ampliación de la red de calidad. Debemos puntualizar que las redes operan desde los años setenta, que es cuando se crean, al comienzo las tutelaba el I.G.M.E. y desde finales de los años noventa la C.H.D. En todo este tiempo, como es lógico, han sufrido transformaciones, sobre todo en lo que se refiere al incremento del número de puntos de muestreo, así como del aumento de los parámetros a controlar, siempre atendiendo a los requerimientos normativos y con el objetivo de mejorar.
En lo relativo a la creación de un programa de seguimiento, apuntar que se realiza de forma periódica tal y como indica la normativa. Al igual que la valoración del estado de las masas, la documentación generada forma parte del reporting que se envía por parte del estado español a la Comisión Europea. Para el nuevo Plan Hidrológico se pretende incorporar una metodología que repercuta en un programa de seguimiento más operativo; es deseable que cuando salga a información pública el borrador del nuevo plan se preste atención por parte de este colectivo al nuevo programa de seguimiento con la intención de mejorarlo todo lo que sea posible.

En lo referente a implementar o modificar la normativa sobre el uso de fertilizantes, mejora de su empleo y redefinir las zonas vulnerables, señalar que se ampliaron las zonas vulnerables por Decreto 5/2020, de 25 de junio, en la comunidad autónoma de Castilla y León, pasando de 10 a 24 y aumentando considerablemente el número de municipios incluidos. Actualmente está en fase de una nueva revisión cuyas características desconocemos. Esta Ficha plantea como elemento clave para resolver el problema la formación y la coordinación de las administraciones competentes: unas, diagnosticando el problema a través de las redes de seguimiento y control químico del estado y evolución de la calidad de las aguas, otras, ordenando las actividades susceptibles de contaminar y estableciendo criterios y limitaciones para determinadas prácticas. Es sabido que la resolución o mejor dicho la minimización del problema depende fundamentalmente de la disminución en la aportación

de fertilizantes, fitosanitarios y de una adecuada gestión de los residuos ganaderos, por lo que la Ficha plantea una alternativa 2 de actuación que se dirige a esos aspectos.

Alegación 3.

Respecto a la Ficha DU-02 además de las que se consideran en la Ficha se plantean nuevas sugerencias:

- *Dotar de suficientes medios al Organismo de cuenca para el control, la vigilancia y la tramitación de expedientes concesionales que permitan su agilización.*
- *Mejorar la delimitación y caracterización de las MASb, especialmente las más extensas, o aquellas que presente usos diferentes, mediante modelos numéricos para optimizar la explotación sostenible.*
- *Mejora de las rede con número suficiente de puntos de control, que se extiendan a todas las masas de agua subterránea y con un diseño adecuado en cuanto a su representatividad hidrogeológica (formaciones geológicas y niveles productivos), con suficiente frecuencia de medidas y de toma de muestras, etc.*
- *El estado cuantitativo debería establecerse basándose en datos de extracciones aportados por contadores, apoyados por un sistema de control indirecto y la necesaria labor de vigilancia del Organismo de Cuenca.*
- *Se deben incrementar la realización de obras fundamentales para el control, del acondicionamiento de manantiales (estaciones de aforo con curvas de gasto conocidas), así como continuar con la construcción de nuevos piezómetros. En estas propuestas se incluye continuar la ampliación del número de puntos, a corto plazo tanto de piezómetro, hidrometría y calidad.*
- *Ampliar la instrumentación del control automatizado en puntos. En los tramos de mayor importancia en cada masa de agua, donde es conocida la relación rio-acuífero se propone el control de aforos aguas arriba y abajo de la zona ganadora o perdedora.*
- *Los recursos disponibles de cada MASb y de los acuíferos individualizados dentro de cada masa de agua, deberían establecerse de forma independiente, con el fin de garantizar la no afección a otros usuarios, el mantenimiento de caudales mínimos en manantiales con usuarios asociados y/o flujos hacia zonas protegidas.*
- *Revisar la clasificación del estado cuantitativo de las MASb. Las MASb que carezcan de red de control piezométrico y/o fisonómico suficiente, cualquier decisión que se tome con escasa información, pude llevar a grandes errores de declaración del estado de una masa con el consiguiente perjuicio económico y al administrado.*
- *Intensificar la creación de comunidades de usuarios en las masas de aguas subterráneas cuya evolución cuantitativa o cualitativa haga aconsejable su creación. La cogestión es la más eficaz de las medidas posibles para revertir la situación de las masas en mal estado y conseguir los objetivos que marca la directiva marco.*
- *Plantear la recarga artificial, dado su interés para mejorar el estado cuantitativo y cualitativo de las MASb, y como herramienta de mejora de la gestión integral de las aguas superficiales, subterráneas y regeneradas. Dando continuidad a los proyectos actuales, y promoviendo nuevos, allí donde técnicamente sea viable, tanto por iniciativa pública como privada.*
- *La recarga artificial es un elemento clave en la gestión de las masas de agua subterránea, en especial en lo que conlleva a las acciones necesaria para la resiliencia y adaptación al cambio climático de los ecosistemas acuáticos, el mantenimiento de la garantía de usos y*

especialmente los abastecimientos urbanos, en lo que supone de mejora de la regulación y en el cumplimiento de los objetivos medioambientales de las masas de agua (recuperación de niveles y de la calidad del agua.

- *Utilizando la gran capacidad de almacenamiento de los acuíferos mediante recarga artificial. Aprovechar la elevación de niveles en el acuífero y un retardo en el tiempo en las salidas naturales a los cauces superficiales, lo que supone de hecho la posibilidad, de que los caudales ambientales puedan garantizarse en la época estival, así como el ahorro energético a la hora de los bombeos y un incremento destacado en la garantía de los usos asociados, bien los urbanos, el regadío o la industria.*

- *Fomentar el empleo e integrar de forma efectiva al sistema general de aguas, tanto las aguas residuales regeneradas procedentes de una EDAR, como las aguas tratadas a través de sistemas de ósmosis inversa y/o microfiltración, máxime si su destino es la recarga artificial, al garantizar el acuífero receptor un tiempo y condiciones de residencia, que permitirían naturalizar estas aguas, siendo recuperadas para su empleo posterior.*

Respuesta:

El aprovechamiento de las aguas subterráneas, desde el punto de los usuarios, siempre ha estado condicionado por varios factores: la demanda, influenciada por la necesidad de no disponer de otra fuente para desarrollar la actividad del regadío y su rentabilidad; la disponibilidad del recurso y productividad de los acuíferos, es decir que haya agua y que sea rentable su explotación, y que la tipología y dimensiones de esos acuíferos permita la sostenibilidad a largo plazo. Si se analiza lo ocurrido en las masas de agua subterránea del centro-sur de la cuenca del Duero desde los años setenta del pasado siglo hasta la actualidad, se llega a la conclusión de que mantener el ritmo de extracciones de los años ochenta y noventa del siglo pasado, se comprueba que era una explotación insostenible pues se estaba generando un vaciado. A partir de los primeros años del presente siglo esta situación empieza a estar cuestionada socialmente, con la entrada en vigor de la DMA y los nuevos ciclos de planificación hidrológica; con ellos se han incorporado una serie de medidas de gestión y de control encaminadas a revertir una situación de continuo descenso piezométrico. Como se indica en la Ficha DU-02 la disminución de las extracciones se ha traducido en una ligera recuperación de los niveles piezométricos, situación que encaja con una tasa de explotación coincidente con el recurso renovable establecido para dichas masas.

El criterio de establecer el coeficiente del 0,8 como recurso disponible, respecto al recurso renovable, se toma de la IPH integrada recientemente en la Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas, aprobada por el secretario de Estado de Medio Ambiente. Nos parece que el fijar un coeficiente para todo tipo de masas es riguroso, pero se ha de tener en cuenta que en la gestión hay muchos agentes, usuarios de todo tipo, grupos conservacionistas, otras administraciones, etc., todos ellos con intereses diversos, y en estos casos la manera más práctica de entenderse es consensuar cifras y criterios fáciles de aplicar y que ofrecen mayor transparencia.

En cuanto a la creación de las CUAS, como instrumento de mejora de la gestión, apuntar que la creación de las mismas es bastante más compleja que la de las comunidades de aguas superficiales, las cuales surgen a la vez que se desarrolla la zona regable o uso conjunto. En el caso de las CUAS, se constituyen siempre para intentar atajar un problema de falta de recursos hídricos, frente al volumen autorizado,

lo cual añade dificultades. En el caso del Duero creemos que estas CUAS ayudan y facilitan la gestión; así lo indica la experiencia de más de seis años en la cuenca tratando de impulsar su creación. Actualmente hay unas 52 CUAS constituidas y en funcionamiento, habiendo pasado de 2 operando en 2020 a 52 operando en 2026 con más de 40.000 ha acogidas, sobre todo en las masas de agua en mal estado cuantitativo.

Se apunta también en las alegaciones y se recomienda un mayor aprovechamiento planificado de las aguas subterráneas, en su conjunto. Si analizamos la situación de disponibilidad de las mismas, se presentan dos escenarios: el primero sería el de masas de agua del centro-sur de la cuenca con acuíferos de naturaleza detrítica, en los que el objetivo de la planificación es revertir la situación de mal estado, lo cual nos obliga a hacer frente a la demanda con menores extracciones, con lo que hay que generar recursos de superficiales no siempre disponibles; el segundo sería el de masas de agua subterránea con acuíferos de naturaleza carbonatada (mesozoicos), con recursos importantes, situados mayoritariamente en el borde este de la cuenca, con una altitud media de 1000 m.s.n.m., factor que condiciona el desarrollo agrícola, y poblacional lo cual contribuye a que la demanda sea escasa. En este segundo caso, hay que apuntar otro factor a tener en cuenta: estos acuíferos tienen asociados importantes manantiales, cuyas aportaciones en aguas bajas constituyen el caudal mayoritario de varios ríos, descargas que en algunos casos concretos se han visto afectadas por bombeos propiciados por un incipiente intento de ubicar explotaciones agro-ganaderas, hecho que no invita a pensar en un gran aprovechamiento y desarrollo de las aguas subterráneas.

Alegación 4.

Sobre la Ficha DU-03 se hacen las siguientes sugerencias:

- *Mejorar el conocimiento de los impactos sobre las aguas subterráneas de los vertidos de aguas residuales y de la potencial contaminación derivada de la reinfiltración en cauces perdedores; estudiar las pérdidas de las redes de saneamiento como potencial contaminación de aguas subterráneas en núcleos urbanos, especialmente aquellas más antiguas o que no hayan sido renovadas.*
- *Impulsar una depuración adecuada de vertidos en tramos muy sensibles (por ejemplo, cabeceras de ríos) o modificar el régimen de caudales mínimos en estiaje para diluir y evitar la contaminación de las aguas subterráneas en cauces perdedores.*
- *Estudiar el potencial impacto de la reutilización de aguas residuales depuradas en agricultura sobre superficies de cultivo situadas sobre masas de agua subterránea, a efectos de evitar la contaminación de estas, en consonancia con el Reglamento 741/2020.*
- *Estudiar la potencial contaminación sobre las masas de agua subterránea que pudiera producir la transferencia de vertidos industriales a las EDAR y los puntos de desbordamiento en periodos de lluvia intensa. Continuar con el estudio de la posible presencia de contaminantes emergentes en aguas subterráneas.*
- *Estudiar el impacto de los vertidos de la industria agroalimentaria en muchos casos unidos al vertido de las EDAR o colectores municipales por su posible impacto sobre las masas de agua subterránea.*
- *Analizar el potencial aprovechamiento en de la reinfiltración de la escorrentía de pluviales para recarga artificial en las masas de agua subterránea para reducir la entrada de agua a las EDAR y mejorando la regulación de la escorrentía superficial de la cuenca.*

- *Estudiar el uso inadecuado de lodos de depuración como fertilizantes en la agricultura, desarrollada sobre masas de agua subterránea, dada la transferencia por infiltración a suelos y acuíferos de elementos contaminantes.*
- *Fomentar la ejecución de sistemas naturales de depuración de ARU en aglomeraciones urbanas de pequeña entidad como humedales artificiales y sistemas naturales de infiltración en el terreno, filtros verdes y otras tecnologías naturales, en muchos casos más resilientes, dada la fácil absorción en la variación de caudales estacionales, variaciones de temperatura, etc.*

Respuesta:

La mejora del conocimiento siempre es útil, pero los recursos que demanda deben armonizarse con el resto de tareas que debe abordar un organismo de cuenca y ante la tensión que se produce en este balanceo deben priorizarse las acciones. No es prioritario para la CHD los análisis que se plantean sobre el efecto de los efluentes de EDAR en las masas de agua subterránea, en especial si se tiene en cuenta la baja incidencia en términos de amplitud territorial de estos efluentes en la calidad de las aguas subterráneas como ha puesto de manifiesto los trabajos de estudios isotópicos de procedencia de la contaminación por nitratos llevada a cabo por MITECO entre 2022 y 2024.

En cuanto a la reutilización de las aguas residuales regeneradas, apuntar que en esta cuenca se dan varias circunstancias que hacen difícil su uso para recarga de acuíferos: en primer lugar, la no coincidencia de terrenos permeables en superficie junto a la mayoría de los principales núcleos de población con volúmenes de vertido razonables; en segundo lugar porque los principales núcleos de población están alineados y ribereños a los mayores ríos de la cuenca, con lo que habría que bombear los efluentes regenerados incrementando costes y haciéndolas inviables en muchos casos por falta de usuarios potenciales; en tercer lugar porque ya se están utilizando, al estar las principales poblaciones de la cuenca junto a cauces de agua superficial y los efluentes depurados forman parte del caudal circulante, y en la mayoría de los casos aguas abajo de su incorporación a esos cauces son aprovechados para regadío, bien por tomas de riegos particulares, bien por tomas de canales que abastecen a grandes zonas regables. No obstante, se incluye entre las decisiones en este tema importante y en la Ficha DU-02 y DU-06 la posibilidad de analizar los casos donde pudiera ser viable.

Las materias relacionadas con los lodos de EDAR y su aplicación a la agricultura cae fuera de las competencias del organismo de cuenca por lo que no se ha abordado en la Ficha ya que además la cantidad generada en la cuenca es pequeña en relación con la superficie agraria útil y su incidencia es muy relativa.

Estamos de acuerdo con la propuesta de la implantación y desarrollo de sistemas de depuración de bajo impacto aplicables en pequeñas poblaciones, tal y como se plantea en una de las decisiones de la Ficha. En la cuenca hay varias experiencias con sistemas como el que se indica (varios filtros verdes con sistemas de lagunaje y vegetación tipo macrófitas en funcionamiento, en construcción y en proyecto); se constata que es un sistema bastante adecuado para las numerosas poblaciones de reducido número de habitantes, por su simple y barato mantenimiento. El reciente Protocolo firmado por la Junta de Castilla y león con las nueve diputaciones de su territorio para abordar la depuración de aglomeraciones entre 500 y 2000 hab-eq es una buena oportunidad para impulsar estos sistemas en las localidades más pequeñas de las seleccionadas.

Alegación 5.

Respecto a la Ficha DU-04 se sugiere:

- *Analizar en los tramos ganadores y perdedores el impacto sobre acuíferos y masas de agua subterránea de las alteraciones hidromorfológicas, teniendo en cuenta las posibles fuentes de alteración del régimen hidrológico de la relación rio-acuífero por tramos hidromorfológicos (presencia de explotaciones en las proximidades de los tramos ganadores, impermeabilización de cauces en zonas urbanas, periurbanas y rusticas, modificaciones en el flujo subterráneo por cambios en la estructura de la zona ribereña y de las características naturales del cauce por tramo hidromorfológico), sobre las terrazas (presencia de barreras laterales, modificaciones en las terrazas colindantes por actuación antrópica), sobre el cauce (incremento en la generación de sedimentos, incisión de la cota de base del cauce, incremento de su anchura, incremento de la profundidad del cauce, desvío de cauces, canalizaciones y cauces cubiertos).*
- *Fomentar la aplicación de códigos de buenas prácticas agrícolas que reduzcan la pérdida de suelo por erosión mediante medidas impositivas o financieras ligadas a ayudas y subvenciones, diseñadas y vigiladas por las administraciones agrícola y de aguas*

Respuesta:

Es probable que en lo que se refiere a la ficha se podría haber incluido algún párrafo haciendo un resumen que incluyera los grandes rasgos del modelo conceptual de la relación rio-acuífero, datos de los que se dispone aportados por la Actividad 4 de la encomienda de gestión que la D.G.A. encargo al I.G.M.E. para dar respuesta a los requerimientos de la DMA en materia de aguas subterráneas. Se tendrá en cuenta la observación y en la Memoria del borrador del Plan Hidrológico se identificarán los cauces, los tramos de rio, su caracterización y cuantificación (aportación), las masas de agua subterránea asociadas, los tipos de descarga (manantial, difusa, mixta), y otros datos que se consideren relevantes y aclaratorios. Para ello se añade al ETI una decisión sobre este particular.

Respecto a las medidas impositivas sobre los códigos de buenas prácticas agrarias, el organismo de cuenca prefiere trabajar con las administraciones competentes de las comunidades autónomas afectadas (agraria y ambiental) para que sean medidas voluntarias y el lucro cesante que puedan suponer puedan financiarse con cargo a fondos de la arquitectura verde de la PAC. Lamentablemente en el ciclo pasado este acuerdo no ha sido posible, si bien trataremos de impulsar en el actual.

Alegación 6.

Respecto a la Ficha DU-05 se sugiere:

- *Fomentar medidas de restauración fluvial que evite favorecer las inundaciones.*
- *Desarrollar un Plan de aprovechamiento de aguas excedentarias durante el periodo de crecida e inundación, para laminar y reducir su intensidad, así como dar salida a esta agua excedentaria (soluciones naturales, como parques naturales de inundación y facilitar la infiltración en ellos).*
- *Realizar operaciones de recarga gestionada de estas aguas en las MASb por las que cruce el cauce, con obras sencillas de canales.*

Respuesta:

En la demarcación hidrográfica del Duero, desde hace más de veinte años se están llevando a cabo actuaciones de restauración fluvial y mejora de la conectividad, mediante la restauración de riberas, limpieza y ordenación de las mismas, que en su mayoría consisten en el retranqueo de motas, o eliminación de las mismas, para devolver al rio su espacio, y que pueda regenerar su llanura de inundación facilitando en lo posible la dinámica fluvial, esto supone una mayor laminación de las avenidas y una recuperación de las llanuras aluviales y una mayor recarga de los acuíferos aluviales. Todas estas actuaciones aparecen contempladas en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico vigente, en los de los ciclos anteriores y presumiblemente en el nuevo Plan Hidrológico.

Alegación 7.

Respecto a la Ficha DU-06 se propone incluir un plan especial para mejorar el conocimiento de los acuíferos que tengan disponibilidad de recursos o que su explotación sea importante, analizando los efectos sobre la variación de los niveles piezométricos y la calidad del agua. El Plan debe detalle el número de piezómetros, sus características en función del acuífero, incluir el control de los volúmenes extraídos y la superficie regada. Y establecer sistemas indirectos de control de volúmenes (consumo energético encuestas de superficie de riego y fomento de CUAS)

Respuesta:

A lo largo de los últimos quince años el organismo de cuenca ha realizado un esfuerzo importante en lo que se refiere al seguimiento y control de las extracciones de aguas subterráneas para el regadío en la demarcación hidrográfica: se han implementado herramientas para el control mediante teledetección y en campo de las parcelas regadas en esas diez campañas, de las que no son menores los desarrollos informáticos para poner a disposición de los servicios de vigilancia y gestión del DPH de manera fácil y amigable; se han abierto expedientes sancionadores por uso irregular del recurso hídrico, con el consiguiente conflicto con parte de los usuarios y sus representantes sindicales; se han realizado numerosos requerimientos a las explotaciones con mayores volúmenes concesionales para la instalación de contadores y se dispone de un registro de control y actualización de los mismos; cada año se diseña una campaña de control dirigido de visitas en campo de parcelas que previamente son seleccionadas para comprobar su situación concesional y el uso que hacen del agua, de forma que se optimizan los limitados medios humanos, por lo que se hace aleatoriamente, lo que es materialmente imposible es controlar parcela por parcela con los medios humanos de los que se dispone, en resumen en esta materia creemos que se ha pasado de un mínimo control a que el usuario al menos perciba la existencia de vigilancia.
Pero debe seguir mejorándose y anualmente el Organismo de cuenca destina importantes recursos económicos para la constante mejora y mayor transparencia.

A nuestro juicio para el objeto que plantea la alegación que no se ciñe exactamente al tema importante de la Ficha, el conocimiento de los recursos hídricos de las masas de agua es bastante razonable. El seguimiento que se hace desde hace años de la piezometría, de las demandas y de la red de aforos nos permite afirmar que es un conocimiento suficiente para la gestión de las aguas subterráneas en la cuenca. Además, la existencia de CUAs y la gestión compartida del agua en su ámbito en los últimos años nos ofrece información muy valiosa sobre los volúmenes disponibles y las extracciones. Esa información se va validando también a través de modelos numéricos que van confirmando las

expectativas que tenemos, recientemente con un trabajo realizado por el IGME mediante técnicas de IA, que pretende incorporar un carácter predictivo al comportamiento de las masas de agua bajo escenarios de cambio climático, o variaciones en la explotación.

Alegación 8.

Respecto a la Ficha DU-07 se propone elaborar un programa que incluya un catálogo de acuíferos en los que se pueda incrementar su aprovechamiento, especialmente en situaciones de extrema sequía o déficit coyuntural. El catálogo debe ir acompañado de normas de explotación y de protección.

Respuesta:

A juicio de lo que indica la alegación, quizá no se ha entendido adecuadamente el problema que plantea. La Ficha aborda cuestiones que inciden en la gestión del agua como son la localización de las infraestructuras respecto a las zonas donde se ubican las demandas, la antigüedad de las mismas que afectan a la gestión durante los episodios de avenidas y escasez, una operación respetuosa con los objetivos ambientales de las masas de agua, y la seguridad de las infraestructuras. Además, trata un tema muy debatido en la cuenca sobre la viabilidad de nuevas regulaciones para atender a demandas actuales o futuras. Abrir los acuíferos existentes a nuevos aprovechamientos con un mero análisis de su balance no parece razonable ya que existen otros condicionantes para el uso del agua adicionales a los balances de disponibilidad/demanda como son la relación aguas superficiales-subterráneas, las zonas protegidas o la preservación de captaciones de agua para consumo humano, y espacios naturales dependientes de aguas subterráneas. Por ello no se considera oportuno atender a la alegación.

Alegación 9.

Respecto a la Ficha DU-08 se propone la elaboración de un catálogo específico que recoja todos los acuíferos destinados a este uso o que pueden reservarse para ello, acompañado de medidas de protección cuantitativa y químico y la elaboración de perímetros de protección de cada una de ellas.

Respuesta:

La protección de las masas y captaciones destinadas al consumo humano se canaliza a través del Registro de Zonas Protegidas (art. 99 bis TRLA), de los perímetros de protección (RDPH) y de la evaluación del riesgo en las masas de captación exigida por la Directiva (UE) 2020/2184 de aguas de consumo.

Las sugerencias del alegante ya son una obligación normativa con la publicación del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. Así el artículo 50 señala que para asegurar la calidad del agua suministrada es necesario hacer una evaluación de los riesgos que abarque toda la cadena de suministro y que considere una evaluación y gestión del riesgo en tres niveles: en las zonas de captación de agua, que corresponderá a la administración hidráulica; en las zonas de abastecimiento, en cada una de las infraestructuras que la componen desde la toma de captación, la conducción, el tratamiento, el almacenamiento y la distribución hasta la acometida, que corresponderá al operador u operadores de cada una de las infraestructuras que la compongan; y en las instalaciones interiores de los edificios prioritarios, que corresponderá al titular del edificio prioritario. Será por tanto esta

evaluación del riesgo de cada área de captación, más que acuífero, quien determinará ese ámbito de protección al que se refiere la alegación.

Además, la administración hidráulica, sobre la base del resultado de la evaluación de riesgos en las zonas de captación, velará por que se tomen medidas de gestión de riesgos, según corresponda:

a) Medidas preventivas
b) Medidas de atenuación
c) Control adecuado de las aguas en zonas de captación
d) Control adecuado de las aguas en las zonas de captación
e) Aplicación de perímetros de protección.

Respecto a la elaboración de perímetros de protección de captaciones destinadas al consumo humano, también son una obligación normativa regulada en los artículos 243 ter, 243 quáter y 243 quinquies del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), así como en su Anexo VIII.

La idea de catalogar los acuíferos estratégicos para abastecimiento es razonable, pero dada la estructura territorial de la demarcación hidrográfica los suministros estratégicos que corresponden a las grandes aglomeraciones urbanas son de carácter superficial; y elaborar esos acuíferos estratégicos conllevarían a toda la cuenca. No obstante, se valorará en la fase de plan hidrológico. En cambio, el catálogo de estructuras geológicas profundas para almacenamiento de energía (hidrógeno, amoniaco, metanol) excede por completo del ámbito de la planificación hidrológica y corresponde a la política energética y a los organismos geológicos (IGME) y sectoriales.

Alegación 10.

En relación con la Ficha DU-09 el alegante reitera las sugerencias que ha ido haciendo a lo largo de su escrito sobre los temas importantes presentes: identificar presiones puntuales que afecten a las zonas protegidas, establecer los perímetros de protección a las captaciones existentes para abastecimiento, asignar masa de agua a cada captación de abastecimiento, analizar la relación río acuífero, analizar la componente subterránea como caudal de base, ….

Añade otras sugerencias en la misma línea: mantener captaciones en desuso como emergencia y para las reservas hidrológicas subterráneas analizar medidas de protección efectivas junto a una red de control especifica de cantidad y calidad de las aportaciones a los cauces a lo largo del año hidrológico

Respuesta:

Tal y como manifiesta en su escrito, aludiendo al carácter reiterativo de esta alegación, entendemos que la misma esta contestada a lo largo de las respuestas anteriores, no obstante centrándonos en lo que a perímetros de protección de captaciones de aguas subterráneas para abastecimiento humano se refiere, se está realizando una revisión de los mismos aplicando los criterios y directrices que figuran en la nueva guía elaborada y editada conjuntamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Instituto Geológico y Minero de España ***:" Guía para el diseño y dimensionamiento de perímetros de protección de captaciones de aguas subterráneas destinadas al consumo humano (PPCsb)"***

Alegación 11.

Respecto a la Ficha DU-10 se elaborar un catálogo de estructuras geológicas profundas, con gran capacidad de almacenamiento y fácil acceso ya que pueden contribuir al almacenamiento de agua, energía en forma de hidrógeno gas, amoniaco o incluso metanol.

Respuesta:

La ficha DU-10 plantea, entre otras cuestiones, cómo abordar el posible aumento de la demanda de agua para la producción de hidrogeno verde, amoniaco y otras sustancias químicas, para el almacenamiento de energía renovable, y su inyección en actuales o futuras infraestructuras de transporte. No se contempla el almacenamiento de estas sustancias en estructuras geológicas profundas, ya que la investigación de este tipo de estructuras geológicas y su posible uso posterior no depende ni compete a esta Confederación Hidrográfica. Ahora bien, en esta demarcación hidrográfica se han llevado a cabo investigaciones para evaluar estructuras geológicas profundas destinadas al almacenamiento de CO_2 consistentes en líneas de perfiles geofísicos con sísmica de reflexión profunda, y la ejecución de al menos tres sondeos de unos 2.500 m de profundidad, dos en la cuenca del rio Cea (León) y otros en el Páramo de Masa (Burgos): de los resultados de las mismas no tenemos noticias.

4.21. Escrito de observaciones Nº 026

Presentado por: Beatriz Asensio Boyano.

En nombre del Ayuntamiento de Benavente.

Alegación 1.

El EpTI no incorpora un análisis suficientemente detallado del papel funcional de Benavente como nodo urbano, logístico, industrial y de servicios supramunicipales dentro del eje hidrológico Órbigo–Esla. Benavente es un enclave estratégico de centralidad territorial dentro del noroeste peninsular, cuya dinámica económica, social y territorial depende de forma directa de la disponibilidad, seguridad y gestión integrada del recurso hídrico. La ausencia de una evaluación territorial específica puede producir una distorsión en la ponderación de medidas, cargas, restricciones o inversiones. Por ello la planificación no puede tratar funcionalmente este municipio con criterios equivalentes a núcleos rurales de menor complejidad hidráulica.

Se interesa que la CHD incorpore una evaluación territorial singularizada de Benavente y su entorno funcional, incluyendo afección urbana, industrial, logística, agrícola y ambiental.

Respuesta:

La caracterización económica de los usos del agua, aspecto donde podría incluirse la alegación del ayuntamiento de Benavente, es una materia que debe incluirse en el Estudio General de la demarcación, según el artículo 78 del RPH, en la primera fase de la planificación hidrológica. Este documento, con el citado análisis, estuvo en consulta pública desde el 21 de diciembre de 2024 hasta el 20 de junio de 2025, tal y como se estableció en el Anuncio publicado por la Dirección General del Agua en el BOE de 20 de diciembre de 2024. Con las aportaciones presentadas el documento se consolidó en septiembre de 2025 y está disponible en la web de la CHD (https://www.chduero.es/web/guest/documentos-iniciales2). Esta información se actualizará en la fase de redacción de Plan Hidrológico, de acuerdo con el artículo 41 del RPH. Los requisitos de esta caracterización son:

- un análisis de la importancia del agua para la economía, el territorio y el desarrollo sostenible y las actividades económicas de la demarcación hidrográfica;

- un análisis de caracterización por actividad que debe incluir, al menos, los siguientes indicadores: valor añadido, producción, empleo, población dependiente, estructura social y productividad del uso del agua.

- una previsión sobre los factores determinantes (desarrollo urbano, agricultura, generación de energía, transporte, pesca y acuicultura, protección frente a avenidas, turismo y actividades recreativas, y efectos del cambio climático), la evolución de las actividades económicas, las demandas de agua y las presiones correspondientes al escenario tendencial que se produciría en caso de no aplicarse medidas.

Esta caracterización se realizará tanto en las unidades de demanda definidas en el plan hidrológico como globalmente para el conjunto de la demarcación hidrográfica. Por tanto, el grado de detalle que

exige la normativa para estos estudios, el más concreto a escala de sistema de explotación, es muy inferior al que se solicita en la alegación que albergaría una dimensión local o comarcal, más vinculada a las vías de comunicación que a los recursos hídricos. De cualquier modo, el EpTI y, posteriormente, el Borrador de PHD identifica la demanda urbana e industrial de Benavente en la unidad elemental de demanda urbana 34201016 - Unidad elemental Benavente y los Valles, cuya caracterización hídrica puede consultarse en el siguiente URL: https://mirame.chduero.es/chduero/public/demands/elementaryUrbanDemands/search/general/34201016

Alegación 2.

La localización de Benavente en un sistema territorial condicionado por la proximidad funcional de las dinámicas fluviales del Esla y del Órbigo exige un tratamiento singularizado del riesgo de inundación. El EpTI no parece incorporar con suficiente intensidad una estrategia preventiva territorial específica. Por ello se propone que:

- *Se realice una revisión específica del riesgo hidráulico en Benavente.*
- *Se prioricen las actuaciones de defensa y laminación.*
- *Se mejora de drenaje e integración urbana.*
- *Se coordine la planificación hidrológica con el planeamiento municipal.*
- *Se incorporen las limitaciones de usos en función de las zonas de uso preferente e inundable.*

Respuesta:

El área de Benavente figura en el Plan de gestión del riesgo de inundación vigente (disponible en https://www.chduero.es/web/guest/pgri-plan-de-gesti%C3%B3n-del-riesgo-de-inundaci%C3%B3n-de-segundo-ciclo) identificada como como área de riesgo potencial significativa (ARPSIS) a la ES020/0009- BENAVENTE-ÓRBIGO-ESLA, con las siguientes subáreas

ES020/0009	BENAVENTE – ÓRBIGO - ESLA	03-1800020-10	Desde Vecilla de la Polvorosa hasta la confluencia con el río Esla	22,06
		03-1800022-04	Santa María de la Vega	2,14
		03-1800022-05	Morales de Rey	3,24
		03-1800082-01	San Pedro Berciano	0,93
		03-1800082-02	Bercianos del Páramo	1,00
		03-1800082-03	Zuares del Páramo	0,72
		03-1800346-01	San Adrián del Valle	0,66
		03-1800346-02	Paladinos del Valle	0,21
		04-1800002-01	Desde Cimanes de la Vega hasta Bercial del Barco	35,58

En este Plan se hace una caracterización física e hidromorfológica de cada uno de los subtramos, una evaluación del riesgo y peligrosidad identificando número de personas, actividades económicas y de patrimonio afectadas, para finalmente hacer una propuesta de medidas en cada subtramo.

Este Plan de gestión se actualizará en el nuevo ciclo de manera paralela con el Plan Hidrológico de forma que se revisará de nuevo tanto el riesgo, la peligrosidad y las medidas de todos los subtramos

del ARPSIS del entorno de Benavente. Por lo tanto, podemos indicar que ya existe una estrategia preventiva territorial específica para el riesgo de inundación en el entorno de Benavente que se actualizará en el nuevo ciclo.

Alegación 3.

La revisión del PHD4 debe asegurar que las medidas de asignación, restricción o redistribución de recurso no comprometan la seguridad hídrica de Benavente, ya que al ser un nodo supramunicipal es necesaria una lectura reforzada de la garantía de suministro. Por ello se propone blindar el abastecimiento urbano; realizar un análisis de escenarios de escasez; asegurar la garantía reforzada para municipios nodales; hacer una previsión de infraestructuras de respaldo; y concretar requisitos formales y caracterización de vertidos de cara a la instalación de plantas de biogás.

Respuesta:

El EpTI en la Ficha DU-06 y DU-07 analiza no solo la garantía del regadío, tema central de la Ficha DU-06, sino de todos los usos, en especial del abastecimiento por estar en primer orden de prelación, y de las restricciones al uso del agua como son los caudales ecológicos. De hecho, en la página 144 de la Ficha DU-07 se indica específicamente: *En las distintas alternativas se mantiene un nivel similar de garantía de las demandas urbanas e industriales, que presentan mayor prioridad en el suministro, de forma que la diferencia de suministro a la atención a las demandas se centra, en cada alternativa, en el uso agrario. Por otro lado, el cumplimiento de los caudales ecológicos se introduce como restricción previa a la atención a las demandas en todas las alternativas*. En las simulaciones de asignación de recursos que se ha hecho, incluso en el escenario de reducción de las aportaciones por efectos del cambio climático, la unidad elemental de demanda urbana 34201016 (Benavente y los Valles) mantiene una garantía del 100%.

~~Los valores de demanda en cada escenario y su garantía son los siguientes para cada horizonte de planificación:~~

~~Horizontes~~	~~Demanda (hm^3/año)~~	~~Garantía (%) 1 mes – 10 año~~
~~Actual~~	~~3,13~~	~~100%~~
~~2033~~	~~3,13~~	~~100%~~
~~2039~~	~~3,13~~	~~100%~~
~~2045~~	~~3,13~~	~~100%~~

Los valores actualizados de la unidad elemental de demanda urbana 34201016 Benavente y Los Valles es de 3,1255 hm^3/año frente a un volumen concesional de 4,12 hm^3/año. En totas las simulaciones de alternativas realizadas en el ETI, con y sin efecto de cambio climático, la garantía al suministro es del 100%.

Alegación 4.

Respecto a la Ficha DU-06 se propone la inversión en la reparación de las infraestructuras de riego existentes (canales, desagües, acequias…) ya que esto reduciría el volumen de pérdidas, evitaría la inundación de zonas y escasez de agua en otras, y alargaría la vida útil de las infraestructuras existentes reduciendo costes a futuro.

Respuesta:

Al término municipal de Benavente le afectan las infraestructuras de las zonas regables de los canales de Manganeses y Esla. En el Plan Hidrológico vigente hay cuatro medidas que impulsan el MAPA y la Consejería de Agricultura de Castilla y León dirigidas a la modernización de ambas zonas regables, codificadas respectivamente como: 6401001 (Modernización de regadíos. ZR Manganeses) y 6404811 (Modernización de regadíos. ZR Esla). En la actualidad se están redactando los proyectos de ambas zonas regables por lo que es esperable que en un plazo corto de tiempo puedan implementarse. En estos proyectos se sustituyen las acequias abiertas por tuberías a presión lo que supone una reducción de pérdidas y permite corregir la escasez de otras zonas, tal y como plantea la alegación.

Alegación 5.

Respecto a la Ficha DU-07 se indica que la transición hidráulica no puede trasladar desproporcionadamente costes al Ayuntamiento. Así, Benavente no debe asumir en solitario las obras de protección hidráulica, las de adaptación de redes, las de refuerzo de depuración, las medidas de resiliencia climática, las inversiones extraordinarias y las medidas preventivas y de atenuación en las zonas de captación. Por ello se propone para estas actuaciones una cofinanciación estatal/autonómica/hidráulica, una priorización de inversiones, e instrumentos de apoyo extraordinario.

Respuesta:

El EpTI no puede modificar el marco competencial de las administraciones locales en materia de abastecimiento, saneamiento, protección de las zonas de captación o de las zonas inundables en el ámbito municipal. Tampoco el EpTI puede relajar los requisitos que estas nuevas normas exigen a los agentes que intervienen en la gestión del agua. Esta falta de ajuste entre los objetivos, las competencias y las capacidades de cada agente es lo que aflora en el EpTI. Así, las fichas DU-03, sobre contaminación urbana e industrial, DU-05, sobre gestión de inundaciones, DU-08, sobre abastecimiento de agua potable y DU-09, sobre coordinación administrativa, dejan bastante claro que las nuevas exigencias normativas suponen un reto para las administraciones públicas cuando en algunos casos todavía no se cumplen los requisitos de las normas derogadas.

El estado español debe remitir a la Comisión Europea, por ejemplo, antes de enero de 2028 el Programa Nacional de Ejecución para la implementación de la Directiva 2024/3019 (DTARU). En ese Programa deberá señalar las medidas a ejecutar, los responsables de las medidas (AGE, CCAA o entes locales) y los instrumentos de financiación para poder llevarlo a cabo.

Alegación 6.

Se propone una coordinación reforzada entre el ayuntamiento de Benavente y la CHD en materia de planificación hidrológica y ordenación urbana municipal en lo que se refiere a clasificación de suelos, crecimiento urbano, áreas productivas, equipamientos, infraestructuras, y planeamiento estratégico. Por ello se solicita incorporar mecanismos formales de coordinación con el Ayuntamiento de Benavente.

Respuesta:

Aunque la alegación corresponde a cuestiones relacionadas con la gestión del agua, se indica que la Confederación tiene de manera habitual una relación fluida de cooperación con las administraciones locales. Además, tiene abierto un canal específico (canal de Alcaldes, https://www.chduero.es/web/guest/canal-de-alcaldes) que permite una respuesta más ágil a las cuestiones que plantean determinados municipios en materia de información, autorizaciones o concesiones.

Por otra parte, el ayuntamiento de Benavente forma parte del censo de la Junta de Explotación del Órbigo, órgano de gestión en régimen de participación cuya misión es coordinar la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel conjunto de ríos, río, tramo de río o unidad hidrogeológica, cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. En este sentido los representantes de cada uso en la Junta de Explotación del Órbigo se eligen de manera democrática conforme a los criterios que fija el artículo 41 del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. En las últimas elecciones celebradas el 18 de octubre de 2024, ninguno de los tres municipios con mayor población (Benavente, La Bañeza y León) compareció, por lo que los representantes del uso de abastecimiento son dos entidades locales con mucha menor población que Benavente, el ayuntamiento de Villarejo del Órbigo y la Mancomunidad del Órbigo.

Alegación 7.

El ETI y PHD4 deben integrar evaluación socioeconómica territorial, ya que Benavente desempeña funciones supramunicipales por ser cabecera comarcal, nodo logístico y de servicios, centro relevante de actividad agroindustrial y de conexión interterritorial. Por ello toda restricción o insuficiencia inversora tiene impacto económico multiplicador. Por ello se solicita un análisis socioeconómico singularizado.

Respuesta:

El análisis económico de los usos del agua, como se ha indicado en la respuesta a la alegación primera, se realiza tanto en las unidades de demanda definidas en el plan hidrológico como globalmente para el conjunto de la demarcación hidrográfica. Por tanto, el grado de detalle que exige la normativa para estos estudios, el más discreto a escala de sistema de explotación, es muy inferior al que se solicita en la alegación que albergaría una dimensión local o comarcal, más vinculada a las vías de comunicación que a los recursos hídricos.

4.22. Escrito de observaciones Nº 028 y similares

Se muestra a continuación los agentes que han presentado escritos de POS con el mismo contenido y que son respondidas de forma conjunta para todos ellos.

Nº POS	Presentado por:	En nombre:
N028	D. Miguel Ángel Peláez Lorenzo	Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas
N029	D. Rafael Santos Esteve	Comunidad de Regantes del Canal de Pollos
N045	D. Mariano Blanco Rodríguez	Comunidad de Regantes del Canal de Geria-Simancas-Villamarciel

Alegación 1.

Contaminación difusa (DU-01)

Las propuestas y sugerencias que se hacen son:

- Actualizar los lisímetros ya que son más graves los datos presentados por otros sectores debido al mal estado de las depuradoras o a la ausencia de ellas, la industria, …

- No parece que se la CHD deba limitar los glifosatos pues ya está limitado por la PAC, habiendo cada vez menos materias activas.

- No es necesario un asesoramiento externo para reducir la contaminación en agricultura pues en todo este asunto hay mucha información a través de charlas y jornadas desarrolladas por las distintas marcas de semillas, fertilizantes, y distintas entidades tanto públicas como privadas.

- Consideran razonable la implantación de bandas de protección a las riberas de los ríos u otras masas superficiales, pero siempre mediante la indemnización al agricultor por la pérdida de rendimiento que estos terrenos afectados les produciría.

Respuesta:

La Ficha de temas importantes DU-01 señala que el trabajo *Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas* realizado por el MITECO entre 2023 y 2025 en la demarcación hidrográfica del Duero, tanto en aguas superficiales como subterráneas, se deriva la siguiente conclusión: en aguas superficiales (con 79 puntos de muestreo en dos campañas diferentes) en el 61% de las muestras el origen del nitrato es agrario, el 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, y el 14% de las muestras tiene un origen indeterminado; en aguas subterráneas (con 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes) el 55% de las muestras tiene un origen agrario, el 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, y el 14% de las muestras de origen indeterminado. Esta es la información más actualizada de que se dispone.

La CHD no tiene competencia para autorizar o no hacerlo el uso de sustancias. Pero sí es responsable de analizar la contaminación del agua bajo los criterios que establecen las normas de calidad aprobadas, y para el caso del glifosato este límite es de 0,1 µ g/L en aguas subterráneas y también de 0,1 µ g/L para aguas superficiales, aunque se debate un nuevo umbral propuesto para toda la UE que

permite hasta 398,6 µ g/L. En tanto estos umbrales no se modifiquen este será el criterio de calidad de aguas que seguirá la CHD.

El asesoramiento externo en materia de contaminación parece necesario dada la situación que muestran las aguas de la demarcación hidrográfica. Por otra parte, esto no es una novedad en España pues en numerosas comunidades autónomas se han implantado con carácter voluntario desde hace años este asesoramiento externo, independiente del que pueden ofrecer los fabricantes de productos, y ha tenido muy buena acogida en el sector.

Sin duda las bandas de protección elegidas voluntariamente deberían tener una compensación económica para el agricultor que así lo decida por el servicio ambiental que puede ofrecer. En el Plan vigente se planteó esta medida vinculada financieramente a la arquitectura verde de la PAC, pero fue rechazada por la autoridad competente en la materia.

Alegación 2.

Respecto al tema importante DU-01 (y también afecta al tema DU-06), se propone que el Estado dote con 300 M € de presupuesto al capital social de SEIASA durante el periodo de este nuevo Plan Hidrológico para poder continuar con las modernizaciones, lo cual reduce la contaminación difusa, y, en definitiva, seguir apoyando al sector primario.

Respuesta:

La Ficha DU-06 se muestra coherente con la alegación al señalar entre las decisiones a tomar *Mantener e incluso incrementar el esfuerzo inversor en la modernización de regadíos de la demarcación, acometiéndose las medidas previstas en el plan hidrológico vigente, en especial aquellas que afectan a los sistemas de explotación más ajustados, así como las nuevas modernizaciones identificadas por la JCyL durante el periodo de consulta pública de los documentos iniciales del cuarto ciclo.* Esta decisión lógicamente pasa por la decisión de los propios usuarios para modernizar sus zonas de riego y por las administraciones competentes por disponer de la financiación más asequible al sector.

Alegación 3.

Uso sostenible de las aguas subterráneas (DU-02)

Las propuestas y sugerencias que se hacen son:

- Apoyo a seguir constituyendo CUAs.

- Se oponen a las modificaciones de características por traspaso de los derechos de riego (herencias, etc.)

- Fomentar la "siembra de agua" o recarga de acuíferos para el aprovechamiento de los años lluviosos.

- Se construyan balsas laterales, que se llenan con caudales de invierno, lo cual podría desencadenar en la no utilización de aguas subterráneas o servir para la recarga de acuíferos.

Respuesta:

Una de las medidas del Plan Hidrológico dirigidas a la recuperación de las masas de agua en mal estado cuantitativo es el fomento de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas (CUAS). Estas

entidades son corporaciones de derecho público formadas por usuarios de una misma masa de agua subterránea que buscan hacer una gestión sostenible y organizada del recurso hídrico, garantizando su uso equitativo y evitando la sobreexplotación.

Desde el Organismo de cuenca se ha fomentado y apoyado su constitución de CUAS. Actualmente, la cuenca del Duero cuenta con 50 CUAS constituidas, de las cuales 47 lo han hecho después de 2022. En total abarcan una superficie potencial de riego cercana a las 100.000 hectáreas, mayoritariamente ubicadas en masas en mal estado cuantitativo

Estas agrupaciones, además de una mejor gestión y uso del agua, permiten concienciar a los usuarios sobre la importancia de la gestión correcta del agua, haciéndoles copartícipes y corresponsables de esa gestión junto al Organismo de cuenca.

Por lo que se refiere a las modificaciones de características de las autorizaciones de aprovechamientos de aguas, apuntar que ese aspecto está definido claramente en la Ley de aguas y su Reglamento, para atender a su pretensión sería necesario modificar dicha ley, aspecto que no depende de la Planificación Hidrológica.

La recarga artificial de acuíferos es una práctica que se lleva haciendo en esta cuenca desde hace más de 20 años, las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 desde la CHD se encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos, teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos, y el resultado es que no hay demasiadas zonas aptas para ello, más allá de las existentes en la actualidad. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, ya se contempla como posibles actuaciones en la Ficha DU-02 en las masas de agua en mal estado cuantitativo. No deja de ser complejo armonizar los distintos factores que confluyen para que sean un caso de éxito: donde ubicarlas, de qué cauces con recurso suficiente y que permita alcanzar sus objetivos ambientales, costes de inversión en ejecución y su financiación, y costes de explotación al demandar la mayoría bombeos; en definitiva, muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

Alegación 4.

Alteraciones hidromorfológicas y restauración fluvial (DU-04)

Se oponen a la eliminación de azudes por motivos hidromorfológicos pues las captaciones de los nuevos regadíos se han ejecutado teniendo en cuenta la situación actual de estos cauces y cualquier modificación en ellos podría suponer la inutilización de estas modernizaciones.

Respuesta:

Es necesario recordar que la Directiva Marco del Agua (DMA) y la legislación nacional exigen alcanzar el buen estado o potencial ecológico de las masas de agua. La reducción de las presiones hidromorfológicas transversales (como los azudes) es una herramienta clave para mejorar la continuidad longitudinal y el transporte de sedimentos, factores esenciales para la salud de los ecosistemas fluviales.

Con este fundamento general, la eliminación de cada obstáculo debe analizarse caso a caso, teniendo en cuenta que la demolición puede entrar en conflicto con usos consolidados. Por este motivo, son prioritarias las actuaciones de demolición sobre obstáculos que no tienen titulares o está en desuso. Para aquellos que cuentan con una concesión vigente y un uso productivo, como es el caso de los regadíos modernizados, el enfoque es distinto, estableciéndose para ellos medidas de permeabilización o franqueabilidad en lugar de la demolición total, similares a las que se han aplicado a otros sectores, como el hidroeléctrico. Estas actuaciones permiten obtener mejoras ambientales sin perder su operatividad.

Alegación 5.

Gestión del riesgo de inundación (DU-05)

Proponen que para reducir el riesgo de inundación se recrezcan los embalses donde sea posible, se construyan balsas laterales y nuevos embalses, como se ha demostrado en los últimos episodios de inundación.

Respuesta:

Para reducir el riesgo de inundación el Plan de Gestión del Riego de Inundación identifica diversas medidas dependiendo del lugar de la cuenca, de la vulnerabilidad de cada uno y de la peligrosidad. En la actual coyuntura las líneas de acción del MITECO en esta materia se plasman en la Ficha DU-05, en la que se propone impulsar las soluciones basadas en la naturaleza como medidas naturales de retención del agua, la restauración fluvial y la restauración hidrológico forestal de las cuencas hidrográficas, con la colaboración de todas las administraciones implicadas, puesto que es imprescindible la colaboración activa de los ayuntamientos y comunidades autónomas y otras administraciones, para conseguir implementarlas. También se propone impulsar con las distintas administraciones competentes, la disminución de la vulnerabilidad de los elementos existentes en las zonas inundables, incrementando la concienciación pública y la percepción del riesgo de inundación y de la autoprotección. Y aumentar la concienciación y la predicción. Como se ve medidas muy diversas a las que se proponen en la alegación.

Alegación 6.

Relevancia del regadío y sostenibilidad (DU-06)

Proponen que se trabaje en favor del regadío al ser en la cuenca de tanta relevancia como se indica en la Ficha DU-06.

Respuesta:

Así se pone de manifiesto en la Ficha DU-06 que incluso en su título se especifica: *relevancia y sostenibilidad del regadío.* De hecho, en la Ficha se indica:

- el regadío fija de población en el medio rural;

- el regadío aporta mayor diversificación de cultivos;

- el regadío aporta la mayor fuente de materias primas para la alimentación humana;

- las zonas con regadío tienen una densidad de población tres veces superior a las del secano;

- el regadío genera 3,6 veces más de empleos que el secano;

- en las zonas de regadío se incorporan 3,5 veces más jóvenes al sector agrario que en el secano;

- las zonas con regadíos modernizados generan hasta 7,5 veces más inversión que las zonas de secano;

- el regadío tiene un valor de producción 3 veces mayor que el secano en la demarcación;

- el valor de producción del regadío asciende a 1.269 M€ y supone el principal motor económico en gran parte del medio rural de la demarcación;

- el regadío tiene un papel fundamental para asegurar la autonomía alimentaria y reducir la inflación de la cesta de compra del consumidor y tiene un efecto arrastre en el conjunto de la economía, ya que es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español (que supone un 10,6% al PIB español).

Alegación 7.

Respecto a la Ficha DU-07 proponen mayor proactividad del Ministerio para eliminar los canales fuera de uso y que no se traslade a canon todo el coste de construcción y mantenimiento de infraestructuras, sino que se financie a través de presupuestos y que el coste se reparta entre todos los usuarios del agua.

Respuesta:

El problema de los canales de transporte fuera de uso a los que abocan los procesos de modernización se aborda en la planificación actual a través de la Normativa del Plan Hidrológico, al incluir en su artículo 28: *De conformidad con los artículos 10.4 b) y 10.6 b) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en los proyectos de modernización de regadíos que afecten a zonas regables del Estado, se deberá contemplar una solución para las infraestructuras que fueron financiadas total o parcialmente con fondos del Estado, de forma que se garantice su correcto uso, conservación y mantenimiento. Si la solución fuera su puesta fuera de servicio, por ser sustituidas por otras más modernas y eficientes, los proyectos de la modernización, en coordinación con las actuaciones de concentración parcelaria, contemplarán las actuaciones necesarias para que la eliminación de las infraestructuras hidráulicas en desuso se produzca garantizando su integración ambiental para reducir el impacto que estas obras producen en su entorno*.

La propuesta de que el mantenimiento y la construcción de infraestructuras que beneficia a unos usuarios concretas se pague por todos los ciudadanos además de suponer un agravio para otras actividades no es conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del TRLA.

Alegación 8.

Coordinación interadministrativa en la implementación del programa de medidas (DU-09)

Proponen coordinación entre administraciones y con Portugal solicitando la revisión del Convenio de la Albufeira para hacerlo coherente y adaptable a la situación hídrica de cada año.

Respuesta:

Es importante resaltar que el convenio de Albufeira es un tratado internacional establecido entre dos países, España y Portugal, con la finalidad de dar coherencia y continuidad a tratados anteriores en lo que se ha buscado a lo largo de los siglos limitar los conflictos fronterizos entre ambos países.

La frontera entre España y Portugal, con más de 1.200 km, está atravesada por cinco cuencas hidrográficas, Miño, Limia, Duero, Tajo, Guadiana, siendo en numerosas ocasiones el río el que establece la propia frontera: El Río Miño en Pontevedra, el Río Manzanas al norte de Zamora, el tramo internacional del río Duero y el tramo internacional del Guadiana.

De ahí que una gran parte de los múltiples conflictos fronterizos se hayan debido a la gestión de las aguas y sus cuencas hidrográficas.

Por ello desde mediados del siglo XIX comenzó a desarrollarse una cooperación institucional entre ambos países, encaminada a resolver estos litigios.

El primer antecedente de dicha cooperación fue el Tratado de Límites de 1864, en el cual se definía la raya de separación (frontera). Este tratado resolvió algunos conflictos de lindes existentes en aquella zona, como es el caso de “Las reyertas de Alburquerque”.

Este tratado fue el punto de partida para las posteriores relaciones entre los dos países. Conviene recordar que las Reyertas de Alburquerque eran consecuencia de los usos de unos pastos situados entre dos poblaciones limítrofes, una española y otra portuguesa, y que este tratado las resolvió marcando una línea de frontera que dividió los pastos en dos partes.

Posteriormente, la necesidad de regular el aprovechamiento energético provocó la aparición de diversos tratados para armonizar este uso con el histórico de frontera.

Siendo los acuerdos más destacados los siguientes:

- TRATADO DE LÍMITES DE 1864 - se limita a señalar que los recursos de los tramos transfronterizos deben usarse en beneficio mutuo, sin dañar a la otra parte. En el año 1866 se añaden los anejos al tratado, relativos a proyectos sobre tramos fronterizos.
- ACUERDO DE 1912 - conjunto sencillo de reglas para el aprovechamiento industrial de los tramos limítrofes, asignando la mitad a cada uno con el requisito de presentar un proyecto técnico para el uso del agua. En definitiva, mediante este acuerdo se regula el aprovechamiento industrial del agua de los tramos fronterizos.
- ACUERDO DE 1927 - regula la utilización hidroeléctrica del Duero (perdió su eficacia con la firma del de 1964).

- CONVENIO DE 1964 - reparte el aprovechamiento hidroeléctrico del Duero en dos partes prácticamente iguales y autoriza a España a trasvasar aguas desde la cabecera del río Túa al río Sil. En el Protocolo adicional se recogen cuestiones relativas a embalses laterales y bombeos.
- CONVENIO DE 1968 - extiende el anterior al resto de los ríos transfronterizos, con la posibilidad de emplear embalses laterales y el aprovechamiento para otros usos. Concretamente, este convenio asignó los recursos, fundamentalmente hidroeléctricos, de los tramos internacionales de los ríos Miño, Limia, Tajo y Guadiana y sus afluentes y se contempló la viabilidad de trasvasar recursos de los ríos Guadiana, Chanza y Tajo.

Estos tratados y su necesidad de acompasarlos a las nuevas realidades que surgen con la entrada de ambos países en la CEE que determinan nuevos marcos de cooperación que imponen la revisión de los mismos para ajustarlos a las nuevas realidades.

En este sentido la Declaración de Oporto de 1994 constituye el mandato al más alto nivel para la negociación, poniendo de manifiesto el interés de ambos gobiernos por disponer de un marco estable de organización de las aguas internacionales compartidas.

Los contenidos esenciales se encuadraron en torno a la ampliación del marco de referencia territorial y material de los Convenios en vigor, llevando a cabo una cooperación conjunta de planificación y gestión del recurso, así como el respeto y la compatibilidad de las situaciones existentes y las derivadas de los convenios vigentes.

En este ámbito se configuraron dos equipos negociadores constituidos por altos funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Medio Ambiente, que hasta mediados del año 1996 no tuvieron avances apreciables como consecuencia de los cambios políticos en ambos países. Avances que se harían sustanciales a partir de 1997.

El Convenio de Albufeira, firmado en 1998 en la ciudad portuguesa de Albufeira y en vigor, desde el 17 de enero de 2000, es el último convenio aprobado por ambas naciones en materia de los recursos hídricos compartidos es el Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano – Portuguesas

El 4 de abril de 2008 se firma el Protocolo de revisión del Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, entrando en vigor el 5 de agosto de 2009.

Tiene como eje vertebrador la concepción integral de las cuencas compartidas, incluyendo, por lo tanto, las aguas superficiales, las subterráneas y los ecosistemas relacionados, sin desestimar las actividades relativas al aprovechamiento del recurso con inclusión del rasgo de protección de la calidad de las aguas, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- La ampliación del marco de referencia, abarcando la integridad de las cuencas compartidas, incluyendo las aguas superficiales, las subterráneas y los ecosistemas relacionados
- La ampliación material, contemplando todas las actividades relativas al aprovechamiento del recurso incluyendo la protección de la calidad de las aguas

- La cooperación entre los dos países, en torno a cuatro elementos fundamentales:
  - Intercambio de información, regular y sistemático.
  - Consultas a desarrollar a través de órganos específicos.
  - Adopción de medidas que posibiliten la homologación de los sistemas administrativos y jurídicos de ambos países.
  - Régimen de caudales.
- La coordinación de planes de gestión y programas de medidas, siguiendo las pautas de la Directiva Marco del Agua y organizando entre ambas administraciones hidráulicas los objetivos a alcanzar, existiendo libertad nacional para establecer y realizar un programa de medidas que permita la consecución de los objetivos planteados.
- El respeto de las situaciones derivadas de los Convenios anteriores.

Conviene resaltar que el Convenio de Albufeira ha introducido el concepto de desarrollo sostenible en la gestión de las cuencas y el aprovechamiento de los recursos naturales por medio de:

- La búsqueda de un equilibrio entre protección del medio ambiente y el de los recursos.
- La prevención de los riesgos de una forma común.
- La protección de los ecosistemas acuáticos y terrestres de ellos dependientes.

Asimismo, el Convenio ha fijado una serie de valores:

- Los caudales mínimos que la parte española de las cuencas deber servir a la parte portuguesa en situaciones hidrológicas normales, respetando los convenios internacionales vigentes hasta la fecha.
- Los umbrales de precipitación y/o volumen almacenado en los embalses de regulación que permiten determinar los períodos de excepción.
- Los niveles de caudales establecidos por el Convenio de 1964, contemplando además cuatro estaciones de control y los volúmenes mínimos anuales que deben pasar por ellas

Estos caudales son exigibles, salvo en los períodos de excepción, cuya definición queda también detallada en el Artículo 3.4 del convenio.

Asimismo, el Convenio de Albufeira confirmó el reparto hidroeléctrico establecido en el Convenio de 1964, de tal forma que el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo internacional comprendido entre el origen y la desembocadura del río Tormes, corresponde a Portugal (Centrales de Miranda, Picote y Bemposta), así como el tramo comprendido entre la desembocadura del río Huebra y el final del tramo internacional. Por otra parte, corresponde a España el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo entre la desembocadura del río Tormes y la del Huebra (Centrales de Aldeadávila y Saucelle).

El Convenio de Albufeira regula las relaciones internaciones entre dos países que comparten cinco cuencas hidrográficas por lo que cualquier modificación o propuesta de modificación de cualquier aspecto del tratado requiere del acuerdo mutuo de los dos países.

El Convenio establece los Órganos de Cooperación que se instituyen para la consecución de los objetivos del tratado, que son la Conferencia de las Partes y la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio (CADC).

Para garantizar la cooperación al más alto nivel está establecida la denominada "Conferencia de las Partes". Que está compuesta por los representantes designados por los Gobiernos de las Partes y presidida por los ministros de Medio Ambiente de cada uno de los Estados, o por quien estos deleguen, y se reúne cuando las Partes lo decidan o a petición de cualquiera de ellas, para evaluar y resolver aquellas cuestiones sobre las que no se haya llegado a acuerdo en el seno de la Comisión.

Hasta la fecha se han producido tres "Conferencia de las Partes".

- en Lisboa el 27 de junio de 2005
- en Madrid el 19 de febrero de 2008.
- en Oporto, el 20 de julio de 2015

La Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio (CADC) es el órgano privilegiado de resolución de las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del Convenio.

Si bien es cierto que todo tratado puede ser modificado en la búsqueda de propuestas que intenten mejorar los acuerdos firmados, no es menos cierto que toda modificación exige el acuerdo de ambas partes.

Es importante resaltar que la revisión de cualquier tratado internacional se realiza al máximo nivel, por lo tanto, excede del ámbito de un plan hidrológico, cuya función, en relación con un convenio internacional asumido por el Estado, es establecer las condiciones para el correcto cumplimiento de dicho convenio.

Ello no debe ser óbice para que se estudien y analicen los indicadores y su evolución temporal en la búsqueda de posibles alternativas que puedan servir para evaluar las condiciones de cumplimiento y, si ello es posible, se propongan mejoras que sirvan a la finalidad establecida en la filosofía del convenio.

Alegación 9.

Nuevos usos del agua (DU-10)

Desde el regadío se rechaza que estas actividades reduzcan la disponibilidad de agua para la agricultura, sobre todo después del esfuerzo económico realizado por las comunidades de regantes para modernizar sus instalaciones y ahorrar recursos. También preocupa el posible impacto ambiental derivado de vertidos y contaminación difusa, así como la falta de claridad sobre la contribución de estas empresas a los costes de mantenimiento y a las restricciones en periodos de sequía.

Respuesta:

Las actividades ligadas a los nuevos usos del agua, vinculados a las industrias de producción de energías renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos, no supondrá en ningún caso una disminución de recursos para la agricultura, ya que el orden de preferencia entre diferentes

usos y aprovechamientos, establecido en el artículo 60.3 del TRLA, pone los usos de regadío y ganaderos con prevalencia sobre los usos industriales.

Los parques eólicos y plantas fotovoltaicas precisan agua para su construcción y para algunas operaciones de mantenimiento (limpieza de paneles), siendo los volúmenes demandados no significativos. El suministro de agua para estas instalaciones se realiza habitualmente mediante suministro con camiones cisterna de agua procedente de concesiones vigentes o mediante derivaciones temporales de aguas superficiales, que deben tramitarse en este Organismo, tramitación en la cual se evalúa la disponibilidad del recurso en cada caso particular.

Por otra parte, las instalaciones industriales para la producción de compuestos químicos capaces de almacenar los excedentes de energías renovables como son el hidrógeno verde, el amoniaco, metanol, etc., pueden suponer un uso consuntivo del agua acompañado de grandes volúmenes para la refrigeración que, en algunos casos, revierten al medio hídrico.

La alternativa elegida para este tema importante propone el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos sólo en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua y no que se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, entre ellos el regadío.

Se establecerán dotaciones máximas para la producción de estos compuestos químicos, aplicando las mejores técnicas disponibles y el estado de la ciencia.

En lo relativo al posible impacto ambiental derivado de vertidos y contaminación difusa, estos aspectos se analizan pormenorizadamente en cada caso, en los informes preceptivos que emite este Organismo para la evaluación ambiental de los proyectos a petición del órgano ambiental que corresponda. En estos informes se establecen condicionantes para minimizar estos impactos que posteriormente se recogen en la declaración de impacto ambiental correspondiente.

Con relación a la contribución de estas empresas a los costes de mantenimiento no queda claro en su escrito a qué infraestructuras se refiere. Si se refiere a la contribución de estos nuevos usos al pago del canon de regulación y tarifa de utilización del agua, hemos de señalar que deberán contribuir a estas exacciones como el resto de usos, con la parte que les corresponda en función de su concesión de aguas.

En cuanto a posibles restricciones en periodos de sequía para estos usos, esta es una cuestión que se aborda en el Plan Especial de Sequías (PES). El PES señala diversas estrategias de gestión del agua en los distintos escenarios de sequía y escasez, que serán los que apliquen en esas circunstancias. Pero no es esta fase del EpTI, de identificación de los temas importantes y posibles soluciones, donde debe abordarse esas situaciones excepcionales que tiene su marco legal y administrativo en el PES.

4.23. Escrito de observaciones Nº 030

Presentado por: Dña. Laura Sánchez Gallardo.

En nombre de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA).

Alegación 1.

El enfoque general del EpTI es erróneo: se abandonar el «catálogo de obras» y avanzar hacia un nuevo marco de gobernanza; los usos deben subordinarse al buen estado. La planificación que se plantea prioriza la satisfacción de las demandas sobre la recuperación ecológica; debe cambiarse radicalmente la composición instrumental de la política de aguas.

Respuesta:

Se comparte que los objetivos ambientales operan como condicionante de la atención de las demandas (art. 4 DMA; los caudales ecológicos son restricción previa, art. 59.7 TRLA). Ahora bien, la afirmación de que la planificación se concibe como catálogo de obras y prioriza las demandas es un juicio de valor que no se comparte: el EpTI, por definición, plantea problemas y alternativas para su debate, no un catálogo de inversiones. La planificación se construye sobre el esquema DPSIR y las Orientaciones Estratégicas del cuarto ciclo acentúan la adaptación y el ajuste de demandas. La dimensión de gobernanza se aborda, además, mediante instrumentos complementarios (coordinación interadministrativa, gobernanza de aguas subterráneas).

Alegación 2.

Respecto a la selección de temas importantes de la demarcación hidrográfica del Duero, se cuestiona la eliminación de la recuperación de costes y de los caudales ecológicos como temas importantes. La desaparición de fichas propias y la omisión de temas conflictivos restan calidad al diagnóstico.

Respuesta:

Es cierto que no existe un tema específico sobre caudales ecológicos en el EpTI. El motivo es que, tras varios ciclos de planificación tratándolo como tema específico, se considera por un lado que se ha avanzado mucho en la determinación, implantación y seguimiento de los caudales ecológicos y por otro que es un tema transversal al resto de temas importantes, en los que se hace referencia a los mismos.

En cuanto al control y seguimiento de los caudales ecológicos, se sigue lo establecido en los artículos 49 quinquies y 49 sexies del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. En este cuarto ciclo de planificación, se realizará una revisión de los caudales ecológicos a partir del seguimiento (que se incluye en los informes anuales de seguimiento del plan hidrológico), analizando aquellas masas de agua con incoherencia respecto al régimen natural y las que tengan conflictividad de incumplimiento por usos. Las masas de agua que resulten de este análisis serán llevadas al proceso de concertación que se realizará previsiblemente coincidiendo con la fase de información pública del plan hidrológico.

Por otra parte, la Ficha DU-07 y DU-04 señalan la relevancia de las condiciones de calidad de los propios caudales ecológicos, que también preocupan a determinados agentes.

Con carácter general la recuperación de costes, aunque no figure como ficha autónoma, se trata en el Plan Hidrológico. Por otra parte, poco puede aportar el EpTI a una materia que requiere reformas legales de alto rango. El legislador modificó recientemente el régimen económico financiero del agua a través de la DF 2.10 del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, desaprovechando una ocasión para ajustar una petición que en los ciclos de planificación anteriores venían reclamando los ETI de casi todas las demarcaciones hidrográficas; una vez modificada qué puede aportar el EpTI cuando la decisión legal ya ha sido tomada; entendemos que el legislador está satisfecho del grado de recuperación de costes actual y por lo tanto poco más pueden aportar el ETI.

Por lo que se refiere al cambio climático, éste se trata en todos los temas importantes de manera transversal, lo que no altera el fondo del diagnóstico.

Alegación 3.

Se indica que, al comprobar el diagnóstico del estado de las masas de agua, se constata un fracaso generalizado, no se observa ninguna mejora sino más bien un empeoramiento; además hay una falta de análisis crítico de las causas y de la eficacia de las medidas de los ciclos anteriores. Los EPTI reconocen el escaso avance, pero no analizan por qué han fallado los planes ni evalúan la eficacia de las medidas aplicadas.

Respuesta:

Invitamos a la alegante a que revise los informes de seguimiento de los planes hidrológicos a los que se refiere el artículo 87 y 88 del RPH, disponibles en la web de la Confederación Hidrográfica, donde se hace cada año un diagnóstico de los valores globales de estado de las masas de agua. En general el empeoramiento aparente que detecta la alegante obedece en parte a la mejora del conocimiento (nuevas sustancias prioritarias, ampliación y refuerzo de redes de control y de la comprensión de los problemas), lo que no equivale a un deterioro real equivalente; se trata además de un fenómeno común a escala europea. Dicho esto, se comparte que la evaluación crítica de la eficacia de las medidas del ciclo anterior -vinculando presiones, estado y medidas- es un contenido diagnóstico valioso y mejorable.

Alegación 4.

Respecto a los temas importantes relacionados con las aguas subterráneas (sobreexplotación y contaminación difusa por nitratos) se reclama una regulación más dura y análisis coste-eficacia y no una aplicación reactiva de la Directiva de Nitratos. Las alternativas incluyen medidas ineficaces y se renuncia al buen estado con objetivos menos rigurosos.

Respuesta:

Las Fichas DU-01 y DU-02 coinciden en gran parte con el diagnóstico que dibuja la alegante, si bien no comparte el tono sombrío de la supuesta ineficacia de las medidas. En ambas fichas se explica qué medidas están teniendo efectos y cuáles no tanto o no se han llegado a implementar. La sobreexplotación y la contaminación difusa comprometen los objetivos, y las medidas preventivas son más eficaces que las correctivas. Ahora bien, la designación de zonas vulnerables y los programas de actuación frente a nitratos son competencia autonómica, y el Plan Hidrológico incorpora las medidas adoptadas por las autoridades competentes, llegando a casos en que el Plan Hidrológico plantea

medidas y la autoridad competente las rechaza porque no formar parte de sus prioridades; más que «regulación más dura», la clave es la mejora de la implementación. La AGE mantiene una actitud proactiva: declaraciones de masas de agua subterránea en riesgo (art. 56 TRLA) y actuaciones de recuperación y de mejora del conocimiento y control.

Alegación 5.

Se echan en falta fichas propias sobre humedales y manantiales; se ofrece escasa atención a las aguas de transición y costeras; los caudales de desembocadura son ínfimos. Se plantea la protección de los humedales emblemáticos y se minusvaloran manantiales, estuarios y actividades litorales.

Respuesta:

Se comparte el valor ambiental de los humedales, con sus ecosistemas, y de los manantiales. Su protección se articula a través del Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrológico (art. 99 bis TRLA) y de las figuras de conservación competencia de las comunidades autónomas. No se ha visto conveniente una ficha propia de humedales y manantiales ya que la problemática que les afecta ya está tratada en otras temas importantes existentes como son los temas importantes de las Fichas DU-01, DU-02 y DU-04, entre otras. La demarcación hidrográfica del Duero no tiene aguas de transición ni costeras.

Alegación 6.

Respecto a los caudales ecológicos señala que no se han implantado los cinco componentes; que persisten incumplimientos y falta evaluación de si permiten el buen estado de la masa de agua. Por otra parte señalan que el cambio climático no puede servir de coartada para reducir los caudales mínimos y se critica la lentitud en aplicar los caudales generadores y la gestión de sedimentos. Consideran que los caudales ecológicos mínimos se han adaptado a la conveniencia de los usuarios o fijado arbitrariamente.

Respuesta:

Los caudales ecológicos se asumen como restricción previa a los usos (art. 59.7 TRLA; IPH), y no existe intención de reducirlos *arbitrariamente*. El régimen de mínimos está establecido en la totalidad de las masas río; el resto de las componentes (máximos, generadores, tasas de cambio) se fija allí donde tiene sentido físico y es necesario para los objetivos, y su implantación continúa. En el ciclo de planificación vigente se han realizado maniobras de caudales generadores en la demarcación hidrográfica y también se han realizado de manera natural. El informe anual de seguimiento del Plan Hidrológico, que se encuentra en la web del Organismo de cuenca, da cuenta de estas operaciones, así como de los trabajos de seguimiento de los caudales ecológicos. Respecto a los caudales sólidos, el Organismo de cuenca está realizando un trabajo de identificación de este parámetros en las presas de la cuenca y la viabilidad de llevarlo a cabo.

Se comparte la observación de fondo sobre la relación entre cambio climático y los caudales ecológicos: la disminución de aportaciones por el cambio climático no reduce las necesidades de hábitat de las especies, por lo que el régimen debe responder a esos requerimientos y no meramente a la disponibilidad; la incorporación del cambio climático como desplazamiento de las condiciones de

referencia es una cuestión técnica delicada que debe abordarse con rigor y, en cualquier caso no debe ser abordada en el EpTI.

Alegación 7.

Se observa la ausencia de la apuesta decidida por la restauración fluvial y mejora de la conectividad, con escasas referencias al Reglamento (UE) 2024/1991 y el Plan Nacional de Restauración y nula participación pública en los proyectos de eliminación de barreras. La estrategia se limita a «gestionar» las infraestructuras existentes en lugar de restaurar.

Respuesta:

No compartimos la visión de la alegante que quizá se ha centrado en otras demarcaciones hidrográficas. Entre los temas importantes del EpTI de la demarcación hidrográfica hay uno específico sobre la restauración fluvial y mejora de la conectividad. En ella se ponen de manifiesto algunos de los problemas que identifica la alegación y se aportan posible soluciones para resolverlos. También e explica qué se ha hecho en la demarcación durante el período de vigencia del Plan actual

Alegación 8.

Se hacen algunas observaciones sobre la evaluación de estado: no se incorporan en la evaluación del estado ecológico a los indicadores de fauna piscícola (EFI+) exigidos por la Comisión Europea, ni indicadores adecuados de alteración del régimen hidrológico. Se debe tener en cuenta que con la incorporación de peces el diagnóstico empeoraría en parte de las masas.

Respuesta:

La definición y aplicación de los indicadores biológicos y de alteración hidrológica para la evaluación del estado es una cuestión técnica y de reporte que corresponde a la unidad competente (SGPAGR) y a cada demarcación, no un contenido que se decida en el EpTI. Se trabaja en la incorporación del índice EFI+, que genera demasiadas incertidumbres; la hidromorfología como indicador indirecto está plenamente incorporada en la evaluación del estado de las masas de agua de esta demarcación hidrográfica. De cualquier modo, más allá de preferencias o valoraciones personales, la evaluación del estado se realiza conforme a la metodología vigente en cada momento.

Alegación 9.

Respecto al planteamiento de las alternativas en los temas importantes se indica que están mal planteadas (referidas a alcanzar o no los objetivos; «alternativa 0» que implicaría incumplir la ley; opciones inviables) y falta de evaluación de la eficacia de las medidas. Recuerdan que el análisis de alternativas sería un mero maquillaje de decisiones ya tomadas.

Respuesta:

Se comparte que las alternativas deben referirse a las distintas vías para alcanzar un objetivo previamente fijado y ser jurídicamente viables y razonables ambiental y socioeconómicamente y así se ha plasmado en las fichas de temas importantes. No se ha renunciado al cumplimiento de las normas objetivas, como se pone de manifiesto en aquellos temas importantes afectadas por normas con carácter de obligación, sin capacidad de exenciones (por ejemplo, fichas DU-03, DU-08 y DU-01). La

«alternativa 0» o tendencial es un escenario de referencia metodológico (permite medir el efecto de actuar respecto al *statu quo*), no una propuesta de incumplir la normativa. A nuestro juicio la definición de las alternativas es clara pues se indican cuáles son los elementos con los que se construyen y, cuando es posible evaluarlos en términos de objetivos, coste y eficacia, también se hace; cuando no es posible se hace una valoración cualitativa del efecto de la alternativa y su coste. Un hecho que desmiente a la alegante en lo que se refiere al "maquillaje" es que, en la participación pública activa multisectorial, para bastantes de los temas importantes se han seleccionado las alternativas que el propio EpTI ofrecía como más conveniente.

Alegación 10.

El cambio climático es tratado como un tema menor con un sesgo hacia medidas de oferta (desalación, reutilización) e intensificación tecnológica frente a la reducción estructural de presiones. Se critica que el EACC no estaba disponible al elaborarse el EpTI, lo que cuestiona su coherencia. No se observa que haya un cambio de calado en la asignación de recursos a las demandas ante el cambio climático.

Respuesta:

Todos los temas importantes se evalúan bajo las condiciones de cambio climático, siendo una cuestión que afecta a todas las Fichas del EpTI, por lo que no compartimos las observaciones de la alegante.

El proceso de planificación es, en sí mismo, adaptativo, y el cambio climático se integra transversalmente y a través de la serie de aportaciones (ya impactada por el clima) y de los balances. El planteamiento de que la adaptación pasa «necesariamente y solo» por reducir demandas es demasiado simplista: la adaptación combina gestión de la demanda, garantía y, donde proceda, recursos no convencionales o convencionales, siempre bajo el condicionante de los objetivos ambientales. Respecto a la coherencia EpTI–EACC señalamos que el Estudio de Adaptación a los Riesgos del Cambio Climático exigido por el RPH, se publicó en febrero de 2026 pero las versiones previas ya se disponía de ellas en los meses previos al inicio de la consulta pública del EpTI, por lo que no hay una incoherencia entre ambos por el mero hecho de que la publicación sea posterior al EpTI; ; de hecho el alegante no es capaza de identificar cuáles son los puntos de incoherencia entre ambos documentos, limitándose a una genérica referencia a falta de ajuste. Y en todo caso se publicó durante la consulta pública del EpTI lo que es un ejercicio de transparencia y de ofrecer una herramienta que permita la participación pública.

Alegación 11.

Con respecto a las demandas para el regadío los EPTI tienen un sesgo agrarista y no contemplan la reducción de estas demandas para alcanzar los objetivos ni para adaptarse a menores recursos. Sostiene que la modernización de regadíos no ahorra agua y por parte de los promotores del EpTI se asume la expansión de regadíos. Se pide una transición hídrica justa y el fin de la regularización de regadíos ilegales («consolidados»).

Respuesta:

En la Ficha DU-06 se aborda el tema importante de la sostenibilidad y relevancia del regadío en la demarcación hidrográfica, algo que está fuera de toda duda. Por tanto, plantear una reducción de la superficie agraria, sin más, simplemente porque demanda mucha agua es incumplir a nuestro juicio

los objetivos de la planificación hidrológica que persigue simultáneamente los objetivos ambientales (vinculantes) y la atención de las demandas, subordinada a los primeros; presentar el EpTI como una defensa acrítica del regadío es un juicio de valor que no se comparte y que confunde el EpTI con el programa de medidas. No obstante, se comparte lo esencial: las Orientaciones Estratégicas del cuarto ciclo apuntan al ajuste de demandas y a la reducción de asignaciones donde proceda, y donde no proceda mantenerlas o tratar de garantizarlas, siempre con el cumplimiento de los objetivos ambientales.

Las medidas de modernización de regadíos: su contribución al ahorro no es automática y debe condicionarse a la revisión concesional y al ahorro efectivo (conforme a la disposición adicional de los reales decretos de aprobación de los planes), con control de los volúmenes; se comparte la necesidad de evaluar sus resultados. Como referencia se puede señalar que en la Normativa del Plan Hidrológico del Duero actual se indica en su artículo 28 que "*La modernización de regadíos llevada a cabo con fondos públicos conllevará la modificación de la concesión para adaptarla a la mejora de la eficiencia del uso del agua producida. En todo caso los ahorros producidos como consecuencia de una modernización no podrán suponer incremento de superficie de riego*". Por tanto, ya se recoge para la modernización de regadíos la reducción de la presión por extracción de agua de una forma bastante conservadora pues se vincula a la modificación concesional. El EpTI no asume, con carácter general, la expansión de regadíos, como prueba el hecho de la oposición al EpTI y al Plan Hidrológico que manifiesta el sector del regadío (como tampoco lo hace el sector conservacionista): las ampliaciones concretas provienen, en su caso, de compromisos de las CCAA y del MAPA, y su tratamiento no es general sino caso a caso.

Sobre los regadíos ilegales o consolidados desconocemos a qué se refiere la alegante: los regadíos ilegales cuando se identifican son clausurados y sancionados. Los regadíos *consolidados* son aquellos que se han desarrollado por otros instrumentos del Estado anteriores a la Ley de Aguas y son tan legales como los que disponen de concesión de aguas.

Alegación 12.

Respecto a la participación pública se identifica una confusión entre consulta y participación activa, faltan reglas de participación y recursos para el encaje de los procesos. Se identifican carencias transparencia al abusar de referencias y enlaces a los estudios. Se considera que la participación no es realmente activa ni equitativa.

Respuesta:

Se valora la aportación de la alegante en esta materia. Se ha realizado un esfuerzo notable de comunicación, facilitación profesional y materiales divulgativos en la mayoría de las demarcaciones, aunque se reconoce margen de mejora. En el caso de esta demarcación se ha contado con la dirección de personal con experiencia en procesos de esta naturaleza y, en general, los participantes han valorado muy positivamente el enfoque, el desarrollo y el material utilizado en los talleres de participación activa, en los que no ha habido sesgos por parte de los facilitadores y del Organismo de cuenca.

La normación de los procesos de participación activa y su encaje con los órganos de cooperación y coordinación es una cuestión de gobernanza general, que se pone de manifiesto en la ficha del tema

importante DU-09 con una serie de propuestas dirigidas a mejorar la trazabilidad documental y de la propia participación mediante la devolución de las propuestas que se hacen, lo que contribuye a mejorar la transparencia.

Alegación 13.

Se identifica una falta de explicitación del grado de aplicación de la recuperación de costes y del principio de «quien contamina paga». Se pone de manifiesto un supuesto agravio comparativo entre usuarios urbanos y agrarios y que no se han creado instrumentos fiscales en 25 años. El EPTI se escuda en que la reforma requiere cambios legislativos.

Respuesta:

Se reconoce la observación -también señalada por la Comisión Europea- sobre la aplicación desigual del principio de recuperación de costes y de «quien contamina paga» (arts. 9 DMA y 111 bis TRLA). Ahora bien, la creación de nuevos instrumentos fiscales y la reforma del régimen económico-financiero de la Ley de Aguas exceden del EpTI y del plan y requieren reforma legislativa estatal; no pueden resolverse en este documento. Como se ha explicado más arriba, el legislador modificó recientemente el régimen económico financiero del agua a través de la DF 2.10 del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, no aprovechando esa ocasión para ajustar una petición que en los ciclos de planificación anteriores venían reclamando los ETI de casi todas las demarcaciones hidrográficas. Por tanto, no hay una actitud de “escudarse” en que la reforma requiere cambios legislativos, sino que de hecho los requiere con un rango de ley. Por mucho que le pese al alegante, se trata de una cuestión transversal y pendiente, cuya adecuación corresponde al legislador.

4.24. Escrito de observaciones Nº 031

Presentado por: D. Juan Mateo Rodríguez.

En nombre de la Comunidad de Regantes del Canal de Macías Picavea.

Alegación 1.

Una vez revisada la superficie asignada a la Comunidad de Regantes del Canal de Macias Picavea, hemos detectado que la superficie publicada de 2.265 hectáreas, no se corresponde con la superficie del elenco en poder de la Comunidad y de la Confederación Hidrográfica del Duero ya que en ambos consta que la superficie de la Comunidad de Regantes del Macias Picavea asciende a 2.434 hectáreas. Se solicita que dicha superficie sea modificada.

Respuesta:

La superficie que se considera en la elaboración del Plan Hidrológico para la Comunidad de Regantes del Canal Macias Picavea (Unidad elemental de Demanda Agraria 2100013 - Canal de Macías Picavea) es de 2.265 hectáreas, ya que es la superficie que figura en su inscripción en el Registro de Aguas (Sección: A – Tomo nº: 28 – Hoja nº: 16 – Número: 12416) según Resolución de concesión de 2 de marzo de 2004 del Ministerio de Medio Ambiente. (Referencia Integra C-0417/2003).

Si esta superficie no es correcta, se debería solicitar una modificación de características de dicha concesión o justificar, en su caso, el error manifiesto.

4.25. Escrito de observaciones Nº 032

Presentado por: Comunidad de Regantes del Canal del Duero.

En nombre propio.

Alegación 1.

Sugiere que el EpTI ponga de manifiesto la importancia de las comunidades de regantes de los regadíos tradicionales como el del Canal del Duero como valor patrimonial y cultural.

Respuesta:

Tenemos dudas de que los riegos del Canal del Duero puedan catalogarse de regadíos tradicionales en el sentido de ser regadíos que siguen utilizando los mismos sistemas de riego que hace siglos. Un análisis de detalle de la zona de riegos del Canal del Duero identifica numerosas parcelas cuyos riegos históricos han desaparecido y han sido sustituidos por modernos sistemas de riego por aspersión o goteo; se mantiene el canal principal y las acequias de distribución, pero los sistemas de aplicación de agua a los cultivos han sido muy cambiados.

A salvo de la duda señalada, los regadíos tradicionales que disponen de título concesional habilitante pueden hacer uso del agua en los términos y condiciones que establece su título. Y esto al margen de que tengan una u otra tipificación. Lo que no es posible es que el carácter de "tradicional" suponga un deterioro de las masas de agua afectadas, algo que la propia DMA no considera posible. Para estos casos la excepción al logro de los objetivos ambientales sólo podría venir considerando los criterios de exención que se regulan en los artículos 4(6) de la DMA, para el deterioro temporal, y 4(7), para la modificación de las características físicas de las masas de agua. La justificación de la excepción de este último artículo requiere que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de la masa de agua; que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos ambientales se vean compensados por los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible; y que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor.

No obstante, se incluye una referencia en la Ficha DU-06 a la situación singular de los regadíos tradicionales.

Alegación 2.

Proponen que las modernizaciones de regadío incluidas en el Plan Hidrológico tengan en cuenta que deberán adaptarse en los casos donde el regadío a modernizar tenga un valor ambiental y cultural importante como es el caso del canal del Duero como corredor ambiental y sus servicios ecosistémicos.

Respuesta:

Las modernizaciones del regadío financiadas con fondos públicos deben contribuir a alcanzar los objetivos de las planificaciones sectoriales, tanto la agraria (mejora de la productividad, mejora de la calidad de vida del agricultor, mejora de la competitividad de las explotaciones, …), como la ambiental (reducción de las presiones sobre las masas de agua, contribuir al logro de los objetivos ambientales, mejora de la eficiencia en el uso del agua, …). Estos criterios de mejora se plasman en las normas en virtud de las cuales las actuaciones de modernización pueden recibir fondos tanto europeos como nacionales, normalmente a través de la PAC y FEADER. Nada obsta para que se puedan modernizar determinados regadíos, como los tradicionales que señala la alegante, con otros criterios, en cuyo caso su fuente de financiación deberá proceder de otros instrumentos financieros (Biodiversidad, Transición Justa, Reto Demográfico, …); en ese caso, la medida no podrá figurar en el plan hidrológico como medida para alcanzar los objetivos ambientales. Pero esta modernización de regadíos con especial valor cultural y ambiental no pueden ser eximidos del cumplimiento de los requisitos comunes a todos los aprovechamientos: ceñirse a los caudales autorizados, al calendario aprobado, al cumplimiento de los caudales ecológicos y al resto de condiciones del título concesional.

Dicho lo anterior, se debe indicar que la Comunidad de Regantes del Canal del Duero no tiene en la actualidad (y tampoco en los planes hidrológicos anteriores) ninguna medida de modernización del regadío, probablemente porque la propia comunidad de regantes no tiene ningún interés en modernizar, pese a los problemas recurrentes que tiene con las urbanizaciones y chalets aislados que están ocupando terrenos que en su día se regaron y en la actualidad ya no. Esta anomalía exigiría una modificación concesional que tampoco la comunidad de regantes impulsa y que debería llevarse a cabo de oficio por el organismo de cuenca, al disponer de un título completamente incoherente con la realidad actual de este regadío.

Alegación 3.

Su propuesta es que el futuro Plan no imponga a los regadíos tradicionales criterios para su modernización incompatibles con la realidad territorial y estructural de estas zonas regables.

Respuesta:

El Plan Hidrológico en la actualidad no impone a los regadíos requisitos de modernización distintos al de las normas que permiten su financiación pública. El Plan, por otra parte, debe establecer los criterios para que las actuaciones sobre el DPH contribuyan al logro de los objetivos ambientales, en el ámbito de las concesiones y autorizaciones, siempre en coherencia con lo que dispone, por ejemplo, el artículo 65 del TRLA (*las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo*) o el 156 bis del RDPH sobre los criterios de revisión (*dotaciones máximas establecidas en el Plan Hidrológico, superficies realmente regadas, caudales realmente derivados en un período suficientemente representativo*).

Alegación 4.

Solicita valorar adecuadamente los retornos de riego de los sistemas tradicionales de regadío.

Respuesta:

La mejor valoración de los retornos de riego es la que se obtiene a partir de datos reales y de suficiente tiempo. En este sentido, en todos los aprovechamientos de aguas, los titulares están obligados a instalar y mantener un sistema de control volumétrico que permita la medición de los volúmenes de agua captados, junto con un sistema de registro y almacenamiento. La transmisión de la información generada será obligatoria en la forma que se establece para las distintas categorías en la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico.

Por otra parte, en cumplimiento del artículo 253 ter del RDPH, la CHD podrá establecer, a la vista de la incidencia de los retornos de regadío en los usos consuntivos, en la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua, la necesidad de disponer, en los puntos de retorno de regadíos inventariados, y por parte del titular del aprovechamiento, de un plan de vigilancia que permita el control efectivo de los caudales de agua retornados al dominio público hidráulico, así como el enriquecimiento por nutrientes y plaguicidas de las aguas tras su aprovechamiento. Hasta la fecha no hay información de retornos de riego aportada por la Comunidad de Usuarios del Canal del Duero, si bien las ayudas del PERTE de digitalización del regadío concedidas pueden ser una buena ocasión para instalar sistemas de control de cantidad y calidad de retornos y, con ellos disponer de mejor información.

4.26. Escrito de observaciones Nº 033

Presentado por: D. Juan Carlos del Olmo.

En nombre de WWF España.

Alegación 1.

Se concrete normativamente que toda modernización de regadío solo podrá ser considerada medida dirigida al logro de los objetivos medioambientales cuando quede acreditada una reducción real de la presión por extracción sobre las masas de agua afectadas. Igualmente se propone que se aclare cómo se verificará, proyecto por proyecto, que la modernización reduce efectivamente extracciones, no altera negativamente el régimen hidrológico de las masas de agua de toma y no incrementa las presiones sobre las masas receptoras de retornos

Respuesta:

En la Ficha DU-06 se incluyen entre las decisiones a considerar en el diseño del Plan Hidrológico "*Diseñar los proyectos de modernización de regadíos de forma que reduzcan las presiones de extracción identificadas"* que responde a la sugerencia del alegante en una fase como la actual del EpTI, que no es la de construcción y diseño del Plan Hidrológico.

Como referencia se puede señalar que en la Normativa del Plan Hidrológico del Duero actual se indica en su artículo 28 que "*La modernización de regadíos llevada a cabo con fondos públicos conllevará la modificación de la concesión para adaptarla a la mejora de la eficiencia del uso del agua producida. En todo caso los ahorros producidos como consecuencia de una modernización no podrán suponer incremento de superficie de riego".* Por tanto, ya se recoge para la modernización de regadíos la reducción de la presión por extracción de agua de una forma bastante conservadora pues se vincula a la modificación concesional. Los proyectos de modernización de regadío no se redactan en las confederaciones, ni se supervisan técnicamente, ni se aprueban en las confederaciones sino en el órgano sustantivo que puede ser el MAPA o las consejerías de agricultura de las comunidades autónomas. Pero sí que la confederación instruye y propone o resuelve las concesiones de agua, después de un trámite detallado proyecto a proyecto.

Alegación 2.

Se especifique con mayor precisión la metodología que se empleará para adaptar las concesiones a la mejora de la eficiencia del uso del agua producida, incluida la consideración de los cambios en consumo efectivo y en retornos de riego.

Respuesta:

La adaptación de las concesiones tiene su propia regulación en el TRLA y el RDPH y cuenta con un procedimiento específico de tramitación de las mismas, no siendo el EpTI el ámbito necesario para determinarlo. Como se ha indicado en la respuesta a la alegación anterior, el artículo 28 de la Normativa del Plan vigente apunta a esa actualización de concesiones cuando se produzcan cambios en el uso del agua o en las infraestructuras que permiten el uso, como puede ser la modernización de un regadío. No obstante, ya el artículo 65 del TRLA señala que las concesiones para el abastecimiento

de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo, no siendo necesario, a nuestro juicio, aclarar este precepto. De cualquier modo, se reitera que el órgano sustantivo de los proyectos de modernización de regadío, que redactan, supervisan o aprueban los proyectos de modernización son los competentes para abordar un asunto como el que plantea la alegante y además desde el principio de desarrollo de la idea.

Alegación 3.

Se incorpore al EpTI una evaluación más detallada de los efectos de la reducción de retornos de riego, tanto en términos cuantitativos como de calidad del agua, especialmente en las masas receptoras y en los caudales circulantes.

Respuesta:

Los efectos de la reducción de retornos de riego en términos cuantitativos como consecuencia de aplicar medidas de modernización de regadíos, se plasma en los modelos que se utilizan para valorar estas medidas en los diversos escenarios temporales previstos en la planificación hidrológica (módulo SIMGES de Aquatool®). Igualmente, en la base documental Mírame-IDEDuero aparecen caracterizados los retornos de las unidades de demanda agraria (UDA) que incluyen medidas de modernización, tanto en la situación previa a la modernización como a la posterior. Esta información está disponible en el URL https://mirame.chduero.es/chduero/public/demands/agrarianDemands/data , pudiendo acceder a cada unidad singularmente o, mediante informes que emite Mírame-IDEDuero, a la totalidad de las demandas.

El nuevo borrador de Plan Hidrológico, como se ha hecho en los planes anteriores, en el Anejo 6 incluirá los modelos en formatos editables para que cualquier interesado pueda comprobar el tratamiento hecho a los retornos de riego y su efecto sobre los caudales circulantes en las masas de agua afectadas. Igualmente actualizará los retornos de aquellas unidades de demanda que incluyan medidas específicas de modernización de regadíos.

Alegación 4.

Se precise de qué manera la reducción de aportaciones de nutrientes a aguas superficiales y subterráneas será valorada y medida, incluyendo indicadores verificables de estado y presión.

Respuesta:

En la Normativa del Plan Hidrológico vigente, precisamente en atención a alegaciones formuladas en el ciclo anterior similares a la presente, se incluye el artículo 28 sobre este particular que indica que los proyectos de modernización de regadíos deberán incluir un sistema de redes de control que permita hacer un seguimiento de la reducción de la contaminación difusa sobre aguas superficiales y subterráneas que la modernización de regadíos conlleva. Este sistema de redes tiene la particularidad de que permite monitorizar las prácticas agrarias que se llevan a cabo en la zona modernizada y, con ello, poder ir corrigiendo el modo de aplicar los fertilizantes en función de esos resultados. Lo que propone la alegación, incluir un sistema de valoración de la contaminación difusa ex ante, no deja de ser un requisito formal que puede acumular un excelente sistema formal de valoración y unos

resultados nefastos. Por otra parte, en las tramitaciones concesionales se deben verificar las cantidades máximas de excedentes de sustancias nitrogenadas en los diversos sectores identificados que figuran en el Apéndice 14.1 y 14.2 de su Normativa que ayudan a los redactores de los proyectos y a su supervisión por el órgano sustantivo a diseñar estos proyectos.

Dado que la Ficha del tema importante DU-01 en la alternativa que se propone incluye mantener los criterios normativos actuales, no parece que sea necesaria una nueva concreción real de esta materia que contribuya a reducir la presión por contaminación difusa.

Alegación 5.

Se explicite que la referencia al régimen hidrológico de las masas de agua de toma incluye el respeto a los caudales ecológicos y, en su caso, a los requerimientos ligados a hábitats y especies protegidas dependientes del medio hídrico. Igualmente se pide que se incorpore una mayor concreción sobre las exigencias ambientales aplicables a nuevas infraestructuras asociadas a modernizaciones, incluyendo la retirada de infraestructuras obsoletas y la permeabilidad para la fauna donde proceda.

Respuesta:

En el modelo AQUATOOL que se utiliza para analizar los usos, los requisitos ambientales y las restricciones al uso del agua, tienen en cuenta los caudales ecológicos como una entrada al modelo considerándolo como una restricción previa al uso. Se considerarían del mismo modo los requerimientos ligados a hábitats y especies protegidas dependientes del medio hídrico.

En cuanto a concretar más las exigencias ambientales de las infraestructuras asociadas a modernizaciones, esto no es objeto del EpTI sino de los propios proyectos de modernización y de la propia evaluación ambiental de dichos proyectos que se sustancia, como ya se hace, en la declaración de impacto ambiental: lo que parece insuficiente para la alegante es considerado excesivo para los promotores de los proyectos de modernización, como se puede comprobar leyendo sus escritos de observaciones.

Alegación 6.

Se revise la forma en que la ficha presenta el supuesto ahorro de 134,15 hm^3/año, aclarando su metodología, su significado hidrológico real y su relación con los retornos de riego y el balance efectivo de cuenca.

Respuesta:

El ahorro que se expone en la ficha es el resultado de aplicar las medidas de modernización en los horizontes del Plan Vigente (2027,2033 y 2045) y se incluye en el apartado “Evolución temporal del problema, especialmente desde 2021 (horizonte actual del PHD vigente)”. Las alternativas consideradas en la ficha DU-06 incorporan también estas medidas, pero aplicándolas a demandas revisadas tanto en su cuantía anual como en su patrón mensual.

Por otro lado, el ahorro se evalúa teniendo en cuenta solamente la disminución de la demanda debido a la mejora de la eficiencia. Sin embargo, nos parece interesante la propuesta del alegante de tener en cuenta también su relación con los retornos y el balance efectivo real. Todo ello se abordará de manera detallada y con más profundidad en el Borrador del Plan Hidrológico en sus Anejos 5 y 6.

Alegación 7.

Se refuerce la información de seguimiento de las modernizaciones ya ejecutadas o en marcha, incluyendo no solo inversión y superficie afectada, sino también evolución de extracciones, retornos, calidad del agua y cumplimiento de garantías.

Respuesta:

La acción del Organismo de cuenca sobre los proyectos de regadío se sustancian: en el ámbito de la planificación en la inclusión o no de estas medidas en los planes hidrológicos; y como órgano sustantivo en el otorgamiento de la concesión o su modificación de características de acuerdo con lo que dispone el artículo 65 del TRLA si el proyecto de modernización supone una mejora en la eficiencia en el uso del agua: *las concesiones para (…) regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo.* Además, como administración competente en materia de agua, puede participar, a requerimiento del órgano ambiental y en los términos del artículo 37 de la ley de evaluación ambiental, en la instrucción del procedimiento de evaluación de impacto ambiental a que deban someterse los proyectos de modernización de regadíos.

Fuera de estos tres campos, no hay preceptos legales que indiquen que deben ser los organismos de cuenca los que hagan un seguimiento de las modernizaciones ejecutadas o en marcha, más allá de la verificación del cumplimiento de los condicionados de la concesión de aguas y la elaboración con carácter anual de los informes de seguimiento de los planes hidrológicos. Esto no es óbice, cortapisa o valladar para que la confederación pueda realizar auditorías y controles de las concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y utilización de los recursos hídricos objeto de la concesión, como señala el propio artículo 65 del TRLA, tarea que se hace específicamente por el departamento de vigilancia y control de aprovechamientos. Entendemos que, respecto a la alegación, deberían ser los órganos sustantivos de los proyectos de modernización de regadíos quiénes en aplicación de las declaraciones de impacto y las condiciones de financiación de estas actuaciones, por ejemplo, lleven a cabo ese seguimiento que reclama la alegante bajo las condiciones que establezca la declaración de impacto ambiental.

Alegación 8.

Se desarrolle con mayor claridad la relación entre modernización y limitación de dotaciones máximas por sistema, precisando si esta última va a tener un reflejo normativo efectivo en el plan y en qué condiciones.

Respuesta:

La limitación de dotaciones máximas por sistema se incorpora en las alternativas 5 y 6 de la ficha DU-06 para evaluar sus efectos sobre las garantías de las demandas en el escenario de mejora de la gestión de las demandas. En muchos casos supondría una mejora de eficiencia que se podría conseguir con una modernización complementaria. A efectos del ETI no es posible desarrollar con más claridad la relación entre modernización y limitación de dotaciones máximas, ya que su objetivo es identificar las diversas alternativas de actuación para que en el debate público se puedan ver las ventajas e inconvenientes de cada una y, con ello, tomar las decisiones oportunas que se concretarán en la fase de plan hidrológico. Se puede añadir que el actual plan hidrológico ya incluye requisitos relativos a las

dotaciones de agua cuando se llevan a cabo acciones de mejora del uso y de la eficiencia, por ejemplo, en los artículos 15 y 28 de su Normativa, algo que se viene aplicando a todas las modificaciones concesionales que se tramitan en la Confederación Hidrográfica.

Alegación 9.

Se diferencie con mayor rigor entre las medidas de modernización orientadas a reducir presiones y los nuevos regadíos o ampliaciones de regadío, a fin de evitar que se diluya la evaluación ambiental real de unas y otras.

Respuesta:

El EpTI no es el lugar apropiado para establecer el detalle de las medidas que se propone, sino el plan hidrológico. Sin embargo, en el programa de medidas del Plan Hidrológico se diferencian claramente las medidas de modernización de las medidas de nuevos regadíos y ampliaciones de regadío: las medidas de modernización se vinculan al Tipo 03 - Reducción de la presión por extracción de agua y al subtipo 03.01.03 - Modernización de regadíos en redes de transporte y distribución; las medidas de nuevos regadíos se tipifican como medidas Tipo 19 - Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua, subtipo 19.02.01 - Nuevas transformaciones en regadío.

Alegación 10.

Se aclare qué nuevos desarrollos de regadío cuentan realmente con viabilidad económica, social, ambiental y garantía suficiente, y cuáles deben quedar definitivamente excluidos del futuro plan.

Respuesta:

Ese es el análisis que hace el EpTI a partir de la información disponible en el momento de su redacción. De hecho el análisis que se hace en las Fichas DU-06 y DU-07 conlleva que los distintos agentes durante la fase de participación pública hacen sus propias propuestas que deben ser analizadas y, en todo caso, se incorporarán al diseño del Plan Hidrológico o, por el contrario, se rechazarán si realmente no tienen viabilidad hidrológica y ambiental respecto a los objetivos ambientales de las masas de agua y de las zonas protegidas vinculadas: la competencia para evaluar la viabilidad social y económica corresponde a otras instancias competentes distintas de la administración del agua. Finalmente será en la fase de plan hidrológico donde se sustancie qué nuevas demandas tienen cabida y cuáles no.

El Plan Hidrológico, en su anejo 6 “Asignación y reserva de recursos” abordará los resultados de las modelaciones de los distintos horizontes (2027,2033,2039 y 2045) con información sobre las garantías de las demandas, las asignaciones, las reservas y los objetivos ambientales, señalando cuáles de las demandas propuestas no tienen cabida.

Alegación 11.

Se refuerce la coordinación con las autoridades agrarias competentes para que las medidas de modernización y sostenibilidad del regadío se acompañen de actuaciones agronómicas, tecnológicas y de gestión que reduzcan la demanda neta de agua y la contaminación en origen.

Respuesta:

Siempre es necesaria mayor coordinación entre las autoridades competentes como se pone de manifiesto en la Ficha DU-09. Así entre las decisiones a tomar en este tema importante se encuentra el *fortalecimiento y mejora de la coordinación entre el Organismo de cuenca y las administraciones públicas que tienen competencias sobre la gestión del recurso agua y la mejora de la coordinación entre el Organismo de cuenca y las administraciones públicas que tienen competencias sobre la gestión del recurso agua; mejora del marco regulatorio de las políticas europeas (PAC, DMA, Directiva de Nitratos, Directiva Hábitats, etc.) que afecten al recurso implementando la coordinación interadministrativa, y entre los distintos departamentos de las comunidades autónomas y de la AGE*. No obstante, en atención a esta sugerencia se matiza en el epígrafe 7 de la Ficha DU-06 la decisión de la siguiente forma: *Mejorar la coordinación entre las administraciones del agua y agrarias para que los proyectos de modernización de regadíos reduzcan las presiones identificadas y, por tanto, contribuyan al logro de los objetivos ambientales*.

No obstante, conviene recordar que las autoridades agrarias desempeñan sus propias competencias en las materias que tienen asignadas. La alegante parece exigir toda la responsabilidad de aceptar o no las actuaciones de modernización de regadíos en la administración del agua cuando no tiene capacidad ni de promover las actuaciones de modernización, ni de redactar los proyectos, ni de supervisarlo, ni de aprobarlos.

4.27. Escrito de observaciones Nº 034

Presentado por: Dña. Carola González Kessler.

En nombre de la Subdirección General de Acuicultura, Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Alegación 1.

Respecto a los temas importantes DU-06 y DU-07 se indica que las instalaciones de acuicultura enfrentan problemas de competencia por el recurso con otros usos, especialmente el regadío y centrales hidroeléctricas. La gestión de desembalses es imprescindible que se haga teniendo en cuenta parámetros cuantitativos (caudal, tasas de cambio, …) y parámetros cualitativos, principalmente la temperatura, oxigenación y la turbidez, ya que estas operaciones pueden tener un impacto significativo sobre las explotaciones acuícolas. En ríos regulados, además, la gestión de desembalses prioriza el riego, quedando la acuicultura con caudales mínimos en periodos críticos.

Se solicita:

- *Mejorar la gestión de concesiones compartidas y control exhaustivo de caudales de captación a los diferentes usuarios.*
- *Revisar los protocolos de desembalse, para tener en cuenta la disponibilidad de recurso para la acuicultura, así como las condiciones ambientales y la calidad del agua desembalsada, para minimizar el impacto en los animales, tanto de cultivo como silvestres. Adaptar los órganos de desagüe de los embalses para sueltas reguladas combinadas que consigan menor turbidez y temperatura de mezcla adecuada. Inclusión de estos aspectos en las normas de explotación de las presas y un desarrollo de sistema de comunicación bidireccional con los gestores de las presas para comunicar desembalses, incidentes…*

Respuesta:

Las cuestiones que plantea la alegación son materias propias de la gestión ordinaria del agua, tanto de las infraestructuras como de los aprovechamientos concesionales. Todas ellas tienen su marco regulatorio establecido. Así el artículo 60 del TRLA regula el orden de prelación de usos; el artículo 61 y siguientes del TRLA aborda la concesión de aguas, tanto de las individuales como de las compartidas; el artículo 49 quáter 7 aborda las condiciones de desembalse de las infraestructuras; …

La gestión de los desembalses en las presas de titularidad estatal se realiza en varios niveles: un nivel general que se materializa en la Comisión de Desembalse quien de acuerdo con el artículo 45 del RAPA es responsable de deliberar y formular propuestas al Presidente del Organismo sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses; un nivel territorial o zona de explotación que se materializa en las Juntas de Explotación que tienen por finalidad coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel conjunto de ríos, río o tramo de río cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados (artículo 39 del RAPA); y finalmente un nivel operativo en el que los responsables de explotación de cada infraestructura la gestionan de acuerdo con criterios de racionalidad pero a demanda de los usuarios de cada sistema de explotación que se concreta en los

planes de demanda que se hacen durante el año en los que los diversos usuarios comunican sus necesidades al servicio de explotación de cada sistema.

Por lo dicho las sugerencias del alegante son cuestiones para bordar en esos órganos de coordinación citados dependiendo de la problemática específica de cada zona, algo que el EpTI no puede abordar.

Alegación 2.

Respecto a los temas importantes DU-01 y DU-03, se observan problemas para la acuicultura derivados de la contaminación puntual y difusa, así como la necesidad de implementar medidas preventivas en origen para la minimización de la contaminación y el control de la calidad del agua.

Se considera necesario reforzar los aspectos que resultan críticos para la viabilidad del cultivo en la acuicultura en aguas marinas y continentales, como es la calidad del agua. Por ello, se considera imprescindible trabajar sobre incumplimientos normativos, por ejemplo, en la depuración de aguas o en los vertidos, que impactan directamente en la actividad.

Respuesta:

La contaminación difusa, de todos los usos, se aborda ya en la planificación hidrológica vigente de manera específica, en especial en las zonas donde las presiones derivadas de ella son significativas, por ejemplo, en la aplicación de los artículos 20, 28 o 35 de la Normativa, entre otros, algo que ya se pone de manifiesto en la Ficha DU-01 (epígrafe 5.1). Por otra parte, las 38 piscifactorias de la cuenca del Duero con título habilitante se ubican en general en las partes altas de las subcuencas hidrográficas donde las presiones por contaminación difusa son escasas, con excepción de las que se ubican en el Tormes, por lo que la problemática que dibuja la alegación debe matizarse, al menos en la demarcación del Duero.

Como se indica en la propia Ficha del tema importante DU-01, la alternativa 3 es la que se propone para su implantación, en coherencia con la alegación. No obstante debe señalarse que supone un gran esfuerzo en inversión de todos los agentes implicados, fundamentalmente administraciones locales, para conseguir el tratamiento secundario de vertidos de aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes equivalentes, la reducción de la contaminación por desbordamientos de las aguas de tormenta y la escorrentía urbana, los tratamientos terciarios y cuaternarios para la reducción del vertido de microcontaminantes, además de la finalización de todas las medidas de depuración del plan hidrológico del tercer ciclo, ligadas a la Directiva 91/271. La valoración económica de estas medidas que se hace en la Ficha alcanza más de 650 millones de euros y un coste anual de operación y mantenimiento superior a 32 millones de euros. Aunque esta alternativa es la de cumplimiento de la nueva Directiva debe ponerse de manifiesto que alcanzar esos objetivos en los plazos previstos supone un cambio de paradigma en las inversiones de depuración de la que no es ajeno la revisión de modo en que se recuperan los costes, con mayor carga impositiva para los usuarios que, para el uso urbano somos todos los ciudadanos.

Alegación 3.

DU-01: Contaminación difusa y DU-03: Contaminación urbana e industrial.

Respecto a la contaminación difusa y urbana e industrial se propone tener en cuenta las condiciones operativas de las granjas en la evaluación de los límites de vertido y considerar la información procedente de los datos de los registros continuos históricos.

Respuesta:

Los límites de vertido de las aguas residuales depuradas vienen establecidos en las autorizaciones de vertido que se otorgan por el Organismos de cuenca limitados, por otra parte, por la normativa en materia de saneamiento y depuración, como es la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas y la actual, teniendo en cuenta la sensibilidad del medio receptor, la existencia o no de zonas de captación de aguas superficial para consumo humano, zonas sensibles, espacios protegidos vinculados al agua o tramos piscícolas protegidos. La normativa no vincula las condiciones de vertido a la adecuación para otros usos, como puede ser el acuícola, que podría ser un uso posterior al de la autorización de vertido, si bien todas las masas de agua tienen el objetivo común de alcanzar el buen estado, en los términos en los que este viene definido por la Directiva Marco del Agua y su normativa de transposición y desarrollo. Este es el marco legal en el que se otorgan las autorizaciones de vertido, estando regulado en el RDPH de manera suficiente, a nuestro juicio, no debiendo entrar el EpTI en ello.

La contaminación difusa tiene mayor dificultad para su control y adecuada gestión. La normativa actual de la demarcación del Duero ya contiene algunos criterios para evitar que determinadas actividades produzcan contaminación difusa cuya vigencia se propone mantener en el nuevo Plan Hidrológico. Es probable que al alegante le parezca insuficiente pero bien podría ser el máximo nivel al que se podría llegar.

Alegación 4.

DU-09: Coordinación interadministrativa en la implementación del programa de medidas y fijación de objetivos específicos en zonas protegidas.

Se han encontrado dificultades para segregar concesiones compartidas. Además, la gestión de cualquier trámite en las tomas compartidas es mucho más compleja y los trámites se ralentizan aún más, lo que supone un obstáculo para la adecuada gestión de las granjas de acuicultura.

Se propone mejorar la gestión de la gobernanza, especialmente en lo que se refiere a la agilización de trámites administrativos. El uso de Declaraciones Responsables para trámites menores, tal como se hace en la Demarcación del Ebro, podría ser una herramienta de gran utilidad.

Respuesta:

No se entiende bien qué quiere expresarse con el término “concesiones compartidas”. Si por “concesión compartida” se entiende una concesión que habilita a dos usos con distinto orden de preferencia (por ejemplo, agrario y acuícola, o abastecimiento y acuícola) y un único titular o agrupación de titulares, el problema que plantea la alegante debe resolverse en el ámbito del titular o agrupación de titulares, no en el del organismo de cuenca y mucho menos en el EpTI al ser materia regulada por el TRLA. Si por “concesión compartida” se entiende dos concesiones de usos distintos que

utilizan la misma infraestructura (por ejemplo, canal o azud) y única toma, son las condiciones en las que se otorgó la concesión las que deben prevalecer en la resolución de conflicto que pudiera darse entre usos.

Es una tarea siempre mejorable la de agilizar los trámites administrativos que afectan a usuarios, por lo que se agradece la observación. Sin embargo, reducir los tiempos de respuesta con declaraciones responsables cunado el RDPH exige autorización específica mediante Resolución no es el camino adecuado, ya que se podría incurrir en ilegalidad por un malentendido interés en agilizar trámites. En la cuenca del Duero ya existen trámite de declaración responsable en la planificación actual en lo que se llama actuaciones menores de conservación en el dominio público hidráulico y zona de policía (cfr art. 30 de la Normativa del Plan Hidrológico). Fuera de estos casos tasados la agilidad administrativa debe alcanzarse mediante la rapidez en el análisis y resolución de los procedimientos, algo que corresponde a la gestión del Organismo de cuenca.

Alegación 5.

DU-09: Coordinación interadministrativa en la implementación del programa de medidas y fijación de objetivos específicos en zonas protegidas.

La planificación hidrológica cataloga de forma ambigua la actividad acuícola dentro del orden de prelación de usos del agua.

Se solicita:

- *La inclusión explícita de la acuicultura en el apartado de DEMANDAS DE AGUA del Plan Hidrológico.*
- *La consideración del agua empleada en acuicultura como un USO NO CONSUNTIVO, dado que el agua se devuelve al cauce (con las debidas garantías de calidad).*
- *Una revisión del orden de prelación de usos para elevar la posición de la acuicultura, alineándola con los estándares de otras Demarcaciones Hidrográficas donde se reconoce su valor estratégico.*

Respuesta:

La alegación formulada no tiene nada que ver con el contenido de la Ficha DU-09, que aborda el tema importante de colaboración interadministrativa en la ejecución del Programa de medidas y el logro de los objetivos de la planificación hidrológica, sino más bien con la fase de redacción del Plan en lo que el RPH establece como contenido obligatorio en su artículo 17. La relevancia de la acuicultura para las actividades socioeconómicas en el ámbito de la demarcación hidrográfica es notablemente inferior a la que supone la agricultura de regadío, tanto en términos de valor actual bruto, como actividad económica que genera en actividades conexas, como en empleo y fijación de la población al medio rural. Ello justifica la mayor relevancia en el orden de prelación de una actividad sobre otra.

Al no ser una demanda consuntiva las asignaciones para usos hidroeléctricos y acuícolas que no aparecen en específicamente en el Plan Hidrológico, en razón de su naturaleza, se corresponden con las concesiones en vigor. No obstante, en fase de redacción del Plan Hidrológico se valorará el cambio de ubicación en el orden de prelación de la acuicultura en función de los parámetros citados.

Alegación 6.

Respecto al Estudio de adaptación a los riesgos del cambio climático, en relación al impacto AC1. Descenso del rendimiento de la acuicultura por condiciones adversas, se indica que el incremento de la temperatura del agua y la mayor frecuencia de episodios extremos asociados al cambio climático afectan directamente a la oxigenación, sanidad y bienestar de los animales de acuicultura.

Se apoya el diagnóstico realizado sobre los efectos del cambio climático que provoca un descenso en el rendimiento de la acuicultura.

Respuesta:

Se agradece la observación.

4.28. Escrito de observaciones Nº 035

Presentado por: D. Alejandro Cozar Castañeda.

En nombre de la Comisaría de Aguas - Confederación hidrográfica del Duero.

Alegación 1.

DU-01: Contaminación difusa de las aguas superficiales:

Cuando se publique el estado agregado 2019-2024 como punto de partida del plan de 4º ciclo, lo que hemos visto respecto al plan de partida del ciclo vigente (estado 2019) son mejoras en índices biológicos, en oxígeno disuelto, amonio y en algunas sustancias que computan en el estado químico (metales, ...), pero empeoramientos en glifosato, fosfatos, nitratos y cipermetrinas (sustancias relacionadas con la actividad agraria). Aclarar que ninguno de los incumplimientos del estado agregado 19-24 responde a ser nuevas sustancias como se dice en la página 21 de la memoria.

La contaminación difusa en aguas superficiales ha empeorado en estos 6 últimos años, por lo que quizás habría que replantear las medidas a adoptar, que además generalmente escapan a la competencia y control del Organismo de cuenca.

Respuesta:

La alegación se estima parcialmente. Se considera procedente revisar y, en su caso, matizar la redacción de la memoria en lo relativo a la referencia a "nuevas sustancias", a fin de ajustarla con mayor precisión a la información derivada del estado agregado 2019-2024. Asimismo, se toma en consideración la observación sobre la evolución reciente de la contaminación difusa de origen agrario y la conveniencia de revisar, reforzar o reorientar las medidas a considerar en el futuro Plan Hidrológico. No obstante, ha de tenerse en cuenta que una parte sustancial de dichas medidas excede del ámbito competencial exclusivo del organismo de cuenca y requiere coordinación con otras administraciones y políticas sectoriales, especialmente en el ámbito agrario.

Se procede a aclarar el documento en la línea que indica el escrito presentado.

Alegación 2.

DU-03: Contaminación urbana e industrial:

Se considera necesario matizar la siguiente afirmación:

"Entre los contaminantes emergentes se encuentran restos de fármacos, productos de cuidado personal, plaguicidas, hormonas, drogas, etc., siendo su origen los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales, así como la agricultura y la ganadería. Su eliminación de las aguas residuales no se consigue con los tratamientos de depuración convencionales."

En realidad, una parte de la masa de estos contaminantes sí es retirada en los tratamientos de depuración convencionales, (…). En consecuencia, sugerimos el siguiente cambio:

"Entre los contaminantes emergentes se encuentran restos de fármacos, productos de cuidado personal, plaguicidas, hormonas, drogas, etc., siendo su origen los vertidos de aguas residuales urbanas

e industriales, así como la agricultura y la ganadería. Su eliminación de las aguas residuales con los tratamientos de depuración convencionales es parcial y, en general, insuficiente, pudiendo una fracción de estos compuestos transferirse a los fangos de depuración."

Respuesta:

La observación planteada tiene por objeto matizar y mejorar técnicamente la redacción de un pasaje del documento, por lo que resulta pertinente su consideración. La evidencia técnica disponible confirma que los tratamientos de depuración convencionales no aseguran una eliminación completa de los contaminantes emergentes, siendo esta parcial y, en general, insuficiente, con posible transferencia de una fracción de los mismos a los fangos de depuración. La matización propuesta refleja con mayor precisión este comportamiento y se considera adecuada.

En consecuencia, la alegación se estima y se propone sustituir la redacción cuestionada por la formulación sugerida por el alegante, por reflejar con mayor precisión el comportamiento de estos compuestos en los tratamientos convencionales de depuración.

Se procede a aclarar el documento en la línea que indica el escrito presentado.

Alegación 3.

De cara a la elaboración del siguiente Plan Hidrológico de cuenca, desde la Comisaría de Aguas se considera necesario:

1. Disponer en el PHC de factores de cultivo actualizados para realizar las valoraciones de daños al DPH por riegos ilegales o abusivos, que contemplen y engloben los cultivos más comunes que se vienen realizando actualmente en la cuenca del Duero.

2. Asimismo, incluir aquellos cultivos para los que actualmente no existe dotación, por ejemplo, el cultivo de fresas, así como revisar y actualizar, en su caso, los valores de dotaciones netas por cultivo existentes.

3. Por último, por seguridad jurídica, y como elemento disuasorio, se considera conveniente que las Tablas que sirvan para la determinación de la dotación neta por cultivo y comarca agraria; las que establezcan la fracción de agua consumida hasta la fecha de la denuncia, dependiendo del cultivo; y la consulta sobre las masas de agua en mal estado cuantitativo -objeto de incremento del precio del m^3 del agua extraída, sean públicas y accesibles para su consulta y de conocimiento general.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, procede recordar, con carácter previo, que el Esquema de Temas Importantes constituye un documento intermedio del proceso de planificación hidrológica, orientado a la identificación de los grandes problemas de la demarcación y al debate sobre las alternativas de actuación, sin que sea el instrumento adecuado para incorporar determinaciones normativas de detalle. No obstante, las tres cuestiones planteadas resultan de indudable interés técnico y serán tenidas en cuenta en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico del Duero.

En cuanto a los dos primeros puntos, relativos a la actualización de los factores de cultivo y de las dotaciones netas por cultivo, así como a la incorporación de nuevos cultivos actualmente no

contemplados, se informa de que en el marco de la elaboración del Plan Hidrológico 2028-2033 se prevé abordar una revisión de las dotaciones netas por cultivo y comarca agraria, apoyada en datos agronómicos más recientes. Asimismo, se analizará la posible incorporación de nuevos cultivos de relevancia en la cuenca que carezcan actualmente de dotación asignada, con el fin de dotar al Plan de una referencia técnica más completa y ajustada a la realidad productiva actual.

Por último, la propuesta relativa a la publicidad y accesibilidad de tablas de consulta y a su eventual utilización como referencia en actuaciones de gestión y control no es propia del contenido del ETI, si bien se valorará su posible incorporación o tratamiento en la futura normativa del Plan Hidrológico.

Por todo ello, la alegación se considera parcialmente estimada: los puntos primero y segundo se toman en consideración para su análisis en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico 2028-2033, mientras que el punto tercero, aunque no procede su inclusión en el Esquema de Temas Importantes, será objeto de valoración en la fase normativa del nuevo Plan.

4.29. Escrito de observaciones Nº 036

Presentado por: D. Jesús Manuel González Palacín.

En nombre de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL).

Alegación 1.

DU-01.- CONTAMINACIÓN DIFUSA.

Es por tanto absolutamente necesaria la determinación del origen de la contaminación antes de adoptar ninguna medida restrictiva para un único sector […]. Si la contaminación es difusa, no puede atribuirse responsabilidad de forma directa a ningún sector.

[…] La reducción de excedentes de nitrógeno deber llevar aparejado el estudio de la reducción de producción que supone y la compensación económica efectiva a los agricultores.

Respuesta:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está poniendo en práctica diversas actividades para el control del estado de las masas de agua, superficiales y subterráneas, continentales y marinas, y su remediación conforme a la estrategia de acción desarrollada en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Este reciente Real Decreto actualiza la trasposición al derecho interno de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola, estableciendo una serie de criterios para la determinación de las aguas afectadas más restrictivos que los que señala la propia Directiva 91/676/CEE, a la vez que refuerza el conjunto de medidas de control y actuación a aplicar sobre las aguas afectadas. El artículo 3 del Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, establece umbrales de identificación de aguas afectadas por contaminación más exigentes que los que dispone la propia Directiva 91/676/CEE. La reducción de los umbrales supone haber identificado un mayor número de puntos sobre los que aplicar programas de actuación que los que se habrían identificado usando, tal y como se venía haciendo, los criterios de la Directiva 91/676/CEE. No solamente se redujeron los umbrales, sino que se estimó oportuno comparar el máximo de las muestras tomadas para la designación de aguas afectadas. El primer resultado en esta línea se plasmó en la Resolución, de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General del Agua, por la que se publican los mapas de las aguas afectadas por la contaminación difusa. A partir de la publicación de la citada Resolución, según el artículo 4.1 del Real Decreto 47/2022, se inició el plazo para que, de acuerdo con sus competencias, las comunidades autónomas ampliaran o revisaran las zonas vulnerables previamente designadas, cuya extensión se prevé que aumente respecto a informes anteriores consecuentemente al mayor número de puntos identificados como de aguas afectadas. Asimismo, debe indicarse que la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está desarrollando los trabajos para la elaboración del informe de presiones e impactos para identificar el origen de este tipo de contaminación en aguas afectadas, conforme al artículo 3 del mencionado Real Decreto 47/2022 que establece que “La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en coordinación con las comunidades autónomas, realizará cuatrienalmente un estudio de las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan

considerarse significativas y de los impactos registrados sobre las aguas, dirigido a determinar la contribución de cada sector de actividad a la contaminación de las aguas en las zonas sensibles y vulnerables". Este informe se integra en el cuatrienal que debe reportarse a la Comisión Europea. Otra medida contemplada en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, es la que se refiere a la reformulación de los programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. Mediante el artículo 9 de la mencionada norma se establece una mayor frecuencia y densidad de muestreo en los denominados programas de control de vigilancia y control operativo de las aguas superficiales y subterráneas. Además, como se prevé en el art. 9.2.e) del Real Decreto 47/2022 y como complemento a los muestreos indicados, los organismos de cuenca y comunidades autónomas impulsarán la participación ciudadana en el diagnóstico de este problema. Con esta finalidad, dichas autoridades podrán facilitar al público interesado sistemas de diagnóstico sencillos que permitan detectar zonas o puntos impactados sobre los que dirigir sus investigaciones específicas. Aparte de esta actuación, procede resaltar la ejecución de dos proyectos para la determinación del origen de los nitratos mediante técnicas isotópicas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dedica desde el año 2022 una significativa partida de los fondos de recuperación para este fin. Por una parte, se recurre a la aplicación de las metodologías isotópicas en una campaña de muestreo de aguas afectadas en toda España. Por otra, en la colaboración del Centro de Estudios de Técnicas Aplicas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), a la mejora de las metodologías de muestreo y análisis isotópico para la identificación del origen del nitrato en las aguas. Ambas actividades suponen un reto técnico científico importante, tanto por el volumen de información a procesar y la escala del análisis, como también por los ambiciosos objetivos planteados. Los aspectos normativos y su necesaria coordinación con los planes hidrológicos de cuenca también han sido incorporados en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, ya que habilita a los planes hidrológicos de cuenca para señalar requisitos que deben ser tomados en consideración por las comunidades autónomas al objeto de reducir la contaminación y alcanzar los objetivos ambientales de obligado cumplimiento según la senda señalada por los propios planes hidrológicos. Este requisito debe de ser atendido en los planes hidrológicos. Es importante destacar este punto por la relevancia de la coordinación de medidas que han de llevar a cabo las administraciones agronómicas y del agua para la reducción de la contaminación procedente de distintas fuentes, pero que puede afectar a los objetivos ambientales de las masas de agua. Por otro lado, cabe destacar el esfuerzo que se está realizando desde las distintas administraciones, central y autonómica, para la coordinación de actuaciones en esta materia. Gracias a esta coordinación se elabora el informe de estado cuatrienal, que debe remitir España a la Comisión Europea. Este informe analizará cuestiones como "La contaminación por nitratos y su impacto en el medio ambiente y agua de consumo humano" y a las que podrá darse respuesta entonces. Para la elaboración de este informe cuatrienal se ha organizado un grupo de trabajo en el que colaboran departamentos agronómicos, ambientales y los relacionados con el agua de todas las autonomías y de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por último, cabe añadir la importante tarea de coordinación e integración de acciones que actualmente se realiza entre los tres departamentos ministeriales competentes en materias de Sanidad, Agricultura y Medio Ambiente.

Una de las principales líneas de actuación del MITECO se centra en la aplicación del Real Decreto 47/2022, diseñado para reducir la contaminación por nitratos de origen agrario.

Como se indica en la Ficha DU-01, el MITERD ha llevado a cabo un trabajo de análisis específicos para determinar las relaciones moleculares de $^{15}N/^{14}N$ y $^{18}O/^{16}O$ en el nitrato disuelto en aguas superficiales y subterráneas de toda España y con ello determinar el origen de los nitratos presentes en el agua.

Esto exige la aplicación de metodologías normalizadas de vanguardia, como la conversión química de nitrato y nitrito a óxido nitroso (N_2O). lo cual permite procesar muestras complejas, desde aguas muy limpias hasta matrices con alta salinidad, presencia de cloruros o sulfatos.

Los datos obtenidos sirven para delimitar con mayor exactitud las Zonas Vulnerables a Nitratos, diferenciando si un exceso de nutrientes proviene de fertilizantes sintéticos, de purines ganaderos o de vertidos urbanos.

En ese trabajo citado sobre 79 puntos de muestreo de aguas superficiales, atribuyen el 61% de la contaminación por nitratos a origen agrario (principalmente fertilizantes inorgánicos) y el 25% a mezclas con aguas residuales urbanas, el 14% restante de origen indeterminado. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, sobre 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, se muestra un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería. A nuestro juicio este trabajo, sin menoscabo de que pueda ampliarse a nuevas zonas y nuevas campañas, muestra con suficiente certidumbre que la mayoría de los nitratos presentes en el agua tiene un origen agrario.

Estos resultados se integran en modelos de simulación como (PATRICAL), para simular distintos escenarios de aplicación de fertilizantes en distintos periodos de tiempo para poder determinar la evolución de la situación, y aplicar las medidas correctoras pertinentes. El trabajo “Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación” se puede consultar en la página web del MITECO, accesible a cualquier ciudadano.

Cómo afecta la reducción de excedentes de nitrógeno a la reducción de producción que supone es cuestión que desde el organismo de cuenca venimos solicitando a las autoridades competentes en materia agraria. Y estamos de acuerdo en que, de producirse este perjuicio que indica la alegación deberían habilitarse mecanismos de compensación económica efectiva a los agricultores, a través de la arquitectura verde de la PAC, por ejemplo, algo que en el Plan vigente fue rechazado por la autoridad.

Alegación 2.

DU-01.- CONTAMINACIÓN DIFUSA.

Se solicita sustituir el término "residuos ganaderos" por "recursos ganaderos" en todo el documento, ya que la valorización de los mismos es la tendencia actual y suponen efectivamente un recurso nada desdeñable.

Respuesta:

En épocas anteriores, estos residuos se denominaban comúnmente estiércoles. El residuo ganadero se almacenaba y se sometía a un proceso de maduración por fermentación y después se aplicaba a los suelos de forma sólida, sin apenas generar lixiviados. Es a partir del empleo masivo y generalizado de abonos inorgánicos y purines cuando comienza a producirse la incorporación al suelo y después a las aguas los excedentes que se generan.

Se considera que, para que se convierta en un recurso como tal, el residuo ganadero debe de ser tratado y procesado adecuadamente. En la actualidad la gran mayoría de los residuos ganaderos se aplican en estado líquido (purines). Si la tendencia mencionada por el alegante se convirtiera en algo obligatorio, se contribuiría de forma más eficaz a que dichos residuos pudieran considerarse, efectivamente, un "recurso".

Alegación 3.

DU-01.- CONTAMINACIÓN DIFUSA.

Con respecto a los biocidas, señalar que debe invertirse en soluciones alternativas, y hasta que éstas no existan, no puede prohibirse ni limitarse el uso de las autorizadas, aunque sí plantear un uso sostenible de los mismos.

Respuesta:

La propuesta del alegante supone asumir como algo normal el deterioro de las masas de agua. Se recuerda que, de acuerdo con el artículo 4 (6) de la DMA y el 38 del RPH 1, se podrá admitir el deterioro temporal del estado de las masas de agua si se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas, o al resultado de circunstancias derivadas de accidentes que tampoco hayan podido preverse razonablemente. Para admitir dicho deterioro deberán cumplirse todas las condiciones siguientes: que se adopten todas las medidas factibles para impedir que siga deteriorándose el estado y para no poner en peligro el logro de los objetivos medioambientales en otras masas de agua no afectadas por esas circunstancias; que en el plan hidrológico se especifiquen las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como racionalmente imprevistas o excepcionales, incluyendo la adopción de los indicadores adecuados; que las medidas que deban adoptarse en dichas circunstancias excepcionales se incluyan en el programa de medidas y no pongan en peligro la recuperación de la calidad de la masa de agua una vez que hayan cesado las circunstancias; que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales o que no hayan podido preverse razonablemente se revisen anualmente y se adopten, tan pronto como sea razonablemente posible, todas las medidas factibles para devolver la masa de agua a su estado anterior a los efectos de dichas circunstancias, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional undécima 1.b) del texto refundido de la Ley de Aguas.

Como se ve no es posible argumentar que el deterioro que puede producirse en los años de espera hasta que se desarrollen esas soluciones pueda encajar en los requisitos normativos.

Alegación 4.

DU-01.- CONTAMINACIÓN DIFUSA.

El exceso y dispersión de normativas, tanto europeas, como estatales y autonómicas, dificulta la implementación de medidas eficaces y conocidas por los destinatarios.

Las medidas más eficientes pasan por una mejor monitorización tanto de las fuentes de contaminación como de las zonas, una mayor inversión en tecnología para el ajuste de insumos y la promoción de compensaciones económicas para las prácticas agronómicas reductoras de aportes. Las estrategias de fomento, difusión y asesoría al agricultor sobre estas materias deben ser el epicentro de cualquier medida a adoptar, y siempre basarse en la voluntariedad para una obtención de mejores resultados.

Respuesta:

No podemos compartir el enfoque del alegante. Consideramos que la profusión de normativas sobre el mismo problema muestra dos cosas: que el problema es relevante y de difícil solución y que no hemos conseguido resolverlo pese a ir regulando cada vez más los drivers de las presiones. Las medidas parecen claras, pero si hay resistencia a aplicarlas es por el impacto que generan en la actividad económica y en ese aspecto, tanto administraciones como usuarios, somos copartícipes de que la solución tarde en llegar.

Sí estamos de acuerdo en la necesidad de mantener la monitorización y aumentarla. Pero a nuestro juicio la monitorización actual ofrece un diagnóstico suficientemente claro para poder identificar que el problema de la contaminación difusa persiste, con el tiempo no va a menos y que las medidas que nos resistimos a aplicar hemos de abordarlas en algún momento. Como pone de manifiesto la Ficha DU-01, el asesoramiento y la formación son clave en la solución del problema, pero en un contexto de baja rentabilidad de agricultura y la ganadería, si no hay un aliciente para asumir este asesoramiento y el mismo supone un coste adicional a la explotación, no será una medida eficaz.

Alegación 5.

DU-02.- USO SOTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

El control efectivo de las extracciones y volúmenes consumidos pondrá de manifiesto que se está llevando a cabo una gestión eficiente del recurso, y que las modificaciones de las características de una concesión, que deberían autorizarse, en la mayoría de los casos, suponen una minoración del volumen de caudal extraído y una utilización más eficiente del mismo. Además, en los cálculos de extracciones deben tenerse en cuenta los retornos de riego.

Respuesta:

Una de las medidas del Plan Hidrológico vigente dirigidas a la recuperación de las masas de agua en mal estado cuantitativo es el fomento de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas (CUAS). Estas entidades son corporaciones de derecho público formadas por usuarios de una misma masa de agua subterránea que buscan hacer una gestión sostenible y organizada del recurso hídrico, garantizando su uso equitativo y evitando la sobreexplotación.

Desde el Organismo de cuenca se ha fomentado y apoyado su constitución de CUAS. Actualmente, la cuenca del Duero cuenta con 50 CUAS constituidas, de las cuales 47 lo han hecho después de 2022. En total abarcan una superficie potencial de riego cercana a las 100.000 hectáreas, mayoritariamente ubicadas en masas en mal estado cuantitativo

Estas agrupaciones, además de una mejor gestión y uso del agua y una mayor monitorización del uso del agua, permiten concienciar a los usuarios sobre la importancia de la gestión correcta del agua, haciéndoles copartícipes y corresponsables de esa gestión junto al Organismo de cuenca.

En los balances de las masas de agua que se realizan para evaluar su estado se tienen en cuenta los retornos de riego, como puede verse por ejemplo en el Anejo 8.2 del Plan vigente (https://www.chduero.es/documents/20126/1883851/PHD22-27_082_00_EstadoMasas_v07.pdf/e524d46c-12fc-975c-6c4f-879177904d88?t=1666076700330). Así en el epígrafe 6.2.1 del Anejo que incluye los parámetros utilizados para evaluar el test de balance hídrico se indica que se ha trabajado con un modelo de simulación general del funcionamiento de la cuenca que permite considerar conjuntamente los distintos términos del balance hidráulico. Este modelo se ha construido sobre la herramienta de simulación PATRICAL (Precipitación Aportación en Tramos de Red Integrados con Calidad del Agua) permite construir modelos del ciclo hidrológico y calidad de las aguas distribuidos espacialmente, con paso de tiempo de simulación mensual (Pérez, 2005). Patrical permite determinar el balance de las distintas masas de agua subterránea en régimen natural y alterado, analizándose los siguientes componentes del balance:

- Recarga por lluvia: modelado a través de los datos del modelo SIMPA y asignado a las masas de agua subterránea de forma cartográfica.
- Transferencias laterales: resultado del propio modelo, para cuyo ajuste a la situación real de la masa intervienen, entre otros, los registros piezométricos de la CHD o de la red de aforos de los últimos años.
- Recarga desde ríos y salida a ríos: resultado del propio modelo. Se emplean los mismos métodos de ajuste y calibración.
- Retornos de regadío: Calculados a través de las eficiencias de riego de cada unidad de demanda, con los valores medios de agricultura en cada unidad de demanda agrícola, tanto superficial como subterránea, que se superpone a la masa de agua subterránea.
- Recargas artificiales. Sólo en los casos en que existen se utilizan los valores medios registrados.

Y los valores concretos de cada una de las componentes se listan en la Tabla 72.

Por lo que se refiere las modificaciones de características de las autorizaciones de aprovechamientos de aguas, apuntar que ese aspecto está definido claramente en el TRLA y el RDPH, para atender a su pretensión sería necesario modificar dicha ley, aspecto que no depende de la Planificación Hidrológica.

Alegación 6.

DU-02.- USO SOTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

Una medida que venimos reclamando desde esta Organización es la recarga de los acuíferos (derivación de aguas superficiales en invierno) y la sustitución de recursos subterráneos por superficiales cuando sea posible.

Respuesta:

La recarga artificial de acuíferos es una práctica que se lleva haciendo es esta cuenca desde hace más de 20 años, las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 desde la CHD se encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos, teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos, y el resultado es que no hay demasiadas zonas aptas para ello, más allá de las existentes en la actualidad. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, ya se contempla como posibles actuaciones en la Ficha DU-02 en las masas de agua en mal estado cuantitativo. No deja de ser complejo armonizar los distintos factores que confluyen para que sean un caso de éxito: donde ubicarlas, de qué cauces con recurso suficiente y que permita alcanzar sus objetivos ambientales, costes de inversión en ejecución y su financiación, y costes de explotación al demandar la mayoría bombeos; en definitiva, muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

Alegación 7.

DU-02.- USO SOTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

Cualquier idea de aplicación de posibles "peajes", reducciones en las modificaciones concesionales o transformaciones en concesión de los derechos inscritos, debe ser descartada pues no conduce a ninguna mejora en la utilización de las aguas subterráneas y deben conjugarse necesariamente la sostenibilidad del desarrollo socioeconómico y la armonía con el medio ambiente.

Desde esta Organización se pone de manifiesto la necesidad de clarificar lo antes posible la continuidad de los derechos inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas, prorrogando automáticamente estos permisos sin aplicarles ningún tipo de peaje.

Respuesta:

Los derechos inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas y en la sección C del Registro de Aguas tienen su origen en el régimen transitorio establecido por la Ley de Aguas de 1985, que transformó el sistema jurídico tradicional de propiedad privada del agua en un régimen de dominio público hidráulico. Estos derechos permiten el mantenimiento de usos privados preexistentes, fundamentalmente referidos a

aprovechamientos de aguas subterráneas, bajo determinadas condiciones de reconocimiento administrativo.

En las últimas décadas, la política hidráulica en España ha evolucionado hacia un modelo caracterizado por limitar progresivamente los derechos de carácter privado, integrar todos los aprovechamientos en el sistema concesional, e incrementar el control administrativo sobre las extracciones, siempre bajo el prisma de lo que prioriza la Directiva Marco del Agua en sus objetivos ambientales como es el alcanzar el buen estado de las masas de agua subterránea y reducir la eventual sobreexplotación.

En conclusión, que el futuro de los derechos de aguas subterráneas inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas y la Sección C del Registro de Aguas no debe clarificarla un plan hidrológico y menos aún un EpTI. Está netamente claro en las DT segunda, tercera y cuarta del TRLA, en las que se habilita el modo de dar carta de naturaleza jurídica estable a unos aprovechamientos que han mantenido un régimen transitorio durante un plazo concreto. Lo que el EpTI señala es que los aprovechamientos a los que sea aplicable en 2035 este régimen del TRLA deberán superar la compatibilidad con la planificación hidrológica que, en el caso de masas de agua en mal estado cuantitativo, no es viable en tanto estas masas de agua recuperen el buen estado. Por tanto, a nuestro juicio, la problemática no viene de la norma que es clara, sino del estado cuantitativo de las masas de agua afectadas.

La propuesta de “peajes” generó debate en el plan hidrológico vigente que supuso la eliminación de la Normativa. La propuesta se basaba en que contribuye a reducir la presión por extracción de las masas de agua en mal estado cuantitativo, detener el deterioro adicional de las masas de agua y, por tanto, se alinea con el logro de los objetivos ambientales para estas masas de agua. Sin duda suponen una restricción para nuevas concesiones y una limitación a quienes disponiendo de un derecho pretenden ampliar su regadío, pero se consideran la propuesta menos lesiva para la dinámica social y económica global en estas masas de agua, ya que se mantiene el statu quo. No se debe olvidar que son actividades que se desarrollan en zonas con una fuerte explotación de agua subterránea en la que el objetivo de alcanzar el buen estado está alineado con la pervivencia de las explotaciones de regadío y ganadería a largo plazo. Pero dicho, se elimina del EpTI actual la referencia a los peajes, manteniendo el estatus actual.

Alegación 8.

DU-04.- ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS y RESTAURACIÓN FLUVIAL.

El planteamiento de eliminar infraestructuras de un aprovechamiento en desuso no debería llevarse a cabo en ningún caso si existe la más mínima posibilidad de que haya algún posible uso.

Respuesta:

Los objetivos de la planificación hidrológica son: conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico (DPH) y de las aguas continentales; satisfacer las demandas de agua de los diferentes usuarios; lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso y protegiendo su calidad; y economizar el empleo del agua y racionalizar sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

De este modo, la Directiva Marco del Agua (DMA) y la legislación nacional exigen alcanzar el buen estado o potencial ecológico de las masas de agua. La mejora hidromorfológica es una obligación legal

que se puede compatibilizar con la satisfacción de las demandas de agua de los diferentes usuarios, cuando éstas existen. La observación planteada no encaja puesto que no tiene sentido mantener infraestructuras en las masas de agua, actualmente en desuso, ante la hipotética situación de un uso futuro, máxime teniendo en cuenta que la restauración de la continuidad longitudinal del río y el transporte de sedimentos son factores críticos para la salud de los ecosistemas fluviales, la cual les hace mucho más resilientes ante, por ejemplo, fenómenos de contaminación, que pueden tener incidencia directa en la salud humana.

Es importante indicar que las infraestructuras en desuso que no reciben un mantenimiento adecuado tienden a deteriorarse, lo que puede suponer un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes.

Por ese motivo, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece explícitamente que el Organismo de cuenca promoverá la eliminación de infraestructuras que se encuentren abandonadas sin cumplir función alguna ligada al aprovechamiento de las aguas, priorizando la recuperación del río frente a la mera conservación de estructuras cuya utilidad es inexistente en la actualidad.

La acumulación de sedimentos o el riesgo de rotura de estructuras envejecidas son argumentos técnicos de peso para su demolición, especialmente si no hay un titular que asuma la responsabilidad y los costes de su seguridad y mantenimiento

Desde un punto de vista jurídico, el derecho al uso privativo del agua no es perpetuo si no se ejerce. El Texto Refundido de la Ley de Aguas permite iniciar expedientes de extinción de derechos cuando un aprovechamiento permanece sin explotar durante tres años consecutivos por causas imputables al titular. Por tanto, la "posibilidad de uso" no es un derecho indefinido si la realidad es el desuso prolongado.

Es importante distinguir entre infraestructuras en desuso y aquellas en uso. Para estas últimas, la política de la Confederación es la permeabilización (escalas de peces, etc.) en lugar de la demolición, para compatibilizar el uso con la continuidad fluvial. Si existiera un uso real y legítimo, la infraestructura no se eliminaría, sino que se adaptaría

En conclusión, el argumento de mantener infraestructuras por una remota posibilidad de uso choca con la obligación legal de restaurar los ríos, el deber de evitar riesgos por falta de mantenimiento y el principio de seguridad jurídica que extingue derechos no ejercidos. La planificación hidrológica debe basarse en usos reales y sostenibles, no en expectativas teóricas que perjudican el estado ambiental del dominio público

Alegación 9

DU-04.- ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS y RESTAURACIÓN FLUVIAL

Creemos que se está produciendo una confusión entre caudales ecológicos y caudales naturales. En el periodo anterior, el grado de cumplimiento de estos caudales ecológicos ha sido muy aceptable por lo que no consideramos necesaria una nueva regulación de los mismos que implicaría no satisfacer las demandas de riego en determinadas épocas del año. Así mismo, el sistema de establecimiento y modificación de este caudal es farragoso y muy lento. Los puntos de aforo están situados muy arriba por lo que se desperdicia mucha agua, por ello proponemos que en las épocas en las que no se riega se baje este caudal para guardar agua.

Respuesta:

El establecimiento del régimen de caudales ecológicos tiene como objetivo principal contribuir a la conservación o recuperación del medio natural, permitiendo el mantenimiento de la vida piscícola y la vegetación de ribera que, de manera natural, habitaría o podría habitar en el río. El cálculo del régimen de caudales esta tasado y su metodología contrastada. Es fundamental señalar que los caudales ecológicos no tienen el carácter de uso del agua, sino que se configuran como una restricción previa que se impone con carácter general a los sistemas de explotación.

Desde su implantación se ha hecho seguimiento periódico de su grado de cumplimiento. Fruto de ese seguimiento se ha visto la necesidad de ajustar estos caudales en algunos puntos para adecuarlo al régimen natural del río. Sólo en ese pequeño número de casos se va a plantear su modificación, que se someterá al proceso de concertación para informar y recoger las sensibilidades de los agentes de la demarcación. Para el resto de masas de agua no se van a modificar.

Alegación 10.

DU-04.- ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS y RESTAURACIÓN FLUVIAL

Respecto de las 526 medidas del Plan actual, para la mejora hidromorfológica con un presupuesto de 166,6 M€, que el grado de ejecución sea solo de un 8,2%, hace que la planificación sea totalmente ineficaz.

Respuesta:

El programa de medidas es considerado la verdadera esencia y resultado de los planes hidrológicos, ya que refleja las actuaciones concretas que se planifican para dar respuesta a los problemas ambientales y socioeconómicos identificados en cada demarcación. El plazo límite que fija la normativa es la consecución de los objetivos ambientales en 2027. El programa de medidas se dimensiona sobre este horizonte temporal.

En la demarcación del Duero se ha venido haciendo, y este ciclo no es una excepción, una intensa actividad de restauración, con más de 3.700 actuaciones que han supuesto en torno a 300 barreras transversales eliminadas, 200 adaptadas, 181 km de barreras longitudinales eliminadas, etc. Todo ello ha supuesto una mejoría en la salud de los ecosistemas fluviales no menor.

El programa de medidas del plan vigente hace una previsión de gasto para cumplir los objetivos ambientales, la cual, como indica el autor del escrito, es elevada, y se ha visto retrasada por varios motivos:

- Causas externas a la planificación en los retrasos de ejecución. La baja ejecución no suele ser un fallo del "diseño" del Plan, sino el resultado de complejidades administrativas y financieras ajenas a la oficina de planificación, entre la que están las dificultades de contratación: Los procesos de licitación y adjudicación por parte de la administración pública sufren a menudo demoras imprevistas.
- Falta de consenso con usuarios. Muchas medidas requieren convenios o la decisión de comunidades de regantes (CCRR), entidades locales u otros agentes implicados. Estos procesos que son lentos y dependen de la voluntad de terceros.

- Disponibilidad de fondos: En ocasiones, los recursos económicos del Estado o los Fondos Europeos no se han movilizado al ritmo previsto, lo que ha lastrado el avance del programa de medidas sin que ello signifique que la medida fuera incorrecta o innecesaria.
- Complejidad técnica del análisis "Caso a Caso". La mejora hidromorfológica no es una tarea mecánica de demolición masiva, sino que exige un análisis pormenorizado para evitar perjuicios colaterales. El bagaje obtenido tras años de actuación indica que cada obstáculo debe estudiarse individualmente. En ocasiones, las resistencias en el territorio o la protección de valores específicos ralentizan la ejecución, pero garantizan una gestión más segura y concertada

En conclusión, los trabajos de mejora hidromorfológica son ingentes y efectivamente, el grado de ejecución es inferior al deseado, pero medir la eficacia del Plan Hidrológico solo por el porcentaje de ejecución presupuestaria es una visión parcial que ignora los logros ambientales alcanzados, la complejidad administrativa, técnica y social de la restauración fluvial.

Alegación 11.

Respecto al tema importante de gestión del riesgo de inundación es imprescindible mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo, responsabilidad compartida por numerosas Administraciones, así como mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.

Respuesta:

Manifestamos completo acuerdo con la observación. Este aspecto se recalca en la Ficha DU-05 donde se indica que el Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares, uno de los cuales es la mejora de la coordinación entre administraciones. Parte de esta mejora de la coordinación, aunque no solo, pasa por *mejorar la dotación de medios y la formación a los distintos agentes implicados, tanto los organismos de cuenca como las autoridades de protección civil y emergencias, sobre todo en el ámbito local, de forma que todos los municipios con alto riesgo de inundación, así como las principales actividades económicas dispongan de planes de prevención locales, consensuados y elaborados previamente para que se consiga que estén plenamente operativos en caso de emergencia y que ayuden a salvar las vidas humanas* (cfr Ficha DU-05, Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro plan). Impulsar esta mayor coordinación es una de las medidas que se han incluido en el vigente Plan de Gestión del riesgo de inundación y que se reiterará con más intensidad en el próximo.

Alegación 12.

Respecto al tema importante DU-05 se señala que los planes generales de conservación y mantenimiento de los cauces establecidos por la Demarcación Hidrográfica deberían abrirse a la participación de la población local y a los municipios, pues determinadas medidas de limpieza que podrían realizarse de forma inmediata se ven paralizadas por la falta de autorización de la administración hidrológica. (…). Aun siendo competencia y responsabilidad de la Confederación el limpiar los cauces con periodicidad, si no acomete las obras, al menos debería agilizar las autorizaciones de quienes solicitan los permisos asumiendo los costes.

Respuesta:

En efecto, hay una clara necesidad de fomentar la participación pública local en actuaciones sobre cauces, tanto las que tienen que ver con la mejora de las condiciones hidrológicas (a las que el alegante se refiere como limpieza) como las que van dirigidas a la protección y reducción del riesgo ante inundaciones de las poblaciones. Así se pone de manifiesto en la Ficha DU-04 en la que se abordan específicamente las obras en cauces. Así en la página 6 de la Ficha se indica *La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que es imprescindible la participación de las partes interesadas y la mediación para la resolución de conflictos. Hay numerosos casos de éxito, pero también experiencias que no han llegado a buen puerto, como ha ocurrido en casos como el de Santa Croya de Tera, en donde los intentos de retranqueo de la mota de la margen derecha, para mejorar la capacidad de laminación del río y la defensa en situaciones de avenidas de dicha localidad, no han logrado tener éxito.* Y en la alternativa nº 1 seleccionada se propone dirigir un 5% del presupuesto de restauración fluvial y mejora de las condiciones hidrológicas de los cauces a medidas de concienciación y de fomento de la participación, destacando las figuras de mediación de conflictos.

Alegación 13.

DU-06.- RELEVANCIA DEL REGADÍO Y SOSTENIBILIDAD

La garantía de suministro de demandas debe ser atendido tanto en el momento presente como con la planificación de futuras demandas agrarias.

La insatisfacción de demandas, tanto presentes como futuras, viene motivada, como siempre hemos mantenido, porque no se lleva a cabo el incremento de las regulaciones e infraestructuras que son las herramientas más útiles y eficaces de gestión de los recursos hídricos y por supuesto, la finalización de las programadas.

Nuestro sector ha hecho ya un importante esfuerzo inversor para reducir las presiones de extracción. Estamos completamente en desacuerdo respecto de que los ahorros de agua producidos como consecuencia de una mejora en las extracciones no puedan suponer un incremento de superficie de riego.

Respuesta:

Se comparte plenamente la consideración de la relevancia estratégica del regadío para el desarrollo socioeconómico del medio rural en la demarcación, aspecto que precisamente fundamenta su identificación como Tema Importante DU-06 en el EpTI. En este sentido, el documento reconoce el papel del regadío como principal uso consuntivo del agua —en torno al 90% de la demanda— y como motor económico, social y de fijación de población.

No obstante, la planificación hidrológica debe compatibilizar dicha función con el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la normativa vigente y con la sostenibilidad del recurso en un contexto de cambio climático y reducción de disponibilidades hídricas. Por ello, la garantía de suministro de las demandas no puede abordarse únicamente mediante el incremento de las regulaciones e infraestructuras, sino a través de un enfoque integrado que combine la gestión de la oferta y, especialmente, de la demanda, tal como se plantea en la alternativa seleccionada para el DU-06.

En relación con la afirmación de que la insatisfacción de demandas se debe a la falta de nuevas infraestructuras, el análisis conjunto de los temas DU-06 y DU-07 pone de manifiesto que los incrementos de regulación presentan una eficacia limitada en la mejora de las garantías, con elevados costes económicos y ambientales, debiendo justificarse en cada caso bajo criterios de viabilidad social, económica y ambiental.

Por el contrario, la modernización del regadío se identifica como la medida más eficaz y prioritaria, tanto para mejorar la garantía como para reducir presiones sobre las masas de agua y aumentar la resiliencia frente al cambio climático.

En cuanto a los ahorros de agua derivados de la modernización, el EpTI establece expresamente que estos deben destinarse prioritariamente a la mejora de la garantía, a la reducción de presiones y al cumplimiento de los objetivos ambientales, no pudiendo considerarse automáticamente como recurso disponible para la ampliación de superficie regable. Esta limitación responde a que el ahorro generado constituye en gran medida un ahorro “aparente” (reducción de retornos al sistema) y a la necesidad de evitar un incremento neto de la demanda en un contexto de recursos limitados y previsiblemente decrecientes.

Por ello, el planteamiento del EpTI en DU-06 no excluye la posible ampliación de regadíos, pero la condiciona a que se realice de forma limitada, selectiva y justificada, únicamente en aquellos ámbitos donde exista garantía suficiente de suministro; viabilidad económica, social y ambiental, y coherencia con la planificación sectorial.

Asimismo, se prevé cerrar el mapa de nuevos desarrollos a los ámbitos que cumplan dichos requisitos, evitando incrementos generalizados de superficie regable que puedan comprometer la sostenibilidad del sistema.

En consecuencia, la planificación no desconoce el esfuerzo inversor realizado por el sector ni su necesidad de desarrollo, pero establece un marco en el que dicho esfuerzo contribuya prioritariamente a la sostenibilidad del recurso, a la mejora de las garantías existentes y al cumplimiento de los objetivos ambientales, garantizando así la viabilidad a largo plazo del propio regadío.

Alegación 14.

DU-07.- OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA OFERTA DE RECURSOS HÍDRICOS- INFRAESTRUCTURAS

Todas las infraestructuras hidráulicas, incluidas presas y canales, deberían ser objeto de estudio para adecuarlas a un mejor uso si éste fuera posible, (…). Además, la obsolescencia de las infraestructuras debe ser un objetivo principal para la optimización en la gestión del agua. Consideramos que el recrecimiento de infraestructuras es una de las medidas más acertadas que debería llevarse a cabo sin olvidar el establecimiento de nuevas infraestructuras.

Respuesta:

Coincidimos en que las infraestructuras hidráulicas se deben adecuar al mejor uso que sea posible desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental. También estamos de acuerdo en la importancia de la consideración de la obsolescencia de las infraestructuras en la optimización de la gestión del agua.

En cuanto al recrecimiento y la construcción de nuevas infraestructuras, éstas se han tenido en cuenta en el EpTI al desarrollar las alternativas 3, 4, 5 y 6 de la ficha DU-07 "Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos- Infraestructuras" con la finalidad de evaluar su efecto en la atención a las demandas y hacer una primera estimación de su coste económico y ambiental. La conclusión es que los posibles recrecimientos de embalses no suponen una mejora sustancial de la situación de la demarcación con las demandas de regadío actuales, que su relación coste-beneficio es demasiado alto y que, en todo caso, deben ser analizados en escenarios conjuntos de gestión de oferta y de demanda. Por otro lado, habría que analizar con detalle la viabilidad técnica, económica y ambiental de los recrecimientos, lo que exige estudios de mayor detalle que los que puede ofrecer el EpTI o los que se han presentado en público por centros de investigación y avalados por determinados usuarios. Dicho esto, no podemos afirmar con rotundidad que sea *una de las medidas más acertadas*, pero sí nos parece una medida interesante en algunos casos, como se pone de manifiesto en la Ficha DU-07.

Alegación 15.

Respecto al tema importante de coordinación interadministrativa en la implementación del programa de medidas se indica que la implementación del programa de medidas (con un mínimo grado de ejecución) debería ser obligatoria por parte de las Administraciones competentes en cada caso y no vale con hablar de compromisos de ejecución, es necesario que los compromisos presupuestarios anuales de cada Administración contemplen las partidas necesarias para la ejecución del programa de medidas.

Respuesta:

Desde los órganos de planificación de los organismos de cuenca solo se puede estar de acuerdo con la observación. De hecho, la Ficha pone de manifiesto este problema cuando señala que el compromiso de ejecución de las medidas debería abordarse obligando a que *en los presupuestos anuales de las administraciones del CAC aparezcan como un capítulo o subcapítulo las asignaciones presupuestarias vinculadas a la planificación hidrológica,* compromiso interesante, pero con la lógica dificultad que conlleva en especial en un contexto donde cada vez es más habitual trabajar con presupuestos prorrogados.

Y se abordan posibles vías de mejora como son *el compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución, y establecer por cada administración un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios*.

Alegación 16.

Respecto al tema importante DU-09 también se señala que la gran cantidad de solicitudes y de modificación de características concesionales que el actual sistema obliga a tramitar conlleva un atasco administrativo, lo que origina un importante impedimento en la gestión de las explotaciones agrarias. […] No entendemos que se mantenga la rigidez concesional exigiendo a los usuarios una modificación de sus títulos concesionales.

Se propone como mejora en la gestión y de los procedimientos establecer plazos más breves para la constitución de Comunidades de Usuarios y Comunidades de Regantes.

Respuesta

Sin duda compartimos con el alegante la necesidad de reducir los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos que afectan a los ciudadanos. Pero esta celeridad debe hacerse compatible con el rigor y el cumplimiento de las normas establecidas. También este organismo de cuenca desearía procedimientos más sencillos y ágiles para poder dar respuesta a las peticiones y es algo que pone de manifiesto en la fase de preparación de las nuevas normas de tramitación de expedientes de autorización y concesión; pero la realidad es que cada cambio normativo hace más compleja la tramitación al tener un carácter enormemente garantista, más abierto a la consulta pública y ligado a otros procedimiento (como la evaluación ambiental) que más que agilizar complica la tramitación, aumenta los tiempos de respuesta por mucho que el organismo de cuenca trate de acortarlos. De cualquier modo, las normas reglamentarias vigentes no pueden modificarse por un plan hidrológico y mucho menos por un EpTI.

En lo que respecta a las comunidades de usuarios la tardanza en emitir la resolución de constitución no debe cargarse completamente en el "debe" de la Confederación. De hecho, la mayoría son constituidas en plazos razonables. En el resto de casos, son los promotores de estas comunidades quienes se demoran en la presentación de documentos y no siempre los presentan de modo completo, cuando no cambian de condiciones de manera continua. La tramitación, pese a ser tediosa, asegura las garantías jurídicas para la agrupación y para cada uno de los usuarios una vez que se haya constituido.

Alegación 17.

DU-10.- NUEVOS USOS DEL AGUA VINCULADOS A LAS INDUSTRIAS RENOVABLES, ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA Y CENTROS DE TRATAMIENTO DE DATOS

Respecto al impacto en sectores y grupos afectados, en el EpTI se ha omitido que la construcción de parques eólicos y plantas fotovoltaicas contribuye al aumento de suelo artificial (compactación del suelo, modificación de la permeabilidad del suelo, alteración de los drenajes, incremento de la escorrentía y la erosión por falta de cubierta vegetal protectora, …) Por todo ello, y por salvaguardar una capacidad futura de suelo agrícola, debería considerarse el sector agrícola como uno de los grupos afectados.

Si se opta por el desarrollo de este tipo de proyectos, que pueden llegar a suponer unos consumos elevados de agua, los consumos destinados a ellos, no se otorguen en detrimentos de los usos actuales, sino que se otorguen únicamente en las zonas y situaciones donde hay un excedente de recurso.

Respuesta

Compartimos con el alegante su percepción de que la construcción de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, sobre todo estas últimas, contribuye al aumento de suelo artificial con impactos como compactación y modificación de la permeabilidad del suelo, alteración de la escorrentía e incremento de la erosión, y que el sector agrícola es uno de los sectores económicos afectados.

Estos impactos derivados de la ejecución de los proyectos y la ocupación de suelo han sido recogidos en la ficha DU-10 del EpTI en los siguientes términos:

La expansión de campos fotovoltaicos y eólicos puede contribuir al aumento del suelo artificial, ya que la construcción de estas instalaciones requiere desmontar y nivelar el terreno, lo que puede compactar el suelo, alterar los sistemas de drenaje y aumentar la escorrentía y la erosión… Entre los impactos identificados en relación con el medio hídrico, los suelos, las zonas protegidas DMA y los usos del territorio se encuentran:

- *Impactos sobre la hidrolomorfología de los cauces, riberas y zonas inundables...*
- *Generación de fenómenos erosivos por falta de cubierta vegetal protectora…*
- *Aumento del riesgo de inundación por sellado del suelo…*
- *Impactos sobre la geomorfología y el relieve…*
- *Efectos sobre los usos del suelo, las actividades socioeconómicas actuales y la capacidad futura de desarrollo rural sostenible…*

En cuanto la necesidad de recursos hídricos para el desarrollo de estos proyectos la alternativa elegida para este tema importante propone el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos sólo en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua y no que se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, entre ellos el regadío.

En todo caso, la tramitación de nuevas concesiones de aguas superficiales o subterráneas o derivaciones temporales con destino a estos proyectos contará con un informe acerca de su compatibilidad con el vigente plan hidrológico, teniendo en cuenta los aspectos mencionados y la coherencia con los usos existentes.

4.30. Escrito de observaciones Nº 037 y similares

Se muestra a continuación los agentes que han presentado escritos de POS con el mismo contenido y que son respondidas de forma conjunta para todos ellos.

Nº POS	Presentado por:	En nombre:
N037	D. Teófilo Andres Hernando	Comunidad de Regantes de los canales de Ines y Eza
N040	Alberto García García	Comunidad de Regantes del Canal del Campillo del Buitrago (Soria)
N079	Javier Ines Tomás	Comunidad de Regantes del Canal de Olmillos

Alegación 1.

Reducción de los recursos según el DU-6 RELEVANCIA DEL REGADÍO Y SOSTENIBILIDAD

En el Plan vigente se preveía una reducción media de los recursos por el efecto del cambio climático en un 8%, con un descenso por sistema de explotación entre el 6,8 y el 10,5%, siendo el Sistema Alto Duero el que posee este récor de descenso.

Siendo que estos cálculos de reducción de recursos son los realizados en 2020, esto es, hace 6 años, parece lógico que se hubiera realizado un análisis comparativo de lo previsto en esas estimaciones con la realidad para ver la desviación de esas cifras con la reales.

Respuesta:

En efecto, el Plan Hidrológico vigente prevé la reducción de recurso por cambio climático que se cita en la alegación. En concreto son los valores para la serie corta de aportaciones (1980/81-2017/18) que son los que se usan para calcular los balances del horizonte 2039 (también llamado horizonte de Cambio Climático). No se considera representativo realizar una comparación entre el recurso natural (sin uso) con el recurso medido por las estaciones de aforo (con usos).

Por otro lado, este año 2026 se han actualizado los porcentajes de reducción que se aplicarán en el futuro Plan Hidrológico. En este caso se usarán para el horizonte 2045, el nuevo horizonte de Cambio Climático. Los nuevos porcentajes de reducción para la serie corta (1980/81 – 2023/24) serán del -7,4% para la parte española de la cuenca del Duero y de un -7,1% para el Alto Duero.

Los análisis del efecto de cambio climático sobre las aportaciones se actualizan cada seis años considerando la mejor información disponible. En todas las ocasiones ha sido el Centro de Estudios Hidrográficos quien ha revisado y actualizado esta información. La actualización más reciente es de septiembre de 2025 en lo que se llama “NOTA TÉCNICA SOBRE LA PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PLANES HIDROLÓGICOS DEL CUARTO CICLO. Esta nota se publicará con el Plan Hidrológico para su valoración por los ciudadanos. Para la valoración de ese efecto se utilizan seis modelos climáticos y se integran sus resultados. Estos modelos utilizan a su vez modelos de precipitación y temperatura también actualizados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que para España regionaliza la AEMET. Por otra parte, parece lógico que a medida que pasan los años los efectos puedan verse matizados a nuevos horizontes ya que parte

del efecto del cambio climático se plasma en las propias series consideradas que en cada ciclo de planificación se amplían con seis años más.

Alegación 2.

Entre los sistemas de explotación, el Alto Duero figura con 9 o 10 incumplimientos IPH para las UDA´s reguladas dependiendo de la alternativa considerada en la modelización con AQUATOOL (DU-06)

Sin embargo, en la DU-7 Optimización de la gestión de la oferta de recursos hidráulicos Infraestructuras, tablas 38, 39, 40 y 41, las diferentes alternativas de recrecimiento, incluso la del recrecimiento de la Cuerda del Pozo, no produce mejoras en los incumplimientos del Sistema Alto Duero (aparecen 9 UDA´s con incumplimiento de la IPH), mientras que en el Bajo Duero la situación es completamente diferente (0 UDA´s incumpliendo, tablas 36, 38 y 40), lo cual no parece lógico.

Lo anterior además contrasta con la propuesta que se hizo por la Confederación en la Junta de Explotación del 22 de marzo de 2023, consistente en trasvasar 20 hm^3 del Alto Duero al Bajo Duero, bajo la premisa agravante, si cabe, de que el volumen almacenado en Cuerda del Pozo fue en aquel entonces, ligeramente superior a la media de los últimos 10 años, es decir, que sin ser un año especialmente seco, se propone traspasar volumen de un sistema, el Alto, con más incumplimientos, al Bajo, con menos incumplimientos.

Respuesta:

Es cierto que en cuanto a incumplimientos no se aprecian mejoras en las UDAS reguladas del Alto Duero, manteniendo el número de UDAs con incumplimiento. Sin embargo, sí mejoran los déficits y las garantías volumétricas, pasando de 21,82 Hm^3/año de déficit y 82,2% de garantía volumétrica en la alternativa 2 (tabla 34) a 14,51 Hm^3/año y 87,3% en la alternativa 6 (tabla 40). Esto es, se produce una mejora de más de 7 Hm^3/año en el déficit y de más de 5 puntos en la garantía volumétrica.

En cuanto a la comparación con el Bajo Duero, es cierto que este sistema tiene una mayor mejoría en los modelos utilizados en el EpTI, pero hay que tener en cuenta que estos resultados son orientativos y buscan analizar distintas alternativas a nivel cuenca. Actualmente seguimos trabajando en los modelos para obtener resultados más precisos de cara al nuevo Plan Hidrológico, cuyo nivel de detalle es mayor.

No valoramos la propuesta que hizo en 2023 la Junta de Explotación, que fue eso, una propuesta. Las competencias de las juntas de explotación están especificadas en el artículo 32 del TRLA donde se indica que las Juntas de Explotación tienen por finalidad coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel río o tramo de río cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Su misión es hacer propuestas en el ámbito de sus competencias a la Presidencia del organismo de cuenca; en todo caso las cuestiones que afecten a la explotación de embalses sus propuestas se valoran en la Comisión de Desembalse cuya misión es deliberar y formular propuestas a la Presidencia del organismo sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses atendidos los derechos concesionales de los distintos usuarios. Por tanto, de ser cierto lo que indica la alegación, esa propuesta se llevaría a Comisión de Desembalse, competente para proponer a la Presidencia lo que considere. Por otra parte, no existe “trasvase” de Alto Duero a Bajo Duero: ambos sistemas de explotación están conectados hidrológicamente por lo que no se puede hablar de trasvase

en el sentido que lo hace la alegación. Aunque la alegación no sea objeto de materia del EpTI conviene recordar, en relación con la alegación que el organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Además, con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía. Por tanto, independientemente de lo que ocurriera en 2023, el marco de actuación el organismo es el citado por el párrafo anterior, tomado del artículo 55 del TRLA.

Alegación 3.

En relación con el DU-7 Optimización de la gestión de la oferta de recursos hidráulicos, como alternativa no excluyente de grandes regulaciones, consideramos importante contemplar la construcción de balsas y/o embalses en emplazamientos laterales a las zonas regables a modo de regulación interna para almacenar recursos no regulados.

Respuesta:

Nos parece interesante su propuesta de contemplar la construcción de balsas y/o embalses en emplazamientos laterales a las zonas regables. Se agradece la sugerencia y así se trasladará a las comunidades de regantes y a los redactores de proyectos de modernización de regadíos.

Alegación 4.

Parece conveniente contemplar en el nuevo Plan Hidrológico actuaciones de limpieza y mantenimiento de cauces por la deplorable situación en que se encuentran, al menos en algún punto o tramo de los mismos, mejorando lo que ahora se regula en el artículo 30 de la Normativa del Plan vigente de una manera muy restrictiva y muy generalista, cuando lo deseable es que se autoricen las actuaciones que precisa cada tramo, que lógicamente diferirá de la del tramo siguiente.

Respuesta:

Sin duda la mejora de las condiciones hidrológicas de cauces es una tarea de gran peso en la cuenca a la que el Organismo de cuenca dedica anualmente entre cuatro y seis millones de euros, posiblemente escasos para las necesidades crecientes, a labores de mantenimiento de cauces. De hecho, el Programa de medidas del Plan Hidrológico vigente, incluye un paquete de medidas de este tipo, y algo similar hará el nuevo Plan Hidrológico. Pero evidentemente no puede llegar a los más de 80.000 kilómetros de ríos y arroyos de la cuenca y actúa con criterios de conveniencia.

De cualquier modo, no hay norma que exija en exclusividad la limpieza de cauces al Organismo de cuenca, sino que puede acometerla cualquier persona física y jurídica previa autorización. Para agilizar estas labores tanto en el Plan vigente de 2023 como en el anterior de 2016, se incluyó un procedimiento más ágil para acometer determinadas labores de mejora de las condiciones de desagüe de los cauces. Así en el artículo 30 que cita el alegante se establece el sistema de declaración

responsable para las denominadas actuaciones menores de conservación de cauces y zonas de policía. El mismo artículo hace un elenco de las que pueden considerarse actuaciones menores:

I. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera.

II. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce.

III. Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del dominio público hidráulico.

IV. Retirada de sedimentos y vegetación existente en el lecho del cauce, situados 50 metros aguas arriba y aguas abajo de las obras de fábrica y puentes con el fin de conservar su capacidad de drenaje.

V. Pequeñas actuaciones de mantenimiento de puentes e infraestructuras situadas sobre el cauce, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas no haya ocupación del dominio público hidráulico ni quede afectada su capacidad de desagüe.

VI. Mantenimiento de las secciones de estaciones de aforo.

VII. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos.

VIII. Cortas de arbolado bajo líneas eléctricas.

Para todas estas actuaciones la declaración responsable habilita el poder actuar por los particulares sin esperar a ninguna Resolución de la CHD, lo que agiliza notablemente la actuación.

4.31. Escrito de observaciones Nº 038

Presentado por: Dña. Pilar Luque García.

En nombre de NATURGY GENERACION, S.L.U.

Alegación 1.

Ficha 4: alteraciones hidromorfológicas y alteración fluvial.

Cabe indicar, únicamente, que ha de avanzarse en el análisis de la eficacia de los caudales implantados, y de conformidad con lo previsto por el art. 49 sexies del RDPH, que regula el contenido del "programa de seguimiento y evaluación del régimen de caudales ecológicos", debe incluirse la parte C.

Respuesta:

En efecto, la parte C relativa a la "Evaluación de la eficacia de los caudales ecológicos sobre el medio fluvial" forma parte de lo previsto en el art. 49 sexies del RDPH. Es el siguiente hito en el programa de seguimiento y evaluación del régimen de caudales ecológicos y desde la DGA se está trabajando en ello para unificar criterios y que las confederaciones hidrográficas dispongan de una herramienta y criterios de partida y poder realizar esta evaluación.

Se agradece la aportación y se incorpora el siguiente texto en la ficha:

"En estos momentos la DGA está trabajando en la parte C del art. 49 sexies del RDPH, relativa a la Evaluación de la eficacia de los caudales ecológicos sobre el medio fluvial".

Alegación 2.

En la Ficha DU-07 se plantea la incorporación en las normas de explotación de las presas del siguiente contenido: "Promover la adaptación de órganos de desagüe de las presas al régimen de caudales ecológicos cuantitativo establecido en el Plan, así como a los requerimientos de calidad y caudal sólido". El contenido de las Normas de explotación está recogido en la Guía Técnica elaborada por el Ministerio (2025) y no prevé la incorporación de cuestiones vinculadas a caudales sólidos. (…) Pues bien, en lo que respecta a las normas de explotación de presas y embalses los planes hidrológicos no pueden incorporar previsiones específicas para cada demarcación y que sean distintas a lo prescrito por la Dirección General del Agua

Respuesta:

Efectivamente los planes hidrológicos no pueden incorporar contenidos para los que no están habilitados, como es este caso. La aspiración del Organismo de cuenca es que el aporte de caudal sólido se consolide de manera ordinaria a la gestión de presas de embalse, dado el convencimiento de que este tipo de caudal contribuye a la salud ecológica de las masas de agua, en especial, las que han sido designadas muy modificadas por la construcción de obstáculos.

Dicho esto, también debe indicarse que debe analizarse convenientemente todos los aspectos en los que influye el caudal sólido: estado de conservación de hábitats y especies, fauna piscícola, inundabilidad, … Por ello debe abordarse caso a caso. No obstante, en atención a la alegación, se

matiza la referencia sobre la que se alega para que no quede duda entre la separación entre la legalidad vigente y aquella a la que se aspira.

Alegación 3.

Ficha 7: optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos infraestructuras.

Con respecto a la regulación del sistema Órbigo, si tras el análisis de alternativas, se optara por el recrecido de la presa de Selga de Ordás, en el correspondiente análisis económico (y, descontando en su caso posibles subvenciones), para la aplicación del principio de recuperación de costes ha de evaluarse el beneficio relativo que la obra tiene para cada uno de los usuarios afectados

Respuesta:

El análisis de alternativas realizado para la regulación del sistema Órbigo no ha incluido un estudio económico sobre la aplicación del principio de recuperación de costes ni sobre la repercusión de los costes de inversión entre los distintos usuarios beneficiarios de las actuaciones. En esta fase de la planificación, el análisis económico de las alternativas se ha limitado a considerar el coste estimado de ejecución de las diferentes obras como criterio de comparación, sin abordar la distribución de dichos costes entre los usuarios ni los mecanismos de financiación o recuperación de costes que pudieran resultar de aplicación. En consecuencia, la valoración del beneficio relativo para cada tipo de usuario y la eventual repercusión de los costes no forma parte del análisis de alternativas, sino que deberá realizarse, en su caso, en las fases posteriores de desarrollo de la actuación, de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos aplicables. Por tanto, no es el EpTI el documento donde debe incluirse el análisis que plantea la alegación.

Alegación 4.

Ficha 9: coordinación administrativa e implantación del programa de medidas.

De las novedades previstas se considera la inminente propuesta del Plan Nacional de Restauración (…)

Resultaría deseable que el ETI que finalmente se apruebe pueda estar ya coordinado con la propuesta del Plan Nacional de Restauración y refleje las medidas de restauración previstas o establecidas en el mismo para el agua dulce.

Respuesta:

Ese es el objetivo, de hecho, España debe reportar a la Comisión antes del 1 de septiembre de 2026 el Plan de Nacional de Restauración al que se refiere el artículo 14 del Reglamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2024, relativo a la restauración de la naturaleza y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2022/869, que se está elaborando con las aportaciones de los programas de medidas d ellos planes hidrológicos, entre otras fuentes. Esperamos que el borrador de nuevo Plan Hidrológico pueda incorporar esas actuaciones del Plan Nacional en su Programa de medidas.

Alegación 5.

Se debe poner de manifiesto ciertos aspectos que la CHD no puede abordar singularmente desde el plan hidrológico, al margen de las normas europeas y estatales relativas a la transición energética y digital.

En ese sentido, respecto a la Ficha DU-10, se solicita que se aclare a qué se refiere el EPTI cuando plantea el establecimiento de zonas de exclusión adicionales a las ya previstas por la normativa urbanística y de ordenación territorial de la Administración autonómica. (…) ni la ley de aguas ni el reglamento de dominio público hidráulico prevén el establecimiento de limitaciones territoriales indeterminadas atendiendo a un 25% de la ocupación de la cuenca vertiente.

Respuesta:

La planificación hidrológica tiene como objetivo fundamental la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua. Con ese fin, la normativa del plan hidrológico establece una serie de condicionantes aplicables a todas las actuaciones y proyectos que puedan tener un efecto desfavorable en el estado de dichas masas de agua. La unidad de gestión desde el punto de vista hidrológico es la masa de agua superficial y, consecuentemente, las actividades que se desarrollen en su cuenca vertiente van a tener un efecto sobre el estado de dicha masa.

Los cambios de uso del suelo por implantación de plantas solares fotovoltaicas, en su mayoría desde un uso previo agrícola o de pastos, tiene impactos desfavorables sobre las escorrentías y la erosión de los suelos que pueden afectar negativamente al estado de las masas de agua, particularmente las superficiales. La capacidad de acogida de una cuenca vertiente para estos cambios de uso, en relación con la vulnerabilidad de los procesos hidrogeológicos ante estos cambios, puede verse superada por la proliferación del establecimiento de estas plantas en ciertas zonas, que atiende únicamente a criterios económicos o de disponibilidad del recurso solar.

Por ello, para los nuevos proyectos de instalaciones fotovoltaicas se propone un umbral del 25% de ocupación de la cuenca vertiente de las masas de agua superficiales afectadas, a partir del cual se considera que la capacidad de acogida del medio hídrico se verá superada. Este umbral se tendrá en consideración en la emisión de los informes preceptivos para la evaluación ambiental de los proyectos a elaborar por este Organismo y será evaluado como corresponda por el órgano ambiental correspondiente.

La planificación sectorial de la energía o la planificación digital no pueden condicionar normas de otros sectores que están vigentes o en fase de actualización. Ya que no se hizo este análisis de coherencia territorial al delimitar esas planificaciones estratégicas, son los planes hidrológicos quienes debe establecer las normas, condicionantes o limitaciones de aplicación a las actuaciones que afectan al estado de las masas de agua.

Alegación 6.

Respecto a la Ficha DU-10, se solicita aclaración sobre lo recogido en el EPTI acerca de que "se incluirán limitaciones para el diseño de las líneas de evacuación que afecten a cauces, obligando a cruces y paralelismos ejecutados por sistemas de perforación dirigida respetando cauces...". Dado que el informe de la CHD ya es preceptivo actualmente dentro de la tramitación de los expedientes y se le consulta en la fase de información pública, se entiende que este procedimiento ya se lleva a cabo. Además, se debe solicitar la autorización correspondiente, pudiendo concederla condicionada a las limitaciones que correspondan en cada caso.

La transición energética y digital plantea muchos retos y entre ellos se encuentra el de crear un marco de seguridad jurídica que facilite las inversiones sostenibles. Desde esta perspectiva, antes de

establecer una limitación en los planes hidrológicos, ha de valorarse cuál es su encaje en la normativa de aguas y si su aplicación resultará predecible para los operadores jurídicos.

Respuesta:

Como bien dice el alegante, este Organismo en su informe preceptivo para la evaluación ambiental, en fase de consultas a las Administraciones afectadas, establece condicionantes para los cruces y paralelismos con los cauces afectados por un proyecto. Estos condicionantes deberán ser recogidos en la declaración de impacto ambiental, si ésta fuera favorable, y en todo caso en el condicionado de la autorización para actuaciones en dominio público hidráulico o su zona de policía.

El plan hidrológico vigente ya recoge en su artículo 30 las normas generales sobre las autorizaciones de obras y otros usos en dominio público hidráulico, con un condicionado particular para obras en cauce, zona de servidumbre y zona de policía, que establece los criterios a tener en cuenta en las autorizaciones que correspondan. En este artículo no se recogen expresamente criterios para las obras de cruce del DPH por líneas eléctricas subterráneas.

La alternativa seleccionada para el tema importante DU-10 toma en consideración la gran demanda de autorizaciones para obras en DPH por cruce subterráneo de líneas de evacuación de las instalaciones de producción de energías renovables, incluyendo el criterio de que este cruce se realice por el método de perforación dirigida desde fuera de la banda de protección del cauce, establecida según su clase en el artículo 20 del vigente plan hidrológico, cuando este cruce se produzca en cauces con consideración de masa de agua o se localicen sobre una zona protegida de hábitats o especies o una reserva hidrológica fluvial. De esta forma, se daría traslado a la normativa del nuevo plan hidrológico de los condicionantes habitualmente incluidos en informes y autorizaciones de este Organismo, con objeto de que los promotores conozcan de antemano estas limitaciones y no sean necesarias posteriores modificaciones de los proyectos.

4.32. Escrito de observaciones Nº 039

Presentado por: D. David Esteban Miguel.

En nombre de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León).

Consideraciones generales

El EpTI identifica los nuevos usos del agua vinculados a sectores como las energías renovables, el almacenamiento energético o los centros de datos. No obstante, dicha identificación resulta insuficiente, incompleta y carente de desarrollo efectivo, al no venir acompañada de:

- *una planificación material de los recursos necesarios*
- *una cuantificación de la demanda hídrica asociada*
- *una definición de criterios de asignación*
- *ni una integración real en la estrategia económica e industrial*

En consecuencia, lejos de constituir un avance en la integración de estos usos en la planificación hidrológica, el documento configura un marco que:

- *no garantiza la viabilidad de su implantación,*
- *introduce incertidumbre regulatoria significativa, y*
- *puede dar lugar a limitaciones indirectas al desarrollo industrial*

*Puede traducirse en una: **restricción encubierta a la implantación industrial**, al impedir de facto el desarrollo de proyectos estratégicos sin una justificación completa ni una adecuada ponderación de intereses*

Respuesta:

Las consideraciones generales se desglosan más abajo en cuestiones específicas a las que se responde individualmente en aras de una mejor sistematización y claridad.

Alegación 1.

Vulneración del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE)

*El EpTI genera un marco de **incertidumbre incompatible con la seguridad jurídica exigible**, especialmente en sectores intensivos en inversión.*

- *no establece criterios claros y objetivos de asignación de recursos hídricos para nuevos usos*
- *no define reservas específicas para usos industriales estratégicos*
- *introduce condicionantes genéricos sin delimitación suficiente*

Respuesta:

Al EpTI no le corresponde realizar la planificación de otros sectores vinculados al agua (agrario, industrial, energético) ya que todos estos sectores caen en la esfera de competencias de otras administraciones estatales y autonómicas. El artículo 40 del TRLA señala que la política del agua está

al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos establezcan las Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que debe ser aplicada por el MITECO, pero para poder servir a esas estrategias y planes sectoriales estos deben estar definidos.

Ejemplos de la escasa definición de objetivos sectoriales figuran en la Ficha del tema importante DU-10. Así se indica que en *el PNIEC 2022/30 se contemplan nuevas plantas de producción de hidrógeno verde con capacidad de 11 GW para el conjunto del Estado y el horizonte 2030;* sin embargo, no especifica cómo se distribuye por las demarcaciones hidrográficas, algo que sí es relevante en la gestión del agua, en especial en industrias que demandan agua como es la de producción de hidrógeno. La regulación de las plantas de energía fotovoltaica y eólica carece de una planificación de detalle, ya que los objetivos planteados por PNIEC son a nivel estatal; su desarrollo está vinculado a los puntos de evacuación, más que a la conveniencia ambiental de su ubicación. *La Estrategia de Almacenamiento Energético, aprobada en febrero de 2021, aborda la diagnosis del almacenamiento energético y cuantifica las necesidades de almacenamiento para contribuir a la descarbonización del sistema energético (…) contempla disponer de una capacidad total de almacenamiento de unos 20 GW en el año 2030 y de unos 30 GW de almacenamiento en 2050*, pero tampoco concreta dónde. *El Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico (PNAHE) en el cual se han identificado en toda España un total de 37 centrales hidroeléctricas reversibles viables técnicamente sobre embalses de titularidad estatal, tanto de bombeo puro como de bombeo mixto, de las cuales dos estarían en la demarcación hidrográfica del Duero, una de bombeo puro y otra de bombeo mixto, con 230 MW de potencia y 2,78 GWh de energía almacenada*; en este caso este Plan ya concreta más y asigna dos centrales a la demarcación hidrográfica del Duero, lo que permite que el Plan Hidrológico pueda establecer reservas para, en su caso, su desarrollo.

En el ámbito del agua el EpTI es un documento intermedio de la planificación hidrológica que tiene por objeto la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. No tiene que ofrecer seguridad jurídica ya que es un documento instrumental en la elaboración del Plan Hidrológico que se aprueba por Real Decreto y tiene fuerza vinculante.

Por otra parte, la seguridad jurídica para los usuarios que aspiran a desarrollar una actividad la ofrece el procedimiento concesional donde se concreta la actividad en el objeto, el tiempo y el lugar, lo que permite evaluar la actividad en coherencia con los objetivos de la planificación hidrológica. Por tanto, se rechaza la alegación.

Alegación 2.

Afectación a la libertad de empresa (artículo 38 CE)

El EpTI, en su redacción actual, puede suponer una ***restricción encubierta a la implantación industrial*** *al introducir limitaciones de facto sin la debida justificación económica y jurídica.*

En el EpTI no existe una evaluación económica suficiente; una ponderación adecuada de los intereses en juego; una justificación proporcional de dichas restricciones

Respuesta:

El EpTI es un documento intermedio de la planificación hidrológica que describe y valora los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación. Pese a la crítica de fondo del EpTI, la alegante tampoco aporta información relevante de lo que considera "implantación industrial" suficiente en la demarcación hidrográfica del Duero, ni cita proyectos relevantes que puedan impulsarse avalados por las administraciones competentes. Por ello no es posible ponderar los intereses económicos en juego y su posible colisión con los objetivos ambientales de la planificación hidrológica. No obstante, la alegante puede presentar durante la fase de redacción del Borrador del Plan Hidrológico o durante su consulta pública aquellas iniciativas que contando con visto bueno de las administraciones competentes pudieran implantarse en el territorio; sería en ese momento cuando podrían valorarse con detalle, incluirse en su caso en el programa de medidas y, con ello, su mejor aval para la ejecución siempre que se verifiquen el resto de normativas.

Alegación 3.

Incumplimiento de los principios de buena regulación

*Se produce un **incumplimiento de los principios de buena regulación**, lo que compromete la validez material del documento. El EpTI no acredita la necesidad de determinadas limitaciones; no analiza alternativas menos restrictivas; no evalúa el impacto económico de las medidas; no incorpora un análisis de eficiencia*

Respuesta:

El EpTI explica los motivos por los que determinadas actividades denominadas "nuevos usos" pueden suponer presiones adicionales para las masas de agua y los espacios protegidos vinculados. Algunas de las observaciones que se hacen en la Ficha DU-10 son:

El cambio de uso del suelo por la implantación de plantas fotovoltaicas (…) y parques eólicos puede generar impacto en el estado de las masas de agua por modificar la permeabilidad del suelo, modificar el régimen hidrológico local e incrementar el aporte de sólidos a las mismas por procesos erosivos. Además, estas instalaciones se proyectan, en múltiples ocasiones, con líneas de evacuación de decenas de kilómetros que suponen cruces y paralelismos con masas de agua y otros elementos de la red hidrográfica, y se superponen con espacios protegidos como reservas hidrológicas y espacios RN2000, a los que afectan de manera importante.

Es esperable que se desarrollen proyectos de hidrógeno verde en los corredores ferroviarios y alrededor del futuro gasoducto paralelo a la Ruta de la Plata (sistemas de explotación del Tormes, Esla y Bajo Duero) y el futuro interconector de hidrógeno Portugal-España CelZa. (…) Cabe destacar que no existe recurso subterráneo disponible en varias zonas centrales de la demarcación en la que el grado de explotación de sus acuíferos supera el umbral de buen estado cuantitativo.

Una opción a plantear sería el uso de agua regenerada, siempre que no se viera comprometido el mantenimiento de los caudales ecológicos en aquellas masas de agua que se benefician de estas aportaciones. El régimen jurídico de la reutilización de aguas residuales urbanas se rige por el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

El almacenamiento energético mediante sistemas de baterías BESS (…) no suponen un uso consuntivo de agua ni ocupan importantes superficies, pero suponen un riesgo importante sobre el estado de las masas de agua. La vulnerabilidad de estos proyectos de almacenamiento de energía frente a accidentes graves o catástrofes, en particular frente a incendios externos o internos a la instalación, puede provocar una grave contaminación por liberación de productos de alta toxicidad, entre otros los PFAs, (…) que pueden ser liberados la atmósfera, al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas, provocando una contaminación de estos, persistente y acumulativa, que afecta gravemente a la salud humana y de los ecosistemas.

Por tanto, el EpTI sí concreta por qué se establecen ciertas limitaciones a determinados nuevos usos, a la vez que reconoce que es necesario buscar acomodo para satisfacer las nuevas demandas, pero siempre en coherencia con el logro de los objetivos ambientales de las masas de agua. Para ello es necesario que las administraciones competentes concretaran la penetración en la demarcación del Duero de estos nuevos usos y su distribución en el territorio.

Alegación 4.

Ausencia de evaluación del impacto económico

*La ausencia de evaluación económica supone un **déficit estructural del documento**, que impide una correcta toma de decisiones. El documento carece de análisis del impacto sobre la industria; estimación de efectos sobre inversión y empleo; y evaluación de la pérdida de oportunidades económicas.*

Respuesta:

El artículo 79 del RPH indica que el ETI debe describir:

a) Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico, incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales.

b) Las posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos medioambientales, de acuerdo con los programas de medidas básicas y complementarias, incluyendo su caracterización económica y ambiental.

c) Los sectores y grupos afectados por los programas de medidas.

Es relevante señalar que el organismo de cuenca elaborará el esquema de temas importantes integrando la información facilitada por el Comité de Autoridades Competentes, es decir, por las autoridades bajo cuya competencia caen esos nuevos usos industriales. Hasta la fecha ninguna autoridad competente en materia de energía, industria o tecnología ha aportado información alguna sobre esas medidas concretas en desarrollo del PNAHE, PNIEC, etc. Esperamos que en fase de redacción de Borrador de Plan Hidrológico puedan aportar medidas concretas para su valoración.

Alegación 5.

Insuficiente planificación de los nuevos usos del agua

*La falta de planificación efectiva puede traducirse en una **limitación indirecta del desarrollo industrial**, contraria a los objetivos de crecimiento económico y transición energética.*

El EpTI reconoce los nuevos usos vinculados a sectores estratégicos, pero no cuantifica la demanda futura, no establece reservas de recursos, no define criterios de asignación, lo que genera un escenario de incertidumbre regulatoria, inseguridad inversora, y riesgo de deslocalización de proyectos.

Respuesta:

Compartimos la reflexión de la alegante: la falta de planificación estratégica sectorial impide que la planificación del agua pueda considerar esos nuevos usos y con ello fijar el marco institucional para su desarrollo. Y el EpTI no cuantifica la demanda futura porque no la conoce, porque no puede trasladar los objetivos generales de España de la política energética e industrial al ámbito de una de las 16 demarcaciones hidrográficas españolas (9 intercomunitarios y 7 intracomunitarias). El EpTI puede identificar la demanda solicitada en los últimos años para estos nuevos usos, como de hecho hace, pero desconoce la futura. Probablemente con los nuevos usos industriales ya concedidos en los últimos años y los que están en trámite, el ámbito hidrográfico del Duero ya ha contribuido suficiente a esos objetivos generales a nivel de país.

Por tanto, animamos al alegante a que, en fase de redacción de proyecto de plan hidrológico, en colaboración con las administraciones competentes, aporte información que permita analizar con menos incertidumbre estos nuevos usos del agua en la demarcación del Duero.

Alegación 6.

Falta de integración de políticas públicas (agua–energía–industria)

Resulta imprescindible integrar estos ámbitos para garantizar la coherencia de las políticas públicas.

El documento no articula de forma adecuada la relación entre planificación hidrológica, planificación energética y política industrial, lo que produce una desconexión entre la disponibilidad de recursos las necesidades reales del tejido productivo.

Respuesta:

La planificación energética española en relación con los nuevos usos contemplados en el Esquema de Temas Importantes se ve plasmada en documentos como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2022/30, que persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero mediante un incremento en el uso de estas energías renovables, la Estrategia de Almacenamiento Energético, que cuantifica las necesidades de almacenamiento para contribuir a la descarbonización del sistema energético, la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”, que prevé la instalación de 4 GW de potencia de electrolizadores en el horizonte 2030 o Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico (PNAHE).

Estos documentos establecen objetivos generales, en términos de potencia instalada o capacidad de almacenamiento en determinados horizontes temporales, sin acometer una ordenación territorial del necesario despliegue de estos proyectos ni establecer criterios para su ubicación. Por ello, la redacción de los planes hidrológicos adolece de una total falta de datos para poder establecer las necesidades hídricas de estos nuevos usos y la disponibilidad del recurso en función del sistema de explotación en el que se planifiquen dichos proyectos.

El EpTI es bastante explícito en esta materia cuando señala en la Ficha DU-10 que *en la fase de redacción del plan hidrológico se identificarán las reservas futuras por sistema de explotación para usos destinados a la producción de hidrógeno verde en la demarcación, centros de datos y otras nuevas demandas energéticas teniendo en cuenta también los efectos derivados del cambio climático sobre la asignación de recursos y las garantías y la implantación de caudales ecológicos, ya que junto con este tema importante se trata de tres temas complementarios.*

Se contempla considerar una limitación de nuevas plantas solares fotovoltaicas, plantas eólicas y sistemas de almacenamiento de baterías en: cuencas vertientes de reservas hidrológicas, cuencas vertientes de zonas protegidas por abastecimiento y en terrenos de erosión potencial mayor de 25 tn/ha y año. Por otro lado, se contempla una limitación máxima del 25% de cuenca vertiente de masa de agua ocupada. Esperamos que en la fase de redacción del Plan Hidrológico la alegante y las administraciones competentes ofrezcan información de detalle que permitan fijar las reservas para nuevos usos y matizar las limitaciones apuntadas en el EpTI.

4.33. Escrito de observaciones Nº 041

Presentado por: D. Jorge Llorente Cachorro.

En nombre del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

Alegación 1.

Datos trasversales del EpTI

Se solicita que el análisis de alternativas de todas las fichas incorpore de forma expresa los siguientes criterios transversales:

1. *Criterio territorial y demográfico reforzado, considerando la extensión de Castilla y León, su baja densidad de población, la dispersión municipal y el riesgo de despoblación como condicionantes estructurales de cualquier medida de planificación hidrológica.*
2. *Criterio de proporcionalidad socioeconómica, evitando medidas restrictivas generalizadas que puedan afectar a la viabilidad de explotaciones, comunidades de regantes, industrias agroalimentarias y empleo rural sin una evaluación económica previa, completa y territorializada.*
3. *Criterio de trazabilidad y verificabilidad del diagnóstico, de forma que cualquier declaración de mal estado químico o impacto significativo pueda comprobarse a escala de masa de agua, punto de control, parámetro, serie temporal, metodología, umbral normativo y fuente causal.*
4. *Criterio de causalidad técnica, evitando atribuciones genéricas al regadío cuando existan fuentes mixtas, urbanas, industriales, ganaderas, naturales o indeterminadas, y vinculando cada medida a la presión realmente acreditada.*
5. *Criterio de prioridad de medidas proactivas y estructurales, dando preferencia a modernización de regadíos, digitalización, telecontrol, mejora de infraestructuras en alta, optimización de fertilización, seguimiento de retornos, herramientas de ayuda a la decisión y actuaciones de eficiencia, frente a restricciones lineales de uso.*
6. *Criterio de garantía y resiliencia, valorando que la escasa o insuficiente regulación en determinados sistemas, la obsolescencia de infraestructuras y la reducción de aportaciones por cambio climático incrementan la vulnerabilidad territorial y exigen soluciones de oferta, gestión, eficiencia y modernización, no exclusivamente de reducción de demandas.*
7. *Criterio de coherencia competencial, clarificando qué administración es responsable de cada medida, cuál es su marco normativo, qué financiación se prevé, qué calendario se propone y cómo se evaluará su eficacia.*
8. *Criterio de protección del regadío sostenible como infraestructura socioeconómica esencial, reconociendo su papel en la fijación de población, el empleo, la incorporación de jóvenes, la producción alimentaria, la inversión rural y la vertebración territorial.*

Respuesta:

El marco conceptual y legal del EpTI se establece en el Reglamento de la Planificación Hidrológica, en su artículo 79. Conceptualmente el EpTI debe describir y valorar los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, de

acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes; además en él se concretarán las posibles decisiones que puedan adoptarse en la configuración del plan hidrológico, y se ofrecerán propuestas de solución a los problemas enumerados.

Para atender a este marco conceptual el propio Reglamente señala qué contenidos debe tener el EpTI:

- Las principales presiones e impactos que serán tratados en el plan hidrológico, incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales.

- Las posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos medioambientales, de acuerdo con los programas de medidas básicas y complementarias, incluyendo su caracterización económica y ambiental.

- Los sectores y grupos afectados por los programas de medidas.

Es relevante el contenido del artículo 79.3 cuando señala que para elaborar el EpTI, se integrará la información facilitada por el Comité de Autoridades Competentes, en el que se encuentra representada la comunidad autónoma de Castilla y león.

En este marco conceptual y formal del EpTI, la alegación transversal formulada en primer lugar apunta a una serie de valoraciones que son más propias de la autoridad competente alegante que de aquella promotora de los planes hidrológicos. Algunos de los criterios que solicita que se tengan en cuenta (el criterio territorial y demográfico reforzado, el de proporcionalidad socioeconómica, el de prioridad de medidas proactivas y estructurales, o el de protección del regadío sostenible) por su materia caen en la esfera de competencias de la comunidad autónoma, por lo que nadie mejor que ella para realizar esa valoración y, en función de ella, proponer un programa de medidas adecuado, a esos objetivos siempre que sean respetuoso con el resto de objetivos de la planificación.

Muchos de estos criterios son criterios razonables de carácter macro, pero tal y como se plantean sin encaje en el ámbito de la planificación hidrológica, y desde luego el EpTI no puede entrar en su valoración. Los planes hidrológicos no tienen la misión de resolver los problemas del mundo rural del territorio. Su marco competencial es conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico, satisfacer las demandas de agua, procurar el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial, procurando incrementar la disponibilidad del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. Lógicamente, como señala la alegación, la política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos establezcan las Administraciones públicas, pero ello sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso hídrico que condicionará toda autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite.

Respecto a la causalidad técnica (que por el contexto de la alegación se refiere exclusivamente al tema importante de contaminación difusa), en todos los temas importantes se identifican las presiones y los sectores o fuerzas motoras de esas presiones. En concreto el estudio realizado por la DGA con técnicas isotópicas señalan que, en la demarcación del Duero, con 79 puntos de muestreo de aguas superficiales en dos campañas diferentes, el origen del nitrógeno contaminante es agrario en el 61% de las muestras, un 25% de las muestras tienen un origen mixto, de aguas residuales urbanas y agrario, y un 14% de origen indeterminado. Porcentajes similares se encuentran en las aguas subterráneas, donde con 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, el origen del nitrógeno es agrario en

el 55% de las muestras, un 25% de las muestras tienen un origen mixto, de aguas residuales urbanas y agrario, un 14% de origen indeterminado, y un 3% de las muestras de origen urbano. En ningún lugar del EpTI se responsabiliza al regadío específicamente del problema de la contaminación difusa; simplemente se muestra el origen de los excedentes nitrogenados que, en ambos tipos de aguas, proceden mayoritariamente de un origen agrario. Sin un diagnóstico certero es muy difícil poner las medidas adecuadas y hasta la fecha esta es la mejor información disponible.

Respecto al criterio de trazabilidad y verificabilidad del diagnóstico, desconocemos a qué se refiere la observación. El estado de las masas de agua se evalúa de acuerdo con los criterios que establece el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre y la Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas (MITECO, abril 2021). Para aplicar los criterios de ambos documentos se utiliza la información que aportan las redes de calidad oficiales de seguimiento de las masas de agua, y la valoración se hace a escala de masa de agua, teniendo en cuenta cada parámetro responsable, la evolución temporal y, en el caso de las aguas subterráneas de los valores umbral. Anualmente se actualiza el estado de las masas de agua a partir de los registros de los parámetros responsables del estado. Este seguimiento permite comprobar las tendencias, la eficacia de las medidas y las desviaciones respecto a lo esperado. El Borrador de Plan Hidrológico incluirá un apartado específico, bastante detallado de la rede de control, los parámetros analizados, los plazos y la evaluación del estado ecológico, químico y cuantitativo de las aguas subterráneas.

Respecto al criterio de garantía y resiliencia, que la alegante identifica exclusivamente en términos de mayor oferta ante un escenario del cambio climático, entendemos que las Fichas DU-06 y DU-07 aportan suficiente información para poder identificar las distintas soluciones para abordar el tema importante, tanto en términos de mejora de la gestión en la demanda como de incremento de la oferta. Y parece bastante claro, al menos en la información que se ofrece que, para alcanzar la plena garantía, incluso para nuevas demandas de regadío, una política exclusiva de mayor oferta es mucho más gravoso para la sociedad y para el sector, que la política equilibrada de mejora de la gestión de la demanda con refuerzo de la oferta, por este orden.

Pensamos que el criterio de coherencia competencial está bastante claro. El Programa de medidas del Plan Hidrológico identifica para cada medida la administración competente y el agente ejecutor, la fecha de comienzo y fin, y el sistema financiero que se aplica. Es cierto que este detalle no figura en el EpTI porque es en el Plan Hidrológico donde debe figurar este detalle que reclama la alegante.

En general la alegación transversal aborda una serie de cuestiones que exceden los requerimientos del EpTI que establece el artículo 79 del RPH y parece que apuntan más a la siguiente fase de planificación hidrológica que se regula en el artículo 80 del RPH, fase de borrador de Plan Hidrológico.

Alegación 2.

Ficha DU-1 y Apéndice 14.2. de la normativa del PH del Duero

Se expone que, si bien los datos relativos al estado cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea se encuentran parametrizados y accesibles a través de la plataforma Mírame-Duero, se constata una carencia documental respecto a la memoria metodológica para calcular los valores que sustentan la declaración de "mal estado" de dichas masas. Con el objetivo de garantizar los principios de transparencia, seguridad jurídica y el derecho a la defensa de los administrados, resulta

indispensable que el EPTI incorpore, de forma accesible, la modelización hidrológica, los balances de masas, los umbrales de escorrentía/lixiviación y los cálculos específicos que han conducido a dicho diagnóstico, permitiendo así su debida contrastación técnica y validación científica.

Por otro lado, se expone que el Apéndice 14.2 del Plan Hidrológico vigente tiene carácter técnico y orientativo, y su eventual utilización como instrumento de limitación directa del abonado constituye una reinterpretación no amparada por su naturaleza original. La conversión automática de estos valores en límites operativos requiere necesariamente un desarrollo normativo específico, así como una evaluación agronómica detallada que tenga en cuenta la variabilidad de cultivos, suelos, condiciones edafoclimáticas y sistemas de riego existentes en la demarcación, y por tanto de la producción estimada. […]

Frente a este enfoque restrictivo, desde la Junta de Castilla y León se propone una alternativa basada en la mejora de la eficiencia y la gestión agronómica, mediante la promoción intensiva del uso de la herramienta SATIVUM, que permite ajustar de forma precisa las necesidades de fertilización a las condiciones reales de cultivo, suelo y clima, facilitando una reducción efectiva de los excedentes de nitrógeno y, por tanto, de la contaminación difusa, sin comprometer la productividad de las explotaciones

Limitar la fertilización en el regadío, donde se puede controlar el insumo agua y ser la fertilización más eficaz y eficiente, es una actuación con poco sentido, por lo que estamos en total desacuerdo.

Por otra parte, la reactivación de medidas como la implantación de bandas de protección vegetales implica una reducción efectiva de la superficie productiva, así como un incremento de los costes de implantación, gestión y mantenimiento para los agricultores, sin que se identifique un agente responsable de su ejecución ni se contemple una memoria económica que cuantifique dichos impactos [..]

Se concluye solicitando la revisión de la ficha DU1 de contaminación difusa, incorporando una delimitación precisa de las masas afectadas, garantizando el carácter no coercitivo del Apéndice 14.2 de la normativa del plan hidrológico vigente en ausencia de desarrollo normativo específico ya que limita de forma directa las producciones, priorizar medidas proactivas basadas en herramientas de optimización como SATIVUM y establecimiento de un convenio con FERDUERO para la determinación del origen de la contaminación difusa en los acuíferos, asegurando la financiación y compensación de las medidas que impliquen costes o pérdidas de productividad, ajustando cualquier restricción sobre fitosanitarios al marco normativo vigente y elaborando una memoria económica detallada, así como una clarificación del marco competencial antes de avanzar en la implantación de las medidas propuestas.

Respuesta:

Los criterios para la evaluación del estado de las masas de agua subterránea figuran en la *Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas* (MITERD, 2021). La modelización hidrológica, los balances de masas, los umbrales de escorrentía/lixiviación y los cálculos específicos que han conducido a dicho diagnóstico, se han realizado de manera similar a como se explica en el Anejo 8.2 del Plan Hidrológico vigente, epígrafes 4 y 6. Los datos para esa evaluación se han ido recabando a partir de las redes oficiales de piezometría y calidad de las aguas del Organismo de cuenca.

Y anualmente en el informe anual de seguimiento del Plan Hidrológico se da cuenta de las variaciones que con carácter anual se dan en el estado cuantitativo y químico de las masas de agua subterráneas de la demarcación hidrográfica.

La valoración del estado de las masas de agua subterránea se basa fundamentalmente en el análisis de los datos que aportan las redes de control, puntualizar que en la actualidad la red de control piezométrico en la demarcación está integrada por 557 estaciones de medida, algunas de las cuales se están automatizando, estando ya automatizadas unas 125. Está en marcha, un proyecto de construcción de otros 100 puntos de control adicionales. La frecuencia de medida en los últimos años es de una medida cada dos meses, esto supone unas seis medidas anuales, esto supone una ratio de 0.82 estaciones por Km^2, siendo la tercera cuenca del territorio nacional, en cuanto a estaciones por Km^2.Por otra parte, la Red de control del estado químico de las Aguas Subterráneas de la Cuenca del Duero, según lo establecido en la Directiva Marco de Aguas (DMA) tiene por objeto proporcionar una apreciación fiable del estado cualitativo de todas las masas de agua o grupos de masas de agua subterráneas y de las zonas protegidas. Para ello cuenta con 448 puntos para la toma de muestras, que se ampliarán en un futuro con la incorporación de varios manantiales a la red de control de vigilancia.

Como indica el alegante el Apéndice 14.2 del Plan Hidrológico vigente tiene carácter técnico y orientativo, y así se utiliza en la valoración de la compatibilidad de las nuevas actividades. De hecho es una herramienta que permite validar lo que dispone el artículo 8.3 del Real Decreto 47/2022, cuando señala que los planes hidrológicos de cuenca, cuando se considere necesario para alcanzar los objetivos ambientales de las masas de agua en riesgo, podrán establecer dentro de su parte normativa, a la que se refiere el artículo 81 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, umbrales máximos promedio de excedentes de nitrógeno para cada masa de agua o sector de masa afectada por la contaminación por nitratos. Dichos límites máximos serán los que conduzcan al logro de los objetivos ambientales señalados en el mismo plan hidrológico. Estos umbrales deberán ser tomados en consideración por los órganos competentes de las comunidades autónomas de cara a la revisión de sus programas de actuación. Además, para reforzar la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agropecuarias, y cuando el solicitante no pueda demostrar la inocuidad de la actividad sobre el dominio público hidráulico, los organismos de cuenca establecerán limitaciones a nuevas concesiones y a otras actividades sujetas a su autorización, limitaciones que tendrán también la finalidad de evitar una indeseada concentración de presiones que, en su conjunto, puedan impactar significativamente sobre las masas de agua. Para ello las autoridades del agua valorarán la compatibilidad de cada nueva propuesta con las previsiones del plan hidrológico correspondiente, tanto a efectos de la disponibilidad de los caudales necesarios como en relación con el logro de los objetivos ambientales adoptados. Y esto es lo que se hace con los valores del Apéndice 14.2 de la Normativa. Estos valores se actualizarán en fase de redacción de Plan Hidrológico con los nuevos datos y resultados de la modelización.

Es muy útil la aportación de la alegante en relación con la aplicación SATIVUM, referente nacional de una adecuada herramienta para adecuar la aplicación de sustancias a las necesidades de los cultivos. De hecho, la Ficha DU-01 se cita específicamente, así como las actividades de formación y transferencia de herramientas de gestión adecuada de excedentes promovidas por la alegante. Sería de gran utilidad conocer realmente el impacto de eta herramienta: en fase de elaboración del EpTI se ofreció por parte de la alegante esta información que hasta la fecha no ha llegado. Estas acciones formativas y de uso

de nuevas tecnologías, necesarias para la mejora en el futuro, deben solaparse con acciones reforzadas donde el problema es más importante, algo que planea la propia Ficha DU-01.

La fertirrigación es una herramienta muy adecuada para la óptima dosificación de nutrientes a los cultivos de regadío y reducir los excedentes. Sin embargo, cuando hemos tratado de conocer su extensión en los regadíos de la demarcación hidrográfica hemos visto que no está tan extendida como parece colegirse de la alegación. En proyectos modernizados donde se han dispuesto redes de control y seguimiento de contaminación en aguas superficiales y subterráneas, observamos que, si bien hay una mejora respecto a la situación previa a la modernización, la realidad es que no reducen el problema como se espera y sigue habiendo excedentes relevantes. Sin duda este es un campo de mejora para el asesoramiento, para la investigación y para extender más aún la fertirrigación.

En el organismo de cuenca, y en otros ámbitos de la administración, estamos convencidos de la eficacia de las bandas de protección de los cauces para reducir la contaminación difusa. Cuestión distinta es que se encuentre la vía adecuada para compensar a los titulares de esos terrenos el servicio ecosistémico que ofrecen estas bandas.

El trabajo "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación", como se indica en la Ficha DU-01, se ha llevado a cabo por el MITERD. En ese trabajo, sobre 79 puntos de muestreo de aguas superficiales, atribuyen el 61% de la contaminación por nitratos a origen agrario (principalmente fertilizantes inorgánicos) y el 25% a mezclas con aguas residuales urbanas, el 14% restante de origen indeterminado. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, sobre 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, se muestra un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería. A nuestro juicio este trabajo, sin menoscabo de que pueda ampliarse a nuevas zonas y nuevas campañas y las limitaciones propias de la materia, muestra con suficiente certidumbre que la mayoría de los nitratos presentes en el agua tiene un origen agrario.

Consideramos que el convenio con FERDUERO constituye una herramienta complementaria del asesoramiento al que apela la alegante y que puede impulsarse desde la administración agraria a la vez que se expande el uso de SATIVUM, en el marco del proyecto AKIS.

Alegación 3.

Ficha DU-1. Medidas de bandas de protección y barreras vegetales

Se expone que sobre el texto del EpTI que indicaba que la Estrategia de Biodiversidad para 2030 considera la disminución del uso de agroquímicos en un 50% es un error, ya que el 6 de febrero de 2024, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció oficialmente que la propuesta sobre la reducción de pesticidas químicos sería retirada.

Por otra parte, es cierto que la Comisión Europea ha propuesto la reducción del uso de fertilizantes, pero con un vínculo a la reducción de pérdida de nutrientes sin una prohibición directa, sino mediante

una reducción indicativa del 20%, contraria a los términos empleados en el documento, donde se indican porcentajes de disminución expresos. […]

Se debería eliminar cualquier referencia a las ayudas de la PAC, en tanto en cuanto, no se trasladen a textos legislativos definitivos. En la actualidad únicamente se conocen propuestas presupuestarias y de intervenciones. Por ello, cuando se desconoce la estructura presupuestaria, su financiación y las medidas para la programación del futuro marco, no es posible realizar propuestas con medidas concretas. […]

Se pretende que en los planes de actuación se reduzcan las cantidades máximas de N por hectárea tanto en zonas vulnerables, como fuera de ellas. Cuando el ámbito de los planes de actuación se circunscribe a las zonas vulnerables.

Además, se pretende que dentro de los planes de actuación se reduzcan las cantidades de fertilización fuera de las zonas vulnerables financiadas a través de ayudas PAC, sin que el ámbito competencial de los planes de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos le permita establecer medidas financiadas por la PAC.

Las normas de condicionalidad exigen el cumplimiento de los planes de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, pero fuera de su ámbito carecen de aplicación. […]

las medidas sobre limitación de fertilización deben encajar en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. […]

Se proponen medidas económicas compensatorias para los usuarios que voluntariamente reduzcan la aplicación de sustancias nutrientes (nitrogenadas y fosforadas) y fitosanitarios o implanten barreras de vegetación para reducir excedentes. Estamos de acuerdo, pero para ello sería necesario en se dotase de presupuesto suficiente a cargo del organismo que realiza la propuesta. En caso contrario, si la financiación depende de terceros se debería retirar del texto.

Por este motivo debe desaparecer las referencias a las ayudas de la PAC, así como aquellas medidas que sobrepasan las normas de condicionalidad legalmente establecidas.

Respuesta:

En efecto la presidenta de la Comisión Europea hizo una declaración en la que muestra su disposición a retirar el llamado Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas (SUR), que se presentó por primera vez en junio de 2022 con el ambicioso objetivo de reducir a la mitad el uso de plaguicidas para 2030, debido a su rechazo mayoritario en el Parlamento Europeo. En su discurso al Parlamento Europeo señaló *"La propuesta SUR se ha convertido en un símbolo de polarización. Ha sido rechazada por el Parlamento Europeo. En el Consejo tampoco hay avances. Por eso propondré al Colegio de Comisarios que retire esta propuesta"*. Sin embargo, no se conoce hasta la fecha que la Estrategia de Biodiversidad de 2023 se haya modificado o derogado sigue vigente hasta ahora, con los objetivos declarados indicados. No obstante, dado que la decisión del Parlamento puede materializarse a lo largo de la redacción del plan hidrológico y con ello modificar el contenido de la Estrategia, se elimina esa referencia de la Ficha DU-01.

Respecto a los porcentajes de reducción de excedentes que plantea la Ficha DU-01 en las alternativas propuestas, éstos no pretenden alinearse con la reducción indicativa que propone la Comisión Europea, sino que pretenden dar respuesta a la situación real de cada una de las zonas que se identifican. Como se explica en la Ficha, los "porcentajes de reducción expresos" son reducciones de excedentes que permitirían avanzar en la senda de la recuperación de la calidad del agua, para lo cual se han modelado diversas estrategias de reducción y se ha comprobado la respuesta de cada una a medio plazo. Y el hecho de ponerlos de manifiesto en las alternativas (no estamos en fase normativa de plan hidrológico sino proponiendo diversas soluciones) permite analizar las distintas opciones. Tampoco la alegante, pese a ser una institución tecnológica e investigadora, ofrece valores alternativos a los de la propuesta ni tampoco cuantifica el impacto que esas reducciones de excedente podrían suponer para los usuarios, por lo que se imposibilita cualquier discusión.

Respecto a la incertidumbre en la actualidad sobre el marco presupuestario de la PAC, solo indicar que en la fecha de redacción del Plan Hidrológico vigente sí se conocía el marco financiero y normativo de la PAC y sin embargo la alegante rechazó medidas similares a las que se proponen ahora pese a que aquel marco sí las amparaba.

En cuanto a los planes de actuación propuestos para la disminución de fertilizantes, con el objetivo de la reducción de excedentes de sustancias nitrogenadas, apuntar que fuera de las zonas vulnerables lo que se plantea son recomendaciones de reducción deducidas a partir del modelo PATRICAL, el cual hace previsiones a distintos horizontes en el tiempo de cómo aplicando una reducción, determinada y según el contenido actual de nitratos en el acuífero, podría evolucionar dicho contenido en sustancias nitrogenadas; para las zonas vulnerables el cuaderno de campo es un registro obligatorio, detallado y digital, que demuestra que el agricultor cumple las normas de nitratos: dosis, fechas, justificación, gestión de purines y plan de abonado; debe incluir la identificación de parcelas, , riegos, tratamientos fitosanitarios y labores. Su cumplimiento es obligatorio y está sometido a inspecciones y controles por parte de las autoridades competentes, y su incumplimiento puede suponer sanciones y pérdida de ayudas. Si se fuera más estricto y regular en las inspecciones y controles del cuaderno de campo haciéndose cumplir los planes con un mínimo de rigor, probablemente la situación habría iniciado la senda de la mejoría, y el estado español se habría ahorrado alguna de las sanciones impuestas por la Unión Europea. Por otra parte, el código de buenas prácticas agrarias sí obliga a todos los perceptores de ayudas PAC (en su estructura actual), estén o no fuera de zonas vulnerables; y si realmente hubiese interés por la alegante en abordar los problemas que pone de manifiesto la Ficha DU-01 podría usar el código para reducir las presiones de la actividad sobre el agua velando por la viabilidad de las actividades afectadas. De cualquier modo, dado que se desconoce a fecha actual la estructura de la futura PAC, se matizan las afirmaciones sobre la financiación, dejando para la fase de plan hidrológico concretar esa financiación, si fuera posible, en el marco de la PAC, en el marco de lo que dispone el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, o si ninguno fuera viable en la aplicación del artículo 25 del TRLA o del artículo 6 del RDPH sobre las zonas de policía de cauces.

Alegación 3 bis.

Ficha DU-1. Medidas de bandas de protección y barreras vegetales

La normativa relativa a la condicionalidad en Castilla y León establece las condiciones indicadas a continuación, por lo que la propuesta de este documento debe adaptarse a ellas:

- Abonado nitrogenado.

Para el control de las dosis de N es de aplicación el Decreto 5/2020 de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias y, la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, que define en programa de actuación en las ZV.

Esta Orden es la que, a efectos de condicionalidad de las ayudas PAC (RD 1049/2022, de 27 de diciembre), es de aplicación para el control del citado Programa través del Requisito Legal de Gestión 2 (RLG 2). Su incumplimiento determina reducciones de pago a los titulares.

En RLG 2, entre otros aspectos, se controla que el balance entre aportes de N (por fertilización orgánica o inorgánica) sea acorde con el de las extracciones de los diferentes cultivos, teniendo en cuenta para ello su régimen de explotación (secano o regadío), así como los rendimientos esperados. ***De esta forma se determina que no existan excedentes de nitrógeno que puedan ocasionar lixiviados.***

Se expone que el plan de abonado es obligatorio para todas las superficies declaradas en la solicitud única de ayudas PAC, a partir del 1 de enero de 2026 (excepto en pequeñas explotaciones de menos de 5 hectáreas o superficies de pastos que no se fertilicen) en cumplimento de la norma de condicionalidad BCAM 10.1. Asimismo, a partir del 1 de septiembre de 2026 será obligada la elaboración de un plan de abonado, también en todos los recintos, quedando solamente exceptuadas las explotaciones de pastos permanentes y las menores de 10 hectáreas de secano para el cumplimiento de la norma BCAM 10.2.

El plan de abonado ha de ser elaborado por un técnico asesor en la materia o mediante una aplicación informática de recomendaciones de abonado reconocida oficialmente, como es el caso de SATIVUM. Esta aplicación permite ajustar de forma precisa las necesidades de fertilización a las condiciones reales de cultivo, suelo y clima, facilitando una reducción efectiva de los excedentes de N. Al igual que en RLG 2, el incumplimiento de las obligaciones de BCAM 10 conlleva reducciones de pago en las ayudas PAC.

Con esto ***se concluye que, mediante la aplicación de la normativa vigente y la utilización de la aplicación SATIVUM se implementa un control, efectivo de los excedentes de N en la agricultura, de forma que las aportes se ajusten estrictamente a las extracciones de los cultivos, con lo que se cumpliría de forma efectiva la medida reforzada identificada como "Alternativa 1", de máxima reducción de excedente de nitrógeno.***

Respuesta:

Parece que SATIVUM, como herramienta oficial de agricultura de precisión de Castilla y León para gestionar parcelas, optimizar fertilización y riego, cumplir el cuaderno digital y monitorizar cultivos con satélite, desde el punto de vista tecnológico es una herramienta adecuada como pone de manifiesto que haya sido asimilada por el MAPA. Quizá el reto que queda pendiente es que se use de hecho y que se sigan sus recomendaciones, es decir, hacer ver a los agricultores su utilidad y con ello una aceptación generalizada, que se traduzca en una mejora del estado de las masas de agua. En este sentido disponer de la información de número de usuarios efectivos (no solo descargas de la aplicación), tipo de cultivos y zonas donde se usa permitiría ver su eficacia real al contrastar esos datos con los registros reales de sustancias en las aguas.

Formalmente hay un marco de actuación para dar cumplimiento al Requisito Legal de Gestión 2 (RLG 2) que, como dice la alegación, se está verificando. Más duda nos genera la afirmación de que con la aplicación de balances dirigidos por personal cualificado "se determina que no existan excedentes de nitrógeno que puedan ocasionar lixiviados". Si el RLG se viene aplicando desde 2022 debería verse una tendencia estable o descendente en las sustancias presente en agua. Por ello conocer cuántos usuarios siguen estas recomendaciones de hecho, en qué zonas y cuántos incumplimientos se detectan desde que se vienen aplicando estas medidas podría ser un ejercicio de transparencia también para explicar los resultados de las redes cuando sean incoherentes con estas medidas. De cualquier modo, se hace una referencia explícita al marco de actuación de los RLG 2 y BCAM 10.1 en la Ficha.

Esta Ficha plantea como elemento clave para resolver el problema la formación de los usuarios y la coordinación de las administraciones competentes: unas, diagnosticando el problema a través de las redes de seguimiento y control químico del estado y evolución de la calidad de las aguas, otras, ordenando las actividades susceptibles de contaminar y estableciendo criterios y limitaciones para determinadas prácticas. Es sabido que la resolución o mejor dicho la minimización del problema depende fundamentalmente de la disminución en la aportación de fertilizantes, fitosanitarios y de una adecuada gestión de los residuos ganaderos, por lo que la Ficha plantea una serie de alternativas de actuación que contemplan los siguientes aspectos. Cumplimiento, con control e inspección del cuaderno de campo, implantación obligatoria de planes de abonado (no solo en zonas vulnerables sino también en aquellas en que se detecta una presión relevante de contaminación difusa), agricultura de precisión, mejora de la gestión de purines (separación sólido-líquido, digestión anaerobia, transporte a zonas deficitarias, control de la aplicación mediante GPS y cuadernos digitales).

Alegación 3 ter. Ficha DU-1. Medidas de bandas de protección y barreras vegetales

La normativa relativa a la condicionalidad en Castilla y León establece las condiciones indicadas a continuación, por lo que la propuesta de este documento debe adaptarse a ellas:

- Franjas de protección.

En la medida reforzada identificada como "Alternativa 1" se propone la creación de bandas de protección de cauces de 10 metros de anchura fuera del dominio público hidráulico en las masas de agua con impacto comprobado y, de 5 metros en las de impacto probable. Esta actuación ya se encuentra recogida en la norma de condicionalidad BCAM 4, de creación de franjas de protección en los ríos con una anchura de 5 metros. En estas no habrá producción agrícola y se mantendrá una cubierta vegetal que podrá ser sembrada o espontánea, distinguible del cultivo contiguo. Para su correcto mantenimiento se podrá realizar una siega o pastoreo y, lógicamente, no se podrán aportar fertilizantes ni fitosanitarios. Al igual que en las obligaciones citadas anteriormente, el incumplimiento de BCAM 4 supone una reducción de los pagos de la PAC.

Respuesta:

La creación de bandas de protección que propone la alternativa 1 supera a la recogida en la norma de condicionalidad BCAM 4, ya que para que la reducción de entrada de contaminantes que se precisa se requiere de otros condicionantes, todos ellos explicados en la ficha, como es el hecho de que las barreras de vegetación estén constituidas por vegetación de ribera. Son las zonas riparias (vegetación

de ribera) las que más eficazmente actúan como un filtro natural que intercepta pesticidas y fertilizantes.

En el marco de la Política Agrícola Común actual (PAC) y la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, se financian actualmente medidas para establecer estas franjas de protección y lo que propone la ficha es, ahora que se están elaborando las condiciones para nuevo periodo, se proponga la inclusión de estos requisitos. No sería necesario, de todos modos, utilizar la PAC cuya delineación futura presenta incertidumbres. La ficha lo propone, pero abierto a articular otros mecanismos para aplicar dichas medidas si se consideran más convenientes, tanto con compensaciones por los servicios ecosistémico como, si no se llegara a disponer de marco financiero adecuado, sin compensación económica en el marco de la gestión de la zona de policía de cauces.

Alegación 4.

Ficha DU-2. Uso sostenible de aguas subterráneas

Se solicita:

A) No limitar el uso de agua para el riego en base a lo siguiente:

1. *Eliminar o revisar las medidas de las alternativas 2 y 0 en lo relativo a:*
   - *Restricciones generalizadas a novaciones,*
   - *Limitaciones a modificaciones de características,*
   - *Tratamiento restrictivo de aprovechamientos de la sección C.*
2. *Evitar la aplicación automática de reducciones del 10–25%, estableciendo en su lugar:*
   - *Un análisis individualizado de cada concesión, permitiendo al interesado justificar que su actividad no va a incrementar la contaminación difusa.*
   - *Basado en criterios técnicos, eficiencia del uso y situación específica de la masa de agua.*
3. *Eliminar los peajes por modificaciones en las características de las concesiones*
4. *Eliminar la prohibición generalizada de nuevas concesiones y autorizaciones en zonas con limitaciones específicas, sustituyéndola por:*
   - *Evaluación caso a caso,*
   - *Análisis de impacto real,*
   - *Posible integración en soluciones de gestión conjunta o sustitución de recursos.*

B) Mejora continuada en las infraestructuras con sustitución de aguas subterráneas por superficiales.

5. *Priorizar de forma clara la alternativa 3, incorporando:*
   - *Programación temporal,*
   - *Financiación suficiente,*
   - *Compromiso administrativo para la ejecución de infraestructuras.*
6. *Condicionar la aplicación de la exención del artículo 4.5 a:*
   - *La ejecución efectiva de infraestructuras de sustitución de bombeos,*
   - *El establecimiento de hitos verificables,*
   - *La reducción progresiva de la presión sobre los acuíferos.*

C) Es necesario un mecanismo trasparente para conocer cuáles son las zonas no autorizadas/zonas con limitaciones, su evolución y su exclusión si han mejorado.

D) Incluir expresamente al ITACyL en el apartado de autoridades competentes, en coherencia con sus competencias en materia de regadíos, modernización y gestión del agua.

E) *Se estima prioritario continuar impulsando la constitución y el desarrollo operativo de las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS), […] A tal fin, con el objeto de coordinar eficazmente las competencias de la administración hidráulica y la gobernanza de las masas de agua por parte de los usuarios, se propone la constitución formal de una Mesa de Trabajo paritaria entre las CUAS y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Este órgano colegiado tendría como finalidad técnico-administrativa consensuar e instrumentar las bases sectoriales, fijando unas normas claras que rijan el funcionamiento ordenado, el control de extracciones y la sostenibilidad de los aprovechamientos.*

Respuesta:

Respecto a la revisión de las alternativas 0 y 2 en lo relativo a las restricciones que recogen indicar que la alegación no aborda cuál es su propuesta para superar el desequilibrio entre extracciones y recursos renovables en cuatro masas de agua en mal estado cuantitativo. La propuesta que hace (eliminar todas las restricciones que figuran en la alternativa 2) conlleva que sólo le parece viable la alternativa 3 que en el fondo supone una política de mayor oferta y que por sí sola no resuelve el problema identificado, como se pone de manifiesto en la propia Ficha. Respecto a las novaciones y tratamiento restrictivo de aprovechamientos de la sección, se indica que el EpTI no dice nada nuevo, que por otra parte tampoco puede decir, que no esté regulado en las DT 2ª, 3ª y 4ª del TRLA. Y con respecto a las modificaciones de características, la normativa actual no impone recortes de agua en estos trámites. Pese a que la vía de los peajes se propuso en el EpTI del plan hidrológico vigente como vía para equilibrar extracciones y recursos sin perjudicar a nuevos usuarios, no se está aplicando en el plan hidrológico vigente por el rechazo social manifestado, si bien hay agentes que lo demandan. Por el mismo motivo se elimina del EpTI actual, manteniendo el estatus actual.

Respecto a las concesiones nuevas para las que se sugiere un análisis individualizado de cada concesión, permitiendo al interesado justificar que su actividad no va a incrementar la contaminación difusa, señalar que esto es lo que plantea la Ficha DU-01 y es lo que se viene aplicando el plan hidrológico vigente, con excepción de las zonas vulnerables. En estas zonas ya se ha identificado un impacto como demuestra su declaración, por lo que cualquier incremento de presión, en tanto se mantengan declaradas, no va a contribuir a la recuperación. Pero fuera de las zonas vulnerables se pueden incrementar extracciones justificando la inocuidad de la actividad sobre la calidad del agua.

La Ficha DU-02 efectivamente señala que en zonas con limitaciones específicas las nuevas peticiones de extracciones deben evaluarse caso a caso, analizando la afección local, pero en ningún caso con una alternativa de sustitución de recursos ya que el peticionario aspira a tener una concesión subterránea por ser para él la más ventajosa.

La alternativa 3, efectivamente es una de las elegidas, sin menoscabo del resto ya que por sí sola la alternativa 3 no resuelve el tema importante identificado. Y la financiación suficiente y adecuada queda en manos de la administración agraria que es la competente en materia de promoción de los regadíos y su sostenibilidad, por lo que será en fase de redacción del Programa de medidas del Plan Hidrológico cuando podrá corroborar esa disposición financiera.

Los requisitos de las exenciones del artículo 4(5) de la DMA que cita la alegante son los siguientes:

a) que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende dicha actividad humana no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor que no suponga un coste desproporcionado;

b) que la administración proponente garantice para las aguas superficiales, el mejor estado ecológico y estado químico posibles teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación,

c) que la administración proponente para las aguas subterráneas, los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación;

d) que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.

Por tanto, invitamos a la administración alegante a que aporte la justificación de las exenciones a las que alude para que sea el órgano ambiental en materia de espacios protegidos de la misma comunidad autónoma quien valide esa justificación y, en su caso, pueda formar parte del nuevo plan hidrológico.

Las zonas no autorizadas y zonas con limitaciones específicas se publican en cada plan hidrológico y se van actualizando a medida que se otorgan los derechos, dando cuenta de las actualizaciones en el informe anual de seguimiento del plan hidrológico que se presenta al Consejo del Agua de la Demarcación. Además, se encuentran actualizadas en la base documental Mírame-IDEDuero de acceso público.

A fecha de cierre de la fase de consultas del EpTI, el ITACyL está representado en el Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica del Duero con cuatro vocales, de los 18 que tiene Castilla y León: no sabemos si la relevancia real del ITACyL en la comunidad autónoma es pareja con su representación. Además, su Director es miembro de la Junta de Gobierno, del Consejo Nacional del Agua y del Consejo del Agua de la demarcación. Quien determina la representación del ITACyL en los órganos colegiados de la Confederación y en su Comité de Autoridades Competentes es el Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, no la Confederación Hidrográfica del Duero. Dado los cambios recientes en la estructura de la comunidad autónoma, esta representación podrá verse modificada.

No existe en el ordenamiento que regula el funcionamiento de las confederaciones hidrográficas la figura de la *Mesa de Trabajo paritaria*. El artículo 26 del TRLA identifica como órganos de gestión, en régimen de participación, las Juntas de Explotación. Su finalidad es coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las masas de agua cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. No tienen el carácter paritario que propone la alegante, pero podría ser una aproximación a lo que solicita el alegante; de hecho, en la alternativa 1 de este tema importantes se establece como una de las medidas; sin embargo, el alegante no considera adecuada esta alegación.

Alegación 5.

Ficha DU-4. Alteraciones hidromorfológicas y restauración fluvial

Se solicita que previo a incluir en el Programa de Medidas actuaciones de desmantelamiento de infraestructuras hidráulicas para mejorar la conectividad de las aguas, se tenga en cuenta la posible

utilidad futura de esta, así como el impacto socioeconómico que pueda causar. En este sentido sería idóneo establecer un periodo de información pública previo.

Respuesta:

Los objetivos de la planificación hidrológica son: conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico (DPH) y de las aguas continentales; satisfacer las demandas de agua de los diferentes usuarios; lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso y protegiendo su calidad; y economizar el empleo del agua y racionalizar sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

De este modo, la Directiva Marco del Agua (DMA) y la legislación nacional exigen alcanzar el buen estado o potencial ecológico de las masas de agua. La mejora hidromorfológica es una obligación legal que se puede compatibilizar con la satisfacción de las demandas de agua de los diferentes usuarios, cuando éstas existen. La observación planteada no encaja puesto que no tiene sentido mantener infraestructuras en las masas de agua, actualmente en desuso, ante la hipotética situación de un uso futuro, máxime teniendo en cuenta que la restauración de la continuidad longitudinal del río y el transporte de sedimentos son factores críticos para la salud de los ecosistemas fluviales, la cual les hace mucho más resilientes ante, por ejemplo, fenómenos de contaminación, que pueden tener incidencia directa en la salud humana.

Es importante indicar que las infraestructuras en desuso que no reciben un mantenimiento adecuado tienden a deteriorarse, lo que puede suponer un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes.

Por ese motivo, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece explícitamente que el Organismo de cuenca promoverá la eliminación de infraestructuras que se encuentren abandonadas sin cumplir función alguna ligada al aprovechamiento de las aguas, priorizando la recuperación del río frente a la mera conservación de estructuras cuya utilidad es inexistente en la actualidad.

La acumulación de sedimentos o el riesgo de rotura de estructuras envejecidas son argumentos técnicos de peso para su demolición, especialmente si no hay un titular que asuma la responsabilidad y los costes de su seguridad y mantenimiento

Desde un punto de vista jurídico, el derecho al uso privativo del agua no es perpetuo si no se ejerce. El Texto Refundido de la Ley de Aguas permite iniciar expedientes de extinción de derechos cuando un aprovechamiento permanece sin explotar durante tres años consecutivos por causas imputables al titular. Por tanto, la "posibilidad de uso" no es un derecho indefinido si la realidad es el desuso prolongado.

Es importante distinguir entre infraestructuras en desuso y aquellas en uso. Para estas últimas, la política de la Confederación es la permeabilización (escalas de peces, etc.) en lugar de la demolición, para compatibilizar el uso con la continuidad fluvial. Si existiera un uso real y legítimo, la infraestructura no se eliminaría, sino que se adaptaría

En conclusión, el argumento de mantener infraestructuras por una remota posibilidad de uso choca con la obligación legal de restaurar los ríos, el deber de evitar riesgos por falta de mantenimiento y el principio de seguridad jurídica que extingue derechos no ejercidos. La planificación hidrológica debe

basarse en usos reales y sostenibles, no en expectativas teóricas que perjudican el estado ambiental del dominio público.

Alegación 6.

Ficha DU-6. Sostenibilidad del regadío

Se solicita, con el fin de garantizar que la planificación hidrológica no derive en un enfoque exclusivamente restrictivo, sino en un modelo de sostenibilidad activa basado en la combinación equilibrada de eficiencia, regulación y desarrollo socioeconómico del regadío, que:

1. *La limitación de dotaciones máximas por sistema de explotación no se establezca como medida estructural automática, en este sentido, consideramos que no tiene sentido aplicar dotaciones máximas por sistema, sino mínimas, ya que la asignación anual se determina en las correspondientes Juntas de Explotación. En cualquier caso el sistema de dotaciones debería estar condicionado a:*

   o Estudios individualizados por UDA y sistema.
   o Evaluación económica detallada.
   o Justificación hidrológica específica.

   Asimismo, se solicita que, en situaciones de sequía declarada o de escasez coyuntural relevante, se habilite expresamente la posibilidad de ajustar temporalmente los caudales ecológicos y otros requerimientos hídricos asociados a espacios protegidos […]. Por ello, se solicita que el Plan Hidrológico y el Plan Especial de Sequía regulen de forma clara cuándo, cómo y con qué límites puede aplicarse dicha adaptación.

2. *Se incorpore obligatoriamente una memoria económica completa, que cuantifique:*

   o Impacto sobre renta agraria y empleo.
   o Costes de adaptación de las explotaciones.
   o Efectos sobre la industria agroalimentaria y el territorio.

3. *Se garantice la seguridad jurídica de los regadíos modernizados, estableciendo expresamente que:*

   o Los ahorros de eficiencia no implicarán reducciones automáticas de concesión.
   o La modernización no supondrá pérdida estructural de derechos sin compensación.

4. *Se vinculen de forma expresa las medidas de gestión de la demanda (DU-06) a la ejecución efectiva de medidas de oferta (DU-07), incorporando:*

   o Programación temporal concreta.
   o Compromiso presupuestario.
   o Identificación de actuaciones prioritarias por sistema.

5. *Se incorpore un análisis de resiliencia del sistema, evaluando conjuntamente:*

   o Cambio climático (con la metodología adecuada, no extrema).
   o Regulación existente y futura.
   o Garantía real del regadío en escenarios extremos.

6. *Se revise el tratamiento del cambio climático, incorporando:*

   o Análisis de sensibilidad.
   o Evaluación de la relación no lineal entre aportaciones y garantía.

7. *Se permita la evaluación conjunta de nuevas zonas regables con medidas de incremento de recursos, evitando su exclusión automática por criterios de demanda.*
8. *Se incorpore expresamente el principio de sostenibilidad integral del regadío, incluyendo:*

   o Sostenibilidad ambiental.
   o Viabilidad económica.
   o Cohesión territorial y lucha contra la despoblación.

Respuesta:

El punto 1 de esta alegación manifiesta su disconformidad con la consideración de la limitación de dotaciones máximas como medida estructural, solicitando que no se aplique de forma automática y generalizada y que las asignaciones se determinen anualmente en el seno de las Juntas de Explotación.

A este respecto, debe señalarse que la Ficha DU-06 no establece la aplicación automática ni indiscriminada de limitaciones de dotación, sino que analiza dicha medida como alternativa de planificación, en el marco de la evaluación comparada de opciones orientadas a mejorar la garantía del suministro en un contexto de reducción de recursos y mayor variabilidad hidrológica asociada al cambio climático.

La consideración de dotaciones máximas a escala de sistema de explotación responde a la función propia del Plan Hidrológico, conforme al artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), de garantizar el equilibrio entre recursos disponibles y demandas previsibles, así como la sostenibilidad a medio y largo plazo de los distintos usos del agua.

Debe tenerse en cuenta que la limitación de dotaciones ha sido analizada expresamente en el marco de las alternativas del EpTI, en la medida en que durante el tercer ciclo de planificación hidrológica fue una medida planteada en las alegaciones formuladas por los usuarios del regadío y, de manera singular, por FERDUERO. Dicha propuesta se sustentaba en que los cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua se aplican de forma uniforme a todos los usuarios integrados en cada Junta de Explotación, con independencia de sus dotaciones concesionales. En este contexto, la eventual fijación de dotaciones máximas por sistema se consideró como un instrumento orientado a avanzar hacia un tratamiento más equitativo entre los distintos usuarios. Además de esto, es recurrente la solicitud de los usuarios del regadío en la Comisión de Desembalse de que los embalses se queden con el máximo volumen posible a final de año hidrológico, algo que no siempre sucede por ofrecer unas dotaciones orientativas superiores a las que el sistema admite. Por ello la dotación máxima busca también este efecto y con él mejorar la garantía del año en curso y del siguiente.

Todo esto se entiende sin perjuicio de que las decisiones operativas de asignación anual continúen correspondiendo a la Comisión de Desembalse, a propuesta de las Juntas de Explotación, y de que la concreción definitiva de las medidas se base en análisis más detallados por unidades territoriales y sistemas, que se desarrollarán en la fase de redacción del Plan Hidrológico.

En relación con la solicitud de flexibilización de los caudales ecológicos en situaciones de sequía o escasez coyuntural, debe precisarse que el marco normativo vigente ya contempla mecanismos de adaptación temporal, si bien sujetos a límites estrictos.

En efecto, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, y con el artículo 83 quater del Reglamento de la Planificación Hidrológica (Real Decreto 907/2007), la gestión de episodios de sequía prolongada y escasez coyuntural se articula a través de los Planes Especiales de Sequía, cuya revisión para la demarcación del Duero ha sido aprobada por Orden TED/601/2026, de 1 de junio.

Dicho instrumento prevé expresamente la posibilidad de ajustes temporales del régimen de caudales ecológicos, en función del estado del sistema, estableciendo valores específicos para situaciones de sequía, con carácter excepcional, motivado y limitado en el tiempo.

No obstante, esta posibilidad de adaptación encuentra un límite esencial en la normativa vigente. En particular, el artículo 18.4 del Reglamento de la Planificación Hidrológica dispone expresamente que:

"*En caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista de humedales de importancia internacional […]. En estas zonas se considerará prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos […]*".

Asimismo, dicha limitación debe interpretarse en coherencia con el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE y con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que imponen la obligación de garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales y la protección reforzada de las zonas protegidas.

Consecuentemente, si bien el sistema de planificación contempla ajustes temporales de caudales ecológicos en situaciones de sequía declarada o escasez coyuntural, tales ajustes no pueden aplicarse a las masas de agua vinculadas a espacios protegidos de la Red Natura 2000 ni a otras zonas con régimen de protección reforzada, en las que el mantenimiento del régimen ecológico resulta prioritario.

Por tanto, la regulación vigente ya permite la gestión adaptativa solicitada dentro de los cauces legalmente establecidos, sin que proceda incorporar al Plan Hidrológico previsiones adicionales de flexibilización general que pudieran vulnerar los límites expresamente fijados por el ordenamiento jurídico.

El punto 2 de esta alegación solicita la incorporación de una memoria económica completa que evalúe el impacto acumulado de las medidas propuestas.

Al respecto, debe indicarse que el Esquema Provisional de Temas Importantes constituye un documento de carácter estratégico y preparatorio, en el que las alternativas se analizan de forma preliminar, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Planificación Hidrológica, sin perjuicio del mayor grado de detalle exigible en el Plan Hidrológico. No obstante, se ofrece un marco económico e inversor vinculado a las distintas alternativas que permitan valorar cada una en términos del balance coste-beneficio.

No obstante, se considera procedente reforzar en la fase de Plan el análisis de los impactos económicos y sociales de las medidas, en coherencia con el principio de buena regulación recogido en el artículo 129 de la Ley 39/2015.

En el punto 3 de esta alegación se solicita que se garantice expresamente que los ahorros derivados de la modernización no conllevarán reducciones automáticas de concesión.

A este respecto, debe precisarse que la Ficha DU-06 no establece ningún automatismo entre la mejora de la eficiencia y la reducción de derechos concesionales. La modernización del regadío se contempla como una medida de adaptación y mejora de la garantía, especialmente relevante en escenarios de sequía y cambio climático.

La eventual modificación de condiciones concesionales se rige por el marco jurídico vigente y no deriva de manera directa de la ejecución de actuaciones de modernización. En la Normativa del Plan vigente el artículo 28 señala que las modernizaciones de regadío llevadas a cabo por fondos públicos deberán ajustar la concesión a los valores que derivan de una mejora de la eficiencia. Esto se hace en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 del TRLA en el que se indica que las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. Para ello las Confederaciones Hidrográficas realizarán auditorías y controles de las concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y utilización de los recursos hídricos objeto de la concesión. Por otra parte, las actuaciones de modernización de regadío reciben fondos públicos en cantidades relevantes para lo que suelen llevar asociados algunos requisitos previos, como son el ahorro de agua y que las actuaciones contribuyan al logro de los objetivos ambientales. Este es uno de los motivos por los que estas medidas se clasifican como complementarias dirigidas al logro de los objetivos ambientales; si esto no fuera así se clasificarían en medidas para garantizar las demandas y en ese caso no figurarían en el plan hidrológico entre las prioridades.

El apartado 4 de esta alegación solicita una vinculación expresa entre las medidas de gestión de la demanda y las de incremento de regulación.

Debe indicarse que el EpTI ya realiza un análisis conjunto de ambas tipologías de medidas, evaluando escenarios combinados. No obstante, se considera oportuno que el Plan Hidrológico: refuerce la coherencia temporal entre ambas, identifique prioridades por sistemas y mejore la programación y previsión presupuestaria.

El punto 5 de esta alegación solicita un análisis específico de resiliencia estructural de los sistemas de explotación.

A este respecto, debe señalarse que el EpTI incorpora el cambio climático como condicionante transversal y analiza su impacto sobre la garantía de los sistemas, considerando la regulación existente y futura. El propio estudio de garantías ya supone un análisis de resiliencia del sistema en los diferentes escenarios.

El punto 6 de esta alegación cuestiona el uso de reducciones medias de recursos en el tratamiento del cambio climático. Debe señalarse que:

El RPH en su modificación de 2021 establece que a lo largo de cada ciclo de planificación los organismos de cuenca elaborarán un estudio específico de adaptación a los riesgos del cambio climático en cada demarcación hidrográfica para su futura consideración en la revisión del plan hidrológico correspondiente, con un contenido tasado. Ese estudio se ha elaborado y se encuentra a disposición de todos los ciudadanos en el mismo alojamiento del EpTI. En él se avanzan algunas de las cuestiones que plantea la alegante. El artículo 2.4.6 de la Instrucción de la Planificación Hidrológica señala que el plan hidrológico evaluará el posible efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la demarcación. Para ello estimará, mediante modelos de simulación hidrológica, los recursos que corresponderían a los escenarios climáticos previstos por la propia Instrucción. En fase previa al plan hidrológico, el EpTI utiliza escenarios basados en las referencias técnicas disponibles (CEDEX, IPCC), en línea con la normativa, pero dichos escenarios no constituyen hipótesis rígidas, sino marcos de evaluación comparativa de alternativas. Por otra parte, la alegante no aporta información alguna que permita contrastar lo que propone con la información que ha utilizado el EpTI en su evaluación de cambio climático.

El punto 7 de esta alegación solicita que las ampliaciones de regadío no se descarten exclusivamente por criterios de gestión de la demanda.

No se entiende bien a qué se refiere la alegante con “descartar nuevos regadíos con criterio de la demanda”. A este respecto, debe señalarse que el EpTI no establece exclusiones automáticas, sino que condiciona la viabilidad de nuevas zonas regables a la garantía de suministro y a su compatibilidad ambiental y económica, pudiendo evaluarse juntamente con medidas de incremento de oferta, donde realmente sean eficaces. En el análisis conjunto de las Fichas DU-06 y DU-07 se concluye que en algunos casos ni el incremento de la oferta permite garantizar los usos actuales y los futuros que se proponen de manera que en un escenario hipotético los actuales usuarios se verían perjudicados con la entrada de nuevos usuarios, sin cumplir unos y otros la mínima garantía de suministro.

El punto 8 de esta alegación solicita la incorporación expresa del principio de sostenibilidad integral.

Debe indicarse que el marco normativo vigente, y en particular el artículo 40 del TRLA, ya integra la protección ambiental, la satisfacción de las demandas y el desarrollo socioeconómico. El EpTI se elabora conforme a dicho marco.

Alegación 6 bis.

Ficha DU-6. Sostenibilidad del regadío

Se solicita, con el fin de garantizar que la planificación hidrológica no derive en un enfoque exclusivamente restrictivo, sino en un modelo de sostenibilidad activa basado en la combinación equilibrada de eficiencia, regulación y desarrollo socioeconómico del regadío, que:

9. *Adjuntamos las ampliaciones de regadío que deberían constar en la planificación:*

   o Sectores Cea-Carrión (1.500 ha)
   o Armuña (24.000 ha, teniendo en cuenta el incremento de regulación previsto en DU07).
   o Valduerna (3.100 ha)
   o Arandilla (1.200 ha)
   o Alaraz (315 ha)

o Lastras de Cuellar (6.000 ha)
o Bombeo Araviana (400 ha.)
o Valdavia (600 ha.)
o Desarrollo ZR MI Tera – (6.463 ha.)

Respuesta:

No compartimos la observación general que se hace: la planificación hidrológica que se ha planteado en los ciclos anteriores y la actual no tiene un enfoque exclusivamente restrictivo para el regadío, sino que su objetivo es conseguir el buen estado o buen potencial de las masas de agua y a la vez satisfacer las demandas; esto es, que las demandas sean sostenibles y compatibles con el estado de las masas de agua. Y el planteamiento que se hace en las Fichas DU-06 y DU-07 balancea los conceptos que cita la alegante (eficiencia, regulación, aspectos sociales y económicos) no solo en el horizonte actual sino también en el futuro.

Respecto a las propuestas concretas planteadas se ha hecho una valoración individualizada de cada una con el fin de valorar su inclusión en el borrador de Plan Hidrológico de cuarto ciclo

- Sectores Cea-Carrión (1.500 ha)

En lo referente al Sector V Cea-Carrión, en el año 2022, durante la consulta pública del plan vigente se analizó su viabilidad desde el punto de vista del cumplimiento de garantías de la IPH. En el Borrador de Plan Hidrológico se incluyó la DA 2000282 ZR Sector V Cea-Carrión que estaría operativa en el horizonte 2033 con un volumen demandado de 6,649 Hm^3 (1.220 Ha con una dotación bruta de 5.452 m^3/Ha) y que tomaría el agua de una futura balsa (la balsa del Sector V Cea-Carrión) que se diseñaría con una capacidad de 3,9 Hm^3. La UDA 2000282 ZR Sector V Cea-Carrión, diseñada para llenarse fundamentalmente con agua de invierno del río Cea y con parte del agua que circule durante la campaña de riego por el canal del trasvase Cea-Carrión, incumpliría los criterios de garantía de la IPH en el horizonte 2039 (en el que se incorporan los efectos de la reducción de aportaciones). En concreto el criterio de déficit a 10 años, cuyo valor es del 119,5% cuando lo máximo admisible es el 100% de la demanda anual. Sí cumpliría los criterios de garantía en el horizonte 2033 (sin incorporar los efectos del cambio climático). Hay que tener presente, además, que la capacidad de la balsa es inferior a la demanda caracterizada, de manera que sería necesaria agua del río Esla en verano para completar el suministro (suponiendo un modus operandi similar al de la UDA 2000041 ZR Sector IV Cea-Carrión).

Al no cumplir los criterios de garantía en el horizonte 2039 (el que tiene en cuenta la reducción de aportaciones debida al Cambio Climático), se descartó la DA 2000282 ZR Sector V Cea-Carrión. Por tanto, si 1.220 ha no son viables, tampoco serán viables 1.500 ha. Se debe tener en cuenta que el Plan Hidrológico vigente vincula la explotación del trasvase Cea-Carrión con agua del sistema Esla a la ejecución de las medidas de aumento de regulación y mejora de la eficiencia del sistema Carrión, algo que a fecha actual ha avanzado muy poco, por lo que seguir incrementando demandas sin una certeza futura no parece razonable.

- Armuña (24.000 ha, teniendo en cuenta el incremento de regulación previsto en DU-07)

Esta ampliación de 24.000 ha se ha analizado en el EpTI en las fichas DU-06 y DU-07 de temas importantes.

La ZR de La Armuña presenta cerca de 10.000 ha ya trasformadas (zonas de Arabayona y Riolobos-Villaflores) y cerca de 12.000 ha que presentaban viabilidad técnica en el plan hidrológico vigente y declaradas de interés general por la Ley 21/2025, de 1 de abril (Fase II). Es decir, un total de 22.000 ha.

En el tema importante DU-06, RELEVANCIA DEL REGADÍO Y SOSTENIBILIDAD, se indica que el sistema Tormes permitiría suministrar agua con garantía para un máximo de superficie en la ZR de La Armuña de 24.000 ha, solo 2.000 adicionales a las contempladas en el plan hidrológico vigente. Esto sería posible en un escenario sin recrecimiento y limitando las dotaciones en UDAs reguladas.

En el tema importante conjunto de los temas DU-06 y DU-07 se analiza en el escenario E, combinando la limitación de dotaciones con el aumento de regulación en el embalse de Santa Teresa. Con este escenario se podrían alcanzar un total de 34.000 ha en la ZR de La Armuña siempre que se produzca el recrecimiento del embalse de Santa Teresa, desde los 496 hm^3 actuales a 756 hm^3. Así podrían tener cabida las 24.000 ha a mayores de las 10.000 ha ya transformadas. En el Plan Hidrológico del cuarto ciclo se incluirá una medida para estudiar la viabilidad del recrecimiento del embalse de Santa Teresa, en el horizonte 2033, sin el cual el incremento superficie adicional a 12.000 ha en esta zona regable no puede plantearse.

No obstante, recordamos que las medidas de ampliación de regadío deben venir propuestas por las autoridades competentes y en el Plan vigente el MAPA, que es una de las autoridades competentes, no planteó ningún incremento de superficie en esta zona. Por tanto, se estará a lo que en fase de Plan Hidrológico establezcan los agentes.

- Valduerna (3.100 ha)

En el plan vigente, la 2000037 RP Río Duerna está modelada con 17,559 Hm^3 (2.627 ha y 6.677 m^3/ha) en todos los horizontes, incumpliendo las garantías de la IPH.

Por otro lado, para mejorar la atención de las demandas en esta zona, se modeló un posible trasvase del río Duerna en invierno para trasvasarlo al acuífero aluvial del propio río Duerna y del río Peces y así poder contar con más recursos en la época de riego. Para ello, en el plan vigente existe una reserva de 2,29 Hm^3.

En la actualidad los derechos al uso del agua en toda zona ascienden a 2.039 ha; sin embargo, la superficie declarada en PAC como regadío asciende a 3.286 ha, que son claramente superiores a los derechos existentes y a las posibilidades de suministro con garantía. Si las 3.100 ha son para ampliación de regadío a mayores de los existentes no sería viable. Si esa superficie es para consolidar el regadío existente, podría ser viable si se acomete alguna actuación como por ejemplo el trasvase de agua de invierno que se ha comentado antes.

- Arandilla (1.200 ha)

En el Plan vigente se incluye la DA 2000132 RP Río Arandilla con 14,671 Hm^3 de demanda en todos los horizontes (con 1.389 ha en los horizontes 2021 y 2027 y con 2.800 ha más para los horizontes 2033 y 2045). Se mantiene el volumen ajustando la dotación en los horizontes 2033 y 2045. Para la demanda de 14,671 Hm^3, se incumplen los criterios de garantía de la IPH en todos los horizontes. La asignación del plan vigente para el horizonte 2027 es de 7,873 Hm^3.

Por tanto, si las 1.200 ha son para ampliación de regadío a mayores de los existentes, no sería viable.

- Alaraz (315 ha)

En esta zona, el Plan vigente incluye la UDA 2000209 RP Río Gamo, con 1,664 Hm^3 de demanda anual (230 ha y dotación 6.819 m^3/ha) en todos los horizontes. Tiene déficit, pero cumple los criterios de garantía de la IPH.

Alaraz se encuentra en la comarca agraria de Peñaranda de Bracamonte, cuya dotación comarcal es de 4.917 m^3/ha. Con esta dotación, para una superficie de regadío de 315 ha tendríamos una demanda anual de 1,55 Hm^3.

Por tanto, la primera cuestión sería aclarar si las 315 ha que propone la alegante son todas nuevas o si parte de las mismas están consideradas en la UDA 2000209 RP Río Gamo.

- Lastras de Cuellar (6.000 ha)

En el PHD II se contempló la sustitución de superficie de regadío actualmente regada con agua subterránea de las MASubt de los Arenales y de Medina del Campo por agua superficial del embalse futuro de Lastras de Cuéllar con el objetivo de mejorar el estado cuantitativo de las MASubt. Es decir, no se contempló una ampliación de regadío en esta zona y tampoco se contempla en la actualidad. El embalse se descartó en el PHD III ciclo, tal y como se explica más adelante.

- Bombeo Araviana (400 ha.)

Con respecto a esta propuesta de ampliación de regadío, se debe tener en cuenta que en durante el presente ciclo de planificación se ha resuelto una modificación de características de la concesión de la Comunidad de Regantes La Asomadilla, de manera que actualmente tiene una superficie de riego autorizada de 497 ha y un volumen máximo anual concedido de 2.558.339,1 m^3/año (Inscripción en Registro de Aguas Sección: A, Número de inscripción: 26931; Referencia expediente Integra: MC-0043/2025).

Si la ampliación de regadío de 400 ha se propone adicionalmente a las 497 ha con derecho, se debe tener en cuenta que, en aplicación del *Artículo 33. Medidas para la protección del estado de las masas de agua subterránea* de la Normativa del Plan Hidrológico vigente, el término municipal de Hinojosa del Campo en la masa de agua subterránea Araviana ha sido declarado "Zona no autorizada" ya que el balance actualizado a nivel municipal es de 2,27 (superando el valor de 0,75 que se establece para la declaración de Zona no autorizada). Si el incremento se plantea en Tajahuerce como se ha manifestado en otra alegación (POS N024), se debe indicar que en aplicación de la Normativa que atiende a la zonificación de las masas de agua subterráneas, por lo que *un nuevo regadío de 300 ha en Tajahuerce con aguas subterráneas supondría incumplir los criterios del citado artículo. De cualquier modo, este análisis, a partir de la Normativa vigente, deberá valorarse en la redacción del nuevo Plan Hidrológico*.

Por otra parte, la reserva que se asignaba a la Unidad de Demanda agraria 2000152 - Bombeo Araviana, era de 3,25 hm^3/año, de los que se han otorgado en este ciclo de planificación 1,67 hm^3/año, por lo que solo quedarían disponibles 1,58 hm^3/año.

También se debe tener en cuenta que la masa de agua subterránea 400034 - Araviana está vinculada a un acuífero compartido con la Demarcación Hidrográfica del Ebro, según Resolución de 30 de marzo de 2026, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2026, por el que se establece el catálogo de acuíferos compartidos entre demarcaciones hidrográficas. Por tanto, incrementar las presiones por extracción en esta masa de agua podría afectar a la divisoria hidrogeológica entre ambas demarcaciones.

- Valdavia (600 ha.)

En 2022, en fase de redacción del vigente Plan Hidrológico, la alegante solicitó que la planificación considerase para los regadíos del río Valdavia una asignación de 16,3 Hm^3 de volumen máximo anual y un caudal máximo instantáneo de 2.200 l/s, con tres puntos de toma, el primero a la altura de Congosto de Valdavia, otro existente en la Puebla de Valdavia, y un tercero en el término municipal de Castrillo de Villavega, todos ellos en la provincia de Palencia, y para una superficie regable total de 3.760 has. Además, proponía 750 ha adicionales en los términos municipales de Villasarracino-Villaherreros con 750 ha adicionales. La conclusión del análisis de la propuesta fue que no era viable en términos de garantía de suministro tampoco con las presas de Villafría y las Cuevas en explotación.

La UDA 2000073 RP Río Valdavia está considerada en el horizonte 2021 del plan vigente con 824 ha y 6,141 Hm^3 (cumpliendo garantías IPH) y en el horizonte 2027 y siguientes con 2.595 ha y 14,137 Hm^3 (incumpliendo garantías IPH). Su asignación es de 12,644 Hm^3 y su reserva de 0 Hm^3 y en el análisis realizado actualmente no parece que el sistema permita disponer de un volumen adicional de agua para regadío con la mínima garantía que fija IPH. También genera duda la propuesta en el sentido de que desconocemos si las 600 ha de Valdavia se suman a las 2.595 ha o son parte de las que se incluyen en las 2.595 ha y que disponen de derechos al uso del agua.

- Desarrollo ZR MI Tera – (6.463 ha.)

La UDA 2000049 ZR MI Río Tera, está recogida en el Plan vigente, como una demanda futura en el escenario 2033, con 6.952 ha de superficie y 41,595 Hm^3 de volumen demandado. Se ha consultado a al MAPA y al MITERD sobre el interés y el impulso de esta zona regable que se declaró de interés general por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y ninguno ha manifestado interés por impulsarlo en este momento, señalando que no hay ninguna actuación prevista sobre este desarrollo en el presente ciclo de planificación. No obstante, en la elaboración del Programa de medidas del borrador de Plan Hidrológico de cuarto ciclo se volverá a consultar con estos departamentos y, en su caso, se valorará en previsión de que un futuro se decida promover esta actuación.

Alegación 7.

Ficha DU-7. Optimización recursos hídricos

Se solicita que el Plan Hidrológico del cuarto ciclo no limite su actuación a la alternativa 4, sino que incorpore de forma expresa y prioritaria las líneas de actuación contempladas en las alternativas 5 y 6, incluyendo la actualización y desarrollo del estudio sobre posibilidades de incremento de recursos disponibles como base técnica para la identificación, evaluación y programación de actuaciones de regulación.

Asimismo, se solicita que se establezca un calendario concreto de análisis y ejecución de estas actuaciones en los sistemas con mayor tensión cuantitativa, garantizando su contribución efectiva a la mejora de la garantía, la reducción del déficit estructural, la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad del regadío

Respuesta:

La conclusión de la ficha DU-07 es que Los posibles recrecimientos de embalses (alternativas 5 y 6) no suponen una mejora sustancial de la situación de la demarcación con las demandas de regadío actuales y que deben ser analizados en escenarios conjuntos de gestión de oferta y de demanda en los que se contemple incrementos de la demanda de regadío para analizar la eficacia potencial de estos recrecimientos. Estos escenarios conjuntos se analizan en la ficha común DU-06 – DU-07 y en la Tabla 54. "Análisis de alternativas propuesto" se escoge un escenario particularizado para cada sistema de explotación, que en algún caso es de incremento de recursos.

Sistema de explotación	Escenario considerado		
	Escenario escogido	Incrementos de regulación considerados	Nuevo regadío adicional al del Plan vigente
1. Támega - Manzanas	Escenario 0, sin nuevos regadíos ni incrementos de regulación	-	-
2. Tera		-	-
3. Órbigo		-	-
4. Esla	Escenario B, con limitaciones de dotaciones	Porma y Riaño en su horquilla inferior, supeditado a su viabilidad económica, social y ambiental	Sin nuevos regadíos
5. Carrión	Escenario B, con limitaciones de dotaciones	Camporredondo en su horquilla inferior, supeditado a su viabilidad económica, social y ambiental	Sin nuevos regadíos
6. Pisuerga	Escenario B, con limitaciones de dotaciones	Aguilar y Requejada en su horquilla inferior, supeditado a su viabilidad económica, social y ambiental	Sin nuevos regadíos
8. Alto Duero	Escenario 0, sin nuevos regadíos ni incrementos de regulación	-	-
9. Riaza – Duratón		-	-
10. Cega-Eresma-Adaja		-	-
11. Bajo Duero		-	-
12. Tormes	Escenario E. En caso de no contemplarse incremento de regadío, escenario 0 sin incremento regulación	Santa Teresa en su horquilla superior, supeditado a su viabilidad económica, social y ambiental	12.000 ha, la ZR Armuña
13. Águeda	Sin recrecimiento, no necesario para nuevo regadío	No necesario	2.500 ha

Tabla 54. Análisis de alternativas propuesto

En el Plan vigente hay una medida denominada 6405826 - Estudios de regulación de la cuenca del Duero, cuyo objetivo es realizar un estudio de viabilidad para el aumento de la capacidad de regulación de determinadas infraestructuras del estado en la cuenca del Duero. Se han realizado algunos análisis, pero no se ha desarrollado en su totalidad. En el futuro plan hidrológico se mantendrá esta medida sin menoscabo que en determinados sistemas de explotación se concrete con más detalle, a la vista de los criterios que finalmente se determinen para este tema importante.

Alegación 7 bis.

Ficha DU-7. Optimización recursos hídricos

Desde la Junta de Castilla y León consideramos prioritarias las siguientes actuaciones:

- *Las Cuezas.*
- *Recrecimiento del embalse de Santa Teresa.*

o Incremento de la regulación del río Órbigo.
o La presa de Lastras de Cuellar en el río Cega.
o Embalse en el río Duerna.
o Balsas de Tordesillas.
o Recrecimiento de los recursos en otras presas.
o Aralaz.
o Arandilla.
o Incremento de regulación de subsistema Tuerto.
o Regulación del Boedo.

Asimismo, se solicita que se contemple un plan para la modernización integral de los canales del estado, buscando la financiación adecuada para evitar repercutir en la medida de lo posible las inversiones en las tarifas de riego.[…]

Se considera imprescindible que el incremento de la capacidad de regulación pase a formar parte del núcleo de la estrategia del Plan y no permanezca como una opción secundaria o diferida.

Respuesta:

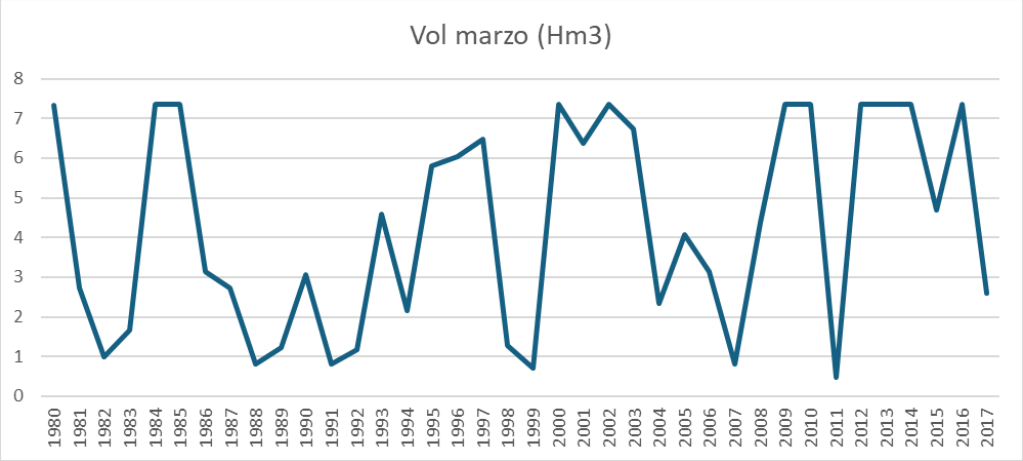
En cuanto a las actuaciones que se listan, "Las Cuezas" y el "incremento de regulación del río Órbigo" figuran en el Plan Vigente y se consideran en el EpTI en la alternativa seleccionada. Los recrecimientos de algunas presas (como la de Santa Teresa) se estudian en algunas alternativas del EpTI. Del resto de actuaciones, a falta de información más concreta, se indica que alguna de ellas se descartó en el plan vigente o anteriores y de otras no tenemos información que permita el análisis. De cara al futuro plan habría que contar con nueva información que deberá proceder de estudios específicos.

En cuanto a las actuaciones que la alegante considera prioritarias, se comenta lo siguiente:

- Las Cuezas: Están contempladas en el Plan Vigente con las actuaciones concretas de los embalses Cueza 1 y Cueza 2, previstas en el horizonte 2027. Se siguen considerando en la mayoría de las alternativas del EpTI. Se incluirán en el Plan Hidrológico del cuarto ciclo. Continúa su tramitación administrativa, ya demasiado larga, actualmente en fase de evaluación de impacto ambiental.
- Recrecimiento del embalse de Santa Teresa: Se considera dentro de algunas alternativas del EpTI, con un recrecimiento de 124,1 Hm^3 en la alternativa 5 y de 262,1 en la alternativa 6 (Ficha DU-07-OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA OFERTA DE RECURSOS HÍDRICOS – INFRAESTRUCTURAS). En el Plan Hidrológico del cuarto ciclo se incluirá una medida para estudiar la viabilidad de esta actuación, en el horizonte 2033.
- Incremento de la regulación del río Órbigo: Contemplada en el plan vigente con las actuaciones concretas de los embalses de la Rial y los Morales, previstos en el horizonte 2027. En el EpTI no se plantean estos embalses, sin embargo, se sigue manteniendo la necesidad de incrementar la regulación del río Órbigo, esta vez con las actuaciones concretas siguientes ya analizadas: recrecimiento del embalse de Selga de Ordás, construcción de la balsa lateral de la Milla y cambio de sistema de explotación de la ZR Manganeses, actualmente en el Órbigo y que pasaría al sistema Tera, con más disponibilidad de agua.

- La presa de Lastras de Cuellar en el río Cega: el embalse de Lastras de Cuéllar, figuraba en el PHD II y se planteó en el EpTI del tercer ciclo de planificación hidrológica, no fue asumido por el agente competente (DGA) como consecuencia de que supondría la modificación de características físicas de varias masas de agua del río Cega. Por tanto, se descartó en el PHD III.
- Embalse en el río Duerna: Este embalse se planteó en el plan hidrológico de 1998 pero se descartó posteriormente al no ser viable económica, social y ambientalmente. Por otro lado, hay que indicar que el río Duerna desde su nacimiento hasta la localidad de Priaranza de la Valduerna está catalogada como reserva natural fluvial (Alto Duerna, código ES020RNF032) que puede condicionar las actuaciones a realizar en el río. Por todo ello, estimamos que la mejor solución para garantizar el suministro de agua es la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas mediante sistemas de recargas invernales; de hecho, el Plan vigente contempla una reserva para este fin. En todo caso es necesario una organización interna de todos los usuarios para poder acometer cualquier mejora.
- Balsas de Tordesillas: es una actuación que en principio es viable y consistiría en derivar agua del Duero en invierno para llenar una serie de balsas laterales, en la margen derecha, para sustituir los regadíos subterráneos de la MASubt Tordesillas-Toro, que se encuentra en mal estado cuantitativo, y con ello contribuir a recuperar los niveles piezométricos y reducir la intrusión salina. Se estima que para recuperar los balances compatibles con el buen estado cuantitativo serían necesarios unos 25 Hm^3.
- Recrecimiento de los recursos en otras presas: Habría que estudiar la viabilidad de estos recrecimientos. Para ello en el plan existe una medida general para nuevas regulaciones donde se podría encuadrar estas actuaciones.
- Aralaz: En el plan hidrológico del segundo ciclo, se incluyeron los embalses de Margañán (18 Hm^3) y de Gamo (12 Hm^3) en el horizonte 2027. No se contemplaron en el plan hidrológico del tercer ciclo. Se ha hecho un tanteo para una nueva demanda anual de 1,55 Hm^3 que se atendería desde una balsa lateral que se llenaría con agua de invierno (noviembre a marzo) con las aportaciones naturales de la masa de agua del río Gamo 1. A falta de mayor definición, los resultados preliminares muestran que podría ser viable esta nueva demanda, pero la balsa tendría que tener una capacidad mayor a la demanda, en torno a 2,5 Hm^3 para poder cumplir los criterios de garantía.
- Arandilla: En el Plan Vigente no se contempla regulación. En el plan de segundo ciclo se contemplaba regulación mediante el embalse de Dor, previsto en los horizontes 2027 y 2033, con un volumen de 7,35 Hm^3 para atender una demanda total de 24,37 Hm^3. Incumplía claramente los criterios de la IPH, con un déficit muy elevado al no tener recurso natural suficiente. Por ello se descartó. No obstante, se ha hecho un tanteo volviendo a considerar el embalse de Dor, para una demanda de 14,671 Hm^3 (horizonte 2039, plan vigente) y el resultado es un incumplimiento claro de los criterios de garantía de la IPH debido a que los recursos naturales son insuficientes para ser regulados por el embalse (27 años de los 38 simulados, el embalse no se llena). Con estos datos, no parece viable la regulación del Arandilla

MáxDéfA (%)	86.67
MáxDéf2A (%)	159.79
MáxDéf10A (%)	450.02



- Incremento de regulación de subsistema Tuerto: actualmente se prevé aumentar la regulación de este subsistema con la incorporación del embalse de Villagatón, cuando se resuelvan los problemas administrativos y se pueda poner en explotación el embalse. Aparte de lo anterior, no tenemos claro que sea viable un incremento mayor de regulación del Tuerto con otras actuaciones. Habría que realizar un estudio de viabilidad.
- Regulación del Boedo: En el año 2022, tras consulta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, sobre la posibilidad de modernizar 400 Ha con balsas laterales alimentadas en invierno, se concluyó que era viable en términos de garantía de suministro con una balsa de 3 Hm^3 de capacidad para una demanda de 1,6 Hm^3. Por otro lado, con respecto al embalse del Boedo (con un volumen de 15,1 Hm^3), se descartó el mismo tras analizarlo en conjunto con un nuevo desarrollo de regadío que aumentaba la demanda a 14,327 Hm^3 y concluir que incumplía claramente los criterios de garantía de la IPH (el embalse se llenaba solamente 4 años de una serie de 38). En el plan vigente se mantiene una demanda de 6,162 Hm^3, resultado de considerar 3.135 Ha y una dotación a la baja de 1.995 m^3/Ha. Los criterios de garantía fallan también en todos los horizontes. Se asigna un recurso de 2,6 Hm^3, apenas un 41% de la demanda. El citado embalse del río Boedo se ha modelado de nuevo tras recibir nueva información por parte de la JCyL sobre la capacidad y la ubicación del posible embalse. En concreto se ha modelado un embalse en el río Boedo con tres volúmenes distintos (9,3; 14,5 y 20 Hm^3) para atender una demanda de 6,2 Hm^3. En los tres casos, la demanda tiene déficit muy elevados, incumpliendo los tres criterios de garantía de la IPH. Se muestran los resultados en la tabla siguiente.

Vol embalse (Hm^3)	9,3	14,5	20
Dem:6,2 Hm^3	**A**	**B**	**C**
DEF MEDIO (Hm^3)	1,24	0,77	0,64
DEF 1 AÑO (%)	99,95	99,95	99,95
DEF 2 AÑO (%)	198,98	179,8	174,39
DEF 10 AÑO (%)	375,25	311,37	275,35

Según nuestros datos del inventario de recursos, el río Boedo tiene una hidrología muy irregular con años muy secos en los que apenas circula agua. En la serie entre el 80/81 y 2016/2017, aunque el promedio anual es de unos 7 Hm^3, hay 10 años con una aportación menor a 2 Hm^3 (de los que 6 son de menos de 1 Hm^3). Esto hace que los embalses no sean viables al no almacenar un volumen mínimo para atender la demanda en varios años de la serie modelada.

También se ha modelado una demanda menor, de 2,9 Hm^3 (cercana al recurso asignado para la UDA, que es de 2,6 Hm^3). Para el modelo C, el incumplimiento es por muy poco por lo que podríamos decir que para un embalse de 20 Hm^3 se podría atender una demanda anual de 2,9 Hm^3. Pero no parece razonable construir un embalse con más de 6 veces la capacidad de la demanda a satisfacer.

Habitualmente se realizan actuaciones de mejora y modernización de los grandes canales del Estado. De hecho, en el plan hidrológico vigente hay nueve medidas para la mejora de canales con una inversión de unos 70 millones de euros que está en ejecución. Sin embargo, no contribuye a estabilizar esta acción el hecho de que determinadas modernizaciones de regadío se planteen dejando sin servicio estos canales. Este hecho, junto a la realidad de que las mejoras en los canales requieren recuperación de costes a través de la tarifa de utilización del agua, hace que los usuarios sean reticentes a aceptar mejoras que, sin duda son necesarias. Por otra parte, no es posible en el régimen económico financiero del agua vigente, llevar a cabo la propuesta que se apunta en la alegación de “evitar repercutir en la medida de lo posibles las inversiones en las tarifas de riego”. No sabemos si eso es posible.

No creemos que el incremento de la capacidad de regulación pueda formar parte del núcleo de la estrategia del Plan dado que, como se ha dicho anteriormente, su objetivo es conseguir el buen estado o buen potencial de las masas de agua y a la vez satisfacer las demandas y en la Ficha de este tema importante que esta estrategia no tiene el mejor ratio coste-beneficio. Para ello habrá que plantear medidas tanto de gestión de oferta como de demanda, no solamente de aumento de oferta que, además, aumentan las presiones sobre las masas de agua o incluso modifican sus características físicas.

Alegación 8.

La ficha DU-09 identifica correctamente la insuficiente ejecución del Programa de Medidas como uno de los principales problemas de la planificación hidrológica, asociándolo a deficiencias en la coordinación interadministrativa y a la falta de alineación entre las distintas autoridades competentes.

No obstante, el enfoque propuesto se basa fundamentalmente en el refuerzo de mecanismos de coordinación (CAC), sin incorporar instrumentos efectivos que garanticen una corresponsabilidad real y equilibrada entre todas las administraciones implicadas. […] la baja ejecución del Programa de Medidas no responde exclusivamente a cuestiones presupuestarias, sino también a limitaciones estructurales en la tramitación administrativa, incluyendo retrasos en procedimientos concesionales, autorizaciones, evaluación ambiental y desarrollo de infraestructuras, que condicionan de forma determinante la viabilidad real de las actuaciones previstas.

Se solicita que el Plan Hidrológico del cuarto ciclo incorpore un enfoque de corresponsabilidad administrativa efectiva, que incluya:

- *La vinculación del Programa de Medidas a compromisos presupuestarios verificables por parte de todas las administraciones competentes, no solo a nivel autonómico.*
- *El establecimiento de calendarios de ejecución realistas y obligatorios para las actuaciones incluidas en el Programa de Medidas.*
- *La incorporación de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que identifiquen el grado de cumplimiento por administración.*
- *La simplificación y agilización de los procedimientos administrativos asociados (concesiones, autorizaciones y evaluación ambiental), como condición necesaria para la ejecución efectiva de las medidas.*
- *Incorporar a la dotación incluida en el Convenio de Albufeira, los coeficientes correctores que correspondan por la disminución de aportaciones y efecto del cambio climático, en concordancia con el criterio de las fichas del EPTI.*

Respuesta:

El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento.

Una vez definido este Programa de medidas, su validación con el correspondiente compromiso presupuestario o financiero se debe hacer en el Comité de Autoridades Competentes en el que están representadas todas las administraciones competentes en una persona con alto rango administrativo (consejero o director general), dado que va a asumir responsabilidades administrativas y presupuestarias. Estas autoridades deben dar la conformidad al programa de medidas para lo cual, cada una internamente, habrá debatido la capacidad y conveniencia de asumir cada medida. Por tanto, los mecanismos formales para asegurar la ejecución del Programa de medidas existen y desde el ámbito de la planificación hidrológica sólo se puede recalcar que estos mecanismos no deben ser simplemente formales sino también reales. La propia Ficha describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social. No obstante, en atención a la alegación se incluye una nueva decisión sobre la rendición de cuentas.

Los mecanismos de rendición de cuentas están formalmente delimitados en el ámbito administrativo, por ejemplo, con la regulación que se incluye en los artículos 87 y 88 del RPH. Pero este ámbito es meramente administrativo y no político, que tiene sus propios itinerarios.

Sin duda compartimos con el alegante la necesidad de reducir los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos que afectan a los ciudadanos. Pero esta celeridad debe hacerse compatible con el rigor y el cumplimiento de las normas establecidas. También este organismo de cuenca desearía procedimientos más sencillos y ágiles para poder dar respuesta a las peticiones y es algo que pone de manifiesto en la fase de preparación de las nuevas normas de tramitación de expedientes de autorización y concesión; pero la realidad es que cada cambio normativo hace más compleja la tramitación al tener un carácter enormemente garantista, más abierto a la consulta pública y ligado a otros procedimiento (como la evaluación ambiental) que más que agilizar complica la tramitación, aumenta los tiempos de respuesta por mucho que el organismo de cuenca trate de acortarlos. De cualquier modo, las normas reglamentarias vigentes no pueden modificarse por un plan hidrológico y mucho menos por un EpTI.

Como se indica en la Ficha DU-09, entre las decisiones a tomar en relación con el Convenio de Albufeira, se encuentra *analizar las divergencias entre las planificaciones española y portuguesa para ofrecer soluciones conjuntas a las masas de agua compartidas y los indicadores de sequía y escasez de ambos países para tratar de integrar ambos diagnósticos en uno*. Esta última decisión viene avalada por los memoranda de entendimiento entre España y Portugal de las cumbres hispano-lusa de 2023, 2024 y 2026, en las que ya se está trabajando por ambos países.

Alegación 9.

Ficha DU-10. Nuevos usos

Se solicita que el desarrollo de la ficha DU-10 incorpore:

- *Un análisis cuantitativo del impacto de los nuevos usos sobre las garantías por sistema de explotación, incluyendo escenarios de sequía y cambio climático.*
- *La condición expresa de que cualquier reserva para estos usos quede supeditada a la existencia de recursos disponibles y a la no afección a los usos existentes.*
- *La exclusión o limitación de estos usos en sistemas con estrés hídrico significativo en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo.*
- *En cualquier caso, se mantenga la prevalencia de uso del agua establecido por la legislación de aguas.*

Este enfoque permitiría compatibilizar el desarrollo de las nuevas industrias energéticas con la sostenibilidad del recurso y la seguridad de los usos consolidados, en coherencia con los principios de la planificación hidrológica.

Respuesta:

La falta de planificación estratégica sectorial para el despliegue en el territorio de las energías renovables y sus sistemas de almacenamiento hace que el EpTI no pueda cuantificar la demanda futura, ya que no se pueden trasladar los objetivos generales de España al ámbito geográfico de la demarcación hidrográfica del Duero. El EpTI puede identificar la demanda solicitada en los últimos

años para estos nuevos usos, como de hecho hace, pero desconoce la futura. Probablemente con los nuevos usos industriales ya concedidos en los últimos años y los que están en trámite, el ámbito hidrográfico del Duero ya ha contribuido suficiente a eso objetivos generales a nivel de país.

Por tanto, animamos al alegante a que, en fase de redacción de proyecto del plan hidrológico, en colaboración con las administraciones competentes, aporte información que permita cuantificar con detalle estos nuevos usos del agua en la demarcación del Duero.

El EpTI es bastante explícito en esta materia cuando señala en la Ficha DU-10 que *en la fase de redacción del plan hidrológico se identificarán las reservas futuras por sistema de explotación para usos destinados a la producción de hidrógeno verde en la demarcación, centros de datos y otras nuevas demandas energéticas teniendo en cuenta también los efectos derivados del cambio climático sobre la asignación de recursos y las garantías y la implantación de caudales ecológicos, ya que junto con este tema importante se trata de tres temas complementarios.*

La exclusión o limitación de estos usos en sistemas con estrés hídrico significativo en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo se realiza de facto en la tramitación de las posibles concesiones de uso que sean solicitadas para estos proyectos, ya que para ellos se emite un informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico vigente, en el que se analizan el estado de las masas de agua, su índice de explotación, su efecto sobre las garantías a otros usos con derechos, balance municipal, etc. pormenorizado para cada caso.

En cualquier caso, el orden de prevalencia de usos establecido en el TRLA será trasladado al Plan Hidrológico de cuarto ciclo.

4.34. Escrito de observaciones Nº 042

Presentado por: David Domingo Martínez.

En nombre propio

Alegación 1.

Personación de David Domingo Martínez, en nombre propio y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido al Sr. Domingo Martínez, en su propio nombre, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.35. Escrito de observaciones Nº 043

Presentado por: Mónica Peñas López.

En nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la rama agrícola de Castilla-Duero

Alegación 1.

DU-01.- CONTAMINACIÓN DIFUSA

Mientras no exista una delimitación técnica precisa de las fuentes contaminantes, no parece adecuado adoptar restricciones generalizadas dirigidas exclusivamente al sector agrario y ganadero.

Debe tenerse en consideración que parte de la evolución observada en el estado de determinadas masas de agua puede venir condicionada por cambios metodológicos, intensificación de los sistemas de seguimiento, mejora de límites analíticos o incorporación de nuevas sustancias objeto de control […], evitando asociar automáticamente determinados empeoramientos aparentes a un deterioro efectivo de origen sectorial.

En aquellos supuestos en los que se planteen reducciones obligatorias de aportes nitrogenados, debería incorporarse una evaluación previa suficientemente motivada del impacto económico, productivo, territorial y social […]

Respuesta:

El trabajo "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación", como se indica en la Ficha DU-01, se ha llevado a cabo por el MITERD en 2023-2024.

El objetivo es determinar las relaciones moleculares de $^{15}N/^{14}N$ y $^{18}O/^{16}O$ en el nitrato disuelto en aguas superficiales y subterráneas de toda España que permita conocer, la aplicación de metodologías normalizadas de vanguardia, como la conversión química de nitrato y nitrito a óxido nitroso (N_2O), el origen del nitrógeno identificado en las muestras de la red oficial de calidad de las aguas.

En ese trabajo, sobre 79 puntos de muestreo de aguas superficiales de la demarcación hidrográfica, atribuyen el 61% de la contaminación por nitratos a origen agrario (principalmente fertilizantes inorgánicos) y el 25% a mezclas con aguas residuales urbanas, el 14% restante de origen indeterminado. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, sobre 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, se muestra un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería. A nuestro juicio este trabajo, sin menoscabo de que pueda ampliarse a nuevas zonas y nuevas campañas y las limitaciones propias de la materia, muestra con suficiente certidumbre que la mayoría de los nitratos presentes en el agua tiene un origen agrario.

Como se indica en la Ficha, las medidas van dirigidas a reducir la presión por contaminación difusa que se ha identificado como excedente de sustancias que, al no ser asimiladas por los cultivos, quedan libres y van al agua. Las medidas no pretenden que no se apliquen fertilizantes a los cultivos, sino que se apliquen los necesarios para su desarrollo, pero no más. Esto contribuye también a la viabilidad de las explotaciones. La alegante ha perdido una buena oportunidad para aportar documentos técnicos que ofrezcan la información que solicita, cómo afecta a la rentabilidad de las explotaciones agrarias hacer el mejor uso posible de los fertilizantes i fitosanitarios, algo que debería conocer por su propia actividad profesional diaria un colectivo como el que presenta la alegación. Las medidas que se proponen en la Ficha, al proponer aportar las necesidades de los cultivos no deberían tener impacto en las producciones.

Alegación 2.

DU-01.- CONTAMINACIÓN DIFUSA

Se considera más apropiado utilizar el concepto de "subproductos" o "recursos ganaderos" frente al término "residuos ganaderos", dada la creciente valorización agronómica y energética de estos materiales dentro de los modelos de la economía circular.

Respuesta:

En épocas anteriores, estos residuos se denominaban comúnmente estiércoles. El residuo ganadero se almacenaba y se sometía a un proceso de maduración por fermentación y después se aplicaba a los suelos de forma sólida, sin apenas generar lixiviados. Es a partir del empleo masivo y generalizado de abonos inorgánicos y purines cuando comienza a producirse la incorporación al suelo y después a las aguas los excedentes que se generan.

Se considera que, para que se convierta en un recurso como tal, el residuo ganadero debe de ser tratado y procesado adecuadamente. En la actualidad la gran mayoría de los residuos ganaderos se aplican en estado líquido (purines). Si la tendencia mencionada por el alegante se convirtiera en algo obligatorio, se contribuiría de forma más eficaz a que dichos residuos pudieran considerarse, efectivamente, un "recurso", algo que, al menos por el momento, no se observa.

Alegación 3.

DU-01.- CONTAMINACIÓN DIFUSA

Cualquier estrategia de reducción de productos fitosanitarios y biocidas debe acompasarse necesariamente con la disponibilidad real de alternativas eficaces y técnicamente viables. Hasta que dichas soluciones existan de forma generalizada, parece razonable priorizar criterios de uso racional y sostenible frente a prohibiciones indiscriminadas.

Respuesta:

La propuesta del alegante supone asumir como algo normal el deterioro de las masas de agua. Se recuerda que, de acuerdo con el artículo 4 (6) de la DMA y el 38 del RPH 1, se podrá admitir el deterioro temporal del estado de las masas de agua si se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas, o al resultado de circunstancias derivadas de accidentes que tampoco hayan

podido preverse razonablemente. Para admitir dicho deterioro deberán cumplirse todas las condiciones siguientes: que se adopten todas las medidas factibles para impedir que siga deteriorándose el estado y para no poner en peligro el logro de los objetivos medioambientales en otras masas de agua no afectadas por esas circunstancias; que en el plan hidrológico se especifiquen las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como racionalmente imprevistas o excepcionales, incluyendo la adopción de los indicadores adecuados; que las medidas que deban adoptarse en dichas circunstancias excepcionales se incluyan en el programa de medidas y no pongan en peligro la recuperación de la calidad de la masa de agua una vez que hayan cesado las circunstancias; que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales o que no hayan podido preverse razonablemente se revisen anualmente y se adopten, tan pronto como sea razonablemente posible, todas las medidas factibles para devolver la masa de agua a su estado anterior a los efectos de dichas circunstancias, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional undécima 1.b) del texto refundido de la Ley de Aguas.

Hay que aclarar que el Organismo de Cuenca como tal, únicamente se limita a gestionar y controlar las redes del control del estado químico de las aguas, e informar de los resultados y de cómo evoluciona el estado químico; las autorizaciones, prohibiciones y restricciones del uso de ciertos productos con sustancias en ocasiones nocivas para el ser humano, las toman comités de expertos pertenecientes a otras administraciones de rango superior. Las reflexiones del EpTI y la participación pública en la discusión de los temas importantes generan nuevas vías de trabajo, como puede ser el desarrollo de esas alternativas. Si hasta ahora no existen quizá a sido por la complacencia de técnicos y sector en no identificar un problema que ahora aflora, quizá demasiado tarde para la acción.

Alegación 4.

Respecto al tema importante DU-01 debe señalarse que la acumulación normativa existente en los distintos niveles regulatorios —europeo, estatal y autonómico— genera importantes dificultades interpretativas y de aplicación práctica para agricultores y ganaderos, por lo que resulta conveniente reforzar mecanismos de simplificación, acompañamiento técnico y coordinación regulatoria para facilitar el cumplimiento efectivo de las obligaciones existentes.

Respuesta:

No podemos compartir el enfoque del alegante. Consideramos que la profusión de normativas sobre el mismo problema muestra dos cosas: que el problema es relevante y de difícil solución y que no hemos conseguido resolverlo pese a ir regulando cada vez más los drivers de las presiones. Las medidas parecen claras, pero si hay resistencia a aplicarlas es por el impacto que generan en la actividad económica y en ese aspecto, tanto administraciones como usuarios, somos copartícipes de que la solución tarde en llegar.

Sí estamos de acuerdo en la necesidad de mantener la monitorización y aumentarla. Pero a nuestro juicio la monitorización actual ofrece un diagnóstico suficientemente claro para poder identificar que el problema de la contaminación difusa persiste, con el tiempo no va a menos y que las medidas que nos resistimos a aplicar hemos de abordarlas en algún momento. Como pone de manifiesto la Ficha DU-01, el asesoramiento y la formación son clave en la solución del problema, pero en un contexto de baja rentabilidad de agricultura y la ganadería, si no hay un aliciente para asumir este asesoramiento y el mismo supone un coste adicional a la explotación, no será una medida eficaz.

Alegación 5.

DU-01.- CONTAMINACIÓN DIFUSA

Las medidas futuras deberían orientarse preferentemente hacia:

- *el refuerzo de los sistemas de monitorización y control;*
- *la implantación de tecnologías de precisión;*
- *el asesoramiento técnico especializado;*
- *y el fomento voluntario de buenas prácticas mediante incentivos eficaces.*
- *la digitalización y trazabilidad del uso de nutrientes;*
- *la mejora de los sistemas de monitorización territorializada;*
- *la evaluación diferenciada según tipologías de cultivo, sistemas de riego*
- *y eficiencia real de utilización del recurso.*

Respuesta:

Todas ellas figuran en la Ficha DU-01 sin duda porque no se han tomado anteriormente, unas veces por falta de tecnología adecuada y otras por falta de convicción. Hoy día el sector agrario dispone cada vez de más herramientas tecnológicas que posibilitan poner en práctica lo que se apunta en la alegación, por supuesto que es uno de los caminos a seguir. Pese a ello llama la atención que, por ejemplo, no se hayan implantado la obligatoriedad de los planes de abonado por explotación supervisados por técnicos hasta 2026, pese a que el Real Decreto Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, de nutrición sostenible de suelos es de hace cuatro años. Por lo tanto

Alegación 6.

Respecto al tema importante DU-01 no se considera técnicamente adecuado establecer limitaciones homogéneas en zonas vulnerables sin contemplar diferencias objetivas derivadas del sistema de cultivo, tecnología de riego, eficiencia hídrica, balances de nutrientes y características territoriales.

Respuesta:

El enfoque de la alegación no se centra en el tema importante del EpTI sino en lo que el colectivo al que representa considera importante; el EpTI considera importante la contaminación de las aguas; el alegante considera importante la actividad agrícola y ganadera. Esta diferencia de enfoque hace que el segundo no valore adecuadamente el problema y se centre en las limitaciones a determinadas actividades.

A las zonas vulnerables le es de aplicación los Programas de actuación que delimita la administración autonómica. La declaración de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de fuentes agrarias en Castilla y León y la aprobación del Programa de actuación fue realizada por Decreto 5/2020, de 25 de junio. Este Decreto examina el número de zonas vulnerables establecidas por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. Uno de los principales cambios que incluye el decreto de 2020 es el incremento del número de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, pasando de 10 a 21 y de 2.295 km2 de territorio declarado a 13.521 km2 en el ámbito de la cuenca hidrográfica del Duero, no habiendo ninguna zona vulnerable declarada en 2009 que no se incluya en la nueva declaración de 2020.

El citado Decreto emitió teniendo en cuenta la información existente en relación con la cuestión de fondo (la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias) y respetando los principios de eficacia, de eficiencia, de proporcionalidad y de necesidad. Parece recordar que el legislador autonómico señala que es necesario para la designación de las zonas vulnerables de la Comunidad de Castilla y León, revisar las zonas ya declaradas como vulnerables en el Decreto de 2009, ya que nuevas realidades científicas y análisis de la contaminación de las aguas así lo determinan. Es decir, justifica la nueva declaración de zonas vulnerables, más amplia que la existente desde 2009, constata una realidad: a pesar de los esfuerzos realizados, los resultados obtenidos mediante las normas vigentes no han alcanzado los fines perseguidos y la contaminación de nitratos de las aguas no va a menos sino va a más.

Esta situación de riesgo y de impacto comprobado de contaminación se debe a las actividades que se desarrollan sobre las cuencas vertientes de las masas de agua. La actividad agrícola y ganadera, junto a otras, pero en mayor intensidad como pone de manifiesto el estudio del origen del nitrógeno en aguas con técnicas isotópicas (DGA, 2024) suponen presiones para las masas de agua subterránea y superficial cuando los residuos de las actividades son aplicados al suelo como fertilizantes o por aplicación directa en la agricultura. A mayor número de toneladas de sustancias nitrogenadas aplicadas al suelo, el riesgo de contaminación por nitratos aumenta y no solo el riesgo sino también el impacto, es decir, el registro con mediciones reales de aguas contaminadas por esas sustancias. En esta contaminación hay un factor aleatorio que depende, no de la voluntad del que aplica las sustancias al suelo, sino de condiciones que no puede prever: la precipitación, una vez aplicado el nitrógeno, el estado vegetativo del cultivo cuando se aplican las sustancias, las condiciones edafológicas de los suelos, la pendiente, las escorrentías de sustancias a los cauces cuando se aplican en zona de policía de cauces o en zona de servidumbre, la propia maquinaria de aplicación, … Ese factor de aleatoriedad es necesario tenerlo en cuenta al analizar actividades que sean susceptibles de contaminar, lo que se incluiría en el concepto de riesgo.

Evidentemente no toda la cuenca está afectada de igual forma. En las zonas vulnerables designadas hay problemas comprobados en la actualidad y que han llevado a la autoridad competente a designarlas como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de fuentes agropecuarias. En estas zonas ya existe un problema contrastado y la medida más razonable es no incrementar la presión existente, para lo cual entendemos razonable limitar nuevas actividades que supongan un incremento de la presión. Sin duda la coherencia de la planificación hidrológica con el diagnóstico hubiera sido suspender todas las actividades que suponen un incremento de la contaminación, lo que afectaría a varias administraciones, a actividades no sujetas a autorización, a posible necesidad de indemnización a los derechos existentes, o bastantes procedimientos litigiosos. Dada la dificultad que este itinerario supondría para los usuarios y la administración, se ha enfocado el problema en el marco de las competencias del organismo de cuenca con una propuesta de mantener estas limitaciones en estas zonas, en la línea del artículo 35.2 de la Normativa del Plan Hidrológico vigente, centrado en evitar el incremento de la presión ya existente.

Alegación 7.

DU-02.- USO SOTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

La sostenibilidad de los recursos subterráneos debe fundamentarse en una gestión eficiente y técnicamente contrastada, no necesariamente en la reducción indiscriminada de su utilización.

Medidas futuras de restricción, limitación o adaptación concesional deberían sustentarse en diagnósticos suficientemente robustos y territorializados, basados en series temporales representativas, balances hídricos actualizados, consumos efectivos, evolución del estado cuantitativo y químico de las masas y escenarios suficientemente motivados desde el punto de vista hidrogeológico.

Debe avanzarse hacia sistemas de control más precisos sobre consumos efectivos y volúmenes realmente extraídos, incorporando igualmente los retornos de riego a los balances hídricos.

Respuesta:

No entendemos qué quiere decir la alegante por gestión eficiente y técnicamente contrastada. De la lectura de la sugerencia, da la impresión de que las medidas que figuran en la Ficha DU-02 del EpTI son caprichosas y carentes de sentido. Recordamos, como indica la propia Ficha, que las cuatro masas agua subterránea de la zona central del Duero presentan importantes descensos piezométricos y elevados niveles de contaminación difusa por nutrientes. Las extracciones en los últimos cuarenta años para usos agrícola y ganadero, fundamentalmente, han propiciado una importante actividad socioeconómica en estas zonas, ubicándose en ellas los regadíos más eficientes de la cuenca, pero han hecho que los niveles descendieran de forma muy importante, con afecciones sobre algunas masas de agua superficial, como el descenso de caudales en los ríos o incluso la total desecación de los mismos en sus tramos finales como ocurre en los ríos Trabancos, Zapardiel o Arevalillo, entre otros.

La estimación global de extracciones ronda los 644 hm^3/año. Los mayores volúmenes de extracción se ubican en las masas de “Los Arenales-Tierras de Medina y La Moraña” (400047), con un volumen extraído de 193,4 hm^3/año; “Tordesillas-Toro” (400038), con un volumen extraído de 102,5 hm^3/año; “Los Arenales-Tierra del Vino” (400048), con un volumen extraído de 57,8 hm^3/año; y “Los Arenales-Tierra de Pinares” (400045), con 54,1 hm^3/año de agua extraída. Estas son las cuatro masas de agua evaluadas en mal estado cuantitativo en el Plan vigente y corroboradas en el informe de seguimiento de 2024.

Una masa de agua subterránea se califica en buen estado cuantitativo si las extracciones a largo plazo no superan el recurso disponible (valorado a través del índice de explotación, IE); si el nivel piezométrico y el flujo permite que las aguas superficiales y los ecosistemas asociados cumplan los objetivos ambientales; y si la dirección del flujo subterráneo de las aguas derivada del cambio de nivel no provoca salinización u otras intrusiones.

En las cuatro masas anteriores se observan extracciones que superan el recurso disponible, una vez descontadas las restricciones ambientales, y afección a las aguas superficiales y los ecosistemas dependiente. Por ejemplo, en la masa de agua Los Arenales-Tierras de Medina y La Moraña las extracciones superar los recursos renovables en un 94% de los mismos, es decir, se extrae casi el doble de la capacidad de renovación; o en la masa de agua Los Arenales-Tierra del Vino, se extrae el 130% de los recursos renovables. Todo ello tiene un efecto directo en la piezometría registrada y, sobre todo,

en el bolsillo de los agricultores que ven como año tras año los bombeos son cada vez desde mayor profundidad.

Una de las medidas del Plan Hidrológico dirigidas a la recuperación de las masas de agua en mal estado cuantitativo es el fomento de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas (CUAS). Estas entidades son corporaciones de derecho público formadas por usuarios de una misma masa de agua subterránea que buscan hacer una gestión sostenible y organizada del recurso hídrico, garantizando su uso equitativo y evitando la sobreexplotación.

Desde el Organismo de cuenca se ha fomentado y apoyado su constitución de CUAS. Actualmente, la cuenca del Duero cuenta con unas 50 CUAS constituidas, de las cuales 48 lo han hecho después de 2022. En total abarcan una superficie potencial de riego cercana a las 100.000 hectáreas, mayoritariamente ubicadas en masas en mal estado cuantitativo

Estas agrupaciones, además de una mejor gestión y uso del agua, permiten concienciar a los usuarios sobre la importancia de la gestión correcta del agua, haciéndoles copartícipes y corresponsables de esa gestión junto al Organismo de cuenca.

Por tanto, rechazamos la alegación ya que el diagnóstico y las medidas se basan en datos reales de las redes de piezometría y en los criterios vigentes de evaluación del estado cuantitativo.

Alegación 8.

DU-02.- USO SOTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se considera especialmente relevante impulsar medidas de recarga gestionada de acuíferos mediante utilización de excedentes superficiales en épocas invernales, así como favorecer la sustitución parcial de recursos subterráneos por aguas superficiales allí donde resulte técnicamente viable como instrumento de adaptación al cambio climático, mejora de resiliencia hídrica y aprovechamiento eficiente de excedentes estacionales.

Respuesta:

La recarga artificial de acuíferos es una práctica que se lleva haciendo es esta cuenca desde hace más de 20 años, las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 la Confederación encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos, teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, como aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, nos parece una alternativa a tener en cuenta para el fin que propone el alegante, por lo que ya se contempla como medida en la alternativa 3 del EpTI, a la espera de que la autoridad competente pueda validarla y asumirla teniendo en cuenta todos los condicionantes: ubicación de estas infraestructuras, su proximidad a cauces con

recurso suficiente, los costes de las obras, su financiación, y los costes de explotación y energía, pues la mayoría han de llenarse con bombeos,…; en definitiva muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

Alegación 9.

DU-02.- USO SOTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

No se considera técnicamente justificada la incorporación automática de figuras de ajuste adicionales —tasas, peajes o gravámenes— asociadas a modificaciones concesionales o regularización de derechos, dado que dichas medidas no implican necesariamente una mejora ambiental ni contribuyen a una utilización más racional del recurso.

Se considera prioritario dotar de seguridad jurídica a los titulares de aprovechamientos inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas, clarificando la continuidad de dichos derechos y evitando incertidumbres administrativas innecesarias, reforzando previsibilidad regulatoria, claridad procedimental y seguridad administrativa suficiente para favorecer inversiones de modernización y adaptación tecnológica.

Respuesta:

Los derechos inscritos en el Catálogo de Aguas y en la Sección C del Registro de Aguas tienen su origen en el régimen transitorio establecido por la Ley de Aguas de 1985, que transformó el sistema jurídico tradicional de propiedad privada del agua en un régimen de dominio público hidráulico. Estos derechos permiten el mantenimiento de usos privados preexistentes, fundamentalmente referidos a aprovechamientos de aguas subterráneas, bajo determinadas condiciones de reconocimiento administrativo.

En las últimas décadas, la política hidráulica en España ha evolucionado hacia un modelo caracterizado por limitar progresivamente los derechos de carácter privado, Integrar todos los aprovechamientos en el sistema concesional, e Incrementar el control administrativo sobre las extracciones, siempre bajo el prisma de lo que prioriza la Directiva Marco del Agua en sus objetivos ambientales como es el alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de agua y, La reducción de la sobreexplotación de acuífero. En conclusión, que el futuro de los derechos de aguas subterráneas inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas y la sección C del Registro de Aguas se orienta hacia una progresiva convergencia con el régimen concesional, en línea con la evolución del derecho de aguas y las exigencias derivadas de la normativa europea. Es posible que este proceso implique un refuerzo del control administrativo, una mayor vinculación a los objetivos ambientales y, previsiblemente, una limitación efectiva de los aprovechamientos en aquellos casos en que sean incompatibles con el buen estado de las masas de agua.

Respecto a las novaciones y tratamiento restrictivo de aprovechamientos de la sección C y del Catálogo, se indica que el EpTI no dice nada nuevo, que por otra parte tampoco puede decir, que no esté regulado en las DT 2ª, 3ª y 4ª del TRLA, disposiciones que establecen el marco jurídico, y con él la seguridad, para todos aquellos que se vean afectados. Y con respecto a las modificaciones de características, la normativa actual no impone recortes de agua en estos trámites. Pese a que la vía de los peajes se propuso en el EpTI del plan hidrológico vigente como vía para equilibrar extracciones y recursos sin perjudicar a nuevos usuarios, no se está aplicando en el plan hidrológico vigente por el

rechazo social manifestado, si bien hay agentes que lo demandan. Por el mismo motivo se elimina del EpTI actual, manteniendo el estatus actual.

Alegación 10.

DU-04.- ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS y RESTAURACIÓN FLUVIAL

La eliminación de infraestructuras hidráulicas en desuso debe analizarse de forma individualizada, valorando previamente su posible aprovechamiento futuro o su utilidad estratégica dentro de la gestión hídrica de la cuenca, incorporando análisis técnico-funcionales, de seguridad hídrica, viabilidad territorial y adaptación climática, especialmente en escenarios de creciente irregularidad hidrológica.

Respuesta:

Se debe indicar que el plan hidrológico debe ajustarse a la normativa vigente. Se articula, dentro del ordenamiento jurídico. En este punto, la normativa vigente es clara al priorizar la recuperación de los ecosistemas frente a la permanencia de obstáculos sin función actual. El Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) establece explícitamente que el organismo de cuenca promoverá la eliminación de infraestructuras que se encuentren abandonadas sin cumplir función alguna ligada al aprovechamiento de las aguas. Esto enlaza con el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA), cuyo objetivo primordial es alcanzar el buen estado o potencial ecológico, lo cual exige reducir las presiones hidromorfológicas transversales que impiden la continuidad longitudinal y el transporte de sedimentos.

La recuperación del potencial ecológico de los ríos y de sus ecosistemas dependientes constituye un objetivo irrenunciable que no puede supeditarse a expectativas de uso inciertas, máxime cuando, además, el mantenimiento de infraestructuras envejecidas sin un uso efectivo genera riesgos innecesarios para la población y los bienes, y pueden suponer una peor respuesta operativa ante situaciones de estrés hídrico o avenidas. Las estructuras en desuso tienden a deteriorarse si no hay un titular que asuma los costes de su seguridad, lo que puede derivar en riesgos de rotura o formación de tapones peligrosos durante las crecidas, que en un escenario como el que se plantea de irregularidad hídrica van a ser más recurrentes.

En estos escenarios que se plantean en la observación, la verdadera adaptación y seguridad hídrica se consigue potenciando las infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza, que permiten una mejor laminación natural de avenidas y recarga de acuíferos.

Es importante indicar que las infraestructuras abandonadas y obsoletas, en la mayoría de las ocasiones no tienen un titular que se haga responsable de ellas, siendo finalmente la administración la que debe intervenir de urgencia para evitar daños provocados por infraestructuras obsoletas, lo que supone un gasto de fondos públicos que no debería mantenerse para beneficiar usos hipotéticos.

Son los titulares los que deben, si así les resulta conveniente, presentar los proyectos que entiendan necesarios para recuperar los obstáculos. El organismo de cuenca en el marco de sus competencias deberá entonces valorarlo, caso por caso, dentro del procedimiento de autorización o concesión, siempre teniendo en cuenta que el derecho al agua está vinculado a su ejercicio efectivo, no hipotético. Basar la planificación en infraestructuras sin usuarios definidos es técnicamente ineficiente.

Como conclusión, el planteamiento de mantener infraestructuras en desuso por una posibilidad de uso choca frontalmente con la obligación legal de restaurar los ríos, el deber de evitar riesgos públicos por falta de mantenimiento y las directrices europeas que ven en la restauración hidromorfológica la mejor herramienta de adaptación al cambio climático.

Alegación 11.

DU-04.- ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS y RESTAURACIÓN FLUVIAL

En relación con los caudales ecológicos: […] Cualquier eventual revisión o adaptación de caudales ecológicos debería sustentarse en estudios técnicos específicos, metodologías transparentes, análisis reproducibles y evaluación motivada de impactos sobre usos existentes, incorporando además mecanismos de flexibilidad adaptativa en situaciones de sequía o elevada variabilidad hidrológica.

El sistema actual de revisión y adaptación de caudales presenta una notable complejidad administrativa debiendo reforzarse mecanismos de simplificación.

Respuesta:

Las revisiones de los caudales ecológicos (y su adaptación) se apoyan en metodologías y análisis transparentes y reproducibles, que se recogen en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), en su epígrafe 3.4.1. Por otro lado, el análisis sobre la repercusión en los usos no siempre es fácil de realizar, en especial a lo que se indica en el apartado c) del epígrafe 3.4.5 de la IPH, repercusión económica y social, tanto positiva como negativa, de la implantación del régimen de caudales ecológicos. Habitualmente para valorar la repercusión sobre los niveles de garantía de las unidades de demanda afectadas, sobre la disponibilidad de caudales y sobre la compatibilidad con las concesiones existentes se utilizan herramientas de modelización como la aplicación AQUATOOL; pero la valoración del impacto económico y social requiere utilizar otras variables que no siempre están disponibles en la literatura conocida ya que la respuesta de cada uso a la reducción de asignaciones es distinta, y dentro de cada uso, de cada usuario. En cuanto a mecanismos de flexibilidad adaptativa, se cuenta con los caudales de sequía para las masas de agua fuera de Red Natura 2000, aplicables si se cumplen las condiciones que marca el Plan Especial de Sequías.

Por último, no entendemos a qué se refiere el alegante con “mecanismos de simplificación” para revisar y adaptar los caudales. La determinación de caudales ecológicos, tal y como se entiende en la normativa española, requiere de metodologías complejas como se pone de manifiesto en el epígrafe 3.4.1. de la IPH. Simplificar su cálculo, por ejemplo, con un porcentaje del régimen natural genera mayores incertidumbres y, en general, no responde a criterios técnicos.

Alegación 12.

DU-04.- ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS y RESTAURACIÓN FLUVIAL

Resulta necesario mejorar la eficiencia del sistema de gestión de embalses y almacenamiento, promoviendo criterios de gestión más flexibles y técnicamente adaptados a la estacionalidad de la demanda, la disponibilidad efectiva del recurso, la seguridad hídrica y los escenarios de escasez.

Respuesta:

Consideramos que se ha mejorado la gestión en estos últimos años, sirva de ejemplo el apoyo del sistema de información hidrológica de la Confederación (SIRCA) para la gestión en tiempo real de embalses y ríos y los Planes Especiales de Sequía para los escenarios de escasez. Evidentemente queda margen de mejora por lo que sería interesante conocer los criterios de gestión a los que alude el alegante.

Alegación 13.

DU-04.- ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS y RESTAURACIÓN FLUVIAL

El reducido grado de ejecución material de las actuaciones hidromorfológicas previstas en el actual ciclo evidencia importantes dificultades de implementación que deberían corregirse antes de plantear nuevos compromisos de gran alcance, debiendo priorizarse actuaciones técnica, económica y territorialmente viables antes de incorporar nuevos compromisos de elevada complejidad ejecutiva.

Respuesta:

Los plazos que impone la Directiva Marco del Agua para la consecución de los objetivos ambientales están tasados. El programa de medidas recoge las actividades que son necesarias abordar para lograr dichos objetivos. Se está de acuerdo con la observación al respeto que los compromisos son fuertes, pero relajar la ambición ambiental no es una posibilidad de acuerdo al marco normativo actual.

Alegación 14.

La gestión del riesgo de inundación (tema importante DU-05) requiere una coordinación mucho más efectiva entre las distintas administraciones competentes y una mejora significativa de los sistemas de predicción y respuesta temprana.

Se considera necesario reforzar la participación de entidades locales, usuarios y población afectada en los programas de mantenimiento y conservación de cauces, facilitando intervenciones preventivas ágiles y simplificando los procedimientos de autorización. Muchas actuaciones se ven retrasadas por la complejidad administrativa existente.

Resulta imprescindible acelerar el grado de ejecución de las actuaciones actualmente programadas, dada la relevancia que tienen estas infraestructuras para la seguridad de personas, explotaciones y núcleos rurales.

Respuesta:

Manifestamos completo acuerdo con la observación. Este aspecto se recalca en la Ficha DU-05 donde se indica que el Plan de gestión del Riesgo de Inundación se basa en tres grandes pilares, uno de los cuales es la mejora de la coordinación entre administraciones. Parte de esta mejora de la coordinación, aunque no solo, pasa por mejorar la dotación de medios y la formación a los distintos agentes implicados, tanto los organismos de cuenca como las autoridades de protección civil y emergencias, sobre todo en el ámbito local, de forma que todos los municipios con alto riesgo de inundación, así como las principales actividades económicas dispongan de planes de prevención locales, consensuados y elaborados previamente para que se consiga que estén plenamente operativos en

caso de emergencia y que ayuden a salvar las vidas humanas (cfr Ficha DU-05, Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro plan). Impulsar esta mayor coordinación es una de las medidas que se han incluido en el vigente Plan de Gestión del riesgo de inundación y que se reiterará con más intensidad en el próximo.

En efecto, hay una clara necesidad de fomentar la participación pública local en actuaciones sobre cauces, tanto las que tienen que ver con la mejora de las condiciones hidrológicas (a las que el alegante se refiere como limpieza) como las que van dirigidas a la protección y reducción del riesgo ante inundaciones de las poblaciones. Así se pone de manifiesto en la Ficha DU-04 en la que se abordan específicamente las obras en cauces. Así en la página 6 de la Ficha se indica *La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que es imprescindible la participación de las partes interesadas y la mediación para la resolución de conflictos. Hay numerosos casos de éxito, pero también experiencias que no han llegado a buen puerto, como ha ocurrido en casos como el de Santa Croya de Tera, en donde los intentos de retranqueo de la mota de la margen derecha, para mejorar la capacidad de laminación del río y la defensa en situaciones de avenidas de dicha localidad, no han logrado tener éxito.* Y en la alternativa nº 1 seleccionada se propone dirigir un 5% del presupuesto de restauración fluvial y mejora de las condiciones hidrológicas de los cauces a medidas de concienciación y de fomento de la participación, destacando las figuras de mediación de conflictos.

El Programa de medidas de cada plan hidrológico o plan de gestión del riesgo de inundación se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento. La propia Ficha DU-09 describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social. No obstante, en atención a la alegación se incluye una nueva decisión sobre la rendición de cuentas.

Alegación 15.

La planificación del riesgo de inundación debería incorporar expresamente la vulnerabilidad específica de las explotaciones agrarias, infraestructuras de regadío, caminos rurales, explotaciones ganaderas y

sistemas productivos asociados, dada la elevada incidencia económica y territorial que los episodios de inundación pueden generar sobre el medio rural.

Respuesta:

De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, los mapas de riesgo de inundación incluirán, para cada período de retorno establecido como mínimo, información sobre número de habitantes que pueden verse afectados, tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada, instalaciones industriales a que se refiere el anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación que puedan ocasionar contaminación accidental en caso de inundación así como las estaciones depuradoras de aguas residuales; zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, masas de agua de uso recreativo y zonas para la protección de hábitats o especies que pueden resultar afectadas. La identificación de estas actividades en cada área de riesgo potencial significativo definida (en la demarcación del Duero hay 26 tramos con unos 400 km de cauce afectados) sirven para que el Plan de gestión del riesgo identifique las medidas de prevención, mitigación o reducción del peligro. Por tanto, esta información se incorporará al Borrador de PGRI para ser sometido a consulta pública, igual que se ha hecho en los planes anteriores.

Alegación 16.

DU-06.- RELEVANCIA DEL REGADÍO Y SOSTENIBILIDAD

La planificación hidrológica debe preservar una adecuada garantía y previsibilidad, tanto las demandas actuales como las previsiones futuras vinculadas a la actividad agraria, compatible con la disponibilidad efectiva del recurso, la sostenibilidad ambiental y la estabilidad de las explotaciones existentes.

Resulta prioritario culminar las infraestructuras ya previstas y evaluar soluciones técnica, ambiental y económicamente viables orientadas a mejorar resiliencia, regulación, almacenamiento y eficiencia operativa del sistema.

Las inversiones realizadas por el sector agrario en modernización y eficiencia hídrica han supuesto una mejora significativa en la utilización del agua, por lo que los ahorros obtenidos deberían poder destinarse, cuando sea viable, a consolidar o ampliar superficies regables sin penalizaciones automáticas.

Respuesta:

En relación con las consideraciones formuladas sobre el papel del regadío en la cuenca del Duero, procede señalar, en primer término, que la planificación hidrológica vigente ya reconoce de forma expresa la relevancia socioeconómica del regadío, en tanto que uso consuntivo prioritario en amplias zonas rurales y elemento clave para la cohesión territorial, la actividad agroalimentaria y la fijación de población, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas.

No obstante, dicho reconocimiento debe necesariamente conjugarse con los principios rectores de la planificación hidrológica establecidos en el artículo 40 del citado texto legal, en particular, con la consecución y mantenimiento del buen estado de las masas de agua, la protección del dominio público

hidráulico y la utilización sostenible del recurso, en línea con las exigencias de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). En este sentido, la garantía y previsibilidad de las demandas —incluidas las agrarias— se articulan en función de la disponibilidad efectiva del recurso, condicionada tanto por las limitaciones hidrológicas estructurales como por los escenarios de cambio climático considerados en el proceso de planificación.

Por lo que respecta a la capacidad de regulación y almacenamiento, debe indicarse que el EpTI identifica esta cuestión como uno de los aspectos relevantes del sistema, si bien cualquier actuación orientada a su incremento debe someterse a un análisis integral que tenga en cuenta su viabilidad técnica, económica y ambiental, conforme a los principios de recuperación de costes, no deterioro de las masas de agua y evaluación ambiental estratégica. En consecuencia, la culminación de infraestructuras o la eventual incorporación de nuevas soluciones no se plantea de forma automática o generalizada, sino supeditada a su justificación en el marco de dichas exigencias y a su compatibilidad con los objetivos ambientales.

En relación con los ahorros derivados de la modernización, el EpTI plantea la modernización como medida prioritaria de adaptación que mejora la eficiencia y la garantía de los regadíos existentes. No obstante, dichos ahorros deben contribuir también a evitar incrementos netos de presión sobre las masas de agua que puedan comprometer los objetivos ambientales o el equilibrio del sistema, permitiéndose desarrollos adicionales únicamente cuando exista viabilidad económica, social y ambiental y disponibilidad de recursos.

Alegación 17.

Respecto al tema importante DU-09, señala que la planificación hidráulica no debería sustentarse exclusivamente en estrategias de reducción de demanda, sino también en instrumentos dirigidos a optimizar la disponibilidad efectiva del recurso, mejorar la regulación del sistema y reforzar la resiliencia territorial frente a escenarios de escasez o elevada variabilidad hidrológica.

Se considera prioritario favorecer actuaciones de modernización, digitalización, telecontrol y mejora de eficiencia de infraestructuras ya existentes, por constituir herramientas especialmente eficaces para optimizar el uso del recurso sin comprometer la sostenibilidad de los usos productivos y ambientales.

Respuesta:

Las cuestiones de garantía del regadío se abordan en las Ficha DU-06 y DU-07 donde se analizan diversas alternativas valorando las medidas de ajuste de la demanda, de mejora de la oferta y de expansión de las demandas, no en la ficha del tema importante DU-09. Allí se ofrecen datos de los costes que supone atender a las garantías de las demandas con las dos políticas que contrapone la alegante: ajustar demandas e incrementar oferta. Por tanto, en contra de lo que señala la alegante, la planificación hidrológica valora todas las posibilidades para atender adecuadamente las demandas, con el fin de tener elementos de juicio para que cada agente pueda valorar cada estrategia. Es razonable demandar más regulación para unos pocos usuarios si quien debe pagarlo es el conjunto de la sociedad; quizá lo sería menos si fueran los usuarios beneficiados quienes debieran pagar esos incrementos. En todo caso las Fichas planes de manifiesto que las medidas de mejora de la gestión de la demanda son menos gravosas, alcanzan mejoras en las garantías y son ambientalmente menos agresivas. De cualquier modo, parece razonable que los proyectos de modernización de regadío, que

en la actualidad se financian con fondos europeos, contribuyan a un uso más eficiente del agua, lo que debe redundar en un ajuste de la dotación, pues de otra forma no podrían hacerse acreedores de fondos que vinculan a la mejora de determinados aspectos ambientales.

La Ficha DU-06 coincide con la aportación de la alegante cuando señala, como una decisión a tomar, *Mantener e incluso incrementar el esfuerzo inversor en la modernización de regadíos de la demarcación, acometiéndose las medidas previstas en el plan hidrológico vigente, en especial aquellas que afectan a los sistemas de explotación más ajustados, así como las nuevas modernizaciones identificadas por la JCyL durante el periodo de consulta pública de los documentos iniciales del cuarto ciclo.* Por tanto, el EpTI se alinea con la petición de la alegante *de optimizar el uso del recurso sin comprometer la sostenibilidad de los usos productivos y ambientales.*

Alegación 18.

Respecto al tema importante DU-09, señalan las dificultades observadas en la ejecución material de determinadas actuaciones estratégicas —especialmente en modernización de regadíos, eficiencia hídrica e infraestructuras hidráulicas— ponen de manifiesto la conveniencia de reforzar mecanismos de coordinación interadministrativa, planificación financiera y seguimiento efectivo del grado de cumplimiento de medidas.

Los Colegios Profesionales vinculados al ámbito agrario, hidráulico y territorial deberían participar de forma estable, estructurada y permanente en órganos consultivos, mecanismos de seguimiento y procesos de participación pública.

Respuesta:

El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento.

Una vez definido este Programa de medidas, su validación con el correspondiente compromiso presupuestario o financiero se debe hacer en el Comité de Autoridades Competentes en el que están representadas todas las administraciones competentes en una persona con alto rango administrativo (consejero o director general), dado que va a asumir responsabilidades administrativas y presupuestarias. Estas autoridades deben dar la conformidad al programa de medidas para lo cual, cada una internamente, habrá debatido la capacidad y conveniencia de asumir cada medida. Por tanto, los mecanismos formales para asegurar la ejecución del Programa de medidas existen y desde el ámbito de la planificación hidrológica sólo se puede recalcar que estos mecanismos no deben ser simplemente formales sino también reales. La propia Ficha describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios.

Los mecanismos de rendición de cuentas están formalmente delimitados en el ámbito administrativo, por ejemplo, con la regulación que se incluye en los artículos 87 y 88 del RPH. Pero este ámbito es meramente administrativo y no político, que tiene sus propios itinerarios.

Los órganos colegiados de los organismos de cuenca están regulados en Reglamentos específicos (consejo del agua de la demarcación), Reglamento de la Administración Pública del Agua (juntas de explotación, comisión de desembalse, junta de obras y junta de gobierno) o el TRLA (comité de autoridades competentes). Fuera de la representatividad que otorgan estos instrumentos legales no es posible trabajar. Los colegios profesionales son tenidos en cuenta en la fase de preparación y participación pública de los documentos de la planificación hidrológica; de hecho, representantes del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la rama agrícola de Castilla-Duero han participado activamente en los ciclos anteriores y en el actual pese a la invitación no han podido asistir. Se seguirá contando con ellos en los foros donde la normativa lo permite.

Alegación 19.

DU-09.- COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEDIDAS Y FIJACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN ZONAS PROTEGIDAS

No se considera técnicamente proporcionado mantener sistemas concesionales excesivamente rígidos cuando determinadas modificaciones agronómicas o cambios de orientación productiva no impliquen incrementos efectivos del consumo hídrico e incluso puedan mejorar eficiencia y sostenibilidad del sistema.

En relación con las CUAS, convendría mejorar la información, seguridad jurídica y simplificación procedimental.

Respuesta:

Sin duda compartimos con el alegante la necesidad de reducir los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos que afectan a los ciudadanos. Pero esta celeridad debe hacerse compatible con el rigor y el cumplimiento de las normas establecidas. También este organismo de cuenca desearía procedimientos más sencillos y ágiles para poder dar respuesta a las peticiones y es algo que pone de manifiesto en la fase de preparación de las nuevas normas de tramitación de expedientes de autorización y concesión; pero la realidad es que cada cambio normativo hace más compleja la tramitación al tener un carácter enormemente garantista, más abierto a la consulta pública y ligado a otros procedimiento (como la evaluación ambiental) que más que agilizar complica la tramitación, aumenta los tiempos de respuesta por mucho que el organismo de cuenca trate de acortarlos. De cualquier modo, las normas reglamentarias vigentes no pueden modificarse por un plan hidrológico y mucho menos por un EpTI.

En lo que respecta a las comunidades de usuarios la tardanza en emitir la resolución de constitución no debe cargarse completamente en el “debe” de la Confederación. De hecho, la mayoría son constituidas en plazos razonables. En el resto de casos, son los promotores de estas comunidades quienes se demoran en la presentación de documentos y no siempre los presentan de modo completo,

cuando no cambian de condiciones de manera continua. La tramitación, pese a ser tediosa, asegura las garantías jurídicas para la agrupación y para cada uno de los usuarios una vez que se haya constituido.

Alegación 20.

DU-09.- COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEDIDAS Y FIJACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN ZONAS PROTEGIDAS

Se considera conveniente reforzar mecanismos de evaluación objetiva del grado de ejecución del Programa de Medidas mediante indicadores verificables, transparencia de resultados y sistemas de seguimiento adaptativo que permitan corregir desviaciones y priorizar actuaciones de mayor eficacia territorial.

Respuesta:

La evaluación del grado de avance del Programa de medidas de los planes hidrológicos es parte del contenido de los informes anuales de desarrollo del Plan Hidrológico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del RPH. Anualmente se hace esta evaluación y se incluye en el citado Informe anual que es presentado al Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica del Duero y que puede consultarse en la web del Organismo de cuenca en su sección de planificación (https://www.chduero.es/web/guest/plan-hidrologico-2022). En ese informe aparecen una serie de indicadores de avance y también ambientales que el órgano ambiental plasmó en la declaración ambiental estratégica del Plan Hidrológico.

Por otra parte, dado que las medidas están impulsadas por diversas administraciones competentes, anualmente se pide la actualización de las medidas y también las previsiones de avance en los años que quedan del plan hidrológico. Esta actualización se hace en el Comité de Autoridades Competentes. DE acuerdo con el artículo 36 bis del TRLA, el Comité de Autoridades Competentes de la demarcación hidrográfica tendrá como funciones básicas favorecer la cooperación en el ejercicio de las competencias relacionadas con la protección de las aguas, impulsar la adopción de las medidas que exija el cumplimiento de las normas de protección de las aguas. Está integrado por los órganos de la Administración General del Estado con competencias sobre el aprovechamiento, protección y control de las aguas, los órganos de las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, con competencias sobre la protección y control de las aguas, los entes locales, cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la demarcación hidrográfica, con competencias sobre la protección y control de las aguas.

Por lo tanto, los mecanismos para atender al objeto de la alegación ya existen, pero deben ser mejorados, como se indica en la Ficha DU-09.

Alegación 21.

DU-10.- NUEVOS USOS DEL AGUA VINCULADOS A LAS INDUSTRIAS RENOVABLES, ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA Y CENTROS DE TRATAMIENTO DE DATOS

La implantación de infraestructuras vinculadas a energías renovables y centros de procesamiento de datos puede generar impactos relevantes sobre el territorio agrario y los recursos naturales, debiendo

analizarse desde criterios de sostenibilidad hídrica, equilibrio territorial, compatibilidad con usos preexistentes y seguridad de suministro a medio y largo plazo.

El sector agrario debe considerarse directamente afectado por este tipo de transformaciones territoriales. La incorporación de nuevos consumos deberá garantizar plena compatibilidad con la disponibilidad efectiva del recurso y con los aprovechamientos previamente consolidados, evitando reducciones indirectas de garantía hídrica sobre actividades agrarias, abastecimientos o usos estratégicos existentes.

Respuesta:

Estamos de acuerdo con el alegante en que la implantación de infraestructuras vinculadas a energías renovables y centros de procesamiento de datos genera impactos relevantes sobre el territorio y los recursos naturales y el sector agrario debe considerarse directamente afectado por cambios de uso del suelo.

El análisis de los criterios de sostenibilidad hídrica, equilibrio territorial, compatibilidad con usos preexistentes y garantía de suministro son consideraciones que se han tenido en cuenta a la hora de la redacción del EpTI, proponiendo una limitación de la implantación de estas instalaciones cuando se vea superada la capacidad de acogida del territorio.

La alternativa elegida para este tema importante propone también el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos sólo en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua y no que se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, entre ellos el regadío.

Las actividades ligadas a los nuevos usos del agua, vinculados a las industrias de producción de energías renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos, no supondrá en ningún caso una disminución de recursos para la agricultura, ya que el orden de preferencia entre diferentes usos y aprovechamientos, establecido en el artículo 60.3 del TRLA, pone los usos de regadío y ganaderos con prevalencia sobre los usos industriales.

Los parques eólicos y plantas fotovoltaicas precisan agua para su construcción y para algunas operaciones de mantenimiento (limpieza de paneles), siendo los volúmenes demandados no significativos. El suministro de agua para estas instalaciones se realiza habitualmente mediante suministro con camiones cisterna de agua procedente de concesiones vigentes o mediante derivaciones temporales de aguas superficiales, que deben tramitarse en este Organismo, tramitación en la cual se evalúa la disponibilidad del recurso en cada caso particular.

Por otra parte, las instalaciones industriales para la producción de compuestos químicos capaces de almacenar los excedentes de energías renovables como son el hidrógeno verde, el amoniaco, metanol, etc., pueden suponer un uso consuntivo del agua acompañado de grandes volúmenes para la refrigeración que, en algunos casos, revierten al medio hídrico.

En todo caso, la tramitación de nuevas concesiones de aguas superficiales o subterráneas o derivaciones temporales con destino a estos proyectos contará con un informe acerca de su compatibilidad con el vigente plan hidrológico, teniendo en cuenta los aspectos mencionados y la coherencia con los usos existentes.

4.36. Escrito de observaciones Nº 044 y similares

Se muestra a continuación los agentes que han presentado escritos de POS con el mismo contenido y que son respondidas de forma conjunta para todos ellos.

Nº POS	Presentado por:	En nombre:
N044	D. José Antonio Galván Fernández.	Endesa Generación, S.A.
N046	D. José Antonio Galván Fernández.	Enel Green Power España S.L.

Alegación 1.

Se hace una consideración general al EpTI: en algunos temas importantes faltaría precisión sobre el alcance real de los problemas y sobre los factores y agentes que los generan, con aspectos que convendría corregir y aclarar.

Respuesta:

El EpTI identifica y caracteriza los temas importantes y plantea alternativas con el nivel de detalle propio de esta fase; la concreción de factores, agentes y medidas se desarrolla en el plan y su programa de medidas.

Alegación 2.

Respecto a la Ficha DU-04, se resaltan los impactos negativos que generan los azudes y presas que afectan directamente a la continuidad fluvial de los ríos (…). Mientras, por el contrario, no se hace referencia a los impactos positivos, igualmente vigentes y vinculados a su operación. Sin embargo, para realizar un balance ambiental adecuado, es necesario considerar tanto las externalidades negativas como las positivas.

Para tratar de mejorar la conectividad longitudinal, se propone como una de las "Decisiones a adoptar de cara al futuro plan" se propone "Como ya se ha hecho con los hidroeléctricos, seguir implicando a los titulares particulares de presas, y azudes en explotación, así como titulares de otras obras de paso, de la financiación de las medidas necesarias para hacerlos franqueables."

Otra de las medidas a adoptar en el futuro plan que se propone es la "la eliminación de obstáculos obsoletos". Este proceso deberá llevarse a cabo con pleno respeto a las concesiones administrativas, a las cuales se encuentran asociadas dichas instalaciones, y previa tramitación de los procedimientos administrativos que establezca la ley.

Respuesta:

Los beneficios de azudes y presas no se niegan, pero no son el objeto del análisis de presiones e impactos, cuya finalidad es identificar los impactos negativos que provocan el incumplimiento de objetivos; se ponderan, en su caso, en la justificación de nuevas modificaciones (art. 4.7 DMA) y en la designación de masas muy modificadas (art. 4.3 DMA; Guía de designación de masas muy modificadas). El EpTI plantea las respuestas generales; las medidas concretas -y sus estudios de viabilidad, efecto y eficacia- se valoran caso a caso en el programa de medidas y por cada

administración competente, con criterios de viabilidad técnica y económica ya previstos en el RDPH y atendiendo a la jurisprudencia aplicable.

Entre las decisiones que pueden tomarse ya se identifica la siguiente, en línea con la primera parte de la alegación: *Como ya se ha hecho con los hidroeléctricos, seguir implicando a los titulares particulares de presas, y azudes en explotación, así como titulares de otras obras de paso, de la financiación de las medidas necesarias para hacerlos franqueables.*

En la decisión de eliminar los obstáculos obsoletos en el fondo se está señalando a los obstáculos sin uso y sin aval legal, lo que, de acuerdo con la normativa de aguas, supone que esas infraestructuras han revertido al Estado. Por tanto, en la remoción de estas barreras no hay afecciones a terceros ya que no existe tal tercero. Otra cosa es que haya otros agentes interesados en mantener estas barreras que están usando o de las que se benefician sin título habilitante. Para esos casos, su interés debe plasmarse en un título concesional lo que requiere el correspondiente procedimiento.

Alegación 3.

Se propone la creación de un nuevo tema específico que aborde los nuevos proyectos de aprovechamientos hidroeléctricos, la compatibilidad con otros usos del agua y la coordinación entre administraciones

Respuesta:

Echamos en falta una planificación estratégica sectorial para el despliegue en el territorio de las energías renovables y sus sistemas de almacenamiento; esto contribuye a que el EpTI no pueda cuantificar la demanda futura, ya que no se pueden trasladar los objetivos generales de España al ámbito geográfico de la demarcación hidrográfica del Duero. El EpTI puede identificar la demanda solicitada en los últimos años para estos nuevos usos, como de hecho hace, pero desconoce la futura.

Por tanto, animamos al alegante a que, en fase de redacción de proyecto del plan hidrológico, en colaboración con las administraciones competentes de su ámbito, aporte información que permita cuantificar con detalle estos nuevos usos del agua en la demarcación del Duero.

Respecto al almacenamiento de energía hidráulica, el Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico identifica en la cuenca del Duero dos centrales hidroeléctricas viables técnicamente sobre embalse de titularidad estatal, una de bombeo puro (Riaño) y otra de bombeo mixto (Compuerto/Camporredondo), con 230 MW de potencia y 2,78 GWh de energía almacenada. Esto no quita para que puedan plantearse otras iniciativas privadas en embalse de concesionario que serán evaluadas una a una; hasta la fecha solo dos centrales de bombeo se han planteado en la cuenca, una resulta favorablemente y otra cuya tramitación no ha finalizado por plantearse en embalses con situación administrativa irregular. Que en una cuenca con tanta tradición de generación hidroeléctrica hayan sido más bien pocas las iniciativas presentadas, nos permite identificar una incertidumbre sobre esta actividad cuyo origen no está tanto en las limitaciones hídricas como en las que ofrece el propio negocio y en las que generan tan alta volatilidad de esta industria. También en el tema importante DU-07 *Optimización de la gestión de la oferta de Recursos hídricos- Infraestructuras*, se detallan las infraestructuras existentes y algunos nuevos proyectos de aprovechamientos hidroeléctricos, ente los que se menciona la central hidroeléctrica asociada al embalse de Irueña, así como su compatibilidad

con otros usos del recurso hídrico. Por todo ello no consideramos oportuno establecer un tema importante específico como el que propone la alegante.

En relación con la coordinación entre administraciones, esta se encuentra contemplada en el tema importante DU-09, como tema transversal y vertebrador de la coherencia entre las políticas energéticas e hidrológicas.

Alegación 4.

No figura ningún tema específico que trate el régimen de caudales ecológicos, pero a lo largo de la mayoría de los temas importantes tratados figura entre las decisiones a adoptar la implantación, seguimiento, revisión del régimen de caudales ecológicos.

Se presentan los siguientes comentarios/alegaciones:

1 Proceso de concertación: implica la revisión conjunta de los valores propuestos y la consideración de las circunstancias específicas de cada infraestructura (…)

2 Implantación, control, seguimiento y efecto del régimen de caudales ecológicos: es imprescindible realizar una revisión exhaustiva del efecto que los caudales ecológicos ejercen sobre el estado de las masas de agua (…), evitando la introducción de limitaciones que no aporten mejoras significativas o que puedan generar ineficiencias en el uso de los recursos hídricos.

3 Caudales mínimos: en aquellas masas de agua en las que en la actualidad ya se ha alcanzado el buen estado o potencial ecológico, no sería necesario modificar ninguna componente del régimen de caudales ecológicos actual (…). En aquellas masas que no alcancen el buen estado o potencial ecológico, es importante recordar que el régimen de caudales ecológicos es solo una de las herramientas disponibles para alcanzar el buen estado ecológico; si persisten las presiones generadoras del mal estado, la simple aplicación de caudales ecológicos no bastará para revertir el deterioro ambiental de la masa de agua.

4 Caudales máximos: (…) Los valores que se definan de esta componente del régimen de caudales ecológicos deben de ser coherentes con los caudales concesionales (…) ya que de lo contrario se estaría procediendo a la revisión de concesiones existentes, por lo que los concesionarios perjudicados tendrán derecho a las correspondientes indemnizaciones, con el fin de resarcir el impacto generado sobre sus derechos concesionales y operativos y reestablecer el equilibrio económico acordado mediante la concesión de aguas.

5 Caudales generadores: (…) se deben de hacer en condiciones de seguridad garantizando la no afección a terceros

6 Tasas de cambio: (…) se tendría que definir de tal manera que no afecte al servicio de regulación que prestan las centrales hidroeléctricas dentro del sistema eléctrico, por ello el valor de estas debería ser igual o superior al caudal máximo concesional que se fije para que no condicione la capacidad de respuesta de éstas. Además, para la definición de las tasas de cambio, se debería tener en cuenta el criterio de gestión del sistema eléctrico del operador del sistema.

Respuesta:

Se agradecen los comentarios. Es cierto que no existe un tema específico sobre caudales ecológicos en el EpTI. El motivo es que, tras varios ciclos de planificación tratándolo como tema específico, se considera por un lado que se ha avanzado mucho en la determinación, implantación y seguimiento de los caudales ecológicos y por otro que es un tema transversal al resto de temas importantes, en los que se hace referencia a los mismos.

En cuanto al control y seguimiento de los caudales ecológicos, se sigue lo establecido en los artículos 49 quinquies y 49 sexies del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. En este cuarto ciclo de planificación, se realizará una revisión de los caudales ecológicos a partir del seguimiento (que se incluye en los informes anuales de seguimiento del plan hidrológico), analizando aquellas masas de agua con incoherencia respecto al régimen natural y las que tengan conflictividad de incumplimiento por usos. Las masas de agua que resulten de este análisis serán llevadas al proceso de concertación que se realizará previsiblemente coincidiendo con la fase de información pública del plan hidrológico.

El régimen de caudales ecológicos es una restricción previa a los usos (art. 59.7 TRLA; IPH), que fija un límite conocido para Administración y usuarios; no se prevén, con carácter general, grandes cambios respecto de los valores vigentes. Se coincide en lo esencial: (a) donde el régimen vigente permite cumplir los objetivos, no procede modificarlo; (b) la implantación gradual y adaptativa por aproximaciones sucesivas es el enfoque que se plasma en la revisión de la IPH; (c) el análisis del efecto sobre el estado forma parte del seguimiento adaptativo, en curso; (d) la diferenciación fallo/incumplimiento se está trabajando; (f) se comparte que los caudales son solo una de las herramientas: de persistir otras presiones, deben abordarse con medidas adicionales

4.37. Escrito de observaciones Nº 047

Presentado por: ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) Castilla y León.

En nombre propio.

Alegación 1.

Respecto al tema importante DU-01, se realizan las siguientes propuestas:

1. *Son contrarios a una modificación del código de buenas prácticas para endurecer aún más las medidas que tiene que adoptar el agricultor, ni aumentar más las restricciones los programas de zonas vulnerables.*
2. *La reducción de excedentes de nutrientes debe basarse en analíticas de suelo, planes de abonado realistas, asesoramiento técnico y herramientas de precisión siempre adecuadamente financiados con fondos públicos, pero no en recortes administrativos de dosis que reduzcan la producción o trasladen al agricultor la responsabilidad de los problemas de una deficiente depuración urbana o industrial. Por ello al asesoramiento a los agricultores que se propone en la Ficha es bueno.*
3. *Estamos en contra de las bandas de protección, y de implantarse, tendría que ser con carácter voluntario, compensando íntegramente los perjuicios económicos, y a través de fondos del MITECO, ajenos a los de la PAC.*
4. *Somos escépticos respecto a las posibilidades reales de bioestimulantes y biofertilizantes.*
5. *Nos oponemos a la prohibición o restricción de uso de glifosato y otros biocidas, ya que son imprescindibles para una agricultura viable y competitiva en los mercados globales. No alcanzamos a comprender cómo un organismo de cuenca puede proponer la prohibición de uso de un biocida legal.*
6. *Parece razonable dar la importancia debida a los nutrientes aportados por aglomeraciones urbanas.*
7. *Las medidas de protección de masas de agua no pueden generar abandono de franjas agrícolas, incremento de vegetación seca, reservorios de fauna silvestre o mayor riesgo de incendios; en una comunidad con fuerte presencia de explotaciones extensivas y cultivos de secano, cualquier banda o limitación debe evaluarse también desde el punto de vista agronómico, sanitario y de prevención de incendios.*
8. *Estamos en contra de reducciones de nitrógeno por debajo de las necesidades reales de los cultivos, pues ello conlleva peores cosechas y consecuencia de ello menor rentabilidad de las explotaciones.*
9. *Apoyamos la instalación de plantas de biogás.*
10. *Se debe de prohibir el uso de biocidas para el control de malas hierbas en infraestructuras públicas como carreteras o vías férreas, sustituyéndolo por desbroces, ya que técnicamente es posible.*

Respuesta:

En la cuenca del Duero, existe un marco normativo que obliga a controlar los efectos de las sustancias nitrogenadas sobre las aguas superficiales y subterráneas, especialmente en relación con la contaminación difusa de origen agrario.

La principal norma en este ámbito es el Real Decreto 47/2022, sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, que establece la obligación de controlar y reducir la lixiviación de nitrógeno hacia los acuíferos. Esta norma exige la designación

de zonas vulnerables a nitratos, la aplicación de programas de actuación y el seguimiento de la calidad del agua, incluyendo la concentración de nitratos, que no debe superar determinados umbrales.

Asimismo, el Real Decreto 1514/2009, relativo a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, establece la necesidad de prevenir el deterioro del estado químico de los acuíferos mediante el control de sustancias contaminantes, entre las que destacan los compuestos nitrogenados procedentes del riego agrícola.

Pero desde 2023 también el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, obliga a que las autoridades competentes aseguren que no hay entrada de contaminantes en las zonas de captación de agua para consumo humano.

Este marco se completa con la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Nitratos a nivel europeo, que obligan a los Estados miembros a realizar programas de seguimiento del estado químico de las masas de agua y a controlar las fuentes difusas de contaminación, como los retornos de riego.

En consecuencia, aunque no se controla directamente el retorno de cada parcela, la normativa vigente obliga a controlar su impacto global mediante redes de seguimiento del agua de drenaje y medidas de gestión agraria, asegurando así la protección de los acuíferos frente a la contaminación.

Estamos de acuerdo en que la modernización de regadíos permite aplicar nuevas tecnologías en el sector agrario, sin este tipo de infraestructuras sería imposible llegar a conseguir el riego de precisión que permite manejar mejor el agua, y consecuentemente evitar que las aguas de retorno de riego sean menos y con menor carga contaminante: Por el contrario el poder disponer de mejores infraestructuras da pie a siembras más densas, que se traducen en más rendimiento por hectárea y más necesidad de abonado, también ocurre que esto posibilita la obtención de dos cosechas en un mismo año, más cultivo por consiguiente más abonado, exceptuando los cultivos de leguminosas.

Las estaciones de medida existentes tanto en aguas subterráneas como en ríos y arroyos que drenan las masas de agua del centro-sur de la cuenca, siguen dando valores de contenido en sustancias nitrogenados por encima de los limites legalmente establecidos. Analizando datos procedentes de sistemas de control de otros organismos, Sistema Información Nacional aguas de consumo (SINAC), controles sanitarios, campañas de medición en campo realizadas con nuestros medios, siempre aparecen algunos valores altos en zonas de mayor actividad agroganadera. Mas del 80% del total de del nitrógeno liberado al medio procede de la agricultura debido a que los compuestos nitrogenados (especialmente fertilizantes) son esenciales para el crecimiento de los cultivos. Estás sustancias una vez aplicadas tienen el siguiente recorrido: Fertilizante aplicado → no absorbido → arrastre por agua → retorno → acuífero, causando la contaminación por nitratos en acuíferos, y la eutrofización de aguas.

La realidad es que la situación no mejora ni en el tiempo ni en el espacio: cada vez hay más zonas donde aparecen concentraciones elevadas de estas sustancias, a pesar de que los precios de los fertilizantes se han encarecido bastante en los últimos tres años, y esta situación debería traducirse en unas prácticas de abonado más precisas. Ante esta situación lo que se propone en la ficha no es el abandono de la actividad agroganadera como parece desprenderse del contenido de la alegación, se proponen una serie de medidas encaminadas a ajustar al máximo las necesidades de los cultivos, con

las dosis de abonado, rotaciones de cultivos en las que se incluyan leguminosas, y otros cultivos menos exigentes en sustancias nitrogenadas.

Por otra parte, también desde instancias europeas se advierte a España con sanciones millonarias en aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2024 que concluye que España no cumple la directiva de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. De hecho, una de las comunidades autónomas en la que la sentencia pone el foco es Castilla y León, territorio en la que ejerce su actividad la asociación alegante, al no haber aplicado las medidas obligatorias ni lograr mejorar la calidad de las aguas. Dos años después de la sentencia, la Comisión Europea señala que solo 4 comunidades autónomas españolas no han tomado medidas, entre ellas Castilla y León. (Noticia La Gaceta de Salamanca, de 5 de junio de 2026). No sería muy razonable que esta inacción administrativa pudiera repercutir en los fondos de la PAC a los agricultores de estas comunidades autónomas.

Por tanto, en respuesta a las alegaciones concretas hemos de señalar que:

Rechazamos la propuesta que hace el alegante de reducir de exigencias en los programas de actuación en zonas vulnerables.

Aunque la reducción de excedentes de nutrientes debe basarse en analíticas de suelo, planes de abonado realistas, asesoramiento técnico y herramientas de precisión, como indica la alegante, el EpTI debe señalar cuál es la senda si se quiere alcanzar el buen estado de las masas de agua.

Compartimos que las bandas de protección deben compensar a los titulares por el servicio ecosistémico, para lo que convendría que la nueva estructura de la PAC pidiera contemplar esa financiación; si no fuera así habría que explorar la vía del artículo o si ninguno fuera viable en la aplicación del artículo 25 del TRLA o del artículo 6 del RDPH sobre las zonas de policía de cauces. No deja de ser singular que la alegación solicite fondos a autoridades competentes sin competencia en la materia que genera las presiones sobre el agua.

Respecto a las posibilidades reales de bioestimulantes y biofertilizantes, nos llama la atención que el escepticismo que manifiesta la alegante contrasta con las conclusiones públicas de su propia organización en unas jornadas técnicas celebradas recientemente en las que se ve con buenos ojos impulsar la investigación en fertilizantes y bioestimulantes de nueva generación que reduzcan pérdidas y mejoren eficiencia, en la línea con la alternativa 2 de la ficha del EpTI (cfr. Conclusiones de las Jornadas sobre fertilización sostenible de Asaja Soria, junio de 2026)

El EpTI no prohíbe el uso de fitosanitarios porque no tiene potestad para ello, pero existe una norma de calidad que establece que los niveles de glifosato en agua deben estar por debajo de unos valores normalizados y, desgraciadamente, cada vez hay más incumplimientos en la cuenca, de lo que se podrían derivar prohibiciones de su uso donde su efecto sobre el agua sea contrastado. Y no deja de ser curioso (y asimétrico) que rechace la supuesta prohibición del uso del glifosato para la actividad agraria y, sin embargo, la proponga para otras actividades como el uso en infraestructuras públicas.

El EpTI no plantea que los cultivos no se fertilicen, sino que se reduzcan el excedente, es decir la parte de fertilizante aportado que no incorporan los cultivos y se pierde apareciendo luego en el agua. Este enfoque entendemos que debería coincidir con el del agricultor a quien la asociación alegante

defiende, pues a menos pérdidas de nutrientes menores costes y mejora de la rentabilidad de la explotación.

Alegación 2.

Sobre la limitación de novación concesiones y supresión automática de derechos riego en aguas subterráneas:

- *Nos oponemos a la limitación en la novación de concesiones y supresión automática de derechos de riego planteada para la Sección C en las masas en mal estado, así como de todos aquellos aprovechamientos cuyo plazo finalice antes de 2035. En la actualidad, las cuatro masas de agua en mal estado cuantitativo en la demarcación de la CHDuero presentan un nivel piezométrico en ascenso, en mayor o menor medida, por lo que ASAJA pide mantener estas concesiones y aumentar el apoyo a la modernización y eficiencia técnicas para ahorrar agua.*
- *En base a la aplicación de la Directiva 2000/60/CE [..], que la supresión de estas concesiones supondría la aceptación de una realidad con un COSTE DESPROPORCIONADO para la sociedad en general, permitiendo en este caso a los estados miembros tratar de lograr objetivos medioambientales menos rigurosos que los exigidos.*
- *Si se eliminan las concesiones, tal y como recoge el EpTI, no se cumplen los CRITERIOS DE GARANTÍA que marca el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas.*

ASAJA reclama que el nuevo Plan Hidrológico habilite mecanismos jurídicos claros, ágiles y garantistas que permitan a los agricultores solicitar y obtener, antes del vencimiento de dichos derechos, la novación o continuidad concesional cuando el aprovechamiento sea real, esté acreditado y resulte compatible con la planificación hidrológica.[..]

La seguridad jurídica sobre el agua es condición imprescindible para la continuidad de muchas explotaciones de regadío.

Respuesta:

Los derechos inscritos en el Catálogo de Aguas y en la Sección C del Registro de Aguas tienen su origen en el régimen transitorio establecido por la Ley de Aguas de 1985, que transformó el sistema jurídico tradicional de propiedad privada del agua en un régimen de dominio público hidráulico. Estos derechos permiten el mantenimiento de usos privados preexistentes, fundamentalmente referidos a aprovechamientos de aguas subterráneas, bajo determinadas condiciones de reconocimiento administrativo.

En las últimas décadas, la política hidráulica en España ha evolucionado hacia un modelo caracterizado por Limitar progresivamente los derechos de carácter privado, Integrar todos los aprovechamientos en el sistema concesional, e Incrementar el control administrativo sobre las extracciones, siempre bajo el prisma de lo que prioriza la Directiva Marco del Agua en sus objetivos ambientales como es el alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de agua y, La reducción de la sobreexplotación de acuíferos. En conclusión, que el futuro de los derechos de aguas subterráneas inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas y la sección C del Registro de Aguas se orienta hacia una progresiva convergencia con el régimen concesional, en línea con la evolución del derecho de aguas y

las exigencias derivadas de la normativa europea. Es posible que este proceso implique un refuerzo del control administrativo, una mayor vinculación a los objetivos ambientales y, previsiblemente, una limitación efectiva de los aprovechamientos en aquellos casos en que sean incompatibles con el buen estado de las masas de agua.

Respecto a las novaciones y tratamiento restrictivo de aprovechamientos de la sección C y del Catálogo, se indica que el EpTI no dice nada nuevo, que por otra parte tampoco puede decir, que no esté regulado en las DT 2ª, 3ª y 4ª del TRLA, disposiciones que establecen el marco jurídico, y con él la seguridad, para todos aquellos que se vean afectados. Y con respecto a las modificaciones de características, la normativa actual no impone recortes de agua en estos trámites. Pese a que la vía de los peajes se propuso en el EpTI del plan hidrológico vigente como vía para equilibrar extracciones y recursos sin perjudicar a nuevos usuarios, no se está aplicando en el plan hidrológico vigente por el rechazo social manifestado, si bien hay agentes que lo demandan. Por el mismo motivo se elimina del EpTI actual, manteniendo el estatus actual.

Respecto a los objetivos menos rigurosos, regulados por el artículo 4(5) de la DMA, la justificación debe asegurar lo siguiente:

a) que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende dicha actividad humana no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor que no suponga un coste desproporcionado;

b) que el proponente de la excepción garantice para las aguas superficiales, el mejor estado ecológico y estado químico posibles teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación,

c) que el proponente para las aguas subterráneas garantice los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación;

d) que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.

Por tanto, invitamos a la alegante a que pueda aportar en fase de redacción del plan hidrológico esa justificación y, en su caso, pueda formar parte del nuevo plan hidrológico.

Los criterios de garantía en las extracciones de determinadas masas de agua de la zona central del Duero se han estado cumpliendo en los últimos cuarenta años a costa de sobreexplotar la masa de agua, por lo que argumentar ahora que las medidas que marca el TRLA aplicables a determinados aprovechamientos de agua van a suponer un fallo de garantías, no deja de ser sorprendente. Así como a los aprovechamientos de aguas superficiales se les aplican criterios restrictivos cuando hay escasez, en las aguas subterráneas nunca han tenido restricciones, entre otras cosas, porque las han evitado incrementando la sobreexplotación de las masas de agua y, con ello perjudicando a los usuarios tradicionales que han visto como sus pozos se quedaban sin agua por la constante bajada de niveles piezométricos debido a una extracción excesiva.

Alegación 2bis.

Sobre las medidas de la ficha DU-02:

2. *Nos oponemos a nuevas delimitaciones de zonas de especial protección en torno a humedales.*
3. *ASAJA rechaza que el principio de no deterioro y la sentencia del Tribunal Supremo 447/2023 se utilicen como argumento genérico para imponer restricciones automáticas a la agricultura en espacios Red Natura 2000. Cualquier limitación sobre regadíos, captaciones o manejos agrarios debe estar expresamente justificada en función del valor ambiental concreto que se pretende proteger, contar con base técnica y económica suficiente y, preferentemente, estar prevista en el correspondiente plan de gestión del espacio protegido. No puede equipararse un humedal dependiente de aguas subterráneas con una ZEPA de llanura cerealista sin afección hídrica directa. La inclusión en Red Natura no puede convertirse en una presunción de incompatibilidad ni en una herramienta para imponer restricciones arbitrarias o sesgadas al sector agrario.*
4. *Apoyamos medidas de uso conjunto que permitan sustitución de bombeos, siempre que sean aceptadas por los usuarios y no le supongan un coste añadido en la explotación o la obtención de peores rendimientos económicos en las explotaciones.*
5. *La recarga de acuíferos y el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas deben incorporarse como solución estructural, especialmente en zonas donde existan años húmedos con recursos no aprovechados que puedan almacenarse o infiltrarse para mejorar niveles piezométricos sin expulsar actividad agraria.*
6. *No creemos necesario modificar la normativa respecto a las extinciones por falta de uso.*
7. *ASAJA se opone a que las modificaciones de características que no incrementen volumen anual ni superficie anual de riego sean tratadas como nuevas presiones. La ampliación o redefinición de perímetros para permitir rotaciones, mejorar eficiencia o adaptar la explotación debe facilitarse cuando no aumente la extracción autorizada.*
8. *Nos oponemos a planes de extracción anuales (modificación concesional) que supongan restricción del recurso con el objetivo de alcanzar extracciones equivalentes al 80% de los recursos disponibles.*
9. *Debe garantizarse una tramitación ágil y proporcionada de aprovechamientos ganaderos, agroalimentarios y de bajo volumen, especialmente cuando el agua se destina a usos vinculados al propio predio y su incidencia sobre la masa de agua es mínima.*
10. *ASAJA reclama una administración hidráulica más eficaz, transparente y resolutiva, con criterios homogéneos, canales de comunicación reales y una orientación administrativa dirigida a tramitar y resolver los expedientes, no a bloquearlos por cuestiones meramente formales o burocráticas.*

Respuesta:

La delimitación de zonas de restricciones vinculadas a espacios protegidos es parte de los objetivos específicos que los planes hidrológicos deben asegurar en el caso de espacios de Red Natura 2000 vinculados al agua. Esos objetivos los fija la administración competente en materia de Red Natura 2000 que es la comunidad autónoma. En tanto mantenga esta administración esos objetivos para los espacios protegidos, el plan hidrológico deberá darles cumplimiento con medidas dirigidas a ellos.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo (Rec. 447/2023) constituye un pronunciamiento muy relevante en materia de política de aguas, al establecer una interpretación estricta de la Directiva Marco del Agua. En particular, limita de forma significativa la posibilidad de introducir excepciones en los planes hidrológicos y refuerza la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos ambientales mediante una planificación rigurosa, técnicamente fundamentada y jurídicamente coherente. Y a ello se ceñirá el Plan Hidrológico.

La recarga artificial de acuíferos es una práctica que se lleva haciendo es esta cuenca desde hace más de 20 años, las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 la Confederación encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos, teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, como aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, nos parece una alternativa a tener en cuenta para el fin que propone el alegante, por lo que ya se contempla como medida en la alternativa 3 del EpTI, a la espera de que la autoridad competente pueda validarla y asumirla teniendo en cuenta todos los condicionantes: ubicación de estas infraestructuras, su proximidad a cauces con recurso suficiente, los costes de las obras, su financiación, y los costes de explotación y energía, pues la mayoría han de llenarse con bombeos,…; en definitiva muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

La regulación de las extinciones de derechos no es objeto del EpTI ya que tiene su regulación específica en el TRLA y RDPH.

Por lo que se refiere las modificaciones de características de las autorizaciones de aprovechamientos de aguas, apuntar que ese aspecto está definido claramente en el TRLA y el RDPH, para atender a su pretensión sería necesario modificar dicha ley, aspecto que no depende de la Planificación Hidrológica.

Los planes anuales de extracción son una herramienta muy interesante para los usuarios cuando se dan circunstancias de escasez o de fuerte explotación de acuíferos, ya que permiten a los usuarios adaptar su explotación a la disponibilidad de agua. En aguas superficiales está plenamente incorporado a la gestión ordinaria y son los propios regantes quienes solicitan estos planes pues les permiten diseñar anualmente su plan de cultivos.

La materia sobre la que se alega no es parte del EpTI al estar regulado en el RDPH los plazos máximos de respuesta y el modo de instruir las concesiones y autorizaciones. La Confederación trata de responder lo antes posible a las solicitudes de concesiones, siempre teniendo en cuenta los criterios normativos en la instrucción para garantizar la legislación vigente y también la participación pública prevista en TRLA y RDPH. En los últimos años se ha tratado de dar una respuesta más ágil a estos procedimientos, que son muy garantistas, y en ello se continuara

Alegación 2ter.

DU-02. USO SOSTENIBLE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Sobre las medidas de la ficha:

11. *Apoyamos la exención de objetivos bajo el artículo 4.5 de la DMA.*
12. *En relación con las CUAS pedimos:*
    - *Que los IP se puedan incluir en ellas, si no es con su concesión al menos como un punto de toma. Nos parece justo que, si en su inicio se permitió que pertenecieran a ellas, se mantenga.*
    - *Que los agricultores puedan anualmente solicitar la modificación del inventario de la comunidad de usuarios, dado que en cada campaña agrícola pueden darse circunstancias diferentes que hacen que sea necesario que una parcela y/o pozo puedan solicitarse a incluir o abandonar la comunidad, dado que en principio la restricción de los tres años obedecía a una situación de partida en la que se pretendía tener un conocimiento del comportamiento inicial de las comunidades, pasado este tiempo, no entendemos cual es el motivo por el que no se modifica este condicionante.*
    - *Que los planes de cultivo anuales sean aprobados dentro del plazo de solicitud de las ayudas de la PAC, puesto que es trascendental para la solicitud tener certeza de las parcelas que están autorizadas para el riego cada año. Por este motivo solicitamos firmemente la coordinación y colaboración entre la CHDuero y la Consejería de Agricultura y Ganadería.*
13. *Respecto a los regadíos de La Valduerna, proponemos para el nuevo PLAN la legalización del desvío de agua del Duerna en invierno por el río Peces y las zayas para elevar la capa freática de la zona regable con pozos. A la vez, junto con la JCYL, estudiar la viabilidad de una modernización de los regadíos (concentraciones parcelarias y riego a la demanda) asegurando el suministro*

Respuesta:

Una de las medidas del Plan Hidrológico dirigidas a la recuperación de las masas de agua en mal estado cuantitativo es el fomento de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas (CUAS). Estas entidades son corporaciones de derecho público formadas por usuarios de una misma masa de agua subterránea que buscan hacer una gestión sostenible y organizada del recurso hídrico, garantizando su uso equitativo y evitando la sobreexplotación.

Desde el Organismo de cuenca se ha fomentado y apoyado su constitución de CUAS. Actualmente, la cuenca del Duero cuenta con unas 50 CUAS constituidas, de las cuales 48 lo han hecho después de 2022. En total abarcan una superficie potencial de riego cercana a las 100.000 hectáreas, mayoritariamente ubicadas en masas en mal estado cuantitativo

Estas agrupaciones, además de una mejor gestión y uso del agua, permiten concienciar a los usuarios sobre la importancia de la gestión correcta del agua, haciéndoles copartícipes y corresponsables de esa gestión junto al Organismo de cuenca.

La inclusión de los IPs, en los elencos de las CUAS, fue una medida transitoria, que daba lugar a una situación de alegalidad, puesto que según el Art 54.2 del TRLA, el uso del agua en este tipo de autorizaciones únicamente se pude llevar a cabo en el predio en el que se realiza la captación.

Para el resto de cuestiones referentes al funcionamiento de las CUAS, todas deberán ceñirse a los aspectos que figuren en los estatutos de las mismas y, en caso de no estar de acuerdo, podrán rechazar la constitución como tales y seguir con el statuo quo actual.

Para poder hacer viable la propuesta de la alegante en relación con la libertad de movimientos de los usuarios en el seno de las CUAS sería necesario que todos los usuarios renunciasen a sus títulos concesionales en favor de un título a nombre de la CUAs, algo que el propio sector rechazó en su momento. Por ello lo que plantea la alegante es imposible en el marco legal actual. Los planes de cultivo deben ceñirse a lo que disponen los Estatutos de la CUAS aprobados por la CHD, en los que se fija el mes de febrero para presentar los planes de cultivo.

La "siembra de agua" en la Valduerna es un sistema tradicional de gestión hídrica basado en la derivación de agua por acequias ("zayas") que favorecen su infiltración en el subsuelo, permitiendo la recarga del acuífero y su posterior uso mediante pozos, constituyendo un ejemplo de recarga gestionada y uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, es una práctica tradicional de recarga de acuíferos que favorece la sostenibilidad del recurso. Después de realizar los estudios pertinentes y con el fin de facilitar esa práctica, el plan hidrológico vigente estableció una reserva de 2 hm^3 para su derivación y posterior recarga gestionada. Para poder hacer efectiva esta reserva es necesaria una figura que pueda gestionar la misma como puede ser un sindicato central o junta central de usuarios que agrupe a comunidades de regantes actuales y usuarios individuales para hacer una gestión conjunta de todos los recursos. Para solventar esta situación el Organismo de Cuenca, ha llevado a cabo reuniones con representantes de algunas de las "zayas", solicitándoles que elaboren la documentación necesaria para su constitución. Lamentablemente esto no se ha llevado a cabo y no se ha podido hacer efectiva esa reserva. Como se indica en el EpTI, se mantendrá esta reserva en el nuevo ciclo para dar más tiempo a los actores a llevar a cabo esa agrupación.

Alegación 3.

DU-03. CONTAMINACIÓN URBANA E INDUSTRIAL

ASAJA considera que los vertidos urbanos e industriales a los ríos, incluso cuando se trata de aguas depuradas, constituye la principal fuente de contaminación de las aguas, y que el organismo de cuenca lo minimiza, dándole menos importancia de la que tiene, y poniendo siempre por delante otra contaminación como puede ser la de fuentes agrarias.

ASAJA apoya todas las medias tendentes a depurar los vertidos urbanos e industriales siempre que no detraigan fondos de otras medidas de política hidráulica necesarias para el sector agrario.

El sector agrario puede ser una solución para la reutilización de aguas residuales después del tratamiento, como lo es para el destino final de lodos de depuradora, pero a la vez exigimos garantías de que no aporten contaminantes que perjudiquen agronómicamente nuestras explotaciones o que sean motivo de penalizaciones o sanciones por las autoridades competentes.

Respuesta:

No podemos compartir la opinión del alegante manifestada en primer lugar: en la Ficha DU-03 se indica que, de las 5.033 autorizaciones de vertido existentes en la demarcación hidrográfica, 1.033 tienen un tratamiento no adecuados (un 37% de todos los vertidos). La mayor parte de estos vertidos no adecuados corresponden a núcleos urbanos de tamaño pequeño, lo que hace que el porcentaje de carga contaminante sin tratamiento adecuado en habitantes equivalentes sea de un 11,1% del total. Por tanto, existiendo un problema y debiendo corregirlo como pone de manifiesto la Ficha DU-03, a escala de cuenca no representa la visión que ofrece la alegación.

Nos felicitamos de que la alegante apoye las acciones de mejora de la depuración y también que apoye la reutilización, en línea con el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua. Es este Real Decreto en su Anexo I el que establece los parámetros mínimos de calidad de las aguas regeneradas para su uso en agricultura y que debería ofrecer suficiente garantía de no aportar a los cultivos determinados contaminantes.

Alegación 4.

DU-04. ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y RESTAURACIÓN FLUVIAL

ASAJA no comparte el principio de que no hay que actuar en los ríos y dejarlos en sus condiciones naturales. Las alteraciones longitudinales han respondido a una necesidad que está vigente en la actualidad, y que con carácter general evita o minimiza desbordamientos que causan daños en la propiedad agrícola o en núcleos urbanos. Con carácter general, ASAJA defiende que se mantengan las motas de los ríos en su estado actual, y que se mantengan y limpien los ríos cuando sea necesario. Es imprescindible la limpieza de cauces y arroyos de menor identidad que los ríos para evitar el desbordamiento a las tierras agrícolas y el buen drenaje de estas tras inviernos lluviosos.

En este sentido pedimos actuación directa de limpieza del organismo de cuenca y autorizaciones de limpieza cuando quién lo solicita es una entidad local o los propietarios de fincas colindantes con el cauce.

No podemos apoyar el gasto de ingentes cantidades de dinero público en obras que responden únicamente a criterios político-ideológicos del organismo de cuenca. […] No estando conformes con la eliminación de las alteraciones del cauce de los ríos hechos por generaciones anteriores, en el caso de que se lleven a cabo, mejor que sea en un horizonte más lejano, por lo tanto, apoyamos el horizonte de ejecución de 2039 o superior.

No creemos necesarias nuevas medias de restauración no contempladas en el Plan vigente. .[…]

La vegetación de ribera, que tiene una gran capacidad de regeneración, hay que eliminarla de cauce del río cuando esta supone un obstáculo para el paso del agua en momentos de crecidas del río. Por el contrario, otra vegetación de interés económico, como los chopos, cuando están bien mantenidas las plantaciones, representan un recurso económico importante y no conllevan obstáculo en el discurrir de las aguas, incluso en momentos de crecidas, por lo tanto, se deben de fomentar y no limitar en las zonas del dominio público hidráulico.[…]

Además, se solicita que en los estudios de impacto ambiental de los procesos de concentración y reconcentración parcelaria se debe contemplar la actuación en cauces y regueras para mejorar el drenaje de las parcelas, y dichas actuaciones deben contar con la autorización de la autoridad competente.

Respuesta:

No se comparten los argumentos del escrito presentado por los siguientes motivos:

- La presencia de motas produce un aumento de velocidad del agua en momentos de avenidas. Si no se permite al río disipar la energía que transporta, el agua provoca daños mucho mayores cuando finalmente se produce el desborde debido a la fuerte velocidad y al caudal concentrado. Para proteger los núcleos urbanos el método más eficaz consiste en devolver al río sus llanuras de inundación aguas arriba que reduzcan la velocidad del agua y su caudal. A modo de ejemplo, la eliminación de motas y recuperación de brazos secundarios en el río Zapardiel ha tenido ya un efecto en la protección del núcleo de Medina del Campo superior al que existía con la red de motas eliminadas. Este hecho está contrastado técnicamente: la seguridad de las personas se incrementa cuando se devuelven al río sus condiciones naturales. Los beneficios no son exclusivamente ambientales sino de seguridad pública. Nos parece poco razonable plantear la protección de terrenos agrícolas de las inundaciones de menor período de retorno mediante motas que pueden poner en riesgo zonas urbanas pobladas.
- Desde el momento en que un río se canaliza, se deben realizar tareas de mantenimiento (lo que el escrito denomina “limpieza”) que no serían necesarias, al menos con la misma intensidad, si se mantuviese su trazado y condiciones naturales, y que conllevan unos gastos no menores.
- Paradójicamente, la profundización del cauce para "mejorar el drenaje" provoca una bajada del nivel de las aguas subterráneas, lo que en muchas ocasiones puede llegar a hacer inviable la propia explotación agrícola de la zona a largo plazo.
- Los plazos que impone la Directiva Marco del Agua para la consecución de los objetivos ambientales están tasados. El programa de medidas recoge las actividades que son necesarias abordar para lograr dichos objetivos. Se debe ejecutar en el escenario más próximo posible.
- El plan hidrológico se elabora cada seis años actualizando el estado y las presiones sobre las masas de agua. Si el análisis demuestra situaciones problemáticas se debe recoger las actuaciones para su recuperación en el programa de medidas.
- Respecto a las plantaciones de chopos, es falso que estas plantaciones no representen un obstáculo, especialmente durante las crecidas. La experiencia acumulada por el organismo de cuenca demuestra lo contrario ya es conocido por todos cómo contribuyen estas plantaciones a la formación de “tapones” en infraestructuras transversales. Los chopos situados en el cauce o zonas de flujo preferente son vulnerables a la erosión y al viento, cayendo con frecuencia al río. Estas maderas son arrastradas durante las avenidas y forman tapones en puentes e infraestructuras, lo que genera sobreelevaciones peligrosas e incrementa el daño por inundación. A modo de información, el organismo de cuenca debe gastar anualmente entre 4 y 6 millones de euros exclusivamente en la eliminación de estos tapones producidos por la caída de chopos de plantaciones comerciales.

- La normativa actual sobre concentraciones parcelarias indica claramente que los bienes de dominio público están excluidos del proceso de concentración.

En resumen, actuar en cauces para mejorar el drenaje parcelario es una práctica que degrada el suelo agrícola por la bajada del freático, aumenta la peligrosidad de las inundaciones para terceros y vulnera frontalmente la normativa europea de protección de ecosistemas fluviales

Alegación 5.

Respecto al tema importante DU-05 (gestión de riesgo de inundaciones) se propone:

1. *que los daños agrarios por inundación se incorporen expresamente a la planificación, incluyendo pérdidas de cosecha, erosión de suelos, daños en cerramientos, caminos, pozos, captaciones, instalaciones ganaderas, pastos y retrasos en siembras o labores.*
2. *aprobar un programa específico de limpieza y mantenimiento de cauces menores, arroyos y regatos en todas las provincias, con presupuesto suficiente y procedimientos sencillos para que ayuntamientos y propietarios puedan actuar con autorización rápida cuando exista riesgo evidente, ya que de esta forma y en muchos casos se reducirían los efectos no deseados de las inundaciones si hubiera una política hidráulica de limpieza de ríos, cauces y arroyos en general. En esta línea se debe.*
3. *exención de tasas y la simplificación máxima de la tramitación cuando el agricultor o ganadero asuma a su costa una actuación autorizada de limpieza, retirada de obstáculos o mantenimiento de cauce.*
4. *construcción de más pantanos o embalses, que tendrían, entre sus bondades, la de luchar contra inundaciones reteniendo agua en momentos de fuertes precipitaciones o deshielos, y mejorar la correcta gestión de los embalses existentes. La política de inundaciones debe reconocer el papel de embalses, balsas y regulación hidráulica como herramientas de seguridad frente a avenidas, además de su función de garantía para regadíos y abastecimientos.*
5. *cuidado y limpieza de las zonas arboladas en las riberas de los ríos, sobre todo de vegetación autóctona espontánea, contribuye a aumentar los daños provocados por las inundaciones.*
6. *derivar parte del agua del río Rubagón hacia el embalse de Aguilar de forma que se eviten las inundaciones recurrentes que éste produce, tanto en la zona adyacente al Rubagón como después de que éste desemboque en el Camesa; además, esta derivación incrementaría el volumen de agua regulada del Pisuerga.*

Respuesta:

Se hacen una serie de propuestas diversas y heterogéneas sobre la gestión del riesgo de inundación, por lo que se responden una a una. Respecto a incorporar los daños por inundaciones a la agricultura y ganadería y a sus infraestructuras, no se ve el modo de realizarlo de forma compatible con la normativa que regula la planificación de los riesgos de inundación. Ningún artículo o apéndice del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, habilita para que la administración compense los daños agrarios, industriales, infraestructuras o de equipamiento urbano que puedan ser provocados por las inundaciones a sus titulares. Sí incluye entre las medidas para abordar los efectos de las inundaciones la promoción de los seguros frente a inundación sobre personas y bienes y, en especial, los seguros agrarios. Quizá esta vía es la más conveniente para hacer frente a los daños en estas materias. Todo ello sin menoscabo de los auxilios de carácter extraordinario

que el Gobierno de España o de las Comunidades autónomas pueden adoptar en situaciones catastróficas o claramente excepcionales.

Sin duda la mejora de las condiciones hidrológicas de cauces es una tarea de gran peso en la cuenca a la que el Organismo de cuenca dedica anualmente entre 4 y 6 millones de euros, posiblemente escasos para las necesidades crecientes, a labores de mantenimiento de cauces. El Programa de medidas del plan hidrológico vigente incluye un paquete de medidas de este tipo. Pero evidentemente no puede llegar a atender eficazmente a los más de 80.000 kilómetros de ríos y arroyos de la cuenca y actúa con criterios de conveniencia y racionalidad económica. Para paliar esta desproporción entre necesidades y posibilidades reales, tanto en el Plan vigente de 2023 como en el anterior de 2016, se incluyó un procedimiento más ágil para acometer determinadas labores de mejora de las condiciones de desagüe de los cauces. Así en el artículo 30 de la Normativa se establece el sistema de declaración responsable para las denominadas *actuaciones menores de conservación de cauces y zonas de policía*. El mismo artículo hace un elenco de las que pueden considerarse actuaciones menores:

I. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera.

II. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce.

III. Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del dominio público hidráulico.

IV. Retirada de sedimentos y vegetación existente en el lecho del cauce, situados 50 metros aguas arriba y aguas abajo de las obras de fábrica y puentes con el fin de conservar su capacidad de drenaje.

V. Pequeñas actuaciones de mantenimiento de puentes e infraestructuras situadas sobre el cauce, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas no haya ocupación del dominio público hidráulico ni quede afectada su capacidad de desagüe.

VI. Mantenimiento de las secciones de estaciones de aforo.

VII. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos.

VIII. Cortas de arbolado bajo líneas eléctricas.

Para todas estas actuaciones la declaración responsable habilita el poder actuar por los particulares sin esperar a ninguna Resolución de la CHD, lo que agiliza notablemente la actuación.

La norma que regula las tasas que se aplican por informes y otras actuaciones que se deben aportar en los procedimientos de autorizaciones y concesiones es el Decreto 140/1960, de 4 de febrero. Pese a su antigüedad sigue vigente. Mostramos conformidad con la propuesta de exención de tasas para las autorizaciones de limpiezas que realicen los usuarios o ciudadanos. Por ello se estudiará la posibilidad real de esta decisión, ya que en la actualidad los órganos gestores que aplican las tasas a las autorizaciones y concesiones deben dar cuenta de su giro y cobro a la intervención delegada, pudiendo incurrir en caso de omisión de giro de la tasa en reparos administrativos que pueden conllevar responsabilidades contables de los funcionarios que no las generen.

Los organismos de cuenca en general y, singularmente, los planes de gestión del riesgo de inundación en particular reconocen el valor de las presas y embalses para la laminación de avenidas, no en vano la CHD gestiona más de 29 presas de titularidad estatal y comprueba su efecto sobre las inundaciones. Pero dicho esto también debe decirse que no resuelven por sí mismas los problemas de inundaciones y a veces la aparente seguridad que pueden ofrecer no contribuye a una gestión razonable de las zonas inundables. Como se indica en la Ficha DU-05 los objetivos generales, y la tipología de medidas para alcanzarlos, que recogen en este Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación son los siguientes:

- Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.

- Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo.

- Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación.

- Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables.

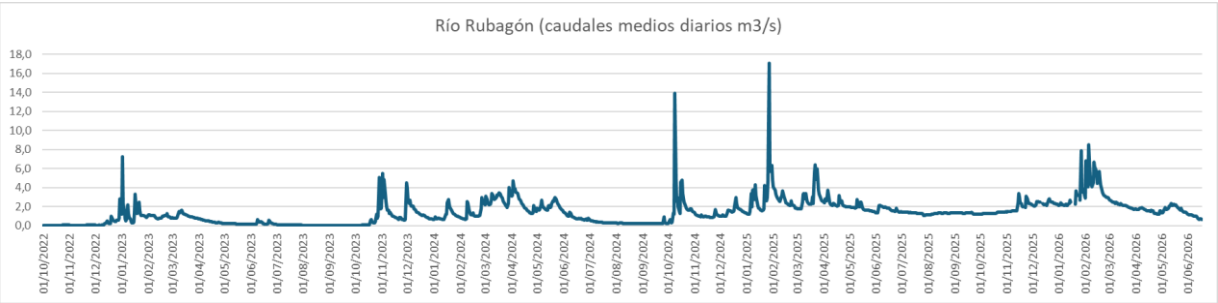
- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables.

- Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas para que estas alcancen su buen estado o potencial ecológico.

- Facilitar la correcta gestión de los episodios de inundación y agilizar al máximo posible la recuperación de la normalidad.

Como se ve, aunque no se descartan las medidas “grises” como puede ser la construcción de presas para laminación de avenidas, las líneas de trabajo son la prevención, mejora del conocimiento y mejora de las condiciones hidromorfológicas de los cauces. No compartimos la observación de alegante en relación con que la vegetación de ribera bien desarrollada no contribuye a la reducción del riesgo de inundación.

El trasvase de agua desde el Rubagón al Camesa para reducir la peligrosidad de las inundaciones en los municipios ribereños del río Rubagón, exige un análisis de detalle que la planificación hidrológica no puede abordar. Se han analizado los caudales del río Rubagón en Menaza desde noviembre de 2022 que se muestran en gráfico adjunto:



Efectivamente se identifican en los años 2023, 2025 y 2026 dos puntas de 14 y 16 m^3/s (los días 9/10/2024 y 27/1/2025) y 9 de valores superiores a 6 m^3/s. Esto supone, en una aproximación general,

unos volúmenes teóricamente disponibles al trasvase de 0,62 hm^3 en 2023; 1,20 hm^3 en 2024; 3,10 hm^3 en 2025 y 3,12 hm^3 en 2026. Estos volúmenes suponen menos del 1,5% de la capacidad del embalse de Aguilar de Campoo y poder disponer de ellos exigiría una inversión de no menos de 60 millones de euros, si se quieren absorber las avenidas de hasta 16 m^3/s. A la vista de estos datos y con un análisis provisional no parece que la propuesta verifique el más mínimo análisis coste-beneficio.

Alegación 6.

DU-06. RELEVANCIA DEL REGADÍO Y SOSTENIBILIDAD y DU-07. OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA OFERTA DE RECURSOS HÍDRICOS-INFRAESTRUCTURAS.

Se solicita:

1. *Se citan infraestructuras sin uso, pero eso no supone que no exista demanda, al contrario, están sin uso por las trabas burocráticas, administrativas, cuando no políticas, para su puesta en funcionamiento (p.e. embalse Villagatón). Proponemos que de inmediato se pongan en funcionamiento, en unos casos para aportar más recursos, y en otros para aumentar la zona regable.*
2. *Apoyamos la mejora de los canales principales de riego, actuación que debe contar con la aprobación del proyecto, y de su presupuesto, por parte de las comunidades de regantes beneficiarias.*
3. *Apoyamos la toma en consideración del recrecimiento de embalses propuesto en el Estudio de la Universidad de Burgos (FERDUERO e ITACYL), y su programación para el cuarto y siguientes ciclos de planificación hidrológica.*
4. *Pedimos el desarrollo de las balsas El Moral y Los Riales, en el Cuarto Plan, o alternativa que las sustituya, sin que tengan mayor coste para los regantes ni renunciar al recurso que estas contemplan, ni que suponga una prolongación del problema en el tiempo.*
5. *Desarrollo de las balsas de La Cuezas en el Cuarto Plan, sin más pretextos ni demoras.*
6. *Adelantar sobre lo previsto el llenado total y puesta a disposición de los regantes, del Embalse de Castrovido.*
7. *Regadío de La Armuña:*
    - *Exigimos que figure como prioridad específica del cuarto ciclo de planificación, manteniendo sus demandas y evitando cualquier revisión a la baja de una zona regable declarada de interés general y largamente esperada por el territorio.*
    - *La modernización y culminación de esta zona regable debe vincularse a la fijación de población, el relevo generacional, la diversificación de cultivos, la rentabilidad de explotaciones familiares y el desarrollo de la industria agroalimentaria salmantina.*
8. *Defendemos el recrecido de Santa Teresa como infraestructura estratégica para mejorar garantías del sistema Tormes, permitir el desarrollo de demandas agrarias previstas y reforzar la capacidad de adaptación frente a sequías y cambio climático.*

Respuesta:

1. En la ficha DU-07 simplemente se plantea una reflexión de qué hacer con las infraestructuras sin uso (presas, canales y caminos de servicio). En el caso de presas como Villagatón coincidimos en que se sería interesante ponerlo en funcionamiento para atender demandas,

pero esto lleva unas actuaciones previas que hay que solventar, tanto en la parte de seguridad de la infraestructura como en el ámbito administrativo de la titularidad de la misma.

2. Habitualmente se realizan actuaciones de mejora y modernización de los grandes canales del Estado. De hecho, en el plan hidrológico vigente hay nueve medidas para la mejora de canales con una inversión de unos 70 millones de euros que está en ejecución. Sin embargo, no contribuye a estabilizar esta acción el hecho de que determinadas modernizaciones de regadío se planteen dejando sin servicio estos canales. Este hecho, junto a la realidad de que las mejoras en los canales requieren recuperación de costes a través de la tarifa de utilización del agua, hace que los usuarios sean reticentes a aceptar mejoras que, sin duda son necesarias.
3. Para redactar la Ficha DU-07 se ha tenido en cuenta, al menos en el plano teórico, el estudio que cita la alegante. Eso ha permitido analizar una serie de alternativas de cara al EpTI y valorar sus resultados. A nuestro juicio el estudio aludido tiene muchas limitaciones y simplemente analiza las posibilidades estructurales de las infraestructuras actuales para admitir un teórico recrecido, sin analizar las aportaciones hídricas en detalle, por lo que la viabilidad de las propuestas depende de un análisis de mayor calado. En el Plan vigente hay una medida denominada 6405826 - Estudios de regulación de la cuenca del Duero, cuyo objetivo es realizar un estudio de viabilidad para el aumento de la capacidad de regulación de determinadas infraestructuras del estado en la cuenca del Duero. Se han realizado algunos análisis, pero no se ha desarrollado en su totalidad. En el futuro plan hidrológico se mantendrá esta medida sin menoscabo que en determinados sistemas de explotación se concrete con más detalle, a la vista de los criterios que finalmente se determinen para este tema importante
4. En la Ficha DU-07 del EpTI se indica que con *respecto a la regulación el sistema Órbigo (presas de La Rial y Morales, contempladas en el plan vigente), se está redactando su proyecto de ejecución que se ha encontrado con trabas administrativas de los ayuntamientos afectados para realizar los estudios geotécnicos, supuestamente por el rechazo social que provocan en el territorio, por lo que previsiblemente el incremento de regulación se realice mediante soluciones alternativas como el recrecido de la presa de Selga de Ordás, la ejecución de una balsa lateral en La Milla y la reducción de la demanda del sistema mediante el suministro de recursos a la ZR Manganeses desde el sistema de explotación del Tera*.ha modelado una alternativa a El Moral y los Riales. En la fase de redacción del plan hidrológico se concretará esta solución.
5. Las balsas de las Cuezas están contempladas en el plan vigente y también en las alternativas del EpTI. De hecho, se sigue trabajando en la tramitación de la declaración e impacto ambiental que ha exigido, entre otras acciones, hacer una nueva fase de consulta pública, aclarar una serie de cuestiones colaterales con la actuación pero que a juicio de la autoridad ambiental son relevantes para la declaración. Salvo que haya declaración de impacto ambiental negativa antes de la publicación del futuro plan hidrológico, seguirán considerándose como medidas del futuro plan.
6. El llenado y el comienzo de la explotación del embalse de Castrovido no depende del EpTI ni del Plan Hidrológico sino de la conclusión de las actuaciones de sellado e impermeabilización del vaso del embalse, de la fase de puesta en carga y del inicio de la puesta en explotación.
7. El regadío de la Armuña se considerará en el futuro plan hidrológico, como así se indica en el EpTI, siempre que las administraciones competentes en materia agraria así lo determinen, ya que las medidas del plan deben contar con la validación de los agentes que las financian.

8. A efectos del EpTI, se ha considerado dicho recrecimiento junto con el de otros embalses para analizar algunas alternativas de incremento de regulación. Es importante tener en cuenta que no se ha analizado la viabilidad técnica, ambiental, económica y social de estos recrecimientos que deben realizarse en otro ámbito de la planificación. En caso de que las administraciones competentes en materia agraria propongan el desarrollo de la Armuña se incluirán medidas en el Plan Hidrológico dirigidas a estudiar la viabilidad de la propuesta de la alegante.

Alegación 6bis.

DU-06. RELEVANCIA DEL REGADÍO Y SOSTENIBILIDAD y DU-07. OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA OFERTA DE RECURSOS HÍDRICOS-INFRAESTRUCTURAS.

9. *La sostenibilidad del regadío no puede identificarse con reducción de derechos. Debe medirse también por empleo generado, renta agraria, eficiencia real, producción de alimentos, mantenimiento de población y capacidad de atraer inversiones agroalimentarias.*
10. *Los ahorros derivados de modernización deben revertir prioritariamente en mejorar la garantía de los regadíos existentes y, cuando sea viable, en consolidar o ampliar perímetros dentro de las zonas previstas, no en recortes automáticos de dotaciones o derechos.*
11. *Solicitamos dotaciones realistas adaptadas a cultivos, comarca, sistema de riego, eficiencia de aplicación y condiciones climáticas, evitando criterios excesivamente conservadores que impidan la viabilidad económica de las explotaciones.*
12. *Debe reconocerse la importancia de los regadíos de pequeña y mediana dimensión, incluidos riegos particulares, explotaciones familiares y aprovechamientos vinculados a ganadería, que tienen un papel esencial en la estructura agraria salmantina.*
13. *Las inversiones en canales, balsas, bombeos, telecontrol y seguridad de presas deben financiarse con participación pública suficiente, evitando trasladar íntegramente sus costes a comunidades de regantes que ya soportan energía, mantenimiento e inversiones de modernización.*
14. *En la implantación de los Planes de Emergencia se ha de recurrir a fondos de los PGE y no a cargarlo a los usuarios del agua a través del Canon y la Tarifa.*

Respuesta:

Las alegaciones formuladas ponen de manifiesto la relevancia del regadío desde el punto de vista socioeconómico —empleo, generación de renta, producción agroalimentaria, mantenimiento de población o atracción de inversiones— así como cuestiones relativas a la gestión de dotaciones, modernización, tipología de explotaciones y financiación de infraestructuras.

Esta Confederación reconoce plenamente la importancia de estos factores en el ámbito territorial de la demarcación, como se pone de manifiesto en la Ficha DU-06. No obstante, en el marco de la planificación hidrológica, la sostenibilidad del regadío debe evaluarse conforme a los criterios establecidos en la Directiva 2000/60/CE (DMA) y su transposición al ordenamiento jurídico español a través del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), que priorizan: el logro del buen estado de las masas de agua, la compatibilidad entre demandas y disponibilidades del recurso y la racionalidad y sostenibilidad del uso del agua.

En este sentido, el EpTI —en particular las fichas DU-06 y DU-07— no identifica la sostenibilidad exclusivamente con la reducción de derechos, sino con la compatibilización entre el desarrollo del

regadío y los límites físicos y ambientales del recurso, incorporando además los efectos del cambio climático y la necesidad de mantener las garantías de suministro a medio y largo plazo.

En relación con los ahorros derivados de la modernización (punto 10 de esta alegación), el EpTI plantea la modernización como medida prioritaria de adaptación que mejora la eficiencia y la garantía de los regadíos existentes. No obstante, dichos ahorros deben contribuir también a evitar incrementos netos de presión sobre las masas de agua que puedan comprometer los objetivos ambientales o el equilibrio del sistema, permitiéndose desarrollos adicionales únicamente cuando exista viabilidad económica, social y ambiental y disponibilidad de recursos.

Respecto a las dotaciones de riego (punto 11 de esta alegación), éstas se establecen conforme a criterios técnicos homogéneos definidos por la planificación hidrológica y la normativa aplicable, considerando cultivos, condiciones climáticas, sistemas de riego y eficiencia, pero también la necesidad de asegurar la sostenibilidad del recurso y el cumplimiento de los objetivos ambientales. En este contexto, eventuales limitaciones o ajustes responden a criterios de garantía y resiliencia del sistema, especialmente en escenarios de mayor incertidumbre hidrológica.

Respecto a las dotaciones de riego (punto 11 de esta alegación), debe señalarse, en primer término, que resulta necesario precisar a qué tipo de dotación se refiere la alegación, ya que en la práctica concurren distintos conceptos con significado y alcance diferente, entre los que cabe distinguir:

- Las dotaciones concesionales históricas, en muchos casos otorgadas hace décadas bajo condiciones tecnológicas distintas (por ejemplo, riegos a manta), que no responden necesariamente a criterios actuales de eficiencia.
- Las dotaciones que figuran en la normativa, utilizadas en la planificación para nuevas concesiones o revisiones, definidas conforme a criterios técnicos homogéneos.
- Las dotaciones orientativas compatibles con la gestión de los embalses (Comisiones de desembalse) en función de la disponibilidad coyuntural del recurso.

Adicionalmente, en relación con las dotaciones que figuran en la normativa, debe destacarse que su determinación se basa en criterios técnicos sólidos y contrastados, entre los que cabe señalar:

a) La consideración de los factores agroclimáticos comarcales, que permiten adaptar las necesidades hídricas a las condiciones específicas de cada zona.
b) Su obtención a partir de series de datos suficientemente amplias, que incorporan años secos y húmedos, evitando sesgos derivados de situaciones coyunturales.
c) La utilización de referencias técnicas consolidadas como Inforriego, ampliamente empleadas para la estimación de necesidades de riego.
d) La incorporación del principio de uso racional y eficiente del agua, en línea con las exigencias de la planificación hidrológica y la normativa vigente.

Por todo ello, las dotaciones consideradas en la planificación se ajustan razonablemente a las necesidades reales de los cultivos en condiciones actuales de explotación, sin que pueda sostenerse que supongan una infraestimación sistemática de dichas necesidades.

En cuanto al reconocimiento de los regadíos de pequeña y mediana dimensión (punto 12 de esta alegación), el EpTI considera al conjunto del sector agrario como elemento relevante en la presión

sobre los recursos hídricos y en la aplicación de medidas, sin distinción por tamaño de explotación. Las medidas propuestas (modernización, mejora de eficiencia, control de extracciones o adaptación de dotaciones) son de carácter general, sin perjuicio de las políticas específicas de apoyo al medio rural que corresponden a las Administraciones agrarias competentes.

En relación con la financiación de infraestructuras hidráulicas y de seguridad de presas (puntos 13 y 14 de esta alegación), debe señalarse que la planificación hidrológica se rige por el principio de recuperación de costes de los servicios del agua, incluyendo costes ambientales y del recurso (art. 9 DMA y art. 111 bis TRLA). Este principio implica la participación de los usuarios mediante los instrumentos económicos vigentes (canon de regulación y tarifa de utilización del agua), sin perjuicio de la concurrencia de financiación pública cuando así se establezca por las Administraciones competentes.

Asimismo, el EpTI contempla un importante esfuerzo inversor en modernización, mejora de infraestructuras y seguridad, cuya ejecución requerirá la colaboración entre Administraciones y usuarios, en función de las competencias y de los instrumentos presupuestarios disponibles.

En consecuencia, las cuestiones planteadas en las alegaciones son en gran medida coincidentes con los objetivos del EpTI en cuanto a mejora de la eficiencia, garantía y viabilidad del regadío, si bien deben enmarcarse en el cumplimiento de la normativa vigente, que exige asegurar el equilibrio entre los usos socioeconómicos del agua, la disponibilidad del recurso y la consecución de los objetivos ambientales.

Alegación 7.

Respecto al análisis común de la Ficha DU-06 y DU-07 se apoya las conclusiones y propuestas de mayor capacidad regulatoria de los ríos del Estudio de la Universidad de Burgos y FERDUERO, y solicita que debe ser considerado en todos sus extremos, yendo más allá de un mero estudio de las propuestas, sin más avances.

El cambio climático exige más capacidad de almacenamiento, regulación y gestión flexible del recurso, no únicamente restricciones de demanda. [..].

ASAJA considera insuficiente que el incremento de regulación quede reducido a estudios sin compromiso de ejecución. El cuarto ciclo debe incluir programación, calendario y dotación presupuestaria para las actuaciones viables.

Además, se solicita:

1. *Que los estudios de infraestructuras incorporen indicadores socioeconómicos provinciales: empleo agrario, valor añadido agroalimentario, relevo generacional, despoblación, rentabilidad de explotaciones y capacidad de sustitución de bombeos subterráneos por recursos superficiales.*
2. *Compromisos concretos de recrecimientos de presas como la de Santa Teresa en Salamanca, otras soluciones de regulación que permitan mejorar garantías y reducir vulnerabilidad frente a sequías como las balsas laterales donde sea la opción aconsejable (p.e. Órbigo y Carrión), planificación de nuevas presas viables –económica, ambiental y socialmente-, finalizar la modernización de todos los regadíos no modernizados en la cuenca, y concluir los nuevos regadíos que ya preveía el Plan*

vigente y que no se han ejecutado por incumplimientos de la administración del Estado., desbloqueando desarrollos agrarios estratégicos como La Armuña.

3. *Las balsas de Las Cuezas debe ser una prioridad dada la carencia de regulación histórica de la cuenca del Carrión, los motivos medioambientales no pueden ser la excusa para que la duración de todos los procedimientos relacionados con ellas tienda a infinito.*
4. *Se precisa de mayor regulación en la cuenca del Carrión, por lo que se debería replantear la construcción del embalse de Vidrieros –descartado en 1991 por una Evaluación de Impacto Ambiental negativa que se entiende que tuvo un origen político.*
5. *Aumentar el volumen de agua regulada del Pisuerga con las aportaciones de la derivación del río Rubagón (sistema Pisuerga) hacia el embalse de Aguilar, tanto de la zona adyacente al Rubagón como después de que éste desemboque en el Camesa. Evitaría inundaciones recurrentes y aumentaría la disponibilidad del recurso.*
6. *Deberían volver a incluirse en el futuro PHD las actuaciones que había en el plan anterior al actual: RP río Burejo, RP río Boedo, RP Valle de Cerrato, Sector V Cea-Carrión.*

Respuesta:

1. Se recoge la propuesta. Sería interesante incorporar, si la información está disponible, estos indicadores que se citan.
2. El ETI recoge los recrecimientos en algunas alternativas para analizar los efectos de aumentar la regulación en la cuenca. No existe ningún estudio de viabilidad de estos recrecimientos. Las balsas laterales del Órbigo y del Carrión están incluidas en el plan vigente dado que se consideró una buena opción para la satisfacción de garantías sin comprometer en exceso el estado de las masas de agua. Estamos de acuerdo en finalizar la modernización de los regadíos y en avanzar en los nuevos regadíos previstos en el plan vigente. No obstante, en este nuevo plan se revisarán todas estas cuestiones.
3. Las balsas de las Cuezas están incluidas en el Plan Vigente y actualmente siguen su trámite ambiental.
4. No parece factible a día de hoy replantear la construcción del embalse de Vidrieros dado que se situaría dentro del actual Parque Natural de la Montaña Palentina y esta actuación no encaja en sus normas de protección.
5. .En la respuesta a la alegación nº 5 de este escrito se hacen unos comentarios sobre la propuesta del Rubagón, con los escasos datos que ofrece el escrito de alegaciones.
6. En efecto, en el PHD II ciclo estaba contemplados para el horizonte 2027 la balsa de Valle del Cerrato (3,50 Hm^3), el embalse de Boedo (14,1 Hm^3) y el embalse de Burejo (2,51 Hm^3) en el SE Pisuerga. En dicho plan ya se ponía en duda su viabilidad: *En el horizonte 2027 se prevé un incremento de 4.651 ha en cuencas aledañas al eje regulado del Pisuerga que nacerían al amparo de nuevas regulaciones (Boedo, Burejo, Valle de Cerrato) aunque se ha constado en el balance pertinente de dicho horizonte su escasa viabilidad.*

Estas actuaciones se siguieron contemplando en el borrador del plan vigente, en el horizonte 2033, PHD III ciclo, pero se descartaron del documento definitivo del plan al no ser viables. En concreto, las tres UDAS destinatarias de las regulaciones (DA 2000621 RP Arroyo - balsa Valle del Cerrato, DA 2000071 RP Río Burejo – embalse del río Burejo y DA 2000100 RP Río Boedo - embalse del río Boedo) incumplía los criterios de garantía de la IPH en los horizontes 2033 y 2039.

No obstante, con respecto a la regulación del Boedo, se han seguido realizando análisis. En el año 2022, tras consulta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, sobre la posibilidad de modernizar 400 ha con balsas laterales alimentadas en invierno, se concluyó que era viable en términos de garantía de suministro con una balsa de 3 Hm^3 de capacidad para una demanda de 1,6 Hm^3. Por otro lado, con respecto al embalse del Boedo (con un volumen de 15,1 Hm^3), se descartó el mismo tras analizarlo en conjunto con un nuevo desarrollo de regadío que aumentaba la demanda a 14,327 Hm^3 y concluir que incumplía claramente los criterios de garantía de la IPH (el embalse se llenaba solamente 4 años de una serie de 38). En el plan vigente se mantiene una demanda de 6,162 Hm^3, resultado de considerar 3.135 Ha y una dotación a la baja de 1.995 m^3/Ha. Los criterios de garantía fallan también en todos los horizontes. Se asigna un recurso de 2,6 Hm^3, apenas un 41% de la demanda.

El citado embalse del río Boedo se ha modelado de nuevo tras recibir nueva información por parte de la JCyL sobre la capacidad y la ubicación del posible embalse. En concreto se ha modelado un embalse en el río Boedo con tres volúmenes distintos (9,3; 14,5 y 20 Hm^3) para atender una demanda de 6,2 Hm^3. En los tres casos, la demanda tiene déficit muy elevados, incumpliendo los tres criterios de garantía de la IPH. Se muestran los resultados en la tabla siguiente.

Vol embalse (Hm^3)	9,3	14,5	20
Dem:6,2 Hm^3	**A**	**B**	**C**
DEF MEDIO (Hm^3)	1,24	0,77	0,64
DEF 1 AÑO (%)	99,95	99,95	99,95
DEF 2 AÑO (%)	198,98	179,8	174,39
DEF 10 AÑO (%)	375,25	311,37	275,35

Según nuestros datos del inventario de recursos, el río Boedo tiene una hidrología muy irregular con años muy secos en los que apenas circula agua. En la serie entre el 80/81 y 2016/2017, aunque el promedio anual es de unos 7 Hm^3, hay 10 años con una aportación menor a 2 Hm^3 (de los que 6 son de menos de 1 Hm^3). Esto hace que los embalses no sean viables al no almacenar un volumen mínimo para atender la demanda en varios años de la serie modelada.

También se ha modelado una demanda menor, de 2,9 Hm^3 (cercana al recurso asignado para la UDA, que es de 2,6 Hm^3). Para el modelo C, el incumplimiento es por muy poco por lo que podríamos decir que para un embalse de 20 Hm^3 se podría atender una demanda anual de 2,9 Hm^3. Pero no parece razonable construir un embalse con más de 6 veces la capacidad de la demanda a satisfacer.

Por otra parte, la balsa del sector V (3,9 Hm^3), dentro del SE Esla se contempló en el PHD II ciclo en el horizonte 2027. También había dudas sobre su viabilidad.

Posteriormente, en el año 2022, durante la consulta pública del plan vigente (PHD III) se volvió a analizar su viabilidad desde el punto de vista del cumplimiento de garantías de la IPH. En el Borrador de Plan Hidrológico se incluyó la DA 2000282 ZR Sector V Cea-Carrión que estaría operativa en el horizonte 2033 con un volumen demandado de 6,649 Hm^3 (1.220 Ha con una dotación bruta de 5.452 m^3/Ha) y que tomaría el agua de una futura balsa (la balsa del Sector V Cea-Carrión) que se diseñaría con una capacidad de 3,9 Hm^3. La UDA 2000282 ZR Sector V Cea-Carrión, diseñada para llenarse

fundamentalmente con agua de invierno del río Cea y con parte del agua que circule durante la campaña de riego por el canal del trasvase Cea-Carrión, incumpliría los criterios de garantía de la IPH en el horizonte 2039 (en el que se incorporan los efectos de la reducción de aportaciones). En concreto el criterio de déficit a 10 años, cuyo valor es del 119,5% cuando lo máximo admisible es el 100% de la demanda anual. Sí cumpliría los criterios de garantía en el horizonte 2033 (sin incorporar los efectos del cambio climático). Hay que tener presente, además, que la capacidad de la balsa es inferior a la demanda caracterizada, de manera que sería necesaria agua del río Esla en verano para completar el suministro (suponiendo un modus operandi similar al de la UDA 2000041 ZR Sector IV Cea-Carrión).

Al no cumplir los criterios de garantía en el horizonte 2039 (el que tiene en cuenta la reducción de aportaciones debida al Cambio Climático), se descartó la DA 2000282 ZR Sector V Cea-Carrión.

Alegación 8.

DU-08. USO URBANO Y NUIEVOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA DE AGUAS POTABLESS.

1. *ASAJA considera que el uso urbano y los nuevos requisitos de la Directiva de aguas potables deben abordarse sin trasladar al sector agrario nuevas restricciones preventivas sobre captaciones o perímetros de protección cuando no exista una afección acreditada y proporcional.*
2. *La protección de abastecimientos debe compatibilizarse con el mantenimiento de explotaciones agrarias y ganaderas situadas en su entorno, evitando limitaciones genéricas de fertilización, fitosanitarios, riego o actividad ganadera sin informe técnico individualizado.*
3. *ASAJA pide coordinación con ayuntamientos y Junta de Castilla y León para que los perímetros de protección de captaciones se delimiten con precisión, audiencia a los afectados y medidas compensatorias cuando impliquen pérdida efectiva de uso o valor de las parcelas.*

Respuesta:

El régimen jurídico de los perímetros de protección de captaciones destinadas al consumo humano se encuentra actualmente regulado en los artículos 243 ter, 243 quater y 243 quinquies del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), así como en su Anexo VIII. En particular:

El artículo 243 ter del RDPH establece que se deben determinar perímetros de protección para las captaciones de agua destinada a consumo humano que cumplan ciertos criterios, con la finalidad de preservar su calidad, previendo que dentro de dichos perímetros puedan establecerse condiciones o limitaciones de usos y actividades.

El artículo 243 quater del RDPH establece que la delimitación de los perímetros de protección se realizará mediante el correspondiente procedimiento administrativo, que incluye trámite de información pública, garantizando la participación de los titulares afectados.

El artículo 243 quinquies del RDPH regula la delimitación de dichos perímetros mediante la definición de zonas diferenciadas, en las que podrán establecerse restricciones específicas de usos y actividades, lo que implica que dichas limitaciones deben concretarse en función de cada delimitación y no tienen carácter genérico o uniforme.

El Anexo VIII recoge recomendaciones para la restricción de actividades en las diferentes zonas de los perímetros de protección.

En relación con la solicitud de que no se impongan restricciones en ausencia de afecciones acreditadas (punto 1 de esta alegación), debe señalarse que la política de la Unión Europea en materia de medio ambiente se rige, entre otros, por el principio de acción preventiva, recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Este principio implica que las Administraciones públicas deben actuar anticipadamente para evitar daños al medio ambiente, sin necesidad de que estos se hayan producido o constatado de forma efectiva. En este marco, la delimitación de perímetros de protección y el establecimiento de condiciones en su ámbito no responden únicamente a la existencia de afecciones ya manifestadas, sino a la necesidad de prevenir riesgos para la calidad del agua destinada al consumo humano, garantizando un nivel elevado de protección. En consecuencia, las medidas que puedan adoptarse en estos perímetros no requieren la acreditación previa de un daño efectivo, sino que se justifican en la prevención de posibles impactos, siempre dentro del procedimiento y con las garantías establecidos en el RDPH. No obstante, el enfoque del EpTI plantea reforzar la protección en aquellas zonas donde exista riesgo acreditado.

En relación con la solicitud de evitar limitaciones genéricas sobre actividades existentes (punto 2 de esta alegación), debe señalarse que el propio artículo 243 ter.5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico prevé expresamente esta situación, estableciendo que cuando dentro del perímetro de protección existan actividades o instalaciones previas a su declaración susceptibles de provocar contaminación o degradación del dominio público hidráulico, el organismo de cuenca deberá informar a sus titulares y a las administraciones competentes, previéndose la implantación de un régimen transitorio que permita su adaptación progresiva.

En relación con la solicitud de delimitación precisa de los perímetros de protección, participación de los afectados y coordinación administrativa (punto 3 de esta alegación), debe señalarse que el artículo 243 quater del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece expresamente el procedimiento para su delimitación, garantizando estos extremos. En particular, prevé que la propuesta de perímetro de protección y su zonificación, junto con la documentación técnica que la sustenta, se someta a información pública, con traslado a las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados, y que, una vez analizadas las alegaciones, la delimitación sea aprobada mediante acuerdo motivado del organismo de cuenca. Asimismo, dispone la incorporación del perímetro al Registro de Zonas Protegidas y la comunicación a otras administraciones (catastro, registro de la propiedad, planificación urbanística), asegurando la coordinación interadministrativa.

Por otra parte, en la delimitación de los perímetros mediante la definición de zonas diferenciadas que establece el artículo 243 quinquies, para el caso de captaciones subterráneas se tendrán en cuenta los criterios que recoge la “Guía para el diseño y dimensionamiento de perímetros de protección de captaciones de aguas subterráneas destinadas al consumo humano” publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España CN-IGME (CSIC) en noviembre de 2025. Esta guía considera las diferentes tipologías de acuíferos, parámetros hidrogeológicos e hidrodinámicos y su relación con la vulnerabilidad a la contaminación, para establecer el tamaño de las zonas que conformen cada perímetro de protección.

Por lo que respecta a las posibles afecciones económicas, el RDPH no establece un régimen general de compensaciones, si bien estas cuestiones deberán abordarse, en su caso, conforme a la normativa sectorial aplicable y a los instrumentos que puedan establecer las Administraciones competentes.

Alegación 9.

La asociación alegante reclama que la coordinación interadministrativa se traduzca en ventanilla única, criterios homogéneos y plazos ciertos para expedientes de concesiones, modificaciones de características, autorizaciones en zona de policía, evaluación ambiental y obras vinculadas a regadío o ganadería.

Es imprescindible evitar que CHD, Junta de Castilla y León, ayuntamientos y órganos ambientales emitan requerimientos sucesivos o contradictorios que paralizan inversiones agrarias durante años y generan inseguridad jurídica al administrado.

La coordinación debe servir para desbloquear proyectos estratégicos como La Armuña, modernizaciones de regadío, sustitución de bombeos, recarga de acuíferos, infraestructuras de regulación y tramitaciones de bajo volumen para usos ganaderos.

ASAJA pide que los informes de compatibilidad con la planificación hidrológica se emitan con criterios públicos, previsibles y accesibles, de forma que agricultores, ganaderos y técnicos puedan preparar expedientes viables sin depender de interpretaciones cambiantes.

La participación pública debe ser real y no meramente formal. Las observaciones de organizaciones agrarias, comunidades de regantes, ayuntamientos rurales y Junta de Castilla y León deben incorporarse al documento final cuando estén justificadas técnica y socialmente.

No es creíble la voluntad de la CHD de llegar a acuerdos de coordinación con otras administraciones cuando empieza imponiendo todos sus planteamientos, no trabaja en el consenso, y aprueba un Plan Hidrológico (como el del tercer ciclo), aprobado por Decreto en Consejo de ministros tras un informe negativo del Consejo del Agua, al que se opusieron representantes de los usuarios y, sobre todo, la propia Junta de Castilla y León.

Respuesta:

La Ficha DU-09 pone el acento en la necesidad de incrementar la coordinación y cooperación administrativa en el ámbito de la planificación hidrológica; la alegante reclama esa coordinación en el marco de la gestión ordinaria. Siendo un objetivo razonable no hay que olvidar cuáles son las competencias de cada administración lo que puede suponer una mayor lentitud de procedimientos, en especial si éstos confluyen en una única actividad. Sigue quedando pendiente la simplificación administrativa ya que, cada vez que hay cambios normativos, no suelen ser para simplificar sino para una mayor complejidad. Al igual que los usuarios también las administraciones padecemos esta complejidad que está al servicio, en este caso, de las garantías. Precisamente la variedad de competencias sobre una misma actividad puede generar esas incoherencias de las que no son culpables quienes deben verificar los requisitos legales sino de las normas que regulan la actividad.

Los proyectos estratégicos deben quedar perfectamente definidos en la planificación estratégica señalando objetivos, plazos y responsabilidades; cuando esto no se delimita claramente las consecuencias son los retrasos, las incertidumbres y el desaliento de los afectados. Ya que se cita en la alegación, el desarrollo del nuevo regadío de La Armuña es un ejemplo de lo que estamos señalando: la decisión de transformar 46.000 ha en regadío tomada en el año 1973 (Decreto 1012/1973, de 10 de mayo), únicamente ha cristalizado en 15.000 ha transformadas después de 53 años. Este desequilibrio

entre la idea y la ejecución vuelve a poner sobre la mesa las decisiones mal diseñadas y estratégicamente poco fundadas, bien por falta de medios, por falta de voluntad política o por atender a demandas sociales que son incompatibles con la realidad de la administración e incluso del país. Por ello cuando desde determinadas instancias se pide duplicar la superficie de regadío en la demarcación hidrográfica simplemente por una cuestión comparativa con cuencas similares, se aboca a los centros de decisión a que tomen líneas de trabajo que pueden devenir en situaciones como la señalada.

Los informes de compatibilidad que forman parte de la instrucción de expedientes de concesiones o autorizaciones se emiten con arreglo a la normativa vigente, tanto la general de aguas como la específica de la demarcación hidrográfica del Duero. Y tanto unas como otras disposiciones son públicas, ciertas y accesibles para todos los ciudadanos y, singularmente para aquellos técnicos al servicio de los usuarios, siempre que cuenten con la adecuada formación. Por otra parte, las resoluciones de los procedimientos tienen la posibilidad de ser corregidas por los tribunales si no se ajustan a la normativa vigente, para lo cual existen vías adecuadas. No debe olvidarse que la instrucción de los expedientes de concesión o autorización tienen precisamente la misión de validar las actividades desde nel punto de vista del uso del dominio público hidráulico, no pueden ser un mero decorado para dar cobertura legal a cualquier propuesta que se presente, incluyendo las más nocivas para el resto de usuarios o el medio ambiente. La viabilidad automática de cualquier expediente que se presente no es posible. Como dice el maestro de derecho administrativo García de Enterría, toda la actividad de la Administración Pública ha de incardinarse en un concreto procedimiento administrativo, en garantía de acierto de la Administración y como derecho del ciudadano.

Las observaciones que presentan las organizaciones sindicales agrarias al igual que las del resto de colectivos deben ser analizadas y valorada su inclusión en los documentos de planificación, tal y como señala el artículo 79 del RPH, siempre que estén justificadas técnica, social, ambiental y económicamente. Cualquier propuesta que bajo alguno de estos criterios no se encuentre justificada no podrá incorporarse a los documentos finales, de lo cual se deberá dar cuenta en los informes a las alegaciones.

La competencia para aprobar los planes hidrológicos de las demarcaciones intercomunitarias es del Gobierno de España, para lo cual cuenta con los procedimientos de informe y asesoramientos que se sustancian en los consejos del agua de las demarcaciones hidrográficas y en el consejo nacional del agua, órganos para fomentar la información, consulta pública y participación activa en la planificación hidrológica, tal y como señala el artículo 35 del TRLA.

Alegación 10.

DU-10. NUEVOS USOS DEL AGUA.

Sobre las nuevas autorizaciones ambientales:

La autorización de nuevas demandas industriales debe condicionarse a disponibilidad real de recurso, ausencia de afección a derechos agrarios preexistentes y evaluación acumulada por sistema de explotación, especialmente en escenarios de sequía y cambio climático.

ASAJA exige que los nuevos usos vinculados a hidrógeno, centros de datos, almacenamiento energético o renovables no tengan prioridad práctica sobre el uso agrario y ganadero ni reduzcan garantías, dotaciones o posibilidades de desarrollo de regadíos existentes o previstos. Los centros de datos y usos

energéticos deberán acudir preferentemente a aguas regeneradas, circuitos cerrados, refrigeración eficiente o recursos no comprometidos, sin trasladar al regadío nuevas restricciones por demandas industriales sobrevenidas.

ASAJA se opone a estos nuevos usos, salvo que se cambie la opinión respecto a los usos ganaderos, y en todo caso sin cambiar el orden de prelación, y sin que ello suponga reducción de caudales ya asignados a la agricultura. Además:

- *Si se admite que determinados nuevos usos tienen volúmenes reducidos y pueden autorizarse por su interés económico, el mismo criterio debe aplicarse a usos ganaderos, agroalimentarios y de explotaciones agrarias de bajo consumo, que tienen un interés social y territorial evidente.*
- *Pedimos concesiones o autorizaciones, en todos los casos, y tanto de aguas profundas como superficiales, para usos ganaderos, para cualquier proyecto tanto de ganadería extensiva como de ganadería intensiva.*
- *ASAJA pide que el Plan reconozca expresamente la prioridad de abastecimiento ganadero y de actividades agroalimentarias vinculadas al territorio frente a proyectos industriales externos que puedan consumir agua sin fijar población ni generar valor directo para el sector primario local.*

Respuesta:

Las actividades ligadas a los nuevos usos del agua, vinculados a las industrias de producción de energías renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos, no supondrá en ningún caso una disminución de recursos para la agricultura o la ganadería consolidados, ya que el orden de preferencia entre diferentes usos y aprovechamientos, establecido en el artículo 60.3 del TRLA y en el artículo 11 de la Normativa del Plan Hidrológico, sitúa los usos de regadío y ganaderos con prevalencia sobre los usos industriales.

El cambio climático es un tema transversal que se aborda para todos los problemas detectados en este esquema de temas importantes, calculándose para cada escenario los índices de explotación, lo que permite determinar los sistemas sobre los que existe disponibilidad de recurso para estos nuevos usos.

En cuanto a posibles restricciones en periodos de sequía para estos usos, esta es una cuestión que se aborda en el Plan Especial de Sequías (PES) aprobado por Orden TEC/601/2026, de 1 de junio. El PES señala diversas estrategias de gestión del agua en los distintos escenarios de sequía y escasez, que serán los que apliquen en esas circunstancias. Pero no es el EpTI, de identificación de los temas importantes y posibles soluciones, donde debe abordarse esas situaciones excepcionales que tiene su marco legal y administrativo en el PES.

Los parques eólicos y plantas fotovoltaicas precisan agua para su construcción y para algunas operaciones de mantenimiento (limpieza de paneles), siendo los volúmenes demandados no significativos. Por otra parte, las instalaciones industriales para la producción de compuestos químicos capaces de almacenar los excedentes de energías renovables como son el hidrógeno verde, el amoniaco, metanol, etc., pueden suponer un uso consuntivo del agua acompañado de grandes volúmenes para la refrigeración que, en algunos casos, revierten al medio hídrico.

La alternativa elegida para este tema importante propone el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos sólo en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el

cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua y no que se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, entre ellos el regadío o la ganadería.

Pese a la oposición del alegante a otorgar recursos hídricos a estos nuevos usos, éstos se encuentran recogidos en la planificación estratégica energética española, en documentos como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2022/30, la Estrategia de Almacenamiento Energético, la "Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable". Por lo tanto, el resto de planificaciones sectoriales deben contar con esta estrategia de país siempre que no se perjudique a otros usuarios existentes (no a los futuros que son desconocidos) y cumpla los requisitos normativos de la gestión del agua.

Estos documentos estratégicos en materia de energía establecen objetivos generales, en términos de potencia instalada o capacidad de almacenamiento en determinados horizontes temporales, sin acometer una ordenación territorial del necesario despliegue de estos proyectos ni establecer criterios para su ubicación. Por ello, la redacción de los planes hidrológicos adolece de una total falta de datos para poder establecer las necesidades hídricas de estos nuevos usos y la disponibilidad del recurso en función del sistema de explotación en el que se planifiquen dichos proyectos.

En todo caso, la tramitación de nuevas concesiones de aguas superficiales o subterráneas o derivaciones temporales con destino a estos proyectos contará con un informe acerca de su compatibilidad con el vigente plan hidrológico, teniendo en cuenta la coherencia con los usos existentes.

Respecto a la demanda de concesiones o autorizaciones, en todos los casos, para usos ganaderos, tanto de ganadería extensiva como de ganadería intensiva, el EpTI no puede atenderla de manera general. Son las tramitaciones específicas de cada expediente y los condicionantes de cada caso, tipo de uso, ubicación, origen del agua e impacto de la actividad en las masas de aguas, los que determinan qué proyectos ganaderos pueden ser viables y cuáles no.

Actualmente el uso ganadero en la planificación hidrológica vigente del Duero se encuentra en orden precedente respecto a los usos industriales. Este orden de prioridad será revisado en fase de redacción del plan hidrológico para lo que se tendrá en cuenta esta alegación y el resto de las presentadas sobre esta materia.

4.38. Escrito de observaciones Nº 048

Presentado por:

En nombre de RIEGOS IBERIA REGABER SA.

Alegación 1.

Se solicita que las consideraciones y propuestas contenidas en el documento adjunto puedan ser tenidas en cuenta dentro del proceso de planificación hidrológica actualmente en curso, dejando constancia de esta aportación en el marco del procedimiento de participación pública.

Se propone que el MITECO y las Confederaciones Hidrográficas, en el marco del Cuarto Ciclo de Planificación Hidrológica, incorporen programas específicos de inversión orientados a la modernización inteligente de canales abiertos, como pieza estructural de una política hídrica centrada en la resiliencia, la eficiencia, la digitalización de infraestructuras y la seguridad del suministro a largo plazo: digitalización mediante compuertas automáticas y control en tiempo real con el fin de reducir las pérdidas de transporte (estimadas históricamente en el 30-40 %) y las pérdidas operacionales (derrames por regulación no coordinada, desajustes oferta-demanda); reforzar la garantía del suministro, la eficiencia hídrica y la adaptación al cambio climático.

Respuesta:

Se comparte el objetivo de mejora de la eficiencia y de reducción de pérdidas, que es una línea consolidada de la planificación y ya figura en el EpTI dentro del tema importante DU-07 al hablar de la optimización de las infraestructuras y, específicamente de los canales de transporte. La modernización y digitalización de infraestructuras de transporte y distribución tiene encaje, como medida, en el programa de medidas del plan. Procede una doble cautela: (i) la mejora de la eficiencia técnica no se traduce automáticamente en ahorro a escala de cuenca -puede incluso aumentar el consumo neto si no se acompaña de la revisión concesional y del control del ahorro efectivo-, por lo que su consideración debe vincularse al ahorro real y a la revisión de derechos, en los términos del artículo 28 de la Normativa del Plan Hidrológico vigente; y (ii) la reducción de derrames y retornos operacionales puede detraer caudales de retorno de los que dependen otros usos o el medio aguas abajo, extremo a evaluar en el balance de cada sistema. La selección de tecnologías corresponde a cada proyecto, con neutralidad tecnológica.

4.39. Escrito de observaciones Nº 049

Presentado por: Sindicato Central del Embalse de Villameca.

En nombre propio.

Alegación 1.

En cuanto al punto 5 "Régimen de caudales ecológicos propuesto" en su anejo 4 "Caudales ecológicos" y referido al Cod. Masa 30400105, Cód. EA ROEA (2156) en San Félix de la Vega (León) aparecen un Qmedio anual de 1.15 m³/seg. y 0.83 m³/seg. en condiciones de sequía, teniendo unas aportaciones equivalentes de 36.41 Hm³/año y 26.26 Hm³/año respectivamente. Como bien conocen, estas dos últimas variables superan con mucho la capacidad de almacenamiento del embalse de Villameca y a la vez exceden también el flujo anual que pasa por ese punto en condiciones normales. Ya se ha planteado la cuestión en varias sesiones de la Junta de Explotación Órbigo-Tuerto, estando de acuerdo todos los actores implicados a la vez el Servicio de guardería fluvial del Organismo también lo defiende. Ese dato propuesto desde la propia Confederación Hidrográfica del Duero debería estar en valores próximos o no superar los 0.3 m³/seg. en condiciones de normalidad. Por ello, entendemos que se debería corregir de inmediato, teniendo en cuenta que el punto de aforos es la parte baja de nuestro tramo de río regulado y apenas quedan dos puntos de toma de todos los componen nuestra red.

Respuesta:

Se agradece la propuesta y se toma nota para su análisis en la fase del Plan Hidrológico.

Alegación 2.

La masa de agua ES020MSFP000200655 (Embalse de Villameca), de la que dependemos como entidad básicamente relacionada con el riego, y es algo que venimos planteando y reiterando en múltiples ocasiones ante el Organismo de cuenca, dispone de poca capacidad de embalsado para las Has. adscritas a su zona regable. Los regantes del "Tuerto" estamos condicionados por esa variable, entendemos que se podría paliar en parte este condicionante aportando flexibilidad al resguardo exigido en los meses próximos al inicio de la campaña de riego el 1 de abril de cada año (meses de marzo a junio). Corremos el riesgo, como está sucediendo en las últimas campañas de riego, que por ser abultados esos resguardos sucede que no llenamos en embalse a su capacidad máxima por caer de forma brusca las aportaciones al mismo una vez que suben las temperaturas y los días son más largos con mayores horas de luz y por tanto mayores pérdidas.

Respuesta:

Los resguardos de los embalses están calculados para laminar las avenidas de diseño de las presas y forman parte de las normas de explotación de las presas y embalses. Por otro lado, dichos resguardos se aprueban anualmente en Comisión de Desembalse. Los resguardos a mantener en cada presa no son competencia del EpTI ni de ningún otro documento del Plan Hidrológico.

Alegación 3.

Aparte de lo manifestado y de lo trasladado por FERDUERO, de la que formamos parte.

Respuesta:

La respuesta a las consideraciones que hace FERDUERO se hacen en la sección de Respuesta a la POS N087.

4.40. Escrito de observaciones Nº 050

Presentado por: Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos.

En nombre propio.

Alegación 1.

Necesidades de Nuevas Obras de Regulación

La planificación de nuevas infraestructuras hidráulicas requiere priorizar las demandas existentes ante la dificultad histórica de aprobar nuevos grandes embalses.

- ***Alternativas a Omaña y Vidrieros**. […] Actualmente se tramitan soluciones definitivas mediante las balsas del Órbigo y de las Cuezas. Es prioritario impulsar estas obras para no comprometer el desarrollo de la zona regable propia del embalse de Riaño.*
- ***Abastecimiento de Segovia y Acuífero de Los Arenales:** Diversas propuestas para paliar la sobreexplotación hídrica (como la presa de Carbonero el Mayor, Guijasalbas o el recrecimiento de El Tejo) han recibido DIAs desfavorables.*
- ***Presa de El Tejo:** Tras una DIA desfavorable para su recrecimiento, el embalse se encuentra actualmente vacío por necesidad de reparación. Debe evitarse su demolición y proceder a su arreglo sin incrementar el volumen estipulado, con el fin de recuperar el suministro a El Espinar. Mientras tanto, el abastecimiento se garantiza mediante la elevación desde la presa de Revenga.*
- ***Propuesta de Ciguiñuela:** Se planteó un embalse de 29 hm³ para aprovechar los sobrantes del Pontón Alto. Sin embargo, se prevé inviable debido a la fuerte oposición local y ecologista, a que no figura en el Plan Hidrológico 2022-2027, y a la alta probabilidad de obtener una DIA desfavorable.*

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, procede recordar, con carácter previo, que el Esquema de Temas Importantes constituye un documento intermedio del proceso de planificación hidrológica, orientado a la identificación de los principales problemas de la demarcación y al análisis de alternativas generales de actuación, sin que sea el instrumento adecuado para la incorporación o validación singularizada de obras e infraestructuras concretas.

No obstante, la alegación pone de manifiesto una cuestión relevante desde la perspectiva de la planificación, como es la necesidad de seguir mejorando la garantía de los recursos, la capacidad de regulación y la seguridad del abastecimiento y del regadío en determinados ámbitos de la demarcación. Estas materias forman parte del objeto propio del Plan Hidrológico, tanto en su diagnóstico como, en su caso, en la definición del programa de medidas.

En este sentido, las propuestas incluidas en la alegación serán tenidas en cuenta como aportación al análisis de necesidades de regulación y garantía, especialmente en aquellos sistemas o territorios donde concurran problemas de disponibilidad, sobreexplotación de recursos subterráneos, vulnerabilidad del abastecimiento o limitaciones para el desarrollo de actuaciones ya previstas. Ello no implica, sin embargo, que el Esquema de Temas Importantes deba pronunciarse favorablemente sobre

infraestructuras concretas ni que proceda su incorporación automática al futuro Plan, ya que tal decisión exige una valoración técnica y ambiental, una compatibilidad territorial, aceptación social, eficiencia económica y encaje en la planificación vigente.

Con respecto a las concretas infraestructuras que se citan se debe recordar que la regulación adicional de Órbigo, Carrión están incluidas en el Plan Hidrológico vigente. Pese a ello el agente responsable de la regulación del Órbigo ha decidió dar una solución alternativa a la propuesta en la planificación y que se cita en la Ficha DU-07. Con respecto a la regulación adicional del Eresma se recuerda que una (Carbonero el Mayor) tiene informe ambiental negativo, y Guijasalbas se excluyó del Plan vigente por falta de viabilidad. Ciguiñuela se descartó en la planificación vigente debido a la negativa del ayuntamiento de Segovia a esta infraestructura, más que a un problema ambiental o crítica del sector conservacionista; curiosamente el ayuntamiento de Segovia ha presentado una alegación al presente EpTI en la que reclama esta infraestructura, sin duda debido a la situación actual del abastecimiento en el sur de la provincia de Segovia. Y relacionado con ello, la propuesta de recrecido del Tejo, una vez vaciado en 2025 por problemas de seguridad, presenta demasiadas incertidumbres en este momento.

Por todo ello, la alegación se considera parcialmente estimada, en el sentido de que las necesidades de mejora de la regulación, de refuerzo de la garantía y de búsqueda de soluciones estructurales en los ámbitos citados serán consideradas en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico. No obstante, no procede incorporar en el Esquema de Temas Importantes una determinación específica de impulso o validación de las obras concretas mencionadas, al exceder ello del contenido y alcance propios de este documento, si bien se revisará cada una de estas infraestructuras en fase de redacción de Plan Hidrológico.

Alegación 2.

Seguridad y Mantenimiento de Presas

- *Es imprescindible modernizar la instrumentación, el tratamiento y la transmisión de datos, renovando las instalaciones de automatización ante la rápida evolución de la tecnología.*
- *Resulta prioritaria la implantación de los planes de emergencia*
- *Es urgente resolver la situación administrativa de la Presa de Villagatón actualmente fuera de servicio.*

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, y sin perjuicio de lo ya señalado en este documento acerca del alcance propio del ETI, procede indicar que las cuestiones planteadas presentan indudable relevancia desde la perspectiva de la seguridad y adecuada gestión de las infraestructuras hidráulicas.

En particular, la necesidad de modernizar la instrumentación, los sistemas de tratamiento y transmisión de datos, así como de renovar las instalaciones de automatización, resulta coherente con la evolución tecnológica y con las exigencias actuales de explotación y control de la seguridad de las presas. En este sentido, se trata de una línea de actuación plenamente pertinente en el ámbito de la gestión de estas infraestructuras. Asimismo, la alegación pone acertadamente de manifiesto la prioridad de la implantación de los planes de emergencia, cuya obligatoriedad deriva de la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses.

La presa de Villagatón, en el subsistema Tuerto, es una presa construida por la Comunidad Autónoma de Castilla y León para garantizar los riegos tradicionales del río Porquera, tributario del rio Tuerto por la derecha. Una vez finalizada su construcción, los regantes que serían los futuros beneficiarios se negaron al aprovechamiento del agua embalsada por esta presa, lo que devino, junto a otros problemas administrativos, en que lleva más de 20 años con el dique construido y sin poder llenarse. La solución para poner en explotación esta infraestructura hubiera sido que asumiera su explotación y mantenimiento la administración que la construyó; sin embargo, ante la imposibilidad de esta solución por impedimento legal de la normativa autonómica (que sin embargo no puso obstáculo a su construcción), la administración autonómica ha intentado de diversas formas que la infraestructura pasara a formar parte de otras entidades (CHD, usuarios, sindicato central, …). Este traspaso no está exento de dificultades administrativas además de las técnicas que conlleva tener una infraestructura sin uso durante más de 20 años. La CHD está trabajando con los usuarios del subsistema Tuerto, con la DGA y con la comunidad autónoma para poder poner en servicio esta presa con total garantía jurídica y técnica de los usuarios y de la infraestructura, respectivamente. Dicho esto, debe indicarse que la resolución de situaciones singulares relacionadas con la explotación, regularización o puesta fuera de servicio de presas concretas excede del contenido propio del Esquema de Temas Importantes.

Por todo ello, la alegación se considera parcialmente estimada, en el sentido de que se comparte la relevancia de avanzar en la modernización tecnológica de las presas, en la implantación efectiva de los planes de emergencia y en la atención a situaciones singulares que puedan afectar a la seguridad y explotación de determinadas infraestructuras. No obstante, no procede incorporar en el Esquema de Temas Importantes determinaciones específicas referidas a la situación administrativa o funcional de una presa concreta.

Alegación 3.

Modernización de Canales

- *Los canales antiguos que no van a ser sustituidos por conducciones enterradas precisan ser reconstruidos para minimizar las pérdidas de agua como en el Canal del Pisuerga.*
- *Existen canales fuera de uso que acumulan vegetación. La CHD debe buscar una solución definitiva para estas infraestructuras, que previsiblemente implicará rellenarlos y transferir su titularidad a las comunidades de regantes.*

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, se considera pertinente la observación relativa a la necesidad de modernizar los canales en servicio que no vayan a ser sustituidos por conducciones enterradas, a fin de reducir pérdidas y optimizar la explotación, en coherencia con las líneas de modernización de regadíos e infraestructuras ya previstas en la planificación y en actuaciones en curso, como en el Canal del Pisuerga. De hecho, la propia Ficha DU-06 se habla justamente de modernizar y mejorar los grandes canales del Estado como uno de los objetivos de mejora en la eficiencia del uso del agua.

En cuanto a los canales abandonados, su tratamiento y la eventual cesión o transferencia de titularidad no pueden resolverse con carácter general en el ETI, ya que requieren un análisis individualizado de carácter técnico, jurídico y patrimonial. No obstante, se toma en consideración la necesidad de abordar esta problemática en el marco que corresponda. Existen precedentes de cesión de infraestructuras en

uso a comunidades de regantes, pero su articulación debe realizarse mediante el instrumento específico procedente.

Por todo ello, la alegación se considera parcialmente estimada.

Alegación 4.

Intervención en el Canal de Castilla

- *Deben rehabilitarse las esclusas, puentes y acueductos, así como acondicionar el camino de sirga y revisar la señalización.*
- *Se debe encontrar un uso funcional para los numerosos edificios asociados al canal que son propiedad de la CHD.*

Respuesta:

La alegación se estima parcialmente. Se considera pertinente la observación relativa a la necesidad de continuar avanzando en la conservación, restauración y puesta en valor del Canal de Castilla y de sus elementos patrimoniales, en coherencia con su condición de Bien de Interés Cultural y con las actuaciones ya impulsadas para su tratamiento como corredor ecológico y cultural. Más difícil resulta establecer con cargo a qué presupuesto se hace. Actualmente las mejoras del Canal de Castilla al tener un uso de abastecimiento, riego e industrial las sufragan los usuarios del agua, a través de la TUA, en tanto que usan la infraestructura para su suministro. La mejora del aspecto patrimonial y cultural del Canal de Castilla debería tener un marco financiero distinto al actual, en el que estuvieran implicadas las administraciones públicas competentes en materia de cultura y patrimonio cultural del Estado y Comunidad Autónoma. En tanto esta condición no se sustancie en algún sistema formal de colaboración, la rehabilitación de elementos singulares como los citados en la alegación estará limitada a la capacidad de pago de los usuarios, que lógicamente rechazan asumir los costes en los que su actividad no incurre.

En cuanto a los inmuebles asociados al canal que son propiedad de la CHD, la búsqueda de usos compatibles con su conservación puede considerarse una cuestión relevante, pero la determinación concreta de tales usos y de su régimen de gestión o mantenimiento excede del contenido propio del EpTI y requiere un análisis patrimonial y administrativo individualizado, no exento de dificultades.

Alegación 5.

Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)

El SAIH ha demostrado ser una herramienta de gestión excelente. El objetivo inmediato debe ser completar la red integrando nuevos puntos de control y habilitar el acceso a los registros y datos históricos del sistema.

Respuesta:

La alegación se estima parcialmente. Se considera pertinente la observación relativa a la conveniencia de seguir reforzando el Sistema de Redes de Control Automáticas del Duero (SIRCA), tanto mediante la eventual ampliación de la red con nuevos puntos de control como mediante una mejor accesibilidad, tratamiento y aprovechamiento de la información generada ya que el SAIH constituye una herramienta esencial para la gestión hidrológica de la demarcación.

El acceso a los registros y datos históricos del sistema de caudales se hace a través del Anuario de aforos que publica el MITECO, ya que los datos brutos que ofrece el SIRCA requieren la validación que permita su consolidación y, con ello, su publicación como documento oficial. El SIRCA del Duero ofrece la información del año hidrológico en curso; una vez finalizado los datos son retirados para su revisión y posterior publicación en el mencionado Anuario. De cualquier modo, la concreta habilitación del acceso a registros y datos históricos del sistema, así como sus condiciones técnicas y operativas, excede del contenido propio del ETI y deberá abordarse, en su caso, en el marco técnico correspondiente. Esta línea de mejora resulta coherente, además, con actuaciones recientes de modernización tecnológica impulsadas en la cuenca.

Alegación 6.

Consideraciones Varias sobre el Uso del Agua

- *Se ha propuesto permitir la rotación de parcelas de riego asociadas a pozos subterráneos, siempre que se respete estrictamente el volumen de extracción autorizado. Esta medida ayudaría a amortizar la elevada inversión que suponen estas captaciones.*
- *En ciertas áreas, el cultivo de viñedo por goteo presenta un consumo de agua sumamente eficiente (zona del canal de Riaza). Al existir excedentes hídricos en el interior de la zona regable oficial, los agricultores demandan permutar sus derechos para poder regar parcelas de viñedo ubicadas fuera de dicho perímetro legal. No obstante, la resolución de este conflicto administrativo excede probablemente las competencias estrictas del Plan Hidrológico.*

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, y sin perjuicio de lo ya señalado en este documento acerca del alcance propio del ETI, procede indicar lo siguiente:

Respecto a la primera propuesta relativa a permitir la rotación de parcelas de riego vinculadas a pozos subterráneos, aun cuando se mantenga el volumen máximo autorizado, debe recordarse que la utilización privativa del agua se rige por las condiciones fijadas en el correspondiente título habilitante. La normativa general en materia de aguas establece que cualquier modificación de las características esenciales de una concesión requiere autorización administrativa previa, figurando entre dichas características, para los usos de riego, la superficie regada. Asimismo, toda modificación ha de resultar compatible con las determinaciones del Plan Hidrológico y con la situación de la masa de agua afectada. En la demarcación hidrográfica del Duero no está prohibida la rotación de cultivos sobre parcelas asociadas a las captaciones, es más, podría decirse que es lo habitual; únicamente es necesario que, si hay parcelas no avaladas por un título, éste debe modificarse para que pueda amparar esas parcelas que, en rotación, podrán regarse. En consecuencia, la posibilidad de introducir

mecanismos de mayor flexibilidad en la localización de las parcelas regadas no puede contemplarse de forma automática o general al margen del régimen concesional, sino que, en su caso, debe analizarse dentro de los procedimientos administrativos específicamente previstos para la modificación de características, conforme a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con valoración individualizada de su afección al recurso, a terceros y a los objetivos ambientales.

No obstante, la observación se considera de interés en cuanto pone de manifiesto la conveniencia de seguir avanzando en fórmulas de gestión que, sin comprometer la sostenibilidad del recurso ni la seguridad jurídica del régimen concesional, permitan una mayor adaptación de determinados aprovechamientos agrarios a la realidad productiva.

En cuanto a la segunda propuesta, relativa a parcelas de viñedo localizadas fuera del perímetro legal de una zona regable oficial, cabe señalar que, aunque se alegue una utilización eficiente del recurso y la existencia de excedentes hídricos en el interior de dicha zona, debe señalarse que la eventual aplicación del agua fuera del ámbito autorizado no depende únicamente del volumen consumido, sino también de las condiciones del derecho de uso y de su adecuación al régimen concesional y a la planificación vigente. Las concesiones deben respetar las previsiones del Plan Hidrológico, y cualquier modificación de sus características esenciales, como es la ampliación de la base territorial de un aprovechamiento, requiere la modificación concesional o, en su caso, la autorización previa de esta Confederación Hidrográfica, así como la conformidad de la comunidad de regantes o entidad gestora competente cuando el aprovechamiento esté integrado en una zona regable oficial. Esta cuestión excede, por tanto, del alcance propio del Esquema de Temas Importantes como documento de diagnóstico y orientación estratégica.

Por todo ello, la alegación puede considerarse parcialmente estimada en cuanto identifica necesidades de flexibilidad y de mejor coordinación entre planificación hidrológica y gestión administrativa de los aprovechamientos, especialmente en contextos de modernización y uso eficiente del agua. Sin embargo, no procede incorporar al Esquema de Temas Importantes una determinación en el sentido de permitir con carácter general la rotación de parcelas o la aplicación de derechos de riego fuera de los perímetros autorizados, dado que tales cuestiones deben sustanciarse, en su caso, a través de los procedimientos de modificación o cesión previstos en la legislación de aguas —en particular, mediante la modificación de características regulada en el artículo 143 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico— y siempre con sujeción a la planificación hidrológica y al análisis individualizado de cada expediente.

4.41. Escrito de observaciones Nº 051

Presentado por: Cooperativa Camping Club Valladolid.

En nombre propio.

Alegación 1.

*El bloque DU-05 dedicado a la **gestión del riesgo de inundación** se dirige principalmente al cumplimiento de objetivos medioambientales, la mejora de la información sobre el riesgo de inundación, como la coordinación interadministrativa, la adecuada gestión del riesgo de inundación, […] pero muy poco o nada se establece en el programa de medidas para atajar la causa de tales inundaciones y la protección de la población y los bienes mediante obras hidráulicas. La **alternativa 2** que prevé una visión integral del problema, y reducir la vulnerabilidad de los elementos existentes en las zonas inundables **debe ser la que se lleve a cabo**, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos implicados.*

Respuesta:

Se agradece la aportación que confirma la propuesta del EpTI para este tema importante. El Programa de medidas debe establecerse en el propio Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) a partir de las decisiones que se definan en el EpTI. Por tanto, será en el documento de PGRI donde se establezcan las medidas para hacer efectiva la alternativa 2 del EpTI.

Alegación 2.

La "urbanización El Camping", catalogada como zona urbana e incluida en los instrumentos de planeamiento urbanístico, resulta encontrarse dentro de la zona de dominio público hidráulico y de flujo preferente del río Duero, de acuerdo con la cartografía oficial del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y el correspondiente mapa de zonas de flujo preferente aprobado por la CHD.

Según el informe técnico que se adjunta en la última avenida del mes de febrero de 2026 se han producido graves daños por inundación.

*La actuación de protección de las edificaciones es **URGENTE** según se explica en el apartado 1.3 del informe técnico, porque el talud amenaza con el colapso total, comprometiendo la estabilidad del terreno sobre el que apoyan algunas edificaciones de la urbanización más próximas al río. La causa es la erosión lateral por impacto directo de la corriente contra el talud. Y se proponen las soluciones técnicas previstas en el apartado 3.2 del informe, con un coste aproximado preliminar que asciende a 868.580€. (apartado 7).*

Respuesta:

De acuerdo con el SNCZI la urbanización El Camping de Tudela de Duero está en zona de flujo preferente y en zona inundable de probabilidad media u ocasional (período de retorno correspondiente a 100 años). El EpTI no puede entrar a valorar el objeto de la alegación que corresponde a una cuestión de gestión ordinaria; por lo que si se trata de una urgencia deberá tramitar la correspondiente autorización en caso de que el trabajo lo realicen particulares. Dado que la zona

citada se incluye en la APRSIS 15- DUERO MEDIO-DURATÓN, corresponderá al PGRI establecer las medidas que en su caso deban tomarse para reducir el riesgo de inundación.

4.42. Escrito de observaciones Nº 052

Presentado por: Francisco Manuel Vilchez Álvarez.

En nombre de la Asociación de Regadíos Históricos y Tradicionales de España (ARHTE).

Alegación 1.

Reclama la inclusión de los sistemas históricos y tradicionales de regadío (acequias, careos, regaderas de montaña, riegos de invierno, redes comunitarias) como Tema Importante en el EpTI, reconociendo su singularidad frente al modelo de riego intensivo y su integración como soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para la adaptación al cambio climático.

Respuesta:

Conforme al art. 79 RPH, el EpTI somete a debate los principales problemas de la demarcación durante la consulta pública; siendo el periodo de consulta el cauce para escuchar al público interesado, no resulta práctico incorporar formalmente un nuevo tema al documento consolidado del EpTI. Se reconoce, no obstante, el valor ambiental de estos sistemas –en particular de los careos, que operan como recarga natural de acuíferos y manantiales–, que pueden considerarse como soluciones basadas en la naturaleza caso a caso en el programa de medidas y en las iniciativas en curso (proyectos de la Dirección General del Agua, Plan de Acción de Aguas Subterráneas, y publicaciones del IGME), así como en el marco del Reglamento (UE) 2024/1991 de Restauración de la Naturaleza.

Alegación 2.

Solicita la fijación de caudales ecológicos adecuados a estos sistemas (careos o acequias de tierra), dotaciones de cultivo adaptadas, una modulación de las tasas de eficiencia y una exención específica de los estándares generales de eficiencia en el transporte para los canales históricos no revestidos.

Respuesta:

Los careos y las acequias de tierra son infraestructuras hidráulicas derivadas de actuaciones antrópicas; los caudales ecológicos se definen legalmente como los que mantienen la vida piscícola que de manera natural habitaría el río y su vegetación de ribera, por lo que no cabe hablar de caudales ecológicos «por las acequias». Sí es cierto que las pérdidas de un canal histórico no revestido pueden constituir, en estos sistemas, una recarga del acuífero o de los manantiales –función que se reconoce–; pero la modulación o exención de las tasas de eficiencia y la fijación de dotaciones se rigen por la IPH (art. 3.1, caracterización de usos y estimación de demandas; anexo IV, dotaciones de referencia a falta de estudios específicos) y por el régimen concesional, no por el EpTI, y su tratamiento supera los objetivos de esta consulta.

Alegación 3.

Solicita que las comunidades de regantes históricas con derechos consolidados mantengan íntegramente sus aprovechamientos y que las restricciones derivadas de la sobreexplotación recaigan preferentemente sobre los usos más recientes, conforme al principio de prioridad temporal y a la protección de los derechos adquiridos.

Respuesta:

Las concesiones se otorgan atendiendo a la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título garantice la disponibilidad de los caudales concedidos. El principio de prioridad temporal invocado no está recogido, como tal, en la normativa de aguas aplicable: el orden de preferencia entre usos es el que establezca el plan hidrológico de la demarcación y, en su defecto, el del art. 60 TRLA. La asignación de recursos y su reparto en situaciones de escasez se deciden, por tanto, en el plan, atendiendo a las circunstancias de cada demarcación.

Alegación 4.

Reclama que las comunidades de regantes históricas sean compensadas cuando la disminución de sus caudales superficiales haya sido causada por la proliferación de pozos y captaciones subterráneas, obteniendo de forma preferente y simplificada nuevos recursos hídricos compensatorios.

Respuesta:

Las compensaciones e indemnizaciones no son objeto del EpTI ni del plan hidrológico. Con carácter general, la implantación o el mantenimiento del régimen de caudales constituye una restricción previa a los usos (arts. 59.7 y 59.2 TRLA) que los titulares deben soportar, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de un caudal determinado; por ello, como regla general, tales situaciones no resultan indemnizables (doctrina del Consejo de Estado, Dictamen 315/2013 y concordantes). La eventual indemnización, cuando proceda, se sustancia a posteriori, caso por caso, por los cauces del art. 65.3 TRLA (en relación con el art. 65.1.c) y del régimen general de responsabilidad patrimonial (art. 34 Ley 40/2015), previa acreditación de un daño real, efectivo y antijurídico (SSTS de 14 de mayo de 2020 y de 21 de julio de 2022). Cuando la disminución de caudales beneficie a unos usos en perjuicio de otros, la indemnización corresponde a los titulares beneficiados (art. 55 TRLA).

Alegación 5.

Solicita la creación de mecanismos administrativos y financieros que remuneren a las comunidades de regantes por los servicios ecosistémicos de interés público que prestan (apoyo en las concesiones, ayudas directas, acceso preferente a recursos).

Respuesta:

El organismo de cuenca no tiene competencia para crear mecanismos administrativos y financieros que remuneren a las comunidades de regantes por servicios ecosistémicos, por lo que esta pretensión no puede atenderse en el marco de la consulta del EpTI ni en el plan hidrológico. El organismo sí tiene competencia sobre el régimen económico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico (cánones y tarifas), pero orientado a mejorar sus ingresos y a repercutir en la consecución de los objetivos de la planificación, no a remunerar servicios ecosistémicos, cuestión que escapa del ámbito de la planificación hidrológica.

4.43. Escrito de observaciones Nº 053

Presentado por: Comunidad de usuarios concesionarios directos del Canal del Duero.

En nombre propio.

Alegación 1.

*El bloque DU-05 dedicado a la **gestión del riesgo de inundación** se dirige principalmente al cumplimiento de objetivos medioambientales, la mejora de la información sobre el riesgo de inundación, como la coordinación interadministrativa, la adecuada gestión del riesgo de inundación, […] pero muy poco o nada se establece en el programa de medidas para atajar la causa de tales inundaciones y la protección de la población y los bienes mediante obras hidráulicas. La **alternativa 2** que prevé una visión integral del problema, y reducir la vulnerabilidad de los elementos existentes en las zonas inundables **debe ser la que se lleve a cabo**, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos implicados.*

Respuesta:

Se agradece la aportación que confirma la propuesta del EpTI para este tema importante. El Programa de medidas debe establecerse en el propio Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) a partir de las decisiones que se definan en el EpTI. Por tanto, será en el documento de PGRI donde se establezcan las medidas para hacer efectiva la alternativa 2 del EpTI.

Alegación 2.

Respecto al tema importante DU-05, se indica que hay problemas de erosión del terreno en los primeros 9 kms. del Canal del Duero desde Quintanilla de Onésimo. Se debería acometer un reforzamiento del talud que divide el Canal del río Duero. Según el informe técnico que se adjunta en la última avenida del mes de febrero de 2026 se han producido graves daños por inundación.

Respuesta:

En Quintanilla de Onésimo no se ha identificado ninguna área potencial de riesgo significativo de inundación. Por tanto, la demanda que incluye como alegación no es atendible en los procedimientos de elaboración del plan hidrológico ni del PGRI, es más bien una cuestión de gestión que puede encauzar a través de una solicitud ordinaria al organismo de cuenca.

Alegación 3.

Respecto al tema importante DU-04 (alteraciones hidromorfológicas y restauración fluvial) se considera necesario que el instrumento de planificación hidrológica contemple la posibilidad de autorizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales, teniendo en cuenta sus características geomorfológicas, los usos preexistentes y los intereses legítimos concurrentes. En relación con la biodiversidad asociada a los cauces, debe indicarse igualmente que determinadas actuaciones no deberían interpretarse exclusivamente desde una perspectiva destructiva, sino también como procesos de sustitución ecológica donde unas especies resultan favorecidas frente a otras.

Se considera conveniente que el futuro instrumento de planificación contemple expresamente medidas de control y gestión activa de este tipo de formaciones vegetales (carrizal y otras especies invasoras o expansivas) cuando existan razones hidráulicas, ambientales o de seguridad que así lo aconsejen.

Respecto a las obras de cruce aéreo o subterráneo de infraestructuras sobre cauces públicos, se considera necesario que el nuevo Plan Hidrológico otorgue un mayor peso a los criterios técnicos e hidráulicos en la evaluación de las actuaciones proyectadas, evitando que el condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada. En determinados supuestos, la imposición de técnicas constructivas excesivamente restrictivas desde el punto de vista ambiental puede generar soluciones técnicamente más complejas, económicamente desproporcionadas e incluso asociadas a mayores riesgos durante la ejecución de las obras.

En relación con las autorizaciones de obras en el Dominio Público Hidráulico, se considera igualmente conveniente admitir la aplicación del criterio de escala para el cálculo hidrológico de avenidas mediante el Método Racional Simplificado, así como permitir simulaciones hidráulicas basadas en levantamientos topográficos específicos realizados para cada actuación.

Finalmente, se considera de gran interés que la Confederación Hidrográfica del Duero establezca, de forma previa y suficientemente clara, criterios técnicos orientativos para la tramitación de autorizaciones relativas a puentes, pasarelas y otras obras sobre cauces, incluyendo aspectos como caudales de diseño, periodos de retorno, tipologías admisibles o criterios hidráulicos mínimos, permitiendo así una mejor planificación técnica y económica de las actuaciones por parte de los solicitantes. La existencia de criterios previos claros y homogéneos contribuiría notablemente a mejorar la seguridad jurídica, reducir costes innecesarios de redacción técnica y evitar la tramitación de soluciones manifiestamente inviables desde el inicio del procedimiento.

Respuesta:

Se está de acuerdo en realizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales. Así se hace, de hecho. No se abunda más ante la generalidad del comentario.

Independientemente de que en alguna circunstancia puedan aplicarse medidas de control activo de especies invasoras, se debe recordar que la restauración de la conectividad longitudinal y lateral, junto con la recuperación de la morfología natural del cauce, permite que el ecosistema funcione mediante mecanismos de control natural frente a especies invasoras. Un río con un hábitat naturalizado favorece el mantenimiento de las comunidades biológicas autóctonas, dificultando que las especies invasoras desplacen a los endemismos locales. La alteración del régimen natural de los ríos y la creación de aguas estancadas (paso de régimen lótico a léntico) son precisamente los factores que facilitan la proliferación de especies exóticas.

Los condicionantes ambientales son un requisito que estable la normativa actual. No se está de acuerdo con el comentario que indica que el “condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada” en las actuaciones en cauce.

El uso del método racional simplificado para cálculos hidráulicos en la planificación se incluye en el Anexo XI del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Se remite a esta norma y no al plan hidrológico el resto de observaciones presentadas sobre autorizaciones de obras en cauce.

Alegación 4.

Respecto al tema importante DU-05 se considera conveniente que el nuevo Plan Hidrológico contemple expresamente la posibilidad de aplicar criterios de escala y modelizaciones hidráulicas de mayor detalle para la determinación del riesgo real de inundación en emplazamientos concretos, especialmente cuando existan estudios específicos basados en levantamientos topográficos de campo realizados con una precisión superior a la utilizada en la elaboración de la cartografía oficial actualmente disponible. […]

Al igual que en la ficha anterior, demandamos que cualquier actuación que se plantee, no cause perjuicio a la actividad económica implantada en el territorio.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, y sin perjuicio de lo ya señalado en este documento acerca del alcance propio del ETI, procede indicar que las cuestiones planteadas presentan indudable relevancia desde la perspectiva del adecuado diagnóstico del riesgo y peligrosidad de las inundaciones. No obstante, será en fase de redacción del PGRI cuando se revisen los modelos hidráulicos para establecer las medidas adecuadas para reducir el riesgo de las inundaciones. Las medidas que el PGRI establezca tratarán de limitar los perjuicios a las actividades actuales; no obstante puede darse el caso de que haya actividades ubicadas en zonas inundables que cuenten con autorizaciones previas a la entrada en vigor del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y de los artículo 9 y 14 del RDPH; para ellas será muy difícil que cualquier medida que se establezca en el PGRI no entrañe perjuicio que, por otra parte, ya le causa la propia ubicación.

Las modelizaciones hidráulicas e hidrológicas están en constante actualización y singularmente en las tres fases de elaboración de los de PGRI: fase de evaluación preliminar del riesgo, fase de elaboración de los mapas de peligrosidad y fase de plan de gestión del riesgo. La cartografía de peligrosidad del SNCZI simula escenarios estadísticos de eventos extraordinarios, como son las avenidas de media y baja probabilidad (100 y 500 años de periodo de retorno). El SNCZI exige que las simulaciones hidráulicas para delimitar el riesgo se realicen sobre la base del terreno en condiciones actuales (MDT actual), manteniendo infraestructuras como azudes y puentes tal y como existen hoy.

Alegación 5.

Respecto a la Ficha DU-09 (Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas), se considera necesario recordar que la planificación hidrológica no persigue exclusivamente objetivos ambientales, sino también la satisfacción de las demandas, la armonización del desarrollo regional y sectorial y la sostenibilidad de las actividades económicas vinculadas al uso racional del agua. En consecuencia […] deben incorpore criterios de proporcionalidad, equilibrio territorial, cohesión socioeconómica y viabilidad de los usos existentes, especialmente en zonas rurales dependientes del regadío.

Respuesta:

Efectivamente, esos son los objetivos de la planificación hidrológica según el artículo 40 del TRLA. La dificultad está en cómo armonizarlos y a qué dar prioridad. El EpTI y el resto de los documentos de la planificación se redactan y se consolidan sin perder de vista ese objetivo general. Y la prueba de ello

es que todos los agentes afectados por la planificación, incluyendo las administraciones públicas, consideran que su sector o ámbito de competencia está maltratado por la planificación acusando a los mismos de sesgos hacia los objetivos ambientales, o hacia la satisfacción de las demandas, o hacia la inacción administrativa. Cada agente trata de poner en la balanza del debe de la planificación que no tiene en cuenta el equilibrio territorial porque impide el desarrollo del territorio, o las necesidades de las especies y hábitat porque asigna mucha agua a usos consuntivos, o que favorece a determinados usos con mayor presencia como lobby en detrimento de otros, … Los problemas socioeconómicos de determinados territorios son habitualmente muy complejos y pretender hacer responsable a la planificación del agua de los problemas territoriales, en ocasiones que vienes de hace décadas, no contribuye al debate sereno de las soluciones.

Alegación 6.

Respecto a la Ficha DU-09 se propone que la coordinación entre políticas sectoriales no debería derivar en la imposición automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos.

Respuesta:

Las Fichas DU-01, DU-02, DU-06 y DU-07 ponen de manifiesto, como ya hizo el plan hidrológico vigente, las presiones que la actividad agrícola y ganadera suponen para las masas de agua; la Ficha DU-03 analiza las presiones de la contaminación urbana e industrial; y la Ficha DU-10 las presiones que generan otras actividades, en este momento histórico muy relevantes, como son las energías renovables. Las restricciones o limitaciones proceden de estos análisis que se han hecho con la mejor información disponible. Por ejemplo en la Ficha DU-01 un análisis de la contaminación mediante técnicas isotópicas, realizada por un equipo de reconocido prestigio y ajeno al organismo de cuenca, concluye cual es el origen de la presión de contaminación difusa; en la Ficha DU-02 se pone de manifiesto que los descenso de los piezómetros observados en algunas masas de agua subterránea se deben a extracciones, en más de un 95% para usos agrarios, muy superiores a la capacidad de recuperación natural; lo mismo cabría decir de la alteración hidrológica de cauces debido a las actividades productivas (agricultura, hidroelectricidad e industria). Solo un diagnóstico certero permite actuar sobre las presiones causantes del mal estado de las aguas. Si el alegante considera que el diagnóstico a nivel de cuenca o en una zona concreta es erróneo podría aportar información de mejor calidad que permita revisar ese diagnóstico.

Alegación 7.

Respecto al tema DU-09, en lo relativo a Red Natura 2000 y objetivos específicos, se indica que cualquier eventual limitación derivada de dichos objetivos deberá sustentarse necesariamente en estudios técnicos individualizados, suficientemente motivados y territorialmente concretos, evitando restricciones automáticas derivadas exclusivamente de la ubicación geográfica de las explotaciones o infraestructuras. Especialmente en sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados, debe garantizarse plenamente la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes y la compatibilidad entre conservación ambiental y actividad agraria sostenible.

Respuesta:

Los objetivos específicos de Red Natura se fijan por la comunidad autónoma en los Planes Básicos de Gestión. En el caso de los Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León se aprobaron por ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre. Estos Planes establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000. Se estructuran en:

- Un documento de "Disposiciones generales", común a los 177 Planes Básicos.
- Ciento setenta y siete documentos de Planes Básicos de gestión y conservación correspondientes a cada uno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.
- Tres "Anexos" comunes a los 177 planes básicos:
    - Anexo I. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000,
    - Anexo II. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Valores Red Natura 2000, y
    - Anexo III. Medidas de conservación y gestión Red Natura 2000.

De todos los espacios y hábitats de estos Planes sólo aquellos vinculados al agua (76 en la demarcación hidrográfica del Duero) deben ser atendidos por la planificación hidrológica como establece el RPH. Y las limitaciones en el ámbito del agua las establecen los citados planes. En este sentido cabe transcribir algunos de los fundamentos de derecho que esgrime el Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 515/2025 que se cita en la Ficha DU-09: "*Por consiguiente, y como ciertamente esta situación no parece acomodarse a las exigencias de la DMA y de la legislación interna que la traspone, de las que deriva la necesidad de que los planes hidrológicos, como instrumento esencial de coordinación de la política de aguas, reflejen los objetivos ambientales de las zonas protegidas vinculados a las masas de agua asociadas y su grado de cumplimiento, y que sobre dichos objetivos no cabe aplicar la excepción prevista en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2000/60, procede estimar la pretensión de la parte recurrente y declarar la nulidad de todas las previsiones contenidas en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las que, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 10 de las disposiciones normativas, se prevea la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas de agua vinculadas a zonas protegidas de hábitats y especies, en las que, además, no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares.*

Alegación 8.

Respecto al tema DU-09 no parece razonable incrementar simultáneamente las exigencias ambientales o las limitaciones sobre los usuarios concesionales mientras persistan importantes retrasos administrativos y presupuestarios en la ejecución de actuaciones estructurales cuya responsabilidad corresponde principalmente a las administraciones públicas competentes.

Respuesta:

El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el

plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento.

Una vez definido este Programa de medidas, su validación con el correspondiente compromiso presupuestario o financiero se debe hacer en el Comité de Autoridades Competentes en el que están representadas todas las administraciones competentes en una persona con alto rango administrativo (consejero o director general), dado que va a asumir responsabilidades administrativas y presupuestarias. Estas autoridades deben dar la conformidad al programa de medidas para lo cual, cada una internamente, habrá debatido la capacidad y conveniencia de asumir cada medida. Por tanto, los mecanismos formales para asegurar la ejecución del Programa de medidas existen y desde el ámbito de la planificación hidrológica sólo se puede recalcar que estos mecanismos no deben ser simplemente formales sino también reales. La propia Ficha describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social. No obstante, en atención a la alegación se incluye una nueva decisión sobre la rendición de cuentas.

Los mecanismos de rendición de cuentas están formalmente delimitados en el ámbito administrativo, por ejemplo, con la regulación que se incluye en los artículos 87 y 88 del RPH. Pero este ámbito es meramente administrativo y no político, que tiene sus propios itinerarios.

Alegación 9.

Respecto al tema importante DU-09 se propone reforzar de manera efectiva la participación técnica y real de los usuarios del agua, singularmente de las Comunidades de Regantes, en los procesos de toma de decisiones y seguimiento de la planificación hidrológica.

Respuesta:

Sorprende que una Comunidad de regantes reclame mayor participación en los procesos de toma decisiones y de seguimiento de la planificación hidrológica. Las comunidades de regantes participan en la Junta de Gobierno, en el Consejo del Agua de la demarcación, en la Comisión de Desembalse, en la Asamblea de Usuarios y las Juntas de Explotación. Esa representación está regulada en el TRLA, el RAPA o reglamentos específicos (como el que regula el consejo del agua de la demarcación). Todos ellos son órganos de gobierno, gestión, coordinación y participación de los organismos de cuenca. Nos gustaría conocer otros ámbitos administrativos donde la participación de los usuarios fuera al menos

de la misma magnitud que en la gestión del agua. De cualquier modo, el EpTI no tiene capacidad para modificar la distribución de la representación de los usuarios en los distintos órganos.

Alegación 10.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

6. Cambio climático, disponibilidad de recursos y Convenio de Albufeira

Se considera imprescindible que la planificación hidrológica incorpore de forma expresa, transparente y técnicamente desagregada el análisis de la evolución previsible de las aportaciones naturales en escenarios de cambio climático y su incidencia sobre el cumplimiento simultáneo de los compromisos internacionales, los caudales ecológicos, las garantías de abastecimiento y las demandas agrarias consolidadas. La reducción progresiva de recursos y el incremento de la irregularidad hidrológica podrían alterar significativamente las hipótesis históricas sobre las que tradicionalmente se han sustentado las reglas de explotación de determinados sistemas de regulación, especialmente en sistemas de carácter continental como el Alto Duero.

Asimismo, se considera necesario que la planificación identifique de manera expresa la incidencia real que el cumplimiento del Convenio de Albufeira y de otros compromisos ambientales o internacionales tiene sobre las garantías de suministro de las distintas unidades de demanda agraria y sobre las reservas embalsadas disponibles en los sistemas de explotación. En situaciones de escasez hídrica, la necesidad simultánea de atender abastecimientos, mantener caudales ecológicos, cumplir compromisos internacionales y garantizar demandas agrarias puede generar importantes tensiones sobre las infraestructuras de regulación existentes, especialmente cuando concurren déficits modelizados y limitaciones de capacidad de almacenamiento.

Respuesta:

Uno de los contenidos del Plan Hidrológico es valorar los efectos del cambio climático sobre las aportaciones. En ese sentido el borrador de Plan Hidrológico incluirá esta valoración a un nivel de detalle de masa de agua; y con esta valoración se confrontarán las demandas de aguas con estas series modificadas por efecto del cambio climático para poder identificar su efecto sobre los objetivos ambientales y la garantía en la satisfacción de las demandas. De manera similar se están realizando una revisión de las Normas de explotación de las presas de titularidad estatal, de acuerdo con el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses, que pueden suponer cambios en las reglas de explotación de las mismas.

Como se indica en la Ficha DU-09, entre las decisiones a tomar en relación con el Convenio de Albufeira, se encuentra *analizar las divergencias entre las planificaciones española y portuguesa para ofrecer soluciones conjuntas a las masas de agua compartidas y los indicadores de sequía y escasez de ambos países para tratar de integrar ambos diagnósticos en uno*. Esta última decisión viene avalada por los memoranda de entendimiento entre España y Portugal de las cumbres hispano-lusa de 2023, 2024 y 2026, en las que ya se está trabajando por ambos países.

No obstante, en ninguna de ambas cuestiones el EpTI puede aportar nada al ser cuestiones que se ubican fuera de su marco de trabajo.

Alegación 11.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

7. Necesidad de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria

Se considera imprescindible que el futuro Plan Hidrológico garantice marcos regulatorios claros, previsibles y técnicamente motivados, evitando duplicidades administrativas, contradicciones regulatorias y limitaciones carentes de suficiente justificación técnica individualizada.

Respuesta:

En el ámbito del agua, el EpTI es un documento intermedio de la planificación hidrológica que tiene por objeto la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. No tiene que ofrecer seguridad jurídica ya que es un documento instrumental en la elaboración del Plan Hidrológico que se aprueba por Real Decreto y tiene fuerza vinculante.

Por otra parte, la seguridad jurídica para los usuarios que aspiran a desarrollar una actividad la ofrece el procedimiento concesional donde se concreta la actividad en el objeto, el tiempo y el lugar, lo que permite evaluar la actividad en coherencia con los objetivos de la planificación hidrológica. Por tanto, se rechaza la alegación. Los planes hidrológicos se revisan cada seis años, lo que puede suponer que, dentro del marco legal general, haya modificaciones específicas como consecuencia de la revisión planificadora. Seis años, a nuestro juicio es un marco temporal escaso, pero el ordenamiento jurídico establece ese plazo para las sucesivas revisiones y a él debemos ajustarnos.

La Ficha DU-09 pone el acento en la necesidad de incrementar la coordinación y cooperación administrativa en el ámbito de la planificación hidrológica; la alegante reclama esa coordinación en el marco de la gestión ordinaria. Siendo un objetivo razonable, no hay que olvidar cuáles son las competencias de cada administración lo que puede suponer una mayor lentitud de procedimientos, en especial si éstos confluyen en una única actividad. Sigue quedando pendiente la simplificación administrativa ya que, cada vez que hay cambios normativos, no suelen ser para simplificar sino para una mayor complejidad. Al igual que los usuarios también las administraciones padecemos esta complejidad que está al servicio, en este caso, de las garantías. Precisamente la variedad de competencias sobre una misma actividad puede generar esas incoherencias de las que no son culpables quienes deben verificar los requisitos legales sino de las normas que regulan la actividad.

4.44. Escrito de observaciones Nº 054

Presentado por: D. Víctor Fernández González.

En nombre de GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 194 S.L.

Alegación 1.

Se solicita que se consideren las demandas futuras para los usos del agua, y en particular el nuevo uso para Almacenamiento Hidráulico de Energía, como por ejemplo los proyectos en tramitación como PAHE EL BREZO (CHR). Se debe segregar el uso destinado para AHE del uso industrial de generación, dado que como dice el Real Decreto-ley 8/2023 su finalidad no es incrementar la producción de energía, sino almacenar energía, y que no supondrá ningún riesgo para los objetivos ambientales y que contribuirá con los objetivos del PNIEC.

En particular, en la ficha DU-07 "Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos – Infraestructuras":

- *Apartado "Nuevas infraestructuras": mención a la tramitación de la concesión de almacenamiento hidráulico desde el embalse de Villafría.*

En particular, en la ficha DU-10 "Nuevos usos del agua vinculados a las industrias renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos":

- *Tabla 10, "Afección a los usos con la alternativa de actuación seleccionada": se cita cuantificación de reservas para usos y almacenamiento hidroeléctrico (identificadas en el PNAHE), pero sin mención a PAHE EL BREZO (CHR).*
- *Apartado 5 " Planteamiento de posibles alternativas", Tabla 67 "Comparativa de actuaciones en cada una de las alternativas": Alternativa 1: No limitar las centrales de almacenamiento hidroeléctrico a las identificadas en el PNAHE, e incluir también los proyectos de iniciativa privada que cuenten al menos con el informe de planificación hidrológica FAVORABLE, en el trámite de concesión de aguas.*

Respuesta:

Estamos de acuerdo con el alegante que el uso industrial asociado al almacenamiento de energía hidráulica está adquiriendo especial relevancia en un escenario internacional tan inestable en relación con la disponibilidad de combustibles fósiles para la producción eléctrica y su devastadora influencia sobre el cambio climático.

Tanto el PNIEC como la Ley 7/2021, de 20 de mayo, contemplan el almacenamiento de energía como una de las claves de la transición energética, lo cual ha sido reafirmado en la Estrategia de Almacenamiento Energético, aprobada por el Consejo de Ministros en 2021, en la que se menciona como uno de los métodos de almacenamiento el hidráulico reversible, mediante bombeo y turbinación entre dos depósitos de agua.

El Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así

como para paliar los efectos de la sequía, establece en su artículo 61 una modificación del artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas, en el que se establece el orden de preferencia de usos del agua, incluyendo en el lugar tercero el almacenamiento hidráulico de energía. El orden de prioridades que se establezca específicamente en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Duero respetará la prioridad del uso de almacenamiento hidráulico de energía frente al resto de usos industriales, en cumplimiento del citado artículo del TRLA.

El tema importante DU-10 menciona esta forma de almacenamiento energético, citando únicamente las potencia y capacidad de almacenamiento de las infraestructuras estatales adscritas a la CHD susceptibles de ser aprovechadas para el bombeo reversible o mixto, Riaño y Camporredondo/Compuerto, identificadas en el Programa Nacional del Almacenamiento Hidráulico de Energía, lanzado por el Ministerio para la Transición Ecológica en enero de 2023.

Otras infraestructuras privadas o adscritas a otras Administraciones con esta posibilidad de uso de almacenamiento energético no se mencionan el desarrollo del tema importante, ya que no existe una planificación sectorial estatal en la que se encuentren recogidas.

En cuanto a la alternativa elegida para el desarrollo de este tema importante, el alegante propone no limitar las centrales de almacenamiento hidroeléctrico a las identificadas en el PNAHE, e incluir también los proyectos de iniciativa privada que cuenten al menos con el informe de planificación hidrológica FAVORABLE, en el trámite de concesión de aguas.

Podemos considerar adecuada esta no limitación, pero citar aquellos proyectos en los que se haya emitido un informe FAVORABLE de compatibilidad con el plan hidrológico vigente no es objeto de la redacción de este esquema de temas importantes. Todo nuevo aprovechamiento de agua requiere informe favorable de compatibilidad por lo que citarlo en el EpTI no aporta ninguna novedad.

Alegación 2.

DU-10 "Nuevos usos del agua vinculados a las industrias renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos":

- *Que se señale expresamente que el almacenamiento hidráulico de energía supone un **uso no consuntivo del recurso para el proyecto PAHE EL BREZO (CHR)**.*

Respuesta:

En lo que se refiere al proyecto concreto *PAHE EL BREZO (CHR),* promovido por el alegante, se inició en 2024 expediente C-0226/2024 para la tramitación de competencia de proyectos, al objeto de obtener una concesión con un caudal máximo instantáneo de 60.000 l/s en modo turbina y 50.000 l/s en modo bomba, en los términos municipales de Santibáñez de la Peña, Guardo y Velilla del Río Carrión (Palencia), con destino al almacenamiento hidráulico de energía. El proyecto conlleva la explotación del embalse de la presa de Villafría, infraestructura de regulación del aprovechamiento de referencia C-0248/2015, del que es titular la Comunidad de Regantes "Vegas del Bajo Valdavia".

Este expediente finalizó en noviembre de 2025 por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, ya que la presa de Villafría no cuenta con el Acta de Reconocimiento Final de las obras de la concesión C-0248/2015 y no se puede continuar la explotación del aprovechamiento sin que se

hayan aprobado e implantado los documentos técnicos obligatorios (Normas de explotación, Plan de Llenado y Plan de Emergencia), impuestos por el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses.

No procede pues la citación expresa en el esquema de temas importantes de "*el almacenamiento hidráulico de energía supone un* ***uso no consuntivo del recurso para el proyecto PAHE EL BREZO (CHR)***".

Alegación 3.

Que el almacenamiento hidráulico de energía y el proyecto PAHE EL BREZO (CHR) ***no constituyen ningún riesgo para los objetivos ambientales*** *(…).*

En particular, en la ficha DU-10 "Nuevos usos del agua vinculados a las industrias renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos":

- *Apartado 1 "Sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para los objetivos ambientales": indica que actividades económicas de sectores como Industria de almacenamiento de energía renovable: (…), pueden elevar el riesgo de incumplimiento de los objetivos ambientales.*

Respuesta:

La afirmación genérica de que este tipo de proyectos no afecta a los objetivos ambientales de las masas de agua no puede realizarse. Este análisis se realiza pormenorizadamente para cada proyecto para la emisión del preceptivo informe de compatibilidad/incompatibilidad del aprovechamiento con el plan hidrológico vigente y dependerá del estado de las masas de agua y de los objetivos que el plan vigente tenga establecidos para ellas. De hecho, en la tramitación concesional fueron varios los requerimientos hechos al promotor para aclarar estos y otros aspectos relacionados con el bombeo, así como condicionantes a la posible explotación, lo que supone que por defecto no se puede asegurar que estos aprovechamientos no suponen afección a los objetivos ambientales.

En el presente caso, no procede pues la citación expresa en el esquema de temas importantes de "*el almacenamiento hidráulico de energía y el proyecto PAHE EL BREZO (CHR) no constituyen ningún riesgo para los objetivos ambientales*".

Alegación 4.

DU-07 "Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos – Infraestructuras":

Que se considere una dotación de agua específica planificada para la PAHE EL BREZO (CHR) (Nº expediente: C- 0226/2024), en el 4º ciclo de planificación, con los caudales solicitados en el expediente (Caudal en modo turbina: 120.000 l/s; Caudal en modo bomba: 91.000 l/s) que han sido viabilizados mediante el Informe de Compatibilidad Hidrológica emitido por la presente Confederación Hidrográfica.

Respuesta:

La asignación de los recursos solicitados por el alegante necesarios para el proyecto *PAHE EL BREZO (CHR)* ha sido efectiva en el sistema de información Mírame-IDEDuero hasta la fecha en la que este Organismo resolvió acordar la tramitación del procedimiento, fecha en la cual se liberaron dichos recursos para otros usos.

No es objeto de la redacción del tema importante *DU-07* establecer asignaciones específicas para los usos de almacenamiento hidráulico de energía ni, por supuesto, la cita de proyectos concretos de iniciativa privada con concesiones no aprobadas. Será la fase de redacción del Plan Hidrológico en la que se fijen asignaciones y reservas de uso.

4.45. Escrito de observaciones Nº 055

Presentado por: D. David Blanco Tarancón.

E**n nombre** de la Comunidad de Regantes del canal de Almazán.

Alegación 1.

La información que se encuentra en la plataforma MIRAME-IDEDUERO sobre la zona regable del Canal de Almazán, es errónea en lo referente al canal de Almazán. Hay históricamente una serie de parcelas que se encuentran en el margen izquierdo del canal, lo que podría indicar que se encuentran fuera de la zona con posibilidad de riego. Sin embargo, estas parcelas disponían de acequias para el riego y, una vez hecha la modernización, ahora disponen de toma de riego.

Se solicita que, antes de aprobar cualquier punto que pueda afectar a estas parcelas y su derecho de riego con la aprobación definitiva del Plan Hidrológico, se proceda a una revisión y actualización completa de los registros cartográficos para adaptarlos a la realidad que existe en la Comunidad.

Respuesta:

La superficie que se considera en la elaboración del Plan Hidrológico para la Comunidad de Regantes del Canal de Almazán (2100029 - Comunidad de regantes del canal de Almazán) es de 5.342 hectáreas, ya que es la superficie que figura en su inscripción en el Registro de Aguas (Sección: A – Tomo nº: 133 – Hoja nº: 60 – Número: 22960) según Resolución de inscripción de concesión de fecha 07-06-2013 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (Referencia Integra C-0858/2007).

La representación cartográfica de esta superficie, que se muestra en el sistema de información Mírame-IDEDuero es la considerada en la tramitación del expediente de concesión.

Si la Comunidad de Regantes aporta su cartografía fiel, ajustada a la concesión, en formato digital shapefile, se podría valorar su incorporación al expediente de derecho según el trámite que proceda. En caso de incorporarse cambios al expediente, estos se reflejarían en el sistema de información Mírame-IDEDuero.

Alegación 2.

DU-01. Contaminación difusa (limitaciones en novaciones).

En las concesiones novadas se establece un límite máximo de aportación de nitrógeno por hectárea. No obstante, el establecimiento de un condicionado que limite la cantidad de nitrógeno a aportar en una zona regable, con el objetivo de alcanzar el buen estado de la masa de agua receptora, y basado en modelos físico-matemáticos de dinámica del nitrógeno, puede resultar adecuado desde un punto de vista teórico o normativo, pero presenta enormes dificultades prácticas para una Comunidad de Regantes. Resulta extremadamente complejo determinar qué comunero concreto y en qué parcela específica se estaría produciendo el eventual incumplimiento del condicionado impuesto.

Además, debe tenerse en cuenta que las Comunidades de Regantes no ostentan competencias inspectoras plenas sobre parcelas privadas, ni capacidad material para ejercer un control

individualizado permanente sobre las prácticas de fertilización de cada agricultor. La eventual atribución de responsabilidades colectivas a toda una Comunidad de Regantes podría vulnerar los principios de proporcionalidad e individualización de responsabilidades.

Respuesta:

En la cuenca del Duero no existe un decreto específico que regule de forma directa el control de la química de los retornos de riego. Sin embargo, sí existe un marco normativo que obliga a controlar los efectos de dichos retornos sobre las aguas superficiales y subterráneas, especialmente en relación con la contaminación difusa de origen agrario.

La principal norma en este ámbito es el Real Decreto 47/2022, sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, que establece la obligación de controlar y reducir la lixiviación de nitrógeno hacia los acuíferos. Esta norma exige la designación de zonas vulnerables a nitratos, la aplicación de programas de actuación y el seguimiento de la calidad del agua, incluyendo la concentración de nitratos, que no debe superar determinados umbrales.

Asimismo, el Real Decreto 1514/2009, relativo a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, establece la necesidad de prevenir el deterioro del estado químico de los acuíferos mediante el control de sustancias contaminantes, entre las que destacan los compuestos nitrogenados procedentes del riego agrícola.

Este marco se completa con la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Nitratos a nivel europeo, que obligan a los Estados miembros a realizar programas de seguimiento del estado químico de las masas de agua y a controlar las fuentes difusas de contaminación, como los retornos de riego.

En consecuencia, aunque no se controla directamente el retorno de cada parcela, la normativa vigente obliga a controlar su impacto global mediante redes de seguimiento del agua de drenaje y medidas de gestión agraria, asegurando así la protección de ríos y acuíferos frente a la contaminación.

En los controles analíticos efectuados en las aguas de los cauces y arroyos que drenan las principales zonas regables de la cuenca se ha comprobado a lo largo de los años la presencia de sustancias nitrogenadas y otros productos asociados a pesticidas fungicidas y fitosanitarios utilizados en la agricultura, la cantidad en ocasiones sobrepasa los límites máximos establecidos en la reglamentación, una vez comprobado que las dosis de abonado y las prácticas de aplicación no son del todo adecuadas, habrá que hacer uso de todas la herramientas tecnológicas que se van incorporando al sector agrario para afinar las cantidades de abonado, el sistema de aplicación, la dosificación variable, la fertiirrigación, el momento adecuado del ciclo vegetativo para su aplicación. Para optimizar todas estas prácticas lo primero es saber cantidades, rendimientos vinculados a parcelas, todo esto no es posible si no se dispone de datos, datos que permitan comparar y establecer relaciones causa efecto. Para todo esto hay que saber medir y comprobar cuanta cantidad de producto se pierde en las aguas de drenaje, entre otras variables, no se trata de colocar sistemas de control en cada parcela, si no de establecer mediadas y controles en los principales cauces y arroyos que drenan la zona regable, con el objetivo de ser más eficientes, las modernizaciones de regadío, ofrecen la posibilidad regar con más precisión, ocurre lo mismo con la gran cantidad de tecnología que se va incorporando al sector agrario, todo esto permite ahorrar en insumos, que cada día son más caros, lo cual benéfica al agricultor, y contribuye a mejorar los ecosistemas. Todo esto no se consigue de un día para otro, somos

conscientes, también ocurre que el implantar y mantener todo esto tiene un coste económico, como contrapartida las distintas administraciones establecen sistemas de ayudas, como son los PERTES, la PAC, etc.

Alegación 3.

DU-01. Contaminación difusa (determinación real del origen nitrógeno).

No se aborda suficientemente en los Temas Importantes la cuestión relativa a la determinación real y precisa del origen del nitrógeno que alcanza las masas de agua subterránea.

Se expone que, en el caso de utilizarse técnicas de monitoreo de nitratos mediante sondas instaladas en la zona no saturada a través de sondeos inclinados, únicamente se obtiene información correspondiente al flujo vertical inmediatamente superior a la ubicación de la sonda, sin detectar desplazamientos laterales o transversales de los lixiviados.

Se defiende el monitoreo en la zona saturada, donde ya existe componente transversal del flujo en función del gradiente piezométrico, ya que podría ofrecer resultados más representativos del comportamiento real del acuífero y de la contaminación difusa efectivamente atribuible a la actividad agraria.

Respuesta:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está poniendo en práctica diversas actividades para el control del estado de las masas de agua, superficiales y subterráneas, continentales y marinas, y su remediación conforme a la estrategia de acción desarrollada en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Este reciente Real Decreto actualiza la trasposición al derecho interno de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola, estableciendo una serie de criterios para la determinación de las aguas afectadas más restrictivos que los que señala la propia Directiva 91/676/CEE, a la vez que refuerza el conjunto de medidas de control y actuación a aplicar sobre las aguas afectadas. El artículo 3 del Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, establece umbrales de identificación de aguas afectadas por contaminación más exigentes que los que dispone la propia Directiva 91/676/CEE. La reducción de los umbrales supone haber identificado un mayor número de puntos sobre los que aplicar programas de actuación que los que se habrían identificado usando, tal y como se venía haciendo, los criterios de la Directiva 91/676/CEE. No solamente se redujeron los umbrales, sino que se estimó oportuno comparar el máximo de las muestras tomadas para la designación de aguas afectadas. El primer resultado en esta línea se plasmó en la Resolución, de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General del Agua, por la que se publican los mapas de las aguas afectadas por la contaminación difusa. A partir de la publicación de la citada Resolución, según el artículo 4.1 del Real Decreto 47/2022, se inició el plazo para que, de acuerdo con sus competencias, las comunidades autónomas ampliaran o revisaran las zonas vulnerables previamente designadas, cuya extensión se prevé que aumente respecto a informes anteriores consecuentemente al mayor número de puntos identificados como de aguas afectadas. Asimismo, debe indicarse que la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está desarrollando los trabajos para la elaboración del informe de presiones e impactos

para identificar el origen de este tipo de contaminación en aguas afectadas, conforme al artículo 3 del mencionado Real Decreto 47/2022 que establece que "La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en coordinación con las comunidades autónomas, realizará cuatrienalmente un estudio de las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan considerarse significativas y de los impactos registrados sobre las aguas, dirigido a determinar la contribución de cada sector de actividad a la contaminación de las aguas en las zonas sensibles y vulnerables". Este informe se integra en el cuatrienal que debe reportarse a la Comisión Europea. Otra medida contemplada en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, es la que se refiere a la reformulación de los programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. Mediante el artículo 9 de la mencionada norma se establece una mayor frecuencia y densidad de muestreo en los denominados programas de control de vigilancia y control operativo de las aguas superficiales y subterráneas. Además, como se prevé en el art. 9.2.e) del Real Decreto 47/2022 y como complemento a los muestreos indicados, los organismos de cuenca y comunidades autónomas impulsarán la participación ciudadana en el diagnóstico de este problema. Con esta finalidad, dichas autoridades podrán facilitar al público interesado sistemas de diagnóstico sencillos que permitan detectar zonas o puntos impactados sobre los que dirigir sus investigaciones específicas. Aparte de esta actuación, procede resaltar la ejecución de dos proyectos para la determinación del origen de los nitratos mediante técnicas isotópicas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dedica desde el año 2022 una significativa partida de los fondos de recuperación para este fin. Por una parte, se recurre a la aplicación de las metodologías isotópicas en una campaña de muestreo de aguas afectadas en toda España. Por otra, en la colaboración del Centro de Estudios de Técnicas Aplicas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), a la mejora de las metodologías de muestreo y análisis isotópico para la identificación del origen del nitrato en las aguas. Ambas actividades suponen un reto técnico científico importante, tanto por el volumen de información a procesar y la escala del análisis, como también por los ambiciosos objetivos planteados. Los aspectos normativos y su necesaria coordinación con los planes hidrológicos de cuenca también han sido incorporados en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, ya que habilita a los planes hidrológicos de cuenca para señalar requisitos que deben ser tomados en consideración por las comunidades autónomas al objeto de reducir la contaminación y alcanzar los objetivos ambientales de obligado cumplimiento según la senda señalada por los propios planes hidrológicos. Este requisito debe de ser atendido en los planes hidrológicos. Es importante destacar este punto por la relevancia de la coordinación de medidas que han de llevar a cabo las administraciones agronómicas y del agua para la reducción de la contaminación procedente de distintas fuentes, pero que puede afectar a los objetivos ambientales de las masas de agua. Por otro lado, cabe destacar el esfuerzo que se está realizando desde las distintas administraciones, central y autonómica, para la coordinación de actuaciones en esta materia. Gracias a esta coordinación se elabora el informe de estado cuatrienal, que debe remitir España a la Comisión Europea. Este informe analizará cuestiones como "La contaminación por nitratos y su impacto en el medio ambiente y agua de consumo humano" y a las que podrá darse respuesta entonces. Para la elaboración de este informe cuatrienal se ha organizado un grupo de trabajo en el que colaboran departamentos agronómicos, ambientales y los relacionados con el agua de todas las autonomías y de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por último, cabe añadir la importante tarea de coordinación e integración de acciones que actualmente se realiza entre los tres departamentos ministeriales competentes en materias de Sanidad, Agricultura y Medio Ambiente.

El trabajo "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación", como se indica en la Ficha DU-01, se ha llevado a cabo por el MITERD en 2023-2024.

El objetivo es determinar las relaciones moleculares de $^{15}N/^{14}N$ y $^{18}O/^{16}O$ en el nitrato disuelto en aguas superficiales y subterráneas de toda España que permita conocer, la aplicación de metodologías normalizadas de vanguardia, como la conversión química de nitrato y nitrito a óxido nitroso (N_2O), el origen del nitrógeno identificado en las muestras de la red oficial de calidad de las aguas.

En ese trabajo, sobre 79 puntos de muestreo de aguas superficiales de la demarcación hidrográfica, atribuyen el 61% de la contaminación por nitratos a origen agrario (principalmente fertilizantes inorgánicos) y el 25% a mezclas con aguas residuales urbanas, el 14% restante de origen indeterminado. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, sobre 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, se muestra un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería. A nuestro juicio este trabajo, sin menoscabo de que pueda ampliarse a nuevas zonas y nuevas campañas y las limitaciones propias de la materia, muestra con suficiente certidumbre que la mayoría de los nitratos presentes en el agua tiene un origen agrario.

Respecto a las propuesta de la alegante para hacer un seguimiento de contaminación difusa invitamos a la comunidad de regantes a que implante esas tecnologías, que otras comunidades de regantes han implantado mediante fondos Next Generation para la digitalización del regadío y, con la información recabada, promueva entre sus comuneros estrategias de reducir las pérdidas de fertilizantes y, en consecuencia, presencia de esas sustancias en el agua.

Alegación 4.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 1 (bandas de protección):

Debe tenerse en cuenta que gran parte de los terrenos donde se pretenden implantar estas bandas de vegetación son de titularidad privada y cuentan con derechos consolidados protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, cualquier medida que implique limitaciones permanentes de uso o pérdida de aprovechamiento efectivo del terreno debería contemplar mecanismos de compensación adecuados.

Asimismo, se considera necesario evaluar previamente la efectividad real de dichas bandas de protección en función de las características hidrológicas y agronómicas de cada zona, evitando la imposición de medidas homogéneas sobre realidades muy distintas.

Respuesta:

Es justamente lo que explica la Ficha DU-01, que, dado que estas bandas se ubican sobre terrenos privados, el mantenimiento de las mismas con fines de reducción de la contaminación difusa sea de carácter voluntario y, en consecuencia, sea compensado por los servicios ecosistémicos que presta. De hecho, así lo pone de manifiesto la Ficha DU-01 en la alternativa 1: *En todo caso podrían añadirse medidas compensatorias para los usuarios que voluntariamente reduzcan la aplicación de sustancias nutrientes (nitrogenadas y fosforadas) y fitosanitarios o implanten barreras de vegetación para reducir excedentes.*

Para reducir la entrada de nutrientes a las masas de agua superficiales, se plantea la creación de bandas de protección de las masas de agua de 10 m, para el caso de los cauces con consideración de masas de agua con impacto comprobado, y de 5 m, para el caso de las masas con impacto probable, fuera de la zona de dominio público y ocupadas por vegetación autóctona, que funcione como sumidero de nutrientes. Se estima que la reducción de entrada de nutrientes a la masa está entre el 25% y el 75%, dependiendo de la anchura de la banda, que puede llegar hasta los 20 m. En el PHD vigente se ha estimado que la banda de 10 m podría reducir en un 75% los excedentes que reciben las masas de agua en su cuenca y en un 50% para la banda de 5 m. Estas bandas de protección también deberían ser objeto de un mantenimiento para evitar que se convirtieran en reservorios de plagas (por ejemplo, la del topillo campesino en Castilla y León) pero compatibles con el buen estado de las masas de agua y para favorecer la presencia de sus depredadores naturales.

Estas bandas fueron consideradas en el PHD vigente dentro de 36 medidas por importe de 5,3 M€, pero finalmente no fueron asumidas por la administración competente.

Alegación 5.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 2 (Fomento de plantas de biogás)

En el punto 5.5 se afirma textualmente que el tratamiento de purines y estiércoles en biogás evitaría su aplicación al suelo como fertilizante, afirmación que resulta técnicamente incorrecta o, al menos, incompleta [..] el balance de nitrógeno del sustrato inicial y del digestato resultante es prácticamente equivalente. El digestato mantiene una elevada carga nitrogenada, presentando riesgos similares desde el punto de vista de la contaminación difusa por nitrógeno [..] el desarrollo de plantas de biogás no puede considerarse, por sí solo, una solución automática al problema de la contaminación difusa, siendo necesario un análisis mucho más detallado de la gestión posterior del digestato y de sus efectos reales sobre el suelo y las masas de agua.

Respuesta:

Estamos de acuerdo con parte de lo que se expone en la alegación, y en la ficha DU-01 se propone como alternativa, porque su correcto manejo genera menos problemas ambientales que las prácticas de aplicación de los purines en bruto como se está haciendo en la actualidad.

El digestato es el subproducto resultante del proceso de digestión anaerobia de materia orgánica en instalaciones de producción de biogás, presenta un elevado contenido en nutrientes y materia orgánica estabilizada, lo que permite su valorización agronómica como fertilizante o enmienda; su utilización constituye un recurso fertilizante de alto valor agronómico, alineado con los objetivos de

sostenibilidad y economía circular. Sin embargo, su uso debe realizarse bajo un enfoque técnico y normativo riguroso, especialmente en lo relativo a: la gestión del nitrógeno, la protección de las aguas, y el control de la calidad del producto. Así el digestato se regula principalmente como fertilizante orgánico o enmienda bajo el Real Decreto 506/2013, que fija requisitos de calidad, composición y comercialización. A nivel europeo, el Reglamento (UE) 2019/1009 permite su uso y comercialización como fertilizante con marcado CE si cumple criterios técnicos. Su aplicación agrícola está condicionada por la Directiva de Nitratos (91/676/CEE), esta se transpone mediante el Real Decreto 261/1996, que regula la fertilización nitrogenada. Al ser un producto que se considera fuente de nitrógeno, debe integrarse en planes de abonado.

La Ley 7/2022 de residuos regula su valorización como producto derivado de residuos, exige que no contenga contaminantes peligrosos ni genere impactos ambientales. También puede verse afectado por normativa SANDACH si procede de subproductos animales. Además, debe cumplir normativa de aguas y disposiciones autonómicas, especialmente en zonas vulnerables a nitratos, donde se establece un límite general de 170 kg N/ha año.

Alegación 6.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas (novaciones concesiones)

En relación con el punto 5 de la ficha y, concretamente, respecto de las novaciones de concesiones, se expone que el Organismo de cuenca reduce los aprovechamientos previamente consolidados y generando un evidente perjuicio para los titulares afectados mediante la práctica administrativa de tramitar una modificación de características concesionales, imponiéndose la reducción de la dotación inicialmente reconocida mediante la aplicación de criterios de compatibilidad vinculados a dosis agrarias comarcales elaboradas por la Oficina de Planificación Hidrológica.

Esta práctica puede generar situaciones de inseguridad jurídica cuando la revisión de la dotación no deriva de una modificación efectiva de la presión sobre el recurso, sino únicamente de una reinterpretación administrativa sobrevenida de los criterios de compatibilidad o de las necesidades teóricas de cultivo.

En este contexto, resulta especialmente relevante la interpretación que se viene realizando del apartado 2 del artículo 144 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), particularmente en lo relativo al concepto de "características esenciales" de la concesión y, más concretamente, a la denominada "finalidad de la derivación".[..]

A juicio de esta parte, la finalidad de la derivación debe identificarse con el uso concesional principal —riego— y no con el cultivo concreto implantado en cada momento, salvo que exista una alteración efectiva y sustancial de las condiciones hidráulicas del aprovechamiento.

Una interpretación extensiva del concepto de "finalidad de la derivación" podría conducir, en la práctica, a someter a modificación concesional cualquier evolución agronómica ordinaria de las explotaciones agrícolas, lo cual no parece compatible ni con la lógica del sistema concesional ni con el principio de proporcionalidad administrativa.

Respuesta:

Los derechos inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas y en la sección C del Registro de Aguas tienen su origen en el régimen transitorio establecido por la Ley de Aguas de 1985, que transformó el sistema jurídico tradicional de propiedad privada del agua en un régimen de dominio público hidráulico. Estos derechos permiten el mantenimiento de usos privados preexistentes, fundamentalmente referidos a aprovechamientos de aguas subterráneas, bajo determinadas condiciones de reconocimiento administrativo.

En las últimas décadas, la política hidráulica en España ha evolucionado hacia un modelo caracterizado por limitar progresivamente los derechos de carácter privado, integrar todos los aprovechamientos en el sistema concesional, e incrementar el control administrativo sobre las extracciones, siempre bajo el prisma de lo que prioriza la Directiva Marco del Agua en sus objetivos ambientales como es el alcanzar el buen estado de las masas de agua subterránea y reducir la eventual sobreexplotación.

En conclusión, que el futuro de los derechos de aguas subterráneas inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas y la Sección C del Registro de Aguas no debe clarificarla un plan hidrológico y menos aún un EpTI. Está netamente claro en las DT segunda, tercera y cuarta del TRLA, en las que se habilita el modo de dar carta de naturaleza jurídica estable a unos aprovechamientos que han mantenido un régimen transitorio durante un plazo concreto. Lo que el EpTI señala es que los aprovechamientos a los que sea aplicable en 2035 este régimen del TRLA deberán superar la compatibilidad con la planificación hidrológica que, en el caso de masas de agua en mal estado cuantitativo, no es viable en tanto estas masas de agua recuperen el buen estado. Por tanto, a nuestro juicio, la problemática no viene de la norma que es clara, sino del estado cuantitativo de las masas de agua afectadas.

No podemos compartir el enfoque que da la alegante al concepto “finalidad de la derivación”, si bien es una cuestión que se regula en el RDPH y el EpTI no puede abordar al estar ya regulado. Lo que plantea la alegante supone blindar los recursos hídricos para determinados usuarios dejando vacía de contenido, por ejemplo, lo que dispone el artículo 65 del TRLA: las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. Para ello las Confederaciones Hidrográficas realizarán auditorías y controles de las concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y utilización de los recursos hídricos objeto de la concesión. Más allá de lo que considere la alegante, entendemos que si la interpretación del concepto, a su juicio, no respeta el marco legal puede acudir a los tribunales para que ponga luz en una cuestión que podría estar oscura.

Alegación 7.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas (novaciones concesiones)

En relación con el punto 7 de la ficha, se considera de gran interés que el futuro instrumento de planificación contemple expresamente la posibilidad de desarrollar balsas de infiltración situadas fuera del Dominio Público Hidráulico con destino a la recarga artificial de masas de agua subterránea….

Podrían aprovecharse instalaciones de bombeo fotovoltaico existentes fuera de la campaña de riego, siempre que se utilicen recursos excedentarios, no regulados y no exista afección a terceros ni al régimen general de explotación

Respuesta:

La recarga artificial de acuíferos es una práctica que se lleva haciendo es esta cuenca desde hace más de 20 años, las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 la Confederación encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos, teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, como aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, nos parece una alternativa a tener en cuenta para el fin que propone el alegante, por lo que ya se contempla como medida en la alternativa 3 del EpTI, a la espera de que la autoridad competente pueda validarla y asumirla teniendo en cuenta todos los condicionantes: ubicación de estas infraestructuras, su proximidad a cauces con recurso suficiente, los costes de las obras, su financiación, y los costes de explotación y energía, pues la mayoría han de llenarse con bombeos,…; en definitiva muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

Alegación 8.

DU-03.- Contaminación urbana e industrial (reutilización)

En relación con el punto 7 de la ficha, se plantea la posibilidad de utilizar aguas residuales urbanas tratadas, incluso sin tratamiento terciario, para el riego de cultivos agrícolas.

Sobre esta cuestión debe señalarse que la viabilidad de dicha medida depende en gran medida de las características concretas del sistema de riego, del tipo de cultivo implantado y de las infraestructuras hidráulicas existentes en cada zona regable. [..] para evitar problemas operativos relacionados con obturación de toberas, acumulación de sólidos, afección a filtros, incrustaciones en conducciones y pérdida de eficiencia hidráulica de las instalaciones.

Por ello, no parece técnicamente adecuado plantear soluciones homogéneas para el conjunto de la Demarcación, debiendo evaluarse de forma individualizada las condiciones técnicas, agronómicas, sanitarias y económicas de cada zona regable antes de impulsar la reutilización generalizada de aguas regeneradas.

Asimismo, convendría que el futuro instrumento de planificación incorporase estudios específicos sobre compatibilidad hidráulica y costes reales de adaptación de infraestructuras, especialmente en regadíos modernizados de alta eficiencia, evitando trasladar íntegramente dichos costes a las Comunidades de Regantes.

Respuesta:

No se comparte la observación, la cual critica el planteamiento de usar aguas sin tratamiento terciario. La Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2024 sobre

el tratamiento de aguas residuales y urbanas, reconoce esta posibilidad y lo hace como una oportunidad de optimización, indica que "*Los nutrientes contenidos en las aguas residuales urbanas pueden ser útiles en los casos en que las aguas residuales urbanas tratadas se reutilicen en la agricultura, de conformidad con el Reglamento (UE) 2020/741. En esos casos, los Estados miembros deben poder beneficiarse, en condiciones específicas que garanticen el nivel más elevado de protección del medio ambiente y la salud humana, de una excepción a la obligación de aplicar un tratamiento terciario de conformidad con la presente Directiva, únicamente para la parte de las aguas residuales urbanas tratadas que se reutilice en la agricultura*.". Es decir, la directiva permite establecer excepciones a los requisitos del tratamiento terciario para la fracción de aguas destinadas exclusivamente al riego agrícola, pero no de forma generalizada, ya que exige demostrar caso por caso que el contenido en nutrientes no supera la demanda de los cultivos y que no existen riesgos para la salud o el medio ambiente. Parece lógico, en términos de optimización, no hacer el esfuerzo de eliminar nutrientes en aguas que van a nutrir a los cultivos.

Alegación 9.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Del análisis de la ficha parece desprenderse una apuesta prioritaria por modelos intensivos de naturalización fluvial, basados en esquemas de restauración ecológica donde el cauce aparece acompañado por bosque de galería y bandas de vegetación herbácea en ambas márgenes, favoreciendo así la conectividad longitudinal y transversal de los flujos hídricos y sedimentarios [..] dicho enfoque puede resultar excesivamente homogéneo si no se tienen suficientemente en cuenta las particularidades geomorfológicas, históricas y territoriales de numerosos cauces [..]. Existen determinados tramos del Dominio Público Hidráulico que, en realidad, constituyen cauces profundamente transformados por la acción humana a lo largo de siglos, especialmente sobre antiguas llanuras lacustres o cuencas endorreicas sedimentarias desarrolladas durante el Pleistoceno.

En numerosos casos, los cauces actuales responden a procesos históricos de excavación y drenaje artificial desarrollados con el objetivo de desecar zonas inundables o lagunares y aprovechar agronómicamente las fértiles vegas originadas por procesos de colmatación sedimentaria. [..]. Por ello, en determinados sistemas hidrológicos altamente antropizados, la recuperación de modelos teóricos de naturalización podría requerir alteraciones territoriales de enorme magnitud, incompatibles en muchos casos con la realidad física actual, con los usos consolidados existentes y con los derechos legítimamente adquiridos sobre los terrenos adyacentes.

Asimismo, debe tenerse presente que sobre los terrenos colindantes con los cauces concurren frecuentemente derechos consolidados, singularmente derechos de propiedad privada, cuya eventual afección exigiría las correspondientes compensaciones y una adecuada justificación basada en criterios de proporcionalidad.

Respuesta:

La normativa actual apuesta por una restauración fluvial que lleve a los ríos, lagos y humedales a una situación lo más similar a su situación original previa a la intervención humana. Esto permite crear entornos más resilientes a la contaminación y más seguros ante eventos extremos como inundaciones, entre otros, con las consiguientes ventajas para los seres humanos. Por situación original no se

entiende una situación uniforme, sino adaptada a cada tipo de río. A modo de ejemplo, aquellos ríos con hidrología extrema no tienen asociado un bosque de ribera ya que periódicamente las avenidas lo arrastran, permitiendo únicamente la presencia de individuos jóvenes. Para estos ríos la existencia de una gran presencia de bosque de galería es síntoma de alteración del régimen hídrico, lo cual suele ocurrir, por ejemplo, aguas debajo de los embalses.

Si bien la alteración de los cauces se lleva haciendo desde antiguo, ha sido en el siglo XX donde se han producido las grandes actuaciones de drenaje y encorsetamiento del río. Las imágenes del vuelo americano del 56 así lo ponen de manifiesto, ya que muestran un grado de naturalidad de los cauces muy distinto al actual.

De acuerdo con la normativa y los documentos técnicos de planificación, una masa de agua superficial se puede designar como muy modificada (HMWB, por sus siglas en inglés) cuando, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza. Este "cambio sustancial" se entiende como una modificación de sus características hidromorfológicas que impide que la masa alcance el buen estado ecológico. Esto debe analizarse minuciosamente mediante distintas revisiones tasadas en la normativa, y así se ha hecho en los sucesivos planes hidrológicos. En el último, a modo de ejemplo, se han designado 186 masas de agua río muy modificados y se van a volver a revisar en este ciclo de planificación.

Cabe mencionar también que la propiedad privada no puede prevalecer sobre terrenos que, por sus características geofísicas, forman parte del cauce natural. La propiedad privada en zonas colindantes a ríos no es absoluta; está intrínsecamente limitada por la ley para garantizar la seguridad pública y la protección ambiental. La jurisprudencia del Tribunal Supremo avala que la Administración proteja el DPH sin indemnizaciones automáticas, ya que actuar sobre el cauce natural es una obligación legal para alcanzar el buen estado de las aguas, objetivo que constituye un interés público superior.

Alegación 10.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Parece razonable admitir la posibilidad de actuaciones de gestión activa y mantenimiento de la vegetación de ribera, aplicando criterios técnicos y silvícolas semejantes a los utilizados en otras masas forestales, especialmente cuando dichas actuaciones resulten necesarias por motivos hidráulicos, de seguridad, sanitarios o de conservación. […]

Se considera necesario que el instrumento de planificación hidrológica contemple la posibilidad de autorizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales, teniendo en cuenta sus características geomorfológicas, los usos preexistentes y los intereses legítimos concurrentes. […].

Especial atención merece la proliferación del carrizal y otras especies invasoras o expansivas, cuyo desarrollo puede reducir significativamente la capacidad hidráulica de desagüe y alterar el equilibrio ecológico de determinados tramos fluviales. Por ello, se considera conveniente que el futuro instrumento de planificación contemple expresamente medidas de control y gestión activa de este tipo de formaciones vegetales cuando existan razones hidráulicas, ambientales o de seguridad que así lo aconsejen.

Respuesta:

Los criterios técnicos y silvícolas utilizados en otras masas forestales no tienen por qué se similares a los que aplican a la vegetación de ribera, al ser el río un elemento diferenciador en su creación y modelado. Las mejores actuaciones para la mejora de las condiciones hidráulicas, de seguridad, sanitarias o de conservación, son las de restauración del río a su situación original, en la que su configuración, trazado, brazos secundarios y llanura de inundación permitan la laminación de avenidas o el filtrado de nutrientes y otras sustancias nocivas para la salud.

Se está de acuerdo en realizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales. Así se hace, de hecho. No se abunda más ante la generalidad del comentario.

Independientemente de que en alguna circunstancia puedan aplicarse medidas de control activo de especies invasoras, se debe recordar que la restauración de la conectividad longitudinal y lateral, junto con la recuperación de la morfología natural del cauce, permite que el ecosistema funcione mediante mecanismos de control natural frente a especies invasoras. Un río con un hábitat naturalizado favorece el mantenimiento de las comunidades biológicas autóctonas, dificultando que las especies invasoras desplacen a los endemismos locales. La alteración del régimen natural de los ríos y la creación de aguas estancadas (paso de régimen lótico a léntico) son precisamente los factores que facilitan la proliferación de especies exóticas.

Alegación 11.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Respecto a las obras de cruce aéreo o subterráneo de infraestructuras sobre cauces públicos, se considera necesario que el nuevo Plan Hidrológico otorgue un mayor peso a los criterios técnicos e hidráulicos en la evaluación de las actuaciones proyectadas, evitando que el condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada. […]

En relación con las autorizaciones de obras en el Dominio Público Hidráulico, se considera igualmente conveniente admitir la aplicación del criterio de escala para el cálculo hidrológico de avenidas mediante el Método Racional Simplificado, así como permitir simulaciones hidráulicas basadas en levantamientos topográficos específicos realizados para cada actuación.

Finalmente, se considera de gran interés que la Confederación Hidrográfica del Duero establezca, de forma previa y suficientemente clara, criterios técnicos orientativos para la tramitación de autorizaciones relativas a puentes, pasarelas y otras obras sobre cauces.

Respuesta:

Los condicionantes ambientales son un requisito que estable la normativa actual. No se está de acuerdo con el comentario que indica que el "condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada" en las actuaciones en cauce.

El uso del método racional simplificado para cálculos hidráulicos en la planificación se incluye en el Anexo XI del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Se remite a esta norma y no al plan hidrológico el resto de observaciones presentadas sobre autorizaciones de obras en cauce.

Alegación 12.

DU-05 Gestión del riesgo de inundación

Respecto al tema importante DU-05, se considera razonable que el instrumento de planificación permita incorporar estudios hidrológicos e hidráulicos de mayor detalle, sustentados en levantamientos topográficos específicos, modelizaciones bidimensionales, campañas de campo y análisis hidráulicos adaptados a las características concretas de cada emplazamiento.

Este criterio de mayor precisión técnica debería poder extenderse también a la determinación de caudales de avenida, permitiendo ajustar los cálculos hidrológicos a las características reales de cada cuenca vertiente y evitando la aplicación automática de metodologías generales cuando existan estudios específicos suficientemente justificados

Demandamos que cualquier actuación que se plantee, no cause perjuicio a la actividad económica implantada en el territorio.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, y sin perjuicio de lo ya señalado en este documento acerca del alcance propio del ETI, procede indicar que las cuestiones planteadas presentan indudable relevancia desde la perspectiva del adecuado diagnóstico del riesgo y peligrosidad de las inundaciones. No obstante, será en fase de redacción del PGRI cuando se revisen los modelos hidráulicos para establecer las medidas adecuadas para reducir el riesgo de las inundaciones.

Las modelizaciones hidráulicas e hidrológicas están en constante actualización y singularmente en las tres fases de elaboración de los de PGRI: fase de evaluación preliminar del riesgo, fase de elaboración de los mapas de peligrosidad y fase de plan de gestión del riesgo. La cartografía de peligrosidad del SNCZI simula escenarios estadísticos de eventos extraordinarios, como son las avenidas de media y baja probabilidad (100 y 500 años de periodo de retorno). El SNCZI exige que las simulaciones hidráulicas para delimitar el riesgo se realicen sobre la base del terreno en condiciones actuales ofrecidas por el modelo digital del terreno (MDT), manteniendo infraestructuras como azudes y puentes tal y como existen hoy. Ese MDT se obtiene por tecnologías suficientemente maduras que, con la previa revisión a su aplicación, ofrecen una información exacta y muy adecuada para el objetivo final.

Las medidas que el PGRI establezca tratarán de limitar los perjuicios a las actividades actuales; no obstante puede darse el caso de que haya actividades ubicadas en zonas inundables que cuenten con autorizaciones previas a la entrada en vigor del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y de los artículo 9 y 14 del RDPH; para ellas será muy difícil que cualquier medida que se establezca en el PGRI no entrañe perjuicio que, por otra parte, ya le causa la propia ubicación.

Alegación 13.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad (sobre los problemas de garantía en el Alto Duero)

En el punto 5.1 de la ficha se indica que, según los resultados de la modelización realizada, los principales problemas de incumplimiento de garantía de los regadíos superficiales regulados se concentran, entre otros, en el sistema Alto Duero.

No obstante, dicha conclusión no parece plenamente coherente con determinadas propuestas y planteamientos trasladados en el seno de las Juntas de Explotación del Alto Duero, poniéndose como ejemplo la propuesta de trasvases en marzo de 2023 al Bajo Duero, sistema que en la tabla incluida en el citado punto 5.1, figura con "0" UDAs reguladas con incumplimiento en la Alternativa 0, mientras que el Alto Duero aparece como uno de los sistemas con mayores problemas de garantía.

[..]

Todo ello pone de manifiesto la necesidad de profundizar en el análisis individualizado de los sistemas y de las distintas zonas regables, evitando trasladar automáticamente resultados globales o agregados a todas las Comunidades de Regantes integradas en un mismo sistema de explotación.

Respuesta:

El objetivo del EpTI es analizar una serie de alternativas a nivel cuenca, por lo que hay que considerar estos resultados como orientativos cuando el nivel de detalle es menor. Con los datos disponibles en el momento de la redacción del EpTI, el sistema de explotación Alto Duero presenta problemas de incumplimientos de garantías, cosa que no ocurre en el SE Bajo Duero. Hay que tener en cuenta que actualmente para los trabajos del Plan Hidrológico estamos actualizando los modelos de Aquatool (su diseño, sus reglas de operación y sus datos de entrada) por lo que los resultados obtenidos pueden variar. Se obtendrán resultados más precisos que se plasmarán en el anejo 6 "Asignación de reservas y recursos" cuyo nivel de detalle permite individualizar los sistemas de explotación y las distintas unidades de demanda.

Alegación 14.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad (sobre novaciones)

Se considera necesario evitar interpretaciones extensivas de la normativa reguladora que permitan utilizar dichos procedimientos como mecanismo indirecto de reducción de derechos concesionales consolidados, especialmente cuando no se alteran ni la superficie regable, ni el volumen concesional, ni los caudales máximos autorizados

Respuesta:

La existencia de un derecho concesional, con un volumen máximo anual un caudal máximo, no garantiza la disponibilidad de agua, como señala cada Resolución de concesión de aguas en sintonía con lo que dispone el artículo 59 del TRLA: *las concesiones se otorgarán teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos*.

Por otra parte, el propio TRLA, en su artículo 65, señala que *las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. A estos efectos, las Confederaciones Hidrográficas realizarán auditorías y controles de las concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y utilización de los recursos hídricos objeto de la concesión*. No cabe duda de que algunos regadíos han experimentado en los últimos años procesos de mejora de infraestructuras que permiten una mayor eficiencia en el uso del agua, por lo que parece razonable y en todo caso coherente con las disposiciones normativas, que esas concesiones puedan revisarse para su adaptación a las nuevas tecnologías, lo que debería contribuir a mejorar los objetivos ambientales y también a permitir que nuevas actividades se incorporen al uso del agua.

Por otra parte, las modificaciones y las revisiones concesionales están reguladas en TRLA y RDPH, singularmente cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. Por lo tanto, en el EpTI no se puede atender esta alegación a la que da cumplida respuesta la normativa vigente, de mayor rango que un Plan Hidrológico.

Alegación 15.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos (sobre demolición de canales sin uso)

En las zonas donde se están desarrollando o se prevén actuaciones de modernización vinculadas a procesos de concentración parcelaria, se constata que el Organismo de cuenca debería promover la incorporación de los antiguos canales y sus bancadas a la concentración parcelaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Concentración Parcelaria de Castilla y León.

Asimismo, convendría reconsiderar jurídicamente la imposición automática de actuaciones de integración ambiental sobre infraestructuras fuera de uso, atendiendo a la necesaria coherencia entre la planificación hidrológica y el resto del ordenamiento jurídico.

Debe tenerse en cuenta que numerosos canales y bancadas construidos en zonas transformadas por el IRYDA se asentaron sobre terrenos de titularidad privada obtenidos mediante expropiación, aportaciones voluntarias o descuentos derivados de procesos de concentración parcelaria, siempre vinculados a una finalidad concreta de utilidad pública.

Desaparecida dicha finalidad por el abandono o sustitución de la infraestructura original, deberían valorarse adecuadamente los principios de reversibilidad y proporcionalidad previstos en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en conexión con la legislación expropiatoria. […]

Asimismo, se considera necesario que el futuro Plan clarifique que el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a estas actuaciones pueda resultar suficiente para la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental favorable cuando la demolición o integración ambiental forme parte de proyectos complementarios de infraestructura rural o concentración parcelaria.

Respuesta:

La cuestión sobre los canales del Estado que quedan sin uso debido a modernizaciones de regadío que desarrollan las comunidades de regantes ya se planteó en el EpTI del ciclo de planificación anterior (2022-2027) y, en consecuencia, se estableció un artículo en la Normativa del Plan Hidrológico vigente que señala que *De conformidad con los artículos 10.4 b) y 10.6 b) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en los proyectos de modernización de regadíos que afecten a zonas regables del Estado, se deberá contemplar una solución para las infraestructuras que fueron financiadas total o parcialmente con fondos del Estado, de forma que se garantice su correcto uso, conservación y mantenimiento. Si la solución fuera su puesta fuera de servicio, por ser sustituidas por otras más modernas y eficientes, los proyectos de la modernización, en coordinación con las actuaciones de concentración parcelaria, contemplarán las actuaciones necesarias para que la eliminación de las infraestructuras hidráulicas en desuso se produzca garantizando su integración ambiental para reducir el impacto que estas obras producen en su entorno.*

En todo caso es la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, quien establece cómo actuar con estas infraestructuras si van a quedar fuera de uso y no afectas al servicio público para el que se construyeron. Pero es el promotor de la modernización quien deberá darle una solución y asumir las exigencias de la ley citada, y que de otra forma el Estado debería seguir manteniendo esas infraestructuras sin uso y repercutiendo su coste en los usuarios específicos de cada infraestructura.

Alegación 16.

DU- 07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos (sobre almacenamiento energético)

En relación con las mejoras energéticas y la transición energética, convendría valorar el potencial de determinadas infraestructuras de regadío modernizadas para contribuir a la estabilidad y almacenamiento energético del sistema eléctrico.

En efecto, determinadas instalaciones dotadas de bombeos y balsas de regulación en altura podrían funcionar, con las adaptaciones técnicas necesarias, como sistemas reversibles de almacenamiento energético de respuesta rápida, especialmente fuera de la campaña de riego.

Ello permitiría incrementar la rentabilidad social y económica de infraestructuras ya existentes o proyectadas, favoreciendo además la integración de energías renovables.

Respuesta:

Cualquier iniciativa como la que se propone en la alegación puede pasar por el correspondiente procedimiento concesional, por lo que si los usuarios de determinadas concesiones para otros usos quieren plantear este tipo de actividades pueden hacerlo; su viabilidad quedará sujeta al procedimiento concesional que corresponda. Pero el EpTI no debe entrar en una materia que tiene en la normativa general su acomodo. No obstante, a nuestro juicio, estas propuestas están más en el ámbito teórico y general que en los casos concretos: muchas veces esta sintonía de usos no es viable por las limitaciones que impone no tanto las posibilidades técnicas, sino las normas sectoriales de dos ámbitos (como puede ser el energético y el agrario) que no siempre son compatibles.

Alegación 17.

DU- 07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos (recrecimiento de Cuerda del Pozo)

Respecto al análisis realizado sobre el posible recrecimiento del embalse de La Cuerda del Pozo, no se alcanzan a comprender plenamente las conclusiones reflejadas en la ficha, especialmente si se considera que el recurso adicional derivado del recrecimiento se destinase prioritariamente al sistema Alto Duero.

Atendiendo a la capacidad actual del embalse y al volumen de recursos actualmente no regulados que podrían pasar a ser regulados mediante el recrecimiento, parece razonable considerar que dicha actuación podría mejorar de forma significativa la garantía de suministro de determinadas UDAs agrarias reguladas.[…]

Por otro lado, se considera de gran interés que el futuro Plan contemple expresamente la posibilidad de construir mini embalses y balsas de regulación de pequeña capacidad, tanto dentro como fuera del Dominio Público Hidráulico, especialmente en vaguadas y pequeños cauces.

Respuesta:

El análisis del posible recrecimiento del embalse de la Cuerda del Pozo se analiza en las alternativas 5 y 6 de la ficha DU-07. Este recrecimiento no se ha destinado prioritariamente a atender al sistema Alto Duero ni a ningún otro sistema dado que el objetivo del EpTI es evaluar el efecto de las distintas alternativas a nivel de demarcación hidrográfica. A pesar de eso, mejoran los déficits y las garantías volumétricas en el Alto Duero (para las unidades de manda reguladas), pasando de un déficit de 21,82 Hm^3/año y u 82,2% de garantía volumétrica en la alternativa 2 (tabla 34) para todo el sistema, a 14,51 Hm^3/año y 87,3%, respectivamente, en la alternativa 6 (tabla 40).

Por último, comentar que nos parece interesante la propuesta de construir mini embalses y balsas pequeñas, aunque habría que valorar su viabilidad y compatibilidad con el Plan Hidrológico.

Alegación 18.

DU- 07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos (recuperación de costes)

Las Comunidades de Regantes, especialmente aquellas que ya han afrontado importantes procesos de modernización y fuertes inversiones asociadas, presentan una capacidad económica limitada para asumir simultáneamente:

- *Los costes derivados de la modernización*
- *El mantenimiento de infraestructuras tradicionales*
- *Las nuevas exigencias ambientales*
- *Las inversiones vinculadas a la adaptación al cambio climático*

Por ello, se considera conveniente que las distintas administraciones públicas impulsen líneas específicas de financiación orientadas a la mejora hidráulica y eficiencia de canales tradicionales que permanezcan en servicio, especialmente mediante actuaciones de impermeabilización, adecuación estructural, automatización, control de pérdidas y optimización de la distribución

Respuesta:

El régimen económico y financiero del agua en lo que se refiere a la actuación del organismo de cuenca en materias como la que expone la alegación se fija en el artículo 114 del TRLA para el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua. Por tanto, siendo razonable la observación, el marco de actuación de la CHD es el que fija ese artículo y los del RDPH que lo desarrollan.

El artículo 46 del TRLA señala que tendrán la consideración de obras hidráulicas de interés general y serán de competencia de la Administración General del Estado, las obras que sean necesarias para la regulación y conducción del recurso hídrico, al objeto de garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua en toda la cuenca. La competencia para declarar una obra de interés general es del poder legislativo que lo hace por ley emanada del parlamento.

Alegación 19.

DU- 07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos (recarga artificial de acuíferos)

En relación con el aumento del recurso disponible mediante recarga artificial de acuíferos, se considera que esta técnica no recibe en la planificación actual ni futura el tratamiento estratégico que merece.[…], se considera necesario incorporar en el futuro Plan estudios específicos de viabilidad hidrogeológica y de modelización para este tipo de soluciones.

Entre las posibles líneas de actuación susceptibles de análisis destacan la derivación de recursos excedentarios hacia balsas o zonas de infiltración, el aprovechamiento de bombeos existentes en comunidades modernizadas, la utilización de mini embalses de infiltración y la regulación piezométrica mediante baterías de sondeos y otros sistemas de gestión del nivel saturado.

En cualquier caso, cualquier actuación de esta naturaleza debería sustentarse en estudios hidrogeológicos rigurosos que permitan garantizar la viabilidad técnica, el mantenimiento de las divisorias subterráneas y la ausencia de afecciones negativas sobre terceros o sobre masas de agua conectadas.

Respuesta:

Como se ha explicado en la respuesta a la alegación número 7, la recarga artificial de acuíferos no es una idea nueva, es una práctica que se lleva haciendo es esta cuenca desde hace más de 20 años. Las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 la Confederación encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos, teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, como aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc. Y el resultado es que no hay tantos lugares aptos para esa recarga.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, nos parece una alternativa a tener en cuenta para el fin que propone el alegante, por lo que ya se contempla como medida en la alternativa 3 del EpTI, a la espera de que la autoridad competente pueda validarla y asumirla teniendo en cuenta todos los condicionantes: ubicación de estas infraestructuras, su proximidad a cauces con recurso suficiente, los costes de las obras, su financiación, y los costes de explotación y energía, pues la mayoría han de llenarse con bombeos,…; en definitiva muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

Alegación 20.

DU- 06 y DU-7 (resiliencia hídrica)

Respecto a las fichas DU-06 y DU-07 se considera necesario que el futuro Plan Hidrológico adopte un enfoque integral de resiliencia hídrica que no se limite exclusivamente al análisis inmediato de déficits de garantía, sino que incorpore también criterios de seguridad estratégica, capacidad de adaptación climática, estabilidad territorial, mantenimiento de la actividad agraria y capacidad de gestión plurianual del recurso.

Respuesta:

Realmente eso es lo que se hace en todo el EpTI y, singularmente en los temas importantes DU-06 y DU-07. Ambas fichas se enfocan para analizar la satisfacción de las demandas, uno de los objetivos de la planificación hidrológica, y su armonización con los objetivos ambientales. Se debe recordar que la resiliencia hídrica en los términos que figura en la Estrategia europea de resiliencia hídrica, aprobada por Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones de 4 de junio de 2025 señala como objetivos:

- restaurar y proteger el ciclo hidrológico como base para un suministro sostenible de agua;
- desarrollar, en colaboración con la ciudadanía, una economía hidrointeligente que fortalezca la competitividad de la UE, resulte atractiva para los inversores y permita una industria del agua próspera;
- garantizar el acceso continuo al agua limpia y al saneamiento a un precio asequible para toda la población, así como incentivar la resiliencia hídrica entre la ciudadanía.

Los tres objetivos están presentes en el enfoque del EpTI. Identificar los déficits de garantía permite identificar las medidas para corregirlos y garantizar el acceso al agua para todos; las medidas para corregir los déficits de garantía (que singularmente se analizan en las fichas DU-06 y DU-07 pero también en DU-08 y DU-10) pretenden ofrecer posibles soluciones con sus ventajas e inconvenientes; y todo ello para garantizar la sostenibilidad del regadío (señalado específicamente en DU-06), por sus externalidades positivas en una demarcación hidrográfica como la del Duero.

Alegación 21.

El propio documento DU-09 pone de manifiesto importantes diferencias en el grado de ejecución de los distintos grupos de medidas del vigente Plan Hidrológico.

Resulta especialmente significativo que determinadas actuaciones vinculadas al ámbito energético presenten niveles de ejecución muy superiores a los inicialmente previstos, mientras actuaciones

estratégicas directamente relacionadas con la garantía hídrica, la modernización de regadíos, las infraestructuras de regulación y la adaptación al cambio climático presentan porcentajes de ejecución considerablemente inferiores.

Se considera necesario analizar si la priorización presupuestaria y administrativa actual responde adecuadamente a las necesidades reales de resiliencia hídrica de la cuenca.

Respuesta:

Para hacerse una idea de la ejecución de las medidas, comparar los porcentajes de ejecución de cada grupo de medidas (por ejemplo, modernización o nuevos regadíos con el grupo de energía) es solo una parte del análisis; es necesario también comparar los importes. En la tabla de grado de ejecución de medidas que se incluye en Ficha DU-09, se observa que las autoridades competentes han validado en el programa de medidas de modernización y nuevos regadíos asciende a 1.221 millones de euros, por 1 millón de euros en el grupo de energía. Que se haya ejecutado el 352% de la inversión del grupo de energía (es decir 3,5 millones de euros) no tienen relevancia frente a la ejecución de 270 millones de euros en nuevos regadíos y su modernización.

El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento.

Una vez definido este Programa de medidas, su validación con el correspondiente compromiso presupuestario o financiero se debe hacer en el Comité de Autoridades Competentes en el que están representadas todas las administraciones competentes en una persona con alto rango administrativo (consejero o director general), dado que va a asumir responsabilidades administrativas y presupuestarias. Estas autoridades deben dar la conformidad al programa de medidas para lo cual, cada una internamente, habrá debatido la capacidad y conveniencia de asumir cada medida. Por tanto, los mecanismos formales para asegurar la ejecución del Programa de medidas existen y desde el ámbito de la planificación hidrológica sólo se puede recalcar que estos mecanismos no deben ser simplemente formales sino también reales. La propia Ficha describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas

de carácter administrativo, ambiental o social. No obstante, en atención a la alegación se incluye una nueva decisión sobre la rendición de cuentas.

Los mecanismos de rendición de cuentas están formalmente delimitados en el ámbito administrativo, por ejemplo, con la regulación que se incluye en los artículos 87 y 88 del RPH. Pero este ámbito es meramente administrativo y no político, que tiene sus propios itinerarios.

Alegación 22.

DU- 06 y DU-7 (importancia regulación)

El EpTI documento limita prácticamente el análisis de viabilidad de las infraestructuras de regulación al efecto hidrológico inmediato sobre las garantías de las demandas, dejando fuera otros factores estratégicos esenciales.

Entre los aspectos insuficientemente considerados destacan especialmente la adaptación al cambio climático, la gestión de sequías prolongadas, la mejora de la capacidad de regulación plurianual, la estabilización de caudales ecológicos, la mejora de la capacidad de respuesta frente a avenidas, el cumplimiento de compromisos internacionales y el mantenimiento de la seguridad hídrica y alimentaria.

Por ello, se considera que el análisis de futuras infraestructuras de regulación no debería limitarse exclusivamente a balances hidrológicos simplificados de déficit inmediato, sino incorporar criterios de resiliencia estructural del sistema hidráulico y de adaptación futura frente a escenarios de creciente irregularidad hidrológica.

Respuesta:

En general no estamos de acuerdo con la alegación, por lo siguiente:

- El EpTI no hace ni pretende realizar un análisis de viabilidad de las infraestructuras (no es el documento adecuado), ya que la viabilidad de infraestructuras concretas exige estudios específicos de mayor nivel de detalle que podrá iniciarse si desde la planificación se identifican problemas que deben resolverse.
- En las fichas se analiza el efecto sobre las garantías de las demandas, sobre los caudales aportados a Portugal y sujetos al Convenio de Albufeira, sobre los volúmenes de los retornos agrarios, sobre el número de masas de aguas arriba afectadas por el incremento de regulación y se estiman los costes de cada una de las alternativas. El efecto sobre las garantías de las demandas no es inmediato como se dice en la alegación sino bajo el criterio que fija la IPH, a 1, 2 y 10 años considerando una serie hidrológica que va desde 1980/81 hasta 2021/22 en el caso del EpTI (en el futuro plan se amplía la serie hasta el año 2023/24).
- La adaptación al cambio climático, la gestión de sequías prolongadas y la mejora de la capacidad de regulación plurianual están suficientemente consideradas dado que los modelos trabajan con una serie mensual de aportaciones naturales de más de 41 años donde se suceden épocas de sequía y épocas de grandes aportaciones que los embalses van regulando de forma adaptativa cada año de la serie. Por otro lado, la mayor parte de las alternativas del EpTI consideran la reducción por cambio climático contemplada en el Plan Vigente.

- La estabilización de los caudales ecológicos no es una función de las infraestructuras de regulación y es un contrasentido como se explica en la respuesta a la alegación 23.
- La mejora de la capacidad de respuesta frente a avenidas no es posible evaluarla a una escala mensual (escala de trabajo del modelo Aquatool). Por otro lado, las regulaciones tienen una capacidad de laminación limitada, siendo más eficiente laminar avenidas aplicando soluciones basadas en la naturaleza (restauración de llanuras aluviales, recuperación de meandros y humedales, etc).
- El mantenimiento de la seguridad hídrica y alimentaria la consideramos en el sentido de que, al prever menor recurso por Cambio Climático, estudiamos medidas de reducción de demanda (por mejora de eficiencia) y de mayor disponibilidad de recurso con nuevas regulaciones. Así garantizaríamos lo que ya existe.

Sí se acepta la alegación en lo relativo a que el cumplimiento de compromisos internacionales está insuficientemente considerado. Por ello, se incluirá en el documento consolidado del ETI un análisis sobre el cumplimiento del Convenio de Albufeira en la ficha conjunta DU-06, DU-07. La conclusión es que en todas las alternativas analizadas se cumplen los compromisos internacionales del Convenio de Albufeira, con aportaciones anuales superiores a 3.800 hm3/año, excepto en episodios de grave sequía como la de los años hidrológicos 1992/93 y 1980/81, en los que aplica el criterio de excepción fijado por el propio Convenio.

Alegación 23.

DU- 06 y DU-7 (necesidad regulación adicional por cambio climático)

La mejora de la capacidad reguladora de la cuenca no debe entenderse únicamente como una herramienta de garantía de usos, sino también como un instrumento esencial para la adaptación al cambio climático, la estabilización ecológica de las masas de agua, la mejora de la resiliencia territorial y la reducción de vulnerabilidades frente a situaciones extremas.

Respuesta:

Estamos de acuerdo en que la mejora de la capacidad reguladora puede ser una medida de adaptación al cambio climático, mejora de la resiliencia territorial y reducción de vulnerabilidades frente a situaciones extremas. No compartimos la afirmación de que sean un instrumento esencial para la estabilización ecológica de las masas de agua: los caudales ecológicos tratan de replicar el régimen natural y su variabilidad, esto es, caudales altos en el periodo húmedo y bajo en el seco y las regulaciones aplanan ese régimen y además le invierten (caudales bajos en periodo húmedo dado que el recurso se almacena en el embalse). Y respecto a las situaciones extremas de inundaciones, aunque las regulaciones contribuyen a reducir el riesgo, no lo anulan y dependiendo de la infraestructura y el patrón de aportaciones no siempre eliminan la vulnerabilidad de los ribereños aguas abajo, como se ha podido comprobar en el invierno de 2026 en el Alto Duero. Y peor hubiera sido de atender a la propuesta de reducir los resguardos en Cuerda del Pozo realizada por la alegante en la Comisión de Desembalse noviembre de 2025.

Alegación 24.

DU- 06 y DU-7 (conservación funcional de los cauces)

Se considera igualmente necesario reforzar el mantenimiento funcional y la adecuada capacidad hidráulica de los cauces, especialmente en un escenario de incremento previsible de fenómenos extremos asociados al cambio climático.[..]

Todo ello debe abordarse desde criterios de equilibrio hidráulico-ambiental y conservación funcional de los cauces, evitando enfoques homogéneos desvinculados de las características reales de cada tramo fluvial.

Respuesta:

Aunque en el escrito de alegaciones la sugerencia se hace a los temas importantes DU-06 y DU-07, por la materia se refiere a los temas importantes DU-04 y DU-05 y en este contexto se responde.

Sin duda la mejora de las condiciones hidrológicas de cauces es una tarea de gran peso en la cuenca a la que el Organismo de cuenca dedica anualmente entre 4 y 6 millones de euros, posiblemente escasos para las necesidades crecientes, a labores de mantenimiento de cauces. El Programa de medidas del plan hidrológico vigente incluye un paquete de medidas de este tipo. Pero evidentemente no puede llegar a atender eficazmente a los más de 80.000 kilómetros de ríos y arroyos de la cuenca y actúa con criterios de conveniencia y racionalidad económica. Para paliar esta desproporción entre necesidades y posibilidades reales, tanto en el Plan vigente de 2023 como en el anterior de 2016, se incluyó un procedimiento más ágil para acometer determinadas labores de mejora de las condiciones de desagüe de los cauces. Así en el artículo 30 de la Normativa se establece el sistema de declaración responsable para las denominadas *actuaciones menores de conservación de cauces y zonas de policía*. El mismo artículo hace un elenco de las que pueden considerarse actuaciones menores:

I. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera.

II. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce.

III. Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del dominio público hidráulico.

IV. Retirada de sedimentos y vegetación existente en el lecho del cauce, situados 50 metros aguas arriba y aguas abajo de las obras de fábrica y puentes con el fin de conservar su capacidad de drenaje.

V. Pequeñas actuaciones de mantenimiento de puentes e infraestructuras situadas sobre el cauce, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas no haya ocupación del dominio público hidráulico ni quede afectada su capacidad de desagüe.

VI. Mantenimiento de las secciones de estaciones de aforo.

VII. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos.

VIII. Cortas de arbolado bajo líneas eléctricas.

Para todas estas actuaciones la declaración responsable habilita el poder actuar por los particulares sin esperar a ninguna Resolución de la CHD, lo que agiliza notablemente la actuación.

Alegación 25.

DU- 06 y DU-7 (regulación y Red Natura 2000)

Una adecuada capacidad de regulación y almacenamiento puede contribuir positivamente al mantenimiento de determinados ecosistemas asociados al agua, favoreciendo una mayor estabilidad hidrológica, una mejor gestión de sequías y una mayor capacidad de atención de requerimientos ambientales.

Por ello, la planificación hidrológica debería valorar de manera más amplia la posible contribución de determinadas infraestructuras hidráulicas a la conservación efectiva de espacios incluidos en la Red Natura 2000 y otros ecosistemas vinculados al medio hídrico.

Respuesta:

A nuestro juicio es un error conceptual lo que plantea la alegación, como se ha explicado en la respuesta a la alegación nº 23, cuando vincula la construcción de presas de embalse al mantenimiento de los caudales ecológicos en las masas de agua por debajo de la presa: los caudales ecológicos tratan de replicar el régimen natural y su variabilidad, esto es, caudales altos en el periodo húmedo y bajo en el seco y las regulaciones, además de otros efectos, aplanan ese régimen y le invierten (caudales bajos en periodo húmedo dado que el recurso se almacena en el embalse). Cuando se conciben los caudales ecológicos, como probablemente hace la alegante, de manera parcial caudales para que los ríos no se sequen en verano, se puede formular la observación en los términos en que se hace en el escrito de alegaciones, sin embargo, el concepto y sentido de los caudales ecológicos es mucho más amplio.

Hecha esta consideración, podemos manifestar acuerdo en la necesidad de nueva regulación en determinadas zonas para garantizar las demandas actuales y las futuras programadas, en especial en un escenario de cambio climático. De hecho, en el tema importante DU-07 se aborda esta cuestión con cierta amplitud, para un documento como este. Desconocemos si al alegante le parece suficiente porque no cita en qué volumen debería incrementarse esa regulación más allá de datos genéricos en comparación con otros ámbitos territoriales.

Alegación 26.

DU- 06 y DU-7 (Convenio de Albufeira)

se considera imprescindible que la planificación hidrológica incorpore de forma expresa y transparente el análisis de la evolución previsible de las aportaciones naturales y de la incidencia real que los compromisos internacionales pueden tener sobre las garantías de suministro de los distintos sistemas de explotación. [..]

Cualquier incremento de exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la

gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre determinados usuarios o territorios.

Respuesta:

Es importante resaltar que el convenio de Albufeira es un tratado internacional establecido entre dos países, España y Portugal, con la finalidad de dar coherencia y continuidad a tratados anteriores en lo que se ha buscado a lo largo de los siglos limitar los conflictos fronterizos entre ambos países.

Como se indica en la Ficha DU-09, entre las decisiones a tomar en relación con el Convenio de Albufeira, se encuentra *analizar las divergencias entre las planificaciones española y portuguesa para ofrecer soluciones conjuntas a las masas de agua compartidas y los indicadores de sequía y escasez de ambos países para tratar de integrar ambos diagnósticos en uno*. Esta última decisión viene avalada por los memoranda de entendimiento entre España y Portugal de las cumbres hispano-lusa de 2023, 2024 y 2026, en las que ya se está trabajando por ambos países.

La frontera entre España y Portugal, con más de 1.200 km, está atravesada por cinco cuencas hidrográficas, Miño, Limia, Duero, Tajo, Guadiana, siendo en numerosas ocasiones el río el que establece la propia frontera: El Río Miño en Pontevedra, el Río Manzanas al norte de Zamora, el tramo internacional del río Duero y el tramo internacional del Guadiana.

De ahí que una gran parte de los múltiples conflictos fronterizos se hayan debido a la gestión de las aguas y sus cuencas hidrográficas.

Por ello desde mediados del siglo XIX comenzó a desarrollarse una cooperación institucional entre ambos países, encaminada a resolver estos litigios.

El primer antecedente de dicha cooperación fue el Tratado de Límites de 1864, en el cual se definía la raya de separación (frontera). Este tratado resolvió algunos conflictos de lindes existentes en aquella zona, como es el caso de “Las reyertas de Alburquerque”.

Este tratado fue el punto de partida para las posteriores relaciones entre los dos países. Conviene recordar que las Reyertas de Alburquerque eran consecuencia de los usos de unos pastos situados entre dos poblaciones limítrofes, una española y otra portuguesa, y que este tratado las resolvió marcando una línea de frontera que dividió los pastos en dos partes.

Posteriormente, la necesidad de regular el aprovechamiento energético provocó la aparición de diversos tratados para armonizar este uso con el histórico de frontera.

Siendo los acuerdos más destacados los siguientes:

- TRATADO DE LÍMITES DE 1864 - se limita a señalar que los recursos de los tramos transfronterizos deben usarse en beneficio mutuo, sin dañar a la otra parte. En el año 1866 se añaden los anejos al tratado, relativos a proyectos sobre tramos fronterizos.
- ACUERDO DE 1912 - conjunto sencillo de reglas para el aprovechamiento industrial de los tramos limítrofes, asignando la mitad a cada uno con el requisito de presentar un proyecto técnico para el uso del agua. En definitiva, mediante este acuerdo se regula el aprovechamiento industrial del agua de los tramos fronterizos.

- ACUERDO DE 1927 - regula la utilización hidroeléctrica del Duero (perdió su eficacia con la firma del de 1964).
- CONVENIO DE 1964 - reparte el aprovechamiento hidroeléctrico del Duero en dos partes prácticamente iguales y autoriza a España a trasvasar aguas desde la cabecera del río Túa al río Sil. En el Protocolo adicional se recogen cuestiones relativas a embalses laterales y bombeos.
- CONVENIO DE 1968 - extiende el anterior al resto de los ríos transfronterizos, con la posibilidad de emplear embalses laterales y el aprovechamiento para otros usos. Concretamente, este convenio asignó los recursos, fundamentalmente hidroeléctricos, de los tramos internacionales de los ríos Miño, Limia, Tajo y Guadiana y sus afluentes y se contempló la viabilidad de trasvasar recursos de los ríos Guadiana, Chanza y Tajo.

Estos tratados y su necesidad de acompasarlos a las nuevas realidades que surgen con la entrada de ambos países en la CEE que determinan nuevos marcos de cooperación que imponen la revisión de los mismos para ajustarlos a las nuevas realidades.

En este sentido la Declaración de Oporto de 1994 constituye el mandato al más alto nivel para la negociación, poniendo de manifiesto el interés de ambos gobiernos por disponer de un marco estable de organización de las aguas internacionales compartidas.

Los contenidos esenciales se encuadraron en torno a la ampliación del marco de referencia territorial y material de los Convenios en vigor, llevando a cabo una cooperación conjunta de planificación y gestión del recurso, así como el respeto y la compatibilidad de las situaciones existentes y las derivadas de los convenios vigentes.

En este ámbito se configuraron dos equipos negociadores constituidos por altos funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Medio Ambiente, que hasta mediados del año 1996 no tuvieron avances apreciables como consecuencia de los cambios políticos en ambos países. Avances que se harían sustanciales a partir de 1997.

El Convenio de Albufeira, firmado en 1998 en la ciudad portuguesa de Albufeira y en vigor, desde el 17 de enero de 2000, es el último convenio aprobado por ambas naciones en materia de los recursos hídricos compartidos es el Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano – Portuguesas

El 4 de abril de 2008 se firma el Protocolo de revisión del Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, entrando en vigor el 5 de agosto de 2009.

Tiene como eje vertebrador la concepción integral de las cuencas compartidas, incluyendo, por lo tanto, las aguas superficiales, las subterráneas y los ecosistemas relacionados, sin desestimar las actividades relativas al aprovechamiento del recurso con inclusión del rasgo de protección de la calidad de las aguas, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- La ampliación del marco de referencia, abarcando la integridad de las cuencas compartidas, incluyendo las aguas superficiales, las subterráneas y los ecosistemas relacionados

- La ampliación material, contemplando todas las actividades relativas al aprovechamiento del recurso incluyendo la protección de la calidad de las aguas
- La cooperación entre los dos países, en torno a cuatro elementos fundamentales:
  - Intercambio de información, regular y sistemático.
  - Consultas a desarrollar a través de órganos específicos.
  - Adopción de medidas que posibiliten la homologación de los sistemas administrativos y jurídicos de ambos países.
  - Régimen de caudales.
- La coordinación de planes de gestión y programas de medidas, siguiendo las pautas de la Directiva Marco del Agua y organizando entre ambas administraciones hidráulicas los objetivos a alcanzar, existiendo libertad nacional para establecer y realizar un programa de medidas que permita la consecución de los objetivos planteados.
- El respeto de las situaciones derivadas de los Convenios anteriores.

Conviene resaltar que el Convenio de Albufeira ha introducido el concepto de desarrollo sostenible en la gestión de las cuencas y el aprovechamiento de los recursos naturales por medio de:

- La búsqueda de un equilibrio entre protección del medio ambiente y el de los recursos.
- La prevención de los riesgos de una forma común.
- La protección de los ecosistemas acuáticos y terrestres de ellos dependientes.

Asimismo, el Convenio ha fijado una serie de valores:

- Los caudales mínimos que la parte española de las cuencas deber servir a la parte portuguesa en situaciones hidrológicas normales, respetando los convenios internacionales vigentes hasta la fecha.
- Los umbrales de precipitación y/o volumen almacenado en los embalses de regulación que permiten determinar los períodos de excepción.
- Los niveles de caudales establecidos por el Convenio de 1964, contemplando además cuatro estaciones de control y los volúmenes mínimos anuales que deben pasar por ellas

Estos caudales son exigibles, salvo en los períodos de excepción, cuya definición queda también detallada en el Artículo 3.4 del convenio.

Asimismo, el Convenio de Albufeira confirmó el reparto hidroeléctrico establecido en el Convenio de 1964, de tal forma que el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo internacional comprendido entre el origen y la desembocadura del río Tormes, corresponde a Portugal (Centrales de Miranda, Picote y Bemposta), así como el tramo comprendido entre la desembocadura del río Huebra y el final del tramo internacional. Por otra parte, corresponde a España el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo entre la desembocadura del río Tormes y la del Huebra (Centrales de Aldeadávila y Saucelle).

El Convenio de Albufeira regula las relaciones internaciones entre dos países que comparten cinco cuencas hidrográficas por lo que cualquier modificación o propuesta de modificación de cualquier aspecto del tratado requiere del acuerdo mutuo de los dos países.

El Convenio establece los Órganos de Cooperación que se instituyen para la consecución de los objetivos del tratado, que son la Conferencia de las Partes y la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio (CADC).

Para garantizar la cooperación al más alto nivel está establecida la denominada "Conferencia de las Partes". Que está compuesta por los representantes designados por los Gobiernos de las Partes y presidida por los ministros de Medio Ambiente de cada uno de los Estados, o por quien estos deleguen, y se reúne cuando las Partes lo decidan o a petición de cualquiera de ellas, para evaluar y resolver aquellas cuestiones sobre las que no se haya llegado a acuerdo en el seno de la Comisión.

Hasta la fecha se han producido tres "Conferencia de las Partes".

- en Lisboa el 27 de junio de 2005
- en Madrid el 19 de febrero de 2008.
- en Oporto, el 20 de julio de 2015

La Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio (CADC) es el órgano privilegiado de resolución de las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del Convenio.

Si bien es cierto que todo tratado puede ser modificado en la búsqueda de propuestas que intenten mejorar los acuerdos firmados, no es menos cierto que toda modificación exige el acuerdo de ambas partes.

Es importante resaltar que la revisión de cualquier tratado internacional se realiza al máximo nivel, por lo tanto, excede del ámbito de un plan hidrológico, cuya función, en relación con un convenio internacional asumido por el Estado, es establecer las condiciones para el correcto cumplimiento de dicho convenio.

Ello no debe ser óbice para que se estudien y analicen los indicadores y su evolución temporal en la búsqueda de posibles alternativas que puedan servir para evaluar las condiciones de cumplimiento y, si ello es posible, se propongan mejoras que sirvan a la finalidad establecida en la filosofía del convenio.

Alegación 27.

DU- 06 y DU-7 (mayor trasparencia en modelización)

Se considera necesario reforzar la transparencia técnica de las modelizaciones empleadas, permitiendo identificar de forma suficientemente clara la incidencia diferenciada de factores tales como los caudales ecológicos, las reglas de explotación, los compromisos internacionales, las limitaciones de regulación y los distintos escenarios climáticos.

Respuesta:

Las modelizaciones que se han realizado en el ETI toman como base los modelos empleados en el Plan Hidrológico Vigente. Los caudales ecológicos, las reglas de explotación y los compromisos internacionales no se han modificado y se pueden consultar en el anejo 6 del citado Plan.

https://www.chduero.es/documents/20126/1883851/PHD22-27_060_00_Balances-v05.pdf/6d149299-1600-861c-42ed-1dfa7825acc5?t=1666779904500

En cuanto a las regulaciones, se ha considerado un recrecimiento mínimo y un recrecimiento máximo en 11 embalses partiendo del estudio "Posibilidades de incremento de recursos disponibles en Castilla y León", desarrollado por la Universidad de Burgos.

Como escenario climático se ha considerado el del Plan Vigente, el escenario de emisiones RCP 8.5.

En cuanto a poder mejorar en los resultados de las modelizaciones de forma *suficientemente clara y diferenciada ciertos factores*, se comenta a continuación lo siguiente:

- Caudales ecológicos: No se refleja la incidencia en las distintas modelizaciones al ser una restricción al uso y en los modelos se fuerza su cumplimiento.
- Reglas de operación: Son las del plan vigente y se mantienen en las distintas alternativas.
- Compromisos internacionales: Se incorporan los resultados del caudal aportado a Portugal en Hm^3/año (Tabla 53. Análisis de caudal aportado a Portugal y de retornos agrarios en función de las alternativas propuestas) en las diferentes alternativas. Se incluirá en el documento consolidado del ETI un análisis sobre el cumplimiento del Convenio de Albufeira en la ficha conjunta DU-06, DU-07. La conclusión es que en todas las alternativas analizadas se cumplen los compromisos internacionales del Convenio de Albufeira, con aportaciones anuales superiores a 3.800 hm3/año, excepto en episodios de grave sequía como la de los años hidrológicos 1992/93 y 1980/81, en los que aplica el criterio de excepción fijado por el propio Convenio.
- Limitaciones de regulación: Las regulaciones que se modelan son teóricas y están basadas en el estudio que se cita anteriormente.
- Escenarios climáticos: Se considera un solo escenario climático al igual que en el Plan Vigente.

Alegación 28.

DU- 08 Uso urbano y directiva de potables

Se considera conveniente que el futuro Plan Hidrológico contemple expresamente la posibilidad de autorizar actividades y usos dentro de las zonas de protección de captaciones destinadas a abastecimiento, siempre que dichas actuaciones no supongan un riesgo real para la calidad del recurso hídrico.[…]

Asimismo, debería evitarse la aplicación de limitaciones homogéneas sobre zonas de protección con comportamientos hidrogeológicos muy distintos, dado que la vulnerabilidad real frente a potenciales contaminaciones puede variar enormemente en función de las características del terreno y de los acuíferos afectados.

Respuesta:

El régimen jurídico de los perímetros de protección de captaciones destinadas al consumo humano se encuentra actualmente regulado en los artículos 243 ter, 243 quater y 243 quinquies del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), así como en su Anexo VIII. En particular:

- El artículo 243 ter del RDPH establece que se deben determinar perímetros de protección para las captaciones de agua destinada a consumo humano que cumplan ciertos criterios, con la finalidad de preservar su calidad, previendo que dentro de dichos perímetros puedan establecerse condiciones o limitaciones de usos y actividades.
- El artículo 243 quater del RDPH establece que la delimitación de los perímetros de protección se realizará mediante el correspondiente procedimiento administrativo, que incluye trámite de información pública, garantizando la participación de los titulares afectados.
- El artículo 243 quinquies del RDPH regula la delimitación de dichos perímetros mediante la definición de zonas diferenciadas, en las que podrán establecerse restricciones específicas de usos y actividades, lo que implica que dichas limitaciones deben concretarse en función de cada delimitación y no tienen carácter genérico o uniforme.
- El Anexo VIII recoge recomendaciones para la restricción de actividades en las diferentes zonas de los perímetros de protección.

Cumpliendo con lo anterior, dentro de los perímetros de protección que se determinen en el futuro Plan Hidrológico se podrán establecer condiciones o limitaciones de usos y actividades en las diferentes zonas, para evitar que se ponga en riesgo la consecución de los objetivos establecidos en la normativa sobre calidad de las aguas de consumo humano.

En la delimitación de los perímetros mediante la definición de zonas diferenciadas que establece el artículo 243 quinquies, para el caso de captaciones subterráneas se tendrán en cuenta los criterios que recoge la "Guía para el diseño y dimensionamiento de perímetros de protección de captaciones de aguas subterráneas destinadas al consumo humano" publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España CN-IGME (CSIC) en noviembre de 2025. Esta guía considera las diferentes tipologías de acuíferos, parámetros hidrogeológicos e hidrodinámicos y su relación con la vulnerabilidad a la contaminación, para establecer el tamaño de las zonas que conformen cada perímetro de protección.

Alegación 29.

Respecto al tema importante DU-09, se considera necesario recordar que la planificación hidrológica, de conformidad con el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, no persigue exclusivamente objetivos ambientales, sino también la satisfacción de las demandas, la armonización del desarrollo regional y sectorial y la sostenibilidad de las actividades económicas vinculadas al uso racional del agua. En consecuencia, cualquier mecanismo de coordinación interadministrativa o fijación de objetivos específicos en zonas protegidas debe incorporar necesariamente criterios de proporcionalidad, equilibrio territorial, cohesión socioeconómica y viabilidad de los usos existentes, singularmente en territorios rurales altamente dependientes del regadío. […]

La ficha plantea la alineación del marco regulatorio de distintas políticas sectoriales con los objetivos de la planificación hidrológica, incluyendo expresamente la Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats. No obstante, dicha coordinación no debería derivar en la imposición automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos.

Respuesta:

El EpTI se redacta con respeto a los preceptos legales vigente, particularmente lo que dispone el artículo 40 del TRLA sobre los objetivos de la planificación hidrológica. Armonizar la satisfacción de las demandas con el logro de los objetivos ambientales no resulta siempre evidente, y prueba de la dificultad que entraña es que ninguno de los agentes afectados por la planificación hidrológica está satisfecho con las determinaciones de la misma: para unos los documentos de planificación hidrológica benefician los objetivos ambientales en detrimento de la satisfacción de las demandas, para otros ocurre justo lo contrario. El EpTI identifica los temas importantes que afectan a la gestión del agua y ofrece alternativas de soluciones posibles, tratando de equilibrar la protección ambiental exigida por las normas vigentes con el equilibrio económico sectorial y territorial. Y para ello utiliza las herramientas legales que existen, como son los planes estratégicos de otros sectores, por ejemplo, el agrario, el ambiental o el energético. Estos ámbitos quedan fuera de las competencias del agua por lo que sólo si las autoridades competentes lo consideran oportuno, pueden establecerse esas sinergias entre agua y esos sectores. Las restricciones, cuando se aplican, es porque esas autoridades no consideran oportuno aprovechar las sinergias que ofrecen sus sectores, o porque no hay herramientas sectoriales que puedan sustituir a las restricciones, o porque no se han identificado otras soluciones que puedan ser eficaces. Y sí se analiza el efecto de esas medidas restrictivas como se plantea, por ejemplo, en los temas importantes DU-01, DU-02, DU-03, DU-06, DU-07 y DU-08: en todas las fichas de temas importante se analiza el impacto económico y ambiental de cada una de las alternativas, en la medida en que es posible.

Alegación 30.

La ficha DU-09 señala la necesidad de fijar objetivos específicos sobre el medio hídrico de los espacios Red Natura 2000 vinculados al agua. Sobre esta cuestión debe indicarse que cualquier eventual limitación derivada de dichos objetivos deberá sustentarse necesariamente en estudios técnicos individualizados, suficientemente motivados y territorialmente concretos, evitando restricciones automáticas derivadas exclusivamente de la ubicación geográfica de las explotaciones o infraestructuras. Especialmente en sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados, debe garantizarse plenamente la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes y la compatibilidad entre conservación ambiental y actividad agraria sostenible.

Respuesta:

Las limitaciones derivadas de los objetivos de los espacios naturales de Red Natura 2000 ya existen desde que se aprobaron los planes básicos de gestión, en el caso de Castilla y León, desde 2015.

Los objetivos específicos de Red Natura se fijan por las comunidades autónomas en los Planes Básicos de Gestión. En el caso de los Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red

Natura 2000 en Castilla y León se aprobaron por ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre. Estos Planes establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000. Se estructuran en:

- Un documento de "Disposiciones generales", común a los 177 Planes Básicos.
- Ciento setenta y siete documentos de Planes Básicos de gestión y conservación correspondientes a cada uno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.
- Tres "Anexos" comunes a los 177 planes básicos:
    - Anexo I. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000,
    - Anexo II. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Valores Red Natura 2000, y
    - Anexo III. Medidas de conservación y gestión Red Natura 2000.

De todos los espacios y hábitats de estos Planes sólo aquellos vinculados al agua (76 en la demarcación hidrográfica del Duero) deben ser atendidos por la planificación hidrológica como establece el RPH, en la medida en que les afecte. Y las limitaciones en el ámbito del agua las establecen los citados planes. En este sentido cabe transcribir algunos de los fundamentos de derecho que esgrime el Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 515/2025 que se cita en la Ficha DU-09: "*Por consiguiente, y como ciertamente esta situación no parece acomodarse a las exigencias de la DMA y de la legislación interna que la traspone, de las que deriva la necesidad de que los planes hidrológicos, como instrumento esencial de coordinación de la política de aguas, reflejen los objetivos ambientales de las zonas protegidas vinculados a las masas de agua asociadas y su grado de cumplimiento, y que sobre dichos objetivos no cabe aplicar la excepción prevista en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2000/60, procede estimar la pretensión de la parte recurrente y declarar la nulidad de todas las previsiones contenidas en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las que, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 10 de las disposiciones normativas, se prevea la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas de agua vinculadas a zonas protegidas de hábitats y especies, en las que, además, no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares.*

Puede ser llamativo que la delimitación de espacios protegidos por las comunidades autónomas afecten en ocasiones a zonas como las que identifica la alegante ("*sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados*"), por lo que cabría pensar que esos espacios protegidos lo son precisamente por su relación con esos regadíos históricos; sin embargo encontramos en sus planes básicos que la actividad agraria, entre otras, es quien constituye una presión, algo que aparentemente repugna toda lógica racional. Pero la planificación hidrológica poco puede hacer para resolver estas incoherencias, más allá de instar al órgano competente de la comunidad autónoma a que revise esas declaraciones o los planes básicos correspondientes, como también lo puede hacer el sector al que pertenece la alegante.

Alegación 31.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas (ejecución programa de PdM)

No parece razonable incrementar simultáneamente las exigencias ambientales o las limitaciones sobre los usuarios concesionales mientras persistan importantes retrasos administrativos y presupuestarios en la ejecución de actuaciones estructurales cuya responsabilidad corresponde principalmente a las administraciones públicas competentes.

Respuesta:

Manifestamos acuerdo con la alegante en lo que se refiere al notable retraso en la ejecución del Programa de medidas; de hecho, la propia Ficha lo pone de manifiesto cuando abiertamente reconoce que el *Programa de medidas del Plan Hidrológico se construye con las medidas que todas las autoridades competentes (administraciones locales, autonómicas o estatal) y resto de agentes, cada uno en el marco de sus competencias, pueden impulsar para el logro de los citados objetivos. Por tanto, buena parte del éxito de un plan hidrológico para dar cumplimiento a esos objetivos estriba en el compromiso de los agentes de acometer las medidas que caen bajo su ámbito*. También propone algunas decisiones a explorar para que esto no se repita en el futuro, como son que haya un *compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución*, y establecer un *marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios.*

Pero dicho esto no podemos compartir la comparación de este hecho con las necesidades de establecer criterios ambientales ya que en su mayoría estos criterios buscan reducir las presiones sobre las masas de agua y esas presiones se ejercen por actividades y usuarios concretos a quienes corresponde, en la medida de lo que establecen las normas, contribuir a la reducción de las mismas.

Alegación 32.

Respecto al tema importante DU-09 se considera necesario reforzar de manera efectiva la participación técnica y real de los usuarios del agua, singularmente de las Comunidades de Regantes, en los procesos de toma de decisiones y seguimiento de la planificación hidrológica.

Respuesta:

La Ficha DU-09 aborda la necesaria colaboración y cooperación entre los departamentos de la administración pública para que, cada uno en su ámbito competencial, contribuya al logro de los objetivos de la planificación. Y ello porque al tener competencias sobre distintos factores que inciden en el agua (tanto como demanda como medio ecológico), las políticas sectoriales en cada uno pueden contribuir o no a lograr los objetivos.

No se aborda en la ficha el modo de participación de los usuarios en la gestión del agua que tiene sus propias normas legales establecidas. Por ello sorprende que una Comunidad de regantes reclame mayor participación en los procesos de toma decisiones y de seguimiento de la planificación hidrológica. Las comunidades de regantes participan en la Junta de Gobierno, en el Consejo del Agua

de la demarcación, en la Comisión de Desembalse, en la Asamblea de Usuarios y las Juntas de Explotación. Esa representación está regulada en el TRLA, el RAPA o reglamentos específicos (como el que regula el consejo del agua de la demarcación). Todos ellos son órganos de gobierno, gestión, coordinación y participación de los organismos de cuenca. Nos gustaría conocer otros ámbitos administrativos donde la participación de los usuarios fuera al menos de la misma magnitud que en la gestión del agua. De cualquier modo, el EpTI no tiene capacidad para modificar la distribución de la representación de los usuarios en los distintos órganos.

Es importante resaltar que en la gestión del agua en España existe que una larga tradición de participación de los usuarios a través de la representación de las comunidades de regantes en los órganos consultivos de las confederaciones hidrográficas o en el Consejo del Agua. Asimismo, las comunidades de usuarios de regadío participan de forma activa en el diseño de las aportaciones hídricas a través de las juntas de explotación, Comisión de Desembalse y Asamblea de usuarios que se celebran a lo largo del año.

La Directiva Marco Del Agua (DMA) a través de su artículo 14 entiende la participación pública como aquel proceso que permite a las personas influir en el resultado de los planes con el propósito de mejorar los procedimientos de decisión al tener en cuenta el conocimiento del usuario, la experiencia compartida y las evidencias científicas

Por ello la DMA define como público interesado a cualquier persona física o jurídica que tiene un interés o una implicación en un problema, bien porque está directamente afectado, o porque su participación puede influir en el resultado, implicando con ello a toda la ciudadanía en pie de igualdad en los procesos de gestación de los planes hidrológicos.

La intencionalidad de la DMA es implicar a todas las partes interesadas en la gestión del agua (administraciones públicas, usuarios, medioambientalistas, afectados en general y ciudadanos) en el del proceso de planificación, ya que entiende que la implicación ciudadana mejora la administración de agua y ayuda a resolver conflictos a través del diálogo.

Siguiendo este criterio la legislación española través del Texto Refundido de la Ley de Aguas (artículo 42.1.i) y del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica (art.72 a75) regula los procesos y procedimientos para hacer efectiva la participación activa de los ciudadanos en las fases de creación y consolidación de los planes hidrológicos.

Estableciendo los tres niveles de participación diferenciados que la propia Directiva Marco del Agua determina:

- información Pública (información disponible sobre el plan y los procesos de decisión pública),
- consulta pública (período oficial de presentación de alegaciones por parte de interesados y público en general ante un plan o decisión de las autoridades)
- participación activa (implicación de las personas y entidades interesadas o afectadas y el público en general en los procesos de decisión)

En cumplimiento de lo indicado anteriormente la Oficina De Planificación De La Confederación Hidrográfica del Duero tras la fase de exposición pública aprobó el 20 de diciembre de 2024 el

documento inicial de la revisión del proceso de planificación del 4º ciclo "DOCUMENTOS INICIALES" titulado: "Programa, Calendario, Estudio General Sobre La demarcación Y Fórmulas De Consulta" en el que se establece en su apartado 2.1.3 las Fórmulas de consulta y proyecto de participación pública que regirán a lo largo de las fases que concluirán con la aprobación del Plan hidrológico del cuarto ciclo.

Por ello desde la OPH se entiende que las comunidades de usuarios de regadío se encuentran adecuadamente representadas en este cuarto proceso de revisión, (al igual que lo estuvieron en los anteriores) y que su voz es escuchada en pie de igualdad con el resto de los agentes, entendiendo que solo desde la voluntad de todas las partes por encontrar ámbitos de confluencia que permitan afrontar los problemas planteados en el ETI podrá avanzarse en su resolución.

Alegación 33.

Respecto al tema importante DU-09, se considera necesario que la planificación identifique de manera expresa la incidencia real que el cumplimiento del Convenio de Albufeira y de otros compromisos ambientales o internacionales tiene sobre las garantías de suministro de las distintas unidades de demanda agraria y sobre las reservas embalsadas disponibles en los sistemas de explotación. [..]

Por ello, cualquier incremento de exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales existentes.

Respuesta:

El análisis que se solicita en la alegación respecto al Convenio de Albufeira se ha hecho en todas las alternativas que figuran en las Fichas DU-06 y 07 debido que se trata de una restricción al uso del agua, de manera que, en todo caso, siempre que no se den las condiciones de excepción, se cumplen los requisitos del Convenio. No se ha incluido su explicación en las Fichas por una cuestión de simplificación. No obstante, con las medidas definitivas, en fase de redacción de plan hidrológico, habrá un apartado específico que aborde este cumplimiento de caudales integrales del Convenio de Albufeira.

Respecto a la segunda propuesta (que las nuevas exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales), el EpTI no puede avalar una cuestión que no está contemplada en la normativa vigente. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 65 del TRLA cuando los usos actuales puedan verse afectados por la planificación hidrológica o por requisitos adicionales de carácter ambiental que hagan imposible ejercer el uso para el que existe concesión, como parece explicar la alegación, podrá reclamarse la correspondiente indemnización. Y ello sin menoscabo de la jurisprudencia ya consolidada en relación con las indemnizaciones por restricciones previas, como son el régimen de caudales ecológicos o los compromisos internacionales o ambientales, más bien en contradicción de la propuesta de la alegación.

Alegación 34.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas (necesidad seguridad jurídica)

La creciente interacción entre distintas políticas sectoriales europeas, estatales y autonómicas vinculadas al agua puede generar escenarios de elevada complejidad regulatoria para los usuarios y las Comunidades de Regantes. Por ello, se considera imprescindible que el futuro Plan Hidrológico garantice marcos regulatorios claros, previsibles y técnicamente motivados, evitando duplicidades administrativas, contradicciones regulatorias y limitaciones carentes de suficiente justificación técnica individualizada.

Respuesta:

En el ámbito del agua, el EpTI es un documento intermedio de la planificación hidrológica que tiene por objeto la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. No tiene que ofrecer seguridad jurídica ya que es un documento instrumental en la elaboración del Plan Hidrológico que se aprueba por Real Decreto y tiene fuerza vinculante.

Por otra parte, la seguridad jurídica para los usuarios que aspiran a desarrollar una actividad la ofrece el procedimiento concesional donde se concreta la actividad en el objeto, el tiempo y el lugar, lo que permite evaluar la actividad en coherencia con los objetivos de la planificación hidrológica. Por tanto, se rechaza la alegación. Los planes hidrológicos se revisan cada seis años, lo que puede suponer que, dentro del marco legal general, haya modificaciones específicas como consecuencia de la revisión planificadora. Seis años, a nuestro juicio es un marco temporal escaso, pero el ordenamiento jurídico establece ese plazo para las sucesivas revisiones y a él debemos ajustarnos.

La Ficha DU-09 pone el acento en la necesidad de incrementar la coordinación y cooperación administrativa en el ámbito de la planificación hidrológica; la alegante reclama esa coordinación en el marco de la gestión ordinaria. Siendo un objetivo razonable, no hay que olvidar cuáles son las competencias de cada administración lo que puede suponer una mayor lentitud de procedimientos, en especial si éstos confluyen en una única actividad. Sigue quedando pendiente la simplificación administrativa ya que, cada vez que hay cambios normativos, no suelen ser para simplificar sino para una mayor complejidad. Al igual que los usuarios también las administraciones padecemos esta complejidad que está al servicio, en este caso, de las garantías. Precisamente la variedad de competencias sobre una misma actividad puede generar esas incoherencias de las que no son culpables quienes deben verificar los requisitos legales sino de las normas que regulan la actividad.

Alegación 35.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Una cuestión relevante que debería ser tenida en cuenta en las evaluaciones ambientales de grandes instalaciones fotovoltaicas es la posible modificación del coeficiente de escorrentía superficial derivada de la implantación masiva de paneles solares.[…]

Por ello, se considera necesario que el futuro instrumento de planificación y las evaluaciones ambientales incorporen análisis hidrológicos específicos sobre modificación de escorrentías, incluyendo modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Respuesta:

Compartimos con el alegante su percepción de que la construcción de plantas fotovoltaicas contribuye al aumento de suelo artificial con impactos como compactación y modificación de la permeabilidad del suelo, alteración de la escorrentía e incremento de la erosión.

La planificación hidrológica no puede entrar en el detalle de dichos impactos, que son evaluados específicamente en los procedimientos ambientales a que se ven sometidos los proyectos y que son específicos de cada uno de ellos.

La modificación de la escorrentía superficial producida por una instalación fotovoltaica depende de muchos factores como son la extensión de la planta fotovoltaica, las características edáficas de su localización, las posibles modificaciones topográficas del terreno, el tipo y forma de fijación de los seguidores, etc. Estos aspectos son evaluados de forma cualitativa en los preceptivos informes que emite la CHD, como administración afectada, en el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos, sin poder establecer una evaluación cuantitativa del efecto sobre la escorrentía ya que los promotores no facilitan modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Alegación 36.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Por otro lado, se considera igualmente interesante analizar el potencial uso dual de determinadas infraestructuras de regadío para su contribución al sistema eléctrico nacional, especialmente en aquellos casos en los que existan balsas de regulación situadas a cota elevada y otros condicionantes técnicos favorables. Determinadas instalaciones de modernización podrían adaptarse para funciones complementarias de almacenamiento energético y regulación eléctrica mediante sistemas reversibles, incrementando la utilidad y rentabilidad social de infraestructuras ya existentes.

Respuesta:

Esta indicación del alegante de una posible utilización de las instalaciones inherentes a modernizaciones del regadío para funciones de almacenamiento energético no se ha planteado hasta la fecha en este Organismo. No obstante, cualquier iniciativa que se presente para la correspondiente autorización o concesión se analizará específicamente.

La capacidad de almacenamiento de estas balsas de regulación no suele ser tan elevada como para que los promotores hidroeléctricos consideren rentable la inversión en la implantación de sistemas de bombeo y centrales hidroeléctricas que permitan utilizar este recurso.

Es todo caso, sería la administración competente en la realización de estas modernizaciones y, en su caso, el titular de las infraestructuras de regadío quienes deberían proponer la utilización de las mismas para fines energéticos.

Alegación 37.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

En la ficha se indica que para las aplicaciones y usos del agua vinculados a energías renovables resultan de aplicación las mismas consideraciones previstas para usos consuntivos[..], parecería más adecuado diferenciar entre usos estrictamente consuntivos y usos con retorno efectivo del agua, especialmente a efectos de evaluación de impacto sobre la disponibilidad global del recurso hídrico. Todo ello

Se están empezando a crear nuevas plantas de hidrogeno verde, de bioetanol, etc, que necesitan agua para su desarrollo. Nos oponemos a que se extraiga agua de acuíferos que están en mal estado y, por otro lado, que cuando hayan extraído el agua, puedan verter la molécula resultante a cauces o arroyos, agravando el problema de la contaminación difusa.

Cuando el agua se coja de fuentes superficiales, nos oponemos a que se puedan restar dotaciones al regadío, cuando hay UDAs y comunidades de regantes que incumplen el criterio de garantía [..].

Por tanto, los nuevos usos del agua destinados a la implantación de industrias de producción y almacenamiento de energías renovables, pueden tener un efecto negativo en el regadío, tanto en aguas subterráneas como en aguas superficiales y pedimos que este problema se analice y se aborde con mucho rigor para no perjudicar una actividad económica destinada a la producción de alimentos, que fija población en las zonas rurales y que contribuye al mantenimiento del ecosistema y la disminución de la contaminación ambiental.

Respuesta:

Los parques eólicos y plantas fotovoltaicas precisan agua para su construcción y para algunas operaciones de mantenimiento (limpieza de paneles), siendo los volúmenes demandados no significativos. El suministro de agua para estas instalaciones se realiza habitualmente mediante suministro con camiones cisterna de agua procedente de concesiones vigentes o mediante derivaciones temporales de aguas superficiales, que deben tramitarse en este Organismo, tramitación en la cual se evalúa la disponibilidad del recurso en cada caso particular.

Por otra parte, las instalaciones industriales para la producción de compuestos químicos capaces de almacenar los excedentes de energías renovables como son el hidrógeno verde, el amoniaco, metanol, etc., pueden suponer un uso consuntivo del agua acompañado de grandes volúmenes para la refrigeración que, en algunos casos, revierten al medio hídrico.

La alternativa elegida para este tema importante propone el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos sólo en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua y no que se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, entre ellos el regadío.

Se establecerán dotaciones máximas para la producción de estos compuestos químicos, aplicando las mejores técnicas disponibles y el estado de la ciencia. En ningún caso estas dotaciones irán en detrimento de las dotaciones establecidas para usos agrarios.

En lo relativo al posible impacto ambiental derivado de posibles vertidos y contaminación difusa, estos aspectos se analizan pormenorizadamente en cada caso, en los informes preceptivos que emite este

Organismo para la evaluación ambiental de los proyectos a petición del órgano ambiental que corresponda. En estos informes se establecen condicionantes para minimizar estos impactos, que posteriormente se recogen en la declaración de impacto ambiental correspondiente.

Alegación 38.

Se establecen las siguientes conclusiones finales:

El actual contexto de cambio climático, reducción de aportaciones e incremento de exigencias ambientales e internacionales obliga a reforzar la resiliencia hídrica de la Demarcación mediante:

- *Una adecuada política de regulación y almacenamiento*
- *El mantenimiento funcional de los cauces*
- *La modernización y optimización de infraestructuras*
- *La revisión técnica de los actuales indicadores de sequía y escasez*

La mejora de la capacidad reguladora de la cuenca no debe entenderse únicamente como una herramienta de garantía de usos, sino también como un instrumento esencial para:

- *La adaptación al cambio climático*
- *La conservación de ecosistemas asociados al agua*
- *La estabilidad de las masas de agua*
- *El cumplimiento de objetivos ambientales*
- *La adecuada atención de los compromisos internacionales derivados del Convenio de Albufeira*

Respuesta:

Todos los aspectos que se citan en las conclusiones finales se han ido valorando a lo largo de la respuesta a este escrito de alegaciones, mostrando un acuerdo con la mayoría de las cuestiones generales aportadas, si bien el enfoque de las medidas puede variar puntualmente, y algunos desacuerdos en especial con la vinculación de un mayor número de infraestructuras de regulación y una mejora de la conservación de ecosistemas asociados al agua.

4.46. Escrito de observaciones Nº 056

Presentado por: D. Rafael Santos.

E**n nombre** de la Comunidad de Regantes del Canal de Pollos.

Alegación previa.

Que una primera aproximación al documento evidencia el absoluto desprecio, persecución y condicionamiento del mismo respecto a la agricultura de regadío para las aguas superficiales […] está por completo impregnado de un interés "ambientalista", por lo que nos oponemos a su aprobación.

La primera medida del nuevo ciclo de planificación debería pasar por el análisis del cumplimiento del anterior, donde se ejecutaron en torno al 22 por 100 de las inversiones previstas, […] solo puede decirse objetivamente que ha fracasado por su incumplimiento fundamentalmente en cuanto a las inversiones previstas.

Respuesta:

No compartimos la primera observación del alegante: no hay ningún lugar del EpTI donde se haga un juicio negativo sobre la agricultura de regadío como el que se manifiesta en el escrito de alegaciones. En la Ficha DU-06 (cuyo título es "Sostenibilidad y relevancia del regadío") se indica, respecto al regadío: *son muchos los efectos positivos del regadío: fija de población en el medio rural; aporta mayor diversificación de cultivos; aporta la mayor fuente de materias primas para la alimentación humana; las zonas con regadío tienen una densidad de población tres veces superior a las del secano; impulsa el empleo al generar 3,6 veces más de empleos que el secano; en las zonas de regadío se incorporan 3,5 veces más jóvenes al sector agrario que en el secano; finalmente las zonas modernizadas generan hasta 7,5 veces más inversión que las zonas de secano. Estos valores son importantes en una demarcación hidrográfica en la que la un 77% de su territorio se corresponde con municipios en riesgo de despoblación.*

El valor de producción del regadío asciende a 1.269 M€ y supone el principal motor económico en gran parte del medio rural de la demarcación. Además, el regadío tiene un papel fundamental para asegurar la autonomía alimentaria y reducir la inflación de la cesta de compra del consumidor y tiene un efecto arrastre en el conjunto de la economía, ya que es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. La contribución del sistema agroalimentario a la economía española en el año 2020 se puede estimar en aproximadamente un 10,60%. Esta elevada contribución supone que el sistema agroalimentario es el segundo generador de riqueza nacional tras el turismo.

Debido a la mayor productividad del regadío frente al secano, la agricultura de regadío es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. En el caso de la demarcación del Duero alrededor del 30% del valor económico de la producción agraria proviene del regadío al aire libre o invernadero, porcentaje que para el conjunto de España se eleva a alrededor del 70%. Por tanto, el EpTI no evidencia ningún desprecio, persecución o condicionamiento a la agricultura de regadío, sin menoscabo de poner de manifiesto que alguna de las presiones que genera sobre las masas de agua requieren ser corregidas.

Tal y como se pone de manifiesto en la Ficha DU-09, el grado de ejecución de las medidas a fecha 31 de diciembre de 2024 es del 24,5% de la inversión prevista, valor escaso cuando ha pasado un tercio del tiempo del ciclo de planificación. Siendo esto así, sin embargo, se observa que en determinados grupos de medidas el avance es superior a la media: así en materia de saneamiento y depuración la ejecución supera el 45% de la inversión, en abastecimiento un 37%, en medidas de gestión de inundaciones un 34%. Reconociendo que existe un importante retraso en la ejecución de las medidas, no compartimos la visión tan negativa que muestra la alegante.

Alegación 1.

Que en Mírame-IDEDuero la superficie regable asignada a la CCRR del Canal de Pollos (1.272 ha) es correcta, pero no su volumen demandado asociado, estimada en Mírame en 7,44 hm^3/año, mientras que la CCRR demanda al menos 6.000 m^3/ha/año y 7,632 hm^3.

Respuesta:

La superficie que se considera en la elaboración del Plan Hidrológico para la Comunidad de Regantes del canal de Pollos (Unidad elemental de Demanda Agraria 2100030 - Comunidad de regantes del canal de Pollos) es de 1.272 hectáreas, y el volumen demandado de 7.438.656 m^3/año ya que son los datos que figuran en su Resolución de concesión de 2 de marzo de 2025 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (Referencia Integra MC-0158/2019). Esta es la superficie y volumen máximo anual que se considerará en el nuevo plan hidrológico.

El volumen demandado es coherente con la aplicación de la dotación máxima bruta de la comarca agraria "Sur" (5.848 m^3/ha/año), según establece el art. 15 de la normativa del Plan Hidrológico vigente.

Alegación 2.

DU-01. Contaminación difusa.

El diagnóstico del documento refleja de forma adecuada la persistencia de problemas de nitratos y biocidas, pero no valora suficientemente los esfuerzos ya realizados por agricultores y ganaderos (modernización de regadíos, asesoramiento en fertilización, implantación de GIP).

La caracterización de presiones debería diferenciar con mayor claridad entre cultivos intensivos, cultivos leñosos, ganadería estabulada y extensiva, pues sus aportes de nutrientes y fitosanitarios son muy distintos.

Se aprecia un déficit en la cuantificación de los beneficios de las inversiones en modernización de regadíos y fertiirrigación: sin esos datos es difícil justificar medidas más restrictivas.

Respuesta:

Empezando por la última observación, como se ha comentado en la respuesta a la primera alegación, el EpTI deja de manifiesto la relevancia de la modernización del regadío para el logro de los objetivos ambientales y la mejora de la viabilidad de las explotaciones. Sin embargo, las presiones por contaminación difusa no se deben exclusivamente y en su mayoría al regadío donde el aporte de agua y el riesgo de lixiviado está controlado, sino al secano, a las aplicaciones de estiércoles y purines y a

otras actividades como puede ser las descargas de aguas residuales urbanas no correctamente depuradas o los tratamientos biocidas en infraestructuras lineales, como se pone de manifiesto en la Ficha DU-01.

Estamos de acuerdo en que la modernización de regadíos permite aplicar nuevas tecnologías en el sector agrario, sin este tipo de infraestructuras sería imposible llegar a conseguir al riego de precisión, se maneja mejor el agua, y consecuentemente se evita que las aguas de retorno de riego sean menos y con menor carga contaminante, pero por el contrario el poder disponer de mejores infraestructuras da pie a siembras más densas, que se traducen en más rendimiento por hectárea y más necesidad de abonado, también ocurre que esto posibilita la obtención de dos cosechas en un mismo año, más cultivo por consiguiente más abonado, exceptuando los cultivos de leguminosas.

Las estaciones de medida existentes tanto en aguas subterráneas como en ríos y arroyos que drenan algunas de las zonas regables, siguen dando valores de contenido en sustancias nitrogenados por encima de los limites legalmente establecidos. Analizando datos procedentes de sistemas de control de otros organismos, SINAC, controles sanitarios, campañas de medición en campo realizadas con nuestros medios, siempre aparecen algunos valores altos en zonas de mayor actividad agroganadera.

La caracterización de la presión por contaminación difusa ya tiene en cuenta los tipos de cultivos y la carga ganadera en cada cuenca vertiente de la demarcación hidrográfica, ya que se utiliza para identificar las presiones y los impactos dos fuentes de información: las redes oficiales de control de calidad de agua superficial y subterránea y los balances que el MAPA realiza cada dos años sobre el excedente de nitrógeno que provoca esa carga de nutrientes en las aguas. Y esta última fuente de información utiliza la información sobre cultivos, los sistemas de cultivo y las prácticas agrarias y ganaderas en cada zona.

Los esfuerzos que realizan los agricultores son conocidos porque ya se encargan las organizaciones profesionales agrarias de realzarlos; sin embargo, pese a ese esfuerzo, el problema no va a menos por lo que debemos preguntarnos qué no estamos haciendo bien o qué debemos mejorar. También desde instancias europeas se advierte a España con sanciones millonarias en aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2024 que concluye que España no cumple la directiva de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. De hecho, una de las comunidades autónomas en la que la sentencia pone el foco es Castilla y León, territorio en la que ejerce su actividad la asociación alegante, al no haber aplicado las medidas obligatorias ni lograr mejorar la calidad de las aguas. Dos años después de la sentencia, la Comisión Europea señala que solo 4 comunidades autónomas españolas no han tomado medidas, entre ellas Castilla y León. (Noticia La Gaceta de Salamanca, de 5 de junio de 2026). La amplia legislación existente para regular y minimizar este problema (entre otras, el Real Decreto 47/2022, el Real Decreto 1514/2009, relativo a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, o el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios) da idea de la complejidad para su resolución.

Alegación 3.

DU-01. Contaminación difusa.

Sobre los "trabajos de Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación terminados en marzo de 2025", se plantean las siguientes dudas:

- *¿Cuántos puntos se han muestreado cada campaña en la demarcación, tanto para aguas superficiales como para subterráneas?*
- *¿Este trabajo va a ser repetitivo? ¿Cuál es el programa/planing y el coste presupuestario anual destinado a él?*

Solicitamos una copia de los trabajos de "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación"

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, el trabajo "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación", se ha llevado a cabo por el MITERD en las campañas 2023 y 2024, duplicando analíticas en cada punto de muestro. En la demarcación hidrográfica del Duero, sobre 79 puntos de muestreo de aguas superficiales de la demarcación hidrográfica, atribuyen el 61% de la contaminación por nitratos a origen agrario (principalmente fertilizantes inorgánicos) y el 25% a mezclas con aguas residuales urbanas, el 14% restante de origen indeterminado. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, sobre 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, se muestra un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería.

Dado que el trabajo fue encargado por la Dirección General del Agua, del MITECO, puede dirigirse a ese departamento en petición del trabajo.

Alegación 4.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 1 (Reducción de excedentes y bandas de protección):

Las reducciones propuestas (hasta un 50% de excedentes o más) deben graduarse según tipología de cultivo, textura del suelo y riesgo de lixiviación, evitando fijar límites uniformes que puedan poner en peligro rentabilidad de cultivos con baja lixiviación (viñedo, olivar, almendro).

Las bandas de vegetación de ribera son útiles, pero su implantación debería ser voluntaria con compensaciones claras y planes de control de fauna (topillo campesino, conejos) para no crear nuevos problemas.

Respuesta:

La normativa del Plan Hidrológico, específicamente en su Apéndice 14.2, establece umbrales máximos de excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) que distinguen explícitamente entre cultivos herbáceos y leñosos, tanto en regadío como en secano. Para los cultivos leñosos (donde se incluyen viñedos, olivares y almendros), los valores de excedente permitidos son significativamente distintos y más ajustados a su fisiología que los de los herbáceos.

Las reducciones propuestas no son arbitrarias tampoco, sino que resultan de la aplicación del modelo PATRICAL, una herramienta de simulación del ciclo hidrológico y la calidad de las aguas distribuida espacialmente. Este modelo calcula el balance de nitrógeno teniendo en cuenta variables territoriales específicas como la recarga por lluvia, la textura del suelo (a través de los coeficientes de escorrentía y lixiviación) y el tipo de cultivo por término municipal. La zonificación se realiza a nivel de "sectores" de masas de agua, lo que permite adaptar la exigencia a la realidad geomorfológica y al riesgo real de cada zona.

La propuesta sobre la voluntariedad de las bandas de protección parece razonable y se abundará sobre ella en el presente ciclo de planificación. Se debe indicar, por aclarar, que la vegetación de ribera puede constituir un refugio para distintas plagas, pero también para sus depredadores, que necesitan espacios donde establecer zonas de cría y refugio para desarrollarse.

Alegación 5.

Respecto al tema importante DU-01, se comparte el fomento de biofertilizantes, bioestimulantes y control biológico, pero se requiere apoyo técnico y financiero estable, así como validación agronómica local antes de exigir sustitución de fertilizantes tradicionales.

Debería contemplarse un periodo transitorio de al menos 5-7 años para la adopción realista de estas prácticas.

Respuesta:

Las propuestas que hace la Ficha DU-01 para la alternativa 2 son propuestas que pretenden orientar la decisión de las autoridades competentes en materia de investigación y transferencia de tecnología para abordarlos y movilizar la inversión necesaria para esta mejora de conocimiento. Pero para impulsar esas decisiones es necesario que los sectores implicados (agua, agricultura, medio ambiente, …) orienten en esa línea y confirmen esta posible mejora. No se pretende establecer como obligatorio el uso de estos productos en tanto se justifique su eficacia y sean competitivos económicamente, para lo cual se necesita ese trabajo de investigación y transferencia.

Alegación 6.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 3 (Depuración urbana):

Es positivo que se incluyan fuentes urbanas, pero el documento debería cuantificar su aportación relativa al problema global para no sobrecargar sólo al sector primario.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, las fuentes de contaminación difusa son varias y entre ellas están las descargas urbanas no adecuadamente tratadas. Sin embargo, sin negar su contribución al problema general, el trabajo de estudio del origen de la contaminación nitrogenada en las aguas de la demarcación hidrográfica al que se alude en la respuesta a la alegación 3ª, el origen del nitrógeno encontrado en el agua es de origen agrario en el 61% de las muestras de agua superficial y en el 55% de las muestras de agua subterránea, lo que pone de manifiesto que la mayoría de los nitratos presentes en el agua tiene un origen agrario.

Alegación 7.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 4 (Plantas de biogás):

La valorización de purines es esencial, pero se precisa planificación territorial: ubicación de plantas, logística de recogida y retorno del digestato tratado, evitando concentraciones que generen rechazo social.

Respuesta:

Estamos de acuerdo con parte de lo que se expone en la alegación, en la ficha se propone como alternativa, porque su correcto manejo genera menos problemas ambientales que las prácticas de aplicación de los purines en bruto como se está haciendo en la actualidad. No obstante, como se indica sería necesaria una planificación territorial de esta nueva actividad. Hasta la fecha la autoridad competente (comunidad autónoma) no nos ha trasladado ningún criterio al respecto.

Alegación 8.

La dispersión competencial señalada en la Ficha DU-01 del EPTI requiere de mecanismos concretos:

- *Convenios entre CHD y Consejerías de Agricultura para seguimiento conjunto.*
- *Creación de mesas de trabajo permanentes con organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes.*
- *Inclusión de Juntas Agrarias Locales en la difusión y control de buenas prácticas.*

Antes de aprobar medidas que impliquen reducción de fertilización o prohibición de biocidas, debe elaborarse un análisis coste-beneficio que contemple:

- *Pérdidas de producción y costes de adaptación.*
- *Impacto en empleo rural y en industrias de insumos.*
- *Ahorros ambientales y beneficios para el abastecimiento de agua.*

Respuesta:

La cooperación entre administraciones y la difusión de la problemática de la contaminación difusa son aspectos relevantes para buscar las soluciones. De hecho, se ha avanzado en los últimos cinco años en la percepción del problema y el convencimiento de que se debe ser proactivo en la búsqueda de soluciones, a lo que ha contribuido la visibilidad de problema mediante el expediente sancionador a España por incumplimiento de la Directiva de nitratos y por las medidas limitantes que se incluyen en

los planes hidrológicos. También las organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes han desarrollado actividades formativas para sus asociados poniendo el foco también en este problema de la contaminación difusa: ya es normal que en las reuniones técnicas que estas entidades organizan se empiece a hablar del problema del exceso de nutrientes no solo como un problema económico de rentabilidad de explotación o productividad de los cultivos, sino también como un modo de no perjudicar al medio ambiente.

Dicho esto, los convenios a los que se refiere la alegación no pueden pretender eludir las competencias de cada administración en esta materia, en la que el seguimiento de la contaminación en agua corresponde a la administración del agua y la implantación de medidas corresponde a la administración ambiental y agraria.

La Ficha DU-01 en la alternativa 1 evalúa el impacto de la reducción de excedentes de sustancias nitrogenadas en función de la zona de la demarcación hidrográfica donde nos encontremos. Esta alternativa 1 *supone la máxima reducción posible de los excedentes de nitrógeno (no de la aplicación) compatible con unas producciones agrarias óptimas. (…). En este análisis se identifica que, por ejemplo, una reducción de cerca del 35% de la fertilización implicaría una reducción del 50% de los excedentes y una reducción del 56% de la aplicación de fertilizantes una reducción del 80% de los excedentes de nitrógeno.*

Y se analiza en la Tabla 1 de la Ficha el efecto de la reducción de excedentes sobre el territorio:

Reducción de aplicación de N	Reducción de excedentes	Superficie sector (km²)
10%	*25%*	*3.227*
20%	*50%*	*19.629*
40%	*80%*	*3.872*

Esta información podría servir de ayuda a la Administración autonómica competente, en esta alternativa, para reforzar los planes de actuación de manera que se puedan limitar la aplicación de nutrientes de manera zonal de forma que se asegure que los excedentes sean inferiores a los contemplados en el citado apéndice 14.2. Esto podría implementarse de diversas formas:

- *Mediante la reducción de las cantidades máximas de N por hectárea en los planes de actuación de las zonas vulnerables;*
- *Mediante la reducción de las cantidades a aplicar de nutrientes fuera de las zonas vulnerables (de acuerdo con los criterios de Patrical) a través de normas de condicionalidad vinculadas a aumentos de las ayudas PAC.*
- *Mediante la aplicación de tributos a gravando el exceso de N adquirido en el mercado sobre la dosis contemplada en los planes de actuación.*

Alegación 9.

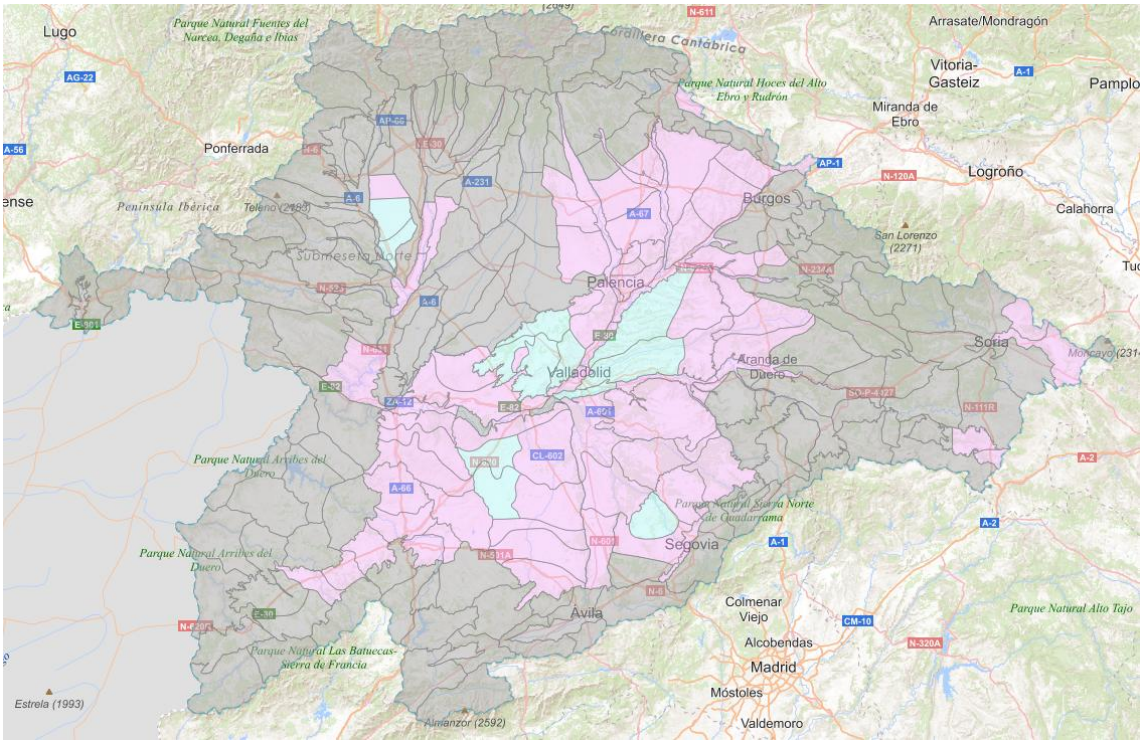
Se proponen algunas medidas en el tema importante DU-01:

- *Ajustar los límites de aplicación de nitrógeno según balance real de cada cultivo y zona (considerar coeficientes de absorción y mineralización).*

- *Priorizar el control y mejora de puntos de vertido urbano e industrial antes de imponer nuevas restricciones al abonado agrícola.*
- *Incluir líneas de ayuda específicas para:*
    - *Implantar bandas de protección voluntarias y mantenerlas.*
    - *Transición a biofertilizantes y control biológico.*
    - *Asesoramiento profesional y agricultura de precisión.*
- *Potenciar el uso de herramientas de gestión de nutrientes (cuadernos digitales, sensores de N en suelo/planta).*
- *Favorecer acuerdos de economía circular entre plantas de biogás, explotaciones ganaderas y agricultores para el uso seguro del digestato.*
- *Seguimos demandando al MITERD y a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la realización de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario mediante el estudio y muestreo significativo de parcelas de riego por gravedad, de riego modernizado y parcelas en las que ya se esté utilizando la fertirrigación para poder sacar conclusiones basadas en datos sobre la mejora que implica la tecnificación y digitalización del regadío en este apartado.*

Respuesta:

Como se indica en el EpTI y también en el Plan Hidrológico vigente, los límites del excedente de sustancias nitrogenadas se han hecho a partir de la presión identificada en forma de contenido de nitratos en las agua superficiales y subterráneas. Y esos límites se han fijado en forma de sectores territoriales, tal y como aparece en la imagen (en rosa la reducción del excedente sería del 25%, en azul la reducción del excedente sería del 80% del actual y en gris no sería necesaria esa reducción):



La traslación de la reducción de excedentes en cada sector a los cultivos presentes en el mismo, requiere un trabajo de detalle de los organismos competentes en materia agraria que pueden hacer

esa distribución con criterios más técnicos que los que puede hacer el organismo de cuenca. De hecho, esta distribución de sectores tiene como fin ofrecer a la autoridad competente una información con la que realizar el análisis que solicita la alegante.

Sin duda es necesario mejorar el control de las descargas de las EDAR urbanas e industriales, sobre todo de poblaciones pequeñas. Pero como pone de manifiesto la Ficha, el análisis de origen de la contaminación difusa por técnicas isotópicas concluye que el origen de la contaminación en la mayoría de los puntos de muestreos es el agrario al encontrar en más de la mitad de las muestras nitrógeno de origen inorgánico y de residuos animales (61% de las muestras en aguas superficiales y 55% en aguas subterráneas). Por tanto, parece lógico que pongamos el objetivo en cómo reducir esos excedentes.

Coincidimos con la alegante en que bandas de protección, asesoramiento y uso de nuevos productos deben ser medidas de carácter voluntario y adecuadamente compensadas. Y pensamos que el marco financiero de la PAC es la herramienta adecuada para ello. Lógicamente para que esto sea factible es necesarios que la administración competente en esta materia tenga interés en dotar a estos servicios ecosistémicos de la financiación adecuada.

Las herramientas de gestión de nutrientes ya son obligatorias a partir de la entrada en vigor del Real Decreto de nutrición sostenible de los suelos, por lo que esperamos que esta medida contribuya a la reducción de la contaminación cuando tenga el suficiente recorrido, ya que no será inmediato. El seguimiento de la contaminación en las redes de control de agua nos dará información sobre su eficacia.

El uso del digestato procedentes de plantas de biogas alimentadas con purines animales en lugar de la aplicación directa al suelo puede ser una mejora en la reducción de la contaminación siempre que haya transparencia en la aplicación, distribución y seguimiento y no supongan una mayor aportación de nutrientes al suelo. De hecho, la Ficha DU-01 señala que, para *el caso concreto de Castilla y León, que supone el 98,26 % de la demarcación del Duero, para el año 2021, 61.186 tn de nitrógeno de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 359.013 tn de N. Si se eliminase totalmente el desecho ganadero mediante plantas de biogás y no se sustituyese la fertilización orgánica en cultivos por inorgánica, se reduciría en un 17% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso del 50% de los excedentes de nitrógeno.*

Para el caso del fósforo y Castilla y León, para el año 2021, 13.736 tn de P de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 58.261 tn de P. En este caso, la eliminación del desecho ganadero mediante plantas de biogás supondría que se reduciría en un 23% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso superior al 50% de los excedentes de fósforo.

La eliminación de la fertilización orgánica mediante revalorización y transformación en biogás de la deyección ganadera, sin sustitución por fertilización inorgánica, permitiría cumplir los objetivos de la UE de reducir un 20% el uso de fertilizantes y reducir un 50% los excedentes antes de 2030.

Respecto a la demanda de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario bajo distintos sistemas de regadío, consideramos que es un trabajo que no está hecho pero que no corresponde al MITERD al haber un ministerio y unas consejerías autonómicas competentes en materia agraria.

Alegación 10.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Estando de acuerdo en que debe buscarse en todo momento un aprovechamiento sostenible del recurso que mantenga las masas de agua, ya que esta es la forma de garantizar la seguridad de las explotaciones agrícolas, se deben fijar uno objetivos a alcanzar con unos valores definidos y razonables que garanticen la actividad económica que se viene desarrollando. Considerar la serie histórica de la piezometría de la masa como dato de partida a la hora de determinar las acciones a realizar supone definir un objetivo a alcanzar erróneo, enmascarar la realidad actual de la masa y no otorgar a las medidas que el usuario está llevando a cabo (digitalización, control de las extracciones, gestión por parte de las comunidades de usuarios, etc) la importancia que tienen. [..]

De la misma forma que se tiene un control sobre el uso del recurso, creemos necesario que se hagan estudios hidrogeológicos de detalle en los que, de forma pública y accesible a todos los interesados, se analice la situación real en estas masas de agua de las aportaciones al acuífero y su tasa de renovación […].

La mitigación de los efectos del cambio climático que se plantean sobre las masas de agua subterránea, se debe plantear, no desde la restricción de las extracciones, sino desde el control de las mismas y la ejecución de una serie de infraestructuras de reserva o acumulación que de forma progresiva permitan la sustitución de bombeos y otorguen garantía a la actividad económica en situaciones de escasez sin revertir la dinámica natural del acuífero.

Respecto a las alternativas que se plantean en el documento, estamos totalmente en desacuerdo con el núcleo central de todas ellas: el mantenimiento de las medidas normativas del plan hidrológico vigente para el nuevo ciclo de planificación, sobre todo en lo que se refiere a los artículos 33. [..]

Respuesta:

Los objetivos para las masas de agua subterránea son alcanzar el buen estado y evitar el deterioro, tal y como establece el artículo 4 de la Directiva marco de al Agua y el artículo 40 del TRLA. Ese buen estado para el objeto de la ficha DU-02 es que las extracciones no superen a los recursos naturales, simplificando. Este objetivo además redunda en beneficio de los usuarios del agua ya que el buen estado contribuye a un aumento de los niveles piezométricos que suponen menos costes de bombeo. Por tanto, el objetivo es claro. Y ante posibles colisiones de este buen estado con los usos, la propia directiva en su artículo 4(5) señala cuáles son los requisitos que deben verificarse:

a) que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende el uso del agua no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor que no suponga un coste desproporcionado;

b) que la administración proponente (en este caso la comunidad autónoma) garantice para las aguas superficiales, el mejor estado ecológico y estado químico posibles teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación,

c) que la administración proponente para las aguas subterráneas garantice los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación;

d) que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.

Tal y como se plantea la alegación no queda claro si estos criterios se garantizan.

Conocer la realidad de las reservas subterráneas de agua es un aspecto clave en la adecuada gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Para ello el seguimiento de los casi 500 piezómetros de la cuenca ofrece una información muy valiosa. Gracias a esta información se concluye que en la actualidad la explotación del agua supone que en las masas de agua en mal estado cuantitativo se extrae entre un 10 y un 14% más de lo que se recarga anualmente por medios naturales, es decir, sacamos algo más agua de la que la naturaleza es capaz de reponer.

Como consecuencia los niveles del agua subterránea descienden ligeramente, incrementando los costes de producción del sector agrícola y poniendo en serio peligro la supervivencia del modelo socioeconómico actual y del entramado ecológico de la zona. Todo esto sin olvidar que, en las dos últimas décadas del siglo pasado, estas masas sufrieron un descenso generalizado en sus niveles de agua de unos 30 metros, situación que ha repercutido en la merma de caudales en los ríos que se asientan sobre estas masas.

Por todo ello la Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto en marcha estudios en colaboración con distintos organismos como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Dirección General del Agua (DGA), para seguir mejorando en el conocimiento del estado actual de la masas de agua subterránea y proponer medidas que permitan la recuperación paulatina de las mismas, gracias al ahorro de agua con una correcta gestión agrícola y con medidas de recarga artificial, sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales, done sea posible, se mencionan este tipo de actuaciones porque están implantadas en algunas zonas de estas masas con resultados esperanzadores. De todas formas, en la ficha ya se proponen actuaciones de este tipo y otras. Toda esta información se vuelca en los planes hidrológicos, cada seis años, y en los informes de seguimiento cada año; además los datos de piezometría y calidad de las aguas subterráneas, así como los balances están disponibles en la base documental Mírame-IDEDuero que se puede consultar por cualquier ciudadano en la web de la Confederación (https://mirame.chduero.es/chduero/public/home).

No podemos compartir la petición de la alegante de eliminar todas las restricciones y limitaciones sobre las masas de agua en mal estado cuantitativo y, como alternativa, no poner ningún límite a nuevos usos del agua ya que, de aceptarlo, supondría no solo no alcanzar el buen estado sino también contribuir al deterioro adicional y, de forma añadida, perjudicar a los usuarios que ahora disponen de derecho vigente y que esperan la protección administrativa de su derecho.

Alegación 11.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Para la configuración del nuevo plan hidrológico se propone:

1.- La derogación de los artículos 33 y 34 de la actual normativa del plan hidrológico vigente y la reformulación de aquellos artículos relacionados para permitir la novación de todos los derechos inscritos que estén en explotación.

2.- Permitir la explotación de los aprovechamientos otorgados (incluso el otorgamiento de otros nuevos) dentro de aquellos espacios naturales o zonas protegidas conforme lo establezca la autoridad ambiental y con las características que documento de gestión correspondiente determine.

3.- Ejecución de aquellas infraestructuras que permitan la recarga de las masas de agua o la diminución de la presión sobre las mismas y estudios de detalle de determinadas zonas con mayores dificultades con la finalidad de dar soluciones que permitan mantener la actividad económica que se viene desarrollando.

4.- Control de las extracciones en toda la cuenca en la misma medida y con la misma intensidad que se exige a las CUAS.

5.- Revisión de las dotaciones brutas comarcales, su asignación y su configuración.

6.- Incentivar económicamente al usuario en la adopción de medidas e instrumentos tendentes a la mejora en el control de las extracciones o programas de digitalización que participen en el conocimiento y caracterización de la masa de agua.

7.- Establecer mecanismos de transferencia del conocimiento generado a nivel técnico y científico como programas de formación del usuario, plataformas de asesoramiento o redes de información, y establecer algún órgano que permita la participación del usuario de aguas subterráneas en la toma de decisiones que afectan a la cuenca.

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación anterior, los artículos 33 y 34 constituyen un régimen que permite alcanzar el buen estado de las masas de agua y evitar el deterioro. De una forma u otra, estos criterios se vienen aplicando en la demarcación hidrográfica desde 2010 y son parte de la explicación de que la tendencia descendente de la piezometría identificada en los años 1980 a 2008, se haya suavizado e incluso estabilizado.

En cuanto a lo que manifiesta el alegante de la prohibición de aprovechamientos otorgados, hasta la fecha no se ha prohibido su uso siempre que se ajusten a la legalidad. El otorgamiento de nuevos aprovechamientos en masas de agua en mal estado cuantitativo, entendemos que no contribuye en absoluto a una mejora de la situación, ni se ajusta a un uso racional, que asegure el futuro del regadío en dichas masas, sería como incentivar la vuelta a la situación de los años 80 y 90 del siglo pasado, con descensos del nivel piezométrico de 2 y 3 metros por año.

La recarga artificial de acuíferos es una práctica que se lleva haciendo es esta cuenca desde hace más de 20 años, las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 la Confederación encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos,

teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, como aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, nos parece una alternativa a tener en cuenta para el fin que propone el alegante, por lo que ya se contempla como medida en la alternativa 3 del EpTI, a la espera de que la autoridad competente pueda validarla y asumirla teniendo en cuenta todos los condicionantes: ubicación de estas infraestructuras, su proximidad a cauces con recurso suficiente, los costes de las obras, su financiación, y los costes de explotación y energía, pues la mayoría han de llenarse con bombeos,…; en definitiva muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

La instalación de contadores para el control de las extracciones de agua está regulada según La normativa española que obliga a todos los aprovechamientos de aguas a disponer de sistemas de medición de caudales, según el TRLA (art. 55.4) y el Reglamento del DPH. Esta obligación se ha reforzado con la Orden TED/1191/2024, que impone contadores homologados y control electrónico con envío de datos. Los equipos deben cumplir normativa metrológica y adaptarse al tipo de captación. Como se ha explicado en diversos foros, esta Orden, así como la que ha sustituido de 2009, permiten que más del 80% de la demanda de agua de la cuenca pase por sistemas de control. Evidentemente los contadores de la categoría 1ª, que suponen poco volumen a escala de cuenca (menos del 20%) pero número muy alto, van progresivamente instalándose y remitiendo información.

Las dotaciones brutas máximas anuales aplicables en los cultivos por comarcas agrarias, que figuran en el Plan Hidrológico, están basadas en datos obtenidos de publicaciones de organismos públicos como son las distintas Consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, del Ministerio de Agricultura, y antes de su aprobación se someten a información pública, como todo el contenido del Plan Hidrológico. En el Anejo 5 del Plan Hidrológico vigente se explica el procedimiento para su cálculo: cálculo de la dotación neta a partir de las necesidades de los cultivos obtenidas de InfoRiego y de la distribución de los cultivos a partir de las declaraciones de la PAC de los años 2013-2019; cálculo de la eficiencia global: calculada como el producto de las eficiencias de transporte, distribución y aplicación; cálculo de la demanda bruta como el producto de la dotación neta por la superficie asignada entre la eficiencia global. Consideramos que es una información adecuada al proceder de fuentes oficiales y no sujeta a apreciación subjetiva.

Respecto a incentivar económicamente la instalación de contadores, el artículo 3 de la Orden TED/1191/2024 es muy clara al respecto al señalar que, en *todos los aprovechamientos de aguas,* ***los titulares están obligados a instalar y mantener un sistema de control volumétrico*** *que permita la medición de los volúmenes de agua captados, junto con un sistema de registro y almacenamiento.*

La Confederación no tiene competencias en materia de difusión y transferencia de tecnología. Normalmente da cuenta de los trabajos que realizad en el ámbito del dominio público hidráulico, seguridad y gestión de infraestructuras y planificación hidrológica en los foros ordinarios que otros agentes organizan: congresos de seguridad de presas, congresos de comunidades de regantes, jornadas de restauración de ríos, … Por otra parte, en el ámbito de las CUAs, anualmente se celebran reuniones técnicas de la Confederación con sus presidentes para aclarar conceptos y fomentar las buenas prácticas. Lógicamente no se invita a esas sesiones a las comunidades de regantes de aguas

superficiales como la alegante que ya tiene su ámbito de representación en la Junta de Explotación Pisuerga-Bajo Duero.

Los usuarios del agua participan en la gestión de la cuenca a través de los órganos que están establecidos normativamente. Así el artículo 26 del TRLA identifica como órganos de gestión, en régimen de participación, las Juntas de Explotación. Su finalidad es coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las masas de agua cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Este es el marco en que los usuarios de aguas subterráneas pueden participar; de hecho, en la alternativa 1 de este tema importantes se establece como una de las medidas que podrían ponerse en marcha.

Alegación 12.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Ya hemos dejado claro en la introducción cuál es la situación demográfica y económica de nuestras zonas rurales, por lo que cualquier medida que se aplique en mejorar los problemas contenidos en la ficha no debe empeorar la situación descrita. Si se mantiene la consecución de ese objetivo, no nos oponemos a que se puedan adoptar medidas que puedan mejorar la conectividad fluvial (longitudinal, lateral y vertical) que mejore el funcionamiento de los ecosistemas.

Del análisis de la ficha parece desprenderse una apuesta prioritaria por modelos intensivos de naturalización fluvial, basados en esquemas de restauración ecológica donde el cauce aparece acompañado por bosque de galería y bandas de vegetación herbácea en ambas márgenes, favoreciendo así la conectividad longitudinal y transversal de los flujos hídricos y sedimentarios [..] dicho enfoque puede resultar excesivamente homogéneo si no se tienen suficientemente en cuenta las particularidades geomorfológicas, históricas y territoriales de numerosos cauces [..]. Existen determinados tramos del Dominio Público Hidráulico que, en realidad, constituyen cauces profundamente transformados por la acción humana a lo largo de siglos, especialmente sobre antiguas llanuras lacustres o cuencas endorreicas sedimentarias desarrolladas durante el Pleistoceno.

En numerosos casos, los cauces actuales responden a procesos históricos de excavación y drenaje artificial desarrollados con el objetivo de desecar zonas inundables o lagunares y aprovechar agronómicamente las fértiles vegas originadas por procesos de colmatación sedimentaria. [..]. Por ello, en determinados sistemas hidrológicos altamente antropizados, la recuperación de modelos teóricos de naturalización podría requerir alteraciones territoriales de enorme magnitud, incompatibles en muchos casos con la realidad física actual, con los usos consolidados existentes y con los derechos legítimamente adquiridos sobre los terrenos adyacentes.

Asimismo, debe tenerse presente que sobre los terrenos colindantes con los cauces concurren frecuentemente derechos consolidados, singularmente derechos de propiedad privada, cuya eventual afección exigiría las correspondientes compensaciones y una adecuada justificación basada en criterios de proporcionalidad.

Respuesta:

Se agradece el comentario sobre la buena disposición para la mejora de los ecosistemas fluviales.

La normativa actual apuesta por una restauración fluvial que lleve a los ríos, lagos y humedales a una situación lo más similar a su situación original previa a la intervención humana. Esto permite crear entornos más resilientes a la contaminación y más seguros ante eventos extremos como inundaciones, entre otros, con las consiguientes ventajas para los seres humanos. Por situación original no se entiende una situación uniforme, sino adaptada a cada tipo de río. A modo de ejemplo, aquellos ríos con hidrología extrema no tienen asociado un bosque de ribera ya que periódicamente las avenidas lo arrastran, permitiendo únicamente la presencia de individuos jóvenes. Para estos ríos la existencia de una gran presencia de bosque de galería es síntoma de alteración del régimen hídrico, lo cual suele ocurrir, por ejemplo, aguas debajo de los embalses.

Si bien la alteración de los cauces se lleva haciendo desde antiguo, ha sido en el siglo XX donde se han producido las grandes actuaciones de drenaje y encorsetamiento del río. Las imágenes del vuelo americano del 56 así lo ponen de manifiesto, ya que muestran un grado de naturalidad de los cauces muy distinto al actual.

De acuerdo con la normativa y los documentos técnicos de planificación, una masa de agua superficial se puede designar como muy modificada (HMWB, por sus siglas en inglés) cuando, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza. Este "cambio sustancial" se entiende como una modificación de sus características hidromorfológicas que impide que la masa alcance el buen estado ecológico. Esto debe analizarse minuciosamente mediante distintas revisiones tasadas en la normativa, y así se ha hecho en los sucesivos planes hidrológicos. En el último, a modo de ejemplo, se han designado 186 masas de agua río muy modificados y se van a volver a revisar en este ciclo de planificación.

Cabe mencionar también que la propiedad privada no puede prevalecer sobre terrenos que, por sus características geofísicas, forman parte del cauce natural. La propiedad privada en zonas colindantes a ríos no es absoluta; está intrínsecamente limitada por la ley para garantizar la seguridad pública y la protección ambiental, como pone de manifiesto el tenor de los artículos 6 y 9 del RDPH, entre otros. La jurisprudencia del Tribunal Supremo avala que la Administración proteja el DPH sin indemnizaciones automáticas, ya que actuar sobre el cauce natural es una obligación legal para alcanzar el buen estado de las aguas, objetivo que constituye un interés público superior.

Alegación 13.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Parece razonable admitir la posibilidad de actuaciones de gestión activa y mantenimiento de la vegetación de ribera, aplicando criterios técnicos y silvícolas semejantes a los utilizados en otras masas forestales, especialmente cuando dichas actuaciones resulten necesarias por motivos hidráulicos, de seguridad, sanitarios o de conservación. […]

Se considera necesario que el instrumento de planificación hidrológica contemple la posibilidad de autorizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales, teniendo en cuenta sus características geomorfológicas, los usos preexistentes y los intereses legítimos concurrentes. […].

Especial atención merece la proliferación del carrizal y otras especies invasoras o expansivas, cuyo desarrollo puede reducir significativamente la capacidad hidráulica de desagüe y alterar el equilibrio

ecológico de determinados tramos fluviales. Por ello, se considera conveniente que el futuro instrumento de planificación contemple expresamente medidas de control y gestión activa de este tipo de formaciones vegetales cuando existan razones hidráulicas, ambientales o de seguridad que así lo aconsejen.

Respuesta:

Los criterios técnicos y silvícolas utilizados en otras masas forestales no tienen por qué se similares a los que aplican a la vegetación de ribera, al ser el río un elemento diferenciador en su creación y modelado. Las mejores actuaciones para la mejora de las condiciones hidráulicas, de seguridad, sanitarias o de conservación, son las de restauración del río a su situación original, en la que su configuración, trazado, brazos secundarios y llanura de inundación permitan la laminación de avenidas o el filtrado de nutrientes y otras sustancias nocivas para la salud.

Se está de acuerdo en realizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales. Así se hace, de hecho. No se abunda más ante la generalidad del comentario.

Independientemente de que en alguna circunstancia puedan aplicarse medidas de control activo de especies invasoras, se debe recordar que la restauración de la conectividad longitudinal y lateral, junto con la recuperación de la morfología natural del cauce, permite que el ecosistema funcione mediante mecanismos de control natural frente a especies invasoras. Un río con un hábitat naturalizado favorece el mantenimiento de las comunidades biológicas autóctonas, dificultando que las especies invasoras desplacen a los endemismos locales. La alteración del régimen natural de los ríos y la creación de aguas estancadas (paso de régimen lótico a léntico) son precisamente los factores que facilitan la proliferación de especies exóticas.

Alegación 14.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Respecto a las obras de cruce aéreo o subterráneo de infraestructuras sobre cauces públicos, se considera necesario que el nuevo Plan Hidrológico otorgue un mayor peso a los criterios técnicos e hidráulicos en la evaluación de las actuaciones proyectadas, evitando que el condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada. […]

En relación con las autorizaciones de obras en el Dominio Público Hidráulico, se considera igualmente conveniente admitir la aplicación del criterio de escala para el cálculo hidrológico de avenidas mediante el Método Racional Simplificado, así como permitir simulaciones hidráulicas basadas en levantamientos topográficos específicos realizados para cada actuación.

Finalmente, se considera de gran interés que la Confederación Hidrográfica del Duero establezca, de forma previa y suficientemente clara, criterios técnicos orientativos para la tramitación de autorizaciones relativas a puentes, pasarelas y otras obras sobre cauces.

Respuesta:

Los condicionantes ambientales son un requisito que establece la normativa actual. No se la idea por la que el "condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada" en las actuaciones en cauce.

El uso del método racional simplificado para cálculos hidráulicos en la planificación se incluye en el Anexo XI del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Se remite a esta norma y no al plan hidrológico el resto de observaciones presentadas sobre autorizaciones de obras en cauce.

Alegación 15.

DU-05 Gestión del riesgo de inundación

Se considera razonable que el instrumento de planificación permita incorporar estudios hidrológicos e hidráulicos de mayor detalle, sustentados en levantamientos topográficos específicos, modelizaciones bidimensionales, campañas de campo y análisis hidráulicos adaptados a las características concretas de cada emplazamiento.

Este criterio de mayor precisión técnica debería poder extenderse también a la determinación de caudales de avenida, permitiendo ajustar los cálculos hidrológicos a las características reales de cada cuenca vertiente y evitando la aplicación automática de metodologías generales cuando existan estudios específicos suficientemente justificados

Demandamos que cualquier actuación que se plantee, no cause perjuicio a la actividad económica implantada en el territorio.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, y sin perjuicio de lo ya señalado en este documento acerca del alcance propio del ETI, procede indicar que las cuestiones planteadas presentan indudable relevancia desde la perspectiva del adecuado diagnóstico del riesgo y peligrosidad de las inundaciones. No obstante, será en fase de redacción del PGRI cuando se revisen los modelos hidráulicos para establecer las medidas adecuadas para reducir el riesgo de las inundaciones.

Las modelizaciones hidráulicas e hidrológicas están en constante actualización y singularmente en las tres fases de elaboración de los de PGRI: fase de evaluación preliminar del riesgo, fase de elaboración de los mapas de peligrosidad y fase de plan de gestión del riesgo. La cartografía de peligrosidad del SNCZI simula escenarios estadísticos de eventos extraordinarios, como son las avenidas de media y baja probabilidad (100 y 500 años de periodo de retorno). El SNCZI exige que las simulaciones hidráulicas para delimitar el riesgo se realicen sobre la base del terreno en condiciones actuales ofrecidas por el modelo digital del terreno (MDT), manteniendo infraestructuras como azudes y puentes tal y como existen hoy. Ese MDT se obtiene por tecnologías suficientemente maduras que, con la previa revisión a su aplicación, ofrecen una información exacta y muy adecuada para el objetivo final.

Las medidas que el PGRI establezca tratarán de limitar los perjuicios a las actividades actuales; no obstante puede darse el caso de que haya actividades ubicadas en zonas inundables que cuenten con autorizaciones previas a la entrada en vigor del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y

gestión de riesgos de inundación, y de los artículo 9 y 14 del RDPH; para ellas será muy difícil que cualquier medida que se establezca en el PGRI no entrañe perjuicio que, por otra parte, ya le causa la propia ubicación.

Alegación 16.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Las Comunidades de Regantes consideran positivo que el EPTI reconozca la relevancia estratégica del regadío en la cuenca del Duero […].

En su planteamiento identifican el problema principal que supone la escasa o nula regulación artificial en sistemas como el Carrión, el Órbigo, el subsistema Tuerto o el Cega. No obstante, el documento presenta un enfoque excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales, sin incorporar adecuadamente la dimensión económica, social y territorial del regadío.

No se puede achacar la reducción de aportaciones principalmente a los efectos del cambio climático. No podemos establecer un horizonte de cambio climático referido al año 2045, que resulta poco fiable.

Respuesta:

Los planes hidrológicos tienen que cumplir dos objetivos principales que generalmente entran en conflicto: por un lado, conseguir el buen estado o el buen potencial de todas las masas de agua y, por otro, satisfacer las demandas cumpliendo los criterios de garantía. En otras palabras, se trata de hacer un uso sostenible del recurso, equilibrando la protección de los ecosistemas relacionados con el medio hídrico con la satisfacción de las demandas. En el estudio de alternativas de las fichas DU-06 y DU-07 del EpTI, analizamos medidas que disminuyen la presión por extracción de agua (uso más eficiente del agua por modernizaciones) y medidas de mayor disponibilidad de recurso (aumento de regulación). Por este motivo, pensamos que el enfoque del EpTI no está excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales.

Efectivamente en el EpTI se reconoce la relevancia estratégica del regadío y creemos que su dimensión económica, social y territorial está debidamente incorporada.

Estamos de acuerdo en que la reducción de aportaciones no es debida solamente a los efectos del cambio climático. Probablemente también existe reducción de aportaciones por los cambios en los usos de suelo, pero no tenemos información suficiente que nos permita evaluar la magnitud de esta reducción.

El establecimiento de un horizonte de cambio climático en el que se modelan demandas futuras y recursos naturales afectados por cambio climático para calcular sus balances es un requisito de la legislación (Reglamento de Planificación Hidrológico, art.11.4 y art. 21.4). En los planes de 4º ciclo el horizonte de cambio climático corresponde al año 2045 pues se incrementa en 6 años el del plan vigente, que era 2039.

Alegación 17.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Resulta incuestionable que las modernizaciones llevan implícita una reducción del uso del agua, por lo que no se deben añadir mayores presiones sobre el uso del agua. Las inversiones llevadas a cabo también por los propios agricultores están siendo muy importantes, además de la recuperación de costes que vía tarifas de utilización del agua ya contribuyen.

La modernización no debe utilizarse como instrumento indirecto de reducción de concesiones ni de actividad agraria, sino como herramienta de mejora de eficiencia, productividad y sostenibilidad.

En general, se demanda que las mejoras de eficiencia y modernización permitan atender más demandas y generar mayor valor económico y social con el mismo volumen global de agua, sin incrementar necesariamente la presión neta sobre los recursos hídricos. La eficiencia debe medirse no solo por reducción de consumos, sino también por productividad, generación de empleo, estabilidad territorial y capacidad de adaptación climática.

Respuesta:

En relación con las consideraciones formuladas, el EpTI contempla la modernización de regadíos como una medida prioritaria de adaptación orientada a mejorar la eficiencia en el uso del agua, la garantía de suministro y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias existentes. En este sentido, se reconoce el esfuerzo inversor realizado por el sector, así como su contribución a una gestión más racional del recurso y a la recuperación de costes del sistema.

No obstante, debe precisarse que la mejora de la eficiencia no implica, por sí misma, una reducción automática de los volúmenes concesionales ni constituye un instrumento indirecto de minoración de la actividad agraria, sino que su tratamiento en la planificación hidrológica responde a un análisis caso por caso. Así, los eventuales ahorros derivados de la modernización no se someten a penalizaciones automáticas, pero tampoco pueden destinarse de manera generalizada a la generación de nuevas demandas si ello implica un incremento neto de la presión sobre las masas de agua.

En coherencia con ello, el EpTI establece que dichos ahorros deben contribuir, prioritariamente, a consolidar la sostenibilidad del uso existente y a evitar incrementos de presión que puedan comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales o el equilibrio del sistema hídrico. Solo en aquellos supuestos en los que exista disponibilidad efectiva del recurso y se acredite la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de las actuaciones, podrán considerarse desarrollos adicionales, siempre de forma compatible con la consecución del buen estado de las masas de agua y el mantenimiento de los caudales ecológicos.

Finalmente, si bien se comparte que la eficiencia puede valorarse desde una perspectiva amplia —incluyendo aspectos como la productividad, la generación de valor económico o la resiliencia territorial—, en el ámbito de la planificación hidrológica dicha eficiencia debe necesariamente integrarse con el principio de sostenibilidad ambiental, lo que exige que cualquier mejora en el uso del recurso no se traduzca en un aumento de las presiones que comprometa los objetivos establecidos por la normativa vigente.

Alegación 18.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Si bien el plan hidrológico en vigor descartó el incremento de nuevos regadíos, sí es posible esa ampliación en sistemas concretos con cultivos con un uso muy reducido del recurso, como por ejemplo en el sistema Riaza-Duratón y otros sistemas, donde sí es posible ampliación de superficie de riego con el mismo volumen de agua ahora establecido.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, cabe señalar que, si bien el vigente plan hidrológico estableció, con carácter general, la no previsión de nuevos desarrollos de regadío, el Esquema de Temas Importantes (ETI) contempla que determinadas situaciones específicas puedan ser objeto de análisis individualizado, particularmente en aquellos sistemas en los que concurran circunstancias singulares desde el punto de vista de la disponibilidad y gestión del recurso y, además, las autoridades competentes (MAPA o Comunidades Autónomas) plantearon nuevos regadíos que cuentan con amparo legal. En este aspecto el organismo de cuenca no puede proponer nuevos regadíos cuya autoridad competente no avala o, siendo avalados, no cuenta con garantías suficientes o amparo legal de la planificación sectorial.

No obstante, debe precisarse que los eventuales aumentos de superficie destinada al regadío no pueden valorarse exclusivamente desde la perspectiva de un mantenimiento del volumen total de extracción, sino que han de analizarse de forma integral considerando el conjunto de presiones que la actividad agraria genera sobre las masas de agua. En particular, el incremento de superficie regable puede implicar efectos relevantes sobre el régimen hidrológico, el retorno de flujos, la calidad de las aguas, la contaminación difusa o la alteración de los caudales ecológicos, incluso en aquellos supuestos en los que el consumo unitario por hectárea sea reducido.

En este sentido, el ETI incide en la necesidad de abordar la sostenibilidad del regadío desde un enfoque global, que tenga en cuenta no solo la eficiencia en el uso del agua y el volumen derivado, sino también la evolución de las presiones significativas y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Por ello, la eventual ampliación de superficies regables —incluso en sistemas concretos como el Riaza-Duratón— debe someterse a una evaluación específica que acredite su compatibilidad con la consecución del buen estado de las masas de agua, el mantenimiento de los caudales ecológicos y la ausencia de deterioro adicional del dominio público hidráulico.

En consecuencia, no resulta procedente establecer, con carácter general, la posibilidad de ampliar superficies de regadío bajo el único condicionante de mantener el volumen global actualmente asignado, sino que cualquier propuesta en este sentido deberá justificarse caso por caso, en el marco del proceso de planificación hidrológica y de conformidad con los principios de sostenibilidad, cautela y no deterioro que rigen la gestión del recurso.

Alegación 19.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Respecto al tema importante DU-06, la alegante valora positivamente que el EPTI reconozca la modernización del regadío como la medida esencial de adaptación al cambio climático y mejora de la garantía de suministro. De las dos alternativas que se propone como factibles (5 y 6), muestran preocupación por determinados planteamientos relacionados con:

- *Limitaciones automáticas de concesiones*
- *Restricciones indirectas de superficie regable*
- *Incremento de costes para los usuarios*
- *Traslado excesivo del esfuerzo inversor a los regantes*
- *Cierre definitivo del mapa de nuevos desarrollos de regadíos.*

Asimismo, las Comunidades de Regantes consideran imprescindible priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y con baja garantía hídrica, especialmente en zonas como Carrión, Órbigo, Tormes, Eria, Curueño o Duerna.

Igualmente, se considera necesario garantizar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas, especialmente ante el horizonte de 2035. [..]

Las actuaciones vinculadas al regadío presentan, por tanto, muy bajos niveles de ejecución, especialmente en modernización de regadíos, infraestructuras hidráulicas y regulación. Esta situación genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban.

Respuesta:

La Ficha DU-06 al elegir las alternativas 5 y 6 señala ambas alternativas permiten avanzar en medidas de modernización de regadíos que manteniendo la competitividad de las explotaciones con ligeros ajustes de las dotaciones adaptadas a la mejora que suponen las infraestructuras, permitan ampliar la superficie de regadío en la cuenca. Las comunidades de regantes en esta materia han ido modificando su posición, si es que se puede hablar de una posición común: de pasar en el plan de primero y segundo ciclo a demandar el cierre del mapa de cultivos en la demarcación hidrográfica, postulan a hora la necesidad de ampliar el regadío. Desde el punto de vista de la garantía y dadas las limitaciones reales existentes para ampliar la oferta, toda ampliación de superficie de regadío conlleva un reajuste del regadío existente, de manera que solo por la vía de la mejora de la eficiencia de puede atender a todas las demandas.

Que las concesiones deban modificarse como consecuencia de las actuaciones de mejora de la eficiencia del uso no es una exigencia del plan hidrológico sino de la propia normativa de aguas, por ejemplo, en aplicación de los artículos 65 del TRLA, al señalar que las concesiones podrán ser revisadas cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento, a petición del concesionario o cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. En concreto, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. En el primer

criterio del artículo 65 para revisar una concesión se encuentra el hecho de que, por ejemplo, se esté regando más superficie (o menos) de la que ampara el título concesional, a lo que se refiere el alegante como “restricciones indirectas de superficie regable”.

En efecto, el EpTI (y el propio plan hidrológico vigente) ha dado prioridad a las actuaciones en puntos donde hay déficit estructural como Carrión y Órbigo. En la actualidad no hay déficit en el sistema Tormes. Los casos de Eria, Curueño o Duerna son nuevos en el presente ciclo de planificación hidrológica y nos parecen más un empeño de determinadas asociaciones de regantes que de los propios usuarios de estos ríos. De hecho, para el Duerna se estableció una reserva de agua en el plan hidrológico vigente para mejorar las garantías de los riegos del valle, reserva que no se ha materializado por falta de capacidad de los usuarios en agruparse de manera reglada. En el caso del Eria solo los de la parte baja del Área han promovido una CUAs con el fin de organizar mejor el uso del agua.

El EpTI no tiene capacidad para modificar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas que otorga la ley, especialmente ante el horizonte de 2035, ni puede ampliar esa seguridad ni disminuirla. Es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas. Lo que el EpTI señala es que estos derechos cuando sean en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, si éstas no alcanzan su buen estado en 2035, será muy difícil que puedan mantener su status actual, ya que en las citadas DT se indica que en todo caso, a esos aprovechamientos de aguas les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico. Por tanto, el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

Como se pone de manifiesto en la Ficha del tema importante DU-09, las actuaciones vinculadas al regadío (modernización de regadíos y nuevos regadíos) cuya autoridad competente es la administración agraria del Estado y de las comunidades autónomas, presentan un nivel de ejecución del 20 y del 27%, respectivamente; por su parte el grupo de infraestructuras hidráulicas presenta una ejecución del 13% de la inversión. Esta situación, como indica la alegante, genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban; de hecho, en el tema importante DU-09 se insiste en este aspecto llamando a la responsabilidad de las autoridades competentes para que asuman las medidas que han validado en cada ciclo de planificación hidrológica.

Alegación 20.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

En las alegaciones a la revisión del plan 2022-2027 se propuso una tabla de asignaciones máximas que creemos que debe ser revisada de acuerdo a las dotaciones que se vienen aprobando en las campañas de riego coincidentes con el período de desarrollo de dicho plan y que deberían ser las siguientes:

SISTEMA	ASIGNACIÓN MÁX
PISUERGA-BAJO DUERO	6.000
CARRIÓN	5.000
TORMES	6.000
ÓRBIGO	6.000
PORMA	6.000
ADAJA	4.900
ALTO DUERO	6.000
RIAZA	6.000
ESLA (RIAÑO)	6.000
ARLANZÓN	6.000
TUERTO	4.500
TERA	6.000
ÁGUEDA	6.000

Partiendo de esta base, el objetivo que debemos perseguir es que se adopten las medidas oportunas para que todos los sistemas de explotación estén en las mismas condiciones y cuenten con idéntica disponibilidad (que ciframos en 6.000 m^3/ha), para lo cual tendríamos que incluir en el programa de medidas las actuaciones necesarias que nos permitan situarnos en ese escenario de igualdad.

Respuesta:

La propuesta que se hace en la alegación se ha tenido en cuenta en el EpTI, singularmente en la alternativa 5, ofreciendo los resultados de esta alternativa respecto al resto. A la vez hay que decir que adoptar este criterio para las dotaciones supondría llevar a algunas de las demandas de determinados sistemas de explotación al incumplimiento generalizado de garantías, como por ejemplo Alto Duero, Adaja o Tuerto. Tampoco se explica bien en la alegación por qué motivo, siguiendo el argumento de la alegante, se debe asegurar una dotación de 4.500 m^3/ha año en el Tuerto o 4.900 m^3/ha año en Adaja, frente a 6.000 m3/ha año de muchos de los sistemas de explotación; y tampoco por qué 6.000 m^3/ha año en toda la cuenca: ¿maneja el alegante algún estudio estadístico que justifique esa dotación?; si es la dotación a la que tradicionalmente se ha tendido, ¿por qué ha de mantenerse en sistemas modernizados con elevadas eficiencias de uso del agua?; ¿se pretende, con esta propuesta, dar carta de reconocimiento a determinados agentes que afirman que la modernización de regadíos en España no contribuye a reducir las presiones sobre las masas de agua sino a incrementar la demanda y que por ello, debería anularse la financiación con fondos públicos?

Por otra parte, la propuesta no atiende al criterio agronómico de las necesidades hídricas de los cultivos de cada sistema de explotación, como se pone de manifiesto, por ejemplo, comparando la dotación del Sistema Órbigo con la del Sistema Adaja, o pensando que la demanda de un cultivo en Soria puede ser comparable a la del mismo cultivo en Toro. La propuesta que se hace en el escrito, en un deseo de homogeneizar el suministro de agua cuando se paga lo mismo por superficie, atiende sobre todo a las reservas que existen en cada Sistema, lo que invalidaría el análisis de garantía que se establece de acuerdo con los epígrafes 3.5.1 u 3.5.2 de la IPH.

Entendemos que la demanda de la alegante obedece a que todavía se pagan cánones y tarifas no en función del consumo sino de la superficie regada, sistema que no disuade al usuario de ser eficiente. De cualquier modo, se analizará en fase de redacción del plan hidrológico la viabilidad de la propuesta,

con el fin de que pueda atender a dos criterios simultáneos: la realidad agroclimática de cada zona y el hecho de que el pago de cánones y tarifas se haga por superficie regada en vez de volumen utilizado.

Alegación 21.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

1.- En primer lugar y en tanto en cuanto no se adopten las medidas que puedan mejorar la garantía de todas las UDAs, se debe mantener la vigencia del art. 15.8 del plan vigente "Dotaciones orientativas máximas en los sistemas de explotación regulados: En aplicación del artículo 55 del TRLA, el organismo de cuenca para los sistemas que cuenten con regulación, una vez consultadas las correspondientes Juntas de Explotación, fijará anualmente dotaciones orientativas máximas de agua en función de las reservas existentes y en coherencia con las propuestas sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses de la Comisión de Desembalse, a las que deberá adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Estas dotaciones podrán ir modificándose anualmente en función de las reservas realmente existentes".

2.- En relación con el apartado anterior, abogamos porque las propuestas de dotaciones elevadas por las Juntas de Explotación a la Comisión de Desembalse y aprobadas por esta última se apliquen por igual a todos los usuarios del sistema en cuestión, sean canales del Estado o regadíos concesionales, no sólo en años de sequía (donde se puede aprobar un Real Decreto-ley que lo regule), sino también en años de normalidad, para que todos los usuarios del mismo Sistema tengan a disposición idénticos caudales.

Respuesta:

Las cuestiones que se sugieren no son parte del EpTI, sino que corresponden más bien a la fase de elaboración del Plan Hidrológico, que contará con un período de consulta pública donde podrán hacerse sugerencias sobre la parte Normativa del Plan Hidrológico.

Alegación 22.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

3.- La mejora de la eficiencia del regadío mediante la modernización de sus infraestructuras y un leve incremento de la regulación son las estrategias más adecuadas. Por parte de los usuarios, también se debe perseguir aplicar todas las medidas y prácticas agrarias que mejoren la gestión sostenible del recurso y consigan un ahorro de agua.

4.- Caudales ecológicos: su implantación y cumplimiento (casi del 100% en nuestra cuenca de acuerdo a los informes anuales presentados a la Comisión de Desembalse) contribuyen a la pérdida de garantía en la satisfacción de las demandas en las UDAs con más déficit hídrico. En este sentido, debemos de poner de manifiesto que no consideramos justificada la obligación de mantener los caudales mínimos definidos para situación de normalidad en situación de sequía prolongada en las zonas incluidas en la red Natura 2000 (LIC, ZEPA, etc) o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo

con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, tal como establece el RPH (art 18.4). La situación de sequía prolongada obedece a causas naturales y, por tanto, no se encuentra justificación para esta salvedad. Teniendo en cuenta que se trata de una prescripción de carácter reglamentario, su modificación debe plantearse en una disposición de igual o superior rango, como puede ser el Real Decreto de aprobación de los planes de cuarto ciclo. Por ello se considera de interés plantear esta modificación como medida en los programas de medidas de los planes de cuarto ciclo, con la tipología de instrumento general.

De igual modo, en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse.

Respuesta:

El diagnóstico del EpTI coincide con la primera propuesta de la alegante. No ocurre lo mismo con la segunda propuesta: el artículo 18 del RPH señala que en *caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971. En estas zonas se considerará prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, aunque se aplicará la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones.* Y el artículo 49 quáter del RDPH señala que *en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada, se exigirá el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos aguas abajo de las presas conforme a lo previsto en la disposición transitoria quinta y cuando la disponibilidad natural lo permita. A tal efecto, el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse. No obstante, el régimen de caudales ecológicos será exigible, siempre y en todo caso, cuando exista una legislación prevalente como la aplicable en Red Natura o en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de acuerdo de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, en la que se establece la prevalencia del caudal ecológico frente al uso*. Por ello la propuesta de la alegante contradice ambas disposiciones, por lo que no es posible atenderla.

Alegación 23.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

5.- Revisión del Convenio de Albufeira: […], volvemos a reivindicar las propuestas planteadas en el escrito dirigido a la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en septiembre de 2022, motivado por el conflicto suscitado por la suelta de agua de embalses de regadío para poder cumplir con los compromisos reflejados en el Convenio de Albufeira. Seguimos demandando una reducción de la aportación semanal, trimestral y anual en los diferentes puntos de control, así como subir el umbral de precipitación al 70% sobre la media interanual, para que si en períodos de sequía prolongada la precipitación bajase de ese umbral, podamos entrar en excepción.

Respuesta:

Es importante resaltar que el convenio de Albufeira es un tratado internacional establecido entre dos países, España y Portugal, con la finalidad de dar coherencia y continuidad a tratados anteriores en lo que se ha buscado a lo largo de los siglos limitar los conflictos fronterizos entre ambos países.

Como se indica en la Ficha DU-09, entre las decisiones a tomar en relación con el Convenio de Albufeira, se encuentra analizar las divergencias entre las planificaciones española y portuguesa para ofrecer soluciones conjuntas a las masas de agua compartidas y los indicadores de sequía y escasez de ambos países para tratar de integrar ambos diagnósticos en uno. Esta última decisión viene avalada por los memoranda de entendimiento entre España y Portugal de las cumbres hispano-lusa de 2023, 2024 y 2026, en las que ya se está trabajando por ambos países. Más allá de esa voluntad de mejorar el diagnóstico de los criterios de excepción, y armonizar los indicadores de sequía y escasez, corresponde a otras instancias promover los cambios del Convenio que considere oportunos.

Alegación 24.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Infraestructuras

Para conseguir la sostenibilidad del regadío reflejada en la ficha anterior, las Comunidades de Regantes solicitan que, de manera genérica el futuro Plan Hidrológico incorpore las siguientes medidas:

- *Incrementar las inversiones públicas en modernización y digitalización*
- *Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.*
- *Priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y zonas vulnerables*
- *Impulsar balsas laterales y actuaciones de regulación complementaria*
- *Dotar presupuestariamente las actuaciones del plan*
- *Mejorar infraestructuras hidráulicas y redes en alta*
- *Favorecer el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas*
- *Flexibilizar tarifas energéticas adaptadas a la estacionalidad del riego*
- *Mantener la seguridad jurídica concesional*
- *Establecer programas reales y ejecutables con financiación suficiente*
- *Realizar limpiezas periódicas de cauces y desagües como medida de seguridad y bienestar para la población rural.*

Respuesta:

Entre las propuestas heterogéneas que hace la alegación, algunas caen fuera de la competencia del agua (tramitación ambiental, tarifas energéticas); otras están incorporadas a las Fichas del EpTI (incrementar inversiones en modernización en la Ficha DU-06, centrarse en actuaciones en sistemas deficitarios en la Ficha DU-07, impulsar sustitución de bombeos con aguas subterránea en la Ficha DU-02, fomentar utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas en la Ficha DU-06, modernizar infraestructuras de riego en alta en Ficha DU-07). Respecto a la seguridad jurídica concesional, como se ha dicho en la respuesta a la alegación 19, es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas; el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

En la Ficha DU-09 se aborda el tema importante de la financiación del Programa de medidas. El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Estas autoridades deben dar la conformidad al programa de medidas para lo cual, cada una internamente, habrá debatido la capacidad y conveniencia de asumir cada medida. Por tanto, los mecanismos formales para asegurar la ejecución del Programa de medidas existen y desde el ámbito de la planificación hidrológica sólo se puede recalcar que estos mecanismos no deben ser simplemente formales sino también reales. La propia Ficha DU-09 describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social.

Sin duda la mejora de las condiciones hidrológicas de cauces es una tarea de gran peso en la cuenca a la que el Organismo de cuenca dedica anualmente entre 4 y 6 millones de euros, posiblemente escasos para las necesidades crecientes, a labores de mantenimiento de cauces. El Programa de medidas del plan hidrológico vigente incluye un paquete de medidas de este tipo. Pero evidentemente no puede llegar a atender eficazmente a los más de 80.000 kilómetros de ríos y arroyos de la cuenca y actúa con criterios de conveniencia y racionalidad económica. Para paliar esta desproporción entre necesidades y posibilidades reales, tanto en el Plan vigente de 2023 como en el anterior de 2016, se incluyó un procedimiento más ágil para acometer determinadas labores de mejora de las condiciones de desagüe de los cauces. Así en el artículo 30 de la Normativa se establece el sistema de declaración responsable para las denominadas *actuaciones menores de conservación de cauces y zonas de policía*. El mismo artículo hace un elenco de las que pueden considerarse actuaciones menores:

I. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera.

II. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce.

III. Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del dominio público hidráulico.

IV. Retirada de sedimentos y vegetación existente en el lecho del cauce, situados 50 metros aguas arriba y aguas abajo de las obras de fábrica y puentes con el fin de conservar su capacidad de drenaje.

V. Pequeñas actuaciones de mantenimiento de puentes e infraestructuras situadas sobre el cauce, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas no haya ocupación del dominio público hidráulico ni quede afectada su capacidad de desagüe.

VI. Mantenimiento de las secciones de estaciones de aforo.

VII. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos.

VIII. Cortas de arbolado bajo líneas eléctricas.

Para todas estas actuaciones la declaración responsable habilita el poder actuar por los particulares sin esperar a ninguna Resolución de la CHD, lo que agiliza notablemente la actuación.

Alegación 25.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Modernizaciones a ejecutar

Si tenemos en cuenta el período restante del plan vigente y el horizonte temporal de la revisión relativa al período 2028-2033, deberíamos modernizar los regadíos pendientes cuya modernización ya está aprobada y que son los siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES	IMPORTE ESTIMADO CONVENIO MAPA-SEIASA (€ sin IVA)
PEPAC CYL y otros planes	
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)	30.000.000
Canal de Ines-Eza Fase II (Soria)	7.000.000
Canal del Esla (León)	150.000.000
Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta (Palencia)	160.000.000
Bajo Tuerto – Sindicato Central Embalse Villameca (León)	25.000.000
Castañón, Cerrajera y Regueras (León)	65.000.000
Canal de la Retención (Palencia)	47.000.000
Canal de Villalaco (Palencia)	54.000.000
Canal de Manganeses (Zamora)	40.000.000
Margen Derecha del Tera (Zamora)	100.000.000
San Salvador - Valverde de Ágreda (Soria)	15.000.000
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)	40.000.000
Alija del Infantado (León)	15.000.000
TOTAL (€ sin IVA)	**748.000.000 €**

Para poder conseguir este objetivo tienen que ser tenidas en cuenta dos reivindicaciones que trasladamos al Gobierno de España:

1.- Aumentar el capital social de la SEIASA a la cantidad de 300 M€ anuales por cada uno de los años de duración del plan.

2.- Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.

Respuesta:

La alegación aporta dos cuestiones muy relevantes para impulsar las medidas del vigente Plan Hidrológico. Estando de acuerdo con la segunda (simplificación y agilidad en los trámites de evaluación ambiental de los proyectos de modernización del regadío) la realidad es que las modificaciones legales llevadas a cabo recientemente no van en esa línea; así la modificación de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, más reciente (de 6 de noviembre de 2025) reduce los límites de superficie de modernización de regadío para que la evaluación ambiental sea ordinaria. Esto parece indicar que por parte del legislador hay una sospecha de que los proyectos de modernización podrían suponer presiones adicionales sobre el medio ambiente, quizá debido a determinados proyectos ya ejecutados que no han sido todo lo respetuosos que cabría esperar. Por ello la norma legal es la que es y, en tanto no se modifique, debemos atenernos a ella, no siendo el EpTI competente para su modificación.

La Ficha DU-06 incide en la primera parte de la alegación al apostar por una mayor intensidad de la modernización del regadío que, lógicamente pasa por la adecuada financiación que debe validar e impulsar la autoridad competente con tutela sobre la SEIASA.

Recordamos que no todas las zonas regables que se citan en la alegación disponen de medida de modernización de regadío en el Plan vigente. Como se sabe el Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento. Cuando se confeccionó el Plan vigente de manera específica se solicitó al MAPA la previsión de actuaciones de modernización en los seis años de vigencia del Plan. En la relación de actuaciones que iba a acometer el MAPA no estaban las siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)
Canal del Esla (León)
Cerrajera (León)
Canal de Villalaco (Palencia)
Canal de Manganeses (Zamora)
Margen Derecha del Tera (Zamora)
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)
Alija del Infantado (León)
TOTAL (€ sin IVA)

Y como tales no pasaron al Programa de medidas para su ejecución por el MAPA sino para su ejecución por la comunidad autónoma y los usuarios. Probablemente el MAPA no las incluyó en su programación porque la comunidad autónoma no manifestó interés por ellas ya que la mayoría no contaban con acuerdos en sus asambleas generales para acometer la modernización. Aunque el EpTI ha tenido en cuenta en sus análisis las modernizaciones que figuran en el Programa de medidas independientemente de su agente financiador, de cara al nuevo Plan Hidrológico conviene aclarar que

sólo formarán parte de las medidas aquellas actuaciones que así se determine por las autoridades competentes (MAPA o comunidad autónoma). De la Presa de Regueras, Bajo Tuerto y del Canal de la Retención ni siquiera hay medida de modernización ya que ninguna autoridad competente las ha reclamado. Valverde de Ágreda está fuera de la demarcación hidrográfica del Duero, por lo que es lógico que no figure entre las medidas del Plan Hidrológico ni ahora ni en el futuro.

Alegación 26.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Mejora infraestructuras

Propuestas:

1.- Solicitar a la Dirección General del Agua una dotación presupuestaria de 150 M€ en el período 2028/2033 para hacer frente a estas reformas, conseguir el estado óptimo de las infraestructuras para poder llevar a cabo la correcta gestión del recurso.

2.- La situación actual de la agricultura no pasa por sus mejores momentos, motivado por los elevados precios de los insumos, los bajos precios de mercado de los productos y las grandes inversiones realizadas en modernización de las infraestructuras de riego y el amueblamiento de parcelas. Por eso se solicita, buscar fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-09 y con respecto a la propuesta sobre la financiación de la DGA, se recuerda que el Plan vigente incluyó una inversión de 350 millones de euros en infraestructuras, nuevas y modernización de las existentes, cuya ejecución según la misma Ficha es de un 13% a final de 2024 que sube hasta un 19% a final de 2025, valor realmente exiguo. Pese a estar previsto es necesaria una evaluación de los motivos de este retraso que se ponen de manifiesto en la Ficha y que deben ser removido. La propia Ficha también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social. No obstante, en atención a la alegación se incluye una nueva decisión sobre la rendición de cuentas.

Los mecanismos de rendición de cuentas están formalmente delimitados en el ámbito administrativo, por ejemplo, con la regulación que se incluye en los artículos 87 y 88 del RPH. Pero este ámbito es meramente administrativo y no político, que tiene sus propios itinerarios.

Respecto a sistema de financiación alternativos a los que establece la Ley de Aguas para este tipo de infraestructuras, nada puede aportar el EpTI ya que se trata de una cuestión regulada por la propia Ley y a allá debe atenerse.

Alegación 27.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Obras de regulación:

Propuestas:

1.- Sistema Carrión: es uno de los más deficitarios de la Demarcación y urge acelerar los trámites para proceder a la ejecución de La Cueza 1 y La Cueza 2,[…].

2.- Sistema Tormes: […]. De momento, están puestas en Explotación unas 10.000 has entre La Armuña II y la Zona de Arabayona, lo que colocaría la superficie de la zona regable dependiente del embalse de Santa Teresa en el entorno de 35.000,00 has. La planificación ya prevé el desarrollo de otras 12.000 has más en La Armuña III y IV, que sí podrían ser asumidas por dicho embalse, pero en el caso de que se llegase a plantear alguna ampliación más en el futuro, resultaría necesario estudiar el recrecimiento del embalse para garantizar la satisfacción de todas las demandas (además del regadío, abastecimientos, caudales medioambientales y otros usos)

3.- Sistema Órbigo: […] nuestras propuestas pasan por el cambio de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al Sistema Tera (podríamos conseguir un ahorro de unos 12 Hm3) y la construcción de la balsa lateral de La Rial con llenado por gravedad desde el río Omaña (su capacidad está prevista en 23 Hm3).

Dentro del Sistema Órbigo tenemos el Subsistema Tuerto, […], proponemos las siguientes actuaciones: urgente puesta en explotación del embalse de Villagatón, estudiar un posible recrecimiento del embalse de Villameca y reparar el acueducto del trasvase de Valdesamario para mejorar su capacidad hidráulica y contribuir así al mejor llenado de Villameca en cada campaña.

Río Duerna: […] las 4.000 has que se nutren de este río, junto con el Peces, que discurre paralelo antes de desembocar ambos en el Tuerto, subsisten a duras penas. Para asegurar la pervivencia de este regadío, proponemos varias actuaciones:

- *Siembra de agua, derivando en invierno el caudal a las zayas, que son más filtrantes y permiten recargar el acuífero (se podrían acumular unos 2 Hm^3) para poder ser utilizado en campaña junto con el agua del río hasta la llegada del estiaje.*
- *Estudiar la posibilidad de balsas laterales derivando caudal del río Duerna en época invernal para ser utilizadas en verano.*
- *Estudiar la alternativa de un embalse de cabecera con una capacidad menor a los 28 Hm3 que estaban previsto en el proyectado en Chana de Somoza.*

Idénticos planteamientos podríamos someter a estudio para consolidar la zona regable dependiente del río Eria.

4.- Sistema Esla Valderaduey: para este sistema se pueden plantear balsas laterales en el río Cea aprovechando su aportación invernal, con suministro cero del embalse de Riaño. Como fórmula de explotación más viable, planteamos un aprovechamiento conjunto de los embalses de Riaño, Porma y

Casares, desestimando definitivamente la alternativa planteada por la Confederación Hidrográfica del Duero de la transferencia de agua de este último al sistema Órbigo.

5.- Apoyo a las aguas subterráneas: En el EPTI se plantean peajes [..]. FERDUERO se opone frontalmente a estos recortes y además de seguir impulsando la constitución de CUAS para mejorar la gestión de los acuíferos, planteamos que se estudien actuaciones que permitan sustituir aguas subterráneas por aguas superficiales, así como el uso compartido de ambas. Por ejemplo, el desarrollo de La Armuña III y La Armuña IV puede liberar hectáreas de la zona sur de la Masa de Medina, la Presa de Lastras de Cuéllar lo mismo en Tierra de Pinares y las balsas laterales de Tordesillas, ayudaría a mejorar su acuífero. Por ello, planteamos que se estudien estas opciones para poder mantener el regadío y la actividad económica de todos los usuarios que se sirven de estas masas.

[…] solicitamos a la Dirección General del Agua la búsqueda de fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras de regulación.

Respuesta:

Con relación al punto 1 de la alegación (Sistema Carrión), debe señalarse que la Confederación Hidrográfica del Duero comparte la conveniencia y oportunidad de la puesta en servicio de una regulación adicional en el ámbito de las Cuezas, ya que se considera una medida estructural que puede incrementar la capacidad de gestión del sistema y reforzar su resiliencia, disminuyendo la dependencia de aportaciones externas. Estas actuaciones, junto con la modernización de regadíos en el sistema Carrión, se encuentran alineadas con los objetivos de la planificación hidrológica vigente y forman parte de la estrategia de mejora del equilibrio entre recursos y demandas en la demarcación.

Según se recoge en el Programa de medidas del Plan Hidrológico vigente, cuya situación más actualizada se puede consultar en Mírame-IDEDuero, la regulación adicional en las Cuezas (medidas 6403243 y 6403244) se encuentra en fase de anteproyecto en evaluación ambiental y es una medida cuyo promotor es la Confederación.

Con relación al punto 2 de la alegación (Sistema Tormes) debe indicarse que el EpTI ya contempla expresamente el análisis de la ampliación de regadíos en el sistema Tormes y su relación con la capacidad de regulación del embalse de Santa Teresa. En particular, el documento pone de manifiesto que los eventuales incrementos de superficie regable —como los asociados al desarrollo de La Armuña— deben quedar condicionados a la disponibilidad real de recursos y a la garantía del sistema, evaluándose de forma conjunta la gestión de la demanda y la oferta.

A este respecto, el EpTI analiza el posible recrecimiento del embalse de Santa Teresa en el marco de la alternativa 5 de la ficha DU-07, como una de las opciones para incrementar la capacidad de regulación en escenarios de mayor desarrollo del regadío. No obstante, también concluye que este tipo de actuaciones:

- no resuelven por sí solas los déficits del sistema ni los problemas de garantía,
- y deben plantearse únicamente cuando se justifique su viabilidad técnica, económica, ambiental y social, y siempre en combinación con medidas de gestión de la demanda (modernización, limitación de dotaciones, etc.).

En consecuencia, la eventual necesidad de recrecimiento del embalse no puede considerarse automática, sino que debe evaluarse en el marco global de la planificación hidrológica, priorizando un enfoque integrado que garantice la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Todo ello se analizará con detalle en la fase de redacción del plan hidrológico.

En relación con la propuesta formulada en el punto 3 para el sistema Órbigo, cabe señalar lo siguiente:

En primer lugar, la Confederación valora favorablemente la propuesta de cambio de la toma de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al sistema Tera, en la medida en que se trata de una actuación coherente con los objetivos del EpTI orientados a la optimización de la gestión de los recursos disponibles y a la reducción de presiones sobre sistemas deficitarios, mediante la mejora de la asignación y distribución de recursos entre sistemas de explotación.

En cuanto al resto de actuaciones planteadas, relativas al incremento de la capacidad de regulación (balsas laterales, nuevos embalses, recrecimientos o mejora de infraestructuras existentes), debe indicarse que el EpTI establece que este tipo de medidas deben analizarse de forma integrada dentro del conjunto de alternativas de planificación, en coordinación con las actuaciones sobre la demanda (modernización, eficiencia y adecuación de dotaciones).

En particular, el documento pone de manifiesto que:

- Las actuaciones de incremento de regulación pueden contribuir a mejorar la garantía y reducir déficits en determinados sistemas,
- pero su eficacia es generalmente limitada si no se acompañan de medidas de gestión de la demanda,
- y en todo caso deben someterse a una evaluación rigurosa de su viabilidad técnica, económica, social y ambiental, dada su elevada inversión y potencial afección sobre las masas de agua.

Por ello, la puesta en explotación del embalse de Villagatón o la mejora del trasvase de Valdesamario para reducir pérdidas y una ligera mejora de la capacidad hidráulica podrán incorporarse al Programa de medidas en fase de redacción de plan hidrológico. Respecto a de la balsa lateral de La Rial o el posible recrecimiento de Villameca, la decisión de su incorporación al Programa de medidas del plan hidrológico dependerá de su encaje en las conclusiones del estudio de alternativas de incremento de regulación del sistema Órbigo y de su encaje en la estrategia global de la demarcación.

Sobre las propuestas relativas al río Duerna, la Confederación Hidrográfica del Duero valora positivamente las actuaciones de “siembra de agua”, entendida como recarga gestionada de acuíferos mediante derivaciones superficiales (como el uso de “zayas” u otras infraestructuras tradicionales), que ya han sido consideradas en el marco de la planificación hidrológica vigente. En particular, en el valle del Duerna se incluyó una reserva de agua superficial en invierno destinada a la recarga, constituyendo una medida alineada con la gestión conjunta de recursos superficiales y subterráneos y con los objetivos de mejora de la garantía y sostenibilidad del regadío. Como se ha dicho en la respuesta a la alegación nº 19 de este mismo escrito, lamentablemente a fecha actual no se ha podido hacer efectiva esa reserva por falta de interlocutor en forma de junta central, sindicato central o comunidad general de usuarios, trámite imprescindible para poder hacer efectiva esa reserva.

Esta solución encaja, asimismo, con las líneas del EpTI en materia de adaptación al cambio climático, diversificación de fuentes y aumento de la resiliencia de los sistemas de explotación, incluyendo el uso de infraestructuras alternativas y recarga artificial cuando resulten técnica y ambientalmente viables.

En cuanto a las propuestas relativas a la construcción de balsas laterales, almacenamiento estacional o alternativas de regulación en cabecera, estas se encuadran dentro de las posibles medidas de mejora de la gestión de la oferta contempladas en los temas importantes DU-06 y DU-07 del EpTI (incluyendo infraestructuras de almacenamiento, regulación o mejora de la garantía). No obstante, su implantación requiere un análisis específico en el marco de la elaboración del Plan Hidrológico, en el que se valore su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica, así como su eficacia real frente a otras alternativas. En este sentido, dichas propuestas se tendrán en consideración y podrán ser objeto de estudio en la fase de redacción del Plan.

En relación con las propuestas formuladas en el punto 4 para el sistema Esla-Valderaduey, la propuesta de aprovechamiento de aportaciones invernales mediante balsas laterales en el río Cea se encuadra dentro de las medidas contempladas en el EpTI en los temas importantes DU-06 y DU-07, en los que se prevé la utilización de infraestructuras de almacenamiento complementarias (balsas laterales, regulación estacional, etc.) como instrumento para mejorar la garantía de los sistemas de explotación. Por ello, este tipo de soluciones podrá ser analizado en la fase de elaboración del Plan Hidrológico, valorando su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica en el ámbito del sistema Esla–Valderaduey.

En cuanto a la propuesta de explotación conjunta de los embalses indicados, debe señalarse que el embalse de Casares es titularidad de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A.), por lo que en la situación actual no resulta posible su gestión conjunta con las infraestructuras de titularidad y explotación directa del Organismo de cuenca en los términos planteados.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier planteamiento de optimización conjunta de infraestructuras deberá analizarse en el marco competencial y de explotación correspondiente, considerando el régimen jurídico de cada una de ellas y los acuerdos que, en su caso, pudieran establecerse entre las Administraciones implicadas.

En relación con el punto 5 de la alegación, se formulan las siguientes consideraciones:

Las posibles limitaciones al uso de aguas subterráneas deben enmarcarse en el objetivo prioritario de la planificación hidrológica, conforme a la Directiva Marco del Agua y al Texto Refundido de la Ley de Aguas, de alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de agua, evitando su deterioro y corrigiendo situaciones de sobreexplotación. En este sentido, la evolución de la política hidráulica se orienta hacia un refuerzo del control administrativo de las extracciones y una progresiva convergencia hacia el régimen concesional, lo que implica necesariamente la adopción de medidas de limitación en aquellos casos en los que las extracciones resulten incompatibles con la recuperación de los acuíferos.

Se valora positivamente el impulso a la constitución de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) como instrumento clave para la mejora de la gobernanza, el control de extracciones y la gestión conjunta de los recursos, en línea con lo previsto en el EpTI para el uso sostenible de las masas de agua subterránea.

Las propuestas orientadas a la sustitución de bombeos por recursos superficiales y al uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas son coherentes con las líneas de actuación recogidas en el EpTI, que contempla este tipo de medidas como alternativas para reducir la presión sobre los acuíferos y avanzar hacia su recuperación. No obstante, su viabilidad debe analizarse caso por caso en la elaboración del Plan Hidrológico, considerando la disponibilidad real de recursos, las garantías de suministro, los condicionantes ambientales y la eficiencia económica de las soluciones planteadas.

Alegación 28.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario recordar que la planificación hidrológica, de conformidad con el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, no persigue exclusivamente objetivos ambientales, sino también la satisfacción de las demandas, la armonización del desarrollo regional y sectorial y la sostenibilidad de las actividades económicas vinculadas al uso racional del agua. En consecuencia, cualquier mecanismo de coordinación interadministrativa o fijación de objetivos específicos en zonas protegidas debe incorporar necesariamente criterios de proporcionalidad, equilibrio territorial, cohesión socioeconómica y viabilidad de los usos existentes, singularmente en territorios rurales altamente dependientes del regadío. […]

La ficha plantea la alineación del marco regulatorio de distintas políticas sectoriales con los objetivos de la planificación hidrológica, incluyendo expresamente la Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats. No obstante, dicha coordinación no debería derivar en la imposición automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos.

Respuesta:

El EpTI no propone ni pretende imponer de manera *automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos*. De hecho, al menos, las Fichas DU-01, DU-02, DU-03, DU-04 y DU-07 tratan de hacer un análisis técnico de las presiones que generan sobre las masas de agua las actividades humanas, entre ellas la agrícola, unas veces con mayor profusión de datos y otras de manera cualitativa. Las propuestas y alternativas que se hacen en el EpTI se apoyan en ese análisis, tratando de corregir las presiones sin causar un daño excesivo a las propias actividades existentes. A nuestro juicio hay un equilibrio entre las actividades y los objetivos ambientales dentro del margen que permite la normativa vigente. Y la llamada a las políticas sectoriales (Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats) lo es en la medida que estas políticas apuntan a la del agua en sus propios desarrollos legales.

Alegación 29.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La ficha señala la necesidad de fijar objetivos específicos sobre el medio hídrico de los espacios Red Natura 2000 vinculados al agua. Sobre esta cuestión debe indicarse que cualquier eventual limitación derivada de dichos objetivos deberá sustentarse necesariamente en estudios técnicos individualizados, suficientemente motivados y territorialmente concretos, evitando restricciones automáticas derivadas exclusivamente de la ubicación geográfica de las explotaciones o infraestructuras. Especialmente en sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados, debe garantizarse plenamente la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes y la compatibilidad entre conservación ambiental y actividad agraria sostenible.

Respuesta:

Las limitaciones derivadas de los objetivos de los espacios naturales de Red Natura 2000 ya existen desde que se aprobaron los planes básicos de gestión, en el caso de Castilla y León desde 2015.

Los objetivos específicos de Red Natura se fijan por las comunidades autónomas en los Planes Básicos de Gestión. En el caso de los Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León se aprobaron por ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre. Estos Planes establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000. Se estructuran en:

- Un documento de “Disposiciones generales”, común a los 177 Planes Básicos.
- Ciento setenta y siete documentos de Planes Básicos de gestión y conservación correspondientes a cada uno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.
- Tres "Anexos" comunes a los 177 planes básicos:
    - Anexo I. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000,
    - Anexo II. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Valores Red Natura 2000, y
    - Anexo III. Medidas de conservación y gestión Red Natura 2000.

De todos los espacios y hábitats de estos Planes sólo aquellos vinculados al agua (76 en la demarcación hidrográfica del Duero) deben ser atendidos por la planificación hidrológica como establece el RPH, en la medida en que les afecte. Y las limitaciones en el ámbito del agua las establecen los citados planes. En este sentido cabe transcribir algunos de los fundamentos de derecho que esgrime el Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 515/2025 que se cita en la Ficha DU-09: “Por consiguiente, y como ciertamente esta situación no parece acomodarse a las exigencias de la DMA y de la legislación interna que la traspone, de las que deriva la necesidad de que los planes hidrológicos, como instrumento esencial de coordinación de la política de aguas, reflejen los objetivos ambientales de las zonas protegidas vinculados a las masas de agua asociadas y su grado de cumplimiento, y que sobre dichos

objetivos no cabe aplicar la excepción prevista en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2000/60, procede estimar la pretensión de la parte recurrente y declarar la nulidad de todas las previsiones contenidas en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las que, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 10 de las disposiciones normativas, se prevea la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas de agua vinculadas a zonas protegidas de hábitats y especies, en las que, además, no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares.

Puede ser llamativo que la delimitación de espacios protegidos por las comunidades autónomas afecten en ocasiones a zonas como las que identifica la alegante ("sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados"), por lo que cabría pensar que esos espacios protegidos lo son precisamente por su relación con esos regadíos históricos; sin embargo encontramos en sus planes básicos que la actividad agraria, entre otras, es quien constituye una presión, algo que aparentemente repugna toda lógica racional. Pero la planificación hidrológica poco puede hacer para resolver estas incoherencias, más allá de instar al órgano competente de la comunidad autónoma a que revise esas declaraciones o los planes básicos correspondientes, como también lo puede hacer el sector al que pertenece la alegante.

Alegación 30.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

No parece razonable incrementar simultáneamente las exigencias ambientales o las limitaciones sobre los usuarios concesionales mientras persistan importantes retrasos administrativos y presupuestarios en la ejecución de actuaciones estructurales cuya responsabilidad corresponde principalmente a las administraciones públicas competentes.

Respuesta:

Manifestamos acuerdo con la alegante en lo que se refiere al notable retraso en la ejecución del Programa de medidas; de hecho, la propia Ficha lo pone de manifiesto cuando abiertamente reconoce que el *Programa de medidas del Plan Hidrológico se construye con las medidas que todas las autoridades competentes (administraciones locales, autonómicas o estatal) y resto de agentes, cada uno en el marco de sus competencias, pueden impulsar para el logro de los citados objetivos. Por tanto, buena parte del éxito de un plan hidrológico para dar cumplimiento a esos objetivos estriba en el compromiso de los agentes de acometer las medidas que caen bajo su ámbito*. También propone algunas decisiones a explorar para que esto no se repita en el futuro, como son que haya un *compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución*, y establecer un *marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios.*

Pero dicho esto no podemos compartir la comparación de este hecho con las necesidades de establecer criterios ambientales ya que en su mayoría estos criterios buscan reducir las presiones sobre las masas de agua y esas presiones se ejercen por actividades y usuarios concretos a quienes corresponde, en la medida de lo que establecen las normas, contribuir a la reducción de las mismas.

Alegación 31.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario reforzar de manera efectiva la participación técnica y real de los usuarios del agua, singularmente de las Comunidades de Regantes, en los procesos de toma de decisiones y seguimiento de la planificación hidrológica.

Respuesta:

La Ficha DU-09 aborda la necesaria colaboración y cooperación entre los departamentos de la administración pública para que, cada uno en su ámbito competencial, contribuya al logro de los objetivos de la planificación. Y ello porque al tener competencias sobre distintos factores que inciden en el agua (tanto como demanda como medio ecológico), las políticas sectoriales en cada uno pueden contribuir o no a lograr los objetivos.

No se aborda en la ficha el modo de participación de los usuarios en la gestión del agua que tiene sus propias normas legales establecidas. Por ello sorprende que una Comunidad de regantes reclame mayor participación en los procesos de toma decisiones y de seguimiento de la planificación hidrológica. Las comunidades de regantes participan en la Junta de Gobierno, en el Consejo del Agua de la demarcación, en la Comisión de Desembalse, en la Asamblea de Usuarios y las Juntas de Explotación. Esa representación está regulada en el TRLA, el RAPA o reglamentos específicos (como el que regula el consejo del agua de la demarcación). Todos ellos son órganos de gobierno, gestión, coordinación y participación de los organismos de cuenca. Nos gustaría conocer otros ámbitos administrativos donde la participación de los usuarios fuera al menos de la misma magnitud que en la gestión del agua. De cualquier modo, el EpTI no tiene capacidad para modificar la distribución de la representación de los usuarios en los distintos órganos.

Alegación 32.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario que la planificación identifique de manera expresa la incidencia real que el cumplimiento del Convenio de Albufeira y de otros compromisos ambientales o internacionales tiene sobre las garantías de suministro de las distintas unidades de demanda agraria y sobre las reservas embalsadas disponibles en los sistemas de explotación. [..]

Por ello, cualquier incremento de exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales existentes.

Respuesta:

El análisis que se solicita en la alegación respecto al Convenio de Albufeira se ha hecho en todas las alternativas que figuran en las Fichas DU-06 y 07 debido que se trata de una restricción al uso del agua, de manera que, en todo caso, siempre que no se den las condiciones de excepción, se cumplen los

requisitos del Convenio. No se ha incluido su explicación en las Fichas por una cuestión de simplificación. No obstante, con las medidas definitivas, en fase de redacción de plan hidrológico, habrá un apartado específico que aborde este cumplimiento de caudales integrales del Convenio de Albufeira.

Respecto a la segunda propuesta (que las nuevas exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales), el EpTI no puede avalar una cuestión que no está contemplada en la normativa vigente. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 65 del TRLA cuando los usos actuales puedan verse afectados por la planificación hidrológica o por requisitos adicionales de carácter ambiental que hagan imposible ejercer el uso para el que existe concesión, como parece explicar la alegación, podrá reclamarse la correspondiente indemnización. Y ello sin menoscabo de la jurisprudencia ya consolidada en relación con las indemnizaciones por restricciones previas, como son el régimen de caudales ecológicos o los compromisos internacionales o ambientales, más bien en contradicción de la propuesta de la alegación.

Alegación 33.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La creciente interacción entre distintas políticas sectoriales europeas, estatales y autonómicas vinculadas al agua puede generar escenarios de elevada complejidad regulatoria para los usuarios y las Comunidades de Regantes. Por ello, se considera imprescindible que el futuro Plan Hidrológico garantice marcos regulatorios claros, previsibles y técnicamente motivados, evitando duplicidades administrativas, contradicciones regulatorias y limitaciones carentes de suficiente justificación técnica individualizada.

Respuesta:

En el ámbito del agua, el EpTI es un documento intermedio de la planificación hidrológica que tiene por objeto la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. No tiene que ofrecer seguridad jurídica ya que es un documento instrumental en la elaboración del Plan Hidrológico que se aprueba por Real Decreto y tiene fuerza vinculante.

Por otra parte, la seguridad jurídica para los usuarios que aspiran a desarrollar una actividad la ofrece el procedimiento concesional donde se concreta la actividad en el objeto, el tiempo y el lugar, lo que permite evaluar la actividad en coherencia con los objetivos de la planificación hidrológica. Por tanto, se rechaza la alegación. Los planes hidrológicos se revisan cada seis años, lo que puede suponer que, dentro del marco legal general, haya modificaciones específicas como consecuencia de la revisión planificadora. Seis años, a nuestro juicio es un marco temporal escaso, pero el ordenamiento jurídico establece ese plazo para las sucesivas revisiones y a él debemos ajustarnos.

La Ficha DU-09 pone el acento en la necesidad de incrementar la coordinación y cooperación administrativa en el ámbito de la planificación hidrológica; la alegante reclama esa coordinación en el marco de la gestión ordinaria. Siendo un objetivo razonable, no hay que olvidar cuáles son las competencias de cada administración lo que puede suponer una mayor lentitud de procedimientos, en especial si éstos confluyen en una única actividad. Sigue quedando pendiente la simplificación administrativa ya que, cada vez que hay cambios normativos, no suelen ser para simplificar sino para una mayor complejidad. Al igual que los usuarios también las administraciones padecemos esta complejidad que está al servicio, en este caso, de las garantías. Precisamente la variedad de competencias sobre una misma actividad puede generar esas incoherencias de las que no son culpables quienes deben verificar los requisitos legales sino de las normas que regulan la actividad.

Alegación 34.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Una cuestión relevante que debería ser tenida en cuenta en las evaluaciones ambientales de grandes instalaciones fotovoltaicas es la posible modificación del coeficiente de escorrentía superficial derivada de la implantación masiva de paneles solares. […]

Por ello, se considera necesario que el futuro instrumento de planificación y las evaluaciones ambientales incorporen análisis hidrológicos específicos sobre modificación de escorrentías, incluyendo modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Respuesta:

Compartimos con el alegante su percepción de que la construcción de plantas fotovoltaicas contribuye al aumento de suelo artificial con impactos como compactación y modificación de la permeabilidad del suelo, alteración de la escorrentía e incremento de la erosión.

La planificación hidrológica no puede entrar en el detalle de dichos impactos, que son evaluados específicamente en los procedimientos ambientales a que se ven sometidos los proyectos y que son específicos de cada uno de ellos.

La modificación de la escorrentía superficial producida por una instalación fotovoltaica depende de muchos factores como son la extensión de la planta fotovoltaica, las características edáficas de su localización, las posibles modificaciones topográficas del terreno, el tipo y forma de fijación de los seguidores, etc. Estos aspectos son evaluados de forma cualitativa en los preceptivos informes que emite la CHD, como administración afectada, en el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos, sin poder establecer una evaluación cuantitativa del efecto sobre la escorrentía ya que los promotores no facilitan modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Alegación 35.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Por otro lado, se considera igualmente interesante analizar el potencial uso dual de determinadas infraestructuras de regadío para su contribución al sistema eléctrico nacional, especialmente en aquellos casos en los que existan balsas de regulación situadas a cota elevada y otros condicionantes

técnicos favorables. Determinadas instalaciones de modernización podrían adaptarse para funciones complementarias de almacenamiento energético y regulación eléctrica mediante sistemas reversibles, incrementando la utilidad y rentabilidad social de infraestructuras ya existentes.

Respuesta:

Esta indicación del alegante de una posible utilización de las instalaciones inherentes a modernizaciones del regadío para funciones de almacenamiento energético no se ha planteado hasta la fecha en este Organismo. No obstante, cualquier iniciativa que se presente para la correspondiente autorización o concesión se analizará específicamente.

La capacidad de almacenamiento de estas balsas de regulación no suele ser tan elevada como para que las empresas hidroeléctricas consideren rentable la inversión en la implantación de sistemas de bombeo y centrales hidroeléctricas que permitan utilizar este recurso.

Es todo caso, sería la administración competente en la realización de estas modernizaciones y, en su caso, el titular de las infraestructuras de regadío quienes deberían proponer la utilización de las mismas para fines energéticos.

Alegación 36.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

En la ficha se indica que para las aplicaciones y usos del agua vinculados a energías renovables resultan de aplicación las mismas consideraciones previstas para usos consuntivos[..], parecería más adecuado diferenciar entre usos estrictamente consuntivos y usos con retorno efectivo del agua, especialmente a efectos de evaluación de impacto sobre la disponibilidad global del recurso hídrico. Todo ello

Se están empezando a crear nuevas plantas de hidrogeno verde, de bioetanol, etc, que necesitan agua para su desarrollo. Nos oponemos a que se extraiga agua de acuíferos que están en mal estado y, por otro lado, que cuando hayan extraído el agua, puedan verter la molécula resultante a cauces o arroyos, agravando el problema de la contaminación difusa.

Cuando el agua se coja de fuentes superficiales, nos oponemos a que se puedan restar dotaciones al regadío, cuando hay UDAs y comunidades de regantes que incumplen el criterio de garantía [..].

Por tanto, los nuevos usos del agua destinados a la implantación de industrias de producción y almacenamiento de energías renovables, pueden tener un efecto negativo en el regadío, tanto en aguas subterráneas como en aguas superficiales y pedimos que este problema se analice y se aborde con mucho rigor para no perjudicar una actividad económica destinada a la producción de alimentos, que fija población en las zonas rurales y que contribuye al mantenimiento del ecosistema y la disminución de la contaminación ambiental.

Respuesta:

Los parques eólicos y plantas fotovoltaicas precisan agua para su construcción y para algunas operaciones de mantenimiento (limpieza de paneles), siendo los volúmenes demandados no significativos. El suministro de agua para estas instalaciones se realiza habitualmente mediante suministro con camiones cisterna de agua procedente de concesiones vigentes o mediante

derivaciones temporales de aguas superficiales, que deben tramitarse en este Organismo, tramitación en la cual se evalúa la disponibilidad del recurso en cada caso particular.

Por otra parte, las instalaciones industriales para la producción de compuestos químicos capaces de almacenar los excedentes de energías renovables como son el hidrógeno verde, el amoniaco, metanol, etc., pueden suponer un uso consuntivo del agua acompañado de grandes volúmenes para la refrigeración que, en algunos casos, revierten al medio hídrico.

La alternativa elegida para este tema importante propone el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos sólo en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua y no que se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, entre ellos el regadío.

Se establecerán dotaciones máximas para la producción de estos compuestos químicos, aplicando las mejores técnicas disponibles y el estado de la ciencia. En ningún caso estas dotaciones irán en detrimento de las dotaciones establecidas para usos agrarios.

En lo relativo al posible impacto ambiental derivado de posibles vertidos y contaminación difusa, estos aspectos se analizan pormenorizadamente en cada caso, en los informes preceptivos que emite este Organismo para la evaluación ambiental de los proyectos a petición del órgano ambiental que corresponda. En estos informes se establecen condicionantes para minimizar estos impactos, que posteriormente se recogen en la declaración de impacto ambiental correspondiente.

Alegación 37.

Conclusiones finales

El actual contexto de cambio climático, reducción de aportaciones e incremento de exigencias ambientales e internacionales obliga a reforzar la resiliencia hídrica de la Demarcación mediante:

- *Una adecuada política de regulación y almacenamiento*
- *El mantenimiento funcional de los cauces*
- *La modernización y optimización de infraestructuras*
- *La revisión técnica de los actuales indicadores de sequía y escasez*

La mejora de la capacidad reguladora de la cuenca no debe entenderse únicamente como una herramienta de garantía de usos, sino también como un instrumento esencial para:

- *La adaptación al cambio climático*
- *La conservación de ecosistemas asociados al agua*
- *La estabilidad de las masas de agua*
- *El cumplimiento de objetivos ambientales*
- *La adecuada atención de los compromisos internacionales derivados del Convenio de Albufeira*

Respuesta:

Todos los aspectos que se citan en las conclusiones finales se han ido valorando a lo largo de la respuesta a este escrito de alegaciones, mostrando un acuerdo con la mayoría de las cuestiones

generales aportadas, si bien el enfoque de las medidas puede variar puntualmente, y algunos desacuerdos en especial con la vinculación de un mayor número de infraestructuras de regulación y una mejora de la conservación de ecosistemas asociados al agua.

Alegación 38.

Conclusiones finales

En conclusión, si tenemos en cuenta todo lo manifestado en el cuerpo de las presentes alegaciones, mucho tiene que cambiar la filosofía y el contenido del EpTI y el documento del PLAN que se elabore en el siguiente paso del proceso de planificación para que el voto de los usuarios regantes cuando sea informado por el Consejo del Agua de la Demarcación sea favorable. NUESTRA POSICIÓN SÓLO PUEDE SER LA DE OPONERNOS A LA APROBACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO.

Respuesta:

Respetamos la postura de la alegante en relación con el EpTI. No obstante, de una lectura de las propuestas, sugerencia y observaciones que hace la alegante y de la lectura del EpTI no podemos concluir lo mismo que el firmante del escrito. La mayor parte de las cuestiones que se plantean como mejoras están recogidas en la documentación a consulta pública; hay otras que el EpTI no puede atender porque ya están reguladas en normas de mayor rango y que atenderlas requieren modificaciones legales que no corresponden al promotor del Plan Hidrológico. Otras sugerencias, en fin, colisionan de facto con la normativa vigente y lógicamente no pueden ser atendidas. Pero en todo caso no se observa justificación para esta opinión desfavorable tan rotunda como muestra la conclusión final.

4.47. Escrito de observaciones Nº 057

Presentado por: D. Francisco Javier González Ferrero.

En nombre de Comunidad de Regantes de la Presa de la Vega de Abajo.

Alegación 1.

*Consideramos que para poder satisfacer las demandas de nuestros cultivos en la situación de campaña de riegos más desfavorable (primavera, verano e inicio del otoño secos**), necesitaríamos contar con una dotación de 6.000 m3/ha y año**, que es la que se viene aprobando en la Comisión de Desembalse en condiciones óptimas, sabiendo de antemano que se puede reducir de forma porcentual en funciones de las disponibilidades de agua con las que contemos en cada campaña.*

Realizamos esta demanda porque en un sistema deficitario como es el Órbigo, la modernización no produce unos efectos sobre el ahorro de agua tan importantes como en otros casos en los que la ratio entre las reservas disponibles y los usos a los que van destinadas es mucho más favorable. No obstante, el efecto positivo sobre el medio ambiente si es claramente constatable, tanto en la gestión del agua aplicando dosis más equilibradas y adaptadas a las necesidades de la planta, lo que disminuye drásticamente la percolación, como en la aplicación de los fertilizantes a través del sistema de riego también en función de las necesidades del cultivo, lo que evita el lavado y arrastre de los mismos.

Respuesta:

En relación con la alegación presentada, debe señalarse que el Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) no cuestiona la necesidad de disponer de dotaciones adecuadas para garantizar la viabilidad de los cultivos en campañas desfavorables, sino que sitúa dicha cuestión en el contexto más amplio del equilibrio entre demanda disponible y recursos hídricos, especialmente en sistemas estructuralmente deficitarios como el Órbigo.

A este respecto, el EpTI identifica expresamente que en diversos sistemas de explotación de la demarcación —entre ellos el Órbigo— existen problemas persistentes de garantía asociados a una insuficiente regulación y a la elevada presión de las demandas de regadío, que no se resuelven únicamente mediante la mejora de la eficiencia en parcela. En este sentido, la modernización de regadíos se configura como una medida esencial de adaptación al cambio climático y de mejora de la garantía de suministro, al permitir reducir las extracciones, optimizar el uso del recurso y disminuir las presiones sobre las masas de agua.

No obstante, el propio EpTI pone de manifiesto que la modernización por sí sola no permite eliminar el déficit estructural en los sistemas más ajustados si no se acompaña de actuaciones adicionales. En particular, el análisis conjunto de los temas DU-06 (regadío) y DU-07 (oferta de recursos) evidencia que incluso en escenarios con modernización generalizada, los déficits y los incumplimientos de garantía persisten en sistemas como el Órbigo, siendo necesarias actuaciones complementarias sobre la oferta (mejora de la regulación, infraestructuras, optimización de la gestión) y, en su caso, la adaptación de las dotaciones a la disponibilidad real de recursos.

En consecuencia, mantener las mismas dotaciones unitarias tras la modernización no supone una solución al problema estructural del sistema, ya que no altera el desequilibrio existente entre recursos y demandas. Por el contrario, el enfoque del EpTI se basa en que la modernización debe orientarse a:

- Reducir las presiones de extracción y mejorar la eficiencia global del sistema,
- Contribuir a la mejora de las garantías en un contexto de menor disponibilidad de recursos (cambio climático),
- Permitir, junto con otras medidas (infraestructuras y gestión), avanzar de forma progresiva en la corrección del déficit estructural.

Asimismo, el documento destaca que los incrementos de regulación mediante recrecimientos de embalses presentan, en general, efectos limitados sobre la garantía del regadío si no se actúa simultáneamente sobre la demanda, lo que refuerza la necesidad de una estrategia combinada de modernización, gestión de dotaciones y mejora de infraestructuras.

Por todo ello, la solución al déficit del sistema Órbigo, conforme a las directrices del EpTI, no puede basarse exclusivamente en la asignación de una dotación fija de referencia, sino que debe abordarse mediante un enfoque integrado que combine:

- La modernización de regadíos, como medida de eficiencia y adaptación,
- El incremento y optimización de la capacidad de regulación,
- Y la adecuación de las dotaciones a las disponibilidades reales del sistema, en coherencia con los objetivos de garantía y sostenibilidad.

Este planteamiento permite avanzar hacia un equilibrio estructural del sistema, garantizando simultáneamente la viabilidad de los usos agrarios y el cumplimiento de los objetivos ambientales y de planificación hidrológica.

Alegación 2.

Ya hemos manifestado en otras ocasiones que la zona regable de la Comunidad (UEL 2100171) no aparece digitalizada en como las unidades colindantes […]. Además, y dado el proceso de modernización, reconcentración parcelaria y modificación de características que estamos acometiendo en la actualidad, nos gustaría que estuviese perfectamente perimetrada y solicitamos que se subsane esta circunstancia.

En cuanto a los datos que figuran en la ficha, si tenemos en cuenta la inscripción del aprovechamiento al que hemos hecho referencia con anterioridad, con una dotación bruta de 8.000 m^3/ha y año para el riego de 1569 has, tendríamos un volumen demandado de 12,55 Hm3. Suponemos que en la ficha se nos está aplicando la dotación bruta que se suele aprobar en la Comisión de Desembalse para el Sistema Órbigo en las mejores condiciones de disponibilidad (figuran 6.000 m^3/ha y año), con lo que la asignación de recursos ascendería a 9,4 Hm^3. También solicitamos que se nos aclare si este es el motivo del resultado del volumen que aparece en la ficha.

Respuesta:

Con respecto a la cartografía de la UEL 2100171 - Presa de La Vega de Abajo que se puede visualizar en el sistema de información Mírame–IDEDuero, se indica que la precisión en la cartografía digitalizada

de las unidades elementales de demanda depende de la calidad de la información cartográfica que disponga la Comisaría de Aguas del Organismo, Unidad competente para emitir las concesiones de agua. Si bien, como indica el alegante, la Comunidad de Regantes de la Presa de la Vega de Abajo dispone de inscripción en el Libro de Aprovechamientos de Aguas Privadas con número de inscripción 40377 en la que se describe el número de hectáreas total y su distribución por municipios, a fecha de redacción de este escrito no se dispone de cartografía digital que identifique las parcelas concretas que constituyen la inscripción, por lo que la representación cartográfica se ha realizado de forma aproximada. En caso de disponer de mejor información en formato digital shapefile se podría valorar su modificación.

Con respecto a la información alfanumérica que se muestra en el sistema de información Mírame – IDE Duero para la UEL 2100171 - Presa de La Vega de Abajo, se debe aclarar que la inscripción en libro de aprovechamientos citada anteriormente establece la superficie regable (1.569 ha) y un caudal máximo (3.982,40 l/s) pero no establece una dotación por hectárea como indica el alegante. En consecuencia, se considera como dotación bruta la que se suele aprobar en la Comisión de Desembalse para el Sistema Órbigo en las mejores condiciones de disponibilidad (6.000 m^3/ha y año). Esto se refuerza con la información proporcionada en la primera alegación, donde se detallan los volúmenes suministrados en las últimas campañas de riego, con una dotación media resultante de 5.803 m^3/ha y año (inferior a la indicada en el escenario actual).

Alegación 3.

Nos adherimos a las alegaciones presentadas por la Asociación "FERDUERO" de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero.

Respuesta:

La respuesta a las consideraciones que hace FERDUERO se hacen en la sección de Respuesta a la POS N087.

4.48. Escrito de observaciones Nº 058

Presentado por: D. Jose Luis Antón.

E**n nombre** de la Comunidad de Regantes del Sector IV Trasvase Cea-Carrión (CCRR Tierra de Campos).

Alegación previa.

Que una primera aproximación al documento evidencia el absoluto desprecio, persecución y condicionamiento del mismo respecto a la agricultura de regadío para las aguas superficiales […] está por completo impregnado de un interés "ambientalista", por lo que nos oponemos a su aprobación.

La primera medida del nuevo ciclo de planificación debería pasar por el análisis del cumplimiento del anterior, donde se ejecutaron en torno al 22 por 100 de las inversiones previstas, […] solo puede decirse objetivamente que ha fracasado por su incumplimiento fundamentalmente en cuanto a las inversiones previstas.

Respuesta:

No compartimos la primera observación del alegante: no hay ningún lugar del EpTI donde se haga un juicio negativo sobre la agricultura de regadío como el que se manifiesta en el escrito de alegaciones. En la Ficha DU-06 (cuyo título es "Sostenibilidad y relevancia del regadío") se indica, respecto al regadío: *son muchos los efectos positivos del regadío: fija de población en el medio rural; aporta mayor diversificación de cultivos; aporta la mayor fuente de materias primas para la alimentación humana; las zonas con regadío tienen una densidad de población tres veces superior a las del secano; impulsa el empleo al generar 3,6 veces más de empleos que el secano; en las zonas de regadío se incorporan 3,5 veces más jóvenes al sector agrario que en el secano; finalmente las zonas modernizadas generan hasta 7,5 veces más inversión que las zonas de secano. Estos valores son importantes en una demarcación hidrográfica en la que la un 77% de su territorio se corresponde con municipios en riesgo de despoblación.*

El valor de producción del regadío asciende a 1.269 M€ y supone el principal motor económico en gran parte del medio rural de la demarcación. Además, el regadío tiene un papel fundamental para asegurar la autonomía alimentaria y reducir la inflación de la cesta de compra del consumidor y tiene un efecto arrastre en el conjunto de la economía, ya que es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. La contribución del sistema agroalimentario a la economía española en el año 2020 se puede estimar en aproximadamente un 10,60%. Esta elevada contribución supone que el sistema agroalimentario es el segundo generador de riqueza nacional tras el turismo.

Debido a la mayor productividad del regadío frente al secano, la agricultura de regadío es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. En el caso de la demarcación del Duero alrededor del 30% del valor económico de la producción agraria proviene del regadío al aire libre o invernadero, porcentaje que para el conjunto de España se eleva a alrededor del 70%. Por tanto, el EpTI no evidencia ningún desprecio, persecución o condicionamiento a la agricultura de regadío, sin menoscabo de poner de manifiesto que alguna de las presiones que genera sobre las masas de agua requieren ser corregidas.

Tal y como se pone de manifiesto en la Ficha DU-09, el grado de ejecución de las medidas a fecha 31 de diciembre de 2024 es del 24,5% de la inversión prevista, valor escaso cuando ha pasado un tercio del tiempo del ciclo de planificación. Siendo esto así, sin embargo, se observa que en determinados grupos de medidas el avance es superior a la media: así en materia de saneamiento y depuración la ejecución supera el 45% de la inversión, en abastecimiento un 37%, en medidas de gestión de inundaciones un 34%. Reconociendo que existe un importante retraso en la ejecución de las medidas, no compartimos la visión tan negativa que muestra la alegante.

Alegación 1.

Que en lo que respecta particularmente a esta Comunidad de Regantes, consultados los datos en la aplicación MÍRAME-IDEDUERO de ese organismo, hemos comprobado que esta Comunidad consta con una superficie regable asignada total de 2050 has. con derecho a riego, que está equivocado puesto que ***lo correcto son 2135 has****.*

Esta zona regable desarrollada en su totalidad debe tener garantizada el agua para su existencia. En su título concesional consta como compromiso firme de la Administración que al realizarse las expropiaciones para la construcción de Canal Cea-Carrión para dar servicio hasta 12.000 has. en el Bajo Carrión, se comprometía a desarrollar 7 has de riego por cada hectárea expropiada, y la concesión se otorgaría con aguas no reguladas del río Cea, más otra parte proveniente del río Esla a través del Canal Alto de Payuelos y el propio Canal del Trasvase. Y ESTO DEBE SEGUIR SIENDO ASÍ a pesar de las alegaciones que se hayan formulado por otros usuarios, porque constituían la condición de ejecución del propio Canal Cea-Carrión, debiéndose garantizar el agua a los nuevos regadíos ya desarrollados con prioridad sobre los pendientes de ello.

Respuesta:

La superficie que se considera en la elaboración del Plan Hidrológico para la Comunidad de Regantes del Sector IV Tierra de Campos (Unidad elemental de Demanda Agraria 2100630 - Sector IV Trasvase Cea-Carrión) es de 2.050 hectáreas, y el volumen demandado de 10.301.619 m^3/año ya que son los datos que figuran en su inscripción en el Registro de Aguas (Sección: A – Tomo nº: 127 – Hoja nº: 95 – Número: 22395) según Resolución de concesión de 23 de marzo de 2012 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Referencia Integra C-0360/2004) y resolución de Transferencia de Titularidad de 11 de mayo de 2018 (Referencia Integra TF-0110/2017). Esta es la superficie y volumen máximo anual que se considerará en el nuevo plan hidrológico. Si se iniciara una modificación o revisión concesional para amparar la superficie alegada, el nuevo plan hidrológico lo tendría em cuenta una vez que haya recaído resolución.

Alegación 2.

DU-01. Contaminación difusa.

El diagnóstico del documento refleja de forma adecuada la persistencia de problemas de nitratos y biocidas, pero no valora suficientemente los esfuerzos ya realizados por agricultores y ganaderos (modernización de regadíos, asesoramiento en fertilización, implantación de GIP).

La caracterización de presiones debería diferenciar con mayor claridad entre cultivos intensivos, cultivos leñosos, ganadería estabulada y extensiva, pues sus aportes de nutrientes y fitosanitarios son muy distintos.

Se aprecia un déficit en la cuantificación de los beneficios de las inversiones en modernización de regadíos y fertiirrigación: sin esos datos es difícil justificar medidas más restrictivas.

Respuesta:

Empezando por la última observación, como se ha comentado en la respuesta a la primera alegación, el EpTI deja de manifiesto la relevancia de la modernización del regadío para el logro de los objetivos ambientales y la mejora de la viabilidad de las explotaciones. Sin embargo, las presiones por contaminación difusa no se deben exclusivamente y en su mayoría al regadío donde el aporte de agua y el riesgo de lixiviado está controlado, sino al secano, a las aplicaciones de estiércoles y purines y a otras actividades como puede ser las descargas de aguas residuales urbanas no correctamente depuradas o los tratamientos biocidas en infraestructuras lineales, como se pone de manifiesto en la Ficha DU-01.

Estamos de acuerdo en que la modernización de regadíos permite aplicar nuevas tecnologías en el sector agrario, sin este tipo de infraestructuras sería imposible llegar a conseguir al riego de precisión, se maneja mejor el agua, y consecuentemente se evita que las aguas de retorno de riego sean menos y con menor carga contaminante, pero por el contrario el poder disponer de mejores infraestructuras da pie a siembras más densas, que se traducen en más rendimiento por hectárea y más necesidad de abonado, también ocurre que esto posibilita la obtención de dos cosechas en un mismo año, más cultivo por consiguiente más abonado, exceptuando los cultivos de leguminosas.

Las estaciones de medida existentes tanto en aguas subterráneas como en ríos y arroyos que drenan algunas de las zonas regables, siguen dando valores de contenido en sustancias nitrogenados por encima de los limites legalmente establecidos. Analizando datos procedentes de sistemas de control de otros organismos, SINAC, controles sanitarios, campañas de medición en campo realizadas con nuestros medios, siempre aparecen algunos valores altos en zonas de mayor actividad agroganadera.

La caracterización de la presión por contaminación difusa ya tiene en cuenta los tipos de cultivos y la carga ganadera en cada cuenca vertiente de la demarcación hidrográfica, ya que se utiliza para identificar las presiones y los impactos dos fuentes de información: las redes oficiales de control de calidad de agua superficial y subterránea y los balances que el MAPA realiza cada dos años sobre el excedente de nitrógeno que provoca esa carga de nutrientes en las aguas. Y esta última fuente de información utiliza la información sobre cultivos, los sistemas de cultivo y las prácticas agrarias y ganaderas en cada zona.

Los esfuerzos que realizan los agricultores son conocidos porque ya se encargan las organizaciones profesionales agrarias de realzarlos; sin embargo, pese a ese esfuerzo, el problema no va a menos por lo que debemos preguntarnos qué no estamos haciendo bien o qué debemos mejorar. También desde instancias europeas se advierte a España con sanciones millonarias en aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2024 que concluye que España no cumple la directiva de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. De hecho, una de las comunidades autónomas en la que la sentencia pone el foco es Castilla y León, territorio en la que

ejerce su actividad la asociación alegante, al no haber aplicado las medidas obligatorias ni lograr mejorar la calidad de las aguas. Dos años después de la sentencia, la Comisión Europea señala que solo 4 comunidades autónomas españolas no han tomado medidas, entre ellas Castilla y León. (Noticia La Gaceta de Salamanca, de 5 de junio de 2026). La amplia legislación existente para regular y minimizar este problema (entre otras, el Real Decreto 47/2022, el Real Decreto 1514/2009, relativo a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, o el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios) da idea de la complejidad para su resolución.

Alegación 3.

DU-01. Contaminación difusa.

Sobre los "trabajos de Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación terminados en marzo de 2025", se plantean las siguientes dudas:

- *¿Cuántos puntos se han muestreado cada campaña en la demarcación, tanto para aguas superficiales como para subterráneas?*
- *¿Este trabajo va a ser repetitivo? ¿Cuál es el programa/planing y el coste presupuestario anual destinado a él?*

Solicitamos una copia de los trabajos de "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación"

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, el trabajo "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación", se ha llevado a cabo por el MITERD en las campañas 2023 y 2024, duplicando analíticas en cada punto de muestro. En la demarcación hidrográfica del Duero, sobre 79 puntos de muestreo de aguas superficiales de la demarcación hidrográfica, atribuyen el 61% de la contaminación por nitratos a origen agrario (principalmente fertilizantes inorgánicos) y el 25% a mezclas con aguas residuales urbanas, el 14% restante de origen indeterminado. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, sobre 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, se muestra un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería.

Dado que el trabajo fue encargado por la Dirección General del Agua, del MITECO, puede dirigirse a ese departamento en petición del trabajo.

Alegación 4.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 1 (Reducción de excedentes y bandas de protección):

Las reducciones propuestas (hasta un 50% de excedentes o más) deben graduarse según tipología de cultivo, textura del suelo y riesgo de lixiviación, evitando fijar límites uniformes que puedan poner en peligro rentabilidad de cultivos con baja lixiviación (viñedo, olivar, almendro).

Las bandas de vegetación de ribera son útiles, pero su implantación debería ser voluntaria con compensaciones claras y planes de control de fauna (topillo campesino, conejos) para no crear nuevos problemas.

Respuesta:

La normativa del Plan Hidrológico, específicamente en su Apéndice 14.2, establece umbrales máximos de excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) que distinguen explícitamente entre cultivos herbáceos y leñosos, tanto en regadío como en secano. Para los cultivos leñosos (donde se incluyen viñedos, olivares y almendros), los valores de excedente permitidos son significativamente distintos y más ajustados a su fisiología que los de los herbáceos.

Las reducciones propuestas no son arbitrarias tampoco, sino que resultan de la aplicación del modelo PATRICAL, una herramienta de simulación del ciclo hidrológico y la calidad de las aguas distribuida espacialmente. Este modelo calcula el balance de nitrógeno teniendo en cuenta variables territoriales específicas como la recarga por lluvia, la textura del suelo (a través de los coeficientes de escorrentía y lixiviación) y el tipo de cultivo por término municipal. La zonificación se realiza a nivel de "sectores" de masas de agua, lo que permite adaptar la exigencia a la realidad geomorfológica y al riesgo real de cada zona.

La propuesta sobre la voluntariedad de las bandas de protección parece razonable y se abundará sobre ella en el presente ciclo de planificación. Se debe indicar, por aclarar, que la vegetación de ribera puede constituir un refugio para distintas plagas, pero también para sus depredadores, que necesitan espacios donde establecer zonas de cría y refugio para desarrollarse.

Alegación 5.

Respecto al tema importante DU-01, se comparte el fomento de biofertilizantes, bioestimulantes y control biológico, pero se requiere apoyo técnico y financiero estable, así como validación agronómica local antes de exigir sustitución de fertilizantes tradicionales.

Debería contemplarse un periodo transitorio de al menos 5-7 años para la adopción realista de estas prácticas.

Respuesta:

Las propuestas que hace la Ficha DU-01 para la alternativa 2 son propuestas que pretenden orientar la decisión de las autoridades competentes en materia de investigación y transferencia de tecnología para abordarlos y movilizar la inversión necesaria para esta mejora de conocimiento. Pero para impulsar esas decisiones es necesario que los sectores implicados (agua, agricultura, medio ambiente, …) orienten en esa línea y confirmen esta posible mejora. No se pretende establecer como obligatorio

el uso de estos productos en tanto se justifique su eficacia y sean competitivos económicamente, para lo cual se necesita ese trabajo de investigación y transferencia.

Alegación 6.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 3 (Depuración urbana):

Es positivo que se incluyan fuentes urbanas, pero el documento debería cuantificar su aportación relativa al problema global para no sobrecargar sólo al sector primario.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, las fuentes de contaminación difusa son varias y entre ellas están las descargas urbanas no adecuadamente tratadas. Sin embargo, sin negar su contribución al problema general, el trabajo de estudio del origen de la contaminación nitrogenada en las aguas de la demarcación hidrográfica al que se alude en la respuesta a la alegación 3ª, el origen del nitrógeno encontrado en el agua es de origen agrario en el 61% de las muestras de agua superficial y en el 55% de las muestras de agua subterránea, lo que pone de manifiesto que la mayoría de los nitratos presentes en el agua tiene un origen agrario.

Alegación 7.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 4 (Plantas de biogás):

La valorización de purines es esencial, pero se precisa planificación territorial: ubicación de plantas, logística de recogida y retorno del digestato tratado, evitando concentraciones que generen rechazo social.

Respuesta:

Estamos de acuerdo con parte de lo que se expone en la alegación, en la ficha se propone como alternativa, porque su correcto manejo genera menos problemas ambientales que las prácticas de aplicación de los purines en bruto como se está haciendo en la actualidad. No obstante, como se indica sería necesaria una planificación territorial de esta nueva actividad. Hasta la fecha la autoridad competente (comunidad autónoma) no nos ha trasladado ningún criterio al respecto.

Alegación 8.

La dispersión competencial señalada en la Ficha DU-01 del EPTI requiere de mecanismos concretos:

- *Convenios entre CHD y Consejerías de Agricultura para seguimiento conjunto.*
- *Creación de mesas de trabajo permanentes con organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes.*
- *Inclusión de Juntas Agrarias Locales en la difusión y control de buenas prácticas.*

Antes de aprobar medidas que impliquen reducción de fertilización o prohibición de biocidas, debe elaborarse un análisis coste-beneficio que contemple:

- *Pérdidas de producción y costes de adaptación.*
- *Impacto en empleo rural y en industrias de insumos.*

- *Ahorros ambientales y beneficios para el abastecimiento de agua.*

Respuesta:

La cooperación entre administraciones y la difusión de la problemática de la contaminación difusa son aspectos relevantes para buscar las soluciones. De hecho, se ha avanzado en los últimos cinco años en la percepción del problema y el convencimiento de que se debe ser proactivo en la búsqueda de soluciones, a lo que ha contribuido la visibilidad de problema mediante el expediente sancionador a España por incumplimiento de la Directiva de nitratos y por las medidas limitantes que se incluyen en los planes hidrológicos. También las organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes han desarrollado actividades formativas para sus asociados poniendo el foco también en este problema de la contaminación difusa: ya es normal que en las reuniones técnicas que estas entidades organizan se empiece a hablar del problema del exceso de nutrientes no solo como un problema económico de rentabilidad de explotación o productividad de los cultivos, sino también como un modo de no perjudicar al medio ambiente.

Dicho esto, los convenios a los que se refiere la alegación no pueden pretender eludir las competencias de cada administración en esta materia, en la que el seguimiento de la contaminación en agua corresponde a la administración del agua y la implantación de medidas corresponde a la administración ambiental y agraria.

La Ficha DU-01 en la alternativa 1 evalúa el impacto de la reducción de excedentes de sustancias nitrogenadas en función de la zona de la demarcación hidrográfica donde nos encontremos. Esta alternativa 1 *supone la máxima reducción posible de los excedentes de nitrógeno (no de la aplicación) compatible con unas producciones agrarias óptimas. (…). En este análisis se identifica que, por ejemplo, una reducción de cerca del 35% de la fertilización implicaría una reducción del 50% de los excedentes y una reducción del 56% de la aplicación de fertilizantes una reducción del 80% de los excedentes de nitrógeno.*

Y se analiza en la Tabla 1 de la Ficha el efecto de la reducción de excedentes sobre el territorio:

Reducción de aplicación de N	Reducción de excedentes	Superficie sector (km^2)
10%	*25%*	*3.227*
20%	*50%*	*19.629*
40%	*80%*	*3.872*

Esta información podría servir de ayuda a la Administración autonómica competente, en esta alternativa, para reforzar los planes de actuación de manera que se puedan limitar la aplicación de nutrientes de manera zonal de forma que se asegure que los excedentes sean inferiores a los contemplados en el citado apéndice 14.2. Esto podría implementarse de diversas formas:

- *Mediante la reducción de las cantidades máximas de N por hectárea en los planes de actuación de las zonas vulnerables;*
- *Mediante la reducción de las cantidades a aplicar de nutrientes fuera de las zonas vulnerables (de acuerdo con los criterios de Patrical) a través de normas de condicionalidad vinculadas a aumentos de las ayudas PAC.*

- *Mediante la aplicación de tributos a gravando el exceso de N adquirido en el mercado sobre la dosis contemplada en los planes de actuación.*

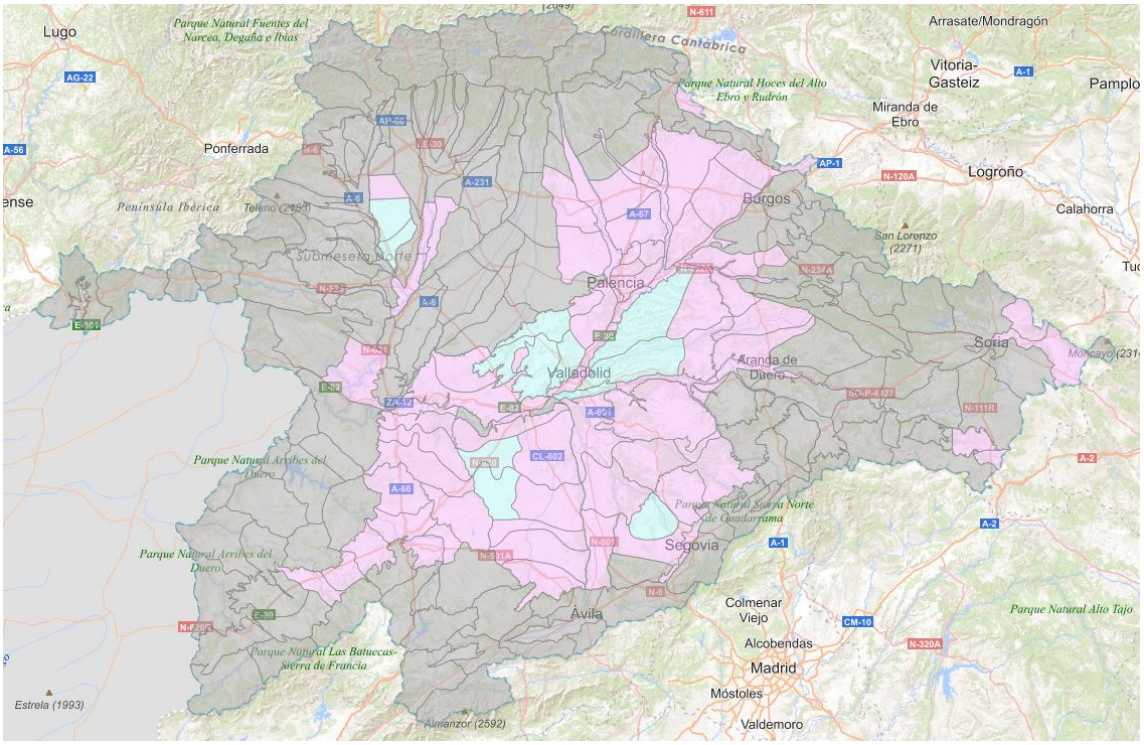
Alegación 9.

Se proponen algunas medidas en el tema importante DU-01:

- *Ajustar los límites de aplicación de nitrógeno según balance real de cada cultivo y zona (considerar coeficientes de absorción y mineralización).*
- *Priorizar el control y mejora de puntos de vertido urbano e industrial antes de imponer nuevas restricciones al abonado agrícola.*
- *Incluir líneas de ayuda específicas para:*
    - *Implantar bandas de protección voluntarias y mantenerlas.*
    - *Transición a biofertilizantes y control biológico.*
    - *Asesoramiento profesional y agricultura de precisión.*
- *Potenciar el uso de herramientas de gestión de nutrientes (cuadernos digitales, sensores de N en suelo/planta).*
- *Favorecer acuerdos de economía circular entre plantas de biogás, explotaciones ganaderas y agricultores para el uso seguro del digestato.*
- *Seguimos demandando al MITERD y a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la realización de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario mediante el estudio y muestreo significativo de parcelas de riego por gravedad, de riego modernizado y parcelas en las que ya se esté utilizando la fertirrigación para poder sacar conclusiones basadas en datos sobre la mejora que implica la tecnificación y digitalización del regadío en este apartado.*

Respuesta:

Como se indica en el EpTI y también en el Plan Hidrológico vigente, los límites del excedente de sustancias nitrogenadas se han hecho a partir de la presión identificada en forma de contenido de nitratos en las agua superficiales y subterráneas. Y esos límites se han fijado en forma de sectores territoriales, tal y como aparece en la imagen (en rosa la reducción del excedente sería del 25%, en azul la reducción del excedente sería del 80% del actual y en gris no sería necesaria esa reducción):



La traslación de la reducción de excedentes en cada sector a los cultivos presentes en el mismo, requiere un trabajo de detalle de los organismos competentes en materia agraria que pueden hacer esa distribución con criterios más técnicos que los que puede hacer el organismo de cuenca. De hecho, esta distribución de sectores tiene como fin ofrecer a la autoridad competente una información con la que realizar el análisis que solicita la alegante.

Sin duda es necesario mejorar el control de las descargas de las EDAR urbanas e industriales, sobre todo de poblaciones pequeñas. Pero como pone de manifiesto la Ficha, el análisis de origen de la contaminación difusa por técnicas isotópicas concluye que el origen de la contaminación en la mayoría de los puntos de muestreos es el agrario al encontrar en más de la mitad de las muestras nitrógeno de origen inorgánico y de residuos animales (61% de las muestras en aguas superficiales y 55% en aguas subterráneas). Por tanto, parece lógico que pongamos el objetivo en cómo reducir esos excedentes.

Coincidimos con la alegante en que bandas de protección, asesoramiento y uso de nuevos productos deben ser medidas de carácter voluntario y adecuadamente compensadas. Y pensamos que el marco financiero de la PAC es la herramienta adecuada para ello. Lógicamente para que esto sea factible es necesarios que la administración competente en esta materia tenga interés en dotar a estos servicios ecosistémicos de la financiación adecuada.

Las herramientas de gestión de nutrientes ya son obligatorias a partir de la entrada en vigor del Real Decreto de nutrición sostenible de los suelos, por lo que esperamos que esta medida contribuya a la reducción de la contaminación cuando tenga el suficiente recorrido, ya que no será inmediato. El seguimiento de la contaminación en las redes de control de agua nos dará información sobre su eficacia.

El uso del digestato procedentes de plantas de biogas alimentadas con purines animales en lugar de la aplicación directa al suelo puede ser una mejora en la reducción de la contaminación siempre que haya transparencia en la aplicación, distribución y seguimiento y no supongan una mayor aportación de

nutrientes al suelo. De hecho, la Ficha DU-01 señala que, para *el caso concreto de Castilla y León, que supone el 98,26 % de la demarcación del Duero, para el año 2021, 61.186 tn de nitrógeno de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 359.013 tn de N. Si se eliminase totalmente el desecho ganadero mediante plantas de biogás y no se sustituyese la fertilización orgánica en cultivos por inorgánica, se reduciría en un 17% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso del 50% de los excedentes de nitrógeno.*

Para el caso del fósforo y Castilla y León, para el año 2021, 13.736 tn de P de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 58.261 tn de P. En este caso, la eliminación del desecho ganadero mediante plantas de biogás supondría que se reduciría en un 23% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso superior al 50% de los excedentes de fósforo.

La eliminación de la fertilización orgánica mediante revalorización y transformación en biogás de la deyección ganadera, sin sustitución por fertilización inorgánica, permitiría cumplir los objetivos de la UE de reducir un 20% el uso de fertilizantes y reducir un 50% los excedentes antes de 2030.

Respecto a la demanda de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario bajo distintos sistemas de regadío, consideramos que es un trabajo que no está hecho pero que no corresponde al MITERD al haber un ministerio y unas consejerías autonómicas competentes en materia agraria.

Alegación 10.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Estando de acuerdo en que debe buscarse en todo momento un aprovechamiento sostenible del recurso que mantenga las masas de agua, ya que esta es la forma de garantizar la seguridad de las explotaciones agrícolas, se deben fijar uno objetivos a alcanzar con unos valores definidos y razonables que garanticen la actividad económica que se viene desarrollando. Considerar la serie histórica de la piezometría de la masa como dato de partida a la hora de determinar las acciones a realizar supone definir un objetivo a alcanzar erróneo, enmascarar la realidad actual de la masa y no otorgar a las medidas que el usuario está llevando a cabo (digitalización, control de las extracciones, gestión por parte de las comunidades de usuarios, etc) la importancia que tienen. [..]

De la misma forma que se tiene un control sobre el uso del recurso, creemos necesario que se hagan estudios hidrogeológicos de detalle en los que, de forma pública y accesible a todos los interesados, se analice la situación real en estas masas de agua de las aportaciones al acuífero y su tasa de renovación […].

La mitigación de los efectos del cambio climático que se plantean sobre las masas de agua subterránea, se debe plantear, no desde la restricción de las extracciones, sino desde el control de las mismas y la ejecución de una serie de infraestructuras de reserva o acumulación que de forma progresiva permitan la sustitución de bombeos y otorguen garantía a la actividad económica en situaciones de escasez sin revertir la dinámica natural del acuífero.

Respecto a las alternativas que se plantean en el documento, estamos totalmente en desacuerdo con el núcleo central de todas ellas: el mantenimiento de las medidas normativas del plan hidrológico vigente para el nuevo ciclo de planificación, sobre todo en lo que se refiere a los artículos 33. [..]

Respuesta:

Los objetivos para las masas de agua subterránea son alcanzar el buen estado y evitar el deterioro, tal y como establece el artículo 4 de la Directiva marco de al Agua y el artículo 40 del TRLA. Ese buen estado para el objeto de la ficha DU-02 es que las extracciones no superen a los recursos naturales, simplificando. Este objetivo además redunda en beneficio de los usuarios del agua ya que el buen estado contribuye a un aumento de los niveles piezométricos que suponen menos costes de bombeo. Por tanto, el objetivo es claro. Y ante posibles colisiones de este buen estado con los usos, la propia directiva en su artículo 4(5) señala cuáles son los requisitos que deben verificarse:

a) que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende el uso del agua no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor que no suponga un coste desproporcionado;

b) que la administración proponente (en este caso la comunidad autónoma) garantice para las aguas superficiales, el mejor estado ecológico y estado químico posibles teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación,

c) que la administración proponente para las aguas subterráneas garantice los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación;

d) que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.

Tal y como se plantea la alegación no queda claro si estos criterios se garantizan.

Conocer la realidad de las reservas subterráneas de agua es un aspecto clave en la adecuada gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Para ello el seguimiento de los casi 500 piezómetros de la cuenca ofrece una información muy valiosa. Gracias a esta información se concluye que en la actualidad la explotación del agua supone que en las masas de agua en mal estado cuantitativo se extrae entre un 10 y un 14% más de lo que se recarga anualmente por medios naturales, es decir, sacamos algo más agua de la que la naturaleza es capaz de reponer.

Como consecuencia los niveles del agua subterránea descienden ligeramente, incrementando los costes de producción del sector agrícola y poniendo en serio peligro la supervivencia del modelo socioeconómico actual y del entramado ecológico de la zona. Todo esto sin olvidar que, en las dos últimas décadas del siglo pasado, estas masas sufrieron un descenso generalizado en sus niveles de agua de unos 30 metros, situación que ha repercutido en la merma de caudales en los ríos que se asientan sobre estas masas.

Por todo ello la Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto en marcha estudios en colaboración con distintos organismos como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Dirección General del Agua (DGA), para seguir mejorando en el conocimiento del estado actual de la masas de agua subterránea y proponer medidas que permitan la recuperación paulatina de las mismas, gracias al ahorro de agua con una correcta gestión agrícola y con medidas de recarga artificial, sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales, done sea posible, se mencionan este tipo de actuaciones

porque están implantadas en algunas zonas de estas masas con resultados esperanzadores. De todas formas, en la ficha ya se proponen actuaciones de este tipo y otras. Toda esta información se vuelca en los planes hidrológicos, cada seis años, y en los informes de seguimiento cada año; además los datos de piezometría y calidad de las aguas subterráneas, así como los balances están disponibles en la base documental Mírame-IDEDuero que se puede consultar por cualquier ciudadano en la web de la Confederación (https://mirame.chduero.es/chduero/public/home).

No podemos compartir la petición de la alegante de eliminar todas las restricciones y limitaciones sobre las masas de agua en mal estado cuantitativo y, como alternativa, no poner ningún límite a nuevos usos del agua ya que, de aceptarlo, supondría no solo no alcanzar el buen estado sino también contribuir al deterioro adicional y, de forma añadida, perjudicar a los usuarios que ahora disponen de derecho vigente y que esperan la protección administrativa de su derecho.

Alegación 11.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Para la configuración del nuevo plan hidrológico se propone:

1.- La derogación de los artículos 33 y 34 de la actual normativa del plan hidrológico vigente y la reformulación de aquellos artículos relacionados para permitir la novación de todos los derechos inscritos que estén en explotación.

2.- Permitir la explotación de los aprovechamientos otorgados (incluso el otorgamiento de otros nuevos) dentro de aquellos espacios naturales o zonas protegidas conforme lo establezca la autoridad ambiental y con las características que documento de gestión correspondiente determine.

3.- Ejecución de aquellas infraestructuras que permitan la recarga de las masas de agua o la diminución de la presión sobre las mismas y estudios de detalle de determinadas zonas con mayores dificultades con la finalidad de dar soluciones que permitan mantener la actividad económica que se viene desarrollando.

4.- Control de las extracciones en toda la cuenca en la misma medida y con la misma intensidad que se exige a las CUAS.

5.- Revisión de las dotaciones brutas comarcales, su asignación y su configuración.

6.- Incentivar económicamente al usuario en la adopción de medidas e instrumentos tendentes a la mejora en el control de las extracciones o programas de digitalización que participen en el conocimiento y caracterización de la masa de agua.

7.- Establecer mecanismos de transferencia del conocimiento generado a nivel técnico y científico como programas de formación del usuario, plataformas de asesoramiento o redes de información, y establecer algún órgano que permita la participación del usuario de aguas subterráneas en la toma de decisiones que afectan a la cuenca.

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación anterior, los artículos 33 y 34 constituyen un régimen que permite alcanzar el buen estado de las masas de agua y evitar el deterioro. De una forma

u otra, estos criterios se vienen aplicando en la demarcación hidrográfica desde 2010 y son parte de la explicación de que la tendencia descendente de la piezometría identificada en los años 1980 a 2008, se haya suavizado e incluso estabilizado.

En cuanto a lo que manifiesta el alegante de la prohibición de aprovechamientos otorgados, hasta la fecha no se ha prohibido su uso siempre que se ajusten a la legalidad. El otorgamiento de nuevos aprovechamientos en masas de agua en mal estado cuantitativo, entendemos que no contribuye en absoluto a una mejora de la situación, ni se ajusta a un uso racional, que asegure el futuro del regadío en dichas masas, sería como incentivar la vuelta a la situación de los años 80 y 90 del siglo pasado, con descensos del nivel piezométrico de 2 y 3 metros por año.

La recarga artificial de acuíferos es una práctica que se lleva haciendo es esta cuenca desde hace más de 20 años, las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 la Confederación encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos, teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, como aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, nos parece una alternativa a tener en cuenta para el fin que propone el alegante, por lo que ya se contempla como medida en la alternativa 3 del EpTI, a la espera de que la autoridad competente pueda validarla y asumirla teniendo en cuenta todos los condicionantes: ubicación de estas infraestructuras, su proximidad a cauces con recurso suficiente, los costes de las obras, su financiación, y los costes de explotación y energía, pues la mayoría han de llenarse con bombeos,…; en definitiva muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

La instalación de contadores para el control de las extracciones de agua está regulada según La normativa española que obliga a todos los aprovechamientos de aguas a disponer de sistemas de medición de caudales, según el TRLA (art. 55.4) y el Reglamento del DPH. Esta obligación se ha reforzado con la Orden TED/1191/2024, que impone contadores homologados y control electrónico con envío de datos. Los equipos deben cumplir normativa metrológica y adaptarse al tipo de captación. Como se ha explicado en diversos foros, esta Orden, así como la que ha sustituido de 2009, permiten que más del 80% de la demanda de agua de la cuenca pase por sistemas de control. Evidentemente los contadores de la categoría 1ª, que suponen poco volumen a escala de cuenca (menos del 20%) pero número muy alto, van progresivamente instalándose y remitiendo información.

Las dotaciones brutas máximas anuales aplicables en los cultivos por comarcas agrarias, que figuran en el Plan Hidrológico, están basadas en datos obtenidos de publicaciones de organismos públicos como son las distintas Consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, del Ministerio de Agricultura, y antes de su aprobación se someten a información pública, como todo el contenido del Plan Hidrológico. En el Anejo 5 del Plan Hidrológico vigente se explica el procedimiento para su cálculo: cálculo de la dotación neta a partir de las necesidades de los cultivos obtenidas de InfoRiego y de la distribución de los cultivos a partir de las declaraciones de la PAC de los años 2013-2019; cálculo de la

eficiencia global: calculada como el producto de las eficiencias de transporte, distribución y aplicación; cálculo de la demanda bruta como el producto de la dotación neta por la superficie asignada entre la eficiencia global. Consideramos que es una información adecuada al proceder de fuentes oficiales y no sujeta a apreciación subjetiva.

Respecto a incentivar económicamente la instalación de contadores, el artículo 3 de la Orden TED/1191/2024 es muy clara al respecto al señalar que, en *todos los aprovechamientos de aguas, **los titulares están obligados a instalar y mantener un sistema de control volumétrico** que permita la medición de los volúmenes de agua captados, junto con un sistema de registro y almacenamiento.*

La Confederación no tiene competencias en materia de difusión y transferencia de tecnología. Normalmente da cuenta de los trabajos que realizad en el ámbito del dominio público hidráulico, seguridad y gestión de infraestructuras y planificación hidrológica en los foros ordinarios que otros agentes organizan: congresos de seguridad de presas, congresos de comunidades de regantes, jornadas de restauración de ríos, … Por otra parte, en el ámbito de las CUAs, anualmente se celebran reuniones técnicas de la Confederación con sus presidentes para aclarar conceptos y fomentar las buenas prácticas. Lógicamente no se invita a esas sesiones a las comunidades de regantes de aguas superficiales como la alegante que ya tiene su ámbito de representación en la Junta de Explotación Pisuerga-Bajo Duero.

Los usuarios del agua participan en la gestión de la cuenca a través de los órganos que están establecidos normativamente. Así el artículo 26 del TRLA identifica como órganos de gestión, en régimen de participación, las Juntas de Explotación. Su finalidad es coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las masas de agua cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Este es el marco en que los usuarios de aguas subterráneas pueden participar; de hecho, en la alternativa 1 de este tema importantes se establece como una de las medidas que podrían ponerse en marcha.

Alegación 12.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Ya hemos dejado claro en la introducción cuál es la situación demográfica y económica de nuestras zonas rurales, por lo que cualquier medida que se aplique en mejorar los problemas contenidos en la ficha no debe empeorar la situación descrita. Si se mantiene la consecución de ese objetivo, no nos oponemos a que se puedan adoptar medidas que puedan mejorar la conectividad fluvial (longitudinal, lateral y vertical) que mejore el funcionamiento de los ecosistemas.

Del análisis de la ficha parece desprenderse una apuesta prioritaria por modelos intensivos de naturalización fluvial, basados en esquemas de restauración ecológica donde el cauce aparece acompañado por bosque de galería y bandas de vegetación herbácea en ambas márgenes, favoreciendo así la conectividad longitudinal y transversal de los flujos hídricos y sedimentarios [..] dicho enfoque puede resultar excesivamente homogéneo si no se tienen suficientemente en cuenta las particularidades geomorfológicas, históricas y territoriales de numerosos cauces [..]. Existen determinados tramos del Dominio Público Hidráulico que, en realidad, constituyen cauces profundamente transformados por la acción humana a lo largo de siglos, especialmente sobre antiguas llanuras lacustres o cuencas endorreicas sedimentarias desarrolladas durante el Pleistoceno.

En numerosos casos, los cauces actuales responden a procesos históricos de excavación y drenaje artificial desarrollados con el objetivo de desecar zonas inundables o lagunares y aprovechar agronómicamente las fértiles vegas originadas por procesos de colmatación sedimentaria. [..]. Por ello, en determinados sistemas hidrológicos altamente antropizados, la recuperación de modelos teóricos de naturalización podría requerir alteraciones territoriales de enorme magnitud, incompatibles en muchos casos con la realidad física actual, con los usos consolidados existentes y con los derechos legítimamente adquiridos sobre los terrenos adyacentes.

Asimismo, debe tenerse presente que sobre los terrenos colindantes con los cauces concurren frecuentemente derechos consolidados, singularmente derechos de propiedad privada, cuya eventual afección exigiría las correspondientes compensaciones y una adecuada justificación basada en criterios de proporcionalidad.

Respuesta:

Se agradece el comentario sobre la buena disposición para la mejora de los ecosistemas fluviales.

La normativa actual apuesta por una restauración fluvial que lleve a los ríos, lagos y humedales a una situación lo más similar a su situación original previa a la intervención humana. Esto permite crear entornos más resilientes a la contaminación y más seguros ante eventos extremos como inundaciones, entre otros, con las consiguientes ventajas para los seres humanos. Por situación original no se entiende una situación uniforme, sino adaptada a cada tipo de río. A modo de ejemplo, aquellos ríos con hidrología extrema no tienen asociado un bosque de ribera ya que periódicamente las avenidas lo arrastran, permitiendo únicamente la presencia de individuos jóvenes. Para estos ríos la existencia de una gran presencia de bosque de galería es síntoma de alteración del régimen hídrico, lo cual suele ocurrir, por ejemplo, aguas debajo de los embalses.

Si bien la alteración de los cauces se lleva haciendo desde antiguo, ha sido en el siglo XX donde se han producido las grandes actuaciones de drenaje y encorsetamiento del río. Las imágenes del vuelo americano del 56 así lo ponen de manifiesto, ya que muestran un grado de naturalidad de los cauces muy distinto al actual.

De acuerdo con la normativa y los documentos técnicos de planificación, una masa de agua superficial se puede designar como muy modificada (HMWB, por sus siglas en inglés) cuando, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza. Este "cambio sustancial" se entiende como una modificación de sus características hidromorfológicas que impide que la masa alcance el buen estado ecológico. Esto debe analizarse minuciosamente mediante distintas revisiones tasadas en la normativa, y así se ha hecho en los sucesivos planes hidrológicos. En el último, a modo de ejemplo, se han designado 186 masas de agua río muy modificados y se van a volver a revisar en este ciclo de planificación.

Cabe mencionar también que la propiedad privada no puede prevalecer sobre terrenos que, por sus características geofísicas, forman parte del cauce natural. La propiedad privada en zonas colindantes a ríos no es absoluta; está intrínsecamente limitada por la ley para garantizar la seguridad pública y la protección ambiental, como pone de manifiesto el tenor de los artículos 6 y 9 del RDPH, entre otros. La jurisprudencia del Tribunal Supremo avala que la Administración proteja el DPH sin indemnizaciones

automáticas, ya que actuar sobre el cauce natural es una obligación legal para alcanzar el buen estado de las aguas, objetivo que constituye un interés público superior.

Alegación 13.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Parece razonable admitir la posibilidad de actuaciones de gestión activa y mantenimiento de la vegetación de ribera, aplicando criterios técnicos y silvícolas semejantes a los utilizados en otras masas forestales, especialmente cuando dichas actuaciones resulten necesarias por motivos hidráulicos, de seguridad, sanitarios o de conservación. […]

Se considera necesario que el instrumento de planificación hidrológica contemple la posibilidad de autorizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales, teniendo en cuenta sus características geomorfológicas, los usos preexistentes y los intereses legítimos concurrentes. […].

Especial atención merece la proliferación del carrizal y otras especies invasoras o expansivas, cuyo desarrollo puede reducir significativamente la capacidad hidráulica de desagüe y alterar el equilibrio ecológico de determinados tramos fluviales. Por ello, se considera conveniente que el futuro instrumento de planificación contemple expresamente medidas de control y gestión activa de este tipo de formaciones vegetales cuando existan razones hidráulicas, ambientales o de seguridad que así lo aconsejen.

Respuesta:

Los criterios técnicos y silvícolas utilizados en otras masas forestales no tienen por qué se similares a los que aplican a la vegetación de ribera, al ser el río un elemento diferenciador en su creación y modelado. Las mejores actuaciones para la mejora de las condiciones hidráulicas, de seguridad, sanitarias o de conservación, son las de restauración del río a su situación original, en la que su configuración, trazado, brazos secundarios y llanura de inundación permitan la laminación de avenidas o el filtrado de nutrientes y otras sustancias nocivas para la salud.

Se está de acuerdo en realizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales. Así se hace, de hecho. No se abunda más ante la generalidad del comentario.

Independientemente de que en alguna circunstancia puedan aplicarse medidas de control activo de especies invasoras, se debe recordar que la restauración de la conectividad longitudinal y lateral, junto con la recuperación de la morfología natural del cauce, permite que el ecosistema funcione mediante mecanismos de control natural frente a especies invasoras. Un río con un hábitat naturalizado favorece el mantenimiento de las comunidades biológicas autóctonas, dificultando que las especies invasoras desplacen a los endemismos locales. La alteración del régimen natural de los ríos y la creación de aguas estancadas (paso de régimen lótico a léntico) son precisamente los factores que facilitan la proliferación de especies exóticas.

Alegación 14.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Respecto a las obras de cruce aéreo o subterráneo de infraestructuras sobre cauces públicos, se considera necesario que el nuevo Plan Hidrológico otorgue un mayor peso a los criterios técnicos e hidráulicos en la evaluación de las actuaciones proyectadas, evitando que el condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada. […]

En relación con las autorizaciones de obras en el Dominio Público Hidráulico, se considera igualmente conveniente admitir la aplicación del criterio de escala para el cálculo hidrológico de avenidas mediante el Método Racional Simplificado, así como permitir simulaciones hidráulicas basadas en levantamientos topográficos específicos realizados para cada actuación.

Finalmente, se considera de gran interés que la Confederación Hidrográfica del Duero establezca, de forma previa y suficientemente clara, criterios técnicos orientativos para la tramitación de autorizaciones relativas a puentes, pasarelas y otras obras sobre cauces.

Respuesta:

Los condicionantes ambientales son un requisito que establece la normativa actual. No se la idea por la que el "condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada" en las actuaciones en cauce.

El uso del método racional simplificado para cálculos hidráulicos en la planificación se incluye en el Anexo XI del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Se remite a esta norma y no al plan hidrológico el resto de observaciones presentadas sobre autorizaciones de obras en cauce.

Alegación 15.

DU-05 Gestión del riesgo de inundación

Se considera razonable que el instrumento de planificación permita incorporar estudios hidrológicos e hidráulicos de mayor detalle, sustentados en levantamientos topográficos específicos, modelizaciones bidimensionales, campañas de campo y análisis hidráulicos adaptados a las características concretas de cada emplazamiento.

Este criterio de mayor precisión técnica debería poder extenderse también a la determinación de caudales de avenida, permitiendo ajustar los cálculos hidrológicos a las características reales de cada cuenca vertiente y evitando la aplicación automática de metodologías generales cuando existan estudios específicos suficientemente justificados

Demandamos que cualquier actuación que se plantee, no cause perjuicio a la actividad económica implantada en el territorio.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, y sin perjuicio de lo ya señalado en este documento acerca del alcance propio del ETI, procede indicar que las cuestiones planteadas presentan indudable relevancia desde la perspectiva del adecuado diagnóstico del riesgo y peligrosidad de las inundaciones. No

obstante, será en fase de redacción del PGRI cuando se revisen los modelos hidráulicos para establecer las medidas adecuadas para reducir el riesgo de las inundaciones.

Las modelizaciones hidráulicas e hidrológicas están en constante actualización y singularmente en las tres fases de elaboración de los de PGRI: fase de evaluación preliminar del riesgo, fase de elaboración de los mapas de peligrosidad y fase de plan de gestión del riesgo. La cartografía de peligrosidad del SNCZI simula escenarios estadísticos de eventos extraordinarios, como son las avenidas de media y baja probabilidad (100 y 500 años de periodo de retorno). El SNCZI exige que las simulaciones hidráulicas para delimitar el riesgo se realicen sobre la base del terreno en condiciones actuales ofrecidas por el modelo digital del terreno (MDT), manteniendo infraestructuras como azudes y puentes tal y como existen hoy. Ese MDT se obtiene por tecnologías suficientemente maduras que, con la previa revisión a su aplicación, ofrecen una información exacta y muy adecuada para el objetivo final.

Las medidas que el PGRI establezca tratarán de limitar los perjuicios a las actividades actuales; no obstante puede darse el caso de que haya actividades ubicadas en zonas inundables que cuenten con autorizaciones previas a la entrada en vigor del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y de los artículo 9 y 14 del RDPH; para ellas será muy difícil que cualquier medida que se establezca en el PGRI no entrañe perjuicio que, por otra parte, ya le causa la propia ubicación.

Alegación 16.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Las Comunidades de Regantes consideran positivo que el EPTI reconozca la relevancia estratégica del regadío en la cuenca del Duero […].

En su planteamiento identifican el problema principal que supone la escasa o nula regulación artificial en sistemas como el Carrión, el Órbigo, el subsistema Tuerto o el Cega. No obstante, el documento presenta un enfoque excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales, sin incorporar adecuadamente la dimensión económica, social y territorial del regadío.

No se puede achacar la reducción de aportaciones principalmente a los efectos del cambio climático. No podemos establecer un horizonte de cambio climático referido al año 2045, que resulta poco fiable.

Respuesta:

Los planes hidrológicos tienen que cumplir dos objetivos principales que generalmente entran en conflicto: por un lado, conseguir el buen estado o el buen potencial de todas las masas de agua y, por otro, satisfacer las demandas cumpliendo los criterios de garantía. En otras palabras, se trata de hacer un uso sostenible del recurso, equilibrando la protección de los ecosistemas relacionados con el medio hídrico con la satisfacción de las demandas. En el estudio de alternativas de las fichas DU-06 y DU-07 del EpTI, analizamos medidas que disminuyen la presión por extracción de agua (uso más eficiente del agua por modernizaciones) y medidas de mayor disponibilidad de recurso (aumento de regulación). Por este motivo, pensamos que el enfoque del EpTI no está excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales.

Efectivamente en el EpTI se reconoce la relevancia estratégica del regadío y creemos que su dimensión económica, social y territorial está debidamente incorporada.

Estamos de acuerdo en que la reducción de aportaciones no es debida solamente a los efectos del cambio climático. Probablemente también existe reducción de aportaciones por los cambios en los usos de suelo, pero no tenemos información suficiente que nos permita evaluar la magnitud de esta reducción.

El establecimiento de un horizonte de cambio climático en el que se modelan demandas futuras y recursos naturales afectados por cambio climático para calcular sus balances es un requisito de la legislación (Reglamento de Planificación Hidrológico, art.11.4 y art. 21.4). En los planes de 4º ciclo el horizonte de cambio climático corresponde al año 2045 pues se incrementa en 6 años el del plan vigente, que era 2039.

Alegación 17.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Resulta incuestionable que las modernizaciones llevan implícita una reducción del uso del agua, por lo que no se deben añadir mayores presiones sobre el uso del agua. Las inversiones llevadas a cabo también por los propios agricultores están siendo muy importantes, además de la recuperación de costes que vía tarifas de utilización del agua ya contribuyen.

La modernización no debe utilizarse como instrumento indirecto de reducción de concesiones ni de actividad agraria, sino como herramienta de mejora de eficiencia, productividad y sostenibilidad.

En general, se demanda que las mejoras de eficiencia y modernización permitan atender más demandas y generar mayor valor económico y social con el mismo volumen global de agua, sin incrementar necesariamente la presión neta sobre los recursos hídricos. La eficiencia debe medirse no solo por reducción de consumos, sino también por productividad, generación de empleo, estabilidad territorial y capacidad de adaptación climática.

Respuesta:

En relación con las consideraciones formuladas, el EpTI contempla la modernización de regadíos como una medida prioritaria de adaptación orientada a mejorar la eficiencia en el uso del agua, la garantía de suministro y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias existentes. En este sentido, se reconoce el esfuerzo inversor realizado por el sector, así como su contribución a una gestión más racional del recurso y a la recuperación de costes del sistema.

No obstante, debe precisarse que la mejora de la eficiencia no implica, por sí misma, una reducción automática de los volúmenes concesionales ni constituye un instrumento indirecto de minoración de la actividad agraria, sino que su tratamiento en la planificación hidrológica responde a un análisis caso por caso. Así, los eventuales ahorros derivados de la modernización no se someten a penalizaciones automáticas, pero tampoco pueden destinarse de manera generalizada a la generación de nuevas demandas si ello implica un incremento neto de la presión sobre las masas de agua.

En coherencia con ello, el EpTI establece que dichos ahorros deben contribuir, prioritariamente, a consolidar la sostenibilidad del uso existente y a evitar incrementos de presión que puedan

comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales o el equilibrio del sistema hídrico. Solo en aquellos supuestos en los que exista disponibilidad efectiva del recurso y se acredite la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de las actuaciones, podrán considerarse desarrollos adicionales, siempre de forma compatible con la consecución del buen estado de las masas de agua y el mantenimiento de los caudales ecológicos.

Finalmente, si bien se comparte que la eficiencia puede valorarse desde una perspectiva amplia —incluyendo aspectos como la productividad, la generación de valor económico o la resiliencia territorial—, en el ámbito de la planificación hidrológica dicha eficiencia debe necesariamente integrarse con el principio de sostenibilidad ambiental, lo que exige que cualquier mejora en el uso del recurso no se traduzca en un aumento de las presiones que comprometa los objetivos establecidos por la normativa vigente.

Alegación 18.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Si bien el plan hidrológico en vigor descartó el incremento de nuevos regadíos, sí es posible esa ampliación en sistemas concretos con cultivos con un uso muy reducido del recurso, como por ejemplo en el sistema Riaza-Duratón y otros sistemas, donde sí es posible ampliación de superficie de riego con el mismo volumen de agua ahora establecido.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, cabe señalar que, si bien el vigente plan hidrológico estableció, con carácter general, la no previsión de nuevos desarrollos de regadío, el Esquema de Temas Importantes (ETI) contempla que determinadas situaciones específicas puedan ser objeto de análisis individualizado, particularmente en aquellos sistemas en los que concurran circunstancias singulares desde el punto de vista de la disponibilidad y gestión del recurso y, además, las autoridades competentes (MAPA o Comunidades Autónomas) plantearon nuevos regadíos que cuentan con amparo legal. En este aspecto el organismo de cuenca no puede proponer nuevos regadíos cuya autoridad competente no avala o, siendo avalados, no cuenta con garantías suficientes o amparo legal de la planificación sectorial.

No obstante, debe precisarse que los eventuales aumentos de superficie destinada al regadío no pueden valorarse exclusivamente desde la perspectiva de un mantenimiento del volumen total de extracción, sino que han de analizarse de forma integral considerando el conjunto de presiones que la actividad agraria genera sobre las masas de agua. En particular, el incremento de superficie regable puede implicar efectos relevantes sobre el régimen hidrológico, el retorno de flujos, la calidad de las aguas, la contaminación difusa o la alteración de los caudales ecológicos, incluso en aquellos supuestos en los que el consumo unitario por hectárea sea reducido.

En este sentido, el ETI incide en la necesidad de abordar la sostenibilidad del regadío desde un enfoque global, que tenga en cuenta no solo la eficiencia en el uso del agua y el volumen derivado, sino también la evolución de las presiones significativas y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Por ello, la eventual ampliación de superficies regables —incluso en sistemas concretos como el Riaza-Duratón— debe someterse a una evaluación específica que acredite su compatibilidad

con la consecución del buen estado de las masas de agua, el mantenimiento de los caudales ecológicos y la ausencia de deterioro adicional del dominio público hidráulico.

En consecuencia, no resulta procedente establecer, con carácter general, la posibilidad de ampliar superficies de regadío bajo el único condicionante de mantener el volumen global actualmente asignado, sino que cualquier propuesta en este sentido deberá justificarse caso por caso, en el marco del proceso de planificación hidrológica y de conformidad con los principios de sostenibilidad, cautela y no deterioro que rigen la gestión del recurso.

Alegación 19.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Respecto al tema importante DU-06, la alegante valora positivamente que el EPTI reconozca la modernización del regadío como la medida esencial de adaptación al cambio climático y mejora de la garantía de suministro. De las dos alternativas que se propone como factibles (5 y 6), muestran preocupación por determinados planteamientos relacionados con:

- *Limitaciones automáticas de concesiones*
- *Restricciones indirectas de superficie regable*
- *Incremento de costes para los usuarios*
- *Traslado excesivo del esfuerzo inversor a los regantes*
- *Cierre definitivo del mapa de nuevos desarrollos de regadíos.*

Asimismo, las Comunidades de Regantes consideran imprescindible priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y con baja garantía hídrica, especialmente en zonas como Carrión, Órbigo, Tormes, Eria, Curueño o Duerna.

Igualmente, se considera necesario garantizar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas, especialmente ante el horizonte de 2035. [..]

Las actuaciones vinculadas al regadío presentan, por tanto, muy bajos niveles de ejecución, especialmente en modernización de regadíos, infraestructuras hidráulicas y regulación. Esta situación genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban.

Respuesta:

La Ficha DU-06 al elegir las alternativas 5 y 6 señala ambas alternativas permiten avanzar en medidas de modernización de regadíos que manteniendo la competitividad de las explotaciones con ligeros ajustes de las dotaciones adaptadas a la mejora que suponen las infraestructuras, permitan ampliar la superficie de regadío en la cuenca. Las comunidades de regantes en esta materia han ido modificando su posición, si es que se puede hablar de una posición común: de pasar en el plan de primero y segundo ciclo a demandar el cierre del mapa de cultivos en la demarcación hidrográfica, postulan a hora la necesidad de ampliar el regadío. Desde el punto de vista de la garantía y dadas las limitaciones reales existentes para ampliar la oferta, toda ampliación de superficie de regadío conlleva un reajuste del regadío existente, de manera que solo por la vía de la mejora de la eficiencia de puede atender a todas las demandas.

Que las concesiones deban modificarse como consecuencia de las actuaciones de mejora de la eficiencia del uso no es una exigencia del plan hidrológico sino de la propia normativa de aguas, por ejemplo, en aplicación de los artículos 65 del TRLA, al señalar que las concesiones podrán ser revisadas cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento, a petición del concesionario o cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. En concreto, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. En el primer criterio del artículo 65 para revisar una concesión se encuentra el hecho de que, por ejemplo, se esté regando más superficie (o menos) de la que ampara el título concesional, a lo que se refiere el alegante como “restricciones indirectas de superficie regable”.

En efecto, el EpTI (y el propio plan hidrológico vigente) ha dado prioridad a las actuaciones en puntos donde hay déficit estructural como Carrión y Órbigo. En la actualidad no hay déficit en el sistema Tormes. Los casos de Eria, Curueño o Duerna son nuevos en el presente ciclo de planificación hidrológica y nos parecen más un empeño de determinadas asociaciones de regantes que de los propios usuarios de estos ríos. De hecho, para el Duerna se estableció una reserva de agua en el plan hidrológico vigente para mejorar las garantías de los riegos del valle, reserva que no se ha materializado por falta de capacidad de los usuarios en agruparse de manera reglada. En el caso del Eria solo los de la parte baja del Área han promovido una CUAs con el fin de organizar mejor el uso del agua.

El EpTI no tiene capacidad para modificar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas que otorga la ley, especialmente ante el horizonte de 2035, ni puede ampliar esa seguridad ni disminuirla. Es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas. Lo que el EpTI señala es que estos derechos cuando sean en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, si éstas no alcanzan su buen estado en 2035, será muy difícil que puedan mantener su status actual, ya que en las citadas DT se indica que en todo caso, a esos aprovechamientos de aguas les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico. Por tanto, el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

Como se pone de manifiesto en la Ficha del tema importante DU-09, las actuaciones vinculadas al regadío (modernización de regadíos y nuevos regadíos) cuya autoridad competente es la administración agraria del Estado y de las comunidades autónomas, presentan un nivel de ejecución del 20 y del 27%, respectivamente; por su parte el grupo de infraestructuras hidráulicas presenta una ejecución del 13% de la inversión. Esta situación, como indica la alegante, genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban; de hecho, en el tema importante DU-09 se insiste en este aspecto llamando a la responsabilidad de las autoridades competentes para que asuman las medidas que han validado en cada ciclo de planificación hidrológica.

Alegación 20.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

En las alegaciones a la revisión del plan 2022-2027 se propuso una tabla de asignaciones máximas que creemos que debe ser revisada de acuerdo a las dotaciones que se vienen aprobando en las campañas de riego coincidentes con el período de desarrollo de dicho plan y que deberían ser las siguientes:

SISTEMA	ASIGNACIÓN MÁX
PISUERGA-BAJO DUERO	6.000
CARRIÓN	5.000
TORMES	6.000
ÓRBIGO	6.000
PORMA	6.000
ADAJA	4.900
ALTO DUERO	6.000
RIAZA	6.000
ESLA (RIAÑO)	6.000
ARLANZÓN	6.000
TUERTO	4.500
TERA	6.000
ÁGUEDA	6.000

Partiendo de esta base, el objetivo que debemos perseguir es que se adopten las medidas oportunas para que todos los sistemas de explotación estén en las mismas condiciones y cuenten con idéntica disponibilidad (que ciframos en 6.000 m^3/ha), para lo cual tendríamos que incluir en el programa de medidas las actuaciones necesarias que nos permitan situarnos en ese escenario de igualdad.

Respuesta:

La propuesta que se hace en la alegación se ha tenido en cuenta en el EpTI, singularmente en la alternativa 5, ofreciendo los resultados de esta alternativa respecto al resto. A la vez hay que decir que adoptar este criterio para las dotaciones supondría llevar a algunas de las demandas de determinados sistemas de explotación al incumplimiento generalizado de garantías, como por ejemplo Alto Duero, Adaja o Tuerto. Tampoco se explica bien en la alegación por qué motivo, siguiendo el argumento de la alegante, se debe asegurar una dotación de 4.500 m^3/ha año en el Tuerto o 4.900 m^3/ha año en Adaja, frente a 6.000 m3/ha año de muchos de los sistemas de explotación; y tampoco por qué 6.000 m^3/ha año en toda la cuenca: ¿maneja el alegante algún estudio estadístico que justifique esa dotación?; si es la dotación a la que tradicionalmente se ha tendido, ¿por qué ha de mantenerse en sistemas modernizados con elevadas eficiencias de uso del agua?; ¿se pretende, con esta propuesta, dar carta de reconocimiento a determinados agentes que afirman que la modernización de regadíos en España no contribuye a reducir las presiones sobre las masas de agua sino a incrementar la demanda y que por ello, debería anularse la financiación con fondos públicos?

Por otra parte, la propuesta no atiende al criterio agronómico de las necesidades hídricas de los cultivos de cada sistema de explotación, como se pone de manifiesto, por ejemplo, comparando la dotación del Sistema Órbigo con la del Sistema Adaja, o pensando que la demanda de un cultivo en

Soria puede ser comparable a la del mismo cultivo en Toro. La propuesta que se hace en el escrito, en un deseo de homogeneizar el suministro de agua cuando se paga lo mismo por superficie, atiende sobre todo a las reservas que existen en cada Sistema, lo que invalidaría el análisis de garantía que se establece de acuerdo con los epígrafes 3.5.1 u 3.5.2 de la IPH.

Entendemos que la demanda de la alegante obedece a que todavía se pagan cánones y tarifas no en función del consumo sino de la superficie regada, sistema que no disuade al usuario de ser eficiente. De cualquier modo, se analizará en fase de redacción del plan hidrológico la viabilidad de la propuesta, con el fin de que pueda atender a dos criterios simultáneos: la realidad agroclimática de cada zona y el hecho de que el pago de cánones y tarifas se haga por superficie regada en vez de volumen utilizado.

Alegación 21.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

1.- En primer lugar y en tanto en cuanto no se adopten las medidas que puedan mejorar la garantía de todas las UDAs, se debe mantener la vigencia del art. 15.8 del plan vigente "Dotaciones orientativas máximas en los sistemas de explotación regulados: En aplicación del artículo 55 del TRLA, el organismo de cuenca para los sistemas que cuenten con regulación, una vez consultadas las correspondientes Juntas de Explotación, fijará anualmente dotaciones orientativas máximas de agua en función de las reservas existentes y en coherencia con las propuestas sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses de la Comisión de Desembalse, a las que deberá adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Estas dotaciones podrán ir modificándose anualmente en función de las reservas realmente existentes".

2.- En relación con el apartado anterior, abogamos porque las propuestas de dotaciones elevadas por las Juntas de Explotación a la Comisión de Desembalse y aprobadas por esta última se apliquen por igual a todos los usuarios del sistema en cuestión, sean canales del Estado o regadíos concesionales, no sólo en años de sequía (donde se puede aprobar un Real Decreto-ley que lo regule), sino también en años de normalidad, para que todos los usuarios del mismo Sistema tengan a disposición idénticos caudales.

Respuesta:

Las cuestiones que se sugieren no son parte del EpTI, sino que corresponden más bien a la fase de elaboración del Plan Hidrológico, que contará con un período de consulta pública donde podrán hacerse sugerencias sobre la parte Normativa del Plan Hidrológico.

Alegación 22.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

3.- La mejora de la eficiencia del regadío mediante la modernización de sus infraestructuras y un leve incremento de la regulación son las estrategias más adecuadas. Por parte de los usuarios, también se

debe perseguir aplicar todas las medidas y prácticas agrarias que mejoren la gestión sostenible del recurso y consigan un ahorro de agua.

4.- Caudales ecológicos: su implantación y cumplimiento (casi del 100% en nuestra cuenca de acuerdo a los informes anuales presentados a la Comisión de Desembalse) contribuyen a la pérdida de garantía en la satisfacción de las demandas en las UDAs con más déficit hídrico. En este sentido, debemos de poner de manifiesto que no consideramos justificada la obligación de mantener los caudales mínimos definidos para situación de normalidad en situación de sequía prolongada en las zonas incluidas en la red Natura 2000 (LIC, ZEPA, etc) o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, tal como establece el RPH (art 18.4). La situación de sequía prolongada obedece a causas naturales y, por tanto, no se encuentra justificación para esta salvedad. Teniendo en cuenta que se trata de una prescripción de carácter reglamentario, su modificación debe plantearse en una disposición de igual o superior rango, como puede ser el Real Decreto de aprobación de los planes de cuarto ciclo. Por ello se considera de interés plantear esta modificación como medida en los programas de medidas de los planes de cuarto ciclo, con la tipología de instrumento general.

De igual modo, en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse.

Respuesta:

El diagnóstico del EpTI coincide con la primera propuesta de la alegante. No ocurre lo mismo con la segunda propuesta: el artículo 18 del RPH señala que en *caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971. En estas zonas se considerará prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, aunque se aplicará la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones.* Y el artículo 49 quáter del RDPH señala que *en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada, se exigirá el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos aguas abajo de las presas conforme a lo previsto en la disposición transitoria quinta y cuando la disponibilidad natural lo permita. A tal efecto, el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse. No obstante, el régimen de caudales ecológicos será exigible, siempre y en todo caso, cuando exista una legislación prevalente como la aplicable en Red Natura o en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de acuerdo de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, en la que se establece la prevalencia del caudal ecológico frente al uso*. Por ello la propuesta de la alegante contradice ambas disposiciones, por lo que no es posible atenderla.

Alegación 23.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

5.- Revisión del Convenio de Albufeira: […], volvemos a reivindicar las propuestas planteadas en el escrito dirigido a la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en septiembre de 2022, motivado por el conflicto suscitado por la suelta de agua de embalses de regadío para poder cumplir con los compromisos reflejados en el Convenio de Albufeira. Seguimos demandando una reducción de la aportación semanal, trimestral y anual en los diferentes puntos de control, así como subir el umbral de precipitación al 70% sobre la media interanual, para que si en períodos de sequía prolongada la precipitación bajase de ese umbral, podamos entrar en excepción.

Respuesta:

Es importante resaltar que el convenio de Albufeira es un tratado internacional establecido entre dos países, España y Portugal, con la finalidad de dar coherencia y continuidad a tratados anteriores en lo que se ha buscado a lo largo de los siglos limitar los conflictos fronterizos entre ambos países.

Como se indica en la Ficha DU-09, entre las decisiones a tomar en relación con el Convenio de Albufeira, se encuentra analizar las divergencias entre las planificaciones española y portuguesa para ofrecer soluciones conjuntas a las masas de agua compartidas y los indicadores de sequía y escasez de ambos países para tratar de integrar ambos diagnósticos en uno. Esta última decisión viene avalada por los memoranda de entendimiento entre España y Portugal de las cumbres hispano-lusa de 2023, 2024 y 2026, en las que ya se está trabajando por ambos países. Más allá de esa voluntad de mejorar el diagnóstico de los criterios de excepción, y armonizar los indicadores de sequía y escasez, corresponde a otras instancias promover los cambios del Convenio que considere oportunos.

Alegación 24.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Infraestructuras

Para conseguir la sostenibilidad del regadío reflejada en la ficha anterior, las Comunidades de Regantes solicitan que, de manera genérica el futuro Plan Hidrológico incorpore las siguientes medidas:

- *Incrementar las inversiones públicas en modernización y digitalización*
- *Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.*
- *Priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y zonas vulnerables*
- *Impulsar balsas laterales y actuaciones de regulación complementaria*
- *Dotar presupuestariamente las actuaciones del plan*
- *Mejorar infraestructuras hidráulicas y redes en alta*
- *Favorecer el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas*
- *Flexibilizar tarifas energéticas adaptadas a la estacionalidad del riego*
- *Mantener la seguridad jurídica concesional*
- *Establecer programas reales y ejecutables con financiación suficiente*

- *Realizar limpiezas periódicas de cauces y desagües como medida de seguridad y bienestar para la población rural.*

Respuesta:

Entre las propuestas heterogéneas que hace la alegación, algunas caen fuera de la competencia del agua (tramitación ambiental, tarifas energéticas); otras están incorporadas a las Fichas del EpTI (incrementar inversiones en modernización en la Ficha DU-06, centrarse en actuaciones en sistemas deficitarios en la Ficha DU-07, impulsar sustitución de bombeos con aguas subterránea en la Ficha DU-02, fomentar utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas en la Ficha DU-06, modernizar infraestructuras de riego en alta en Ficha DU-07). Respecto a la seguridad jurídica concesional, como se ha dicho en la respuesta a la alegación 19, es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas; el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

En la Ficha DU-09 se aborda el tema importante de la financiación del Programa de medidas. El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Estas autoridades deben dar la conformidad al programa de medidas para lo cual, cada una internamente, habrá debatido la capacidad y conveniencia de asumir cada medida. Por tanto, los mecanismos formales para asegurar la ejecución del Programa de medidas existen y desde el ámbito de la planificación hidrológica sólo se puede recalcar que estos mecanismos no deben ser simplemente formales sino también reales. La propia Ficha DU-09 describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social.

Sin duda la mejora de las condiciones hidrológicas de cauces es una tarea de gran peso en la cuenca a la que el Organismo de cuenca dedica anualmente entre 4 y 6 millones de euros, posiblemente escasos para las necesidades crecientes, a labores de mantenimiento de cauces. El Programa de medidas del plan hidrológico vigente incluye un paquete de medidas de este tipo. Pero evidentemente no puede llegar a atender eficazmente a los más de 80.000 kilómetros de ríos y arroyos de la cuenca y actúa con criterios de conveniencia y racionalidad económica. Para paliar esta desproporción entre necesidades y posibilidades reales, tanto en el Plan vigente de 2023 como en el anterior de 2016, se incluyó un

procedimiento más ágil para acometer determinadas labores de mejora de las condiciones de desagüe de los cauces. Así en el artículo 30 de la Normativa se establece el sistema de declaración responsable para las denominadas *actuaciones menores de conservación de cauces y zonas de policía*. El mismo artículo hace un elenco de las que pueden considerarse actuaciones menores:

I. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera.

II. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce.

III. Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del dominio público hidráulico.

IV. Retirada de sedimentos y vegetación existente en el lecho del cauce, situados 50 metros aguas arriba y aguas abajo de las obras de fábrica y puentes con el fin de conservar su capacidad de drenaje.

V. Pequeñas actuaciones de mantenimiento de puentes e infraestructuras situadas sobre el cauce, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas no haya ocupación del dominio público hidráulico ni quede afectada su capacidad de desagüe.

VI. Mantenimiento de las secciones de estaciones de aforo.

VII. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos.

VIII. Cortas de arbolado bajo líneas eléctricas.

Para todas estas actuaciones la declaración responsable habilita el poder actuar por los particulares sin esperar a ninguna Resolución de la CHD, lo que agiliza notablemente la actuación.

Alegación 25.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Modernizaciones a ejecutar

Si tenemos en cuenta el período restante del plan vigente y el horizonte temporal de la revisión relativa al período 2028-2033, deberíamos modernizar los regadíos pendientes cuya modernización ya está aprobada y que son los siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES	IMPORTE ESTIMADO CONVENIO MAPA-SEIASA (€ sin IVA)
PEPAC CYL y otros planes	
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)	30.000.000
Canal de Ines-Eza Fase II (Soria)	7.000.000
Canal del Esla (León)	150.000.000
Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta (Palencia)	160.000.000
Bajo Tuerto – Sindicato Central Embalse Villameca (León)	25.000.000
Castañón, Cerrajera y Regueras (León)	65.000.000
Canal de la Retención (Palencia)	47.000.000
Canal de Villalaco (Palencia)	54.000.000

NUEVAS ACTUACIONES	IMPORTE ESTIMADO CONVENIO MAPA-SEIASA (€ sin IVA)
Canal de Manganeses (Zamora)	40.000.000
Margen Derecha del Tera (Zamora)	100.000.000
San Salvador - Valverde de Ágreda (Soria)	15.000.000
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)	40.000.000
Alija del Infantado (León)	15.000.000
TOTAL (€ sin IVA)	**748.000.000 €**

Para poder conseguir este objetivo tienen que ser tenidas en cuenta dos reivindicaciones que trasladamos al Gobierno de España:

1.- Aumentar el capital social de la SEIASA a la cantidad de 300 M€ anuales por cada uno de los años de duración del plan.

2.- Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.

Respuesta:

La alegación aporta dos cuestiones muy relevantes para impulsar las medidas del vigente Plan Hidrológico. Estando de acuerdo con la segunda (simplificación y agilidad en los trámites de evaluación ambiental de los proyectos de modernización del regadío) la realidad es que las modificaciones legales llevadas a cabo recientemente no van en esa línea; así la modificación de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, más reciente (de 6 de noviembre de 2025) reduce los límites de superficie de modernización de regadío para que la evaluación ambiental sea ordinaria. Esto parece indicar que por parte del legislador hay una sospecha de que los proyectos de modernización podrían suponer presiones adicionales sobre el medio ambiente, quizá debido a determinados proyectos ya ejecutados que no han sido todo lo respetuosos que cabría esperar. Por ello la norma legal es la que es y, en tanto no se modifique, debemos atenernos a ella, no siendo el EpTI competente para su modificación.

La Ficha DU-06 incide en la primera parte de la alegación al apostar por una mayor intensidad de la modernización del regadío que, lógicamente pasa por la adecuada financiación que debe validar e impulsar la autoridad competente con tutela sobre la SEIASA.

Recordamos que no todas las zonas regables que se citan en la alegación disponen de medida de modernización de regadío en el Plan vigente. Como se sabe el Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento. Cuando se confeccionó el Plan vigente de manera específica se solicitó al MAPA la previsión de actuaciones de modernización en los seis años de vigencia del Plan. En la relación de actuaciones que iba a acometer el MAPA no estaban las siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)
Canal del Esla (León)
Cerrajera (León)
Canal de Villalaco (Palencia)
Canal de Manganeses (Zamora)
Margen Derecha del Tera (Zamora)
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)
Alija del Infantado (León)
TOTAL (€ sin IVA)

Y como tales no pasaron al Programa de medidas para su ejecución por el MAPA sino para su ejecución por la comunidad autónoma y los usuarios. Probablemente el MAPA no las incluyó en su programación porque la comunidad autónoma no manifestó interés por ellas ya que la mayoría no contaban con acuerdos en sus asambleas generales para acometer la modernización. Aunque el EpTI ha tenido en cuenta en sus análisis las modernizaciones que figuran en el Programa de medidas independientemente de su agente financiador, de cara al nuevo Plan Hidrológico conviene aclarar que sólo formarán parte de las medidas aquellas actuaciones que así se determine por las autoridades competentes (MAPA o comunidad autónoma). De la Presa de Regueras, Bajo Tuerto y del Canal de la Retención ni siquiera hay medida de modernización ya que ninguna autoridad competente las ha reclamado. Valverde de Ágreda está fuera de la demarcación hidrográfica del Duero, por lo que es lógico que no figure entre las medidas del Plan Hidrológico ni ahora ni en el futuro.

Alegación 26.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Mejora infraestructuras

Propuestas:

1.- Solicitar a la Dirección General del Agua una dotación presupuestaria de 150 M€ en el período 2028/2033 para hacer frente a estas reformas, conseguir el estado óptimo de las infraestructuras para poder llevar a cabo la correcta gestión del recurso.

2.- La situación actual de la agricultura no pasa por sus mejores momentos, motivado por los elevados precios de los insumos, los bajos precios de mercado de los productos y las grandes inversiones realizadas en modernización de las infraestructuras de riego y el amueblamiento de parcelas. Por eso se solicita, buscar fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-09 y con respecto a la propuesta sobre la financiación de la DGA, se recuerda que el Plan vigente incluyó una inversión de 350 millones de euros en infraestructuras, nuevas y modernización de las existentes, cuya ejecución según la misma Ficha es de un 13% a final de 2024 que sube hasta un 19% a final de 2025, valor realmente exiguo. Pese a estar previsto es necesaria una evaluación de los motivos de este retraso que se ponen de manifiesto en la Ficha y que deben ser removido. La propia Ficha también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social. No obstante, en atención a la alegación se incluye una nueva decisión sobre la rendición de cuentas.

Los mecanismos de rendición de cuentas están formalmente delimitados en el ámbito administrativo, por ejemplo, con la regulación que se incluye en los artículos 87 y 88 del RPH. Pero este ámbito es meramente administrativo y no político, que tiene sus propios itinerarios.

Respecto a sistema de financiación alternativos a los que establece la Ley de Aguas para este tipo de infraestructuras, nada puede aportar el EpTI ya que se trata de una cuestión regulada por la propia Ley y a allá debe atenerse.

Alegación 27.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Obras de regulación:

Propuestas:

1.- Sistema Carrión: es uno de los más deficitarios de la Demarcación y urge acelerar los trámites para proceder a la ejecución de La Cueza 1 y La Cueza 2,[…].

2.- Sistema Tormes: […]. De momento, están puestas en Explotación unas 10.000 has entre La Armuña II y la Zona de Arabayona, lo que colocaría la superficie de la zona regable dependiente del embalse de Santa Teresa en el entorno de 35.000,00 has. La planificación ya prevé el desarrollo de otras 12.000 has más en La Armuña III y IV, que sí podrían ser asumidas por dicho embalse, pero en el caso de que se llegase a plantear alguna ampliación más en el futuro, resultaría necesario estudiar el recrecimiento del embalse para garantizar la satisfacción de todas las demandas (además del regadío, abastecimientos, caudales medioambientales y otros usos)

3.- Sistema Órbigo: […] nuestras propuestas pasan por el cambio de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al Sistema Tera (podríamos conseguir un ahorro de unos 12 Hm3) y la construcción de la balsa lateral de La Rial con llenado por gravedad desde el río Omaña (su capacidad está prevista en 23 Hm3).

Dentro del Sistema Órbigo tenemos el Subsistema Tuerto, […], proponemos las siguientes actuaciones: urgente puesta en explotación del embalse de Villagatón, estudiar un posible recrecimiento del embalse de Villameca y reparar el acueducto del trasvase de Valdesamario para mejorar su capacidad hidráulica y contribuir así al mejor llenado de Villameca en cada campaña.

Río Duerna: […] las 4.000 has que se nutren de este río, junto con el Peces, que discurre paralelo antes de desembocar ambos en el Tuerto, subsisten a duras penas. Para asegurar la pervivencia de este regadío, proponemos varias actuaciones:

- *Siembra de agua, derivando en invierno el caudal a las zayas, que son más filtrantes y permiten recargar el acuífero (se podrían acumular unos 2 Hm^3) para poder ser utilizado en campaña junto con el agua del río hasta la llegada del estiaje.*
- *Estudiar la posibilidad de balsas laterales derivando caudal del río Duerna en época invernal para ser utilizadas en verano.*
- *Estudiar la alternativa de un embalse de cabecera con una capacidad menor a los 28 Hm3 que estaban previsto en el proyectado en Chana de Somoza.*

Idénticos planteamientos podríamos someter a estudio para consolidar la zona regable dependiente del río Eria.

4.- Sistema Esla Valderaduey: para este sistema se pueden plantear balsas laterales en el río Cea aprovechando su aportación invernal, con suministro cero del embalse de Riaño. Como fórmula de explotación más viable, planteamos un aprovechamiento conjunto de los embalses de Riaño, Porma y Casares, desestimando definitivamente la alternativa planteada por la Confederación Hidrográfica del Duero de la transferencia de agua de este último al sistema Órbigo.

5.- Apoyo a las aguas subterráneas: En el EPTI se plantean peajes [..]. FERDUERO se opone frontalmente a estos recortes y además de seguir impulsando la constitución de CUAS para mejorar la gestión de los acuíferos, planteamos que se estudien actuaciones que permitan sustituir aguas subterráneas por aguas superficiales, así como el uso compartido de ambas. Por ejemplo, el desarrollo de La Armuña III y La Armuña IV puede liberar hectáreas de la zona sur de la Masa de Medina, la Presa de Lastras de Cuéllar lo mismo en Tierra de Pinares y las balsas laterales de Tordesillas, ayudaría a mejorar su acuífero. Por ello, planteamos que se estudien estas opciones para poder mantener el regadío y la actividad económica de todos los usuarios que se sirven de estas masas.

[…] solicitamos a la Dirección General del Agua la búsqueda de fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras de regulación.

Respuesta:

Con relación al punto 1 de la alegación (Sistema Carrión), debe señalarse que la Confederación Hidrográfica del Duero comparte la conveniencia y oportunidad de la puesta en servicio de una regulación adicional en el ámbito de las Cuezas, ya que se considera una medida estructural que puede incrementar la capacidad de gestión del sistema y reforzar su resiliencia, disminuyendo la dependencia de aportaciones externas. Estas actuaciones, junto con la modernización de regadíos en el sistema Carrión, se encuentran alineadas con los objetivos de la planificación hidrológica vigente y forman parte de la estrategia de mejora del equilibrio entre recursos y demandas en la demarcación.

Según se recoge en el Programa de medidas del Plan Hidrológico vigente, cuya situación más actualizada se puede consultar en Mírame-IDEDuero, la regulación adicional en las Cuezas (medidas 6403243 y 6403244) se encuentra en fase de anteproyecto en evaluación ambiental y es una medida cuyo promotor es la Confederación.

Con relación al punto 2 de la alegación (Sistema Tormes) debe indicarse que el EpTI ya contempla expresamente el análisis de la ampliación de regadíos en el sistema Tormes y su relación con la capacidad de regulación del embalse de Santa Teresa. En particular, el documento pone de manifiesto que los eventuales incrementos de superficie regable —como los asociados al desarrollo de La Armuña— deben quedar condicionados a la disponibilidad real de recursos y a la garantía del sistema, evaluándose de forma conjunta la gestión de la demanda y la oferta.

A este respecto, el EpTI analiza el posible recrecimiento del embalse de Santa Teresa en el marco de la alternativa 5 de la ficha DU-07, como una de las opciones para incrementar la capacidad de regulación en escenarios de mayor desarrollo del regadío. No obstante, también concluye que este tipo de actuaciones:

- no resuelven por sí solas los déficits del sistema ni los problemas de garantía,
- y deben plantearse únicamente cuando se justifique su viabilidad técnica, económica, ambiental y social, y siempre en combinación con medidas de gestión de la demanda (modernización, limitación de dotaciones, etc.).

En consecuencia, la eventual necesidad de recrecimiento del embalse no puede considerarse automática, sino que debe evaluarse en el marco global de la planificación hidrológica, priorizando un enfoque integrado que garantice la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Todo ello se analizará con detalle en la fase de redacción del plan hidrológico.

En relación con la propuesta formulada en el punto 3 para el sistema Órbigo, cabe señalar lo siguiente:

En primer lugar, la Confederación valora favorablemente la propuesta de cambio de la toma de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al sistema Tera, en la medida en que se trata de una actuación coherente con los objetivos del EpTI orientados a la optimización de la gestión de los recursos disponibles y a la reducción de presiones sobre sistemas deficitarios, mediante la mejora de la asignación y distribución de recursos entre sistemas de explotación.

En cuanto al resto de actuaciones planteadas, relativas al incremento de la capacidad de regulación (balsas laterales, nuevos embalses, recrecimientos o mejora de infraestructuras existentes), debe indicarse que el EpTI establece que este tipo de medidas deben analizarse de forma integrada dentro del conjunto de alternativas de planificación, en coordinación con las actuaciones sobre la demanda (modernización, eficiencia y adecuación de dotaciones).

En particular, el documento pone de manifiesto que:

- Las actuaciones de incremento de regulación pueden contribuir a mejorar la garantía y reducir déficits en determinados sistemas,
- pero su eficacia es generalmente limitada si no se acompañan de medidas de gestión de la demanda,
- y en todo caso deben someterse a una evaluación rigurosa de su viabilidad técnica, económica, social y ambiental, dada su elevada inversión y potencial afección sobre las masas de agua.

Por ello, la puesta en explotación del embalse de Villagatón o la mejora del trasvase de Valdesamario para reducir pérdidas y una ligera mejora de la capacidad hidráulica podrán incorporarse al Programa

de medidas en fase de redacción de plan hidrológico. Respecto a de la balsa lateral de La Rial o el posible recrecimiento de Villameca, la decisión de su incorporación al Programa de medidas del plan hidrológico dependerá de su encaje en las conclusiones del estudio de alternativas de incremento de regulación del sistema Órbigo y de su encaje en la estrategia global de la demarcación.

Sobre las propuestas relativas al río Duerna, la Confederación Hidrográfica del Duero valora positivamente las actuaciones de "siembra de agua", entendida como recarga gestionada de acuíferos mediante derivaciones superficiales (como el uso de "zayas" u otras infraestructuras tradicionales), que ya han sido consideradas en el marco de la planificación hidrológica vigente. En particular, en el valle del Duerna se incluyó una reserva de agua superficial en invierno destinada a la recarga, constituyendo una medida alineada con la gestión conjunta de recursos superficiales y subterráneos y con los objetivos de mejora de la garantía y sostenibilidad del regadío. Como se ha dicho en la respuesta a la alegación nº 19 de este mismo escrito, lamentablemente a fecha actual no se ha podido hacer efectiva esa reserva por falta de interlocutor en forma de junta central, sindicato central o comunidad general de usuarios, trámite imprescindible para poder hacer efectiva esa reserva.

Esta solución encaja, asimismo, con las líneas del EpTI en materia de adaptación al cambio climático, diversificación de fuentes y aumento de la resiliencia de los sistemas de explotación, incluyendo el uso de infraestructuras alternativas y recarga artificial cuando resulten técnica y ambientalmente viables.

En cuanto a las propuestas relativas a la construcción de balsas laterales, almacenamiento estacional o alternativas de regulación en cabecera, estas se encuadran dentro de las posibles medidas de mejora de la gestión de la oferta contempladas en los temas importantes DU-06 y DU-07 del EpTI (incluyendo infraestructuras de almacenamiento, regulación o mejora de la garantía). No obstante, su implantación requiere un análisis específico en el marco de la elaboración del Plan Hidrológico, en el que se valore su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica, así como su eficacia real frente a otras alternativas. En este sentido, dichas propuestas se tendrán en consideración y podrán ser objeto de estudio en la fase de redacción del Plan.

En relación con las propuestas formuladas en el punto 4 para el sistema Esla-Valderaduey, la propuesta de aprovechamiento de aportaciones invernales mediante balsas laterales en el río Cea se encuadra dentro de las medidas contempladas en el EpTI en los temas importantes DU-06 y DU-07, en los que se prevé la utilización de infraestructuras de almacenamiento complementarias (balsas laterales, regulación estacional, etc.) como instrumento para mejorar la garantía de los sistemas de explotación. Por ello, este tipo de soluciones podrá ser analizado en la fase de elaboración del Plan Hidrológico, valorando su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica en el ámbito del sistema Esla–Valderaduey.

En cuanto a la propuesta de explotación conjunta de los embalses indicados, debe señalarse que el embalse de Casares es titularidad de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A.), por lo que en la situación actual no resulta posible su gestión conjunta con las infraestructuras de titularidad y explotación directa del Organismo de cuenca en los términos planteados.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier planteamiento de optimización conjunta de infraestructuras deberá analizarse en el marco competencial y de explotación correspondiente, considerando el

régimen jurídico de cada una de ellas y los acuerdos que, en su caso, pudieran establecerse entre las Administraciones implicadas.

En relación con el punto 5 de la alegación, se formulan las siguientes consideraciones:

Las posibles limitaciones al uso de aguas subterráneas deben enmarcarse en el objetivo prioritario de la planificación hidrológica, conforme a la Directiva Marco del Agua y al Texto Refundido de la Ley de Aguas, de alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de agua, evitando su deterioro y corrigiendo situaciones de sobreexplotación. En este sentido, la evolución de la política hidráulica se orienta hacia un refuerzo del control administrativo de las extracciones y una progresiva convergencia hacia el régimen concesional, lo que implica necesariamente la adopción de medidas de limitación en aquellos casos en los que las extracciones resulten incompatibles con la recuperación de los acuíferos.

Se valora positivamente el impulso a la constitución de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) como instrumento clave para la mejora de la gobernanza, el control de extracciones y la gestión conjunta de los recursos, en línea con lo previsto en el EpTI para el uso sostenible de las masas de agua subterránea.

Las propuestas orientadas a la sustitución de bombeos por recursos superficiales y al uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas son coherentes con las líneas de actuación recogidas en el EpTI, que contempla este tipo de medidas como alternativas para reducir la presión sobre los acuíferos y avanzar hacia su recuperación. No obstante, su viabilidad debe analizarse caso por caso en la elaboración del Plan Hidrológico, considerando la disponibilidad real de recursos, las garantías de suministro, los condicionantes ambientales y la eficiencia económica de las soluciones planteadas.

Alegación 28.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario recordar que la planificación hidrológica, de conformidad con el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, no persigue exclusivamente objetivos ambientales, sino también la satisfacción de las demandas, la armonización del desarrollo regional y sectorial y la sostenibilidad de las actividades económicas vinculadas al uso racional del agua. En consecuencia, cualquier mecanismo de coordinación interadministrativa o fijación de objetivos específicos en zonas protegidas debe incorporar necesariamente criterios de proporcionalidad, equilibrio territorial, cohesión socioeconómica y viabilidad de los usos existentes, singularmente en territorios rurales altamente dependientes del regadío. […]

La ficha plantea la alineación del marco regulatorio de distintas políticas sectoriales con los objetivos de la planificación hidrológica, incluyendo expresamente la Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats. No obstante, dicha coordinación no debería derivar en la imposición automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos.

Respuesta:

El EpTI no propone ni pretende imponer de manera *automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos*. De hecho, al menos, las Fichas DU-01, DU-02, DU-03, DU-04 y DU-07 tratan de hacer un análisis técnico de las presiones que generan sobre las masas de agua las actividades humanas, entre ellas la agrícola, unas veces con mayor profusión de datos y otras de manera cualitativa. Las propuestas y alternativas que se hacen en el EpTI se apoyan en ese análisis, tratando de corregir las presiones sin causar un daño excesivo a las propias actividades existentes. A nuestro juicio hay un equilibrio entre las actividades y los objetivos ambientales dentro del margen que permite la normativa vigente. Y la llamada a las políticas sectoriales (Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats) lo es en la medida que estas políticas apuntan a la del agua en sus propios desarrollos legales.

Alegación 29.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La ficha señala la necesidad de fijar objetivos específicos sobre el medio hídrico de los espacios Red Natura 2000 vinculados al agua. Sobre esta cuestión debe indicarse que cualquier eventual limitación derivada de dichos objetivos deberá sustentarse necesariamente en estudios técnicos individualizados, suficientemente motivados y territorialmente concretos, evitando restricciones automáticas derivadas exclusivamente de la ubicación geográfica de las explotaciones o infraestructuras. Especialmente en sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados, debe garantizarse plenamente la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes y la compatibilidad entre conservación ambiental y actividad agraria sostenible.

Respuesta:

Las limitaciones derivadas de los objetivos de los espacios naturales de Red Natura 2000 ya existen desde que se aprobaron los planes básicos de gestión, en el caso de Castilla y León desde 2015.

Los objetivos específicos de Red Natura se fijan por las comunidades autónomas en los Planes Básicos de Gestión. En el caso de los Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León se aprobaron por ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre. Estos Planes establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000. Se estructuran en:

- Un documento de “Disposiciones generales”, común a los 177 Planes Básicos.
- Ciento setenta y siete documentos de Planes Básicos de gestión y conservación correspondientes a cada uno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.
- Tres "Anexos" comunes a los 177 planes básicos:
    - Anexo I. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000,

- Anexo II. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Valores Red Natura 2000, y
- Anexo III. Medidas de conservación y gestión Red Natura 2000.

De todos los espacios y hábitats de estos Planes sólo aquellos vinculados al agua (76 en la demarcación hidrográfica del Duero) deben ser atendidos por la planificación hidrológica como establece el RPH, en la medida en que les afecte. Y las limitaciones en el ámbito del agua las establecen los citados planes. En este sentido cabe transcribir algunos de los fundamentos de derecho que esgrime el Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 515/2025 que se cita en la Ficha DU-09: "Por consiguiente, y como ciertamente esta situación no parece acomodarse a las exigencias de la DMA y de la legislación interna que la traspone, de las que deriva la necesidad de que los planes hidrológicos, como instrumento esencial de coordinación de la política de aguas, reflejen los objetivos ambientales de las zonas protegidas vinculados a las masas de agua asociadas y su grado de cumplimiento, y que sobre dichos objetivos no cabe aplicar la excepción prevista en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2000/60, procede estimar la pretensión de la parte recurrente y declarar la nulidad de todas las previsiones contenidas en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las que, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 10 de las disposiciones normativas, se prevea la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas de agua vinculadas a zonas protegidas de hábitats y especies, en las que, además, no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares.

Puede ser llamativo que la delimitación de espacios protegidos por las comunidades autónomas afecten en ocasiones a zonas como las que identifica la alegante ("sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados"), por lo que cabría pensar que esos espacios protegidos lo son precisamente por su relación con esos regadíos históricos; sin embargo encontramos en sus planes básicos que la actividad agraria, entre otras, es quien constituye una presión, algo que aparentemente repugna toda lógica racional. Pero la planificación hidrológica poco puede hacer para resolver estas incoherencias, más allá de instar al órgano competente de la comunidad autónoma a que revise esas declaraciones o los planes básicos correspondientes, como también lo puede hacer el sector al que pertenece la alegante.

Alegación 30.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

No parece razonable incrementar simultáneamente las exigencias ambientales o las limitaciones sobre los usuarios concesionales mientras persistan importantes retrasos administrativos y presupuestarios en la ejecución de actuaciones estructurales cuya responsabilidad corresponde principalmente a las administraciones públicas competentes.

Respuesta:

Manifestamos acuerdo con la alegante en lo que se refiere al notable retraso en la ejecución del Programa de medidas; de hecho, la propia Ficha lo pone de manifiesto cuando abiertamente reconoce que el *Programa de medidas del Plan Hidrológico se construye con las medidas que todas las autoridades competentes (administraciones locales, autonómicas o estatal) y resto de agentes, cada*

uno en el marco de sus competencias, pueden impulsar para el logro de los citados objetivos. Por tanto, buena parte del éxito de un plan hidrológico para dar cumplimiento a esos objetivos estriba en el compromiso de los agentes de acometer las medidas que caen bajo su ámbito. También propone algunas decisiones a explorar para que esto no se repita en el futuro, como son que haya un *compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución*, y establecer un *marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios.*

Pero dicho esto no podemos compartir la comparación de este hecho con las necesidades de establecer criterios ambientales ya que en su mayoría estos criterios buscan reducir las presiones sobre las masas de agua y esas presiones se ejercen por actividades y usuarios concretos a quienes corresponde, en la medida de lo que establecen las normas, contribuir a la reducción de las mismas.

Alegación 31.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario reforzar de manera efectiva la participación técnica y real de los usuarios del agua, singularmente de las Comunidades de Regantes, en los procesos de toma de decisiones y seguimiento de la planificación hidrológica.

Respuesta:

La Ficha DU-09 aborda la necesaria colaboración y cooperación entre los departamentos de la administración pública para que, cada uno en su ámbito competencial, contribuya al logro de los objetivos de la planificación. Y ello porque al tener competencias sobre distintos factores que inciden en el agua (tanto como demanda como medio ecológico), las políticas sectoriales en cada uno pueden contribuir o no a lograr los objetivos.

No se aborda en la ficha el modo de participación de los usuarios en la gestión del agua que tiene sus propias normas legales establecidas. Por ello sorprende que una Comunidad de regantes reclame mayor participación en los procesos de toma decisiones y de seguimiento de la planificación hidrológica. Las comunidades de regantes participan en la Junta de Gobierno, en el Consejo del Agua de la demarcación, en la Comisión de Desembalse, en la Asamblea de Usuarios y las Juntas de Explotación. Esa representación está regulada en el TRLA, el RAPA o reglamentos específicos (como el que regula el consejo del agua de la demarcación). Todos ellos son órganos de gobierno, gestión, coordinación y participación de los organismos de cuenca. Nos gustaría conocer otros ámbitos administrativos donde la participación de los usuarios fuera al menos de la misma magnitud que en la gestión del agua. De cualquier modo, el EpTI no tiene capacidad para modificar la distribución de la representación de los usuarios en los distintos órganos.

Alegación 32.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario que la planificación identifique de manera expresa la incidencia real que el cumplimiento del Convenio de Albufeira y de otros compromisos ambientales o internacionales tiene sobre las garantías de suministro de las distintas unidades de demanda agraria y sobre las reservas embalsadas disponibles en los sistemas de explotación. [..]

Por ello, cualquier incremento de exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales existentes.

Respuesta:

El análisis que se solicita en la alegación respecto al Convenio de Albufeira se ha hecho en todas las alternativas que figuran en las Fichas DU-06 y 07 debido que se trata de una restricción al uso del agua, de manera que, en todo caso, siempre que no se den las condiciones de excepción, se cumplen los requisitos del Convenio. No se ha incluido su explicación en las Fichas por una cuestión de simplificación. No obstante, con las medidas definitivas, en fase de redacción de plan hidrológico, habrá un apartado específico que aborde este cumplimiento de caudales integrales del Convenio de Albufeira.

Respecto a la segunda propuesta (que las nuevas exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales), el EpTI no puede avalar una cuestión que no está contemplada en la normativa vigente. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 65 del TRLA cuando los usos actuales puedan verse afectados por la planificación hidrológica o por requisitos adicionales de carácter ambiental que hagan imposible ejercer el uso para el que existe concesión, como parece explicar la alegación, podrá reclamarse la correspondiente indemnización. Y ello sin menoscabo de la jurisprudencia ya consolidada en relación con las indemnizaciones por restricciones previas, como son el régimen de caudales ecológicos o los compromisos internacionales o ambientales, más bien en contradicción de la propuesta de la alegación.

Alegación 33.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La creciente interacción entre distintas políticas sectoriales europeas, estatales y autonómicas vinculadas al agua puede generar escenarios de elevada complejidad regulatoria para los usuarios y las Comunidades de Regantes. Por ello, se considera imprescindible que el futuro Plan Hidrológico garantice marcos regulatorios claros, previsibles y técnicamente motivados, evitando duplicidades

administrativas, contradicciones regulatorias y limitaciones carentes de suficiente justificación técnica individualizada.

Respuesta:

En el ámbito del agua, el EpTI es un documento intermedio de la planificación hidrológica que tiene por objeto la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. No tiene que ofrecer seguridad jurídica ya que es un documento instrumental en la elaboración del Plan Hidrológico que se aprueba por Real Decreto y tiene fuerza vinculante.

Por otra parte, la seguridad jurídica para los usuarios que aspiran a desarrollar una actividad la ofrece el procedimiento concesional donde se concreta la actividad en el objeto, el tiempo y el lugar, lo que permite evaluar la actividad en coherencia con los objetivos de la planificación hidrológica. Por tanto, se rechaza la alegación. Los planes hidrológicos se revisan cada seis años, lo que puede suponer que, dentro del marco legal general, haya modificaciones específicas como consecuencia de la revisión planificadora. Seis años, a nuestro juicio es un marco temporal escaso, pero el ordenamiento jurídico establece ese plazo para las sucesivas revisiones y a él debemos ajustarnos.

La Ficha DU-09 pone el acento en la necesidad de incrementar la coordinación y cooperación administrativa en el ámbito de la planificación hidrológica; la alegante reclama esa coordinación en el marco de la gestión ordinaria. Siendo un objetivo razonable, no hay que olvidar cuáles son las competencias de cada administración lo que puede suponer una mayor lentitud de procedimientos, en especial si éstos confluyen en una única actividad. Sigue quedando pendiente la simplificación administrativa ya que, cada vez que hay cambios normativos, no suelen ser para simplificar sino para una mayor complejidad. Al igual que los usuarios también las administraciones padecemos esta complejidad que está al servicio, en este caso, de las garantías. Precisamente la variedad de competencias sobre una misma actividad puede generar esas incoherencias de las que no son culpables quienes deben verificar los requisitos legales sino de las normas que regulan la actividad.

Alegación 34.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Una cuestión relevante que debería ser tenida en cuenta en las evaluaciones ambientales de grandes instalaciones fotovoltaicas es la posible modificación del coeficiente de escorrentía superficial derivada de la implantación masiva de paneles solares. […]

Por ello, se considera necesario que el futuro instrumento de planificación y las evaluaciones ambientales incorporen análisis hidrológicos específicos sobre modificación de escorrentías, incluyendo modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Respuesta:

Compartimos con el alegante su percepción de que la construcción de plantas fotovoltaicas contribuye al aumento de suelo artificial con impactos como compactación y modificación de la permeabilidad del suelo, alteración de la escorrentía e incremento de la erosión.

La planificación hidrológica no puede entrar en el detalle de dichos impactos, que son evaluados específicamente en los procedimientos ambientales a que se ven sometidos los proyectos y que son específicos de cada uno de ellos.

La modificación de la escorrentía superficial producida por una instalación fotovoltaica depende de muchos factores como son la extensión de la planta fotovoltaica, las características edáficas de su localización, las posibles modificaciones topográficas del terreno, el tipo y forma de fijación de los seguidores, etc. Estos aspectos son evaluados de forma cualitativa en los preceptivos informes que emite la CHD, como administración afectada, en el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos, sin poder establecer una evaluación cuantitativa del efecto sobre la escorrentía ya que los promotores no facilitan modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Alegación 35.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Por otro lado, se considera igualmente interesante analizar el potencial uso dual de determinadas infraestructuras de regadío para su contribución al sistema eléctrico nacional, especialmente en aquellos casos en los que existan balsas de regulación situadas a cota elevada y otros condicionantes técnicos favorables. Determinadas instalaciones de modernización podrían adaptarse para funciones complementarias de almacenamiento energético y regulación eléctrica mediante sistemas reversibles, incrementando la utilidad y rentabilidad social de infraestructuras ya existentes.

Respuesta:

Esta indicación del alegante de una posible utilización de las instalaciones inherentes a modernizaciones del regadío para funciones de almacenamiento energético no se ha planteado hasta la fecha en este Organismo. No obstante, cualquier iniciativa que se presente para la correspondiente autorización o concesión se analizará específicamente.

La capacidad de almacenamiento de estas balsas de regulación no suele ser tan elevada como para que las empresas hidroeléctricas consideren rentable la inversión en la implantación de sistemas de bombeo y centrales hidroeléctricas que permitan utilizar este recurso.

Es todo caso, sería la administración competente en la realización de estas modernizaciones y, en su caso, el titular de las infraestructuras de regadío quienes deberían proponer la utilización de las mismas para fines energéticos.

Alegación 36.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

En la ficha se indica que para las aplicaciones y usos del agua vinculados a energías renovables resultan de aplicación las mismas consideraciones previstas para usos consuntivos[..], parecería más adecuado diferenciar entre usos estrictamente consuntivos y usos con retorno efectivo del agua, especialmente a efectos de evaluación de impacto sobre la disponibilidad global del recurso hídrico. Todo ello

Se están empezando a crear nuevas plantas de hidrogeno verde, de bioetanol, etc, que necesitan agua para su desarrollo. Nos oponemos a que se extraiga agua de acuíferos que están en mal estado y, por otro lado, que cuando hayan extraído el agua, puedan verter la molécula resultante a cauces o arroyos, agravando el problema de la contaminación difusa.

Cuando el agua se coja de fuentes superficiales, nos oponemos a que se puedan restar dotaciones al regadío, cuando hay UDAs y comunidades de regantes que incumplen el criterio de garantía [..].

Por tanto, los nuevos usos del agua destinados a la implantación de industrias de producción y almacenamiento de energías renovables, pueden tener un efecto negativo en el regadío, tanto en aguas subterráneas como en aguas superficiales y pedimos que este problema se analice y se aborde con mucho rigor para no perjudicar una actividad económica destinada a la producción de alimentos, que fija población en las zonas rurales y que contribuye al mantenimiento del ecosistema y la disminución de la contaminación ambiental.

Respuesta:

Los parques eólicos y plantas fotovoltaicas precisan agua para su construcción y para algunas operaciones de mantenimiento (limpieza de paneles), siendo los volúmenes demandados no significativos. El suministro de agua para estas instalaciones se realiza habitualmente mediante suministro con camiones cisterna de agua procedente de concesiones vigentes o mediante derivaciones temporales de aguas superficiales, que deben tramitarse en este Organismo, tramitación en la cual se evalúa la disponibilidad del recurso en cada caso particular.

Por otra parte, las instalaciones industriales para la producción de compuestos químicos capaces de almacenar los excedentes de energías renovables como son el hidrógeno verde, el amoniaco, metanol, etc., pueden suponer un uso consuntivo del agua acompañado de grandes volúmenes para la refrigeración que, en algunos casos, revierten al medio hídrico.

La alternativa elegida para este tema importante propone el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos sólo en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua y no que se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, entre ellos el regadío.

Se establecerán dotaciones máximas para la producción de estos compuestos químicos, aplicando las mejores técnicas disponibles y el estado de la ciencia. En ningún caso estas dotaciones irán en detrimento de las dotaciones establecidas para usos agrarios.

En lo relativo al posible impacto ambiental derivado de posibles vertidos y contaminación difusa, estos aspectos se analizan pormenorizadamente en cada caso, en los informes preceptivos que emite este Organismo para la evaluación ambiental de los proyectos a petición del órgano ambiental que corresponda. En estos informes se establecen condicionantes para minimizar estos impactos, que posteriormente se recogen en la declaración de impacto ambiental correspondiente.

Alegación 37.

Conclusiones finales

El actual contexto de cambio climático, reducción de aportaciones e incremento de exigencias ambientales e internacionales obliga a reforzar la resiliencia hídrica de la Demarcación mediante:

- *Una adecuada política de regulación y almacenamiento*
- *El mantenimiento funcional de los cauces*
- *La modernización y optimización de infraestructuras*
- *La revisión técnica de los actuales indicadores de sequía y escasez*

La mejora de la capacidad reguladora de la cuenca no debe entenderse únicamente como una herramienta de garantía de usos, sino también como un instrumento esencial para:

- *La adaptación al cambio climático*
- *La conservación de ecosistemas asociados al agua*
- *La estabilidad de las masas de agua*
- *El cumplimiento de objetivos ambientales*
- *La adecuada atención de los compromisos internacionales derivados del Convenio de Albufeira*

Respuesta:

Todos los aspectos que se citan en las conclusiones finales se han ido valorando a lo largo de la respuesta a este escrito de alegaciones, mostrando un acuerdo con la mayoría de las cuestiones generales aportadas, si bien el enfoque de las medidas puede variar puntualmente, y algunos desacuerdos en especial con la vinculación de un mayor número de infraestructuras de regulación y una mejora de la conservación de ecosistemas asociados al agua.

Alegación 38.

Conclusiones finales

En conclusión, si tenemos en cuenta todo lo manifestado en el cuerpo de las presentes alegaciones, mucho tiene que cambiar la filosofía y el contenido del EpTI y el documento del PLAN que se elabore en el siguiente paso del proceso de planificación para que el voto de los usuarios regantes cuando sea informado por el Consejo del Agua de la Demarcación sea favorable. NUESTRA POSICIÓN SÓLO PUEDE SER LA DE OPONERNOS A LA APROBACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO.

Respuesta:

Respetamos la postura de la alegante en relación con el EpTI. No obstante, de una lectura de las propuestas, sugerencia y observaciones que hace la alegante y de la lectura del EpTI no podemos concluir lo mismo que el firmante del escrito. La mayor parte de las cuestiones que se plantean como mejoras están recogidas en la documentación a consulta pública; hay otras que el EpTI no puede atender porque ya están reguladas en normas de mayor rango y que atenderlas requieren modificaciones legales que no corresponden al promotor del Plan Hidrológico. Otras sugerencias, en

fin, colisionan de facto con la normativa vigente y lógicamente no pueden ser atendidas. Pero en todo caso no se observa justificación para esta opinión desfavorable tan rotunda como muestra la conclusión final.

4.49. Escrito de observaciones Nº 059

Presentado por: D. José Manuel Martín.

En nombre de la Comunidad de Regantes del Canal de Riaza.

Alegación previa.

Que una primera aproximación al documento evidencia el absoluto desprecio, persecución y condicionamiento del mismo respecto a la agricultura de regadío para las aguas superficiales […] está por completo impregnado de un interés "ambientalista", por lo que nos oponemos a su aprobación.

La primera medida del nuevo ciclo de planificación debería pasar por el análisis del cumplimiento del anterior, donde se ejecutaron en torno al 22 por 100 de las inversiones previstas, […] solo puede decirse objetivamente que ha fracasado por su incumplimiento fundamentalmente en cuanto a las inversiones previstas.

Respuesta:

No compartimos la primera observación del alegante: no hay ningún lugar del EpTI donde se haga un juicio negativo sobre la agricultura de regadío como el que se manifiesta en el escrito de alegaciones. En la Ficha DU-06 (cuyo título es "Sostenibilidad y relevancia del regadío") se indica, respecto al regadío: *son muchos los efectos positivos del regadío: fija de población en el medio rural; aporta mayor diversificación de cultivos; aporta la mayor fuente de materias primas para la alimentación humana; las zonas con regadío tienen una densidad de población tres veces superior a las del secano; impulsa el empleo al generar 3,6 veces más de empleos que el secano; en las zonas de regadío se incorporan 3,5 veces más jóvenes al sector agrario que en el secano; finalmente las zonas modernizadas generan hasta 7,5 veces más inversión que las zonas de secano. Estos valores son importantes en una demarcación hidrográfica en la que la un 77% de su territorio se corresponde con municipios en riesgo de despoblación.*

El valor de producción del regadío asciende a 1.269 M€ y supone el principal motor económico en gran parte del medio rural de la demarcación. Además, el regadío tiene un papel fundamental para asegurar la autonomía alimentaria y reducir la inflación de la cesta de compra del consumidor y tiene un efecto arrastre en el conjunto de la economía, ya que es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. La contribución del sistema agroalimentario a la economía española en el año 2020 se puede estimar en aproximadamente un 10,60%. Esta elevada contribución supone que el sistema agroalimentario es el segundo generador de riqueza nacional tras el turismo.

Debido a la mayor productividad del regadío frente al secano, la agricultura de regadío es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. En el caso de la demarcación del Duero alrededor del 30% del valor económico de la producción agraria proviene del regadío al aire libre o invernadero, porcentaje que para el conjunto de España se eleva a alrededor del 70%. Por tanto, el EpTI no evidencia ningún desprecio, persecución o condicionamiento a la agricultura de regadío, sin menoscabo de poner de manifiesto que alguna de las presiones que genera sobre las masas de agua requieren ser corregidas.

Tal y como se pone de manifiesto en la Ficha DU-09, el grado de ejecución de las medidas a fecha 31 de diciembre de 2024 es del 24,5% de la inversión prevista, valor escaso cuando ha pasado un tercio del tiempo del ciclo de planificación. Siendo esto así, sin embargo, se observa que en determinados grupos de medidas el avance es superior a la media: así en materia de saneamiento y depuración la ejecución supera el 45% de la inversión, en abastecimiento un 37%, en medidas de gestión de inundaciones un 34%. Reconociendo que existe un importante retraso en la ejecución de las medidas, no compartimos la visión tan negativa que muestra la alegante.

Alegación 1.

Que en lo que respecta particularmente a esta Comunidad de Regantes, consultados los datos en la aplicación MÍRAME-IDEDUERO de ese organismo, hemos comprobado que esta Comunidad consta con una superficie regable asignada total de 5030 has. con derecho a riego repartidas en tres sectores, que está equivocado puesto que ***lo correcto son 5232 has.***

Y el estudio agronómico elaborado por SEIASA como sociedad pública promotora de la obra de modernización de regadío ya dejó establecido que la superficie con derecho a riego en la suma de los tres sectores era de 5.232,27 has., con un consumo de 36 Hm3: "el consumo anual para toda la superficie de regadío (5.232,27 has) sería de 16,80 hm3/año en el sector I y de 20,60 hm3/año en los sectores II y III." Por tanto, ***en total 36 hm3.,*** *y no 30,18 Hm3 que recoge el Plan.*

En todo caso teniendo en cuenta el volumen medio anual suministrado a esta Comunidad de Regantes, así como el tipo de cultivo (35 por 100 de viñedo), interesa a esta Comunidad ***la ampliación de la zona regable con el mismo volumen de agua concedido.*** *Se viene demostrando año tras año que con el volumen de agua establecido como dotación anual es capaz de desarrollar la campaña de riego satisfactoriamente y dejar en el embalse un volumen de agua suficiente para la siguiente campaña de riego, muy por encima de las previsiones de la Junta de Desembalse.*

Respuesta:

La superficie que se considera en la elaboración del Plan Hidrológico para la Comunidad de Regantes del Canal de Riaza (Unidad de Demanda Agraria 2000137 - ZR Canal de Riaza) es de 5.030 hectáreas, y el volumen demandado de 30.180.000 m^3/año (dotación 6.000 m^3/ha y año) ya que son los datos que figuran en su inscripción en el Registro de Aguas (Sección: A – Tomo nº: 28 – Hoja nº: 14 – Número: 12414) según Resolución de concesión de 2 de marzo de 2004 del Ministerio de Medio Ambiente (Referencia Integra C-0415/2003). Esta es la superficie y volumen máximo anual que se considerará en el nuevo plan hidrológico.

Se encuentra en tramitación el expediente MC-0550/2008 que hasta la fecha no ha finalizado. Si la resolución de este expediente se produjera con anterioridad a la aprobación del plan hidrológico, serían los datos de superficie y volumen máximo anual de esa resolución los que se tendrían en cuenta.

Alegación 1bis.

Se solicita además el control de derivaciones que por delante de nuestra Comunidad hace la ***Comunidad de Regantes de la Vega de la Villa de Roa****, que perjudica nuestra capacidad de riego en plena campaña, y que interesamos que se exija el cumplimiento de la Orden ARM/1312/2009 de 20 de mayo*

que regula la instalación de los sistemas de control de volúmenes de agua utilizados, bajo apercibimiento de promover las acciones sancionadoras contra sus responsables.

Respuesta:

Esta cuestión no es objeto del EpTI ya que corresponde al ámbito de gestión. Nos consta que han denunciado desde 2019 la ausencia de sistema de control de la CR DE LA VEGA DE LA VILLA DE ROA, denuncias que han conllevado la apertura de diversos expedientes sancionadores. El modo de actuar en esta materia es como han hecho hasta ahora, al tratarse de una cuestión de gestión ordinaria.

Alegación 2.

DU-01. Contaminación difusa.

El diagnóstico del documento refleja de forma adecuada la persistencia de problemas de nitratos y biocidas, pero no valora suficientemente los esfuerzos ya realizados por agricultores y ganaderos (modernización de regadíos, asesoramiento en fertilización, implantación de GIP).

La caracterización de presiones debería diferenciar con mayor claridad entre cultivos intensivos, cultivos leñosos, ganadería estabulada y extensiva, pues sus aportes de nutrientes y fitosanitarios son muy distintos.

Se aprecia un déficit en la cuantificación de los beneficios de las inversiones en modernización de regadíos y fertiirrigación: sin esos datos es difícil justificar medidas más restrictivas.

Respuesta:

Empezando por la última observación, como se ha comentado en la respuesta a la primera alegación, el EpTI deja de manifiesto la relevancia de la modernización del regadío para el logro de los objetivos ambientales y la mejora de la viabilidad de las explotaciones. Sin embargo, las presiones por contaminación difusa no se deben exclusivamente y en su mayoría al regadío donde el aporte de agua y el riesgo de lixiviado está controlado, sino al secano, a las aplicaciones de estiércoles y purines y a otras actividades como puede ser las descargas de aguas residuales urbanas no correctamente depuradas o los tratamientos biocidas en infraestructuras lineales, como se pone de manifiesto en la Ficha DU-01.

Estamos de acuerdo en que la modernización de regadíos permite aplicar nuevas tecnologías en el sector agrario, sin este tipo de infraestructuras sería imposible llegar a conseguir al riego de precisión, se maneja mejor el agua, y consecuentemente se evita que las aguas de retorno de riego sean menos y con menor carga contaminante, pero por el contrario el poder disponer de mejores infraestructuras da pie a siembras más densas, que se traducen en más rendimiento por hectárea y más necesidad de abonado, también ocurre que esto posibilita la obtención de dos cosechas en un mismo año, más cultivo por consiguiente más abonado, exceptuando los cultivos de leguminosas.

Las estaciones de medida existentes tanto en aguas subterráneas como en ríos y arroyos que drenan algunas de las zonas regables, siguen dando valores de contenido en sustancias nitrogenados por encima de los limites legalmente establecidos. Analizando datos procedentes de sistemas de control de otros organismos, SINAC, controles sanitarios, campañas de medición en campo realizadas con nuestros medios, siempre aparecen algunos valores altos en zonas de mayor actividad agroganadera.

La caracterización de la presión por contaminación difusa ya tiene en cuenta los tipos de cultivos y la carga ganadera en cada cuenca vertiente de la demarcación hidrográfica, ya que se utiliza para identificar las presiones y los impactos dos fuentes de información: las redes oficiales de control de calidad de agua superficial y subterránea y los balances que el MAPA realiza cada dos años sobre el excedente de nitrógeno que provoca esa carga de nutrientes en las aguas. Y esta última fuente de información utiliza la información sobre cultivos, los sistemas de cultivo y las prácticas agrarias y ganaderas en cada zona.

Los esfuerzos que realizan los agricultores son conocidos porque ya se encargan las organizaciones profesionales agrarias de realzarlos; sin embargo, pese a ese esfuerzo, el problema no va a menos por lo que debemos preguntarnos qué no estamos haciendo bien o qué debemos mejorar. También desde instancias europeas se advierte a España con sanciones millonarias en aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2024 que concluye que España no cumple la directiva de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. De hecho, una de las comunidades autónomas en la que la sentencia pone el foco es Castilla y León, territorio en la que ejerce su actividad la asociación alegante, al no haber aplicado las medidas obligatorias ni lograr mejorar la calidad de las aguas. Dos años después de la sentencia, la Comisión Europea señala que solo 4 comunidades autónomas españolas no han tomado medidas, entre ellas Castilla y León. (Noticia La Gaceta de Salamanca, de 5 de junio de 2026). La amplia legislación existente para regular y minimizar este problema (entre otras, el Real Decreto 47/2022, el Real Decreto 1514/2009, relativo a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, o el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios) da idea de la complejidad para su resolución.

Alegación 3.

DU-01. Contaminación difusa.

Sobre los "trabajos de Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación terminados en marzo de 2025", se plantean las siguientes dudas:

- *¿Cuántos puntos se han muestreado cada campaña en la demarcación, tanto para aguas superficiales como para subterráneas?*
- *¿Este trabajo va a ser repetitivo? ¿Cuál es el programa/planing y el coste presupuestario anual destinado a él?*

Solicitamos una copia de los trabajos de "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación"

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, el trabajo "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación", se ha llevado a cabo por el MITERD en las campañas 2023 y 2024, duplicando analíticas en cada punto de muestro. En la demarcación hidrográfica del Duero, sobre 79 puntos de muestreo de aguas superficiales de la demarcación hidrográfica, atribuyen el 61% de la contaminación por nitratos a origen agrario (principalmente fertilizantes inorgánicos) y el 25% a mezclas con aguas residuales

urbanas, el 14% restante de origen indeterminado. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, sobre 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, se muestra un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería.

Dado que el trabajo fue encargado por la Dirección General del Agua, del MITECO, puede dirigirse a ese departamento en petición del trabajo.

Alegación 4.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 1 (Reducción de excedentes y bandas de protección):

Las reducciones propuestas (hasta un 50% de excedentes o más) deben graduarse según tipología de cultivo, textura del suelo y riesgo de lixiviación, evitando fijar límites uniformes que puedan poner en peligro rentabilidad de cultivos con baja lixiviación (viñedo, olivar, almendro).

Las bandas de vegetación de ribera son útiles, pero su implantación debería ser voluntaria con compensaciones claras y planes de control de fauna (topillo campesino, conejos) para no crear nuevos problemas.

Respuesta:

La normativa del Plan Hidrológico, específicamente en su Apéndice 14.2, establece umbrales máximos de excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) que distinguen explícitamente entre cultivos herbáceos y leñosos, tanto en regadío como en secano. Para los cultivos leñosos (donde se incluyen viñedos, olivares y almendros), los valores de excedente permitidos son significativamente distintos y más ajustados a su fisiología que los de los herbáceos.

Las reducciones propuestas no son arbitrarias tampoco, sino que resultan de la aplicación del modelo PATRICAL, una herramienta de simulación del ciclo hidrológico y la calidad de las aguas distribuida espacialmente. Este modelo calcula el balance de nitrógeno teniendo en cuenta variables territoriales específicas como la recarga por lluvia, la textura del suelo (a través de los coeficientes de escorrentía y lixiviación) y el tipo de cultivo por término municipal. La zonificación se realiza a nivel de "sectores" de masas de agua, lo que permite adaptar la exigencia a la realidad geomorfológica y al riesgo real de cada zona.

La propuesta sobre la voluntariedad de las bandas de protección parece razonable y se abundará sobre ella en el presente ciclo de planificación. Se debe indicar, por aclarar, que la vegetación de ribera puede constituir un refugio para distintas plagas, pero también para sus depredadores, que necesitan espacios donde establecer zonas de cría y refugio para desarrollarse.

Alegación 5.

Respecto al tema importante DU-01, se comparte el fomento de biofertilizantes, bioestimulantes y control biológico, pero se requiere apoyo técnico y financiero estable, así como validación agronómica local antes de exigir sustitución de fertilizantes tradicionales.

Debería contemplarse un periodo transitorio de al menos 5-7 años para la adopción realista de estas prácticas.

Respuesta:

Las propuestas que hace la Ficha DU-01 para la alternativa 2 son propuestas que pretenden orientar la decisión de las autoridades competentes en materia de investigación y transferencia de tecnología para abordarlos y movilizar la inversión necesaria para esta mejora de conocimiento. Pero para impulsar esas decisiones es necesario que los sectores implicados (agua, agricultura, medio ambiente, …) orienten en esa línea y confirmen esta posible mejora. No se pretende establecer como obligatorio el uso de estos productos en tanto se justifique su eficacia y sean competitivos económicamente, para lo cual se necesita ese trabajo de investigación y transferencia.

Alegación 6.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 3 (Depuración urbana):

Es positivo que se incluyan fuentes urbanas, pero el documento debería cuantificar su aportación relativa al problema global para no sobrecargar sólo al sector primario.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, las fuentes de contaminación difusa son varias y entre ellas están las descargas urbanas no adecuadamente tratadas. Sin embargo, sin negar su contribución al problema general, el trabajo de estudio del origen de la contaminación nitrogenada en las aguas de la demarcación hidrográfica al que se alude en la respuesta a la alegación 3ª, el origen del nitrógeno encontrado en el agua es de origen agrario en el 61% de las muestras de agua superficial y en el 55% de las muestras de agua subterránea, lo que pone de manifiesto que la mayoría de los nitratos presentes en el agua tiene un origen agrario.

Alegación 7.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 4 (Plantas de biogás):

La valorización de purines es esencial, pero se precisa planificación territorial: ubicación de plantas, logística de recogida y retorno del digestato tratado, evitando concentraciones que generen rechazo social.

Respuesta:

Estamos de acuerdo con parte de lo que se expone en la alegación, en la ficha se propone como alternativa, porque su correcto manejo genera menos problemas ambientales que las prácticas de aplicación de los purines en bruto como se está haciendo en la actualidad. No obstante, como se indica

sería necesaria una planificación territorial de esta nueva actividad. Hasta la fecha la autoridad competente (comunidad autónoma) no nos ha trasladado ningún criterio al respecto.

Alegación 8.

La dispersión competencial señalada en la Ficha DU-01 del EPTI requiere de mecanismos concretos:

- *Convenios entre CHD y Consejerías de Agricultura para seguimiento conjunto.*
- *Creación de mesas de trabajo permanentes con organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes.*
- *Inclusión de Juntas Agrarias Locales en la difusión y control de buenas prácticas.*

Antes de aprobar medidas que impliquen reducción de fertilización o prohibición de biocidas, debe elaborarse un análisis coste-beneficio que contemple:

- *Pérdidas de producción y costes de adaptación.*
- *Impacto en empleo rural y en industrias de insumos.*
- *Ahorros ambientales y beneficios para el abastecimiento de agua.*

Respuesta:

La cooperación entre administraciones y la difusión de la problemática de la contaminación difusa son aspectos relevantes para buscar las soluciones. De hecho, se ha avanzado en los últimos cinco años en la percepción del problema y el convencimiento de que se debe ser proactivo en la búsqueda de soluciones, a lo que ha contribuido la visibilidad de problema mediante el expediente sancionador a España por incumplimiento de la Directiva de nitratos y por las medidas limitantes que se incluyen en los planes hidrológicos. También las organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes han desarrollado actividades formativas para sus asociados poniendo el foco también en este problema de la contaminación difusa: ya es normal que en las reuniones técnicas que estas entidades organizan se empiece a hablar del problema del exceso de nutrientes no solo como un problema económico de rentabilidad de explotación o productividad de los cultivos, sino también como un modo de no perjudicar al medio ambiente.

Dicho esto, los convenios a los que se refiere la alegación no pueden pretender eludir las competencias de cada administración en esta materia, en la que el seguimiento de la contaminación en agua corresponde a la administración del agua y la implantación de medidas corresponde a la administración ambiental y agraria.

La Ficha DU-01 en la alternativa 1 evalúa el impacto de la reducción de excedentes de sustancias nitrogenadas en función de la zona de la demarcación hidrográfica donde nos encontremos. Esta alternativa 1 *supone la máxima reducción posible de los excedentes de nitrógeno (no de la aplicación) compatible con unas producciones agrarias óptimas. (…). En este análisis se identifica que, por ejemplo, una reducción de cerca del 35% de la fertilización implicaría una reducción del 50% de los excedentes y una reducción del 56% de la aplicación de fertilizantes una reducción del 80% de los excedentes de nitrógeno.*

Y se analiza en la Tabla 1 de la Ficha el efecto de la reducción de excedentes sobre el territorio:

Reducción de aplicación de N	Reducción de excedentes	Superficie sector (km²)
10%	*25%*	*3.227*
20%	*50%*	*19.629*
40%	*80%*	*3.872*

Esta información podría servir de ayuda a la Administración autonómica competente, en esta alternativa, para reforzar los planes de actuación de manera que se puedan limitar la aplicación de nutrientes de manera zonal de forma que se asegure que los excedentes sean inferiores a los contemplados en el citado apéndice 14.2. Esto podría implementarse de diversas formas:

- *Mediante la reducción de las cantidades máximas de N por hectárea en los planes de actuación de las zonas vulnerables;*
- *Mediante la reducción de las cantidades a aplicar de nutrientes fuera de las zonas vulnerables (de acuerdo con los criterios de Patrical) a través de normas de condicionalidad vinculadas a aumentos de las ayudas PAC.*
- *Mediante la aplicación de tributos a gravando el exceso de N adquirido en el mercado sobre la dosis contemplada en los planes de actuación.*

Alegación 9.

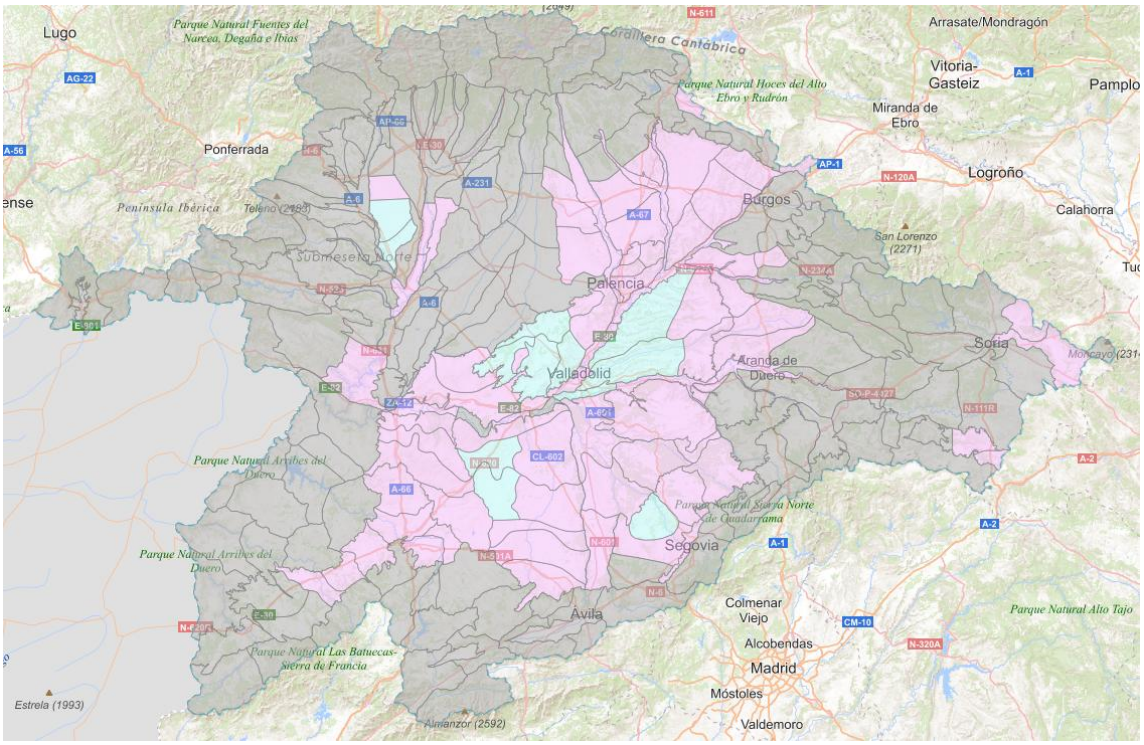
Se proponen algunas medidas en el tema importante DU-01:

- *Ajustar los límites de aplicación de nitrógeno según balance real de cada cultivo y zona (considerar coeficientes de absorción y mineralización).*
- *Priorizar el control y mejora de puntos de vertido urbano e industrial antes de imponer nuevas restricciones al abonado agrícola.*
- *Incluir líneas de ayuda específicas para:*
  - *Implantar bandas de protección voluntarias y mantenerlas.*
  - *Transición a biofertilizantes y control biológico.*
  - *Asesoramiento profesional y agricultura de precisión.*
- *Potenciar el uso de herramientas de gestión de nutrientes (cuadernos digitales, sensores de N en suelo/planta).*
- *Favorecer acuerdos de economía circular entre plantas de biogás, explotaciones ganaderas y agricultores para el uso seguro del digestato.*
- *Seguimos demandando al MITERD y a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la realización de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario mediante el estudio y muestreo significativo de parcelas de riego por gravedad, de riego modernizado y parcelas en las que ya se esté utilizando la fertirrigación para poder sacar conclusiones basadas en datos sobre la mejora que implica la tecnificación y digitalización del regadío en este apartado.*

Respuesta:

Como se indica en el EpTI y también en el Plan Hidrológico vigente, los límites del excedente de sustancias nitrogenadas se han hecho a partir de la presión identificada en forma de contenido de

nitratos en las agua superficiales y subterráneas. Y esos límites se han fijado en forma de sectores territoriales, tal y como aparece en la imagen (en rosa la reducción del excedente sería del 25%, en azul la reducción del excedente sería del 80% del actual y en gris no sería necesaria esa reducción):



La traslación de la reducción de excedentes en cada sector a los cultivos presentes en el mismo, requiere un trabajo de detalle de los organismos competentes en materia agraria que pueden hacer esa distribución con criterios más técnicos que los que puede hacer el organismo de cuenca. De hecho, esta distribución de sectores tiene como fin ofrecer a la autoridad competente una información con la que realizar el análisis que solicita la alegante.

Sin duda es necesario mejorar el control de las descargas de las EDAR urbanas e industriales, sobre todo de poblaciones pequeñas. Pero como pone de manifiesto la Ficha, el análisis de origen de la contaminación difusa por técnicas isotópicas concluye que el origen de la contaminación en la mayoría de los puntos de muestreos es el agrario al encontrar en más de la mitad de las muestras nitrógeno de origen inorgánico y de residuos animales (61% de las muestras en aguas superficiales y 55% en aguas subterráneas). Por tanto, parece lógico que pongamos el objetivo en cómo reducir esos excedentes.

Coincidimos con la alegante en que bandas de protección, asesoramiento y uso de nuevos productos deben ser medidas de carácter voluntario y adecuadamente compensadas. Y pensamos que el marco financiero de la PAC es la herramienta adecuada para ello. Lógicamente para que esto sea factible es necesarios que la administración competente en esta materia tenga interés en dotar a estos servicios ecosistémicos de la financiación adecuada.

Las herramientas de gestión de nutrientes ya son obligatorias a partir de la entrada en vigor del Real Decreto de nutrición sostenible de los suelos, por lo que esperamos que esta medida contribuya a la reducción de la contaminación cuando tenga el suficiente recorrido, ya que no será inmediato. El seguimiento de la contaminación en las redes de control de agua nos dará información sobre su eficacia.

El uso del digestato procedentes de plantas de biogas alimentadas con purines animales en lugar de la aplicación directa al suelo puede ser una mejora en la reducción de la contaminación siempre que haya transparencia en la aplicación, distribución y seguimiento y no supongan una mayor aportación de nutrientes al suelo. De hecho, la Ficha DU-01 señala que, para *el caso concreto de Castilla y León, que supone el 98,26 % de la demarcación del Duero, para el año 2021, 61.186 tn de nitrógeno de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 359.013 tn de N. Si se eliminase totalmente el desecho ganadero mediante plantas de biogás y no se sustituyese la fertilización orgánica en cultivos por inorgánica, se reduciría en un 17% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso del 50% de los excedentes de nitrógeno.*

Para el caso del fósforo y Castilla y León, para el año 2021, 13.736 tn de P de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 58.261 tn de P. En este caso, la eliminación del desecho ganadero mediante plantas de biogás supondría que se reduciría en un 23% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso superior al 50% de los excedentes de fósforo.

La eliminación de la fertilización orgánica mediante revalorización y transformación en biogás de la deyección ganadera, sin sustitución por fertilización inorgánica, permitiría cumplir los objetivos de la UE de reducir un 20% el uso de fertilizantes y reducir un 50% los excedentes antes de 2030.

Respecto a la demanda de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario bajo distintos sistemas de regadío, consideramos que es un trabajo que no está hecho pero que no corresponde al MITERD al haber un ministerio y unas consejerías autonómicas competentes en materia agraria.

Alegación 10.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Estando de acuerdo en que debe buscarse en todo momento un aprovechamiento sostenible del recurso que mantenga las masas de agua, ya que esta es la forma de garantizar la seguridad de las explotaciones agrícolas, se deben fijar uno objetivos a alcanzar con unos valores definidos y razonables que garanticen la actividad económica que se viene desarrollando. Considerar la serie histórica de la piezometría de la masa como dato de partida a la hora de determinar las acciones a realizar supone definir un objetivo a alcanzar erróneo, enmascarar la realidad actual de la masa y no otorgar a las medidas que el usuario está llevando a cabo (digitalización, control de las extracciones, gestión por parte de las comunidades de usuarios, etc) la importancia que tienen. [..]

De la misma forma que se tiene un control sobre el uso del recurso, creemos necesario que se hagan estudios hidrogeológicos de detalle en los que, de forma pública y accesible a todos los interesados, se analice la situación real en estas masas de agua de las aportaciones al acuífero y su tasa de renovación […].

La mitigación de los efectos del cambio climático que se plantean sobre las masas de agua subterránea, se debe plantear, no desde la restricción de las extracciones, sino desde el control de las mismas y la ejecución de una serie de infraestructuras de reserva o acumulación que de forma progresiva permitan la sustitución de bombeos y otorguen garantía a la actividad económica en situaciones de escasez sin revertir la dinámica natural del acuífero.

Respecto a las alternativas que se plantean en el documento, estamos totalmente en desacuerdo con el núcleo central de todas ellas: el mantenimiento de las medidas normativas del plan hidrológico vigente para el nuevo ciclo de planificación, sobre todo en lo que se refiere a los artículos 33. [..]

Respuesta:

Los objetivos para las masas de agua subterránea son alcanzar el buen estado y evitar el deterioro, tal y como establece el artículo 4 de la Directiva marco de al Agua y el artículo 40 del TRLA. Ese buen estado para el objeto de la ficha DU-02 es que las extracciones no superen a los recursos naturales, simplificando. Este objetivo además redunda en beneficio de los usuarios del agua ya que el buen estado contribuye a un aumento de los niveles piezométricos que suponen menos costes de bombeo. Por tanto, el objetivo es claro. Y ante posibles colisiones de este buen estado con los usos, la propia directiva en su artículo 4(5) señala cuáles son los requisitos que deben verificarse:

a) que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende el uso del agua no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor que no suponga un coste desproporcionado;

b) que la administración proponente (en este caso la comunidad autónoma) garantice para las aguas superficiales, el mejor estado ecológico y estado químico posibles teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación,

c) que la administración proponente para las aguas subterráneas garantice los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación;

d) que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.

Tal y como se plantea la alegación no queda claro si estos criterios se garantizan.

Conocer la realidad de las reservas subterráneas de agua es un aspecto clave en la adecuada gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Para ello el seguimiento de los casi 500 piezómetros de la cuenca ofrece una información muy valiosa. Gracias a esta información se concluye que en la actualidad la explotación del agua supone que en las masas de agua en mal estado cuantitativo se extrae entre un 10 y un 14% más de lo que se recarga anualmente por medios naturales, es decir, sacamos algo más agua de la que la naturaleza es capaz de reponer.

Como consecuencia los niveles del agua subterránea descienden ligeramente, incrementando los costes de producción del sector agrícola y poniendo en serio peligro la supervivencia del modelo socioeconómico actual y del entramado ecológico de la zona. Todo esto sin olvidar que, en las dos últimas décadas del siglo pasado, estas masas sufrieron un descenso generalizado en sus niveles de agua de unos 30 metros, situación que ha repercutido en la merma de caudales en los ríos que se asientan sobre estas masas.

Por todo ello la Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto en marcha estudios en colaboración con distintos organismos como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Dirección General

del Agua (DGA), para seguir mejorando en el conocimiento del estado actual de la masas de agua subterránea y proponer medidas que permitan la recuperación paulatina de las mismas, gracias al ahorro de agua con una correcta gestión agrícola y con medidas de recarga artificial, sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales, done sea posible, se mencionan este tipo de actuaciones porque están implantadas en algunas zonas de estas masas con resultados esperanzadores. De todas formas, en la ficha ya se proponen actuaciones de este tipo y otras. Toda esta información se vuelca en los planes hidrológicos, cada seis años, y en los informes de seguimiento cada año; además los datos de piezometría y calidad de las aguas subterráneas, así como los balances están disponibles en la base documental Mírame-IDEDuero que se puede consultar por cualquier ciudadano en la web de la Confederación (https://mirame.chduero.es/chduero/public/home).

No podemos compartir la petición de la alegante de eliminar todas las restricciones y limitaciones sobre las masas de agua en mal estado cuantitativo y, como alternativa, no poner ningún límite a nuevos usos del agua ya que, de aceptarlo, supondría no solo no alcanzar el buen estado sino también contribuir al deterioro adicional y, de forma añadida, perjudicar a los usuarios que ahora disponen de derecho vigente y que esperan la protección administrativa de su derecho.

Alegación 11.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Para la configuración del nuevo plan hidrológico se propone:

1.- La derogación de los artículos 33 y 34 de la actual normativa del plan hidrológico vigente y la reformulación de aquellos artículos relacionados para permitir la novación de todos los derechos inscritos que estén en explotación.

2.- Permitir la explotación de los aprovechamientos otorgados (incluso el otorgamiento de otros nuevos) dentro de aquellos espacios naturales o zonas protegidas conforme lo establezca la autoridad ambiental y con las características que documento de gestión correspondiente determine.

3.- Ejecución de aquellas infraestructuras que permitan la recarga de las masas de agua o la diminución de la presión sobre las mismas y estudios de detalle de determinadas zonas con mayores dificultades con la finalidad de dar soluciones que permitan mantener la actividad económica que se viene desarrollando.

4.- Control de las extracciones en toda la cuenca en la misma medida y con la misma intensidad que se exige a las CUAS.

5.- Revisión de las dotaciones brutas comarcales, su asignación y su configuración.

6.- Incentivar económicamente al usuario en la adopción de medidas e instrumentos tendentes a la mejora en el control de las extracciones o programas de digitalización que participen en el conocimiento y caracterización de la masa de agua.

7.- Establecer mecanismos de transferencia del conocimiento generado a nivel técnico y científico como programas de formación del usuario, plataformas de asesoramiento o redes de información, y establecer algún órgano que permita la participación del usuario de aguas subterráneas en la toma de decisiones que afectan a la cuenca.

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación anterior, los artículos 33 y 34 constituyen un régimen que permite alcanzar el buen estado de las masas de agua y evitar el deterioro. De una forma u otra, estos criterios se vienen aplicando en la demarcación hidrográfica desde 2010 y son parte de la explicación de que la tendencia descendente de la piezometría identificada en los años 1980 a 2008, se haya suavizado e incluso estabilizado.

En cuanto a lo que manifiesta el alegante de la prohibición de aprovechamientos otorgados, hasta la fecha no se ha prohibido su uso siempre que se ajusten a la legalidad. El otorgamiento de nuevos aprovechamientos en masas de agua en mal estado cuantitativo, entendemos que no contribuye en absoluto a una mejora de la situación, ni se ajusta a un uso racional, que asegure el futuro del regadío en dichas masas, sería como incentivar la vuelta a la situación de los años 80 y 90 del siglo pasado, con descensos del nivel piezométrico de 2 y 3 metros por año.

La recarga artificial de acuíferos es una práctica que se lleva haciendo es esta cuenca desde hace más de 20 años, las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 la Confederación encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos, teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, como aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, nos parece una alternativa a tener en cuenta para el fin que propone el alegante, por lo que ya se contempla como medida en la alternativa 3 del EpTI, a la espera de que la autoridad competente pueda validarla y asumirla teniendo en cuenta todos los condicionantes: ubicación de estas infraestructuras, su proximidad a cauces con recurso suficiente, los costes de las obras, su financiación, y los costes de explotación y energía, pues la mayoría han de llenarse con bombeos,…; en definitiva muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

La instalación de contadores para el control de las extracciones de agua está regulada según La normativa española que obliga a todos los aprovechamientos de aguas a disponer de sistemas de medición de caudales, según el TRLA (art. 55.4) y el Reglamento del DPH. Esta obligación se ha reforzado con la Orden TED/1191/2024, que impone contadores homologados y control electrónico con envío de datos. Los equipos deben cumplir normativa metrológica y adaptarse al tipo de captación. Como se ha explicado en diversos foros, esta Orden, así como la que ha sustituido de 2009, permiten que más del 80% de la demanda de agua de la cuenca pase por sistemas de control. Evidentemente los contadores de la categoría 1ª, que suponen poco volumen a escala de cuenca (menos del 20%) pero número muy alto, van progresivamente instalándose y remitiendo información.

Las dotaciones brutas máximas anuales aplicables en los cultivos por comarcas agrarias, que figuran en el Plan Hidrológico, están basadas en datos obtenidos de publicaciones de organismos públicos como son las distintas Consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, del Ministerio de

Agricultura, y antes de su aprobación se someten a información pública, como todo el contenido del Plan Hidrológico. En el Anejo 5 del Plan Hidrológico vigente se explica el procedimiento para su cálculo: cálculo de la dotación neta a partir de las necesidades de los cultivos obtenidas de InfoRiego y de la distribución de los cultivos a partir de las declaraciones de la PAC de los años 2013-2019; cálculo de la eficiencia global: calculada como el producto de las eficiencias de transporte, distribución y aplicación; cálculo de la demanda bruta como el producto de la dotación neta por la superficie asignada entre la eficiencia global. Consideramos que es una información adecuada al proceder de fuentes oficiales y no sujeta a apreciación subjetiva.

Respecto a incentivar económicamente la instalación de contadores, el artículo 3 de la Orden TED/1191/2024 es muy clara al respecto al señalar que, en *todos los aprovechamientos de aguas, **los titulares están obligados a instalar y mantener un sistema de control volumétrico** que permita la medición de los volúmenes de agua captados, junto con un sistema de registro y almacenamiento.*

La Confederación no tiene competencias en materia de difusión y transferencia de tecnología. Normalmente da cuenta de los trabajos que realizad en el ámbito del dominio público hidráulico, seguridad y gestión de infraestructuras y planificación hidrológica en los foros ordinarios que otros agentes organizan: congresos de seguridad de presas, congresos de comunidades de regantes, jornadas de restauración de ríos, … Por otra parte, en el ámbito de las CUAs, anualmente se celebran reuniones técnicas de la Confederación con sus presidentes para aclarar conceptos y fomentar las buenas prácticas. Lógicamente no se invita a esas sesiones a las comunidades de regantes de aguas superficiales como la alegante que ya tiene su ámbito de representación en la Junta de Explotación Pisuerga-Bajo Duero.

Los usuarios del agua participan en la gestión de la cuenca a través de los órganos que están establecidos normativamente. Así el artículo 26 del TRLA identifica como órganos de gestión, en régimen de participación, las Juntas de Explotación. Su finalidad es coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las masas de agua cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Este es el marco en que los usuarios de aguas subterráneas pueden participar; de hecho, en la alternativa 1 de este tema importantes se establece como una de las medidas que podrían ponerse en marcha.

Alegación 12.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Ya hemos dejado claro en la introducción cuál es la situación demográfica y económica de nuestras zonas rurales, por lo que cualquier medida que se aplique en mejorar los problemas contenidos en la ficha no debe empeorar la situación descrita. Si se mantiene la consecución de ese objetivo, no nos oponemos a que se puedan adoptar medidas que puedan mejorar la conectividad fluvial (longitudinal, lateral y vertical) que mejore el funcionamiento de los ecosistemas.

Del análisis de la ficha parece desprenderse una apuesta prioritaria por modelos intensivos de naturalización fluvial, basados en esquemas de restauración ecológica donde el cauce aparece acompañado por bosque de galería y bandas de vegetación herbácea en ambas márgenes, favoreciendo así la conectividad longitudinal y transversal de los flujos hídricos y sedimentarios [..] dicho enfoque puede resultar excesivamente homogéneo si no se tienen suficientemente en cuenta las

particularidades geomorfológicas, históricas y territoriales de numerosos cauces [..]. Existen determinados tramos del Dominio Público Hidráulico que, en realidad, constituyen cauces profundamente transformados por la acción humana a lo largo de siglos, especialmente sobre antiguas llanuras lacustres o cuencas endorreicas sedimentarias desarrolladas durante el Pleistoceno.

En numerosos casos, los cauces actuales responden a procesos históricos de excavación y drenaje artificial desarrollados con el objetivo de desecar zonas inundables o lagunares y aprovechar agronómicamente las fértiles vegas originadas por procesos de colmatación sedimentaria. [..]. Por ello, en determinados sistemas hidrológicos altamente antropizados, la recuperación de modelos teóricos de naturalización podría requerir alteraciones territoriales de enorme magnitud, incompatibles en muchos casos con la realidad física actual, con los usos consolidados existentes y con los derechos legítimamente adquiridos sobre los terrenos adyacentes.

Asimismo, debe tenerse presente que sobre los terrenos colindantes con los cauces concurren frecuentemente derechos consolidados, singularmente derechos de propiedad privada, cuya eventual afección exigiría las correspondientes compensaciones y una adecuada justificación basada en criterios de proporcionalidad.

Respuesta:

Se agradece el comentario sobre la buena disposición para la mejora de los ecosistemas fluviales.

La normativa actual apuesta por una restauración fluvial que lleve a los ríos, lagos y humedales a una situación lo más similar a su situación original previa a la intervención humana. Esto permite crear entornos más resilientes a la contaminación y más seguros ante eventos extremos como inundaciones, entre otros, con las consiguientes ventajas para los seres humanos. Por situación original no se entiende una situación uniforme, sino adaptada a cada tipo de río. A modo de ejemplo, aquellos ríos con hidrología extrema no tienen asociado un bosque de ribera ya que periódicamente las avenidas lo arrastran, permitiendo únicamente la presencia de individuos jóvenes. Para estos ríos la existencia de una gran presencia de bosque de galería es síntoma de alteración del régimen hídrico, lo cual suele ocurrir, por ejemplo, aguas debajo de los embalses.

Si bien la alteración de los cauces se lleva haciendo desde antiguo, ha sido en el siglo XX donde se han producido las grandes actuaciones de drenaje y encorsetamiento del río. Las imágenes del vuelo americano del 56 así lo ponen de manifiesto, ya que muestran un grado de naturalidad de los cauces muy distinto al actual.

De acuerdo con la normativa y los documentos técnicos de planificación, una masa de agua superficial se puede designar como muy modificada (HMWB, por sus siglas en inglés) cuando, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza. Este "cambio sustancial" se entiende como una modificación de sus características hidromorfológicas que impide que la masa alcance el buen estado ecológico. Esto debe analizarse minuciosamente mediante distintas revisiones tasadas en la normativa, y así se ha hecho en los sucesivos planes hidrológicos. En el último, a modo de ejemplo, se han designado 186 masas de agua río muy modificados y se van a volver a revisar en este ciclo de planificación.

Cabe mencionar también que la propiedad privada no puede prevalecer sobre terrenos que, por sus características geofísicas, forman parte del cauce natural. La propiedad privada en zonas colindantes

a ríos no es absoluta; está intrínsecamente limitada por la ley para garantizar la seguridad pública y la protección ambiental, como pone de manifiesto el tenor de los artículos 6 y 9 del RDPH, entre otros. La jurisprudencia del Tribunal Supremo avala que la Administración proteja el DPH sin indemnizaciones automáticas, ya que actuar sobre el cauce natural es una obligación legal para alcanzar el buen estado de las aguas, objetivo que constituye un interés público superior.

Alegación 13.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Parece razonable admitir la posibilidad de actuaciones de gestión activa y mantenimiento de la vegetación de ribera, aplicando criterios técnicos y silvícolas semejantes a los utilizados en otras masas forestales, especialmente cuando dichas actuaciones resulten necesarias por motivos hidráulicos, de seguridad, sanitarios o de conservación. […]

Se considera necesario que el instrumento de planificación hidrológica contemple la posibilidad de autorizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales, teniendo en cuenta sus características geomorfológicas, los usos preexistentes y los intereses legítimos concurrentes. […].

Especial atención merece la proliferación del carrizal y otras especies invasoras o expansivas, cuyo desarrollo puede reducir significativamente la capacidad hidráulica de desagüe y alterar el equilibrio ecológico de determinados tramos fluviales. Por ello, se considera conveniente que el futuro instrumento de planificación contemple expresamente medidas de control y gestión activa de este tipo de formaciones vegetales cuando existan razones hidráulicas, ambientales o de seguridad que así lo aconsejen.

Respuesta:

Los criterios técnicos y silvícolas utilizados en otras masas forestales no tienen por qué se similares a los que aplican a la vegetación de ribera, al ser el río un elemento diferenciador en su creación y modelado. Las mejores actuaciones para la mejora de las condiciones hidráulicas, de seguridad, sanitarias o de conservación, son las de restauración del río a su situación original, en la que su configuración, trazado, brazos secundarios y llanura de inundación permitan la laminación de avenidas o el filtrado de nutrientes y otras sustancias nocivas para la salud.

Se está de acuerdo en realizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales. Así se hace, de hecho. No se abunda más ante la generalidad del comentario.

Independientemente de que en alguna circunstancia puedan aplicarse medidas de control activo de especies invasoras, se debe recordar que la restauración de la conectividad longitudinal y lateral, junto con la recuperación de la morfología natural del cauce, permite que el ecosistema funcione mediante mecanismos de control natural frente a especies invasoras. Un río con un hábitat naturalizado favorece el mantenimiento de las comunidades biológicas autóctonas, dificultando que las especies invasoras desplacen a los endemismos locales. La alteración del régimen natural de los ríos y la creación de aguas estancadas (paso de régimen lótico a léntico) son precisamente los factores que facilitan la proliferación de especies exóticas.

Alegación 14.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Respecto a las obras de cruce aéreo o subterráneo de infraestructuras sobre cauces públicos, se considera necesario que el nuevo Plan Hidrológico otorgue un mayor peso a los criterios técnicos e hidráulicos en la evaluación de las actuaciones proyectadas, evitando que el condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada. […]

En relación con las autorizaciones de obras en el Dominio Público Hidráulico, se considera igualmente conveniente admitir la aplicación del criterio de escala para el cálculo hidrológico de avenidas mediante el Método Racional Simplificado, así como permitir simulaciones hidráulicas basadas en levantamientos topográficos específicos realizados para cada actuación.

Finalmente, se considera de gran interés que la Confederación Hidrográfica del Duero establezca, de forma previa y suficientemente clara, criterios técnicos orientativos para la tramitación de autorizaciones relativas a puentes, pasarelas y otras obras sobre cauces.

Respuesta:

Los condicionantes ambientales son un requisito que establece la normativa actual. No se la idea por la que el "condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada" en las actuaciones en cauce.

El uso del método racional simplificado para cálculos hidráulicos en la planificación se incluye en el Anexo XI del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Se remite a esta norma y no al plan hidrológico el resto de observaciones presentadas sobre autorizaciones de obras en cauce.

Alegación 15.

DU-05 Gestión del riesgo de inundación

Se considera razonable que el instrumento de planificación permita incorporar estudios hidrológicos e hidráulicos de mayor detalle, sustentados en levantamientos topográficos específicos, modelizaciones bidimensionales, campañas de campo y análisis hidráulicos adaptados a las características concretas de cada emplazamiento.

Este criterio de mayor precisión técnica debería poder extenderse también a la determinación de caudales de avenida, permitiendo ajustar los cálculos hidrológicos a las características reales de cada cuenca vertiente y evitando la aplicación automática de metodologías generales cuando existan estudios específicos suficientemente justificados

Demandamos que cualquier actuación que se plantee, no cause perjuicio a la actividad económica implantada en el territorio.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, y sin perjuicio de lo ya señalado en este documento acerca del alcance propio del ETI, procede indicar que las cuestiones planteadas presentan indudable relevancia desde la perspectiva del adecuado diagnóstico del riesgo y peligrosidad de las inundaciones. No

obstante, será en fase de redacción del PGRI cuando se revisen los modelos hidráulicos para establecer las medidas adecuadas para reducir el riesgo de las inundaciones.

Las modelizaciones hidráulicas e hidrológicas están en constante actualización y singularmente en las tres fases de elaboración de los de PGRI: fase de evaluación preliminar del riesgo, fase de elaboración de los mapas de peligrosidad y fase de plan de gestión del riesgo. La cartografía de peligrosidad del SNCZI simula escenarios estadísticos de eventos extraordinarios, como son las avenidas de media y baja probabilidad (100 y 500 años de periodo de retorno). El SNCZI exige que las simulaciones hidráulicas para delimitar el riesgo se realicen sobre la base del terreno en condiciones actuales ofrecidas por el modelo digital del terreno (MDT), manteniendo infraestructuras como azudes y puentes tal y como existen hoy. Ese MDT se obtiene por tecnologías suficientemente maduras que, con la previa revisión a su aplicación, ofrecen una información exacta y muy adecuada para el objetivo final.

Las medidas que el PGRI establezca tratarán de limitar los perjuicios a las actividades actuales; no obstante puede darse el caso de que haya actividades ubicadas en zonas inundables que cuenten con autorizaciones previas a la entrada en vigor del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y de los artículo 9 y 14 del RDPH; para ellas será muy difícil que cualquier medida que se establezca en el PGRI no entrañe perjuicio que, por otra parte, ya le causa la propia ubicación.

Alegación 16.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Las Comunidades de Regantes consideran positivo que el EPTI reconozca la relevancia estratégica del regadío en la cuenca del Duero […].

En su planteamiento identifican el problema principal que supone la escasa o nula regulación artificial en sistemas como el Carrión, el Órbigo, el subsistema Tuerto o el Cega. No obstante, el documento presenta un enfoque excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales, sin incorporar adecuadamente la dimensión económica, social y territorial del regadío.

No se puede achacar la reducción de aportaciones principalmente a los efectos del cambio climático. No podemos establecer un horizonte de cambio climático referido al año 2045, que resulta poco fiable.

Respuesta:

Los planes hidrológicos tienen que cumplir dos objetivos principales que generalmente entran en conflicto: por un lado, conseguir el buen estado o el buen potencial de todas las masas de agua y, por otro, satisfacer las demandas cumpliendo los criterios de garantía. En otras palabras, se trata de hacer un uso sostenible del recurso, equilibrando la protección de los ecosistemas relacionados con el medio hídrico con la satisfacción de las demandas. En el estudio de alternativas de las fichas DU-06 y DU-07 del EpTI, analizamos medidas que disminuyen la presión por extracción de agua (uso más eficiente del agua por modernizaciones) y medidas de mayor disponibilidad de recurso (aumento de regulación). Por este motivo, pensamos que el enfoque del EpTI no está excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales.

Efectivamente en el EpTI se reconoce la relevancia estratégica del regadío y creemos que su dimensión económica, social y territorial está debidamente incorporada.

Estamos de acuerdo en que la reducción de aportaciones no es debida solamente a los efectos del cambio climático. Probablemente también existe reducción de aportaciones por los cambios en los usos de suelo, pero no tenemos información suficiente que nos permita evaluar la magnitud de esta reducción.

El establecimiento de un horizonte de cambio climático en el que se modelan demandas futuras y recursos naturales afectados por cambio climático para calcular sus balances es un requisito de la legislación (Reglamento de Planificación Hidrológico, art.11.4 y art. 21.4). En los planes de 4º ciclo el horizonte de cambio climático corresponde al año 2045 pues se incrementa en 6 años el del plan vigente, que era 2039.

Alegación 17.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Resulta incuestionable que las modernizaciones llevan implícita una reducción del uso del agua, por lo que no se deben añadir mayores presiones sobre el uso del agua. Las inversiones llevadas a cabo también por los propios agricultores están siendo muy importantes, además de la recuperación de costes que vía tarifas de utilización del agua ya contribuyen.

La modernización no debe utilizarse como instrumento indirecto de reducción de concesiones ni de actividad agraria, sino como herramienta de mejora de eficiencia, productividad y sostenibilidad.

En general, se demanda que las mejoras de eficiencia y modernización permitan atender más demandas y generar mayor valor económico y social con el mismo volumen global de agua, sin incrementar necesariamente la presión neta sobre los recursos hídricos. La eficiencia debe medirse no solo por reducción de consumos, sino también por productividad, generación de empleo, estabilidad territorial y capacidad de adaptación climática.

Respuesta:

En relación con las consideraciones formuladas, el EpTI contempla la modernización de regadíos como una medida prioritaria de adaptación orientada a mejorar la eficiencia en el uso del agua, la garantía de suministro y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias existentes. En este sentido, se reconoce el esfuerzo inversor realizado por el sector, así como su contribución a una gestión más racional del recurso y a la recuperación de costes del sistema.

No obstante, debe precisarse que la mejora de la eficiencia no implica, por sí misma, una reducción automática de los volúmenes concesionales ni constituye un instrumento indirecto de minoración de la actividad agraria, sino que su tratamiento en la planificación hidrológica responde a un análisis caso por caso. Así, los eventuales ahorros derivados de la modernización no se someten a penalizaciones automáticas, pero tampoco pueden destinarse de manera generalizada a la generación de nuevas demandas si ello implica un incremento neto de la presión sobre las masas de agua.

En coherencia con ello, el EpTI establece que dichos ahorros deben contribuir, prioritariamente, a consolidar la sostenibilidad del uso existente y a evitar incrementos de presión que puedan

comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales o el equilibrio del sistema hídrico. Solo en aquellos supuestos en los que exista disponibilidad efectiva del recurso y se acredite la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de las actuaciones, podrán considerarse desarrollos adicionales, siempre de forma compatible con la consecución del buen estado de las masas de agua y el mantenimiento de los caudales ecológicos.

Finalmente, si bien se comparte que la eficiencia puede valorarse desde una perspectiva amplia —incluyendo aspectos como la productividad, la generación de valor económico o la resiliencia territorial—, en el ámbito de la planificación hidrológica dicha eficiencia debe necesariamente integrarse con el principio de sostenibilidad ambiental, lo que exige que cualquier mejora en el uso del recurso no se traduzca en un aumento de las presiones que comprometa los objetivos establecidos por la normativa vigente.

Alegación 18.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Si bien el plan hidrológico en vigor descartó el incremento de nuevos regadíos, sí es posible esa ampliación en sistemas concretos con cultivos con un uso muy reducido del recurso, como por ejemplo en el sistema Riaza-Duratón y otros sistemas, donde sí es posible ampliación de superficie de riego con el mismo volumen de agua ahora establecido.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, cabe señalar que, si bien el vigente plan hidrológico estableció, con carácter general, la no previsión de nuevos desarrollos de regadío, el Esquema de Temas Importantes (ETI) contempla que determinadas situaciones específicas puedan ser objeto de análisis individualizado, particularmente en aquellos sistemas en los que concurran circunstancias singulares desde el punto de vista de la disponibilidad y gestión del recurso y, además, las autoridades competentes (MAPA o Comunidades Autónomas) plantearon nuevos regadíos que cuentan con amparo legal. En este aspecto el organismo de cuenca no puede proponer nuevos regadíos cuya autoridad competente no avala o, siendo avalados, no cuenta con garantías suficientes o amparo legal de la planificación sectorial.

No obstante, debe precisarse que los eventuales aumentos de superficie destinada al regadío no pueden valorarse exclusivamente desde la perspectiva de un mantenimiento del volumen total de extracción, sino que han de analizarse de forma integral considerando el conjunto de presiones que la actividad agraria genera sobre las masas de agua. En particular, el incremento de superficie regable puede implicar efectos relevantes sobre el régimen hidrológico, el retorno de flujos, la calidad de las aguas, la contaminación difusa o la alteración de los caudales ecológicos, incluso en aquellos supuestos en los que el consumo unitario por hectárea sea reducido.

En este sentido, el ETI incide en la necesidad de abordar la sostenibilidad del regadío desde un enfoque global, que tenga en cuenta no solo la eficiencia en el uso del agua y el volumen derivado, sino también la evolución de las presiones significativas y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Por ello, la eventual ampliación de superficies regables —incluso en sistemas concretos como el Riaza-Duratón— debe someterse a una evaluación específica que acredite su compatibilidad

con la consecución del buen estado de las masas de agua, el mantenimiento de los caudales ecológicos y la ausencia de deterioro adicional del dominio público hidráulico.

En consecuencia, no resulta procedente establecer, con carácter general, la posibilidad de ampliar superficies de regadío bajo el único condicionante de mantener el volumen global actualmente asignado, sino que cualquier propuesta en este sentido deberá justificarse caso por caso, en el marco del proceso de planificación hidrológica y de conformidad con los principios de sostenibilidad, cautela y no deterioro que rigen la gestión del recurso.

Alegación 19.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Respecto al tema importante DU-06, la alegante valora positivamente que el EPTI reconozca la modernización del regadío como la medida esencial de adaptación al cambio climático y mejora de la garantía de suministro. De las dos alternativas que se propone como factibles (5 y 6), muestran preocupación por determinados planteamientos relacionados con:

- *Limitaciones automáticas de concesiones*
- *Restricciones indirectas de superficie regable*
- *Incremento de costes para los usuarios*
- *Traslado excesivo del esfuerzo inversor a los regantes*
- *Cierre definitivo del mapa de nuevos desarrollos de regadíos.*

Asimismo, las Comunidades de Regantes consideran imprescindible priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y con baja garantía hídrica, especialmente en zonas como Carrión, Órbigo, Tormes, Eria, Curueño o Duerna.

Igualmente, se considera necesario garantizar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas, especialmente ante el horizonte de 2035. [..]

Las actuaciones vinculadas al regadío presentan, por tanto, muy bajos niveles de ejecución, especialmente en modernización de regadíos, infraestructuras hidráulicas y regulación. Esta situación genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban.

Respuesta:

La Ficha DU-06 al elegir las alternativas 5 y 6 señala ambas alternativas permiten avanzar en medidas de modernización de regadíos que manteniendo la competitividad de las explotaciones con ligeros ajustes de las dotaciones adaptadas a la mejora que suponen las infraestructuras, permitan ampliar la superficie de regadío en la cuenca. Las comunidades de regantes en esta materia han ido modificando su posición, si es que se puede hablar de una posición común: de pasar en el plan de primero y segundo ciclo a demandar el cierre del mapa de cultivos en la demarcación hidrográfica, postulan a hora la necesidad de ampliar el regadío. Desde el punto de vista de la garantía y dadas las limitaciones reales existentes para ampliar la oferta, toda ampliación de superficie de regadío conlleva un reajuste del regadío existente, de manera que solo por la vía de la mejora de la eficiencia de puede atender a todas las demandas.

Que las concesiones deban modificarse como consecuencia de las actuaciones de mejora de la eficiencia del uso no es una exigencia del plan hidrológico sino de la propia normativa de aguas, por ejemplo, en aplicación de los artículos 65 del TRLA, al señalar que las concesiones podrán ser revisadas cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento, a petición del concesionario o cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. En concreto, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. En el primer criterio del artículo 65 para revisar una concesión se encuentra el hecho de que, por ejemplo, se esté regando más superficie (o menos) de la que ampara el título concesional, a lo que se refiere el alegante como “restricciones indirectas de superficie regable”.

En efecto, el EpTI (y el propio plan hidrológico vigente) ha dado prioridad a las actuaciones en puntos donde hay déficit estructural como Carrión y Órbigo. En la actualidad no hay déficit en el sistema Tormes. Los casos de Eria, Curueño o Duerna son nuevos en el presente ciclo de planificación hidrológica y nos parecen más un empeño de determinadas asociaciones de regantes que de los propios usuarios de estos ríos. De hecho, para el Duerna se estableció una reserva de agua en el plan hidrológico vigente para mejorar las garantías de los riegos del valle, reserva que no se ha materializado por falta de capacidad de los usuarios en agruparse de manera reglada. En el caso del Eria solo los de la parte baja del Área han promovido una CUAs con el fin de organizar mejor el uso del agua.

El EpTI no tiene capacidad para modificar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas que otorga la ley, especialmente ante el horizonte de 2035, ni puede ampliar esa seguridad ni disminuirla. Es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas. Lo que el EpTI señala es que estos derechos cuando sean en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, si éstas no alcanzan su buen estado en 2035, será muy difícil que puedan mantener su status actual, ya que en las citadas DT se indica que en todo caso, a esos aprovechamientos de aguas les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico. Por tanto, el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

Como se pone de manifiesto en la Ficha del tema importante DU-09, las actuaciones vinculadas al regadío (modernización de regadíos y nuevos regadíos) cuya autoridad competente es la administración agraria del Estado y de las comunidades autónomas, presentan un nivel de ejecución del 20 y del 27%, respectivamente; por su parte el grupo de infraestructuras hidráulicas presenta una ejecución del 13% de la inversión. Esta situación, como indica la alegante, genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban; de hecho, en el tema importante DU-09 se insiste en este aspecto llamando a la responsabilidad de las autoridades competentes para que asuman las medidas que han validado en cada ciclo de planificación hidrológica.

Alegación 20.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

En las alegaciones a la revisión del plan 2022-2027 se propuso una tabla de asignaciones máximas que creemos que debe ser revisada de acuerdo a las dotaciones que se vienen aprobando en las campañas de riego coincidentes con el período de desarrollo de dicho plan y que deberían ser las siguientes:

SISTEMA	ASIGNACIÓN MÁX
PISUERGA-BAJO DUERO	6.000
CARRIÓN	5.000
TORMES	6.000
ÓRBIGO	6.000
PORMA	6.000
ADAJA	4.900
ALTO DUERO	6.000
RIAZA	6.000
ESLA (RIAÑO)	6.000
ARLANZÓN	6.000
TUERTO	4.500
TERA	6.000
ÁGUEDA	6.000

Partiendo de esta base, el objetivo que debemos perseguir es que se adopten las medidas oportunas para que todos los sistemas de explotación estén en las mismas condiciones y cuenten con idéntica disponibilidad (que ciframos en 6.000 m^3/ha), para lo cual tendríamos que incluir en el programa de medidas las actuaciones necesarias que nos permitan situarnos en ese escenario de igualdad.

Respuesta:

La propuesta que se hace en la alegación se ha tenido en cuenta en el EpTI, singularmente en la alternativa 5, ofreciendo los resultados de esta alternativa respecto al resto. A la vez hay que decir que adoptar este criterio para las dotaciones supondría llevar a algunas de las demandas de determinados sistemas de explotación al incumplimiento generalizado de garantías, como por ejemplo Alto Duero, Adaja o Tuerto. Tampoco se explica bien en la alegación por qué motivo, siguiendo el argumento de la alegante, se debe asegurar una dotación de 4.500 m^3/ha año en el Tuerto o 4.900 m^3/ha año en Adaja, frente a 6.000 m3/ha año de muchos de los sistemas de explotación; y tampoco por qué 6.000 m^3/ha año en toda la cuenca: ¿maneja el alegante algún estudio estadístico que justifique esa dotación?; si es la dotación a la que tradicionalmente se ha tendido, ¿por qué ha de mantenerse en sistemas modernizados con elevadas eficiencias de uso del agua?; ¿se pretende, con esta propuesta, dar carta de reconocimiento a determinados agentes que afirman que la modernización de regadíos en España no contribuye a reducir las presiones sobre las masas de agua sino a incrementar la demanda y que por ello, debería anularse la financiación con fondos públicos?

Por otra parte, la propuesta no atiende al criterio agronómico de las necesidades hídricas de los cultivos de cada sistema de explotación, como se pone de manifiesto, por ejemplo, comparando la dotación del Sistema Órbigo con la del Sistema Adaja, o pensando que la demanda de un cultivo en

Soria puede ser comparable a la del mismo cultivo en Toro. La propuesta que se hace en el escrito, en un deseo de homogeneizar el suministro de agua cuando se paga lo mismo por superficie, atiende sobre todo a las reservas que existen en cada Sistema, lo que invalidaría el análisis de garantía que se establece de acuerdo con los epígrafes 3.5.1 u 3.5.2 de la IPH.

Entendemos que la demanda de la alegante obedece a que todavía se pagan cánones y tarifas no en función del consumo sino de la superficie regada, sistema que no disuade al usuario de ser eficiente. De cualquier modo, se analizará en fase de redacción del plan hidrológico la viabilidad de la propuesta, con el fin de que pueda atender a dos criterios simultáneos: la realidad agroclimática de cada zona y el hecho de que el pago de cánones y tarifas se haga por superficie regada en vez de volumen utilizado.

Alegación 21.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

1.- En primer lugar y en tanto en cuanto no se adopten las medidas que puedan mejorar la garantía de todas las UDAs, se debe mantener la vigencia del art. 15.8 del plan vigente "Dotaciones orientativas máximas en los sistemas de explotación regulados: En aplicación del artículo 55 del TRLA, el organismo de cuenca para los sistemas que cuenten con regulación, una vez consultadas las correspondientes Juntas de Explotación, fijará anualmente dotaciones orientativas máximas de agua en función de las reservas existentes y en coherencia con las propuestas sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses de la Comisión de Desembalse, a las que deberá adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Estas dotaciones podrán ir modificándose anualmente en función de las reservas realmente existentes".

2.- En relación con el apartado anterior, abogamos porque las propuestas de dotaciones elevadas por las Juntas de Explotación a la Comisión de Desembalse y aprobadas por esta última se apliquen por igual a todos los usuarios del sistema en cuestión, sean canales del Estado o regadíos concesionales, no sólo en años de sequía (donde se puede aprobar un Real Decreto-ley que lo regule), sino también en años de normalidad, para que todos los usuarios del mismo Sistema tengan a disposición idénticos caudales.

Respuesta:

Las cuestiones que se sugieren no son parte del EpTI, sino que corresponden más bien a la fase de elaboración del Plan Hidrológico, que contará con un período de consulta pública donde podrán hacerse sugerencias sobre la parte Normativa del Plan Hidrológico.

Alegación 22.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

3.- La mejora de la eficiencia del regadío mediante la modernización de sus infraestructuras y un leve incremento de la regulación son las estrategias más adecuadas. Por parte de los usuarios, también se

debe perseguir aplicar todas las medidas y prácticas agrarias que mejoren la gestión sostenible del recurso y consigan un ahorro de agua.

4.- Caudales ecológicos: su implantación y cumplimiento (casi del 100% en nuestra cuenca de acuerdo a los informes anuales presentados a la Comisión de Desembalse) contribuyen a la pérdida de garantía en la satisfacción de las demandas en las UDAs con más déficit hídrico. En este sentido, debemos de poner de manifiesto que no consideramos justificada la obligación de mantener los caudales mínimos definidos para situación de normalidad en situación de sequía prolongada en las zonas incluidas en la red Natura 2000 (LIC, ZEPA, etc) o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, tal como establece el RPH (art 18.4). La situación de sequía prolongada obedece a causas naturales y, por tanto, no se encuentra justificación para esta salvedad. Teniendo en cuenta que se trata de una prescripción de carácter reglamentario, su modificación debe plantearse en una disposición de igual o superior rango, como puede ser el Real Decreto de aprobación de los planes de cuarto ciclo. Por ello se considera de interés plantear esta modificación como medida en los programas de medidas de los planes de cuarto ciclo, con la tipología de instrumento general.

De igual modo, en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse.

Respuesta:

El diagnóstico del EpTI coincide con la primera propuesta de la alegante. No ocurre lo mismo con la segunda propuesta: el artículo 18 del RPH señala que en *caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971. En estas zonas se considerará prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, aunque se aplicará la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones.* Y el artículo 49 quáter del RDPH señala que *en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada, se exigirá el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos aguas abajo de las presas conforme a lo previsto en la disposición transitoria quinta y cuando la disponibilidad natural lo permita. A tal efecto, el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse. No obstante, el régimen de caudales ecológicos será exigible, siempre y en todo caso, cuando exista una legislación prevalente como la aplicable en Red Natura o en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de acuerdo de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, en la que se establece la prevalencia del caudal ecológico frente al uso*. Por ello la propuesta de la alegante contradice ambas disposiciones, por lo que no es posible atenderla.

Alegación 23.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

5.- Revisión del Convenio de Albufeira: […], volvemos a reivindicar las propuestas planteadas en el escrito dirigido a la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en septiembre de 2022, motivado por el conflicto suscitado por la suelta de agua de embalses de regadío para poder cumplir con los compromisos reflejados en el Convenio de Albufeira. Seguimos demandando una reducción de la aportación semanal, trimestral y anual en los diferentes puntos de control, así como subir el umbral de precipitación al 70% sobre la media interanual, para que si en períodos de sequía prolongada la precipitación bajase de ese umbral, podamos entrar en excepción.

Respuesta:

Es importante resaltar que el convenio de Albufeira es un tratado internacional establecido entre dos países, España y Portugal, con la finalidad de dar coherencia y continuidad a tratados anteriores en lo que se ha buscado a lo largo de los siglos limitar los conflictos fronterizos entre ambos países.

Como se indica en la Ficha DU-09, entre las decisiones a tomar en relación con el Convenio de Albufeira, se encuentra analizar las divergencias entre las planificaciones española y portuguesa para ofrecer soluciones conjuntas a las masas de agua compartidas y los indicadores de sequía y escasez de ambos países para tratar de integrar ambos diagnósticos en uno. Esta última decisión viene avalada por los memoranda de entendimiento entre España y Portugal de las cumbres hispano-lusa de 2023, 2024 y 2026, en las que ya se está trabajando por ambos países. Más allá de esa voluntad de mejorar el diagnóstico de los criterios de excepción, y armonizar los indicadores de sequía y escasez, corresponde a otras instancias promover los cambios del Convenio que considere oportunos.

Alegación 24.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Infraestructuras

Para conseguir la sostenibilidad del regadío reflejada en la ficha anterior, las Comunidades de Regantes solicitan que, de manera genérica el futuro Plan Hidrológico incorpore las siguientes medidas:

- *Incrementar las inversiones públicas en modernización y digitalización*
- *Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.*
- *Priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y zonas vulnerables*
- *Impulsar balsas laterales y actuaciones de regulación complementaria*
- *Dotar presupuestariamente las actuaciones del plan*
- *Mejorar infraestructuras hidráulicas y redes en alta*
- *Favorecer el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas*
- *Flexibilizar tarifas energéticas adaptadas a la estacionalidad del riego*
- *Mantener la seguridad jurídica concesional*
- *Establecer programas reales y ejecutables con financiación suficiente*

- *Realizar limpiezas periódicas de cauces y desagües como medida de seguridad y bienestar para la población rural.*

Respuesta:

Entre las propuestas heterogéneas que hace la alegación, algunas caen fuera de la competencia del agua (tramitación ambiental, tarifas energéticas); otras están incorporadas a las Fichas del EpTI (incrementar inversiones en modernización en la Ficha DU-06, centrarse en actuaciones en sistemas deficitarios en la Ficha DU-07, impulsar sustitución de bombeos con aguas subterránea en la Ficha DU-02, fomentar utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas en la Ficha DU-06, modernizar infraestructuras de riego en alta en Ficha DU-07). Respecto a la seguridad jurídica concesional, como se ha dicho en la respuesta a la alegación 19, es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas; el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

En la Ficha DU-09 se aborda el tema importante de la financiación del Programa de medidas. El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Estas autoridades deben dar la conformidad al programa de medidas para lo cual, cada una internamente, habrá debatido la capacidad y conveniencia de asumir cada medida. Por tanto, los mecanismos formales para asegurar la ejecución del Programa de medidas existen y desde el ámbito de la planificación hidrológica sólo se puede recalcar que estos mecanismos no deben ser simplemente formales sino también reales. La propia Ficha DU-09 describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social.

Sin duda la mejora de las condiciones hidrológicas de cauces es una tarea de gran peso en la cuenca a la que el Organismo de cuenca dedica anualmente entre 4 y 6 millones de euros, posiblemente escasos para las necesidades crecientes, a labores de mantenimiento de cauces. El Programa de medidas del plan hidrológico vigente incluye un paquete de medidas de este tipo. Pero evidentemente no puede llegar a atender eficazmente a los más de 80.000 kilómetros de ríos y arroyos de la cuenca y actúa con criterios de conveniencia y racionalidad económica. Para paliar esta desproporción entre necesidades y posibilidades reales, tanto en el Plan vigente de 2023 como en el anterior de 2016, se incluyó un

procedimiento más ágil para acometer determinadas labores de mejora de las condiciones de desagüe de los cauces. Así en el artículo 30 de la Normativa se establece el sistema de declaración responsable para las denominadas *actuaciones menores de conservación de cauces y zonas de policía*. El mismo artículo hace un elenco de las que pueden considerarse actuaciones menores:

I. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera.

II. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce.

III. Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del dominio público hidráulico.

IV. Retirada de sedimentos y vegetación existente en el lecho del cauce, situados 50 metros aguas arriba y aguas abajo de las obras de fábrica y puentes con el fin de conservar su capacidad de drenaje.

V. Pequeñas actuaciones de mantenimiento de puentes e infraestructuras situadas sobre el cauce, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas no haya ocupación del dominio público hidráulico ni quede afectada su capacidad de desagüe.

VI. Mantenimiento de las secciones de estaciones de aforo.

VII. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos.

VIII. Cortas de arbolado bajo líneas eléctricas.

Para todas estas actuaciones la declaración responsable habilita el poder actuar por los particulares sin esperar a ninguna Resolución de la CHD, lo que agiliza notablemente la actuación.

Alegación 25.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Modernizaciones a ejecutar

Si tenemos en cuenta el período restante del plan vigente y el horizonte temporal de la revisión relativa al período 2028-2033, deberíamos modernizar los regadíos pendientes cuya modernización ya está aprobada y que son los siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES	IMPORTE ESTIMADO CONVENIO MAPA-SEIASA (€ sin IVA)
PEPAC CYL y otros planes	
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)	30.000.000
Canal de Ines-Eza Fase II (Soria)	7.000.000
Canal del Esla (León)	150.000.000
Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta (Palencia)	160.000.000
Bajo Tuerto – Sindicato Central Embalse Villameca (León)	25.000.000
Castañón, Cerrajera y Regueras (León)	65.000.000
Canal de la Retención (Palencia)	47.000.000
Canal de Villalaco (Palencia)	54.000.000

NUEVAS ACTUACIONES	IMPORTE ESTIMADO CONVENIO MAPA-SEIASA (€ sin IVA)
Canal de Manganeses (Zamora)	40.000.000
Margen Derecha del Tera (Zamora)	100.000.000
San Salvador - Valverde de Ágreda (Soria)	15.000.000
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)	40.000.000
Alija del Infantado (León)	15.000.000
TOTAL (€ sin IVA)	**748.000.000 €**

Para poder conseguir este objetivo tienen que ser tenidas en cuenta dos reivindicaciones que trasladamos al Gobierno de España:

1.- Aumentar el capital social de la SEIASA a la cantidad de 300 M€ anuales por cada uno de los años de duración del plan.

2.- Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.

Respuesta:

La alegación aporta dos cuestiones muy relevantes para impulsar las medidas del vigente Plan Hidrológico. Estando de acuerdo con la segunda (simplificación y agilidad en los trámites de evaluación ambiental de los proyectos de modernización del regadío) la realidad es que las modificaciones legales llevadas a cabo recientemente no van en esa línea; así la modificación de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, más reciente (de 6 de noviembre de 2025) reduce los límites de superficie de modernización de regadío para que la evaluación ambiental sea ordinaria. Esto parece indicar que por parte del legislador hay una sospecha de que los proyectos de modernización podrían suponer presiones adicionales sobre el medio ambiente, quizá debido a determinados proyectos ya ejecutados que no han sido todo lo respetuosos que cabría esperar. Por ello la norma legal es la que es y, en tanto no se modifique, debemos atenernos a ella, no siendo el EpTI competente para su modificación.

La Ficha DU-06 incide en la primera parte de la alegación al apostar por una mayor intensidad de la modernización del regadío que, lógicamente pasa por la adecuada financiación que debe validar e impulsar la autoridad competente con tutela sobre la SEIASA.

Recordamos que no todas las zonas regables que se citan en la alegación disponen de medida de modernización de regadío en el Plan vigente. Como se sabe el Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento. Cuando se confeccionó el Plan vigente de manera específica se solicitó al MAPA la previsión de actuaciones de modernización en los seis años de vigencia del Plan. En la relación de actuaciones que iba a acometer el MAPA no estaban las siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)
Canal del Esla (León)
Cerrajera (León)
Canal de Villalaco (Palencia)
Canal de Manganeses (Zamora)
Margen Derecha del Tera (Zamora)
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)
Alija del Infantado (León)
TOTAL (€ sin IVA)

Y como tales no pasaron al Programa de medidas para su ejecución por el MAPA sino para su ejecución por la comunidad autónoma y los usuarios. Probablemente el MAPA no las incluyó en su programación porque la comunidad autónoma no manifestó interés por ellas ya que la mayoría no contaban con acuerdos en sus asambleas generales para acometer la modernización. Aunque el EpTI ha tenido en cuenta en sus análisis las modernizaciones que figuran en el Programa de medidas independientemente de su agente financiador, de cara al nuevo Plan Hidrológico conviene aclarar que sólo formarán parte de las medidas aquellas actuaciones que así se determine por las autoridades competentes (MAPA o comunidad autónoma). De la Presa de Regueras, Bajo Tuerto y del Canal de la Retención ni siquiera hay medida de modernización ya que ninguna autoridad competente las ha reclamado. Valverde de Ágreda está fuera de la demarcación hidrográfica del Duero, por lo que es lógico que no figure entre las medidas del Plan Hidrológico ni ahora ni en el futuro.

Alegación 26.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Mejora infraestructuras

Propuestas:

1.- Solicitar a la Dirección General del Agua una dotación presupuestaria de 150 M€ en el período 2028/2033 para hacer frente a estas reformas, conseguir el estado óptimo de las infraestructuras para poder llevar a cabo la correcta gestión del recurso.

2.- La situación actual de la agricultura no pasa por sus mejores momentos, motivado por los elevados precios de los insumos, los bajos precios de mercado de los productos y las grandes inversiones realizadas en modernización de las infraestructuras de riego y el amueblamiento de parcelas. Por eso se solicita, buscar fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-09 y con respecto a la propuesta sobre la financiación de la DGA, se recuerda que el Plan vigente incluyó una inversión de 350 millones de euros en infraestructuras, nuevas y modernización de las existentes, cuya ejecución según la misma Ficha es de un 13% a final de 2024 que sube hasta un 19% a final de 2025, valor realmente exiguo. Pese a estar previsto es necesaria una evaluación de los motivos de este retraso que se ponen de manifiesto en la Ficha y que deben ser removido. La propia Ficha también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social. No obstante, en atención a la alegación se incluye una nueva decisión sobre la rendición de cuentas.

Los mecanismos de rendición de cuentas están formalmente delimitados en el ámbito administrativo, por ejemplo, con la regulación que se incluye en los artículos 87 y 88 del RPH. Pero este ámbito es meramente administrativo y no político, que tiene sus propios itinerarios.

Respecto a sistema de financiación alternativos a los que establece la Ley de Aguas para este tipo de infraestructuras, nada puede aportar el EpTI ya que se trata de una cuestión regulada por la propia Ley y a allá debe atenerse.

Alegación 27.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Obras de regulación:

Propuestas:

1.- Sistema Carrión: es uno de los más deficitarios de la Demarcación y urge acelerar los trámites para proceder a la ejecución de La Cueza 1 y La Cueza 2,[…].

2.- Sistema Tormes: […]. De momento, están puestas en Explotación unas 10.000 has entre La Armuña II y la Zona de Arabayona, lo que colocaría la superficie de la zona regable dependiente del embalse de Santa Teresa en el entorno de 35.000,00 has. La planificación ya prevé el desarrollo de otras 12.000 has más en La Armuña III y IV, que sí podrían ser asumidas por dicho embalse, pero en el caso de que se llegase a plantear alguna ampliación más en el futuro, resultaría necesario estudiar el recrecimiento del embalse para garantizar la satisfacción de todas las demandas (además del regadío, abastecimientos, caudales medioambientales y otros usos)

3.- Sistema Órbigo: […] nuestras propuestas pasan por el cambio de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al Sistema Tera (podríamos conseguir un ahorro de unos 12 Hm3) y la construcción de la balsa lateral de La Rial con llenado por gravedad desde el río Omaña (su capacidad está prevista en 23 Hm3).

Dentro del Sistema Órbigo tenemos el Subsistema Tuerto, […], proponemos las siguientes actuaciones: urgente puesta en explotación del embalse de Villagatón, estudiar un posible recrecimiento del embalse de Villameca y reparar el acueducto del trasvase de Valdesamario para mejorar su capacidad hidráulica y contribuir así al mejor llenado de Villameca en cada campaña.

Río Duerna: […] las 4.000 has que se nutren de este río, junto con el Peces, que discurre paralelo antes de desembocar ambos en el Tuerto, subsisten a duras penas. Para asegurar la pervivencia de este regadío, proponemos varias actuaciones:

- *Siembra de agua, derivando en invierno el caudal a las zayas, que son más filtrantes y permiten recargar el acuífero (se podrían acumular unos 2 Hm^3) para poder ser utilizado en campaña junto con el agua del río hasta la llegada del estiaje.*
- *Estudiar la posibilidad de balsas laterales derivando caudal del río Duerna en época invernal para ser utilizadas en verano.*
- *Estudiar la alternativa de un embalse de cabecera con una capacidad menor a los 28 Hm3 que estaban previsto en el proyectado en Chana de Somoza.*

Idénticos planteamientos podríamos someter a estudio para consolidar la zona regable dependiente del río Eria.

4.- Sistema Esla Valderaduey: para este sistema se pueden plantear balsas laterales en el río Cea aprovechando su aportación invernal, con suministro cero del embalse de Riaño. Como fórmula de explotación más viable, planteamos un aprovechamiento conjunto de los embalses de Riaño, Porma y Casares, desestimando definitivamente la alternativa planteada por la Confederación Hidrográfica del Duero de la transferencia de agua de este último al sistema Órbigo.

5.- Apoyo a las aguas subterráneas: En el EPTI se plantean peajes [..]. FERDUERO se opone frontalmente a estos recortes y además de seguir impulsando la constitución de CUAS para mejorar la gestión de los acuíferos, planteamos que se estudien actuaciones que permitan sustituir aguas subterráneas por aguas superficiales, así como el uso compartido de ambas. Por ejemplo, el desarrollo de La Armuña III y La Armuña IV puede liberar hectáreas de la zona sur de la Masa de Medina, la Presa de Lastras de Cuéllar lo mismo en Tierra de Pinares y las balsas laterales de Tordesillas, ayudaría a mejorar su acuífero. Por ello, planteamos que se estudien estas opciones para poder mantener el regadío y la actividad económica de todos los usuarios que se sirven de estas masas.

[…] solicitamos a la Dirección General del Agua la búsqueda de fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras de regulación.

Respuesta:

Con relación al punto 1 de la alegación (Sistema Carrión), debe señalarse que la Confederación Hidrográfica del Duero comparte la conveniencia y oportunidad de la puesta en servicio de una regulación adicional en el ámbito de las Cuezas, ya que se considera una medida estructural que puede incrementar la capacidad de gestión del sistema y reforzar su resiliencia, disminuyendo la dependencia de aportaciones externas. Estas actuaciones, junto con la modernización de regadíos en el sistema Carrión, se encuentran alineadas con los objetivos de la planificación hidrológica vigente y forman parte de la estrategia de mejora del equilibrio entre recursos y demandas en la demarcación.

Según se recoge en el Programa de medidas del Plan Hidrológico vigente, cuya situación más actualizada se puede consultar en Mírame-IDEDuero, la regulación adicional en las Cuezas (medidas 6403243 y 6403244) se encuentra en fase de anteproyecto en evaluación ambiental y es una medida cuyo promotor es la Confederación.

Con relación al punto 2 de la alegación (Sistema Tormes) debe indicarse que el EpTI ya contempla expresamente el análisis de la ampliación de regadíos en el sistema Tormes y su relación con la capacidad de regulación del embalse de Santa Teresa. En particular, el documento pone de manifiesto que los eventuales incrementos de superficie regable —como los asociados al desarrollo de La Armuña— deben quedar condicionados a la disponibilidad real de recursos y a la garantía del sistema, evaluándose de forma conjunta la gestión de la demanda y la oferta.

A este respecto, el EpTI analiza el posible recrecimiento del embalse de Santa Teresa en el marco de la alternativa 5 de la ficha DU-07, como una de las opciones para incrementar la capacidad de regulación en escenarios de mayor desarrollo del regadío. No obstante, también concluye que este tipo de actuaciones:

- no resuelven por sí solas los déficits del sistema ni los problemas de garantía,
- y deben plantearse únicamente cuando se justifique su viabilidad técnica, económica, ambiental y social, y siempre en combinación con medidas de gestión de la demanda (modernización, limitación de dotaciones, etc.).

En consecuencia, la eventual necesidad de recrecimiento del embalse no puede considerarse automática, sino que debe evaluarse en el marco global de la planificación hidrológica, priorizando un enfoque integrado que garantice la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Todo ello se analizará con detalle en la fase de redacción del plan hidrológico.

En relación con la propuesta formulada en el punto 3 para el sistema Órbigo, cabe señalar lo siguiente:

En primer lugar, la Confederación valora favorablemente la propuesta de cambio de la toma de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al sistema Tera, en la medida en que se trata de una actuación coherente con los objetivos del EpTI orientados a la optimización de la gestión de los recursos disponibles y a la reducción de presiones sobre sistemas deficitarios, mediante la mejora de la asignación y distribución de recursos entre sistemas de explotación.

En cuanto al resto de actuaciones planteadas, relativas al incremento de la capacidad de regulación (balsas laterales, nuevos embalses, recrecimientos o mejora de infraestructuras existentes), debe indicarse que el EpTI establece que este tipo de medidas deben analizarse de forma integrada dentro del conjunto de alternativas de planificación, en coordinación con las actuaciones sobre la demanda (modernización, eficiencia y adecuación de dotaciones).

En particular, el documento pone de manifiesto que:

- Las actuaciones de incremento de regulación pueden contribuir a mejorar la garantía y reducir déficits en determinados sistemas,
- pero su eficacia es generalmente limitada si no se acompañan de medidas de gestión de la demanda,
- y en todo caso deben someterse a una evaluación rigurosa de su viabilidad técnica, económica, social y ambiental, dada su elevada inversión y potencial afección sobre las masas de agua.

Por ello, la puesta en explotación del embalse de Villagatón o la mejora del trasvase de Valdesamario para reducir pérdidas y una ligera mejora de la capacidad hidráulica podrán incorporarse al Programa

de medidas en fase de redacción de plan hidrológico. Respecto a de la balsa lateral de La Rial o el posible recrecimiento de Villameca, la decisión de su incorporación al Programa de medidas del plan hidrológico dependerá de su encaje en las conclusiones del estudio de alternativas de incremento de regulación del sistema Órbigo y de su encaje en la estrategia global de la demarcación.

Sobre las propuestas relativas al río Duerna, la Confederación Hidrográfica del Duero valora positivamente las actuaciones de "siembra de agua", entendida como recarga gestionada de acuíferos mediante derivaciones superficiales (como el uso de "zayas" u otras infraestructuras tradicionales), que ya han sido consideradas en el marco de la planificación hidrológica vigente. En particular, en el valle del Duerna se incluyó una reserva de agua superficial en invierno destinada a la recarga, constituyendo una medida alineada con la gestión conjunta de recursos superficiales y subterráneos y con los objetivos de mejora de la garantía y sostenibilidad del regadío. Como se ha dicho en la respuesta a la alegación nº 19 de este mismo escrito, lamentablemente a fecha actual no se ha podido hacer efectiva esa reserva por falta de interlocutor en forma de junta central, sindicato central o comunidad general de usuarios, trámite imprescindible para poder hacer efectiva esa reserva.

Esta solución encaja, asimismo, con las líneas del EpTI en materia de adaptación al cambio climático, diversificación de fuentes y aumento de la resiliencia de los sistemas de explotación, incluyendo el uso de infraestructuras alternativas y recarga artificial cuando resulten técnica y ambientalmente viables.

En cuanto a las propuestas relativas a la construcción de balsas laterales, almacenamiento estacional o alternativas de regulación en cabecera, estas se encuadran dentro de las posibles medidas de mejora de la gestión de la oferta contempladas en los temas importantes DU-06 y DU-07 del EpTI (incluyendo infraestructuras de almacenamiento, regulación o mejora de la garantía). No obstante, su implantación requiere un análisis específico en el marco de la elaboración del Plan Hidrológico, en el que se valore su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica, así como su eficacia real frente a otras alternativas. En este sentido, dichas propuestas se tendrán en consideración y podrán ser objeto de estudio en la fase de redacción del Plan.

En relación con las propuestas formuladas en el punto 4 para el sistema Esla-Valderaduey, la propuesta de aprovechamiento de aportaciones invernales mediante balsas laterales en el río Cea se encuadra dentro de las medidas contempladas en el EpTI en los temas importantes DU-06 y DU-07, en los que se prevé la utilización de infraestructuras de almacenamiento complementarias (balsas laterales, regulación estacional, etc.) como instrumento para mejorar la garantía de los sistemas de explotación. Por ello, este tipo de soluciones podrá ser analizado en la fase de elaboración del Plan Hidrológico, valorando su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica en el ámbito del sistema Esla–Valderaduey.

En cuanto a la propuesta de explotación conjunta de los embalses indicados, debe señalarse que el embalse de Casares es titularidad de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A.), por lo que en la situación actual no resulta posible su gestión conjunta con las infraestructuras de titularidad y explotación directa del Organismo de cuenca en los términos planteados.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier planteamiento de optimización conjunta de infraestructuras deberá analizarse en el marco competencial y de explotación correspondiente, considerando el

régimen jurídico de cada una de ellas y los acuerdos que, en su caso, pudieran establecerse entre las Administraciones implicadas.

En relación con el punto 5 de la alegación, se formulan las siguientes consideraciones:

Las posibles limitaciones al uso de aguas subterráneas deben enmarcarse en el objetivo prioritario de la planificación hidrológica, conforme a la Directiva Marco del Agua y al Texto Refundido de la Ley de Aguas, de alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de agua, evitando su deterioro y corrigiendo situaciones de sobreexplotación. En este sentido, la evolución de la política hidráulica se orienta hacia un refuerzo del control administrativo de las extracciones y una progresiva convergencia hacia el régimen concesional, lo que implica necesariamente la adopción de medidas de limitación en aquellos casos en los que las extracciones resulten incompatibles con la recuperación de los acuíferos.

Se valora positivamente el impulso a la constitución de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) como instrumento clave para la mejora de la gobernanza, el control de extracciones y la gestión conjunta de los recursos, en línea con lo previsto en el EpTI para el uso sostenible de las masas de agua subterránea.

Las propuestas orientadas a la sustitución de bombeos por recursos superficiales y al uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas son coherentes con las líneas de actuación recogidas en el EpTI, que contempla este tipo de medidas como alternativas para reducir la presión sobre los acuíferos y avanzar hacia su recuperación. No obstante, su viabilidad debe analizarse caso por caso en la elaboración del Plan Hidrológico, considerando la disponibilidad real de recursos, las garantías de suministro, los condicionantes ambientales y la eficiencia económica de las soluciones planteadas.

Alegación 28.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario recordar que la planificación hidrológica, de conformidad con el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, no persigue exclusivamente objetivos ambientales, sino también la satisfacción de las demandas, la armonización del desarrollo regional y sectorial y la sostenibilidad de las actividades económicas vinculadas al uso racional del agua. En consecuencia, cualquier mecanismo de coordinación interadministrativa o fijación de objetivos específicos en zonas protegidas debe incorporar necesariamente criterios de proporcionalidad, equilibrio territorial, cohesión socioeconómica y viabilidad de los usos existentes, singularmente en territorios rurales altamente dependientes del regadío. […]

La ficha plantea la alineación del marco regulatorio de distintas políticas sectoriales con los objetivos de la planificación hidrológica, incluyendo expresamente la Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats. No obstante, dicha coordinación no debería derivar en la imposición automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos.

Respuesta:

El EpTI no propone ni pretende imponer de manera *automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos*. De hecho, al menos, las Fichas DU-01, DU-02, DU-03, DU-04 y DU-07 tratan de hacer un análisis técnico de las presiones que generan sobre las masas de agua las actividades humanas, entre ellas la agrícola, unas veces con mayor profusión de datos y otras de manera cualitativa. Las propuestas y alternativas que se hacen en el EpTI se apoyan en ese análisis, tratando de corregir las presiones sin causar un daño excesivo a las propias actividades existentes. A nuestro juicio hay un equilibrio entre las actividades y los objetivos ambientales dentro del margen que permite la normativa vigente. Y la llamada a las políticas sectoriales (Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats) lo es en la medida que estas políticas apuntan a la del agua en sus propios desarrollos legales.

Alegación 29.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La ficha señala la necesidad de fijar objetivos específicos sobre el medio hídrico de los espacios Red Natura 2000 vinculados al agua. Sobre esta cuestión debe indicarse que cualquier eventual limitación derivada de dichos objetivos deberá sustentarse necesariamente en estudios técnicos individualizados, suficientemente motivados y territorialmente concretos, evitando restricciones automáticas derivadas exclusivamente de la ubicación geográfica de las explotaciones o infraestructuras. Especialmente en sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados, debe garantizarse plenamente la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes y la compatibilidad entre conservación ambiental y actividad agraria sostenible.

Respuesta:

Las limitaciones derivadas de los objetivos de los espacios naturales de Red Natura 2000 ya existen desde que se aprobaron los planes básicos de gestión, en el caso de Castilla y León desde 2015.

Los objetivos específicos de Red Natura se fijan por las comunidades autónomas en los Planes Básicos de Gestión. En el caso de los Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León se aprobaron por ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre. Estos Planes establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000. Se estructuran en:

- Un documento de “Disposiciones generales”, común a los 177 Planes Básicos.
- Ciento setenta y siete documentos de Planes Básicos de gestión y conservación correspondientes a cada uno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.
- Tres "Anexos" comunes a los 177 planes básicos:
    - Anexo I. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000,
    - Anexo II. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Valores Red Natura 2000, y

- Anexo III. Medidas de conservación y gestión Red Natura 2000.

De todos los espacios y hábitats de estos Planes sólo aquellos vinculados al agua (76 en la demarcación hidrográfica del Duero) deben ser atendidos por la planificación hidrológica como establece el RPH, en la medida en que les afecte. Y las limitaciones en el ámbito del agua las establecen los citados planes. En este sentido cabe transcribir algunos de los fundamentos de derecho que esgrime el Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 515/2025 que se cita en la Ficha DU-09: "Por consiguiente, y como ciertamente esta situación no parece acomodarse a las exigencias de la DMA y de la legislación interna que la traspone, de las que deriva la necesidad de que los planes hidrológicos, como instrumento esencial de coordinación de la política de aguas, reflejen los objetivos ambientales de las zonas protegidas vinculados a las masas de agua asociadas y su grado de cumplimiento, y que sobre dichos objetivos no cabe aplicar la excepción prevista en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2000/60, procede estimar la pretensión de la parte recurrente y declarar la nulidad de todas las previsiones contenidas en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las que, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 10 de las disposiciones normativas, se prevea la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas de agua vinculadas a zonas protegidas de hábitats y especies, en las que, además, no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares.

Puede ser llamativo que la delimitación de espacios protegidos por las comunidades autónomas afecten en ocasiones a zonas como las que identifica la alegante ("sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados"), por lo que cabría pensar que esos espacios protegidos lo son precisamente por su relación con esos regadíos históricos; sin embargo encontramos en sus planes básicos que la actividad agraria, entre otras, es quien constituye una presión, algo que aparentemente repugna toda lógica racional. Pero la planificación hidrológica poco puede hacer para resolver estas incoherencias, más allá de instar al órgano competente de la comunidad autónoma a que revise esas declaraciones o los planes básicos correspondientes, como también lo puede hacer el sector al que pertenece la alegante.

Alegación 30.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

No parece razonable incrementar simultáneamente las exigencias ambientales o las limitaciones sobre los usuarios concesionales mientras persistan importantes retrasos administrativos y presupuestarios en la ejecución de actuaciones estructurales cuya responsabilidad corresponde principalmente a las administraciones públicas competentes.

Respuesta:

Manifestamos acuerdo con la alegante en lo que se refiere al notable retraso en la ejecución del Programa de medidas; de hecho, la propia Ficha lo pone de manifiesto cuando abiertamente reconoce que el *Programa de medidas del Plan Hidrológico se construye con las medidas que todas las autoridades competentes (administraciones locales, autonómicas o estatal) y resto de agentes, cada uno en el marco de sus competencias, pueden impulsar para el logro de los citados objetivos. Por tanto, buena parte del éxito de un plan hidrológico para dar cumplimiento a esos objetivos estriba en el*

compromiso de los agentes de acometer las medidas que caen bajo su ámbito. También propone algunas decisiones a explorar para que esto no se repita en el futuro, como son que haya un *compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución*, y establecer un *marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios.*

Pero dicho esto no podemos compartir la comparación de este hecho con las necesidades de establecer criterios ambientales ya que en su mayoría estos criterios buscan reducir las presiones sobre las masas de agua y esas presiones se ejercen por actividades y usuarios concretos a quienes corresponde, en la medida de lo que establecen las normas, contribuir a la reducción de las mismas.

Alegación 31.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario reforzar de manera efectiva la participación técnica y real de los usuarios del agua, singularmente de las Comunidades de Regantes, en los procesos de toma de decisiones y seguimiento de la planificación hidrológica.

Respuesta:

La Ficha DU-09 aborda la necesaria colaboración y cooperación entre los departamentos de la administración pública para que, cada uno en su ámbito competencial, contribuya al logro de los objetivos de la planificación. Y ello porque al tener competencias sobre distintos factores que inciden en el agua (tanto como demanda como medio ecológico), las políticas sectoriales en cada uno pueden contribuir o no a lograr los objetivos.

No se aborda en la ficha el modo de participación de los usuarios en la gestión del agua que tiene sus propias normas legales establecidas. Por ello sorprende que una Comunidad de regantes reclame mayor participación en los procesos de toma decisiones y de seguimiento de la planificación hidrológica. Las comunidades de regantes participan en la Junta de Gobierno, en el Consejo del Agua de la demarcación, en la Comisión de Desembalse, en la Asamblea de Usuarios y las Juntas de Explotación. Esa representación está regulada en el TRLA, el RAPA o reglamentos específicos (como el que regula el consejo del agua de la demarcación). Todos ellos son órganos de gobierno, gestión, coordinación y participación de los organismos de cuenca. Nos gustaría conocer otros ámbitos administrativos donde la participación de los usuarios fuera al menos de la misma magnitud que en la gestión del agua. De cualquier modo, el EpTI no tiene capacidad para modificar la distribución de la representación de los usuarios en los distintos órganos.

Alegación 32.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario que la planificación identifique de manera expresa la incidencia real que el cumplimiento del Convenio de Albufeira y de otros compromisos ambientales o internacionales tiene

sobre las garantías de suministro de las distintas unidades de demanda agraria y sobre las reservas embalsadas disponibles en los sistemas de explotación. [..]

Por ello, cualquier incremento de exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales existentes.

Respuesta:

El análisis que se solicita en la alegación respecto al Convenio de Albufeira se ha hecho en todas las alternativas que figuran en las Fichas DU-06 y 07 debido que se trata de una restricción al uso del agua, de manera que, en todo caso, siempre que no se den las condiciones de excepción, se cumplen los requisitos del Convenio. No se ha incluido su explicación en las Fichas por una cuestión de simplificación. No obstante, con las medidas definitivas, en fase de redacción de plan hidrológico, habrá un apartado específico que aborde este cumplimiento de caudales integrales del Convenio de Albufeira.

Respecto a la segunda propuesta (que las nuevas exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales), el EpTI no puede avalar una cuestión que no está contemplada en la normativa vigente. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 65 del TRLA cuando los usos actuales puedan verse afectados por la planificación hidrológica o por requisitos adicionales de carácter ambiental que hagan imposible ejercer el uso para el que existe concesión, como parece explicar la alegación, podrá reclamarse la correspondiente indemnización. Y ello sin menoscabo de la jurisprudencia ya consolidada en relación con las indemnizaciones por restricciones previas, como son el régimen de caudales ecológicos o los compromisos internacionales o ambientales, más bien en contradicción de la propuesta de la alegación.

Alegación 33.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La creciente interacción entre distintas políticas sectoriales europeas, estatales y autonómicas vinculadas al agua puede generar escenarios de elevada complejidad regulatoria para los usuarios y las Comunidades de Regantes. Por ello, se considera imprescindible que el futuro Plan Hidrológico garantice marcos regulatorios claros, previsibles y técnicamente motivados, evitando duplicidades administrativas, contradicciones regulatorias y limitaciones carentes de suficiente justificación técnica individualizada.

Respuesta:

En el ámbito del agua, el EpTI es un documento intermedio de la planificación hidrológica que tiene por objeto la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo

con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. No tiene que ofrecer seguridad jurídica ya que es un documento instrumental en la elaboración del Plan Hidrológico que se aprueba por Real Decreto y tiene fuerza vinculante.

Por otra parte, la seguridad jurídica para los usuarios que aspiran a desarrollar una actividad la ofrece el procedimiento concesional donde se concreta la actividad en el objeto, el tiempo y el lugar, lo que permite evaluar la actividad en coherencia con los objetivos de la planificación hidrológica. Por tanto, se rechaza la alegación. Los planes hidrológicos se revisan cada seis años, lo que puede suponer que, dentro del marco legal general, haya modificaciones específicas como consecuencia de la revisión planificadora. Seis años, a nuestro juicio es un marco temporal escaso, pero el ordenamiento jurídico establece ese plazo para las sucesivas revisiones y a él debemos ajustarnos.

La Ficha DU-09 pone el acento en la necesidad de incrementar la coordinación y cooperación administrativa en el ámbito de la planificación hidrológica; la alegante reclama esa coordinación en el marco de la gestión ordinaria. Siendo un objetivo razonable, no hay que olvidar cuáles son las competencias de cada administración lo que puede suponer una mayor lentitud de procedimientos, en especial si éstos confluyen en una única actividad. Sigue quedando pendiente la simplificación administrativa ya que, cada vez que hay cambios normativos, no suelen ser para simplificar sino para una mayor complejidad. Al igual que los usuarios también las administraciones padecemos esta complejidad que está al servicio, en este caso, de las garantías. Precisamente la variedad de competencias sobre una misma actividad puede generar esas incoherencias de las que no son culpables quienes deben verificar los requisitos legales sino de las normas que regulan la actividad.

Alegación 34.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Una cuestión relevante que debería ser tenida en cuenta en las evaluaciones ambientales de grandes instalaciones fotovoltaicas es la posible modificación del coeficiente de escorrentía superficial derivada de la implantación masiva de paneles solares. […]

Por ello, se considera necesario que el futuro instrumento de planificación y las evaluaciones ambientales incorporen análisis hidrológicos específicos sobre modificación de escorrentías, incluyendo modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Respuesta:

Compartimos con el alegante su percepción de que la construcción de plantas fotovoltaicas contribuye al aumento de suelo artificial con impactos como compactación y modificación de la permeabilidad del suelo, alteración de la escorrentía e incremento de la erosión.

La planificación hidrológica no puede entrar en el detalle de dichos impactos, que son evaluados específicamente en los procedimientos ambientales a que se ven sometidos los proyectos y que son específicos de cada uno de ellos.

La modificación de la escorrentía superficial producida por una instalación fotovoltaica depende de muchos factores como son la extensión de la planta fotovoltaica, las características edáficas de su localización, las posibles modificaciones topográficas del terreno, el tipo y forma de fijación de los

seguidores, etc. Estos aspectos son evaluados de forma cualitativa en los preceptivos informes que emite la CHD, como administración afectada, en el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos, sin poder establecer una evaluación cuantitativa del efecto sobre la escorrentía ya que los promotores no facilitan modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Alegación 35.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Por otro lado, se considera igualmente interesante analizar el potencial uso dual de determinadas infraestructuras de regadío para su contribución al sistema eléctrico nacional, especialmente en aquellos casos en los que existan balsas de regulación situadas a cota elevada y otros condicionantes técnicos favorables. Determinadas instalaciones de modernización podrían adaptarse para funciones complementarias de almacenamiento energético y regulación eléctrica mediante sistemas reversibles, incrementando la utilidad y rentabilidad social de infraestructuras ya existentes.

Respuesta:

Esta indicación del alegante de una posible utilización de las instalaciones inherentes a modernizaciones del regadío para funciones de almacenamiento energético no se ha planteado hasta la fecha en este Organismo. No obstante, cualquier iniciativa que se presente para la correspondiente autorización o concesión se analizará específicamente.

La capacidad de almacenamiento de estas balsas de regulación no suele ser tan elevada como para que las empresas hidroeléctricas consideren rentable la inversión en la implantación de sistemas de bombeo y centrales hidroeléctricas que permitan utilizar este recurso.

Es todo caso, sería la administración competente en la realización de estas modernizaciones y, en su caso, el titular de las infraestructuras de regadío quienes deberían proponer la utilización de las mismas para fines energéticos.

Alegación 36.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

En la ficha se indica que para las aplicaciones y usos del agua vinculados a energías renovables resultan de aplicación las mismas consideraciones previstas para usos consuntivos[..], parecería más adecuado diferenciar entre usos estrictamente consuntivos y usos con retorno efectivo del agua, especialmente a efectos de evaluación de impacto sobre la disponibilidad global del recurso hídrico. Todo ello

Se están empezando a crear nuevas plantas de hidrogeno verde, de bioetanol, etc, que necesitan agua para su desarrollo. Nos oponemos a que se extraiga agua de acuíferos que están en mal estado y, por otro lado, que cuando hayan extraído el agua, puedan verter la molécula resultante a cauces o arroyos, agravando el problema de la contaminación difusa.

Cuando el agua se coja de fuentes superficiales, nos oponemos a que se puedan restar dotaciones al regadío, cuando hay UDAs y comunidades de regantes que incumplen el criterio de garantía [..].

Por tanto, los nuevos usos del agua destinados a la implantación de industrias de producción y almacenamiento de energías renovables, pueden tener un efecto negativo en el regadío, tanto en aguas subterráneas como en aguas superficiales y pedimos que este problema se analice y se aborde con mucho rigor para no perjudicar una actividad económica destinada a la producción de alimentos, que fija población en las zonas rurales y que contribuye al mantenimiento del ecosistema y la disminución de la contaminación ambiental.

Respuesta:

Los parques eólicos y plantas fotovoltaicas precisan agua para su construcción y para algunas operaciones de mantenimiento (limpieza de paneles), siendo los volúmenes demandados no significativos. El suministro de agua para estas instalaciones se realiza habitualmente mediante suministro con camiones cisterna de agua procedente de concesiones vigentes o mediante derivaciones temporales de aguas superficiales, que deben tramitarse en este Organismo, tramitación en la cual se evalúa la disponibilidad del recurso en cada caso particular.

Por otra parte, las instalaciones industriales para la producción de compuestos químicos capaces de almacenar los excedentes de energías renovables como son el hidrógeno verde, el amoniaco, metanol, etc., pueden suponer un uso consuntivo del agua acompañado de grandes volúmenes para la refrigeración que, en algunos casos, revierten al medio hídrico.

La alternativa elegida para este tema importante propone el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos sólo en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua y no que se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, entre ellos el regadío.

Se establecerán dotaciones máximas para la producción de estos compuestos químicos, aplicando las mejores técnicas disponibles y el estado de la ciencia. En ningún caso estas dotaciones irán en detrimento de las dotaciones establecidas para usos agrarios.

En lo relativo al posible impacto ambiental derivado de posibles vertidos y contaminación difusa, estos aspectos se analizan pormenorizadamente en cada caso, en los informes preceptivos que emite este Organismo para la evaluación ambiental de los proyectos a petición del órgano ambiental que corresponda. En estos informes se establecen condicionantes para minimizar estos impactos, que posteriormente se recogen en la declaración de impacto ambiental correspondiente.

Alegación 37.

Conclusiones finales

El actual contexto de cambio climático, reducción de aportaciones e incremento de exigencias ambientales e internacionales obliga a reforzar la resiliencia hídrica de la Demarcación mediante:

- *Una adecuada política de regulación y almacenamiento*
- *El mantenimiento funcional de los cauces*
- *La modernización y optimización de infraestructuras*
- *La revisión técnica de los actuales indicadores de sequía y escasez*

La mejora de la capacidad reguladora de la cuenca no debe entenderse únicamente como una herramienta de garantía de usos, sino también como un instrumento esencial para:

- *La adaptación al cambio climático*
- *La conservación de ecosistemas asociados al agua*
- *La estabilidad de las masas de agua*
- *El cumplimiento de objetivos ambientales*
- *La adecuada atención de los compromisos internacionales derivados del Convenio de Albufeira*

Respuesta:

Todos los aspectos que se citan en las conclusiones finales se han ido valorando a lo largo de la respuesta a este escrito de alegaciones, mostrando un acuerdo con la mayoría de las cuestiones generales aportadas, si bien el enfoque de las medidas puede variar puntualmente, y algunos desacuerdos en especial con la vinculación de un mayor número de infraestructuras de regulación y una mejora de la conservación de ecosistemas asociados al agua.

Alegación 38.

Conclusiones finales

En conclusión, si tenemos en cuenta todo lo manifestado en el cuerpo de las presentes alegaciones, mucho tiene que cambiar la filosofía y el contenido del EpTI y el documento del PLAN que se elabore en el siguiente paso del proceso de planificación para que el voto de los usuarios regantes cuando sea informado por el Consejo del Agua de la Demarcación sea favorable. NUESTRA POSICIÓN SÓLO PUEDE SER LA DE OPONERNOS A LA APROBACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO.

Respuesta:

Respetamos la postura de la alegante en relación con el EpTI. No obstante, de una lectura de las propuestas, sugerencia y observaciones que hace la alegante y de la lectura del EpTI no podemos concluir lo mismo que el firmante del escrito. La mayor parte de las cuestiones que se plantean como mejoras están recogidas en la documentación a consulta pública; hay otras que el EpTI no puede atender porque ya están reguladas en normas de mayor rango y que atenderlas requieren modificaciones legales que no corresponden al promotor del Plan Hidrológico. Otras sugerencias, en fin, colisionan de facto con la normativa vigente y lógicamente no pueden ser atendidas. Pero en todo caso no se observa justificación para esta opinión desfavorable tan rotunda como muestra la conclusión final.

4.50. Escrito de observaciones Nº 061

Presentado por: *Agência Portuguesa do Ambiente (APA)*

En nombre de propio.

Alegación 1.

Se hace una valoración general de los temas importantes de la parte española confrontándolos con los temas importantes de Portugal coincidiendo 6 temas portugueses con otros tantos españoles y algunos transversales como el de coordinación administrativa. Se valora que en el enfoque español de algunos temas importantes se tenga en cuenta los aspectos fronterizos de los mismos.

Respuesta:

Se agradecen los comentarios. A lo que se indica en la Ficha DU-09 sobre la cooperación interadministrativa con Portugal simplemente añadir que este enfoque de la cooperación transfronteriza es el resultado del intenso trabajo de las administraciones del agua en los últimos años en materia de coordinación tanto en situaciones ordinarias como específicamente en situaciones de sequía e inundaciones, y en materia de planificación hidrológica conjunta.

Alegación 2.

Respecto al tema importante de la contaminación difusa, Portugal considera que es coherente con el tema importante portugués poluição orgânica, microbiológica e por nutrientes das águas superficiais, y que dada la naturaleza internacional de la cuenca se debería mejorar la colaboración con Portugal en la programación de medidas comunes. Destaca en este campo, por un lado, la contaminación difusa por radiactividad en la subcuenca del Águeda consecuencia de las centrales nucleares activas en España, aspecto que debería ser más estudiado, y por otro la presencia de glifosato que exige una monitorización conjunta y la toma de medidas conjuntas para resolver este problema. En esta materia Portugal propone definir una estrategia de resolución de eventuales conflictos antes situaciones de contaminación.

Respuesta:

En la parte española del Águeda no existe ninguna central nuclear activa. Existe una industria de extracción minera de materiales como wolframio que no ha reportado hasta la fecha problemas de contaminación radiactiva al igual que los datos de los registros oficiales. La mina de uranio que fue promovida en la cuenca del Águeda hace unos años (2016) está inactiva por haber sido denegados los permisos de explotación.

La presencia de glifosato en el agua requiere la actuación sobre la presión de contaminación difusa. En este sentido la estrategia de resolución de conflictos ante estos episodios deberá sustanciarse en el ámbito de la CADC y para el conjunto de las cuencas compartidas. No obstante, se añade entre las decisiones a tomar en el ámbito de la cooperación de la Ficha DU-09 una referencia a esta estrategia.

Alegación 3.

Respecto al tema importante de la contaminación urbana e industrial, Portugal considera que está bien enfocado, que es coherente con el tema importante portugués poluição orgânica, microbiológica e por nutrientes das águas superficiais. Dada la naturaleza internacional de la cuenca, la calidad del agua que llega a Portugal es una cuestión sensible. De hecho, Portugal ha puesto de manifiesto en innumerables ocasiones su preocupación por la contaminación, especialmente del río Támega del que se abastecen poblaciones como Chaves ya que puede verse afectado por aguas residuales tratadas insuficientemente en España, como es el caso de Verín. Por otra parte, la reducción de aportaciones en los ríos puede suponer un incremento de la concentración de contaminantes con la consiguiente eutrofización de masas de agua y una peor calidad de la misma.

Respuesta:

La situación de la parte española de la cuenca del Támega en relación con la depuración adecuada de aguas residuales urbanas en la comarca de Verín sigue siendo un asunto no resuelto por parte de las autoridades españolas en lo que se refiere a su parte del territorio. Pese a que en el Plan vigente existen medidas dirigidas a minorar los impactos de las descargas de aguas residuales depuradas, la realidad es que los agentes responsables no han sido capaces de impulsar esas medidas.

La CHD en el ámbito de sus competencias, ha tratado de estimular a los competentes (como son los ayuntamientos) a acometer esas medidas, sobre todo las relativas a la adecuada depuración de las aguar residuales de Verín a través de tres vías: la coercitiva, mayorando el importe anual del canon de vertido a las poblaciones con vertidos incorrectos lo que, en aplicación de la normativa vigente, puede estimular a que se acometan las obras necesarias; la de diseño, redactando un proyecto de mejora de la depuración de los vertidos al Támega en 2018 que puede servir de pauta para que los ayuntamientos acometan las obras de depuración y de saneamiento; y la de la ejecución animando a las autoridades competentes a alcanzar financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Lamentablemente ha sido insuficiente y sigue el problema sin resolver. Ha seguido habiendo contactos entre los agentes responsables, la CHD y la autoridad competente en materia de infraestructuras de la Xunta de Galicia, pero aún no se ha cerrado el problema. En el nuevo Plan Hidrológico se mantendrá la medida 6400002 (Ampliación E.D.A.R. Tratamiento terciario. Río Támega. Monterrei, Verín para el ciclo 2028-2033).

Por otra parte, el proyecto piloto de plan de gestión del río Támega desarrollado entre ambas administraciones no ha podido identificar todas las presiones, a ambos lados de la frontera, que pueden incidir en la calidad de agua. Se identificaron las presiones españolas puntuales en las masas de agua Támega 1-ES020MSPF000000218, Támega 2-ES020MSPF000000219 y Támega 3-ES020MSPF000000224: presiones tipo 1.1 (Puntual-Aguas residuales urbanas), tipo 3.1 (Extracción o desviación de flujo–Agricultura), tipo 4.2.4 (Presas, azudes y diques-Riego) y 4.2.6 (Presas, azudes y diques-Industria); sin embargo en la masa de agua portuguesa Támega-PT03DOU0226NA1, que da continuidad en Portugal a la masa Támega 3, las únicas presiones significativas reportadas fueron tipo 4.2.8 (Barragens, açudes e comportas- Outra) y tipo 5.1 (Introdução de espécies e doençasque), pese a que existen extracciones importantes cuya identificación no ha sido posible, como por ejemplo el

açude da Veiga que permite la derivación de agua a un canal de riego que suministra a parcelas en la zona de Vila Verda da Raia, Santo Estevao, Faioes y Seixal.

Alegación 4.

Respecto al tema importante de la gestión de inundaciones, Portugal indica que es coherente con el tema importante portugués inundaçoes. Portugal considera que es necesario continuar con la buena coordinación entre ambos países en la gestión de fenómenos extremos articulando medidas conjuntas en las zonas de riesgo comunes identificadas. En la actualidad hay una buena cooperación de los equipos técnicos que debe mantenerse y ampliarse para hacer frente a fenómenos extremos que afectan a ambos países. En esta materia Portugal propone definir una estrategia de resolución de eventuales conflictos ante estos eventos y diseñar mecanismos de articulación de las condiciones ambientales que determinan las inundaciones y las sequías.

Respuesta:

Mostramos conformidad con la propuesta portuguesa que se incluye como decisión a tomar en materia de coordinación de la Ficha DU-05 en el ámbito de la CADC para avenidas con efectos transfronterizos; en especial se considera necesario que el borrador del protocolo de comunicación ante episodios de avenidas, en estado bastante avanzado, sea definitivamente validado y, en su caso, aprobado por la CADC.

Alegación 5.

Respecto al tema importante DU-06, Portugal considera que es coherente con el tema importante portugués Eficiência técnica do uso da água (setor agrícola). Portugal considera que es necesario que los incrementos de demanda neta en España y el previsible escenario de cambio climático con reducciones estimadas del 8% permitan garantizar el régimen de caudales del Convenio de Albufeira ya que estos son esenciales para garantizar los ecosistemas acuáticos. Proponen que se promueva en términos ibéricos una articulación conjunta de la agricultura y la energía.

Respuesta:

Para España las exigencias del Convenio de Albufeira se consideran una restricción al uso del agua de manera que, entre los requisitos para aceptar incrementos de la demanda agraria u otro uso, está que se cumplan esas exigencias internacionales.

Las demandas consuntivas que se prevé incrementar son las agrarias. En las Fichas DU-06 y DU-07 se hace un análisis de las posibles alternativas para poder asumir esos incrementos, tanto en materia de gestión de la demanda como de incremento de la oferta. Actualmente las demandas agropecuarias (regadío y ganadería, excluyendo piscícola) en la parte española ascienden a unos 3.400 Hm3/año. El incremento que se produciría en las diversas alternativas que se plantean en las fichas DU-06 y DU-07 a diversos horizontes, es de un 10% de la demanda agraria actual, teniendo en cuenta también las acciones de mejora de la eficiencia en el uso del agua. Actualmente la demanda consuntiva en la parte española de la demarcación supone un 29% de las aportaciones medias, cifradas en unos 11.800 Hm3/año en el último inventario de recursos. Con este incremento de la demanda agraria, el uso supondría un 31% de las aportaciones, porcentaje que se incrementa hasta el 34% si se tiene en cuenta el efecto del cambio climático valorado en una reducción de las aportaciones de un 8%, en el horizonte

posterior a 2027. Si valoramos este uso respecto al total de la cuenca internacional vemos que actualmente se utilizan en España menos del 22% de los recursos naturales medios conjuntos. Por tanto, con las limitaciones de este análisis a escala global ya que son valores medios y no tienen en cuenta los estadísticos que miden la dispersión, el uso que se hace del agua en la parte española de la demarcación actualmente y en horizontes futuros en términos absolutos no puede considerarse, a nuestro juicio, excesivo. En el EpTI se ha valora el efecto de esa expansión de la demanda en la parte española sobre el cumplimiento de los caudales exigidos por el Convenio de Albufeira en los dos puntos de control del Duero bajo la hipótesis del cambio climático en relación con la situación actual. En el punto de control de Miranda para la serie de años considerada (35 años) y en una situación de demanda como la actual, habría 7 años con incumplimientos del régimen anual, de los cuales 5 serían años de excepción. Si se incorpora el efecto del cambio climático, con la reducción de aportaciones estimadas, en un escenario de demanda actual, el número de incumplimientos del régimen anual en la serie considerada serían 11, de los cuales 5 serían excepción. Si al efecto del cambio climático se añade una política expansiva del regadío como la indicada en párrafo anterior, el número de incumplimientos del régimen anual pasaría a 12 (de los 35 de la serie). Es decir, es mucho más intenso el efecto del cambio climático sobre el Convenio de Albufeira en Miranda que el efecto del incremento de la demanda de regadío en España. Por lo que respecta al punto de control del Convenio en España, presa de Saucelle más aportación del río Águeda, para la serie de años considerada y en una situación de demanda como la actual, no existen incumplimientos del régimen anual. Si se incorpora el efecto del cambio climático, con la reducción de aportaciones estimadas, en un escenario de demanda actual, el número de incumplimientos del régimen anual en la serie considerada sería uno. Al no ser un año de excepción España debería velar por garantizar el volumen fijado por el Convenio mediante medidas restrictivas de uso del agua. Si al efecto del cambio climático se añade una política expansiva del regadío como la indicada en párrafo anterior, el número de incumplimientos del régimen anual pasaría a 4 (de los 35 de la serie). En este punto de control, es más intenso el efecto del aumento de la demanda en España (al concentrarse en la subcuenca del Tormes) que el efecto del cambio climático sobre el cumplimiento del régimen anual fijado por el Convenio de Albufeira.

Alegación 6.

Respecto al tema importante DU-07, Portugal considera que es coherente con el tema importante portugués Eficiência técnica do uso da água (setor agrícola). Portugal considera que el aumento de la regulación en España podría reducir los caudales aportados a Portugal en valores estimados entre un 0,41 y un 0,73%, lo que debería mitigarse con la ejecución de medidas de reducción de la demanda. Esto es especialmente importante en el tramo internacional donde debe establecerse una gestión coordinada.

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación anterior, para España las exigencias del Convenio de Albufeira se consideran una restricción al uso del agua de manera que, entre los requisitos para aceptar incrementos de la regulación, está que se cumplan esas exigencias internacionales. Independientemente de esto, España está comprometida con el cumplimiento del Convenio de Albufeira de modo que este principio está y estará presente en la gestión del agua en la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero.

Alegación 7.

Respecto a las zonas protegidas de Red Natura 2000, se indican algunas observaciones y propuestas:

- que las masas de agua vinculadas a ellas no admiten prórrogas para atender a los objetivos específicos de estas zonas;

- que los planes hidrológicos contengan objetivos específicos claros en coherencia con los planes de gestión de las áreas protegidas.

- que se garantice que no existe deterioro de los hábitats protegidos respecto a la situación de julio de 1996.

- que se prioricen las medidas de restauración fluvial en masas de agua vinculadas a Red Natura y en zonas húmedas.

- que se limite la implantación de nuevas instalaciones de energías renovables en áreas protegidas e reservas hidrológicas y que se asegure que las líneas de evacuación no deterioran las masas de agua, en especial las de zonas protegidas.

- dar mayor relevancia a las necesidades hídricas de los ecosistemas en un escenario de incremento de la demanda y consumo y reducción de aportaciones.

Respuesta:

Sin duda esta es una parte importante de la planificación hidrológica. Y el Plan Hidrológico, como ha hecho en ciclos anteriores, incorporará los objetivos específicos de las zonas protegidas vinculadas al agua que las autoridades competentes (en España son las comunidades autónomas) hayan identificado en sus planes básicos de gestión de Red Natura; y las medidas que con este objetivo se implementen en el plan hidrológico deberán garantizar el no deterioro.

Como se pone de manifiesto en la Ficha DU-04 la prioridad de actuaciones de restauración en zonas protegidas siendo un concepto general razonable, no siempre se puede llevar a la práctica. Identificadas las presiones hidromorfológicas a reducir es necesario que desde el punto de vista legal sea posible, por ejemplo, porque no hay usos vinculados o porque hay oposición social a esas actuaciones. Estos aspectos ajenos a la mera actuación en el ámbito fluvial muchas veces generan criterios de oportunidad negativos que impiden llegar tan lejos como se desharía.

Parte de las propuestas que se hacen en la Ficha DU-10 van en la línea de la alegación, para tratar de preservar los espacios protegidos de esas nuevas presiones.

En España todas las masas de agua disponen de un régimen de caudales ecológicos, con las componentes adecuadas a cada masa de agua. Ese régimen es el que mantiene como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera. Los caudales ecológicos se consideran como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación, con excepción del uso humano. Si vinculado a una masa de agua existe un espacio protegido con requerimientos hídricos adicionales a los caudales ecológicos estos se incorporan como restricción previa al uso del agua.

Alegación 8.

Se debe asegurar el cumplimiento de los caudales mínimos definidos en el Convenio de Albufeira dado que corresponden con los valores mínimos fundamentales para el mantenimiento de los ecosistemas ligados al agua. Se debería avanzar en fijar un régimen mínimo diario de caudales aportado por España en esta cuenca, de modo similar a como fue fijado para el Tajo, esta nueva definición no supondría el aumento del caudal semanal actual pero sí su distribución de manera que las aportaciones semanales no se concentraran en pocos días de la semana. Esto permitiría asegurar en la parte portuguesa el suministro de agua a los abastecimientos humanos que dependen del eje del Duero.

Respuesta:

El cumplimiento del régimen de caudales que fija el Convenio de Albufeira es un límite a todos los usos del agua en la parte española de la demarcación hidrográfica y España está comprometida con su cumplimiento. Este régimen fija unos caudales integrales anuales, trimestrales y semanales en cuatro puntos de control, dos en España y dos en Portugal, y un régimen de excepción para estos valores. España no considera que fijar un régimen diario en los puntos de control del Duero, como se ha hecho en el Tajo, pueda suponer una mejora para el mantenimiento de los ecosistemas ligados al agua en Portugal, dada la estructura del río Duero en la parte portuguesa desde Pocinho hasta Oporto, con una sucesión de embalses que han modificado completamente el río y cuya gestión adecuada puede contribuir a ese mantenimiento de los ecosistemas en territorio portugués. España sin embargo sí considera que debería revisarse el régimen de excepción del Convenio de Albufeira en la demarcación hidrográfica del Duero y hacerlo similar al que figura en las demarcaciones de Miño-Sil o Tajo.

De cualquier modo, el EpTI no puede abordar estas cuestiones que son objeto de los trabajos de la CADC.

Alegación 9.

En materia de cooperación de debe avanzar entre ambos países en el logro de los objetivos ambientales en las masas de agua fronterizas, singularmente, para lo que es necesario analizar de manera conjunta las presiones, armonizar los criterios de clasificación de las masas de agua, e implementar medidas concertadas de mejora del conocimiento, en línea con los acuerdos de la última sesión plenaria de la CADC.

Respuesta:

Se está trabajando con las autoridades portuguesas de la ARH-Norte en la armonización de criterios para identificar presiones significativas, monitorización y evaluación de estado. El avance en estos aspectos permitirá fijar objetivos ambientales coherentes para las masas de agua compartidas y, con ello, un programa de medidas conjunto. Se han celebrado varias reuniones de ambos países (reuniones mensuales de coordinación y específicas en mayo de 2025, en Madrid, y mayo de 2026, en Miranda do Douro) para avanzar en esta línea.

4.51. Escrito de observaciones Nº 062

Presentado por: D. Juan Gabriel Fortuny Queralt.

E**n nombre** de la Asociación de Frutos Secos Española.

Alegación 1.

DU-01 Contaminación difusa (origen de la presión)

A su vez, procede destacar que el sector agrícola no es la única fuente de contaminación y, sin embargo, en las presuntas soluciones previstas las medidas impuestas se dirigen en exclusiva a este sector [..]

No obstante, no se opta por su implementación debido a la complejidad técnica inherente a su ejecución y, especialmente, al elevado coste que conlleva. [..]

Consideramos que, este Organismo de cuenca, debe tener este hecho en consideración otras fuentes de contaminación, especialmente de origen urbano e industrial, y proceder a realizar los estudios pertinentes en aras de establecer acciones adecuadas para combatir la contaminación difusa y rebajar la ineficiente presión sobre la producción agrícola.[..]

Al respecto, resulta ilustrativo el Informe sobre el estado ambiental de masas de agua superficiales de la cuenca del Tajo y su relación con los vertidos urbanos

Por otro lado, en tanto que la contaminación por nitratos en la Demarcación del Duero proviene principalmente de los cultivos de secano, es imprescindible mantener un equilibrio en la variedad de técnicas de cultivo implantadas en la Demarcación. La promoción exclusiva de producciones de secano puede producir efectos devastadores sobre la calidad de las aguas debido al excedente de nitratos, siendo recomendable mantener las proporciones existentes de cultivos de regadío

Respuesta:

Nos gustaría aclarar que tomar como ejemplo la cuenca del Tajo, y compararlo con la del Duero, para analizar la situación del contenido en nitratos en las aguas superficiales es poco afortunado. El Tajo recibe las aguas residuales (previo tratamiento), de una aglomeración urbana de más de 10 millones de personas, y de numerosas industrias de todo tipo y cientos de polígonos industriales, después de producirse un trasvase hacia el rio Segura, lo cual afecta a la dilución del vertido, estaremos de acuerdo que estas circunstancias afortunadamente no se dan en el rio Duero.

Afirmar con rotundidad que a los cultivos de secano se dedica la mayor parte de los fertilizantes, es un tanto atrevido, es verdad que la superficie dedicada los cultivos de secano, principalmente cereales es superior a la dedicada al regadío, pero las dosis de abonado aplicadas a los cultivos de regadío (mayoritariamente maíz), son en algunos casos más del doble. Nos parece que el tema debe de tratarse de forma más abierta, no señalando a un tipo de agricultura en particular.

Estamos de acuerdo que una parte del nitrógeno presente en las aguas procede de los vertidos de aguas residuales urbanas, en la Cuenca del Duero, la gran mayoría de las ciudades incluyen en sus sistemas de depuración, el tratamiento y eliminación de sustancias nitrogenadas, estos sistemas son costosos. Los pequeños municipios y poblaciones de mediano tamaño no disponen de estos sistemas

representan más menos el 35% de la población. Para poder identificar con mayor precisión la procedencia de las sustancias nitrogenadas el ministerio, la Dirección General del Agua ha realizado el trabajo "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación". Según este estudio isotópico en la demarcación del Duero para aguas superficiales, con 79 puntos de muestreo en las campañas 2023 y 2024 diferentes, el 61% de las muestras el origen es agrario, el 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario e indeterminado en el 14%. Y respecto a las aguas subterráneas, con 95 puntos de muestreo el origen agrario es en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. A la vista de estos resultados parece claro que la procedencia mayoritaria es de origen agrario

Alegación 2.

DU-01 Contaminación difusa (medidas propuestas)

Consideramos que la implementación de las medidas propuestas debe basarse en criterios de proporcionalidad, viabilidad técnica y sostenibilidad económica. La imposición de medidas de naturaleza restrictiva conlleva un gran coste y en el caso de los cultivos de regadío, en ocasiones, desproporcionado.

Tal y como recogen el propio EpTI en la página 9 del Anexo I aplicar una reducción excesiva de nitratos a los cultivos puede suponer un coste económico para el sector insalvable en tanto que existe una "elevada incertidumbre en el coste económico para el agricultor que puede suponer esta reducción de excedentes de nutrientes" siendo "necesario disponer de estimaciones de reducción de producción agraria o el sobrecoste por una aplicación más ajustada a las necesidades del cultivo."

Es por ello, que se solicita, en caso de imposición de las medidas contempladas, la inclusión, tal y como recoge el propio documento analizado, de medidas compensatorias (pág. 19 y 21 del Anexo I)

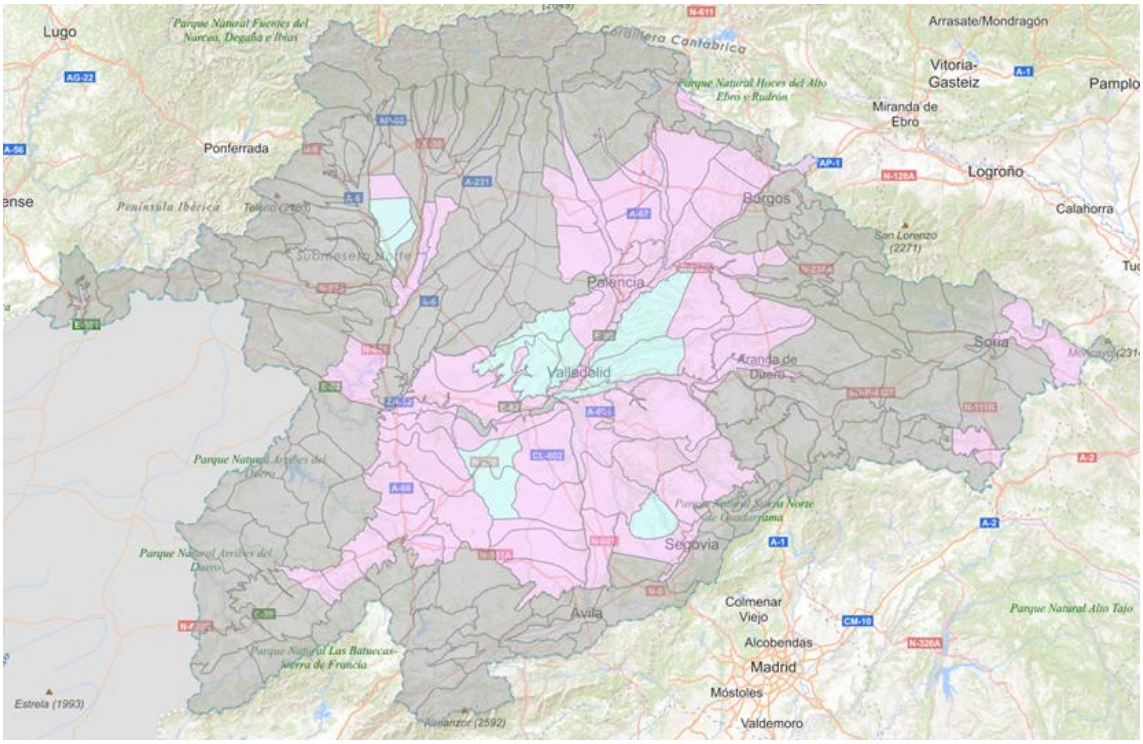
A su vez, en vistas a las conclusiones del Informe expuestas anteriormente, proponemos que se establezca una tabla de rangos de valores máximos de excedentes de nitratos en función del tipo de cultivo y características de la producción agraria. […]

Por lo tanto, la aplicación medidas de tal riesgo para la sostenibilidad económica de la región sin alto de grado de eficiencia puede suponer un incumplimiento de los principios de buena regulación administrativa --art.129 Ley 39/2015--. Más aún, cuando existen otras alternativas que suponen menos riesgos para la supervivencia del sector agrícola como son las Alternativas 3 y 4.

Respuesta:

Se comparte que las medidas frente a la contaminación deben diseñarse con criterios técnicos y de proporcionalidad, considerar todas las fuentes y, en su caso, contar con apoyo económico para su implantación. En materia de nitratos de origen agrario, la designación de zonas vulnerables y los programas de actuación –incluida la limitación de nitrógeno ajustada a la producción– corresponden a las comunidades autónomas, de manera que el Plan Hidrológico incorpora las medidas que los órganos competentes validan: el diseño concreto de estas medidas corresponde al programa de medidas del plan y a la normativa sectorial, no al EpTI.

Como se indica en el EpTI y también en el Plan Hidrológico vigente, los límites del excedente de sustancias nitrogenadas se han hecho a partir de la presión identificada en forma de contenido de nitratos en las agua superficiales y subterráneas. Y esos límites se han fijado en forma de sectores territoriales, tal y como aparece en la imagen (en rosa la reducción del excedente sería del 25%, en azul la reducción del excedente sería del 80% del actual y en gris no sería necesaria esa reducción):



La traslación de la reducción de excedentes en cada sector a los cultivos presentes en el mismo requiere un trabajo de detalle de los organismos competentes en materia agraria, que pueden hacer esa distribución con criterios más técnicos que los que puede hacer el organismo de cuenca. De hecho, esta distribución de sectores tiene como fin ofrecer a la autoridad competente una información con la que realizar el análisis que solicita la alegante.

Sin duda es necesario mejorar el control de las descargas de las EDAR urbanas e industriales, sobre todo de poblaciones pequeñas. Pero como pone de manifiesto la Ficha, el análisis de origen de la contaminación difusa por técnicas isotópicas concluye que el origen de la contaminación en la mayoría de los puntos de muestreos es el agrario al encontrar en más de la mitad de las muestras nitrógeno de origen inorgánico y de residuos animales (61% de las muestras en aguas superficiales y 55% en aguas subterráneas). Por tanto, parece lógico que pongamos el objetivo en cómo reducir esos excedentes.

Coincidimos con el alegante en que bandas de protección, asesoramiento y uso de nuevos productos deben ser medidas de carácter voluntario y adecuadamente compensadas. Y pensamos que el marco financiero de la PAC es la herramienta adecuada para ello. Lógicamente para que esto sea factible es necesarios que la administración competente en esta materia tenga interés en dotar a estos servicios ecosistémicos de la financiación adecuada.

Las herramientas de gestión de nutrientes ya son obligatorias a partir de la entrada en vigor del Real Decreto de nutrición sostenible de los suelos, por lo que esperamos que esta medida contribuya a la reducción de la contaminación cuando tenga el suficiente recorrido, ya que no será inmediato. El

seguimiento de la contaminación en las redes de control de agua nos dará información sobre su eficacia.

El uso del digestato procedentes de plantas de biogás alimentadas con purines animales en lugar de la aplicación directa al suelo puede ser una mejora en la reducción de la contaminación siempre que haya transparencia en la aplicación, distribución y seguimiento y no supongan una mayor aportación de nutrientes al suelo. De hecho, la Ficha DU-01 señala que, para el caso concreto de Castilla y León, que supone el 98,26 % de la demarcación del Duero, para el año 2021, 61.186 tn de nitrógeno de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 359.013 tn de N. Si se eliminase totalmente el desecho ganadero mediante plantas de biogás y no se sustituyese la fertilización orgánica en cultivos por inorgánica, se reduciría en un 17% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso del 50% de los excedentes de nitrógeno.

Para el caso del fósforo y Castilla y León, para el año 2021, 13.736 tn de P de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 58.261 tn de P. En este caso, la eliminación del desecho ganadero mediante plantas de biogás supondría que se reduciría en un 23% las entradas de P en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso superior al 50% de los excedentes de fósforo.

La eliminación de la fertilización orgánica mediante revalorización y transformación en biogás de la deyección ganadera, sin sustitución por fertilización inorgánica, permitiría cumplir los objetivos de la UE de reducir un 20% el uso de fertilizantes y reducir un 50% los excedentes antes de 2030.

Respecto a la demanda de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario bajo distintos sistemas de regadío, consideramos que es un trabajo que no está hecho pero que no corresponde al MITERD al haber un ministerio y unas consejerías autonómicas competentes en materia agraria.

Alegación 3.

DU-02 Sostenibilidad aguas subterráneas (principio de proporcionalidad)

El mismo documento de los EpTI constata una ligera mejora de la situación de los acuíferos en la Tabla 6 (pág. 32 del Anejo), partiendo de este marco, la imposición de medidas excesivamente restrictivas puede contravenir el principio de proporcionalidad.

Respuesta:

Conocer la realidad de las reservas subterráneas de agua es un aspecto clave en la adecuada gestión de los recursos hídricos de la cuenca. En la actualidad en cuatro masas de agua subterránea en mal estado identificadas en la Ficha DU-02 se observan extracciones que superan el recurso disponible, una vez descontadas las restricciones ambientales, y afección a las aguas superficiales y los ecosistemas dependiente. Por ejemplo, en la masa de agua Los Arenales-Tierras de Medina y La Moraña las extracciones superar los recursos renovables en un 94% de los mismos, es decir, se extrae casi el doble de la capacidad de renovación; o en la masa de agua Los Arenales-Tierra del Vino, se extrae el 130% de los recursos renovables. Todo ello tiene un efecto directo en la piezometría registrada y, sobre todo, en el bolsillo de los agricultores que ven como año tras año los bombeos son cada vez desde mayor profundidad.

Como consecuencia los niveles del agua subterránea descienden ligeramente, incrementando los costes de producción del sector agrícola y poniendo en serio peligro la supervivencia del modelo socioeconómico actual y del entramado ecológico de la zona. Todo esto sin olvidar que, en las dos últimas décadas del siglo pasado, estas masas sufrieron un descenso generalizado en sus niveles de agua de unos 30 metros, situación que ha repercutido en la merma de caudales en los ríos que se asientan sobre estas masas. Hay que tener en cuenta que, en alguna de las masas de aguas subterráneas en mal estado cuantitativo, el volumen de agua concedido, supera en más del doble, al volumen de recurso disponible, como ocurre en Los Arenales-Tierras de Medina y La Moraña, esta situación condiciona la posibilidad de otorgar nuevas concesiones. Pero si tenemos en cuenta los balances a partir de los derechos otorgados, no de las extracciones, el dibujo es mucho más pesimista. Por tanto, limitar nuevos usos en estas masas de agua no es, a nuestro juicio, quebrar el principio de proporcionalidad sino darle cumplimiento además del actuar con cautela.

Por todo ello la Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto en marcha estudios en colaboración con distintos organismos como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Dirección General del Agua (DGA), para seguir mejorando en el conocimiento del estado actual de la masas de agua subterránea y proponer medidas que, sin incrementar los derechos existentes sobre ellas, permitan la recuperación paulatina de las mismas, gracias al ahorro de agua con una correcta gestión agrícola y con medidas de recarga artificial, sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales, done sea posible, se mencionan este tipo de actuaciones porque están implantadas en algunas zonas de estas masas con resultados esperanzadores. De todas formas, en la ficha ya se proponen actuaciones de este tipo y otras.

Alegación 4.

DU-02 Sostenibilidad aguas subterráneas (uso sostenible)

Resulta especialmente preocupante la limitación de las nuevas concesiones y sus modificaciones o la inadmisión de la novación de las concesiones actuales.

Estas medidas aplicadas de forma general sin atender las especificaciones de cada cultivo contravienen de forma directa el objetivo del Plan hidrológico: garantizar un uso sostenible del recurso. Este objetivo es imposible de cumplir si se impide el desarrollo socioeconómico de la región.

Respuesta:

Ni en toda la cuenca ni para todos los usos plantea el EpTI alternativas que conlleven limitaciones. Las limitaciones se plantean en las zonas donde la presión de los usos actuales, singularmente por su importancia la agricultura, requiere actuar. La gestión del agua y la legislación en materia de otorgamiento de concesiones en nuestro país se hace desde el punto de vista del dominio público hidráulico, no desde el punto de vista del uso. Parece razonable pensar que si hay un recurso finito como es el agua y las demandas siempre crecen, llegará un momento en que no se puedan atender todas; y mucho antes de ese momento se producirán efectos ambientales no queridos. Por tanto, las limitaciones, que no son generales en la cuenca, se toman cuando es necesario proteger los objetivos ambientales y al resto de usos de que nuevos usos supongan efectos ambientales negativos y pérdida de garantía para los usuarios existentes. Precisamente se trata de lo que indica el alegante: garantizar

un uso sostenible del recurso, lo que sin duda conlleva límites a la voracidad de agua, siempre creciente.

Alegación 5.

DU-02 Sostenibilidad aguas subterráneas (novación)

En lo que se refiere a la novación el artículo 89 RDPH la define como posibilidad por la que el titular pueda optar de nuevo a una concesión "con el mismo uso y destino para las aguas". Sin embargo, en algunos casos los nuevos condiciones que acompañan a la novación desnaturalizan su figura en tanto que las reducciones aplicadas imposibilitarían la continuidad de la producción, en contra del fin mismo de la novación.

En explotaciones que mantiene inalteradas las características del aprovechamiento la limitación de la novación contraviene frontalmente el principio de seguridad jurídica que debe guiar la actuación administrativa (art. 129 Ley 39/2015).

Las concesiones inscritas en la sección C del Registro son derechos históricos que por su condición cuentan con un régimen legal especial [..] Por ello, es necesario establecer un régimen adaptado a estas condiciones que mantenga su especialidad respecto al marco normativo de nuevas explotaciones.

En suma, desde el punto de vista del Derecho Administrativo sancionador y concesional de la normativa de Aguas, no es posible establecer una extinción "automática" de un derecho de aprovechamiento de aguas como se contempla en el caso de renovaciones del Catalogo C o solicitud de novaciones.

Privar al titular de la posibilidad de renovar una concesión, sin la tramitación de un procedimiento previo, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el 24 de la Constitución Española, así como las garantías procedimentales establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Púbicas.

En consecuencia, esta Administración no puede extinguir un derecho sin la previa incoación, instrucción y resolución de un expediente contradictoria con audiencia al interesado.

Por otro lado, se constata el incumplimiento, por parte de la CHD, de la obligación de motivar adecuadamente la modificación del régimen concesional.

Respuesta:

El ordenamiento español es garantista: tanto la tramitación de concesiones (capítulo III del RDPH) como la extinción de concesiones (art. 53 TRLA; arts. 161 y ss. RDPH) y el procedimiento sancionador (art. 328 RDPH; Ley 39/2015) contemplan la audiencia al interesado, la presunción de inocencia y el pleno derecho de defensa, así como los recursos que agotan la vía administrativa (recurso potestativo de reposición) y el recurso contencioso-administrativo (Ley 29/1998). No existen, por tanto, extinciones ni sanciones automáticas. Estas garantías derivan de la normativa vigente y no son objeto del EpTI.

De cualquier modo, como se ha señalado anteriormente, no cabe llamarnos a engaño: en las cuatro masas de agua en mal estado cuantitativo los recursos extraídos a fecha actual superar los recursos renovables, por lo que dar expectativas a nuevos derechos a medio o largo plazo, mientras no se

concreten medidas específicas no parece razonable. Evidentemente toda concesión conlleva su expediente de tramitación, algo en lo que el EpTI no puede entrar; pero sí conviene que señale que el contesto es el que se ha mencionado y debe contar con él para establecer alternativas.

Alegación 6.

DU-02 Sostenibilidad aguas subterráneas (aplicación % reducción)

Con respecto a la aplicación de reducciones porcentuales sobre los volúmenes concesionales, su aplicación indiscriminada contraviene las normas procedimentales del régimen de concesiones y supone una medida desproporcional.

Respuesta:

No compartimos la visión de la alegante ni pensamos que las limitaciones criticadas no dispongan de amparo legal. Los objetivos de la planificación hidrológica es alcanzar el buen estado de las masas de agua subterránea, entre otros el cuantitativo, y la satisfacción de las demandas. Si para lo primero debe limitarse lo segundo, la normativa de aguas lo prevé. Por ejemplo, el TRLA en su artículo 55 señala que *los organismos de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrán fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos.* De hecho, en la demarcación hidrográfica del Duero el Plan Especial de Sequía fija indicadores de escasez para las aguas subterráneas que, cuando se verifiquen permiten la aplicación de este artículo.

Alegación 7.

DU-02 Sostenibilidad aguas subterráneas (propuesta sobre novaciones y modificaciones)

Las concesiones delimitan un marco circunstancial protegido en base al cual los usuarios planifican su actividad y gastos económicos, con expectativas de una continuidad temporal. Es por ello, que rogamos que se garantice la posibilidad de seguir optando al mantenimiento de las circunstancias previstas mediante el procedimiento de solicitud de modificaciones y novaciones concesionales.

Finalmente, también queremos proponer que se proceda a reducir los plazos y simplificar el procedimiento reglado de la novación y de la solicitud de modificaciones de características de las concesiones de aguas para regadío

Respuesta:

Todas las cuestiones que se plantean en esta alegación son de carácter general que el EpTI no aborda ya que todas ellas están reguladas en el TRLA (artículos 53 y 61 y siguientes) y el RDPH (artículos 93 y siguientes y 140 y siguientes). Cualquier cambio normativo como el que propone la alegante debe hacerse en otro ámbito y no en el del EpTI de una demarcación hidrográfica.

Alegación 8.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad (sobre las dotaciones de regadío)

Se aportan estudios técnicos que justifican dotaciones brutas en regadío intensivo en la demarcación del Duero de entre 4.116 m^3/ha/año y 8.160 m^3/ha/año para el caso del almendro, entre 4.159 m^3/ha/año y 7.914 m^3/ha/año para el caso del nogal y entre 3.306 m^3/ha/año y 6.886 m^3/ha/año para el caso del pistacho. […]

Las conclusiones del informe prueban los altos niveles de eficiencia en el riego que pueden alcanzar los cultivos de frutos secos mediante la aplicación de las citadas medidas. Estas circunstancias deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar criterios restrictivos, dotando de flexibilidad a la determinación dotacional siempre que se justifique el uso de las mejores técnicas disponibles.

Estas necesidades deben ser consideradas por la Confederación en el cálculo de las dotaciones máximas del recurso necesario [..]

Proponemos que se debe realizar por este Organismo, un estudio reformulado sobre nuevas dotaciones objetivo, y que se tenga en cuenta:

- *Los requerimientos hídricos netos reales de los cultivos del almendro, nogal y pistacho en base a las condiciones agroclimáticas de la zona.*
- *Que, se utilice los valores de coeficiente de cultivo (Kc) más actualizados.*
- *En caso de que el concesionario pruebe que el volumen concedido se ajusta a la necesidad real del cultivo en aplicación de las mejores técnicas disponibles, se contemple la posibilidad de renovar la concesión mediante una Declaración de Responsabilidad.*

Respuesta:

Se comparte que las dotaciones deben fundarse en criterios técnicos, y el ordenamiento ya lo prevé: en la tramitación de concesiones de riego debe presentarse un estudio agronómico con el cálculo de la dotación referido a cada mes en que el riego es necesario y un estudio económico de la transformación de secano a regadío (art. 106 RDPH); el incremento de las dotaciones máximas de referencia debe basarse en parámetros estrictamente técnicos. Lamentablemente los informes agronómicos que se presentan ofrecen datos tan dispares de dotaciones para un mismo cultivo leñoso y comarca como el que aporta la alegante, lo que genera demasiada incertidumbre sobre las necesidades reales de riego de esas especies.

No obstante, no es materia del EpTI la fijación de dotaciones para los cultivos leñosos y en fase de plan hidrológico se abordará esta materia.

Alegación 9.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad (sobre los ahorros de la modernización)

En el supuesto de que se contemple la imposibilidad de destinar los ahorros hídricos generados a la ampliación o consolidación de regadíos, debe ponerse de manifiesto el grave efecto disuasorio que dicha limitación supondría para la implantación de medidas de innovación y mejora en materia de eficiencia hídrica.

Asimismo, dicha previsión resulta contraria al ordenamiento jurídico vigente, en la medida en que vulnera el principio de promoción del progreso económico consagrado en el artículo 40 de la Constitución Española, así como los principios rectores de la planificación hidrológica orientados a la racionalización y economización del uso del recurso hídrico, recogidos en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el artículo 47.1 del Reglamento de Planificación Hidrológica. Del mismo modo, se aparta de los principios inspiradores del Programa de Desarrollo Rural Sostenible en materia de gestión eficiente del agua, previstos en el artículo 25.b) de la Ley 45/2007.

No se justifica adecuadamente por qué los ahorros de agua derivados de actuaciones de modernización y eficiencia --que contribuyen a liberar recursos y a reducir la presión sobre las masas de agua-- no pueden destinarse, en ningún caso, a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias.

Respuesta:

La cuestión señalada por la alegación es materia para la fase de redacción del plan hidrológico, no para el EpTI. El artículo 28 de la actual normativa del Plan Hidrológico vigente señala que *la modernización de regadíos llevada a cabo con fondos públicos conllevará la modificación de la concesión para adaptarla a la mejora de la eficiencia del uso del agua producida. En todo caso los ahorros producidos como consecuencia de una modernización no podrán suponer incremento de superficie de riego*. Y esto es así porque estas medidas están catalogadas como medidas dirigidas al logro de los objetivos ambientales, por ello estas actuaciones deben contribuir a reducir las presiones sobre las masas de agua, como es la presión por extracción, lo que no se verificaría si los ahorros que conllevan las modernizaciones se emplean en ampliar los regadíos. Los objetivos de la planificación hidrológica según el artículo 40 del TRLA son conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial; para ello se incrementarán las disponibilidades del recurso, se protegerá su calidad, se economizará su empleo y se racionalizar su uso en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. Por otra parte, el artículo 65 del TRLA señala que las concesiones para regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. Por tanto, hay, a nuestro juicio, suficiente respaldo normativo para el tenor del artículo 28 de la normativa del plan hidrológico vigente

Alegación 10.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad (sobre los ahorros de la modernización)

En este sentido, y conforme a criterios de proporcionalidad y de equilibrio entre la protección ambiental y la actividad económica, se proponen las siguientes alternativas menos restrictivas:

1. Permitir la utilización de los ahorros hídricos para nuevos regadíos o para la consolidación de superficies existentes, siempre que se garantice un impacto nulo o positivo sobre la correspondiente masa de agua.

2. Establecer la obligación de destinar un porcentaje de los ahorros generados a la recuperación y mejora ambiental de la masa de agua afectada, permitiendo que el remanente pueda destinarse a usos agrarios sostenibles.

Respuesta:

El impacto de las presiones por extracción de agua, contaminación difusa y geomorfológicos, se identifican en los Documentos iniciales del ciclo de planificación hidrológica. El EpTI recoge esa información que se actualizará en fase de redacción de plan hidrológico. No hay ninguna norma que avale el criterio que plantea la alegación que no se ajusta a los principios que establece la DMA y el TRLA en lo que se refiere a los objetivos de la planificación. En todo caso al EpTI le corresponde la descripción de las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico, las posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos medioambientales, y señalar los sectores y grupos afectados por los programas de medidas. No le corresponde abordar cuestiones como la que plantea la alegación.

Alegación 11.

DU-07: Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (sobre la preferencia de las medidas sobre la demanda frente a la oferta)

Es clara la preferencia por desarrollar medidas que incidan sobre la demanda del recurso, definiendo estas con mayor detalle y sobre todo, atendiendo a su aplicación con mayor interés frente a medidas que afectan a la oferta de agua.

Dicha preferencia se manifiesta de forma palmaria en la reiterada reprogramación de aquellas medidas que, ciclo tras ciclo, permanecen sin ejecución efectiva. La insuficiencia de financiación no puede considerarse una causa insubsanable, especialmente teniendo en cuenta la disponibilidad de fondos europeos a los que se ha tenido acceso y cuya adecuada aplicación no ha podido materializarse como consecuencia de una deficiente gestión administrativa.

Respuesta:

La cuestión que aborda la alegación (insuficiente ejecución del programa de medidas) ya se pone de manifiesto en la Ficha del tema importante DU-09. La Ficha DU-06 aborda las garantías de suministro desde el punto de vista de la mejora de la gestión en la demanda; la Ficha DU-07 la aborda desde el punto de vista de la gestión de la oferta. En la ficha que integra ambos enfoques se concluye que las medidas de gestión de la demanda tienen una mejor ratio coste-eficacia por ello son las que se proponen en las alternativas. Pero no podemos compartir el enfoque de la alegante sobre la preferencia per se o previa de las medidas de mejora de gestión de la demanda.

Alegación 12.

DU-07: Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (sobre la disponibilidad de recursos)

La Administración es la principal responsable de la puesta a disposición de los recursos hídricos y debe hacerse cargo de esta obligación. La pérdida de eficiencia de las grandes conducciones estatales o autonómicas no puede excusarse en la falta de mantenimiento.

Las autoridades competentes no deben esquivar esta responsabilidad con recortes en las dotaciones del usuario concesionario.

Respuesta:

La cuestión planteada no es objeto del EpTI. Tampoco se entiende bien la relación que encuentra la alegante entre las dos cuestiones que plantea la alegación: responsabilidad de la administración y recorte de dotaciones. La alegante parece que tiene un sentido patrimonial del agua: el agua es dominio público hidráulico y su uso y gestión se deben ceñir a lo que dispone la Ley de Aguas. Ni el regadío ni la industria ni el abastecimiento urbano son propietarios del agua y pueden pretender que todas las administraciones favorezcan a cada uno su uso por encima de lo que marca la norma.

Alegación 13.

DU-07: Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (sobre la estrategia de resiliencia hídrica de la UE)

Resulta necesario considerar las líneas básicas de la European Water Resilience Strategy, orientadas a promover una gestión integrada, eficiente y resiliente de los recursos hídricos.

Esta estrategia refuerza la necesidad de proteger los ecosistemas acuáticos y restaurar el ciclo del agua, pero también de alcanzar un equilibrio justo entre la disponibilidad del recurso y los distintos usos sociales y económicos.

Respuesta:

Coincidimos con la aportación de la alegante y eso es justamente lo que pretende la planificación hidrológica: conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, satisfacer las demandas de agua, y promover el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. Para ello trata de incrementar las disponibilidades del recurso, proteger su calidad, economizar su empleo y racionalizar su uso en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

Alegación 14

DU-07 : Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (propuestas de recarga artificial)

Proponemos, que, por este Organismo, se fomente la utilización del agua regenerada para la recarga artificial de las masas de aguas subterráneas en mal estado cuantitativo, conforme al art. 273 quáter. 3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y al RD 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua.

Esto supondrá la existencia de mayor recurso en las masas de aguas subterráneas que debería conllevar menores limitaciones a la extracción.

Sin embargo, en la propia POS se indica que es imprescindible actuar con cautela ya que tal y como se expone en el informe aportado como DOCUMENTO Nº2: "La Directiva 2000/60/CE ya establece que la recarga artificial o el aumento de masas de agua subterránea debe estar sometida a medidas de control, incluida autorización previa, y que el uso de la fuente de agua no debe comprometer los objetivos ambientales de la fuente ni de la masa de agua recargada"

Por otro lado, en la POS se indica que, en lo que se refiere a las plantaciones de almendro, pistacho, nogal u otros frutos secos, utilizar el riego agrícola como vía principal de recarga no es aconsejable por las siguientes razones:

1. *Lixiviación excesiva de nutrientes.*
2. *Riesgo de asfixia radicular.*
3. *Aumento del riesgo de enfermedades de raíz y cuello.*
4. *Baja eficiencia como sistema de recarga controlada.*
5. *Dificultad de control y trazabilidad.*
6. *Posible deterioro de la calidad de la masa de agua*

Se considera más adecuado concentrar esta recarga artificial en ubicaciones específicamente seleccionadas para la recarga, con elevada capacidad de infiltración o conexión hidrogeológica con el acuífero, y donde sea posible introducir volúmenes importantes de agua en períodos reducidos de tiempo, bajo control técnico y analítico. Estas actuaciones pueden realizarse mediante balsas de infiltración, zonas de recarga gestionada, cauces preparados o sistemas de inyección, siempre con autorización y seguimiento de la calidad del agua.

Respuesta:

La regulación del uso de agua regenerada en la actualidad se encuentra en el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua. La Normativa del Plan Hidrológico no puede regular aspectos que ya lo están en el citado Real Decreto. Pero no es una cuestión que deba abordar el EpTI al estar ya regulada en su propio Reglamento.

La utilización de aguas residuales depuradas para la recarga tiene en la cuenca del Duero elementos representativos específicos como es el caso de la cubeta de Pedrajas-Alcazarén con aguas depuradas de Pedrajas de San Esteban. Por otra parte, en la demarcación hidrográfica del Duero se da la particularidad de la existencia de pequeñas recargas en volumen, pero numerosas en cantidad, a partir de las aguas residuales de pequeños municipios situados en la zona de los páramos centrales y en el centro sur de la cuenca ubicados en los terrenos de Arenales. Se han presentado, a nivel de idea, algunas iniciativas para explorar la posibilidad de utilizar aguas regeneradas en el regadío, si bien ninguna de ellas como sustitución de bombeos subterráneos existentes, es decir, planteadas para aumentar la superficie de regadío. Finalmente, no han llegado a buen puerto quizá por la falta de cultura en usar este tipo de aguas y, fundamentalmente debido al coste. Esta realidad ha llevado a que el EpTI no plantee este tipo de actuaciones de manera directa si bien no se opone a ellas. El propio Plan Hidrológico vigente tiene una reserva de 6 hm3 en la cuenca dirigidos a usos con aguas regeneradas de los que hasta la fecha no se ha hecho usos de ninguno, lo que corrobora el escaso interés que hay en la actualidad por este tipo de aguas.

Alegación 15.

DU-07 : Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (propuesta de fomento de agua regenerada para regadío)

A fin de incentivar la demanda de agua regenerada por parte de los usuarios agrícolas, resulta necesario atender a las siguientes cuestiones:

I. Agilización de los procedimientos administrativos de concesión y autorización para el uso de aguas regeneradas, habida cuenta de que, en la actualidad, se trata de un procedimiento complejo y dilatado en el tiempo, que exige la aportación de una documentación exhaustiva.

II. Dotación de mayor flexibilidad al régimen concesional, evitando la fijación de límites rígidos al volumen total concesional, de forma que pueda contemplarse, con carácter excepcional, la ampliación de la dotación global mediante el uso de aguas regeneradas.

III. Desarrollo de instrumentos financieros eficaces, destinados a facilitar la inversión inicial necesaria para la implantación de infraestructuras de tratamiento terciario, redes de distribución o balsas de almacenamiento, entre otras, así como a cubrir los costes de explotación y mantenimiento asociados.

En consecuencia, a fin de que la rentabilidad derivada del uso de aguas regeneradas en el sector agrario no se vea condicionada, resulta preciso considerar, para su adecuada implementación, los siguientes factores:

1. Desarrollo prioritario en zonas de elevada escasez hídrica y sobreexplotación de acuíferos.
2. Actuaciones que cuenten con un nivel significativo de ayudas o subvenciones que cubran una parte sustancial tanto de la inversión como de los costes operativos.
3. Comunidades de Regantes próximas a grandes estaciones depuradoras urbanas, a fin de minimizar los costes de transporte y distribución.
4. Zonas costeras, en las que, conforme a la normativa de referencia, se prioriza la plena reutilización de las aguas vertidas directamente al mar.
5. Cultivos de alto valor añadido, capaces de absorber el coste del recurso hídrico a cambio de una mayor seguridad en el suministro.

Por último, atendiendo al reducido riesgo que, desde el punto de vista sanitario, presenta la utilización de estas aguas para riego, se propone, como medida de impulso adicional de la demanda, la revisión y simplificación de los criterios sanitarios exigidos, con el fin de favorecer una mayor agilidad en su utilización, así como una reducción de los costes asociados a su implantación.

Respuesta:

Todas estas pretensiones requieren modificar el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986) –arts. 144.2, capítulo III y 159 bis–, lo que excede el objeto del EpTI (art. 79 RPH) y del propio Plan Hidrológico, que no pueden alterar el régimen reglamentario por vía de planificación; se toma nota ante el órgano competente para la reforma. En todo caso, no cabe el silencio positivo: no se entenderá otorgada la concesión, modificación o novación por silencio, al transferirse al solicitante facultades sobre el dominio público hidráulico (art. 24.1, párrafo segundo, de la Ley 39/2015); y la «congelación normativa» propuesta no tiene encaje en la normativa de aguas vigente.

Recordamos que el actual régimen de aguas en España está sustanciado en normas con rango de ley y de reglamento. Las cuestiones que se suscitan en la alegación requieren modificaciones de estas normas, tarea que no corresponde al EpTI de una demarcación hidrográfica.

Alegación 16.

DU-07 : Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (propuesta de medidas)

Se sugieren las siguientes medidas:

• Que los planes de mantenimiento y modernización de infraestructuras hidráulicas de la Demarcación tengan carácter vinculante dentro de la planificación hidrológica e incorporen los siguientes elementos esenciales:

i. *Obligación de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de transporte gestionadas por las Administraciones competentes, con objetivos cuantificables de reducción de pérdidas.*
ii. *Prioridad inversora en la rehabilitación de infraestructuras existentes, incluyendo renovación de conducciones, digitalización de redes, sectorización y sistemas de control de caudales.*
iii. *Condicionalidad de las exigencias al usuario final, de forma que cualquier obligación de modernización o mejora de eficiencia en consumos quede supeditada a la ejecución previa o simultánea de actuaciones públicas destinadas a la reducción de ineficiencias en el sistema general.*
iv. *Coordinación entre niveles administrativos, asegurando coherencia entre la planificación estatal, autonómica y de cuenca.*
v. *Sistema de evaluación y seguimiento, mediante indicadores públicos de pérdidas, eficiencia hidráulica y grado de ejecución de inversiones*
vi. *Que las infraestructuras de defensa, control de caudales ecológicos, etc.., asociadas a infraestructuras generales sean asumidas presupuestariamente en su totalidad por el Organismo de Cuenca, al responder a un interés general y no a un beneficio exclusivo del concesionario.*

• Moratoria de restricciones por inacción administrativa: Suspender cualquier reducción de dotaciones o caudales concesionales fundamentada en el "mal estado de las masas de agua" en aquellos casos donde se demuestre que el deterioro se debe una falta de limpieza, colmatación de embalses o cualquier actuación de obligado cumplimiento por las Administraciones.

Respuesta:

Se agradece la propuesta, que ya se incorpora en la Ficha DU-07, entre las decisiones a tomar: *realizar un programa de mejora de los embalses de la demarcación, incluyendo medidas de mejora en auscultación, telecontrol, órganos de desagüe y/o cuerpo de presa -mejora filtraciones-, de forma que la capacidad real de las infraestructuras sea similar a la teórica; y ejecutar un programa de mejora de los canales del estado, para mejorar la eficiencia de transporte en canales del Estado antiguos y deteriorados para contribuir al uso racional del agua*.

El programa de medidas del Plan Hidrológico ya contempla una finalidad específica que responde a esta petición –finalidad 6.8, «Mantenimiento y conservación de infraestructuras»–, que puede consultarse en los programas de medidas de los planes de cuenca y en el sistema de información PH-web (MITERD).

Alegación 17.

DU-07 : Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (otras propuestas: equiparación de derechos inscritos en el Catálogo a la Sección C)

En relación con los derechos de aguas privadas inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas de la Confederación Hidrográfica, se considera oportuno proponer, en el marco de la nueva planificación hidrológica del cuarto ciclo, su equiparación a las condiciones de transformación en concesión de aguas públicas del derecho inscrito en la Sección C del Registro de Aguas, conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, instando, en su caso, a su expresa previsión en el propio texto legal.

Respuesta:

La regulación de los derechos de aguas privadas inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas está en las disposiciones transitorias cuarta y décima del TRLA, no correspondiendo al EpTI modificar este régimen jurídico.

Alegación 18.

DU-07 : Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (otras propuestas: modificación art 144.2. del RDPH)

Asimismo, se plantea la modificación del artículo 144.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, a fin de precisar que el cambio de superficie regable, así como el cambio de cultivo, no constituirán por sí mismos una modificación de características de la concesión, siempre que no implique un incremento del volumen máximo concesional. En este sentido, no resulta razonable impedir, dentro del ámbito de la finca del titular, la reordenación de la superficie de riego para la renovación de plantaciones arbóreas o la adaptación del cultivo a las condiciones agronómicas o a las dinámicas del mercado.

Respuesta:

La regulación de lo que se considera características esenciales de un título se encuentra en el artículo del RDPH citado por la alegante, no correspondiendo al EpTI modificar este régimen jurídico.

Alegación 19.

DU-07 : Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (otras propuestas: sobre modificación de características)

Sobre el régimen concesional solicitamos que la normativa del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación contemple expresamente la distinción existente, en materia de modificación de características de las concesiones, entre aquellas alteraciones que impliquen una variación de características esenciales --y que, por tanto, requieran autorización administrativa conforme al artículo 144 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico-- y aquellas otras modificaciones de carácter no esencial, que únicamente deberían quedar sujetas a un régimen de comunicación previa ante la correspondiente Confederación Hidrográfica.

Asimismo, se considera necesario proceder a la reducción de plazos y a la simplificación del procedimiento administrativo aplicable a las modificaciones de concesiones de aguas destinadas a

regadío, habida cuenta de que, en la práctica actual, dichos procedimientos presentan una duración excesiva, superando habitualmente los dieciocho meses previstos en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Respuesta:

La regulación de lo que se considera características esenciales de un título se encuentra en el artículo del RDPH citado por la alegante, no correspondiendo al EpTI ni a la Normativa del Plan Hidrológico hacer la distinción que sugiere la alegación.

Alegación 20.

DU-07 : Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (otras propuestas: diferenciación entre "modificaciones esenciales" y "adaptaciones técnicas de mejora de eficiencia")

En este sentido, se formulan las siguientes propuestas:

I. Autorización o declaración responsable para variaciones no esenciales de concesiones de regadíos

Para ello, se propone:

1.-Establecer normativamente una diferenciación clara entre:

- *las "modificaciones esenciales" de las concesiones, que afecten al volumen, uso, superficie o presión sobre la masa de agua; y*
- *las "adaptaciones técnicas de mejora de eficiencia", que mantengan inalterados dichos parámetros esenciales.*

2.-Prever para estas últimas un régimen simplificado basado en:

- *autorización administrativa abreviada, con plazo máximo de resolución de tres meses; o*
- *declaración responsable, acompañada de memoria técnica justificativa. 3.-Incluir expresamente dentro de este régimen simplificado:*
- *sustitución de captaciones o sondeos;*
- *modernización de sistemas de riego;*
- *cambios de cultivo;*
- *actualizaciones técnicas de explotación;*
- *y transmisiones de titularidad que no alteren las condiciones esenciales de la concesión.*

Respuesta:

La regulación de lo que se considera características esenciales de un título se encuentra en el artículo 144 RDPH citado por la alegante, no correspondiendo al EpTI ni a la Normativa del Plan Hidrológico hacer la distinción que sugiere la alegación.

Alegación 21.

DU-07 : Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (otras propuestas: sobre modificación de características)

Para proceder a la reducción de plazos y a la simplificación del procedimiento administrativo se propone:

II. Informe de compatibilidad con el Plan en procedimientos de novación que no impliquen nuevas presiones sobre las masas de agua: Limitar a un plazo máximo la emisión del informe de compatibilidad con el plan hidrológico por parte de la Oficina de Planificación, tras el cual se entendería favorable si no hay respuesta. Extensión de esta lógica de silencio positivo a los informes de compatibilidad en procedimientos de novación que no impliquen nuevas presiones sobre las masas de agua, basándote en el principio de seguridad jurídica y en la necesidad de no trasladar al administrado la ineficiencia de la carga de trabajo de la Oficina de Planificación.

Establecer un plazo máximo para este informe de trámite es ajustado al principio de buena administración. Si la Administración no detecta una incompatibilidad en un plazo razonable (por ejemplo, 3 meses), el silencio positivo garantiza que el administrado no se vea perjudicado por la dilación de un órgano interno.

Respuesta:

El plazo para resolver las solicitudes de otorgamiento de concesión del dominio público hidráulico no podrá exceder de dieciocho meses, según el artículo 116 del RDPH; transcurrido dicho plazo podrá entenderse desestimada la solicitud. Como se ve el RDPH no discretiza los sucesivos trámites que conlleva la instrucción de una concesión, algo que tampoco le corresponde hacer al EpTI.

Alegación 22.

DU-07 : Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (otras propuestas: sobre novaciones)

Asimismo, se considera necesario proceder a la reducción de plazos y a la simplificación del procedimiento administrativo y se formulan las siguientes propuestas:

III. Simplificación de las novaciones o renovación de concesiones existentes para regadío: Solicitar la inclusión de una disposición normativa que establezca la presunción de compatibilidad para concesiones consolidadas que no alteren sus características esenciales, permitiendo una renovación mediante un procedimiento abreviado o declaración responsable.

Respuesta:

La regulación de las novaciones en el RDPH se hace en la Sección 7.ª del RDPH, novación de concesiones; es materia ya regulada y que no corresponde al EpTI ni a la Normativa del Plan Hidrológico.

Alegación 23.

DU-07 : Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (otras propuestas: cláusula de "congelación normativa")

Asimismo, se considera necesario proceder a la reducción de plazos y a la simplificación del procedimiento administrativo y se formulan las siguientes propuestas:

IV. Proponer una cláusula de "congelación normativa" para aquellos expedientes que hayan superado el plazo legal de resolución de 18 meses por causas no imputables al interesado, garantizando que no se les apliquen restricciones sobrevenidas de un nuevo Plan que no estaban previstas al inicio del procedimiento.

Respuesta:

No es posible atender a la alegación en tanto no se modifique el TRLA y el RDPH.

Alegación 24.

DU-07 : Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (otras propuestas: paso de aguas privadas a concesión)

Asimismo, se considera necesario proceder a la reducción de plazos y a la simplificación del procedimiento administrativo y se formulan las siguientes propuestas:

V. Flexibilizar la expresión "modificación de las condiciones del aprovechamiento" que conlleva la transformación de la titularidad privada de las aguas subterráneas en concesión de aguas públicas (Disposición Transitoria Tercera bis del TRLA), únicamente cuando supongan un aumento del caudal realmente utilizado, cambios en el punto de toma o en el uso de las aguas. El cambio de la ubicación del pozo por antigüedad no puede llevar a la conversio tituli de aguas privadas a aguas públicas. Esto lleva a que las sustituciones de los pozos o sondeos no se notifiquen a la Confederación hidrográfica.

Respuesta:

No es posible atender a la alegación en tanto no se modifique el TRLA.

Alegación 25.

DU-07 : Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (otras propuestas: paso de aguas privadas a concesión

Asimismo, se considera necesario proceder a la reducción de plazos y a la simplificación del procedimiento administrativo y se formulan las siguientes propuestas:

VI. Facilitar el traspaso de aguas privadas a públicas (concesión): Permitir el traspaso de aguas subterráneas privadas (anteriores al 1.1.1986) anotadas en el Catálogo de aguas privadas o aprovechamientos temporales de aguas privadas (hasta 2035) a concesión de aguas publicas respetando los caudales y el volumen máximo que se tenía reconocido el usuario y que está aprovechando. La reducción de caudales penaliza y no incentiva.

Respuesta:

La regulación de los derechos de aguas privadas inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas está en las disposiciones transitorias cuarta y décima del TRLA, no correspondiendo al EpTI modificar este régimen jurídico.

4.52. Escrito de observaciones Nº 063 y similares

Se muestra a continuación los agentes que han presentado escritos de POS con el mismo contenido, en fechas distintas y con número de registro distinto, por lo que son respondidas de forma conjunta para todos ellos.

Nº POS	Presentado por:	En nombre:
N063	D. Carlos Andrés Gilarranz Casado.	Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Centro (COITAC)
N0118	D. Carlos Andrés Gilarranz Casado.	Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Centro (COITAC)

CONSIDERACIONES GENERALES A LAS A LA CONFEDERACIONES DEL TAJO, DEL DUERO, DEL GUADIANA, DEL JÚCAR, DEL SEGURA Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Alegación 1.

Reconocer expresamente los usos agrarios del agua, el regadío, la ganadería y las actividades agroalimentarias vinculadas como actividades estratégicas para la seguridad alimentaria, la economía rural, la industria agroalimentaria, la fijación de población y la vertebración territorial.

Respuesta:

En relación con las consideraciones formuladas sobre el papel del regadío en la cuenca del Duero, procede señalar, en primer término, que la planificación hidrológica vigente ya reconoce de forma expresa la relevancia socioeconómica del regadío, en tanto que uso consuntivo prioritario en amplias zonas rurales y elemento clave para la cohesión territorial, la actividad agroalimentaria y la fijación de población, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas. Pero, además, el EpTI de cuarto ciclo de planificación incluye la Ficha DU-06 cuyo título es significativo en relación con la alegación: *Relevancia y sostenibilidad del regadío*. Y en la descripción del tema importante se liga la necesidad de suministrar agua con garantía al regadío de la demarcación hidrográfica con la relevancia de la actividad agraria y ganadera para el medio rural: economía, fijación de población y la vertebración territorial.

Alegación 2.

Incorporar un análisis socioeconómico específico del regadío por demarcación, sistema de explotación y zona regable, integrado en la valoración de alternativas y no limitado a una descripción sectorial.

Respuesta:

El análisis económico de los usos del agua se aborda en los Documento iniciales del presente ciclo de planificación hidrológica que se consolidaron en octubre de 2026. El epígrafe 4.3.3.3 del citado documento (disponible en la web de la CHD en https://www.chduero.es/web/guest/documentos-iniciales2) aborda este análisis al que se refiere la alegación. Ese análisis es el que se toma de referencia en el diseño de alternativas del EpTI y su análisis; bajar al nivel de detalle al que se refiere la alegación,

puede estar bien para un trabajo académico o de investigación, pero requeriría hacer demasiadas aproximaciones partiendo de los datos económicos disponibles que suelen ser a escala de comunidad autónoma, lo que a nuestro juicio no ofrece información relevante para la toma de decisiones en el ámbito de la planificación hidrológica. Pero en todo caso no le corresponde al EpTI realizar el análisis que demanda la alegación.

Alegación 3.

Identificar las unidades de demanda agraria con problemas actuales o previsibles de garantía, diferenciando sus causas y estableciendo medidas correctoras concretas, financiadas y calendarizadas.

Respuesta:

En las Fichas de temas importantes DU-06 y DU-07 se hace un recuento de las UDAS con problemas de garantía. Además, en la siguiente fase de planificación, el Borrador de Plan Hidrológico en su Anejo 6 incluirá una relación de unidades de demanda, no solo agrarias sino también urbanas e industriales, con el grado de garantía que disponen en el momento actual y en los horizontes temporales que prevé la planificación hidrológica, aplicando las medidas que se estimen oportunas; uno de esos horizontes es el correspondiente al cambio climático.

Alegación 4.

Evitar que se consoliden escenarios de déficit estructural sin soluciones de modernización, regulación, almacenamiento, recursos alternativos viables, gestión conjunta o medidas transitorias proporcionadas.

Respuesta:

Es lo que trata de evaluarse en los temas importantes DU-06 y DU-07. Para cada una de estas fichas se analizan las diversas alternativas para atender a los déficits de garantía identificados con diversas tipologías de medidas que, en todo caso, requieren que las correspondientes autoridades competentes den su conformidad a las mismas pues esto supone compromiso administrativo y económico. Si para cada medida identificada no hay conformidad de la autoridad competente, la medida no se incorpora al Programa de medidas y la problemática no se resuelve, con las consecuencias que puede suponer de incumplir la normativa vigente.

Alegación 5.

Realizar análisis de repercusión de los caudales ecológicos sobre concesiones, garantías de riego y efectos socioeconómicos, con especial atención a tramos no regulados y sistemas deficitarios.

Respuesta:

Será un contenido del Borrador del Plan Hidrológico. La metodología para realizar este análisis está en fase de estudio y será parte de la modificación de la IPH que ha sido exigida por la DF Tercera del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero.

Alegación 6.

Garantizar procesos reales de concertación con los usuarios afectados antes de aprobar o revisar regímenes de caudales ecológicos que incidan de forma significativa sobre el regadío.

Respuesta:

Los procesos de concertación de caudales ecológicos se han llevado a cabo en el segundo y tercer ciclo de planificación hidrológica y se llevará a cabo en este cuarto ciclo durante la fase de consulta pública del Borrador de Plan Hidrológico. La documentación de ambos procesos ha formado parte de los expedientes de los planes hidrológicos de 2016 y 2023 y está disponible en la sección de planificación de la web de la CHD. Pero no corresponde al EpTI abordar esta concertación.

Alegación 7.

Fijar dotaciones de riego mediante metodología agronómica contrastada, con datos agroclimáticos actualizados, estaciones representativas y consideración del tipo de cultivo, sistema de riego, suelo, fase de desarrollo, eficiencia y cambio climático.

Respuesta:

Las dotaciones de los distintos usos, singularmente las de riego, actualmente se regulan en el artículo 15 de la Normativa del Plan Hidrológico. En el Anejo 5 de demandas del Plan Hidrológico vigente se explica el proceso de cálculo de las mismas a partir de cultivo, comarca, datos climáticos y sistema de riego. Es por tanto una cuestión que abordará el Plan Hidrológico, no el EpTI.

Alegación 8.

Permitir la justificación técnica de dotaciones superiores mediante informe agronómico cuando las condiciones específicas de la explotación lo acrediten, sin límites porcentuales rígidos que carezcan de motivación suficiente.

Respuesta:

Noe s una cuestión a abordar en el EpTI. Se indica que el artículo 15.6.d) de la Normativa del Plan Hidrológico vigente señala cuáles son los criterios que debe seguirse para justificar dotaciones superiores a las máximas que fija el propio artículo. En la parte normativa del Borrador de Plan Hidrológico se abordará esta cuestión, tal y como se ha hecho en el Plan vigente.

Alegación 9.

No imponer nuevas restricciones sobre aguas subterráneas ni declarar masas en mal estado cuantitativo sin redes piezométricas suficientes, balances hidrogeológicos actualizados y diferenciación entre usos legales, usos sin título y extracciones ilegales.

Respuesta:

La red oficial de piezometría de la demarcación hidrográfica del Duero cuenta con más de 450 piezómetros a los que se añadirán otros ochenta en fase de construcción. Aunque la disponibilidad de más puntos de control permite un mejor conocimiento, la red existente, en especial en las masas de

agua subterránea más explotadas, ofrece un diagnóstico bastante certero de la situación en que se encuentran.

En las cuatro masas de agua subterránea de la zona central del Duero en mal estado cuantitativo, la estimación global de extracciones ronda los 644 hm3/año. Los mayores volúmenes de extracción se ubican en las masas de "Los Arenales-Tierras de Medina y La Moraña" (400047), con un volumen extraído de 193,4 hm3/año; "Tordesillas-Toro" (400038), con un volumen extraído de 102,5 hm3/año; "Los Arenales-Tierra del Vino" (400048), con un volumen extraído de 57,8 hm3/año; y "Los Arenales-Tierra de Pinares" (400045), con 54,1 hm3/año de agua extraída. Estas extracciones superan el recurso disponible, una vez descontadas las restricciones ambientales, y afección a las aguas superficiales y los ecosistemas dependiente. Por ejemplo, en la masa de agua Los Arenales-Tierras de Medina y La Moraña las extracciones superar los recursos renovables en un 94% de los mismos, es decir, se extrae casi el doble de la capacidad de renovación; o en la masa de agua Los Arenales-Tierra del Vino, se extrae el 130% de los recursos renovables. Todo ello tiene un efecto directo en la piezometría registrada y, sobre todo, en el bolsillo de los agricultores que ven como año tras año los bombeos son cada vez desde mayor profundidad.

Por tanto, podemos concluir que las medidas de contención ("restricción" las llama el alegante) que se fijan en determinadas masas de agua subterránea responden a un problema objetivo que ni siquiera los usuarios ponen en duda ya que ven la realidad de las aguas subterráneas en sus propias instalaciones.

Alegación 10.

Reforzar el control efectivo de captaciones no autorizadas, la transparencia de datos piezométricos y la participación de comunidades de usuarios de aguas subterráneas.

Respuesta:

La cuestión alegada corresponde más a la gestión ordinaria del Organismo de cuenca que a cuestiones que deba abordar el EpTI. El control efectivo de captaciones se hace a través de la aplicación de la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico, y de campañas de vigilancia y control en campo. Las actuaciones irregulares son notificadas y se abre el correspondiente expediente sancionador.

Los datos de los registros de piezometría están disponibles en la web la CHD abiertos para cualquier ciudadano.

Una de las medidas del Plan Hidrológico dirigidas a la recuperación de las masas de agua en mal estado cuantitativo es el fomento de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas (CUAS). Estas entidades son corporaciones de derecho público formadas por usuarios de una misma masa de agua subterránea que buscan hacer una gestión sostenible y organizada del recurso hídrico, garantizando su uso equitativo y evitando la sobreexplotación.

Desde el Organismo de cuenca se ha fomentado y apoyado su constitución de CUAS. Actualmente, la cuenca del Duero cuenta con unas 50 CUAS constituidas, de las cuales 48 lo han hecho después de

2022. En total abarcan una superficie potencial de riego cercana a las 100.000 hectáreas, mayoritariamente ubicadas en masas en mal estado cuantitativo

Estas agrupaciones, además de una mejor gestión y uso del agua, permiten concienciar a los usuarios sobre la importancia de la gestión correcta del agua, haciéndoles copartícipes y corresponsables de esa gestión junto al Organismo de cuenca.

Alegación 11.

Priorizar la ejecución real de la modernización de regadíos, con programas diferenciados para redes en alta, redes en baja, telecontrol, medición volumétrica, balsas, eficiencia energética, fertirrigación y asistencia técnica.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-06, los *proyectos de modernización se deben diseñar, desde este punto de vista, de manera que el regadío reduzca las extracciones de agua las masas de agua, reduzca las aportaciones de nutrientes sobre las aguas superficiales y subterráneas, no altere el régimen hidrológico de la masa de agua de toma y, en la medida de lo posible, no suponga presiones hidromorfológicas mediante presas y azudes. La Normativa del Plan Hidrológico establece requisitos para que las modernizaciones sean consideradas medidas para el logro de los objetivos ambientales en estos cuatro aspectos, algo que por otra parte hace estos proyectos acreedores de financiación pública.* Más allá de estos requisitos desde el punto de vista de la planificación hidrológica, son las autoridades competentes en materia agraria (consejerías de agricultura de las comunidades autónomas y MAPA) quienes aprueban, impulsan y financian los proyectos concretos, con los criterios que estiman oportunos.

Alegación 12.

Proteger el ahorro obtenido mediante modernización financiada por los usuarios, evitando reducciones concesionales automáticas que desincentiven la inversión y la eficiencia.

Respuesta:

No puede entrar el EpTI en el modo de aplicar el artículo 65 del TRLA o incluir su modificación. La mejora de la eficiencia hídrica y la revisión de los supuestos en que el objeto de la concesión pueda alcanzarse con menores dotaciones o técnicas más eficientes son esenciales para una gestión sostenible, en línea con la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica (2025) y con el escenario de menor disponibilidad por cambio climático. Las auditorías y controles no persiguen reducir los derechos vigentes, sino mejorar el conocimiento y el control del recurso. Se recuerda que la concesión se otorga atendiendo a la explotación racional conjunta, sin que el título garantice la disponibilidad de los caudales (art. 59.2 TRLA), con carácter temporal y susceptible de revisión (art. 65; art. 59.4 TRLA). Cabe recordar, conforme a la reiterada doctrina del Consejo de Estado (Dictamen 315/2013 y concordantes) y a la jurisprudencia que la recoge, que los planes pueden imponer nuevos requisitos sin que ello determine la nulidad de la norma, y que la eventual indemnización por la modificación de concesiones para su adecuación a los planes (art. 65.3 en relación con el 65.1.c TRLA) presupone la existencia de un derecho consolidado a un caudal determinado que, en materia de caudales, la casi totalidad de las concesiones no consagra.

Por tanto, la modernización de regadíos se incluye en los planes hidrológicos porque es un tipo de medida dirigida al logro de objetivos ambientales; además se valora caso a caso, condicionada al ahorro efectivo y a la revisión concesional y con la validación de las autoridades competentes en materias agrarias, algo que por otra parte es un requisito ex ante para poder contar con financiación nacional y europea.

Alegación 13.

Incorporar programas de medidas realistas, con responsable administrativo, presupuesto, financiación, fase de tramitación, calendario e indicadores verificables de ejecución y resultado.

Respuesta:

El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento.

Una vez definido este Programa de medidas, su validación con el correspondiente compromiso presupuestario o financiero se debe hacer en el Comité de Autoridades Competentes en el que están representadas todas las administraciones competentes en una persona con alto rango administrativo (consejero o director general), dado que va a asumir responsabilidades administrativas y presupuestarias. Estas autoridades deben dar la conformidad al programa de medidas para lo cual, cada una internamente, habrá debatido la capacidad y conveniencia de asumir cada medida. Por tanto, los mecanismos formales para asegurar la ejecución del Programa de medidas existen y desde el ámbito de la planificación hidrológica sólo se puede recalcar que estos mecanismos no deben ser simplemente formales sino también reales. La propia Ficha DU-09 describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios.

Los mecanismos de rendición de cuentas están formalmente delimitados en el ámbito administrativo, por ejemplo, con la regulación que se incluye en los artículos 87 y 88 del RPH. Pero este ámbito es meramente administrativo y no político, que tiene sus propios itinerarios.

Alegación 14.

Aplicar la recuperación de costes con transparencia, proporcionalidad y correcta asignación del beneficiario, evitando cargas desproporcionadas sobre explotaciones agrarias y comunidades de regantes.

Respuesta:

La recuperación de costes se realiza por cada administración competente de manera coherente con las normas que lo regulan: no es lo mismo la recuperación de costes de los servicios urbanos del agua, que el servicio del regadío o del servicio de suministro de agua en alta. Es el Borrador de Plan Hidrológico quien debe incluir un análisis específico de recuperación de costes. En el Anejo 9 del Plan Hidrológico vigente (https://www.chduero.es/web/guest/plan-hidrol%C3%B3gico-del-duero-vigente-) se encuentra este análisis. Así, en su epígrafe 7.3 se hace una relación de los instrumentos de recuperación de costes: canon de regulación y tarifa de utilización del agua, canon de aprovechamientos hidroeléctricos de pie de presa, tarifas de las sociedades estatales de agua y agraria, tributos autonómicos ambientales de aprovechamientos hidroeléctricos, tasas municipales de agua, cuotas de las comunidades de regantes, canon autonómico de saneamiento y depuración, … En su epígrafe 8.2 se indica que en la aplicación de principio de recuperación de costes se deben tener en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio, siempre y cuando ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos (artículo 111 bis del TRLA), correspondiendo el Plan Hidrológico de cuenca motivar, en su caso, las excepciones en la recuperación. Por tanto, la planificación hidrológica atenderá la alegación en la fase de borrador de Plan Hidrológico.

Alegación 15.

Diseñar las medidas de reducción de contaminación difusa a partir de diagnósticos de fuentes, redes de control suficientes, asesoramiento técnico, financiación y coordinación con la política agraria.

Respuesta:

El trabajo “Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación”, como se indica en la Ficha DU-01, se ha llevado a cabo por el MITERD en 2023-2024.

El objetivo es determinar las relaciones moleculares de $^{15}N/^{14}N$ y $^{18}O/^{16}O$ en el nitrato disuelto en aguas superficiales y subterráneas de toda España que permita conocer, la aplicación de metodologías normalizadas de vanguardia, como la conversión química de nitrato y nitrito a óxido nitroso (N_2O), el origen del nitrógeno identificado en las muestras de la red oficial de calidad de las aguas.

En ese trabajo, sobre 79 puntos de muestreo de aguas superficiales de la demarcación hidrográfica, atribuyen el 61% de la contaminación por nitratos a origen agrario (principalmente fertilizantes inorgánicos) y el 25% a mezclas con aguas residuales urbanas, el 14% restante de origen indeterminado. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, sobre 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, se muestra un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería. A nuestro juicio este trabajo, sin menoscabo de que pueda ampliarse a nuevas zonas y

nuevas campañas y las limitaciones propias de la materia, muestra con suficiente certidumbre que la mayoría de los nitratos presentes en el agua tiene un origen agrario.

Como se indica en la Ficha, las medidas van dirigidas a reducir la presión por contaminación difusa que se ha identificado como excedente de sustancias que, al no ser asimiladas por los cultivos, quedan libres y van al agua. Las medidas no pretenden que no se apliquen fertilizantes a los cultivos, sino que se apliquen los necesarios para su desarrollo, pero no más. Esto contribuye también a la viabilidad de las explotaciones. La alegante ha perdido una buena oportunidad para aportar documentos técnicos que ofrezcan la información que solicita, cómo afecta a la rentabilidad de las explotaciones agrarias hacer el mejor uso posible de los fertilizantes y fitosanitarios, algo que debería conocer por su propia actividad profesional diaria un colectivo como el que presenta la alegación. Las medidas que se proponen en la Ficha, al proponer aportar las necesidades de los cultivos no deberían tener impacto en las producciones.

Alegación 16.

Crear mesas técnicas permanentes de usos agrarios del agua en las demarcaciones del Tajo, Duero, Guadiana, Júcar y Segura, con participación de organismos de cuenca, usuarios, comunidades de usuarios de aguas subterráneas, Administraciones, organizaciones agrarias, representantes del sector ganadero y colegios profesionales.

Respuesta:

Los órganos colegiados de los organismos de cuenca están regulados en Reglamentos específicos (consejo del agua de la demarcación), Reglamento de la Administración Pública del Agua (juntas de explotación, comisión de desembalse, junta de obras y junta de gobierno) o el TRLA (comité de autoridades competentes). En todas ellas, con excepción del comité de autoridades competentes, están presentes los usuarios del regadío que, en el caso de la demarcación hidrográfica del Duero por su relevancia, son una clara mayoría. Fuera de la representatividad que otorgan estos instrumentos legales no es posible trabajar.

Los colegios profesionales son tenidos en cuenta en la fase de preparación y participación pública de los documentos de la planificación hidrológica; de hecho, representantes del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la rama agrícola de Castilla-Duero han participado activamente en los ciclos anteriores y en el actual pese a la invitación no han podido asistir. Se seguirá contando con ellos y con la alegante (una vez que se aclare la diferencia entre ambas organizaciones) en los foros donde la normativa lo permite.

Alegación 17.

No imponer restricciones adicionales sobre aprovechamientos subterráneos legales sin estudios hidrogeológicos suficientes, redes piezométricas representativas, balances actualizados, consideración de retornos y recargas, y diferenciación clara entre usuarios con título, usuarios con expediente en tramitación y captaciones ilegales.

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación 9, la red oficial de piezometría de la demarcación hidrográfica del Duero cuenta con más de 450 piezómetros a los que se añadirán otros ochenta en fase de construcción. Aunque la disponibilidad de más puntos de control permite un mejor conocimiento, la red existente, en especial en las masas de agua subterránea más explotadas, ofrece un diagnóstico bastante certero de la situación en que se encuentran.

En las cuatro masas de agua subterránea de la zona central del Duero en mal estado cuantitativo, la estimación global de extracciones ronda los 644 hm3/año. Estas extracciones superan el recurso disponible, una vez descontadas las restricciones ambientales, y afección a las aguas superficiales y los ecosistemas dependiente. Por ejemplo, en la masa de agua Los Arenales-Tierras de Medina y La Moraña las extracciones superar los recursos renovables en un 94% de los mismos, es decir, se extrae casi el doble de la capacidad de renovación; o en la masa de agua Los Arenales-Tierra del Vino, se extrae el 130% de los recursos renovables. Todo ello tiene un efecto directo en la piezometría registrada y, sobre todo, en el bolsillo de los agricultores que ven como año tras año los bombeos son cada vez desde mayor profundidad.

Por tanto, podemos concluir que las medidas de contención que se fijan para algunas alternativas en determinadas masas de agua subterránea responden a un problema objetivo que ni siquiera los usuarios ponen en duda ya que ven la realidad de las aguas subterráneas en sus propias instalaciones.

Alegación 18.

Reforzar el control y, en su caso, clausura o regularización de captaciones ilegales, evitando que las cargas derivadas de la recuperación de masas de agua subterránea recaigan de forma indiscriminada sobre agricultores y ganaderos que actúan dentro de la legalidad.

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación 10, esta es una cuestión que corresponde más bien a la gestión ordinaria del Organismo de cuenca que a cuestiones que deba abordar el EpTI. El control efectivo de captaciones se hace a través de la aplicación de la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, y de campañas de vigilancia y control en campo. Las actuaciones irregulares son notificadas y se abre el correspondiente expediente sancionador. Los datos de los registros de piezometría están disponibles en la web la CHD abiertos para cualquier ciudadano.

Una de las medidas del Plan Hidrológico dirigidas a la recuperación de las masas de agua en mal estado cuantitativo es el fomento de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas (CUAS). Desde el Organismo de cuenca se ha fomentado y apoyado su constitución de CUAS. Actualmente, la cuenca del Duero cuenta con unas 50 CUAS constituidas, de las cuales 48 lo han hecho después de 2022. En total abarcan una superficie potencial de riego cercana a las 100.000 hectáreas, mayoritariamente ubicadas en masas en mal estado cuantitativo. Estas agrupaciones, además de una mejor gestión y uso del agua, permiten concienciar a los usuarios sobre la importancia de la gestión correcta del agua, haciéndoles copartícipes y corresponsables de esa gestión junto al Organismo de cuenca.

Alegación 19.

Incorporar en los balances de aguas subterráneas los retornos de riego, recargas, aportaciones laterales, intercambios río-acuífero y efectos de la modernización, evitando reducciones lineales que no reflejen el funcionamiento real del sistema hidrogeológico.

Respuesta:

Todo ello ya está incorporado en la caracterización de las masas de agua subterránea de la cuenca y forma parte del Plan Hidrológico. Además, se pueden consultar los retornos de riego, las recargas, las aportaciones laterales, los intercambios río-acuífero, la permeabilidad, la transmisividad y otros parámetros en la base documental y cartográfica Mírame-IDEDuero en su sección de masas de agua subterránea (https://mirame.chduero.es/chduero/public/groundWaterBody/gwb/data)

Alegación 20.

Garantizar que la planificación hidrológica valore las necesidades directas e indirectas de la ganadería, incluida la dependencia de forrajes producidos en zonas regables, y su contribución a un sistema alimentario solvente y seguro para el conjunto de la sociedad.

Respuesta:

Las demandas agrarias de la ganadería están incorporadas como tales en cada una de las 410 unidades de demanda agraria que se han identificado en la demarcación hidrográfica. Se puede consultar los datos de cada una en la base documental y cartográfica Mírame-IDEDuero en su sección de demandas agrarias (https://mirame.chduero.es/chduero/public/demands/agrarianDemands/data)

Alegación 21.

Preservar la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes y garantizar que cualquier revisión de derechos, asignaciones o dotaciones se apoye en motivación técnica suficiente, audiencia de interesados y análisis socioeconómico.

Respuesta:

El ordenamiento español es garantista: tanto la tramitación de concesiones (capítulo III del RDPH) como la extinción de concesiones (art. 53 TRLA; arts. 161 y ss. RDPH) y el procedimiento sancionador (art. 328 RDPH; Ley 39/2015) contemplan la audiencia al interesado, la presunción de inocencia y el pleno derecho de defensa, así como los recursos que agotan la vía administrativa (recurso potestativo de reposición) y el recurso contencioso-administrativo (Ley 29/1998). No existen, por tanto, extinciones ni sanciones automáticas. Estas garantías derivan de la normativa vigente y no son objeto del EpTI.

Alegación 22.

Reconocer el papel de los ingenieros técnicos agrícolas en la planificación, diseño, ejecución, modernización y seguimiento de regadíos, reforzando su participación en los procesos técnicos del cuarto ciclo.

Respuesta:

En los ciclos de planificación anteriores la CHD ha contado con este colectivo; de hecho, representantes del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la rama agrícola de Castilla-Duero han participado activamente en los ciclos anteriores y en el actual pese a la invitación no han podido asistir. Se seguirá contando con ellos en los foros donde la normativa lo permite. No obstante, desconocemos los matices que distinguen el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la rama agrícola de Castilla-Duero del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Centro, ambos con ámbito territorial coincidente en la demarcación hidrográfica del Duero.

Se recuerda que los órganos colegiados de los organismos de cuenca están regulados en Reglamentos específicos (consejo del agua de la demarcación), Reglamento de la Administración Pública del Agua (juntas de explotación, comisión de desembalse, junta de obras y junta de gobierno) o el TRLA (comité de autoridades competentes). Fuera de la representatividad que otorgan estos instrumentos legales no es posible trabajar.

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Alegación 23.

El Colegio solicita que el futuro Plan Hidrológico del Duero priorice la consolidación y modernización de los regadíos existentes, especialmente aquellos con derechos reconocidos e inversiones productivas asentadas. Los nuevos desarrollos o ampliaciones solo deberían incorporarse cuando exista disponibilidad real de recurso, garantía suficiente, compatibilidad ambiental y financiación de las infraestructuras necesarias, sin deteriorar la garantía de las zonas ya consolidadas.

[…] los proyectos deben incorporar análisis energético, soluciones de bombeo eficiente, autoconsumo, tarifas adecuadas y ayudas que eviten que la modernización sea inviable para comunidades de regantes con capacidad económica limitada.

Respuesta:

Ciertamente consolidar y modernizar los regadíos existentes ha sido una prioridad en los planes hidrológicos anteriores y lo será en el futuro plan hidrológico, como pone de manifiesto, por ejemplo, que en el plan hidrológico vigente sea el grupo de medidas con mayor inversión. Esto no es una virtud del Organismo de cuenca sino de las administraciones agrarias competentes que han decidió impulsar estas actuaciones. Por otra parte, el Plan Hidrológico debe limitar los nuevos desarrollos y ampliaciones de superficie a aquellos que disponen de garantía suficiente y que no suponen un deterioro del estado de las masas de agua o la modificación de sus características físicas.

Por otro lado, los proyectos de modernización son promovidos por las comunidades de regantes, redactados por sus ingenierías o los servicios técnicos de SEIASA o Comunidad Autónoma, son aprobados y supervisados por el órgano sustantivo que no es la Confederación Hidrográfica y son ejecutados por los usuarios y las administraciones agrarias. Pero estamos de acuerdo en que deberían incorporar lo que dice el alegante.

Alegación 24.

Las infraestructuras de regulación, recrecimiento, mejora de capacidad, balsas y conducciones deben analizarse con criterios de proporcionalidad ambiental. La evaluación debe ponderar no solo el impacto de ejecutar la infraestructura, sino también el impacto socioeconómico y ambiental de no ejecutarla.

Respuesta:

Se agradece la aportación. Sí, sería interesante realizar una evaluación más completa, incluyendo la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de no ejecutar las infraestructuras. Esto no se ha hecho en el EpTI dado que su objetivo es comparar alternativas dando una estimación general de sus efectos y a nivel cuenca. El análisis al que se refiere la alegante es de un detalle superior al que puede ofrecer la planificación y será en la fase de desarrollo del Programa de medidas, tanto de ejecución como de análisis de viabilidad, cuando pueda abordarse. No obstante, la alegante, dado su carácter de entidad técnica corporativa, puede aportar información sobre cómo aplicar la “proporcionalidad ambiental” a la que se refiere y cómo encaja ese concepto en la regulación de los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos.

Alegación 25.

La demarcación del Duero cuenta igualmente con aprovechamientos agrarios dependientes total o parcialmente de aguas subterráneas. Se propone avanzar hacia modelos de uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, de forma que los acuíferos puedan actuar como recurso de apoyo en sequía sin comprometer su estado cuantitativo, mediante planes de extracción adaptativos, recarga gestionada cuando sea viable, mejora de medición, transparencia de datos y participación de los usuarios.

Respuesta:

Estos modelos a los que se refiere el alegante ya cuentan en la cuenca del Duero con representación desde hace décadas (en algún caso). No es un modelo que se rechace, sino que, donde es posible, se fomenta tanto por la autoridad del agua como la agraria. De hecho, en la Ficha DU-02 se incluye una alternativa que propone este tipo de usos conjuntos, siempre bajo el objetivo de alcanzar el buen estado (de las masas de agua subterránea) y evitar el deterioro adicional (de las masas de agua superficial). Pare ello es necesario que confluyan muchos criterios: posibilidades de refuerzo superficial, grado de explotación subterránea, estudio de efectividad de las recargas.

Conocer la realidad de las reservas subterráneas de agua es un aspecto clave en la adecuada gestión de los recursos hídricos de la cuenca. En la actualidad la sobreexplotación de este recurso supone que en las masas de agua en mal estado cuantitativo se extrae entre un 10 y un 94% de lo que se recarga anualmente por medios naturales, es decir, sacamos más agua de la que la naturaleza es capaz de reponer.

Como consecuencia los niveles del agua subterránea descienden ligeramente, incrementando los costes de producción del sector agrícola y poniendo en serio peligro la supervivencia del modelo socioeconómico actual y del entramado ecológico de la zona. Todo esto sin olvidar que, en las dos últimas décadas del siglo pasado, estas masas sufrieron un descenso generalizado en sus niveles de agua de unos 30 metros, situación que ha repercutido en la merma de caudales en los ríos que se asientan sobre estas masas.

Por todo ello la Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto en marcha estudios en colaboración con distintos organismos como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Dirección General del Agua (DGA), para seguir mejorando en el conocimiento del estado actual de la masas de agua subterránea y proponer medidas que permitan la recuperación paulatina de las mismas, gracias al ahorro de agua con una correcta gestión agrícola y con medidas de recarga artificial, sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales, donde sea posible, se mencionan este tipo de actuaciones porque están implantadas en algunas zonas de estas masas con resultados esperanzadores. De todas formas, en la ficha ya se proponen actuaciones de este tipo y otras.

Alegación 26.

El Colegio solicita, que la Confederación Hidrográfica del Duero incorpore a colegios profesionales y entidades técnicas del sector agrario en los grupos de seguimiento de las medidas vinculadas a regadío, sostenibilidad e infraestructuras.

Respuesta:

El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento. Como se ve son las administraciones quienes confeccionan, validan, actualizan y revisan las medidas del Plan Hidrológico, no habiendo en esta materia parte para los colegios profesionales. No existen por tanto "grupos de seguimiento de medidas". En aplicación de lo dispuesto por los artículos 87 y 88 del RPH anualmente se da cuenta del grado de ejecución de las medidas del Plan Hidrológico, con la información aportada por las autoridades competentes, a través del Informe anual que está disponible en la web de la CHD (https://www.chduero.es/web/guest/plan-hidrologico-2022).

Los órganos colegiados de los organismos de cuenca están regulados en Reglamentos específicos (consejo del agua de la demarcación), Reglamento de la Administración Pública del Agua (juntas de explotación, comisión de desembalse, junta de obras y junta de gobierno) o el TRLA (comité de autoridades competentes). Fuera de la representatividad que otorgan estos instrumentos legales no es posible trabajar. Los colegios profesionales son tenidos en cuenta en la fase de preparación y participación pública de los documentos de la planificación hidrológica; de hecho, representantes del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la rama agrícola de Castilla-Duero han participado activamente en los ciclos anteriores y en el actual pese a la invitación no han podido asistir. Se seguirá contando con ellos en los foros donde la normativa lo permite.

4.53. Escrito de observaciones Nº 064

Presentado por: D. Javier Figueredo.

En nombre del Ayuntamiento de El Espinar.

Alegación 1.

Rehabilitación de la presa de El Tejo sobre el río Moros (T.M. de El Espinar, Segovia), o en su defecto, construcción de una nueva infraestructura de regulación en la cuenca alta del mismo río, con objeto de restituir la capacidad de regulación hídrica y el abastecimiento de agua potable a los núcleos de El Espinar, San Rafael y La Estación de El Espinar.

Se solicita que el PHD 2028-2033 incorpore en el Programa de Medidas (fichas DU-02, DU-05 y DU-07) las siguientes actuaciones:

1. *Rehabilitación de la presa de El Tejo sobre el río Moros, condicionada al resultado del diagnóstico estructural en curso.*
2. *En caso de inviabilidad técnica o económica de la rehabilitación, construcción de una nueva infraestructura de regulación en la cuenca alta del río Moros, con capacidad suficiente para garantizar la demanda urbana del municipio con un año de reserva.*
3. *Inclusión en el Programa de Medidas de un estudio de viabilidad técnica, ambiental y económica de las alternativas de regulación en el río Moros, con horizonte de redacción no superior a 2029.*

Respuesta:

Con fecha 29 de abril de 2026, se procedió a la remisión a la Administración competente en materia de seguridad de presas y embalses (MITECO) del borrador del documento relativo a la Revisión de Seguridad Extraordinaria, con el objeto de su examen y valoración. Asimismo, con fecha 27 de mayo de 2026, se remitió mediante oficio el documento elaborado en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 28.2 del Anexo III del Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Seguridad para las Presas y sus Embalses (en adelante, NTS III). Debe significarse, igualmente, que de conformidad con lo previsto en el apartado 33 de las citadas NTS III, corresponde a la Administración competente dictar la resolución que proceda, así como practicar su notificación, en el plazo máximo de un año, contado a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud formulada por el titular de la presa.

En este sentido, cabe señalar que el documento de Revisión de Seguridad Extraordinaria concluye, con carácter preliminar, la recomendación de las siguientes medidas, entre otras que pudieran derivarse del análisis definitivo del expediente:

- Que, “en el ámbito hidráulico y operativo, se recomienda mejorar la operatividad de los órganos de desagüe, especialmente del desagüe de fondo, […]. Igualmente, se considera necesario ampliar la capacidad hidráulica de los conductos de desagüe y analizar medidas para evitar posibles obstrucciones o incrustaciones”.

- Que “desde el punto de vista estructural y geotécnico, la problemática detectada en la cimentación y en el comportamiento hidráulico del macizo de apoyo presenta limitaciones intrínsecas que no admiten soluciones parciales o de carácter local, por lo que no existe una solución técnica alternativa sencilla o de bajo alcance que permita garantizar la seguridad a corto-medio plazo de la infraestructura y esta pueda seguir desempeñando, sin riesgo, su función de abastecimiento. En este contexto, las actuaciones posibles se reducen a dos escenarios globales de intervención: por un lado, la adecuación integral de la presa mediante importantes obras de impermeabilización, tratamiento del cimiento y mejora del sistema estructural, y por otro, la puesta fuera de servicio de la presa, como única alternativa si no se aborda una intervención estructural de gran alcance.”

Asimismo, estas recomendaciones terminan indicando que “teniendo en cuenta el considerable plazo de ejecución que precisan las posibles soluciones planteadas en este documento, y atendiendo al informe de la División de Seguridad de Infraestructuras y Explotación del Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico ya mencionado anteriormente, que ordena mantener el embalse vacío en tanto no se cumplan las condiciones de seguridad establecidas en las vigentes Normas de Seguridad de presas y sus embalses, se considera imprescindible tomar medidas urgentes dirigidas a aumentar la capacidad de desagüe de la presa, una vez comprobada la escasa capacidad de los órganos de desagüe de fondo y medio fondo y, por tanto, su incapacidad para permitir un control efectivo del nivel del embalse. Teniendo en cuenta las condiciones existentes, se considera, como medida más idónea, la transformación de la galería que actualmente aloja los desagües de fondo en una galería de desvío a sección completa, que permitirá desaguar un caudal, en lámina libre, notablemente mayor al actual. Esta actuación deberá contemplar, en esencia, el diseño y ejecución de una nueva obra de entrada, el desmontaje de los equipos y tuberías existentes, la adecuación y consolidación de los paramentos de la propia galería, y un encauzamiento a la salida de la galería.”

En este sentido y en este momento, la Confederación Hidrográfica del Duero, OA sólo puede adelantar que adoptará cuantas medidas resulten necesarias para garantizar, a corto y medio plazo, las debidas condiciones de seguridad de la infraestructura, evitando, en todo caso, el llenado del embalse mientras persistan las circunstancias actualmente existentes. Más allá de esto, no es posible puede atender en este momento la petición de la alegante (rehabilitación, construcción o estudio de viabilidad sobre el Tejo). Las competencias atribuidas a este Organismo en la materia no permiten, por sí mismas, avanzar hacia la creación o habilitación de nuevas fuentes de suministro. A este respecto, debe recordarse que el Ayuntamiento de El Espinar ostenta las competencias propias e irrenunciables en materia de abastecimiento domiciliario de agua potable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, correspondiendo a la Diputación Provincial de Segovia la función de coordinación de la prestación de dicho servicio, en los términos igualmente previstos en el citado precepto.

Asimismo, procede hacer referencia al marco normativo de aplicación en relación con las competencias de la Junta de Castilla y León en materia de auxilios para la ejecución de obras de abastecimiento. En este sentido, la presa de El Tejo fue ejecutada tomando como base lo dispuesto en el “Decreto de 1 de febrero de 1952 por el que se modifican las normas que rigen para el auxilio del Estado a los Ayuntamientos en las obras de abastecimiento de aguas”.

Dicha norma, de carácter preconstitucional, ha sido posteriormente objeto de modificación del reparto competencial, produciéndose la transferencia de estas funciones a la Comunidad Autónoma en virtud

del Real Decreto 1022/1984, de 11 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de abastecimientos, saneamientos, encauzamientos y defensa de márgenes de ríos.

En este marco, la inclusión de una medida específica en el Plan Hidrológico, tanto de ejecución (rehabilitación o nueva presa) como de planificación (estudios de viabilidad), como solicita el alegante, sólo es posible si la propone la autoridad competente y la asume directamente.

4.54. Escrito de observaciones Nº 065 y similares

Se muestra a continuación los agentes que han presentado escritos de POS con el mismo contenido y que son respondidas de forma conjunta para todos ellos.

Nº POS	Presentado por:	En nombre:
N065	D. Jesús Nieto Martín.	Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.
N068	D. Óscar Moral Sanz.	Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.
N071	Dña. Elisabet Lázaro Gil.	Ayuntamiento de La Lastrilla.
N073	D. Miguel Ángel de Vicente Martín.	Diputación Provincial de Segovia.

Alegación 1.

Se considera necesario incorporar a la Planificación Hidrológica del Duero un incremento de regulación en la zona de Segovia, ya planteada además en la revisión del PHD de segundo ciclo (periodo 2016-2021), en el que dentro de las Infraestructuras hidráulicas previstas destinadas a satisfacer demandas y a prevenir inundaciones se encontraba la Presa de Ciguiñuela, necesaria para resolver la regulación de caudales para el abastecimiento a los núcleos de la zona.

La actuación prevista entonces contemplaba la construcción de la presa de Ciguiñuela (29 Hm^3) aumentando la capacidad de almacenamiento de Segovia y su entorno de 9,9 Hm^3 (7,4 del embalse del Pontón y 2,5 del embalse de Puente Alta) a 38,9 Hm^3, lo que implicaría que se multiplicaría casi por cuatro.

La capacidad de regulación de esta nueva infraestructura conllevaría las siguientes ventajas:

*- **Uso más sostenible de aguas subterráneas (DU-02):** sustituyendo bombeos y reduciéndose los índices de explotación de las masas de agua subterránea. Un nuevo embalse en el río Ciguiñuela va en consonancia con la alternativa Nº3 propuesta, pero debería añadirse a las nuevas infraestructuras planteadas.*

***- Gestión del riesgo de inundación (DU-05):** siendo una solución estructural para evitar inundaciones en Segovia (río Eresma) evitando situaciones de grandes crecidas en los años 2024, 2025 y que también se han producido en el 2026.*

***- Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (DU-07):** el aumento de los recursos hídricos que conllevaría la nueva infraestructura aseguraría la garantía de suministro a la provincia de Segovia en el caso en el que los embalses de Ciguiñuela y del Pontón Alto, conectados entre sí, operaran como vasos comunicantes. De esta manera Ciguiñuela podría compensar los vaciados tan acusados que sufre el Pontón Alto durante épocas de estiaje, y que conllevan, no solo problemas en la cantidad de agua, sino también en la calidad de la misma.*

Además, existe la preocupación por la presa de El Tejo, desde la que se abastece la localidad de El Espinar, actualmente vaciada por el estudio de sus condiciones de seguridad y los riesgos de colapso detectados. En el caso de que tuviera que ser demolida se generaría un problema que afectaría a una población cercana a los 80.000 habitantes de la zona sur de la provincia de Segovia, que no tendrían

garantía suficiente de suministro desde el embalse de Puente Alta, condicionando además el crecimiento de las demandas futuras.

Respuesta:

La presa de Ciguiñuela ha estado incluida en el Programa de medidas de los planes hidrológicos de 2009-2015 y de 2016-2021, pese a la constante oposición a esta medida mostrada por el ayuntamiento de Segovia. Finalmente, debido a esta negativa del citado ayuntamiento, se descartó del Plan Hidrológico vigente 2022-2027.

Sobre la presa de Ciguiñuela se han realizado estudios previos de viabilidad que se han puesto en conocimiento de los servicios técnicos de la capital segoviana y de sus autoridades; pese a ello ambos han manifestado su negativa a esta presa. Su objetivo era asegurar las garantías de las poblaciones del sur de la provincia de Segovia entre el río Eresma y el río Moros, y la posibilidad de sustituir bombeos de la masa de agua Los Arenales-Tierra de Pinares. Estos objetivos, sobre todo el primero, han recuperado su actualidad a raíz de los problemas de seguridad de la presa de El Tejo que ha puesto de manifiesto en 2024 la División de Seguridad de Infraestructuras y Explotación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en consecuencia, exigir su vaciado hasta la cota inocua. Esta situación ha trasladado el problema de suministro de la población de El Espinar, que pierde su principal fuente de suministro, a todas las poblaciones al Este de la misma y al Norte de la Sierra de Guadarrama: Mancomunidad de la Mujer Muerta, Segovia, Palazuelos de Eresma y la mancomunidad de La Atalaya, al perderse una fuente de suministro para abastecimiento urbano como es el Tejo. Dada la incertidumbre existente en este momento sobre la reparación y puesta en explotación de la presa de El Tejo, y la escasa colaboración de determinadas administraciones locales en ejercer sus competencias, parece que pensar en un refuerzo del suministro del Sur de Segovia en esta zona es más que razonable. Se incluye una referencia entre las Decisiones a tomar de la Ficha DU-07 consistente en incluir el estudio de viabilidad y en su caso la construcción de la presa de Ciguiñuela como refuerzo para el suministro urbano de agua al sur de Segovia.

El embalse de Pontón Alto no permite laminar las avenidas de alta probabilidad en la ciudad de Segovia por su escasa capacidad. Además, este embalse tiene un uso vinculado que es el abastecimiento urbano que, como se sabe, tiene el primer orden de prioridad. Cualquier norma incluida en el Plan Hidrológico que pretenda trastocar ese orden puede incurrir en los supuestos a los que se refiere el artículo 65 del TRLA, lo que podría conllevar la correspondiente indemnización. Por lo tanto, en tanto existan concesiones de agua para abastecimiento urbano en este embalse no es posible dar prioridad a otros usos o funciones.

Por otro lado, el río Eresma, a su paso por la ciudad de Segovia, se nutre de las aguas del propio río, atravesando el embalse de Pontón Alto; pero también tiene varios ríos que aportan caudales en ese tramo, y que no disponen de regulación, por lo que los caudales del Eresma llegan a la ciudad de Segovia en régimen natural en cuanto a lo que es una gestión de avenidas. Destacan especialmente las aportaciones del río Ciguiñuela, que tienen importancia en los caudales que circulan en un episodio de avenidas por el cauce del río Eresma a su paso por Segovia.

Una presa en el arroyo de Ciguiñuela contribuiría levemente a reducir las puntas de caudal en Segovia, en especial en deshielos rápidos. Y la gestión conjunta de ambos embalses (Pontón Alto y Ciguiñuela) para evitar avenidas en Segovia resulta muy complicado. Por tanto, no mostramos conformidad con la

propuesta de nueva presa para reducir las inundaciones en Segovia, si bien su utilidad para garantizar el suministro puede ser razonable.

4.55. Escrito de observaciones Nº 066

Presentado por: D. César Luaces Frades.

En nombre de la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (PRIMIGEA).

CONSIDERACIONES GENERALES

Alegación 1.

Solicita que el plan diferencie la minería actual de los pasivos históricos, evite asociar de forma genérica la actividad extractiva con impactos ambientales y reconozca su carácter estratégico, así como sus potenciales contribuciones a la gestión ambiental y territorial.

Respuesta:

La propuesta de aclarar la terminología empleada en relación con las actividades mineras –distinguiendo la minería actual, sujeta a autorización y a obligaciones de restauración, de los pasivos históricos– puede tomarse en consideración en la consolidación del EpTI y en la revisión del plan. En cambio, el reconocimiento del carácter estratégico de la minería y de sus potenciales contribuciones, y su fomento, superan los objetivos de este proceso: no son cuestión de la planificación hidrológica, sino del marco europeo y estatal de materias primas. El análisis de presiones del EpTI atiende a los impactos que dificultan el cumplimiento de los objetivos ambientales, con independencia de su origen actual o histórico.

Alegación 2.

Solicita que cualquier restricción o medida ambiental aplicable al sector se fundamente en evidencia científica, análisis técnico individualizado, proporcionalidad, atribución causal acreditada y evaluación específica de los impactos reales.

Respuesta:

Se comparte el criterio, que ya rige la actuación administrativa. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho (art. 3 de la Ley 40/2015), y en su intervención aplican el principio de proporcionalidad, eligen la medida menos restrictiva, motivan su necesidad y justifican su adecuación, sin diferencias de trato discriminatorias (art. 4.1 de la Ley 40/2015). El propio análisis de presiones e impactos de la planificación (esquema DPSIR; art. 4 DMA) se realiza sobre bases técnicas y de atribución causal. La aplicación concreta a una actividad o emplazamiento se sustancia, en su caso, en los procedimientos ambientales y de autorización correspondientes.

Alegación 3.

Solicita reforzar la coordinación entre las administraciones competentes y priorizar la simplificación administrativa, la eliminación de duplicidades regulatorias y el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los sectores afectados.

Respuesta:

Se comparte que la coordinación interadministrativa es un tema clave, en el que es necesario avanzar, cada administración dentro de sus competencias. En las demarcaciones intercomunitarias, esa coordinación se canaliza a través del Comité de Autoridades Competentes (art. 36 bis TRLA), cuya composición, funcionamiento y atribuciones regula el RD 126/2007. Ahora bien, la simplificación administrativa y la eliminación de duplicidades regulatorias que afectan al sector minero exceden, en gran medida, las competencias del organismo de cuenca y el ámbito del EpTI y del plan, correspondiendo a la normativa sectorial y a las administraciones competentes.

Alegación 4.

Solicita fomentar la colaboración entre administraciones y sectores productivos en actuaciones ambientales y reconocer a PRIMIGEA como entidad interesada con participación activa en los órganos, foros y procesos de la planificación hidrológica.

Respuesta:

Se agradece la aportación, que se tomará en cuenta en la definición del proceso de participación y consulta del Plan Hidrológico. Los procesos participativos son abiertos y transparentes: se informa con antelación suficiente, en la web del organismo, de la celebración de jornadas, talleres y mesas redondas, y la consulta pública –de seis meses– se anuncia en el BOE y en las webs del MITERD y de los organismos de cuenca. En ese marco, PRIMIGEA puede participar y ser considerada interesada como cualquier entidad que acredite interés, sin que ello exija un estatus singular ni modificar el EpTI.

Alegación 5.

Solicita incorporar una visión integrada de la gestión del agua y del territorio, reconociendo la contribución de determinadas actividades extractivas a la gestión de sedimentos, la prevención de inundaciones, la restauración ambiental y la adaptación climática.

Respuesta:

La visión integrada de la gestión del agua y del territorio es inherente al EpTI, que analiza los problemas de la demarcación y las alternativas de solución, y se traslada después al plan. En cuanto a la contribución de determinadas actividades extractivas a la gestión de sedimentos, la prevención de inundaciones o la restauración, se trata de aportaciones que pueden valorarse caso a caso, allí donde estén técnicamente acreditadas y sean compatibles con los objetivos ambientales, sin que proceda una atribución genérica de efectos positivos al conjunto de la actividad extractiva. El anexo de buenas prácticas aportado se toma en consideración como documentación informativa.

ALEGACIONES ESPECÍFICAS A LOS TEMAS IMPORTANTES DEL EpTI DEL DUERO

Alegación 6.

El alegante solicita que, en el Tema Importante DU-01 "Contaminación difusa", se ***refuerce expresamente la diferenciación entre las afecciones por metales derivadas de pasivos históricos o de determinados contextos geológicos y la actividad extractiva moderna****, sometida a control ambiental, autorización de vertidos y planes de restauración. Se solicita que el documento refuerce esta diferenciación y evite cualquier formulación que pueda conducir a una atribución genérica de responsabilidades al conjunto del sector.*

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la primera alegación la cuestión de base no es tanto aclarar la terminología empleada en relación con las actividades mineras –distinguiendo la minería actual, sujeta a autorización y a obligaciones de restauración, de los pasivos históricos– como poder evaluar adecuadamente las presiones, con su origen y, en consecuencia, las posibilidades de corregirlas. El análisis de presiones del EpTI atiende a los impactos que dificultan el cumplimiento de los objetivos ambientales, con independencia de su origen actual o histórico. De cualquier modo, en el Plan Hidrológico vigente ya se hace esa distinción al identificar determinados contaminantes como de origen ubicuo, lo que viene a reconocer una presión que probablemente sea histórica o no bien conocida, para lo que se están desarrollando estudios que permitan esa identificación adecuada

Alegación 7.

El alegante solicita que el desarrollo del Tema Importante DU-02 "Uso sostenible de las aguas subterráneas" se base en un ***enfoque flexible, adaptativo y territorialmente diferenciado****, evitando la aplicación de soluciones homogéneas que puedan resultar desproporcionadas.*

En particular, considera que las medidas planteadas en el EpTI (mantenimiento de limitaciones, restricción de la novación de concesiones y sustitución de bombeos por recursos superficiales) deben aplicarse atendiendo a criterios de ***proporcionalidad, viabilidad social, ambiental y económica****, valorando sus efectos sobre todas las actividades económicas afectadas, incluida la actividad extractiva. Asimismo, solicita que la vinculación de masas de agua subterránea con espacios Red Natura 2000* ***no implique automáticamente restricciones adicionales de carácter general****, sino que estas se fundamenten en análisis técnicos individualizados.*

Respuesta:

El EpTI aborda las propuestas sobre el tema importante DU-02 precisamente con un criterio de proporcionalidad, viabilidad social, ambiental y económica. Las propuestas se adaptan a la realidad de las aguas subterráneas en cada zona de la demarcación hidrográfica: hay zonas donde no hay limitaciones dad que hay un equilibrio adecuado entre extracción y recurso natural, y otras zonas donde el desequilibrio es de tal calibre que se requieren medidas más restrictivas a nuevos usos con el fin de mantener los existentes y contribuir a la mejora del estado de las masas de agua. En todas las alternativas que se plantean se hace una valoración de la viabilidad social, ambiental y económica de las medidas. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho (art. 3 de la Ley 40/2015), y en su

intervención aplican el principio de proporcionalidad, eligen la medida menos restrictiva, motivan su necesidad y justifican su adecuación, sin diferencias de trato discriminatorias (art. 4.1 de la Ley 40/2015).

Respecto a Red Natura 2000 y su vinculación con las masas de agua subterránea se seguirán los criterios del mejor estudio general realizado hasta ahora en esta materia que corresponde al IGME, y todos aquellos posteriores que ofrezcan la mejor información disponible. No obstante, una vez vinculadas la masa de agua y el espacio protegido, el EpTI (y tampoco el Plan Hidrológico) pueden modificar las normas que regulan la protección de estas zonas y que pueden afectar a la gestión del agua.

Alegación 8.

El alegante solicita que cualquier desarrollo normativo o programático derivado del Tema Importante DU-03 "Contaminación urbana e industrial" garantice que ***la asignación de costes, obligaciones y responsabilidades se base en datos objetivos y en la contribución efectiva de cada sector a la contaminación identificada****, evitando la extensión indiscriminada de responsabilidades o costes a sectores cuya contribución a este problema no haya sido demostrada de forma significativa.*

Respuesta:

El EpTI y el Plan Hidrológico tienen poco margen de maniobra en el tema importante DU-03 tal y como se ha planteado en la demarcación hidrográfica del Duero. Toda la ficha de este tema importante deriva de las nuevas exigencias de la nueva DTARU y de las exigencias aún no cumplidas de la Directiva de 1991. Por ello el EpTI se limita a señalar las exigencias de la DTARU, ahora en fase de trasposición al ordenamiento jurídico español, y los problemas que estas exigencias conllevan que, en lo que se refiere a las cuestiones financieras probablemente requieran una mayor contribución de los ciudadanos por este servicio de saneamiento y depuración. Que esta contribución sea lineal para todos los ciudadanos, o discrimine a un sector respecto a otro, no es cuestión que deba abordar el EpTI, sino que queda en el ámbito de discrecionalidad de las autoridades locales, competentes en la materia.

Alegación 9.

El alegante solicita que el Tema Importante DU-04 "Alteraciones hidromorfológicas y restauración fluvial" no presente la ***extracción de áridos exclusivamente como una presión sobre el medio fluvial****, sino que incorpore una visión más amplia que reconozca su posible contribución a determinados objetivos de gestión y restauración fluvial.*

En particular, pide que se mencione expresamente que, cuando se realiza bajo criterios técnicos adecuados y con las correspondientes autorizaciones, la extracción controlada de áridos puede contribuir a la ***gestión de sedimentos, la mejora de la capacidad de desagüe de los cauces, la prevención de procesos de colmatación y la restauración hidromorfológica****.*

Respuesta:

El EpTI hace referencia a la realidad actual de la cuenca y se refiere a la actividad de la minería en relación con este tema importante DU-04 singularmente en los fenómenos de incisión de los cauces

como consecuencia de la extracción masiva de áridos en otras épocas, algo que es un problema importante, con afecciones a las masas de agua y también a terceros.

En el estudio de presiones e impactos que se incluye en los Documentos iniciales, las extracciones de áridos en general no se consideran presión salvo que afecten a las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua, sobre todo si se realizan o se han realizado en cauces o en zona de policía (presiones 4.1.4 o 7). En cuanto a la contribución de determinadas actividades extractivas a la gestión de sedimentos, la prevención de inundaciones o la restauración, se trata de aportaciones que pueden valorarse caso a caso, allí donde estén técnicamente acreditadas y sean compatibles con los objetivos ambientales, sin que proceda una atribución genérica de efectos positivos al conjunto de la actividad extractiva. El anexo de buenas prácticas aportado se ha tomado en consideración como documentación informativa, por ejemplo, en los requisitos que se piden a las actividades extractivas y mineras cuando solicitan autorización y que se plasman, por ejemplo, en el artículo 27 de la Normativa del vigente Plan Hidrológico, *Condicionado particular para extracción de áridos*, con el fin de incluir criterios técnicos adecuados para estas actividades.

Alegación 10.

El alegante solicita que el Tema Importante DU-05 "Gestión del riesgo de inundación" incorpore expresamente el papel que pueden desempeñar determinadas actuaciones materiales sobre los cauces, especialmente las relacionadas con la ***gestión de sedimentos****, en la mejora de la capacidad hidráulica y la reducción del riesgo de inundación.*

En particular, propone que se reconozca que estas actuaciones pueden complementar las soluciones basadas en la naturaleza y contribuir eficazmente a la gestión del riesgo en determinados tramos y circunstancias.

Asimismo, solicita que el EpTI contemple de forma expresa la posible ***colaboración con operadores especializados, incluido el sector extractivo****, en actuaciones de mantenimiento, acondicionamiento y gestión de materiales en cauces, siempre bajo control público y con adecuada justificación técnica.*

Respuesta:

Tanto la Ficha DU-05 como el propio PGRI en su Programa de medidas incluye las medidas de actuaciones en cauce para recuperar las buenas condiciones hidromorfológicas de las masas de agua y para proteger y prevenir inundaciones. Y en estas medidas pueden colaborar los actores particulares, pero no a cambio de una mayor explotación de áridos sino como modo de restaurar los espacios y funcionalidades que estas actividades han generado históricamente. El modo de realizarlo no es materia que deba abordar el EpTI, pero el ofrecimiento del alegante puede concretarse en la elaboración del Plan Hidrológico incluyendo medidas de restauración fluvial que encajen con los objetivos ambientales de las masas de agua y que sean financiadas por el sector extractivo.

Alegación 11.

El alegante solicita que el desarrollo del Tema Importante DU-07 "Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos" incorpore de forma explícita la necesidad de establecer ***mecanismos técnicos y administrativos para una gestión eficiente de los sedimentos*** *asociados al funcionamiento*

*de las infraestructuras hidráulicas, incluyendo la participación de **operadores privados especializados** en dicha gestión, evitando enfoques que resulten parciales o restrictivos.*

Respuesta:

Las obligaciones derivadas de la aplicación del artículo 49. quáter 7 del RDPH o la DT Quinta del RDPH, por ejemplo, corresponden a los titulares de las infraestructuras que bien por sí o a través d terceros deberán asegurar el cumplimiento de esos requisitos, algo en que el EpTI no debe entrar a valorar por no corresponderle.

Alegación 12.

*El alegante solicita que el desarrollo del Tema Importante DU-09 "Coordinación interadministrativa" se oriente a **mejorar la eficiencia administrativa, reducir duplicidades, agilizar procedimientos y reforzar la seguridad jurídica**, evitando que la coordinación entre administraciones se traduzca en una mayor carga burocrática.*

*Asimismo, pide que se impulse la **clarificación de competencias, la homogeneización de criterios técnicos y la simplificación de los procedimientos administrativos**, especialmente en sectores con una elevada carga regulatoria como el extractivo, para evitar situaciones de bloqueo o incertidumbre derivadas de la intervención de múltiples administraciones.*

Respuesta:

Se comparte que la coordinación interadministrativa es un tema clave, en el que es necesario avanzar, cada administración dentro de sus competencias, algo que se pone de manifiesto en la Ficha DU-09 y sobre lo que se proponen diversas mejoras. Esa coordinación se canaliza a través del Comité de Autoridades Competentes (art. 36 bis TRLA), cuya composición, funcionamiento y atribuciones regula el RD 126/2007. Ahora bien, la simplificación administrativa y la eliminación de duplicidades regulatorias que afectan al sector minero exceden, en gran medida, las competencias del organismo de cuenca y el ámbito del EpTI y del plan, correspondiendo a la normativa sectorial y a las administraciones competentes establecer los mecanismos más adecuados.

Alegación 13.

*El alegante manifiesta su disposición a **mantener y reforzar la colaboración institucional** con la Confederación Hidrográfica del Duero y con el resto de Administraciones implicadas en el proceso de planificación hidrológica y se pone a disposición para participar en los **trabajos técnicos, grupos de trabajo, foros de diálogo y mecanismos de seguimiento** que puedan constituirse durante la elaboración y desarrollo del Plan Hidrológico, poniendo a disposición de la Administración la experiencia y conocimientos del sector en materias como la gestión del agua, la restauración ambiental, las buenas prácticas operativas y la ejecución de actuaciones sobre el territorio.*

Respuesta:

Se agradece la disposición a participar que se tomará en cuenta en la definición del proceso de participación y consulta del Plan Hidrológico. Los procesos participativos son abiertos y transparentes: se informa con antelación suficiente, en la web del organismo, de la celebración de jornadas, talleres y mesas redondas, y la consulta pública –de seis meses– se anuncia en el BOE y en las webs del MITERD

y de los organismos de cuenca. En ese marco, PRIMIGEA puede participar y ser considerada interesada como cualquier entidad que acredite interés, sin que ello exija un estatus singular ni modificar el EpTI.

4.56. Escrito de observaciones Nº 067

Presentado por: Juan Manuel Valero de Palma.

En nombre de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE).

Alegación 1.

Reclama elaborar y aplicar de forma centralizada por la DGA una metodología común para los análisis de repercusión del régimen de caudales ecológicos sobre los usos (apdo. 3.4.5 IPH), comparando el régimen 2028-2033 con el mínimo previo a la IPH, y garantizando la equidad entre demarcaciones.

Respuesta:

La IPH ya exige un análisis de la repercusión del régimen de caudales ecológicos sobre los usos (garantías, disponibilidad, compatibilidad con los títulos), apoyado en modelos de simulación y coherente con la caracterización económica del plan. Cuando una UDA cumple los criterios de garantía tanto con los caudales vigentes como con los revisados, no cabe apreciar repercusión económica efectiva, aunque varíen los déficits, pudiendo no ser necesario un análisis específico. Se comparte la conveniencia de que la DGA promueva directrices metodológicas comunes para reforzar la homogeneidad, pero la determinación del régimen corresponde a cada plan de cuenca, debiendo preservarse la trazabilidad territorial y las competencias de los organismos, sin una centralización que las menoscabe. No cabe sostener un trato inequitativo entre demarcaciones. Se ha tenido en cuenta el trabajo de FENACORE sobre la afección de los caudales al regadío, compartido con los organismos de cuenca; el régimen es revisable, en el marco de la revisión de la IPH.

Alegación 2.

Solicita incorporar en los planes del 4.º ciclo el análisis de la repercusión del régimen de caudales ecológicos sobre el estado de las masas (art. 49 sexies RDPH), para revisar, en su caso, el régimen vigente.

Respuesta:

Se coincide en avanzar en el conocimiento de la repercusión de la implantación de los caudales ecológicos sobre el estado (arts. 49 quinquies y sexies RDPH). El seguimiento tiene por finalidad analizar el cumplimiento y los efectos sobre el medio fluvial y los ecosistemas –en especial en zonas protegidas–, no revisar el régimen vigente si los caudales no condicionan las asignaciones y reservas del plan. La objetivación del límite al aprovechamiento de las aguas encuentra apoyo, además, en la facultad de la Administración de imponer las limitaciones necesarias para no comprometer los objetivos ambientales (art. 98 TRLA). Además, es una exigencia para los planes, no para el EpTI. Se está trabajando en directrices para la implantación práctica del seguimiento (art. 49) y en las cuestiones que puedan llevar a la revisión del régimen (nueva IPH).

Alegación 3.

Propone anular la obligación de mantener el caudal ecológico ordinario en sequía prolongada en Red Natura 2000 y humedales Ramsar (art. 18.4 RPH), vía programa de medidas o real decreto de aprobación de los planes.

Respuesta:

No procede una relajación del régimen de caudales ecológicos en masas asociadas a Red Natura 2000 o a humedales Ramsar: constituyen una medida básica para garantizar los procesos ecológicos que sustentan los hábitats y especies protegidos. Su reducción podría comprometer los objetivos ambientales y las obligaciones de conservación derivadas de la normativa europea y nacional, debiendo prevalecer el principio de no deterioro y la protección efectiva de los valores que justifican la designación. No cabe, además, establecerlo en este marco.

Alegación 4.

Solicita incluir en el inventario actualizado la identificación de masas con variación relevante de la distribución de mínimos y elaborar una metodología para identificar en explotación real cuándo procede aplicar el régimen de «entradas por salidas» en embalses (art. 49 quáter.4 RDPH).

Respuesta:

El régimen de "entradas por salidas" se regula en el art. 49 quáter.4 del RDPH, por lo que el EpTI no puede regular algo que ya está regulado. La DGA puede aportar las metodologías que puedan servir para unificar o matizar la disposición del RDPH.

Alegación 5.

Propone reforzar las funciones del Comité de Autoridades Competentes con grupos técnicos estables (modernización de regadíos, incremento de recursos), incrementar la asignación presupuestaria de cada autoridad y dotar a las CCHH con partidas de los PGE.

Respuesta:

La coordinación se canaliza por el Comité de Autoridades Competentes, cuya composición y funcionamiento regula el RD 126/2007; su refuerzo con grupos técnicos, en la medida en que sea competencia del organismo, se valora en cada caso. Ahora bien, la asignación presupuestaria de cada autoridad y la dotación de las CCHH con partidas de los PGE exceden el ámbito del EpTI y del plan (materia presupuestaria y de función pública), que en todo caso no tiene legitimidad para exigir a las autoridades competentes cómo organizar sus propias competencias.

Alegación 6.

Solicita definir el programa de medidas anclado a las disponibilidades económicas reales, con priorización explícita por carácter, coste y eficacia, considerando prioritaria la modernización de regadíos y desdoblando entre ciclos las medidas cuya implementación supere los seis años.

Respuesta:

La selección de la combinación de medidas –especialmente las complementarias– se apoya en un análisis coste-eficacia que considera aspectos económicos, sociales y ambientales, y se ajusta a criterios de racionalidad económica y sostenibilidad (art. 43 RPH). Se comparte el ajuste a las disponibilidades presupuestarias reales: de hecho, en el plan hidrológico de tercer ciclo se marcó, al menos por la AGE, la senda presupuestaría en la que podría encajar el programa de medidas. Pero no debe olvidarse que, una vez realizados los estudios de coste-eficacia deben ser las autoridades competentes las que validen esas medidas precisamente en el Comité de Autoridades Competentes. Así, la modernización de regadíos se valora caso a caso, sin prioridad a priori frente a otras medidas y condicionada al ahorro efectivo y a la revisión concesional y con la validación de las autoridades competentes en materias agrarias. El desdoblamiento temporal entre ciclos es inherente a la programación.

Alegación 7.

Reclama la identificación clara de las medidas vinculadas al regadío y de su avance, en el programa de medidas y en los informes de seguimiento, desglosando por modernización, incremento de recursos, nuevos regadíos y reducción de contaminación difusa.

Respuesta:

La alegación cae en el ámbito del plan hidrológico y no del EpTI. A nuestro juicio hay una identificación suficientemente clara de las medidas que figuran en el Plan Hidrológico del Duero y de su estado de ejecución. De hecho, anualmente, en los informes de seguimiento del Plan Hidrológico del Duero, se ofrece información de detalle, una a una, de todas las medidas que están en el Plan Hidrológico y de su grado de avance, así como de las nuevas medidas que no estando en el Programa de medidas las autoridades competentes deciden incorporar. Las medidas de regadío están identificadas con grupos propios (3.1 y 3.2). Las de contaminación difusa previstas por el Plan Hidrológico del Duero fueron no asumidas por la autoridad competente (comunidad autónoma) y por tanto no forman parte del programa de medidas de carácter inversos, quedando únicamente como medidas normativas.

Alegación 8.

Solicita diferenciar la contribución por fuentes (aguas residuales urbanas, ganadería, secano, regadío) en cada masa, evaluar el cumplimiento de las medidas previas y de los programas de actuación en zonas vulnerables, y evaluar el efecto de la Directiva (UE) 2024/3019 sobre la concentración de nitratos.

Respuesta:

La diferenciación del origen de la contaminación se aborda, entre otras vías, con los estudios de isótopos que la DGA desarrolla en distintas demarcaciones para identificar el origen de los nitratos y cuyos resultados se muestran en la ficha del tema importante DU-01. El cumplimiento de las medidas previas se analiza en la evaluación del estado y en el grado de ejecución del programa de medidas; la designación de zonas vulnerables y sus programas de actuación son competencia de las CCAA (Directiva 91/676/CEE; RD 47/2022). La evaluación de las repercusiones de la Directiva (UE) 2024/3019, aún no traspuesta, supera los objetivos y el alcance del EpTI.

Alegación 9.

Reclama identificar inequívocamente en el plan las UDAs que incumplen la garantía incluso aplicando íntegramente el programa de medidas, señalando las medidas adicionales que las harían cumplir y la justificación de su no inclusión.

Respuesta:

El seguimiento de la satisfacción de las demandas se recoge en la revisión de los planes (cada seis años) y en el informe de seguimiento de los planes hidrológicos y de los recursos hídricos en España (MITERD). La identificación de las UDA con problemas y las medidas necesarias se aborda en la revisión del plan. No obstante, en las fichas de temas importantes DU-06 y DU-07 se ofrece una información del cumplimiento de garantáis bajo las diversas alternativas que se plantean en el EpTI, información no exhaustiva, si bien existentes, ya que el objeto del EpTI no baja al detalle que demanda la alegación, que corresponde a fase de plan hidrológico.

Alegación 10.

Propone mantener el planteamiento de nuevas presas de regulación cuando sean alternativas viables, centrando el esfuerzo en su justificación rigurosa (art. 4.7 DMA) y previendo su escalonamiento entre ciclos.

Respuesta:

La Ficha DU-07 aborda esta cuestión desde diversos aspectos: necesidad, viabilidad hidrológica, social y ambiental, y enfoque económico coste-eficacia. De manera general se puede indicar que la ejecución de nuevas presas puede implicar alteraciones que comprometan los objetivos ambientales (DMA), por lo que el promotor debe realizar una justificación adecuada y rigurosa del art. 4.7 DMA para su valoración en el plan. Además, las obras hidráulicas se atienen al régimen tarifario de la normativa de aguas, clave del principio de recuperación de costes (DMA): deben concretarse las fórmulas de financiación y el esquema de recuperación de costes para que los beneficiarios asuman los compromisos económicos.

Alegación 11.

Solicita acompañar las medidas de recursos no convencionales (reutilización, desalinización) de un análisis económico de viabilidad, previendo mecanismos de repercusión de costes que garanticen la sostenibilidad de su producción y de la actividad.

Respuesta:

Se comparte la necesidad de un análisis económico de viabilidad. De cualquier modo, en el plan hidrológico vigente se estableció una reserva de agua para reutilización y no ha sido demandada por ningún usuario, lo que da idea del escaso interés que, por el momento, suscitan estos recursos en la demarcación hidrográfica.

Alegación 12.

Reclama aplicar el riego deficitario controlado y la adecuación de las demandas a la campaña real solo en sistemas muy presionados sin alternativas razonables, mediante concertación con el usuario y análisis transparente, incluyendo la demanda real por UDA en los informes anuales.

Respuesta:

La propuesta escapa del ámbito del EpTI y se ajusta más a la gestión ordinaria. De cualquier modo, pensamos que la propuesta choca, a nuestro juicio, con el régimen concesional vigente en España. Podría ser aplicable a aquellos regadíos cuyo servicio se ofrece por el Organismo de cuenca (zonas regables del Estado) y que se sustancia ya a través de las juntas de explotación, pero no de manera general a toda la cuenca.

Alegación 13.

Solicita aplicar de forma especialmente restrictiva el art. 65.2 TRLA, sin usarlo como vía indirecta para reducir derechos concesionales vigentes; analizar la posibilidad de ayudas (art. 65.4 TRLA) y respetar el contenido económico de la concesión (seguridad jurídica).

Respuesta:

No puede entrar el EpTI en el modo de aplicar el TRLA o incluir su modificación. La mejora de la eficiencia hídrica y la revisión de los supuestos en que el objeto de la concesión pueda alcanzarse con menores dotaciones o técnicas más eficientes son esenciales para una gestión sostenible, en línea con la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica (2025) y con el escenario de menor disponibilidad por cambio climático. Las auditorías y controles no persiguen reducir los derechos vigentes, sino mejorar el conocimiento y el control del recurso. Se recuerda que la concesión se otorga atendiendo a la explotación racional conjunta, sin que el título garantice la disponibilidad de los caudales (art. 59.2 TRLA), con carácter temporal y susceptible de revisión (art. 65; art. 59.4 TRLA). Cabe recordar, conforme a la reiterada doctrina del Consejo de Estado (Dictamen 315/2013 y concordantes) y a la jurisprudencia que la recoge, que los planes pueden imponer nuevos requisitos sin que ello determine la nulidad de la norma, y que la eventual indemnización por la modificación de concesiones para su adecuación a los planes (art. 65.3 en relación con el 65.1.c TRLA) presupone la existencia de un derecho consolidado a un caudal determinado que, en materia de caudales, la casi totalidad de las concesiones no consagra; por ello, como regla general, tales modificaciones no resultan indemnizables.

Alegación 14.

Reclama un análisis detallado caso a caso en las masas subterráneas en mal estado cuantitativo de las que se extrae para UDAs cuando no sea posible definir objetivos menos rigurosos, evaluando la repercusión económica de la limitación de extracciones y revisando la caracterización de la masa.

Respuesta:

La Ficha del tema importante DU-02 realiza este análisis para un documento como el EpTI, pero suficiente de cara a la toma de decisiones. Para todas las masas que no hayan alcanzado el buen estado, la revisión del plan incluirá la justificación de la aplicabilidad de las exenciones a los objetivos ambientales (arts. 36, 37 y 38 RPH), por masa o grupo de masas afectadas por la misma circunstancia

y a nivel de elemento de calidad, indicador o sustancia. Debe evitarse, no obstante, que el análisis se traduzca en compensar la sobreexplotación. Esta pretensión se responderá en la revisión del plan hidrológico.

Alegación 15.

Solicita que cada organismo dé respuesta en el 4.º ciclo a los contenidos del Programa especial de seguimiento del ATS (DA 9.ª RD 35/2023) y que se consideren las medidas coordinadas.

Respuesta:

En una cuestión que no afecta a la demarcación hidrográfica del Duero.

Alegación 16.

Reclama adoptar, antes de finalizar 2026, las medidas coordinadas entre organismos que aplican a acuíferos compartidos en masas subterráneas en riesgo (DF 1.ª RD 35/2023), tras el catálogo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2026.

Respuesta:

El mecanismo de coordinación sobre acuíferos compartidos ya está previsto normativamente y no requiere constitución ad hoc: la disposición final primera del RD 35/2023 ordenó el catálogo de acuíferos compartidos –aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2026 (Resolución de 30 de marzo de 2026)– y establece que, declarada en riesgo una masa de un acuífero compartido por un organismo, los demás deben adoptar medidas de gestión equivalentes y coordinadas en un plazo máximo de seis meses desde la publicación del Acuerdo, sin perjuicio de la coordinación del art. 5 del RAPA (RD 927/1988) y de la reserva de la asignación de recursos al PHN (arts. 7 y 8 de la Ley 10/2001).

En la demarcación hidrográfica del Duero ya se viene aplicando el citerior de solicitar informe al organismo de cuenca vecino cuando hay peticiones de aprovechamientos que pudieran estar en el ámbito de esos acuíferos compartidos.

Alegación 17.

Reclama un programa específico de refuerzo de la seguridad jurídica de los aprovechamientos legales y medidas de simplificación administrativa en novaciones, modificaciones y renovaciones concesionales, y refuerzo urgente de los medios humanos, técnicos y materiales de las CCHH (especialmente para aguas subterráneas).

Respuesta:

El marco jurídico español ofrece un sistema sólido y previsible para los aprovechamientos legales: las concesiones se otorgan conforme a los planes (elaborados mediante procedimientos reglados, con participación pública e informes técnicos), con motivación administrativa y control judicial, y con participación de las comunidades de usuarios en los órganos y en la planificación. Se reconocen las dificultades derivadas de la dilación de plazos y de la falta de recursos, pero la simplificación administrativa y el refuerzo de medios personales exceden los objetivos del EpTI: son cuestiones de reglamentación y de función pública.

Alegación 18.

Solicita que las limitaciones a los aprovechamientos de aguas pluviales se establezcan solo bajo estudios hidrológicos específicos y análisis individualizados de afección real, sustentados en criterios técnicos.

Respuesta:

El aprovechamiento de las aguas pluviales y su relación con el dominio público hidráulico se rige por la normativa de aguas (art. 54 TRLA). La Confederación no establece limitaciones específicas para estos usos más allá de las generales de evitar el deterioro de las masas de agua y la afección a terceros que, en todo caso, se fundamentan en criterios técnicos y en la afección al dominio público y a los derechos de terceros; su concreción es propia de la gestión del dominio público hidráulico, no del EpTI.

Alegación 19.

Reclama la prevalencia expresa de los usos agrarios y concesionales existentes frente a nuevos aprovechamientos energéticos, con evaluación previa obligatoria de compatibilidad y participación de las comunidades de regantes afectadas.

Respuesta:

El orden de preferencia entre usos es el que fije el plan hidrológico, respetando los requisitos que mantiene el art. 60 TRLA, en el que los regadíos y usos agrarios se sitúan por delante del almacenamiento hidráulico de energía. La compatibilidad con el plan es un requisito básico del sistema concesional, en particular para los aprovechamientos energéticos. La tramitación de concesiones de aguas superficiales incluye un trámite de información pública (arts. 104 y ss. RDPH), en el que pueden intervenir las comunidades de regantes afectadas.

Alegación 20.

Solicita reconocer el impacto económico, energético e hidráulico de las especies exóticas invasoras (EEI) sobre el regadío, priorizar su seguimiento, reforzar el programa de medidas, crear una plataforma digital de seguimiento en tiempo real y habilitar líneas de apoyo económico para las comunidades de regantes afectadas.

Respuesta:

El MITERD y los organismos de cuenca realizan una labor continuada de seguimiento, control y erradicación de las EEI, reconocida su implicación en la no consecución del buen estado. En 2021 se aprobó una instrucción para el desarrollo de actuaciones en materia de EEI y gestión del DPH, y el CEDEX gestiona un visor interactivo de EEI de los ecosistemas acuáticos; estrategias y actuaciones se publican en el MITERD y en las CCHH. La creación de una plataforma y las líneas de apoyo económico se valorarán en el marco de los instrumentos disponibles; el catálogo y régimen de EEI corresponde al RD 630/2013 y a la competencia ambiental.

Alegación 21.

Reclama reconocer el papel complementario y no estructural de las aguas regeneradas, con evaluación caso a caso; garantizar la ausencia de afección a caudales ecológicos, retornos, masas y usos

existentes; el carácter orientativo de las cartografías; la reutilización voluntaria y la protección de los derechos concesionales; y calidad, coste asumible y continuidad del suministro.

Respuesta:

El RD 1085/2024, que desarrolla el capítulo III del título V del TRLA y complementa el Reglamento (UE) 2020/741, ordena la reutilización con el objetivo de liberar recursos de mejor calidad para usos más exigentes, reducir la presión sobre las masas, promover la economía circular y la adaptación, y garantizar la salud y la protección ambiental evitando impactos adversos significativos. Se comparte el enfoque de evaluación caso a caso y la cautela sobre la afección a caudales ecológicos, retornos y usos aguas abajo: la reutilización solo suma recurso si sustituye recursos convencionales o aprovecha efluentes vertidos al mar; en aguas interiores puede detraer caudales de retorno.

Alegación 22.

Propone sustituir el «enfoque restrictivo» en la gestión de las aguas subterráneas por un modelo de cogestión efectiva Administración–Comunidades de Usuarios, con financiación estable, medios técnicos, digitalización, control y vigilancia; impulsar infraestructuras, reutilización, recarga y modernización, e incorporar compensaciones económicas ante nuevas restricciones.

Respuesta:

No se comparte la premisa de que la gestión de las aguas subterráneas responda a un enfoque restrictivo: la Ley de Aguas y la planificación orientan la gestión a compatibilizar la atención de las demandas con la consecución y el mantenimiento del buen estado, previniendo el deterioro y preservando los ecosistemas asociados. La normativa ya contempla la participación y colaboración de los usuarios (comunidades de usuarios; participación pública), de modo que el modelo vigente incorpora instrumentos de gobernanza participativa. El Plan de Acción de Aguas Subterráneas (PAAS) aborda específicamente la gobernanza, y existen iniciativas de financiación a las comunidades de usuarios (PERTE). Las compensaciones por restricciones se rigen por el art. 65 TRLA, no por el EpTI.

Alegación 23.

Reclama que la planificación proteja los cultivos leñosos eficientes, se coordine con la ordenación agraria y territorial y aplique con «flexibilidad» la DMA para compatibilizar sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria y viabilidad del medio rural.

Respuesta:

Se comparte la importancia de la coordinación entre la planificación hidrológica, las políticas agrarias y la ordenación territorial. No obstante, la gestión del agua debe compatibilizar la atención de las demandas con el uso sostenible del recurso y el cumplimiento de los objetivos ambientales, que tienen carácter vinculante; la DMA no admite una aplicación «flexible» que relaje dichos objetivos. La coordinación interadministrativa ya se articula mediante los mecanismos de cooperación, consulta y participación vigentes si bien, como se pone de manifiesto en la ficha del tema importante DU-09, puede mejorarse, y las competencias en materia agraria y de ordenación territorial corresponden principalmente a las CCAA, cuyo marco competencial debe respetarse.

4.57. Escrito de observaciones Nº 069

Presentado por: D. Antonio García Pastrana.

En nombre de Aguas de Burgos.

Alegación 1.

Que se incremente el volumen asignado al Sistema de Abastecimiento de Aguas de Burgos, debido a los condicionantes expuestos y la imposibilidad de satisfacer todas las demandas de abastecimiento con el caudal asignado en el Plan de Sequía y el Plan Hidrológico del Duero anterior.

Respuesta:

Según se indica en la solicitud, se encuentra en tramitación el expediente MC-0297/2025 para modificar la concesión a favor de Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A.U. En la fecha de elaboración de este documento no se ha dado respuesta al requerimiento para subsanación de la solicitud, emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero el 25 de mayo de 2026. A falta de la información que se solicita en dicho requerimiento, no es posible analizar si el incremento de volumen solicitado es compatible con el Plan Hidrológico vigente ni si procede modificar su asignación en el Plan Hidrológico que se encuentra en elaboración.

En todo caso, se analizará en detalle en el marco de la modificación de concesión en curso y, si procede, se modificará su asignación en el Plan Hidrológico 2028-2033.

Alegación 2.

Que se asigne al sistema de abastecimiento "Burgos" un volumen de 32.171.794,54 m3 correspondiente al solicitado en la modificación de características de la concesión C/CP - 130/2011-BU con fecha 19 de diciembre de 2025 y actualmente en tramitación.

Respuesta:

De igual forma a lo indicado en la respuesta a la alegación anterior con relación al expediente MC-0297/2025, en la fecha de elaboración de este documento no se ha dado respuesta al requerimiento para subsanación de la solicitud, emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero el 25 de mayo de 2026. A falta de la información que se solicita en dicho requerimiento, no es posible analizar si el incremento de volumen solicitado es compatible con el Plan Hidrológico vigente ni si procede modificar su asignación en el Plan Hidrológico que se encuentra en elaboración.

En todo caso, se analizará en detalle en el marco de la modificación de concesión en curso y, en fase de Plan Hidrológico 2028-2033, si se resuelve favorablemente se modificará su asignación, o si no fuera así, se constituirá una reserva adecuada, si fuera viable desde el punto de vista de la compatibilidad con la planificación hidrológica.

4.58. Escrito de observaciones Nº 070 y similares

Se muestra a continuación los agentes que han presentado escritos de POS con el mismo contenido y que son respondidas de forma conjunta para todos ellos.

Nº POS	Presentado por:	En nombre:
N070	D. Emilio Rojo	Comunidad de Regantes del Canal de Aranda
N078	D. Emilio Rojo	Comunidad de Regantes del Canal de Aranda

Nota: Ha entrado a la CHD como 2 entradas de registro diferentes

Alegación previa.

Que una primera aproximación al documento evidencia el absoluto desprecio, persecución y condicionamiento del mismo respecto a la agricultura de regadío para las aguas superficiales […] está por completo impregnado de un interés "ambientalista", por lo que nos oponemos a su aprobación.

La primera medida del nuevo ciclo de planificación debería pasar por el análisis del cumplimiento del anterior, donde se ejecutaron en torno al 22 por 100 de las inversiones previstas, […] solo puede decirse objetivamente que ha fracasado por su incumplimiento fundamentalmente en cuanto a las inversiones previstas.

Respuesta:

No compartimos la primera observación del alegante: no hay ningún lugar del EpTI donde se haga un juicio negativo sobre la agricultura de regadío como el que se manifiesta en el escrito de alegaciones. En la Ficha DU-06 (cuyo título es "Sostenibilidad y relevancia del regadío") se indica, respecto al regadío: *son muchos los efectos positivos del regadío: fija de población en el medio rural; aporta mayor diversificación de cultivos; aporta la mayor fuente de materias primas para la alimentación humana; las zonas con regadío tienen una densidad de población tres veces superior a las del secano; impulsa el empleo al generar 3,6 veces más de empleos que el secano; en las zonas de regadío se incorporan 3,5 veces más jóvenes al sector agrario que en el secano; finalmente las zonas modernizadas generan hasta 7,5 veces más inversión que las zonas de secano. Estos valores son importantes en una demarcación hidrográfica en la que la un 77% de su territorio se corresponde con municipios en riesgo de despoblación.*

El valor de producción del regadío asciende a 1.269 M€ y supone el principal motor económico en gran parte del medio rural de la demarcación. Además, el regadío tiene un papel fundamental para asegurar la autonomía alimentaria y reducir la inflación de la cesta de compra del consumidor y tiene un efecto arrastre en el conjunto de la economía, ya que es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. La contribución del sistema agroalimentario a la economía española en el año 2020 se puede estimar en aproximadamente un 10,60%. Esta elevada contribución supone que el sistema agroalimentario es el segundo generador de riqueza nacional tras el turismo.

Debido a la mayor productividad del regadío frente al secano, la agricultura de regadío es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. En el caso de la demarcación del Duero alrededor del 30% del valor económico de la producción agraria proviene del regadío al aire libre o invernadero, porcentaje que para el conjunto de España se eleva a alrededor del 70%. Por tanto, el EpTI no evidencia

ningún desprecio, persecución o condicionamiento a la agricultura de regadío, sin menoscabo de poner de manifiesto que alguna de las presiones que genera sobre las masas de agua requieren ser corregidas.

Tal y como se pone de manifiesto en la Ficha DU-09, el grado de ejecución de las medidas a fecha 31 de diciembre de 2024 es del 24,5% de la inversión prevista, valor escaso cuando ha pasado un tercio del tiempo del ciclo de planificación. Siendo esto así, sin embargo, se observa que en determinados grupos de medidas el avance es superior a la media: así en materia de saneamiento y depuración la ejecución supera el 45% de la inversión, en abastecimiento un 37%, en medidas de gestión de inundaciones un 34%. Reconociendo que existe un importante retraso en la ejecución de las medidas, no compartimos la visión tan negativa que muestra la alegante.

Alegación 1.

Que en lo que respecta particularmente a esta Comunidad de Regantes, consultados los datos en la aplicación MÍRAME-IDEDUERO de ese organismo, hemos comprobado que esta Comunidad consta con una superficie regable asignada con derecho a riego de 2355 has., cuando en realidad la superficie correcta es la de 2.385,86 has. (Canal de Aranda más Canal del Cura), y un volumen demandado de 14,49 hm3.

Respuesta:

La superficie que se considera en la elaboración del Plan Hidrológico para la Comunidad de Regantes del Canal de Aranda (Unidad elemental de Demanda Agraria 2100041 - Comunidad de Regantes Canal de Aranda) es de 2.355 hectáreas, y el volumen demandado de 14.489.000 m^3/año ya que son los datos que figuran en su inscripción en el Registro de Aguas (Sección: A – Tomo nº: 140 – Hoja nº: 56 – Número: 23656) según Resolución de concesión de 29 de septiembre de 2015 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Referencia Integra C-0374/2004). Esta es la superficie y volumen máximo anual que se considerará en el nuevo plan hidrológico. El histórico Canal del Cura, impulsado a principios del siglo XX por el párroco Prudencio Ortego en Vadocondes, cuyos términos municipales afectados de riego y gestión hidráulica son Aranda de Duero, Zazuar, Villalba de Duero y San Juan del Monte, se encuentra incluido en la concesión citada anteriormente.

En caso de que la superficie no sea correcta, deberá tramitarse una modificación de características de la concesión.

Alegación 2.

DU-01. Contaminación difusa.

El diagnóstico del documento refleja de forma adecuada la persistencia de problemas de nitratos y biocidas, pero no valora suficientemente los esfuerzos ya realizados por agricultores y ganaderos (modernización de regadíos, asesoramiento en fertilización, implantación de GIP).

La caracterización de presiones debería diferenciar con mayor claridad entre cultivos intensivos, cultivos leñosos, ganadería estabulada y extensiva, pues sus aportes de nutrientes y fitosanitarios son muy distintos.

Se aprecia un déficit en la cuantificación de los beneficios de las inversiones en modernización de regadíos y fertiirrigación: sin esos datos es difícil justificar medidas más restrictivas.

Respuesta:

Empezando por la última observación, como se ha comentado en la respuesta a la primera alegación, el EpTI deja de manifiesto la relevancia de la modernización del regadío para el logro de los objetivos ambientales y la mejora de la viabilidad de las explotaciones. Sin embargo, las presiones por contaminación difusa no se deben exclusivamente y en su mayoría al regadío donde el aporte de agua y el riesgo de lixiviado está controlado, sino al secano, a las aplicaciones de estiércoles y purines y a otras actividades como puede ser las descargas de aguas residuales urbanas no correctamente depuradas o los tratamientos biocidas en infraestructuras lineales, como se pone de manifiesto en la Ficha DU-01.

Estamos de acuerdo en que la modernización de regadíos permite aplicar nuevas tecnologías en el sector agrario, sin este tipo de infraestructuras sería imposible llegar a conseguir al riego de precisión, se maneja mejor el agua, y consecuentemente se evita que las aguas de retorno de riego sean menos y con menor carga contaminante, pero por el contrario el poder disponer de mejores infraestructuras da pie a siembras más densas, que se traducen en más rendimiento por hectárea y más necesidad de abonado, también ocurre que esto posibilita la obtención de dos cosechas en un mismo año, más cultivo por consiguiente más abonado, exceptuando los cultivos de leguminosas.

Las estaciones de medida existentes tanto en aguas subterráneas como en ríos y arroyos que drenan algunas de las zonas regables, siguen dando valores de contenido en sustancias nitrogenados por encima de los limites legalmente establecidos. Analizando datos procedentes de sistemas de control de otros organismos, SINAC, controles sanitarios, campañas de medición en campo realizadas con nuestros medios, siempre aparecen algunos valores altos en zonas de mayor actividad agroganadera.

La caracterización de la presión por contaminación difusa ya tiene en cuenta los tipos de cultivos y la carga ganadera en cada cuenca vertiente de la demarcación hidrográfica, ya que se utiliza para identificar las presiones y los impactos dos fuentes de información: las redes oficiales de control de calidad de agua superficial y subterránea y los balances que el MAPA realiza cada dos años sobre el excedente de nitrógeno que provoca esa carga de nutrientes en las aguas. Y esta última fuente de información utiliza la información sobre cultivos, los sistemas de cultivo y las prácticas agrarias y ganaderas en cada zona.

Los esfuerzos que realizan los agricultores son conocidos porque ya se encargan las organizaciones profesionales agrarias de realzarlos; sin embargo, pese a ese esfuerzo, el problema no va a menos por lo que debemos preguntarnos qué no estamos haciendo bien o qué debemos mejorar. También desde instancias europeas se advierte a España con sanciones millonarias en aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2024 que concluye que España no cumple la directiva de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. De hecho, una de las comunidades autónomas en la que la sentencia pone el foco es Castilla y León, territorio en la que ejerce su actividad la asociación alegante, al no haber aplicado las medidas obligatorias ni lograr mejorar la calidad de las aguas. Dos años después de la sentencia, la Comisión Europea señala que solo 4 comunidades autónomas españolas no han tomado medidas, entre ellas Castilla y León. (Noticia La Gaceta de Salamanca, de 5 de junio de 2026). La amplia legislación existente para regular y minimizar

este problema (entre otras, el Real Decreto 47/2022, el Real Decreto 1514/2009, relativo a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, o el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios) da idea de la complejidad para su resolución.

Alegación 3.

DU-01. Contaminación difusa.

Sobre los "trabajos de Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación terminados en marzo de 2025", se plantean las siguientes dudas:

- *¿Cuántos puntos se han muestreado cada campaña en la demarcación, tanto para aguas superficiales como para subterráneas?*
- *¿Este trabajo va a ser repetitivo? ¿Cuál es el programa/planing y el coste presupuestario anual destinado a él?*

Solicitamos una copia de los trabajos de "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación"

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, el trabajo "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación", se ha llevado a cabo por el MITERD en las campañas 2023 y 2024, duplicando analíticas en cada punto de muestro. En la demarcación hidrográfica del Duero, sobre 79 puntos de muestreo de aguas superficiales de la demarcación hidrográfica, atribuyen el 61% de la contaminación por nitratos a origen agrario (principalmente fertilizantes inorgánicos) y el 25% a mezclas con aguas residuales urbanas, el 14% restante de origen indeterminado. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, sobre 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, se muestra un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería.

Dado que el trabajo fue encargado por la Dirección General del Agua, del MITECO, puede dirigirse a ese departamento en petición del trabajo.

Alegación 4.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 1 (Reducción de excedentes y bandas de protección):

Las reducciones propuestas (hasta un 50% de excedentes o más) deben graduarse según tipología de cultivo, textura del suelo y riesgo de lixiviación, evitando fijar límites uniformes que puedan poner en peligro rentabilidad de cultivos con baja lixiviación (viñedo, olivar, almendro).

Las bandas de vegetación de ribera son útiles, pero su implantación debería ser voluntaria con compensaciones claras y planes de control de fauna (topillo campesino, conejos) para no crear nuevos problemas.

Respuesta:

La normativa del Plan Hidrológico, específicamente en su Apéndice 14.2, establece umbrales máximos de excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) que distinguen explícitamente entre cultivos herbáceos y leñosos, tanto en regadío como en secano. Para los cultivos leñosos (donde se incluyen viñedos, olivares y almendros), los valores de excedente permitidos son significativamente distintos y más ajustados a su fisiología que los de los herbáceos.

Las reducciones propuestas no son arbitrarias tampoco, sino que resultan de la aplicación del modelo PATRICAL, una herramienta de simulación del ciclo hidrológico y la calidad de las aguas distribuida espacialmente. Este modelo calcula el balance de nitrógeno teniendo en cuenta variables territoriales específicas como la recarga por lluvia, la textura del suelo (a través de los coeficientes de escorrentía y lixiviación) y el tipo de cultivo por término municipal. La zonificación se realiza a nivel de "sectores" de masas de agua, lo que permite adaptar la exigencia a la realidad geomorfológica y al riesgo real de cada zona.

La propuesta sobre la voluntariedad de las bandas de protección parece razonable y se abundará sobre ella en el presente ciclo de planificación. Se debe indicar, por aclarar, que la vegetación de ribera puede constituir un refugio para distintas plagas, pero también para sus depredadores, que necesitan espacios donde establecer zonas de cría y refugio para desarrollarse.

Alegación 5.

Respecto al tema importante DU-01, se comparte el fomento de biofertilizantes, bioestimulantes y control biológico, pero se requiere apoyo técnico y financiero estable, así como validación agronómica local antes de exigir sustitución de fertilizantes tradicionales.

Debería contemplarse un periodo transitorio de al menos 5-7 años para la adopción realista de estas prácticas.

Respuesta:

Las propuestas que hace la Ficha DU-01 para la alternativa 2 son propuestas que pretenden orientar la decisión de las autoridades competentes en materia de investigación y transferencia de tecnología para abordarlos y movilizar la inversión necesaria para esta mejora de conocimiento. Pero para impulsar esas decisiones es necesario que los sectores implicados (agua, agricultura, medio ambiente, …) orienten en esa línea y confirmen esta posible mejora. No se pretende establecer como obligatorio el uso de estos productos en tanto se justifique su eficacia y sean competitivos económicamente, para lo cual se necesita ese trabajo de investigación y transferencia.

Alegación 6.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 3 (Depuración urbana):

Es positivo que se incluyan fuentes urbanas, pero el documento debería cuantificar su aportación relativa al problema global para no sobrecargar sólo al sector primario.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, las fuentes de contaminación difusa son varias y entre ellas están las descargas urbanas no adecuadamente tratadas. Sin embargo, sin negar su contribución al problema general, el trabajo de estudio del origen de la contaminación nitrogenada en las aguas de la demarcación hidrográfica al que se alude en la respuesta a la alegación 3ª, el origen del nitrógeno encontrado en el agua es de origen agrario en el 61% de las muestras de agua superficial y en el 55% de las muestras de agua subterránea, lo que pone de manifiesto que la mayoría de los nitratos presentes en el agua tiene un origen agrario.

Alegación 7.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 4 (Plantas de biogás):

La valorización de purines es esencial, pero se precisa planificación territorial: ubicación de plantas, logística de recogida y retorno del digestato tratado, evitando concentraciones que generen rechazo social.

Respuesta:

Estamos de acuerdo con parte de lo que se expone en la alegación, en la ficha se propone como alternativa, porque su correcto manejo genera menos problemas ambientales que las prácticas de aplicación de los purines en bruto como se está haciendo en la actualidad. No obstante, como se indica sería necesaria una planificación territorial de esta nueva actividad. Hasta la fecha la autoridad competente (comunidad autónoma) no nos ha trasladado ningún criterio al respecto.

Alegación 8.

La dispersión competencial señalada en la Ficha DU-01 del EPTI requiere de mecanismos concretos:

- *Convenios entre CHD y Consejerías de Agricultura para seguimiento conjunto.*
- *Creación de mesas de trabajo permanentes con organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes.*
- *Inclusión de Juntas Agrarias Locales en la difusión y control de buenas prácticas.*

Antes de aprobar medidas que impliquen reducción de fertilización o prohibición de biocidas, debe elaborarse un análisis coste-beneficio que contemple:

- *Pérdidas de producción y costes de adaptación.*
- *Impacto en empleo rural y en industrias de insumos.*
- *Ahorros ambientales y beneficios para el abastecimiento de agua.*

Respuesta:

La cooperación entre administraciones y la difusión de la problemática de la contaminación difusa son aspectos relevantes para buscar las soluciones. De hecho, se ha avanzado en los últimos cinco años en la percepción del problema y el convencimiento de que se debe ser proactivo en la búsqueda de soluciones, a lo que ha contribuido la visibilidad de problema mediante el expediente sancionador a España por incumplimiento de la Directiva de nitratos y por las medidas limitantes que se incluyen en los planes hidrológicos. También las organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes han desarrollado actividades formativas para sus asociados poniendo el foco también en este problema de la contaminación difusa: ya es normal que en las reuniones técnicas que estas entidades organizan se empiece a hablar del problema del exceso de nutrientes no solo como un problema económico de rentabilidad de explotación o productividad de los cultivos, sino también como un modo de no perjudicar al medio ambiente.

Dicho esto, los convenios a los que se refiere la alegación no pueden pretender eludir las competencias de cada administración en esta materia, en la que el seguimiento de la contaminación en agua corresponde a la administración del agua y la implantación de medidas corresponde a la administración ambiental y agraria.

La Ficha DU-01 en la alternativa 1 evalúa el impacto de la reducción de excedentes de sustancias nitrogenadas en función de la zona de la demarcación hidrográfica donde nos encontremos. Esta alternativa 1 *supone la máxima reducción posible de los excedentes de nitrógeno (no de la aplicación) compatible con unas producciones agrarias óptimas. (…). En este análisis se identifica que, por ejemplo, una reducción de cerca del 35% de la fertilización implicaría una reducción del 50% de los excedentes y una reducción del 56% de la aplicación de fertilizantes una reducción del 80% de los excedentes de nitrógeno.*

Y se analiza en la Tabla 1 de la Ficha el efecto de la reducción de excedentes sobre el territorio:

Reducción de aplicación de N	Reducción de excedentes	Superficie sector (km^2)
10%	*25%*	*3.227*
20%	*50%*	*19.629*
40%	*80%*	*3.872*

Esta información podría servir de ayuda a la Administración autonómica competente, en esta alternativa, para reforzar los planes de actuación de manera que se puedan limitar la aplicación de nutrientes de manera zonal de forma que se asegure que los excedentes sean inferiores a los contemplados en el citado apéndice 14.2. Esto podría implementarse de diversas formas:

- *Mediante la reducción de las cantidades máximas de N por hectárea en los planes de actuación de las zonas vulnerables;*
- *Mediante la reducción de las cantidades a aplicar de nutrientes fuera de las zonas vulnerables (de acuerdo con los criterios de Patrical) a través de normas de condicionalidad vinculadas a aumentos de las ayudas PAC.*
- *Mediante la aplicación de tributos a gravando el exceso de N adquirido en el mercado sobre la dosis contemplada en los planes de actuación.*

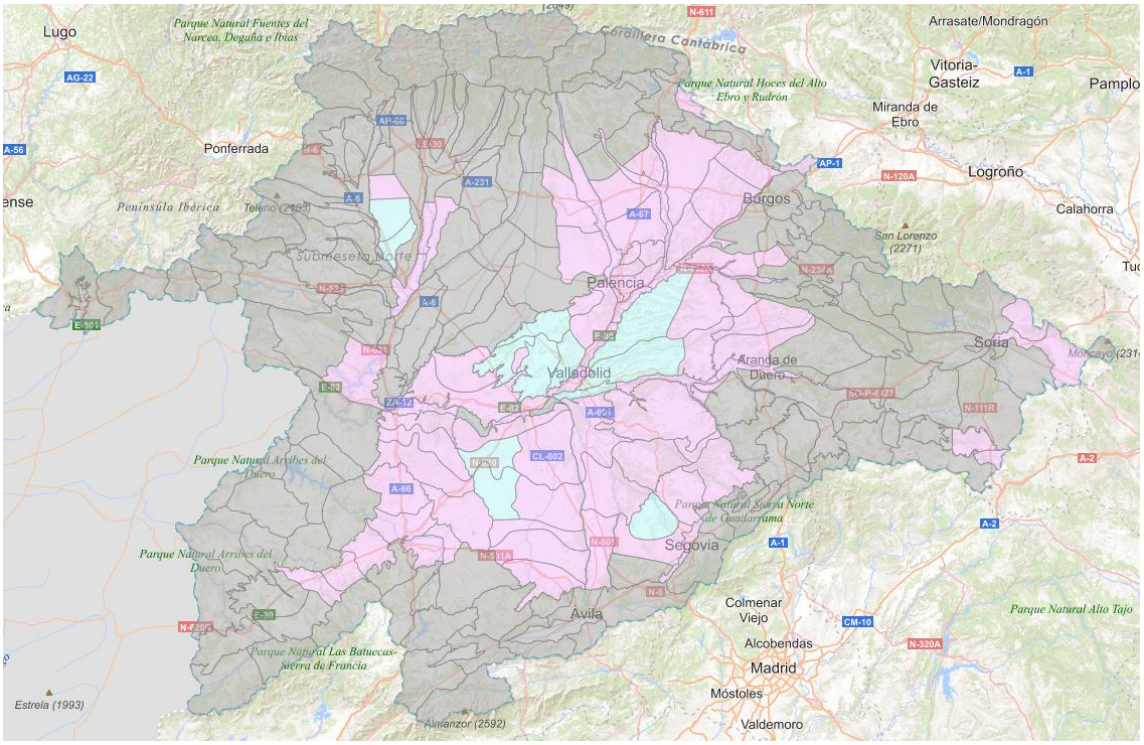
Alegación 9.

Se proponen algunas medidas en el tema importante DU-01:

- *Ajustar los límites de aplicación de nitrógeno según balance real de cada cultivo y zona (considerar coeficientes de absorción y mineralización).*
- *Priorizar el control y mejora de puntos de vertido urbano e industrial antes de imponer nuevas restricciones al abonado agrícola.*
- *Incluir líneas de ayuda específicas para:*
    - *Implantar bandas de protección voluntarias y mantenerlas.*
    - *Transición a biofertilizantes y control biológico.*
    - *Asesoramiento profesional y agricultura de precisión.*
- *Potenciar el uso de herramientas de gestión de nutrientes (cuadernos digitales, sensores de N en suelo/planta).*
- *Favorecer acuerdos de economía circular entre plantas de biogás, explotaciones ganaderas y agricultores para el uso seguro del digestato.*
- *Seguimos demandando al MITERD y a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la realización de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario mediante el estudio y muestreo significativo de parcelas de riego por gravedad, de riego modernizado y parcelas en las que ya se esté utilizando la fertirrigación para poder sacar conclusiones basadas en datos sobre la mejora que implica la tecnificación y digitalización del regadío en este apartado.*

Respuesta:

Como se indica en el EpTI y también en el Plan Hidrológico vigente, los límites del excedente de sustancias nitrogenadas se han hecho a partir de la presión identificada en forma de contenido de nitratos en las agua superficiales y subterráneas. Y esos límites se han fijado en forma de sectores territoriales, tal y como aparece en la imagen (en rosa la reducción del excedente sería del 25%, en azul la reducción del excedente sería del 80% del actual y en gris no sería necesaria esa reducción):



La traslación de la reducción de excedentes en cada sector a los cultivos presentes en el mismo, requiere un trabajo de detalle de los organismos competentes en materia agraria que pueden hacer esa distribución con criterios más técnicos que los que puede hacer el organismo de cuenca. De hecho, esta distribución de sectores tiene como fin ofrecer a la autoridad competente una información con la que realizar el análisis que solicita la alegante.

Sin duda es necesario mejorar el control de las descargas de las EDAR urbanas e industriales, sobre todo de poblaciones pequeñas. Pero como pone de manifiesto la Ficha, el análisis de origen de la contaminación difusa por técnicas isotópicas concluye que el origen de la contaminación en la mayoría de los puntos de muestreos es el agrario al encontrar en más de la mitad de las muestras nitrógeno de origen inorgánico y de residuos animales (61% de las muestras en aguas superficiales y 55% en aguas subterráneas). Por tanto, parece lógico que pongamos el objetivo en cómo reducir esos excedentes.

Coincidimos con la alegante en que bandas de protección, asesoramiento y uso de nuevos productos deben ser medidas de carácter voluntario y adecuadamente compensadas. Y pensamos que el marco financiero de la PAC es la herramienta adecuada para ello. Lógicamente para que esto sea factible es necesarios que la administración competente en esta materia tenga interés en dotar a estos servicios ecosistémicos de la financiación adecuada.

Las herramientas de gestión de nutrientes ya son obligatorias a partir de la entrada en vigor del Real Decreto de nutrición sostenible de los suelos, por lo que esperamos que esta medida contribuya a la reducción de la contaminación cuando tenga el suficiente recorrido, ya que no será inmediato. El seguimiento de la contaminación en las redes de control de agua nos dará información sobre su eficacia.

El uso del digestato procedentes de plantas de biogas alimentadas con purines animales en lugar de la aplicación directa al suelo puede ser una mejora en la reducción de la contaminación siempre que haya transparencia en la aplicación, distribución y seguimiento y no supongan una mayor aportación de

nutrientes al suelo. De hecho, la Ficha DU-01 señala que, para *el caso concreto de Castilla y León, que supone el 98,26 % de la demarcación del Duero, para el año 2021, 61.186 tn de nitrógeno de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 359.013 tn de N. Si se eliminase totalmente el desecho ganadero mediante plantas de biogás y no se sustituyese la fertilización orgánica en cultivos por inorgánica, se reduciría en un 17% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso del 50% de los excedentes de nitrógeno.*

Para el caso del fósforo y Castilla y León, para el año 2021, 13.736 tn de P de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 58.261 tn de P. En este caso, la eliminación del desecho ganadero mediante plantas de biogás supondría que se reduciría en un 23% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso superior al 50% de los excedentes de fósforo.

La eliminación de la fertilización orgánica mediante revalorización y transformación en biogás de la deyección ganadera, sin sustitución por fertilización inorgánica, permitiría cumplir los objetivos de la UE de reducir un 20% el uso de fertilizantes y reducir un 50% los excedentes antes de 2030.

Respecto a la demanda de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario bajo distintos sistemas de regadío, consideramos que es un trabajo que no está hecho pero que no corresponde al MITERD al haber un ministerio y unas consejerías autonómicas competentes en materia agraria.

Alegación 10.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Estando de acuerdo en que debe buscarse en todo momento un aprovechamiento sostenible del recurso que mantenga las masas de agua, ya que esta es la forma de garantizar la seguridad de las explotaciones agrícolas, se deben fijar uno objetivos a alcanzar con unos valores definidos y razonables que garanticen la actividad económica que se viene desarrollando. Considerar la serie histórica de la piezometría de la masa como dato de partida a la hora de determinar las acciones a realizar supone definir un objetivo a alcanzar erróneo, enmascarar la realidad actual de la masa y no otorgar a las medidas que el usuario está llevando a cabo (digitalización, control de las extracciones, gestión por parte de las comunidades de usuarios, etc) la importancia que tienen. [..]

De la misma forma que se tiene un control sobre el uso del recurso, creemos necesario que se hagan estudios hidrogeológicos de detalle en los que, de forma pública y accesible a todos los interesados, se analice la situación real en estas masas de agua de las aportaciones al acuífero y su tasa de renovación […].

La mitigación de los efectos del cambio climático que se plantean sobre las masas de agua subterránea, se debe plantear, no desde la restricción de las extracciones, sino desde el control de las mismas y la ejecución de una serie de infraestructuras de reserva o acumulación que de forma progresiva permitan la sustitución de bombeos y otorguen garantía a la actividad económica en situaciones de escasez sin revertir la dinámica natural del acuífero.

Respecto a las alternativas que se plantean en el documento, estamos totalmente en desacuerdo con el núcleo central de todas ellas: el mantenimiento de las medidas normativas del plan hidrológico vigente para el nuevo ciclo de planificación, sobre todo en lo que se refiere a los artículos 33. [..]

Respuesta:

Los objetivos para las masas de agua subterránea son alcanzar el buen estado y evitar el deterioro, tal y como establece el artículo 4 de la Directiva marco de al Agua y el artículo 40 del TRLA. Ese buen estado para el objeto de la ficha DU-02 es que las extracciones no superen a los recursos naturales, simplificando. Este objetivo además redunda en beneficio de los usuarios del agua ya que el buen estado contribuye a un aumento de los niveles piezométricos que suponen menos costes de bombeo. Por tanto, el objetivo es claro. Y ante posibles colisiones de este buen estado con los usos, la propia directiva en su artículo 4(5) señala cuáles son los requisitos que deben verificarse:

a) que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende el uso del agua no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor que no suponga un coste desproporcionado;

b) que la administración proponente (en este caso la comunidad autónoma) garantice para las aguas superficiales, el mejor estado ecológico y estado químico posibles teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación,

c) que la administración proponente para las aguas subterráneas garantice los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación;

d) que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.

Tal y como se plantea la alegación no queda claro si estos criterios se garantizan.

Conocer la realidad de las reservas subterráneas de agua es un aspecto clave en la adecuada gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Para ello el seguimiento de los casi 500 piezómetros de la cuenca ofrece una información muy valiosa. Gracias a esta información se concluye que en la actualidad la explotación del agua supone que en las masas de agua en mal estado cuantitativo se extrae entre un 10 y un 14% más de lo que se recarga anualmente por medios naturales, es decir, sacamos algo más agua de la que la naturaleza es capaz de reponer.

Como consecuencia los niveles del agua subterránea descienden ligeramente, incrementando los costes de producción del sector agrícola y poniendo en serio peligro la supervivencia del modelo socioeconómico actual y del entramado ecológico de la zona. Todo esto sin olvidar que, en las dos últimas décadas del siglo pasado, estas masas sufrieron un descenso generalizado en sus niveles de agua de unos 30 metros, situación que ha repercutido en la merma de caudales en los ríos que se asientan sobre estas masas.

Por todo ello la Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto en marcha estudios en colaboración con distintos organismos como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Dirección General del Agua (DGA), para seguir mejorando en el conocimiento del estado actual de la masas de agua subterránea y proponer medidas que permitan la recuperación paulatina de las mismas, gracias al ahorro de agua con una correcta gestión agrícola y con medidas de recarga artificial, sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales, done sea posible, se mencionan este tipo de actuaciones

porque están implantadas en algunas zonas de estas masas con resultados esperanzadores. De todas formas, en la ficha ya se proponen actuaciones de este tipo y otras. Toda esta información se vuelca en los planes hidrológicos, cada seis años, y en los informes de seguimiento cada año; además los datos de piezometría y calidad de las aguas subterráneas, así como los balances están disponibles en la base documental Mírame-IDEDuero que se puede consultar por cualquier ciudadano en la web de la Confederación (https://mirame.chduero.es/chduero/public/home).

No podemos compartir la petición de la alegante de eliminar todas las restricciones y limitaciones sobre las masas de agua en mal estado cuantitativo y, como alternativa, no poner ningún límite a nuevos usos del agua ya que, de aceptarlo, supondría no solo no alcanzar el buen estado sino también contribuir al deterioro adicional y, de forma añadida, perjudicar a los usuarios que ahora disponen de derecho vigente y que esperan la protección administrativa de su derecho.

Alegación 11.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Para la configuración del nuevo plan hidrológico se propone:

1.- La derogación de los artículos 33 y 34 de la actual normativa del plan hidrológico vigente y la reformulación de aquellos artículos relacionados para permitir la novación de todos los derechos inscritos que estén en explotación.

2.- Permitir la explotación de los aprovechamientos otorgados (incluso el otorgamiento de otros nuevos) dentro de aquellos espacios naturales o zonas protegidas conforme lo establezca la autoridad ambiental y con las características que documento de gestión correspondiente determine.

3.- Ejecución de aquellas infraestructuras que permitan la recarga de las masas de agua o la diminución de la presión sobre las mismas y estudios de detalle de determinadas zonas con mayores dificultades con la finalidad de dar soluciones que permitan mantener la actividad económica que se viene desarrollando.

4.- Control de las extracciones en toda la cuenca en la misma medida y con la misma intensidad que se exige a las CUAS.

5.- Revisión de las dotaciones brutas comarcales, su asignación y su configuración.

6.- Incentivar económicamente al usuario en la adopción de medidas e instrumentos tendentes a la mejora en el control de las extracciones o programas de digitalización que participen en el conocimiento y caracterización de la masa de agua.

7.- Establecer mecanismos de transferencia del conocimiento generado a nivel técnico y científico como programas de formación del usuario, plataformas de asesoramiento o redes de información, y establecer algún órgano que permita la participación del usuario de aguas subterráneas en la toma de decisiones que afectan a la cuenca.

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación anterior, los artículos 33 y 34 constituyen un régimen que permite alcanzar el buen estado de las masas de agua y evitar el deterioro. De una forma

u otra, estos criterios se vienen aplicando en la demarcación hidrográfica desde 2010 y son parte de la explicación de que la tendencia descendente de la piezometría identificada en los años 1980 a 2008, se haya suavizado e incluso estabilizado.

En cuanto a lo que manifiesta el alegante de la prohibición de aprovechamientos otorgados, hasta la fecha no se ha prohibido su uso siempre que se ajusten a la legalidad. El otorgamiento de nuevos aprovechamientos en masas de agua en mal estado cuantitativo, entendemos que no contribuye en absoluto a una mejora de la situación, ni se ajusta a un uso racional, que asegure el futuro del regadío en dichas masas, sería como incentivar la vuelta a la situación de los años 80 y 90 del siglo pasado, con descensos del nivel piezométrico de 2 y 3 metros por año.

La recarga artificial de acuíferos es una práctica que se lleva haciendo es esta cuenca desde hace más de 20 años, las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 la Confederación encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos, teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, como aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, nos parece una alternativa a tener en cuenta para el fin que propone el alegante, por lo que ya se contempla como medida en la alternativa 3 del EpTI, a la espera de que la autoridad competente pueda validarla y asumirla teniendo en cuenta todos los condicionantes: ubicación de estas infraestructuras, su proximidad a cauces con recurso suficiente, los costes de las obras, su financiación, y los costes de explotación y energía, pues la mayoría han de llenarse con bombeos,…; en definitiva muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

La instalación de contadores para el control de las extracciones de agua está regulada según La normativa española que obliga a todos los aprovechamientos de aguas a disponer de sistemas de medición de caudales, según el TRLA (art. 55.4) y el Reglamento del DPH. Esta obligación se ha reforzado con la Orden TED/1191/2024, que impone contadores homologados y control electrónico con envío de datos. Los equipos deben cumplir normativa metrológica y adaptarse al tipo de captación. Como se ha explicado en diversos foros, esta Orden, así como la que ha sustituido de 2009, permiten que más del 80% de la demanda de agua de la cuenca pase por sistemas de control. Evidentemente los contadores de la categoría 1ª, que suponen poco volumen a escala de cuenca (menos del 20%) pero número muy alto, van progresivamente instalándose y remitiendo información.

Las dotaciones brutas máximas anuales aplicables en los cultivos por comarcas agrarias, que figuran en el Plan Hidrológico, están basadas en datos obtenidos de publicaciones de organismos públicos como son las distintas Consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, del Ministerio de Agricultura, y antes de su aprobación se someten a información pública, como todo el contenido del Plan Hidrológico. En el Anejo 5 del Plan Hidrológico vigente se explica el procedimiento para su cálculo: cálculo de la dotación neta a partir de las necesidades de los cultivos obtenidas de InfoRiego y de la distribución de los cultivos a partir de las declaraciones de la PAC de los años 2013-2019; cálculo de la

eficiencia global: calculada como el producto de las eficiencias de transporte, distribución y aplicación; cálculo de la demanda bruta como el producto de la dotación neta por la superficie asignada entre la eficiencia global. Consideramos que es una información adecuada al proceder de fuentes oficiales y no sujeta a apreciación subjetiva.

Respecto a incentivar económicamente la instalación de contadores, el artículo 3 de la Orden TED/1191/2024 es muy clara al respecto al señalar que, en *todos los aprovechamientos de aguas, **los titulares están obligados a instalar y mantener un sistema de control volumétrico** que permita la medición de los volúmenes de agua captados, junto con un sistema de registro y almacenamiento.*

La Confederación no tiene competencias en materia de difusión y transferencia de tecnología. Normalmente da cuenta de los trabajos que realizad en el ámbito del dominio público hidráulico, seguridad y gestión de infraestructuras y planificación hidrológica en los foros ordinarios que otros agentes organizan: congresos de seguridad de presas, congresos de comunidades de regantes, jornadas de restauración de ríos, … Por otra parte, en el ámbito de las CUAs, anualmente se celebran reuniones técnicas de la Confederación con sus presidentes para aclarar conceptos y fomentar las buenas prácticas. Lógicamente no se invita a esas sesiones a las comunidades de regantes de aguas superficiales como la alegante que ya tiene su ámbito de representación en la Junta de Explotación Pisuerga-Bajo Duero.

Los usuarios del agua participan en la gestión de la cuenca a través de los órganos que están establecidos normativamente. Así el artículo 26 del TRLA identifica como órganos de gestión, en régimen de participación, las Juntas de Explotación. Su finalidad es coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las masas de agua cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Este es el marco en que los usuarios de aguas subterráneas pueden participar; de hecho, en la alternativa 1 de este tema importantes se establece como una de las medidas que podrían ponerse en marcha.

Alegación 12.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Ya hemos dejado claro en la introducción cuál es la situación demográfica y económica de nuestras zonas rurales, por lo que cualquier medida que se aplique en mejorar los problemas contenidos en la ficha no debe empeorar la situación descrita. Si se mantiene la consecución de ese objetivo, no nos oponemos a que se puedan adoptar medidas que puedan mejorar la conectividad fluvial (longitudinal, lateral y vertical) que mejore el funcionamiento de los ecosistemas.

Del análisis de la ficha parece desprenderse una apuesta prioritaria por modelos intensivos de naturalización fluvial, basados en esquemas de restauración ecológica donde el cauce aparece acompañado por bosque de galería y bandas de vegetación herbácea en ambas márgenes, favoreciendo así la conectividad longitudinal y transversal de los flujos hídricos y sedimentarios [..] dicho enfoque puede resultar excesivamente homogéneo si no se tienen suficientemente en cuenta las particularidades geomorfológicas, históricas y territoriales de numerosos cauces [..]. Existen determinados tramos del Dominio Público Hidráulico que, en realidad, constituyen cauces profundamente transformados por la acción humana a lo largo de siglos, especialmente sobre antiguas llanuras lacustres o cuencas endorreicas sedimentarias desarrolladas durante el Pleistoceno.

En numerosos casos, los cauces actuales responden a procesos históricos de excavación y drenaje artificial desarrollados con el objetivo de desecar zonas inundables o lagunares y aprovechar agronómicamente las fértiles vegas originadas por procesos de colmatación sedimentaria. [..]. Por ello, en determinados sistemas hidrológicos altamente antropizados, la recuperación de modelos teóricos de naturalización podría requerir alteraciones territoriales de enorme magnitud, incompatibles en muchos casos con la realidad física actual, con los usos consolidados existentes y con los derechos legítimamente adquiridos sobre los terrenos adyacentes.

Asimismo, debe tenerse presente que sobre los terrenos colindantes con los cauces concurren frecuentemente derechos consolidados, singularmente derechos de propiedad privada, cuya eventual afección exigiría las correspondientes compensaciones y una adecuada justificación basada en criterios de proporcionalidad.

Respuesta:

Se agradece el comentario sobre la buena disposición para la mejora de los ecosistemas fluviales.

La normativa actual apuesta por una restauración fluvial que lleve a los ríos, lagos y humedales a una situación lo más similar a su situación original previa a la intervención humana. Esto permite crear entornos más resilientes a la contaminación y más seguros ante eventos extremos como inundaciones, entre otros, con las consiguientes ventajas para los seres humanos. Por situación original no se entiende una situación uniforme, sino adaptada a cada tipo de río. A modo de ejemplo, aquellos ríos con hidrología extrema no tienen asociado un bosque de ribera ya que periódicamente las avenidas lo arrastran, permitiendo únicamente la presencia de individuos jóvenes. Para estos ríos la existencia de una gran presencia de bosque de galería es síntoma de alteración del régimen hídrico, lo cual suele ocurrir, por ejemplo, aguas debajo de los embalses.

Si bien la alteración de los cauces se lleva haciendo desde antiguo, ha sido en el siglo XX donde se han producido las grandes actuaciones de drenaje y encorsetamiento del río. Las imágenes del vuelo americano del 56 así lo ponen de manifiesto, ya que muestran un grado de naturalidad de los cauces muy distinto al actual.

De acuerdo con la normativa y los documentos técnicos de planificación, una masa de agua superficial se puede designar como muy modificada (HMWB, por sus siglas en inglés) cuando, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza. Este "cambio sustancial" se entiende como una modificación de sus características hidromorfológicas que impide que la masa alcance el buen estado ecológico. Esto debe analizarse minuciosamente mediante distintas revisiones tasadas en la normativa, y así se ha hecho en los sucesivos planes hidrológicos. En el último, a modo de ejemplo, se han designado 186 masas de agua río muy modificados y se van a volver a revisar en este ciclo de planificación.

Cabe mencionar también que la propiedad privada no puede prevalecer sobre terrenos que, por sus características geofísicas, forman parte del cauce natural. La propiedad privada en zonas colindantes a ríos no es absoluta; está intrínsecamente limitada por la ley para garantizar la seguridad pública y la protección ambiental, como pone de manifiesto el tenor de los artículos 6 y 9 del RDPH, entre otros. La jurisprudencia del Tribunal Supremo avala que la Administración proteja el DPH sin indemnizaciones

automáticas, ya que actuar sobre el cauce natural es una obligación legal para alcanzar el buen estado de las aguas, objetivo que constituye un interés público superior.

Alegación 13.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Parece razonable admitir la posibilidad de actuaciones de gestión activa y mantenimiento de la vegetación de ribera, aplicando criterios técnicos y silvícolas semejantes a los utilizados en otras masas forestales, especialmente cuando dichas actuaciones resulten necesarias por motivos hidráulicos, de seguridad, sanitarios o de conservación. […]

Se considera necesario que el instrumento de planificación hidrológica contemple la posibilidad de autorizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales, teniendo en cuenta sus características geomorfológicas, los usos preexistentes y los intereses legítimos concurrentes. […].

Especial atención merece la proliferación del carrizal y otras especies invasoras o expansivas, cuyo desarrollo puede reducir significativamente la capacidad hidráulica de desagüe y alterar el equilibrio ecológico de determinados tramos fluviales. Por ello, se considera conveniente que el futuro instrumento de planificación contemple expresamente medidas de control y gestión activa de este tipo de formaciones vegetales cuando existan razones hidráulicas, ambientales o de seguridad que así lo aconsejen.

Respuesta:

Los criterios técnicos y silvícolas utilizados en otras masas forestales no tienen por qué se similares a los que aplican a la vegetación de ribera, al ser el río un elemento diferenciador en su creación y modelado. Las mejores actuaciones para la mejora de las condiciones hidráulicas, de seguridad, sanitarias o de conservación, son las de restauración del río a su situación original, en la que su configuración, trazado, brazos secundarios y llanura de inundación permitan la laminación de avenidas o el filtrado de nutrientes y otras sustancias nocivas para la salud.

Se está de acuerdo en realizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales. Así se hace, de hecho. No se abunda más ante la generalidad del comentario.

Independientemente de que en alguna circunstancia puedan aplicarse medidas de control activo de especies invasoras, se debe recordar que la restauración de la conectividad longitudinal y lateral, junto con la recuperación de la morfología natural del cauce, permite que el ecosistema funcione mediante mecanismos de control natural frente a especies invasoras. Un río con un hábitat naturalizado favorece el mantenimiento de las comunidades biológicas autóctonas, dificultando que las especies invasoras desplacen a los endemismos locales. La alteración del régimen natural de los ríos y la creación de aguas estancadas (paso de régimen lótico a léntico) son precisamente los factores que facilitan la proliferación de especies exóticas.

Alegación 14.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Respecto a las obras de cruce aéreo o subterráneo de infraestructuras sobre cauces públicos, se considera necesario que el nuevo Plan Hidrológico otorgue un mayor peso a los criterios técnicos e hidráulicos en la evaluación de las actuaciones proyectadas, evitando que el condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada. […]

En relación con las autorizaciones de obras en el Dominio Público Hidráulico, se considera igualmente conveniente admitir la aplicación del criterio de escala para el cálculo hidrológico de avenidas mediante el Método Racional Simplificado, así como permitir simulaciones hidráulicas basadas en levantamientos topográficos específicos realizados para cada actuación.

Finalmente, se considera de gran interés que la Confederación Hidrográfica del Duero establezca, de forma previa y suficientemente clara, criterios técnicos orientativos para la tramitación de autorizaciones relativas a puentes, pasarelas y otras obras sobre cauces.

Respuesta:

Los condicionantes ambientales son un requisito que establece la normativa actual. No se la idea por la que el "condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada" en las actuaciones en cauce.

El uso del método racional simplificado para cálculos hidráulicos en la planificación se incluye en el Anexo XI del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Se remite a esta norma y no al plan hidrológico el resto de observaciones presentadas sobre autorizaciones de obras en cauce.

Alegación 15.

DU-05 Gestión del riesgo de inundación

Se considera razonable que el instrumento de planificación permita incorporar estudios hidrológicos e hidráulicos de mayor detalle, sustentados en levantamientos topográficos específicos, modelizaciones bidimensionales, campañas de campo y análisis hidráulicos adaptados a las características concretas de cada emplazamiento.

Este criterio de mayor precisión técnica debería poder extenderse también a la determinación de caudales de avenida, permitiendo ajustar los cálculos hidrológicos a las características reales de cada cuenca vertiente y evitando la aplicación automática de metodologías generales cuando existan estudios específicos suficientemente justificados

Demandamos que cualquier actuación que se plantee, no cause perjuicio a la actividad económica implantada en el territorio.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, y sin perjuicio de lo ya señalado en este documento acerca del alcance propio del ETI, procede indicar que las cuestiones planteadas presentan indudable relevancia desde la perspectiva del adecuado diagnóstico del riesgo y peligrosidad de las inundaciones. No

obstante, será en fase de redacción del PGRI cuando se revisen los modelos hidráulicos para establecer las medidas adecuadas para reducir el riesgo de las inundaciones.

Las modelizaciones hidráulicas e hidrológicas están en constante actualización y singularmente en las tres fases de elaboración de los de PGRI: fase de evaluación preliminar del riesgo, fase de elaboración de los mapas de peligrosidad y fase de plan de gestión del riesgo. La cartografía de peligrosidad del SNCZI simula escenarios estadísticos de eventos extraordinarios, como son las avenidas de media y baja probabilidad (100 y 500 años de periodo de retorno). El SNCZI exige que las simulaciones hidráulicas para delimitar el riesgo se realicen sobre la base del terreno en condiciones actuales ofrecidas por el modelo digital del terreno (MDT), manteniendo infraestructuras como azudes y puentes tal y como existen hoy. Ese MDT se obtiene por tecnologías suficientemente maduras que, con la previa revisión a su aplicación, ofrecen una información exacta y muy adecuada para el objetivo final.

Las medidas que el PGRI establezca tratarán de limitar los perjuicios a las actividades actuales; no obstante puede darse el caso de que haya actividades ubicadas en zonas inundables que cuenten con autorizaciones previas a la entrada en vigor del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y de los artículo 9 y 14 del RDPH; para ellas será muy difícil que cualquier medida que se establezca en el PGRI no entrañe perjuicio que, por otra parte, ya le causa la propia ubicación.

Alegación 16.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Las Comunidades de Regantes consideran positivo que el EPTI reconozca la relevancia estratégica del regadío en la cuenca del Duero […].

En su planteamiento identifican el problema principal que supone la escasa o nula regulación artificial en sistemas como el Carrión, el Órbigo, el subsistema Tuerto o el Cega. No obstante, el documento presenta un enfoque excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales, sin incorporar adecuadamente la dimensión económica, social y territorial del regadío.

No se puede achacar la reducción de aportaciones principalmente a los efectos del cambio climático. No podemos establecer un horizonte de cambio climático referido al año 2045, que resulta poco fiable.

Respuesta:

Los planes hidrológicos tienen que cumplir dos objetivos principales que generalmente entran en conflicto: por un lado, conseguir el buen estado o el buen potencial de todas las masas de agua y, por otro, satisfacer las demandas cumpliendo los criterios de garantía. En otras palabras, se trata de hacer un uso sostenible del recurso, equilibrando la protección de los ecosistemas relacionados con el medio hídrico con la satisfacción de las demandas. En el estudio de alternativas de las fichas DU-06 y DU-07 del EpTI, analizamos medidas que disminuyen la presión por extracción de agua (uso más eficiente del agua por modernizaciones) y medidas de mayor disponibilidad de recurso (aumento de regulación). Por este motivo, pensamos que el enfoque del EpTI no está excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales.

Efectivamente en el EpTI se reconoce la relevancia estratégica del regadío y creemos que su dimensión económica, social y territorial está debidamente incorporada.

Estamos de acuerdo en que la reducción de aportaciones no es debida solamente a los efectos del cambio climático. Probablemente también existe reducción de aportaciones por los cambios en los usos de suelo, pero no tenemos información suficiente que nos permita evaluar la magnitud de esta reducción.

El establecimiento de un horizonte de cambio climático en el que se modelan demandas futuras y recursos naturales afectados por cambio climático para calcular sus balances es un requisito de la legislación (Reglamento de Planificación Hidrológico, art.11.4 y art. 21.4). En los planes de 4º ciclo el horizonte de cambio climático corresponde al año 2045 pues se incrementa en 6 años el del plan vigente, que era 2039.

Alegación 17.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Resulta incuestionable que las modernizaciones llevan implícita una reducción del uso del agua, por lo que no se deben añadir mayores presiones sobre el uso del agua. Las inversiones llevadas a cabo también por los propios agricultores están siendo muy importantes, además de la recuperación de costes que vía tarifas de utilización del agua ya contribuyen.

La modernización no debe utilizarse como instrumento indirecto de reducción de concesiones ni de actividad agraria, sino como herramienta de mejora de eficiencia, productividad y sostenibilidad.

En general, se demanda que las mejoras de eficiencia y modernización permitan atender más demandas y generar mayor valor económico y social con el mismo volumen global de agua, sin incrementar necesariamente la presión neta sobre los recursos hídricos. La eficiencia debe medirse no solo por reducción de consumos, sino también por productividad, generación de empleo, estabilidad territorial y capacidad de adaptación climática.

Respuesta:

En relación con las consideraciones formuladas, el EpTI contempla la modernización de regadíos como una medida prioritaria de adaptación orientada a mejorar la eficiencia en el uso del agua, la garantía de suministro y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias existentes. En este sentido, se reconoce el esfuerzo inversor realizado por el sector, así como su contribución a una gestión más racional del recurso y a la recuperación de costes del sistema.

No obstante, debe precisarse que la mejora de la eficiencia no implica, por sí misma, una reducción automática de los volúmenes concesionales ni constituye un instrumento indirecto de minoración de la actividad agraria, sino que su tratamiento en la planificación hidrológica responde a un análisis caso por caso. Así, los eventuales ahorros derivados de la modernización no se someten a penalizaciones automáticas, pero tampoco pueden destinarse de manera generalizada a la generación de nuevas demandas si ello implica un incremento neto de la presión sobre las masas de agua.

En coherencia con ello, el EpTI establece que dichos ahorros deben contribuir, prioritariamente, a consolidar la sostenibilidad del uso existente y a evitar incrementos de presión que puedan

comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales o el equilibrio del sistema hídrico. Solo en aquellos supuestos en los que exista disponibilidad efectiva del recurso y se acredite la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de las actuaciones, podrán considerarse desarrollos adicionales, siempre de forma compatible con la consecución del buen estado de las masas de agua y el mantenimiento de los caudales ecológicos.

Finalmente, si bien se comparte que la eficiencia puede valorarse desde una perspectiva amplia —incluyendo aspectos como la productividad, la generación de valor económico o la resiliencia territorial—, en el ámbito de la planificación hidrológica dicha eficiencia debe necesariamente integrarse con el principio de sostenibilidad ambiental, lo que exige que cualquier mejora en el uso del recurso no se traduzca en un aumento de las presiones que comprometa los objetivos establecidos por la normativa vigente.

Alegación 18.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Si bien el plan hidrológico en vigor descartó el incremento de nuevos regadíos, sí es posible esa ampliación en sistemas concretos con cultivos con un uso muy reducido del recurso, como por ejemplo en el sistema Riaza-Duratón y otros sistemas, donde sí es posible ampliación de superficie de riego con el mismo volumen de agua ahora establecido.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, cabe señalar que, si bien el vigente plan hidrológico estableció, con carácter general, la no previsión de nuevos desarrollos de regadío, el Esquema de Temas Importantes (ETI) contempla que determinadas situaciones específicas puedan ser objeto de análisis individualizado, particularmente en aquellos sistemas en los que concurran circunstancias singulares desde el punto de vista de la disponibilidad y gestión del recurso y, además, las autoridades competentes (MAPA o Comunidades Autónomas) plantearon nuevos regadíos que cuentan con amparo legal. En este aspecto el organismo de cuenca no puede proponer nuevos regadíos cuya autoridad competente no avala o, siendo avalados, no cuenta con garantías suficientes o amparo legal de la planificación sectorial.

No obstante, debe precisarse que los eventuales aumentos de superficie destinada al regadío no pueden valorarse exclusivamente desde la perspectiva de un mantenimiento del volumen total de extracción, sino que han de analizarse de forma integral considerando el conjunto de presiones que la actividad agraria genera sobre las masas de agua. En particular, el incremento de superficie regable puede implicar efectos relevantes sobre el régimen hidrológico, el retorno de flujos, la calidad de las aguas, la contaminación difusa o la alteración de los caudales ecológicos, incluso en aquellos supuestos en los que el consumo unitario por hectárea sea reducido.

En este sentido, el ETI incide en la necesidad de abordar la sostenibilidad del regadío desde un enfoque global, que tenga en cuenta no solo la eficiencia en el uso del agua y el volumen derivado, sino también la evolución de las presiones significativas y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Por ello, la eventual ampliación de superficies regables —incluso en sistemas concretos como el Riaza-Duratón— debe someterse a una evaluación específica que acredite su compatibilidad

con la consecución del buen estado de las masas de agua, el mantenimiento de los caudales ecológicos y la ausencia de deterioro adicional del dominio público hidráulico.

En consecuencia, no resulta procedente establecer, con carácter general, la posibilidad de ampliar superficies de regadío bajo el único condicionante de mantener el volumen global actualmente asignado, sino que cualquier propuesta en este sentido deberá justificarse caso por caso, en el marco del proceso de planificación hidrológica y de conformidad con los principios de sostenibilidad, cautela y no deterioro que rigen la gestión del recurso.

Alegación 19.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Respecto al tema importante DU-06, la alegante valora positivamente que el EPTI reconozca la modernización del regadío como la medida esencial de adaptación al cambio climático y mejora de la garantía de suministro. De las dos alternativas que se propone como factibles (5 y 6), muestran preocupación por determinados planteamientos relacionados con:

- *Limitaciones automáticas de concesiones*
- *Restricciones indirectas de superficie regable*
- *Incremento de costes para los usuarios*
- *Traslado excesivo del esfuerzo inversor a los regantes*
- *Cierre definitivo del mapa de nuevos desarrollos de regadíos.*

Asimismo, las Comunidades de Regantes consideran imprescindible priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y con baja garantía hídrica, especialmente en zonas como Carrión, Órbigo, Tormes, Eria, Curueño o Duerna.

Igualmente, se considera necesario garantizar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas, especialmente ante el horizonte de 2035. [..]

Las actuaciones vinculadas al regadío presentan, por tanto, muy bajos niveles de ejecución, especialmente en modernización de regadíos, infraestructuras hidráulicas y regulación. Esta situación genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban.

Respuesta:

La Ficha DU-06 al elegir las alternativas 5 y 6 señala ambas alternativas permiten avanzar en medidas de modernización de regadíos que manteniendo la competitividad de las explotaciones con ligeros ajustes de las dotaciones adaptadas a la mejora que suponen las infraestructuras, permitan ampliar la superficie de regadío en la cuenca. Las comunidades de regantes en esta materia han ido modificando su posición, si es que se puede hablar de una posición común: de pasar en el plan de primero y segundo ciclo a demandar el cierre del mapa de cultivos en la demarcación hidrográfica, postulan a hora la necesidad de ampliar el regadío. Desde el punto de vista de la garantía y dadas las limitaciones reales existentes para ampliar la oferta, toda ampliación de superficie de regadío conlleva un reajuste del regadío existente, de manera que solo por la vía de la mejora de la eficiencia de puede atender a todas las demandas.

Que las concesiones deban modificarse como consecuencia de las actuaciones de mejora de la eficiencia del uso no es una exigencia del plan hidrológico sino de la propia normativa de aguas, por ejemplo, en aplicación de los artículos 65 del TRLA, al señalar que las concesiones podrán ser revisadas cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento, a petición del concesionario o cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. En concreto, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. En el primer criterio del artículo 65 para revisar una concesión se encuentra el hecho de que, por ejemplo, se esté regando más superficie (o menos) de la que ampara el título concesional, a lo que se refiere el alegante como “restricciones indirectas de superficie regable”.

En efecto, el EpTI (y el propio plan hidrológico vigente) ha dado prioridad a las actuaciones en puntos donde hay déficit estructural como Carrión y Órbigo. En la actualidad no hay déficit en el sistema Tormes. Los casos de Eria, Curueño o Duerna son nuevos en el presente ciclo de planificación hidrológica y nos parecen más un empeño de determinadas asociaciones de regantes que de los propios usuarios de estos ríos. De hecho, para el Duerna se estableció una reserva de agua en el plan hidrológico vigente para mejorar las garantías de los riegos del valle, reserva que no se ha materializado por falta de capacidad de los usuarios en agruparse de manera reglada. En el caso del Eria solo los de la parte baja del Área han promovido una CUAs con el fin de organizar mejor el uso del agua.

El EpTI no tiene capacidad para modificar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas que otorga la ley, especialmente ante el horizonte de 2035, ni puede ampliar esa seguridad ni disminuirla. Es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas. Lo que el EpTI señala es que estos derechos cuando sean en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, si éstas no alcanzan su buen estado en 2035, será muy difícil que puedan mantener su status actual, ya que en las citadas DT se indica que en todo caso, a esos aprovechamientos de aguas les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico. Por tanto, el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

Como se pone de manifiesto en la Ficha del tema importante DU-09, las actuaciones vinculadas al regadío (modernización de regadíos y nuevos regadíos) cuya autoridad competente es la administración agraria del Estado y de las comunidades autónomas, presentan un nivel de ejecución del 20 y del 27%, respectivamente; por su parte el grupo de infraestructuras hidráulicas presenta una ejecución del 13% de la inversión. Esta situación, como indica la alegante, genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban; de hecho, en el tema importante DU-09 se insiste en este aspecto llamando a la responsabilidad de las autoridades competentes para que asuman las medidas que han validado en cada ciclo de planificación hidrológica.

Alegación 20.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

En las alegaciones a la revisión del plan 2022-2027 se propuso una tabla de asignaciones máximas que creemos que debe ser revisada de acuerdo a las dotaciones que se vienen aprobando en las campañas de riego coincidentes con el período de desarrollo de dicho plan y que deberían ser las siguientes:

SISTEMA	ASIGNACIÓN MÁX
PISUERGA-BAJO DUERO	6.000
CARRIÓN	5.000
TORMES	6.000
ÓRBIGO	6.000
PORMA	6.000
ADAJA	4.900
ALTO DUERO	6.000
RIAZA	6.000
ESLA (RIAÑO)	6.000
ARLANZÓN	6.000
TUERTO	4.500
TERA	6.000
ÁGUEDA	6.000

Partiendo de esta base, el objetivo que debemos perseguir es que se adopten las medidas oportunas para que todos los sistemas de explotación estén en las mismas condiciones y cuenten con idéntica disponibilidad (que ciframos en 6.000 m^3/ha), para lo cual tendríamos que incluir en el programa de medidas las actuaciones necesarias que nos permitan situarnos en ese escenario de igualdad.

Respuesta:

La propuesta que se hace en la alegación se ha tenido en cuenta en el EpTI, singularmente en la alternativa 5, ofreciendo los resultados de esta alternativa respecto al resto. A la vez hay que decir que adoptar este criterio para las dotaciones supondría llevar a algunas de las demandas de determinados sistemas de explotación al incumplimiento generalizado de garantías, como por ejemplo Alto Duero, Adaja o Tuerto. Tampoco se explica bien en la alegación por qué motivo, siguiendo el argumento de la alegante, se debe asegurar una dotación de 4.500 m^3/ha año en el Tuerto o 4.900 m^3/ha año en Adaja, frente a 6.000 m3/ha año de muchos de los sistemas de explotación; y tampoco por qué 6.000 m^3/ha año en toda la cuenca: ¿maneja el alegante algún estudio estadístico que justifique esa dotación?; si es la dotación a la que tradicionalmente se ha tendido, ¿por qué ha de mantenerse en sistemas modernizados con elevadas eficiencias de uso del agua?; ¿se pretende, con esta propuesta, dar carta de reconocimiento a determinados agentes que afirman que la modernización de regadíos en España no contribuye a reducir las presiones sobre las masas de agua sino a incrementar la demanda y que por ello, debería anularse la financiación con fondos públicos?

Por otra parte, la propuesta no atiende al criterio agronómico de las necesidades hídricas de los cultivos de cada sistema de explotación, como se pone de manifiesto, por ejemplo, comparando la dotación del Sistema Órbigo con la del Sistema Adaja, o pensando que la demanda de un cultivo en

Soria puede ser comparable a la del mismo cultivo en Toro. La propuesta que se hace en el escrito, en un deseo de homogeneizar el suministro de agua cuando se paga lo mismo por superficie, atiende sobre todo a las reservas que existen en cada Sistema, lo que invalidaría el análisis de garantía que se establece de acuerdo con los epígrafes 3.5.1 u 3.5.2 de la IPH.

Entendemos que la demanda de la alegante obedece a que todavía se pagan cánones y tarifas no en función del consumo sino de la superficie regada, sistema que no disuade al usuario de ser eficiente. De cualquier modo, se analizará en fase de redacción del plan hidrológico la viabilidad de la propuesta, con el fin de que pueda atender a dos criterios simultáneos: la realidad agroclimática de cada zona y el hecho de que el pago de cánones y tarifas se haga por superficie regada en vez de volumen utilizado.

Alegación 21.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

1.- En primer lugar y en tanto en cuanto no se adopten las medidas que puedan mejorar la garantía de todas las UDAs, se debe mantener la vigencia del art. 15.8 del plan vigente "Dotaciones orientativas máximas en los sistemas de explotación regulados: En aplicación del artículo 55 del TRLA, el organismo de cuenca para los sistemas que cuenten con regulación, una vez consultadas las correspondientes Juntas de Explotación, fijará anualmente dotaciones orientativas máximas de agua en función de las reservas existentes y en coherencia con las propuestas sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses de la Comisión de Desembalse, a las que deberá adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Estas dotaciones podrán ir modificándose anualmente en función de las reservas realmente existentes".

2.- En relación con el apartado anterior, abogamos porque las propuestas de dotaciones elevadas por las Juntas de Explotación a la Comisión de Desembalse y aprobadas por esta última se apliquen por igual a todos los usuarios del sistema en cuestión, sean canales del Estado o regadíos concesionales, no sólo en años de sequía (donde se puede aprobar un Real Decreto-ley que lo regule), sino también en años de normalidad, para que todos los usuarios del mismo Sistema tengan a disposición idénticos caudales.

Respuesta:

Las cuestiones que se sugieren no son parte del EpTI, sino que corresponden más bien a la fase de elaboración del Plan Hidrológico, que contará con un período de consulta pública donde podrán hacerse sugerencias sobre la parte Normativa del Plan Hidrológico.

Alegación 22.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

3.- La mejora de la eficiencia del regadío mediante la modernización de sus infraestructuras y un leve incremento de la regulación son las estrategias más adecuadas. Por parte de los usuarios, también se

debe perseguir aplicar todas las medidas y prácticas agrarias que mejoren la gestión sostenible del recurso y consigan un ahorro de agua.

4.- Caudales ecológicos: su implantación y cumplimiento (casi del 100% en nuestra cuenca de acuerdo a los informes anuales presentados a la Comisión de Desembalse) contribuyen a la pérdida de garantía en la satisfacción de las demandas en las UDAs con más déficit hídrico. En este sentido, debemos de poner de manifiesto que no consideramos justificada la obligación de mantener los caudales mínimos definidos para situación de normalidad en situación de sequía prolongada en las zonas incluidas en la red Natura 2000 (LIC, ZEPA, etc) o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, tal como establece el RPH (art 18.4). La situación de sequía prolongada obedece a causas naturales y, por tanto, no se encuentra justificación para esta salvedad. Teniendo en cuenta que se trata de una prescripción de carácter reglamentario, su modificación debe plantearse en una disposición de igual o superior rango, como puede ser el Real Decreto de aprobación de los planes de cuarto ciclo. Por ello se considera de interés plantear esta modificación como medida en los programas de medidas de los planes de cuarto ciclo, con la tipología de instrumento general.

De igual modo, en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse.

Respuesta:

El diagnóstico del EpTI coincide con la primera propuesta de la alegante. No ocurre lo mismo con la segunda propuesta: el artículo 18 del RPH señala que en *caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971. En estas zonas se considerará prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, aunque se aplicará la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones.* Y el artículo 49 quáter del RDPH señala que *en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada, se exigirá el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos aguas abajo de las presas conforme a lo previsto en la disposición transitoria quinta y cuando la disponibilidad natural lo permita. A tal efecto, el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse. No obstante, el régimen de caudales ecológicos será exigible, siempre y en todo caso, cuando exista una legislación prevalente como la aplicable en Red Natura o en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de acuerdo de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, en la que se establece la prevalencia del caudal ecológico frente al uso*. Por ello la propuesta de la alegante contradice ambas disposiciones, por lo que no es posible atenderla.

Alegación 23.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

5.- Revisión del Convenio de Albufeira: […], volvemos a reivindicar las propuestas planteadas en el escrito dirigido a la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en septiembre de 2022, motivado por el conflicto suscitado por la suelta de agua de embalses de regadío para poder cumplir con los compromisos reflejados en el Convenio de Albufeira. Seguimos demandando una reducción de la aportación semanal, trimestral y anual en los diferentes puntos de control, así como subir el umbral de precipitación al 70% sobre la media interanual, para que si en períodos de sequía prolongada la precipitación bajase de ese umbral, podamos entrar en excepción.

Respuesta:

Es importante resaltar que el convenio de Albufeira es un tratado internacional establecido entre dos países, España y Portugal, con la finalidad de dar coherencia y continuidad a tratados anteriores en lo que se ha buscado a lo largo de los siglos limitar los conflictos fronterizos entre ambos países.

Como se indica en la Ficha DU-09, entre las decisiones a tomar en relación con el Convenio de Albufeira, se encuentra analizar las divergencias entre las planificaciones española y portuguesa para ofrecer soluciones conjuntas a las masas de agua compartidas y los indicadores de sequía y escasez de ambos países para tratar de integrar ambos diagnósticos en uno. Esta última decisión viene avalada por los memoranda de entendimiento entre España y Portugal de las cumbres hispano-lusa de 2023, 2024 y 2026, en las que ya se está trabajando por ambos países. Más allá de esa voluntad de mejorar el diagnóstico de los criterios de excepción, y armonizar los indicadores de sequía y escasez, corresponde a otras instancias promover los cambios del Convenio que considere oportunos.

Alegación 24.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Infraestructuras

Para conseguir la sostenibilidad del regadío reflejada en la ficha anterior, las Comunidades de Regantes solicitan que, de manera genérica el futuro Plan Hidrológico incorpore las siguientes medidas:

- *Incrementar las inversiones públicas en modernización y digitalización*
- *Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.*
- *Priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y zonas vulnerables*
- *Impulsar balsas laterales y actuaciones de regulación complementaria*
- *Dotar presupuestariamente las actuaciones del plan*
- *Mejorar infraestructuras hidráulicas y redes en alta*
- *Favorecer el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas*
- *Flexibilizar tarifas energéticas adaptadas a la estacionalidad del riego*
- *Mantener la seguridad jurídica concesional*
- *Establecer programas reales y ejecutables con financiación suficiente*

- *Realizar limpiezas periódicas de cauces y desagües como medida de seguridad y bienestar para la población rural.*

Respuesta:

Entre las propuestas heterogéneas que hace la alegación, algunas caen fuera de la competencia del agua (tramitación ambiental, tarifas energéticas); otras están incorporadas a las Fichas del EpTI (incrementar inversiones en modernización en la Ficha DU-06, centrarse en actuaciones en sistemas deficitarios en la Ficha DU-07, impulsar sustitución de bombeos con aguas subterránea en la Ficha DU-02, fomentar utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas en la Ficha DU-06, modernizar infraestructuras de riego en alta en Ficha DU-07). Respecto a la seguridad jurídica concesional, como se ha dicho en la respuesta a la alegación 19, es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas; el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

En la Ficha DU-09 se aborda el tema importante de la financiación del Programa de medidas. El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Estas autoridades deben dar la conformidad al programa de medidas para lo cual, cada una internamente, habrá debatido la capacidad y conveniencia de asumir cada medida. Por tanto, los mecanismos formales para asegurar la ejecución del Programa de medidas existen y desde el ámbito de la planificación hidrológica sólo se puede recalcar que estos mecanismos no deben ser simplemente formales sino también reales. La propia Ficha DU-09 describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social.

Sin duda la mejora de las condiciones hidrológicas de cauces es una tarea de gran peso en la cuenca a la que el Organismo de cuenca dedica anualmente entre 4 y 6 millones de euros, posiblemente escasos para las necesidades crecientes, a labores de mantenimiento de cauces. El Programa de medidas del plan hidrológico vigente incluye un paquete de medidas de este tipo. Pero evidentemente no puede llegar a atender eficazmente a los más de 80.000 kilómetros de ríos y arroyos de la cuenca y actúa con criterios de conveniencia y racionalidad económica. Para paliar esta desproporción entre necesidades y posibilidades reales, tanto en el Plan vigente de 2023 como en el anterior de 2016, se incluyó un

procedimiento más ágil para acometer determinadas labores de mejora de las condiciones de desagüe de los cauces. Así en el artículo 30 de la Normativa se establece el sistema de declaración responsable para las denominadas *actuaciones menores de conservación de cauces y zonas de policía*. El mismo artículo hace un elenco de las que pueden considerarse actuaciones menores:

I. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera.

II. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce.

III. Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del dominio público hidráulico.

IV. Retirada de sedimentos y vegetación existente en el lecho del cauce, situados 50 metros aguas arriba y aguas abajo de las obras de fábrica y puentes con el fin de conservar su capacidad de drenaje.

V. Pequeñas actuaciones de mantenimiento de puentes e infraestructuras situadas sobre el cauce, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas no haya ocupación del dominio público hidráulico ni quede afectada su capacidad de desagüe.

VI. Mantenimiento de las secciones de estaciones de aforo.

VII. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos.

VIII. Cortas de arbolado bajo líneas eléctricas.

Para todas estas actuaciones la declaración responsable habilita el poder actuar por los particulares sin esperar a ninguna Resolución de la CHD, lo que agiliza notablemente la actuación.

Alegación 25.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Modernizaciones a ejecutar

Si tenemos en cuenta el período restante del plan vigente y el horizonte temporal de la revisión relativa al período 2028-2033, deberíamos modernizar los regadíos pendientes cuya modernización ya está aprobada y que son los siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES	IMPORTE ESTIMADO CONVENIO MAPA-SEIASA (€ sin IVA)
PEPAC CYL y otros planes	
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)	30.000.000
Canal de Ines-Eza Fase II (Soria)	7.000.000
Canal del Esla (León)	150.000.000
Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta (Palencia)	160.000.000
Bajo Tuerto – Sindicato Central Embalse Villameca (León)	25.000.000
Castañón, Cerrajera y Regueras (León)	65.000.000
Canal de la Retención (Palencia)	47.000.000
Canal de Villalaco (Palencia)	54.000.000

NUEVAS ACTUACIONES	IMPORTE ESTIMADO CONVENIO MAPA-SEIASA (€ sin IVA)
Canal de Manganeses (Zamora)	40.000.000
Margen Derecha del Tera (Zamora)	100.000.000
San Salvador - Valverde de Ágreda (Soria)	15.000.000
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)	40.000.000
Alija del Infantado (León)	15.000.000
TOTAL (€ sin IVA)	**748.000.000 €**

Para poder conseguir este objetivo tienen que ser tenidas en cuenta dos reivindicaciones que trasladamos al Gobierno de España:

1.- Aumentar el capital social de la SEIASA a la cantidad de 300 M€ anuales por cada uno de los años de duración del plan.

2.- Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.

Respuesta:

La alegación aporta dos cuestiones muy relevantes para impulsar las medidas del vigente Plan Hidrológico. Estando de acuerdo con la segunda (simplificación y agilidad en los trámites de evaluación ambiental de los proyectos de modernización del regadío) la realidad es que las modificaciones legales llevadas a cabo recientemente no van en esa línea; así la modificación de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, más reciente (de 6 de noviembre de 2025) reduce los límites de superficie de modernización de regadío para que la evaluación ambiental sea ordinaria. Esto parece indicar que por parte del legislador hay una sospecha de que los proyectos de modernización podrían suponer presiones adicionales sobre el medio ambiente, quizá debido a determinados proyectos ya ejecutados que no han sido todo lo respetuosos que cabría esperar. Por ello la norma legal es la que es y, en tanto no se modifique, debemos atenernos a ella, no siendo el EpTI competente para su modificación.

La Ficha DU-06 incide en la primera parte de la alegación al apostar por una mayor intensidad de la modernización del regadío que, lógicamente pasa por la adecuada financiación que debe validar e impulsar la autoridad competente con tutela sobre la SEIASA.

Recordamos que no todas las zonas regables que se citan en la alegación disponen de medida de modernización de regadío en el Plan vigente. Como se sabe el Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento. Cuando se confeccionó el Plan vigente de manera específica se solicitó al MAPA la previsión de actuaciones de modernización en los seis años de vigencia del Plan. En la relación de actuaciones que iba a acometer el MAPA no estaban las siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)
Canal del Esla (León)
Cerrajera (León)
Canal de Villalaco (Palencia)
Canal de Manganeses (Zamora)
Margen Derecha del Tera (Zamora)
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)
Alija del Infantado (León)
TOTAL (€ sin IVA)

Y como tales no pasaron al Programa de medidas para su ejecución por el MAPA sino para su ejecución por la comunidad autónoma y los usuarios. Probablemente el MAPA no las incluyó en su programación porque la comunidad autónoma no manifestó interés por ellas ya que la mayoría no contaban con acuerdos en sus asambleas generales para acometer la modernización. Aunque el EpTI ha tenido en cuenta en sus análisis las modernizaciones que figuran en el Programa de medidas independientemente de su agente financiador, de cara al nuevo Plan Hidrológico conviene aclarar que sólo formarán parte de las medidas aquellas actuaciones que así se determine por las autoridades competentes (MAPA o comunidad autónoma). De la Presa de Regueras, Bajo Tuerto y del Canal de la Retención ni siquiera hay medida de modernización ya que ninguna autoridad competente las ha reclamado. Valverde de Ágreda está fuera de la demarcación hidrográfica del Duero, por lo que es lógico que no figure entre las medidas del Plan Hidrológico ni ahora ni en el futuro.

Alegación 26.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Mejora infraestructuras

Propuestas:

1.- Solicitar a la Dirección General del Agua una dotación presupuestaria de 150 M€ en el período 2028/2033 para hacer frente a estas reformas, conseguir el estado óptimo de las infraestructuras para poder llevar a cabo la correcta gestión del recurso.

2.- La situación actual de la agricultura no pasa por sus mejores momentos, motivado por los elevados precios de los insumos, los bajos precios de mercado de los productos y las grandes inversiones realizadas en modernización de las infraestructuras de riego y el amueblamiento de parcelas. Por eso se solicita, buscar fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-09 y con respecto a la propuesta sobre la financiación de la DGA, se recuerda que el Plan vigente incluyó una inversión de 350 millones de euros en infraestructuras, nuevas y modernización de las existentes, cuya ejecución según la misma Ficha es de un 13% a final de 2024 que sube hasta un 19% a final de 2025, valor realmente exiguo. Pese a estar previsto es necesaria una evaluación de los motivos de este retraso que se ponen de manifiesto en la Ficha y que deben ser removido. La propia Ficha también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social. No obstante, en atención a la alegación se incluye una nueva decisión sobre la rendición de cuentas.

Los mecanismos de rendición de cuentas están formalmente delimitados en el ámbito administrativo, por ejemplo, con la regulación que se incluye en los artículos 87 y 88 del RPH. Pero este ámbito es meramente administrativo y no político, que tiene sus propios itinerarios.

Respecto a sistema de financiación alternativos a los que establece la Ley de Aguas para este tipo de infraestructuras, nada puede aportar el EpTI ya que se trata de una cuestión regulada por la propia Ley y a allá debe atenerse.

Alegación 27.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Obras de regulación:

Propuestas:

1.- Sistema Carrión: es uno de los más deficitarios de la Demarcación y urge acelerar los trámites para proceder a la ejecución de La Cueza 1 y La Cueza 2,[…].

2.- Sistema Tormes: […]. De momento, están puestas en Explotación unas 10.000 has entre La Armuña II y la Zona de Arabayona, lo que colocaría la superficie de la zona regable dependiente del embalse de Santa Teresa en el entorno de 35.000,00 has. La planificación ya prevé el desarrollo de otras 12.000 has más en La Armuña III y IV, que sí podrían ser asumidas por dicho embalse, pero en el caso de que se llegase a plantear alguna ampliación más en el futuro, resultaría necesario estudiar el recrecimiento del embalse para garantizar la satisfacción de todas las demandas (además del regadío, abastecimientos, caudales medioambientales y otros usos)

3.- Sistema Órbigo: […] nuestras propuestas pasan por el cambio de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al Sistema Tera (podríamos conseguir un ahorro de unos 12 Hm3) y la construcción de la balsa lateral de La Rial con llenado por gravedad desde el río Omaña (su capacidad está prevista en 23 Hm3).

Dentro del Sistema Órbigo tenemos el Subsistema Tuerto, […], proponemos las siguientes actuaciones: urgente puesta en explotación del embalse de Villagatón, estudiar un posible recrecimiento del embalse de Villameca y reparar el acueducto del trasvase de Valdesamario para mejorar su capacidad hidráulica y contribuir así al mejor llenado de Villameca en cada campaña.

Río Duerna: […] las 4.000 has que se nutren de este río, junto con el Peces, que discurre paralelo antes de desembocar ambos en el Tuerto, subsisten a duras penas. Para asegurar la pervivencia de este regadío, proponemos varias actuaciones:

- *Siembra de agua, derivando en invierno el caudal a las zayas, que son más filtrantes y permiten recargar el acuífero (se podrían acumular unos 2 Hm^3) para poder ser utilizado en campaña junto con el agua del río hasta la llegada del estiaje.*
- *Estudiar la posibilidad de balsas laterales derivando caudal del río Duerna en época invernal para ser utilizadas en verano.*
- *Estudiar la alternativa de un embalse de cabecera con una capacidad menor a los 28 Hm3 que estaban previsto en el proyectado en Chana de Somoza.*

Idénticos planteamientos podríamos someter a estudio para consolidar la zona regable dependiente del río Eria.

4.- Sistema Esla Valderaduey: para este sistema se pueden plantear balsas laterales en el río Cea aprovechando su aportación invernal, con suministro cero del embalse de Riaño. Como fórmula de explotación más viable, planteamos un aprovechamiento conjunto de los embalses de Riaño, Porma y Casares, desestimando definitivamente la alternativa planteada por la Confederación Hidrográfica del Duero de la transferencia de agua de este último al sistema Órbigo.

5.- Apoyo a las aguas subterráneas: En el EPTI se plantean peajes [..]. FERDUERO se opone frontalmente a estos recortes y además de seguir impulsando la constitución de CUAS para mejorar la gestión de los acuíferos, planteamos que se estudien actuaciones que permitan sustituir aguas subterráneas por aguas superficiales, así como el uso compartido de ambas. Por ejemplo, el desarrollo de La Armuña III y La Armuña IV puede liberar hectáreas de la zona sur de la Masa de Medina, la Presa de Lastras de Cuéllar lo mismo en Tierra de Pinares y las balsas laterales de Tordesillas, ayudaría a mejorar su acuífero. Por ello, planteamos que se estudien estas opciones para poder mantener el regadío y la actividad económica de todos los usuarios que se sirven de estas masas.

[…] solicitamos a la Dirección General del Agua la búsqueda de fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras de regulación.

Respuesta:

Con relación al punto 1 de la alegación (Sistema Carrión), debe señalarse que la Confederación Hidrográfica del Duero comparte la conveniencia y oportunidad de la puesta en servicio de una regulación adicional en el ámbito de las Cuezas, ya que se considera una medida estructural que puede incrementar la capacidad de gestión del sistema y reforzar su resiliencia, disminuyendo la dependencia de aportaciones externas. Estas actuaciones, junto con la modernización de regadíos en el sistema Carrión, se encuentran alineadas con los objetivos de la planificación hidrológica vigente y forman parte de la estrategia de mejora del equilibrio entre recursos y demandas en la demarcación.

Según se recoge en el Programa de medidas del Plan Hidrológico vigente, cuya situación más actualizada se puede consultar en Mírame-IDEDuero, la regulación adicional en las Cuezas (medidas 6403243 y 6403244) se encuentra en fase de anteproyecto en evaluación ambiental y es una medida cuyo promotor es la Confederación.

Con relación al punto 2 de la alegación (Sistema Tormes) debe indicarse que el EpTI ya contempla expresamente el análisis de la ampliación de regadíos en el sistema Tormes y su relación con la capacidad de regulación del embalse de Santa Teresa. En particular, el documento pone de manifiesto que los eventuales incrementos de superficie regable —como los asociados al desarrollo de La Armuña— deben quedar condicionados a la disponibilidad real de recursos y a la garantía del sistema, evaluándose de forma conjunta la gestión de la demanda y la oferta.

A este respecto, el EpTI analiza el posible recrecimiento del embalse de Santa Teresa en el marco de la alternativa 5 de la ficha DU-07, como una de las opciones para incrementar la capacidad de regulación en escenarios de mayor desarrollo del regadío. No obstante, también concluye que este tipo de actuaciones:

- no resuelven por sí solas los déficits del sistema ni los problemas de garantía,
- y deben plantearse únicamente cuando se justifique su viabilidad técnica, económica, ambiental y social, y siempre en combinación con medidas de gestión de la demanda (modernización, limitación de dotaciones, etc.).

En consecuencia, la eventual necesidad de recrecimiento del embalse no puede considerarse automática, sino que debe evaluarse en el marco global de la planificación hidrológica, priorizando un enfoque integrado que garantice la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Todo ello se analizará con detalle en la fase de redacción del plan hidrológico.

En relación con la propuesta formulada en el punto 3 para el sistema Órbigo, cabe señalar lo siguiente:

En primer lugar, la Confederación valora favorablemente la propuesta de cambio de la toma de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al sistema Tera, en la medida en que se trata de una actuación coherente con los objetivos del EpTI orientados a la optimización de la gestión de los recursos disponibles y a la reducción de presiones sobre sistemas deficitarios, mediante la mejora de la asignación y distribución de recursos entre sistemas de explotación.

En cuanto al resto de actuaciones planteadas, relativas al incremento de la capacidad de regulación (balsas laterales, nuevos embalses, recrecimientos o mejora de infraestructuras existentes), debe indicarse que el EpTI establece que este tipo de medidas deben analizarse de forma integrada dentro del conjunto de alternativas de planificación, en coordinación con las actuaciones sobre la demanda (modernización, eficiencia y adecuación de dotaciones).

En particular, el documento pone de manifiesto que:

- Las actuaciones de incremento de regulación pueden contribuir a mejorar la garantía y reducir déficits en determinados sistemas,
- pero su eficacia es generalmente limitada si no se acompañan de medidas de gestión de la demanda,
- y en todo caso deben someterse a una evaluación rigurosa de su viabilidad técnica, económica, social y ambiental, dada su elevada inversión y potencial afección sobre las masas de agua.

Por ello, la puesta en explotación del embalse de Villagatón o la mejora del trasvase de Valdesamario para reducir pérdidas y una ligera mejora de la capacidad hidráulica podrán incorporarse al Programa

de medidas en fase de redacción de plan hidrológico. Respecto a de la balsa lateral de La Rial o el posible recrecimiento de Villameca, la decisión de su incorporación al Programa de medidas del plan hidrológico dependerá de su encaje en las conclusiones del estudio de alternativas de incremento de regulación del sistema Órbigo y de su encaje en la estrategia global de la demarcación.

Sobre las propuestas relativas al río Duerna, la Confederación Hidrográfica del Duero valora positivamente las actuaciones de "siembra de agua", entendida como recarga gestionada de acuíferos mediante derivaciones superficiales (como el uso de "zayas" u otras infraestructuras tradicionales), que ya han sido consideradas en el marco de la planificación hidrológica vigente. En particular, en el valle del Duerna se incluyó una reserva de agua superficial en invierno destinada a la recarga, constituyendo una medida alineada con la gestión conjunta de recursos superficiales y subterráneos y con los objetivos de mejora de la garantía y sostenibilidad del regadío. Como se ha dicho en la respuesta a la alegación nº 19 de este mismo escrito, lamentablemente a fecha actual no se ha podido hacer efectiva esa reserva por falta de interlocutor en forma de junta central, sindicato central o comunidad general de usuarios, trámite imprescindible para poder hacer efectiva esa reserva.

Esta solución encaja, asimismo, con las líneas del EpTI en materia de adaptación al cambio climático, diversificación de fuentes y aumento de la resiliencia de los sistemas de explotación, incluyendo el uso de infraestructuras alternativas y recarga artificial cuando resulten técnica y ambientalmente viables.

En cuanto a las propuestas relativas a la construcción de balsas laterales, almacenamiento estacional o alternativas de regulación en cabecera, estas se encuadran dentro de las posibles medidas de mejora de la gestión de la oferta contempladas en los temas importantes DU-06 y DU-07 del EpTI (incluyendo infraestructuras de almacenamiento, regulación o mejora de la garantía). No obstante, su implantación requiere un análisis específico en el marco de la elaboración del Plan Hidrológico, en el que se valore su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica, así como su eficacia real frente a otras alternativas. En este sentido, dichas propuestas se tendrán en consideración y podrán ser objeto de estudio en la fase de redacción del Plan.

En relación con las propuestas formuladas en el punto 4 para el sistema Esla-Valderaduey, la propuesta de aprovechamiento de aportaciones invernales mediante balsas laterales en el río Cea se encuadra dentro de las medidas contempladas en el EpTI en los temas importantes DU-06 y DU-07, en los que se prevé la utilización de infraestructuras de almacenamiento complementarias (balsas laterales, regulación estacional, etc.) como instrumento para mejorar la garantía de los sistemas de explotación. Por ello, este tipo de soluciones podrá ser analizado en la fase de elaboración del Plan Hidrológico, valorando su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica en el ámbito del sistema Esla–Valderaduey.

En cuanto a la propuesta de explotación conjunta de los embalses indicados, debe señalarse que el embalse de Casares es titularidad de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A.), por lo que en la situación actual no resulta posible su gestión conjunta con las infraestructuras de titularidad y explotación directa del Organismo de cuenca en los términos planteados.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier planteamiento de optimización conjunta de infraestructuras deberá analizarse en el marco competencial y de explotación correspondiente, considerando el

régimen jurídico de cada una de ellas y los acuerdos que, en su caso, pudieran establecerse entre las Administraciones implicadas.

En relación con el punto 5 de la alegación, se formulan las siguientes consideraciones:

Las posibles limitaciones al uso de aguas subterráneas deben enmarcarse en el objetivo prioritario de la planificación hidrológica, conforme a la Directiva Marco del Agua y al Texto Refundido de la Ley de Aguas, de alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de agua, evitando su deterioro y corrigiendo situaciones de sobreexplotación. En este sentido, la evolución de la política hidráulica se orienta hacia un refuerzo del control administrativo de las extracciones y una progresiva convergencia hacia el régimen concesional, lo que implica necesariamente la adopción de medidas de limitación en aquellos casos en los que las extracciones resulten incompatibles con la recuperación de los acuíferos.

Se valora positivamente el impulso a la constitución de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) como instrumento clave para la mejora de la gobernanza, el control de extracciones y la gestión conjunta de los recursos, en línea con lo previsto en el EpTI para el uso sostenible de las masas de agua subterránea.

Las propuestas orientadas a la sustitución de bombeos por recursos superficiales y al uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas son coherentes con las líneas de actuación recogidas en el EpTI, que contempla este tipo de medidas como alternativas para reducir la presión sobre los acuíferos y avanzar hacia su recuperación. No obstante, su viabilidad debe analizarse caso por caso en la elaboración del Plan Hidrológico, considerando la disponibilidad real de recursos, las garantías de suministro, los condicionantes ambientales y la eficiencia económica de las soluciones planteadas.

Alegación 28.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario recordar que la planificación hidrológica, de conformidad con el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, no persigue exclusivamente objetivos ambientales, sino también la satisfacción de las demandas, la armonización del desarrollo regional y sectorial y la sostenibilidad de las actividades económicas vinculadas al uso racional del agua. En consecuencia, cualquier mecanismo de coordinación interadministrativa o fijación de objetivos específicos en zonas protegidas debe incorporar necesariamente criterios de proporcionalidad, equilibrio territorial, cohesión socioeconómica y viabilidad de los usos existentes, singularmente en territorios rurales altamente dependientes del regadío. […]

La ficha plantea la alineación del marco regulatorio de distintas políticas sectoriales con los objetivos de la planificación hidrológica, incluyendo expresamente la Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats. No obstante, dicha coordinación no debería derivar en la imposición automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos.

Respuesta:

El EpTI no propone ni pretende imponer de manera *automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos*. De hecho, al menos, las Fichas DU-01, DU-02, DU-03, DU-04 y DU-07 tratan de hacer un análisis técnico de las presiones que generan sobre las masas de agua las actividades humanas, entre ellas la agrícola, unas veces con mayor profusión de datos y otras de manera cualitativa. Las propuestas y alternativas que se hacen en el EpTI se apoyan en ese análisis, tratando de corregir las presiones sin causar un daño excesivo a las propias actividades existentes. A nuestro juicio hay un equilibrio entre las actividades y los objetivos ambientales dentro del margen que permite la normativa vigente. Y la llamada a las políticas sectoriales (Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats) lo es en la medida que estas políticas apuntan a la del agua en sus propios desarrollos legales.

Alegación 29.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La ficha señala la necesidad de fijar objetivos específicos sobre el medio hídrico de los espacios Red Natura 2000 vinculados al agua. Sobre esta cuestión debe indicarse que cualquier eventual limitación derivada de dichos objetivos deberá sustentarse necesariamente en estudios técnicos individualizados, suficientemente motivados y territorialmente concretos, evitando restricciones automáticas derivadas exclusivamente de la ubicación geográfica de las explotaciones o infraestructuras. Especialmente en sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados, debe garantizarse plenamente la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes y la compatibilidad entre conservación ambiental y actividad agraria sostenible.

Respuesta:

Las limitaciones derivadas de los objetivos de los espacios naturales de Red Natura 2000 ya existen desde que se aprobaron los planes básicos de gestión, en el caso de Castilla y León desde 2015.

Los objetivos específicos de Red Natura se fijan por las comunidades autónomas en los Planes Básicos de Gestión. En el caso de los Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León se aprobaron por ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre. Estos Planes establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000. Se estructuran en:

- Un documento de “Disposiciones generales”, común a los 177 Planes Básicos.
- Ciento setenta y siete documentos de Planes Básicos de gestión y conservación correspondientes a cada uno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.
- Tres "Anexos" comunes a los 177 planes básicos:
    - Anexo I. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000,

- Anexo II. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Valores Red Natura 2000, y
- Anexo III. Medidas de conservación y gestión Red Natura 2000.

De todos los espacios y hábitats de estos Planes sólo aquellos vinculados al agua (76 en la demarcación hidrográfica del Duero) deben ser atendidos por la planificación hidrológica como establece el RPH, en la medida en que les afecte. Y las limitaciones en el ámbito del agua las establecen los citados planes. En este sentido cabe transcribir algunos de los fundamentos de derecho que esgrime el Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 515/2025 que se cita en la Ficha DU-09: "Por consiguiente, y como ciertamente esta situación no parece acomodarse a las exigencias de la DMA y de la legislación interna que la traspone, de las que deriva la necesidad de que los planes hidrológicos, como instrumento esencial de coordinación de la política de aguas, reflejen los objetivos ambientales de las zonas protegidas vinculados a las masas de agua asociadas y su grado de cumplimiento, y que sobre dichos objetivos no cabe aplicar la excepción prevista en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2000/60, procede estimar la pretensión de la parte recurrente y declarar la nulidad de todas las previsiones contenidas en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las que, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 10 de las disposiciones normativas, se prevea la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas de agua vinculadas a zonas protegidas de hábitats y especies, en las que, además, no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares.

Puede ser llamativo que la delimitación de espacios protegidos por las comunidades autónomas afecten en ocasiones a zonas como las que identifica la alegante ("sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados"), por lo que cabría pensar que esos espacios protegidos lo son precisamente por su relación con esos regadíos históricos; sin embargo encontramos en sus planes básicos que la actividad agraria, entre otras, es quien constituye una presión, algo que aparentemente repugna toda lógica racional. Pero la planificación hidrológica poco puede hacer para resolver estas incoherencias, más allá de instar al órgano competente de la comunidad autónoma a que revise esas declaraciones o los planes básicos correspondientes, como también lo puede hacer el sector al que pertenece la alegante.

Alegación 30.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

No parece razonable incrementar simultáneamente las exigencias ambientales o las limitaciones sobre los usuarios concesionales mientras persistan importantes retrasos administrativos y presupuestarios en la ejecución de actuaciones estructurales cuya responsabilidad corresponde principalmente a las administraciones públicas competentes.

Respuesta:

Manifestamos acuerdo con la alegante en lo que se refiere al notable retraso en la ejecución del Programa de medidas; de hecho, la propia Ficha lo pone de manifiesto cuando abiertamente reconoce que el *Programa de medidas del Plan Hidrológico se construye con las medidas que todas las autoridades competentes (administraciones locales, autonómicas o estatal) y resto de agentes, cada*

uno en el marco de sus competencias, pueden impulsar para el logro de los citados objetivos. Por tanto, buena parte del éxito de un plan hidrológico para dar cumplimiento a esos objetivos estriba en el compromiso de los agentes de acometer las medidas que caen bajo su ámbito. También propone algunas decisiones a explorar para que esto no se repita en el futuro, como son que haya un *compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución*, y establecer un *marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios.*

Pero dicho esto no podemos compartir la comparación de este hecho con las necesidades de establecer criterios ambientales ya que en su mayoría estos criterios buscan reducir las presiones sobre las masas de agua y esas presiones se ejercen por actividades y usuarios concretos a quienes corresponde, en la medida de lo que establecen las normas, contribuir a la reducción de las mismas.

Alegación 31.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario reforzar de manera efectiva la participación técnica y real de los usuarios del agua, singularmente de las Comunidades de Regantes, en los procesos de toma de decisiones y seguimiento de la planificación hidrológica.

Respuesta:

La Ficha DU-09 aborda la necesaria colaboración y cooperación entre los departamentos de la administración pública para que, cada uno en su ámbito competencial, contribuya al logro de los objetivos de la planificación. Y ello porque al tener competencias sobre distintos factores que inciden en el agua (tanto como demanda como medio ecológico), las políticas sectoriales en cada uno pueden contribuir o no a lograr los objetivos.

No se aborda en la ficha el modo de participación de los usuarios en la gestión del agua que tiene sus propias normas legales establecidas. Por ello sorprende que una Comunidad de regantes reclame mayor participación en los procesos de toma decisiones y de seguimiento de la planificación hidrológica. Las comunidades de regantes participan en la Junta de Gobierno, en el Consejo del Agua de la demarcación, en la Comisión de Desembalse, en la Asamblea de Usuarios y las Juntas de Explotación. Esa representación está regulada en el TRLA, el RAPA o reglamentos específicos (como el que regula el consejo del agua de la demarcación). Todos ellos son órganos de gobierno, gestión, coordinación y participación de los organismos de cuenca. Nos gustaría conocer otros ámbitos administrativos donde la participación de los usuarios fuera al menos de la misma magnitud que en la gestión del agua. De cualquier modo, el EpTI no tiene capacidad para modificar la distribución de la representación de los usuarios en los distintos órganos.

Alegación 32.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario que la planificación identifique de manera expresa la incidencia real que el cumplimiento del Convenio de Albufeira y de otros compromisos ambientales o internacionales tiene sobre las garantías de suministro de las distintas unidades de demanda agraria y sobre las reservas embalsadas disponibles en los sistemas de explotación. [..]

Por ello, cualquier incremento de exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales existentes.

Respuesta:

El análisis que se solicita en la alegación respecto al Convenio de Albufeira se ha hecho en todas las alternativas que figuran en las Fichas DU-06 y 07 debido que se trata de una restricción al uso del agua, de manera que, en todo caso, siempre que no se den las condiciones de excepción, se cumplen los requisitos del Convenio. No se ha incluido su explicación en las Fichas por una cuestión de simplificación. No obstante, con las medidas definitivas, en fase de redacción de plan hidrológico, habrá un apartado específico que aborde este cumplimiento de caudales integrales del Convenio de Albufeira.

Respecto a la segunda propuesta (que las nuevas exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales), el EpTI no puede avalar una cuestión que no está contemplada en la normativa vigente. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 65 del TRLA cuando los usos actuales puedan verse afectados por la planificación hidrológica o por requisitos adicionales de carácter ambiental que hagan imposible ejercer el uso para el que existe concesión, como parece explicar la alegación, podrá reclamarse la correspondiente indemnización. Y ello sin menoscabo de la jurisprudencia ya consolidada en relación con las indemnizaciones por restricciones previas, como son el régimen de caudales ecológicos o los compromisos internacionales o ambientales, más bien en contradicción de la propuesta de la alegación.

Alegación 33.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La creciente interacción entre distintas políticas sectoriales europeas, estatales y autonómicas vinculadas al agua puede generar escenarios de elevada complejidad regulatoria para los usuarios y las Comunidades de Regantes. Por ello, se considera imprescindible que el futuro Plan Hidrológico garantice marcos regulatorios claros, previsibles y técnicamente motivados, evitando duplicidades

administrativas, contradicciones regulatorias y limitaciones carentes de suficiente justificación técnica individualizada.

Respuesta:

En el ámbito del agua, el EpTI es un documento intermedio de la planificación hidrológica que tiene por objeto la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. No tiene que ofrecer seguridad jurídica ya que es un documento instrumental en la elaboración del Plan Hidrológico que se aprueba por Real Decreto y tiene fuerza vinculante.

Por otra parte, la seguridad jurídica para los usuarios que aspiran a desarrollar una actividad la ofrece el procedimiento concesional donde se concreta la actividad en el objeto, el tiempo y el lugar, lo que permite evaluar la actividad en coherencia con los objetivos de la planificación hidrológica. Por tanto, se rechaza la alegación. Los planes hidrológicos se revisan cada seis años, lo que puede suponer que, dentro del marco legal general, haya modificaciones específicas como consecuencia de la revisión planificadora. Seis años, a nuestro juicio es un marco temporal escaso, pero el ordenamiento jurídico establece ese plazo para las sucesivas revisiones y a él debemos ajustarnos.

La Ficha DU-09 pone el acento en la necesidad de incrementar la coordinación y cooperación administrativa en el ámbito de la planificación hidrológica; la alegante reclama esa coordinación en el marco de la gestión ordinaria. Siendo un objetivo razonable, no hay que olvidar cuáles son las competencias de cada administración lo que puede suponer una mayor lentitud de procedimientos, en especial si éstos confluyen en una única actividad. Sigue quedando pendiente la simplificación administrativa ya que, cada vez que hay cambios normativos, no suelen ser para simplificar sino para una mayor complejidad. Al igual que los usuarios también las administraciones padecemos esta complejidad que está al servicio, en este caso, de las garantías. Precisamente la variedad de competencias sobre una misma actividad puede generar esas incoherencias de las que no son culpables quienes deben verificar los requisitos legales sino de las normas que regulan la actividad.

Alegación 34.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Una cuestión relevante que debería ser tenida en cuenta en las evaluaciones ambientales de grandes instalaciones fotovoltaicas es la posible modificación del coeficiente de escorrentía superficial derivada de la implantación masiva de paneles solares. […]

Por ello, se considera necesario que el futuro instrumento de planificación y las evaluaciones ambientales incorporen análisis hidrológicos específicos sobre modificación de escorrentías, incluyendo modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Respuesta:

Compartimos con el alegante su percepción de que la construcción de plantas fotovoltaicas contribuye al aumento de suelo artificial con impactos como compactación y modificación de la permeabilidad del suelo, alteración de la escorrentía e incremento de la erosión.

La planificación hidrológica no puede entrar en el detalle de dichos impactos, que son evaluados específicamente en los procedimientos ambientales a que se ven sometidos los proyectos y que son específicos de cada uno de ellos.

La modificación de la escorrentía superficial producida por una instalación fotovoltaica depende de muchos factores como son la extensión de la planta fotovoltaica, las características edáficas de su localización, las posibles modificaciones topográficas del terreno, el tipo y forma de fijación de los seguidores, etc. Estos aspectos son evaluados de forma cualitativa en los preceptivos informes que emite la CHD, como administración afectada, en el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos, sin poder establecer una evaluación cuantitativa del efecto sobre la escorrentía ya que los promotores no facilitan modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Alegación 35.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Por otro lado, se considera igualmente interesante analizar el potencial uso dual de determinadas infraestructuras de regadío para su contribución al sistema eléctrico nacional, especialmente en aquellos casos en los que existan balsas de regulación situadas a cota elevada y otros condicionantes técnicos favorables. Determinadas instalaciones de modernización podrían adaptarse para funciones complementarias de almacenamiento energético y regulación eléctrica mediante sistemas reversibles, incrementando la utilidad y rentabilidad social de infraestructuras ya existentes.

Respuesta:

Esta indicación del alegante de una posible utilización de las instalaciones inherentes a modernizaciones del regadío para funciones de almacenamiento energético no se ha planteado hasta la fecha en este Organismo. No obstante, cualquier iniciativa que se presente para la correspondiente autorización o concesión se analizará específicamente.

La capacidad de almacenamiento de estas balsas de regulación no suele ser tan elevada como para que las empresas hidroeléctricas consideren rentable la inversión en la implantación de sistemas de bombeo y centrales hidroeléctricas que permitan utilizar este recurso.

Es todo caso, sería la administración competente en la realización de estas modernizaciones y, en su caso, el titular de las infraestructuras de regadío quienes deberían proponer la utilización de las mismas para fines energéticos.

Alegación 36.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

En la ficha se indica que para las aplicaciones y usos del agua vinculados a energías renovables resultan de aplicación las mismas consideraciones previstas para usos consuntivos[..], parecería más adecuado diferenciar entre usos estrictamente consuntivos y usos con retorno efectivo del agua, especialmente a efectos de evaluación de impacto sobre la disponibilidad global del recurso hídrico. Todo ello

Se están empezando a crear nuevas plantas de hidrogeno verde, de bioetanol, etc, que necesitan agua para su desarrollo. Nos oponemos a que se extraiga agua de acuíferos que están en mal estado y, por otro lado, que cuando hayan extraído el agua, puedan verter la molécula resultante a cauces o arroyos, agravando el problema de la contaminación difusa.

Cuando el agua se coja de fuentes superficiales, nos oponemos a que se puedan restar dotaciones al regadío, cuando hay UDAs y comunidades de regantes que incumplen el criterio de garantía [..].

Por tanto, los nuevos usos del agua destinados a la implantación de industrias de producción y almacenamiento de energías renovables, pueden tener un efecto negativo en el regadío, tanto en aguas subterráneas como en aguas superficiales y pedimos que este problema se analice y se aborde con mucho rigor para no perjudicar una actividad económica destinada a la producción de alimentos, que fija población en las zonas rurales y que contribuye al mantenimiento del ecosistema y la disminución de la contaminación ambiental.

Respuesta:

Los parques eólicos y plantas fotovoltaicas precisan agua para su construcción y para algunas operaciones de mantenimiento (limpieza de paneles), siendo los volúmenes demandados no significativos. El suministro de agua para estas instalaciones se realiza habitualmente mediante suministro con camiones cisterna de agua procedente de concesiones vigentes o mediante derivaciones temporales de aguas superficiales, que deben tramitarse en este Organismo, tramitación en la cual se evalúa la disponibilidad del recurso en cada caso particular.

Por otra parte, las instalaciones industriales para la producción de compuestos químicos capaces de almacenar los excedentes de energías renovables como son el hidrógeno verde, el amoniaco, metanol, etc., pueden suponer un uso consuntivo del agua acompañado de grandes volúmenes para la refrigeración que, en algunos casos, revierten al medio hídrico.

La alternativa elegida para este tema importante propone el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos sólo en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua y no que se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, entre ellos el regadío.

Se establecerán dotaciones máximas para la producción de estos compuestos químicos, aplicando las mejores técnicas disponibles y el estado de la ciencia. En ningún caso estas dotaciones irán en detrimento de las dotaciones establecidas para usos agrarios.

En lo relativo al posible impacto ambiental derivado de posibles vertidos y contaminación difusa, estos aspectos se analizan pormenorizadamente en cada caso, en los informes preceptivos que emite este Organismo para la evaluación ambiental de los proyectos a petición del órgano ambiental que corresponda. En estos informes se establecen condicionantes para minimizar estos impactos, que posteriormente se recogen en la declaración de impacto ambiental correspondiente.

Alegación 37.

Conclusiones finales

El actual contexto de cambio climático, reducción de aportaciones e incremento de exigencias ambientales e internacionales obliga a reforzar la resiliencia hídrica de la Demarcación mediante:

- *Una adecuada política de regulación y almacenamiento*
- *El mantenimiento funcional de los cauces*
- *La modernización y optimización de infraestructuras*
- *La revisión técnica de los actuales indicadores de sequía y escasez*

La mejora de la capacidad reguladora de la cuenca no debe entenderse únicamente como una herramienta de garantía de usos, sino también como un instrumento esencial para:

- *La adaptación al cambio climático*
- *La conservación de ecosistemas asociados al agua*
- *La estabilidad de las masas de agua*
- *El cumplimiento de objetivos ambientales*
- *La adecuada atención de los compromisos internacionales derivados del Convenio de Albufeira*

Respuesta:

Todos los aspectos que se citan en las conclusiones finales se han ido valorando a lo largo de la respuesta a este escrito de alegaciones, mostrando un acuerdo con la mayoría de las cuestiones generales aportadas, si bien el enfoque de las medidas puede variar puntualmente, y algunos desacuerdos en especial con la vinculación de un mayor número de infraestructuras de regulación y una mejora de la conservación de ecosistemas asociados al agua.

Alegación 38.

Conclusiones finales

En conclusión, si tenemos en cuenta todo lo manifestado en el cuerpo de las presentes alegaciones, mucho tiene que cambiar la filosofía y el contenido del EpTI y el documento del PLAN que se elabore en el siguiente paso del proceso de planificación para que el voto de los usuarios regantes cuando sea informado por el Consejo del Agua de la Demarcación sea favorable. NUESTRA POSICIÓN SÓLO PUEDE SER LA DE OPONERNOS A LA APROBACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO.

Respuesta:

Respetamos la postura de la alegante en relación con el EpTI. No obstante, de una lectura de las propuestas, sugerencia y observaciones que hace la alegante y de la lectura del EpTI no podemos concluir lo mismo que el firmante del escrito. La mayor parte de las cuestiones que se plantean como mejoras están recogidas en la documentación a consulta pública; hay otras que el EpTI no puede atender porque ya están reguladas en normas de mayor rango y que atenderlas requieren modificaciones legales que no corresponden al promotor del Plan Hidrológico. Otras sugerencias, en

fin, colisionan de facto con la normativa vigente y lógicamente no pueden ser atendidas. Pero en todo caso no se observa justificación para esta opinión desfavorable tan rotunda como muestra la conclusión final.

4.59. Escrito de observaciones Nº 072

Presentado por: D. Blas Carmelo Donis Tarrero.

En nombre de la Junta Central de Usuarios del Carrión.

Alegación 1.

La Cuenca del Carrión es un sistema muy deficitario ya que dispone de 240 hm^3, incluyendo el trasvase, para unas 54.000 has. Por lo tanto, no solo tenemos la necesidad de impulsar las Cuezas sino que también debemos conservar el trasvase. [...]. Revisión de los niveles de resguardo en los embalses del sistema Carrión, corrigiéndolos para tener más agua disponible, ya que somos la cuenca menos dotada.

Se solicita la eliminación de cualquier prioridad que no tenga un fundamento técnico consensuado y el mantenimiento del aporte de recursos mediante el trasvase Cea-Carrión en las mismas condiciones vigentes a el día de hoy en tanto el sistema Carrión no tenga garantizada la satisfacción de sus necesidades mediante regulación de recursos propios.

Respuesta:

Las presas de las Cuezas están contempladas en el plan vigente y también en las alternativas del EpTI. De hecho, se sigue trabajando en la tramitación de la declaración de impacto ambiental que ha exigido, entre otras acciones, hacer una nueva fase de consulta pública, aclarar una serie de cuestiones colaterales con la actuación pero que a juicio de la autoridad ambiental son relevantes para la declaración. Salvo que haya declaración de impacto ambiental negativa antes de la publicación del futuro plan hidrológico, seguirán considerándose como medidas del futuro plan.

El análisis de garantías y demandas que se ha hecho en el EpTI de las alternativas de la Ficha DU-06 y Ficha DU-07 ha tenido en cuenta el esquema de funcionamiento que el Plan Hidrológico vigente fija respecto al paso de recursos del Esla al Carrión y que se ciñe a los siguientes criterios:

Horizonte 2027:

- *La circulación de caudal se ciñe al periodo comprendido de mayo a septiembre; en abril el SE Carrión se abastece con sus propios recursos.*
- *Se cede agua al Cea desde el Canal Alto de Payuelos y desde el Canal Bajo de Payuelos*
- *Al arco Canal Cea-Carrión_e se le aplica una regla de operación que restringe el paso de caudal en función del volumen mensual almacenado en Camporredondo y Compuerto mientras que al Canal Cea-Carrión_d se le asigna una regla en función del volumen almacenado en Riaño*
- *El volumen máximo anual en el arco Canal Cea-Carrión_e se limita a 50 hm^3*
- *Se calibran diversos volúmenes mensuales máximos: 25 hm^3 en mayo, 37 hm^3 en junio, 31 hm^3 en julio, 16 hm^3 en agosto y 10 hm^3 en septiembre*
- *En el SE Carrión se habrán aplicado medidas de modernización de regadíos que habrán reducido el consumo de agua en algunas UDA*

Horizontes 2033 y 2039:

- *La circulación de caudal se ciñe al periodo comprendido de mayo a septiembre; en abril el SE Carrión se abastece con sus propios recursos*
- *Se cede agua al Cea desde el Canal Alto de Payuelos y desde el Canal Bajo de Payuelos*
- *Al arco Canal Cea-Carrión_e se le aplica una regla de operación que restringe el paso de caudal en función del volumen mensual almacenado en Camporredondo y Compuerto mientras que al Canal Cea-Carrión_d se le asigna una regla en función del volumen almacenado en Riaño*
- *En este horizonte la situación en Riaño es limitante porque se habrán desarrollado todas las medidas de regadío previstas*
- *El volumen máximo anual en el arco Canal Cea-Carrión_e se limita a 35 hm^3*
- *Se calibran diversos volúmenes mensuales máximos: 12 hm^3 en mayo, 18 hm^3 en junio, 15 hm^3 en julio, 10 hm^3 en agosto y 10 hm^3 en septiembre*
- *En el SE Carrión seguirán vigentes las medidas de modernización de regadíos del horizonte 2027 que habrán reducido el consumo de agua en algunas UDA*

Toda la actividad del Organismo de cuenca debe estar sujeta a las disposiciones normativas vigentes como son el TRLA y sus Reglamentos correspondientes y a la Normativa del propio Plan Hidrológico del Duero. El Plan Hidrológico vigente plantea la superación de los problemas de garantía identificados en el Sistema Carrión mediante medidas de mejoras en la gestión de la demanda (modernización de regadíos existentes) y refuerzo de regulación, precisamente para atender tanto a las futuras demandas previstas en el Sistema Esla (desarrollo completo de Payuelos) como a las existentes en el Carrión. Será el avance de las medidas de modernización de los regadíos de los sistemas Esla, Porma y Carrión, y el aumento de la oferta planteado en el sistema Carrión las que irán marcando el ritmo hacia la solución estable de ambos sistemas. Entre tanto el organismo de cuenca irá armonizando la gestión ordinaria de recursos e infraestructuras bajo el esquema actualmente vigente estabilizando, en la medida de lo posible las garantías de todos los regadíos, singularmente los ubicados en la cuenca cedente. La alegación se tendrá en cuenta en la elaboración del Plan Hidrológico, que es donde se tratan estas cuestiones, en el Anejo 6.

En relación con la revisión de los niveles de resguardo en embalses, hay que tener en cuenta que esta cuestión no compete al Plan Hidrológico sino que se aprueban en Comisión de Desembalse, teniendo en cuenta las normas de explotación de las presas.

4.60. Escrito de observaciones Nº 074

Presentado por: D. Serafín Calvo Cornejo.

En nombre de la Comunidad de Regantes Cabecera del Río Riaza.

Alegación 1.

Una vez revisada la documentación cartográfica y los planos actualmente expuestos en la plataforma web MIRAME, correspondientes a esta Comunidad de Regantes, se han detectado determinadas incidencias en la representación gráfica de las parcelas incluidas.

Si bien tanto la concesión administrativa como la superficie total resultan correctas, se ha comprobado que existen una serie de fincas que actualmente no aparecen reflejadas en los planos publicados y que, sin embargo, sí forman parte de la zona regable de la Comunidad. Del mismo modo, se ha observado que otras parcelas sí aparecen incluidas en la cartografía expuesta pese a no corresponder actualmente a dicha delimitación.

Se solicita que se proceda a la revisión y actualización de los planos correspondientes conforme a la documentación gráfica que se acompaña.

Respuesta:

La representación cartográfica de la UEL 2105854 - Comunidad de Regantes Cabecera del Río Riaza que se muestra en el sistema de información Mírame-IDEDuero es la considerada en la tramitación del expediente de concesión (MC-0108/2010).

Se agradece la información aportada y se valorará su incorporación al expediente de derecho según el trámite que proceda. En caso de incorporarse cambios al expediente, estos se reflejarían en el sistema de información Mírame-IDEDuero.

4.61. Escrito de observaciones Nº 075

Presentado por: D. José Mazarías Pérez.

En nombre del Ayuntamiento de Segovia.

Alegación 1.

Se considera necesario incorporar a la Planificación Hidrológica del Duero un incremento de regulación en toda la provincia, y sobre todo en la zona Sur-Oeste, desde los municipios que conforman el alfoz de la ciudad de Segovia hasta su límite Oeste en el municipio de El Espinar.

Esta necesidad de regulación ya se planteó en la revisión del PHD de segundo ciclo (periodo 2016-2021), en el que dentro de las Infraestructuras hidráulicas previstas destinadas a satisfacer demandas y a prevenir inundaciones se encontraba la Presa de Ciguiñuela, necesaria para resolver la regulación de caudales para el abastecimiento a Segovia y su alfoz, incluso regadíos aguas abajo del municipio.

La actuación prevista entonces contemplaba la construcción de la presa de Ciguiñuela (29 Hm^3) aumentando la capacidad de almacenamiento de Segovia y su entorno de 9,9 Hm^3 (7,4 del embalse del Pontón y 2,4 del embalse de Puente Alta) a 38,8 Hm^3, lo que implicaría que se multiplicaría casi por cuatro.

La capacidad de regulación de la nueva infraestructura conllevaría las siguientes ventajas:

*- **Uso más sostenible de aguas subterráneas (DU-02):** mejora cuantitativa, sustituyendo bombeos y reduciéndose los índices de explotación, y cualitativa (nitratos y arsénico principalmente), de las masas de agua subterránea. Un nuevo embalse en el río Ciguiñuela va en consonancia con la alternativa Nº3 propuesta, pero debería añadirse a las nuevas infraestructuras planteadas.*

Respuesta:

La presa de Ciguiñuela ha estado incluida en el Programa de medidas del Plan hidrológico de 2009-2015 y en el de 2016-2021, pese a la constante oposición a esta medida mostrada por el ayuntamiento de Segovia. Finalmente, debido a esta negativa del citado ayuntamiento, se descartó del Plan Hidrológico vigente 2022-2027.

Sobre la presa de Ciguiñuela se han realizado estudios previos de viabilidad que se han puesto en conocimiento de los servicios técnicos de la capital segoviana y de sus autoridades; pese a ello ambos han manifestado su negativa a esta presa. Su objetivo era asegurar las garantías de las poblaciones del sur de la provincia de Segovia entre el río Eresma y el río Moros, y la posibilidad de sustituir bombeos de la masa de agua Los Arenales-Tierra de Pinares. Estos objetivos, sobre todo el primero, han recuperado su actualidad a raíz de los problemas de seguridad de la presa de El Tejo que ha puesto de manifiesto en 2024 la División de Seguridad de Infraestructuras y Explotación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en consecuencia, exigir su vaciado hasta la cota inocua. Esta situación ha trasladado el problema de suministro de la población de El Espinar, que pierde su principal fuente de suministro, a todas las poblaciones al Este de la misma y al Norte de la Sierra de Guadarrama: Mancomunidad de la Mujer Muerta, Segovia, Palazuelos de Eresma y la mancomunidad de La Atalaya, al perderse una fuente de suministro para abastecimiento urbano como es el Tejo. Dada

la incertidumbre existente en este momento sobre la reparación y puesta en explotación de la presa de El Tejo, y la escasa colaboración de determinadas administraciones locales en ejercer sus competencias, parece que pensar en un refuerzo del suministro del Sur de Segovia en esta zona es más que razonable. Se incluye una referencia entre las Decisiones a tomar de la Ficha DU-07 consistente en incluir el estudio de viabilidad y en su caso la construcción de la presa de Ciguiñuela como refuerzo para el suministro urbano de agua al sur de Segovia.

Alegación 2.

Gestión del riesgo de inundación (DU-05)

La mejor manera de regulación de los ríos ante avenidas importantes se realiza mediante la construcción de presas. La capacidad de regulación de la nueva infraestructura conectada con el embalse de Pontón Alto sería significativa, pues además de aumentar la capacidad de regulación existente del propio embalse del Pontón Alto, evitaría de manera casi definitiva las inundaciones que históricamente sufre la ciudad de Segovia por crecidas del río Eresma a su paso por la ciudad (El río Ciguiñuela es tributario del Eresma aguas arriba de Segovia, y carece de regulación actualmente). De esta forma, conseguimos regular dos cuencas, las del Eresma y la del Ciguiñuela.

Aunque se haya mejorado la gestión del riesgo de inundación modificado el régimen de explotación del embalse del Pontón Alto, la capacidad de laminación de avenidas está muy limitada por el pequeño tamaño del mismo, por lo que se considera esencial esta nueva infraestructura que regularía los ríos Ciguiñuela y Eresma.

Desde el punto de vista técnico y de gestión, la CHD, en el marco del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, ha realizado la evaluación preliminar del riesgo, catalogando este tramo urbano del río Eresma, como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (código ARPSI ES020/0022, ADAJA-ERESMA-CEGA; subtramo10-1800014-01, Segovia, con longitud afectada de 0,67 km), y realizando los correspondientes mapas de peligrosidad y riesgo.

Respuesta:

Como se ha puesto de manifiesto al ayuntamiento de Segovia, el Pontón Alto no permite laminar las avenidas de alta probabilidad en la ciudad de Segovia por su escasa capacidad.

El embalse de Pontón Alto dispone de usos vinculados para el abastecimiento urbano que, como se sabe, tiene el primer orden de prioridad. Cualquier norma incluida en el Plan Hidrológico que pretenda trastocar ese orden puede incurrir en los supuestos a los que se refiere el artículo 65 del TRLA, lo que podría conllevar la correspondiente indemnización. Por lo tanto, en tanto existan concesiones de agua para abastecimiento urbano no es posible dar prioridad a otros usos o funciones. La renuncia por parte del Ayuntamiento de Segovia a su concesión desde el embalse de El Pontón permitiría utilizar el embalse en el sentido apuntado por la observación. Por otro lado, el río Eresma, a su paso por la ciudad de Segovia, se nutre de las aguas del propio río, atravesando el embalse de Pontón Alto; pero también tiene varios ríos que aportan caudales en ese tramo, y que no disponen de regulación, por lo que los caudales del Eresma llegan a la ciudad de Segovia en régimen natural en cuanto a lo que es una gestión de avenidas. Destacan especialmente las aportaciones del río Ciguiñuela, que tienen importancia en los caudales que circulan en un episodio de avenidas por el cauce del río Eresma a su paso por Segovia.

Una presa en el arroyo de Ciguiñuela contribuiría levemente a reducir las puntas de caudal en Segovia, en especial en deshielos rápidos. Y la gestión conjunta de ambos embalses (Pontón Alto y Ciguiñuela) para evitar avenidas en Segovia resulta muy complicado. Por tanto, no mostramos conformidad con la propuesta de nueva presa para reducir las inundaciones en Segovia, si bien su utilidad para garantizar el suministro puede ser razonable.

Alegación 3.

Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras (DU-07)

El aumento de los recursos hídricos que conllevaría la nueva infraestructura en el río Ciguiñuela aseguraría la garantía de suministro a la ciudad de Segovia y su alfoz. De esta manera Ciguiñuela podría compensar los vaciados tan acusados que sufre el Pontón Alto durante épocas de estiaje, y que conllevan, no solo problemas en la cantidad de agua, sino también en la calidad de la misma.

Conectar cuencas deficitarias con cuencas excedentarias, no hace más que promover un reparto equitativo de recursos hídricos, generando sinergias positivas en el entorno socio-económico a nivel local y comunitario, y promoviendo mejoras en el medio ambiente.

Respuesta:

Como ya se ha indicado en respuesta a la alegación primera se incluye una referencia entre las Decisiones a tomar de la Ficha DU-07 consistente en incluir el estudio de viabilidad y en su caso la construcción de la presa de Ciguiñuela como refuerzo para el suministro urbano de agua al sur de Segovia.

Alegación 4.

Recientemente se ha producido una nueva situación sobre la capacidad de recursos hídricos en la zona Sur-Oeste de la provincia de Segovia, principalmente provocado de manera indirecta por la problemática existente con el embalse del Tejo en el Espinar, actualmente vaciada por el estudio de sus condiciones de seguridad y los riesgos de colapso detectados.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha promovido, como alternativa al problema con la presa de El Tejo, el abastecimiento estacional de El Espinar desde el embalse de Puente Alta, que ya suministra a varios municipios. Sin embargo, la incorporación de una alta población estacional en verano hace que los recursos actuales de Puente Anta (2,4 hm^3) resulten claramente insuficientes.

No se puede dejar de lado el problema de Puente Alta en Revenga, pues es absolutamente necesario y de manera urgente, poder compensar el detraimiento de recursos de ese embalse con el nuevo bombeo promovido por la CHD a El Espinar y la Mancomunidad de la Mujer Muerte (MMM) para una población en torno a los 40.000 habitantes. Puente Alta no tiene capacidad para abastecer a 80.000 habitantes (40.000 bombeo + 40.000 Segovia), por lo que se hace necesario conectar el embalse del Pontón Alto con las infraestructuras de abastecimiento de la ciudad de Segovia desde el embalse de Puente Alta, para aumentar la garantía de suministro al abastecimiento al alfoz de Segovia.

El abastecimiento de agua al resto de municipios de la parte Sur de Segovia, quedaría aún por determinarse la solución definitiva. Por ello, desde el Ayuntamiento de Segovia se considera que la reparación y puesta en funcionamiento de la tubería de impulsión desde el embalse de Puente Alta

para el abastecimiento complementario de El Espinar, debe ser considerada como de suministro alternativo, y en todo caso de carácter provisional, en tanto se determine la solución definitiva para la incertidumbre de la presa de El Tejo.

Se señala que la planificación hidrológica 2028-2033 debe contemplar el peor escenario posible (demolición de la presa de El Tejo), e incorporar una partida presupuestaria para asegurar el abastecimiento de agua en la zona, aunque aún no puedan concretarse ni cuantificarse las acciones necesarias hasta no realizarse los estudios previos necesarios.

Respuesta:

Como ya se ha indicado en respuesta a la alegación primera se incluye una referencia entre las Decisiones a tomar de la Ficha DU-07 consistente en incluir el estudio de viabilidad y en su caso la construcción de la presa de Ciguiñuela como refuerzo para el suministro urbano de agua al sur de Segovia.

4.62. Escrito de observaciones Nº 076

Presentado por: Dña. Mercedes Gómez Rodríguez.

En nombre de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Alegación 1.

Los bosques actúan como infraestructuras naturales esenciales para el ciclo hidrológico.

Se solicita que, dentro de las medidas asociadas a obras e infraestructuras, se contemplen actuaciones de restauración hidrológico-forestal como herramienta clave para la gestión del ciclo hidrológico y se contemple la actuación indicada.

Respuesta:

Compartimos con la alegante acerca que los bosques contribuyen de forma esencial al ciclo hidrológico, mejorando la calidad de las aguas, mejorando la infiltración de los suelos, protegiendo a éstos de la erosión y a las infraestructuras hidráulicas de los efectos indeseados de aterramiento y colmatación, laminando las avenidas y protegiendo a las personas y los bienes de sus consecuencias. La gestión forestal preventiva y la protección de riberas fortalecen la resiliencia del medio hídrico.

El desarrollo en la planificación hidrológica del tema importante **DU-05 Gestión del riesgo de inundación** aborda impulsar las soluciones basadas en la naturaleza como medidas naturales de retención del agua, la restauración fluvial **y la restauración hidrológico forestal** de las cuencas hidrográficas y la lucha contra la desertificación, con la colaboración de todas las administraciones implicadas, ayuntamientos y comunidades autónomas y otras administraciones, para conseguir implementarlas.

Las posibles actuaciones de restauración hidrológico forestal en la cuenca no se citan expresamente en la ficha DU-07: Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos- Infraestructuras, ya que las infraestructuras identificadas son todas ellas artificiales: presas, embalses, canales y sus instalaciones asociadas. El papel de los bosques, como infraestructura natural, queda en segundo plano en el tema importante de la optimización de la oferta de los recursos hídricos.

Sin embargo, todas aquellas actuaciones que se identifiquen por parte de las administraciones competentes en las siguientes fases de planificación podrán ser incorporadas al Programa de Medidas del Plan Hidrológico del Duero de cuarto ciclo.

4.63. Escrito de observaciones Nº 077

Presentado por: D. Andrés Hernán.

En nombre de la Comunidad de Regantes Nuestra Señora La Virgen de los Remedios de Arandillo (Peñaranda de Duero)

Alegación previa.

Que una primera aproximación al documento evidencia el absoluto desprecio, persecución y condicionamiento del mismo respecto a la agricultura de regadío para las aguas superficiales […] está por completo impregnado de un interés "ambientalista", por lo que nos oponemos a su aprobación.

La primera medida del nuevo ciclo de planificación debería pasar por el análisis del cumplimiento del anterior, donde se ejecutaron en torno al 22 por 100 de las inversiones previstas, […] solo puede decirse objetivamente que ha fracasado por su incumplimiento fundamentalmente en cuanto a las inversiones previstas.

Respuesta:

No compartimos la primera observación del alegante: no hay ningún lugar del EpTI donde se haga un juicio negativo sobre la agricultura de regadío como el que se manifiesta en el escrito de alegaciones. En la Ficha DU-06 (cuyo título es "Sostenibilidad y relevancia del regadío") se indica, respecto al regadío: *son muchos los efectos positivos del regadío: fija de población en el medio rural; aporta mayor diversificación de cultivos; aporta la mayor fuente de materias primas para la alimentación humana; las zonas con regadío tienen una densidad de población tres veces superior a las del secano; impulsa el empleo al generar 3,6 veces más de empleos que el secano; en las zonas de regadío se incorporan 3,5 veces más jóvenes al sector agrario que en el secano; finalmente las zonas modernizadas generan hasta 7,5 veces más inversión que las zonas de secano. Estos valores son importantes en una demarcación hidrográfica en la que la un 77% de su territorio se corresponde con municipios en riesgo de despoblación.*

El valor de producción del regadío asciende a 1.269 M€ y supone el principal motor económico en gran parte del medio rural de la demarcación. Además, el regadío tiene un papel fundamental para asegurar la autonomía alimentaria y reducir la inflación de la cesta de compra del consumidor y tiene un efecto arrastre en el conjunto de la economía, ya que es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. La contribución del sistema agroalimentario a la economía española en el año 2020 se puede estimar en aproximadamente un 10,60%. Esta elevada contribución supone que el sistema agroalimentario es el segundo generador de riqueza nacional tras el turismo.

Debido a la mayor productividad del regadío frente al secano, la agricultura de regadío es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. En el caso de la demarcación del Duero alrededor del 30% del valor económico de la producción agraria proviene del regadío al aire libre o invernadero, porcentaje que para el conjunto de España se eleva a alrededor del 70%. Por tanto, el EpTI no evidencia ningún desprecio, persecución o condicionamiento a la agricultura de regadío, sin menoscabo de poner de manifiesto que alguna de las presiones que genera sobre las masas de agua requieren ser corregidas.

Tal y como se pone de manifiesto en la Ficha DU-09, el grado de ejecución de las medidas a fecha 31 de diciembre de 2024 es del 24,5% de la inversión prevista, valor escaso cuando ha pasado un tercio del tiempo del ciclo de planificación. Siendo esto así, sin embargo, se observa que en determinados grupos de medidas el avance es superior a la media: así en materia de saneamiento y depuración la ejecución supera el 45% de la inversión, en abastecimiento un 37%, en medidas de gestión de inundaciones un 34%. Reconociendo que existe un importante retraso en la ejecución de las medidas, no compartimos la visión tan negativa que muestra la alegante.

Alegación 1.

Que en lo que respecta particularmente a esta Comunidad de Regantes, consultados los datos en la aplicación MÍRAME-IDEDUERO de ese organismo, hemos comprobado que esta Comunidad consta con una dotación de riego bruta de 4.517 m3/ha cuando la dotación real debe ser de 6.000 m3/ha.

Respuesta:

La información de superficie, volumen y dotación que se considera en la elaboración del Plan Hidrológico para la Comunidad de Regantes Nuestra Señora La Virgen de los Remedios de Arandilla (Unidad elemental de Demanda Agraria 2100055 - Comunidad de regantes Nuestra Señora La Virgen de los Remedios de Arandilla) es: superficie de 350 hectáreas, el volumen demandado de 1.580.950 m^3/año y dotación 4.517 m^3/ha y año, ya que son los datos que figuran en su inscripción en el Registro de Aguas (Sección: A – Tomo nº: 167 – Hoja nº: 85 – Número: 26385) según Resolución de inscripción en el Registro de Aguas de fecha 4 de mayo de 2020 (Referencia Integra ISA-0035/2020). Esta es la superficie, volumen máximo anual y dotación que se considerará en el nuevo plan hidrológico.

Alegación 2.

DU-01. Contaminación difusa.

El diagnóstico del documento refleja de forma adecuada la persistencia de problemas de nitratos y biocidas, pero no valora suficientemente los esfuerzos ya realizados por agricultores y ganaderos (modernización de regadíos, asesoramiento en fertilización, implantación de GIP).

La caracterización de presiones debería diferenciar con mayor claridad entre cultivos intensivos, cultivos leñosos, ganadería estabulada y extensiva, pues sus aportes de nutrientes y fitosanitarios son muy distintos.

Se aprecia un déficit en la cuantificación de los beneficios de las inversiones en modernización de regadíos y fertiirrigación: sin esos datos es difícil justificar medidas más restrictivas.

Respuesta:

Empezando por la última observación, como se ha comentado en la respuesta a la primera alegación, el EpTI deja de manifiesto la relevancia de la modernización del regadío para el logro de los objetivos ambientales y la mejora de la viabilidad de las explotaciones. Sin embargo, las presiones por contaminación difusa no se deben exclusivamente y en su mayoría al regadío donde el aporte de agua y el riesgo de lixiviado está controlado, sino al secano, a las aplicaciones de estiércoles y purines y a otras actividades como puede ser las descargas de aguas residuales urbanas no correctamente

depuradas o los tratamientos biocidas en infraestructuras lineales, como se pone de manifiesto en la Ficha DU-01.

Estamos de acuerdo en que la modernización de regadíos permite aplicar nuevas tecnologías en el sector agrario, sin este tipo de infraestructuras sería imposible llegar a conseguir al riego de precisión, se maneja mejor el agua, y consecuentemente se evita que las aguas de retorno de riego sean menos y con menor carga contaminante, pero por el contrario el poder disponer de mejores infraestructuras da pie a siembras más densas, que se traducen en más rendimiento por hectárea y más necesidad de abonado, también ocurre que esto posibilita la obtención de dos cosechas en un mismo año, más cultivo por consiguiente más abonado, exceptuando los cultivos de leguminosas.

Las estaciones de medida existentes tanto en aguas subterráneas como en ríos y arroyos que drenan algunas de las zonas regables, siguen dando valores de contenido en sustancias nitrogenados por encima de los limites legalmente establecidos. Analizando datos procedentes de sistemas de control de otros organismos, SINAC, controles sanitarios, campañas de medición en campo realizadas con nuestros medios, siempre aparecen algunos valores altos en zonas de mayor actividad agroganadera.

La caracterización de la presión por contaminación difusa ya tiene en cuenta los tipos de cultivos y la carga ganadera en cada cuenca vertiente de la demarcación hidrográfica, ya que se utiliza para identificar las presiones y los impactos dos fuentes de información: las redes oficiales de control de calidad de agua superficial y subterránea y los balances que el MAPA realiza cada dos años sobre el excedente de nitrógeno que provoca esa carga de nutrientes en las aguas. Y esta última fuente de información utiliza la información sobre cultivos, los sistemas de cultivo y las prácticas agrarias y ganaderas en cada zona.

Los esfuerzos que realizan los agricultores son conocidos porque ya se encargan las organizaciones profesionales agrarias de realzarlos; sin embargo, pese a ese esfuerzo, el problema no va a menos por lo que debemos preguntarnos qué no estamos haciendo bien o qué debemos mejorar. También desde instancias europeas se advierte a España con sanciones millonarias en aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2024 que concluye que España no cumple la directiva de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. De hecho, una de las comunidades autónomas en la que la sentencia pone el foco es Castilla y León, territorio en la que ejerce su actividad la asociación alegante, al no haber aplicado las medidas obligatorias ni lograr mejorar la calidad de las aguas. Dos años después de la sentencia, la Comisión Europea señala que solo 4 comunidades autónomas españolas no han tomado medidas, entre ellas Castilla y León. (Noticia La Gaceta de Salamanca, de 5 de junio de 2026). La amplia legislación existente para regular y minimizar este problema (entre otras, el Real Decreto 47/2022, el Real Decreto 1514/2009, relativo a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, o el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios) da idea de la complejidad para su resolución.

Alegación 3.

DU-01. Contaminación difusa.

Sobre los "trabajos de Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación terminados en marzo de 2025", se plantean las siguientes dudas:

- *¿Cuántos puntos se han muestreado cada campaña en la demarcación, tanto para aguas superficiales como para subterráneas?*
- *¿Este trabajo va a ser repetitivo? ¿Cuál es el programa/planing y el coste presupuestario anual destinado a él?*

Solicitamos una copia de los trabajos de "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación"

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, el trabajo "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación", se ha llevado a cabo por el MITERD en las campañas 2023 y 2024, duplicando analíticas en cada punto de muestro. En la demarcación hidrográfica del Duero, sobre 79 puntos de muestreo de aguas superficiales de la demarcación hidrográfica, atribuyen el 61% de la contaminación por nitratos a origen agrario (principalmente fertilizantes inorgánicos) y el 25% a mezclas con aguas residuales urbanas, el 14% restante de origen indeterminado. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, sobre 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, se muestra un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería.

Dado que el trabajo fue encargado por la Dirección General del Agua, del MITECO, puede dirigirse a ese departamento en petición del trabajo.

Alegación 4.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 1 (Reducción de excedentes y bandas de protección):

Las reducciones propuestas (hasta un 50% de excedentes o más) deben graduarse según tipología de cultivo, textura del suelo y riesgo de lixiviación, evitando fijar límites uniformes que puedan poner en peligro rentabilidad de cultivos con baja lixiviación (viñedo, olivar, almendro).

Las bandas de vegetación de ribera son útiles, pero su implantación debería ser voluntaria con compensaciones claras y planes de control de fauna (topillo campesino, conejos) para no crear nuevos problemas.

Respuesta:

La normativa del Plan Hidrológico, específicamente en su Apéndice 14.2, establece umbrales máximos de excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) que distinguen explícitamente entre cultivos herbáceos y leñosos, tanto en regadío como en secano. Para los cultivos leñosos (donde se incluyen viñedos, olivares y almendros), los valores de excedente permitidos son significativamente distintos y más ajustados a su fisiología que los de los herbáceos.

Las reducciones propuestas no son arbitrarias tampoco, sino que resultan de la aplicación del modelo PATRICAL, una herramienta de simulación del ciclo hidrológico y la calidad de las aguas distribuida espacialmente. Este modelo calcula el balance de nitrógeno teniendo en cuenta variables territoriales específicas como la recarga por lluvia, la textura del suelo (a través de los coeficientes de escorrentía y lixiviación) y el tipo de cultivo por término municipal. La zonificación se realiza a nivel de "sectores" de masas de agua, lo que permite adaptar la exigencia a la realidad geomorfológica y al riesgo real de cada zona.

La propuesta sobre la voluntariedad de las bandas de protección parece razonable y se abundará sobre ella en el presente ciclo de planificación. Se debe indicar, por aclarar, que la vegetación de ribera puede constituir un refugio para distintas plagas, pero también para sus depredadores, que necesitan espacios donde establecer zonas de cría y refugio para desarrollarse.

Alegación 5.

Respecto al tema importante DU-01, se comparte el fomento de biofertilizantes, bioestimulantes y control biológico, pero se requiere apoyo técnico y financiero estable, así como validación agronómica local antes de exigir sustitución de fertilizantes tradicionales.

Debería contemplarse un periodo transitorio de al menos 5-7 años para la adopción realista de estas prácticas.

Respuesta:

Las propuestas que hace la Ficha DU-01 para la alternativa 2 son propuestas que pretenden orientar la decisión de las autoridades competentes en materia de investigación y transferencia de tecnología para abordarlos y movilizar la inversión necesaria para esta mejora de conocimiento. Pero para impulsar esas decisiones es necesario que los sectores implicados (agua, agricultura, medio ambiente, …) orienten en esa línea y confirmen esta posible mejora. No se pretende establecer como obligatorio el uso de estos productos en tanto se justifique su eficacia y sean competitivos económicamente, para lo cual se necesita ese trabajo de investigación y transferencia.

Alegación 6.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 3 (Depuración urbana):

Es positivo que se incluyan fuentes urbanas, pero el documento debería cuantificar su aportación relativa al problema global para no sobrecargar sólo al sector primario.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, las fuentes de contaminación difusa son varias y entre ellas están las descargas urbanas no adecuadamente tratadas. Sin embargo, sin negar su contribución al problema general, el trabajo de estudio del origen de la contaminación nitrogenada en las aguas de la demarcación hidrográfica al que se alude en la respuesta a la alegación 3ª, el origen del nitrógeno encontrado en el agua es de origen agrario en el 61% de las muestras de agua superficial y en el 55% de las muestras de agua subterránea, lo que pone de manifiesto que la mayoría de los nitratos presentes en el agua tiene un origen agrario.

Alegación 7.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 4 (Plantas de biogás):

La valorización de purines es esencial, pero se precisa planificación territorial: ubicación de plantas, logística de recogida y retorno del digestato tratado, evitando concentraciones que generen rechazo social.

Respuesta:

Estamos de acuerdo con parte de lo que se expone en la alegación, en la ficha se propone como alternativa, porque su correcto manejo genera menos problemas ambientales que las prácticas de aplicación de los purines en bruto como se está haciendo en la actualidad. No obstante, como se indica sería necesaria una planificación territorial de esta nueva actividad. Hasta la fecha la autoridad competente (comunidad autónoma) no nos ha trasladado ningún criterio al respecto.

Alegación 8.

La dispersión competencial señalada en la Ficha DU-01 del EPTI requiere de mecanismos concretos:

- *Convenios entre CHD y Consejerías de Agricultura para seguimiento conjunto.*
- *Creación de mesas de trabajo permanentes con organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes.*
- *Inclusión de Juntas Agrarias Locales en la difusión y control de buenas prácticas.*

Antes de aprobar medidas que impliquen reducción de fertilización o prohibición de biocidas, debe elaborarse un análisis coste-beneficio que contemple:

- *Pérdidas de producción y costes de adaptación.*
- *Impacto en empleo rural y en industrias de insumos.*
- *Ahorros ambientales y beneficios para el abastecimiento de agua.*

Respuesta:

La cooperación entre administraciones y la difusión de la problemática de la contaminación difusa son aspectos relevantes para buscar las soluciones. De hecho, se ha avanzado en los últimos cinco años en la percepción del problema y el convencimiento de que se debe ser proactivo en la búsqueda de soluciones, a lo que ha contribuido la visibilidad de problema mediante el expediente sancionador a España por incumplimiento de la Directiva de nitratos y por las medidas limitantes que se incluyen en

los planes hidrológicos. También las organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes han desarrollado actividades formativas para sus asociados poniendo el foco también en este problema de la contaminación difusa: ya es normal que en las reuniones técnicas que estas entidades organizan se empiece a hablar del problema del exceso de nutrientes no solo como un problema económico de rentabilidad de explotación o productividad de los cultivos, sino también como un modo de no perjudicar al medio ambiente.

Dicho esto, los convenios a los que se refiere la alegación no pueden pretender eludir las competencias de cada administración en esta materia, en la que el seguimiento de la contaminación en agua corresponde a la administración del agua y la implantación de medidas corresponde a la administración ambiental y agraria.

La Ficha DU-01 en la alternativa 1 evalúa el impacto de la reducción de excedentes de sustancias nitrogenadas en función de la zona de la demarcación hidrográfica donde nos encontremos. Esta alternativa 1 *supone la máxima reducción posible de los excedentes de nitrógeno (no de la aplicación) compatible con unas producciones agrarias óptimas. (…). En este análisis se identifica que, por ejemplo, una reducción de cerca del 35% de la fertilización implicaría una reducción del 50% de los excedentes y una reducción del 56% de la aplicación de fertilizantes una reducción del 80% de los excedentes de nitrógeno.*

Y se analiza en la Tabla 1 de la Ficha el efecto de la reducción de excedentes sobre el territorio:

Reducción de aplicación de N	Reducción de excedentes	Superficie sector (km²)
10%	*25%*	*3.227*
20%	*50%*	*19.629*
40%	*80%*	*3.872*

Esta información podría servir de ayuda a la Administración autonómica competente, en esta alternativa, para reforzar los planes de actuación de manera que se puedan limitar la aplicación de nutrientes de manera zonal de forma que se asegure que los excedentes sean inferiores a los contemplados en el citado apéndice 14.2. Esto podría implementarse de diversas formas:

- *Mediante la reducción de las cantidades máximas de N por hectárea en los planes de actuación de las zonas vulnerables;*
- *Mediante la reducción de las cantidades a aplicar de nutrientes fuera de las zonas vulnerables (de acuerdo con los criterios de Patrical) a través de normas de condicionalidad vinculadas a aumentos de las ayudas PAC.*
- *Mediante la aplicación de tributos a gravando el exceso de N adquirido en el mercado sobre la dosis contemplada en los planes de actuación.*

Alegación 9.

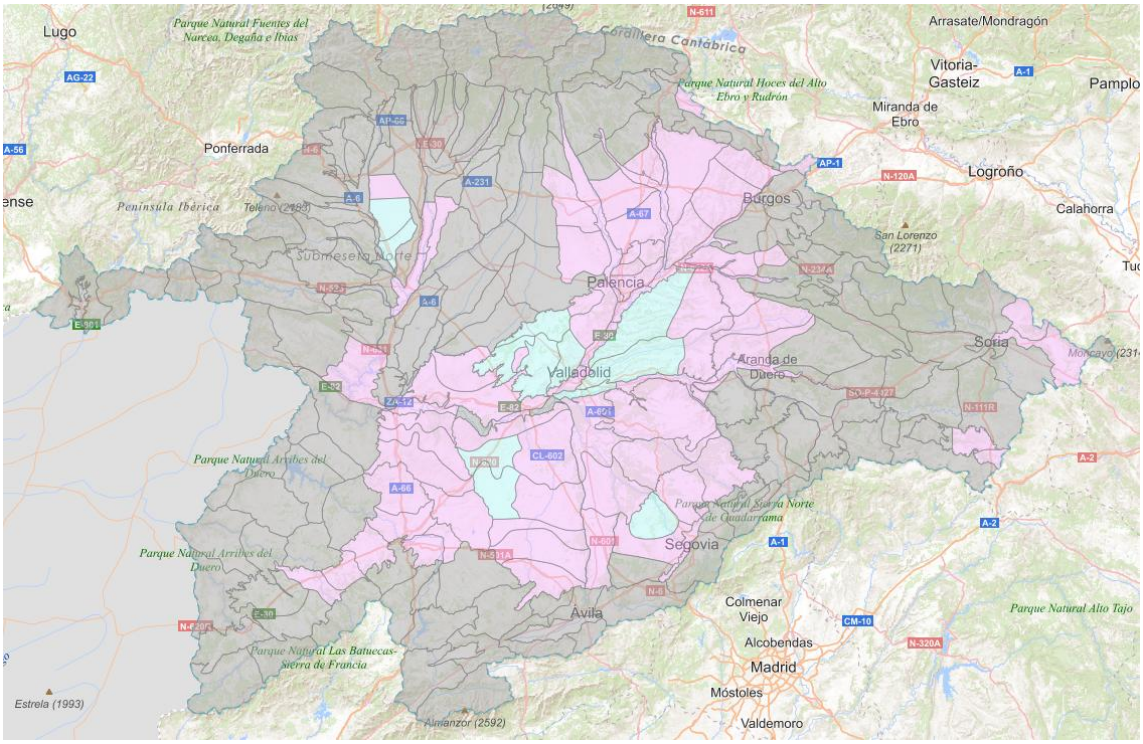
Se proponen algunas medidas en el tema importante DU-01:

- *Ajustar los límites de aplicación de nitrógeno según balance real de cada cultivo y zona (considerar coeficientes de absorción y mineralización).*

- *Priorizar el control y mejora de puntos de vertido urbano e industrial antes de imponer nuevas restricciones al abonado agrícola.*
- *Incluir líneas de ayuda específicas para:*
    - *Implantar bandas de protección voluntarias y mantenerlas.*
    - *Transición a biofertilizantes y control biológico.*
    - *Asesoramiento profesional y agricultura de precisión.*
- *Potenciar el uso de herramientas de gestión de nutrientes (cuadernos digitales, sensores de N en suelo/planta).*
- *Favorecer acuerdos de economía circular entre plantas de biogás, explotaciones ganaderas y agricultores para el uso seguro del digestato.*
- *Seguimos demandando al MITERD y a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la realización de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario mediante el estudio y muestreo significativo de parcelas de riego por gravedad, de riego modernizado y parcelas en las que ya se esté utilizando la fertirrigación para poder sacar conclusiones basadas en datos sobre la mejora que implica la tecnificación y digitalización del regadío en este apartado.*

Respuesta:

Como se indica en el EpTI y también en el Plan Hidrológico vigente, los límites del excedente de sustancias nitrogenadas se han hecho a partir de la presión identificada en forma de contenido de nitratos en las agua superficiales y subterráneas. Y esos límites se han fijado en forma de sectores territoriales, tal y como aparece en la imagen (en rosa la reducción del excedente sería del 25%, en azul la reducción del excedente sería del 80% del actual y en gris no sería necesaria esa reducción):



La traslación de la reducción de excedentes en cada sector a los cultivos presentes en el mismo, requiere un trabajo de detalle de los organismos competentes en materia agraria que pueden hacer

esa distribución con criterios más técnicos que los que puede hacer el organismo de cuenca. De hecho, esta distribución de sectores tiene como fin ofrecer a la autoridad competente una información con la que realizar el análisis que solicita la alegante.

Sin duda es necesario mejorar el control de las descargas de las EDAR urbanas e industriales, sobre todo de poblaciones pequeñas. Pero como pone de manifiesto la Ficha, el análisis de origen de la contaminación difusa por técnicas isotópicas concluye que el origen de la contaminación en la mayoría de los puntos de muestreos es el agrario al encontrar en más de la mitad de las muestras nitrógeno de origen inorgánico y de residuos animales (61% de las muestras en aguas superficiales y 55% en aguas subterráneas). Por tanto, parece lógico que pongamos el objetivo en cómo reducir esos excedentes.

Coincidimos con la alegante en que bandas de protección, asesoramiento y uso de nuevos productos deben ser medidas de carácter voluntario y adecuadamente compensadas. Y pensamos que el marco financiero de la PAC es la herramienta adecuada para ello. Lógicamente para que esto sea factible es necesarios que la administración competente en esta materia tenga interés en dotar a estos servicios ecosistémicos de la financiación adecuada.

Las herramientas de gestión de nutrientes ya son obligatorias a partir de la entrada en vigor del Real Decreto de nutrición sostenible de los suelos, por lo que esperamos que esta medida contribuya a la reducción de la contaminación cuando tenga el suficiente recorrido, ya que no será inmediato. El seguimiento de la contaminación en las redes de control de agua nos dará información sobre su eficacia.

El uso del digestato procedentes de plantas de biogas alimentadas con purines animales en lugar de la aplicación directa al suelo puede ser una mejora en la reducción de la contaminación siempre que haya transparencia en la aplicación, distribución y seguimiento y no supongan una mayor aportación de nutrientes al suelo. De hecho, la Ficha DU-01 señala que, para *el caso concreto de Castilla y León, que supone el 98,26 % de la demarcación del Duero, para el año 2021, 61.186 tn de nitrógeno de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 359.013 tn de N. Si se eliminase totalmente el desecho ganadero mediante plantas de biogás y no se sustituyese la fertilización orgánica en cultivos por inorgánica, se reduciría en un 17% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso del 50% de los excedentes de nitrógeno.*

Para el caso del fósforo y Castilla y León, para el año 2021, 13.736 tn de P de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 58.261 tn de P. En este caso, la eliminación del desecho ganadero mediante plantas de biogás supondría que se reduciría en un 23% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso superior al 50% de los excedentes de fósforo.

La eliminación de la fertilización orgánica mediante revalorización y transformación en biogás de la deyección ganadera, sin sustitución por fertilización inorgánica, permitiría cumplir los objetivos de la UE de reducir un 20% el uso de fertilizantes y reducir un 50% los excedentes antes de 2030.

Respecto a la demanda de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario bajo distintos sistemas de regadío, consideramos que es un trabajo que no está hecho pero que no corresponde al MITERD al haber un ministerio y unas consejerías autonómicas competentes en materia agraria.

Alegación 10.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Estando de acuerdo en que debe buscarse en todo momento un aprovechamiento sostenible del recurso que mantenga las masas de agua, ya que esta es la forma de garantizar la seguridad de las explotaciones agrícolas, se deben fijar uno objetivos a alcanzar con unos valores definidos y razonables que garanticen la actividad económica que se viene desarrollando. Considerar la serie histórica de la piezometría de la masa como dato de partida a la hora de determinar las acciones a realizar supone definir un objetivo a alcanzar erróneo, enmascarar la realidad actual de la masa y no otorgar a las medidas que el usuario está llevando a cabo (digitalización, control de las extracciones, gestión por parte de las comunidades de usuarios, etc) la importancia que tienen. [..]

De la misma forma que se tiene un control sobre el uso del recurso, creemos necesario que se hagan estudios hidrogeológicos de detalle en los que, de forma pública y accesible a todos los interesados, se analice la situación real en estas masas de agua de las aportaciones al acuífero y su tasa de renovación […].

La mitigación de los efectos del cambio climático que se plantean sobre las masas de agua subterránea, se debe plantear, no desde la restricción de las extracciones, sino desde el control de las mismas y la ejecución de una serie de infraestructuras de reserva o acumulación que de forma progresiva permitan la sustitución de bombeos y otorguen garantía a la actividad económica en situaciones de escasez sin revertir la dinámica natural del acuífero.

Respecto a las alternativas que se plantean en el documento, estamos totalmente en desacuerdo con el núcleo central de todas ellas: el mantenimiento de las medidas normativas del plan hidrológico vigente para el nuevo ciclo de planificación, sobre todo en lo que se refiere a los artículos 33. [..]

Respuesta:

Los objetivos para las masas de agua subterránea son alcanzar el buen estado y evitar el deterioro, tal y como establece el artículo 4 de la Directiva marco de al Agua y el artículo 40 del TRLA. Ese buen estado para el objeto de la ficha DU-02 es que las extracciones no superen a los recursos naturales, simplificando. Este objetivo además redunda en beneficio de los usuarios del agua ya que el buen estado contribuye a un aumento de los niveles piezométricos que suponen menos costes de bombeo. Por tanto, el objetivo es claro. Y ante posibles colisiones de este buen estado con los usos, la propia directiva en su artículo 4(5) señala cuáles son los requisitos que deben verificarse:

a) que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende el uso del agua no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor que no suponga un coste desproporcionado;

b) que la administración proponente (en este caso la comunidad autónoma) garantice para las aguas superficiales, el mejor estado ecológico y estado químico posibles teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación,

c) que la administración proponente para las aguas subterráneas garantice los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación;

d) que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.

Tal y como se plantea la alegación no queda claro si estos criterios se garantizan.

Conocer la realidad de las reservas subterráneas de agua es un aspecto clave en la adecuada gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Para ello el seguimiento de los casi 500 piezómetros de la cuenca ofrece una información muy valiosa. Gracias a esta información se concluye que en la actualidad la explotación del agua supone que en las masas de agua en mal estado cuantitativo se extrae entre un 10 y un 14% más de lo que se recarga anualmente por medios naturales, es decir, sacamos algo más agua de la que la naturaleza es capaz de reponer.

Como consecuencia los niveles del agua subterránea descienden ligeramente, incrementando los costes de producción del sector agrícola y poniendo en serio peligro la supervivencia del modelo socioeconómico actual y del entramado ecológico de la zona. Todo esto sin olvidar que, en las dos últimas décadas del siglo pasado, estas masas sufrieron un descenso generalizado en sus niveles de agua de unos 30 metros, situación que ha repercutido en la merma de caudales en los ríos que se asientan sobre estas masas.

Por todo ello la Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto en marcha estudios en colaboración con distintos organismos como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Dirección General del Agua (DGA), para seguir mejorando en el conocimiento del estado actual de la masas de agua subterránea y proponer medidas que permitan la recuperación paulatina de las mismas, gracias al ahorro de agua con una correcta gestión agrícola y con medidas de recarga artificial, sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales, done sea posible, se mencionan este tipo de actuaciones porque están implantadas en algunas zonas de estas masas con resultados esperanzadores. De todas formas, en la ficha ya se proponen actuaciones de este tipo y otras. Toda esta información se vuelca en los planes hidrológicos, cada seis años, y en los informes de seguimiento cada año; además los datos de piezometría y calidad de las aguas subterráneas, así como los balances están disponibles en la base documental Mírame-IDEDuero que se puede consultar por cualquier ciudadano en la web de la Confederación (https://mirame.chduero.es/chduero/public/home).

No podemos compartir la petición de la alegante de eliminar todas las restricciones y limitaciones sobre las masas de agua en mal estado cuantitativo y, como alternativa, no poner ningún límite a nuevos usos del agua ya que, de aceptarlo, supondría no solo no alcanzar el buen estado sino también contribuir al deterioro adicional y, de forma añadida, perjudicar a los usuarios que ahora disponen de derecho vigente y que esperan la protección administrativa de su derecho.

Alegación 11.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Para la configuración del nuevo plan hidrológico se propone:

1.- La derogación de los artículos 33 y 34 de la actual normativa del plan hidrológico vigente y la reformulación de aquellos artículos relacionados para permitir la novación de todos los derechos inscritos que estén en explotación.

2.- Permitir la explotación de los aprovechamientos otorgados (incluso el otorgamiento de otros nuevos) dentro de aquellos espacios naturales o zonas protegidas conforme lo establezca la autoridad ambiental y con las características que documento de gestión correspondiente determine.

3.- Ejecución de aquellas infraestructuras que permitan la recarga de las masas de agua o la diminución de la presión sobre las mismas y estudios de detalle de determinadas zonas con mayores dificultades con la finalidad de dar soluciones que permitan mantener la actividad económica que se viene desarrollando.

4.- Control de las extracciones en toda la cuenca en la misma medida y con la misma intensidad que se exige a las CUAS.

5.- Revisión de las dotaciones brutas comarcales, su asignación y su configuración.

6.- Incentivar económicamente al usuario en la adopción de medidas e instrumentos tendentes a la mejora en el control de las extracciones o programas de digitalización que participen en el conocimiento y caracterización de la masa de agua.

7.- Establecer mecanismos de transferencia del conocimiento generado a nivel técnico y científico como programas de formación del usuario, plataformas de asesoramiento o redes de información, y establecer algún órgano que permita la participación del usuario de aguas subterráneas en la toma de decisiones que afectan a la cuenca.

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación anterior, los artículos 33 y 34 constituyen un régimen que permite alcanzar el buen estado de las masas de agua y evitar el deterioro. De una forma u otra, estos criterios se vienen aplicando en la demarcación hidrográfica desde 2010 y son parte de la explicación de que la tendencia descendente de la piezometría identificada en los años 1980 a 2008, se haya suavizado e incluso estabilizado.

En cuanto a lo que manifiesta el alegante de la prohibición de aprovechamientos otorgados, hasta la fecha no se ha prohibido su uso siempre que se ajusten a la legalidad. El otorgamiento de nuevos aprovechamientos en masas de agua en mal estado cuantitativo, entendemos que no contribuye en absoluto a una mejora de la situación, ni se ajusta a un uso racional, que asegure el futuro del regadío en dichas masas, sería como incentivar la vuelta a la situación de los años 80 y 90 del siglo pasado, con descensos del nivel piezométrico de 2 y 3 metros por año.

La recarga artificial de acuíferos es una práctica que se lleva haciendo es esta cuenca desde hace más de 20 años, las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 la Confederación encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos,

teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, como aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, nos parece una alternativa a tener en cuenta para el fin que propone el alegante, por lo que ya se contempla como medida en la alternativa 3 del EpTI, a la espera de que la autoridad competente pueda validarla y asumirla teniendo en cuenta todos los condicionantes: ubicación de estas infraestructuras, su proximidad a cauces con recurso suficiente, los costes de las obras, su financiación, y los costes de explotación y energía, pues la mayoría han de llenarse con bombeos,…; en definitiva muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

La instalación de contadores para el control de las extracciones de agua está regulada según La normativa española que obliga a todos los aprovechamientos de aguas a disponer de sistemas de medición de caudales, según el TRLA (art. 55.4) y el Reglamento del DPH. Esta obligación se ha reforzado con la Orden TED/1191/2024, que impone contadores homologados y control electrónico con envío de datos. Los equipos deben cumplir normativa metrológica y adaptarse al tipo de captación. Como se ha explicado en diversos foros, esta Orden, así como la que ha sustituido de 2009, permiten que más del 80% de la demanda de agua de la cuenca pase por sistemas de control. Evidentemente los contadores de la categoría 1ª, que suponen poco volumen a escala de cuenca (menos del 20%) pero número muy alto, van progresivamente instalándose y remitiendo información.

Las dotaciones brutas máximas anuales aplicables en los cultivos por comarcas agrarias, que figuran en el Plan Hidrológico, están basadas en datos obtenidos de publicaciones de organismos públicos como son las distintas Consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, del Ministerio de Agricultura, y antes de su aprobación se someten a información pública, como todo el contenido del Plan Hidrológico. En el Anejo 5 del Plan Hidrológico vigente se explica el procedimiento para su cálculo: cálculo de la dotación neta a partir de las necesidades de los cultivos obtenidas de InfoRiego y de la distribución de los cultivos a partir de las declaraciones de la PAC de los años 2013-2019; cálculo de la eficiencia global: calculada como el producto de las eficiencias de transporte, distribución y aplicación; cálculo de la demanda bruta como el producto de la dotación neta por la superficie asignada entre la eficiencia global. Consideramos que es una información adecuada al proceder de fuentes oficiales y no sujeta a apreciación subjetiva.

Respecto a incentivar económicamente la instalación de contadores, el artículo 3 de la Orden TED/1191/2024 es muy clara al respecto al señalar que, en *todos los aprovechamientos de aguas,* ***los titulares están obligados a instalar y mantener un sistema de control volumétrico*** *que permita la medición de los volúmenes de agua captados, junto con un sistema de registro y almacenamiento.*

La Confederación no tiene competencias en materia de difusión y transferencia de tecnología. Normalmente da cuenta de los trabajos que realizad en el ámbito del dominio público hidráulico, seguridad y gestión de infraestructuras y planificación hidrológica en los foros ordinarios que otros agentes organizan: congresos de seguridad de presas, congresos de comunidades de regantes, jornadas de restauración de ríos, … Por otra parte, en el ámbito de las CUAs, anualmente se celebran reuniones técnicas de la Confederación con sus presidentes para aclarar conceptos y fomentar las buenas prácticas. Lógicamente no se invita a esas sesiones a las comunidades de regantes de aguas

superficiales como la alegante que ya tiene su ámbito de representación en la Junta de Explotación Pisuerga-Bajo Duero.

Los usuarios del agua participan en la gestión de la cuenca a través de los órganos que están establecidos normativamente. Así el artículo 26 del TRLA identifica como órganos de gestión, en régimen de participación, las Juntas de Explotación. Su finalidad es coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las masas de agua cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Este es el marco en que los usuarios de aguas subterráneas pueden participar; de hecho, en la alternativa 1 de este tema importantes se establece como una de las medidas que podrían ponerse en marcha.

Alegación 12.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Ya hemos dejado claro en la introducción cuál es la situación demográfica y económica de nuestras zonas rurales, por lo que cualquier medida que se aplique en mejorar los problemas contenidos en la ficha no debe empeorar la situación descrita. Si se mantiene la consecución de ese objetivo, no nos oponemos a que se puedan adoptar medidas que puedan mejorar la conectividad fluvial (longitudinal, lateral y vertical) que mejore el funcionamiento de los ecosistemas.

Del análisis de la ficha parece desprenderse una apuesta prioritaria por modelos intensivos de naturalización fluvial, basados en esquemas de restauración ecológica donde el cauce aparece acompañado por bosque de galería y bandas de vegetación herbácea en ambas márgenes, favoreciendo así la conectividad longitudinal y transversal de los flujos hídricos y sedimentarios [..] dicho enfoque puede resultar excesivamente homogéneo si no se tienen suficientemente en cuenta las particularidades geomorfológicas, históricas y territoriales de numerosos cauces [..]. Existen determinados tramos del Dominio Público Hidráulico que, en realidad, constituyen cauces profundamente transformados por la acción humana a lo largo de siglos, especialmente sobre antiguas llanuras lacustres o cuencas endorreicas sedimentarias desarrolladas durante el Pleistoceno.

En numerosos casos, los cauces actuales responden a procesos históricos de excavación y drenaje artificial desarrollados con el objetivo de desecar zonas inundables o lagunares y aprovechar agronómicamente las fértiles vegas originadas por procesos de colmatación sedimentaria. [..]. Por ello, en determinados sistemas hidrológicos altamente antropizados, la recuperación de modelos teóricos de naturalización podría requerir alteraciones territoriales de enorme magnitud, incompatibles en muchos casos con la realidad física actual, con los usos consolidados existentes y con los derechos legítimamente adquiridos sobre los terrenos adyacentes.

Asimismo, debe tenerse presente que sobre los terrenos colindantes con los cauces concurren frecuentemente derechos consolidados, singularmente derechos de propiedad privada, cuya eventual afección exigiría las correspondientes compensaciones y una adecuada justificación basada en criterios de proporcionalidad.

Respuesta:

Se agradece el comentario sobre la buena disposición para la mejora de los ecosistemas fluviales.

La normativa actual apuesta por una restauración fluvial que lleve a los ríos, lagos y humedales a una situación lo más similar a su situación original previa a la intervención humana. Esto permite crear entornos más resilientes a la contaminación y más seguros ante eventos extremos como inundaciones, entre otros, con las consiguientes ventajas para los seres humanos. Por situación original no se entiende una situación uniforme, sino adaptada a cada tipo de río. A modo de ejemplo, aquellos ríos con hidrología extrema no tienen asociado un bosque de ribera ya que periódicamente las avenidas lo arrastran, permitiendo únicamente la presencia de individuos jóvenes. Para estos ríos la existencia de una gran presencia de bosque de galería es síntoma de alteración del régimen hídrico, lo cual suele ocurrir, por ejemplo, aguas debajo de los embalses.

Si bien la alteración de los cauces se lleva haciendo desde antiguo, ha sido en el siglo XX donde se han producido las grandes actuaciones de drenaje y encorsetamiento del río. Las imágenes del vuelo americano del 56 así lo ponen de manifiesto, ya que muestran un grado de naturalidad de los cauces muy distinto al actual.

De acuerdo con la normativa y los documentos técnicos de planificación, una masa de agua superficial se puede designar como muy modificada (HMWB, por sus siglas en inglés) cuando, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza. Este "cambio sustancial" se entiende como una modificación de sus características hidromorfológicas que impide que la masa alcance el buen estado ecológico. Esto debe analizarse minuciosamente mediante distintas revisiones tasadas en la normativa, y así se ha hecho en los sucesivos planes hidrológicos. En el último, a modo de ejemplo, se han designado 186 masas de agua río muy modificados y se van a volver a revisar en este ciclo de planificación.

Cabe mencionar también que la propiedad privada no puede prevalecer sobre terrenos que, por sus características geofísicas, forman parte del cauce natural. La propiedad privada en zonas colindantes a ríos no es absoluta; está intrínsecamente limitada por la ley para garantizar la seguridad pública y la protección ambiental, como pone de manifiesto el tenor de los artículos 6 y 9 del RDPH, entre otros. La jurisprudencia del Tribunal Supremo avala que la Administración proteja el DPH sin indemnizaciones automáticas, ya que actuar sobre el cauce natural es una obligación legal para alcanzar el buen estado de las aguas, objetivo que constituye un interés público superior.

Alegación 13.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Parece razonable admitir la posibilidad de actuaciones de gestión activa y mantenimiento de la vegetación de ribera, aplicando criterios técnicos y silvícolas semejantes a los utilizados en otras masas forestales, especialmente cuando dichas actuaciones resulten necesarias por motivos hidráulicos, de seguridad, sanitarios o de conservación. […]

Se considera necesario que el instrumento de planificación hidrológica contemple la posibilidad de autorizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales, teniendo en cuenta sus características geomorfológicas, los usos preexistentes y los intereses legítimos concurrentes. […].

Especial atención merece la proliferación del carrizal y otras especies invasoras o expansivas, cuyo desarrollo puede reducir significativamente la capacidad hidráulica de desagüe y alterar el equilibrio

ecológico de determinados tramos fluviales. Por ello, se considera conveniente que el futuro instrumento de planificación contemple expresamente medidas de control y gestión activa de este tipo de formaciones vegetales cuando existan razones hidráulicas, ambientales o de seguridad que así lo aconsejen.

Respuesta:

Los criterios técnicos y silvícolas utilizados en otras masas forestales no tienen por qué se similares a los que aplican a la vegetación de ribera, al ser el río un elemento diferenciador en su creación y modelado. Las mejores actuaciones para la mejora de las condiciones hidráulicas, de seguridad, sanitarias o de conservación, son las de restauración del río a su situación original, en la que su configuración, trazado, brazos secundarios y llanura de inundación permitan la laminación de avenidas o el filtrado de nutrientes y otras sustancias nocivas para la salud.

Se está de acuerdo en realizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales. Así se hace, de hecho. No se abunda más ante la generalidad del comentario.

Independientemente de que en alguna circunstancia puedan aplicarse medidas de control activo de especies invasoras, se debe recordar que la restauración de la conectividad longitudinal y lateral, junto con la recuperación de la morfología natural del cauce, permite que el ecosistema funcione mediante mecanismos de control natural frente a especies invasoras. Un río con un hábitat naturalizado favorece el mantenimiento de las comunidades biológicas autóctonas, dificultando que las especies invasoras desplacen a los endemismos locales. La alteración del régimen natural de los ríos y la creación de aguas estancadas (paso de régimen lótico a léntico) son precisamente los factores que facilitan la proliferación de especies exóticas.

Alegación 14.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Respecto a las obras de cruce aéreo o subterráneo de infraestructuras sobre cauces públicos, se considera necesario que el nuevo Plan Hidrológico otorgue un mayor peso a los criterios técnicos e hidráulicos en la evaluación de las actuaciones proyectadas, evitando que el condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada. […]

En relación con las autorizaciones de obras en el Dominio Público Hidráulico, se considera igualmente conveniente admitir la aplicación del criterio de escala para el cálculo hidrológico de avenidas mediante el Método Racional Simplificado, así como permitir simulaciones hidráulicas basadas en levantamientos topográficos específicos realizados para cada actuación.

Finalmente, se considera de gran interés que la Confederación Hidrográfica del Duero establezca, de forma previa y suficientemente clara, criterios técnicos orientativos para la tramitación de autorizaciones relativas a puentes, pasarelas y otras obras sobre cauces.

Respuesta:

Los condicionantes ambientales son un requisito que establece la normativa actual. No se la idea por la que el "condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada" en las actuaciones en cauce.

El uso del método racional simplificado para cálculos hidráulicos en la planificación se incluye en el Anexo XI del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Se remite a esta norma y no al plan hidrológico el resto de observaciones presentadas sobre autorizaciones de obras en cauce.

Alegación 15.

DU-05 Gestión del riesgo de inundación

Se considera razonable que el instrumento de planificación permita incorporar estudios hidrológicos e hidráulicos de mayor detalle, sustentados en levantamientos topográficos específicos, modelizaciones bidimensionales, campañas de campo y análisis hidráulicos adaptados a las características concretas de cada emplazamiento.

Este criterio de mayor precisión técnica debería poder extenderse también a la determinación de caudales de avenida, permitiendo ajustar los cálculos hidrológicos a las características reales de cada cuenca vertiente y evitando la aplicación automática de metodologías generales cuando existan estudios específicos suficientemente justificados

Demandamos que cualquier actuación que se plantee, no cause perjuicio a la actividad económica implantada en el territorio.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, y sin perjuicio de lo ya señalado en este documento acerca del alcance propio del ETI, procede indicar que las cuestiones planteadas presentan indudable relevancia desde la perspectiva del adecuado diagnóstico del riesgo y peligrosidad de las inundaciones. No obstante, será en fase de redacción del PGRI cuando se revisen los modelos hidráulicos para establecer las medidas adecuadas para reducir el riesgo de las inundaciones.

Las modelizaciones hidráulicas e hidrológicas están en constante actualización y singularmente en las tres fases de elaboración de los de PGRI: fase de evaluación preliminar del riesgo, fase de elaboración de los mapas de peligrosidad y fase de plan de gestión del riesgo. La cartografía de peligrosidad del SNCZI simula escenarios estadísticos de eventos extraordinarios, como son las avenidas de media y baja probabilidad (100 y 500 años de periodo de retorno). El SNCZI exige que las simulaciones hidráulicas para delimitar el riesgo se realicen sobre la base del terreno en condiciones actuales ofrecidas por el modelo digital del terreno (MDT), manteniendo infraestructuras como azudes y puentes tal y como existen hoy. Ese MDT se obtiene por tecnologías suficientemente maduras que, con la previa revisión a su aplicación, ofrecen una información exacta y muy adecuada para el objetivo final.

Las medidas que el PGRI establezca tratarán de limitar los perjuicios a las actividades actuales; no obstante puede darse el caso de que haya actividades ubicadas en zonas inundables que cuenten con autorizaciones previas a la entrada en vigor del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y

gestión de riesgos de inundación, y de los artículo 9 y 14 del RDPH; para ellas será muy difícil que cualquier medida que se establezca en el PGRI no entrañe perjuicio que, por otra parte, ya le causa la propia ubicación.

Alegación 16.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Las Comunidades de Regantes consideran positivo que el EPTI reconozca la relevancia estratégica del regadío en la cuenca del Duero […].

En su planteamiento identifican el problema principal que supone la escasa o nula regulación artificial en sistemas como el Carrión, el Órbigo, el subsistema Tuerto o el Cega. No obstante, el documento presenta un enfoque excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales, sin incorporar adecuadamente la dimensión económica, social y territorial del regadío.

No se puede achacar la reducción de aportaciones principalmente a los efectos del cambio climático. No podemos establecer un horizonte de cambio climático referido al año 2045, que resulta poco fiable.

Respuesta:

Los planes hidrológicos tienen que cumplir dos objetivos principales que generalmente entran en conflicto: por un lado, conseguir el buen estado o el buen potencial de todas las masas de agua y, por otro, satisfacer las demandas cumpliendo los criterios de garantía. En otras palabras, se trata de hacer un uso sostenible del recurso, equilibrando la protección de los ecosistemas relacionados con el medio hídrico con la satisfacción de las demandas. En el estudio de alternativas de las fichas DU-06 y DU-07 del EpTI, analizamos medidas que disminuyen la presión por extracción de agua (uso más eficiente del agua por modernizaciones) y medidas de mayor disponibilidad de recurso (aumento de regulación). Por este motivo, pensamos que el enfoque del EpTI no está excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales.

Efectivamente en el EpTI se reconoce la relevancia estratégica del regadío y creemos que su dimensión económica, social y territorial está debidamente incorporada.

Estamos de acuerdo en que la reducción de aportaciones no es debida solamente a los efectos del cambio climático. Probablemente también existe reducción de aportaciones por los cambios en los usos de suelo, pero no tenemos información suficiente que nos permita evaluar la magnitud de esta reducción.

El establecimiento de un horizonte de cambio climático en el que se modelan demandas futuras y recursos naturales afectados por cambio climático para calcular sus balances es un requisito de la legislación (Reglamento de Planificación Hidrológico, art.11.4 y art. 21.4). En los planes de 4º ciclo el horizonte de cambio climático corresponde al año 2045 pues se incrementa en 6 años el del plan vigente, que era 2039.

Alegación 17.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Resulta incuestionable que las modernizaciones llevan implícita una reducción del uso del agua, por lo que no se deben añadir mayores presiones sobre el uso del agua. Las inversiones llevadas a cabo también por los propios agricultores están siendo muy importantes, además de la recuperación de costes que vía tarifas de utilización del agua ya contribuyen.

La modernización no debe utilizarse como instrumento indirecto de reducción de concesiones ni de actividad agraria, sino como herramienta de mejora de eficiencia, productividad y sostenibilidad.

En general, se demanda que las mejoras de eficiencia y modernización permitan atender más demandas y generar mayor valor económico y social con el mismo volumen global de agua, sin incrementar necesariamente la presión neta sobre los recursos hídricos. La eficiencia debe medirse no solo por reducción de consumos, sino también por productividad, generación de empleo, estabilidad territorial y capacidad de adaptación climática.

Respuesta:

En relación con las consideraciones formuladas, el EpTI contempla la modernización de regadíos como una medida prioritaria de adaptación orientada a mejorar la eficiencia en el uso del agua, la garantía de suministro y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias existentes. En este sentido, se reconoce el esfuerzo inversor realizado por el sector, así como su contribución a una gestión más racional del recurso y a la recuperación de costes del sistema.

No obstante, debe precisarse que la mejora de la eficiencia no implica, por sí misma, una reducción automática de los volúmenes concesionales ni constituye un instrumento indirecto de minoración de la actividad agraria, sino que su tratamiento en la planificación hidrológica responde a un análisis caso por caso. Así, los eventuales ahorros derivados de la modernización no se someten a penalizaciones automáticas, pero tampoco pueden destinarse de manera generalizada a la generación de nuevas demandas si ello implica un incremento neto de la presión sobre las masas de agua.

En coherencia con ello, el EpTI establece que dichos ahorros deben contribuir, prioritariamente, a consolidar la sostenibilidad del uso existente y a evitar incrementos de presión que puedan comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales o el equilibrio del sistema hídrico. Solo en aquellos supuestos en los que exista disponibilidad efectiva del recurso y se acredite la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de las actuaciones, podrán considerarse desarrollos adicionales, siempre de forma compatible con la consecución del buen estado de las masas de agua y el mantenimiento de los caudales ecológicos.

Finalmente, si bien se comparte que la eficiencia puede valorarse desde una perspectiva amplia —incluyendo aspectos como la productividad, la generación de valor económico o la resiliencia territorial—, en el ámbito de la planificación hidrológica dicha eficiencia debe necesariamente integrarse con el principio de sostenibilidad ambiental, lo que exige que cualquier mejora en el uso del recurso no se traduzca en un aumento de las presiones que comprometa los objetivos establecidos por la normativa vigente.

Alegación 18.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Si bien el plan hidrológico en vigor descartó el incremento de nuevos regadíos, sí es posible esa ampliación en sistemas concretos con cultivos con un uso muy reducido del recurso, como por ejemplo en el sistema Riaza-Duratón y otros sistemas, donde sí es posible ampliación de superficie de riego con el mismo volumen de agua ahora establecido.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, cabe señalar que, si bien el vigente plan hidrológico estableció, con carácter general, la no previsión de nuevos desarrollos de regadío, el Esquema de Temas Importantes (ETI) contempla que determinadas situaciones específicas puedan ser objeto de análisis individualizado, particularmente en aquellos sistemas en los que concurran circunstancias singulares desde el punto de vista de la disponibilidad y gestión del recurso y, además, las autoridades competentes (MAPA o Comunidades Autónomas) plantearon nuevos regadíos que cuentan con amparo legal. En este aspecto el organismo de cuenca no puede proponer nuevos regadíos cuya autoridad competente no avala o, siendo avalados, no cuenta con garantías suficientes o amparo legal de la planificación sectorial.

No obstante, debe precisarse que los eventuales aumentos de superficie destinada al regadío no pueden valorarse exclusivamente desde la perspectiva de un mantenimiento del volumen total de extracción, sino que han de analizarse de forma integral considerando el conjunto de presiones que la actividad agraria genera sobre las masas de agua. En particular, el incremento de superficie regable puede implicar efectos relevantes sobre el régimen hidrológico, el retorno de flujos, la calidad de las aguas, la contaminación difusa o la alteración de los caudales ecológicos, incluso en aquellos supuestos en los que el consumo unitario por hectárea sea reducido.

En este sentido, el ETI incide en la necesidad de abordar la sostenibilidad del regadío desde un enfoque global, que tenga en cuenta no solo la eficiencia en el uso del agua y el volumen derivado, sino también la evolución de las presiones significativas y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Por ello, la eventual ampliación de superficies regables —incluso en sistemas concretos como el Riaza-Duratón— debe someterse a una evaluación específica que acredite su compatibilidad con la consecución del buen estado de las masas de agua, el mantenimiento de los caudales ecológicos y la ausencia de deterioro adicional del dominio público hidráulico.

En consecuencia, no resulta procedente establecer, con carácter general, la posibilidad de ampliar superficies de regadío bajo el único condicionante de mantener el volumen global actualmente asignado, sino que cualquier propuesta en este sentido deberá justificarse caso por caso, en el marco del proceso de planificación hidrológica y de conformidad con los principios de sostenibilidad, cautela y no deterioro que rigen la gestión del recurso.

Alegación 19.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Respecto al tema importante DU-06, la alegante valora positivamente que el EPTI reconozca la modernización del regadío como la medida esencial de adaptación al cambio climático y mejora de la garantía de suministro. De las dos alternativas que se propone como factibles (5 y 6), muestran preocupación por determinados planteamientos relacionados con:

- *Limitaciones automáticas de concesiones*
- *Restricciones indirectas de superficie regable*
- *Incremento de costes para los usuarios*
- *Traslado excesivo del esfuerzo inversor a los regantes*
- *Cierre definitivo del mapa de nuevos desarrollos de regadíos.*

Asimismo, las Comunidades de Regantes consideran imprescindible priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y con baja garantía hídrica, especialmente en zonas como Carrión, Órbigo, Tormes, Eria, Curueño o Duerna.

Igualmente, se considera necesario garantizar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas, especialmente ante el horizonte de 2035. [..]

Las actuaciones vinculadas al regadío presentan, por tanto, muy bajos niveles de ejecución, especialmente en modernización de regadíos, infraestructuras hidráulicas y regulación. Esta situación genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban.

Respuesta:

La Ficha DU-06 al elegir las alternativas 5 y 6 señala ambas alternativas permiten avanzar en medidas de modernización de regadíos que manteniendo la competitividad de las explotaciones con ligeros ajustes de las dotaciones adaptadas a la mejora que suponen las infraestructuras, permitan ampliar la superficie de regadío en la cuenca. Las comunidades de regantes en esta materia han ido modificando su posición, si es que se puede hablar de una posición común: de pasar en el plan de primero y segundo ciclo a demandar el cierre del mapa de cultivos en la demarcación hidrográfica, postulan a hora la necesidad de ampliar el regadío. Desde el punto de vista de la garantía y dadas las limitaciones reales existentes para ampliar la oferta, toda ampliación de superficie de regadío conlleva un reajuste del regadío existente, de manera que solo por la vía de la mejora de la eficiencia de puede atender a todas las demandas.

Que las concesiones deban modificarse como consecuencia de las actuaciones de mejora de la eficiencia del uso no es una exigencia del plan hidrológico sino de la propia normativa de aguas, por ejemplo, en aplicación de los artículos 65 del TRLA, al señalar que las concesiones podrán ser revisadas cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento, a petición del concesionario o cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. En concreto, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. En el primer

criterio del artículo 65 para revisar una concesión se encuentra el hecho de que, por ejemplo, se esté regando más superficie (o menos) de la que ampara el título concesional, a lo que se refiere el alegante como “restricciones indirectas de superficie regable”.

En efecto, el EpTI (y el propio plan hidrológico vigente) ha dado prioridad a las actuaciones en puntos donde hay déficit estructural como Carrión y Órbigo. En la actualidad no hay déficit en el sistema Tormes. Los casos de Eria, Curueño o Duerna son nuevos en el presente ciclo de planificación hidrológica y nos parecen más un empeño de determinadas asociaciones de regantes que de los propios usuarios de estos ríos. De hecho, para el Duerna se estableció una reserva de agua en el plan hidrológico vigente para mejorar las garantías de los riegos del valle, reserva que no se ha materializado por falta de capacidad de los usuarios en agruparse de manera reglada. En el caso del Eria solo los de la parte baja del Área han promovido una CUAs con el fin de organizar mejor el uso del agua.

El EpTI no tiene capacidad para modificar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas que otorga la ley, especialmente ante el horizonte de 2035, ni puede ampliar esa seguridad ni disminuirla. Es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas. Lo que el EpTI señala es que estos derechos cuando sean en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, si éstas no alcanzan su buen estado en 2035, será muy difícil que puedan mantener su status actual, ya que en las citadas DT se indica que en todo caso, a esos aprovechamientos de aguas les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico. Por tanto, el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

Como se pone de manifiesto en la Ficha del tema importante DU-09, las actuaciones vinculadas al regadío (modernización de regadíos y nuevos regadíos) cuya autoridad competente es la administración agraria del Estado y de las comunidades autónomas, presentan un nivel de ejecución del 20 y del 27%, respectivamente; por su parte el grupo de infraestructuras hidráulicas presenta una ejecución del 13% de la inversión. Esta situación, como indica la alegante, genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban; de hecho, en el tema importante DU-09 se insiste en este aspecto llamando a la responsabilidad de las autoridades competentes para que asuman las medidas que han validado en cada ciclo de planificación hidrológica.

Alegación 20.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

En las alegaciones a la revisión del plan 2022-2027 se propuso una tabla de asignaciones máximas que creemos que debe ser revisada de acuerdo a las dotaciones que se vienen aprobando en las campañas de riego coincidentes con el período de desarrollo de dicho plan y que deberían ser las siguientes:

SISTEMA	ASIGNACIÓN MÁX
PISUERGA-BAJO DUERO	6.000
CARRIÓN	5.000
TORMES	6.000
ÓRBIGO	6.000
PORMA	6.000
ADAJA	4.900
ALTO DUERO	6.000
RIAZA	6.000
ESLA (RIAÑO)	6.000
ARLANZÓN	6.000
TUERTO	4.500
TERA	6.000
ÁGUEDA	6.000

Partiendo de esta base, el objetivo que debemos perseguir es que se adopten las medidas oportunas para que todos los sistemas de explotación estén en las mismas condiciones y cuenten con idéntica disponibilidad (que ciframos en 6.000 m^3/ha), para lo cual tendríamos que incluir en el programa de medidas las actuaciones necesarias que nos permitan situarnos en ese escenario de igualdad.

Respuesta:

La propuesta que se hace en la alegación se ha tenido en cuenta en el EpTI, singularmente en la alternativa 5, ofreciendo los resultados de esta alternativa respecto al resto. A la vez hay que decir que adoptar este criterio para las dotaciones supondría llevar a algunas de las demandas de determinados sistemas de explotación al incumplimiento generalizado de garantías, como por ejemplo Alto Duero, Adaja o Tuerto. Tampoco se explica bien en la alegación por qué motivo, siguiendo el argumento de la alegante, se debe asegurar una dotación de 4.500 m^3/ha año en el Tuerto o 4.900 m^3/ha año en Adaja, frente a 6.000 m3/ha año de muchos de los sistemas de explotación; y tampoco por qué 6.000 m^3/ha año en toda la cuenca: ¿maneja el alegante algún estudio estadístico que justifique esa dotación?; si es la dotación a la que tradicionalmente se ha tendido, ¿por qué ha de mantenerse en sistemas modernizados con elevadas eficiencias de uso del agua?; ¿se pretende, con esta propuesta, dar carta de reconocimiento a determinados agentes que afirman que la modernización de regadíos en España no contribuye a reducir las presiones sobre las masas de agua sino a incrementar la demanda y que por ello, debería anularse la financiación con fondos públicos?

Por otra parte, la propuesta no atiende al criterio agronómico de las necesidades hídricas de los cultivos de cada sistema de explotación, como se pone de manifiesto, por ejemplo, comparando la dotación del Sistema Órbigo con la del Sistema Adaja, o pensando que la demanda de un cultivo en Soria puede ser comparable a la del mismo cultivo en Toro. La propuesta que se hace en el escrito, en un deseo de homogeneizar el suministro de agua cuando se paga lo mismo por superficie, atiende sobre todo a las reservas que existen en cada Sistema, lo que invalidaría el análisis de garantía que se establece de acuerdo con los epígrafes 3.5.1 u 3.5.2 de la IPH.

Entendemos que la demanda de la alegante obedece a que todavía se pagan cánones y tarifas no en función del consumo sino de la superficie regada, sistema que no disuade al usuario de ser eficiente. De cualquier modo, se analizará en fase de redacción del plan hidrológico la viabilidad de la propuesta,

con el fin de que pueda atender a dos criterios simultáneos: la realidad agroclimática de cada zona y el hecho de que el pago de cánones y tarifas se haga por superficie regada en vez de volumen utilizado.

Alegación 21.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

1.- En primer lugar y en tanto en cuanto no se adopten las medidas que puedan mejorar la garantía de todas las UDAs, se debe mantener la vigencia del art. 15.8 del plan vigente "Dotaciones orientativas máximas en los sistemas de explotación regulados: En aplicación del artículo 55 del TRLA, el organismo de cuenca para los sistemas que cuenten con regulación, una vez consultadas las correspondientes Juntas de Explotación, fijará anualmente dotaciones orientativas máximas de agua en función de las reservas existentes y en coherencia con las propuestas sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses de la Comisión de Desembalse, a las que deberá adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Estas dotaciones podrán ir modificándose anualmente en función de las reservas realmente existentes".

2.- En relación con el apartado anterior, abogamos porque las propuestas de dotaciones elevadas por las Juntas de Explotación a la Comisión de Desembalse y aprobadas por esta última se apliquen por igual a todos los usuarios del sistema en cuestión, sean canales del Estado o regadíos concesionales, no sólo en años de sequía (donde se puede aprobar un Real Decreto-ley que lo regule), sino también en años de normalidad, para que todos los usuarios del mismo Sistema tengan a disposición idénticos caudales.

Respuesta:

Las cuestiones que se sugieren no son parte del EpTI, sino que corresponden más bien a la fase de elaboración del Plan Hidrológico, que contará con un período de consulta pública donde podrán hacerse sugerencias sobre la parte Normativa del Plan Hidrológico.

Alegación 22.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

3.- La mejora de la eficiencia del regadío mediante la modernización de sus infraestructuras y un leve incremento de la regulación son las estrategias más adecuadas. Por parte de los usuarios, también se debe perseguir aplicar todas las medidas y prácticas agrarias que mejoren la gestión sostenible del recurso y consigan un ahorro de agua.

4.- Caudales ecológicos: su implantación y cumplimiento (casi del 100% en nuestra cuenca de acuerdo a los informes anuales presentados a la Comisión de Desembalse) contribuyen a la pérdida de garantía en la satisfacción de las demandas en las UDAs con más déficit hídrico. En este sentido, debemos de poner de manifiesto que no consideramos justificada la obligación de mantener los caudales mínimos definidos para situación de normalidad en situación de sequía prolongada en las zonas incluidas en la red Natura 2000 (LIC, ZEPA, etc) o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo

con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, tal como establece el RPH (art 18.4). La situación de sequía prolongada obedece a causas naturales y, por tanto, no se encuentra justificación para esta salvedad. Teniendo en cuenta que se trata de una prescripción de carácter reglamentario, su modificación debe plantearse en una disposición de igual o superior rango, como puede ser el Real Decreto de aprobación de los planes de cuarto ciclo. Por ello se considera de interés plantear esta modificación como medida en los programas de medidas de los planes de cuarto ciclo, con la tipología de instrumento general.

De igual modo, en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse.

Respuesta:

El diagnóstico del EpTI coincide con la primera propuesta de la alegante. No ocurre lo mismo con la segunda propuesta: el artículo 18 del RPH señala que en *caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971. En estas zonas se considerará prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, aunque se aplicará la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones.* Y el artículo 49 quáter del RDPH señala que *en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada, se exigirá el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos aguas abajo de las presas conforme a lo previsto en la disposición transitoria quinta y cuando la disponibilidad natural lo permita. A tal efecto, el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse. No obstante, el régimen de caudales ecológicos será exigible, siempre y en todo caso, cuando exista una legislación prevalente como la aplicable en Red Natura o en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de acuerdo de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, en la que se establece la prevalencia del caudal ecológico frente al uso*. Por ello la propuesta de la alegante contradice ambas disposiciones, por lo que no es posible atenderla.

Alegación 23.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

5.- Revisión del Convenio de Albufeira: […], volvemos a reivindicar las propuestas planteadas en el escrito dirigido a la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en septiembre de 2022, motivado por el conflicto suscitado por la suelta de agua de embalses de regadío para poder cumplir con los compromisos reflejados en el Convenio de Albufeira. Seguimos demandando una reducción de la aportación semanal, trimestral y anual en los diferentes puntos de control, así como subir el umbral de precipitación al 70% sobre la media interanual, para que si en períodos de sequía prolongada la precipitación bajase de ese umbral, podamos entrar en excepción.

Respuesta:

Es importante resaltar que el convenio de Albufeira es un tratado internacional establecido entre dos países, España y Portugal, con la finalidad de dar coherencia y continuidad a tratados anteriores en lo que se ha buscado a lo largo de los siglos limitar los conflictos fronterizos entre ambos países.

Como se indica en la Ficha DU-09, entre las decisiones a tomar en relación con el Convenio de Albufeira, se encuentra analizar las divergencias entre las planificaciones española y portuguesa para ofrecer soluciones conjuntas a las masas de agua compartidas y los indicadores de sequía y escasez de ambos países para tratar de integrar ambos diagnósticos en uno. Esta última decisión viene avalada por los memoranda de entendimiento entre España y Portugal de las cumbres hispano-lusa de 2023, 2024 y 2026, en las que ya se está trabajando por ambos países. Más allá de esa voluntad de mejorar el diagnóstico de los criterios de excepción, y armonizar los indicadores de sequía y escasez, corresponde a otras instancias promover los cambios del Convenio que considere oportunos.

Alegación 24.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Infraestructuras

Para conseguir la sostenibilidad del regadío reflejada en la ficha anterior, las Comunidades de Regantes solicitan que, de manera genérica el futuro Plan Hidrológico incorpore las siguientes medidas:

- *Incrementar las inversiones públicas en modernización y digitalización*
- *Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.*
- *Priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y zonas vulnerables*
- *Impulsar balsas laterales y actuaciones de regulación complementaria*
- *Dotar presupuestariamente las actuaciones del plan*
- *Mejorar infraestructuras hidráulicas y redes en alta*
- *Favorecer el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas*
- *Flexibilizar tarifas energéticas adaptadas a la estacionalidad del riego*
- *Mantener la seguridad jurídica concesional*
- *Establecer programas reales y ejecutables con financiación suficiente*
- *Realizar limpiezas periódicas de cauces y desagües como medida de seguridad y bienestar para la población rural.*

Respuesta:

Entre las propuestas heterogéneas que hace la alegación, algunas caen fuera de la competencia del agua (tramitación ambiental, tarifas energéticas); otras están incorporadas a las Fichas del EpTI (incrementar inversiones en modernización en la Ficha DU-06, centrarse en actuaciones en sistemas deficitarios en la Ficha DU-07, impulsar sustitución de bombeos con aguas subterránea en la Ficha DU-02, fomentar utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas en la Ficha DU-06, modernizar infraestructuras de riego en alta en Ficha DU-07). Respecto a la seguridad jurídica concesional, como se ha dicho en la respuesta a la alegación 19, es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas; el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

En la Ficha DU-09 se aborda el tema importante de la financiación del Programa de medidas. El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Estas autoridades deben dar la conformidad al programa de medidas para lo cual, cada una internamente, habrá debatido la capacidad y conveniencia de asumir cada medida. Por tanto, los mecanismos formales para asegurar la ejecución del Programa de medidas existen y desde el ámbito de la planificación hidrológica sólo se puede recalcar que estos mecanismos no deben ser simplemente formales sino también reales. La propia Ficha DU-09 describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social.

Sin duda la mejora de las condiciones hidrológicas de cauces es una tarea de gran peso en la cuenca a la que el Organismo de cuenca dedica anualmente entre 4 y 6 millones de euros, posiblemente escasos para las necesidades crecientes, a labores de mantenimiento de cauces. El Programa de medidas del plan hidrológico vigente incluye un paquete de medidas de este tipo. Pero evidentemente no puede llegar a atender eficazmente a los más de 80.000 kilómetros de ríos y arroyos de la cuenca y actúa con criterios de conveniencia y racionalidad económica. Para paliar esta desproporción entre necesidades y posibilidades reales, tanto en el Plan vigente de 2023 como en el anterior de 2016, se incluyó un procedimiento más ágil para acometer determinadas labores de mejora de las condiciones de desagüe de los cauces. Así en el artículo 30 de la Normativa se establece el sistema de declaración responsable para las denominadas *actuaciones menores de conservación de cauces y zonas de policía*. El mismo artículo hace un elenco de las que pueden considerarse actuaciones menores:

I. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera.

II. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce.

III. Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del dominio público hidráulico.

IV. Retirada de sedimentos y vegetación existente en el lecho del cauce, situados 50 metros aguas arriba y aguas abajo de las obras de fábrica y puentes con el fin de conservar su capacidad de drenaje.

V. Pequeñas actuaciones de mantenimiento de puentes e infraestructuras situadas sobre el cauce, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas no haya ocupación del dominio público hidráulico ni quede afectada su capacidad de desagüe.

VI. Mantenimiento de las secciones de estaciones de aforo.

VII. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos.

VIII. Cortas de arbolado bajo líneas eléctricas.

Para todas estas actuaciones la declaración responsable habilita el poder actuar por los particulares sin esperar a ninguna Resolución de la CHD, lo que agiliza notablemente la actuación.

Alegación 25.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Modernizaciones a ejecutar

Si tenemos en cuenta el período restante del plan vigente y el horizonte temporal de la revisión relativa al período 2028-2033, deberíamos modernizar los regadíos pendientes cuya modernización ya está aprobada y que son los siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES	IMPORTE ESTIMADO CONVENIO MAPA-SEIASA (€ sin IVA)
PEPAC CYL y otros planes	
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)	30.000.000
Canal de Ines-Eza Fase II (Soria)	7.000.000
Canal del Esla (León)	150.000.000
Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta (Palencia)	160.000.000
Bajo Tuerto – Sindicato Central Embalse Villameca (León)	25.000.000
Castañón, Cerrajera y Regueras (León)	65.000.000
Canal de la Retención (Palencia)	47.000.000
Canal de Villalaco (Palencia)	54.000.000
Canal de Manganeses (Zamora)	40.000.000
Margen Derecha del Tera (Zamora)	100.000.000
San Salvador - Valverde de Ágreda (Soria)	15.000.000
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)	40.000.000
Alija del Infantado (León)	15.000.000
TOTAL (€ sin IVA)	**748.000.000 €**

Para poder conseguir este objetivo tienen que ser tenidas en cuenta dos reivindicaciones que trasladamos al Gobierno de España:

1.- Aumentar el capital social de la SEIASA a la cantidad de 300 M€ anuales por cada uno de los años de duración del plan.

2.- Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.

Respuesta:

La alegación aporta dos cuestiones muy relevantes para impulsar las medidas del vigente Plan Hidrológico. Estando de acuerdo con la segunda (simplificación y agilidad en los trámites de evaluación ambiental de los proyectos de modernización del regadío) la realidad es que las modificaciones legales llevadas a cabo recientemente no van en esa línea; así la modificación de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, más reciente (de 6 de noviembre de 2025) reduce los límites de superficie de modernización de regadío para que la evaluación ambiental sea ordinaria. Esto parece indicar que por parte del legislador hay una sospecha de que los proyectos de modernización podrían suponer presiones adicionales sobre el medio ambiente, quizá debido a determinados proyectos ya ejecutados que no han sido todo lo respetuosos que cabría esperar. Por ello la norma legal es la que es y, en tanto no se modifique, debemos atenernos a ella, no siendo el EpTI competente para su modificación.

La Ficha DU-06 incide en la primera parte de la alegación al apostar por una mayor intensidad de la modernización del regadío que, lógicamente pasa por la adecuada financiación que debe validar e impulsar la autoridad competente con tutela sobre la SEIASA.

Recordamos que no todas las zonas regables que se citan en la alegación disponen de medida de modernización de regadío en el Plan vigente. Como se sabe el Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento. Cuando se confeccionó el Plan vigente de manera específica se solicitó al MAPA la previsión de actuaciones de modernización en los seis años de vigencia del Plan. En la relación de actuaciones que iba a acometer el MAPA no estaban las siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)
Canal del Esla (León)
Cerrajera (León)
Canal de Villalaco (Palencia)
Canal de Manganeses (Zamora)
Margen Derecha del Tera (Zamora)
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)
Alija del Infantado (León)
TOTAL (€ sin IVA)

Y como tales no pasaron al Programa de medidas para su ejecución por el MAPA sino para su ejecución por la comunidad autónoma y los usuarios. Probablemente el MAPA no las incluyó en su programación porque la comunidad autónoma no manifestó interés por ellas ya que la mayoría no contaban con acuerdos en sus asambleas generales para acometer la modernización. Aunque el EpTI ha tenido en cuenta en sus análisis las modernizaciones que figuran en el Programa de medidas independientemente de su agente financiador, de cara al nuevo Plan Hidrológico conviene aclarar que

sólo formarán parte de las medidas aquellas actuaciones que así se determine por las autoridades competentes (MAPA o comunidad autónoma). De la Presa de Regueras, Bajo Tuerto y del Canal de la Retención ni siquiera hay medida de modernización ya que ninguna autoridad competente las ha reclamado. Valverde de Ágreda está fuera de la demarcación hidrográfica del Duero, por lo que es lógico que no figure entre las medidas del Plan Hidrológico ni ahora ni en el futuro.

Alegación 26.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Mejora infraestructuras

Propuestas:

1.- Solicitar a la Dirección General del Agua una dotación presupuestaria de 150 M€ en el período 2028/2033 para hacer frente a estas reformas, conseguir el estado óptimo de las infraestructuras para poder llevar a cabo la correcta gestión del recurso.

2.- La situación actual de la agricultura no pasa por sus mejores momentos, motivado por los elevados precios de los insumos, los bajos precios de mercado de los productos y las grandes inversiones realizadas en modernización de las infraestructuras de riego y el amueblamiento de parcelas. Por eso se solicita, buscar fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-09 y con respecto a la propuesta sobre la financiación de la DGA, se recuerda que el Plan vigente incluyó una inversión de 350 millones de euros en infraestructuras, nuevas y modernización de las existentes, cuya ejecución según la misma Ficha es de un 13% a final de 2024 que sube hasta un 19% a final de 2025, valor realmente exiguo. Pese a estar previsto es necesaria una evaluación de los motivos de este retraso que se ponen de manifiesto en la Ficha y que deben ser removido. La propia Ficha también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social. No obstante, en atención a la alegación se incluye una nueva decisión sobre la rendición de cuentas.

Los mecanismos de rendición de cuentas están formalmente delimitados en el ámbito administrativo, por ejemplo, con la regulación que se incluye en los artículos 87 y 88 del RPH. Pero este ámbito es meramente administrativo y no político, que tiene sus propios itinerarios.

Respecto a sistema de financiación alternativos a los que establece la Ley de Aguas para este tipo de infraestructuras, nada puede aportar el EpTI ya que se trata de una cuestión regulada por la propia Ley y a allá debe atenerse.

Alegación 27.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Obras de regulación:

Propuestas:

1.- Sistema Carrión: es uno de los más deficitarios de la Demarcación y urge acelerar los trámites para proceder a la ejecución de La Cueza 1 y La Cueza 2,[…].

2.- Sistema Tormes: […]. De momento, están puestas en Explotación unas 10.000 has entre La Armuña II y la Zona de Arabayona, lo que colocaría la superficie de la zona regable dependiente del embalse de Santa Teresa en el entorno de 35.000,00 has. La planificación ya prevé el desarrollo de otras 12.000 has más en La Armuña III y IV, que sí podrían ser asumidas por dicho embalse, pero en el caso de que se llegase a plantear alguna ampliación más en el futuro, resultaría necesario estudiar el recrecimiento del embalse para garantizar la satisfacción de todas las demandas (además del regadío, abastecimientos, caudales medioambientales y otros usos)

3.- Sistema Órbigo: […] nuestras propuestas pasan por el cambio de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al Sistema Tera (podríamos conseguir un ahorro de unos 12 Hm3) y la construcción de la balsa lateral de La Rial con llenado por gravedad desde el río Omaña (su capacidad está prevista en 23 Hm3).

Dentro del Sistema Órbigo tenemos el Subsistema Tuerto, […], proponemos las siguientes actuaciones: urgente puesta en explotación del embalse de Villagatón, estudiar un posible recrecimiento del embalse de Villameca y reparar el acueducto del trasvase de Valdesamario para mejorar su capacidad hidráulica y contribuir así al mejor llenado de Villameca en cada campaña.

Río Duerna: […] las 4.000 has que se nutren de este río, junto con el Peces, que discurre paralelo antes de desembocar ambos en el Tuerto, subsisten a duras penas. Para asegurar la pervivencia de este regadío, proponemos varias actuaciones:

- *Siembra de agua, derivando en invierno el caudal a las zayas, que son más filtrantes y permiten recargar el acuífero (se podrían acumular unos 2 Hm^3) para poder ser utilizado en campaña junto con el agua del río hasta la llegada del estiaje.*
- *Estudiar la posibilidad de balsas laterales derivando caudal del río Duerna en época invernal para ser utilizadas en verano.*
- *Estudiar la alternativa de un embalse de cabecera con una capacidad menor a los 28 Hm3 que estaban previsto en el proyectado en Chana de Somoza.*

Idénticos planteamientos podríamos someter a estudio para consolidar la zona regable dependiente del río Eria.

4.- Sistema Esla Valderaduey: para este sistema se pueden plantear balsas laterales en el río Cea aprovechando su aportación invernal, con suministro cero del embalse de Riaño. Como fórmula de explotación más viable, planteamos un aprovechamiento conjunto de los embalses de Riaño, Porma y

Casares, desestimando definitivamente la alternativa planteada por la Confederación Hidrográfica del Duero de la transferencia de agua de este último al sistema Órbigo.

5.- Apoyo a las aguas subterráneas: En el EPTI se plantean peajes [..]. FERDUERO se opone frontalmente a estos recortes y además de seguir impulsando la constitución de CUAS para mejorar la gestión de los acuíferos, planteamos que se estudien actuaciones que permitan sustituir aguas subterráneas por aguas superficiales, así como el uso compartido de ambas. Por ejemplo, el desarrollo de La Armuña III y La Armuña IV puede liberar hectáreas de la zona sur de la Masa de Medina, la Presa de Lastras de Cuéllar lo mismo en Tierra de Pinares y las balsas laterales de Tordesillas, ayudaría a mejorar su acuífero. Por ello, planteamos que se estudien estas opciones para poder mantener el regadío y la actividad económica de todos los usuarios que se sirven de estas masas.

[…] solicitamos a la Dirección General del Agua la búsqueda de fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras de regulación.

Respuesta:

Con relación al punto 1 de la alegación (Sistema Carrión), debe señalarse que la Confederación Hidrográfica del Duero comparte la conveniencia y oportunidad de la puesta en servicio de una regulación adicional en el ámbito de las Cuezas, ya que se considera una medida estructural que puede incrementar la capacidad de gestión del sistema y reforzar su resiliencia, disminuyendo la dependencia de aportaciones externas. Estas actuaciones, junto con la modernización de regadíos en el sistema Carrión, se encuentran alineadas con los objetivos de la planificación hidrológica vigente y forman parte de la estrategia de mejora del equilibrio entre recursos y demandas en la demarcación.

Según se recoge en el Programa de medidas del Plan Hidrológico vigente, cuya situación más actualizada se puede consultar en Mírame-IDEDuero, la regulación adicional en las Cuezas (medidas 6403243 y 6403244) se encuentra en fase de anteproyecto en evaluación ambiental y es una medida cuyo promotor es la Confederación.

Con relación al punto 2 de la alegación (Sistema Tormes) debe indicarse que el EpTI ya contempla expresamente el análisis de la ampliación de regadíos en el sistema Tormes y su relación con la capacidad de regulación del embalse de Santa Teresa. En particular, el documento pone de manifiesto que los eventuales incrementos de superficie regable —como los asociados al desarrollo de La Armuña— deben quedar condicionados a la disponibilidad real de recursos y a la garantía del sistema, evaluándose de forma conjunta la gestión de la demanda y la oferta.

A este respecto, el EpTI analiza el posible recrecimiento del embalse de Santa Teresa en el marco de la alternativa 5 de la ficha DU-07, como una de las opciones para incrementar la capacidad de regulación en escenarios de mayor desarrollo del regadío. No obstante, también concluye que este tipo de actuaciones:

- no resuelven por sí solas los déficits del sistema ni los problemas de garantía,
- y deben plantearse únicamente cuando se justifique su viabilidad técnica, económica, ambiental y social, y siempre en combinación con medidas de gestión de la demanda (modernización, limitación de dotaciones, etc.).

En consecuencia, la eventual necesidad de recrecimiento del embalse no puede considerarse automática, sino que debe evaluarse en el marco global de la planificación hidrológica, priorizando un enfoque integrado que garantice la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Todo ello se analizará con detalle en la fase de redacción del plan hidrológico.

En relación con la propuesta formulada en el punto 3 para el sistema Órbigo, cabe señalar lo siguiente:

En primer lugar, la Confederación valora favorablemente la propuesta de cambio de la toma de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al sistema Tera, en la medida en que se trata de una actuación coherente con los objetivos del EpTI orientados a la optimización de la gestión de los recursos disponibles y a la reducción de presiones sobre sistemas deficitarios, mediante la mejora de la asignación y distribución de recursos entre sistemas de explotación.

En cuanto al resto de actuaciones planteadas, relativas al incremento de la capacidad de regulación (balsas laterales, nuevos embalses, recrecimientos o mejora de infraestructuras existentes), debe indicarse que el EpTI establece que este tipo de medidas deben analizarse de forma integrada dentro del conjunto de alternativas de planificación, en coordinación con las actuaciones sobre la demanda (modernización, eficiencia y adecuación de dotaciones).

En particular, el documento pone de manifiesto que:

- Las actuaciones de incremento de regulación pueden contribuir a mejorar la garantía y reducir déficits en determinados sistemas,
- pero su eficacia es generalmente limitada si no se acompañan de medidas de gestión de la demanda,
- y en todo caso deben someterse a una evaluación rigurosa de su viabilidad técnica, económica, social y ambiental, dada su elevada inversión y potencial afección sobre las masas de agua.

Por ello, la puesta en explotación del embalse de Villagatón o la mejora del trasvase de Valdesamario para reducir pérdidas y una ligera mejora de la capacidad hidráulica podrán incorporarse al Programa de medidas en fase de redacción de plan hidrológico. Respecto a de la balsa lateral de La Rial o el posible recrecimiento de Villameca, la decisión de su incorporación al Programa de medidas del plan hidrológico dependerá de su encaje en las conclusiones del estudio de alternativas de incremento de regulación del sistema Órbigo y de su encaje en la estrategia global de la demarcación.

Sobre las propuestas relativas al río Duerna, la Confederación Hidrográfica del Duero valora positivamente las actuaciones de “siembra de agua”, entendida como recarga gestionada de acuíferos mediante derivaciones superficiales (como el uso de “zayas” u otras infraestructuras tradicionales), que ya han sido consideradas en el marco de la planificación hidrológica vigente. En particular, en el valle del Duerna se incluyó una reserva de agua superficial en invierno destinada a la recarga, constituyendo una medida alineada con la gestión conjunta de recursos superficiales y subterráneos y con los objetivos de mejora de la garantía y sostenibilidad del regadío. Como se ha dicho en la respuesta a la alegación nº 19 de este mismo escrito, lamentablemente a fecha actual no se ha podido hacer efectiva esa reserva por falta de interlocutor en forma de junta central, sindicato central o comunidad general de usuarios, trámite imprescindible para poder hacer efectiva esa reserva.

Esta solución encaja, asimismo, con las líneas del EpTI en materia de adaptación al cambio climático, diversificación de fuentes y aumento de la resiliencia de los sistemas de explotación, incluyendo el uso de infraestructuras alternativas y recarga artificial cuando resulten técnica y ambientalmente viables.

En cuanto a las propuestas relativas a la construcción de balsas laterales, almacenamiento estacional o alternativas de regulación en cabecera, estas se encuadran dentro de las posibles medidas de mejora de la gestión de la oferta contempladas en los temas importantes DU-06 y DU-07 del EpTI (incluyendo infraestructuras de almacenamiento, regulación o mejora de la garantía). No obstante, su implantación requiere un análisis específico en el marco de la elaboración del Plan Hidrológico, en el que se valore su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica, así como su eficacia real frente a otras alternativas. En este sentido, dichas propuestas se tendrán en consideración y podrán ser objeto de estudio en la fase de redacción del Plan.

En relación con las propuestas formuladas en el punto 4 para el sistema Esla-Valderaduey, la propuesta de aprovechamiento de aportaciones invernales mediante balsas laterales en el río Cea se encuadra dentro de las medidas contempladas en el EpTI en los temas importantes DU-06 y DU-07, en los que se prevé la utilización de infraestructuras de almacenamiento complementarias (balsas laterales, regulación estacional, etc.) como instrumento para mejorar la garantía de los sistemas de explotación. Por ello, este tipo de soluciones podrá ser analizado en la fase de elaboración del Plan Hidrológico, valorando su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica en el ámbito del sistema Esla–Valderaduey.

En cuanto a la propuesta de explotación conjunta de los embalses indicados, debe señalarse que el embalse de Casares es titularidad de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A.), por lo que en la situación actual no resulta posible su gestión conjunta con las infraestructuras de titularidad y explotación directa del Organismo de cuenca en los términos planteados.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier planteamiento de optimización conjunta de infraestructuras deberá analizarse en el marco competencial y de explotación correspondiente, considerando el régimen jurídico de cada una de ellas y los acuerdos que, en su caso, pudieran establecerse entre las Administraciones implicadas.

En relación con el punto 5 de la alegación, se formulan las siguientes consideraciones:

Las posibles limitaciones al uso de aguas subterráneas deben enmarcarse en el objetivo prioritario de la planificación hidrológica, conforme a la Directiva Marco del Agua y al Texto Refundido de la Ley de Aguas, de alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de agua, evitando su deterioro y corrigiendo situaciones de sobreexplotación. En este sentido, la evolución de la política hidráulica se orienta hacia un refuerzo del control administrativo de las extracciones y una progresiva convergencia hacia el régimen concesional, lo que implica necesariamente la adopción de medidas de limitación en aquellos casos en los que las extracciones resulten incompatibles con la recuperación de los acuíferos.

Se valora positivamente el impulso a la constitución de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) como instrumento clave para la mejora de la gobernanza, el control de extracciones y la gestión conjunta de los recursos, en línea con lo previsto en el EpTI para el uso sostenible de las masas de agua subterránea.

Las propuestas orientadas a la sustitución de bombeos por recursos superficiales y al uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas son coherentes con las líneas de actuación recogidas en el EpTI, que contempla este tipo de medidas como alternativas para reducir la presión sobre los acuíferos y avanzar hacia su recuperación. No obstante, su viabilidad debe analizarse caso por caso en la elaboración del Plan Hidrológico, considerando la disponibilidad real de recursos, las garantías de suministro, los condicionantes ambientales y la eficiencia económica de las soluciones planteadas.

Alegación 28.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario recordar que la planificación hidrológica, de conformidad con el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, no persigue exclusivamente objetivos ambientales, sino también la satisfacción de las demandas, la armonización del desarrollo regional y sectorial y la sostenibilidad de las actividades económicas vinculadas al uso racional del agua. En consecuencia, cualquier mecanismo de coordinación interadministrativa o fijación de objetivos específicos en zonas protegidas debe incorporar necesariamente criterios de proporcionalidad, equilibrio territorial, cohesión socioeconómica y viabilidad de los usos existentes, singularmente en territorios rurales altamente dependientes del regadío. […]

La ficha plantea la alineación del marco regulatorio de distintas políticas sectoriales con los objetivos de la planificación hidrológica, incluyendo expresamente la Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats. No obstante, dicha coordinación no debería derivar en la imposición automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos.

Respuesta:

El EpTI no propone ni pretende imponer de manera *automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos*. De hecho, al menos, las Fichas DU-01, DU-02, DU-03, DU-04 y DU-07 tratan de hacer un análisis técnico de las presiones que generan sobre las masas de agua las actividades humanas, entre ellas la agrícola, unas veces con mayor profusión de datos y otras de manera cualitativa. Las propuestas y alternativas que se hacen en el EpTI se apoyan en ese análisis, tratando de corregir las presiones sin causar un daño excesivo a las propias actividades existentes. A nuestro juicio hay un equilibrio entre las actividades y los objetivos ambientales dentro del margen que permite la normativa vigente. Y la llamada a las políticas sectoriales (Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats) lo es en la medida que estas políticas apuntan a la del agua en sus propios desarrollos legales.

Alegación 29.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La ficha señala la necesidad de fijar objetivos específicos sobre el medio hídrico de los espacios Red Natura 2000 vinculados al agua. Sobre esta cuestión debe indicarse que cualquier eventual limitación derivada de dichos objetivos deberá sustentarse necesariamente en estudios técnicos individualizados, suficientemente motivados y territorialmente concretos, evitando restricciones automáticas derivadas exclusivamente de la ubicación geográfica de las explotaciones o infraestructuras. Especialmente en sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados, debe garantizarse plenamente la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes y la compatibilidad entre conservación ambiental y actividad agraria sostenible.

Respuesta:

Las limitaciones derivadas de los objetivos de los espacios naturales de Red Natura 2000 ya existen desde que se aprobaron los planes básicos de gestión, en el caso de Castilla y León desde 2015.

Los objetivos específicos de Red Natura se fijan por las comunidades autónomas en los Planes Básicos de Gestión. En el caso de los Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León se aprobaron por ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre. Estos Planes establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000. Se estructuran en:

- Un documento de “Disposiciones generales”, común a los 177 Planes Básicos.
- Ciento setenta y siete documentos de Planes Básicos de gestión y conservación correspondientes a cada uno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.
- Tres "Anexos" comunes a los 177 planes básicos:
    - Anexo I. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000,
    - Anexo II. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Valores Red Natura 2000, y
    - Anexo III. Medidas de conservación y gestión Red Natura 2000.

De todos los espacios y hábitats de estos Planes sólo aquellos vinculados al agua (76 en la demarcación hidrográfica del Duero) deben ser atendidos por la planificación hidrológica como establece el RPH, en la medida en que les afecte. Y las limitaciones en el ámbito del agua las establecen los citados planes. En este sentido cabe transcribir algunos de los fundamentos de derecho que esgrime el Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 515/2025 que se cita en la Ficha DU-09: “Por consiguiente, y como ciertamente esta situación no parece acomodarse a las exigencias de la DMA y de la legislación interna que la traspone, de las que deriva la necesidad de que los planes hidrológicos, como instrumento esencial de coordinación de la política de aguas, reflejen los objetivos ambientales de las zonas protegidas vinculados a las masas de agua asociadas y su grado de cumplimiento, y que sobre dichos

objetivos no cabe aplicar la excepción prevista en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2000/60, procede estimar la pretensión de la parte recurrente y declarar la nulidad de todas las previsiones contenidas en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las que, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 10 de las disposiciones normativas, se prevea la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas de agua vinculadas a zonas protegidas de hábitats y especies, en las que, además, no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares.

Puede ser llamativo que la delimitación de espacios protegidos por las comunidades autónomas afecten en ocasiones a zonas como las que identifica la alegante ("sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados"), por lo que cabría pensar que esos espacios protegidos lo son precisamente por su relación con esos regadíos históricos; sin embargo encontramos en sus planes básicos que la actividad agraria, entre otras, es quien constituye una presión, algo que aparentemente repugna toda lógica racional. Pero la planificación hidrológica poco puede hacer para resolver estas incoherencias, más allá de instar al órgano competente de la comunidad autónoma a que revise esas declaraciones o los planes básicos correspondientes, como también lo puede hacer el sector al que pertenece la alegante.

Alegación 30.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

No parece razonable incrementar simultáneamente las exigencias ambientales o las limitaciones sobre los usuarios concesionales mientras persistan importantes retrasos administrativos y presupuestarios en la ejecución de actuaciones estructurales cuya responsabilidad corresponde principalmente a las administraciones públicas competentes.

Respuesta:

Manifestamos acuerdo con la alegante en lo que se refiere al notable retraso en la ejecución del Programa de medidas; de hecho, la propia Ficha lo pone de manifiesto cuando abiertamente reconoce que el *Programa de medidas del Plan Hidrológico se construye con las medidas que todas las autoridades competentes (administraciones locales, autonómicas o estatal) y resto de agentes, cada uno en el marco de sus competencias, pueden impulsar para el logro de los citados objetivos. Por tanto, buena parte del éxito de un plan hidrológico para dar cumplimiento a esos objetivos estriba en el compromiso de los agentes de acometer las medidas que caen bajo su ámbito*. También propone algunas decisiones a explorar para que esto no se repita en el futuro, como son que haya un *compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución*, y establecer un *marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios.*

Pero dicho esto no podemos compartir la comparación de este hecho con las necesidades de establecer criterios ambientales ya que en su mayoría estos criterios buscan reducir las presiones sobre las masas de agua y esas presiones se ejercen por actividades y usuarios concretos a quienes corresponde, en la medida de lo que establecen las normas, contribuir a la reducción de las mismas.

Alegación 31.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario reforzar de manera efectiva la participación técnica y real de los usuarios del agua, singularmente de las Comunidades de Regantes, en los procesos de toma de decisiones y seguimiento de la planificación hidrológica.

Respuesta:

La Ficha DU-09 aborda la necesaria colaboración y cooperación entre los departamentos de la administración pública para que, cada uno en su ámbito competencial, contribuya al logro de los objetivos de la planificación. Y ello porque al tener competencias sobre distintos factores que inciden en el agua (tanto como demanda como medio ecológico), las políticas sectoriales en cada uno pueden contribuir o no a lograr los objetivos.

No se aborda en la ficha el modo de participación de los usuarios en la gestión del agua que tiene sus propias normas legales establecidas. Por ello sorprende que una Comunidad de regantes reclame mayor participación en los procesos de toma decisiones y de seguimiento de la planificación hidrológica. Las comunidades de regantes participan en la Junta de Gobierno, en el Consejo del Agua de la demarcación, en la Comisión de Desembalse, en la Asamblea de Usuarios y las Juntas de Explotación. Esa representación está regulada en el TRLA, el RAPA o reglamentos específicos (como el que regula el consejo del agua de la demarcación). Todos ellos son órganos de gobierno, gestión, coordinación y participación de los organismos de cuenca. Nos gustaría conocer otros ámbitos administrativos donde la participación de los usuarios fuera al menos de la misma magnitud que en la gestión del agua. De cualquier modo, el EpTI no tiene capacidad para modificar la distribución de la representación de los usuarios en los distintos órganos.

Alegación 32.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario que la planificación identifique de manera expresa la incidencia real que el cumplimiento del Convenio de Albufeira y de otros compromisos ambientales o internacionales tiene sobre las garantías de suministro de las distintas unidades de demanda agraria y sobre las reservas embalsadas disponibles en los sistemas de explotación. [..]

Por ello, cualquier incremento de exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales existentes.

Respuesta:

El análisis que se solicita en la alegación respecto al Convenio de Albufeira se ha hecho en todas las alternativas que figuran en las Fichas DU-06 y 07 debido que se trata de una restricción al uso del agua, de manera que, en todo caso, siempre que no se den las condiciones de excepción, se cumplen los

requisitos del Convenio. No se ha incluido su explicación en las Fichas por una cuestión de simplificación. No obstante, con las medidas definitivas, en fase de redacción de plan hidrológico, habrá un apartado específico que aborde este cumplimiento de caudales integrales del Convenio de Albufeira.

Respecto a la segunda propuesta (que las nuevas exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales), el EpTI no puede avalar una cuestión que no está contemplada en la normativa vigente. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 65 del TRLA cuando los usos actuales puedan verse afectados por la planificación hidrológica o por requisitos adicionales de carácter ambiental que hagan imposible ejercer el uso para el que existe concesión, como parece explicar la alegación, podrá reclamarse la correspondiente indemnización. Y ello sin menoscabo de la jurisprudencia ya consolidada en relación con las indemnizaciones por restricciones previas, como son el régimen de caudales ecológicos o los compromisos internacionales o ambientales, más bien en contradicción de la propuesta de la alegación.

Alegación 33.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La creciente interacción entre distintas políticas sectoriales europeas, estatales y autonómicas vinculadas al agua puede generar escenarios de elevada complejidad regulatoria para los usuarios y las Comunidades de Regantes. Por ello, se considera imprescindible que el futuro Plan Hidrológico garantice marcos regulatorios claros, previsibles y técnicamente motivados, evitando duplicidades administrativas, contradicciones regulatorias y limitaciones carentes de suficiente justificación técnica individualizada.

Respuesta:

En el ámbito del agua, el EpTI es un documento intermedio de la planificación hidrológica que tiene por objeto la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. No tiene que ofrecer seguridad jurídica ya que es un documento instrumental en la elaboración del Plan Hidrológico que se aprueba por Real Decreto y tiene fuerza vinculante.

Por otra parte, la seguridad jurídica para los usuarios que aspiran a desarrollar una actividad la ofrece el procedimiento concesional donde se concreta la actividad en el objeto, el tiempo y el lugar, lo que permite evaluar la actividad en coherencia con los objetivos de la planificación hidrológica. Por tanto, se rechaza la alegación. Los planes hidrológicos se revisan cada seis años, lo que puede suponer que, dentro del marco legal general, haya modificaciones específicas como consecuencia de la revisión planificadora. Seis años, a nuestro juicio es un marco temporal escaso, pero el ordenamiento jurídico establece ese plazo para las sucesivas revisiones y a él debemos ajustarnos.

La Ficha DU-09 pone el acento en la necesidad de incrementar la coordinación y cooperación administrativa en el ámbito de la planificación hidrológica; la alegante reclama esa coordinación en el marco de la gestión ordinaria. Siendo un objetivo razonable, no hay que olvidar cuáles son las competencias de cada administración lo que puede suponer una mayor lentitud de procedimientos, en especial si éstos confluyen en una única actividad. Sigue quedando pendiente la simplificación administrativa ya que, cada vez que hay cambios normativos, no suelen ser para simplificar sino para una mayor complejidad. Al igual que los usuarios también las administraciones padecemos esta complejidad que está al servicio, en este caso, de las garantías. Precisamente la variedad de competencias sobre una misma actividad puede generar esas incoherencias de las que no son culpables quienes deben verificar los requisitos legales sino de las normas que regulan la actividad.

Alegación 34.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Una cuestión relevante que debería ser tenida en cuenta en las evaluaciones ambientales de grandes instalaciones fotovoltaicas es la posible modificación del coeficiente de escorrentía superficial derivada de la implantación masiva de paneles solares. […]

Por ello, se considera necesario que el futuro instrumento de planificación y las evaluaciones ambientales incorporen análisis hidrológicos específicos sobre modificación de escorrentías, incluyendo modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Respuesta:

Compartimos con el alegante su percepción de que la construcción de plantas fotovoltaicas contribuye al aumento de suelo artificial con impactos como compactación y modificación de la permeabilidad del suelo, alteración de la escorrentía e incremento de la erosión.

La planificación hidrológica no puede entrar en el detalle de dichos impactos, que son evaluados específicamente en los procedimientos ambientales a que se ven sometidos los proyectos y que son específicos de cada uno de ellos.

La modificación de la escorrentía superficial producida por una instalación fotovoltaica depende de muchos factores como son la extensión de la planta fotovoltaica, las características edáficas de su localización, las posibles modificaciones topográficas del terreno, el tipo y forma de fijación de los seguidores, etc. Estos aspectos son evaluados de forma cualitativa en los preceptivos informes que emite la CHD, como administración afectada, en el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos, sin poder establecer una evaluación cuantitativa del efecto sobre la escorrentía ya que los promotores no facilitan modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Alegación 35.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Por otro lado, se considera igualmente interesante analizar el potencial uso dual de determinadas infraestructuras de regadío para su contribución al sistema eléctrico nacional, especialmente en aquellos casos en los que existan balsas de regulación situadas a cota elevada y otros condicionantes

técnicos favorables. Determinadas instalaciones de modernización podrían adaptarse para funciones complementarias de almacenamiento energético y regulación eléctrica mediante sistemas reversibles, incrementando la utilidad y rentabilidad social de infraestructuras ya existentes.

Respuesta:

Esta indicación del alegante de una posible utilización de las instalaciones inherentes a modernizaciones del regadío para funciones de almacenamiento energético no se ha planteado hasta la fecha en este Organismo. No obstante, cualquier iniciativa que se presente para la correspondiente autorización o concesión se analizará específicamente.

La capacidad de almacenamiento de estas balsas de regulación no suele ser tan elevada como para que las empresas hidroeléctricas consideren rentable la inversión en la implantación de sistemas de bombeo y centrales hidroeléctricas que permitan utilizar este recurso.

Es todo caso, sería la administración competente en la realización de estas modernizaciones y, en su caso, el titular de las infraestructuras de regadío quienes deberían proponer la utilización de las mismas para fines energéticos.

Alegación 36.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

En la ficha se indica que para las aplicaciones y usos del agua vinculados a energías renovables resultan de aplicación las mismas consideraciones previstas para usos consuntivos[..], parecería más adecuado diferenciar entre usos estrictamente consuntivos y usos con retorno efectivo del agua, especialmente a efectos de evaluación de impacto sobre la disponibilidad global del recurso hídrico. Todo ello

Se están empezando a crear nuevas plantas de hidrogeno verde, de bioetanol, etc, que necesitan agua para su desarrollo. Nos oponemos a que se extraiga agua de acuíferos que están en mal estado y, por otro lado, que cuando hayan extraído el agua, puedan verter la molécula resultante a cauces o arroyos, agravando el problema de la contaminación difusa.

Cuando el agua se coja de fuentes superficiales, nos oponemos a que se puedan restar dotaciones al regadío, cuando hay UDAs y comunidades de regantes que incumplen el criterio de garantía [..].

Por tanto, los nuevos usos del agua destinados a la implantación de industrias de producción y almacenamiento de energías renovables, pueden tener un efecto negativo en el regadío, tanto en aguas subterráneas como en aguas superficiales y pedimos que este problema se analice y se aborde con mucho rigor para no perjudicar una actividad económica destinada a la producción de alimentos, que fija población en las zonas rurales y que contribuye al mantenimiento del ecosistema y la disminución de la contaminación ambiental.

Respuesta:

Los parques eólicos y plantas fotovoltaicas precisan agua para su construcción y para algunas operaciones de mantenimiento (limpieza de paneles), siendo los volúmenes demandados no significativos. El suministro de agua para estas instalaciones se realiza habitualmente mediante suministro con camiones cisterna de agua procedente de concesiones vigentes o mediante

derivaciones temporales de aguas superficiales, que deben tramitarse en este Organismo, tramitación en la cual se evalúa la disponibilidad del recurso en cada caso particular.

Por otra parte, las instalaciones industriales para la producción de compuestos químicos capaces de almacenar los excedentes de energías renovables como son el hidrógeno verde, el amoniaco, metanol, etc., pueden suponer un uso consuntivo del agua acompañado de grandes volúmenes para la refrigeración que, en algunos casos, revierten al medio hídrico.

La alternativa elegida para este tema importante propone el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos sólo en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua y no que se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, entre ellos el regadío.

Se establecerán dotaciones máximas para la producción de estos compuestos químicos, aplicando las mejores técnicas disponibles y el estado de la ciencia. En ningún caso estas dotaciones irán en detrimento de las dotaciones establecidas para usos agrarios.

En lo relativo al posible impacto ambiental derivado de posibles vertidos y contaminación difusa, estos aspectos se analizan pormenorizadamente en cada caso, en los informes preceptivos que emite este Organismo para la evaluación ambiental de los proyectos a petición del órgano ambiental que corresponda. En estos informes se establecen condicionantes para minimizar estos impactos, que posteriormente se recogen en la declaración de impacto ambiental correspondiente.

Alegación 37.

Conclusiones finales

El actual contexto de cambio climático, reducción de aportaciones e incremento de exigencias ambientales e internacionales obliga a reforzar la resiliencia hídrica de la Demarcación mediante:

- *Una adecuada política de regulación y almacenamiento*
- *El mantenimiento funcional de los cauces*
- *La modernización y optimización de infraestructuras*
- *La revisión técnica de los actuales indicadores de sequía y escasez*

La mejora de la capacidad reguladora de la cuenca no debe entenderse únicamente como una herramienta de garantía de usos, sino también como un instrumento esencial para:

- *La adaptación al cambio climático*
- *La conservación de ecosistemas asociados al agua*
- *La estabilidad de las masas de agua*
- *El cumplimiento de objetivos ambientales*
- *La adecuada atención de los compromisos internacionales derivados del Convenio de Albufeira*

Respuesta:

Todos los aspectos que se citan en las conclusiones finales se han ido valorando a lo largo de la respuesta a este escrito de alegaciones, mostrando un acuerdo con la mayoría de las cuestiones

generales aportadas, si bien el enfoque de las medidas puede variar puntualmente, y algunos desacuerdos en especial con la vinculación de un mayor número de infraestructuras de regulación y una mejora de la conservación de ecosistemas asociados al agua.

Alegación 38.

Conclusiones finales

En conclusión, si tenemos en cuenta todo lo manifestado en el cuerpo de las presentes alegaciones, mucho tiene que cambiar la filosofía y el contenido del EpTI y el documento del PLAN que se elabore en el siguiente paso del proceso de planificación para que el voto de los usuarios regantes cuando sea informado por el Consejo del Agua de la Demarcación sea favorable. NUESTRA POSICIÓN SÓLO PUEDE SER LA DE OPONERNOS A LA APROBACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO.

Respuesta:

Respetamos la postura de la alegante en relación con el EpTI. No obstante, de una lectura de las propuestas, sugerencia y observaciones que hace la alegante y de la lectura del EpTI no podemos concluir lo mismo que el firmante del escrito. La mayor parte de las cuestiones que se plantean como mejoras están recogidas en la documentación a consulta pública; hay otras que el EpTI no puede atender porque ya están reguladas en normas de mayor rango y que atenderlas requieren modificaciones legales que no corresponden al promotor del Plan Hidrológico. Otras sugerencias, en fin, colisionan de facto con la normativa vigente y lógicamente no pueden ser atendidas. Pero en todo caso no se observa justificación para esta opinión desfavorable tan rotunda como muestra la conclusión final.

4.64. Escrito de observaciones Nº 081 y similares

Se muestra a continuación los agentes que han presentado escritos de POS con el mismo contenido y que son respondidas de forma conjunta para todos ellos.

Nº POS	Presentado por:	En nombre:
N081	D. Julio César Carnero San José.	Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna
N082	D. Elías González	Comunidad de Regantes del Canal de Zuzones
N083	D. Juan Pablo García	Comunidad de Regantes de Coruña del Conde
N084	D. Vicente Carpinter	Comunidad de Regantes de Quintana del Pidio
N085	D. Iván Suárez	Comunidad de Regantes del Canal de la Vid
N086	D. Rufino García	Comunidad de Regantes de Guma
N087	D. Eloy Bailez Lobato	Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (FERDUERO)

Alegación 1.

DU-01. Contaminación difusa.

El diagnóstico del documento refleja de forma adecuada la persistencia de problemas de nitratos y biocidas, pero no valora suficientemente los esfuerzos ya realizados por agricultores y ganaderos (modernización de regadíos, asesoramiento en fertilización, implantación de GIP).

La caracterización de presiones debería diferenciar con mayor claridad entre cultivos intensivos, cultivos leñosos, ganadería estabulada y extensiva, pues sus aportes de nutrientes y fitosanitarios son muy distintos.

Se aprecia un déficit en la cuantificación de los beneficios de las inversiones en modernización de regadíos y fertiirrigación: sin esos datos es difícil justificar medidas más restrictivas.

Respuesta:

Empezando por la última observación, como se ha comentado en la respuesta a la primera alegación, el EpTI deja de manifiesto la relevancia de la modernización del regadío para el logro de los objetivos ambientales y la mejora de la viabilidad de las explotaciones. Sin embargo, las presiones por contaminación difusa no se deben exclusivamente y en su mayoría al regadío donde el aporte de agua y el riesgo de lixiviado está controlado, sino al secano, a las aplicaciones de estiércoles y purines y a otras actividades como puede ser las descargas de aguas residuales urbanas no correctamente depuradas o los tratamientos biocidas en infraestructuras lineales, como se pone de manifiesto en la Ficha DU-01.

Estamos de acuerdo en que la modernización de regadíos permite aplicar nuevas tecnologías en el sector agrario, sin este tipo de infraestructuras sería imposible llegar a conseguir al riego de precisión, se maneja mejor el agua, y consecuentemente se evita que las aguas de retorno de riego sean menos y con menor carga contaminante, pero por el contrario el poder disponer de mejores infraestructuras

da pie a siembras más densas, que se traducen en más rendimiento por hectárea y más necesidad de abonado, también ocurre que esto posibilita la obtención de dos cosechas en un mismo año, más cultivo por consiguiente más abonado, exceptuando los cultivos de leguminosas.

Las estaciones de medida existentes tanto en aguas subterráneas como en ríos y arroyos que drenan algunas de las zonas regables, siguen dando valores de contenido en sustancias nitrogenados por encima de los limites legalmente establecidos. Analizando datos procedentes de sistemas de control de otros organismos, SINAC, controles sanitarios, campañas de medición en campo realizadas con nuestros medios, siempre aparecen algunos valores altos en zonas de mayor actividad agroganadera.

La caracterización de la presión por contaminación difusa ya tiene en cuenta los tipos de cultivos y la carga ganadera en cada cuenca vertiente de la demarcación hidrográfica, ya que se utiliza para identificar las presiones y los impactos dos fuentes de información: las redes oficiales de control de calidad de agua superficial y subterránea y los balances que el MAPA realiza cada dos años sobre el excedente de nitrógeno que provoca esa carga de nutrientes en las aguas. Y esta última fuente de información utiliza la información sobre cultivos, los sistemas de cultivo y las prácticas agrarias y ganaderas en cada zona.

Los esfuerzos que realizan los agricultores son conocidos porque ya se encargan las organizaciones profesionales agrarias de realzarlos; sin embargo, pese a ese esfuerzo, el problema no va a menos por lo que debemos preguntarnos qué no estamos haciendo bien o qué debemos mejorar. También desde instancias europeas se advierte a España con sanciones millonarias en aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2024 que concluye que España no cumple la directiva de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. De hecho, una de las comunidades autónomas en la que la sentencia pone el foco es Castilla y León, territorio en la que ejerce su actividad la asociación alegante, al no haber aplicado las medidas obligatorias ni lograr mejorar la calidad de las aguas. Dos años después de la sentencia, la Comisión Europea señala que solo 4 comunidades autónomas españolas no han tomado medidas, entre ellas Castilla y León. (Noticia La Gaceta de Salamanca, de 5 de junio de 2026). La amplia legislación existente para regular y minimizar este problema (entre otras, el Real Decreto 47/2022, el Real Decreto 1514/2009, relativo a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, o el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios) da idea de la complejidad para su resolución.

Alegación 2.

DU-01. Contaminación difusa.

Sobre los "trabajos de Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación terminados en marzo de 2025", se plantean las siguientes dudas:

- *¿Cuántos puntos se han muestreado cada campaña en la demarcación, tanto para aguas superficiales como para subterráneas?*
- *¿Este trabajo va a ser repetitivo? ¿Cuál es el programa/planing y el coste presupuestario anual destinado a él?*

Solicitamos una copia de los trabajos de "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación"

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, el trabajo "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación", se ha llevado a cabo por el MITERD en las campañas 2023 y 2024, duplicando analíticas en cada punto de muestro. En la demarcación hidrográfica del Duero, sobre 79 puntos de muestreo de aguas superficiales de la demarcación hidrográfica, atribuyen el 61% de la contaminación por nitratos a origen agrario (principalmente fertilizantes inorgánicos) y el 25% a mezclas con aguas residuales urbanas, el 14% restante de origen indeterminado. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, sobre 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, se muestra un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería.

Dado que el trabajo fue encargado por la Dirección General del Agua, del MITECO, puede dirigirse a ese departamento en petición del trabajo.

Alegación 3.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 1 (Reducción de excedentes y bandas de protección):

Las reducciones propuestas (hasta un 50% de excedentes o más) deben graduarse según tipología de cultivo, textura del suelo y riesgo de lixiviación, evitando fijar límites uniformes que puedan poner en peligro rentabilidad de cultivos con baja lixiviación (viñedo, olivar, almendro).

Las bandas de vegetación de ribera son útiles, pero su implantación debería ser voluntaria con compensaciones claras y planes de control de fauna (topillo campesino, conejos) para no crear nuevos problemas.

Respuesta:

La normativa del Plan Hidrológico, específicamente en su Apéndice 14.2, establece umbrales máximos de excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) que distinguen explícitamente entre cultivos herbáceos y leñosos, tanto en regadío como en secano. Para los cultivos leñosos (donde se incluyen viñedos, olivares y almendros), los valores de excedente permitidos son significativamente distintos y más ajustados a su fisiología que los de los herbáceos.

Las reducciones propuestas no son arbitrarias tampoco, sino que resultan de la aplicación del modelo PATRICAL, una herramienta de simulación del ciclo hidrológico y la calidad de las aguas distribuida espacialmente. Este modelo calcula el balance de nitrógeno teniendo en cuenta variables territoriales específicas como la recarga por lluvia, la textura del suelo (a través de los coeficientes de escorrentía y lixiviación) y el tipo de cultivo por término municipal. La zonificación se realiza a nivel de "sectores"

de masas de agua, lo que permite adaptar la exigencia a la realidad geomorfológica y al riesgo real de cada zona.

La propuesta sobre la voluntariedad de las bandas de protección parece razonable y se abundará sobre ella en el presente ciclo de planificación. Se debe indicar, por aclarar, que la vegetación de ribera puede constituir un refugio para distintas plagas, pero también para sus depredadores, que necesitan espacios donde establecer zonas de cría y refugio para desarrollarse.

Alegación 4.

Respecto al tema importante DU-01, se comparte el fomento de biofertilizantes, bioestimulantes y control biológico, pero se requiere apoyo técnico y financiero estable, así como validación agronómica local antes de exigir sustitución de fertilizantes tradicionales.

Debería contemplarse un periodo transitorio de al menos 5-7 años para la adopción realista de estas prácticas.

Respuesta:

Las propuestas que hace la Ficha DU-01 para la alternativa 2 son propuestas que pretenden orientar la decisión de las autoridades competentes en materia de investigación y transferencia de tecnología para abordarlos y movilizar la inversión necesaria para esta mejora de conocimiento. Pero para impulsar esas decisiones es necesario que los sectores implicados (agua, agricultura, medio ambiente, …) orienten en esa línea y confirmen esta posible mejora. No se pretende establecer como obligatorio el uso de estos productos en tanto se justifique su eficacia y sean competitivos económicamente, para lo cual se necesita ese trabajo de investigación y transferencia.

Alegación 5.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 3 (Depuración urbana):

Es positivo que se incluyan fuentes urbanas, pero el documento debería cuantificar su aportación relativa al problema global para no sobrecargar sólo al sector primario.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, las fuentes de contaminación difusa son varias y entre ellas están las descargas urbanas no adecuadamente tratadas. Sin embargo, sin negar su contribución al problema general, el trabajo de estudio del origen de la contaminación nitrogenada en las aguas de la demarcación hidrográfica al que se alude en la respuesta a la alegación 3ª, el origen del nitrógeno encontrado en el agua es de origen agrario en el 61% de las muestras de agua superficial y en el 55% de las muestras de agua subterránea, lo que pone de manifiesto que la mayoría de los nitratos presentes en el agua tiene un origen agrario.

Alegación 6.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 4 (Plantas de biogás):

La valorización de purines es esencial, pero se precisa planificación territorial: ubicación de plantas, logística de recogida y retorno del digestato tratado, evitando concentraciones que generen rechazo social.

Respuesta:

Estamos de acuerdo con parte de lo que se expone en la alegación, en la ficha se propone como alternativa, porque su correcto manejo genera menos problemas ambientales que las prácticas de aplicación de los purines en bruto como se está haciendo en la actualidad. No obstante, como se indica sería necesaria una planificación territorial de esta nueva actividad. Hasta la fecha la autoridad competente (comunidad autónoma) no nos ha trasladado ningún criterio al respecto.

Alegación 7.

La dispersión competencial señalada en la Ficha DU-01 del EPTI requiere de mecanismos concretos:

- *Convenios entre CHD y Consejerías de Agricultura para seguimiento conjunto.*
- *Creación de mesas de trabajo permanentes con organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes.*
- *Inclusión de Juntas Agrarias Locales en la difusión y control de buenas prácticas.*

Antes de aprobar medidas que impliquen reducción de fertilización o prohibición de biocidas, debe elaborarse un análisis coste-beneficio que contemple:

- *Pérdidas de producción y costes de adaptación.*
- *Impacto en empleo rural y en industrias de insumos.*
- *Ahorros ambientales y beneficios para el abastecimiento de agua.*

Respuesta:

La cooperación entre administraciones y la difusión de la problemática de la contaminación difusa son aspectos relevantes para buscar las soluciones. De hecho, se ha avanzado en los últimos cinco años en la percepción del problema y el convencimiento de que se debe ser proactivo en la búsqueda de soluciones, a lo que ha contribuido la visibilidad de problema mediante el expediente sancionador a España por incumplimiento de la Directiva de nitratos y por las medidas limitantes que se incluyen en los planes hidrológicos. También las organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes han desarrollado actividades formativas para sus asociados poniendo el foco también en este problema de la contaminación difusa: ya es normal que en las reuniones técnicas que estas entidades organizan se empiece a hablar del problema del exceso de nutrientes no solo como un problema económico de rentabilidad de explotación o productividad de los cultivos, sino también como un modo de no perjudicar al medio ambiente.

Dicho esto, los convenios a los que se refiere la alegación no pueden pretender eludir las competencias de cada administración en esta materia, en la que el seguimiento de la contaminación en agua

corresponde a la administración del agua y la implantación de medidas corresponde a la administración ambiental y agraria.

La Ficha DU-01 en la alternativa 1 evalúa el impacto de la reducción de excedentes de sustancias nitrogenadas en función de la zona de la demarcación hidrográfica donde nos encontremos. Esta alternativa 1 *supone la máxima reducción posible de los excedentes de nitrógeno (no de la aplicación) compatible con unas producciones agrarias óptimas. (…). En este análisis se identifica que, por ejemplo, una reducción de cerca del 35% de la fertilización implicaría una reducción del 50% de los excedentes y una reducción del 56% de la aplicación de fertilizantes una reducción del 80% de los excedentes de nitrógeno.*

Y se analiza en la Tabla 1 de la Ficha el efecto de la reducción de excedentes sobre el territorio:

Reducción de aplicación de N	Reducción de excedentes	Superficie sector (km²)
10%	*25%*	*3.227*
20%	*50%*	*19.629*
40%	*80%*	*3.872*

Esta información podría servir de ayuda a la Administración autonómica competente, en esta alternativa, para reforzar los planes de actuación de manera que se puedan limitar la aplicación de nutrientes de manera zonal de forma que se asegure que los excedentes sean inferiores a los contemplados en el citado apéndice 14.2. Esto podría implementarse de diversas formas:

- *Mediante la reducción de las cantidades máximas de N por hectárea en los planes de actuación de las zonas vulnerables;*
- *Mediante la reducción de las cantidades a aplicar de nutrientes fuera de las zonas vulnerables (de acuerdo con los criterios de Patrical) a través de normas de condicionalidad vinculadas a aumentos de las ayudas PAC.*
- *Mediante la aplicación de tributos a gravando el exceso de N adquirido en el mercado sobre la dosis contemplada en los planes de actuación.*

Alegación 8.

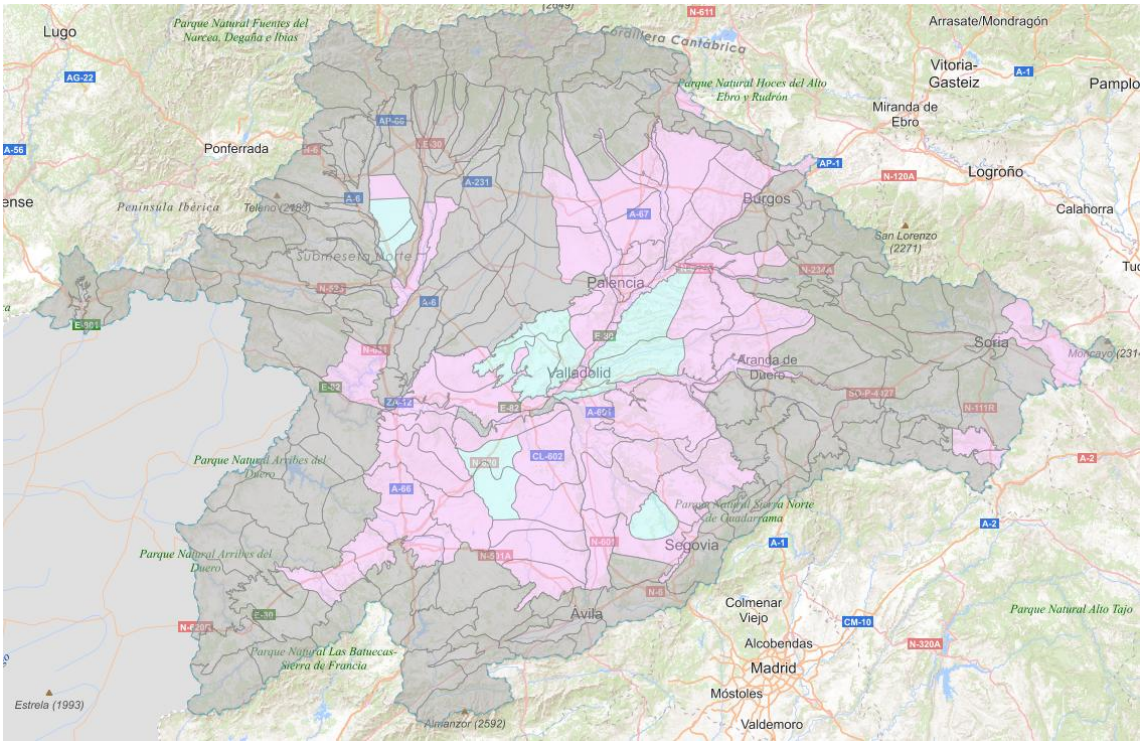
Se proponen algunas medidas en el tema importante DU-01:

- *Ajustar los límites de aplicación de nitrógeno según balance real de cada cultivo y zona (considerar coeficientes de absorción y mineralización).*
- *Priorizar el control y mejora de puntos de vertido urbano e industrial antes de imponer nuevas restricciones al abonado agrícola.*
- *Incluir líneas de ayuda específicas para:*
    - *Implantar bandas de protección voluntarias y mantenerlas.*
    - *Transición a biofertilizantes y control biológico.*
    - *Asesoramiento profesional y agricultura de precisión.*
- *Potenciar el uso de herramientas de gestión de nutrientes (cuadernos digitales, sensores de N en suelo/planta).*

- *Favorecer acuerdos de economía circular entre plantas de biogás, explotaciones ganaderas y agricultores para el uso seguro del digestato.*
- *Seguimos demandando al MITERD y a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la realización de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario mediante el estudio y muestreo significativo de parcelas de riego por gravedad, de riego modernizado y parcelas en las que ya se esté utilizando la fertirrigación para poder sacar conclusiones basadas en datos sobre la mejora que implica la tecnificación y digitalización del regadío en este apartado.*

Respuesta:

Como se indica en el EpTI y también en el Plan Hidrológico vigente, los límites del excedente de sustancias nitrogenadas se han hecho a partir de la presión identificada en forma de contenido de nitratos en las agua superficiales y subterráneas. Y esos límites se han fijado en forma de sectores territoriales, tal y como aparece en la imagen (en rosa la reducción del excedente sería del 25%, en azul la reducción del excedente sería del 80% del actual y en gris no sería necesaria esa reducción):



La traslación de la reducción de excedentes en cada sector a los cultivos presentes en el mismo, requiere un trabajo de detalle de los organismos competentes en materia agraria que pueden hacer esa distribución con criterios más técnicos que los que puede hacer el organismo de cuenca. De hecho, esta distribución de sectores tiene como fin ofrecer a la autoridad competente una información con la que realizar el análisis que solicita la alegante.

Sin duda es necesario mejorar el control de las descargas de las EDAR urbanas e industriales, sobre todo de poblaciones pequeñas. Pero como pone de manifiesto la Ficha, el análisis de origen de la contaminación difusa por técnicas isotópicas concluye que el origen de la contaminación en la mayoría de los puntos de muestreos es el agrario al encontrar en más de la mitad de las muestras nitrógeno de

origen inorgánico y de residuos animales (61% de las muestras en aguas superficiales y 55% en aguas subterráneas). Por tanto, parece lógico que pongamos el objetivo en cómo reducir esos excedentes.

Coincidimos con la alegante en que bandas de protección, asesoramiento y uso de nuevos productos deben ser medidas de carácter voluntario y adecuadamente compensadas. Y pensamos que el marco financiero de la PAC es la herramienta adecuada para ello. Lógicamente para que esto sea factible es necesarios que la administración competente en esta materia tenga interés en dotar a estos servicios ecosistémicos de la financiación adecuada.

Las herramientas de gestión de nutrientes ya son obligatorias a partir de la entrada en vigor del Real Decreto de nutrición sostenible de los suelos, por lo que esperamos que esta medida contribuya a la reducción de la contaminación cuando tenga el suficiente recorrido, ya que no será inmediato. El seguimiento de la contaminación en las redes de control de agua nos dará información sobre su eficacia.

El uso del digestato procedentes de plantas de biogas alimentadas con purines animales en lugar de la aplicación directa al suelo puede ser una mejora en la reducción de la contaminación siempre que haya transparencia en la aplicación, distribución y seguimiento y no supongan una mayor aportación de nutrientes al suelo. De hecho, la Ficha DU-01 señala que, para *el caso concreto de Castilla y León, que supone el 98,26 % de la demarcación del Duero, para el año 2021, 61.186 tn de nitrógeno de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 359.013 tn de N. Si se eliminase totalmente el desecho ganadero mediante plantas de biogás y no se sustituyese la fertilización orgánica en cultivos por inorgánica, se reduciría en un 17% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso del 50% de los excedentes de nitrógeno.*

Para el caso del fósforo y Castilla y León, para el año 2021, 13.736 tn de P de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 58.261 tn de P. En este caso, la eliminación del desecho ganadero mediante plantas de biogás supondría que se reduciría en un 23% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso superior al 50% de los excedentes de fósforo.

La eliminación de la fertilización orgánica mediante revalorización y transformación en biogás de la deyección ganadera, sin sustitución por fertilización inorgánica, permitiría cumplir los objetivos de la UE de reducir un 20% el uso de fertilizantes y reducir un 50% los excedentes antes de 2030.

Respecto a la demanda de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario bajo distintos sistemas de regadío, consideramos que es un trabajo que no está hecho pero que no corresponde al MITERD al haber un ministerio y unas consejerías autonómicas competentes en materia agraria.

Alegación 9.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Estando de acuerdo en que debe buscarse en todo momento un aprovechamiento sostenible del recurso que mantenga las masas de agua, ya que esta es la forma de garantizar la seguridad de las explotaciones agrícolas, se deben fijar uno objetivos a alcanzar con unos valores definidos y razonables que garanticen la actividad económica que se viene desarrollando. Considerar la serie histórica de la piezometría de la masa como dato de partida a la hora de determinar las acciones a realizar supone

definir un objetivo a alcanzar erróneo, enmascarar la realidad actual de la masa y no otorgar a las medidas que el usuario está llevando a cabo (digitalización, control de las extracciones, gestión por parte de las comunidades de usuarios, etc) la importancia que tienen. [..]

De la misma forma que se tiene un control sobre el uso del recurso, creemos necesario que se hagan estudios hidrogeológicos de detalle en los que, de forma pública y accesible a todos los interesados, se analice la situación real en estas masas de agua de las aportaciones al acuífero y su tasa de renovación […].

La mitigación de los efectos del cambio climático que se plantean sobre las masas de agua subterránea, se debe plantear, no desde la restricción de las extracciones, sino desde el control de las mismas y la ejecución de una serie de infraestructuras de reserva o acumulación que de forma progresiva permitan la sustitución de bombeos y otorguen garantía a la actividad económica en situaciones de escasez sin revertir la dinámica natural del acuífero.

Respecto a las alternativas que se plantean en el documento, estamos totalmente en desacuerdo con el núcleo central de todas ellas: el mantenimiento de las medidas normativas del plan hidrológico vigente para el nuevo ciclo de planificación, sobre todo en lo que se refiere a los artículos 33. [..]

Respuesta:

Los objetivos para las masas de agua subterránea son alcanzar el buen estado y evitar el deterioro, tal y como establece el artículo 4 de la Directiva marco de al Agua y el artículo 40 del TRLA. Ese buen estado para el objeto de la ficha DU-02 es que las extracciones no superen a los recursos naturales, simplificando. Este objetivo además redunda en beneficio de los usuarios del agua ya que el buen estado contribuye a un aumento de los niveles piezométricos que suponen menos costes de bombeo. Por tanto, el objetivo es claro. Y ante posibles colisiones de este buen estado con los usos, la propia directiva en su artículo 4(5) señala cuáles son los requisitos que deben verificarse:

a) que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende el uso del agua no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor que no suponga un coste desproporcionado;

b) que la administración proponente (en este caso la comunidad autónoma) garantice para las aguas superficiales, el mejor estado ecológico y estado químico posibles teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación,

c) que la administración proponente para las aguas subterráneas garantice los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación;

d) que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.

Tal y como se plantea la alegación no queda claro si estos criterios se garantizan.

Conocer la realidad de las reservas subterráneas de agua es un aspecto clave en la adecuada gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Para ello el seguimiento de los casi 500 piezómetros de la cuenca

ofrece una información muy valiosa. Gracias a esta información se concluye que en la actualidad la explotación del agua supone que en las masas de agua en mal estado cuantitativo se extrae entre un 10 y un 14% más de lo que se recarga anualmente por medios naturales, es decir, sacamos algo más agua de la que la naturaleza es capaz de reponer.

Como consecuencia los niveles del agua subterránea descienden ligeramente, incrementando los costes de producción del sector agrícola y poniendo en serio peligro la supervivencia del modelo socioeconómico actual y del entramado ecológico de la zona. Todo esto sin olvidar que, en las dos últimas décadas del siglo pasado, estas masas sufrieron un descenso generalizado en sus niveles de agua de unos 30 metros, situación que ha repercutido en la merma de caudales en los ríos que se asientan sobre estas masas.

Por todo ello la Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto en marcha estudios en colaboración con distintos organismos como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Dirección General del Agua (DGA), para seguir mejorando en el conocimiento del estado actual de la masas de agua subterránea y proponer medidas que permitan la recuperación paulatina de las mismas, gracias al ahorro de agua con una correcta gestión agrícola y con medidas de recarga artificial, sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales, done sea posible, se mencionan este tipo de actuaciones porque están implantadas en algunas zonas de estas masas con resultados esperanzadores. De todas formas, en la ficha ya se proponen actuaciones de este tipo y otras. Toda esta información se vuelca en los planes hidrológicos, cada seis años, y en los informes de seguimiento cada año; además los datos de piezometría y calidad de las aguas subterráneas, así como los balances están disponibles en la base documental Mírame-IDEDuero que se puede consultar por cualquier ciudadano en la web de la Confederación (https://mirame.chduero.es/chduero/public/home).

No podemos compartir la petición de la alegante de eliminar todas las restricciones y limitaciones sobre las masas de agua en mal estado cuantitativo y, como alternativa, no poner ningún límite a nuevos usos del agua ya que, de aceptarlo, supondría no solo no alcanzar el buen estado sino también contribuir al deterioro adicional y, de forma añadida, perjudicar a los usuarios que ahora disponen de derecho vigente y que esperan la protección administrativa de su derecho.

Alegación 10.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Para la configuración del nuevo plan hidrológico se propone:

1.- La derogación de los artículos 33 y 34 de la actual normativa del plan hidrológico vigente y la reformulación de aquellos artículos relacionados para permitir la novación de todos los derechos inscritos que estén en explotación.

2.- Permitir la explotación de los aprovechamientos otorgados (incluso el otorgamiento de otros nuevos) dentro de aquellos espacios naturales o zonas protegidas conforme lo establezca la autoridad ambiental y con las características que documento de gestión correspondiente determine.

3.- Ejecución de aquellas infraestructuras que permitan la recarga de las masas de agua o la diminución de la presión sobre las mismas y estudios de detalle de determinadas zonas con mayores dificultades

con la finalidad de dar soluciones que permitan mantener la actividad económica que se viene desarrollando.

4.- Control de las extracciones en toda la cuenca en la misma medida y con la misma intensidad que se exige a las CUAS.

5.- Revisión de las dotaciones brutas comarcales, su asignación y su configuración.

6.- Incentivar económicamente al usuario en la adopción de medidas e instrumentos tendentes a la mejora en el control de las extracciones o programas de digitalización que participen en el conocimiento y caracterización de la masa de agua.

7.- Establecer mecanismos de transferencia del conocimiento generado a nivel técnico y científico como programas de formación del usuario, plataformas de asesoramiento o redes de información, y establecer algún órgano que permita la participación del usuario de aguas subterráneas en la toma de decisiones que afectan a la cuenca.

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación anterior, los artículos 33 y 34 constituyen un régimen que permite alcanzar el buen estado de las masas de agua y evitar el deterioro. De una forma u otra, estos criterios se vienen aplicando en la demarcación hidrográfica desde 2010 y son parte de la explicación de que la tendencia descendente de la piezometría identificada en los años 1980 a 2008, se haya suavizado e incluso estabilizado.

En cuanto a lo que manifiesta el alegante de la prohibición de aprovechamientos otorgados, hasta la fecha no se ha prohibido su uso siempre que se ajusten a la legalidad. El otorgamiento de nuevos aprovechamientos en masas de agua en mal estado cuantitativo, entendemos que no contribuye en absoluto a una mejora de la situación, ni se ajusta a un uso racional, que asegure el futuro del regadío en dichas masas, sería como incentivar la vuelta a la situación de los años 80 y 90 del siglo pasado, con descensos del nivel piezométrico de 2 y 3 metros por año.

La recarga artificial de acuíferos es una práctica que se lleva haciendo es esta cuenca desde hace más de 20 años, las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 la Confederación encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos, teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, como aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, nos parece una alternativa a tener en cuenta para el fin que propone el alegante, por lo que ya se contempla como medida en la alternativa 3 del EpTI, a la espera de que la autoridad competente pueda validarla y asumirla teniendo en cuenta todos los condicionantes: ubicación de estas infraestructuras, su proximidad a cauces con recurso suficiente, los costes de las obras, su financiación, y los costes de explotación y energía, pues

la mayoría han de llenarse con bombeos,…; en definitiva muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

La instalación de contadores para el control de las extracciones de agua está regulada según La normativa española que obliga a todos los aprovechamientos de aguas a disponer de sistemas de medición de caudales, según el TRLA (art. 55.4) y el Reglamento del DPH. Esta obligación se ha reforzado con la Orden TED/1191/2024, que impone contadores homologados y control electrónico con envío de datos. Los equipos deben cumplir normativa metrológica y adaptarse al tipo de captación. Como se ha explicado en diversos foros, esta Orden, así como la que ha sustituido de 2009, permiten que más del 80% de la demanda de agua de la cuenca pase por sistemas de control. Evidentemente los contadores de la categoría 1ª, que suponen poco volumen a escala de cuenca (menos del 20%) pero número muy alto, van progresivamente instalándose y remitiendo información.

Las dotaciones brutas máximas anuales aplicables en los cultivos por comarcas agrarias, que figuran en el Plan Hidrológico, están basadas en datos obtenidos de publicaciones de organismos públicos como son las distintas Consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, del Ministerio de Agricultura, y antes de su aprobación se someten a información pública, como todo el contenido del Plan Hidrológico. En el Anejo 5 del Plan Hidrológico vigente se explica el procedimiento para su cálculo: cálculo de la dotación neta a partir de las necesidades de los cultivos obtenidas de InfoRiego y de la distribución de los cultivos a partir de las declaraciones de la PAC de los años 2013-2019; cálculo de la eficiencia global: calculada como el producto de las eficiencias de transporte, distribución y aplicación; cálculo de la demanda bruta como el producto de la dotación neta por la superficie asignada entre la eficiencia global. Consideramos que es una información adecuada al proceder de fuentes oficiales y no sujeta a apreciación subjetiva.

Respecto a incentivar económicamente la instalación de contadores, el artículo 3 de la Orden TED/1191/2024 es muy clara al respecto al señalar que, en *todos los aprovechamientos de aguas,* ***los titulares están obligados a instalar y mantener un sistema de control volumétrico*** *que permita la medición de los volúmenes de agua captados, junto con un sistema de registro y almacenamiento.*

La Confederación no tiene competencias en materia de difusión y transferencia de tecnología. Normalmente da cuenta de los trabajos que realizad en el ámbito del dominio público hidráulico, seguridad y gestión de infraestructuras y planificación hidrológica en los foros ordinarios que otros agentes organizan: congresos de seguridad de presas, congresos de comunidades de regantes, jornadas de restauración de ríos, … Por otra parte, en el ámbito de las CUAs, anualmente se celebran reuniones técnicas de la Confederación con sus presidentes para aclarar conceptos y fomentar las buenas prácticas. Lógicamente no se invita a esas sesiones a las comunidades de regantes de aguas superficiales como la alegante que ya tiene su ámbito de representación en la Junta de Explotación Pisuerga-Bajo Duero.

Los usuarios del agua participan en la gestión de la cuenca a través de los órganos que están establecidos normativamente. Así el artículo 26 del TRLA identifica como órganos de gestión, en régimen de participación, las Juntas de Explotación. Su finalidad es coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las masas de agua cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Este es el marco en que los usuarios de aguas subterráneas pueden participar; de hecho, en la alternativa 1 de este tema importantes se establece como una de las medidas que podrían ponerse en marcha.

Alegación 11.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Ya hemos dejado claro en la introducción cuál es la situación demográfica y económica de nuestras zonas rurales, por lo que cualquier medida que se aplique en mejorar los problemas contenidos en la ficha no debe empeorar la situación descrita. Si se mantiene la consecución de ese objetivo, no nos oponemos a que se puedan adoptar medidas que puedan mejorar la conectividad fluvial (longitudinal, lateral y vertical) que mejore el funcionamiento de los ecosistemas.

Del análisis de la ficha parece desprenderse una apuesta prioritaria por modelos intensivos de naturalización fluvial, basados en esquemas de restauración ecológica donde el cauce aparece acompañado por bosque de galería y bandas de vegetación herbácea en ambas márgenes, favoreciendo así la conectividad longitudinal y transversal de los flujos hídricos y sedimentarios [..] dicho enfoque puede resultar excesivamente homogéneo si no se tienen suficientemente en cuenta las particularidades geomorfológicas, históricas y territoriales de numerosos cauces [..]. Existen determinados tramos del Dominio Público Hidráulico que, en realidad, constituyen cauces profundamente transformados por la acción humana a lo largo de siglos, especialmente sobre antiguas llanuras lacustres o cuencas endorreicas sedimentarias desarrolladas durante el Pleistoceno.

En numerosos casos, los cauces actuales responden a procesos históricos de excavación y drenaje artificial desarrollados con el objetivo de desecar zonas inundables o lagunares y aprovechar agronómicamente las fértiles vegas originadas por procesos de colmatación sedimentaria. [..]. Por ello, en determinados sistemas hidrológicos altamente antropizados, la recuperación de modelos teóricos de naturalización podría requerir alteraciones territoriales de enorme magnitud, incompatibles en muchos casos con la realidad física actual, con los usos consolidados existentes y con los derechos legítimamente adquiridos sobre los terrenos adyacentes.

Asimismo, debe tenerse presente que sobre los terrenos colindantes con los cauces concurren frecuentemente derechos consolidados, singularmente derechos de propiedad privada, cuya eventual afección exigiría las correspondientes compensaciones y una adecuada justificación basada en criterios de proporcionalidad.

Respuesta:

Se agradece el comentario sobre la buena disposición para la mejora de los ecosistemas fluviales.

La normativa actual apuesta por una restauración fluvial que lleve a los ríos, lagos y humedales a una situación lo más similar a su situación original previa a la intervención humana. Esto permite crear entornos más resilientes a la contaminación y más seguros ante eventos extremos como inundaciones, entre otros, con las consiguientes ventajas para los seres humanos. Por situación original no se entiende una situación uniforme, sino adaptada a cada tipo de río. A modo de ejemplo, aquellos ríos con hidrología extrema no tienen asociado un bosque de ribera ya que periódicamente las avenidas lo arrastran, permitiendo únicamente la presencia de individuos jóvenes. Para estos ríos la existencia de una gran presencia de bosque de galería es síntoma de alteración del régimen hídrico, lo cual suele ocurrir, por ejemplo, aguas debajo de los embalses.

Si bien la alteración de los cauces se lleva haciendo desde antiguo, ha sido en el siglo XX donde se han producido las grandes actuaciones de drenaje y encorsetamiento del río. Las imágenes del vuelo americano del 56 así lo ponen de manifiesto, ya que muestran un grado de naturalidad de los cauces muy distinto al actual.

De acuerdo con la normativa y los documentos técnicos de planificación, una masa de agua superficial se puede designar como muy modificada (HMWB, por sus siglas en inglés) cuando, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza. Este "cambio sustancial" se entiende como una modificación de sus características hidromorfológicas que impide que la masa alcance el buen estado ecológico. Esto debe analizarse minuciosamente mediante distintas revisiones tasadas en la normativa, y así se ha hecho en los sucesivos planes hidrológicos. En el último, a modo de ejemplo, se han designado 186 masas de agua río muy modificados y se van a volver a revisar en este ciclo de planificación.

Cabe mencionar también que la propiedad privada no puede prevalecer sobre terrenos que, por sus características geofísicas, forman parte del cauce natural. La propiedad privada en zonas colindantes a ríos no es absoluta; está intrínsecamente limitada por la ley para garantizar la seguridad pública y la protección ambiental, como pone de manifiesto el tenor de los artículos 6 y 9 del RDPH, entre otros. La jurisprudencia del Tribunal Supremo avala que la Administración proteja el DPH sin indemnizaciones automáticas, ya que actuar sobre el cauce natural es una obligación legal para alcanzar el buen estado de las aguas, objetivo que constituye un interés público superior.

Alegación 12.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Parece razonable admitir la posibilidad de actuaciones de gestión activa y mantenimiento de la vegetación de ribera, aplicando criterios técnicos y silvícolas semejantes a los utilizados en otras masas forestales, especialmente cuando dichas actuaciones resulten necesarias por motivos hidráulicos, de seguridad, sanitarios o de conservación. […]

Se considera necesario que el instrumento de planificación hidrológica contemple la posibilidad de autorizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales, teniendo en cuenta sus características geomorfológicas, los usos preexistentes y los intereses legítimos concurrentes. […].

Especial atención merece la proliferación del carrizal y otras especies invasoras o expansivas, cuyo desarrollo puede reducir significativamente la capacidad hidráulica de desagüe y alterar el equilibrio ecológico de determinados tramos fluviales. Por ello, se considera conveniente que el futuro instrumento de planificación contemple expresamente medidas de control y gestión activa de este tipo de formaciones vegetales cuando existan razones hidráulicas, ambientales o de seguridad que así lo aconsejen.

Respuesta:

Los criterios técnicos y silvícolas utilizados en otras masas forestales no tienen por qué se similares a los que aplican a la vegetación de ribera, al ser el río un elemento diferenciador en su creación y modelado. Las mejores actuaciones para la mejora de las condiciones hidráulicas, de seguridad,

sanitarias o de conservación, son las de restauración del río a su situación original, en la que su configuración, trazado, brazos secundarios y llanura de inundación permitan la laminación de avenidas o el filtrado de nutrientes y otras sustancias nocivas para la salud.

Se está de acuerdo en realizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales. Así se hace, de hecho. No se abunda más ante la generalidad del comentario.

Independientemente de que en alguna circunstancia puedan aplicarse medidas de control activo de especies invasoras, se debe recordar que la restauración de la conectividad longitudinal y lateral, junto con la recuperación de la morfología natural del cauce, permite que el ecosistema funcione mediante mecanismos de control natural frente a especies invasoras. Un río con un hábitat naturalizado favorece el mantenimiento de las comunidades biológicas autóctonas, dificultando que las especies invasoras desplacen a los endemismos locales. La alteración del régimen natural de los ríos y la creación de aguas estancadas (paso de régimen lótico a léntico) son precisamente los factores que facilitan la proliferación de especies exóticas.

Alegación 13.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Respecto a las obras de cruce aéreo o subterráneo de infraestructuras sobre cauces públicos, se considera necesario que el nuevo Plan Hidrológico otorgue un mayor peso a los criterios técnicos e hidráulicos en la evaluación de las actuaciones proyectadas, evitando que el condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada. […]

En relación con las autorizaciones de obras en el Dominio Público Hidráulico, se considera igualmente conveniente admitir la aplicación del criterio de escala para el cálculo hidrológico de avenidas mediante el Método Racional Simplificado, así como permitir simulaciones hidráulicas basadas en levantamientos topográficos específicos realizados para cada actuación.

Finalmente, se considera de gran interés que la Confederación Hidrográfica del Duero establezca, de forma previa y suficientemente clara, criterios técnicos orientativos para la tramitación de autorizaciones relativas a puentes, pasarelas y otras obras sobre cauces.

Respuesta:

Los condicionantes ambientales son un requisito que establece la normativa actual. No se la idea por la que el "condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada" en las actuaciones en cauce.

El uso del método racional simplificado para cálculos hidráulicos en la planificación se incluye en el Anexo XI del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Se remite a esta norma y no al plan hidrológico el resto de observaciones presentadas sobre autorizaciones de obras en cauce.

Alegación 14.

DU-05 Gestión del riesgo de inundación

Se considera razonable que el instrumento de planificación permita incorporar estudios hidrológicos e hidráulicos de mayor detalle, sustentados en levantamientos topográficos específicos, modelizaciones bidimensionales, campañas de campo y análisis hidráulicos adaptados a las características concretas de cada emplazamiento.

Este criterio de mayor precisión técnica debería poder extenderse también a la determinación de caudales de avenida, permitiendo ajustar los cálculos hidrológicos a las características reales de cada cuenca vertiente y evitando la aplicación automática de metodologías generales cuando existan estudios específicos suficientemente justificados

Demandamos que cualquier actuación que se plantee, no cause perjuicio a la actividad económica implantada en el territorio.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, y sin perjuicio de lo ya señalado en este documento acerca del alcance propio del ETI, procede indicar que las cuestiones planteadas presentan indudable relevancia desde la perspectiva del adecuado diagnóstico del riesgo y peligrosidad de las inundaciones. No obstante, será en fase de redacción del PGRI cuando se revisen los modelos hidráulicos para establecer las medidas adecuadas para reducir el riesgo de las inundaciones.

Las modelizaciones hidráulicas e hidrológicas están en constante actualización y singularmente en las tres fases de elaboración de los de PGRI: fase de evaluación preliminar del riesgo, fase de elaboración de los mapas de peligrosidad y fase de plan de gestión del riesgo. La cartografía de peligrosidad del SNCZI simula escenarios estadísticos de eventos extraordinarios, como son las avenidas de media y baja probabilidad (100 y 500 años de periodo de retorno). El SNCZI exige que las simulaciones hidráulicas para delimitar el riesgo se realicen sobre la base del terreno en condiciones actuales ofrecidas por el modelo digital del terreno (MDT), manteniendo infraestructuras como azudes y puentes tal y como existen hoy. Ese MDT se obtiene por tecnologías suficientemente maduras que, con la previa revisión a su aplicación, ofrecen una información exacta y muy adecuada para el objetivo final.

Las medidas que el PGRI establezca tratarán de limitar los perjuicios a las actividades actuales; no obstante puede darse el caso de que haya actividades ubicadas en zonas inundables que cuenten con autorizaciones previas a la entrada en vigor del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y de los artículo 9 y 14 del RDPH; para ellas será muy difícil que cualquier medida que se establezca en el PGRI no entrañe perjuicio que, por otra parte, ya le causa la propia ubicación.

Alegación 15.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Las Comunidades de Regantes consideran positivo que el EPTI reconozca la relevancia estratégica del regadío en la cuenca del Duero […].

En su planteamiento identifican el problema principal que supone la escasa o nula regulación artificial en sistemas como el Carrión, el Órbigo, el subsistema Tuerto o el Cega. No obstante, el documento presenta un enfoque excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales, sin incorporar adecuadamente la dimensión económica, social y territorial del regadío.

No se puede achacar la reducción de aportaciones principalmente a los efectos del cambio climático. No podemos establecer un horizonte de cambio climático referido al año 2045, que resulta poco fiable.

Respuesta:

Los planes hidrológicos tienen que cumplir dos objetivos principales que generalmente entran en conflicto: por un lado, conseguir el buen estado o el buen potencial de todas las masas de agua y, por otro, satisfacer las demandas cumpliendo los criterios de garantía. En otras palabras, se trata de hacer un uso sostenible del recurso, equilibrando la protección de los ecosistemas relacionados con el medio hídrico con la satisfacción de las demandas. En el estudio de alternativas de las fichas DU-06 y DU-07 del EpTI, analizamos medidas que disminuyen la presión por extracción de agua (uso más eficiente del agua por modernizaciones) y medidas de mayor disponibilidad de recurso (aumento de regulación). Por este motivo, pensamos que el enfoque del EpTI no está excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales.

Efectivamente en el EpTI se reconoce la relevancia estratégica del regadío y creemos que su dimensión económica, social y territorial está debidamente incorporada.

Estamos de acuerdo en que la reducción de aportaciones no es debida solamente a los efectos del cambio climático. Probablemente también existe reducción de aportaciones por los cambios en los usos de suelo, pero no tenemos información suficiente que nos permita evaluar la magnitud de esta reducción.

El establecimiento de un horizonte de cambio climático en el que se modelan demandas futuras y recursos naturales afectados por cambio climático para calcular sus balances es un requisito de la legislación (Reglamento de Planificación Hidrológico, art.11.4 y art. 21.4). En los planes de 4º ciclo el horizonte de cambio climático corresponde al año 2045 pues se incrementa en 6 años el del plan vigente, que era 2039.

Alegación 16.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Resulta incuestionable que las modernizaciones llevan implícita una reducción del uso del agua, por lo que no se deben añadir mayores presiones sobre el uso del agua. Las inversiones llevadas a cabo también por los propios agricultores están siendo muy importantes, además de la recuperación de costes que vía tarifas de utilización del agua ya contribuyen.

La modernización no debe utilizarse como instrumento indirecto de reducción de concesiones ni de actividad agraria, sino como herramienta de mejora de eficiencia, productividad y sostenibilidad.

En general, se demanda que las mejoras de eficiencia y modernización permitan atender más demandas y generar mayor valor económico y social con el mismo volumen global de agua, sin

incrementar necesariamente la presión neta sobre los recursos hídricos. La eficiencia debe medirse no solo por reducción de consumos, sino también por productividad, generación de empleo, estabilidad territorial y capacidad de adaptación climática.

Respuesta:

En relación con las consideraciones formuladas, el EpTI contempla la modernización de regadíos como una medida prioritaria de adaptación orientada a mejorar la eficiencia en el uso del agua, la garantía de suministro y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias existentes. En este sentido, se reconoce el esfuerzo inversor realizado por el sector, así como su contribución a una gestión más racional del recurso y a la recuperación de costes del sistema.

No obstante, debe precisarse que la mejora de la eficiencia no implica, por sí misma, una reducción automática de los volúmenes concesionales ni constituye un instrumento indirecto de minoración de la actividad agraria, sino que su tratamiento en la planificación hidrológica responde a un análisis caso por caso. Así, los eventuales ahorros derivados de la modernización no se someten a penalizaciones automáticas, pero tampoco pueden destinarse de manera generalizada a la generación de nuevas demandas si ello implica un incremento neto de la presión sobre las masas de agua.

En coherencia con ello, el EpTI establece que dichos ahorros deben contribuir, prioritariamente, a consolidar la sostenibilidad del uso existente y a evitar incrementos de presión que puedan comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales o el equilibrio del sistema hídrico. Solo en aquellos supuestos en los que exista disponibilidad efectiva del recurso y se acredite la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de las actuaciones, podrán considerarse desarrollos adicionales, siempre de forma compatible con la consecución del buen estado de las masas de agua y el mantenimiento de los caudales ecológicos.

Finalmente, si bien se comparte que la eficiencia puede valorarse desde una perspectiva amplia —incluyendo aspectos como la productividad, la generación de valor económico o la resiliencia territorial—, en el ámbito de la planificación hidrológica dicha eficiencia debe necesariamente integrarse con el principio de sostenibilidad ambiental, lo que exige que cualquier mejora en el uso del recurso no se traduzca en un aumento de las presiones que comprometa los objetivos establecidos por la normativa vigente.

Alegación 17.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Si bien el plan hidrológico en vigor descartó el incremento de nuevos regadíos, sí es posible esa ampliación en sistemas concretos con cultivos con un uso muy reducido del recurso, como por ejemplo en el sistema Riaza-Duratón y otros sistemas, donde sí es posible ampliación de superficie de riego con el mismo volumen de agua ahora establecido.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, cabe señalar que, si bien el vigente plan hidrológico estableció, con carácter general, la no previsión de nuevos desarrollos de regadío, el Esquema de Temas Importantes (ETI) contempla que determinadas situaciones específicas puedan ser objeto de análisis

individualizado, particularmente en aquellos sistemas en los que concurran circunstancias singulares desde el punto de vista de la disponibilidad y gestión del recurso y, además, las autoridades competentes (MAPA o Comunidades Autónomas) plantearon nuevos regadíos que cuentan con amparo legal. En este aspecto el organismo de cuenca no puede proponer nuevos regadíos cuya autoridad competente no avala o, siendo avalados, no cuenta con garantías suficientes o amparo legal de la planificación sectorial.

No obstante, debe precisarse que los eventuales aumentos de superficie destinada al regadío no pueden valorarse exclusivamente desde la perspectiva de un mantenimiento del volumen total de extracción, sino que han de analizarse de forma integral considerando el conjunto de presiones que la actividad agraria genera sobre las masas de agua. En particular, el incremento de superficie regable puede implicar efectos relevantes sobre el régimen hidrológico, el retorno de flujos, la calidad de las aguas, la contaminación difusa o la alteración de los caudales ecológicos, incluso en aquellos supuestos en los que el consumo unitario por hectárea sea reducido.

En este sentido, el ETI incide en la necesidad de abordar la sostenibilidad del regadío desde un enfoque global, que tenga en cuenta no solo la eficiencia en el uso del agua y el volumen derivado, sino también la evolución de las presiones significativas y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Por ello, la eventual ampliación de superficies regables —incluso en sistemas concretos como el Riaza-Duratón— debe someterse a una evaluación específica que acredite su compatibilidad con la consecución del buen estado de las masas de agua, el mantenimiento de los caudales ecológicos y la ausencia de deterioro adicional del dominio público hidráulico.

En consecuencia, no resulta procedente establecer, con carácter general, la posibilidad de ampliar superficies de regadío bajo el único condicionante de mantener el volumen global actualmente asignado, sino que cualquier propuesta en este sentido deberá justificarse caso por caso, en el marco del proceso de planificación hidrológica y de conformidad con los principios de sostenibilidad, cautela y no deterioro que rigen la gestión del recurso.

Alegación 18.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Respecto al tema importante DU-06, la alegante valora positivamente que el EPTI reconozca la modernización del regadío como la medida esencial de adaptación al cambio climático y mejora de la garantía de suministro. De las dos alternativas que se propone como factibles (5 y 6), muestran preocupación por determinados planteamientos relacionados con:

- *Limitaciones automáticas de concesiones*
- *Restricciones indirectas de superficie regable*
- *Incremento de costes para los usuarios*
- *Traslado excesivo del esfuerzo inversor a los regantes*
- *Cierre definitivo del mapa de nuevos desarrollos de regadíos.*

Asimismo, las Comunidades de Regantes consideran imprescindible priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y con baja garantía hídrica, especialmente en zonas como Carrión, Órbigo, Tormes, Eria, Curueño o Duerna.

Igualmente, se considera necesario garantizar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas, especialmente ante el horizonte de 2035. [..]

Las actuaciones vinculadas al regadío presentan, por tanto, muy bajos niveles de ejecución, especialmente en modernización de regadíos, infraestructuras hidráulicas y regulación. Esta situación genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban.

Respuesta:

La Ficha DU-06 al elegir las alternativas 5 y 6 señala ambas alternativas permiten avanzar en medidas de modernización de regadíos que manteniendo la competitividad de las explotaciones con ligeros ajustes de las dotaciones adaptadas a la mejora que suponen las infraestructuras, permitan ampliar la superficie de regadío en la cuenca. Las comunidades de regantes en esta materia han ido modificando su posición, si es que se puede hablar de una posición común: de pasar en el plan de primero y segundo ciclo a demandar el cierre del mapa de cultivos en la demarcación hidrográfica, postulan a hora la necesidad de ampliar el regadío. Desde el punto de vista de la garantía y dadas las limitaciones reales existentes para ampliar la oferta, toda ampliación de superficie de regadío conlleva un reajuste del regadío existente, de manera que solo por la vía de la mejora de la eficiencia de puede atender a todas las demandas.

Que las concesiones deban modificarse como consecuencia de las actuaciones de mejora de la eficiencia del uso no es una exigencia del plan hidrológico sino de la propia normativa de aguas, por ejemplo, en aplicación de los artículos 65 del TRLA, al señalar que las concesiones podrán ser revisadas cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento, a petición del concesionario o cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. En concreto, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. En el primer criterio del artículo 65 para revisar una concesión se encuentra el hecho de que, por ejemplo, se esté regando más superficie (o menos) de la que ampara el título concesional, a lo que se refiere el alegante como “restricciones indirectas de superficie regable”.

En efecto, el EpTI (y el propio plan hidrológico vigente) ha dado prioridad a las actuaciones en puntos donde hay déficit estructural como Carrión y Órbigo. En la actualidad no hay déficit en el sistema Tormes. Los casos de Eria, Curueño o Duerna son nuevos en el presente ciclo de planificación hidrológica y nos parecen más un empeño de determinadas asociaciones de regantes que de los propios usuarios de estos ríos. De hecho, para el Duerna se estableció una reserva de agua en el plan hidrológico vigente para mejorar las garantías de los riegos del valle, reserva que no se ha materializado por falta de capacidad de los usuarios en agruparse de manera reglada. En el caso del Eria solo los de la parte baja del Área han promovido una CUAs con el fin de organizar mejor el uso del agua.

El EpTI no tiene capacidad para modificar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas que otorga la ley, especialmente ante el horizonte de 2035, ni puede ampliar esa seguridad ni disminuirla. Es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de

1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas. Lo que el EpTI señala es que estos derechos cuando sean en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, si éstas no alcanzan su buen estado en 2035, será muy difícil que puedan mantener su status actual, ya que en las citadas DT se indica que en todo caso, a esos aprovechamientos de aguas les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico. Por tanto, el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

Como se pone de manifiesto en la Ficha del tema importante DU-09, las actuaciones vinculadas al regadío (modernización de regadíos y nuevos regadíos) cuya autoridad competente es la administración agraria del Estado y de las comunidades autónomas, presentan un nivel de ejecución del 20 y del 27%, respectivamente; por su parte el grupo de infraestructuras hidráulicas presenta una ejecución del 13% de la inversión. Esta situación, como indica la alegante, genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban; de hecho, en el tema importante DU-09 se insiste en este aspecto llamando a la responsabilidad de las autoridades competentes para que asuman las medidas que han validado en cada ciclo de planificación hidrológica.

Alegación 19.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

En las alegaciones a la revisión del plan 2022-2027 se propuso una tabla de asignaciones máximas que creemos que debe ser revisada de acuerdo a las dotaciones que se vienen aprobando en las campañas de riego coincidentes con el período de desarrollo de dicho plan y que deberían ser las siguientes:

SISTEMA	ASIGNACIÓN MÁX
PISUERGA-BAJO DUERO	6.000
CARRIÓN	5.000
TORMES	6.000
ÓRBIGO	6.000
PORMA	6.000
ADAJA	4.900
ALTO DUERO	6.000
RIAZA	6.000
ESLA (RIAÑO)	6.000
ARLANZÓN	6.000
TUERTO	4.500
TERA	6.000
ÁGUEDA	6.000

Partiendo de esta base, el objetivo que debemos perseguir es que se adopten las medidas oportunas para que todos los sistemas de explotación estén en las mismas condiciones y cuenten con idéntica disponibilidad (que ciframos en 6.000 m^3/ha), para lo cual tendríamos que incluir en el programa de medidas las actuaciones necesarias que nos permitan situarnos en ese escenario de igualdad.

Respuesta:

La propuesta que se hace en la alegación se ha tenido en cuenta en el EpTI, singularmente en la alternativa 5, ofreciendo los resultados de esta alternativa respecto al resto. A la vez hay que decir que adoptar este criterio para las dotaciones supondría llevar a algunas de las demandas de determinados sistemas de explotación al incumplimiento generalizado de garantías, como por ejemplo Alto Duero, Adaja o Tuerto. Tampoco se explica bien en la alegación por qué motivo, siguiendo el argumento de la alegante, se debe asegurar una dotación de 4.500 m^3/ha año en el Tuerto o 4.900 m^3/ha año en Adaja, frente a 6.000 m3/ha año de muchos de los sistemas de explotación; y tampoco por qué 6.000 m^3/ha año en toda la cuenca: ¿maneja el alegante algún estudio estadístico que justifique esa dotación?; si es la dotación a la que tradicionalmente se ha tendido, ¿por qué ha de mantenerse en sistemas modernizados con elevadas eficiencias de uso del agua?; ¿se pretende, con esta propuesta, dar carta de reconocimiento a determinados agentes que afirman que la modernización de regadíos en España no contribuye a reducir las presiones sobre las masas de agua sino a incrementar la demanda y que por ello, debería anularse la financiación con fondos públicos?

Por otra parte, la propuesta no atiende al criterio agronómico de las necesidades hídricas de los cultivos de cada sistema de explotación, como se pone de manifiesto, por ejemplo, comparando la dotación del Sistema Órbigo con la del Sistema Adaja, o pensando que la demanda de un cultivo en Soria puede ser comparable a la del mismo cultivo en Toro. La propuesta que se hace en el escrito, en un deseo de homogeneizar el suministro de agua cuando se paga lo mismo por superficie, atiende sobre todo a las reservas que existen en cada Sistema, lo que invalidaría el análisis de garantía que se establece de acuerdo con los epígrafes 3.5.1 u 3.5.2 de la IPH.

Entendemos que la demanda de la alegante obedece a que todavía se pagan cánones y tarifas no en función del consumo sino de la superficie regada, sistema que no disuade al usuario de ser eficiente. De cualquier modo, se analizará en fase de redacción del plan hidrológico la viabilidad de la propuesta, con el fin de que pueda atender a dos criterios simultáneos: la realidad agroclimática de cada zona y el hecho de que el pago de cánones y tarifas se haga por superficie regada en vez de volumen utilizado.

Alegación 20.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

1.- En primer lugar y en tanto en cuanto no se adopten las medidas que puedan mejorar la garantía de todas las UDAs, se debe mantener la vigencia del art. 15.8 del plan vigente "Dotaciones orientativas máximas en los sistemas de explotación regulados: En aplicación del artículo 55 del TRLA, el organismo de cuenca para los sistemas que cuenten con regulación, una vez consultadas las correspondientes Juntas de Explotación, fijará anualmente dotaciones orientativas máximas de agua en función de las reservas existentes y en coherencia con las propuestas sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses de la Comisión de Desembalse, a las que deberá adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Estas dotaciones podrán ir modificándose anualmente en función de las reservas realmente existentes".

2.- En relación con el apartado anterior, abogamos porque las propuestas de dotaciones elevadas por las Juntas de Explotación a la Comisión de Desembalse y aprobadas por esta última se apliquen por

igual a todos los usuarios del sistema en cuestión, sean canales del Estado o regadíos concesionales, no sólo en años de sequía (donde se puede aprobar un Real Decreto-ley que lo regule), sino también en años de normalidad, para que todos los usuarios del mismo Sistema tengan a disposición idénticos caudales.

Respuesta:

Las cuestiones que se sugieren no son parte del EpTI, sino que corresponden más bien a la fase de elaboración del Plan Hidrológico, que contará con un período de consulta pública donde podrán hacerse sugerencias sobre la parte Normativa del Plan Hidrológico.

Alegación 21.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

3.- La mejora de la eficiencia del regadío mediante la modernización de sus infraestructuras y un leve incremento de la regulación son las estrategias más adecuadas. Por parte de los usuarios, también se debe perseguir aplicar todas las medidas y prácticas agrarias que mejoren la gestión sostenible del recurso y consigan un ahorro de agua.

4.- Caudales ecológicos: su implantación y cumplimiento (casi del 100% en nuestra cuenca de acuerdo a los informes anuales presentados a la Comisión de Desembalse) contribuyen a la pérdida de garantía en la satisfacción de las demandas en las UDAs con más déficit hídrico. En este sentido, debemos de poner de manifiesto que no consideramos justificada la obligación de mantener los caudales mínimos definidos para situación de normalidad en situación de sequía prolongada en las zonas incluidas en la red Natura 2000 (LIC, ZEPA, etc) o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, tal como establece el RPH (art 18.4). La situación de sequía prolongada obedece a causas naturales y, por tanto, no se encuentra justificación para esta salvedad. Teniendo en cuenta que se trata de una prescripción de carácter reglamentario, su modificación debe plantearse en una disposición de igual o superior rango, como puede ser el Real Decreto de aprobación de los planes de cuarto ciclo. Por ello se considera de interés plantear esta modificación como medida en los programas de medidas de los planes de cuarto ciclo, con la tipología de instrumento general.

De igual modo, en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse.

Respuesta:

El diagnóstico del EpTI coincide con la primera propuesta de la alegante. No ocurre lo mismo con la segunda propuesta: el artículo 18 del RPH señala que en *caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista de humedales de importancia internacional de*

acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971. En estas zonas se considerará prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, aunque se aplicará la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones. Y el artículo 49 quáter del RDPH señala que *en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada, se exigirá el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos aguas abajo de las presas conforme a lo previsto en la disposición transitoria quinta y cuando la disponibilidad natural lo permita. A tal efecto, el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse. No obstante, el régimen de caudales ecológicos será exigible, siempre y en todo caso, cuando exista una legislación prevalente como la aplicable en Red Natura o en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de acuerdo de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, en la que se establece la prevalencia del caudal ecológico frente al uso*. Por ello la propuesta de la alegante contradice ambas disposiciones, por lo que no es posible atenderla.

Alegación 22.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

5.- Revisión del Convenio de Albufeira: […], volvemos a reivindicar las propuestas planteadas en el escrito dirigido a la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en septiembre de 2022, motivado por el conflicto suscitado por la suelta de agua de embalses de regadío para poder cumplir con los compromisos reflejados en el Convenio de Albufeira. Seguimos demandando una reducción de la aportación semanal, trimestral y anual en los diferentes puntos de control, así como subir el umbral de precipitación al 70% sobre la media interanual, para que si en períodos de sequía prolongada la precipitación bajase de ese umbral, podamos entrar en excepción.

Respuesta:

Es importante resaltar que el convenio de Albufeira es un tratado internacional establecido entre dos países, España y Portugal, con la finalidad de dar coherencia y continuidad a tratados anteriores en lo que se ha buscado a lo largo de los siglos limitar los conflictos fronterizos entre ambos países.

Como se indica en la Ficha DU-09, entre las decisiones a tomar en relación con el Convenio de Albufeira, se encuentra analizar las divergencias entre las planificaciones española y portuguesa para ofrecer soluciones conjuntas a las masas de agua compartidas y los indicadores de sequía y escasez de ambos países para tratar de integrar ambos diagnósticos en uno. Esta última decisión viene avalada por los memoranda de entendimiento entre España y Portugal de las cumbres hispano-lusa de 2023, 2024 y 2026, en las que ya se está trabajando por ambos países. Más allá de esa voluntad de mejorar el diagnóstico de los criterios de excepción, y armonizar los indicadores de sequía y escasez, corresponde a otras instancias promover los cambios del Convenio que considere oportunos.

Alegación 23.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Infraestructuras

Para conseguir la sostenibilidad del regadío reflejada en la ficha anterior, las Comunidades de Regantes solicitan que, de manera genérica el futuro Plan Hidrológico incorpore las siguientes medidas:

- *Incrementar las inversiones públicas en modernización y digitalización*
- *Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.*
- *Priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y zonas vulnerables*
- *Impulsar balsas laterales y actuaciones de regulación complementaria*
- *Dotar presupuestariamente las actuaciones del plan*
- *Mejorar infraestructuras hidráulicas y redes en alta*
- *Favorecer el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas*
- *Flexibilizar tarifas energéticas adaptadas a la estacionalidad del riego*
- *Mantener la seguridad jurídica concesional*
- *Establecer programas reales y ejecutables con financiación suficiente*
- *Realizar limpiezas periódicas de cauces y desagües como medida de seguridad y bienestar para la población rural.*

Respuesta:

Entre las propuestas heterogéneas que hace la alegación, algunas caen fuera de la competencia del agua (tramitación ambiental, tarifas energéticas); otras están incorporadas a las Fichas del EpTI (incrementar inversiones en modernización en la Ficha DU-06, centrarse en actuaciones en sistemas deficitarios en la Ficha DU-07, impulsar sustitución de bombeos con aguas subterránea en la Ficha DU-02, fomentar utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas en la Ficha DU-06, modernizar infraestructuras de riego en alta en Ficha DU-07). Respecto a la seguridad jurídica concesional, como se ha dicho en la respuesta a la alegación 19, es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas; el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

En la Ficha DU-09 se aborda el tema importante de la financiación del Programa de medidas. El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Estas autoridades deben dar la conformidad al programa de medidas para lo cual, cada una internamente, habrá debatido la capacidad y conveniencia de asumir cada medida. Por tanto, los mecanismos formales para asegurar la ejecución del Programa de medidas existen y desde el ámbito de la planificación hidrológica sólo se puede recalcar que estos mecanismos no deben ser simplemente formales sino también reales. La propia Ficha DU-09 describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social.

Sin duda la mejora de las condiciones hidrológicas de cauces es una tarea de gran peso en la cuenca a la que el Organismo de cuenca dedica anualmente entre 4 y 6 millones de euros, posiblemente escasos para las necesidades crecientes, a labores de mantenimiento de cauces. El Programa de medidas del plan hidrológico vigente incluye un paquete de medidas de este tipo. Pero evidentemente no puede llegar a atender eficazmente a los más de 80.000 kilómetros de ríos y arroyos de la cuenca y actúa con criterios de conveniencia y racionalidad económica. Para paliar esta desproporción entre necesidades y posibilidades reales, tanto en el Plan vigente de 2023 como en el anterior de 2016, se incluyó un procedimiento más ágil para acometer determinadas labores de mejora de las condiciones de desagüe de los cauces. Así en el artículo 30 de la Normativa se establece el sistema de declaración responsable para las denominadas *actuaciones menores de conservación de cauces y zonas de policía*. El mismo artículo hace un elenco de las que pueden considerarse actuaciones menores:

I. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera.

II. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce.

III. Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del dominio público hidráulico.

IV. Retirada de sedimentos y vegetación existente en el lecho del cauce, situados 50 metros aguas arriba y aguas abajo de las obras de fábrica y puentes con el fin de conservar su capacidad de drenaje.

V. Pequeñas actuaciones de mantenimiento de puentes e infraestructuras situadas sobre el cauce, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas no haya ocupación del dominio público hidráulico ni quede afectada su capacidad de desagüe.

VI. Mantenimiento de las secciones de estaciones de aforo.

VII. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos.

VIII. Cortas de arbolado bajo líneas eléctricas.

Para todas estas actuaciones la declaración responsable habilita el poder actuar por los particulares sin esperar a ninguna Resolución de la CHD, lo que agiliza notablemente la actuación.

Alegación 24.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Modernizaciones a ejecutar

Si tenemos en cuenta el período restante del plan vigente y el horizonte temporal de la revisión relativa al período 2028-2033, deberíamos modernizar los regadíos pendientes cuya modernización ya está aprobada y que son los siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES	IMPORTE ESTIMADO CONVENIO MAPA-SEIASA (€ sin IVA)
PEPAC CYL y otros planes	
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)	30.000.000
Canal de Ines-Eza Fase II (Soria)	7.000.000
Canal del Esla (León)	150.000.000
Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta (Palencia)	160.000.000
Bajo Tuerto – Sindicato Central Embalse Villameca (León)	25.000.000
Castañón, Cerrajera y Regueras (León)	65.000.000
Canal de la Retención (Palencia)	47.000.000
Canal de Villalaco (Palencia)	54.000.000
Canal de Manganeses (Zamora)	40.000.000
Margen Derecha del Tera (Zamora)	100.000.000
San Salvador - Valverde de Ágreda (Soria)	15.000.000
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)	40.000.000
Alija del Infantado (León)	15.000.000
TOTAL (€ sin IVA)	**748.000.000 €**

Para poder conseguir este objetivo tienen que ser tenidas en cuenta dos reivindicaciones que trasladamos al Gobierno de España:

1.- Aumentar el capital social de la SEIASA a la cantidad de 300 M€ anuales por cada uno de los años de duración del plan.

2.- Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.

Respuesta:

La alegación aporta dos cuestiones muy relevantes para impulsar las medidas del vigente Plan Hidrológico. Estando de acuerdo con la segunda (simplificación y agilidad en los trámites de evaluación ambiental de los proyectos de modernización del regadío) la realidad es que las modificaciones legales llevadas a cabo recientemente no van en esa línea; así la modificación de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, más reciente (de 6 de noviembre de 2025) reduce los límites de superficie de modernización de regadío para que la evaluación ambiental sea ordinaria. Esto parece indicar que por parte del legislador hay una sospecha de que los proyectos de modernización podrían suponer presiones adicionales sobre el medio ambiente, quizá debido a determinados proyectos ya ejecutados que no han sido todo lo respetuosos que cabría esperar. Por ello la norma legal es la que es y, en tanto no se modifique, debemos atenernos a ella, no siendo el EpTI competente para su modificación.

La Ficha DU-06 incide en la primera parte de la alegación al apostar por una mayor intensidad de la modernización del regadío que, lógicamente pasa por la adecuada financiación que debe validar e impulsar la autoridad competente con tutela sobre la SEIASA.

Recordamos que no todas las zonas regables que se citan en la alegación disponen de medida de modernización de regadío en el Plan vigente. Como se sabe el Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento. Cuando se confeccionó el Plan vigente de manera específica se solicitó al MAPA la previsión de actuaciones de modernización en los seis años de vigencia del Plan. En la relación de actuaciones que iba a acometer el MAPA no estaban las siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)
Canal del Esla (León)
Cerrajera (León)
Canal de Villalaco (Palencia)
Canal de Manganeses (Zamora)
Margen Derecha del Tera (Zamora)
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)
Alija del Infantado (León)
TOTAL (€ sin IVA)

Y como tales no pasaron al Programa de medidas para su ejecución por el MAPA sino para su ejecución por la comunidad autónoma y los usuarios. Probablemente el MAPA no las incluyó en su programación porque la comunidad autónoma no manifestó interés por ellas ya que la mayoría no contaban con acuerdos en sus asambleas generales para acometer la modernización. Aunque el EpTI ha tenido en cuenta en sus análisis las modernizaciones que figuran en el Programa de medidas independientemente de su agente financiador, de cara al nuevo Plan Hidrológico conviene aclarar que sólo formarán parte de las medidas aquellas actuaciones que así se determine por las autoridades competentes (MAPA o comunidad autónoma). De la Presa de Regueras, Bajo Tuerto y del Canal de la Retención ni siquiera hay medida de modernización ya que ninguna autoridad competente las ha reclamado. Valverde de Ágreda está fuera de la demarcación hidrográfica del Duero, por lo que es lógico que no figure entre las medidas del Plan Hidrológico ni ahora ni en el futuro.

Alegación 25.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Mejora infraestructuras

Propuestas:

1.- Solicitar a la Dirección General del Agua una dotación presupuestaria de 150 M€ en el período 2028/2033 para hacer frente a estas reformas, conseguir el estado óptimo de las infraestructuras para poder llevar a cabo la correcta gestión del recurso.

2.- La situación actual de la agricultura no pasa por sus mejores momentos, motivado por los elevados precios de los insumos, los bajos precios de mercado de los productos y las grandes inversiones realizadas en modernización de las infraestructuras de riego y el amueblamiento de parcelas. Por eso se solicita, buscar fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-09 y con respecto a la propuesta sobre la financiación de la DGA, se recuerda que el Plan vigente incluyó una inversión de 350 millones de euros en infraestructuras, nuevas y modernización de las existentes, cuya ejecución según la misma Ficha es de un 13% a final de 2024 que sube hasta un 19% a final de 2025, valor realmente exiguo. Pese a estar previsto es necesaria una evaluación de los motivos de este retraso que se ponen de manifiesto en la Ficha y que deben ser removido. La propia Ficha también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social. No obstante, en atención a la alegación se incluye una nueva decisión sobre la rendición de cuentas.

Los mecanismos de rendición de cuentas están formalmente delimitados en el ámbito administrativo, por ejemplo, con la regulación que se incluye en los artículos 87 y 88 del RPH. Pero este ámbito es meramente administrativo y no político, que tiene sus propios itinerarios.

Respecto a sistema de financiación alternativos a los que establece la Ley de Aguas para este tipo de infraestructuras, nada puede aportar el EpTI ya que se trata de una cuestión regulada por la propia Ley y a allá debe atenerse.

Alegación 26.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Obras de regulación:

Propuestas:

1.- Sistema Carrión: es uno de los más deficitarios de la Demarcación y urge acelerar los trámites para proceder a la ejecución de La Cueza 1 y La Cueza 2,[…].

2.- Sistema Tormes: […]. De momento, están puestas en Explotación unas 10.000 has entre La Armuña II y la Zona de Arabayona, lo que colocaría la superficie de la zona regable dependiente del embalse de Santa Teresa en el entorno de 35.000,00 has. La planificación ya prevé el desarrollo de otras 12.000 has más en La Armuña III y IV, que sí podrían ser asumidas por dicho embalse, pero en el caso de que se llegase a plantear alguna ampliación más en el futuro, resultaría necesario estudiar el recrecimiento del embalse para garantizar la satisfacción de todas las demandas (además del regadío, abastecimientos, caudales medioambientales y otros usos)

3.- Sistema Órbigo: […] nuestras propuestas pasan por el cambio de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al Sistema Tera (podríamos conseguir un ahorro de unos 12 Hm3) y la construcción de la balsa lateral de La Rial con llenado por gravedad desde el río Omaña (su capacidad está prevista en 23 Hm3).

Dentro del Sistema Órbigo tenemos el Subsistema Tuerto, […], proponemos las siguientes actuaciones: urgente puesta en explotación del embalse de Villagatón, estudiar un posible recrecimiento del embalse de Villameca y reparar el acueducto del trasvase de Valdesamario para mejorar su capacidad hidráulica y contribuir así al mejor llenado de Villameca en cada campaña.

Río Duerna: […] las 4.000 has que se nutren de este río, junto con el Peces, que discurre paralelo antes de desembocar ambos en el Tuerto, subsisten a duras penas. Para asegurar la pervivencia de este regadío, proponemos varias actuaciones:

- *Siembra de agua, derivando en invierno el caudal a las zayas, que son más filtrantes y permiten recargar el acuífero (se podrían acumular unos 2 Hm^3) para poder ser utilizado en campaña junto con el agua del río hasta la llegada del estiaje.*
- *Estudiar la posibilidad de balsas laterales derivando caudal del río Duerna en época invernal para ser utilizadas en verano.*
- *Estudiar la alternativa de un embalse de cabecera con una capacidad menor a los 28 Hm3 que estaban previsto en el proyectado en Chana de Somoza.*

Idénticos planteamientos podríamos someter a estudio para consolidar la zona regable dependiente del río Eria.

4.- Sistema Esla Valderaduey: para este sistema se pueden plantear balsas laterales en el río Cea aprovechando su aportación invernal, con suministro cero del embalse de Riaño. Como fórmula de explotación más viable, planteamos un aprovechamiento conjunto de los embalses de Riaño, Porma y Casares, desestimando definitivamente la alternativa planteada por la Confederación Hidrográfica del Duero de la transferencia de agua de este último al sistema Órbigo.

5.- Apoyo a las aguas subterráneas: En el EPTI se plantean peajes [..]. FERDUERO se opone frontalmente a estos recortes y además de seguir impulsando la constitución de CUAS para mejorar la gestión de los acuíferos, planteamos que se estudien actuaciones que permitan sustituir aguas subterráneas por aguas superficiales, así como el uso compartido de ambas. Por ejemplo, el desarrollo de La Armuña III y La Armuña IV puede liberar hectáreas de la zona sur de la Masa de Medina, la Presa de Lastras de Cuéllar lo mismo en Tierra de Pinares y las balsas laterales de Tordesillas, ayudaría a mejorar su acuífero. Por ello, planteamos que se estudien estas opciones para poder mantener el regadío y la actividad económica de todos los usuarios que se sirven de estas masas.

[…] solicitamos a la Dirección General del Agua la búsqueda de fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras de regulación.

Respuesta:

Con relación al punto 1 de la alegación (Sistema Carrión), debe señalarse que la Confederación Hidrográfica del Duero comparte la conveniencia y oportunidad de la puesta en servicio de una regulación adicional en el ámbito de las Cuezas, ya que se considera una medida estructural que puede incrementar la capacidad de gestión del sistema y reforzar su resiliencia, disminuyendo la dependencia de aportaciones externas. Estas actuaciones, junto con la modernización de regadíos en el sistema Carrión, se encuentran alineadas con los objetivos de la planificación hidrológica vigente y forman parte de la estrategia de mejora del equilibrio entre recursos y demandas en la demarcación.

Según se recoge en el Programa de medidas del Plan Hidrológico vigente, cuya situación más actualizada se puede consultar en Mírame-IDEDuero, la regulación adicional en las Cuezas (medidas 6403243 y 6403244) se encuentra en fase de anteproyecto en evaluación ambiental y es una medida cuyo promotor es la Confederación.

Con relación al punto 2 de la alegación (Sistema Tormes) debe indicarse que el EpTI ya contempla expresamente el análisis de la ampliación de regadíos en el sistema Tormes y su relación con la capacidad de regulación del embalse de Santa Teresa. En particular, el documento pone de manifiesto que los eventuales incrementos de superficie regable —como los asociados al desarrollo de La Armuña— deben quedar condicionados a la disponibilidad real de recursos y a la garantía del sistema, evaluándose de forma conjunta la gestión de la demanda y la oferta.

A este respecto, el EpTI analiza el posible recrecimiento del embalse de Santa Teresa en el marco de la alternativa 5 de la ficha DU-07, como una de las opciones para incrementar la capacidad de regulación en escenarios de mayor desarrollo del regadío. No obstante, también concluye que este tipo de actuaciones:

- no resuelven por sí solas los déficits del sistema ni los problemas de garantía,
- y deben plantearse únicamente cuando se justifique su viabilidad técnica, económica, ambiental y social, y siempre en combinación con medidas de gestión de la demanda (modernización, limitación de dotaciones, etc.).

En consecuencia, la eventual necesidad de recrecimiento del embalse no puede considerarse automática, sino que debe evaluarse en el marco global de la planificación hidrológica, priorizando un

enfoque integrado que garantice la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Todo ello se analizará con detalle en la fase de redacción del plan hidrológico.

En relación con la propuesta formulada en el punto 3 para el sistema Órbigo, cabe señalar lo siguiente:

En primer lugar, la Confederación valora favorablemente la propuesta de cambio de la toma de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al sistema Tera, en la medida en que se trata de una actuación coherente con los objetivos del EpTI orientados a la optimización de la gestión de los recursos disponibles y a la reducción de presiones sobre sistemas deficitarios, mediante la mejora de la asignación y distribución de recursos entre sistemas de explotación.

En cuanto al resto de actuaciones planteadas, relativas al incremento de la capacidad de regulación (balsas laterales, nuevos embalses, recrecimientos o mejora de infraestructuras existentes), debe indicarse que el EpTI establece que este tipo de medidas deben analizarse de forma integrada dentro del conjunto de alternativas de planificación, en coordinación con las actuaciones sobre la demanda (modernización, eficiencia y adecuación de dotaciones).

En particular, el documento pone de manifiesto que:

- Las actuaciones de incremento de regulación pueden contribuir a mejorar la garantía y reducir déficits en determinados sistemas,
- pero su eficacia es generalmente limitada si no se acompañan de medidas de gestión de la demanda,
- y en todo caso deben someterse a una evaluación rigurosa de su viabilidad técnica, económica, social y ambiental, dada su elevada inversión y potencial afección sobre las masas de agua.

Por ello, la puesta en explotación del embalse de Villagatón o la mejora del trasvase de Valdesamario para reducir pérdidas y una ligera mejora de la capacidad hidráulica podrán incorporarse al Programa de medidas en fase de redacción de plan hidrológico. Respecto a de la balsa lateral de La Rial o el posible recrecimiento de Villameca, la decisión de su incorporación al Programa de medidas del plan hidrológico dependerá de su encaje en las conclusiones del estudio de alternativas de incremento de regulación del sistema Órbigo y de su encaje en la estrategia global de la demarcación.

Sobre las propuestas relativas al río Duerna, la Confederación Hidrográfica del Duero valora positivamente las actuaciones de “siembra de agua”, entendida como recarga gestionada de acuíferos mediante derivaciones superficiales (como el uso de “zayas” u otras infraestructuras tradicionales), que ya han sido consideradas en el marco de la planificación hidrológica vigente. En particular, en el valle del Duerna se incluyó una reserva de agua superficial en invierno destinada a la recarga, constituyendo una medida alineada con la gestión conjunta de recursos superficiales y subterráneos y con los objetivos de mejora de la garantía y sostenibilidad del regadío. Como se ha dicho en la respuesta a la alegación nº 19 de este mismo escrito, lamentablemente a fecha actual no se ha podido hacer efectiva esa reserva por falta de interlocutor en forma de junta central, sindicato central o comunidad general de usuarios, trámite imprescindible para poder hacer efectiva esa reserva.

Esta solución encaja, asimismo, con las líneas del EpTI en materia de adaptación al cambio climático, diversificación de fuentes y aumento de la resiliencia de los sistemas de explotación, incluyendo el uso de infraestructuras alternativas y recarga artificial cuando resulten técnica y ambientalmente viables.

En cuanto a las propuestas relativas a la construcción de balsas laterales, almacenamiento estacional o alternativas de regulación en cabecera, estas se encuadran dentro de las posibles medidas de mejora de la gestión de la oferta contempladas en los temas importantes DU-06 y DU-07 del EpTI (incluyendo infraestructuras de almacenamiento, regulación o mejora de la garantía). No obstante, su implantación requiere un análisis específico en el marco de la elaboración del Plan Hidrológico, en el que se valore su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica, así como su eficacia real frente a otras alternativas. En este sentido, dichas propuestas se tendrán en consideración y podrán ser objeto de estudio en la fase de redacción del Plan.

En relación con las propuestas formuladas en el punto 4 para el sistema Esla-Valderaduey, la propuesta de aprovechamiento de aportaciones invernales mediante balsas laterales en el río Cea se encuadra dentro de las medidas contempladas en el EpTI en los temas importantes DU-06 y DU-07, en los que se prevé la utilización de infraestructuras de almacenamiento complementarias (balsas laterales, regulación estacional, etc.) como instrumento para mejorar la garantía de los sistemas de explotación. Por ello, este tipo de soluciones podrá ser analizado en la fase de elaboración del Plan Hidrológico, valorando su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica en el ámbito del sistema Esla–Valderaduey.

En cuanto a la propuesta de explotación conjunta de los embalses indicados, debe señalarse que el embalse de Casares es titularidad de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A.), por lo que en la situación actual no resulta posible su gestión conjunta con las infraestructuras de titularidad y explotación directa del Organismo de cuenca en los términos planteados.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier planteamiento de optimización conjunta de infraestructuras deberá analizarse en el marco competencial y de explotación correspondiente, considerando el régimen jurídico de cada una de ellas y los acuerdos que, en su caso, pudieran establecerse entre las Administraciones implicadas.

En relación con el punto 5 de la alegación, se formulan las siguientes consideraciones:

Las posibles limitaciones al uso de aguas subterráneas deben enmarcarse en el objetivo prioritario de la planificación hidrológica, conforme a la Directiva Marco del Agua y al Texto Refundido de la Ley de Aguas, de alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de agua, evitando su deterioro y corrigiendo situaciones de sobreexplotación. En este sentido, la evolución de la política hidráulica se orienta hacia un refuerzo del control administrativo de las extracciones y una progresiva convergencia hacia el régimen concesional, lo que implica necesariamente la adopción de medidas de limitación en aquellos casos en los que las extracciones resulten incompatibles con la recuperación de los acuíferos.

Se valora positivamente el impulso a la constitución de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) como instrumento clave para la mejora de la gobernanza, el control de extracciones y la gestión conjunta de los recursos, en línea con lo previsto en el EpTI para el uso sostenible de las masas de agua subterránea.

Las propuestas orientadas a la sustitución de bombeos por recursos superficiales y al uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas son coherentes con las líneas de actuación recogidas en el EpTI, que contempla este tipo de medidas como alternativas para reducir la presión sobre los acuíferos y avanzar

hacia su recuperación. No obstante, su viabilidad debe analizarse caso por caso en la elaboración del Plan Hidrológico, considerando la disponibilidad real de recursos, las garantías de suministro, los condicionantes ambientales y la eficiencia económica de las soluciones planteadas.

Alegación 27.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario recordar que la planificación hidrológica, de conformidad con el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, no persigue exclusivamente objetivos ambientales, sino también la satisfacción de las demandas, la armonización del desarrollo regional y sectorial y la sostenibilidad de las actividades económicas vinculadas al uso racional del agua. En consecuencia, cualquier mecanismo de coordinación interadministrativa o fijación de objetivos específicos en zonas protegidas debe incorporar necesariamente criterios de proporcionalidad, equilibrio territorial, cohesión socioeconómica y viabilidad de los usos existentes, singularmente en territorios rurales altamente dependientes del regadío. […]

La ficha plantea la alineación del marco regulatorio de distintas políticas sectoriales con los objetivos de la planificación hidrológica, incluyendo expresamente la Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats. No obstante, dicha coordinación no debería derivar en la imposición automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos.

Respuesta:

El EpTI no propone ni pretende imponer de manera *automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos*. De hecho, al menos, las Fichas DU-01, DU-02, DU-03, DU-04 y DU-07 tratan de hacer un análisis técnico de las presiones que generan sobre las masas de agua las actividades humanas, entre ellas la agrícola, unas veces con mayor profusión de datos y otras de manera cualitativa. Las propuestas y alternativas que se hacen en el EpTI se apoyan en ese análisis, tratando de corregir las presiones sin causar un daño excesivo a las propias actividades existentes. A nuestro juicio hay un equilibrio entre las actividades y los objetivos ambientales dentro del margen que permite la normativa vigente. Y la llamada a las políticas sectoriales (Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats) lo es en la medida que estas políticas apuntan a la del agua en sus propios desarrollos legales.

Alegación 28.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La ficha señala la necesidad de fijar objetivos específicos sobre el medio hídrico de los espacios Red Natura 2000 vinculados al agua. Sobre esta cuestión debe indicarse que cualquier eventual limitación derivada de dichos objetivos deberá sustentarse necesariamente en estudios técnicos individualizados, suficientemente motivados y territorialmente concretos, evitando restricciones automáticas derivadas

exclusivamente de la ubicación geográfica de las explotaciones o infraestructuras. Especialmente en sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados, debe garantizarse plenamente la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes y la compatibilidad entre conservación ambiental y actividad agraria sostenible.

Respuesta:

Las limitaciones derivadas de los objetivos de los espacios naturales de Red Natura 2000 ya existen desde que se aprobaron los planes básicos de gestión, en el caso de Castilla y León desde 2015.

Los objetivos específicos de Red Natura se fijan por las comunidades autónomas en los Planes Básicos de Gestión. En el caso de los Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León se aprobaron por ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre. Estos Planes establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000. Se estructuran en:

- Un documento de “Disposiciones generales”, común a los 177 Planes Básicos.
- Ciento setenta y siete documentos de Planes Básicos de gestión y conservación correspondientes a cada uno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.
- Tres "Anexos" comunes a los 177 planes básicos:
    - Anexo I. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000,
    - Anexo II. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Valores Red Natura 2000, y
    - Anexo III. Medidas de conservación y gestión Red Natura 2000.

De todos los espacios y hábitats de estos Planes sólo aquellos vinculados al agua (76 en la demarcación hidrográfica del Duero) deben ser atendidos por la planificación hidrológica como establece el RPH, en la medida en que les afecte. Y las limitaciones en el ámbito del agua las establecen los citados planes. En este sentido cabe transcribir algunos de los fundamentos de derecho que esgrime el Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 515/2025 que se cita en la Ficha DU-09: “Por consiguiente, y como ciertamente esta situación no parece acomodarse a las exigencias de la DMA y de la legislación interna que la traspone, de las que deriva la necesidad de que los planes hidrológicos, como instrumento esencial de coordinación de la política de aguas, reflejen los objetivos ambientales de las zonas protegidas vinculados a las masas de agua asociadas y su grado de cumplimiento, y que sobre dichos objetivos no cabe aplicar la excepción prevista en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2000/60, procede estimar la pretensión de la parte recurrente y declarar la nulidad de todas las previsiones contenidas en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las que, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 10 de las disposiciones normativas, se prevea la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas de agua vinculadas a zonas protegidas de hábitats y especies, en las que, además, no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares.

Puede ser llamativo que la delimitación de espacios protegidos por las comunidades autónomas afecten en ocasiones a zonas como las que identifica la alegante ("sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados"), por lo que cabría pensar que esos espacios protegidos lo son precisamente por su relación con esos regadíos históricos; sin embargo encontramos en sus planes básicos que la actividad agraria, entre otras, es quien constituye una presión, algo que aparentemente repugna toda lógica racional. Pero la planificación hidrológica poco puede hacer para resolver estas incoherencias, más allá de instar al órgano competente de la comunidad autónoma a que revise esas declaraciones o los planes básicos correspondientes, como también lo puede hacer el sector al que pertenece la alegante.

Alegación 29.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

No parece razonable incrementar simultáneamente las exigencias ambientales o las limitaciones sobre los usuarios concesionales mientras persistan importantes retrasos administrativos y presupuestarios en la ejecución de actuaciones estructurales cuya responsabilidad corresponde principalmente a las administraciones públicas competentes.

Respuesta:

Manifestamos acuerdo con la alegante en lo que se refiere al notable retraso en la ejecución del Programa de medidas; de hecho, la propia Ficha lo pone de manifiesto cuando abiertamente reconoce que el *Programa de medidas del Plan Hidrológico se construye con las medidas que todas las autoridades competentes (administraciones locales, autonómicas o estatal) y resto de agentes, cada uno en el marco de sus competencias, pueden impulsar para el logro de los citados objetivos. Por tanto, buena parte del éxito de un plan hidrológico para dar cumplimiento a esos objetivos estriba en el compromiso de los agentes de acometer las medidas que caen bajo su ámbito*. También propone algunas decisiones a explorar para que esto no se repita en el futuro, como son que haya un *compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución*, y establecer un *marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios*.

Pero dicho esto no podemos compartir la comparación de este hecho con las necesidades de establecer criterios ambientales ya que en su mayoría estos criterios buscan reducir las presiones sobre las masas de agua y esas presiones se ejercen por actividades y usuarios concretos a quienes corresponde, en la medida de lo que establecen las normas, contribuir a la reducción de las mismas.

Alegación 30.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario reforzar de manera efectiva la participación técnica y real de los usuarios del agua, singularmente de las Comunidades de Regantes, en los procesos de toma de decisiones y seguimiento de la planificación hidrológica.

Respuesta:

La Ficha DU-09 aborda la necesaria colaboración y cooperación entre los departamentos de la administración pública para que, cada uno en su ámbito competencial, contribuya al logro de los objetivos de la planificación. Y ello porque al tener competencias sobre distintos factores que inciden en el agua (tanto como demanda como medio ecológico), las políticas sectoriales en cada uno pueden contribuir o no a lograr los objetivos.

No se aborda en la ficha el modo de participación de los usuarios en la gestión del agua que tiene sus propias normas legales establecidas. Por ello sorprende que una Comunidad de regantes reclame mayor participación en los procesos de toma decisiones y de seguimiento de la planificación hidrológica. Las comunidades de regantes participan en la Junta de Gobierno, en el Consejo del Agua de la demarcación, en la Comisión de Desembalse, en la Asamblea de Usuarios y las Juntas de Explotación. Esa representación está regulada en el TRLA, el RAPA o reglamentos específicos (como el que regula el consejo del agua de la demarcación). Todos ellos son órganos de gobierno, gestión, coordinación y participación de los organismos de cuenca. Nos gustaría conocer otros ámbitos administrativos donde la participación de los usuarios fuera al menos de la misma magnitud que en la gestión del agua. De cualquier modo, el EpTI no tiene capacidad para modificar la distribución de la representación de los usuarios en los distintos órganos.

Alegación 31.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario que la planificación identifique de manera expresa la incidencia real que el cumplimiento del Convenio de Albufeira y de otros compromisos ambientales o internacionales tiene sobre las garantías de suministro de las distintas unidades de demanda agraria y sobre las reservas embalsadas disponibles en los sistemas de explotación. [..]

Por ello, cualquier incremento de exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales existentes.

Respuesta:

El análisis que se solicita en la alegación respecto al Convenio de Albufeira se ha hecho en todas las alternativas que figuran en las Fichas DU-06 y 07 debido que se trata de una restricción al uso del agua, de manera que, en todo caso, siempre que no se den las condiciones de excepción, se cumplen los requisitos del Convenio. No se ha incluido su explicación en las Fichas por una cuestión de simplificación. No obstante, con las medidas definitivas, en fase de redacción de plan hidrológico, habrá un apartado específico que aborde este cumplimiento de caudales integrales del Convenio de Albufeira.

Respecto a la segunda propuesta (que las nuevas exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas

exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales), el EpTI no puede avalar una cuestión que no está contemplada en la normativa vigente. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 65 del TRLA cuando los usos actuales puedan verse afectados por la planificación hidrológica o por requisitos adicionales de carácter ambiental que hagan imposible ejercer el uso para el que existe concesión, como parece explicar la alegación, podrá reclamarse la correspondiente indemnización. Y ello sin menoscabo de la jurisprudencia ya consolidada en relación con las indemnizaciones por restricciones previas, como son el régimen de caudales ecológicos o los compromisos internacionales o ambientales, más bien en contradicción de la propuesta de la alegación.

Alegación 32.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La creciente interacción entre distintas políticas sectoriales europeas, estatales y autonómicas vinculadas al agua puede generar escenarios de elevada complejidad regulatoria para los usuarios y las Comunidades de Regantes. Por ello, se considera imprescindible que el futuro Plan Hidrológico garantice marcos regulatorios claros, previsibles y técnicamente motivados, evitando duplicidades administrativas, contradicciones regulatorias y limitaciones carentes de suficiente justificación técnica individualizada.

Respuesta:

En el ámbito del agua, el EpTI es un documento intermedio de la planificación hidrológica que tiene por objeto la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. No tiene que ofrecer seguridad jurídica ya que es un documento instrumental en la elaboración del Plan Hidrológico que se aprueba por Real Decreto y tiene fuerza vinculante.

Por otra parte, la seguridad jurídica para los usuarios que aspiran a desarrollar una actividad la ofrece el procedimiento concesional donde se concreta la actividad en el objeto, el tiempo y el lugar, lo que permite evaluar la actividad en coherencia con los objetivos de la planificación hidrológica. Por tanto, se rechaza la alegación. Los planes hidrológicos se revisan cada seis años, lo que puede suponer que, dentro del marco legal general, haya modificaciones específicas como consecuencia de la revisión planificadora. Seis años, a nuestro juicio es un marco temporal escaso, pero el ordenamiento jurídico establece ese plazo para las sucesivas revisiones y a él debemos ajustarnos.

La Ficha DU-09 pone el acento en la necesidad de incrementar la coordinación y cooperación administrativa en el ámbito de la planificación hidrológica; la alegante reclama esa coordinación en el marco de la gestión ordinaria. Siendo un objetivo razonable, no hay que olvidar cuáles son las competencias de cada administración lo que puede suponer una mayor lentitud de procedimientos, en especial si éstos confluyen en una única actividad. Sigue quedando pendiente la simplificación administrativa ya que, cada vez que hay cambios normativos, no suelen ser para simplificar sino para una mayor complejidad. Al igual que los usuarios también las administraciones padecemos esta complejidad que está al servicio, en este caso, de las garantías. Precisamente la variedad de

competencias sobre una misma actividad puede generar esas incoherencias de las que no son culpables quienes deben verificar los requisitos legales sino de las normas que regulan la actividad.

Alegación 33.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Una cuestión relevante que debería ser tenida en cuenta en las evaluaciones ambientales de grandes instalaciones fotovoltaicas es la posible modificación del coeficiente de escorrentía superficial derivada de la implantación masiva de paneles solares. […]

Por ello, se considera necesario que el futuro instrumento de planificación y las evaluaciones ambientales incorporen análisis hidrológicos específicos sobre modificación de escorrentías, incluyendo modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Respuesta:

Compartimos con el alegante su percepción de que la construcción de plantas fotovoltaicas contribuye al aumento de suelo artificial con impactos como compactación y modificación de la permeabilidad del suelo, alteración de la escorrentía e incremento de la erosión.

La planificación hidrológica no puede entrar en el detalle de dichos impactos, que son evaluados específicamente en los procedimientos ambientales a que se ven sometidos los proyectos y que son específicos de cada uno de ellos.

La modificación de la escorrentía superficial producida por una instalación fotovoltaica depende de muchos factores como son la extensión de la planta fotovoltaica, las características edáficas de su localización, las posibles modificaciones topográficas del terreno, el tipo y forma de fijación de los seguidores, etc. Estos aspectos son evaluados de forma cualitativa en los preceptivos informes que emite la CHD, como administración afectada, en el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos, sin poder establecer una evaluación cuantitativa del efecto sobre la escorrentía ya que los promotores no facilitan modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Alegación 34.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Por otro lado, se considera igualmente interesante analizar el potencial uso dual de determinadas infraestructuras de regadío para su contribución al sistema eléctrico nacional, especialmente en aquellos casos en los que existan balsas de regulación situadas a cota elevada y otros condicionantes técnicos favorables. Determinadas instalaciones de modernización podrían adaptarse para funciones complementarias de almacenamiento energético y regulación eléctrica mediante sistemas reversibles, incrementando la utilidad y rentabilidad social de infraestructuras ya existentes.

Respuesta:

Esta indicación del alegante de una posible utilización de las instalaciones inherentes a modernizaciones del regadío para funciones de almacenamiento energético no se ha planteado hasta

la fecha en este Organismo. No obstante, cualquier iniciativa que se presente para la correspondiente autorización o concesión se analizará específicamente.

La capacidad de almacenamiento de estas balsas de regulación no suele ser tan elevada como para que las empresas hidroeléctricas consideren rentable la inversión en la implantación de sistemas de bombeo y centrales hidroeléctricas que permitan utilizar este recurso.

Es todo caso, sería la administración competente en la realización de estas modernizaciones y, en su caso, el titular de las infraestructuras de regadío quienes deberían proponer la utilización de las mismas para fines energéticos.

Alegación 35.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

En la ficha se indica que para las aplicaciones y usos del agua vinculados a energías renovables resultan de aplicación las mismas consideraciones previstas para usos consuntivos[..], parecería más adecuado diferenciar entre usos estrictamente consuntivos y usos con retorno efectivo del agua, especialmente a efectos de evaluación de impacto sobre la disponibilidad global del recurso hídrico. Todo ello

Se están empezando a crear nuevas plantas de hidrogeno verde, de bioetanol, etc, que necesitan agua para su desarrollo. Nos oponemos a que se extraiga agua de acuíferos que están en mal estado y, por otro lado, que cuando hayan extraído el agua, puedan verter la molécula resultante a cauces o arroyos, agravando el problema de la contaminación difusa.

Cuando el agua se coja de fuentes superficiales, nos oponemos a que se puedan restar dotaciones al regadío, cuando hay UDAs y comunidades de regantes que incumplen el criterio de garantía [..].

Por tanto, los nuevos usos del agua destinados a la implantación de industrias de producción y almacenamiento de energías renovables, pueden tener un efecto negativo en el regadío, tanto en aguas subterráneas como en aguas superficiales y pedimos que este problema se analice y se aborde con mucho rigor para no perjudicar una actividad económica destinada a la producción de alimentos, que fija población en las zonas rurales y que contribuye al mantenimiento del ecosistema y la disminución de la contaminación ambiental.

Respuesta:

Los parques eólicos y plantas fotovoltaicas precisan agua para su construcción y para algunas operaciones de mantenimiento (limpieza de paneles), siendo los volúmenes demandados no significativos. El suministro de agua para estas instalaciones se realiza habitualmente mediante suministro con camiones cisterna de agua procedente de concesiones vigentes o mediante derivaciones temporales de aguas superficiales, que deben tramitarse en este Organismo, tramitación en la cual se evalúa la disponibilidad del recurso en cada caso particular.

Por otra parte, las instalaciones industriales para la producción de compuestos químicos capaces de almacenar los excedentes de energías renovables como son el hidrógeno verde, el amoniaco, metanol, etc., pueden suponer un uso consuntivo del agua acompañado de grandes volúmenes para la refrigeración que, en algunos casos, revierten al medio hídrico.

La alternativa elegida para este tema importante propone el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos sólo en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua y no que se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, entre ellos el regadío.

Se establecerán dotaciones máximas para la producción de estos compuestos químicos, aplicando las mejores técnicas disponibles y el estado de la ciencia. En ningún caso estas dotaciones irán en detrimento de las dotaciones establecidas para usos agrarios.

En lo relativo al posible impacto ambiental derivado de posibles vertidos y contaminación difusa, estos aspectos se analizan pormenorizadamente en cada caso, en los informes preceptivos que emite este Organismo para la evaluación ambiental de los proyectos a petición del órgano ambiental que corresponda. En estos informes se establecen condicionantes para minimizar estos impactos, que posteriormente se recogen en la declaración de impacto ambiental correspondiente.

Alegación 36.

Conclusiones finales

El actual contexto de cambio climático, reducción de aportaciones e incremento de exigencias ambientales e internacionales obliga a reforzar la resiliencia hídrica de la Demarcación mediante:

- *Una adecuada política de regulación y almacenamiento*
- *El mantenimiento funcional de los cauces*
- *La modernización y optimización de infraestructuras*
- *La revisión técnica de los actuales indicadores de sequía y escasez*

La mejora de la capacidad reguladora de la cuenca no debe entenderse únicamente como una herramienta de garantía de usos, sino también como un instrumento esencial para:

- *La adaptación al cambio climático*
- *La conservación de ecosistemas asociados al agua*
- *La estabilidad de las masas de agua*
- *El cumplimiento de objetivos ambientales*
- *La adecuada atención de los compromisos internacionales derivados del Convenio de Albufeira*

Respuesta:

Todos los aspectos que se citan en las conclusiones finales se han ido valorando a lo largo de la respuesta a este escrito de alegaciones, mostrando un acuerdo con la mayoría de las cuestiones generales aportadas, si bien el enfoque de las medidas puede variar puntualmente, y algunos desacuerdos en especial con la vinculación de un mayor número de infraestructuras de regulación y una mejora de la conservación de ecosistemas asociados al agua.

4.65. Escrito de observaciones Nº 089

Presentado por: D. José Manuel Jiménez Blázquez.

En nombre de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental – Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio – Junta de Castilla y León

Alegación 1.

Observaciones a la FICHA DU-03. Contaminación urbana e industrial

En relación con el planteamiento de posibles alternativas, ***coincidimos*** *en proponer la implantación de la* ***ALTERNATIVA 3, "INICIAR LA ADAPTACIÓN A LA NUEVA DIRECTIVA, PARA TODAS LAS AGLOMERACIONES URBANAS MAYORES O IGUALES A 1.000 H-E CON LOS PLAZOS QUE MARCA LA NORMA EUROPEA",*** *con el fin de conseguir la consecución de las medidas necesarias para cumplir las exigencias y los plazos de la Directiva 2024/3019/CEE.*

Respuesta:

Se anota la observación.

Alegación 2.

Observaciones sobre la Ficha DU-08. Uso Urbano y Nuevos Requerimientos de la Directiva de Aguas Potables.

Bajo la Alternativa 2, seleccionada por el Organismo de cuenca como la más viable, éste propone ampliar el alcance de la Alternativa 1 para incluir específicamente a los municipios de menos de 50.000 habitantes que presenten problemas de fugas estructurales y deficiencias cuantitativas en atención a las demandas de abastecimiento. Consideramos imprescindible avanzar en la concreción técnica de estos criterios, ya que el propio documento reconoce que, en su fase actual, no es posible realizar una valoración económica detallada debido a que las medidas definitivas dependen de estudios aún en proceso, como la evaluación de riesgos y el informe nacional de fugas. Una definición más precisa es indispensable para dar seguridad jurídica y técnica a la posterior inversión de los ayuntamientos y de la Junta de Castilla y León.

Respuesta:

En relación con la alegación presentada, debe señalarse, en primer lugar, que el Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) constituye un documento intermedio del proceso de planificación hidrológica, cuya finalidad es identificar los problemas relevantes, analizar alternativas de actuación y fijar directrices para la ulterior elaboración del Plan Hidrológico, sin que le corresponda un grado de detalle propio de esta fase final de planificación.

En el caso del Tema Importante DU-08, la alternativa 2 seleccionada contempla la extensión de las actuaciones al conjunto de los municipios, incluidos aquellos de menos de 50.000 habitantes que presenten problemas de fugas estructurales o déficits cuantitativos en el abastecimiento, en coherencia con los objetivos de mejora del ciclo urbano del agua y de cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Real Decreto 3/2023.

No obstante, tal y como se desprende del propio documento y de la naturaleza del EpTI, en esta fase no se incorpora una definición exhaustiva ni una caracterización técnico-económica detallada de las medidas, dado que el nivel de concreción del EpTI se limita a establecer líneas estratégicas y alternativas de actuación, quedando la definición precisa de criterios técnicos, delimitación de actuaciones, compromiso de los agentes competentes y su programación concreta para la fase posterior de elaboración del Plan Hidrológico y su programa de medidas.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el propio marco normativo sectorial prevé instrumentos específicos para la planificación y financiación de las actuaciones necesarias. En particular, la disposición adicional sexta del Real Decreto 3/2023 establece que las comunidades autónomas deberán elaborar un Plan autonómico de inversiones (2023-2030) que incluya las actuaciones necesarias en materia de infraestructuras, equipamiento, medios y personal para la implementación de dicho real decreto, debiendo ser remitido al Ministerio de Sanidad y tenido en cuenta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la elaboración de los programas de medidas de los planes hidrológicos. Hasta la fecha de elaboración de este documento, la Confederación Hidrográfica del Duero no ha tenido acceso al Plan autonómico de inversiones de la Junta de Castilla y León al que se refiere la disposición adicional sexta.

En consecuencia, la concreción técnica y económica de las actuaciones a las que se refiere la alegación deberá producirse en el marco coordinado de dichos instrumentos, particularmente durante la redacción del Plan Hidrológico del cuarto ciclo, donde se integrarán tanto los resultados de los estudios técnicos en curso como la información procedente de la planificación sectorial autonómica.

Por todo ello, si bien se comparte la conveniencia de avanzar en la precisión de los criterios, no procede incorporar en esta fase un mayor nivel de detalle, al resultar coherente con el papel del EpTI diferir dicha concreción a la fase de planificación hidrológica en sentido estricto, en la que se definirán las medidas con el grado de desarrollo técnico y económico exigible. No obstante, si las autoridades competentes (entidades locales y administraciones locales supramunicipales o comunidades autónomas) hacen una propuesta detallada de medidas, éstas se considerarán en la fase de redacción de plan hidrológico.

Alegación 3.

Observaciones sobre la Ficha DU-10 Nuevos usos del agua vinculados a las industrias renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos. (Ausencia de reservas específicas para la producción de hidrógeno verde y centros de datos)

El nuevo Plan debería incorporar reservas específicas para la producción de hidrógeno verde y para los centros de tratamiento de datos, condicionadas al respeto de los caudales ecológicos y los usos preexistentes. Su dimensionamiento debe basarse en estudios que cuantifiquen la disponibilidad real del recurso. Estas reservas deberían estar operativas desde el primer año de vigencia del Plan porque diferirlas a fases de desarrollo posterior equivale a no tenerlas cuando más se necesitan.

Respuesta:

El desarrollo del tema importante DU-10 contempla los nuevos usos de agua vinculados con el almacenamiento energético mediante producción de hidrógeno y otros compuestos químicos y vinculados a la refrigeración de los nuevos centros de tratamiento de datos que puedan implantarse en la demarcación hidrográfica como usos consuntivos de recursos hídricos, que requerirán de una extracción del recurso de las masas de agua superficiales y subterráneas.

La ficha DU-10 adelanta los análisis realizados hasta la fecha. Los impactos de alteración de hábitats por cambios hidrológicos, que pueden producirse por nuevas extracciones en masas de agua superficiales con impactos comprobados o probables, no hace recomendable situar esos nuevos usos en estas masas de agua en riesgo alto y medio de incumplimiento de sus objetivos ambientales. Las presiones generadas en masas de aguas por extracciones generan un descenso piezométrico que supone una reducción en la disponibilidad del recurso. Esta situación ha llevado a la identificación de zonas no autorizadas con limitaciones a la explotación de nuevos recursos subterráneos ya en el plan hidrológico vigente. Estas zonas no autorizadas junto con las cuencas vertientes de las masas de agua superficiales citadas presentan un mapa de las ubicaciones en las que el establecimiento de nuevos usos consuntivos puede suponer un riesgo para el cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica

La alternativa elegida propone el establecimiento de reservas para estos usos solo en el caso que haya disponibilidad de recurso y no se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos. Estas reservas se establecerán en función de los índices de explotación de los sistemas, del estado de las masas de agua superficiales y subterráneas y de los niveles de garantías a los usos preexistentes.

Estas reservas se establecerán en el borrador del Plan Hidrológico de cuarto ciclo, cuantificándose únicamente en función de los recursos hídricos disponibles ya que no se dispone de las estrategias sectoriales nacionales ni autonómicas que realicen un despliegue territorial de la implantación de estos nuevos usos ni de sus necesidades hídricas. Por ello, sería conveniente que el alegante ponga a disposición de este Organismo toda la información que pueda obrar en su poder sobre los nuevos proyectos vinculados a las industrias de producción de energía renovable, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos, a desarrollar en la cuenca del Duero en el horizonte temporal 2027-2033, con objeto de cuantificar más fielmente las futuras demandas. Las consultas que el departamento alegante ha realizado de manera oficiosa a esta Confederación no corresponden con planes estratégicos sectoriales específicos en esta materia sino más bien con consultas ad hoc realizadas debido al debate abierto en el territorio alrededor de algunas de estas industrias.

Con relación a la solicitud del alegante de que estas reservas deberían estar operativas desde el primer año de vigencia del Plan cabe decir que la normativa del nuevo plan hidrológico, en fase de redacción, inicia su vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín del Estado, aplicando a todos los contenidos de dicho plan, salvo que se establezca un periodo transitorio para la aplicación de alguno de sus artículos.

Alegación 4.

Observaciones sobre la Ficha DU-10 Nuevos usos del agua vinculados a las industrias renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos. (Riesgo de pérdida de inversión renovable por restricciones territoriales acumuladas)

El EpTI propone la adopción de la Alternativa 2 (…) con importantes limitaciones que vendrían a sumarse a las restricciones impuestas por la normativa de la Junta de Castilla y León lo que puede reducirse forma significativa la superficie disponible para proyectos renovables en determinadas áreas, sin que esta reducción acumulada haya sido evaluada en ningún estudio de impacto económico territorial.

Cualquier reducción de la superficie útil para estos proyectos se traduce en menos inversión ejecutada, menos empleo generado y menos renta disponible en los municipios afectados.

Respuesta:

Las limitaciones existentes en la actualidad para la implantación de energías renovables, parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas, que ha supuesto el establecimiento de zonas de exclusión para estas instalaciones por parte de la Junta de Castilla y León, han tenido en cuenta las afecciones sobre la calidad de vida de los núcleos de población cercanos, los espacios naturales protegidos y especies críticas, los bienes de interés cultural, las infraestructuras agrarias y las masas forestales.

El agua, como elemento vertebrador de todos estos aspectos, no ha sido tenido en cuenta en el desarrollo de esta normativa autonómica y su marco competencial, y en la actualidad no existen herramientas legales que establezcan criterios para su protección frente al despliegue indiscriminado de estas instalaciones, más allá de lo que este Organismo, en sus informes preceptivos para la evaluación ambiental de cada proyecto en particular, pueda trasladar al Órgano ambiental competente para resolver el procedimiento de impacto ambiental que proceda.

Con objeto de dotar a este Organismo de unos criterios claros y conocidos de antemano por los promotores de los proyectos, se pretende establecer unos umbrales que cuantifiquen la capacidad de acogida del territorio en su relación con el medio hídrico.

La realización de una evaluación del impacto económico de estas limitaciones territoriales sobre el sector energético renovable precisaría de datos concretos sobre la planificación estratégica de la implantación de estas instalaciones. Por ello, sería conveniente que el alegante ponga a disposición de este Organismo toda la información que pueda obrar en su poder sobre los nuevos proyectos vinculados a las industrias de producción de energía renovable, a desarrollar en la cuenca del Duero en el horizonte temporal 2027-2033, y facilitara el método y los datos utilizados para el estudio de impacto económico territorial que haya realizado el alegante, con respecto a las limitaciones establecidas en el Decreto-Ley, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.

En consecuencia, la evaluación económica de las limitaciones a las que se refiere la alegación deberá producirse en un marco de coordinación interadministrativa, durante la redacción del Plan Hidrológico del cuarto ciclo, donde se integrarán tanto los resultados de los análisis internos en curso como la información procedente de la planificación sectorial autonómica.

Alegación 5.

Observaciones sobre la Ficha DU-10 Nuevos usos del agua vinculados a las industrias renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos. (Continuidad de las centrales hidroeléctricas con concesiones próximas a vencer)

El EpTI identifica 23 centrales hidroeléctricas en la Demarcación del Duero cuyo plazo concesional finaliza entre el 31 de diciembre de 2027 y el 1 de enero de 2034. (…). Su desaparición sin continuidad —aunque fuera temporal mientras se resuelve una nueva concesión- afectaría a empresas, trabajadores y municipios que han organizado parte de su base económica en torno a estas instalaciones durante décadas. El plan debería contemplar mecanismos que garanticen la continuidad de la actividad durante los procesos de renovación concesional, evitando períodos de vacío operativo.

Respuesta:

La alternativa 3 elegida para el desarrollo de este tema importante recoge el mantenimiento de la actividad en las 23 centrales hidroeléctricas cuyo plazo concesional expira en el horizonte 2027-2033, sean o no consideradas estratégicas para la estabilidad del sistema eléctrico español por Red Eléctrica Española.

La tramitación de la renovación de estos derechos concesionales o, en su caso, su extinción y nuevo concurso se realiza mediante los procedimientos recogidos en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y en ningún caso el Plan Hidrológico puede modificar dichos procedimientos, y mucho menos el EpTI. Únicamente se podrán proponer condicionantes que contribuyan a mejorar el estado de las masas de agua y la atención a las demandas.

Alegación 6.

Observaciones sobre la Ficha DU-10 Nuevos usos del agua vinculados a las industrias renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos. (Ausencia de evaluación cuantificada del impacto socioeconómico de las alternativas)

El EpTI analiza los impactos de las distintas alternativas sobre las masas de agua, pero no incluye ninguna evaluación de sus consecuencias socioeconómicas. (…). La elección de la alternativa más restrictiva sin acreditar que sus beneficios ambientales superan sus costes económicos y sociales resulta difícilmente compatible con el principio de proporcionalidad que debe regir toda actuación administrativa.

Respuesta:

Como se ha mencionado anteriormente, la realización de una evaluación del impacto económico sobre la socioeconomía de la comunidad autónoma de las distintas alternativas planteadas para el desarrollo de este tema importante precisaría de datos concretos sobre la planificación estratégica sectorial de la implantación de estas instalaciones, de las que este Organismo no dispone, no habiendo encontrado hasta la fecha ninguna base documental de carácter estatal o autonómica que aporte esta información.

Alegación 7.

Observaciones sobre la Ficha DU-10 Nuevos usos del agua vinculados a las industrias renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamiento de datos. (Ordenación energética)

[…] Por todo ello, lo más conveniente para nuestra Comunidad sería una nueva alternativa 3, que indicase:

- *En el orden 7: "No limitar las centrales de almacenamiento hidroeléctrico a las identificadas en el PNAHE. Se estudiará cada caso de forma individual".*
- *Y en el orden 8: "Mantenimiento actividad 23 centrales HE con final de plazo, imponiendo condiciones"*

Respuesta:

Se acepta la alegación, incluyendo en la alternativa 2 la no limitación de las centrales de almacenamiento hidroeléctrico a las identificadas en el PNAHE.

La alternativa 2 seleccionada ya propone el mantenimiento de la actividad 23 centrales HE con final de plazo, imponiendo condiciones para su nov

4.66. Escrito de observaciones Nº 090

Presentado por: Dña. Consuelo Hontanaya Díaz.

En nombre del Ministerio de Sanidad.

Alegación 1.

Sustitución de "Sistema Nacional de Aguas de Consumo" (SINAC) por "Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo".

Respuesta:

Se agradece la observación y se modifica la denominación en el documento definitivo.

Alegación 2.

Página 23 (punto 6. Impacto en sectores y grupos afectados de las diversas alternativas)

Sustitución de "Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social" por "Ministerio de Sanidad".

Respuesta:

Se agradece la observación y se modifica la denominación del Ministerio en la página 23 del Anexo del EpTI (Ficha DU-01) del documento definitivo.

Alegación 3.

Sobre el apartado A (Nuevos requisitos de control) de la ficha DU-08 se propone a su posible consideración incluir cierta información del RD 3/2023 por si pudiera resultar de utilidad en la redacción de este apartado: la denominada lista de observación, regulada en el anexo IV del RD 3/2023, prevé el control de los contaminantes que la integran a la salida del tratamiento o depósito de cabecera, esto es, en el ámbito de la zona de abastecimiento, con una frecuencia mínima cuatrimestral en zonas tipo 4, 5 y 6, y anual en zonas tipo 2 y 3 (apartado 3 del citado anexo).

Respuesta:

Se agradece la información y se acepta parcialmente la alegación.

En concreto, se eliminan las referencias a la lista de observación nacional, dado que su control corresponde al operador, a la salida del tratamiento o del depósito de cabecera, en el ámbito de la zona de abastecimiento. No obstante, se mantiene la frecuencia de muestreo indicada en el EpTI, al resultar de aplicación la disposición final segunda del Real Decreto 3/2023 para el control de las sustancias prioritarias y de los contaminantes vertidos en cantidades significativas.

Las frecuencias de muestreo señaladas por la alegante son las previstas para los parámetros incluidos en la lista de observación, cuyo análisis no corresponde al organismo de cuenca. Por tanto, procede modificar el apartado correspondiente del EpTI, ficha DU-08, "Uso urbano y nuevos requerimientos de la Directiva de aguas potables", al que hace referencia la alegación. Así, donde dice:

"A. NUEVOS REQUISITOS DE CONTROL. NUEVOS PARÁMETROS A CONTROLAR Y NIVELES REVISADOS

El Organismo de cuenca ha de llevar a cabo un programa de control de aguas destinadas al abastecimiento que deberá incluir los parámetros, sustancias o contaminantes que la confederación identifique como convenientes en cada zona teniendo en cuenta el resultado de la evaluación y gestión del riesgo, y que en todo caso deben incluir las sustancias prioritarias y los contaminantes vertidos en cantidades significativas. Además, esta actualización normativa incluye el control de ciertos contaminantes emergentes (17ß estradiol, nonilfenol, azitromicina, diclofenaco y a futuro, microplásticos) incluidos en la denominada lista de observación nacional que podrá ser actualizada por el Ministerio de Sanidad. Estos controles se llevarán a cabo con una periodicidad mensual en zonas que abastezcan a más de 30.000 habitantes, 8 veces al año entre 10.000 y 30.000 habitantes o trimestral si es menor de 10.000 habitantes. En este contexto, la CH. del Duero está realizando la adquisición de aparatos específicos y poniendo en marcha los procedimientos y acreditaciones necesarios para medir estas sustancias. La información se hará pública a través de servicios interoperables para facilitar el intercambio de información y el acceso inmediato del resto de administraciones."

se dirá en el documento ETI consolidado lo siguiente:

"*A. NUEVOS REQUISITOS DE CONTROL. NUEVOS PARÁMETROS A CONTROLAR Y NIVELES REVISADOS*

El organismo de cuenca debe llevar a cabo un programa de control de las aguas destinadas al abastecimiento que incluya los parámetros, sustancias o contaminantes que se identifiquen como relevantes en cada zona, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación y gestión del riesgo. En todo caso, dicho programa deberá incluir las sustancias prioritarias y los contaminantes vertidos en cantidades significativas.

Estos controles se llevarán a cabo con una periodicidad mensual en las zonas que abastezcan a más de 30.000 habitantes, ocho veces al año en las zonas que abastezcan entre 10.000 y 30.000 habitantes, y trimestralmente en las zonas que abastezcan a menos de 10.000 habitantes.

En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Duero está promoviendo, a través de las ECAH a las que tiene encomendados estos trabajos, la disponibilidad del equipamiento analítico específico, así como la implantación de los procedimientos y acreditaciones necesarios para la determinación de las nuevas sustancias que surjan de la evaluación del riesgo y de la aplicación de la Directiva 805/2026. La información obtenida se hará pública mediante servicios interoperables, con el fin de facilitar el intercambio de información y el acceso inmediato por parte del resto de administraciones competentes."

Alegación 4.

Sobre el apartado 2.2 (Industria de almacenamiento de energía eléctrica renovable) de la ficha DU-10 se propone a su posible consideración incluir cierta información del RD 3/2023 por si pudiera resultar de utilidad en la redacción de este apartado. La frase relativa a los PFAS (pág. 190) podría no reflejar con exactitud lo previsto en la norma. Conforme a la disposición adicional séptima del RD 3/2023, lo que está previsto para el 2 de enero de 2026 no es la entrada en vigor de nuevos valores paramétricos en términos generales, sino específicamente la fecha límite para que los operadores cumplan el valor paramétrico del parámetro sumatorio Σ20 PFAS (cuyo control se inició no más tarde del 2 de enero de 2025). En paralelo, en esa misma fecha dejan de aplicarse los valores paramétricos transitorios de los 4 PFAS individuales (PFOA, PFOS, PFNA y PFHxS) previstos en la nota 15 del anexo I, parte B.

Respuesta:

Se agradece la información y en la página 190 del Anexo del EpTI (Ficha DU-10) se modifica la redacción: donde dice "*El Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, establece nuevos valores paramétricos para las concentraciones de PFAs, que serán aplicables a partir del 2 de enero de 2026.*", se dirá en el documento ETI consolidado lo siguiente: *"El Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, establece que antes del 2 de enero de 2026 los operadores deberán cumplir el valor paramétrico del parámetro sumatorio Σ20 PFAS (cuyo control se inició no más tarde del 2 de enero de 2025), y dejarán de aplicarse los valores paramétricos transitorios de los 4 PFAS individuales (PFOA, PFOS, PFNA y PFHxS) previstos en la nota 15 del anexo I, parte B.".*

Alegación 5.

Sobre el apartado 2.2 de la ficha DU-10 (página 197 del Anexo) y la frase "También podría plantearse el uso del agua regenerada procedente de las EDAR, para lo que sería necesario comprobar su no afección al mantenimiento de los caudales ecológicos y otros objetivos ambientales e impulsar estudios hidrogeológicos con modelización hidrológica avanzada para evaluar de manera rigurosa el impacto en los recursos hídricos que puede representar la producción de hidrógeno", se sugiere incluir, junto a los objetivos ambientales mencionados, los objetivos sanitarios que pudieran resultar de aplicación.

Respuesta:

Se acepta la sugerencia y se da una nueva redacción a la citada frase: "*También podría plantearse el uso del agua regenerada procedente de las EDAR, para lo que sería necesario comprobar su no afección al mantenimiento de los caudales ecológicos y a otros objetivos ambientales y sanitarios e impulsar estudios hidrogeológicos con modelización hidrológica avanzada para evaluar de manera rigurosa el impacto en los recursos hídricos que puede representar la producción de hidrógeno*"

4.67. Escrito de observaciones Nº 091 y similares

Se muestra a continuación los agentes que han presentado escritos de POS con el mismo contenido y que son respondidas de forma conjunta para todos ellos.

Nº POS	Presentado por:	En nombre:
N091	D. Diego Revilla Pascual.	Comunidad de Regantes de Castrillo del Val, San Medel y Cardeñajimeno
N092	D. David Gallo Sánchez.	Comunidad de Regantes de la Ribera de Arlanzón a Ibeas de Juarros
N093	D. David Gallo Sánchez	Comunidad de Regantes de Cueva de Juarros a San Millán de Juarros
N094	Dña. Laura García Ayuso	Comunidad de Regantes de Cueva de Juarros a San Millán de Juarros
N096	D. Salvador Tobar Velasco	Comunidad de Regantes de los Canales del Arlanzón

Alegación 1.

*El EPTI clasifica en **"Riesgo Alto"** de no alcanzar el buen estado a masas críticas como la **30400813 (Arlanzón 6)**, la **30400184 (Arlanzón 4)** y la **30400228 (Arlanza 2)**. Esta clasificación se basa en el modelo de "Respuesta Rápida del Estado Ambiental" (RREA). Alegamos que dicho modelo, tal como reconoce la propia Memoria (pág. 158), considera los parámetros como "conservativos" y no aplica degradación ni autodepuración, salvo para el nitrógeno.*

*La clasificación de "Riesgo Alto" activa automáticamente la restricción del Artículo 45.1 de la Revisión de los planes hidrológicos, que declara incompatible cualquier actuación que "empeore el estado". Esto supone un **bloqueo de facto** para las novaciones de concesiones que expiran en 2035, condenando a las explotaciones a la inseguridad jurídica y a la posible desaparición sin que existan estudios hidrogeológicos de detalle que avalen dicho riesgo.*

*Solicita que se **anule la clasificación de "Riesgo Alto"** de las masas de agua de los sistemas Arlanzón y Arlanza, realizando estudios técnicos de campo que sustituyan a los modelos teóricos conservativos.*

Respuesta:

Efectivamente, el modelo actual RREA no considera la degradación de los contaminantes salvo el nitrógeno. De cara al borrador del plan hidrológico, siguiente de los hitos de planificación, se mejorará esta modelación. En cualquier caso, la problemática de esta masa, la 30400813 (Arlanzón 6), que es la que está registrando el riesgo alto, está en los impactos medidos por las redes de control, no en las presiones modeladas con el RREA. Hay un problema recurrente evidenciado a través de los programas de seguimiento al respecto de los macroinvertebrados (índice IBMWP) que indica un impacto de contaminación orgánica. Mientras estos impactos se sigan registrando, la masa va a estar clasificada con un “Riesgo Alto”.

Alegación 2.

Inadecuación del periodo de referencia para el cálculo de dotaciones. *El Plan pretende revisar concesiones basándose en el "uso real" (máximo consumo en un periodo determinado). Denunciamos que los periodos de referencia utilizados han estado marcados por* ***sequías persistentes y restricciones administrativas****, por lo que no representan las necesidades hídricas reales de los cultivos.*

Exigimos que, para el sistema Arlanzón, se garantice una dotación mínima de ***6.000 m³/ha****, conforme a los criterios de viabilidad agronómica, y que cualquier revisión se realice sobre la base de un* ***año hidrológico normal****, evitando que la eficiencia del regante se convierta en un castigo mediante la reducción de sus derechos.*

Respuesta:

En relación con la alegación formulada sobre la supuesta inadecuación del periodo de referencia para el cálculo de dotaciones, procede efectuar las siguientes consideraciones:

En primer lugar, debe señalarse que el proceso de revisión de asignaciones y dotaciones en el marco de la planificación hidrológica no se fundamenta exclusivamente en el valor máximo de consumo observado en un determinado periodo, sino en un análisis integral que tiene en cuenta, entre otros aspectos, la disponibilidad real de recursos, las garantías de suministro, las condiciones de explotación de cada sistema y los objetivos ambientales establecidos por la normativa vigente, en coherencia con los principios de sostenibilidad y racionalidad en el uso del agua.

En este sentido, los periodos de análisis utilizados en la planificación hidrológica responden a series suficientemente representativas del régimen hidrológico, que incluyen tanto años húmedos como secos, permitiendo evaluar el comportamiento del sistema en condiciones diversas y, en particular, su respuesta frente a situaciones de escasez. Por ello, no resulta técnicamente adecuado limitar la determinación de dotaciones a un hipotético “año hidrológico normal”, cuya definición carece de una referencia objetiva única y no refleja la variabilidad natural del sistema, acentuada además por los efectos del cambio climático.

Asimismo, debe destacarse que los periodos recientes caracterizados por episodios de sequía y aplicación de restricciones no suponen una distorsión del análisis, sino que forman parte de las condiciones reales de funcionamiento del sistema y resultan esenciales para valorar la viabilidad de las demandas en escenarios de menor disponibilidad de recursos, que son precisamente los que deben considerarse desde la perspectiva de la planificación.

Por otra parte, en relación con la petición de fijar una dotación mínima de 6.000 m³/ha para el sistema Arlanzón, debe señalarse, en primer término, que resulta necesario precisar a qué tipo de dotación se refiere la alegación, ya que en la práctica concurren distintos conceptos con significado y alcance diferente, entre los que cabe distinguir:

- Las dotaciones concesionales históricas, en muchos casos otorgadas hace décadas bajo condiciones tecnológicas distintas (por ejemplo, riegos a manta), que no responden necesariamente a criterios actuales de eficiencia.
- Las dotaciones que figuran en la normativa, utilizadas en la planificación para nuevas concesiones o revisiones, definidas conforme a criterios técnicos homogéneos.

- Las dotaciones orientativas compatibles con la gestión de los embalses (Comisiones de desembalse) en función de la disponibilidad coyuntural del recurso.

Adicionalmente, en relación con las dotaciones que figuran en la normativa, debe destacarse que su determinación se basa en criterios técnicos sólidos y contrastados, entre los que cabe señalar:

e) La consideración de los factores agroclimáticos comarcales, que permiten adaptar las necesidades hídricas a las condiciones específicas de cada zona.
f) Su obtención a partir de series de datos suficientemente amplias, que incorporan años secos y húmedos, evitando sesgos derivados de situaciones coyunturales.
g) La utilización de referencias técnicas consolidadas como Inforriego, ampliamente empleadas para la estimación de necesidades de riego.
h) La incorporación del principio de uso racional y eficiente del agua, en línea con las exigencias de la planificación hidrológica y la normativa vigente.

Por todo ello, las dotaciones consideradas en la planificación se ajustan razonablemente a las necesidades reales de los cultivos en condiciones actuales de explotación, sin que pueda sostenerse que supongan una infraestimación sistemática de dichas necesidades.

En este contexto, el valor de 6.000 m^3/ha al que se hace referencia en el EpTI figura como dotación máxima de referencia en el análisis de alternativas, y no como dotación mínima garantizada ni como derecho consolidado. En consecuencia, no procede su reinterpretación en los términos planteados en la alegación.

En relación con la afirmación de que la eficiencia en el uso del agua por parte de los regantes pudiera derivar en una reducción de sus derechos, debe precisarse que las actuaciones orientadas a la mejora de la eficiencia no tienen carácter sancionador ni implican, por sí mismas, una reducción automática de los derechos concesionales, sino que responden a la necesidad de adaptar el uso del recurso a un contexto de mayor escasez y exigencia ambiental. Cualquier eventual revisión de las características concesionales, en su caso, se realizará conforme al marco jurídico aplicable y con pleno respeto a las garantías procedimentales, atendiendo a criterios objetivos y debidamente justificados.

Finalmente, conviene recordar que el EpTI constituye un documento de carácter estratégico, siendo en la fase de elaboración del Plan Hidrológico donde se concretarán, con mayor nivel de detalle, los criterios aplicables a la asignación de recursos y la definición de dotaciones, incorporando la mejor información disponible.

Alegación 3.

Impugnación de la recuperación del 100% de los costes de operación. *La Administración estima que los usuarios recuperan el 100% de los costes de operación y mantenimiento (Memoria, pág. 213). Esta afirmación carece de base económica real en el EPTI. No se han internalizado los* ***beneficios ambientales y sociales*** *que el regadío aporta (fijación de población, prevención de incendios, recarga de acuíferos por retorno). Exigimos un análisis de costes que respete el principio de* ***proporcionalidad*** *y no cargue exclusivamente sobre el sector primario costes que benefician a la sociedad en su conjunto.*

Respuesta:

La consulta pública que finalizó en mayo de 2026 es sobre el Esquema provisional de temas importantes en materia de gestión del agua, segunda fase de la planificación hidrológica. La observación que se hace es al Estudio general de la demarcación, que forma parte de los Documentos iniciales, primera fase de la planificación hidrológica, uno de cuyos contenidos es el análisis económico de los usos del agua, cuya fase de consulta pública finalizó en junio de 2025 y cuyos documentos se consolidaron en octubre de 2025. Por tanto, no puede atenderse esta alegación por no corresponder al momento procedimental actual.

Alegación 4.

Ausencia del análisis de repercusión económica de los caudales ecológicos. *El apartado 3.4.5 de la* ***Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH)*** *exige que el Plan incluya un análisis de la repercusión económica y social de los caudales ecológicos. El EPTI del Duero omite este análisis para los sistemas Arlanzón y Arlanza.*

Falta de credibilidad por baja ejecución presupuestaria*. A fecha de diciembre de 2024, el grado de ejecución presupuestaria del Programa de Medidas en el Duero es de tan solo el* ***24,53%****. Es inadmisible que la Administración pretenda imponer nuevas restricciones ambientales y reducciones de dotación cuando ha incumplido sistemáticamente la ejecución de las infraestructuras de regulación y modernización prometidas en los ciclos anteriores.*

Solicita que se elabore de forma inmediata el ***informe de repercusión económica y social*** *de los caudales ecológicos exigido por la IPH.*

Respuesta:

El análisis de repercusión económica de los caudales ecológicos no se realiza en el EpTI. La Instrucción de Planificación Hidrológica indica que es el plan hidrológico donde debe incluirse. De hecho, hay un anejo específico sobre caudales ecológicos. Además, en el proceso de concertación de caudales ecológicos, que se realizará durante la fase de consulta pública del plan, se elaborará información sobre el efecto de los caudales sobre las demandas en las masas de agua elegidas para proponer cambios en los valores de los caudales ecológicos.

En cuanto al segundo punto de la alegación relativo a la baja ejecución presupuestaria, debe señalarse que el grado de ejecución del Programa de Medidas constituye un elemento relevante para valorar la eficacia y credibilidad de la planificación hidrológica, siendo objeto de seguimiento periódico en los informes anuales del Plan Hidrológico. El dato señalado por el alegante, referido a diciembre de 2024, debe interpretarse teniendo en cuenta el carácter plurianual del Programa de Medidas y el momento intermedio del ciclo de planificación. Además, la ejecución ha continuado avanzando con posterioridad, de forma que, según la información de seguimiento disponible para 2025, la inversión ejecutada en el periodo 2022-2025 asciende a 795,9 millones de euros sobre una inversión planificada de 2.265,4 millones de euros, lo que representa un grado de ejecución del 35,13 %. Este avance pone de manifiesto que el Programa sigue desarrollándose, aunque persisten diferencias significativas entre grupos de medidas y ámbitos de actuación. Asimismo, es necesario recalcar que la ejecución de las medidas depende de diversas administraciones y organismos competentes, y puede verse

condicionada por factores presupuestarios, administrativos, ambientales, de tramitación y de madurez técnica de los proyectos.

En todo caso, se comparte la necesidad de reforzar la eficacia de la planificación mediante una adecuada priorización de las medidas, un seguimiento más preciso de su grado de avance y una mayor coordinación entre las administraciones responsables, especialmente en aquellas actuaciones orientadas a la mejora de la garantía de las demandas, la modernización de regadíos, la depuración, la prevención de inundaciones y la mejora de las infraestructuras hidráulicas.

Ahora bien, el grado de ejecución presupuestaria del Programa de Medidas no puede entenderse como causa que impida la adopción de medidas ambientales, de gestión de demandas o de protección del recurso que resulten necesarias conforme al diagnóstico de la demarcación y a la normativa vigente. La planificación hidrológica debe atender simultáneamente a la satisfacción de las demandas, a la garantía de los usos, a la protección del dominio público hidráulico y al cumplimiento de los objetivos ambientales.

Por todo ello, la alegación se considera parcialmente estimada. Se toma en consideración la necesidad de que el futuro Plan Hidrológico incorpore el análisis de repercusión económica y social de los caudales ecológicos, así como la conveniencia de reforzar la ejecución y seguimiento del Programa de Medidas. No obstante, no procede incorporar dicho análisis completo en el Esquema de Temas Importantes ni se comparte que el grado de ejecución del Programa de Medidas alcanzado hasta la fecha invalide la necesidad de establecer o revisar las medidas ambientales, de gestión de demandas o de protección del recurso que resulten necesarias en el nuevo Plan Hidrológico.

Alegación 5.

*Que se **deroguen las restricciones a la novación de concesiones** para los aprovechamientos existentes, garantizando la continuidad de la actividad agraria más allá de 2035.*

*Esta medida, unida a la caducidad masiva de derechos en 2035, provocará una **expropiación encubierta** de miles de hectáreas, agravando la desertificación demográfica de Castilla y León.*

Respuesta:

El EpTI no tiene capacidad para modificar los requisitos jurídicos respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas que otorga la ley, especialmente ante el horizonte de 2035, ni puede ampliar esa seguridad ni disminuirla. Lejos de que el EpTI esconda una “expropiación encubierta” en términos del alegante, es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas. Lo que el EpTI señala es que estos derechos cuando sean en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, si éstas no alcanzan su buen estado en 2035, será muy difícil que puedan mantener su status actual, ya que en las citadas DT se indica que en todo caso, a esos aprovechamientos de aguas les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico. Por tanto, el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

Alegación 6.

*Que se priorice la **ejecución de las infraestructuras de regulación** pendientes antes de proponer cualquier nueva limitación a los derechos de agua.*

Respuesta:

El EpTI no tiene capacidad para limitar los derechos al uso del agua. El EpTI identifica las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico, incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales, y propone posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos medioambientales, de acuerdo con los programas de medidas. Relacionadas con el uso del agua están las presiones por extracción en aguas subterráneas o superficiales de determinadas zonas. Corregir estas presiones requiere actuaciones en tres posibles frentes: aumentar la oferta (lo que el alegante llama infraestructuras de regulación), mejora de la demanda (hacer que el uso del agua sea más eficiente), o imponer limitaciones a los usos actuales. En las Fichas DU-02, DU-06 y DU-07 de diversas maneras se plantea que el orden de acción interno en la planificación es, en primer lugar, mejorar la demanda con un uso más eficiente; en segundo lugar, si las medidas de gestión de la demanda no son suficientes para los usos actuales o programados, incorporara medidas de oferta; finalmente si ninguna de ellas es eficaz explorar la vía de la limitación de derechos, pero siempre en los términos que establece el TRLA para estas restricciones. Lo que no parece razonable es que se demanden medidas de incremento de la oferta, con el fuerte impacto que pueden tener, mientras no se han iniciado medidas de mejora de la gestión de la demanda.

4.68. Escrito de observaciones Nº 095

Presentado por: D. José Andrés García Moro.

En nombre del Ayuntamiento de Melgar de Arriba

Alegación 1.

PROPUESTA 1. TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DE LA PARTE SECTOR XXI DE PAYUELOS PENDIENTE

El Ayto. de Melgar de Arriba, solicita mediante documento adjunto y según la motivación propuesta la incorporación de 1.480 ha de nuevas superficies regables, que perteneciendo a la totalidad del sector XXI cuya superficie total delimitada es de 3.502 ha, no se encuentran dentro de las 2.022 ha que ya están incorporadas, en el término municipal de Melgar de Arriba, en relación con la disponibilidad de recursos hídricos, la garantía de suministro y su compatibilidad con la planificación hidrológica vigente; así como, en el marco de la Comisión Técnica Mixta prevista en el artículo 8 del Real Decreto 1520/2007, se impulse la revisión o modificación del Plan Coordinado de Obras aprobado por Orden AAA/774/2015 a fin de valorar la inclusión de dichas superficies dentro de la planificación operativa del sistema; que, en su caso, y si de los análisis técnicos se derivase la necesidad de adaptar las determinaciones del Plan General de Transformación, se informe sobre la procedencia y el procedimiento para su modificación conforme al marco normativo aplicable.

Respuesta:

La transformación en regadío de la zona el embalse de Riaño, primera fase, se declaró de interés general de la Nación por Real Decreto 502/1986, de 28 de febrero. Por Real Decreto 1520/2007, de 16 de septiembre, se aprobó el Plan general de Transformación de las Áreas Centro y Cea, sectores VI a XXIV. En ese Plan el sector XXI aparecía con 2.022 ha consideradas regables. La concreción de esas 2.022 ha, dentro de las 3.502 ha que tiene el sector XXI, se efectuó en el proceso de concentración parcelaria de la Demarcación 10 de Payuelos (Mayorga-Melgar) llevado a cabo como actuación previa a la transformación en regadío. Esa concreción supuso una superficie regable de 2.069 ha, 47 ha más que las que identificó en Plan General de Transformación como regables para este sector. El proyecto de concentración parcelaria fue aprobado y publicado de manera definitiva el 26 de marzo de 2021 por la Junta de Castilla y León. Por tanto, la tramitación preparatoria de la puesta en riego ha finalizado. Aunque esta Confederación Hidrográfica no es competente en concentración parcelaria, el hecho de que en Melgar se superara la superficie regable del Sector XXI aunque no llegó a la superficie dominada, probablemente obedeció a la falta de interés de los propietarios por asumir la transformación en regadío, por lo que la petición que hace el alcalde de la localidad no puede considerarse representativa de los particulares que en su día rechazaron el paso a regadío. En todo caso es un trámite que debe sustanciarse ante la administración agraria competente.

En tanto no se finalice la transformación en Payuelos y se despeje la duda de la regulación adicional en el sistema Carrión, afectado por el trasvase Cea-Carrión con recursos de Riaño, y la situación del Canal Bajo de Payuelos, la postura del Organismo de cuenca es no admitir ampliaciones de superficie en esta zona regable que excedan las que figuran en los planes generales de transformación y en los posteriores procesos de concentración parcelaria. En línea con este criterio, el EpTI no contempla ampliaciones de superficie en Payuelos y tampoco lo hará el plan hidrológico.

Alegación 2.

PROPUESTA 2. TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO SECTOR II (SUBZONA MELGAR DE ARRIBA). TRASVASE ESLA-CARRIÓN

Se solicita que por parte de esa Confederación Hidrográfica del Duero se analice la viabilidad hidrológica de la concesión de aguas para la puesta en regadío de las 287 ha restantes hasta completar el sector II Arenillas-Melgar de la transformación en regadío Esla-Carrión. Aunque la superficie es muy inferior a la solicitada para el sector V en el anterior plan hidrológico, en el caso de que el nuevo plan hidrológico, en el que se extiende la serie de aportaciones a los últimos seis años, no valide estos análisis realizados, se propone la opción desarrollada en el sector IV a partir de una regulación con caudales de invierno que tengan el doble beneficio de evitar o disminuir episodios de inundaciones y la transformación de 287 ha regables.

Respuesta:

Durante la consulta pública del plan vigente se analizó la viabilidad de incluir nueva superficie de riego dependiente del trasvase Cea-Carrión (sector V con 1.220 ha) desde el punto de vista del cumplimiento de la garantía de suministro. El resultado del análisis fue que el criterio de déficit a 10 años, que debe ser inferior al 100% de la demanda anual, ascendía a 120%. Al no cumplir los criterios de garantía en el horizonte 2039 (el que tiene en cuenta la reducción de aportaciones debida al Cambio Climático), se descartó esa ampliación.

El análisis de esa nueva demanda con la serie de aportaciones extendida no cambia la conclusión del análisis al mantener los déficits máximos a 10 años y necesitar en todo caso del suministro desde el trasvase cea-Carrión. Se debe tener en cuenta que el Plan Hidrológico vigente vincula el régimen de explotación del trasvase Cea-Carrión con agua del sistema Esla a la ejecución de las medidas de aumento de regulación y mejora de la eficiencia del sistema Carrión, algo que a fecha actual ha avanzado muy poco, por lo que seguir incrementando demandas sin una certeza futura no parece razonable.

4.69. Escrito de observaciones Nº 097

Presentado por: Dña. Asunción Ruiz Guijosa

En nombre de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

CONSIDERACIONES PREVIAS A LAS 12 CUENCAS INTERCOMUNITARIAS

Alegación G1.

Reclama reforzar el carácter estratégico y de diagnóstico crítico del EpTI, integrando operativamente la biodiversidad, el análisis de incumplimientos del buen estado y el cumplimiento íntegro de la DMA.

Respuesta:

Conforme al art. 79 RPH, el EpTI identifica los principales problemas actuales y previsibles relacionados con el agua, las posibles alternativas de actuación y los sectores afectados, en un proceso por fases (definición y valoración de los temas y sus alternativas; ratificación; y directrices para la revisión del plan). Se considera, por tanto, que el EpTI ya responde al carácter crítico y diagnóstico que se reclama, y se agradece que se siga impulsando su refuerzo. La integración de la biodiversidad y de los objetivos de la DMA es transversal a todo el documento.

Alegación G2.

Solicita que el cuarto ciclo incluya una evaluación completa, homogénea, pública, accesible y comparable entre demarcaciones de la eficacia real de las medidas del tercer ciclo.

Respuesta:

Se comparte la necesidad de una evaluación de la eficacia de las medidas, en la que se está trabajando para su mejora en la revisión del plan y en los datos anuales del programa de medidas; se es consciente, además, de la baja capacidad de ejecución de los programas vigentes, área de clara mejora que exige el compromiso de la AGE, las CCAA y las entidades locales. La mejora de los informes de seguimiento –con cada vez más datos, como refleja el Informe de Calidad de las Aguas en España (2015-2024)– avanza en esa dirección, siendo la vinculación entre datos y eficacia de las medidas el aspecto a reforzar. Debe matizarse que las medidas básicas no requieren análisis coste-eficacia (sí un buen diseño), que se reserva a las complementarias.

Por otra parte, los mecanismos de seguimiento, evaluación y transparencia están delimitados en el RPH. Concretamente en los artículos 87 y 88 del RPH se establecen los criterios, contenidos y acciones de transparencia que deben regir los informes de seguimiento del Plan Hidrológico. Anualmente el Organismo de cuenca debe recabar de las autoridades competentes información sobre el desarrollo del Plan Hidrológico. En concreto información sobre la evolución de los recursos hídricos naturales y disponibles y su calidad, la evolución de las demandas de agua, el grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos, el estado de las masas de agua superficial y subterránea y la aplicación de los programas de medidas y efectos sobre las masas de agua. Esa información se sintetiza en un informe que es puesto a disposición del Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica y, posteriormente publicado en la web del Organismo de cuenca (https://www.chduero.es/web/guest/plan-hidrologico-2022). Se considera que atender a estos

preceptos normativos garantiza suficientemente la transparencia y la rendición de cuentas que se exige legalmente.

Y las propias Fichas de temas importantes recogen las medidas identificadas en el tercer ciclo y, hasta donde se puede, y la eficacia de las mismas en relación con el tema importante.

Alegación G3.

Propone reforzar en los EpTI los programas de seguimiento ecológico e hidromorfológico, la disponibilidad de información y la cobertura de lagunas de conocimiento.

Respuesta:

Los programas de seguimiento de las masas de agua son una obligación ya establecida por la DMA y por la normativa de planificación. Los organismos de cuenca disponen de redes de control y seguimiento que se revisan y actualizan periódicamente, lo que permite evaluar el estado y reducir progresivamente las incertidumbres. La existencia de lagunas de conocimiento no impide la planificación, que debe basarse en la mejor información disponible en cada ciclo

Alegación G4.

Solicita incorporar en los EpTI definitivos un análisis detallado de las causas estructurales del no cumplimiento del buen estado, indicadores de evolución del estado y cronogramas verificables de recuperación, e integrar las novedades de la Directiva (UE) 2026/805.

Respuesta:

El EpTI tiene por finalidad identificar los principales problemas y orientar la planificación, no sustituir el contenido del plan ni de su programa de medidas: el análisis de presiones, impactos, objetivos, indicadores y programación temporal forma parte de la documentación del plan (DMA y RPH). En esa fase se incluirán una tabla de problemas y una senda de cumplimiento para las autoridades competentes, un anejo con el excedente máximo de fertilización y un plan de implementación de la nueva Directiva de aguas residuales urbanas (Directiva (UE) 2024/3019), con mención al tema importante de coordinación administrativa. La incorporación de nuevas disposiciones europeas –incluida la que cita el alegante– se realizará conforme a los plazos y mecanismos legalmente establecidos, sin necesidad de anticipar en el EpTI desarrollos cuya implementación corresponde a fases posteriores.

Alegación G5.

Solicita un modelo plenamente ecosistémico que integre criterios de adaptación (Ley 7/2021, PNACC, RD 665/2023), soluciones basadas en la naturaleza, refugios climáticos y el Reglamento (UE) 2024/1991 de Restauración de la Naturaleza, con los límites ecológicos como condicionantes vinculantes de los usos.

Respuesta:

La planificación ya incorpora la protección del medio acuático, la adaptación al cambio climático, la prevención del deterioro y la consecución del buen estado (DMA), y se está trabajando en su integración a través de los Estudios de Adaptación a los Riesgos del Cambio Climático (EACC) y del

Reglamento (UE) 2024/1991. Ahora bien, la normativa exige compatibilizar los objetivos ambientales con los usos sostenibles mediante un enfoque integrado: la planificación pondera conjuntamente las necesidades ambientales, sociales y económicas, por lo que no procede establecer con carácter general una subordinación absoluta de todos los usos a criterios adicionales distintos de los legalmente previstos –planteamiento que constituye, en este punto, un juicio de valor–. El Reglamento (UE) 2024/1991 se articulará a través de sus instrumentos propios y de los futuros planes nacionales de restauración.

Alegación G6.

Reclama mayor coherencia metodológica y ambiental entre demarcaciones (criterios comunes, un núcleo mínimo común de Temas Importantes ambientales) y reforzar la coordinación administraciones hidráulicas-ambientales.

Respuesta:

El marco de elaboración de los planes hidrológicos se compone, entre otros, de la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008), que asegura la coordinación entre las cuencas intercomunitarias; y el art. 79 RPH fija el núcleo mínimo común de los temas importantes (presiones e impactos, alternativas y sectores afectados). Existen, por tanto, criterios comunes e instrucciones de coordinación, aunque diverjan las fichas y las cuestiones específicas de cada demarcación. La coordinación hidráulica-ambiental se sigue reforzando, señaladamente a través del Comité de Autoridades Competentes y de los procesos de participación y consulta.

Alegación G7.

Solicita que los EpTI operen como instrumentos estratégicos de priorización, con diagnósticos integrados, trazabilidad presión-impacto-objetivo-medida y materiales de participación orientados al debate real, superando enfoques descriptivos o continuistas.

Respuesta:

La normativa atribuye al EpTI una función de identificación y exposición de los temas importantes, como fase previa al plan, sin exigir el nivel de detalle analítico y de trazabilidad que se plantea, propio del plan. La calificación de los EpTI como «descriptivos o continuistas» es un juicio de valor. Los mecanismos de consulta y participación previstos por la DMA y el RPH garantizan un debate efectivo sobre las decisiones estratégicas sin necesidad de alterar la naturaleza y el alcance del EpTI.

Alegación G8.

Reclama integrar de forma efectiva las exigencias de los espacios naturales, especies y hábitats protegidos asociados al medio hídrico, incluyendo dos Temas Importantes específicos (espacios protegidos dependientes del agua; y hábitats y especies dependientes del agua).

Respuesta:

La protección de los espacios protegidos, hábitats y especies dependientes del medio hídrico es una obligación transversal de la planificación derivada de la DMA, que exige considerar los objetivos ambientales de las zonas protegidas y su integración en la gestión de las masas de agua (Registro de

Zonas Protegidas). No procede, por ello, incorporar necesariamente temas importantes específicos adicionales: su tratamiento se adapta a los temas de cada EpTI y a la relación con las CCAA. Desde la Dirección General del Agua se está trabajando en coordinación con la Dirección General de Biodiversidad en esta materia.

Alegación G9.

Propone incorporar metodologías específicas de evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos, con análisis de capacidad de carga ecológica, umbrales de deterioro e integración plena de la adaptación al cambio climático.

Respuesta:

La planificación ya incorpora la evaluación de presiones e impactos sobre las masas de agua y la consideración de los efectos del cambio climático, con la elaboración de los EACC para el cuarto ciclo. La incorporación en el EpTI de metodologías específicas adicionales de carácter técnico no resulta exigida por la normativa y podría limitar la flexibilidad necesaria para adaptar los análisis a cada demarcación y a la evolución del conocimiento científico. En este ámbito existe línea de trabajo en el grupo ECOSTAT y en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica.

Alegación G10.

Solicita incorporar la custodia del territorio y la colaboración público-social como herramientas estructurales de gobernanza, restauración y seguimiento ecológico participativo.

Respuesta:

Se trata de principios de buena gobernanza que están intrínsecamente presentes en el EpTI al analizar los problemas del territorio y evaluar las alternativas para alcanzar los objetivos de la planificación. La custodia del territorio dispone, además, de su marco propio en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cauce a través del cual puede articularse la colaboración público-social.

Alegación G11.

Reclama reforzar el carácter preventivo y adaptativo de la gestión de sequías, evitar la normalización de la excepcionalidad hidrológica y revisar las concesiones en escenarios de sequía y escasez, primando usos eficientes con beneficios ecosistémicos.

Respuesta:

La excepcionalidad hidrológica está regulada (art. 27 de la Ley 10/2001; art. 58 TRLA; art. 92 RPH) y desarrollada en los planes especiales de sequía (los últimos aprobados en junio de 2026), que recogen las circunstancias para declarar la sequía extraordinaria y activar medidas de gestión de la demanda, restricciones de usos, recursos alternativos y actuaciones de emergencia. En cuanto a la revisión de concesiones, el art. 65 TRLA la circunscribe a tres supuestos –modificación de los supuestos determinantes del otorgamiento, petición del concesionario por fuerza mayor, o adecuación a los planes–, por lo que no procede jurídicamente por el mero escenario de sequía; no obstante, los planes especiales de sequía incluyen las acciones preventivas y operativas para acomodar la gestión, y el

organismo de cuenca puede condicionar o limitar temporalmente el uso del dominio público para garantizar su explotación racional (art. 55 TRLA).

Alegación G12.

Propone sustituir el enfoque «defensivo e infraestructural» por restauración fluvial y soluciones basadas en la naturaleza, e incluir criterios vinculantes para evitar nuevos desarrollos incompatibles en zonas inundables.

Respuesta:

La caracterización del enfoque vigente como «defensivo e infraestructural» es un juicio de valor con el que disentimos y que no corresponde con la realidad. La planificación ya integra la protección frente a inundaciones, la mejora del estado y la restauración fluvial (DMA y Directiva de inundaciones), y los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI) fomentan expresamente las soluciones basadas en la naturaleza y las sinergias entre ambas planificaciones. La selección entre medidas estructurales, restauración fluvial o soluciones basadas en la naturaleza debe realizarse caso por caso, atendiendo a eficacia, viabilidad y adecuación territorial. La regulación de usos y desarrollos en zonas inundables ya está sujeta a la normativa de dominio público hidráulico y de gestión del riesgo, por lo que no procede establecer nuevas determinaciones generales en el EpTI.

Alegación G13.

Reclama incluir análisis sobre los impactos hídricos de la transición energética, criterios de vulnerabilidad hídrica, objetivos vinculantes de adaptación de las demandas, limitación o moratoria de nuevos usos en masas con déficit y escenarios de cambio climático actualizados para la asignación de recursos.

Respuesta:

La evaluación de nuevos usos, la asignación de recursos y el eventual establecimiento de limitaciones se realizan en el marco de los planes hidrológicos y de los procedimientos de gestión del dominio público hidráulico, atendiendo a las circunstancias de cada demarcación y a la mejor información disponible en cada ciclo. En la demarcación hidrográfica del Duero se aborda esta cuestión en la ficha de temas importantes DU-10. La consideración del cambio climático se apoya en los EACC, elaborados con estudios específicos del CEDEX, que actualizan los escenarios de disponibilidad para la asignación.

Alegación G14.

Solicita aplicar efectivamente el principio de recuperación de costes ambientales y del recurso (art. 9 DMA), evaluar la coherencia ambiental de subvenciones e inversiones públicas, reforzar la transparencia de la financiación y orientar los incentivos hacia la reducción de presiones y la restauración.

Respuesta:

El principio de recuperación de costes, incluidos los costes ambientales y del recurso (art. 9 DMA; art. 111 bis TRLA), está incorporado al ordenamiento y desarrollado en la planificación: los planes incluyen ya un análisis específico de recuperación de costes (financieros, ambientales y del recurso), de los

ingresos asociados a los servicios del agua y de los niveles de recuperación alcanzados. La revisión de la coherencia ambiental de subvenciones e inversiones y el diseño de incentivos económicos exceden, en gran medida, el ámbito competencial y normativo del plan, correspondiendo a instrumentos sectoriales, presupuestarios y regulatorios específicos.

Alegación G15.

Reclama reforzar el principio de prevención y no deterioro como eje central, con objetivos cuantificables de restauración ecológica, e incorporar mecanismos de evaluación y seguimiento de la eficacia de las medidas.

Respuesta:

Los principios de prevención y no deterioro son ya un eje de la planificación (art. 4 DMA), y su exigibilidad ha sido reforzada por la jurisprudencia europea (STJUE C-461/13, «Weser»). Los mecanismos de evaluación y seguimiento de la eficacia de las medidas son objeto del plan hidrológico, por lo que esta parte de la petición supera el alcance del EpTI (véase también 12-SEO-02). Los objetivos cuantificados de restauración provienen del Reglamento (UE) 2024/1991, que prevé un objetivo cuantificado para los ríos de flujo libre y obligaciones funcionales para las llanuras aluviales, y se articularán a través de sus instrumentos propios.

ALEGACIONES ESPECÍFICAS AL EPTI DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (4º CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 2028–2033)

Alegación 1.

1.- Admisión e incorporación al expediente. Que se tenga por presentado el presente escrito de alegaciones formulado por SEO/BirdLife al Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Duero correspondiente al cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033, y se acuerde su incorporación íntegra al expediente administrativo de revisión del citado instrumento de planificación.

Respuesta:

Se ha recibido y analizado el escrito de SEO/Birdlife presentado como alegación al EpTI del Duero. De acuerdo con lo que dispone el artículo 79.6 del RPH, finalizada la fase de consulta pública del EpTI se realizará un informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias que se hubiesen presentado, incorporando las que se consideren adecuadas al ETI en materia de gestión de las aguas; en ese informe se justificará el motivo de rechazo de las que no se incorporan, como se hace en las siguientes páginas respecto a las alegaciones de SEO/Birdlife.

Alegación 2.

2.- Incorporación y valoración del Anexo I. Que se tenga por incorporado al presente escrito el Anexo I. Tabla de correspondencia entre déficits identificados, fichas del EpTI afectadas, base jurídica y modificaciones solicitadas, como instrumento de síntesis y sistematización de las alegaciones formuladas, solicitando que sea valorado expresamente por ese Organismo de cuenca en la revisión del EpTI y en la elaboración del ETI definitivo, sin perjuicio del desarrollo argumental contenido en el cuerpo principal de este escrito.

Respuesta:

Más abajo se analizan los supuestos déficits encontrados en el EpTI por la alegante. Se recuerda que el escrito de alegaciones presentado forma parte del expediente de Plan Hidrológico del Duero.

Alegación 3.

3.- Revisión sustantiva del EpTI conforme a los objetivos ambientales exigibles. Que se revisen y refuercen los contenidos del EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Duero conforme a las alegaciones formuladas, incorporando de manera efectiva los principios de no deterioro, recuperación del buen estado de las masas de agua, resiliencia ecológica, restauración ecosistémica, adaptación al cambio climático, gestión de la demanda e integración vinculante de los objetivos de conservación de la biodiversidad.

Respuesta:

Todos los principios citados por la alegante se encuentran, en la medida que corresponde al EpTI que es un documento intermedio y preparatorio del plan hidrológico, contenidos en EpTI. Todas las Fichas incluyen un epígrafe titulado objetivos de la planificación que se pretende alcanzar. Según el artículo 40 del TRLA los objetivos de la planificación hidrológica son conseguir el buen estado y la adecuada

protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. Así, en todos los temas importantes aparecen los objetivos ambientales de las masas de agua, entre los que se encuentran alcanzar el buen estado y evitar el deterioro, los principios de resiliencia hídrica de acuerdo con la Estrategia europea de Resiliencia hídrica (mayo 2025). Además, todos los temas importantes se analizan en los escenarios de cambio climático que resultan del Estudio de adaptación al cambio climático que exige el artículo 4 bis del RPH, incluidos los temas importantes vinculados con la satisfacción de las demandas (temas DU-06, DU-07 y DU-08 y DU-10).

Alegación 4.

4.- Adaptación del ETI definitivo y del futuro Plan Hidrológico al marco jurídico aplicable. Que el ETI definitivo y el futuro Plan Hidrológico del cuarto ciclo adapten plenamente la planificación de la Demarcación Hidrográfica del Duero al marco jurídico derivado de la Directiva Marco del Agua, las Directivas Hábitats y Aves, el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Reglamento (UE) 2024/1991 sobre restauración de la naturaleza, el principio de precaución y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo relativa a los caudales ecológicos y a los objetivos ambientales.

Respuesta:

A nuestro juicio el EpTI se encuentra adaptado al marco jurídico vigente, tanto al que cita en la alegación, como al resto de normas que confluyen en la gestión del agua. Y lo mismo se hará con el plan hidrológico, como ya lo hicieron los planes hidrológicos de los ciclos anteriores. Y respecto al Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, una vez que España lo presente a la Comisión Europea, el Plan Hidrológico recogerá las medidas concretas que establezca.

Alegación 5.

5.- Configuración de la recuperación de la funcionalidad ecológica como eje vertebrador de la planificación

Que la recuperación de la funcionalidad ecológica del sistema fluvial del Duero y el cumplimiento efectivo de los objetivos ambientales pasen a constituir el eje vertebrador de la planificación hidrológica de la demarcación, orientando la asignación de recursos, la definición y cumplimiento de los caudales ecológicos, la priorización del programa de medidas, la restauración hidromorfológica, la recuperación de humedales y acuíferos asociados y la gestión de las presiones existentes.

Respuesta:

La normativa actual establece como objetivos de la planificación hidrológica son:

- Conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico (DPH) y de las aguas.
- Satisfacer las demandas de agua de los distintos usuarios.
- Equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente.

- Proteger la calidad del agua y economizar su empleo.

El cumplimiento de los objetivos ambientales es uno de los objetivos de la planificación hidrológica pero no es el único. Convertir lo ambiental en el eje vertebrador único supondría un incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, que exige una armonización con el desarrollo regional, y vulneraría la jerarquía de usos y el principio de racionalidad económica que permiten modular los objetivos ambientales cuando estos comprometen la viabilidad de la sociedad y sus sectores productivos.

Alegación 6.

6.- Integración operativa de biodiversidad, Red Natura 2000 y ecosistemas dependientes del agua

Que el futuro Plan Hidrológico incorpore una integración efectiva y operativa entre planificación hidrológica, restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, Red Natura 2000, humedales, ecosistemas dependientes del agua, adaptación climática y gobernanza ecológica de la cuenca, de modo que los objetivos de conservación de hábitats y especies dependientes del agua condicionen de forma real las decisiones de gestión, asignación, garantía, concesión y uso del recurso hídrico.

Respuesta:

Todos los aspectos citados forman parte de la planificación hidrológica y todos ellos están presentes en la redacción del EpTI, como documento instrumental para la redacción del plan hidrológico, y en el propio plan hidrológico que se redacte. La integración "efectiva" se consigue mediante la identificación de requerimientos específicos de los hábitats y especies de Red Natura 2000 y otros ecosistemas dependientes del agua que figuran en los planes básicos de gestión, y la identificación de las presiones sobre cada uno de estos espacios y especies. La integración "operativa" se conseguirá mediante el programa de medidas para alcanzar los objetivos de estas zonas. Todo ellos son contenidos específicos del plan hidrológico de acuerdo con el artículo 4 del RPH.

Alegación 7.

7.- Revisión de las fichas del EpTI conforme a la tabla de correspondencia

Que se revisen las fichas del EpTI afectadas por las alegaciones formuladas –en particular, las relativas a contaminación difusa, aguas subterráneas, restauración fluvial, gestión del riesgo de inundación, regadíos y demandas agrarias, caudales ecológicos, coordinación interadministrativa, espacios protegidos, cooperación internacional, transición energética, nuevos usos industriales, PFAS y contaminantes emergentes– incorporando las modificaciones concretas identificadas en las alegaciones y en el Anexo I.

Respuesta:

Todas las alegaciones que se citan en el Anexo I sobre contaminación difusa, aguas subterráneas, restauración fluvial, gestión del riesgo de inundación, regadíos y demandas agrarias, caudales ecológicos, coordinación interadministrativa, espacios protegidos, cooperación internacional, transición energética, nuevos usos industriales, PFAS y contaminantes emergentes, se analizan específicamente en este documento de respuestas en el que se valora la conveniencia de su inclusión en el ETI o los motivos de rechazo.

Alegación 8.

8.- Caudales ecológicos completos, adaptativos y biológicamente informados

Que los caudales ecológicos de la Demarcación Hidrográfica del Duero, incluidos los del tramo internacional, se definan y apliquen como caudales ecológicos completos, vinculantes, adaptativos y biológicamente informados, incorporando los requerimientos de conservación de las especies y hábitats dependientes del agua, las necesidades de la Red Natura 2000, los escenarios de cambio climático y la obligación de no deterioro.

Respuesta:

Los caudales ecológicos del Duero se definen en el Plan Hidrológico, en su Anejo 5 y también en la Normativa del Plan. No incluyen los del tramo internacional al ser regulados por el Convenio de Albufeira. Además de la componente del caudal mínimo para todas las masas fuera del tramo internacional, están definidas las componentes de caudal máximo para 12 masas de agua, caudal generador para 21 masas de agua y requerimientos hídricos en 14 masas lago.

Para su definición se ha tenido en cuenta la normativa vigente (Reglamento de Planificación Hidrológica e IPH) y se realiza un seguimiento adaptativo conforme al art 49 sexies 1 del RDPH como se pone de manifiesto en los últimos informes anuales de seguimiento del Plan Hidrológico.

https://www.chduero.es/web/guest/plan-hidrologico-2022

Alegación 9.

9.- Revisión del régimen de caudales ecológicos del tramo internacional y coordinación con Portugal

Que el ETI definitivo incorpore una revisión específica del régimen de caudales ecológicos del tramo internacional del Duero en coordinación con Portugal, evaluando el impacto acumulativo de embalses e infraestructuras sobre hábitats fluviales, conectividad ecológica, dinámica hidromorfológica, resiliencia climática y objetivos ambientales, y reforzando los mecanismos de cooperación transfronteriza.

Respuesta:

La revisión del régimen de caudales ecológicos en el tramo internacional solamente puede realizarse en el marco del Convenio de Albufeira, no en el Plan Hidrológico, y muchos menos en el EpTI. La coordinación con Portugal es permanente y se realiza en el marco de la CADC y de sus grupos de trabajo de planificación, sequía, inundaciones y energía. Se rechaza la alegación.

Alegación 10.

10.- Coordinación transfronteriza y actualización del Convenio de Albufeira

Que el ETI definitivo incorpore un tratamiento específico de la dimensión internacional del Duero y de la necesaria actualización y adaptación del marco de cooperación asociado al Convenio de Albufeira, de modo que la gestión compartida de caudales entre España y Portugal integre los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua, los caudales ecológicos completos, la conectividad

ecológica, la conservación de ecosistemas fluviales compartidos, la gestión coordinada de sequías y la adaptación al cambio climático.

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación anterior el EpTI no es el instrumento que pueda modificar el Convenio de Albufeira. La cooperación entre España y Portugal en materia de gestión de agua se pone de manifiesto en la Ficha DU-09. En ella se propone una mayor coordinación y cooperación entre las autoridades de ambos países en cuestiones como la planificación conjunta de las cuencas compartidas, la gestión de fenómenos extremos, o la convergencia de indicadores de sequía y escasez. Hay acuerdo por ambos países de que este trabajo conjunto en el seno de la CADC y sus grupos de trabajo (planificación, sequías, inundaciones y energía) es la manera práctica más adecuada a que se integren las exigencias de la DMA en la gestión de cuencas compartidas.

Alegación 11.

11.- Evaluación adecuada de afecciones a Red Natura 2000

Que cualquier decisión de planificación, asignación de recursos, concesión, modificación del régimen hidrológico, infraestructuras, intensificación de usos, nuevo regadío, nuevo uso industrial o energético, regla de explotación o medida susceptible de afectar de forma apreciable, individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, a espacios de la Red Natura 2000 dependientes del agua quede sometida a evaluación adecuada exigida por el artículo 6.3 de la Directiva Hábitats y por la Ley 42/2007.

Respuesta:

Cualquier decisión o elemento normativo que se incluya en el plan hidrológico de cuarto ciclo que pueda afectar a espacios de Red Natura 2000 y a los valores (hábitats y especies) relacionados con el medio hídrico que originaron su declaración debe someterse, dentro de la evaluación ambiental estratégica del plan, a consulta del órgano competente en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Y cada medida que se desarrolle en aplicación del Plan Hidrológico también debe verse validada por el órgano ambiental competente, como ocurre hasta la fecha: esto es algo que excede a la capacidad del EpTI y que éste no puede modificar.

Es la comunidad autónoma, que ostenta las competencias de gestión de estos espacios, quien dictaminará si los contenidos del estudio ambiental estratégico del Plan Hidrológico contempla adecuadamente todas las afecciones que el desarrollo de dicho plan pueda tener sobre los citados espacios/valores RN2000 y se contemplan las medidas oportunas para la evitación, mitigación o corrección de dichos impactos y su vigilancia durante el periodo de aplicación del Plan.

Este procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico del Duero 2027-2023, ya iniciado y en fase de elaboración del documento de alcance, da cumplimiento a los citados artículos 6.3 de la Directiva Hábitats y artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Alegación 12.

12.- Adecuación de demandas, regadíos y asignaciones a los límites ecológicos reales de la demarcación

Que el ETI definitivo y el futuro Plan Hidrológico incorporen de forma expresa la necesidad de adecuar progresivamente las demandas, dotaciones, garantías y asignaciones de recursos a la disponibilidad real bajo escenarios de cambio climático y a los límites ecológicos de la demarcación, evitando consolidar déficits estructurales, incrementos netos de presión o dependencias incompatibles con el cumplimiento de los objetivos ambientales.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, debe señalarse que el planteamiento expuesto se encuentra sustancialmente alineado con los principios y directrices que ya incorpora el Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) y que orientarán la elaboración del futuro Plan Hidrológico.

En efecto, la planificación hidrológica vigente y su proceso de revisión para el cuarto ciclo parten del principio de que la asignación y gestión de los recursos hídricos deben ajustarse a la disponibilidad real del recurso, teniendo en cuenta tanto la variabilidad hidrológica como los efectos previsibles del cambio climático, así como la necesidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos por la Directiva Marco del Agua y las restricciones previas al uso del agua, como son los caudales ecológicos y otras restricciones internacionales.

En este sentido, el EpTI ya incorpora de forma transversal la consideración del cambio climático como factor determinante en la planificación, estableciendo la necesidad de evaluar la coherencia entre demandas y disponibilidades, reforzar la seguridad hídrica y reducir vulnerabilidades mediante la gestión de la demanda, así como evitar situaciones que comprometan el logro de los objetivos ambientales. Asimismo, el análisis de alternativas en los distintos temas importantes contempla expresamente la adaptación de las demandas y de la gestión de los sistemas a escenarios de menor disponibilidad de recursos.

Por otra parte, la planificación hidrológica no tiene por objeto consolidar situaciones deficitarias, sino, precisamente, avanzar hacia un modelo de gestión que corrija progresivamente los desequilibrios existentes, evitando incrementos de presión que resulten incompatibles con la sostenibilidad del recurso. En este marco, las decisiones relativas a asignaciones, dotaciones y garantías se fundamentan en criterios de viabilidad del sistema, equilibrio entre usos y compatibilidad con los límites ambientales, incorporando herramientas de análisis que permiten evaluar el comportamiento de los sistemas de explotación en distintos escenarios.

No obstante, debe tenerse en cuenta que el EpTI, por su propia naturaleza, no constituye el instrumento en el que se formalizan de manera detallada las asignaciones ni las normas de explotación, sino que establece las directrices generales que serán desarrolladas en el Plan Hidrológico. Será en esta fase posterior donde se concretará, con el grado de detalle necesario, la adecuación de demandas, dotaciones y asignaciones a la disponibilidad del recurso y a los límites ecológicos de la demarcación.

En consecuencia, dado que el enfoque propuesto en la alegación ya está incorporado en el EpTI como principio rector de la planificación, no se considera necesario introducir una modificación expresa adicional, sin perjuicio de su desarrollo y concreción en la redacción del futuro Plan Hidrológico.

Alegación 13.

13.- Moratoria a nuevos regadíos y nuevas demandas consuntivas en masas en mal estado o en riesgo

Que se establezca una moratoria a nuevos regadíos y nuevas demandas consuntivas en masas de agua que no alcancen el buen estado ecológico, presenten riesgo de incumplimiento de objetivos ambientales, tendencia cuantitativa decreciente o riesgo climático elevado, salvo que se acredite de forma rigurosa, previa y verificable su compatibilidad con los objetivos ambientales, el principio de no deterioro, los caudales ecológicos y los requerimientos de conservación de hábitats y especies dependientes del agua.

Respuesta:

Los nuevos regadíos, como cualquier otro nuevo uso del agua, requieren para su desarrollo ello su correspondiente concesión de aguas. En la tramitación concesional se valora su compatibilidad con la planificación hidrológica, objetivos ambientales y satisfacción de las demandas. Cuando un nuevo regadío, como cualquier otro uso, supone presiones adicionales sobre las masas de agua que impiden el logro de sus objetivos ambientales o el deterioro de la misma, la concesión es denegada. Es algo que ocurre con cierta frecuencia en la gestión ordinaria de la CHD, que proyectos para nuevos usos sobre masas de agua que no alcanzan el buen estado, o que suponen un deterioro, o sobre masas que presenten riesgo de incumplimiento de objetivos ambientales o con tendencia cuantitativa decreciente, o que pongan en riesgo el cumplimiento de caudales ecológico y los requerimientos de conservación de hábitats y especies dependientes del agua, sean desfavorables. Cuando el EpTI plantean en los temas importantes DU-02, DU-06, DU-08 o DU-10 nuevos usos del agua concretos, lo hace porque los requisitos señalados más arriba se verifican, a priori y en esta fase de planificación que no deja de ser una fase de pequeña escala. Posteriormente esas grandes líneas planificadoras deben sustanciarse en proyectos concretos que deben ser evaluados ambiental y concesionalmente a una escala mucho mayor, de proyecto. Todo ello ofrece suficiente garantía para asegurar las cautelas que solicita la alegante.

Alegación 14.

14.- Restauración hidrogeológica de humedales y conexión acuífero-humedal

Que el ETI definitivo y el futuro Programa de Medidas incorporen un plan específico de restauración hidrogeológica dirigido a recuperar la conexión acuífero-humedal en los sistemas lagunares esteparios de la demarcación, con objetivos cuantitativos de niveles piezométricos mínimos estacionales, eliminación o reducción de drenajes, limitación de extracciones en perímetros de protección de humedales Ramsar y ZEPA dependientes de acuíferos y seguimiento ecológico verificable.

Respuesta:

El Plan Hidrológico integra los objetivos de conservación definidos por la autoridad ambiental (comunidad autónoma), pero no puede sustituirla ni imponer de forma unilateral planes de restauración detallados que excedan la gestión del recurso hídrico. En humedales bajo alguna figura de protección ambiental, es la comunidad autónoma la que debe actuar sobre las posibles redes de drenaje o hacer el seguimiento de su estado de conservación. La planificación aborda la recuperación

de los ecosistemas de forma indirecta al buscar el buen estado de las masas de agua (superficiales y subterráneas), lo cual constituye una garantía para la salud de los espacios protegidos vinculados.

En este sentido, el plan incorpora un gran número de medidas para la recuperación de las masas de agua, cuya recuperación tendrá efectos muy positivos en los humedales que dependen de ellas. Sin abundar en ellas, cabe mencionar las medidas de ajuste a dotaciones comarcales, la zonificación de acuíferos, sustituciones de bombeos, constitución de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas, etc.

Alegación 15.

15.- Programa de medidas orientado a la restauración de procesos ecológicos e hidromorfológicos

Que el futuro Programa de Medidas priorice actuaciones orientadas a la restauración de procesos hidrológicos e hidromorfológicos naturales, la recuperación de la conectividad longitudinal, lateral y vertical, la restauración de riberas, humedales, lagunas, llanuras de inundación y refugios térmicos fluviales, la mejora de la retención natural del agua y el aumento de la resiliencia de los ecosistemas acuáticos frente al cambio climático.

Respuesta:

El programa de medidas recoge un importante conjunto de medidas orientadas a la mejora hidromorfológica de las masas de agua, pero cabe recordar que los objetivos de la planificación hidrológica buscan equilibrar usos del agua y protección ambiental dentro de un mismo marco normativo. Su finalidad central es alcanzar el buen estado de las masas de agua, garantizar la satisfacción sostenible de las demandas, prevenir riesgos como inundaciones y sequías, proteger los ecosistemas acuáticos, asegurar la calidad del agua, y promover la eficiencia en el uso del recurso. También integran la recuperación de costes, la participación pública y la coordinación entre administraciones. Ninguno de estos objetivos prevalece sobre los demás porque la planificación se basa en un equilibrio obligatorio, donde todos deben cumplirse simultáneamente: priorizar uno implicaría comprometer el conjunto. La Directiva Marco del Agua exige precisamente esa integración, de modo que la gestión hidrológica funcione como un sistema en el que cada objetivo depende de los otros.

Alegación 16.

16.- Soluciones basadas en la naturaleza y gestión del riesgo de inundación

Que las soluciones basadas en la naturaleza, la restauración de llanuras de inundación, la recuperación de la funcionalidad hidromorfológica y la autorrestauración fluvial sean priorizadas frente a enfoques predominantemente infraestructurales o defensivos en materia de gestión del riesgo de inundación, adaptación climática, reducción de vulnerabilidad hidrológica y recuperación ecológica de la demarcación.

Respuesta:

Así se está haciendo en el programa de medidas del plan hidrológico para el caso del Duero, y así se planteará en la próxima revisión.

Alegación 17.

17.- Contaminación difusa, nitratos y fosfatos

Que el ETI definitivo incorpore objetivos cuantificados, indicadores verificables, calendarios ejecutables y evaluación periódica de eficacia por subcuenca para las medidas de reducción de contaminación difusa, especialmente en relación con nitratos y fosfatos asociados a la intensificación agraria, garantizando su coherencia con los objetivos de buen estado de las masas de agua, la protección de humedales y la conservación de ecosistemas dependientes del agua.

Respuesta:

En la alegación se sugiere la incorporación de objetivos cuantificados, indicadores verificables, calendarios ejecutables, a este respecto decir que para poder valora la evolución de la situación, desde hace años el Organismo de Cuenca, a través del Ministerio, cuenta con un programa de simulación (PATRICAL), modelo de simulación general del funcionamiento de la cuenca que permite considerar conjuntamente los distintos términos del balance hidráulico, y relacionarlo con los datos aportados por las distintas redes de control del estado químico y la evolución piezométrica, se contemplan distintos escenarios de abonado, con reducción de % , y tiempo de duración del escenario, pudiendo predecir la evolución de la situación a medio- largo plazo, y poder establecer las medidas correctoras pertinentes. Con el objetivo de conseguir la reducción de excedentes de sustancias nitrogenadas en las aguas, y alcanzar el buen estado de las mismas.

El EpTI incorpora estos objetivos al señalar que se pretende alcanzar el buen estado de las masas de agua. Todas las medidas que se proponen en las distintas alternativas se dirigen a reducir la presión de la contaminación difusa sobre las masas de agua. Así en la alternativa 1 de la Ficha DU-01 se indica que se propone la máxima reducción del excedente de nitrógeno con el fin de cumplir los objetivos ambientales para las masas de agua superficial y subterránea en 2033, salvo los casos en los que por la inercia de las masas de agua subterránea sean necesarios plazos mayores.

Esta alternativa supone la máxima reducción posible de los excedentes de nitrógeno (no de la aplicación) compatible con unas producciones agrarias óptimas. El modelo Patrical simula la senda de recuperación del estado de las masas de agua bajo diversas hipótesis de acción en la reducción de excedentes de nutrientes y estableciendo una relación entre la presión (excedente de nitrógeno) y el driver (la aportación de fertilizantes nitrogenados). En este análisis se identifica que, por ejemplo, una reducción de cerca del 35% de la fertilización implicaría una reducción del 50% de los excedentes y una reducción del 56% de la aplicación de fertilizantes una reducción del 80% de los excedentes de nitrógeno.

Como resultado de este análisis la normativa del plan hidrológico vigente incluye en su apéndice 14.2 una tabla con los valores máximos de excedentes de nitrógeno que pueden recibir las masas de agua afectadas por contaminación difusa procedente de las actividades agrarias para alcanzar los objetivos ambientales previstos en este plan hidrológico. Esta información podría servir de ayuda a la Administración autonómica competente, en esta alternativa, para reforzar los planes de actuación de manera que se puedan limitar la aplicación de nutrientes de manera zonal de forma que se asegure que los excedentes sean inferiores a los contemplados en el citado apéndice 14.2. Esto podría implementarse de diversas formas:

- Mediante la reducción de las cantidades máximas de N por hectárea en los planes de actuación de las zonas vulnerables;
- Mediante la reducción de las cantidades a aplicar de nutrientes fuera de las zonas vulnerables (de acuerdo con los criterios de Patrical) a través de normas de condicionalidad vinculadas a aumentos de las ayudas PAC.
- Mediante la aplicación de tributos a gravando el exceso de N adquirido en el mercado sobre la dosis contemplada en los planes de actuación.

Para ello se propone añadir medidas compensatorias para los usuarios que voluntariamente reduzcan la aplicación de sustancias nutrientes (nitrogenadas y fosforadas) y fitosanitarios o implanten barreras de vegetación para reducir excedentes.

Para reducir la entrada de nutrientes a las masas de agua superficiales, se plantea la creación de bandas de protección de las masas de agua de 10 m, para el caso de los cauces con consideración de masas de agua con impacto comprobado, y de 5 m, para el caso de las masas con impacto probable, fuera de la zona de dominio público y ocupadas por vegetación autóctona, que funcione como sumidero de nutrientes. Se estima que la reducción de entrada de nutrientes a la masa está entre el 25% y el 75%, dependiendo de la anchura de la banda, que puede llegar hasta los 20 m. En el PHD vigente se ha estimado que la banda de 10 m podría reducir en un 75% los excedentes que recibe la masas de agua en su intercuenca y en un 50% para la banda de 5 m. Estas bandas de protección también deberían ser objeto de un mantenimiento para evitar que se convirtieran en reservorios de plagas (por ejemplo, la del topillo campesino en Castilla y León) pero compatibles con el buen estado de las masas de agua y para favorecer la presencia de sus depredadores naturales.

La alternativa 2 se conforma con la que se ha llamado agricultura de nueva generación, que supone un salto tecnológico y de transferencia científica en las actividades que originan la presión con las siguientes pautas: mayor uso de los biofertilizantes y bioestimulantes como sustitutos de la fertilización clásica o como complemento nutricional para los cultivos y reducir el uso de productos químicos incorporando a las técnicas culturales las siguientes acciones: gestión Integrada de plagas (que combina estrategias biológicas, culturales, físicas y químicas para controlar plagas de manera sostenible, minimizando el uso de pesticidas químicos), técnicas de biocontrol (mediante el uso de depredadores, parasitoides o patógenos naturales para controlar plagas y enfermedades, sin recurrir a químicos sintéticos), y uso de plaguicidas biológicos. Todo ello se ofrece para que las autoridades competentes puedan diseñar las herramientas para que esto sea efectivo.

Las alternativas 3 y 4 se centran en la eliminación de nutrientes en la depuración de aguas residuales en especial de pequeños municipios y en la normalización de una fuente de suministro de nitrógeno como son los purines y estiércoles en forma de digestato que sustituya a los abonos inorgánicos con una mejor gestión que la actual.

Alegación 18.

18.- PFAS, contaminantes emergentes y tratamiento terciario

Que el ETI definitivo y el futuro Plan Hidrológico incorporen un programa sistemático de vigilancia de PFAS y otros contaminantes emergentes, con cronograma vinculante de monitorización y actualización

de protocolos, así como la exigencia de tratamiento terciario en EDARs sensibles vinculadas a masas con presencia de contaminantes emergentes y conexión a espacios Natura 2000.

Respuesta:

El esquema de temas importantes, elaborado en la segunda fase de la planificación hidrológica de cuarto ciclo, contiene la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. No es objeto de este esquema de temas importantes la incorporación de programas de vigilancia de contaminantes específicos.

Con respecto al futuro Plan Hidrológico, se documentará la evaluación del estado de las masas de agua y los programas de seguimiento con sus redes de control asociadas.

El problema de contaminación de las aguas y suelos con PFAS y contaminantes emergentes está adquiriendo especial relevancia y viene recogido de forma explícita en las estrategias europeas Chemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environment y la European Water Resilience Strategy.

La reciente modificación de la Directiva Marco del agua mediante la *Directiva (UE) 2026/805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2026, por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro y la Directiva 2008/105/CE relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas,* añade un subgrupo de PFAS específicas a la lista de sustancias prioritarias.

La Confederación Hidrográfica del Duero tiene operativas tres redes específicas para la vigilancia de las aguas superficiales en espacios RN2000, en las que se miden las concentraciones de PFAS:

- 6600027 - Control de las zonas protegidas designadas para la protección de hábitats o especies. Embalses. Con 40 puntos de muestreo
- 6600026 - Control de las zonas protegidas designadas para la protección de hábitats o especies. Lagos. Con 8 puntos de muestreo
- 6600028 - Control de las zonas protegidas designadas para la protección de hábitats o especies. Ríos. Con 196 puntos de muestreo

Estos programas de seguimiento superficial pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://mirame.chduero.es/chduero/public/monitoringSurfaceWater/monitoringProgram/search

Los programas de seguimiento actualizan sus protocolos y los umbrales de las sustancias a controlar para cumplir las modificaciones de la normativa vigente en relación con la calidad de las aguas. En el momento presente, se está a la espera de la transposición de las modificaciones de la Directiva citada anteriormente a la legislación española, con objeto de adecuar las redes de control a las nuevas exigencias de umbrales y sustancias a identificar.

En cuanto a la exigencia de tratamiento terciario en EDARs sensibles vinculadas a masas con presencia de contaminantes emergentes y conexión a espacios Natura 2000 no hay ninguna legislación que establezca esto.

La norma más exigente es la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas – Directiva TARU (2024/3019), que todavía no se ha transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico. En la Directiva se establece:

- Artículo 7: Las aglomeraciones urbanas de un mínimo de 10.000 h-e que viertan en zonas sensibles a la eutrofización, o en sus cuencas de captación, deben aplicar un tratamiento terciario para reducir los niveles de nitrógeno y fósforo (implementación progresiva hasta alcanzar el 100% el 31/12/2045).
- Artículo 8: Para las aglomeraciones de al menos 10.000 h-e que viertan en zonas sensibles a microcontaminantes (donde supongan un riesgo para el medio ambiente o la salud), se exige un tratamiento cuaternario. En los criterios para identificar zonas sensibles a microcontaminantes se incluyen las zonas red Natura 2000 sobre la base de una evaluación de riesgos.

La propuesta del alegante no parece muy alejada del espíritu y objetivos de la directiva. Las limitaciones y los plazos que se incluyan en la norma de transposición serán tenidas en cuenta, considerando las limitaciones cuando haya presencia de contaminantes emergentes y cuando la evaluación de riesgos del espacio protegido RN2000 lo considere necesario.

Alegación 19.

19.- Nuevos usos industriales, centros de datos, hidrógeno verde y transición energética

Que los nuevos usos industriales o energéticos de alta demanda hídrica, incluidos centros de datos, hidrógeno verde y otros vinculados a la transición energética, queden sometidos a criterios estrictos de evaluación ambiental previa, exclusión en masas en estado menos que bueno o con tendencia cuantitativa decreciente, compatibilidad con los objetivos ambientales y subordinación al principio de no deterioro, a los caudales ecológicos y a los objetivos de conservación de especies y especies dependientes del agua.

Respuesta:

Estamos de acuerdo con los criterios generales que el alegante expone para aplicar a los nuevos usos del agua derivados de la producción y almacenamiento de energías renovables y el funcionamiento de centros de tratamiento de datos.

Las consideraciones citadas en relación con la compatibilidad de los proyectos con los objetivos ambientales de las masas de agua y de conservación de especies y hábitats dependientes del medio hídrico, así como la aplicación del principio de no deterioro, son puestas de manifiesto, con las particularidades de cada caso, en los preceptivos informes que emite este Organismo en los procedimientos de evaluación ambiental que procedan.

El análisis sobre el impacto que la demanda de recurso del nuevo uso tiene sobre las masas de agua y su compatibilidad con el plan hidrológico vigente se realiza posteriormente, en la fase de tramitación

de la concesión que se requiera, en el que se valoran tanto el estado de las masas de agua de donde se extraerá el recurso, como sus índices de explotación, garantía de recurso para usos existentes, balance municipal, etc.

Alegación 20.

20.- Refuerzo de transparencia, seguimiento, digitalización y trazabilidad

Que el futuro Plan Hidrológico incorpore mecanismos públicos, accesibles, actualizados y verificables de seguimiento, evaluación, digitalización y transparencia que permitan comprobar de forma objetiva el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales, el régimen de caudales ecológicos, la evolución del estado de las masas de agua, la reducción efectiva de presiones y demandas, la aplicación de exenciones o objetivos menos rigurosos, la ejecución presupuestaria y la eficacia real de las medidas de restauración ecológica e hidromorfológica.

Respuesta:

La Confederación Hidrográfica del Duero ha creado el sistema de información Mírame-IDEDuero, que es la infraestructura de datos espaciales del organismo de cuenca. Integra y publica información geográfica oficial sobre el dominio público hidráulico, masas de agua, redes de control, planificación hidrológica y estado de los recursos. Permite visualizar cartografía, consultar datos en tiempo real y descargar capas interoperables. Facilita la transparencia en la gestión del agua, el apoyo a la toma de decisiones y la coordinación entre administraciones. Incluye visores temáticos y herramientas de análisis. Su objetivo es que cualquier usuario —técnico, administración o ciudadano— acceda a información fiable, actualizada y homogénea. Actúa como plataforma única para centralizar datos hidrológicos y ambientales de la cuenca del Duero, garantizando coherencia y trazabilidad. Favorece además la participación pública en los procesos de planificación y gestión del agua.

Esta herramienta se ofrece para informa sobre los temas incluidos en la observación, y está permanentemente abierta a recibir sugerencias a través de la dirección: https://www.chduero.es/web/guest/buzon-ciudadano

Por otra parte, los mecanismos de seguimiento, evaluación y transparencia están delimitados en el RPH. Concretamente en los artículos 87 y 88 del RPH se establecen los criterios, contenidos y acciones de transparencia que deben regir los informes de seguimiento del Plan Hidrológico. Anualmente el Organismo de cuenca debe recabar de las autoridades competentes información sobre el desarrollo del Plan Hidrológico. En concreto información sobre la evolución de los recursos hídricos naturales y disponibles y su calidad, la evolución de las demandas de agua, el grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos, el estado de las masas de agua superficial y subterránea y la aplicación de los programas de medidas y efectos sobre las masas de agua. Esa información se sintetiza en un informe que es puesto a disposición del Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica y, posteriormente publicado en la web del Organismo de cuenca (https://www.chduero.es/web/guest/plan-hidrologico-2022). Se considera que atender a estos preceptos normativos garantiza suficientemente la transparencia y la rendición de cuentas que se exige legalmente.

Alegación 21.

21.- Indicadores biológicos y seguimiento de aves acuáticas, esteparias y migratorias

Que el ETI definitivo y el futuro Plan Hidrológico incorporen programas de seguimiento de aves acuáticas invernantes, esteparias y migratorias como indicadores biológicos de resiliencia ecológica, estado de humedales, presión del regadío, conservación de hábitats dependientes del agua y adaptación climática, integrando sus resultados en la planificación hidrológica y en los planes de gestión de la Red Natura 2000.

Respuesta:

El Plan Hidrológico persigue el buen estado de las masas de agua con base en el seguimiento de indicadores perfectamente identificados y cuantificados en la normativa de aguas vigente.

Utilizar las poblaciones de aves acuáticas invernantes, esteparias y migratorias como indicador biológico en relación con el medio hídrico no encaja con las competencias de este Organismo, salvo que esas especies sean valores de espacios protegidos y su presencia haya sido determinante para su declaración, en en cuyo caso el sistema de indicadores biológicos y su seguimiento debería figurar en los Planes básicos de gestión y serían incorporados a la planificación hidrológica, pero solo en cuanto sean indicadores del estado de conservación de los humedales, y sus hábitats y especies dependientes del medio hídrico.

La conservación de los hábitats y especies relacionadas con el medio hídrico tiene su reflejo en el plan hidrológico vigente ya que los espacios Red Natura 2000 tienen también la consideración de zonas protegidas de la Directiva Marco del Agua y para ellas se establecen criterios y limitaciones a las actuaciones a realizar en ellos, con mayor exigencia en el caso de contar el espacio con hábitat o especies prioritarios en estado de conservación malo.

En todo caso, el seguimiento de las poblaciones de aves y la redacción de los planes de gestión de los espacios RN2000 es una competencia estrictamente autonómica.

Alegación 22.

22.- Gobernanza ecológica, coordinación interadministrativa y participación pública efectiva

Que el ETI definitivo incorpore un tratamiento específico de la gobernanza ecológica, la coordinación interadministrativa, la participación pública efectiva y la transparencia en la Demarcación Hidrográfica del Duero, garantizando la intervención temprana, equilibrada, accesible e inclusiva de organizaciones ambientales, entidades científicas, administraciones competentes, entidades de custodia del territorio, comunidades locales, usuarios tradicionales y actores territoriales vinculados a la conservación y gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos.

Respuesta:

No entendemos con certidumbre qué se entiende por “gobernanza ecológica”. La Ficha DU-09 aborda el tema importante de coordinación interadministrativa en tres aspectos: la ejecución de los programas de medidas para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica contenidos en el artículo 40 del TRLA, los objetivos específicos de los espacios Red Natura y la cooperación con Portugal

en los objetivos de la planificación de carácter transfronterizo. Se plantea ese tema importante porque es parte del éxito de la planificación hidrológica al tener el agua un carácter transversal sobre el que recaen numerosas competencias que recaen sobre una variedad de administraciones. Pero se considera que la gobernanza del agua, que incluye por su propia naturaleza lo que podría ser el concepto difuso "gobernanza ecológica", se atiende de manera adecuada y en sintonía con la normativa vigente, sin menoscabo de las lagunas y dificultades que se ponen de manifiesto en la Ficha DU-09.

La participación efectiva y la transparencia también están reguladas normativamente y consideramos que en la demarcación hidrográfica del Duero han sido suficientemente atendidas. Durante la fase del EpTI se han organizado ocho sesiones de participación pública, de las cuáles cinco han sido talleres de participación activa y una de participación transfronteriza, con un número de asistentes superior a trescientas personas. Desgraciadamente, pese a las invitaciones específicas y escasas excepciones, los sectores de organizaciones ambientales, entidades científicas, entidades de custodia del territorio, autoridades competentes en materia de biodiversidad, comunidades locales y actores territoriales vinculados a la conservación y gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos del ámbito de la demarcación hidrográfica apenas han participado, unas veces por falta de personas adecuadas y otras simplemente no han mostrado interés.

Alegación 23.

23.- Custodia del territorio y colaboración público-social

Que el futuro Plan Hidrológico y su Programa de Medidas incorporen la custodia del territorio como herramienta operativa de colaboración público-social para la restauración fluvial, la conservación de hábitats y especies dependientes del agua, la recuperación de humedales, la mejora de la conectividad ecológica, el seguimiento participativo, la implantación de soluciones basadas en la naturaleza, la educación ambiental y la ciencia ciudadana, incluyendo, en su caso, convenios plurianuales, proyectos piloto, financiación específica e indicadores verificables de resultados.

Respuesta:

El Plan Hidrológico actual ya incluye una medida dirigida a fomentar acciones de custodia del territorio, voluntariado y educación ambiental (código 6404835). A fecha actual el grado de ejecución de esta medida es del 50% de la inversión prevista. En estas medidas se fomenta la colaboración público-social para la restauración fluvial, la conservación de hábitats y especies dependientes del agua, la mejora de la conectividad ecológica y la educación ambiental y la ciencia ciudadana, normalmente a través de pliegos y contratos específicos que permitan desarrollar estas actividades sin coste para las entidades colaboradoras. Dado el éxito de estas actividades, la nueva planificación hidrológica continuará esta tarea.

Alegación 24.

24.- Cooperación técnica y seguimiento ecológico conjunto con Portugal

Que el ETI definitivo incorpore mecanismos estables de cooperación técnica hispano-portuguesa para la gestión adaptativa de sequías, la conectividad ecológica, la restauración fluvial, el seguimiento conjunto del estado ecológico de las masas de agua y ecosistemas asociados, la definición de

indicadores comunes de resiliencia climática y la protección de corredores fluviales compartidos entre España y Portugal.

Respuesta:

Los mecanismos de colaboración, coordinación y cooperación con las autoridades portuguesas están delimitados por el Convenio de Albufeira y, en el nivel ejecutivo, por la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio (CADC). Esta Comisión actúa en pleno, normalmente con una reunión ordinaria al año, y en grupos de trabajo. Actualmente hay constituidos cuatro grupos de trabajo: planificación, sequía, inundación y energía. Estos grupos se reúnen cada vez que la CADC les encarga trabajos específicos. Especialmente relevante es la colaboración en el grupo de trabajo de planificación, con reuniones mensuales, el de inundaciones, que en especial en los eventos de 2025 y 2026 han tenido una intensa actividad, y el de sequías que durante 2022 y 2024 celebró numerosas reuniones. En la Ficha DU-09 se proponen decisiones para consolidar y reforzar esta colaboración en dos ámbitos: resolver las divergencias para las masas fronterizas en materia de identificación de presiones, evaluación de estado, alineado de objetivos ambientales y medidas; y analizar la coherencia entre los indicadores de sequía y escasez de ambos países para integrar ambos diagnósticos en uno.

Alegación 25.

25.- Contestación motivada a las alegaciones formuladas

Que, de conformidad con las exigencias de motivación, transparencia y participación pública efectiva, se dé respuesta expresa, suficiente y motivada a las alegaciones formuladas por SEO/BirdLife, incluyendo las cuestiones sistematizadas en el Anexo I, indicando, en su caso, las razones técnicas, jurídicas o ambientales que justifiquen su aceptación, aceptación parcial o rechazo.

Respuesta:

Es lo que se trata de hacer en este documento, pese a ser el escrito de alegaciones un documento complejo, desordenado y con escasa concreción en las propuestas, fruto más bien de ideas generales que de un análisis específico de los temas importantes de la demarcación hidrográfica del Duero, que es lo que pide el artículo 79 del RPH a un EpTI.

Alegación 26.

26.- Reconocimiento de SEO/BirdLife como parte interesada

Que se considere a SEO/BirdLife parte interesada a efectos de información, participación, seguimiento y notificación durante el conjunto del proceso de revisión y aprobación del Esquema de Temas Importantes y del futuro Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Duero correspondiente al cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033.

Respuesta:

De acuerdo con el artículo 38.7 de la Normativa del Plan Hidrológico vigente, la condición de interesado en el proceso de planificación hidrológica se adquiere automáticamente por ser miembro de la Junta de Gobierno, del Comité de Autoridades Competentes o del Consejo del Agua de la Demarcación hidrográfica del Duero. Igualmente, adquieren la condición de interesado quienes sean identificados

con tal condición por la autoridad ambiental en el Documento de Alcance del proceso de evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico. La alegante no forma parte de la Junta de Gobierno, del Comité de Autoridades Competentes o del Consejo del Agua de la Demarcación hidrográfica del Duero, por lo que por esta vía no se puede considerar interesado. Por oficio de la Subdirección General de Evaluación Ambiental de fecha 8 de mayo de 2026, se consulta a diversas entidades sobre los aspectos a tener en cuenta para elaborar el Documento de alcance de evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico del Duero, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 21/2013. Entre las entidades consultadas se encuentra SEO/Birdlife. Si como consecuencia la autoridad ambiental identifica a SEO/Birdlife como interesado en el Documento de Alcance del proceso de evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico, así será considerado por la CHD.

ANEXO. Tabla de correspondencia entre déficits identificados, fichas EpTI afectadas, base jurídica y modificación solicitada

Anexo – 1

Déficit identificado: *Ausencia de un tratamiento específico del Convenio de Albufeira como cuestión estratégica del cuarto ciclo, pese a la necesidad de adaptar la gestión conjunta de caudales a escenarios de cambio climático.*

Ficha EpTI afectada: *Nueva ficha específica o refuerzo de DU-07 y DU-09.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; Convenio de Albufeira; obligaciones de cooperación transfronteriza; objetivos ambientales y de adaptación climática.*

Modificación solicitada: *Incorporar un Tema Importante específico sobre la revisión y actualización del Convenio de Albufeira, incluyendo gestión conjunta de caudales bajo escenarios de cambio climático, revisión del régimen de caudales ecológicos del tramo internacional del Duero y mecanismos de cooperación hispano-portuguesa reforzados. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 44)*

Respuesta:

EL EpTI no tiene potestad para decidir que deba modificarse el Convenio de Albufeira que, por otra parte, ya es un Convenio estratégico para la gestión del agua en las cuencas compartidas de España y Portugal y así se considera de manera ordinaria. Como se ha indicado más arriba, los mecanismos de colaboración, coordinación y cooperación con las autoridades portuguesas están delimitados por el propio Convenio y, en el nivel ejecutivo, por la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio (CADC). Esta Comisión actúa en pleno, normalmente con una reunión ordinaria al año, y en grupos de trabajo. Actualmente hay constituidos cuatro grupos de trabajo: planificación, sequía, inundación y energía. Estos grupos se reúnen cada vez que la CADC les encarga trabajos específicos. Especialmente relevante es la colaboración en el grupo de trabajo de planificación, con reuniones mensuales, el de inundaciones, que en especial en los eventos de 2025 y 2026 han tenido una intensa actividad, y el de sequías que durante 2022 y 2024 celebró numerosas reuniones.

En esta materia, la Ficha DU-09 propone decisiones para consolidar y reforzar esta colaboración en dos ámbitos: resolver las divergencias para las masas fronterizas en materia de identificación de presiones, evaluación de estado, alineado de objetivos ambientales y medidas; y analizar la coherencia entre los indicadores de sequía y escasez de ambos países para integrar ambos diagnósticos en uno. Evidentemente España, por un lado, y Portugal por otro, aspiran a modificar el Convenio cada uno en defensa de sus intereses y con respeto a la normativa ambiental vigente; pero una cosa es esa legítima aspiración, y otra que pueda consolidarse al estar las posturas, en algunos aspectos, alejadas. El trabajo de cooperación y colaboración entre ambas autoridades permite mejorar la gestión y el logro de los objetivos de la planificación hidrológica.

Anexo – 2

Déficit identificado: *Insuficiente carácter vinculante y transversal de los objetivos ambientales y de conservación de la biodiversidad en el conjunto de los Temas Importantes.*

Ficha EpTI afectada: *Transversal a todos los TIs, especialmente DU-02, DU-06, DU-07, DU-09 y DU-10.*

Base jurídica: *Artículo 4.1.c) de la Directiva Marco del Agua; artículo 92 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas.*

Modificación solicitada: *Reforzar el carácter vinculante y transversal de los objetivos ambientales y de conservación, garantizando que toda decisión sobre asignación, garantía o nuevos usos del agua quede subordinada al estado ecológico real de las masas y a los requerimientos ecológicos de espacios y especies dependientes del agua. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 46)*

Respuesta:

El Esquema de Temas Importantes (ETI) es un documento intermedio fundamental en el proceso de planificación hidrológica, diseñado para identificar y debatir los principales problemas de gestión del agua en una demarcación. Se han recogido los problemas básicos de la demarcación en aspectos tanto ambientales como satisfacción de demandas. En todo el conjunto de alternativas de cada uno de los temas, el logro de los objetivos ambientales está incluido, por lo que no se está de acuerdo con el escrito presentado.

Anexo – 3

Déficit identificado: *Los diagnósticos climáticos del EpTI y del EACC no se traducen suficientemente en criterios operativos de reducción de vulnerabilidad ni de adecuación de demandas a la disponibilidad futura.*

Ficha EpTI afectada: *DU-06, DU-07 y DU-10.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; artículo 92 bis TRLA; principio de precaución del artículo 191.2 TFUE; Estudio de Adaptación al Cambio Climático de la Demarcación Hidrográfica del Duero.*

Modificación solicitada: *Incorporar criterios operativos y vinculantes de reducción de vulnerabilidad, de adecuación de demandas a la disponibilidad futura, a incremento neto de presión en masas en mal estado o en riesgo y aplicación del principio de precaución en dotaciones y garantías. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 46)*

Respuesta:

Todo el Plan Hidrológico es vinculante. Y el Plan Hidrológico se construye a través de los requerimientos ambientales que establece la normativa española.

El Estudio de adaptación al cambio climático tiene como base el artículo 19 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo. Según el artículo 4 bis del RPH, en cada ciclo de planificación los organismos de cuenca deben elaborar un estudio específico sobre esta materia para su futura consideración en la revisión del plan hidrológico correspondiente. Es decir, el Estudio presentado para este ciclo de planificación hidrológica se incorporará a la fase de plan hidrológico, concretado fundamentalmente en medidas, tanto

normativas como de actuación. No es por tanto la fase de EpTI cuando deben identificarse las medidas sino en fase de plan hidrológico, pero no los "criterios" a los que se refiere la alegante.

De hecho, el Estudio aportado por el Organismo de cuenca concreta en el epígrafe 7 de su Memoria los tipos de medidas de adaptación que se clasifican en cuatro tipos de medidas:

- Medidas relativas de adaptación a los menores recursos disponibles y escasez hídrica (RD), con acciones dirigidas a la mejora de la eficiencia y gestión de la demanda en regadío y usos urbanos, al ajuste de sistemas productivos agrarios al nuevo régimen climático, a la reutilización avanzada del agua depurada y a la gestión sostenible de acuíferos.
- Medidas relativas de adaptación a fenómenos extremos y gestión del riesgo (FE), con el fomento de soluciones basadas en la naturaleza para retención natural de agua y control de erosión, gestión forestal sensible al agua y al riesgo de incendios, servicios climáticos y gobernanza adaptativa para sequías e inundaciones, diseño urbano sensible al agua y al clima.
- Medidas dirigidas a la temperatura del agua y calidad (IT), con acciones de restauración de bosques de ribera y creación de refugios térmicos, gestión de la calidad del agua frente al calentamiento y menor dilución.
- Otros ejes de medidas dirigidas a seguimiento y gestión adaptativa de la biodiversidad acuática o movilización y gestión de sedimentos en embalses y cauces.

De todas ellas encontrará la alegante medidas en el Plan vigente y algo similar ocurrirá en el Plan de cuarto ciclo.

El EACC es posterior a la publicación de EpTI.

Anexo – 4

Déficit identificado: *Insuficiente integración operativa de la Red Natura 2000, hábitats y especies dependientes del agua en las fichas sectoriales.*

Ficha EpTI afectada: *DU-02, DU-06, DU-07, DU-09 y DU-10.*

Base jurídica: *Artículo 6 de la Directiva Hábitats; artículo 4.1.c) DMA; Ley 42/2007; artículo 46.2 de la Ley 42/2007.*

Modificación solicitada: *Incorporar evaluación específica de afecciones y límites ecológicos vinculantes para regadíos, aguas subterráneas, infraestructuras y nuevos usos del agua, de modo que los objetivos de conservación condicionen efectivamente las fichas sectoriales. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 47)*

Respuesta:

El Esquema de Temas Importantes (ETI) es un documento intermedio fundamental en el proceso de planificación hidrológica, diseñado para identificar y debatir los principales problemas de gestión del agua en una demarcación. Se han recogido los problemas básicos de la demarcación en aspectos ambientales. En todo el conjunto de alternativas de cada uno de los temas, el logro de los objetivos ambientales está incluido, por lo que no se está de acuerdo con el escrito presentado.

En el caso de las zonas protegidas de hábitats y especies, los objetivos específicos relacionados con su conservación son alcanzar un estado bueno para las masas de agua asociadas a estos espacios. Estos objetivos son muy amplios y abiertos para su consecución, sin que la administración competente en la gestión de estos espacios haya establecido valores más estrictos para los indicadores que permiten la evaluación del estado de las masas de agua.

Las actuaciones encaminadas a alcanzar el buen estado de conservación de estos espacios se han visto integradas en el plan hidrológico vigente, en su programa de medidas, recogiendo aquellas actuaciones en relación con el medio hídrico citadas en los correspondientes planes básicos de gestión. Dichas medidas no han sido asumidas por la administración autonómica, competente para su ejecución.

La planificación hidrológica incluirá los objetivos adicionales de conservación de estos espacios cuando administración autonómica los defina y consensuará con ella las medidas que deban realizarse.

Anexo – 5

Déficit identificado: *Ausencia o insuficiente desarrollo de Temas Importantes sobre resiliencia ecológica, adaptación climática ecosistémica, conectividad fluvial, gobernanza ecológica adaptativa y colaboración público-social.*

Ficha EpTI afectada: *DU-04, DU-05, DU-07, DU-09 y DU-10; posible creación de nuevos TIs.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; Reglamento (UE) 2024/1991 sobre restauración de la naturaleza; Estrategia de Biodiversidad de la UE; objetivos de adaptación climática.*

Modificación solicitada: *Reforzar o crear Temas Importantes específicos relativos a resiliencia ecológica, adaptación climática ecosistémica, conectividad fluvial, gobernanza ecológica adaptativa y colaboración público-social para la restauración y conservación de ecosistemas acuáticos. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 47)*

Respuesta:

Como novedad en este ciclo de planificación y para remarcar su importancia, el esquema de temas importantes del cuarto ciclo (2028-2033) ha dejado de tratar el cambio climático como un tema aislado para convertirlo en un condicionante transversal que afecta a todos los temas importantes.

La resiliencia hídrica también está presente en muchos de los temas. A modo de ejemplo, las siguientes fichas la abordan directamente:

- DU-03 (Contaminación urbana e industrial): Menciona que el uso de soluciones basadas en la naturaleza, como humedales construidos, es clave para reforzar la resiliencia en el control de la contaminación puntual.
- DU-04 (Alteraciones hidromorfológicas y restauración fluvial): Esta ficha cita directamente la comunicación de la Comisión Europea del 4/6/2025 sobre la Estrategia de resiliencia hídrica, cuyo fin es restaurar y proteger el ciclo del agua para un abastecimiento sostenible. También señala que la restauración de ríos y llanuras facilita la resiliencia ante eventos extremos, y se enfoca directamente en la conectividad fluvial.

- DU-05 (Gestión del riesgo de inundación): Se centra en el impulso de infraestructuras resilientes (como sistemas de drenaje urbano sostenible) adaptadas a nuevos caudales de diseño y escenarios climáticos.
- DU-08 (Uso urbano y nuevos requerimientos de la Directiva de aguas potables): Establece como una de las decisiones clave la aplicación de la Estrategia de resiliencia hídrica, con objetivos como reducir el uso y las fugas de agua en un 10% para 2030 y asegurar la adaptación al cambio climático.
- Análisis conjunto de DU-06 (Relevancia del regadío y sostenibilidad) y DU-07 (Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos - infraestructuras): El análisis conjunto de estas dos fichas ofrece una visión detallada de la resiliencia de la cuenca frente a los fenómenos extremos y los efectos del cambio climático sobre los usos del agua.

La ficha DU-09 se centra en la coordinación administrativa considerando la participación pública activa como un elemento esencial de la gobernanza.

Se precisaría concreción en la observación realizada, con propuestas concretas, para poder ajustar las fichas en la línea solicitada.

Anexo – 6

Déficit identificado: *Insuficiente prioridad de la restauración ecológica, conectividad fluvial, restauración hidrológico-forestal y soluciones basadas en la naturaleza como herramientas estructurales de adaptación climática.*

Ficha EpTI afectada: *DU-04, DU-05, DU-07 y DU-09.*

Base jurídica: *Reglamento (UE) 2024/1991 sobre restauración de la naturaleza; Directiva Marco del Agua; artículo 15 de la Ley 42/2007; Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático.*

Modificación solicitada: *Incorporar prioritariamente medidas de restauración ecológica, conectividad fluvial, restauración hidrológico-forestal y soluciones basadas en la naturaleza, con objetivos concretos de recuperación de humedales, riberas, llanuras de inundación, refugios térmicos y retención natural del agua. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 47)*

Respuesta:

La actual planificación del Duero triplicarla inversión destinada a objetivos ambientales (1.311,39 M€) frente a la atención de demandas. Se ha pasado de 584 a 1.100 medidas ambientales, incluyendo 526 actuaciones de mejora morfológica con un presupuesto de 166,6 M€. Este cambio de paradigma está alineado con el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad 2030, y prioriza la conectividad. Desde el organismo de cuenca se están realizando grandes esfuerzos para llevar a cabo este tipo de actuaciones a pesar de las dificultades existentes.

Anexo – 7

Déficit identificado: *La ficha DU-09 identifica zonas protegidas, pero no traduce sus requerimientos ecológicos en restricciones operativas ni integra los objetivos Natura 2000 como límites vinculantes en las fichas sectoriales.*

Ficha EpTI afectada: *DU-09 y fichas sectoriales DU-02, DU-06, DU-07 y DU-10.*

Base jurídica: *Artículo 6.2 y 6.3 de la Directiva Hábitats; Directiva Aves; Ley 42/2007; Directiva Marco del Agua.*

Modificación solicitada: *Convertir los objetivos de conservación de Red Natura 2000 y especies dependientes del agua en límites operativos para concesiones, infraestructuras, regadíos, aguas subterráneas y nuevos usos; exigir evaluación adecuada previa cuando proceda. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 47)*

Respuesta:

Los requerimientos específicos de las zonas protegidas deben ser fijados por la administración competente que es la comunidad autónoma a través de sus planes básicos de gestión. En el caso de la demarcación hidrográfica del Duero las zonas protegidas caen en el ámbito competencial de las comunidades autónomas de Castilla y león y Galicia.

Los Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León se aprobaron por ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre. Estos Planes establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000. Se estructuran en:

- Un documento de “Disposiciones generales”, común a los 177 Planes Básicos.
- Ciento setenta y siete documentos de Planes Básicos de gestión y conservación correspondientes a cada uno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.
- Tres "Anexos" comunes a los 177 planes básicos:
    - Anexo I. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000,
    - Anexo II. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Valores Red Natura 2000,
    - Anexo III. Medidas de conservación y gestión Red Natura 2000.

De todos los espacios y hábitats de estos Planes sólo aquellos vinculados al agua (76 en la demarcación hidrográfica del Duero) deben ser atendidos por la planificación hidrológica como establece el RPH, en la medida en que les afecte. Y las limitaciones en el ámbito del agua las establecen los citados planes.

Respecto a los planes básicos de la comunidad autónoma de Galicia no tenemos constancia de que estén aprobados.

El Plan Hidrológico incorpora a sus medidas los requerimientos que figuran en esos planes básicos, en lo que se refiere al agua. Además de establecer normas específicas para las actividades que puedan incidir en esos requerimientos, la actuación ordinaria de la administración del agua en materia de concesiones y autorizaciones incorpora como un requisito más la protección y no deterioro del estado de conservación de esos espacios y especies.

Anexo – 8

Déficit identificado: *Los caudales ecológicos no incorporan suficientemente criterios biológicos derivados de especies protegidas y hábitats dependientes del agua.*

Ficha EpTI afectada: *DU-07; conexión con DU-09.*

Base jurídica: *Artículo 4.1 de la Directiva Aves; artículos 6.2, 7 y 12 de la Directiva Hábitats; artículo 57 de la Ley 42/2007; Directiva Marco del Agua.*

Modificación solicitada: *Incorporar en DU-07 criterios biológicos basados en los requerimientos de conservación de especies del Anexo II de la Directiva Hábitats y especies prioritarias presentes en la cuenca, superando el enfoque exclusivamente estadístico-hidrológico. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 49)*

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación nº 8, los caudales ecológicos de la demarcación hidrográfica del Duero se definen en el Plan Hidrológico, en su Anejo 5 y también en la Normativa del Plan. No incluyen los del tramo internacional al ser regulados por el Convenio de Albufeira. Además de la componente del caudal mínimo para todas las masas fuera del tramo internacional, están definidas las componentes de caudal máximo para 12 masas de agua, caudal generador para 21 masas de agua y requerimientos hídricos en 14 masas lago.

Para su definición se ha tenido en cuenta la normativa vigente (Reglamento de Planificación Hidrológica e IPH) y se realiza un seguimiento adaptativo conforme al art 49 sexies 1 del RDPH como se pone de manifiesto en los últimos informes anuales de seguimiento del Plan Hidrológico.

https://www.chduero.es/web/guest/plan-hidrologico-2022

Los caudales ecológicos incorporan, hasta donde se conoce los requerimientos hídricos de los espacios protegidos vinculados al agua. Para ello se han revisado los planes de gestión de los espacios Red Natura 2000 que están aprobados y se han incorporado sus requerimientos específicos a los caudales ecológicos, encontrando en la mayoría de los casos que los requerimientos de estos hábitats y especies distintos a los peces, tienen requerimiento hídricos inferiores a los que determinan los caudales ecológicos.

Anexo – 9

Déficit identificado: *Insuficiente impulso de soluciones basadas en la naturaleza y eliminación de barreras para la autorrestauración fluvial.*

Ficha EpTI afectada: *DU-04 y DU-07.*

Base jurídica: *Artículo 15 de la Ley 42/2007; Reglamento (UE) 2024/1991; Directiva Marco del Agua.*

Modificación solicitada: *Impulsar soluciones basadas en la naturaleza, eliminación de barreras y autorrestauración fluvial como medidas prioritarias de recuperación de conectividad ecológica y mejora de caudales ecológicos. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 49)*

Respuesta:

El plan hidrológico es muy ambicioso en el desarrollo de medidas que supongan la mejora de las hidromorfología de la masa. Desde el organismo de cuenta también se están impulsando este tipo de medidas. Con lo anterior en mente, la ejecución de medidas de restauración fluvial en la demarcación del Duero se enfrenta a un conjunto complejo de obstáculos que abarcan desde limitaciones financieras hasta el rechazo social. Las principales dificultades son:

- Dificultades Económicas y Financieras. Se han inventariado tantas presiones hidromorfológicas con impacto comprobado que existen dificultades económicas para costear todas las actuaciones necesarias para frenar el deterioro de las masas de agua.
- Dificultades Administrativas y de Gestión. El Organismo de cuenca cuenta con medios humanos y técnicos limitados, lo que genera lentitud de respuesta y procesos administrativos muy rígidos. Existe una dificultad creciente para contratar servicios externos en plazos razonables y limitaciones para reforzar las plantillas
- Dificultades Sociales y Rechazo en el Territorio. Muchas actuaciones, como la eliminación de motas o azudes, se enfrentan al rechazo social por falta de entendimiento de sus beneficios o por miedo a un incremento del riesgo percibido.

En resumen, la restauración fluvial requiere superar no solo el reto de la inversión, sino también un cambio cultural que permita armonizar la protección de los ecosistemas con las actividades socioeconómicas del territorio.

Anexo – 10

Déficit identificado: *Insuficiente aplicación de herramientas de digitalización y control en tiempo real para el seguimiento de caudales circulantes.*

Ficha EpTI afectada: *DU-07.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; principios de seguimiento, control y transparencia en la planificación hidrológica; PERTE de digitalización.*

Modificación solicitada: *Aplicar los proyectos del PERTE de digitalización para mejorar el control y seguimiento en tiempo real de caudales circulantes, garantizando trazabilidad y verificación del cumplimiento de caudales ecológicos. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 49)*

Respuesta:

Los caudales circulantes se controlan mediante el Sistema Automático de Redes de Control Automática (SIRCA) de la demarcación del Duero. Esta red ha ido aumentando su número de puntos de control y actualmente cuenta con unas 180 estaciones.

No podemos valorar si, como opina el alegante, se hace una insuficiente aplicación de herramientas de digitalización y control en tiempo real para el seguimiento de caudales circulantes. La realidad es que se sigue mejorando en el control y el seguimiento de los caudales circulantes, siendo los proyectos del PERTE de digitalización una herramienta fundamental para ello. Teniendo en cuenta los sistemas de medición instalados por los usuarios más los que gestiona directamente la Confederación podemos decir que más del 75% de la demanda de agua de la cuenca está bajo control volumétrico directo.

Además, para las categorías 1ª, que supone muchas captaciones, pero relativamente poca demanda de agua, el PERTE de digitalización del ciclo urbano y del regadío ha supuesto un salto importante en el número de contadores instalados

Anexo – 11

Déficit identificado: *Falta de un plan de restauración hidrogeológica para recuperar la conexión acuífero-humedal en sistemas lagunares esteparios.*

Ficha EpTI afectada: *DU-02 y DU-04.*

Base jurídica: *Artículo 9.3 de la Ley 42/2007; artículo 92 bis TRLA; Directiva Marco del Agua.*

Modificación solicitada: *Elaborar un plan de restauración hidrogeológica con objetivos cuantitativos de niveles piezométricos mínimos estacionales para recuperar la conexión acuífero-humedal en sistemas lagunares esteparios. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 51)*

Respuesta:

El Esquema de Temas Importantes (ETI) es un documento intermedio fundamental en el proceso de planificación hidrológica, diseñado para identificar y debatir los principales problemas de gestión del agua en una demarcación. Se han recogido los problemas básicos de la demarcación en aspectos como la restauración de la hidromorfología fluvial.

Así como para las masas de agua río los indicadores hidromorfológicos de estado contemplan un Vértice 2: Conexión con aguas subterráneas, las masas de agua lago, que incluyen los más importantes sistemas lagunares esteparios, no tienen estos indicadores para evaluar su estado.

La planificación de la restauración hidrogeológica para recuperar la conexión acuífero-humedal cuando la administración competente en la gestión de humedales lo solicite.

Anexo – 12

Déficit identificado: *Drenajes y extracciones en perímetros de protección de humedales Ramsar y ZEPA dependientes de acuíferos comprometen la conservación de hábitats y especies.*

Ficha EpTI afectada: *DU-02 y DU-09.*

Base jurídica: *Artículo 6.2 de la Directiva Hábitats; artículo 50.1.a de la Ley 42/2007; Directiva Marco del Agua.*

Modificación solicitada: *Eliminar drenajes y limitar extracciones en perímetros de protección de humedales Ramsar y ZEPA dependientes de acuíferos. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 51)*

Respuesta:

Los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León incorporan también los humedales Ramsar de la cuenca, declarándolos como tal con figuras de protección ZEC y/o ZEPA. Sus Planes básicos de gestión establecen los objetivos y actuaciones necesarios para garantizar el mantenimiento o, en su

caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000.

Además, el Plan Estratégico de Humedales a 2030, aprobado en 2022 por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, establece como uno de sus objetivos restaurar parcialmente antes de 2030 alguno de los humedales más grandes desaparecidos, como el Mar de Campos (situado en la cuenca del Duero), estableciéndose como objetivo inicial para ello el desarrollo de un conjunto de trabajos que permitan iniciar la senda para su recuperación paulatina, a partir de actuaciones concretas que sean realistas, de elevada factibilidad ambiental, técnica y social y contando con todos los actores y administraciones implicados.

Este Plan Estratégico de Humedales a 2030 reconoce que no existen unos principios orientadores basados en el conocimiento científico de común aceptación que puedan orientar todos los proyectos de restauración de humedales, ni tampoco se dispone de un estándar de evolución y monitoreo del proceso de recuperación. A falta de metodologías específicas basadas en el conocimiento científico, la restauración ecológica de humedales en España debe regirse, por el momento, en recomendaciones generales (extractadas/modificadas de las integradas en la "Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas"), entre las cuales figura abordar y eliminar las causas de la degradación. En particular se cita expresamente que se deberán revertir los drenajes hechos para secar el humedal. Estas actuaciones directas quedan fuera del ámbito competencial de este Organismo, si bien el plan hidrológico establecerá limitaciones estrictas para nuevos drenajes que puedan afectar al DPH de estas zonas húmedas.

El Plan Hidrológico integra los objetivos de conservación definidos por la autoridad ambiental (comunidad autónoma), pero no puede sustituirla ni imponer de forma unilateral planes de restauración detallados que excedan la gestión del recurso hídrico. En humedales bajo alguna figura de protección ambiental, es la comunidad autónoma la que debe actuar sobre las posibles redes de drenaje. La planificación aborda la recuperación de los ecosistemas de forma indirecta al buscar el buen estado de las masas de agua (superficiales y subterráneas), lo cual constituye una garantía para la salud de los espacios protegidos vinculados.

El Plan Hidrológico incorpora a sus medidas los requerimientos que figuran en los planes básicos de gestión para el medio hídrico. Además de establecer normas específicas para las actividades que puedan incidir en esos requerimientos, la actuación ordinaria de la administración del agua en materia de concesiones y autorizaciones incorpora como un requisito más la protección y no deterioro del estado de conservación de esos espacios y especies.

En resumen, el plan incorpora un gran número de medidas para la recuperación de las masas de agua, cuya recuperación tendrá efectos muy positivos en los humedales que dependen de ellas. Sin abundar en ellas, cabe mencionar las medidas de ajuste a dotaciones comarcales, la zonificación de acuíferos, sustituciones de bombeos, constitución de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas, etc.

Anexo – 13

Déficit identificado: *Falta de indicadores cuantitativos de restauración, niveles hídricos, refugios climáticos y conectividad ecológica en espacios protegidos dependientes del agua.*

Ficha EpTI afectada: *DU-04, DU-07 y DU-09.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; Reglamento (UE) 2024/1991; obligaciones de seguimiento y evaluación ambiental.*

Modificación solicitada: *Definir indicadores cuantitativos de hectáreas restauradas, niveles hídricos estacionales, evolución de refugios climáticos y conectividad ecológica, incorporando protocolos vinculantes de restauración post-incendio y seguimiento adaptativo. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 51)*

Respuesta:

Los requerimientos específicos de las zonas protegidas deben ser fijados por la administración competente que es la comunidad autónoma a través de sus planes básicos de gestión. Los Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000.

De todos los espacios y hábitats de estos Planes sólo aquellos vinculados al agua (76 en la demarcación hidrográfica del Duero) deben ser atendidos por la planificación hidrológica como establece el RPH, en la medida en que les afecte. Y las limitaciones en el ámbito de la valoración del estado de las masas de agua asociada agua las establecen los citados planes.

Respecto a los planes básicos de la comunidad autónoma de Galicia no tenemos constancia de que estén aprobados.

El Plan Hidrológico incorpora a sus medidas los requerimientos que figuran en esos planes básicos, en lo que se refiere al agua. Si embargo, la administración competente no ha establecido los indicadores cuantitativos a los que se refiere el alegante, indicando la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, en su alegación al DU-09. Coordinación interadministrativa en la implementación del programa de medidas y fijación de objetivos específicos en zonas protegidas, lo siguiente:

> *Durante la aplicación del PH vigente, en el ámbito de los objetivos específicos de los espacios protegidos se ha mantenido la comunicación con las autoridades competentes, sin que aún se haya podido avanzar en esta determinación, habiendo un acuerdo tácito en el que el buen estado de las masas de agua supone un buen estado de los ecosistemas. Bajo un escenario de cambio climático, es esperable que se incremente la vulnerabilidad de especies y hábitat, lo que hace más urgente una adecuada definición por los órganos competentes de los requisitos de conservación y una alineación con esos objetivos de todas las planificaciones, incluida la del agua…*
>
> *En el caso de los planes básicos de gestión de las ZEC fluviales de Castilla y León los objetivos relacionados con su conservación son claros en cuanto a que su objetivo principal es mantener o alcanzar un estado de conservación favorable, con sistemas fluviales naturales y autosostenibles…*
>
> *La planificación hidrológica deberá incluir los objetivos de conservación de estos espacios, consensuando las medidas que deban realizarse con la administración autonómica…*

La definición y cuantificación de estos indicadores no es objeto ahora del Esquema de Temas Importantes y se encuentra en estudio para posteriores fases de la planificación hidrológica. Sin embargo, este Organismo está comprometido en continuar con estos trabajos, en coordinación con la autoridad competente en la gestión de los espacios protegidos, con el objetivo de incluir objetivos ambientales específicos a las masas de agua relacionadas con éstos, para su entrada en vigor con el Plan Hidrológico 2027-2033.

Anexo – 14

Déficit identificado: *Insuficiente seguimiento de aves acuáticas invernantes, esteparias y migratorias como indicadores biológicos de resiliencia ecológica y adaptación climática.*

Ficha EpTI afectada: *DU-07 y DU-09.*

Base jurídica: *Directiva Aves; Directiva Hábitats; Ley 42/2007; Directiva Marco del Agua.*

Modificación solicitada: *Establecer programas de seguimiento de aves acuáticas invernantes, esteparias y migratorias como indicadores biológicos, e incorporar medidas específicas en la planificación hidrológica y en los planes de gestión de Red Natura 2000. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 52)*

Respuesta:

El Plan Hidrológico persigue el buen estado de las masas de agua con base en el seguimiento de indicadores perfectamente identificados y cuantificados en la normativa de aguas vigente.

Utilizar las poblaciones de aves acuáticas invernantes, esteparias y migratorias como indicador biológico en relación con el medio hídrico no encaja con las competencias de este Organismo, salvo que esas especies sean parte de espacios protegidos en cuyo caso el sistema de indicadores debería figurar en los Planes básicos de gestión y serían incorporados a la planificación hidrológica pero solo en cuanto sean indicadores del estado de conservación de los espacios y especies.

La conservación de los hábitats y especies relacionadas con el medio hídrico tiene su reflejo en el plan hidrológico vigente ya que los espacios Red Natura 2000 tienen también la consideración de zonas protegidas de la Directiva Marco del Agua y para ellas se establecen criterios y limitaciones a las actuaciones a realizar en ellos, con mayor exigencia en el caso de contar el espacio con hábitat o especies prioritarios en estado de conservación malo.

En todo caso, el establecimiento de programas para el seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas es una competencia estrictamente autonómica. Las medidas que establecerá el nuevo plan hidrológico para la conservación de estas especies se extraerán de las contempladas en los planes de gestión de los valores RN2000.

Anexo – 15

Déficit identificado: *Falta de transparencia presupuestaria y acreditación pública de ejecución de medidas de restauración y adaptación climática.*

Ficha EpTI afectada: *DU-04 y DU-09.*

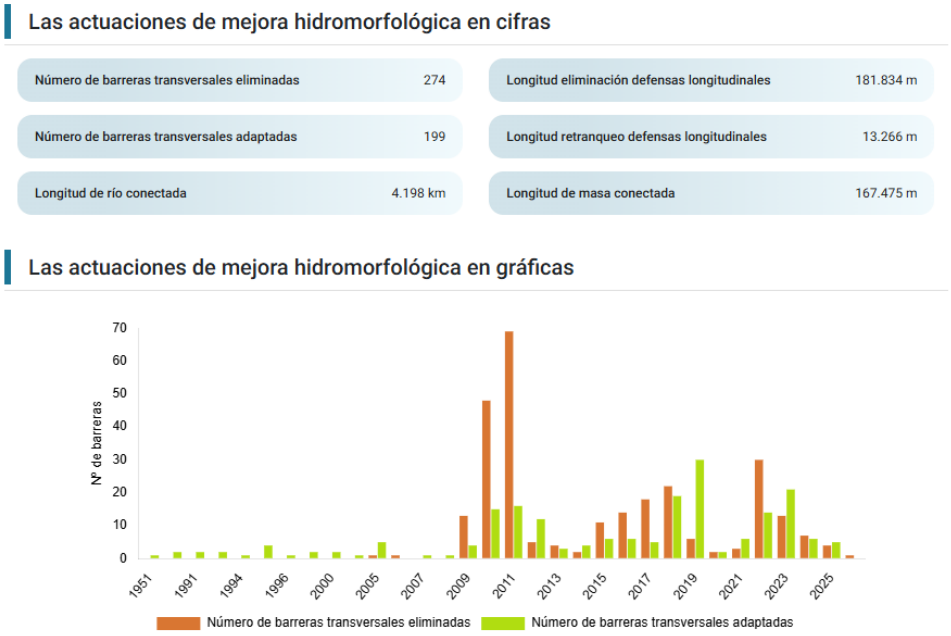
Base jurídica: *Principios de transparencia, buena administración y participación pública; Directiva Marco del Agua.*

Modificación solicitada: *Aumentar la transparencia presupuestaria de las medidas de restauración y adaptación climática, acreditando públicamente su ejecución efectiva y el grado de cumplimiento de objetivos ambientales. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 52)*

Respuesta:

Se adjunta enlace al sistema de información Mírame-IDEDuero, donde se detallan las actuaciones de mejora hidromorfológica, los elementos naturales e infraestructuras intervenidas, así como su presupuesto. Esta información es de acceso a todos los ciudadanos.

https://mirame.chduero.es/chduero/public/measures/actuations/data



Anexo – 16

Déficit identificado: *Las fichas DU-05, DU-06 y DU-07 (y DU-10) no incorporan suficientemente criterios vinculantes de adaptación climática, reducción de demandas y reducción efectiva de presiones.*

Base jurídica: *Artículo 191.2 TFUE; artículo 92 bis TRLA; Directiva Marco del Agua; EACC del Duero.*

Modificación solicitada: *Incorporar criterios operativos derivados del EACC; aplicar principio de precaución en dotaciones y garantías; establecer mecanismos de adecuación progresiva de demandas a disponibilidad futura; evitar incrementos netos de presión en masas en mal estado o en riesgo. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 53)*

Respuesta:

Como se ha indicado más arriba, todo el Plan Hidrológico es vinculante. Y el Plan Hidrológico se construye a través de los requerimientos ambientales que establece la normativa española.

El Estudio de adaptación al cambio climático tiene como base el artículo 19 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo. Según el artículo 4 bis del RPH, en cada ciclo de planificación los organismos de cuenca deben elaborar un estudio específico sobre esta materia para su futura consideración en la revisión del plan hidrológico correspondiente. Es decir, el Estudio presentado para este ciclo de planificación hidrológica se incorporará a la fase de plan hidrológico, concretado fundamentalmente en medidas, tanto normativas como de actuación. No es por tanto la fase de EpTI cuando deben identificarse las medidas sino en fase de plan hidrológico, pero no los "criterios" a los que se refiere la alegante.

De hecho, el Estudio aportado por el Organismo de cuenca concreta en el epígrafe 7 de su Memoria los tipos de medidas de adaptación que se clasifican en cuatro tipos de medidas:

- Medidas relativas de adaptación a los menores recursos disponibles y escasez hídrica (RD), con acciones dirigidas a la mejora de la eficiencia y gestión de la demanda en regadío y usos urbanos, al ajuste de sistemas productivos agrarios al nuevo régimen climático, a la reutilización avanzada del agua depurada y a la gestión sostenible de acuíferos.
- Medidas relativas de adaptación a fenómenos extremos y gestión del riesgo (FE), con el fomento de soluciones basadas en la naturaleza para retención natural de agua y control de erosión, gestión forestal sensible al agua y al riesgo de incendios, servicios climáticos y gobernanza adaptativa para sequías e inundaciones, diseño urbano sensible al agua y al clima.
- Medidas dirigidas a la temperatura del agua y calidad (IT), con acciones de restauración de bosques de ribera y creación de refugios térmicos, gestión de la calidad del agua frente al calentamiento y menor dilución.
- Otros ejes de medidas dirigidas a seguimiento y gestión adaptativa de la biodiversidad acuática o movilización y gestión de sedimentos en embalses y cauces.

Además, las fichas DU-06 y DU-07 incorporan reducción de aportaciones por cambio climático en la mayor parte de las alternativas y además incluyen medidas de modernización para ser más eficientes en el uso del agua ante el descenso de disponibilidad en el futuro. En cuanto a la ficha DU-05, comentar que la gestión del riesgo de inundación se realiza de forma específica en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI).

Anexo – 17

Déficit identificado en las fichas DU-01 y DU-06: *Las medidas frente a contaminación difusa carecen de objetivos cuantificados por subcuenca, indicadores verificables y calendarios ejecutables.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; normativa sobre protección de aguas frente a contaminación por nitratos; principios de eficacia y seguimiento de medidas.*

Modificación solicitada: *Incorporar objetivos cuantificados, indicadores verificables y calendarios ejecutables para la reducción de nitratos y fosfatos asociados a la intensificación agraria, con evaluación periódica de eficacia por subcuenca. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 54)*

Respuesta:

En la respuesta a la alegación 17, se relaciona el marco normativo que obliga a controlar los efectos de las sustancias nitrogenadas sobre las aguas superficiales y subterráneas, especialmente en relación

con la contaminación difusa de origen agrario. Según esta normativa este Organismo de Cuenca está obligado a controlar y establecer un diagnóstico del estado químico de las aguas de su demarcación y fijar unos objetivos ambientales , para ello se dictan una serie de medidas, que es este caso ha de aplicar y controlar la Comunidad Autónoma, fundamentalmente mediante el cuaderno de campo agrario (o cuaderno de explotación agrícola), registro donde el agricultor anota las actuaciones realizadas en su explotación para garantizar la trazabilidad de los cultivos y el cumplimiento de la normativa agraria y medioambiental. Por lo que la mayor parte de lo que se solicita en la alegación, se debería plantear a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación nº 17 de este mismo escrito, el EpTI incorpora los objetivos que demanda la alegante y medidas concretas para alcanzarlos. Desgraciadamente no hay un modelo contrastado que permita identificar la respuesta de cada medida. Pero con el modelo general de la cuenca (Patrical) sí pueden identificarse sendas de recuperación del estado de las masas de agua bajo diversas hipótesis de acción en la reducción de excedentes de nutrientes y estableciendo una relación entre la presión (excedente de nitrógeno) y el driver (la aportación de fertilizantes nitrogenados). En este análisis se identifica que, por ejemplo, una reducción de cerca del 35% de la fertilización implicaría una reducción del 50% de los excedentes y una reducción del 56% de la aplicación de fertilizantes una reducción del 80% de los excedentes de nitrógeno.

Todas las medidas que se proponen en las distintas alternativas se dirigen a reducir la presión de la contaminación difusa sobre las masas de agua. Así en la alternativa 1 de la Ficha DU-01 se indica que se propone la máxima reducción del excedente de nitrógeno con el fin de cumplir los objetivos ambientales para las masas de agua superficial y subterránea en 2033, salvo los casos en los que por la inercia de las masas de agua subterránea sean necesarios plazos mayores.

Esta alternativa supone la máxima reducción posible de los excedentes de nitrógeno (no de la aplicación) compatible con unas producciones agrarias óptimas.

Como resultado de este análisis la normativa del plan hidrológico vigente incluye en su apéndice 14.2 una tabla con los valores máximos de excedentes de nitrógeno que pueden recibir las masas de agua afectadas por contaminación difusa procedente de las actividades agrarias para alcanzar los objetivos ambientales previstos en este plan hidrológico. Esta información podría servir de ayuda a la Administración autonómica competente, en esta alternativa, para reforzar los planes de actuación de manera que se puedan limitar la aplicación de nutrientes de manera zonal de forma que se asegure que los excedentes sean inferiores a los contemplados en el citado apéndice 14.2. Esto podría implementarse de diversas formas que se citan en la propia Ficha y que podrían demandar acciones compensatorias para los usuarios que voluntariamente reduzcan la aplicación de sustancias nutrientes (nitrogenadas y fosforadas) y fitosanitarios o implanten barreras de vegetación para reducir excedentes.

Para reducir la entrada de nutrientes a las masas de agua superficiales, se plantea la creación de bandas de protección de las masas de agua de 10 m, para el caso de los cauces con consideración de masas de agua con impacto comprobado, y de 5 m, para el caso de las masas con impacto probable, fuera de la zona de dominio público y ocupadas por vegetación autóctona, que funcione como sumidero de nutrientes. Se estima que la reducción de entrada de nutrientes a la masa está entre el 25% y el 75%, dependiendo de la anchura de la banda, que puede llegar hasta los 20 m. En el PHD vigente se ha estimado que la banda de 10 m podría reducir en un 75% los excedentes que recibe la masa de agua

en su intercuenca y en un 50% para la banda de 5 m. Estas bandas de protección también deberían ser objeto de un mantenimiento para evitar que se convirtieran en reservorios de plagas (por ejemplo, la del topillo campesino en Castilla y León) pero compatibles con el buen estado de las masas de agua y para favorecer la presencia de sus depredadores naturales.

La alternativa 2 se conforma con la que se ha llamado agricultura de nueva generación, que supone un salto tecnológico y de transferencia científica en las actividades que originan la presión con las siguientes pautas: mayor uso de los biofertilizantes y bioestimulantes como sustitutos de la fertilización clásica o como complemento nutricional para los cultivos y reducir el uso de productos químicos incorporando a las técnicas culturales las siguientes acciones: gestión Integrada de plagas (que combina estrategias biológicas, culturales, físicas y químicas para controlar plagas de manera sostenible, minimizando el uso de pesticidas químicos), técnicas de biocontrol (mediante el uso de depredadores, parasitoides o patógenos naturales para controlar plagas y enfermedades, sin recurrir a químicos sintéticos), y uso de plaguicidas biológicos. Todo ello se ofrece para que las autoridades competentes puedan diseñar las herramientas para que esto sea efectivo.

Las alternativas 3 y 4 se centran en la eliminación de nutrientes en la depuración de aguas residuales en especial de pequeños municipios y en la normalización de una fuente de suministro de nitrógeno como son los purines y estiércoles en forma de digestato que sustituya a los abonos inorgánicos con una mejor gestión que la actual.

A nuestro juicio el EpTI aporta medidas concretas que apuntan a las presiones por contaminación difusa. El resultado de estas medidas quedará patente en las redes oficiales de calidad de las aguas.

Anexo – 18

Déficit identificado en la Ficha DU-05: *La gestión del riesgo de inundación mantiene una excesiva dependencia de enfoques infraestructurales y defensivos.*

Base jurídica: *Reglamento (UE) 2024/1991; artículo 15 de la Ley 42/2007; Directiva Marco del Agua.*

Modificación solicitada: *Priorizar soluciones basadas en la naturaleza, restauración de llanuras de inundación y recuperación de funcionalidad hidromorfológica frente a nuevas infraestructuras defensivas. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 54)*

Respuesta:

La gestión del riesgo de inundación se realiza de forma específica en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI). Esta alegación debería plantearse en la información pública del PGRI, no en el ETI.

En el EpTI, la solución propuesta en la ficha DU-05 es la alternativa 2 es en la que se incrementa el grado de implantación de los PGRI antes de 2033, tanto para el cumplimiento de los objetivos ambientales como para la disminución de la vulnerabilidad de los elementos existentes en las zonas inundables. El ETI apuesta por acelerar el grado de implantación de los PGRI, pero no entra a valorar las medidas que incorpora el propio PGRI.

En la actualidad el Plan vigente ya incorpora medidas con soluciones basadas en la naturaleza, en especial las que tienen que ver con las correcciones hidromorfológicas, muy presentes en toda la planificación hidrológica del Duero.

Anexo – 19

Déficit identificado: *Riesgo de consolidación de nuevas presiones por nuevos regadíos y nuevas demandas consuntivas en masas que no alcanzan el buen estado o presentan riesgo climático elevado.*

Ficha EpTI afectada: *DU-06, DU-07 y DU-10.*

Base jurídica: *Principio de no deterioro; artículo 92 bis TRLA; Directiva Marco del Agua; principio de precaución.*

Modificación solicitada: *Establecer una moratoria a nuevos regadíos y nuevas demandas consuntivas en masas que no alcancen el buen estado ecológico o presenten riesgo climático elevado, salvo acreditación rigurosa de compatibilidad con los objetivos ambientales y el principio de no deterioro. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 54)*

Respuesta:

En relación con la propuesta de establecer una moratoria general a nuevos regadíos y nuevas demandas consuntivas en masas de agua que no alcancen el buen estado o presenten riesgo climático elevado, procede señalar que el planteamiento no resulta acorde con el enfoque adoptado en el Esquema Provisional de Temas Importantes del cuarto ciclo de planificación hidrológica.

En primer lugar, el EpTI parte de un análisis integrado de las presiones, impactos y estado de las masas de agua, en el que se pone de manifiesto que el incumplimiento de los objetivos ambientales responde a la concurrencia de múltiples factores (contaminación difusa, presiones urbanas e industriales, alteraciones hidromorfológicas, cambio climático, etc.), y no exclusivamente a las extracciones para usos consuntivos. Por tanto, vincular automáticamente el estado ecológico al desarrollo de nuevos usos resulta una simplificación que no se corresponde con el diagnóstico técnico de la demarcación.

En segundo lugar, el propio EpTI, en las fichas de los temas importantes DU-06, DU-07 y DU-10, no plantea una prohibición general de nuevas demandas, sino un marco de planificación y control basado en la evaluación de alternativas y la viabilidad ambiental, económica y social. Así, se establece que:

- los nuevos regadíos deben limitarse y concentrarse en aquellos ámbitos que resulten viables, con suficiente garantía de suministro y coherencia con los objetivos ambientales;
- las actuaciones deben diseñarse de modo que reduzcan o no incrementen las presiones existentes, especialmente mediante modernización y mejora de la eficiencia;
- en relación con las nuevas demandas energéticas (DU-10), se prevén limitaciones específicas, reservas condicionadas y estudios de impacto, incluyendo restricciones en zonas protegidas o de especial sensibilidad.

Este enfoque, basado en la evaluación caso por caso, es coherente con la exigencia normativa de analizar presiones e impactos y alternativas de actuación (art. 79 RPH), evitando medidas generalistas no justificadas.

En tercer lugar, el EpTI incorpora el cambio climático como condicionante transversal, lo que implica que las decisiones sobre nuevas demandas deben adoptarse en función de su contribución a la resiliencia del sistema y a la seguridad hídrica, priorizando medidas como la modernización del regadío o la mejora de infraestructuras. En este contexto, la planificación condiciona las nuevas demandas a su compatibilidad con los recursos disponibles en escenarios futuros.

Por último, debe destacarse que el propio documento reconoce que el estado de las masas de agua puede verse influido por factores metodológicos (intensificación del control, incorporación de nuevos parámetros), de modo que la calificación de "no buen estado" no siempre responde a un empeoramiento real derivado de nuevas extracciones.

En consecuencia, y sin perjuicio de la plena aplicación del principio de no deterioro y de la necesaria evaluación de compatibilidad ambiental en cada caso, no se considera justificada la introducción de una moratoria general como la propuesta. El EpTI ya establece un sistema de control suficiente, basado en la identificación de presiones, la evaluación de alternativas y la adopción de medidas específicas, que permite compatibilizar el desarrollo de nuevas demandas con la consecución de los objetivos ambientales.

Anexo – 20

Déficit identificado: *Falta de mecanismos públicos y accesibles de seguimiento en tiempo real sobre presiones, estado de masas, objetivos y ejecución de medidas.*

Ficha EpTI afectada: *Transversal.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; principios de transparencia, participación pública y gobernanza adaptativa.*

Modificación solicitada: *Habilitar mecanismos públicos y accesibles de seguimiento en tiempo real sobre evolución de presiones, estado masas, cumplimiento de objetivos y ejecución de medidas. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 54)*

Respuesta:

La Confederación Hidrográfica del Duero ha creado el sistema de información Mírame-IDEDuero, que es la infraestructura de datos espaciales del organismo de cuenca. Integra y publica información geográfica oficial sobre el dominio público hidráulico, masas de agua, redes de control, planificación hidrológica y estado de los recursos. Permite visualizar cartografía, consultar datos en tiempo real y descargar capas interoperables. Facilita la transparencia en la gestión del agua, el apoyo a la toma de decisiones y la coordinación entre administraciones. Incluye visores temáticos y herramientas de análisis. Su objetivo es que cualquier usuario —técnico, administración o ciudadano— acceda a información fiable, actualizada y homogénea. Actúa como plataforma única para centralizar datos hidrológicos y ambientales de la cuenca del Duero, garantizando coherencia y trazabilidad. Favorece además la participación pública en los procesos de planificación y gestión del agua.

La información sobre presiones, estado de las masas de agua, cumplimiento de objetivos y ejecución de medidas se va consolidando, según se va obteniendo en dicho sistema de información.

Esta herramienta se ofrece para informar sobre los temas incluidos en la observación, y está permanentemente abierta a recibir sugerencias a través de la dirección: https://www.chduero.es/web/guest/buzon-ciudadano

Además, como se ha comentado en alegaciones anteriores, los mecanismos de seguimiento, evaluación y transparencia están delimitados en el RPH, concretamente en los artículos 87 y 88 del RPH, donde se establecen los criterios, contenidos y acciones de transparencia que deben regir los informes anuales de seguimiento del Plan Hidrológico. Estos informes se ponen a disposición del Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica y, posteriormente se publican en la web del Organismo de cuenca (https://www.chduero.es/web/guest/plan-hidrologico-2022). Se considera que atender a estos preceptos normativos garantiza suficientemente la transparencia y la rendición de cuentas que se exige legalmente.

Anexo – 21

Déficit identificado: *La ficha DU-09 no desarrolla suficientemente mecanismos operativos de gobernanza ecológica, coordinación interadministrativa y cooperación transfronteriza.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; Convenio de Albufeira; Estrategia de Biodiversidad de la UE; Reglamento (UE) 2024/1991.*

Modificación solicitada: *Reforzar DU-09 con objetivos operativos de resiliencia ecológica y adaptación climática transfronteriza, mecanismos estables hispano-portugueses de gestión adaptativa de sequías, conectividad ecológica, restauración fluvial y seguimiento conjunto. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 55)*

Respuesta:

Los mecanismos de gobernanza, coordinación interadministrativa y cooperación transfronteriza con las autoridades portuguesas están delimitados por el Convenio de Albufeira y, en el nivel ejecutivo, por la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio (CADC). Esta Comisión actúa en pleno, normalmente con una reunión ordinaria al año, y en grupos de trabajo. Actualmente hay constituidos cuatro grupos de trabajo: planificación, sequía, inundación y energía. Estos grupos se reúnen cada vez que la CADC les encarga trabajos específicos. Especialmente relevante es la colaboración en el grupo de trabajo de planificación, con reuniones mensuales, el de inundaciones, que en especial en los eventos de 2025 y 2026 han tenido una intensa actividad, y el de sequías que durante 2022 y 2024 celebró numerosas reuniones. En la Ficha DU-09 se proponen decisiones para consolidar y reforzar esta colaboración en dos ámbitos: resolver las divergencias para las masas fronterizas en materia de identificación de presiones, evaluación de estado, alineado de objetivos ambientales y medidas; y analizar la coherencia entre los indicadores de sequía y escasez de ambos países para integrar ambos diagnósticos en uno. Se considera que el marco legal actual desarrolla suficientemente mecanismos operativos de gobernanza ecológica, coordinación interadministrativa y cooperación transfronteriza para alcanzar los objetivos de resiliencia ecológica, adaptación climática transfronteriza, gestión adaptativa de sequías, conectividad ecológica y restauración fluvial.

Anexo – 22

Déficit identificado: *La cooperación derivada del Convenio de Albufeira se mantiene centrada en aspectos cuantitativos y no integra suficientemente Red Natura 2000, hábitats, especies y seguimiento ecológico conjunto.*

Ficha EpTI afectada: *DU-09.*

Base jurídica: *Directiva Hábitats; Directiva Aves; Directiva Marco del Agua; Convenio de Albufeira.*

Modificación solicitada: *Integrar los objetivos de conservación de Red Natura 2000 y hábitats y especies dependientes del agua en la cooperación hispano-portuguesa, desarrollando indicadores y mecanismos conjuntos de seguimiento ecológico y resiliencia climática para masas y corredores compartidos. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 56)*

Respuesta:

Como se ha indicado en respuesta a las alegaciones anteriores, en los grupos de trabajo de planificación, sequía, inundación y energía se abordan todas las cuestiones transfronterizas que afectan al agua. Así en el grupo de trabajo de planificación, entre los trabajos que se abordan están los objetivos específicos de espacios protegidos, la evaluación del estado de las masas de agua compartidas y el seguimiento y coherencia del régimen de caudales ecológicos en ambos lados de la frontera. Sin menoscabo de que pueda mejorarse la coordinación y cooperación entre ambos países, como se pone de manifiesto en las decisiones a tomar en la Ficha DU-09, consideramos que los aspectos alegados ya están llevándose a cabo.

Anexo – 23

Déficit identificado: *Ausencia de la custodia del territorio como herramienta estructural de gobernanza, restauración ecológica y participación social.*

Ficha EpTI afectada: *DU-02, DU-04, DU-05, DU-07 y DU-09; subsidiariamente nuevo TI específico.*

Base jurídica: *Ley 42/2007; políticas de restauración ecológica y participación; Directiva Marco del Agua; Reglamento (UE) 2024/1991.*

Modificación solicitada: *Incorporar expresamente la custodia del territorio en los Temas Importantes relacionados con restauración fluvial, biodiversidad, gobernanza y adaptación climática, incluyendo acuerdos de custodia fluvial y de humedales, colaboración estable con entidades de custodia y, subsidiariamente, un nuevo TI específico. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 57)*

Respuesta:

La custodia del territorio está posibilitando el aumento de las acciones de conservación y recuperación de espacios naturales. Los acuerdos voluntarios entre el propietario de una finca con valor natural y cultural y una organización, como una asociación o un ayuntamiento, tiene como fin conservar y restaurar dicho patrimonio.

Las acciones pueden ser de voluntariado, planificación y estudio, gestión, vigilancia, etc., como restaurar caminos, fuentes, balsas, muros y cabañas de piedra seca, realizar inventarios y estudios de

flora y fauna, ayudar en la gestión forestal, la prevención de incendios, la restauración de hábitats de flora y fauna, el seguimiento y reintroducción de especies, etc. En general, estas actuaciones no suponen una aportación económica directa al propietario, que retiene la propiedad y se beneficia de la mejora, aunque también puede haber fórmulas de arrendamiento y compensación económica.

Desde el MITECO, estas acciones se promueven a través de la Fundación Biodiversidad, uniendo a administraciones, organizaciones sin ánimo de lucro, propietarios, titulares de terrenos, universidades y otras instituciones, desde una aproximación voluntaria.

Este eje transversal puede ser, en algunos casos, una herramienta poderosa para la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua, pero no es un problema en sí mismo, con lo cual no es susceptible de convertirse en tema importante.

El Plan Hidrológico actual ya incluye una medida dirigida a fomentar acciones de custodia del territorio, voluntariado y educación ambiental (código 6404835). A fecha actual el grado de ejecución de esta medida es del 50% de la inversión prevista. En estas medidas se fomenta la colaboración público-social para la restauración fluvial, la conservación de hábitats y especies dependientes del agua, la mejora de la conectividad ecológica y la educación ambiental y la ciencia ciudadana, normalmente a través de pliegos y contratos específicos que permitan desarrollar estas actividades sin coste para las entidades colaboradoras. Dado el éxito de estas actividades, la nueva planificación hidrológica continuará esta tarea. En atención se incluye una referencia a las acciones de custodia del territorio para la conservación de los entornos fluviales, en la ficha DU-09 COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS Y FIJACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN ZONAS PROTEGIDAS, aun excediendo el título de coordinación interadministrativa.

Anexo – 24

Déficit identificado: *El Programa de Medidas no prevé suficientemente actuaciones específicas de apoyo a custodia fluvial y de humedales.*

Ficha EpTI afectada: *DU-02, DU-04, DU-07 y DU-09.*

Base jurídica: *Ley 42/2007; Directiva Marco del Agua; Reglamento (UE) 2024/1991.*

Modificación solicitada: *Incorporar actuaciones específicas de impulso y apoyo a iniciativas de custodia fluvial y de humedales para restauración de riberas, conservación de humedales, conectividad ecológica y adaptación climática. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 57)*

Respuesta:

El programa de medidas vigente incorpora la medida ES020_3_DU-6404835 denominada "Divulgación. Voluntariado Ambiental en la Cuenca del Duero", con un presupuesto asignado de 0,45 millones de euros para el periodo 2022-2027, financiado íntegramente por la Administración General del Estado. Se ve útil realizar más esfuerzos en el desarrollo de este tipo de actividades. En atención se incluye una referencia a las acciones de custodia del territorio para la conservación de los entornos fluviales, en la ficha DU-09 COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS Y FIJACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN ZONAS PROTEGIDAS, aun excediendo el título de coordinación interadministrativa.

Anexo – 25

Déficit identificado: *La ficha DU-10 no vincula los nuevos usos industriales y energéticos a evaluación ambiental estricta previa ni a criterios de exclusión en masas con estrés hídrico.*

Ficha EpTI afectada: *DU-10; el escrito menciona también DU-15 para nuevas concesiones de alta demanda.*

Base jurídica: *Principio de no deterioro; artículo 92 bis TRLA; artículo 6.3 de la Directiva Hábitats; Directiva Marco del Agua.*

Modificación solicitada: *Prohibir nuevas concesiones para usos industriales de alta demanda –centros de datos, hidrógeno verde– en masas de agua con estado menos que bueno o tendencia cuantitativa decreciente, salvo compatibilidad ambiental estrictamente acreditada. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 58)*

Respuesta:

Cuando el EpTI plantea en el tema importante DU-10 los nuevos usos del agua para industrias de alta demanda (centros de datos o almacenamiento químico de energía), lo hace porque se tiene constancia de las potenciales presiones que estos usos pueden tener sobre el estado de las masas de agua. Los proyectos concretos deben ser evaluados ambiental y concesionalmente, lo que ofrece suficiente garantía para asegurar las cautelas que solicita la alegante.

Las consideraciones citadas en relación con la compatibilidad ambiental de los proyectos son puestas de manifiesto, con las particularidades de cada caso, en los preceptivos informes que emite este Organismo en los procedimientos de evaluación ambiental que procedan.

Los nuevos usos del agua requieren para su desarrollo de la correspondiente concesión de aguas. En la tramitación concesional se valora su compatibilidad con la planificación hidrológica, objetivos ambientales y satisfacción de las demandas. Este análisis incluye tanto el estado de las masas de agua de donde se extraerá el recurso, como sus índices de explotación, tendencia cuantitativa decreciente, garantía de recurso para usos existentes, balance municipal, etc.

Cuando un nuevo uso supone presiones adicionales sobre las masas de agua que impiden el logro de sus objetivos ambientales o el deterioro de la misma, la concesión es denegada. Es algo que ocurre con cierta frecuencia en la gestión ordinaria de la CHD, que proyectos para nuevos usos sobre masas de agua que no alcanzan el buen estado, o que suponen un deterioro, o sobre masas que presenten riesgo de incumplimiento de objetivos ambientales o con tendencia cuantitativa decreciente, o que pongan en riesgo el cumplimiento de caudales ecológico y los requerimientos de conservación de hábitats y especies dependientes del agua, sean desfavorables.

La alternativa elegida para el tema importante DU-10 propone el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos, solo en el caso que haya disponibilidad de recurso y no se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos.

Anexo – 26

Déficit identificado: *Insuficiente vigilancia sistemática de PFAS y otros contaminantes emergentes.*

Ficha EpTI afectada: *DU-10.*

Base jurídica: *Directiva 2024/3019; Directiva Marco del Agua; obligaciones de protección de masas de agua y ecosistemas asociados.*

Modificación solicitada: *Establecer un programa sistemático de vigilancia de PFAS y otros contaminantes emergentes con cronograma vinculante de monitorización y actualización de protocolos. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 58)*

Respuesta:

Los programas de seguimiento actualizan sus protocolos y los umbrales de las sustancias a controlar para cumplir las modificaciones de la normativa vigente en relación con la calidad de las aguas.

En el momento presente, se está a la espera de la transposición de las modificaciones introducidas por la *Directiva (UE) 2026/805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2026, por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro y la Directiva 2008/105/CE relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas* a la legislación española, con objeto de adecuar las redes de control a las nuevas exigencias de umbrales y sustancias a identificar, y establecer concretamente los protocolos de vigilancia para PFAS y contaminantes emergentes.

Anexo – 27

Déficit identificado: *Ausencia de exigencia expresa de tratamiento terciario en EDARs sensibles conectadas con masas afectadas por contaminantes emergentes y espacios Natura 2000.*

Ficha EpTI afectada: *DU-10.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; Directiva Hábitats; normativa de depuración y protección de zonas sensibles.*

Modificación solicitada: *Exigir tratamiento terciario en EDARs sensibles vinculadas a masas con presencia de contaminantes emergentes y conexión con espacios Natura 2000. (20260527 Alegaciones EpTI demarcación Duero.docx, p. 58)*

Respuesta:

El problema de la depuración se ha abordado en el ámbito europeo a través de la Directiva 91/271/CE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que estableció un conjunto de medidas y plazos con la finalidad de recoger y tratar estas aguas antes de su vertido. En base al cumplimiento de esta directiva, a partir de la información suministrada por la autoridad competente, se han abierto por la Comisión Europea en los últimos años expedientes sancionadores a determinadas aglomeraciones urbanas por vertidos no depurados correctamente. En lo que se refiere a la eliminación de nutrientes, esta directiva también dispone que los Estados determinarán unas zonas sensibles, para cuya protección los vertidos que las alcancen deberán ser objeto de un tratamiento más riguroso que el secundario.

La nueva Directiva (UE) 2024/1203, de Aguas Residuales Urbanas moderniza el sistema introduciendo tratamientos cuaternarios para eliminar microcontaminantes, amplía la obligación a aglomeraciones más pequeñas, incorpora criterios de eficiencia energética y establece responsabilidad ampliada del productor para financiar parte del tratamiento, entre otros.

El plan hidrológico recoge esta reglamentación y la incorpora en el programa de medidas, pero la exigencia proviene de la otra normativa, no del plan en sí mismo que debe implementar estas exigencias como medidas básicas.

Anexo – 28

Déficit identificado: *Insuficiente priorización del Programa de Medidas hacia la recuperación de humedales, lagunas, riberas y refugios térmicos fluviales vulnerables al cambio climático.*

Ficha EpTI afectada: *DU-04, DU-07 y DU-09.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; Directiva Hábitats; Directiva Aves; Reglamento (UE) 2024/1991; Ley 42/2007.*

Modificación solicitada: *Priorizar en el Programa de Medidas actuaciones de recuperación de humedales, lagunas, riberas y refugios térmicos fluviales especialmente vulnerables, con atención preferente a espacios Red Natura 2000 y ecosistemas acuáticos de alto valor ecológico. Referencia: Que el Programa de Medidas priorice actuaciones destinadas a la recuperación de humedales, lagunas, riberas y refugios térmicos fluviales especialmente vulnerables al incremento de temperaturas, pérdida de conectividad y reducción de caudales, con especial atención a espacios Red Natura 2000 y ecosistemas acuáticos de alto valor ecológico. (DU-04, DU-07 y DU-09).*

Respuesta:

El programa de medidas actual ya establece que esta prioridad, sin menoscabo de otras como la satisfacción de las demandas, constituye el eje central y mayoritario de la planificación actual. El programa de medidas realiza un enorme esfuerzo en esta línea, con más de 1.300 millones de euros y el doble de medidas respeto al plan anterior.

El uso de riberas y humedales como herramientas frente al cambio climático ya está integrado de forma transversal y no solo accesoria. A modo de ejemplo, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), integrado en el PdM, prioriza la recuperación de llanuras aluviales y humedales como medidas de retención natural para mejorar la resiliencia. La restauración hidromorfológica es fundamental para permitir que se desarrollen espacios de sombra y evitar subidas de temperatura en el agua, actuando además como filtro de nutrientes, y este tipo de medidas abundan en el plan hidrológico.

En la conservación de los hábitats y especies de la Red Natura tienen un papel muy relevante las administraciones autonómicas. Se debe establecer con ellas una mayor coordinación de las autoridades competentes en los procesos de planificación y, singularmente en la fijación de objetivos específicos de los espacios de Red Natura 2000 vinculados al agua, como se pone de manifiesto en la Ficha DU-09.

Anexo – 29

Déficit identificado: *Falta de evaluación específica del impacto acumulativo de embalses e infraestructuras sobre hábitats fluviales, conectividad ecológica y resiliencia climática en el tramo internacional del Duero.*

Ficha EpTI afectada: *DU-07 y DU-09.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; Convenio de Albufeira; Directiva Hábitats; Reglamento (UE) 2024/1991.*

Modificación solicitada: *Revisar el régimen de caudales ecológicos del tramo internacional del Duero en coordinación con Portugal, incorporando evaluación del impacto acumulativo de embalses e infraestructuras y reforzando cooperación transfronteriza. Referencia: Que se revise el régimen de caudales ecológicos del tramo internacional del Duero en coordinación con Portugal, incorporando evaluación del impacto acumulativo de embalses e infraestructuras sobre hábitats fluviales, conectividad ecológica y resiliencia climática, y reforzando los mecanismos de cooperación transfronteriza. (DU-07 y DU-09).*

Respuesta:

La revisión del régimen de caudales ecológicos en el tramo internacional solamente puede realizarse en el marco del Convenio de Albufeira, no en el plan hidrológico, y muchos menos en el EpTI. Se rechaza la alegación.

Anexo – 30

Déficit identificado: *Insuficiente incorporación de mecanismos de colaboración y seguimiento participativo con entidades de custodia y actores territoriales.*

Ficha EpTI afectada: *DU-04, DU-05, DU-07 y DU-09.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; Ley 42/2007; principios de participación pública y gobernanza colaborativa.*

Modificación solicitada: *Incorporar mecanismos de colaboración y seguimiento participativo con entidades de custodia y otros actores territoriales para evaluar el estado ecológico, restaurar ecosistemas acuáticos e implementar soluciones basadas en la naturaleza. Referencia: Que se incorporen mecanismos de colaboración y seguimiento participativo con entidades de custodia y otros actores territoriales para la evaluación del estado ecológico, restauración de ecosistemas acuáticos y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. (DU-04, DU-05, DU-07 y DU-09).*

Respuesta:

El programa de medidas vigente incorpora la medida ES020_3_DU-6404835 denominada "Divulgación. Voluntariado Ambiental en la Cuenca del Duero", con un presupuesto asignado de 4,5 millones de euros para el periodo 2022-2027, financiado íntegramente por la Administración General del Estado. Se ve útil realizar más esfuerzos en el desarrollo de este tipo de actividades. En atención se incluye una referencia a las acciones de custodia del territorio para la conservación de los entornos fluviales, en la ficha DU-09 COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

MEDIDAS Y FIJACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN ZONAS PROTEGIDAS, aun excediendo el título de coordinación interadministrativa.

Anexo - 31

Déficit identificado: *Necesidad de que el EpTI y el futuro Plan Hidrológico se refuercen globalmente conforme a los principios de no deterioro, resiliencia ecológica, restauración ecosistémica, adaptación climática e integración vinculante de la biodiversidad.*

Ficha EpTI afectada: *Transversal a todo el EpTI y al futuro Plan Hidrológico.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; Directivas Hábitats y Aves; Reglamento (UE) 2024/1991; artículo 92 bis TRLA.*

Modificación solicitada: *Revisar y reforzar los contenidos del EpTI e incorporar en el ETI definitivo y el futuro Plan Hidrológico estos principios como marco rector de la planificación de la Demarcación Hidrográfica del Duero. Referencia: Que se revisen y refuercen los contenidos del EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Duero conforme a las alegaciones formuladas en el presente documento, incorporando de manera efectiva los principios de no deterioro, resiliencia ecológica, restauración ecosistémica, adaptación climática e integración vinculante de los objetivos de conservación de la biodiversidad.*

Respuesta:

Se precisaría concreción en la observación realizada, con propuestas concretas, para poder ajustar las fichas en la línea solicitada ya que, a juicio de los redactores del documento, los contenidos del EpTI incorporan de manera efectiva estos principios.

Anexo - 32

Déficit identificado: *La recuperación de la funcionalidad ecológica del sistema fluvial y el cumplimiento efectivo de los objetivos ambientales no aparecen configurados con suficiente claridad como eje vertebrador de la planificación del Duero.*

Ficha EpTI afectada: *Transversal; especialmente DU-04, DU-05, DU-07 y DU-09.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; Reglamento (UE) 2024/1991; Directivas Hábitats y Aves.*

Modificación solicitada: *Configurar la recuperación de la funcionalidad ecológica del sistema fluvial y el cumplimiento efectivo de los objetivos ambientales como eje vertebrador de la planificación hidrológica del Duero. Referencia: Que la recuperación de la funcionalidad ecológica del sistema fluvial y el cumplimiento efectivo de los objetivos ambientales pasen a constituir el eje vertebrador de la planificación hidrológica del Duero.*

Respuesta:

No se está de acuerdo con la observación presentada. A modo de ejemplo, se muestra el reparto de medidas establecidas en el plan hidrológico según objetivos, en el que se aprecia que la gran mayoría de ellas van enfocadas a la consecución de los objetivos ambientales:



Anexo - 33

Déficit identificado: *Falta de integración plenamente operativa entre planificación hidrológica, restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, adaptación climática y gobernanza ecológica.*

Ficha EpTI afectada: *Transversal; especialmente DU-02, DU-04, DU-05, DU-07, DU-09 y DU-10.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; Directivas Hábitats y Aves; Reglamento (UE) 2024/1991; Ley 42/2007.*

Modificación solicitada: *Incorporar en el futuro Plan Hidrológico una integración efectiva y operativa entre planificación hidrológica, restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, adaptación climática y gobernanza ecológica de la cuenca. Referencia: Que el futuro Plan Hidrológico incorpore una integración efectiva y operativa entre planificación hidrológica, restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, adaptación climática y gobernanza ecológica de la cuenca.*

Respuesta:

Todos los aspectos citados forman parte de la planificación hidrológica y todos ellos están presentes en la redacción del EpTI, como documento instrumental para la redacción del plan hidrológico, y en el propio plan hidrológico que se redacte. Todo ellos son contenidos específicos del plan hidrológico de acuerdo con el artículo 4 del RPH.

La adaptación al cambio climático es un tema transversal a todos los temas importantes tratados en el EpTI. El artículo 4 bis del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) establece el mandato de elaborar, para cada demarcación hidrográfica, estudios específicos de adaptación a los riesgos del cambio climático (EACC).

El estudio de adaptación a los riesgos del cambio climático de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero está actualmente en fase de preparación, bajo las directrices de coordinación de la Dirección General del Agua (DGA) y de la Oficina Española del Cambio Climático (OECC).

Los trabajos preliminares se han trasladado a las fichas del EpTI como criterios de diagnóstico y orientaciones para la propuesta de soluciones. Una vez concluidos los estudios, sus resultados contribuirán a los planes del 4º ciclo, asegurando su alineamiento con las políticas de adaptación, programación y seguimiento. El Plan hidrológico de cuarto ciclo incorporará la adaptación al cambio climático como criterio de coherencia y priorización, con atención a asignaciones y reservas, seguridad hídrica, estado y ecosistemas, agricultura de regadío y gobernanza.

En relación con la restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, la integración "efectiva" se consigue mediante la identificación de requerimientos específicos de los hábitats y especies de Red Natura 2000 y otros ecosistemas dependientes del agua que figuran en los planes básicos de gestión, y la identificación de las presiones sobre cada uno de estos espacios y especies. La integración "operativa" se conseguirá mediante el programa de medidas.

En relación con la gobernanza ecológica, se entiende que la gobernanza del agua, que incluye por su propia naturaleza lo que podría ser el concepto difuso "gobernanza ecológica", atiende de manera adecuada y en sintonía con la normativa vigente, sin menoscabo de las lagunas y dificultades que se ponen de manifiesto en la Ficha DU-09.

Se considera que el marco legal actual desarrolla suficientemente mecanismos operativos de gobernanza ecológica, coordinación interadministrativa y cooperación para alcanzar los objetivos de resiliencia ecológica, adaptación climática, gestión adaptativa de sequías, conectividad ecológica y restauración fluvial.

Anexo – 34

Déficit identificado: *Necesidad de priorizar actuaciones orientadas a la restauración de procesos hidrológicos e hidromorfológicos naturales, conectividad ecológica y resiliencia climática.*

Ficha EpTI afectada: *Transversal; especialmente DU-04, DU-05, DU-07 y DU-09.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; Reglamento (UE) 2024/1991; Ley 42/2007.*

Modificación solicitada: *Priorizar en el futuro Programa de Medidas actuaciones orientadas a restaurar procesos hidrológicos e hidromorfológicos naturales, recuperar conectividad ecológica y mejorar la resiliencia de ecosistemas acuáticos frente al cambio climático. Referencia: Que el futuro Programa de Medidas priorice actuaciones orientadas a la restauración de procesos hidrológicos e hidromorfológicos naturales, la recuperación de conectividad ecológica y la mejora de la resiliencia de los ecosistemas acuáticos frente al cambio climático.*

Respuesta:

La actual planificación hidrológica del Duero ya sitúa estos elementos como uno de los ejes prioritarios de su estrategia. Los datos del Programa de Medidas demuestran que lo ambiental no es solo una prioridad teórica, sino que domina la inversión de forma absoluta. El presupuesto destinado estrictamente al logro de objetivos ambientales en el plan vigente asciende a más de 1.300 millones de euros, una parte muy sustancial del presupuesto total. Además, el número de actuaciones ambientales prácticamente se ha duplicado frente al plan anterior.

Anexo - 35

Déficit identificado: *Falta de mecanismos verificables suficientes de seguimiento, evaluación y transparencia sobre el cumplimiento de objetivos ambientales y de restauración ecológica.*

Ficha EpTI afectada: *Transversal.*

Base jurídica: *Directiva Marco del Agua; principios de transparencia, participación pública, evaluación y buena administración.*

Modificación solicitada: *Incorporar mecanismos verificables de seguimiento, evaluación y transparencia que permitan comprobar objetivamente el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales y restauración ecológica de la demarcación. Referencia: Que el futuro Plan Hidrológico incorpore mecanismos verificables de seguimiento, evaluación y transparencia que permitan comprobar de forma objetiva el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales de restauración ecológica de la demarcación.*

Respuesta:

Los mecanismos de seguimiento, evaluación y transparencia están delimitados en el RPH. Concretamente en los artículos 87 y 88 del RPH se establecen los criterios, contenidos y acciones de transparencia que deben regir los informes de seguimiento del Plan Hidrológico. Anualmente el Organismo de cuenca debe recabar de las autoridades competentes información sobre el desarrollo del Plan Hidrológico. En concreto información sobre la evolución de los recursos hídricos naturales y disponibles y su calidad, la evolución de las demandas de agua, el grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos, el estado de las masas de agua superficial y subterránea y la aplicación de los programas de medidas y efectos sobre las masas de agua. Esa información se sintetiza en un informe que es puesto a disposición del Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica y, posteriormente publicado en la web del Organismo de cuenca (https://www.chduero.es/web/guest/plan-hidrologico-2022). Se considera que atender a estos preceptos normativos garantiza suficientemente la transparencia y la rendición de cuentas que se exige legalmente.

Anexo - 36

Déficit identificado: *Necesidad de reconocer a SEO/BirdLife como parte interesada durante el conjunto del procedimiento de revisión y aprobación.*

Ficha EpTI afectada: *Procedimiento de revisión del EpTI y futuro Plan Hidrológico.*

Base jurídica: *Normativa de participación pública en planificación hidrológica; Directiva Marco del Agua; legislación administrativa sobre interesados.*

Modificación solicitada: *Considerar a SEO/BirdLife como parte interesada a efectos de información, participación y notificación durante la revisión y aprobación del ETI y del futuro Plan Hidrológico del Duero. Referencia: Que se considere a SEO/BirdLife parte interesada a efectos de información, participación y notificación durante el conjunto del proceso de revisión y aprobación del Esquema de Temas Importantes y del futuro Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Duero correspondiente al cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033.*

Respuesta:

Como se ha indicado en respuestas anteriores, el artículo 38.7 de la Normativa del Plan Hidrológico vigente señala a qué entidades pueden considerarse interesados: *la condición de interesado en el proceso de planificación hidrológica se adquiere automáticamente por ser miembro de la Junta de Gobierno, del Comité de Autoridades Competentes o del Consejo del Agua de la Demarcación hidrográfica del Duero. Igualmente, adquieren la condición de interesado quienes sean identificados con tal condición por la autoridad ambiental en el Documento de Alcance del proceso de evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico.* Al no formar parte la alegante no forma parte de la Junta de Gobierno, del Comité de Autoridades Competentes o del Consejo del Agua de la Demarcación hidrográfica del Duero, sólo se le considerará interesado si es identificado como tal por el Documento de Alcance del proceso de evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico que finalmente se emita. Se indica que, en la preparación del Documento Alcance, el 8 de mayo de 2026 la Subdirección General de Evaluación Ambiental del MITERD consultó sobre los aspectos a tener en cuenta para elaborar el Documento de alcance de evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico del Duero a la entidad SEO/Birdlife.

4.70. Escrito de observaciones Nº 098

Presentado por: Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (AICAPE)

En nombre propio.

Alegación 1.

Reclama que la planificación hidrológica incorpore expresamente la dimensión institucional y organizativa necesaria para garantizar el cumplimiento efectivo de sus objetivos, mediante un capítulo específico de gobernanza y capacidad institucional. Argumenta que la disponibilidad presupuestaria, siendo necesaria, no basta para ejecutar las actuaciones si no va acompañada de medios humanos suficientes.

Respuesta:

Se reconoce la importancia de la cuestión y la realidad de la limitación de recursos humanos en los organismos de cuenca. De hecho, la Ficha DU-09 aborda cuestiones como las que plantea la alegación, además de los problemas de coordinación y de escaso avance del Programa de medidas. Ahora bien, la planificación hidrológica no puede recordar a las autoridades competentes cuáles son sus obligaciones y cómo deben abordarlas con recursos económico, humanos y organizativos. Los objetivos tasados en el art. 40 TRLA –conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, satisfacer las demandas y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, economizando y racionalizando los usos en armonía con el medio ambiente–, y el contenido del EpTI y del Plan Hidrológico es el que fijan el TRLA y el RPH. Las cuestiones institucionales y organizativas de los recursos humanos de los organismos de cuenca exceden las competencias de los propios organismos y superan los objetivos del EpTI y de la revisión del plan: corresponden a la política de función pública y deben trasladarse al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La propia AGE ha reconocido la necesidad de reforzar estos medios mediante instrumentos específicos (Plan Estratégico de Recursos Humanos de las Confederaciones Hidrográficas y el posterior Plan de Impulso de Recursos Humanos frente al Riesgo de Inundación), que son el cauce adecuado para esta pretensión.

Alegación 2.

Propone incorporar en los planes hidrológicos una caracterización de la evolución de los recursos humanos disponibles (evolución previsible de efectivos, tasas de cobertura de puestos, previsiones de jubilación, riesgos derivados de la insuficiencia de personal y capacidad administrativa para tramitar, dirigir y supervisar las inversiones).

Respuesta:

La caracterización de la plantilla y su evolución es una cuestión de gestión de recursos humanos ajena al contenido del plan y a las competencias del organismo de cuenca en el marco de la planificación, en los términos expuestos en la contestación a la primera alegación.

Alegación 3.

Reclama incorporar una evaluación de la capacidad institucional del organismo de cuenca para cumplir los objetivos del plan, mediante un indicador específico de seguimiento periódico de la suficiencia de medios (plantilla efectiva, vacantes, ratios de inversión, de infraestructuras y de expedientes por técnico, jubilaciones previstas, cobertura de puestos críticos, etc.).

Respuesta:

Se comprende la finalidad del indicador propuesto –relacionar las obligaciones, inversiones y objetivos del plan con los medios disponibles–. No obstante, la evaluación de la capacidad institucional y de los medios humanos, y el establecimiento de un indicador de suficiencia de personal, no forman parte del contenido del plan ni del diagnóstico del EpTI, y su definición y seguimiento corresponden a la política de función pública y a los instrumentos de refuerzo de personal ya citados, no al organismo de cuenca en el marco de la planificación.

4.71. Escrito de observaciones Nº 099

Presentado por: D. Manuel García Hernández.

En nombre de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Alegación 1.

Importancia de la generación hidroeléctrica y el almacenamiento hidráulico de energía para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y descarbonización.

Respuesta:

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) establece las líneas estratégicas para impulsar la descarbonización de la economía, la eficiencia y seguridad energética, indicando que el mercado interior de la energía debe diseñarse adecuadamente para permitir la incorporación de energías renovables en el sistema y proponiendo los mecanismos para la ejecución de la política en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el sector de la energía y clima. La generación hidroeléctrica y el almacenamiento hidráulico de energía son consideradas por el PNIEC como tecnologías energéticas hipocarbónicas y limpias.

El PNIEC también prevé el desarrollo del almacenamiento como una herramienta clave para otorgar flexibilidad al sistema eléctrico y dar apoyo al crecimiento significativo de generación renovable. Con el fin de desarrollar lo previsto en el PNIEC, la Estrategia de Almacenamiento Energético, aprobada en febrero de 2021, aborda la diagnosis del almacenamiento energético y cuantifica las necesidades de almacenamiento para contribuir a la descarbonización del sistema energético. Esta Estrategia identifica un amplio abanico de tecnologías de almacenamiento entre las que cabe señalar, por su madurez, las centrales hidráulicas de bombeo, que permiten impulsar el agua para almacenarla en depósitos a gran altura y liberarla para producir electricidad cuando hay alta demanda.

En la búsqueda de alcanzar una coherencia entre el PNIEC y la planificación hidrológica, al haber constatado que el desarrollo de estas tecnologías de generación y almacenamiento de energía eléctrica procedente de fuentes renovables (la hidráulica entre ellas) va a devenir en usos y demandas del agua no contemplados en ciclos de planificación anteriores, el esquema de temas importantes recoge una ficha en la que se dan los primeros pasos para poner de relieve la importancia de estos nuevos usos y analizar la repercusión que éstos puedan tener sobre el estado de las masas de agua y la atención a las demandas de recursos.

Alegación 2.

Importancia de la generación hidroeléctrica y el almacenamiento hidráulico de energía para garantizar la calidad y la seguridad del suministro eléctrico.

Respuesta:

Estamos de acuerdo con el alegante en la importancia que tiene la generación hidroeléctrica y el almacenamiento hidráulico de energía en la calidad y seguridad del suministro eléctrico.

La demarcación hidrográfica del Duero tiene una importante contribución a la generación hidroeléctrica española. En 2025 la producción neta de energía hidroeléctrica en los embalses de la demarcación del Duero ascendió a 8.059 GWh, con una potencia instalada total de 3,8 GW, lo que supone un 23,9% de los 33.685 GWh producidos en España, según datos de Red Eléctrica Española. En términos nacionales, la tecnología hidráulica contribuyó un 12,4 % al total de la producción de electricidad, ocupando el quinto puesto de las tecnologías generadoras.

El esquema de temas importantes elige la alternativa de mantener operativas las centrales hidroeléctricas cuyo plazo de concesión finaliza durante el periodo de cuarto ciclo de planificación 2028-2033, sean o no consideradas estratégicas para la estabilidad del sistema eléctrico español por Red Eléctrica Española.

La tramitación de la renovación de estos derechos concesionales o, en su caso, su extinción y nuevo concurso se realiza mediante los procedimientos recogidos en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y en ningún caso el Plan Hidrológico puede modificar dichos procedimientos. Únicamente se podrán proponer condicionantes que contribuyan a mejorar el estado de las masas de agua y la atención a las demandas.

El futuro PHD tendrá en cuenta el *Informe carácter estratégico de la generación hidráulica en el Sistema Eléctrico Peninsular,* de octubre de 2025, del Departamento de Programación de la Operación Peninsular de Redeia.

Respecto al almacenamiento de energía hidráulica, la medida 1.9 DESARROLLO DE NUEVA CAPACIDAD DE ALMACENACENAMIENTO HIDROELÉCTRICO de PNIEC establecía como mecanismos de actuación la simplificación de la tramitación administrativa para nuevas centrales hidroeléctricas reversibles que utilicen embalses existentes, medidas introducidas en el Real Decreto ley 8/2023, y el estudio del uso de almacenamiento hidroeléctrico en embalse de titularidad estatal. Esto último ha sido desarrollado en Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico (PNAHE) en el cual se han identificado en toda España un total de 37 centrales hidroeléctricas reversibles viables técnicamente sobre embalses de titularidad estatal, tanto de bombeo puro como de bombeo mixto, de las cuales dos estarían en la demarcación hidrográfica del Duero, una de bombeo puro (Riaño) y otra de bombeo mixto (Camporredondo/Compuerto), con 230 MW de potencia y 2,78 GWh de energía almacenada.

El nuevo plan hidrológico planteará la no limitación para la implantación las centrales de almacenamiento hidroeléctrico a las identificadas en el PNAHE, de titularidad estatal, contemplando la posibilidad de otros proyectos de bombeo reversible en embalses de titularidad autonómica o privada, que serán estudiados de forma individual, con especial atención al mantenimiento de los caudales ecológicos.

Alegación 3.

Adaptación del marco regulatorio para fomentar el almacenamiento hidroeléctrico.

Respuesta:

Los planes hidrológicos no pueden adaptar el marco regulatorio energético, deben velar por las normas relacionadas con el medio hídrico en línea con los objetivos generales de la planificación hidrológica: conseguir el buen estado de las masas de agua, la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial.

La Ley 7/2021, de Transición Energética y Cambio Climático, recoge explícitamente que las nuevas concesiones de aguas que se otorguen para las tecnologías renovables en el sistema eléctrico no deben comprometer los objetivos ambientales de la planificación hidrológica.

La necesaria coherencia de las políticas sectoriales relativas al agua y la energía a nivel nacional debe pilotarse desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, curiosamente departamento competente, en el ámbito de la Administración General del Estado, para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de agua y en materia de energía, según se recoge en Real Decreto 503/2024, de 21 de mayo. Lamentablemente después de casi seis años de confluencia de competencias en el mismo Ministerio y promoción de tres planes estratégicos (PINIEC, PNAHE y Plan Hidrológico) sigue siendo débil la armonización sectorial, como reclama el TRLA.

La modificación del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), introducida por el Real Decreto-ley 8/2023, reconoce el almacenamiento hidráulico de energía como un uso diferenciado y prioritario frente a otros usos industriales para producción de energía eléctrica. Esta modificación se verá recogida en la normativa del Plan Hidrológico de la demarcación del Duero 2028-2033.

En relación con el plazo concesional recogido en el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Duero, el alegante solicita que se analice la posibilidad de aumentar dicho plazo para las nuevas concesiones para usos de almacenamiento hidráulico de energía hasta un máximo de 75 años, dado el interés estratégico de este uso para el sistema eléctrico y la transición energética.

Esta extensión del plazo concesional para este uso está siendo ya considerada en la redacción de la nueva normativa del Plan Hidrológico 2028-2033 y se reflejará en esta fase de planificación en el tema importante DU-10 NUEVOS USOS DEL AGUA VINCULADOS A LAS INDUSTRIAS RENOVABLES, ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA Y CENTROS DE TRATAMIENTO DE DATOS

4.72. Escrito de observaciones Nº 100

Presentado por: D. Juán José Caminero.

En nombre de la Comunidad de Regantes de Carrión, Saldaña y Villamoronta.

Alegación previa.

Que una primera aproximación al documento evidencia el absoluto desprecio, persecución y condicionamiento del mismo respecto a la agricultura de regadío para las aguas superficiales […] está por completo impregnado de un interés "ambientalista", por lo que nos oponemos a su aprobación.

La primera medida del nuevo ciclo de planificación debería pasar por el análisis del cumplimiento del anterior, donde se ejecutaron en torno al 22 por 100 de las inversiones previstas, […] solo puede decirse objetivamente que ha fracasado por su incumplimiento fundamentalmente en cuanto a las inversiones previstas.

Respuesta:

No compartimos la primera observación del alegante: no hay ningún lugar del EpTI donde se haga un juicio negativo sobre la agricultura de regadío como el que se manifiesta en el escrito de alegaciones. En la Ficha DU-06 (cuyo título es "Sostenibilidad y relevancia del regadío") se indica, respecto al regadío: *son muchos los efectos positivos del regadío: fija de población en el medio rural; aporta mayor diversificación de cultivos; aporta la mayor fuente de materias primas para la alimentación humana; las zonas con regadío tienen una densidad de población tres veces superior a las del secano; impulsa el empleo al generar 3,6 veces más de empleos que el secano; en las zonas de regadío se incorporan 3,5 veces más jóvenes al sector agrario que en el secano; finalmente las zonas modernizadas generan hasta 7,5 veces más inversión que las zonas de secano. Estos valores son importantes en una demarcación hidrográfica en la que la un 77% de su territorio se corresponde con municipios en riesgo de despoblación.*

El valor de producción del regadío asciende a 1.269 M€ y supone el principal motor económico en gran parte del medio rural de la demarcación. Además, el regadío tiene un papel fundamental para asegurar la autonomía alimentaria y reducir la inflación de la cesta de compra del consumidor y tiene un efecto arrastre en el conjunto de la economía, ya que es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. La contribución del sistema agroalimentario a la economía española en el año 2020 se puede estimar en aproximadamente un 10,60%. Esta elevada contribución supone que el sistema agroalimentario es el segundo generador de riqueza nacional tras el turismo.

Debido a la mayor productividad del regadío frente al secano, la agricultura de regadío es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. En el caso de la demarcación del Duero alrededor del 30% del valor económico de la producción agraria proviene del regadío al aire libre o invernadero, porcentaje que para el conjunto de España se eleva a alrededor del 70%. Por tanto, el EpTI no evidencia ningún desprecio, persecución o condicionamiento a la agricultura de regadío, sin menoscabo de poner de manifiesto que alguna de las presiones que genera sobre las masas de agua requieren ser corregidas.

Tal y como se pone de manifiesto en la Ficha DU-09, el grado de ejecución de las medidas a fecha 31 de diciembre de 2024 es del 24,5% de la inversión prevista, valor escaso cuando ha pasado un tercio del tiempo del ciclo de planificación. Siendo esto así, sin embargo, se observa que en determinados grupos de medidas el avance es superior a la media: así en materia de saneamiento y depuración la ejecución supera el 45% de la inversión, en abastecimiento un 37%, en medidas de gestión de inundaciones un 34%. Reconociendo que existe un importante retraso en la ejecución de las medidas, no compartimos la visión tan negativa que muestra la alegante.

Alegación 1.

Que en lo que respecta particularmente a esta Comunidad de Regantes, consultados los datos en la aplicación MÍRAME-IDEDUERO de ese organismo, hemos comprobado que esta Comunidad consta con una superficie regable asignada con derecho a riego de 11.754 has., cuando en realidad la superficie correcta es la ***de 12.100 has****., que tiene censadas la Comunidad en su elenco, y sobre esta base se está trabajando para la redacción de proyectos a efectos de la modernización de regadío.*

Respuesta:

De acuerdo con el Decreto 27-2-1964 (BOE nº 65 de 16 de marzo de 1964) la superficie dominada es de 11.729 ha, de las cuales 10.840 son útiles para riego. El Elenco de 2021, revisado por la OPH para delimitar cartográficamente la zona regable, suma una cantidad de 11.790,97 ha; el Elenco de 2026 suma un total de 11.739,38 ha. La revisión de detalle del Elenco de 2021 suministrada por el Servicio de Explotación, una vez descontados los terrenos no regables (cascos urbanos o polígonos industriales y el DPH) ha conllevado una superficie de zona regable de 11.788,82 ha. Todas las cifras están muy alejadas de las 12.100 ha que se citan en la alegación.

Dado que están en proceso de modernización de regadío, en aplicación del artículo único del Real Decreto 1304/2024, de 23 de diciembre, puede delimitarse adecuadamente la zona regable que en todo caso, si fuera superior a la que figura en el Elenco de la zona regable y por la que se han satisfecho canon de regulación y tarifa de utilización del agua, requerirá justificación específica.

Alegación 1bis.

Por otro lado, es necesario el ***incremento de regulación del Sistema Carrión****, por ser el sistema más deficitario de toda la Demarcación del Duero, a pesar de la gran cantidad de usos que tiene asociados. […] Resulta prioritario la ejecución de las denominadas balsas de las Cuezas, que permitan almacenar agua en periodos de abundancia para ser utilizada en épocas de escasez. Este déficit se está paliando desde el año 2001 con la aportación de Recursos del Sistema Esla-Valderaduey (procedentes del embalse de Riaño) al Sistema Carrión a través del Canal Cea-Carrión, pero debido al desarrollo de los regadíos previstos en la Zona de Payuelos, las cantidades a aportar podrían disminuir sobre todo en períodos de sequía, pues las dotaciones por hectárea en el Esla se reducirán y, como consecuencia, las aportaciones al Carrión. La Modernización de los sistemas de Riego es una necesidad ineludible e indiscutible y ello conlleva una mayor eficiencia del recurso hídrico, pero también es necesario tener una dotación suficiente para conseguir una mayor productividad y poder hacer frente al coste de la amortización de las obras. Consideramos que esta regulación adicional de la cuenca del Carrión, hoy en fase de estudio de impacto ambiental es prioritaria e imprescindible. Las presas de La Cueza 1 y la Cueza 2, tras muchos años de tramitación del anteproyecto y dos consultas públicas por los requisitos*

ambientales, actualmente el órgano de evaluación de impacto ambiental ha exigido nuevos estudios específicos sin que se vea fin al tal procedimiento que requiere su agilización.

Respuesta:

Debe señalarse que la Confederación Hidrográfica del Duero comparte la conveniencia y oportunidad de la puesta en servicio de una regulación adicional en el ámbito de las Cuezas, ya que se considera una medida estructural que puede incrementar la capacidad de gestión del sistema y reforzar su resiliencia, disminuyendo la dependencia de aportaciones externas. Estas actuaciones, junto con la modernización de regadíos en el sistema Carrión, se encuentran alineadas con los objetivos de la planificación hidrológica vigente y forman parte de la estrategia de mejora del equilibrio entre recursos y demandas en la demarcación.

Según se recoge en el Programa de medidas del Plan Hidrológico vigente, cuya situación más actualizada se puede consultar en Mírame-IDEDuero, la regulación adicional en las Cuezas (medidas 6403243 y 6403244) se encuentra en fase de anteproyecto en evaluación ambiental y es una medida cuyo promotor es la Confederación.

Alegación 2.

DU-01. Contaminación difusa.

El diagnóstico del documento refleja de forma adecuada la persistencia de problemas de nitratos y biocidas, pero no valora suficientemente los esfuerzos ya realizados por agricultores y ganaderos (modernización de regadíos, asesoramiento en fertilización, implantación de GIP).

La caracterización de presiones debería diferenciar con mayor claridad entre cultivos intensivos, cultivos leñosos, ganadería estabulada y extensiva, pues sus aportes de nutrientes y fitosanitarios son muy distintos.

Se aprecia un déficit en la cuantificación de los beneficios de las inversiones en modernización de regadíos y fertiirrigación: sin esos datos es difícil justificar medidas más restrictivas.

Respuesta:

Empezando por la última observación, como se ha comentado en la respuesta a la primera alegación, el EpTI deja de manifiesto la relevancia de la modernización del regadío para el logro de los objetivos ambientales y la mejora de la viabilidad de las explotaciones. Sin embargo, las presiones por contaminación difusa no se deben exclusivamente y en su mayoría al regadío donde el aporte de agua y el riesgo de lixiviado está controlado, sino al secano, a las aplicaciones de estiércoles y purines y a otras actividades como puede ser las descargas de aguas residuales urbanas no correctamente depuradas o los tratamientos biocidas en infraestructuras lineales, como se pone de manifiesto en la Ficha DU-01.

Estamos de acuerdo en que la modernización de regadíos permite aplicar nuevas tecnologías en el sector agrario, sin este tipo de infraestructuras sería imposible llegar a conseguir al riego de precisión, se maneja mejor el agua, y consecuentemente se evita que las aguas de retorno de riego sean menos y con menor carga contaminante, pero por el contrario el poder disponer de mejores infraestructuras da pie a siembras más densas, que se traducen en más rendimiento por hectárea y más necesidad de

abonado, también ocurre que esto posibilita la obtención de dos cosechas en un mismo año, más cultivo por consiguiente más abonado, exceptuando los cultivos de leguminosas.

Las estaciones de medida existentes tanto en aguas subterráneas como en ríos y arroyos que drenan algunas de las zonas regables, siguen dando valores de contenido en sustancias nitrogenados por encima de los limites legalmente establecidos. Analizando datos procedentes de sistemas de control de otros organismos, SINAC, controles sanitarios, campañas de medición en campo realizadas con nuestros medios, siempre aparecen algunos valores altos en zonas de mayor actividad agroganadera.

La caracterización de la presión por contaminación difusa ya tiene en cuenta los tipos de cultivos y la carga ganadera en cada cuenca vertiente de la demarcación hidrográfica, ya que se utiliza para identificar las presiones y los impactos dos fuentes de información: las redes oficiales de control de calidad de agua superficial y subterránea y los balances que el MAPA realiza cada dos años sobre el excedente de nitrógeno que provoca esa carga de nutrientes en las aguas. Y esta última fuente de información utiliza la información sobre cultivos, los sistemas de cultivo y las prácticas agrarias y ganaderas en cada zona.

Los esfuerzos que realizan los agricultores son conocidos porque ya se encargan las organizaciones profesionales agrarias de realzarlos; sin embargo, pese a ese esfuerzo, el problema no va a menos por lo que debemos preguntarnos qué no estamos haciendo bien o qué debemos mejorar. También desde instancias europeas se advierte a España con sanciones millonarias en aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2024 que concluye que España no cumple la directiva de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. De hecho, una de las comunidades autónomas en la que la sentencia pone el foco es Castilla y León, territorio en la que ejerce su actividad la asociación alegante, al no haber aplicado las medidas obligatorias ni lograr mejorar la calidad de las aguas. Dos años después de la sentencia, la Comisión Europea señala que solo 4 comunidades autónomas españolas no han tomado medidas, entre ellas Castilla y León. (Noticia La Gaceta de Salamanca, de 5 de junio de 2026). La amplia legislación existente para regular y minimizar este problema (entre otras, el Real Decreto 47/2022, el Real Decreto 1514/2009, relativo a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, o el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios) da idea de la complejidad para su resolución.

Alegación 3.

DU-01. Contaminación difusa.

Sobre los "trabajos de Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación terminados en marzo de 2025", se plantean las siguientes dudas:

- *¿Cuántos puntos se han muestreado cada campaña en la demarcación, tanto para aguas superficiales como para subterráneas?*
- *¿Este trabajo va a ser repetitivo? ¿Cuál es el programa/planing y el coste presupuestario anual destinado a él?*

Solicitamos una copia de los trabajos de "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación"

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, el trabajo "Caracterización de las Fuentes de Contaminación por Nitratos mediante Técnicas Multi-isotópicas para identificar el origen de la contaminación", se ha llevado a cabo por el MITERD en las campañas 2023 y 2024, duplicando analíticas en cada punto de muestro. En la demarcación hidrográfica del Duero, sobre 79 puntos de muestreo de aguas superficiales de la demarcación hidrográfica, atribuyen el 61% de la contaminación por nitratos a origen agrario (principalmente fertilizantes inorgánicos) y el 25% a mezclas con aguas residuales urbanas, el 14% restante de origen indeterminado. Por otro lado, el 61% de muestras de origen agrario se descompone en: 38% de origen nutrición inorgánica, 22% de origen mixto de nutrición inorgánica y desechos de ganadería y un 1% de origen orgánico de ganadería. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, sobre 95 puntos de muestreo en dos campañas diferentes, se muestra un origen agrario en el 55% de las muestras, un 25% mixto de origen aguas residuales urbanas y agrario, indeterminado en el 14% y de origen urbano en el 3%. Por otro lado, el 55% de muestras de origen agrario se descompone en: 40% de origen inorgánico, 12% de origen mixto de inorgánico y desechos de ganadería y un 3% de origen orgánico de ganadería.

Dado que el trabajo fue encargado por la Dirección General del Agua, del MITECO, puede dirigirse a ese departamento en petición del trabajo.

Alegación 4.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 1 (Reducción de excedentes y bandas de protección):

Las reducciones propuestas (hasta un 50% de excedentes o más) deben graduarse según tipología de cultivo, textura del suelo y riesgo de lixiviación, evitando fijar límites uniformes que puedan poner en peligro rentabilidad de cultivos con baja lixiviación (viñedo, olivar, almendro).

Las bandas de vegetación de ribera son útiles, pero su implantación debería ser voluntaria con compensaciones claras y planes de control de fauna (topillo campesino, conejos) para no crear nuevos problemas.

Respuesta:

La normativa del Plan Hidrológico, específicamente en su Apéndice 14.2, establece umbrales máximos de excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) que distinguen explícitamente entre cultivos herbáceos y leñosos, tanto en regadío como en secano. Para los cultivos leñosos (donde se incluyen viñedos, olivares y almendros), los valores de excedente permitidos son significativamente distintos y más ajustados a su fisiología que los de los herbáceos.

Las reducciones propuestas no son arbitrarias tampoco, sino que resultan de la aplicación del modelo PATRICAL, una herramienta de simulación del ciclo hidrológico y la calidad de las aguas distribuida espacialmente. Este modelo calcula el balance de nitrógeno teniendo en cuenta variables territoriales específicas como la recarga por lluvia, la textura del suelo (a través de los coeficientes de escorrentía y lixiviación) y el tipo de cultivo por término municipal. La zonificación se realiza a nivel de "sectores" de masas de agua, lo que permite adaptar la exigencia a la realidad geomorfológica y al riesgo real de cada zona.

La propuesta sobre la voluntariedad de las bandas de protección parece razonable y se abundará sobre ella en el presente ciclo de planificación. Se debe indicar, por aclarar, que la vegetación de ribera puede constituir un refugio para distintas plagas, pero también para sus depredadores, que necesitan espacios donde establecer zonas de cría y refugio para desarrollarse.

Alegación 5.

Respecto al tema importante DU-01, se comparte el fomento de biofertilizantes, bioestimulantes y control biológico, pero se requiere apoyo técnico y financiero estable, así como validación agronómica local antes de exigir sustitución de fertilizantes tradicionales.

Debería contemplarse un periodo transitorio de al menos 5-7 años para la adopción realista de estas prácticas.

Respuesta:

Las propuestas que hace la Ficha DU-01 para la alternativa 2 son propuestas que pretenden orientar la decisión de las autoridades competentes en materia de investigación y transferencia de tecnología para abordarlos y movilizar la inversión necesaria para esta mejora de conocimiento. Pero para impulsar esas decisiones es necesario que los sectores implicados (agua, agricultura, medio ambiente, …) orienten en esa línea y confirmen esta posible mejora. No se pretende establecer como obligatorio el uso de estos productos en tanto se justifique su eficacia y sean competitivos económicamente, para lo cual se necesita ese trabajo de investigación y transferencia.

Alegación 6.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 3 (Depuración urbana):

Es positivo que se incluyan fuentes urbanas, pero el documento debería cuantificar su aportación relativa al problema global para no sobrecargar sólo al sector primario.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-01, las fuentes de contaminación difusa son varias y entre ellas están las descargas urbanas no adecuadamente tratadas. Sin embargo, sin negar su contribución al problema general, el trabajo de estudio del origen de la contaminación nitrogenada en las aguas de la demarcación hidrográfica al que se alude en la respuesta a la alegación 3ª, el origen del nitrógeno encontrado en el agua es de origen agrario en el 61% de las muestras de agua superficial y en el 55% de las muestras de agua subterránea, lo que pone de manifiesto que la mayoría de los nitratos presentes en el agua tiene un origen agrario.

Alegación 7.

DU-01. Contaminación difusa. Alternativa 4 (Plantas de biogás):

La valorización de purines es esencial, pero se precisa planificación territorial: ubicación de plantas, logística de recogida y retorno del digestato tratado, evitando concentraciones que generen rechazo social.

Respuesta:

Estamos de acuerdo con parte de lo que se expone en la alegación, en la ficha se propone como alternativa, porque su correcto manejo genera menos problemas ambientales que las prácticas de aplicación de los purines en bruto como se está haciendo en la actualidad. No obstante, como se indica sería necesaria una planificación territorial de esta nueva actividad. Hasta la fecha la autoridad competente (comunidad autónoma) no nos ha trasladado ningún criterio al respecto.

Alegación 8.

La dispersión competencial señalada en la Ficha DU-01 del EPTI requiere de mecanismos concretos:

- *Convenios entre CHD y Consejerías de Agricultura para seguimiento conjunto.*
- *Creación de mesas de trabajo permanentes con organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes.*
- *Inclusión de Juntas Agrarias Locales en la difusión y control de buenas prácticas.*

Antes de aprobar medidas que impliquen reducción de fertilización o prohibición de biocidas, debe elaborarse un análisis coste-beneficio que contemple:

- *Pérdidas de producción y costes de adaptación.*
- *Impacto en empleo rural y en industrias de insumos.*
- *Ahorros ambientales y beneficios para el abastecimiento de agua.*

Respuesta:

La cooperación entre administraciones y la difusión de la problemática de la contaminación difusa son aspectos relevantes para buscar las soluciones. De hecho, se ha avanzado en los últimos cinco años en la percepción del problema y el convencimiento de que se debe ser proactivo en la búsqueda de soluciones, a lo que ha contribuido la visibilidad de problema mediante el expediente sancionador a España por incumplimiento de la Directiva de nitratos y por las medidas limitantes que se incluyen en los planes hidrológicos. También las organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes han desarrollado actividades formativas para sus asociados poniendo el foco también en este problema de la contaminación difusa: ya es normal que en las reuniones técnicas que estas entidades organizan se empiece a hablar del problema del exceso de nutrientes no solo como un problema económico de rentabilidad de explotación o productividad de los cultivos, sino también como un modo de no perjudicar al medio ambiente.

Dicho esto, los convenios a los que se refiere la alegación no pueden pretender eludir las competencias de cada administración en esta materia, en la que el seguimiento de la contaminación en agua corresponde a la administración del agua y la implantación de medidas corresponde a la administración ambiental y agraria.

La Ficha DU-01 en la alternativa 1 evalúa el impacto de la reducción de excedentes de sustancias nitrogenadas en función de la zona de la demarcación hidrográfica donde nos encontremos. Esta alternativa 1 *supone la máxima reducción posible de los excedentes de nitrógeno (no de la aplicación) compatible con unas producciones agrarias óptimas. (…). En este análisis se identifica que, por ejemplo, una reducción de cerca del 35% de la fertilización implicaría una reducción del 50% de los excedentes y*

una reducción del 56% de la aplicación de fertilizantes una reducción del 80% de los excedentes de nitrógeno.

Y se analiza en la Tabla 1 de la Ficha el efecto de la reducción de excedentes sobre el territorio:

Reducción de aplicación de N	Reducción de excedentes	Superficie sector (km²)
10%	*25%*	*3.227*
20%	*50%*	*19.629*
40%	*80%*	*3.872*

Esta información podría servir de ayuda a la Administración autonómica competente, en esta alternativa, para reforzar los planes de actuación de manera que se puedan limitar la aplicación de nutrientes de manera zonal de forma que se asegure que los excedentes sean inferiores a los contemplados en el citado apéndice 14.2. Esto podría implementarse de diversas formas:

- *Mediante la reducción de las cantidades máximas de N por hectárea en los planes de actuación de las zonas vulnerables;*
- *Mediante la reducción de las cantidades a aplicar de nutrientes fuera de las zonas vulnerables (de acuerdo con los criterios de Patrical) a través de normas de condicionalidad vinculadas a aumentos de las ayudas PAC.*
- *Mediante la aplicación de tributos a gravando el exceso de N adquirido en el mercado sobre la dosis contemplada en los planes de actuación.*

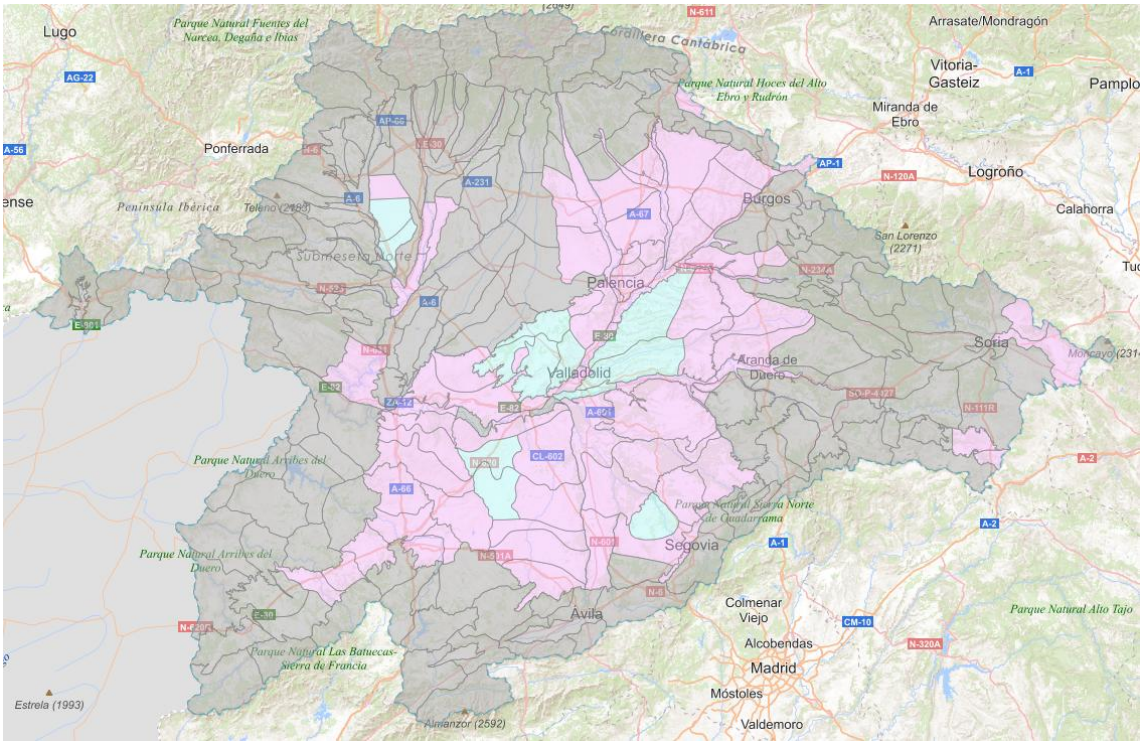
Alegación 9.

Se proponen algunas medidas en el tema importante DU-01:

- *Ajustar los límites de aplicación de nitrógeno según balance real de cada cultivo y zona (considerar coeficientes de absorción y mineralización).*
- *Priorizar el control y mejora de puntos de vertido urbano e industrial antes de imponer nuevas restricciones al abonado agrícola.*
- *Incluir líneas de ayuda específicas para:*
  - *Implantar bandas de protección voluntarias y mantenerlas.*
  - *Transición a biofertilizantes y control biológico.*
  - *Asesoramiento profesional y agricultura de precisión.*
- *Potenciar el uso de herramientas de gestión de nutrientes (cuadernos digitales, sensores de N en suelo/planta).*
- *Favorecer acuerdos de economía circular entre plantas de biogás, explotaciones ganaderas y agricultores para el uso seguro del digestato.*
- *Seguimos demandando al MITERD y a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la realización de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario mediante el estudio y muestreo significativo de parcelas de riego por gravedad, de riego modernizado y parcelas en las que ya se esté utilizando la fertirrigación para poder sacar conclusiones basadas en datos sobre la mejora que implica la tecnificación y digitalización del regadío en este apartado.*

Respuesta:

Como se indica en el EpTI y también en el Plan Hidrológico vigente, los límites del excedente de sustancias nitrogenadas se han hecho a partir de la presión identificada en forma de contenido de nitratos en las agua superficiales y subterráneas. Y esos límites se han fijado en forma de sectores territoriales, tal y como aparece en la imagen (en rosa la reducción del excedente sería del 25%, en azul la reducción del excedente sería del 80% del actual y en gris no sería necesaria esa reducción):



La traslación de la reducción de excedentes en cada sector a los cultivos presentes en el mismo, requiere un trabajo de detalle de los organismos competentes en materia agraria que pueden hacer esa distribución con criterios más técnicos que los que puede hacer el organismo de cuenca. De hecho, esta distribución de sectores tiene como fin ofrecer a la autoridad competente una información con la que realizar el análisis que solicita la alegante.

Sin duda es necesario mejorar el control de las descargas de las EDAR urbanas e industriales, sobre todo de poblaciones pequeñas. Pero como pone de manifiesto la Ficha, el análisis de origen de la contaminación difusa por técnicas isotópicas concluye que el origen de la contaminación en la mayoría de los puntos de muestreos es el agrario al encontrar en más de la mitad de las muestras nitrógeno de origen inorgánico y de residuos animales (61% de las muestras en aguas superficiales y 55% en aguas subterráneas). Por tanto, parece lógico que pongamos el objetivo en cómo reducir esos excedentes.

Coincidimos con la alegante en que bandas de protección, asesoramiento y uso de nuevos productos deben ser medidas de carácter voluntario y adecuadamente compensadas. Y pensamos que el marco financiero de la PAC es la herramienta adecuada para ello. Lógicamente para que esto sea factible es necesarios que la administración competente en esta materia tenga interés en dotar a estos servicios ecosistémicos de la financiación adecuada.

Las herramientas de gestión de nutrientes ya son obligatorias a partir de la entrada en vigor del Real Decreto de nutrición sostenible de los suelos, por lo que esperamos que esta medida contribuya a la reducción de la contaminación cuando tenga el suficiente recorrido, ya que no será inmediato. El seguimiento de la contaminación en las redes de control de agua nos dará información sobre su eficacia.

El uso del digestato procedentes de plantas de biogas alimentadas con purines animales en lugar de la aplicación directa al suelo puede ser una mejora en la reducción de la contaminación siempre que haya transparencia en la aplicación, distribución y seguimiento y no supongan una mayor aportación de nutrientes al suelo. De hecho, la Ficha DU-01 señala que, para *el caso concreto de Castilla y León, que supone el 98,26 % de la demarcación del Duero, para el año 2021, 61.186 tn de nitrógeno de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 359.013 tn de N. Si se eliminase totalmente el desecho ganadero mediante plantas de biogás y no se sustituyese la fertilización orgánica en cultivos por inorgánica, se reduciría en un 17% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso del 50% de los excedentes de nitrógeno.*

Para el caso del fósforo y Castilla y León, para el año 2021, 13.736 tn de P de origen orgánico ganadero se aplican en cultivos, frente a unas entradas totales de 58.261 tn de P. En este caso, la eliminación del desecho ganadero mediante plantas de biogás supondría que se reduciría en un 23% las entradas de N en la superficie agrícola, lo que ocasionaría un descenso superior al 50% de los excedentes de fósforo.

La eliminación de la fertilización orgánica mediante revalorización y transformación en biogás de la deyección ganadera, sin sustitución por fertilización inorgánica, permitiría cumplir los objetivos de la UE de reducir un 20% el uso de fertilizantes y reducir un 50% los excedentes antes de 2030.

Respecto a la demanda de investigaciones científicas que analicen la comparativa y evolución de la contaminación difusa de origen agrario bajo distintos sistemas de regadío, consideramos que es un trabajo que no está hecho pero que no corresponde al MITERD al haber un ministerio y unas consejerías autonómicas competentes en materia agraria.

Alegación 10.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Estando de acuerdo en que debe buscarse en todo momento un aprovechamiento sostenible del recurso que mantenga las masas de agua, ya que esta es la forma de garantizar la seguridad de las explotaciones agrícolas, se deben fijar uno objetivos a alcanzar con unos valores definidos y razonables que garanticen la actividad económica que se viene desarrollando. Considerar la serie histórica de la piezometría de la masa como dato de partida a la hora de determinar las acciones a realizar supone definir un objetivo a alcanzar erróneo, enmascarar la realidad actual de la masa y no otorgar a las medidas que el usuario está llevando a cabo (digitalización, control de las extracciones, gestión por parte de las comunidades de usuarios, etc) la importancia que tienen. [..]

De la misma forma que se tiene un control sobre el uso del recurso, creemos necesario que se hagan estudios hidrogeológicos de detalle en los que, de forma pública y accesible a todos los interesados, se analice la situación real en estas masas de agua de las aportaciones al acuífero y su tasa de renovación […].

La mitigación de los efectos del cambio climático que se plantean sobre las masas de agua subterránea, se debe plantear, no desde la restricción de las extracciones, sino desde el control de las mismas y la ejecución de una serie de infraestructuras de reserva o acumulación que de forma progresiva permitan la sustitución de bombeos y otorguen garantía a la actividad económica en situaciones de escasez sin revertir la dinámica natural del acuífero.

Respecto a las alternativas que se plantean en el documento, estamos totalmente en desacuerdo con el núcleo central de todas ellas: el mantenimiento de las medidas normativas del plan hidrológico vigente para el nuevo ciclo de planificación, sobre todo en lo que se refiere a los artículos 33. [..]

Respuesta:

Los objetivos para las masas de agua subterránea son alcanzar el buen estado y evitar el deterioro, tal y como establece el artículo 4 de la Directiva marco de al Agua y el artículo 40 del TRLA. Ese buen estado para el objeto de la ficha DU-02 es que las extracciones no superen a los recursos naturales, simplificando. Este objetivo además redunda en beneficio de los usuarios del agua ya que el buen estado contribuye a un aumento de los niveles piezométricos que suponen menos costes de bombeo. Por tanto, el objetivo es claro. Y ante posibles colisiones de este buen estado con los usos, la propia directiva en su artículo 4(5) señala cuáles son los requisitos que deben verificarse:

a) que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende el uso del agua no puedan lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor que no suponga un coste desproporcionado;

b) que la administración proponente (en este caso la comunidad autónoma) garantice para las aguas superficiales, el mejor estado ecológico y estado químico posibles teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación,

c) que la administración proponente para las aguas subterráneas garantice los mínimos cambios posibles del buen estado de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación;

d) que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada.

Tal y como se plantea la alegación no queda claro si estos criterios se garantizan.

Conocer la realidad de las reservas subterráneas de agua es un aspecto clave en la adecuada gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Para ello el seguimiento de los casi 500 piezómetros de la cuenca ofrece una información muy valiosa. Gracias a esta información se concluye que en la actualidad la explotación del agua supone que en las masas de agua en mal estado cuantitativo se extrae entre un 10 y un 14% más de lo que se recarga anualmente por medios naturales, es decir, sacamos algo más agua de la que la naturaleza es capaz de reponer.

Como consecuencia los niveles del agua subterránea descienden ligeramente, incrementando los costes de producción del sector agrícola y poniendo en serio peligro la supervivencia del modelo socioeconómico actual y del entramado ecológico de la zona. Todo esto sin olvidar que, en las dos

últimas décadas del siglo pasado, estas masas sufrieron un descenso generalizado en sus niveles de agua de unos 30 metros, situación que ha repercutido en la merma de caudales en los ríos que se asientan sobre estas masas.

Por todo ello la Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto en marcha estudios en colaboración con distintos organismos como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Dirección General del Agua (DGA), para seguir mejorando en el conocimiento del estado actual de la masas de agua subterránea y proponer medidas que permitan la recuperación paulatina de las mismas, gracias al ahorro de agua con una correcta gestión agrícola y con medidas de recarga artificial, sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales, done sea posible, se mencionan este tipo de actuaciones porque están implantadas en algunas zonas de estas masas con resultados esperanzadores. De todas formas, en la ficha ya se proponen actuaciones de este tipo y otras. Toda esta información se vuelca en los planes hidrológicos, cada seis años, y en los informes de seguimiento cada año; además los datos de piezometría y calidad de las aguas subterráneas, así como los balances están disponibles en la base documental Mírame-IDEDuero que se puede consultar por cualquier ciudadano en la web de la Confederación (https://mirame.chduero.es/chduero/public/home).

No podemos compartir la petición de la alegante de eliminar todas las restricciones y limitaciones sobre las masas de agua en mal estado cuantitativo y, como alternativa, no poner ningún límite a nuevos usos del agua ya que, de aceptarlo, supondría no solo no alcanzar el buen estado sino también contribuir al deterioro adicional y, de forma añadida, perjudicar a los usuarios que ahora disponen de derecho vigente y que esperan la protección administrativa de su derecho.

Alegación 11.

DU-02.- Uso sostenible de las Aguas Subterráneas

Para la configuración del nuevo plan hidrológico se propone:

1.- La derogación de los artículos 33 y 34 de la actual normativa del plan hidrológico vigente y la reformulación de aquellos artículos relacionados para permitir la novación de todos los derechos inscritos que estén en explotación.

2.- Permitir la explotación de los aprovechamientos otorgados (incluso el otorgamiento de otros nuevos) dentro de aquellos espacios naturales o zonas protegidas conforme lo establezca la autoridad ambiental y con las características que documento de gestión correspondiente determine.

3.- Ejecución de aquellas infraestructuras que permitan la recarga de las masas de agua o la diminución de la presión sobre las mismas y estudios de detalle de determinadas zonas con mayores dificultades con la finalidad de dar soluciones que permitan mantener la actividad económica que se viene desarrollando.

4.- Control de las extracciones en toda la cuenca en la misma medida y con la misma intensidad que se exige a las CUAS.

5.- Revisión de las dotaciones brutas comarcales, su asignación y su configuración.

6.- Incentivar económicamente al usuario en la adopción de medidas e instrumentos tendentes a la mejora en el control de las extracciones o programas de digitalización que participen en el conocimiento y caracterización de la masa de agua.

7.- Establecer mecanismos de transferencia del conocimiento generado a nivel técnico y científico como programas de formación del usuario, plataformas de asesoramiento o redes de información, y establecer algún órgano que permita la participación del usuario de aguas subterráneas en la toma de decisiones que afectan a la cuenca.

Respuesta:

Como se ha indicado en la respuesta a la alegación anterior, los artículos 33 y 34 constituyen un régimen que permite alcanzar el buen estado de las masas de agua y evitar el deterioro. De una forma u otra, estos criterios se vienen aplicando en la demarcación hidrográfica desde 2010 y son parte de la explicación de que la tendencia descendente de la piezometría identificada en los años 1980 a 2008, se haya suavizado e incluso estabilizado.

En cuanto a lo que manifiesta el alegante de la prohibición de aprovechamientos otorgados, hasta la fecha no se ha prohibido su uso siempre que se ajusten a la legalidad. El otorgamiento de nuevos aprovechamientos en masas de agua en mal estado cuantitativo, entendemos que no contribuye en absoluto a una mejora de la situación, ni se ajusta a un uso racional, que asegure el futuro del regadío en dichas masas, sería como incentivar la vuelta a la situación de los años 80 y 90 del siglo pasado, con descensos del nivel piezométrico de 2 y 3 metros por año.

La recarga artificial de acuíferos es una práctica que se lleva haciendo es esta cuenca desde hace más de 20 años, las instalaciones que están en funcionamiento son objeto de visita y modelo a exportar a otros territorios, los usuarios de las mismas están altamente satisfechos, tal es así que en la más extensa de las existentes se está acometiendo una ampliación para aumentar la superficie potencial de riego asociada a esta instalación en unas 1000 ha. En el año 2010 la Confederación encargó un estudio para determinar áreas donde se pudieran implantar plantas de recarga artificial de acuíferos, teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos, disponibilidad de agua para recargar y otros aspectos. Para poder desarrollar estas técnicas de recarga tienen que confluir varios factores, unos dependientes de la naturaleza, y otros socioculturales, como aceptación por parte de los usuarios del mantenimiento de las instalaciones, financiación de las obras, etc.

Las balsas laterales para la regulación de aguas, excedentarias en invierno, nos parece una alternativa a tener en cuenta para el fin que propone el alegante, por lo que ya se contempla como medida en la alternativa 3 del EpTI, a la espera de que la autoridad competente pueda validarla y asumirla teniendo en cuenta todos los condicionantes: ubicación de estas infraestructuras, su proximidad a cauces con recurso suficiente, los costes de las obras, su financiación, y los costes de explotación y energía, pues la mayoría han de llenarse con bombeos,…; en definitiva muchos aspectos a valorar antes de tomar una decisión para acometer actuaciones de este tipo.

La instalación de contadores para el control de las extracciones de agua está regulada según La normativa española que obliga a todos los aprovechamientos de aguas a disponer de sistemas de medición de caudales, según el TRLA (art. 55.4) y el Reglamento del DPH. Esta obligación se ha reforzado con la Orden TED/1191/2024, que impone contadores homologados y control electrónico

con envío de datos. Los equipos deben cumplir normativa metrológica y adaptarse al tipo de captación. Como se ha explicado en diversos foros, esta Orden, así como la que ha sustituido de 2009, permiten que más del 80% de la demanda de agua de la cuenca pase por sistemas de control. Evidentemente los contadores de la categoría 1ª, que suponen poco volumen a escala de cuenca (menos del 20%) pero número muy alto, van progresivamente instalándose y remitiendo información.

Las dotaciones brutas máximas anuales aplicables en los cultivos por comarcas agrarias, que figuran en el Plan Hidrológico, están basadas en datos obtenidos de publicaciones de organismos públicos como son las distintas Consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, del Ministerio de Agricultura, y antes de su aprobación se someten a información pública, como todo el contenido del Plan Hidrológico. En el Anejo 5 del Plan Hidrológico vigente se explica el procedimiento para su cálculo: cálculo de la dotación neta a partir de las necesidades de los cultivos obtenidas de InfoRiego y de la distribución de los cultivos a partir de las declaraciones de la PAC de los años 2013-2019; cálculo de la eficiencia global: calculada como el producto de las eficiencias de transporte, distribución y aplicación; cálculo de la demanda bruta como el producto de la dotación neta por la superficie asignada entre la eficiencia global. Consideramos que es una información adecuada al proceder de fuentes oficiales y no sujeta a apreciación subjetiva.

Respecto a incentivar económicamente la instalación de contadores, el artículo 3 de la Orden TED/1191/2024 es muy clara al respecto al señalar que, en *todos los aprovechamientos de aguas,* ***los titulares están obligados a instalar y mantener un sistema de control volumétrico*** *que permita la medición de los volúmenes de agua captados, junto con un sistema de registro y almacenamiento.*

La Confederación no tiene competencias en materia de difusión y transferencia de tecnología. Normalmente da cuenta de los trabajos que realizad en el ámbito del dominio público hidráulico, seguridad y gestión de infraestructuras y planificación hidrológica en los foros ordinarios que otros agentes organizan: congresos de seguridad de presas, congresos de comunidades de regantes, jornadas de restauración de ríos, … Por otra parte, en el ámbito de las CUAs, anualmente se celebran reuniones técnicas de la Confederación con sus presidentes para aclarar conceptos y fomentar las buenas prácticas. Lógicamente no se invita a esas sesiones a las comunidades de regantes de aguas superficiales como la alegante que ya tiene su ámbito de representación en la Junta de Explotación Pisuerga-Bajo Duero.

Los usuarios del agua participan en la gestión de la cuenca a través de los órganos que están establecidos normativamente. Así el artículo 26 del TRLA identifica como órganos de gestión, en régimen de participación, las Juntas de Explotación. Su finalidad es coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las masas de agua cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Este es el marco en que los usuarios de aguas subterráneas pueden participar; de hecho, en la alternativa 1 de este tema importantes se establece como una de las medidas que podrían ponerse en marcha.

Alegación 12.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Ya hemos dejado claro en la introducción cuál es la situación demográfica y económica de nuestras zonas rurales, por lo que cualquier medida que se aplique en mejorar los problemas contenidos en la

ficha no debe empeorar la situación descrita. Si se mantiene la consecución de ese objetivo, no nos oponemos a que se puedan adoptar medidas que puedan mejorar la conectividad fluvial (longitudinal, lateral y vertical) que mejore el funcionamiento de los ecosistemas.

Del análisis de la ficha parece desprenderse una apuesta prioritaria por modelos intensivos de naturalización fluvial, basados en esquemas de restauración ecológica donde el cauce aparece acompañado por bosque de galería y bandas de vegetación herbácea en ambas márgenes, favoreciendo así la conectividad longitudinal y transversal de los flujos hídricos y sedimentarios [..] dicho enfoque puede resultar excesivamente homogéneo si no se tienen suficientemente en cuenta las particularidades geomorfológicas, históricas y territoriales de numerosos cauces [..]. Existen determinados tramos del Dominio Público Hidráulico que, en realidad, constituyen cauces profundamente transformados por la acción humana a lo largo de siglos, especialmente sobre antiguas llanuras lacustres o cuencas endorreicas sedimentarias desarrolladas durante el Pleistoceno.

En numerosos casos, los cauces actuales responden a procesos históricos de excavación y drenaje artificial desarrollados con el objetivo de desecar zonas inundables o lagunares y aprovechar agronómicamente las fértiles vegas originadas por procesos de colmatación sedimentaria. [..]. Por ello, en determinados sistemas hidrológicos altamente antropizados, la recuperación de modelos teóricos de naturalización podría requerir alteraciones territoriales de enorme magnitud, incompatibles en muchos casos con la realidad física actual, con los usos consolidados existentes y con los derechos legítimamente adquiridos sobre los terrenos adyacentes.

Asimismo, debe tenerse presente que sobre los terrenos colindantes con los cauces concurren frecuentemente derechos consolidados, singularmente derechos de propiedad privada, cuya eventual afección exigiría las correspondientes compensaciones y una adecuada justificación basada en criterios de proporcionalidad.

Respuesta:

Se agradece el comentario sobre la buena disposición para la mejora de los ecosistemas fluviales.

La normativa actual apuesta por una restauración fluvial que lleve a los ríos, lagos y humedales a una situación lo más similar a su situación original previa a la intervención humana. Esto permite crear entornos más resilientes a la contaminación y más seguros ante eventos extremos como inundaciones, entre otros, con las consiguientes ventajas para los seres humanos. Por situación original no se entiende una situación uniforme, sino adaptada a cada tipo de río. A modo de ejemplo, aquellos ríos con hidrología extrema no tienen asociado un bosque de ribera ya que periódicamente las avenidas lo arrastran, permitiendo únicamente la presencia de individuos jóvenes. Para estos ríos la existencia de una gran presencia de bosque de galería es síntoma de alteración del régimen hídrico, lo cual suele ocurrir, por ejemplo, aguas debajo de los embalses.

Si bien la alteración de los cauces se lleva haciendo desde antiguo, ha sido en el siglo XX donde se han producido las grandes actuaciones de drenaje y encorsetamiento del río. Las imágenes del vuelo americano del 56 así lo ponen de manifiesto, ya que muestran un grado de naturalidad de los cauces muy distinto al actual.

De acuerdo con la normativa y los documentos técnicos de planificación, una masa de agua superficial se puede designar como muy modificada (HMWB, por sus siglas en inglés) cuando, como consecuencia

de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza. Este "cambio sustancial" se entiende como una modificación de sus características hidromorfológicas que impide que la masa alcance el buen estado ecológico. Esto debe analizarse minuciosamente mediante distintas revisiones tasadas en la normativa, y así se ha hecho en los sucesivos planes hidrológicos. En el último, a modo de ejemplo, se han designado 186 masas de agua río muy modificados y se van a volver a revisar en este ciclo de planificación.

Cabe mencionar también que la propiedad privada no puede prevalecer sobre terrenos que, por sus características geofísicas, forman parte del cauce natural. La propiedad privada en zonas colindantes a ríos no es absoluta; está intrínsecamente limitada por la ley para garantizar la seguridad pública y la protección ambiental, como pone de manifiesto el tenor de los artículos 6 y 9 del RDPH, entre otros. La jurisprudencia del Tribunal Supremo avala que la Administración proteja el DPH sin indemnizaciones automáticas, ya que actuar sobre el cauce natural es una obligación legal para alcanzar el buen estado de las aguas, objetivo que constituye un interés público superior.

Alegación 13.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Parece razonable admitir la posibilidad de actuaciones de gestión activa y mantenimiento de la vegetación de ribera, aplicando criterios técnicos y silvícolas semejantes a los utilizados en otras masas forestales, especialmente cuando dichas actuaciones resulten necesarias por motivos hidráulicos, de seguridad, sanitarios o de conservación. […]

Se considera necesario que el instrumento de planificación hidrológica contemple la posibilidad de autorizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales, teniendo en cuenta sus características geomorfológicas, los usos preexistentes y los intereses legítimos concurrentes. […].

Especial atención merece la proliferación del carrizal y otras especies invasoras o expansivas, cuyo desarrollo puede reducir significativamente la capacidad hidráulica de desagüe y alterar el equilibrio ecológico de determinados tramos fluviales. Por ello, se considera conveniente que el futuro instrumento de planificación contemple expresamente medidas de control y gestión activa de este tipo de formaciones vegetales cuando existan razones hidráulicas, ambientales o de seguridad que así lo aconsejen.

Respuesta:

Los criterios técnicos y silvícolas utilizados en otras masas forestales no tienen por qué se similares a los que aplican a la vegetación de ribera, al ser el río un elemento diferenciador en su creación y modelado. Las mejores actuaciones para la mejora de las condiciones hidráulicas, de seguridad, sanitarias o de conservación, son las de restauración del río a su situación original, en la que su configuración, trazado, brazos secundarios y llanura de inundación permitan la laminación de avenidas o el filtrado de nutrientes y otras sustancias nocivas para la salud.

Se está de acuerdo en realizar actuaciones singulares adaptadas a la realidad concreta de determinados tramos fluviales. Así se hace, de hecho. No se abunda más ante la generalidad del comentario.

Independientemente de que en alguna circunstancia puedan aplicarse medidas de control activo de especies invasoras, se debe recordar que la restauración de la conectividad longitudinal y lateral, junto con la recuperación de la morfología natural del cauce, permite que el ecosistema funcione mediante mecanismos de control natural frente a especies invasoras. Un río con un hábitat naturalizado favorece el mantenimiento de las comunidades biológicas autóctonas, dificultando que las especies invasoras desplacen a los endemismos locales. La alteración del régimen natural de los ríos y la creación de aguas estancadas (paso de régimen lótico a léntico) son precisamente los factores que facilitan la proliferación de especies exóticas.

Alegación 14.

DU-04 Alteraciones Hidro Morfológicas y Restauración Fluvial

Respecto a las obras de cruce aéreo o subterráneo de infraestructuras sobre cauces públicos, se considera necesario que el nuevo Plan Hidrológico otorgue un mayor peso a los criterios técnicos e hidráulicos en la evaluación de las actuaciones proyectadas, evitando que el condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada. […]

En relación con las autorizaciones de obras en el Dominio Público Hidráulico, se considera igualmente conveniente admitir la aplicación del criterio de escala para el cálculo hidrológico de avenidas mediante el Método Racional Simplificado, así como permitir simulaciones hidráulicas basadas en levantamientos topográficos específicos realizados para cada actuación.

Finalmente, se considera de gran interés que la Confederación Hidrográfica del Duero establezca, de forma previa y suficientemente clara, criterios técnicos orientativos para la tramitación de autorizaciones relativas a puentes, pasarelas y otras obras sobre cauces.

Respuesta:

Los condicionantes ambientales son un requisito que establece la normativa actual. No se la idea por la que el "condicionante ambiental opere de forma absoluta o desproporcionada" en las actuaciones en cauce.

El uso del método racional simplificado para cálculos hidráulicos en la planificación se incluye en el Anexo XI del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Se remite a esta norma y no al plan hidrológico el resto de observaciones presentadas sobre autorizaciones de obras en cauce.

Alegación 15.

DU-05 Gestión del riesgo de inundación

Se considera razonable que el instrumento de planificación permita incorporar estudios hidrológicos e hidráulicos de mayor detalle, sustentados en levantamientos topográficos específicos, modelizaciones bidimensionales, campañas de campo y análisis hidráulicos adaptados a las características concretas de cada emplazamiento.

Este criterio de mayor precisión técnica debería poder extenderse también a la determinación de caudales de avenida, permitiendo ajustar los cálculos hidrológicos a las características reales de cada

cuenca vertiente y evitando la aplicación automática de metodologías generales cuando existan estudios específicos suficientemente justificados

Demandamos que cualquier actuación que se plantee, no cause perjuicio a la actividad económica implantada en el territorio.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, y sin perjuicio de lo ya señalado en este documento acerca del alcance propio del ETI, procede indicar que las cuestiones planteadas presentan indudable relevancia desde la perspectiva del adecuado diagnóstico del riesgo y peligrosidad de las inundaciones. No obstante, será en fase de redacción del PGRI cuando se revisen los modelos hidráulicos para establecer las medidas adecuadas para reducir el riesgo de las inundaciones.

Las modelizaciones hidráulicas e hidrológicas están en constante actualización y singularmente en las tres fases de elaboración de los de PGRI: fase de evaluación preliminar del riesgo, fase de elaboración de los mapas de peligrosidad y fase de plan de gestión del riesgo. La cartografía de peligrosidad del SNCZI simula escenarios estadísticos de eventos extraordinarios, como son las avenidas de media y baja probabilidad (100 y 500 años de periodo de retorno). El SNCZI exige que las simulaciones hidráulicas para delimitar el riesgo se realicen sobre la base del terreno en condiciones actuales ofrecidas por el modelo digital del terreno (MDT), manteniendo infraestructuras como azudes y puentes tal y como existen hoy. Ese MDT se obtiene por tecnologías suficientemente maduras que, con la previa revisión a su aplicación, ofrecen una información exacta y muy adecuada para el objetivo final.

Las medidas que el PGRI establezca tratarán de limitar los perjuicios a las actividades actuales; no obstante puede darse el caso de que haya actividades ubicadas en zonas inundables que cuenten con autorizaciones previas a la entrada en vigor del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y de los artículo 9 y 14 del RDPH; para ellas será muy difícil que cualquier medida que se establezca en el PGRI no entrañe perjuicio que, por otra parte, ya le causa la propia ubicación.

Alegación 16.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Las Comunidades de Regantes consideran positivo que el EPTI reconozca la relevancia estratégica del regadío en la cuenca del Duero […].

En su planteamiento identifican el problema principal que supone la escasa o nula regulación artificial en sistemas como el Carrión, el Órbigo, el subsistema Tuerto o el Cega. No obstante, el documento presenta un enfoque excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales, sin incorporar adecuadamente la dimensión económica, social y territorial del regadío.

No se puede achacar la reducción de aportaciones principalmente a los efectos del cambio climático. No podemos establecer un horizonte de cambio climático referido al año 2045, que resulta poco fiable.

Respuesta:

Los planes hidrológicos tienen que cumplir dos objetivos principales que generalmente entran en conflicto: por un lado, conseguir el buen estado o el buen potencial de todas las masas de agua y, por otro, satisfacer las demandas cumpliendo los criterios de garantía. En otras palabras, se trata de hacer un uso sostenible del recurso, equilibrando la protección de los ecosistemas relacionados con el medio hídrico con la satisfacción de las demandas. En el estudio de alternativas de las fichas DU-06 y DU-07 del EpTI, analizamos medidas que disminuyen la presión por extracción de agua (uso más eficiente del agua por modernizaciones) y medidas de mayor disponibilidad de recurso (aumento de regulación). Por este motivo, pensamos que el enfoque del EpTI no está excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales.

Efectivamente en el EpTI se reconoce la relevancia estratégica del regadío y creemos que su dimensión económica, social y territorial está debidamente incorporada.

Estamos de acuerdo en que la reducción de aportaciones no es debida solamente a los efectos del cambio climático. Probablemente también existe reducción de aportaciones por los cambios en los usos de suelo, pero no tenemos información suficiente que nos permita evaluar la magnitud de esta reducción.

El establecimiento de un horizonte de cambio climático en el que se modelan demandas futuras y recursos naturales afectados por cambio climático para calcular sus balances es un requisito de la legislación (Reglamento de Planificación Hidrológico, art.11.4 y art. 21.4). En los planes de 4º ciclo el horizonte de cambio climático corresponde al año 2045 pues se incrementa en 6 años el del plan vigente, que era 2039.

Alegación 17.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Resulta incuestionable que las modernizaciones llevan implícita una reducción del uso del agua, por lo que no se deben añadir mayores presiones sobre el uso del agua. Las inversiones llevadas a cabo también por los propios agricultores están siendo muy importantes, además de la recuperación de costes que vía tarifas de utilización del agua ya contribuyen.

La modernización no debe utilizarse como instrumento indirecto de reducción de concesiones ni de actividad agraria, sino como herramienta de mejora de eficiencia, productividad y sostenibilidad.

En general, se demanda que las mejoras de eficiencia y modernización permitan atender más demandas y generar mayor valor económico y social con el mismo volumen global de agua, sin incrementar necesariamente la presión neta sobre los recursos hídricos. La eficiencia debe medirse no solo por reducción de consumos, sino también por productividad, generación de empleo, estabilidad territorial y capacidad de adaptación climática.

Respuesta:

En relación con las consideraciones formuladas, el EpTI contempla la modernización de regadíos como una medida prioritaria de adaptación orientada a mejorar la eficiencia en el uso del agua, la garantía de suministro y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias existentes. En este sentido, se reconoce

el esfuerzo inversor realizado por el sector, así como su contribución a una gestión más racional del recurso y a la recuperación de costes del sistema.

No obstante, debe precisarse que la mejora de la eficiencia no implica, por sí misma, una reducción automática de los volúmenes concesionales ni constituye un instrumento indirecto de minoración de la actividad agraria, sino que su tratamiento en la planificación hidrológica responde a un análisis caso por caso. Así, los eventuales ahorros derivados de la modernización no se someten a penalizaciones automáticas, pero tampoco pueden destinarse de manera generalizada a la generación de nuevas demandas si ello implica un incremento neto de la presión sobre las masas de agua.

En coherencia con ello, el EpTI establece que dichos ahorros deben contribuir, prioritariamente, a consolidar la sostenibilidad del uso existente y a evitar incrementos de presión que puedan comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales o el equilibrio del sistema hídrico. Solo en aquellos supuestos en los que exista disponibilidad efectiva del recurso y se acredite la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de las actuaciones, podrán considerarse desarrollos adicionales, siempre de forma compatible con la consecución del buen estado de las masas de agua y el mantenimiento de los caudales ecológicos.

Finalmente, si bien se comparte que la eficiencia puede valorarse desde una perspectiva amplia —incluyendo aspectos como la productividad, la generación de valor económico o la resiliencia territorial—, en el ámbito de la planificación hidrológica dicha eficiencia debe necesariamente integrarse con el principio de sostenibilidad ambiental, lo que exige que cualquier mejora en el uso del recurso no se traduzca en un aumento de las presiones que comprometa los objetivos establecidos por la normativa vigente.

Alegación 18.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Si bien el plan hidrológico en vigor descartó el incremento de nuevos regadíos, sí es posible esa ampliación en sistemas concretos con cultivos con un uso muy reducido del recurso, como por ejemplo en el sistema Riaza-Duratón y otros sistemas, donde sí es posible ampliación de superficie de riego con el mismo volumen de agua ahora establecido.

Respuesta:

En relación con la alegación formulada, cabe señalar que, si bien el vigente plan hidrológico estableció, con carácter general, la no previsión de nuevos desarrollos de regadío, el Esquema de Temas Importantes (ETI) contempla que determinadas situaciones específicas puedan ser objeto de análisis individualizado, particularmente en aquellos sistemas en los que concurran circunstancias singulares desde el punto de vista de la disponibilidad y gestión del recurso y, además, las autoridades competentes (MAPA o Comunidades Autónomas) plantearon nuevos regadíos que cuentan con amparo legal. En este aspecto el organismo de cuenca no puede proponer nuevos regadíos cuya autoridad competente no avala o, siendo avalados, no cuenta con garantías suficientes o amparo legal de la planificación sectorial.

No obstante, debe precisarse que los eventuales aumentos de superficie destinada al regadío no pueden valorarse exclusivamente desde la perspectiva de un mantenimiento del volumen total de

extracción, sino que han de analizarse de forma integral considerando el conjunto de presiones que la actividad agraria genera sobre las masas de agua. En particular, el incremento de superficie regable puede implicar efectos relevantes sobre el régimen hidrológico, el retorno de flujos, la calidad de las aguas, la contaminación difusa o la alteración de los caudales ecológicos, incluso en aquellos supuestos en los que el consumo unitario por hectárea sea reducido.

En este sentido, el ETI incide en la necesidad de abordar la sostenibilidad del regadío desde un enfoque global, que tenga en cuenta no solo la eficiencia en el uso del agua y el volumen derivado, sino también la evolución de las presiones significativas y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Por ello, la eventual ampliación de superficies regables —incluso en sistemas concretos como el Riaza-Duratón— debe someterse a una evaluación específica que acredite su compatibilidad con la consecución del buen estado de las masas de agua, el mantenimiento de los caudales ecológicos y la ausencia de deterioro adicional del dominio público hidráulico.

En consecuencia, no resulta procedente establecer, con carácter general, la posibilidad de ampliar superficies de regadío bajo el único condicionante de mantener el volumen global actualmente asignado, sino que cualquier propuesta en este sentido deberá justificarse caso por caso, en el marco del proceso de planificación hidrológica y de conformidad con los principios de sostenibilidad, cautela y no deterioro que rigen la gestión del recurso.

Alegación 19.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

Respecto al tema importante DU-06, la alegante valora positivamente que el EPTI reconozca la modernización del regadío como la medida esencial de adaptación al cambio climático y mejora de la garantía de suministro. De las dos alternativas que se propone como factibles (5 y 6), muestran preocupación por determinados planteamientos relacionados con:

- *Limitaciones automáticas de concesiones*
- *Restricciones indirectas de superficie regable*
- *Incremento de costes para los usuarios*
- *Traslado excesivo del esfuerzo inversor a los regantes*
- *Cierre definitivo del mapa de nuevos desarrollos de regadíos.*

Asimismo, las Comunidades de Regantes consideran imprescindible priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y con baja garantía hídrica, especialmente en zonas como Carrión, Órbigo, Tormes, Eria, Curueño o Duerna.

Igualmente, se considera necesario garantizar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas, especialmente ante el horizonte de 2035. [..]

Las actuaciones vinculadas al regadío presentan, por tanto, muy bajos niveles de ejecución, especialmente en modernización de regadíos, infraestructuras hidráulicas y regulación. Esta situación genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban.

Respuesta:

La Ficha DU-06 al elegir las alternativas 5 y 6 señala ambas alternativas permiten avanzar en medidas de modernización de regadíos que manteniendo la competitividad de las explotaciones con ligeros ajustes de las dotaciones adaptadas a la mejora que suponen las infraestructuras, permitan ampliar la superficie de regadío en la cuenca. Las comunidades de regantes en esta materia han ido modificando su posición, si es que se puede hablar de una posición común: de pasar en el plan de primero y segundo ciclo a demandar el cierre del mapa de cultivos en la demarcación hidrográfica, postulan a hora la necesidad de ampliar el regadío. Desde el punto de vista de la garantía y dadas las limitaciones reales existentes para ampliar la oferta, toda ampliación de superficie de regadío conlleva un reajuste del regadío existente, de manera que solo por la vía de la mejora de la eficiencia de puede atender a todas las demandas.

Que las concesiones deban modificarse como consecuencia de las actuaciones de mejora de la eficiencia del uso no es una exigencia del plan hidrológico sino de la propia normativa de aguas, por ejemplo, en aplicación de los artículos 65 del TRLA, al señalar que las concesiones podrán ser revisadas cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento, a petición del concesionario o cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. En concreto, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. En el primer criterio del artículo 65 para revisar una concesión se encuentra el hecho de que, por ejemplo, se esté regando más superficie (o menos) de la que ampara el título concesional, a lo que se refiere el alegante como “restricciones indirectas de superficie regable”.

En efecto, el EpTI (y el propio plan hidrológico vigente) ha dado prioridad a las actuaciones en puntos donde hay déficit estructural como Carrión y Órbigo. En la actualidad no hay déficit en el sistema Tormes. Los casos de Eria, Curueño o Duerna son nuevos en el presente ciclo de planificación hidrológica y nos parecen más un empeño de determinadas asociaciones de regantes que de los propios usuarios de estos ríos. De hecho, para el Duerna se estableció una reserva de agua en el plan hidrológico vigente para mejorar las garantías de los riegos del valle, reserva que no se ha materializado por falta de capacidad de los usuarios en agruparse de manera reglada. En el caso del Eria solo los de la parte baja del Área han promovido una CUAs con el fin de organizar mejor el uso del agua.

El EpTI no tiene capacidad para modificar la seguridad jurídica respecto a derechos concesionales y derechos privados históricos en aguas subterráneas que otorga la ley, especialmente ante el horizonte de 2035, ni puede ampliar esa seguridad ni disminuirla. Es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas. Lo que el EpTI señala es que estos derechos cuando sean en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, si éstas no alcanzan su buen estado en 2035, será muy difícil que puedan mantener su status actual, ya que en las citadas DT se indica que en todo caso, a esos aprovechamientos de aguas les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico. Por tanto, el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

Como se pone de manifiesto en la Ficha del tema importante DU-09, las actuaciones vinculadas al regadío (modernización de regadíos y nuevos regadíos) cuya autoridad competente es la administración agraria del Estado y de las comunidades autónomas, presentan un nivel de ejecución del 20 y del 27%, respectivamente; por su parte el grupo de infraestructuras hidráulicas presenta una ejecución del 13% de la inversión. Esta situación, como indica la alegante, genera una creciente falta de credibilidad en lo reflejado en los documentos que marcan la planificación hidrológica y en quienes los aprueban; de hecho, en el tema importante DU-09 se insiste en este aspecto llamando a la responsabilidad de las autoridades competentes para que asuman las medidas que han validado en cada ciclo de planificación hidrológica.

Alegación 20.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad

En las alegaciones a la revisión del plan 2022-2027 se propuso una tabla de asignaciones máximas que creemos que debe ser revisada de acuerdo a las dotaciones que se vienen aprobando en las campañas de riego coincidentes con el período de desarrollo de dicho plan y que deberían ser las siguientes:

SISTEMA	ASIGNACIÓN MÁX
PISUERGA-BAJO DUERO	6.000
CARRIÓN	5.000
TORMES	6.000
ÓRBIGO	6.000
PORMA	6.000
ADAJA	4.900
ALTO DUERO	6.000
RIAZA	6.000
ESLA (RIAÑO)	6.000
ARLANZÓN	6.000
TUERTO	4.500
TERA	6.000
ÁGUEDA	6.000

Partiendo de esta base, el objetivo que debemos perseguir es que se adopten las medidas oportunas para que todos los sistemas de explotación estén en las mismas condiciones y cuenten con idéntica disponibilidad (que ciframos en 6.000 m^3/ha), para lo cual tendríamos que incluir en el programa de medidas las actuaciones necesarias que nos permitan situarnos en ese escenario de igualdad.

Respuesta:

La propuesta que se hace en la alegación se ha tenido en cuenta en el EpTI, singularmente en la alternativa 5, ofreciendo los resultados de esta alternativa respecto al resto. A la vez hay que decir que adoptar este criterio para las dotaciones supondría llevar a algunas de las demandas de determinados sistemas de explotación al incumplimiento generalizado de garantías, como por ejemplo Alto Duero, Adaja o Tuerto. Tampoco se explica bien en la alegación por qué motivo, siguiendo el argumento de la alegante, se debe asegurar una dotación de 4.500 m^3/ha año en el Tuerto o 4.900 m^3/ha año en Adaja, frente a 6.000 m3/ha año de muchos de los sistemas de explotación; y tampoco por qué 6.000 m^3/ha

año en toda la cuenca: ¿maneja el alegante algún estudio estadístico que justifique esa dotación?; si es la dotación a la que tradicionalmente se ha tendido, ¿por qué ha de mantenerse en sistemas modernizados con elevadas eficiencias de uso del agua?; ¿se pretende, con esta propuesta, dar carta de reconocimiento a determinados agentes que afirman que la modernización de regadíos en España no contribuye a reducir las presiones sobre las masas de agua sino a incrementar la demanda y que por ello, debería anularse la financiación con fondos públicos?

Por otra parte, la propuesta no atiende al criterio agronómico de las necesidades hídricas de los cultivos de cada sistema de explotación, como se pone de manifiesto, por ejemplo, comparando la dotación del Sistema Órbigo con la del Sistema Adaja, o pensando que la demanda de un cultivo en Soria puede ser comparable a la del mismo cultivo en Toro. La propuesta que se hace en el escrito, en un deseo de homogeneizar el suministro de agua cuando se paga lo mismo por superficie, atiende sobre todo a las reservas que existen en cada Sistema, lo que invalidaría el análisis de garantía que se establece de acuerdo con los epígrafes 3.5.1 u 3.5.2 de la IPH.

Entendemos que la demanda de la alegante obedece a que todavía se pagan cánones y tarifas no en función del consumo sino de la superficie regada, sistema que no disuade al usuario de ser eficiente. De cualquier modo, se analizará en fase de redacción del plan hidrológico la viabilidad de la propuesta, con el fin de que pueda atender a dos criterios simultáneos: la realidad agroclimática de cada zona y el hecho de que el pago de cánones y tarifas se haga por superficie regada en vez de volumen utilizado.

Alegación 21.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

1.- En primer lugar y en tanto en cuanto no se adopten las medidas que puedan mejorar la garantía de todas las UDAs, se debe mantener la vigencia del art. 15.8 del plan vigente "Dotaciones orientativas máximas en los sistemas de explotación regulados: En aplicación del artículo 55 del TRLA, el organismo de cuenca para los sistemas que cuenten con regulación, una vez consultadas las correspondientes Juntas de Explotación, fijará anualmente dotaciones orientativas máximas de agua en función de las reservas existentes y en coherencia con las propuestas sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses de la Comisión de Desembalse, a las que deberá adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Estas dotaciones podrán ir modificándose anualmente en función de las reservas realmente existentes".

2.- En relación con el apartado anterior, abogamos porque las propuestas de dotaciones elevadas por las Juntas de Explotación a la Comisión de Desembalse y aprobadas por esta última se apliquen por igual a todos los usuarios del sistema en cuestión, sean canales del Estado o regadíos concesionales, no sólo en años de sequía (donde se puede aprobar un Real Decreto-ley que lo regule), sino también en años de normalidad, para que todos los usuarios del mismo Sistema tengan a disposición idénticos caudales.

Respuesta:

Las cuestiones que se sugieren no son parte del EpTI, sino que corresponden más bien a la fase de elaboración del Plan Hidrológico, que contará con un período de consulta pública donde podrán hacerse sugerencias sobre la parte Normativa del Plan Hidrológico.

Alegación 22.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

3.- La mejora de la eficiencia del regadío mediante la modernización de sus infraestructuras y un leve incremento de la regulación son las estrategias más adecuadas. Por parte de los usuarios, también se debe perseguir aplicar todas las medidas y prácticas agrarias que mejoren la gestión sostenible del recurso y consigan un ahorro de agua.

4.- Caudales ecológicos: su implantación y cumplimiento (casi del 100% en nuestra cuenca de acuerdo a los informes anuales presentados a la Comisión de Desembalse) contribuyen a la pérdida de garantía en la satisfacción de las demandas en las UDAs con más déficit hídrico. En este sentido, debemos de poner de manifiesto que no consideramos justificada la obligación de mantener los caudales mínimos definidos para situación de normalidad en situación de sequía prolongada en las zonas incluidas en la red Natura 2000 (LIC, ZEPA, etc) o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, tal como establece el RPH (art 18.4). La situación de sequía prolongada obedece a causas naturales y, por tanto, no se encuentra justificación para esta salvedad. Teniendo en cuenta que se trata de una prescripción de carácter reglamentario, su modificación debe plantearse en una disposición de igual o superior rango, como puede ser el Real Decreto de aprobación de los planes de cuarto ciclo. Por ello se considera de interés plantear esta modificación como medida en los programas de medidas de los planes de cuarto ciclo, con la tipología de instrumento general.

De igual modo, en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse.

Respuesta:

El diagnóstico del EpTI coincide con la primera propuesta de la alegante. No ocurre lo mismo con la segunda propuesta: el artículo 18 del RPH señala que en *caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971. En estas zonas se considerará prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, aunque se aplicará la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones.* Y el artículo 49 quáter del RDPH señala que *en los ríos que cuenten o puedan contar con reservas artificiales de agua embalsada, se exigirá el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos aguas abajo de las presas conforme a lo previsto en la disposición*

transitoria quinta y cuando la disponibilidad natural lo permita. A tal efecto, el régimen de caudales ecológicos no será exigible si el embalse no recibe aportaciones naturales iguales o superiores al caudal ecológico fijado en el correspondiente plan hidrológico, quedando limitado en estos casos al régimen de entradas naturales al embalse. No obstante, el régimen de caudales ecológicos será exigible, siempre y en todo caso, cuando exista una legislación prevalente como la aplicable en Red Natura o en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de acuerdo de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, en la que se establece la prevalencia del caudal ecológico frente al uso. Por ello la propuesta de la alegante contradice ambas disposiciones, por lo que no es posible atenderla.

Alegación 23.

DU-06 Relevancia del regadío y sostenibilidad. Propuestas de medidas

Para conseguir estos fines, planteamos las siguientes propuestas:

5.- Revisión del Convenio de Albufeira: […], volvemos a reivindicar las propuestas planteadas en el escrito dirigido a la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en septiembre de 2022, motivado por el conflicto suscitado por la suelta de agua de embalses de regadío para poder cumplir con los compromisos reflejados en el Convenio de Albufeira. Seguimos demandando una reducción de la aportación semanal, trimestral y anual en los diferentes puntos de control, así como subir el umbral de precipitación al 70% sobre la media interanual, para que si en períodos de sequía prolongada la precipitación bajase de ese umbral, podamos entrar en excepción.

Respuesta:

Es importante resaltar que el convenio de Albufeira es un tratado internacional establecido entre dos países, España y Portugal, con la finalidad de dar coherencia y continuidad a tratados anteriores en lo que se ha buscado a lo largo de los siglos limitar los conflictos fronterizos entre ambos países.

Como se indica en la Ficha DU-09, entre las decisiones a tomar en relación con el Convenio de Albufeira, se encuentra analizar las divergencias entre las planificaciones española y portuguesa para ofrecer soluciones conjuntas a las masas de agua compartidas y los indicadores de sequía y escasez de ambos países para tratar de integrar ambos diagnósticos en uno. Esta última decisión viene avalada por los memoranda de entendimiento entre España y Portugal de las cumbres hispano-lusa de 2023, 2024 y 2026, en las que ya se está trabajando por ambos países. Más allá de esa voluntad de mejorar el diagnóstico de los criterios de excepción, y armonizar los indicadores de sequía y escasez, corresponde a otras instancias promover los cambios del Convenio que considere oportunos.

Alegación 24.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Infraestructuras

Para conseguir la sostenibilidad del regadío reflejada en la ficha anterior, las Comunidades de Regantes solicitan que, de manera genérica el futuro Plan Hidrológico incorpore las siguientes medidas:

- *Incrementar las inversiones públicas en modernización y digitalización*
- *Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.*
- *Priorizar actuaciones en sistemas deficitarios y zonas vulnerables*

- *Impulsar balsas laterales y actuaciones de regulación complementaria*
- *Dotar presupuestariamente las actuaciones del plan*
- *Mejorar infraestructuras hidráulicas y redes en alta*
- *Favorecer el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas*
- *Flexibilizar tarifas energéticas adaptadas a la estacionalidad del riego*
- *Mantener la seguridad jurídica concesional*
- *Establecer programas reales y ejecutables con financiación suficiente*
- *Realizar limpiezas periódicas de cauces y desagües como medida de seguridad y bienestar para la población rural.*

Respuesta:

Entre las propuestas heterogéneas que hace la alegación, algunas caen fuera de la competencia del agua (tramitación ambiental, tarifas energéticas); otras están incorporadas a las Fichas del EpTI (incrementar inversiones en modernización en la Ficha DU-06, centrarse en actuaciones en sistemas deficitarios en la Ficha DU-07, impulsar sustitución de bombeos con aguas subterránea en la Ficha DU-02, fomentar utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas en la Ficha DU-06, modernizar infraestructuras de riego en alta en Ficha DU-07). Respecto a la seguridad jurídica concesional, como se ha dicho en la respuesta a la alegación 19, es el propio TRLA, en sus DT segunda, tercera y cuarta, quienes establecen cómo debe abordarse los derechos procedentes de la ley de aguas de 1879 que estén inscritos en la Sección C del Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas; el EpTI no hace sino explicitar lo que ya regula el TRLA.

En la Ficha DU-09 se aborda el tema importante de la financiación del Programa de medidas. El Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Estas autoridades deben dar la conformidad al programa de medidas para lo cual, cada una internamente, habrá debatido la capacidad y conveniencia de asumir cada medida. Por tanto, los mecanismos formales para asegurar la ejecución del Programa de medidas existen y desde el ámbito de la planificación hidrológica sólo se puede recalcar que estos mecanismos no deben ser simplemente formales sino también reales. La propia Ficha DU-09 describe el problema que describe la alegante y también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social.

Sin duda la mejora de las condiciones hidrológicas de cauces es una tarea de gran peso en la cuenca a la que el Organismo de cuenca dedica anualmente entre 4 y 6 millones de euros, posiblemente escasos para las necesidades crecientes, a labores de mantenimiento de cauces. El Programa de medidas del plan hidrológico vigente incluye un paquete de medidas de este tipo. Pero evidentemente no puede llegar a atender eficazmente a los más de 80.000 kilómetros de ríos y arroyos de la cuenca y actúa con criterios de conveniencia y racionalidad económica. Para paliar esta desproporción entre necesidades y posibilidades reales, tanto en el Plan vigente de 2023 como en el anterior de 2016, se incluyó un procedimiento más ágil para acometer determinadas labores de mejora de las condiciones de desagüe de los cauces. Así en el artículo 30 de la Normativa se establece el sistema de declaración responsable para las denominadas *actuaciones menores de conservación de cauces y zonas de policía*. El mismo artículo hace un elenco de las que pueden considerarse actuaciones menores:

I. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera.

II. Retirada de árboles muertos y podas selectivas manuales de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce.

III. Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del dominio público hidráulico.

IV. Retirada de sedimentos y vegetación existente en el lecho del cauce, situados 50 metros aguas arriba y aguas abajo de las obras de fábrica y puentes con el fin de conservar su capacidad de drenaje.

V. Pequeñas actuaciones de mantenimiento de puentes e infraestructuras situadas sobre el cauce, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas no haya ocupación del dominio público hidráulico ni quede afectada su capacidad de desagüe.

VI. Mantenimiento de las secciones de estaciones de aforo.

VII. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos.

VIII. Cortas de arbolado bajo líneas eléctricas.

Para todas estas actuaciones la declaración responsable habilita el poder actuar por los particulares sin esperar a ninguna Resolución de la CHD, lo que agiliza notablemente la actuación.

Alegación 25.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Modernizaciones a ejecutar

Si tenemos en cuenta el período restante del plan vigente y el horizonte temporal de la revisión relativa al período 2028-2033, deberíamos modernizar los regadíos pendientes cuya modernización ya está aprobada y que son los siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES	IMPORTE ESTIMADO CONVENIO MAPA-SEIASA (€ sin IVA)
PEPAC CYL y otros planes	
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)	30.000.000
Canal de Ines-Eza Fase II (Soria)	7.000.000
Canal del Esla (León)	150.000.000
Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta (Palencia)	160.000.000
Bajo Tuerto – Sindicato Central Embalse Villameca (León)	25.000.000
Castañón, Cerrajera y Regueras (León)	65.000.000
Canal de la Retención (Palencia)	47.000.000
Canal de Villalaco (Palencia)	54.000.000
Canal de Manganeses (Zamora)	40.000.000
Margen Derecha del Tera (Zamora)	100.000.000
San Salvador - Valverde de Ágreda (Soria)	15.000.000
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)	40.000.000
Alija del Infantado (León)	15.000.000
TOTAL (€ sin IVA)	**748.000.000 €**

Para poder conseguir este objetivo tienen que ser tenidas en cuenta dos reivindicaciones que trasladamos al Gobierno de España:

1.- Aumentar el capital social de la SEIASA a la cantidad de 300 M€ anuales por cada uno de los años de duración del plan.

2.- Simplificar los trámites de evaluación ambiental en el proceso de modernización de los regadíos existentes.

Respuesta:

La alegación aporta dos cuestiones muy relevantes para impulsar las medidas del vigente Plan Hidrológico. Estando de acuerdo con la segunda (simplificación y agilidad en los trámites de evaluación ambiental de los proyectos de modernización del regadío) la realidad es que las modificaciones legales llevadas a cabo recientemente no van en esa línea; así la modificación de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, más reciente (de 6 de noviembre de 2025) reduce los límites de superficie de modernización de regadío para que la evaluación ambiental sea ordinaria. Esto parece indicar que por parte del legislador hay una sospecha de que los proyectos de modernización podrían suponer presiones adicionales sobre el medio ambiente, quizá debido a determinados proyectos ya ejecutados que no han sido todo lo respetuosos que cabría esperar. Por ello la norma legal es la que es y, en tanto no se modifique, debemos atenernos a ella, no siendo el EpTI competente para su modificación.

La Ficha DU-06 incide en la primera parte de la alegación al apostar por una mayor intensidad de la modernización del regadío que, lógicamente pasa por la adecuada financiación que debe validar e impulsar la autoridad competente con tutela sobre la SEIASA.

Recordamos que no todas las zonas regables que se citan en la alegación disponen de medida de modernización de regadío en el Plan vigente. Como se sabe el Programa de medidas de cada plan hidrológico se confecciona con las aportaciones de las autoridades competentes en materia de aguas, cada una en su ámbito, tal y como establece el artículo 79 del RPH. En esas aportaciones de cada

administración competente figura la medida, el coste, el plazo de ejecución en el que estima posible la implantación y el marco financiero para poder acometer las medidas aportadas. Con las aportaciones de cada autoridad se ofrece también su techo de gasto para las medidas del Plan de manera que el plan inversor que supone el Programa de medidas sea realista y encaje en las disponibilidades presupuestarias de cada departamento. Cuando se confeccionó el Plan vigente de manera específica se solicitó al MAPA la previsión de actuaciones de modernización en los seis años de vigencia del Plan. En la relación de actuaciones que iba a acometer el MAPA no estaban las siguientes:

NUEVAS ACTUACIONES
Vega de Abajo, el Moro y Reguero Grande (Órbigo Medio, León)
Canal del Esla (León)
Cerrajera (León)
Canal de Villalaco (Palencia)
Canal de Manganeses (Zamora)
Margen Derecha del Tera (Zamora)
Órbigo Alto: Canal de Carrizo y otras (León)
Alija del Infantado (León)
TOTAL (€ sin IVA)

Y como tales no pasaron al Programa de medidas para su ejecución por el MAPA sino para su ejecución por la comunidad autónoma y los usuarios. Probablemente el MAPA no las incluyó en su programación porque la comunidad autónoma no manifestó interés por ellas ya que la mayoría no contaban con acuerdos en sus asambleas generales para acometer la modernización. Aunque el EpTI ha tenido en cuenta en sus análisis las modernizaciones que figuran en el Programa de medidas independientemente de su agente financiador, de cara al nuevo Plan Hidrológico conviene aclarar que sólo formarán parte de las medidas aquellas actuaciones que así se determine por las autoridades competentes (MAPA o comunidad autónoma). De la Presa de Regueras, Bajo Tuerto y del Canal de la Retención ni siquiera hay medida de modernización ya que ninguna autoridad competente las ha reclamado. Valverde de Ágreda está fuera de la demarcación hidrográfica del Duero, por lo que es lógico que no figure entre las medidas del Plan Hidrológico ni ahora ni en el futuro.

Alegación 26.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Mejora infraestructuras

Propuestas:

1.- Solicitar a la Dirección General del Agua una dotación presupuestaria de 150 M€ en el período 2028/2033 para hacer frente a estas reformas, conseguir el estado óptimo de las infraestructuras para poder llevar a cabo la correcta gestión del recurso.

2.- La situación actual de la agricultura no pasa por sus mejores momentos, motivado por los elevados precios de los insumos, los bajos precios de mercado de los productos y las grandes inversiones realizadas en modernización de las infraestructuras de riego y el amueblamiento de parcelas. Por eso se solicita, buscar fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras.

Respuesta:

Como se indica en la Ficha DU-09 y con respecto a la propuesta sobre la financiación de la DGA, se recuerda que el Plan vigente incluyó una inversión de 350 millones de euros en infraestructuras, nuevas y modernización de las existentes, cuya ejecución según la misma Ficha es de un 13% a final de 2024 que sube hasta un 19% a final de 2025, valor realmente exiguo. Pese a estar previsto es necesaria una evaluación de los motivos de este retraso que se ponen de manifiesto en la Ficha y que deben ser removido. La propia Ficha también propone tomar decisiones para corregir estas fallas como son:

Compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución.

Un marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios

No es nueva esta cuestión, que se ha puesto de manifiesto en ciclos anteriores, y sin embargo todavía no se ha resuelto adecuadamente, como pone de manifiesto el grado de avance de las medidas del plan vigente; y esta demora no siempre obedece a cuestiones presupuestarias sino a otros problemas de carácter administrativo, ambiental o social. No obstante, en atención a la alegación se incluye una nueva decisión sobre la rendición de cuentas.

Los mecanismos de rendición de cuentas están formalmente delimitados en el ámbito administrativo, por ejemplo, con la regulación que se incluye en los artículos 87 y 88 del RPH. Pero este ámbito es meramente administrativo y no político, que tiene sus propios itinerarios.

Respecto a sistema de financiación alternativos a los que establece la Ley de Aguas para este tipo de infraestructuras, nada puede aportar el EpTI ya que se trata de una cuestión regulada por la propia Ley y a allá debe atenerse.

Alegación 27.

DU-07 Optimización de la gestión de la oferta de Recursos Hídricos – Obras de regulación:

Propuestas:

1.- Sistema Carrión: es uno de los más deficitarios de la Demarcación y urge acelerar los trámites para proceder a la ejecución de La Cueza 1 y La Cueza 2,[…].

2.- Sistema Tormes: […]. De momento, están puestas en Explotación unas 10.000 has entre La Armuña II y la Zona de Arabayona, lo que colocaría la superficie de la zona regable dependiente del embalse de Santa Teresa en el entorno de 35.000,00 has. La planificación ya prevé el desarrollo de otras 12.000 has más en La Armuña III y IV, que sí podrían ser asumidas por dicho embalse, pero en el caso de que se llegase a plantear alguna ampliación más en el futuro, resultaría necesario estudiar el recrecimiento del embalse para garantizar la satisfacción de todas las demandas (además del regadío, abastecimientos, caudales medioambientales y otros usos)

3.- Sistema Órbigo: […] nuestras propuestas pasan por el cambio de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al Sistema Tera (podríamos conseguir un ahorro de unos 12 Hm3) y la

construcción de la balsa lateral de La Rial con llenado por gravedad desde el río Omaña (su capacidad está prevista en 23 Hm3).

Dentro del Sistema Órbigo tenemos el Subsistema Tuerto, […], proponemos las siguientes actuaciones: urgente puesta en explotación del embalse de Villagatón, estudiar un posible recrecimiento del embalse de Villameca y reparar el acueducto del trasvase de Valdesamario para mejorar su capacidad hidráulica y contribuir así al mejor llenado de Villameca en cada campaña.

Río Duerna: […] las 4.000 has que se nutren de este río, junto con el Peces, que discurre paralelo antes de desembocar ambos en el Tuerto, subsisten a duras penas. Para asegurar la pervivencia de este regadío, proponemos varias actuaciones:

- *Siembra de agua, derivando en invierno el caudal a las zayas, que son más filtrantes y permiten recargar el acuífero (se podrían acumular unos 2 Hm^3) para poder ser utilizado en campaña junto con el agua del río hasta la llegada del estiaje.*
- *Estudiar la posibilidad de balsas laterales derivando caudal del río Duerna en época invernal para ser utilizadas en verano.*
- *Estudiar la alternativa de un embalse de cabecera con una capacidad menor a los 28 Hm3 que estaban previsto en el proyectado en Chana de Somoza.*

Idénticos planteamientos podríamos someter a estudio para consolidar la zona regable dependiente del río Eria.

4.- Sistema Esla Valderaduey: para este sistema se pueden plantear balsas laterales en el río Cea aprovechando su aportación invernal, con suministro cero del embalse de Riaño. Como fórmula de explotación más viable, planteamos un aprovechamiento conjunto de los embalses de Riaño, Porma y Casares, desestimando definitivamente la alternativa planteada por la Confederación Hidrográfica del Duero de la transferencia de agua de este último al sistema Órbigo.

5.- Apoyo a las aguas subterráneas: En el EPTI se plantean peajes [..]. FERDUERO se opone frontalmente a estos recortes y además de seguir impulsando la constitución de CUAS para mejorar la gestión de los acuíferos, planteamos que se estudien actuaciones que permitan sustituir aguas subterráneas por aguas superficiales, así como el uso compartido de ambas. Por ejemplo, el desarrollo de La Armuña III y La Armuña IV puede liberar hectáreas de la zona sur de la Masa de Medina, la Presa de Lastras de Cuéllar lo mismo en Tierra de Pinares y las balsas laterales de Tordesillas, ayudaría a mejorar su acuífero. Por ello, planteamos que se estudien estas opciones para poder mantener el regadío y la actividad económica de todos los usuarios que se sirven de estas masas.

[…] solicitamos a la Dirección General del Agua la búsqueda de fuentes de financiación que puedan mejorar la amortización de la inversión reflejada en la Ley de Aguas para este tipo de obras de regulación.

Respuesta:

Con relación al punto 1 de la alegación (Sistema Carrión), debe señalarse que la Confederación Hidrográfica del Duero comparte la conveniencia y oportunidad de la puesta en servicio de una regulación adicional en el ámbito de las Cuezas, ya que se considera una medida estructural que puede incrementar la capacidad de gestión del sistema y reforzar su resiliencia, disminuyendo la dependencia

de aportaciones externas. Estas actuaciones, junto con la modernización de regadíos en el sistema Carrión, se encuentran alineadas con los objetivos de la planificación hidrológica vigente y forman parte de la estrategia de mejora del equilibrio entre recursos y demandas en la demarcación.

Según se recoge en el Programa de medidas del Plan Hidrológico vigente, cuya situación más actualizada se puede consultar en Mírame-IDEDuero, la regulación adicional en las Cuezas (medidas 6403243 y 6403244) se encuentra en fase de anteproyecto en evaluación ambiental y es una medida cuyo promotor es la Confederación.

Con relación al punto 2 de la alegación (Sistema Tormes) debe indicarse que el EpTI ya contempla expresamente el análisis de la ampliación de regadíos en el sistema Tormes y su relación con la capacidad de regulación del embalse de Santa Teresa. En particular, el documento pone de manifiesto que los eventuales incrementos de superficie regable —como los asociados al desarrollo de La Armuña— deben quedar condicionados a la disponibilidad real de recursos y a la garantía del sistema, evaluándose de forma conjunta la gestión de la demanda y la oferta.

A este respecto, el EpTI analiza el posible recrecimiento del embalse de Santa Teresa en el marco de la alternativa 5 de la ficha DU-07, como una de las opciones para incrementar la capacidad de regulación en escenarios de mayor desarrollo del regadío. No obstante, también concluye que este tipo de actuaciones:

- no resuelven por sí solas los déficits del sistema ni los problemas de garantía,
- y deben plantearse únicamente cuando se justifique su viabilidad técnica, económica, ambiental y social, y siempre en combinación con medidas de gestión de la demanda (modernización, limitación de dotaciones, etc.).

En consecuencia, la eventual necesidad de recrecimiento del embalse no puede considerarse automática, sino que debe evaluarse en el marco global de la planificación hidrológica, priorizando un enfoque integrado que garantice la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Todo ello se analizará con detalle en la fase de redacción del plan hidrológico.

En relación con la propuesta formulada en el punto 3 para el sistema Órbigo, cabe señalar lo siguiente:

En primer lugar, la Confederación valora favorablemente la propuesta de cambio de la toma de la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses al sistema Tera, en la medida en que se trata de una actuación coherente con los objetivos del EpTI orientados a la optimización de la gestión de los recursos disponibles y a la reducción de presiones sobre sistemas deficitarios, mediante la mejora de la asignación y distribución de recursos entre sistemas de explotación.

En cuanto al resto de actuaciones planteadas, relativas al incremento de la capacidad de regulación (balsas laterales, nuevos embalses, recrecimientos o mejora de infraestructuras existentes), debe indicarse que el EpTI establece que este tipo de medidas deben analizarse de forma integrada dentro del conjunto de alternativas de planificación, en coordinación con las actuaciones sobre la demanda (modernización, eficiencia y adecuación de dotaciones).

En particular, el documento pone de manifiesto que:

- Las actuaciones de incremento de regulación pueden contribuir a mejorar la garantía y reducir déficits en determinados sistemas,
- pero su eficacia es generalmente limitada si no se acompañan de medidas de gestión de la demanda,
- y en todo caso deben someterse a una evaluación rigurosa de su viabilidad técnica, económica, social y ambiental, dada su elevada inversión y potencial afección sobre las masas de agua.

Por ello, la puesta en explotación del embalse de Villagatón o la mejora del trasvase de Valdesamario para reducir pérdidas y una ligera mejora de la capacidad hidráulica podrán incorporarse al Programa de medidas en fase de redacción de plan hidrológico. Respecto a de la balsa lateral de La Rial o el posible recrecimiento de Villameca, la decisión de su incorporación al Programa de medidas del plan hidrológico dependerá de su encaje en las conclusiones del estudio de alternativas de incremento de regulación del sistema Órbigo y de su encaje en la estrategia global de la demarcación.

Sobre las propuestas relativas al río Duerna, la Confederación Hidrográfica del Duero valora positivamente las actuaciones de "siembra de agua", entendida como recarga gestionada de acuíferos mediante derivaciones superficiales (como el uso de "zayas" u otras infraestructuras tradicionales), que ya han sido consideradas en el marco de la planificación hidrológica vigente. En particular, en el valle del Duerna se incluyó una reserva de agua superficial en invierno destinada a la recarga, constituyendo una medida alineada con la gestión conjunta de recursos superficiales y subterráneos y con los objetivos de mejora de la garantía y sostenibilidad del regadío. Como se ha dicho en la respuesta a la alegación nº 19 de este mismo escrito, lamentablemente a fecha actual no se ha podido hacer efectiva esa reserva por falta de interlocutor en forma de junta central, sindicato central o comunidad general de usuarios, trámite imprescindible para poder hacer efectiva esa reserva.

Esta solución encaja, asimismo, con las líneas del EpTI en materia de adaptación al cambio climático, diversificación de fuentes y aumento de la resiliencia de los sistemas de explotación, incluyendo el uso de infraestructuras alternativas y recarga artificial cuando resulten técnica y ambientalmente viables.

En cuanto a las propuestas relativas a la construcción de balsas laterales, almacenamiento estacional o alternativas de regulación en cabecera, estas se encuadran dentro de las posibles medidas de mejora de la gestión de la oferta contempladas en los temas importantes DU-06 y DU-07 del EpTI (incluyendo infraestructuras de almacenamiento, regulación o mejora de la garantía). No obstante, su implantación requiere un análisis específico en el marco de la elaboración del Plan Hidrológico, en el que se valore su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica, así como su eficacia real frente a otras alternativas. En este sentido, dichas propuestas se tendrán en consideración y podrán ser objeto de estudio en la fase de redacción del Plan.

En relación con las propuestas formuladas en el punto 4 para el sistema Esla-Valderaduey, la propuesta de aprovechamiento de aportaciones invernales mediante balsas laterales en el río Cea se encuadra dentro de las medidas contempladas en el EpTI en los temas importantes DU-06 y DU-07, en los que se prevé la utilización de infraestructuras de almacenamiento complementarias (balsas laterales, regulación estacional, etc.) como instrumento para mejorar la garantía de los sistemas de explotación. Por ello, este tipo de soluciones podrá ser analizado en la fase de elaboración del Plan Hidrológico, valorando su viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica en el ámbito del sistema Esla–Valderaduey.

En cuanto a la propuesta de explotación conjunta de los embalses indicados, debe señalarse que el embalse de Casares es titularidad de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A.), por lo que en la situación actual no resulta posible su gestión conjunta con las infraestructuras de titularidad y explotación directa del Organismo de cuenca en los términos planteados.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier planteamiento de optimización conjunta de infraestructuras deberá analizarse en el marco competencial y de explotación correspondiente, considerando el régimen jurídico de cada una de ellas y los acuerdos que, en su caso, pudieran establecerse entre las Administraciones implicadas.

En relación con el punto 5 de la alegación, se formulan las siguientes consideraciones:

Las posibles limitaciones al uso de aguas subterráneas deben enmarcarse en el objetivo prioritario de la planificación hidrológica, conforme a la Directiva Marco del Agua y al Texto Refundido de la Ley de Aguas, de alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de agua, evitando su deterioro y corrigiendo situaciones de sobreexplotación. En este sentido, la evolución de la política hidráulica se orienta hacia un refuerzo del control administrativo de las extracciones y una progresiva convergencia hacia el régimen concesional, lo que implica necesariamente la adopción de medidas de limitación en aquellos casos en los que las extracciones resulten incompatibles con la recuperación de los acuíferos.

Se valora positivamente el impulso a la constitución de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) como instrumento clave para la mejora de la gobernanza, el control de extracciones y la gestión conjunta de los recursos, en línea con lo previsto en el EpTI para el uso sostenible de las masas de agua subterránea.

Las propuestas orientadas a la sustitución de bombeos por recursos superficiales y al uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas son coherentes con las líneas de actuación recogidas en el EpTI, que contempla este tipo de medidas como alternativas para reducir la presión sobre los acuíferos y avanzar hacia su recuperación. No obstante, su viabilidad debe analizarse caso por caso en la elaboración del Plan Hidrológico, considerando la disponibilidad real de recursos, las garantías de suministro, los condicionantes ambientales y la eficiencia económica de las soluciones planteadas.

Alegación 28.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario recordar que la planificación hidrológica, de conformidad con el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, no persigue exclusivamente objetivos ambientales, sino también la satisfacción de las demandas, la armonización del desarrollo regional y sectorial y la sostenibilidad de las actividades económicas vinculadas al uso racional del agua. En consecuencia, cualquier mecanismo de coordinación interadministrativa o fijación de objetivos específicos en zonas protegidas debe incorporar necesariamente criterios de proporcionalidad, equilibrio territorial, cohesión socioeconómica y viabilidad de los usos existentes, singularmente en territorios rurales altamente dependientes del regadío. […]

La ficha plantea la alineación del marco regulatorio de distintas políticas sectoriales con los objetivos de la planificación hidrológica, incluyendo expresamente la Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats. No obstante, dicha coordinación no debería derivar en la imposición automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos.

Respuesta:

El EpTI no propone ni pretende imponer de manera *automática o indirecta de nuevas restricciones generales sobre el regadío sin una evaluación técnica individualizada de su incidencia real sobre las masas de agua y los espacios protegidos*. De hecho, al menos, las Fichas DU-01, DU-02, DU-03, DU-04 y DU-07 tratan de hacer un análisis técnico de las presiones que generan sobre las masas de agua las actividades humanas, entre ellas la agrícola, unas veces con mayor profusión de datos y otras de manera cualitativa. Las propuestas y alternativas que se hacen en el EpTI se apoyan en ese análisis, tratando de corregir las presiones sin causar un daño excesivo a las propias actividades existentes. A nuestro juicio hay un equilibrio entre las actividades y los objetivos ambientales dentro del margen que permite la normativa vigente. Y la llamada a las políticas sectoriales (Política Agraria Común (PAC), la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Nitratos y la Directiva Hábitats) lo es en la medida que estas políticas apuntan a la del agua en sus propios desarrollos legales.

Alegación 29.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La ficha señala la necesidad de fijar objetivos específicos sobre el medio hídrico de los espacios Red Natura 2000 vinculados al agua. Sobre esta cuestión debe indicarse que cualquier eventual limitación derivada de dichos objetivos deberá sustentarse necesariamente en estudios técnicos individualizados, suficientemente motivados y territorialmente concretos, evitando restricciones automáticas derivadas exclusivamente de la ubicación geográfica de las explotaciones o infraestructuras. Especialmente en sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados, debe garantizarse plenamente la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes y la compatibilidad entre conservación ambiental y actividad agraria sostenible.

Respuesta:

Las limitaciones derivadas de los objetivos de los espacios naturales de Red Natura 2000 ya existen desde que se aprobaron los planes básicos de gestión, en el caso de Castilla y León desde 2015.

Los objetivos específicos de Red Natura se fijan por las comunidades autónomas en los Planes Básicos de Gestión. En el caso de los Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León se aprobaron por ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre. Estos Planes establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000. Se estructuran en:

- Un documento de “Disposiciones generales”, común a los 177 Planes Básicos.

- Ciento setenta y siete documentos de Planes Básicos de gestión y conservación correspondientes a cada uno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León.
- Tres "Anexos" comunes a los 177 planes básicos:
  - Anexo I. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000,
  - Anexo II. Listado de Planes Básicos de gestión y conservación de los Valores Red Natura 2000, y
  - Anexo III. Medidas de conservación y gestión Red Natura 2000.

De todos los espacios y hábitats de estos Planes sólo aquellos vinculados al agua (76 en la demarcación hidrográfica del Duero) deben ser atendidos por la planificación hidrológica como establece el RPH, en la medida en que les afecte. Y las limitaciones en el ámbito del agua las establecen los citados planes. En este sentido cabe transcribir algunos de los fundamentos de derecho que esgrime el Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 515/2025 que se cita en la Ficha DU-09: "Por consiguiente, y como ciertamente esta situación no parece acomodarse a las exigencias de la DMA y de la legislación interna que la traspone, de las que deriva la necesidad de que los planes hidrológicos, como instrumento esencial de coordinación de la política de aguas, reflejen los objetivos ambientales de las zonas protegidas vinculados a las masas de agua asociadas y su grado de cumplimiento, y que sobre dichos objetivos no cabe aplicar la excepción prevista en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2000/60, procede estimar la pretensión de la parte recurrente y declarar la nulidad de todas las previsiones contenidas en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las que, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 10 de las disposiciones normativas, se prevea la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas de agua vinculadas a zonas protegidas de hábitats y especies, en las que, además, no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares.

Puede ser llamativo que la delimitación de espacios protegidos por las comunidades autónomas afecten en ocasiones a zonas como las que identifica la alegante ("sistemas regables históricos y concesionalmente consolidados"), por lo que cabría pensar que esos espacios protegidos lo son precisamente por su relación con esos regadíos históricos; sin embargo encontramos en sus planes básicos que la actividad agraria, entre otras, es quien constituye una presión, algo que aparentemente repugna toda lógica racional. Pero la planificación hidrológica poco puede hacer para resolver estas incoherencias, más allá de instar al órgano competente de la comunidad autónoma a que revise esas declaraciones o los planes básicos correspondientes, como también lo puede hacer el sector al que pertenece la alegante.

Alegación 30.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

No parece razonable incrementar simultáneamente las exigencias ambientales o las limitaciones sobre los usuarios concesionales mientras persistan importantes retrasos administrativos y presupuestarios en la ejecución de actuaciones estructurales cuya responsabilidad corresponde principalmente a las administraciones públicas competentes.

Respuesta:

Manifestamos acuerdo con la alegante en lo que se refiere al notable retraso en la ejecución del Programa de medidas; de hecho, la propia Ficha lo pone de manifiesto cuando abiertamente reconoce que el *Programa de medidas del Plan Hidrológico se construye con las medidas que todas las autoridades competentes (administraciones locales, autonómicas o estatal) y resto de agentes, cada uno en el marco de sus competencias, pueden impulsar para el logro de los citados objetivos. Por tanto, buena parte del éxito de un plan hidrológico para dar cumplimiento a esos objetivos estriba en el compromiso de los agentes de acometer las medidas que caen bajo su ámbito*. También propone algunas decisiones a explorar para que esto no se repita en el futuro, como son que haya un *compromiso de las autoridades competentes en la priorización de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos ambientales que conduzcan a la fijación de los compromisos financieros necesarios para su consecución*, y establecer un *marco estable de financiación de las medidas por parte de todas las Autoridades Competentes, fijados a través de sus compromisos presupuestarios.*

Pero dicho esto no podemos compartir la comparación de este hecho con las necesidades de establecer criterios ambientales ya que en su mayoría estos criterios buscan reducir las presiones sobre las masas de agua y esas presiones se ejercen por actividades y usuarios concretos a quienes corresponde, en la medida de lo que establecen las normas, contribuir a la reducción de las mismas.

Alegación 31.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario reforzar de manera efectiva la participación técnica y real de los usuarios del agua, singularmente de las Comunidades de Regantes, en los procesos de toma de decisiones y seguimiento de la planificación hidrológica.

Respuesta:

La Ficha DU-09 aborda la necesaria colaboración y cooperación entre los departamentos de la administración pública para que, cada uno en su ámbito competencial, contribuya al logro de los objetivos de la planificación. Y ello porque al tener competencias sobre distintos factores que inciden en el agua (tanto como demanda como medio ecológico), las políticas sectoriales en cada uno pueden contribuir o no a lograr los objetivos.

No se aborda en la ficha el modo de participación de los usuarios en la gestión del agua que tiene sus propias normas legales establecidas. Por ello sorprende que una Comunidad de regantes reclame mayor participación en los procesos de toma decisiones y de seguimiento de la planificación hidrológica. Las comunidades de regantes participan en la Junta de Gobierno, en el Consejo del Agua de la demarcación, en la Comisión de Desembalse, en la Asamblea de Usuarios y las Juntas de Explotación. Esa representación está regulada en el TRLA, el RAPA o reglamentos específicos (como el que regula el consejo del agua de la demarcación). Todos ellos son órganos de gobierno, gestión, coordinación y participación de los organismos de cuenca. Nos gustaría conocer otros ámbitos administrativos donde la participación de los usuarios fuera al menos de la misma magnitud que en la gestión del agua. De cualquier modo, el EpTI no tiene capacidad para modificar la distribución de la representación de los usuarios en los distintos órganos.

Alegación 32.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

Se considera necesario que la planificación identifique de manera expresa la incidencia real que el cumplimiento del Convenio de Albufeira y de otros compromisos ambientales o internacionales tiene sobre las garantías de suministro de las distintas unidades de demanda agraria y sobre las reservas embalsadas disponibles en los sistemas de explotación. [..]

Por ello, cualquier incremento de exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales existentes.

Respuesta:

El análisis que se solicita en la alegación respecto al Convenio de Albufeira se ha hecho en todas las alternativas que figuran en las Fichas DU-06 y 07 debido que se trata de una restricción al uso del agua, de manera que, en todo caso, siempre que no se den las condiciones de excepción, se cumplen los requisitos del Convenio. No se ha incluido su explicación en las Fichas por una cuestión de simplificación. No obstante, con las medidas definitivas, en fase de redacción de plan hidrológico, habrá un apartado específico que aborde este cumplimiento de caudales integrales del Convenio de Albufeira.

Respecto a la segunda propuesta (que las nuevas exigencias derivadas de compromisos ambientales o internacionales debería venir acompañado de medidas estructurales suficientes de regulación, modernización y mejora de la gestión del recurso, evitando que las cargas derivadas de dichas exigencias recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios concesionales), el EpTI no puede avalar una cuestión que no está contemplada en la normativa vigente. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 65 del TRLA cuando los usos actuales puedan verse afectados por la planificación hidrológica o por requisitos adicionales de carácter ambiental que hagan imposible ejercer el uso para el que existe concesión, como parece explicar la alegación, podrá reclamarse la correspondiente indemnización. Y ello sin menoscabo de la jurisprudencia ya consolidada en relación con las indemnizaciones por restricciones previas, como son el régimen de caudales ecológicos o los compromisos internacionales o ambientales, más bien en contradicción de la propuesta de la alegación.

Alegación 33.

DU-09 Coordinación Interadministrativa en la Implementación del Programa de Medidas y Fijación de Objetivos en Zonas Protegidas

La creciente interacción entre distintas políticas sectoriales europeas, estatales y autonómicas vinculadas al agua puede generar escenarios de elevada complejidad regulatoria para los usuarios y las Comunidades de Regantes. Por ello, se considera imprescindible que el futuro Plan Hidrológico garantice marcos regulatorios claros, previsibles y técnicamente motivados, evitando duplicidades

administrativas, contradicciones regulatorias y limitaciones carentes de suficiente justificación técnica individualizada.

Respuesta:

En el ámbito del agua, el EpTI es un documento intermedio de la planificación hidrológica que tiene por objeto la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes. No tiene que ofrecer seguridad jurídica ya que es un documento instrumental en la elaboración del Plan Hidrológico que se aprueba por Real Decreto y tiene fuerza vinculante.

Por otra parte, la seguridad jurídica para los usuarios que aspiran a desarrollar una actividad la ofrece el procedimiento concesional donde se concreta la actividad en el objeto, el tiempo y el lugar, lo que permite evaluar la actividad en coherencia con los objetivos de la planificación hidrológica. Por tanto, se rechaza la alegación. Los planes hidrológicos se revisan cada seis años, lo que puede suponer que, dentro del marco legal general, haya modificaciones específicas como consecuencia de la revisión planificadora. Seis años, a nuestro juicio es un marco temporal escaso, pero el ordenamiento jurídico establece ese plazo para las sucesivas revisiones y a él debemos ajustarnos.

La Ficha DU-09 pone el acento en la necesidad de incrementar la coordinación y cooperación administrativa en el ámbito de la planificación hidrológica; la alegante reclama esa coordinación en el marco de la gestión ordinaria. Siendo un objetivo razonable, no hay que olvidar cuáles son las competencias de cada administración lo que puede suponer una mayor lentitud de procedimientos, en especial si éstos confluyen en una única actividad. Sigue quedando pendiente la simplificación administrativa ya que, cada vez que hay cambios normativos, no suelen ser para simplificar sino para una mayor complejidad. Al igual que los usuarios también las administraciones padecemos esta complejidad que está al servicio, en este caso, de las garantías. Precisamente la variedad de competencias sobre una misma actividad puede generar esas incoherencias de las que no son culpables quienes deben verificar los requisitos legales sino de las normas que regulan la actividad.

Alegación 34.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Una cuestión relevante que debería ser tenida en cuenta en las evaluaciones ambientales de grandes instalaciones fotovoltaicas es la posible modificación del coeficiente de escorrentía superficial derivada de la implantación masiva de paneles solares. […]

Por ello, se considera necesario que el futuro instrumento de planificación y las evaluaciones ambientales incorporen análisis hidrológicos específicos sobre modificación de escorrentías, incluyendo modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Respuesta:

Compartimos con el alegante su percepción de que la construcción de plantas fotovoltaicas contribuye al aumento de suelo artificial con impactos como compactación y modificación de la permeabilidad del suelo, alteración de la escorrentía e incremento de la erosión.

La planificación hidrológica no puede entrar en el detalle de dichos impactos, que son evaluados específicamente en los procedimientos ambientales a que se ven sometidos los proyectos y que son específicos de cada uno de ellos.

La modificación de la escorrentía superficial producida por una instalación fotovoltaica depende de muchos factores como son la extensión de la planta fotovoltaica, las características edáficas de su localización, las posibles modificaciones topográficas del terreno, el tipo y forma de fijación de los seguidores, etc. Estos aspectos son evaluados de forma cualitativa en los preceptivos informes que emite la CHD, como administración afectada, en el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos, sin poder establecer una evaluación cuantitativa del efecto sobre la escorrentía ya que los promotores no facilitan modelizaciones hidráulicas adaptadas a las características reales de las instalaciones proyectadas.

Alegación 35.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

Por otro lado, se considera igualmente interesante analizar el potencial uso dual de determinadas infraestructuras de regadío para su contribución al sistema eléctrico nacional, especialmente en aquellos casos en los que existan balsas de regulación situadas a cota elevada y otros condicionantes técnicos favorables. Determinadas instalaciones de modernización podrían adaptarse para funciones complementarias de almacenamiento energético y regulación eléctrica mediante sistemas reversibles, incrementando la utilidad y rentabilidad social de infraestructuras ya existentes.

Respuesta:

Esta indicación del alegante de una posible utilización de las instalaciones inherentes a modernizaciones del regadío para funciones de almacenamiento energético no se ha planteado hasta la fecha en este Organismo. No obstante, cualquier iniciativa que se presente para la correspondiente autorización o concesión se analizará específicamente.

La capacidad de almacenamiento de estas balsas de regulación no suele ser tan elevada como para que las empresas hidroeléctricas consideren rentable la inversión en la implantación de sistemas de bombeo y centrales hidroeléctricas que permitan utilizar este recurso.

Es todo caso, sería la administración competente en la realización de estas modernizaciones y, en su caso, el titular de las infraestructuras de regadío quienes deberían proponer la utilización de las mismas para fines energéticos.

Alegación 36.

DU-10 Nuevos Usos del Agua para Renovables

En la ficha se indica que para las aplicaciones y usos del agua vinculados a energías renovables resultan de aplicación las mismas consideraciones previstas para usos consuntivos[..], parecería más adecuado diferenciar entre usos estrictamente consuntivos y usos con retorno efectivo del agua, especialmente a efectos de evaluación de impacto sobre la disponibilidad global del recurso hídrico. Todo ello

Se están empezando a crear nuevas plantas de hidrogeno verde, de bioetanol, etc, que necesitan agua para su desarrollo. Nos oponemos a que se extraiga agua de acuíferos que están en mal estado y, por otro lado, que cuando hayan extraído el agua, puedan verter la molécula resultante a cauces o arroyos, agravando el problema de la contaminación difusa.

Cuando el agua se coja de fuentes superficiales, nos oponemos a que se puedan restar dotaciones al regadío, cuando hay UDAs y comunidades de regantes que incumplen el criterio de garantía [..].

Por tanto, los nuevos usos del agua destinados a la implantación de industrias de producción y almacenamiento de energías renovables, pueden tener un efecto negativo en el regadío, tanto en aguas subterráneas como en aguas superficiales y pedimos que este problema se analice y se aborde con mucho rigor para no perjudicar una actividad económica destinada a la producción de alimentos, que fija población en las zonas rurales y que contribuye al mantenimiento del ecosistema y la disminución de la contaminación ambiental.

Respuesta:

Los parques eólicos y plantas fotovoltaicas precisan agua para su construcción y para algunas operaciones de mantenimiento (limpieza de paneles), siendo los volúmenes demandados no significativos. El suministro de agua para estas instalaciones se realiza habitualmente mediante suministro con camiones cisterna de agua procedente de concesiones vigentes o mediante derivaciones temporales de aguas superficiales, que deben tramitarse en este Organismo, tramitación en la cual se evalúa la disponibilidad del recurso en cada caso particular.

Por otra parte, las instalaciones industriales para la producción de compuestos químicos capaces de almacenar los excedentes de energías renovables como son el hidrógeno verde, el amoniaco, metanol, etc., pueden suponer un uso consuntivo del agua acompañado de grandes volúmenes para la refrigeración que, en algunos casos, revierten al medio hídrico.

La alternativa elegida para este tema importante propone el establecimiento de reservas para estos nuevos usos consuntivos sólo en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua y no que se vean afectados los caudales ecológicos ni los usos previos, entre ellos el regadío.

Se establecerán dotaciones máximas para la producción de estos compuestos químicos, aplicando las mejores técnicas disponibles y el estado de la ciencia. En ningún caso estas dotaciones irán en detrimento de las dotaciones establecidas para usos agrarios.

En lo relativo al posible impacto ambiental derivado de posibles vertidos y contaminación difusa, estos aspectos se analizan pormenorizadamente en cada caso, en los informes preceptivos que emite este Organismo para la evaluación ambiental de los proyectos a petición del órgano ambiental que corresponda. En estos informes se establecen condicionantes para minimizar estos impactos, que posteriormente se recogen en la declaración de impacto ambiental correspondiente.

Alegación 37.

Conclusiones finales

El actual contexto de cambio climático, reducción de aportaciones e incremento de exigencias ambientales e internacionales obliga a reforzar la resiliencia hídrica de la Demarcación mediante:

- *Una adecuada política de regulación y almacenamiento*
- *El mantenimiento funcional de los cauces*
- *La modernización y optimización de infraestructuras*
- *La revisión técnica de los actuales indicadores de sequía y escasez*

La mejora de la capacidad reguladora de la cuenca no debe entenderse únicamente como una herramienta de garantía de usos, sino también como un instrumento esencial para:

- *La adaptación al cambio climático*
- *La conservación de ecosistemas asociados al agua*
- *La estabilidad de las masas de agua*
- *El cumplimiento de objetivos ambientales*
- *La adecuada atención de los compromisos internacionales derivados del Convenio de Albufeira*

Respuesta:

Todos los aspectos que se citan en las conclusiones finales se han ido valorando a lo largo de la respuesta a este escrito de alegaciones, mostrando un acuerdo con la mayoría de las cuestiones generales aportadas, si bien el enfoque de las medidas puede variar puntualmente, y algunos desacuerdos en especial con la vinculación de un mayor número de infraestructuras de regulación y una mejora de la conservación de ecosistemas asociados al agua.

Alegación 38.

Conclusiones finales

En conclusión, si tenemos en cuenta todo lo manifestado en el cuerpo de las presentes alegaciones, mucho tiene que cambiar la filosofía y el contenido del EpTI y el documento del PLAN que se elabore en el siguiente paso del proceso de planificación para que el voto de los usuarios regantes cuando sea informado por el Consejo del Agua de la Demarcación sea favorable. NUESTRA POSICIÓN SÓLO PUEDE SER LA DE OPONERNOS A LA APROBACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO.

Respuesta:

Respetamos la postura de la alegante en relación con el EpTI. No obstante, de una lectura de las propuestas, sugerencia y observaciones que hace la alegante y de la lectura del EpTI no podemos concluir lo mismo que el firmante del escrito. La mayor parte de las cuestiones que se plantean como mejoras están recogidas en la documentación a consulta pública; hay otras que el EpTI no puede atender porque ya están reguladas en normas de mayor rango y que atenderlas requieren modificaciones legales que no corresponden al promotor del Plan Hidrológico. Otras sugerencias, en

fin, colisionan de facto con la normativa vigente y lógicamente no pueden ser atendidas. Pero en todo caso no se observa justificación para esta opinión desfavorable tan rotunda como muestra la conclusión final.

4.73. Escrito de observaciones Nº 101

Presentado por: Pilar Esquinas Rodrigo.

En nombre de la AGUAIURIS. Organización de Usuarios y Consumidores de Agua

Alegación 1.

Personación de Pilar Esquinas Rodrigo, en nombre propio y en representación de AGUAIURIS, y reconocimiento de la condición de interesada con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecida a la Sra. Esquinas Rodrigo, en su propio nombre y en representación de AGUAIURIS, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.74. Escrito de observaciones Nº 102

Presentado por: Alfredo Moreno Rey.

En nombre propio

Alegación 1.

Personación de Alfredo Moreno Rey, en nombre propio y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido al Sr. Moreno Rey, en su propio nombre, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.75. Escrito de observaciones Nº 103

Presentado por: Alfredo Moreno Gómez.

En nombre propio

Alegación 1.

Personación de Alfredo Moreno Gómez, en nombre propio y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido al Sr. Moreno Gómez, en su propio nombre, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.76. Escrito de observaciones Nº 104

Presentado por: Alfredo Moreno Gómez.

En nombre de ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA AGRICULTURA DE LA AXARQUÍA (ADAX)

Alegación 1.

Personación de Alfredo Moreno Gómez, en representación de ADAX, y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido al Sr. Moreno Gómez, en representación de ADAX, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.77. Escrito de observaciones Nº 105

Presentado por: Marina Martínez García del Moral.

En nombre propio

Alegación 1.

Personación de Marina Martínez García del Moral*, en nombre propio y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).*

Respuesta:

Se tiene por comparecido a la Sra. Martínez García del Moral, en su propio nombre, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.78. Escrito de observaciones Nº 106

Presentado por: Manuel Cerezo Osorio.

En nombre propio

Alegación 1.

Personación de Manuel Cerezo Osorio*, en nombre propio y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).*

Respuesta:

Se tiene por comparecido al Sr. Cerezo Osorio, en su propio nombre, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.79. Escrito de observaciones Nº 107

Presentado por: Juan Salvador Vivo Obrer.

En nombre propio

Alegación 1.

Personación de Juan Salvador Vivo Obrer, en nombre propio y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido al Sr. Vivo Obrer, en su propio nombre, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.80. Escrito de observaciones Nº 108

Presentado por: Juan Carlos de Frutos Gómez.

En nombre propio y de Cega Energías, S.L.

Alegación 1.

Personación de Juan Carlos de Frutos Gómez, en nombre propio y en representación de Cega Energías, S.L. y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido al Sr. De Frutos Gómez, en su propio nombre y en representación de Cega Energías, S.L., y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.81. Escrito de observaciones Nº 109

Presentado por: Antonio Madueño Arandea.

En nombre propio

Alegación 1.

Personación de Antonio Madueño Arandea, en nombre propio y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido a Antonio Madueño Arandea, en su propio nombre, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.82. Escrito de observaciones Nº 110

Presentado por: Víctor Pascual Viciedo Colonques.

En nombre propio y de Associació de Llauradors Independents de Vila-real (ALIV).

Alegación 1.

Personación de Víctor Pascual Viciedo Colonques, en nombre propio y en representación de ALIV y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido a Víctor Pascual Viciedo Colonques, en su propio nombre y en representación de ALIV, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

Alegación 17.

En el epígrafe DECIMO QUINTO del escrito se hacen algunas alegaciones a la Huerta de València, al trasvase tajo Segura, al Mar Menor, a los acuíferos de la Mancha Oriental y Vinalopó-Alicantí y al Tribunal de las Aguas.

Respuesta:

No se atienden estas observaciones al estar fuera del ámbito de la demarcación hidrográfica del Duero.

4.83. Escrito de observaciones Nº 111

Presentado por: Ricardo Bayo Zaera.

En nombre propio y de Comunidad de Regantes Fuen Lozana y Tosquilla.

Alegación 1.

Personación de Ricardo Bayo Zaera, en nombre propio y en representación de la Comunidad de Regantes Fuen Lozana y Tosquilla, y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido a Ricardo Bayo Zaera, en nombre propio y en representación de la Comunidad de Regantes Fuen Lozana y Tosquilla, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.84. Escrito de observaciones Nº 112

Presentado por: José Antonio Gómez Simón.

En nombre propio y de la Comunidad De Regantes de Villel.

Alegación 1.

Personación de José Antonio Gómez Simón, en nombre propio y en representación de la Comunidad de Regantes de Villel, y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido a José Antonio Gómez Simón, en nombre propio y en representación de la Comunidad De Regantes de Villel, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.85. Escrito de observaciones Nº 113

Presentado por: Juan Pedro Simón Fuestes.

En nombre propio y de la Comunidad de Regantes de Villastar.

Alegación 1.

Personación de Juan Pedro Simón Fuestes, en nombre propio y en representación de la Comunidad de Regantes de Villastar, y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido a Juan Pedro Simón Fuestes, en nombre propio y en representación de la Comunidad de Regantes de Villastar, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.86. Escrito de observaciones Nº 114

Presentado por: Julio Escuder Ferrer

En nombre propio y de la Comunidad de Regantes de Teruel.

Alegación 1.

Personación de Julio Escuder Ferrer, en nombre propio y en representación de la Comunidad de Regantes de Teruel, y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido a Julio Escuder Ferrer, en nombre propio y en representación de la Comunidad de Regantes de Teruel, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.87. Escrito de observaciones Nº 115

Presentado por: Rubén Arenere

En nombre de la Comunidad de Regantes de Fuen Lozana y Tosquilla.

Alegación 1.

Personación de Rubén Arenera, en representación de la Comunidad de Regantes de Fuen Lozana y Tosquilla, y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido a Rubén Arenera, en representación de la Comunidad de Regantes de Fuen Lozana y Tosquilla, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.88. Escrito de observaciones Nº 116

Presentado por: Leandra Pérez Razo

En nombre del Sector Primario y Consumidores Independientes Españoles.

Alegación 1.

Personación de Leandra Pérez Razo, en representación de Sector Primario y Consumidores Independientes Españoles, y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido a Leandra Pérez Razo, en representación de Sector Primario y Consumidores Independientes Españoles, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.89. Escrito de observaciones Nº 117

Presentado por: José Francisco Guerrero Cebolla.

En nombre propio

Alegación 1.

Personación de José Francisco Guerrero Cebolla, en nombre propio y reconocimiento de la condición de interesado con plenitud de derechos de acceso, audiencia, alegación y respuesta motivada. (Alegaciones 1ª y 3ª; Suplico 1º y 2º).

Respuesta:

Se tiene por comparecido a José Francisco Guerrero Cebolla, en su propio nombre, y por presentadas sus observaciones en el trámite de consulta pública del EpTI, al amparo del art. 4 de la Ley 39/2015 y de la disposición adicional duodécima del TRLA. Dicho reconocimiento se circunscribe al trámite de participación pública (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH) y no equivale al estatuto de interesado propio de un procedimiento singular (concesional, sancionador o de revisión de derechos).

Alegación 2.

Solicitud de incorporación del escrito al "expediente matriz" de planificación y traslado a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, al Comité de Autoridades Competentes y al Consejo del Agua de la Demarcación. (Alegación 2ª; Suplico 1º).

Respuesta:

Se incorpora el escrito al expediente de participación pública del EpTI (arts. 41 TRLA y 72 a 75 RPH). No existe la figura de un "expediente matriz" distinto del expediente administrativo del procedimiento de planificación de la demarcación, sin perjuicio del traslado interno a las unidades técnicas competentes y, en su caso, al Consejo del Agua conforme a su norma reguladora.

Alegación 3.

Naturaleza jurídica del EpTI e "impugnación preventiva" del procedimiento, de la eventual consolidación del Esquema y del futuro Plan Hidrológico. (Alegación 1ª; Suplico 4º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI es, conforme al art. 79 RPH, un documento de diagnóstico previo, no un acto definitivo ni de trámite cualificado susceptible de recurso (arts. 112 y 115 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 29/1998). No procede pronunciarse sobre una "impugnación preventiva" de un acto no definitivo ni de un plan aún no aprobado, quedando a salvo el derecho de la compareciente a recurrir, en su momento, el real decreto que apruebe el Plan.

Alegación 4.

Oposición a una planificación "opaca, tecnocrática e ininteligible" y exigencia de comprensibilidad y participación real. (Alegación 4ª; Suplico 10º).

Respuesta:

La participación pública se garantiza durante todo el proceso planificador (art. 41 TRLA), debiendo asegurarse el suministro activo de información sustantiva y accesible desde el inicio del procedimiento (arts. 72 a 75 RPH). Se considera razonable reforzar la comprensibilidad del documento para el ciudadano no especializado, sin que ello constituya una obligación legal exigible en los términos formulados por la compareciente.

Alegación 5.

Rechazo a la "mercantilización" del agua y oposición a que la planificación favorezca la concentración de derechos o la privatización funcional del dominio público hidráulico. (Alegación 5ª; Suplico 20º).

Respuesta:

El agua integra el dominio público hidráulico estatal (art. 2 TRLA) y su gestión se rige por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral y compatibilidad con la conservación ambiental (art. 14 TRLA), en coherencia con la Directiva 2000/60/CE. El EpTI no efectúa asignación singular de recursos a proyecto o beneficiario alguno; dicha asignación se articula, en su caso, mediante el régimen concesional (arts. 59 a 61 TRLA).

Alegación 6.

Denuncia del riesgo de que el Plan se utilice como cobertura de sanciones, caducidades, revisiones o extinción de derechos sin datos individualizados. (Alegación 6ª; Suplico 12º y 13º).

Respuesta:

La planificación hidrológica es vinculante pero no determina por sí sola la incoación de expedientes sancionadores ni la revisión o extinción de derechos concretos: dichas actuaciones singulares se tramitan por su procedimiento propio, con motivación individualizada, prueba y audiencia al titular afectado (arts. 34, 82 y 88 Ley 39/2015).

Alegación 7.

Impugnación de las declaraciones de masas de agua en mal estado cuantitativo, químico o en riesgo, y exigencia de datos brutos, metodología, series históricas y márgenes de incertidumbre. (Alegación 7ª; Suplico 11º).

Respuesta:

La determinación del estado de las masas se realiza conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) y a los objetivos del art. 4 DMA, que impone prevenir el deterioro y justificar con rigor cualquier excepción (STJUE de 1 de julio de 2015, C-461/13 "Weser"; STS de 26 de

febrero de 2015). La documentación técnica de soporte se encuentra o se pondrá a disposición conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013.

Alegación 8.

Oposición a la reserva o preasignación de recursos para nuevos usos estratégicos (centros de datos, hidrógeno verde, renovables, almacenamiento por bombeo) sin acreditar disponibilidad y compatibilidad. (Alegación 8ª; Suplico 14º y 15º).

Respuesta:

El EpTI no otorga concesiones ni preasigna recursos a proyectos concretos; la identificación de presiones y demandas se efectúa con carácter general, correspondiendo a la fase de plan aprobado la definición de asignaciones conforme al orden de preferencia de usos (art. 60 TRLA). Cualquier proyecto concreto se someterá al procedimiento concesional correspondiente (arts. 59 a 61 TRLA) y, cuando proceda, a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013).

Alegación 9.

Solicitud de información exhaustiva sobre talleres, jornadas, facilitadores, consultoras contratadas, presupuestos, adjudicaciones y criterios de selección, con denuncia de riesgo de sesgo participativo. (Alegación 9ª; Suplico 16º y 17º).

Respuesta:

Las medidas de participación activa se incardinan en el deber de fomento de la participación pública (arts. 72 a 75 RPH). La información relativa a la contratación de servicios de asistencia técnica se rige por la Ley 9/2017 (arts. 63 y 64) y se encuentra en el perfil del contratante, cauce por el que debe canalizarse, sin que proceda integrarla de forma indiscriminada como anejo del EpTI. De cualquier modo, en la versión consolidada del ETI se incorporará toda la información generada en la participación activa en su alojamiento en la web.

Alegación 10.

Solicitud de auditoría del proceso participativo y de acreditación de la ausencia de conflictos de interés, sesgo o financiación opaca, con traslado a órganos de control si concurrieran indicios. (Alegación 10ª; Suplico 17º y 18º; Otrosí 3º).

Respuesta:

El art. 64 de la Ley 9/2017 impone de oficio a los órganos de contratación la prevención de conflictos de intereses. La compareciente no aporta indicio concreto alguno, limitándose a expresar un "riesgo objetivo de apariencia". No procede la apertura de una auditoría general ni el traslado a órganos de control (art. 62 Ley 39/2015), sin perjuicio de que cualquier indicio singularizado que se aporte en el futuro sea canalizado por dichos cauces.

Alegación 11.

Solicitud de acceso íntegro, digital y reutilizable al expediente completo y a una relación de ochenta documentos, notas internas, bases de datos y antecedentes. (Alegación 11ª y solicitud documental; Suplico 5º y 6º; Otrosí 2º).

Respuesta:

Los planes hidrológicos y su documentación de elaboración tienen carácter público conforme a la Ley 27/2006 y la Ley 19/2013 (DA 2ª RD 35/2023). Ante una solicitud omnicomprensiva, sin delimitación material, temporal ni funcional, procede requerir la concreción de la petición, asistiendo a la interesada para ello (TSJ Baleares de 30 de enero de 1998), poniéndose a disposición por paquetes la documentación propia del expediente de planificación.

Alegación 12.

Solicitud de ampliación, suspensión, reapertura o retroacción del plazo de alegaciones por complejidad técnica y falta de acceso a la documentación. (Alegación 12ª; Suplico 7º, 8º y 9º; Otrosí 1º).

Respuesta:

El EpTI se somete a un periodo de consulta pública prolongado (información pública no inferior a seis meses y consulta a las partes interesadas de tres meses, art. 79 RPH). La jurisprudencia del TS ha declarado que no existe obligación general de repetir la información pública por la mera invocación de complejidad (SSTS de 4 de julio de 2014 y 23 de septiembre de 2014). No procede la ampliación, suspensión, reapertura o retroacción solicitadas con el alcance genérico planteado.

Alegación 13.

Solicitud de traslado de las alegaciones sustanciales de terceros, con disociación de datos personales, y adhesión expresa a las que se opongan al EpTI. (Alegación 13ª; Suplico 19º y 20º).

Respuesta:

Cada alegación se valora individualizadamente en función de su contenido (art. 76 Ley 39/2015), sin que exista una figura de "adhesión" genérica con efectos jurídicos autónomos. El acceso a alegaciones de terceros se sujeta al régimen de acceso a la información, con disociación de datos personales (art. 15 Ley 19/2013 y RGPD).

Alegación 14.

Exigencia de contestación individualizada, expresa y motivada, con prohibición de respuestas genéricas o estereotipadas. (Alegación 14ª; Suplico 21º).

Respuesta:

Se da cumplimiento mediante la presente contestación, que responde de forma individualizada, por bloques materiales homogéneos, a cada alegación, solicitud y otrosí formulados. El proceso exige, además, que el plan aprobado incorpore un resumen de las medidas de información pública y consulta adoptadas y de los cambios efectuados (art. 41 TRLA y arts. 72 a 75 RPH).

Alegación 15.

Reserva expresa de acciones administrativas, contencioso-administrativas, ambientales, patrimoniales, civiles, penales y constitucionales frente al EpTI, al futuro Plan y a todos los actos derivados. (Alegación 15ª; Suplico 22º y 23º; Otrosí 4º).

Respuesta:

Se toma razón de la reserva de acciones manifestada, declaración unilateral sin efectos sobre el objeto ni el régimen del procedimiento de consulta pública, sin perjuicio de los recursos que, conforme a los arts. 112 y ss. Ley 39/2015 y Ley 29/1998, procedan en su momento frente a los actos definitivos que se dicten.

Alegación 16.

Solicitud de admisión de prueba documental y técnica relacionada con las declaraciones de estado de las masas, nuevos usos, reservas, expedientes y transparencia de talleres y contratos. (Otrosí 2º).

Respuesta:

El trámite de consulta pública del EpTI no constituye un procedimiento contradictorio con fase probatoria en sentido propio (arts. 76 y 82 Ley 39/2015). La petición se reconduce a la puesta a disposición de la documentación técnica que integra el expediente de planificación, en los términos ya expuestos en la respuesta a la alegación 11.

4.90. Escrito de observaciones Nº 119

Presentado por: D. José Ángel Arranz Sanz.

En nombre de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la JCyL.

Respuesta:

Se recogen a continuación las alegaciones presentadas en el escrito de observaciones Nº 119. El escrito fue presentado el 16 de junio de 2026, fuera del plazo de consulta pública de seis meses establecido por el Anuncio de la Dirección General del Agua de fecha 28 de noviembre de 2025 (BOE nº 286, de 28 de noviembre de 2025), por lo que no se ha tenido en cuenta en la consolidación del EpTI.

Alegación 1.

DU-01. Contaminación difusa.

Se recuerda que algunas de las propuestas ya se establecieron en el PHD vigente, sin éxito. No parece que la adhesión a un conjunto de medidas de forma voluntaria vaya a tener éxito en la reducción de la aportación de nutrientes, por lo que la obligatoriedad de la reducción de excedentes debería ser tanto en zonas vulnerables como zonas no vulnerables. También sería importante un incremento en la vigilancia del cumplimento de esta normativa, ya que, en muchos casos, esta reducción de nutrientes se queda en una buena intención, que en la práctica se mantiene como se estaba realizando hasta la actualidad, sin consecuencias para su no cumplimiento y con consecuencias para las masas de agua, cada vez más presionadas.

En cuanto a las bandas que amortigüen y sirvan de filtro para las masas superficiales, siendo la misma medida que ya se propuso en el plan vigente y que no se ha realizado, el PHD de cuarto ciclo deberá idear alguna forma para que su efectiva aplicación sea posible ya que carece de sentido proponer una medida una y otra vez cuando no ha sido posible su consecución, sin cambiar el modo de ejecución.

La alternativa 2 propone la generalización de una agricultura de nueva generación en la demarcación, que eliminaría los excedentes de nutrientes y reduciría la presión por biocidas. Para esto habría que cambiar por completo el modelo actual de agricultura, para lo que sería necesaria la difusión de este modo de actuar además de la asesoría a agricultores para conseguir que cambien su modelo. Se podrían promover medidas compensatorias para los usuarios que voluntariamente se acojan a esta agricultura de nueva generación, que podrían encajar dentro de la condicionalidad ambiental de la PAC.

Parece poco probable que esta alternativa consiga el objetivo de reducción de la contaminación por nutrientes y biocidas en las masas de agua ya que son medidas de carácter voluntario para agricultores, cambiando completamente un sistema que lleva mucho tiempo implantado.

El resto de las alternativas proponen medidas para la reducción de los nutrientes aportados por las aglomeraciones urbanas y la utilización de deyecciones ganaderas para producción de biogás, lo que reduciría su uso como fertilizante. Estas alternativas, aunque no han sido elegidas sí se propone que

sean tenidas en cuenta dentro de la planificación. Estas dos alternativas parecen mucho más realistas que la Alternativa 2 elegida, algo más ambiciosa en cuanto a sus objetivos, pero difícilmente aplicable.

Cualquier medida que proponga el plan debería ser de carácter obligatorio, con el posible establecimiento de un sistema de contrapartidas, ya que parece poco probable que medidas de carácter voluntario, como hasta ahora se están planteando, vayan a suponer un cambio en esta tendencia al alza en cuanto a contaminación.

Alegación 2.

DU-02. Uso sostenible de las aguas subterráneas.

Cabe señalar que el PH vigente no ha sido capaz de revertir la situación actual, dado que la evolución de este problema ha avanzado hacia un empeoramiento del estado las masas de agua subterráneas, con niveles de extracción superiores a los de disponibilidad del recurso.

Esta sobreexplotación tiene consecuencias sobre valores y formaciones naturales superficiales asociados directamente con un determinado nivel freático, por lo que una reducción de estos niveles como consecuencia de la sobreexplotación puede suponer un grave impacto sobre hábitats y espacios naturales asociados a zonas húmedas que se alimentan de aguas subterráneas. Cabe subrayar que algunas de estas zonas comprometidas forman parte de la Red Natura 2000 y además albergan hábitats de interés comunitario, algunos de ellos de carácter prioritario, muy sensibles y frágiles.

En cuanto a esta posible afección a los espacios de la Red Natura 2000 ligados a acuíferos de estas masas de agua subterránea con mal estado cuantitativo, se aconseja establecer medidas juntamente con la Junta de Castilla y León que impliquen que, al menos, no se empeore su estado de conservación, frente a la situación de 1996.

Las medidas normativas contempladas en la Alternativa 2 suponen que toda modificación concesional conllevaría una reducción del 10-25% del volumen concesional y que los titulares de derechos inscritos en el catálogo de aguas privadas o en la sección c del registro de aguas que pretendan transformar su derecho en concesión, verán reducido su volumen máximo anual entre 10-30%. También se plantean más zonas de especial protección en torno a humedales significativos, donde la construcción y explotación de obras de nuevas captaciones podría quedar limitada a su reserva y protección para abastecimientos urbanos o para el interés ambiental.

En esta alternativa no se limitan las nuevas concesiones de extracción de aguas subterráneas, disminuyéndose el volumen concesional únicamente en caso de modificación. No se establece ninguna medida de regulación de detracciones de agua en espacios Red Natura 2000 que puedan ver afectados los valores por los que fue designado, o en masas que ya se encuentren en mal estado cuantitativo. Solo se plantea una medida de este tipo en torno a humedales significativos, lo que no solucionará el problema de mal estado cuantitativo en todas las masas. Tampoco se plantea un análisis de efectos indirectos sobre ecosistemas lagunares.

En el caso de la alternativa 3, se pretende la recarga de masas subterráneas o el uso conjunto superficial y subterráneo de agua. Esta alternativa sigue sin solucionar el caso de las excesivas extracciones que van aumentando con los años y que aumentarán por la necesidad de riego debido al cambio climático. Se deberían poner en marcha sistema de mejora de los sistemas de regadío, sin aumento de superficie

regable para que con menos agua se pueda regar la misma superficie. Se considera que resulta contradictorio el hecho de que la nueva planificación omita regular el número de extracciones de una masa en mal estado cuantitativo y recargarla con aguas superficiales donde la presión también es mayor cada vez y el recurso va disminuyendo. Se advierte de los posibles efectos acumulativos que esta medida puede tener, pudiendo que la solución al problema aún resulte más gravosa que la causa que la ocasiona.

A pesar de tratarse de una medida extrema, la previsión más probable es que el agua resultará cada vez más escasa con el paso de los años, las precipitaciones serán menores y las necesidades mayores, por lo que la recarga supone un parche a un problema que debe abordarse restringiendo su uso para disminuir la sobreexplotación y una recuperación de los acuíferos paulatina.

En resumen, quizá una alternativa más realista para la consecución de los objetivos del Plan sea la mejora en eficiencia del uso del agua, los cultivos con menores necesidades hídricas y medidas de comunicación y asesoramiento a agricultores y consumidores de agua para una mejora en el ahorro del agua que permita que las extracciones actuales puedan ser menores y una regulación muy restrictiva para las nuevas concesiones de uso de agua subterránea.

Alegación 3.

DU-04. Alteraciones hidromorfológicas y restauración fluvial.

Una de las cuestiones omitidas en este documento primigenio es la cuestión de la gestión de las especies exóticas invasoras. Se está constatando en la cuenca del Duero un aumento exponencial de la presencia de especies exóticas invasoras (EEI) de flora acuática, como Azolla spp. (helecho de agua) y Ludwigia spp. (prímulas de agua) que constituyen una grave alteración del funcionamiento natural de los ecosistemas fluviales, dado que presentan altas tasas de crecimiento y reproducción vegetativa, colonizando rápidamente láminas de agua y formando mantos densos que reducen la luz disponible, afectando a la fotosíntesis de especies autóctonas, generando procesos de eutrofización y disminución de oxígeno disuelto a la vez que alteran la hidrodinámica y favorecen la sedimentación en los cauces.

En el caso de Ludwigia, además, su elevada capacidad de colonización permite desplazar a la vegetación autóctona y obstruir cauces, acequias y sistemas de drenaje, constituyendo una amenaza creciente para la biodiversidad y el equilibrio ecológico en los cauces fluviales de la cuenca del Duero.

Debido a la alta capacidad de expansión de estas especies invasoras y a su difícil erradicación una vez establecidas, se considera que deben incluirse dentro del esquema de temas importantes la adopción de medidas de detección temprana, control y erradicación de especies exóticas invasoras de flora acuática (como Azolla y Ludwigia) en la cuenca del Duero, integrando estas actuaciones en la planificación hidrológica.

Alegación 4.

DU-05. Gestión del riesgo de inundación.

De las alternativas propuestas para este tema se ha optado por la Alternativa 2, en la que se incrementa el grado de implantación de los PGRI antes del 2033, tanto para el cumplimiento

de los objetivos ambientales como para la disminución de la vulnerabilidad de los elementos existentes en las zonas inundables.

Se trata de una alternativa adecuada que considera el tiempo de respuesta de las medidas propuestas en el PGRI, priorizándose las medidas que mejoren el estado de las masas de agua, solventándose dos problemas con una misma actuación. Además, con esta alternativa se consigue una visión integral del problema a través de la concienciación pública ante las inundaciones, la percepción del riesgo de inundación y la autoprotección, para no tener que poner soluciones a posteriori, sino entender las medidas que se toman con anterioridad.

Alegación 5.

DU-06. Relevancia del regadío y sostenibilidad.

Según la ficha de este tema, el análisis realizado muestra cómo la modernización de regadíos supone una clara medida de adaptación al cambio climático, mitigando sus efectos en el suministro de recursos y atención a las demandas agrarias. Sin embargo, su elevado coste hace que no se cumplan dentro del horizonte de planificación, llegando incluso a retrasarse hasta el horizonte 2034/39. Sin embargo, los nuevos regadíos se van realizando dentro del plazo establecido, por lo que no solo no disminuye el consumo, sino que cada vez se necesita más agua para atender a estos nuevos regadíos y todo con la disminución cada vez menor del recurso debido al cambio climático.

Previo a la concesión de nuevas zonas regables lo ideal sería terminar con las modernizaciones pendientes dentro de la planificación vigentes, para, una vez realizadas, analizar su impacto real en la oferta de agua disponible y con esos datos distribuir nuevos regadíos en zonas donde el suministro no pueda ser comprometido.

Una cuestión que debería abordarse en el ETI son las Comunidades de Usuarios de Aguas y la transformación que supone sobre el territorio. En primer lugar, sobre la necesidad de evaluar los efectos sobre el medio ambiente que pueden tener la constitución de una nueva (CUA) y los terrenos que van a ser objeto de un riego anual o periódico.

Se ha comprobado que un mismo volumen de aprovechamiento de agua permite regar diferentes superficies de terreno que no tienen por qué ser todos los años las mismas. Esta cuestión conlleva que la superficie agrícola que pasa de secano a regadío se incremente significativamente con los efectos que ello supone sobre el medio ambiente y, en particular, sobre el medio natural y la biodiversidad. Esta cuestión resulta especialmente trascendente sobre los hábitats de las aves esteparias asociados a los agrosistemas de cultivos agrícolas de secano.

En consecuencia, este tema debe abordarse en el ETI y en la evaluación ambiental del nuevo plan hidrológico.

Por otra parte, los canales de riego gestionados en la cuenca del Duero presentan una problemática reiterada de mortalidad de fauna silvestre por ahogamiento, derivada de su diseño constructivo con taludes verticales que impiden la salida de los ejemplares y longitudes elevadas sin puntos de escape.

Esta situación está documentada y reconocida por la propia Confederación Hidrográfica del Duero, siendo una problemática es recurrente en diversos canales (Arriola, Villalaco, Canal del Páramo, etc.), donde se han observado episodios continuados de muerte de fauna silvestre (corzos, jabalíes, pequeños mamíferos y reptiles, etc.), incluida la muerte de un ejemplar de lince ibérico en el área de reintroducción de la especie en el Cerrato Palentino.

La mortalidad en canales afecta reduciendo las poblaciones locales de especies tanto cinegéticas como protegidas, contribuyendo además a la fragmentación ecológica y pérdida de conectividad. En este contexto, la propia CHD ha reconocido la necesidad de adaptar las infraestructuras hidráulicas para garantizar su integración ambiental y evitar daños a la fauna, en línea con el Plan Hidrológico de la demarcación. De esta manera la CHD, como organismo de cuenca competente viene desarrollando actuaciones específicas para la reducción del riesgo de mortalidad de fauna en infraestructuras hidráulicas incrementando las inversiones destinadas a adaptar canales con alta mortalidad.

Dado que el Plan Hidrológico del Duero establece la necesidad de integrar criterios ambientales en las infraestructuras y garantizar su compatibilidad con la conservación de la biodiversidad, la existencia comprobada de una afección real a la fauna silvestre, documentada y persistente en la cuenca del Duero, las obligaciones legales derivadas de la legislación en materia de patrimonio natural y responsabilidad medioambiental y la necesidad de establecer coherencia con la planificación hidrológica y los principios de integración ambiental, se debe incluir dentro del esquema de temas importantes de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero la prevención de la mortalidad de fauna silvestre en los canales de riego gestionados por la CHD para poder asegurar la sostenibilidad ambiental de las infraestructuras de riego y el cumplimiento normativo vigente.

Alegación 6.

DU-07. Optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos-infraestructuras.

Estas infraestructuras pueden suponer impactos sobre las masas de agua y sobre especies protegidas positivos, como la formación de nuevos humedales que forman refugios para las aves y mantenimiento del caudal ecológico, o negativo, como obstáculo (abordado en el tema 4) o, en el caso de los grandes canales, como trampas mortales para fauna terrestre y efecto barrera.

Hay que tener en cuenta también la existencia de infraestructuras sin uso. Se trata de varias grandes presas y también canales de riego abandonados.

En cuanto a la afección ambiental, se recalca las cuestiones relativas al agua desembalsada por presas y el caudal sólido, contemplándose como posibles medidas estructurales plantaciones de franjas de vegetación ribereña, medidas de mitigación de la contaminación difusa en la intracuenca del embalse, detección temprana y predicción en masas de agua en riesgo de padecer proliferaciones de algas, censo piscícola en el embalse y estudios de eutrofización.

En relación con la protección de fauna salvaje se han llevado a cabo iniciativas para la recuperación de fauna que cae en los canales, dotando algunos de ellos con rampas de salida y sistemas de monitorización para comprobar la eficacia de medidas.

De las alternativas propuestas para este tema, se ha escogido la alternativa 4. Se han analizado las alternativas junto con las del tema 6, al estar muy relacionadas. En este caso, la alternativa propone la mejora de las infraestructuras de regulación existentes para permitir la mejora de la oferta de recursos y las exigencias medioambientales. Se incluye en esta alternativa la adaptación estructural de las infraestructuras en las que esta acción suponga mayor beneficio ambiental en relación con el coste de realizar estas adaptaciones como, por ejemplo, mejorando la continuidad longitudinal (pasos para peces) o la continuidad de caudales sólidos y la adecuada gestión de los caudales ecológicos. Se plantea también la ejecución de un programa de mejora de los canales del estado, tanto mejoras estructurales como aumentando controles de caudal y operación. Todas las medidas propuestas en la alternativa elegida mejorarían el suministro y se produciría un ligero incremento de la garantía volumétrica, disminuyendo el número de unidades de demanda agraria que no cumple los criterios de garantía.

Como ya se ha recogido en el apartado DU-06, el nuevo plan hidrológico debería profundizar en la problemática existente en la red de canales y balsas y la mortalidad ocasionada sobre la fauna silvestre. El nuevo planeamiento hidrológico debería identificar las infraestructuras especialmente lesivas y proponer soluciones constructivas para reducir sus efectos perjudiciales.

Dichas soluciones deben además programarse y presupuestarse, debiendo además establecer una jerarquización que priorice la intervención en aquellas en las que resulte más urgente actuar.

Alegación 7.

DU-09. Coordinación interadministrativa en la implementación del programa de medidas y fijación de objetivos específicos en zonas protegidas.

En el caso de los planes básicos de gestión de las ZEC fluviales de Castilla y León los objetivos relacionados con su conservación son claros en cuanto a que su objetivo principal es mantener o alcanzar un estado de conservación favorable, con sistemas fluviales naturales y autosostenibles.

Si bien son objetivos claros, resultan muy amplios y abiertos para su consecución, sin actuaciones claras encaminadas a ello, lo que podría dar lugar a medidas poco concretas para su consecución.

La planificación hidrológica deberá incluir los objetivos de conservación de estos espacios, consensuando las medidas que deban realizarse con la administración autonómica.

Alegación 8.

DU-10. Nuevos usos del agua vinculados a las industrias renovables, almacenamiento de energía y centros de tratamientos de datos.

La principal presión sobre las masas de agua derivada de este tema es la de extracción de recurso de origen superficial y subterráneo.

Según las zonificaciones recogidas en el actual PH, este tipo de proyectos no podrían ubicarse en las zonas no autorizadas de las masas de agua subterráneas y cuencas vertientes de las masas de agua río que presentan riesgo HHYC (alteración de hábitats por cambios hidrológicos), ya que no tendrían capacidad de acogida para este tipo de instalaciones.

De las alternativas planteadas para este tema, se ha escogido la alternativa 2. Esta alternativa tiene en cuenta algunas actuaciones como una zonificación de exclusión de este tipo de infraestructuras en base al objetivo de consecución del buen estado de las masas de agua y el riesgo para el cumplimiento de sus objetivos ambientales. Las zonas de exclusión para usos energéticos se establecerían en las cuencas vertientes de las masas de agua que presenten mayor vulnerabilidad y en las reservas naturales fluviales. Estas medidas de exclusión se complementarían con las ya existentes para la ubicación de plantas de producción de energía renovable declaradas por la JCyL. Además, se añaden los terrenos con riesgo alto de erosión.

También se limitan las centrales de almacenamiento hidroeléctrico a las identificadas en el PNAHE.

Se incluyen también limitaciones para el diseño de las líneas de evacuación que afecten a cauces, obligando a cruces y paralelismos ejecutados por sistemas de perforación dirigida respetando cauces, bandas de protección de morfología fluvial y espacios protegidos vinculados al agua.

Por último, se incluiría la asignación de las reservas necesarias en el nuevo Plan Hidrológico, en el caso de que haya disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua, el cumplimiento de caudales ecológicos, los usos preexistentes y la afección por cambio climático y el establecimiento de ratios para el ahorro del recurso utilizando las mejores técnicas disponibles para el caso de tecnologías que supongan un uso consuntivo del agua.

Dado que el plan hidrológico vigente no contemplaba este tema, y tras el aumento de la implantación de energías renovables en el territorio, quizá las medidas vayan a llegar tarde y

no lleguen a afectar a la mayoría de los proyectos. En cuanto a las plantas de hidrógeno verde, en la actual planificación la red de hidrogenoductos y de plantas de producción, debería abordarse el problema de la extracción de agua y sus efectos sobre la cuenca dentro del ciclo actual, además de abordar el futuro ciclo.

Esta nueva afección a las masas de agua de la cuenca se añade a las ya existentes, aumentando la presión sobre unas masas de agua que en numerosos casos disminuyen de volumen y calidad, con cada vez más detracciones y menos aportaciones y mayor volumen de vertidos contaminantes, lo que dificulta aún más una planificación que consiga los objetivos ambientales propuestos en la planificación. Una zonificación más restrictiva para todos estos usos, además de las reducciones de consumo en todos los temas considerados, no solo respecto a las infraestructuras renovables, supondrían una mejora a largo plazo del estado de las masas.

Por último, cabe destacar que no se ha incluido dentro de los temas importantes a tratar en la lanificación la cuestión de los caudales ecológicos. Si bien este tema se trató ya en la planificación del PH vigente, una vez implantados debería realizarse una revisión de estos caudales, dado que las condiciones de la cuenca han podido cambiar en estos 4 años, además de que las técnicas de cálculo y las variables que se utilizan para estos cálculos también van cambiando a lo largo del tiempo.

En la tabla de comparación del ETI de tercer ciclo con respecto al EpTI para el cuarto ciclo se considera resuelto el tema de implantación de caudales ecológicos con la publicación del PH del tercer ciclo. La revisión de la implantación de caudales ecológicos debería incorporarse a la planificación para el nuevo ciclo, como pero no eliminarse por completo como ha ocurrido.

Alegación 9.

Asuntos importantes adicionales relativos a la ordenación y el control del dominio público hidráulico

Un tema importante que no se trata en este ciclo de planificación, pero sí en el anterior, es la "Ordenación y Control del Dominio Público Hidráulico", con objeto de enmarcar un asunto de máxima trascendencia tanto para la conservación ambiental de las masas de agua y sus riberas como para el uso público: el control de la navegación.

Existen determinadas masas de agua (embalse de las Vencías o embalse de Burgomillodo, por ejemplo), en las que la afluencia de navegantes supone un deterioro del biotopo acuático. De acuerdo con lo establecido en el art. 48 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, las consejerías competentes en materia de turismo y de conservación del patrimonio natural, en colaboración con otras administraciones públicas, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, deben impulsar la implantación y desarrollo de modelos turísticos compatibles con los objetivos de conservación , con especial atención a los espacios incluidos en la Red de Áreas Naturales Protegidas (RANP).

El control de la cantidad de embarcaciones que pudieran navegar en una determinada masa de agua es una competencia de ese Organismo de Cuenca, pero con imbricaciones en el antedicho art. 48 al afectar, como se ha comentado, a la conservación tanto del ecosistema acuático y ripario. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, hasta el momento, viene regulando este aspecto de forma muy puntual en el ámbito del parque natural Hoces del Río Duratón, mediante autorizaciones particulares a las empresas de turismo náutico en piraguas y su depósito en los embarcaderos, de los que dispone una autorización emitida por la Comisaría de Aguas de esa Confederación Hidrográfica. Además, esta Consejería está tramitando una Orden para la regulación de permisos para la práctica de la actividad comercial de piragüismo en base a un estudio de capacidad de carga en este parque natural, mediante la cual se regularían los cupos de piraguas y empresas, en vez de simplemente el depósito de embarcaciones para un número indeterminado de empresas, como se viene haciendo hasta ahora.

Por parte de esta Dirección General se considera necesario que, atendiendo a sus competencias en la ordenación del dominio público hidráulico, esa Confederación Hidrográfica estableciera la posibilidad de establecer cupos máximos de navegación en las masas de agua de mayor valor natural, y en todo caso, en los incluidos en los espacios naturales protegidos y Red Natura 2000, a partir de los estudios de capacidad de carga que pudieran elaborarse tanto por ese Organismo de cuenca como por parte de la Consejerías con competencias en conservación del patrimonio natural.

Este informe se emite sin perjuicio de otros que fueran obligatorios.

Conviene advertir que el presente informe se emite exclusivamente a los efectos de la evaluación de las afecciones del proyecto o actividad sobre los valores naturales indicados, y en ningún caso constituye título alguno para la realización de la actividad ni sustituye a las posibles autorizaciones que fueran necesarias.